
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LET THERE BE LIGHT
1868

THE COMMERCIAL LAWS OF THE WORLD

VOLUME XXXII

SPAIN

AMERICAN EDITION

THE COMMERCIAL LAWS OF THE WORLD, EDITED BY THE HON. SIR THOMAS EDWARD SCRUTTON, JUDGE OF THE KING'S BENCH DIVISION OF THE HIGH COURT OF JUSTICE, ENGLAND (CONSULTING EDITOR), WILLIAM BOWSTEAD, OF THE MIDDLE TEMPLE, BARRISTER AT LAW, LONDON (GENERAL EDITOR), CHARLES HENRY HUBERICH, J. U. D. (HEIDELBERG), D. C. L. (YALE), LL. D. (MELBOURNE), COUNSELLOR AT LAW, BERLIN AND PARIS, PROFESSOR OF LAW IN THE LAW SCHOOL OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY (CALIFORNIA)

BOSTON, MASS.
THE BOSTON BOOK CO.
83-91, FRANCIS STREET

FRENCH EDITION

LE DROIT COMMERCIAL DE TOUS LES PAYS CIVILISÉS EDITED BY DR. LYON-CAEN, PROFESSOR AND DEAN OF THE FACULTY OF LAW IN PARIS, PAUL CARPENTIER, EDITOR AND MEMBER OF THE FRENCH BAR, LILLE, AND FERNAND DAGUIN, MEMBER OF THE FRENCH BAR, COURT OF APPEAL, PARIS, SECRETARY GENERAL OF THE FRENCH LAW ASSOCIATION, SECRETARY OF THE WORE, HENRI PRUDHOMME, JUDGE OF THE HIGH-COURT AT LILLE

PARIS
LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT
ET DE JURISPRUDENCE
F. PICHON & DURAND-AUZIAS

GERMAN EDITION

DIE HANDELSGESETZE DES ERDBALLS, ORIGINATED BY DR. OSKAR BORCHARDT, BERLIN, AND EDITED BY DR. JOSEF KOHLER, GEH. JUSTIZRAT (K.C.), PROFESSOR AT THE UNIVERSITY OF BERLIN, HEINRICH DOVE, GEH. JUSTIZRAT (K.C.), SYNDIC OF THE BERLIN CHAMBER OF COMMERCE, MEMBER OF THE REICHSTAG, GEH. JUSTIZRAT (K.C.) DR. FELIX MEYER, JUDGE OF THE COURT OF APPEAL, BERLIN, AND DR. HANS TRUMPLER, SYNDIC OF THE FRANKFORT CHAMBER OF COMMERCE

BERLIN (SW. 19)
R. v. DECKER'S VERLAG
G. SCHENCK
KÖNIGLICHER HOFBUCHHÄNDLER

THE COMMERCIAL LAWS OF THE WORLD

COMPRISING

THE MERCANTILE, BILLS OF EXCHANGE, BANKRUPTCY AND MARITIME LAWS OF ALL CIVILISED NATIONS

TOGETHER WITH

COMMENTARIES ON CIVIL PROCEDURE, CONSTITUTION OF THE COURTS, AND TRADE CUSTOMS

IN THE ORIGINAL LANGUAGES INTERLEAVED WITH AN ENGLISH TRANSLATION

CONTRIBUTED BY

NUMEROUS EMINENT SPECIALISTS OF ALL NATIONS

BRITISH EDITION

CONSULTING EDITOR:

THE HON. SIR **THOMAS EDWARD SCRUTTON,**

JUDGE OF THE KING'S BENCH DIVISION OF THE HIGH COURT OF JUSTICE

GENERAL EDITOR:

WILLIAM BOWSTEAD,

OF THE MIDDLE TEMPLE, BARRISTER AT LAW

LONDON

SWEET & MAXWELL LIMITED

3 CHANCERY LANE

EL DERECHO DE COMERCIO, DE CAMBIO, DE QUIEBRA Y MARÍTIMO DE ESPAÑA

THE COMMERCIAL, BILLS OF EXCHANGE, BANKRUPTCY AND MARITIME LAW OF SPAIN

EXPUESTO Y COMENTADO

POR EL

DR. LORENZO BENITO
VICERECTOR Y CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y ABOGADO DE LOS COLEGIOS DE MADRID Y BARCELONA

EXPLAINED AND COMMENTED ON

BY

DR. LORENZO BENITO
VICE-RECTOR AND PROFESSOR OF MERCANTILE LAW IN THE UNIVERSITY OF BARCELONA AND BARRISTER OF MADRID AND BARCELONA

TRANSLATED

BY

WYNDHAM A. BEWES LL. B. (LOND.)
OF LINCOLN'S INN, BARRISTER AT LAW
HONORARY MEMBER OF THE ROYAL ACADEMY
OF JURISPRUDENCE AND LEGISLATION (MADRID)

LONDON
SWEET & MAXWELL LIMITED
3 CHANCERY LANE

Índice.

Código de Comercio.

Libro primero. De los comerciantes y del comercio en general.

Libro segundo. De los contratos especiales del comercio.

Table of Contents.

Commercial Code.

First Book. Merchants and commerce in general.

Second Book. Special commercial contracts.

Libro tercero. Del comercio marítimo.

Libro cuarto. De la suspensión de pagos, de las quiebras y de las prescripciones.

Third Book. Maritime commerce.

Fourth Book. Suspension of payment, bankruptcies and prescription.

Prescripciones Complementarias del Código Civil.

Leyes Complementarias.

Supplementary provisions of the Civil Code.

Supplementary Laws.

Introducción histórica.

Los primitivos pobladores de España no fueron gentes en las que el espíritu comercial estuviera desarrollado. Bastaronles, sin duda, para la satisfacción de las necesidades de su vida las riquezas naturales que producia su fertil suelo; y no sintieron, por tanto, la necesidad de expansionarse relacionandose con los numerosos pueblos asentados en las orillas del Mediterráneo.

En las relaciones pacíficas que entre ellos mediaron[1]) debieron desarrollarse las primitivas instituciones mercantiles del mercado y la feria; y en ellas debieron surgir las primeras manifestaciones de un derecho mercantil consuetudinario que desconocemos en absoluto, y que, por los escasos restos que nos quedan de aquellos tiempos, será imposible reconstituir.

Esta misma condición pacífica de los habitantes primitivos de la península ibérica, unida á la fertilidad de su suelo y á las riquezas naturales inexplotadas del mismo, atrajeron bien pronto á España á los aventureros del Mediterráneo; y, fenicios, griegos, cartagineses y romanos se establecieron sucesivamente en nuestra patria, aportando á la misma nuevos elementos de civilización y de cultura.

El proceso de asimilación de los elementos exóticos, hecho por los primitivos habitantes, fué, en general, tan rápido que las civilizaciones fenicia, griega y romana pueden estudiarse en esa época en nuestro suelo casi con tanto fruto como si se estudiaran en el pais de origen. El fondo jurídico primitivo de los habitantes de España quedó materialmente enterrado bajo el peso de las nuevas civilizaciones en las regiones ocupadas por los invasores[2]). Y, como en toda la edad antigua, el derecho mercantil, en lo que tiene de internacional, encarnó en las famosas leyes Rodias, España, como todos los pueblos de las orillas del Mediterráneo, rindío tambien pleito homenage á la sabiduria de los rodios, sujetandose voluntariamente á los preceptos contenidos en aquel Código inmortal de costumbres marítimas.

* * *

Para encontrar las primeras manifestaciones del derecho mercantil español es preciso llegar á los comienzos de la edad media, cuando, despues del periodo de la invasión de los pueblos bárbaros, se afirma la dominación de los visigodos en España, y se llega á la fusión con los hispano-romanos. De cuya fusión es testimonio elocuentisimo nuestro famoso Código, el Fuero Juzgo; el cual contiene las primeras leyes mercantiles genuinamente españolas, pues no pueden merecer el nombre de tales las insertas en el Código de Alarico ó Breviario de Aniano, por cuanto estos no son otra cosa que meras transcripciones de las leyes romanas[3]).

Esas leyes del Fuero Juzgo, con ser escasas, revelan, sin embargo, la manera de ser del pueblo español en la época visigótica en materia comercial, pues cuando hablan de los mercaderes no se refieren para nada á los españoles sino á los *dultra portos*, es decir, á los extranjeros que vienen por mar ó por tierra, respecto de los que determina, que los pleitos que entre si tuvieren se juzgen con arreglo á sus leyes y por sus propios jueces (Ley II, tit. III, lib. IX)[4]). Quiere decir esto, de un modo

[1]) La existencia de esas relaciones pacíficas está evidentemente demostrada por la de los celtiberos en la parte central de la peninsula ibérica; resultado de la convivencia y fusión étnica de iberos y celtas.

[2]) Hoy está perfectamente demostrado que algunas instituciones tradicionales de nuestro derecho, como el retracto gentilicio, la sucesión troncal y otras, son persistencia del derecho de los primitivos pueblos de España, mantenido y conservado á despecho de todas las influencias exóticas. En cambio resulta igualmente demostrada la influencia del derecho griego en la región ibérica, ó sea la mediterránea, y posteriormente la del romano en toda la península, à excepción del territorio vasco. *J. Costa*, *Ensayo de un plan de estudio del derecho español en la antiguedad*, publicado en la Revista general de Legislación y Jurisprudencia, tomos 68, 70 y 75, y despues en edición aparte, Madrid, 1889.

[3]) En el Breviario de Aniano se reproducen los preceptos de las leyes romanas sobre la ley *Rhodia de jactu y la pecunia trajectitia* ó préstamo maritimo. — En el Código de Eurico no hay reminiscencia ninguna de leyes mercantiles; lo cual se explica facilmente, porque siendo el Código de los conquistadores no habian de dedicarse estos al ejercicio de una profesión tan poco en armonia con la de las armas.

[4]) Todo el título III del libro IX está dedicado á los mercaderes que vienen dultraportos, pero este título no contiene más que cuatro leyes, de las que solo dos (la primera y la segunda)

Historical Introduction.

The primitive populations of Spain were not peoples in whom the spirit of commerce was developed. The riches of nature which their fertile soil produced were, doubtless, sufficient for the satisfaction of the necessities of their life; and so they did not feel the necessity of expansion by bringing themselves into relation with the numerous peoples settled on the shores of the Mediterranean.

In the peaceful conditions[1]) which prevailed among them they had to develope the primitive mercantile institutions of the market and the fair; and in them had to arise the early signs of a customary law merchant of which we are totally ignorant, and which it is impossible for us to reconstruct from the scanty remains surviving to us from those times.

This same pacific condition of the primitive inhabitants of the Iberian Peninsula, together with the fertility of its soil and the natural unworked riches thereof, very early attracted the adventurers of the Mediterranean to Spain, and Phenicians, Greeks, Carthaginians and Romans successively established themselves in our country, and introduced new elements of civilisation and culture.

The process of assimilating the exotic elements by the primitive inhabitants was generally so rapid that the Phenician, Greek and Roman civilisations at that time may be studied on our soil almost with as much advantage as if they were studied in their country of origin. The primitive juridical foundation of the inhabitants of Spain was substantially buried under the weight of the new civilisations in the districts that were occupied by the invaders[2]). And as, in every time of old, the mercantile law, in its international aspects, was embodied in the famous laws of Rhodes, Spain, like all the other peoples on the shores of the Mediterranean, rendered homage to the wisdom of the Rhodians, and willingly submitted to the precepts contained in that immortal Code of maritime customs.

* * *

In order to find the first signs of the Spanish mercantile law, it is necessary to come to the beginning of the Middle Ages, when, after the time of the barbarian invasions, the domination of the Visigoths was established in Spain and fusion with the Hispano-Roman population was reached. Our famous Code, the Fuero Juzgo, is the most eloquent testimony of this fusion, and this contains the earliest mercantile laws which are genuinely Spanish, as the paragraphs in the Code of Alaric and the Breviarium of Aniano cannot merit such a name, for these were nothing more than simple transcriptions of the Roman laws[3]).

Those laws of the Fuero Juzgo, although they are scanty, reveal, nevertheless, the mode of life among the Spanish people in commercial matters during the Visigothic period, since, when they speak of traders they in no way refer to Spaniards, but to those "dultra portos", that is to say, to foreigners arriving by land or sea, in regard to whom it is determined, that actions between themselves should be decided according to their own laws and by their own judges (Law II, tit. III, book 1)[4]).

---

1) The existence of these peaceful relations is clearly shown by the presence of the Celtiberians in the central part of the Iberian Peninsula, as the result of the ethnic commingling and fusion of the Iberians and Celts.

2) It has been clearly shown before the present day that some traditional institutions of our law, such as the family right of repurchase, succession in the direct line and others, are survivals of the law of the primitive peoples of Spain, maintained and preserved in spite of all exotic influences. On the other hand the influence of the Greek law is shown to the same extent in the Iberian or Mediterranean region, and lastly that of the Roman law in all the peninsula with the exception of the Basque provinces. J. Costa: *Ensayo de un plan de estudio del derecho español en la antiguedad*, published in the *Revista general de Legislación y Jurisprudencia*, volumes 68, 70 and 75, and later in a separate edition, Madrid, 1889.

3) The precepts of the Roman law on the *lex Rhodia de jactu et pecunia trajectitia* (maritime loan) are reproduced in the Breviarium of Aniano. — In the Code of Euric there is no trace of mercantile law; which is easily explained, because, as it was the code of the conquerors, they had no occasion to dedicate themselves to a profession so little in harmony with that of arms.

4) The whole of Title III of Book IX is dedicated to traders ariving "dultra portos", but this title contains no more than four laws, of which only two (the first and the second) can be said to

harto elocuente, que ni los hispano romanos, sojuzgados, ni los hispano godos, dominadores, estuvieron dedicados al comercio; y que este debía estar en manos de los bizantinos, por cuanto en aquellos tiempos las repúblicas italianas no se habian lanzado á las empresas comerciales en que tanto prestigio y fortuna habian de ganar más adelante.

Es tambien digna de mencionarse otra disposición del Fuero Juzgo, referente á esos mismos mercaderes dultraportos, por que ella parece ser el primer precedente de la irreivindicación de las cosas mercantiles en nuestra legislación. La ley 1ª, tit. III, lib. XI de este Código dice: «Si el mercadero dultraportos vende oro ó argento á omne de nuestro regno, ó pannos ó vestidos ó otras cosas, si las cosas fueren compradas en razon conveniblemientre, magüer que seyan de furto, el que fas compró, magüer le seyan probadas de furto, non debe haber nenguna calonna». Y hay que tener en cuenta, para apreciar debidamente el valor de este precepto legal, que otra ley del propio Código (ley VIII, tit. II, lib. VII) dispone que, si alguno comprare á otro cosa de furto, aun no sabiendo que sea tal su procedencia, ha de devolverla al señor de ella; y que si lo supiere, dice otra ley, (IX del mismo título y libro) sea tenido por ladron, «ca bien semeia ladron todo omne que compra la cosa de furto sabiendolo». Deducese de todo esto que, si no se dice al tratar de las cosas vendidas por mercaderes que han de devolverse al señor de ellas, y si la palabra *calonna* tanto quiere decir pena ó castigo como pleito ó cuestion judicial que pudiera promoverse al que adquirio la cosa, es evidente que el sentido de la ley no puede ser otro que el de una declaración de irreivindicabilidad, apesar de la procedencia, siempre que se haya adquirido la cosa *en razón conveniblemientre*, es decir, en condiciones tales que no hagan suponer una complicidad en el delito[3]).

Pardessus[4]) cita del Fuero Juzgo otras dos leyes referentes al derecho marítimo, que no aparecen citadas por los autores españoles como tales. La ley 5ª, título V del libro V y la 18, título II del libro VII; relativa, la primera, á las cosas prestadas que se pierden en naufragio, y, la segunda, á las cosas hurtadas con ocasión de incendio ó naufragio. Lo cual se debe á que Pardessus tuvo á la vista la edición latina del Fuero Juzgo mientras que los autores españoles se han guiado por la traducción española del mismo; pues mientras el texto latino emplea en una y otra ley la palabra naufragio, el español la ha sustituido por la de agua, por lo cual más parecen referirse dichas leyes al caso de inundación que al de naufragio. Que Pardessus tiene razón en este caso es evidente por que el texto latino es el original.

En cambio citan, tambien como de caracter mercantil, (y yo la he citado[1])) otra ley relativa al interés de los préstamos que, dictada para los españoles, no es de suponer que afectara á los comerciantes extranjeros, únicos que, al parecer, se dedicaban por entonces á los negocios mercantiles.

* * *

La invasión arabe, iniciada en el año 711, acaba por completo con la dominación goda en España; y el periodo de siete siglos que abarca la reconquista del territorio por los cristianos españoles mantiene frente á frente dos pueblos totalmente irreductibles; el pueblo árabe, que, mal de su grado, tiene que ceder palmo á palmo lo que ganó en una verdadera correria, y el pueblo cristiano, que partiendo de núcleos reducidisimos, Asturias y Sobrarbe, con la ayuda de los francos en el condado de Barcelona, va extendiendo de dia en dia sus fronteras hasta llegar con los Reyes Católicos en 1492 á colocar el estandarte de la fé sobre los muros de Granada, haciendo cruzar el Estrecho de Gibraltar al último rey moro, del último reino árabe en España; al infortunado Boabdil el Chico.

puede decirse que son mercantiles, y de ellas hablaremos en el texto. — Las otras dos, aunque referentes tambien á los mercaderes, no tienen caracter mercantil, pues la una (la tercera) es una prohibición á los mercaderes de que se lleven consigo siervos españoles, y, la otra, (la cuarta) señala la retribución que ha de dar el mercader al siervo español que empleare en llevar sus mercaderias.

[3]) En el fondo este precepto viene á ser el mismo del art° 85 de nuestro vigente Código de comercio, que declara irreivindicables las cosas adquiridas en almacen ó tienda abierta al publico; es decir, *en razón é conveniblemientre*.

[4]) *Collection des Lois Maritimes antérieures au XVIII siècle*, Paris, 1828, tomo 1°, pags. 151 y 152.

[1]) En mi *Ensayo de una introducción al estudio del Derecho Mercantil*, Valencia, 1896, hube de citarla, siguiendo el precedente de *Alvarez del Manzano; Curso de Derecho Mercantil*, tomo 1°, Madrid, 1890 (la 2ª edición es de 1903), y, sobre todo, el de *Martí de Eixalá; Instituciones del Derecho Mercantil de España*, 8ª edición, Barcelona y Madrid, 1879.

This shows most eloquently that neither the subject Hispano-Romans nor the dominant Hispano-Goths were given to commerce; and that this must have been in the hands of the Byzantines, in as much as in those times the Italian republics had not launched into the commercial enterprises in which they were to gain so great prestige and fortune in later times.

Another provision of the Fuero Juzgo is also worthy of mention and this refers to those same "dultra portos" traders and it appears to be the first precedent of non-recovery (irreivindicación) in mercantile affairs in our legislation. Law 1, tit. III, book XI of this Code says: "If a trader "dultra portos" (of oversea) sells gold or silver to a man of our kingdom, or cloth or garments or other things, if the things were bought lawfully and paid for, although proceeding from a theft, the purchaser will not be liable to an action, even if the theft is proved". And in order duly to appreciate the value of this legal precept, it must be remembered that another law of the same code (law VIII, tit. II, book VII) provides that if any one buys a stolen thing, although in ignorance that such was its origin, he must return it to the owner thereof; and that if he was aware of it, says another law (IX of the same title and book), he shall be considered a thief — "every man who knowingly buys a stolen thing is very like a thief". It may be gathered from all this, that, if in dealing with things sold by merchants, it is not said that they have to be returned to their owner, and if the word *calonna* means both penalty or punishment and the action or legal process which may be brought against the person who acquired the thing, it is evident that the meaning of the law can only be a declaration that there can be no recovery, in spite of its origin, provided that the thing has been acquired in a lawful manner, that is, in conditions such as do not cause a supposition of complicity in the crime[1]).

Pardessus[2]) cites two other laws of the Fuero Juzgo referring to maritime law, which do not appear to be cited as such by the Spanish authors. Law 5, title V of book V and law 18, title II of book VII; the first relates to things offered which are lost at a shipwreck, and the second to things stolen on an occasion of fire or shipwreck. This is due to Pardessus having the Latin edition of the Fuero Juzgo under his eye, while the Spanish authors have been guided by the Spanish translation thereof; since the Latin text employs in both laws the word "shipwreck" and the Spanish has substituted the word "water", by which the said laws appear to refer rather to inundation than to shipwreck. It is evident that Pardessus is right in this case, as the Latin text is the original.

On the other hand they cite also as having a mercantile character (and I have cited it)[3]) another law relating to interest on loans which, being passed by Spaniards, cannot be supposed to affect the foreign merchants, who, it appears, were the only people who then dedicated themselves to foreign business.

* * *

The Arab invasion, which began in the year 711, completely ended the rule of the Goths in Spain; and the period of seven centuries which embraces the reconquest of the territory by the Christian Spaniards keeps the two peoples face to face and wholly unconquerable; the Arab people, which to their chagrin has to yield little by little what it had gained at a regular run, and the Christian people, which, starting from the very limited centres of Asturias and Sobrarbe, with the aid of the Franks in the County of Barcelona, extend their frontiers from day to day until, under the Catholic kings, they come in 1492 to plant the standard of the faith on the walls of Granada, causing the last Moorish king of the last Arab kingdom in Spain, the unfortunate Boabdil the Little, to cross the Straits of Gibraltar.

be mercantile, and of them we speak in the text. — The other two, although referring also to traders, have not a mercantile character, as one (the third) is a prohibition against traders taking away Spanish slaves with them, and the other (the fourth) states the wages which a trader has to give to a Spanish slave whom he employs to carry his merchandise.

1) This precept comes in substance to the same thing as art. 85 of our present Code of Commerce, which declares that things bought in a warehouse or shop, open to the public, are not recoverable: that is to say, they are lawfully acquired.

2) *Collection des Lois Maritimes anterieures au XVIII siècle.* Paris, 1828, volume 1, pages 151 and 152.

3) In my *Ensayo de una introdución al estudio del Derecho Mercantil*, Valencia, 1896, I had to cite it, following the precedent of *Alvarez del Manzano*; *Curso de Derecho Mercantil*, volume 1, Madrid, 1890 (the 2nd edition was in 1903), and above all, that of *Marti de Eixaló*; *Instituciones del Derecho Mercantil de España*, 8th edition, Barcelona and Madrid, 1879.

El derecho mercantil del pueblo árabe en España debió alcanzar, anuque puramente consuetudinario, extraordinario desarrollo, ya por haber sido el árabe en su origen nómada y comerciante, ya, tambien, porque el fundador de su religión última, el profeta Mahoma, fué comerciante en sus mocedades, y dejó en su libro sagrado, el Korán, inequivocas muestras de su amor á la industria mercantil. Por estas razones, y habiendo alcanzado la civilización árabe el apogeo de su explendoroso desarrollo en el califato de Córdoba, bajo el reinado de Abderramán III y de Almanzor, que á más de grandes conquistadores fueron tambien grandes politicos, es de suponer que las instituciones mercantiles prosperaran, si, como es cierto, ya en el siglo V de nuestra era, conocieron los siriacos la sociedad en comandita importada de los árabes, entre los que parece tener remotisimo origen, asi como la asociación de cuentas en participación[1]). Pero el alcance de este desenvolvimiento jurídico mercantil está todavia por conocer, pues los estudios arábigos en España han estado por desgracia nuestra abandonados completamente, no ya por espacio de años sino de siglos, y en el actual renacimiento de ellos no hemos llegado todavia á otra cosa que á tener noticia de la existencia de un número sorprendente de jurisconsultos árabes, en cuyas obras ha de encontrarse por fuerza un gran caudal de datos para reconstruir la vida jurídico mercantil de aquel gran pueblo[2]).

Los cristianos de la época de la reconquista en España hallanse empeñados en una tarea tan magna, y de tan vital interés para ellos, la lucha con el pueblo árabe. que hasta el siglo XIII absorbe tan por completo sus energias, que, apenas, si han llegado hasta nosotros reminiscencias de su manera de ser jurídico mercantil. En aquel flujo y reflujo de las fronteras, que se ensanchan y reducen á medida que la suerte de las armas es próspera ó adversa al pueblo cristiano, no eabe la posibilidad de que el comercio arraigue de manera que las instituciones jurídico-mercantiles adquieran carta de naturaleza en España. En Asturias, León y Castilla, y en Navarra, Aragón y Cataluña el comercio hasta el siglo XIII está en manos de los extranjeros y de los judios, tanto por tradición de la España goda, como por la conservación del Fuero Juzgo, que, por una supervivencia natural, sigue siendo la ley de los pueblos cristianos, hasta que en el siglo XI empieza la obra legislativa del privilegio y la franquicia con los fueros municipales, á partir del de Leon, otorgado por Alfonso V, en 1020, y en los que apenas si hay escasisimas reminiscencias de la vida mercantil.

A partir del siglo XIII España cambia rápidamente de aspecto. Bien es verdad que en dicho siglo pone Castilla el pie en el Mediterráneo con la conquista de Sevilla por Fernando III el Santo, en 1248, y la de las importantes poblaciones de Sanlucar, Tarifa y Algeciras que en breve pasaron á poder de los castellanos. Consolida esta obra nacional la sumisión á Castilla del reino de Murcia; con lo cual queda terminada para Aragón y Cataluña la obra de la reconquista, pues en dicho siglo XIII los ejercitos victoriosos de aragoneses y catalanes arrancan definitivamente del poder musulmán las islas Baleares y el reino de Valencia, lindante con el de Murcia.

Por efecto de esta nueva situación política de los Estados españoles se produce en la península ibérica el mismo fenómeno producido ya en toda Europa; el de la concentración de la actividad de la vida económica en las ciudades, en donde la burguesia se organiza corporativamente para obtener por privilegio lo que por ley de igualdad política no hubiera podido conseguir, dando asi poderoso impulso á las artes é industrias de la edad media, que hasta entonces habian vivido miserablemente[3]).

[1]) *Ureña: Historia de la literatura juridica española.* 2e ed. tomo I, Madrid 1906, pag. 335 y 476.

[2]) Vease *Ureña*, Ob. cit., principalmente en la Parte primera de la Tercera época que lleva este epígrafe: *La literatura juridica en los Estados Hispano-musulmanes.*

[3]) Antes del siglo XIII el burgués y el villano tienen que ser soldados preferentemente, y los intereses, tanto de las industrias manufacturera y agrícola, están supeditados al interés primordial de la patria en péligro; la soldada, el botin y el reparto son el medio natural de retribución económica; y á donde esto no alcanza asegura la servidumbre la vida; y más allá de esto, para los desheredados, que ni siquiera están amparados por la protección dispensada á los siérvos, está la Iglesia, que dá de comer al hambriento con el sobrante de sus medios económicos. — Llegado el siglo XIII, cesa por completo en Aragón y Cataluña la guerra interior, y en Castilla se afianza la paz, totalmente en unas regiones y temporalmente y en periodos muy largos en otras; asi es que las artes de la paz se manifiestan con extraordinario poderio, y, mediante la asociación en forma gremial, recaban del soberano su derecho á la vida, en forma de

The mercantile law of the Arab people in Spain, although purely customary, must have reached an extraordinary development, both from the Arab having originally been a nomad and merchant race, and also because the founder of their last religion, the prophet Mohamed, was a merchant in his youth, and in his sacred book, the Kuran, left unequivocal signs of his love for the mercantile industry. For these reasons and from the Arab civilisation having reached the apogee of its brilliant development in the Kaliphat of Córdoba, in the reigns of Abderraman III and Almanzor, who besides being great conquerors were likewise great statesmen, it may be supposed that mercantile institutions prospered, if, as is certainly the case, the Syrians even in the fifth century of our era, were acquainted with the limited partnership, imported from the Arabs, among whom it appears to have a very remote origin, as well as with the sleeping partnership[1]). But the extent of this mercantile juridical development is altogether unknown, as arabic studies have to our misfortune been completely abandoned in Spain, not for years but for centuries, and in their present rebirth we have not yet arrived further than the knowledge of the surprising number of Arab jurists, in whose works a great wealth of data must necessarily be found for the reconstruction of the mercantile juridical life of that great people[2]).

The Christians in Spain at the time of the reconquest find themselves burdened with a task of such magnitude, and to them of such vital interest, viz. the struggle with the Arab nation, which until the thirteenth century absorbs their energies so completely, that traces of their manner of mercantile juridical life have scarcely survived to us. In the flow and reflow of frontiers, which extend and shrink according as the fate of arms is favourable or adverse to the Christian people, there was no possibility that commerce should take such a root that juridico-mercantile institutions should become naturalised in Spain. In Asturias, León and Castilla, in Navarra, Aragón, and Cataluña, commerce until the thirteenth century is in the hands of strangers and Jews, both through the tradition of Gothic Spain and through the preservation of the Fuero Juzgo, which by a natural survival continues to be the law of the Christian peoples, until in the eleventh century begins the legislative work of the privilege and franchise of the municipal jurisdictions (beginning with that of León, granted by Alfonso V in 1020), in which are very scanty traces of mercantile life.

From the thirteenth century the aspect of Spain changes rapidly. It is true tbat in that century Castilla puts its foot on the Mediterranean with the Conquest of Sevilla by Fernando III, the Saint, in 1248, and with that of the important towns of Tan Lucar, Tarifa and Algeciras, which shortly pass into the power of the Castillians. She submission of the kingdom of Murcia to Castilla consolidates this work; and this, for Aragón and Castilla, ends the work of the reconquest, since in the said thirteenth century the victorious armies of the Aragonese and Catalans finally snatch from the Musulman power, the Balearic islands and the kingdom of Valencia, which bordered on that of Murcia.

This new political position of the Spanish states produced in the Iberian Peninsula the same phenomenon as was already produced in the whole of Europe; that of the concentration of the activity of economic life in the cities, where the burgesses organized themselves as corporations to obtain by privilege what they had not been able to acquire by a law of political equality, thus giving a powerful impulse to the arts and industries of the Middle Ages, which up to that time had flourished but miserably[3]).

[1]) *Ureña*: *Historia de la literatura jurídica española.* 2nd.ed. Volume I, Madrid 1906, pages 335 and 476.

[2]) See *Ureña*, op. cit. principally in the first part of the third period which has this title: *La literatura jurídica en los Estados Hispano-musulmanes.*

[3]) Before the thirteenth century, burgess and villein have in the first place to be soldiers, and the interests, both of the manufacturing and agricultural industries, are subject to the primal interest of the fatherland in danger; pay, booty and division of the spoil are the natural means of economic compensation; and where this does not extend, slavery assures life; and besides this, for the destitute, who are not even supported by the protection accorded to the slaves, there is the Church, which from the surplus of its economic resources, gives food to the hungry. With the arrival of the thirteenth century, internal war in Aragón and Cataluña completely ceases, and in Castilla peace is secured, entirely in some regions and temporarily and for long periods in others; thus it is that the arts of peace show themselves with extraordinary power, and by means of associating in the form of guilds, subjects acquire from

Los normandos, que ya en el siglo IX (844) habian intentado establecerse en Asturias y Andalucía como conquistadores, rechazados de una y otra parte por los cristianos y los árabes respectivamente, fueron, posteriormente, y cuando se aquietaron sus primeros impetus, los educadores de los pueblos del norte de la Península, y con sus naves y su comercio, que dominaba todo el golfo de Gascuña, importaron tambien las costumbres marítimas recogidas en los famosos Rooles de Oleron, de indudable aplicación en toda la costa cantábrica.

Los códigos españoles del siglo XIII, el Fuero Real y Las Partidas, obras ambas del famoso monarca, Alfonso X el Sabio, revelan, bien á las claras, que el legislador se preocupa, y con razón, de lo que afecta á la vida mercantil.

Del Fuero Real citan los autores tan solo dos disposiciónes referentes al derecho mercantil (y por cierto las últimas de todo el Código). Una y otra se refieren al derecho marítimo. La primera (ley I del título XXV) proclama el derecho de propiedad del dueño sobre las cosas que ha de abandonar por accidente de mar ó naufragio; lo cual constituye, frente al derecho feudal de la época, que en todas partes reconoce el derecho de naufragio, una afirmación valiente de los principios de la equidad natural, que, en los mares del norte de Europa, impusieron los hanséaticos tambien por aquellos tiempos. La segunda (ley II del mismo título) es una reminiscencia de la antiquisima Lex Rhodia de jactu.

Más no puede decirse que no haya en dicho Fuero otras disposiciones que á la vida del comercio se refieran; por que, si bien no tienen el caracter de las citadas, ni encuadrarian en los actuales códigos de comercio, merecen citarse, sin embargo, como relacionadas con las necesidados de la industria mercantil, la ley I del título X, relativa á las pesas y medidas, y la ley VI del título VI que prohibe el cierre de los rios mayores que entran en la mar para que no se estorbe el paso de las naves que van con mercaderias de unas tierras á otras, y señala la pena en que incurren los que tal hicieren.

Contrasta esta pobreza legal del citado Fuero con la casi prodigalidad que en esta materia se advierte en el Código de Las Partidas; y este contraste es tanto más de notar cuanto que los dos son obra de un mismo monarca, y hay entre uno y otro muy pocos años de diferencia[1]); tan pocos, que no cabe suponer que en el trascurso de los mismos cambiaran las condiciones de la vida económica en España, como pudiera quizá creerse al advertir diferencias tan notables entre el Fuero Real y Las Partidas. Lo más probable, y lo que mejor explica estas diferencias, es que el Fuero Real fué un cuerpo legal, redactado con el propósito de que fuera sustituyendo y remplazando los fueros municipales de la época[2]), y

---

fueros, franquicias y privilegios. — En este resurgimiento de la vida económica preceden los pueblos del norte de la Península á los del mediodia y centro, pues amparados aquellos por su posición topográfica, y separados del campo de batalla, pueden dedicarse al desarrollo de sus energias naturales, Asi se explica que en ayuda de Dn. Fernando III, acudieran al sitio de Sevilla con una verdadera escuadra, al mando del almirante Bonifaz, las villas maritimas del Cantábrico (*Altamira-Historia de España y de la Civilización española.* Barcelona, 1900, tomo I°, pag. 369).

[1]) El Fuero Real debío publicarse á últimos de 1254 ó principio de 1255 (*Martinez, Marina, Ensayo histórico-crítico sobre la legislación* 3ª edición, Madrid, 1845 pag. 277) y Las Partidas se empezaron el 23 de junio de 1256, y se terminaron (cosa que no ha podido ponerse en claro todavia) ó en 1263 ó en 1265 (*Martinez Marina,* Ob. cit., pag. 279 y 281). Se trata, pues, de un periodo máximo de 10 ú 11 años que no puede, en manera alguna, explicar ese contraste.

[2]) Del proemio ó prólogo del Fuero Real parece, no como algunos autores han pretendido (y entre ellos el ilustre *Martinez Marina,* Ob. cit., pag. 278), que la intención del soberano que lo publicó fué que tuviera caracter general en todo el reino, sino tan solo para los que en su tiempo no tuvieren Fuero, y se juzgasen *por fazañas e por alvedrios de los homes e por usos desaguisados sin derecho de que nascien muchos males é muchos daños á los pueblos.* Y como estos que no tenian Fuero eran los más, como dice el propio rey, bien puede decirse que la frase „*hovimos consejo con nuestra Corte é con los sabidores del derecho, é dimosles este Fuero que es escripto en este libro, por que se juzguen comunalmente todos varones e mujeres*" ha de entenderse respecto de aquellos que podian merced al monarca, para que les enmendase los usos que fallase que eran sin derecho ó que les diese Fuero «por que viviesen derechamente de aqui adelante», pues respecto de los que ya lo tenian no existian estas razones, que explican la confección de este Código. — Entendido asi, resulta perfectamente lógica la conducta del monarca que lo dio como fuero municipal á la villa de Aguilar de Campó, en 14 de marzo de

The Normans, who already in the ninth century (844) had endeavoured to establish themselves in Asturias and Andalucia as conquerors, but had been repulsed in both places by the Christians and the Arabs respectively, were afterwards and when their first efforts had calmed down, the educators of the peoples of the north of the Peninsula, and with their ships and commerce, which dominated the whole Bay of Biscay, imported also the maritime customs collected in the famous Roles of Oleron which undoubtedly applied to the whole Cantabrian coast.

The Spanish codes of the thirteenth century, the Fuero Real and Las Partidas, both works of the famous monarch Alfonso X the Wise, very clearly reveal that the legislator is preoccupied, and with good reason, with the concerns of mercantile life.

Authors cite from the Fuero Real only two provisions referring to the mercantile law (and certainly the last of all the Code). Both relate to maritime law. The first (law 1 of Title XXV) proclaims the right of property of the owner over things which he has to abandon through a casualty at sea or shipwreck; which, in opposition to the feudal law of the time, recognising in all parts the right to wreckage, constitutes a powerful affirmation of the principles of natural equity, which the members of the Hanseatic League also imposed in those times in the seas of the north of Europe. The second (law II of the same Title) is a reminiscence of the very ancient Law of Rhodes on jettison.

But it cannot be said that there are no other provisions in that Fuero which refer to commercial life; for, although they have not the same character as those cited; nor do they find a place in the present commercial codes, still they deserve to be quoted as relating to the necessities of the mercantile industry, namely, law I of Title X, relating to weights and measures, and law VI of Title VI, which prohibits the closing of the greater rivers entering the sea, in order that the passage of vessels which travel with merchandise from one country to another should not be interfered with, fixing the penalty to be incurred by those who should do so.

This legal poverty of the said Fuero contrasts with the almost prodigality with which the Code de Las Partidas refers to this matter; and this contrast is so much the more noteable in that the two are the work of the same monarch, and between them there is a separation of very few years[1]); so few that it cannot be supposed that in the course thereof the conditions of the economic life of Spain underwent a change, as might perhaps be thought on noticing such marked differences between the Fuero Real and Las Partidas. The more probable and the better explanation of these differences is, that the Fuero Real was a body of laws, drawn up with the intention of substituting and replacing the municipal particular laws of the time[2]), and therefore

---

their sovereign their right to life, in the form of separate jurisdictions, franchises and privileges. In this resurrection of economic life, the peoples of the north of the Peninsula pass to those of the south and centre, while the former with the support of their geographical position, and afar from the field of battle, can dedicate themselves to the development of their natural energies. This explains how the maritime towns of the Cantabrian coast came to the aid of Don Fernando III at the siege of Sevilla with a veritable squadron, under the command of Admiral Bonifaz (*Altamira-Historia de España y de la Civilización española.* Barceloan, 1900, volume I, 369 pages).

[1]) The Fuero Real must have been published at the latest in 1254 or the beginning of 1255 (*Martinez Marina, Ensayo historico-critico sobre la legislación*, 3rd edition, Madrid, 1845, 277 pages) and Las Partidas began on the 23 June 1256, and ended (a fact which it is impossible to make altogether clear) either in 1263 or 1265 (*Martinez Marina*, Op. cit. pages 279 and 281). It is a matter therefore of a maximum period of ten or eleven years which cannot by any means explain that contrast.

[2]) From the introduction or prologue to the Fuero Real it appears, not as some authors have asserted (and among them the illustrious Martinez Marina, Op. cit. page 278), that it was the intention of the Sovereign who promulgated it that it should have a general character in the whole of the kingdom, but that it was only for those who in his time had no Fuero, and who were tried *according to the exploits and caprices of men and by unjust and lawless customs from which arise many evils and much damage to the people.* And as those who had no Fuero were the most numerous, as the king says himself, it may well be said that the phrase "*We have taken counsel with our Court and with the men learned in the law, and we have given them this Fuero which is written in this book, in order that all men and women may be judged alike*" must be understood with regard to those who begged favour of the monarch, that he should amend those customs which he should adjudge unlawful and should grant them this Fuero "in order that they may live lawfully henceforward" since with regard to those who already had it, these reasons, which explain the drawing up of this Code, did not exist. — Thus understood, the conduct of the monarch was perfectly logical when

por eso, sin duda, su extensión fué apropiada á la de estos, y sus materias tambien las de más general aplicación en las distintas villas y lugares en que habia de regir, mientras que Las Partidas fué un código en el que se recogío la totalidad de la vida juridica del pueblo español, no solo en lo que de real y efectivo tenia sino hasta en sus aspiraciones y tendencias[1]).

Que las más diversas manifestaciones de la vida jurídico mercantil fueron tenidas en cuenta por el Rey Sabio lo demostrará cumplidamente la enumeración de las leyes que contienen Las Partidas referentes á esta materia.

En la Partida I, título VI hay dos leyes; la XLVI que habla de »Quales mercadurias son defendidas á los clérigos, e quales non«, y la XLIX que marca la »pena que deven aver los clérigos que passan contra las cosas que les son vedadas«, ley en la que se determina, entre otras, la pena en que incurren los clérigos que se entrometieren en mercadurias. En la misma Partida, título XX, la ley III, que trata «de que cosas deven los omes dar diezmo por razón de sus personas«, y en la que se incluye á los mercaderes por lo que ganan con sus mercadurias.

En la Partida II, la ley XXXIII del título XXVI trata de «quales cosas deven fazer los corredores en fecho de las almonedas».

En la Partida III, título XVIII la ley LXXVII trata «en que manera deve ser fecha la carta del afletamiento de la nave», y la LXXVIII de «como debe ser fecha la carta de la compañia que algunos quisieren fazer» (se refiere á las compañias que hacen los mercaderes). En la misma Partida, título XXVIII, la ley IV que trata de «que cosas son aquellas que ome puede fazer en la ribera de la mar», la VI, de «como de los puertos é de los rios é de los caminos puede usar cada un ome», y la, VIII de »como non puede ome fazer molino nin otro edificio en los rios porque se embarguen los navios». En la misma Partida, título XXX, la ley VII, que trata de «como gana ome la tenencia de las mercadurias si es apoderado de las llaves».

En la Partida V, título I, la ley IV, que trata «del préstamo que es fecho á los fijos que son en poder de su padre, ó de su abuelo», y en la que se declara válido el préstamo, debiendo responder de él el que lo adquirió si tuviese tienda de cambio ó de paños ó de otra mercaduria, y la VII, que trata «del préstamo que es fecho á aquel que está en tienda de cambio, ó de paños por otri». En la misma Partida, título III, la ley IX, que trata de «como el condesijo (depósito) que recibío el finado en su vida, deve ser tornado ante que las otras debdas, fueras ende en cosas señaladas», entre cuyas cosas menciona las naves para cuya refacción ha sido preciso contraer una deuda. En la misma Partida, el título V está todo él dedicado á las *vendidas é las compras*; y, aunque contiene bastantes disposiciones de posible aplicación á las compras y ventas de los mercaderes, se observa, sin embargo, por el caracter de generalidad de las mismas, que en esta materia no tuvo presente el rey legislador las necesidades de los mismos, aun cuando no debieron pasarle desapercibidas, por cuanto el título siguiente, el VII, trata todo él «de los mercadores, é de las ferias é de los mercados, é quales son llamados mercadores, é del diezmo e del portadgo que han a dar por razón de ellos», y aparace enlazado de un modo inmediato y natural con el anterior[2]). Tiene este título VII nueve leyes dedicadas exclusivamente á los mercaderes. En la misma Partida, y en el título VIII, es importantisima la ley XIII, que trata de «como el que da afletada su nave á otro deve pechar el daño de las mercaderias é de las otras cosas que se perdieren por su culpa»; y tambien la XXVI, que trata de «como los ostaleros e los albergadores e marineros son tenudos de pechar las cosas que perdieren en sus casas é en sus navios aquellos que ay recibieren». En la misma Partida todo el título IX, que contiene 14 leyes, está dedicado á tratar «De los navios é del pecio dellos», y tambien todo el título X, que tiene 17 leyes, y está dedicado á tratar «De las compañias que fazen los mercadores, é los otras omes entre si para poder ganar algo más de ligero

---

1255, á la de Sahagún, en 25 deabril del mismo año, á las de Soria y Burgos, en el siguiente, á la de Escalona, en 1261, y posteriormente á otras poblaciones de importancia.

[1]) Así se explica que al lado de instituciónes genuinamente españolas, figuren otras traidas del derecho romano, y que, juntamente con unas y otras, se reflejen las costumbres de los mercaderes que, en cierto modo pueden considerarse exóticas.

[2]) En el proemio de dicho título se dice entre otras cosas lo que sigue: «Onde pues, que en los titulos ante deste, fablamos de las vendidas e de las compras e de los cambios, queremos aqui dezir en este título de los mercadores e de las ferias e de los mercados».

without doubt, its extent was appropriate to that of the latter, and its subject matter also was that most generally applicable to the different towns and places where it was to govern, while Las Partidas was a code in which was collected the whole of the juridical life of the Spanish people, not only as regards its actualities, but even in its aspirations and tendencies[1]).

The enumeration of the laws contained in Las Partidas, in reference to this matter, will show completely that the most widely different manifestations of mercantile juridical life were taken into account by the Wise King.

In Partida I, Title VI has two laws, the XLVIth which speaks of "What trade is denied to the clergy, and what is not", and the XLIXth which defines "the punishment which the clergy must undergo, who trespass in the things which are forbidden them", a law which determines, among other things, the punishment of the clergy who should intermeddle with trade. In the same Partida, Title XX, law III treats "of what things men must give a tithe by reason of their persons", in which are included the merchants in respect of the profits from their trade.

In the Partida II, law XXXIII of Title XXVI deals with "what things brokers must do with reference to auctions".

In the Partida III, Title XVIII, law LXXVII deals with "in what manner must a contract of affreightment of a ship be made", and LXXVIII with "how must the charter of the company be made, which any may desire to make" (referring to companies formed by traders). In the same Partida, Title XXVIII, law IV treats of "what are those things which a man may do on the sea-coast", law VI of "how a man may use each of the ports, rivers and roads", and law VIII of "how a man may not construct a mill or other building on the rivers so as to impede vessels". In the same Partida, Title XXX, law VII deals with "how a man acquires possession of merchandise if he is entrusted with the keys".

In the Partida V, Title I, law IV treats "of the loan made to sons who are under the power of their father, or of their grandfather", in which the loan is declared valid and the borrower responsible if he had a money exchange, or a shop for cloth or other merchandise, and law VII deals "with the loan made to one who is in a money exchange or a cloth-shop, on behalf of another". In the same Partida, Title III, law IX treats of "how a deposit, which the deceased received in his lifetime, must be returned before other debts, except as to things therein stated, among which things ships for whose repair it has been necessary to contract a debt are mentioned. In the same Partida, Title V is entirely given up to sales and purchases; and although it contains sufficient provisions which may possibly be applied to purchases and sales by traders, it may nevertheless be noticed from their general character, that in this matter the king-legislator had not borne their necessities in mind, even when they should not have passed unobserved, so that the following Title VII treats wholly "of merchants, fairs and markets, and who are called merchants, and of the title and toll which they have to pay by reason thereof", a title which appears to be closely and naturally interwoven with the preceding[2]). This Title VII contains new laws which apply exclusively to merchants. In the same Partida, Title VIII, is the very important law XIII, which treats of "how he who hires his ship to another must pay for the damage to the merchandise and other things which are lost by his fault"; and also XXVI, which treats "of how innkeepers and shipmasters, who have received them, are bound to pay for the things which are lost in their houses and vessels". In the same Partida the whole of Title IX, which contains 14 laws, is given up to dealing with "Vesesls and the damage thereof", and also the whole of Title X is dedicated to treating "of companies formed by merchants and other men among themselves in order to be able to gain somewhat more speed by joining their property together". In the same Partida, Title XIII, laws XXVIII and XXIX also deserve to be cited,

---

he gave it as the municipal Fuero to the town of Aguilar de Campó, on the 14th of March 1255, to that of Sahagún, on the 25th of April of the same year, to those of Soria and Burgos in the following, to that of Escalona in 1261, and afterwards to other towns of importance.

[1]) This explains how it is that by the side of genuinely Spanish institutions, figure others brought from the Roman law, and that in conjunction, they reflect customs of merchants which in a way must be considered exotic.

[2]) In the introduction to this Title there is said among other things: "whereas in the foregoing titles we have spoken of sales, purchases and exchanges, we here desire to speak in this Title, of merchants, of fairs and of markets".

ayuntando su aver en uno». En la misma Partida, título XIII, las leyes XXVIII y XXIX merecen tambien citarse, pues la primera trata de «como aquel que presta sus dineros, para adobar o para fazer nave, o otro edificio, ha mayor derecho en ello, para ser pagado que otro ninguno», y la segunda, de «como el alquile de las cosas que son de almazen o que llevan de un lugar a otro, deve ser ante pagado que las otras debdas»; y en el título XIV, de la misma otras dos leyes, la XXII y XXIII, que tratan respectivamente, la primera, de «como los compañeros pueden descontar entre sí los daños e los menoscabos que ovieren por razón de la compañia por culpa dellos», y, la segunda, de «como deve ser descontado el daño que alguno de los compañeros fizieren en la compañia por engaño».

Por último, en la Partida séptima, título XVI, figura la ley X, que trata «de los engaños que fazen los omes en los juegos metiendo y dados falsos, o que buelven pelea á sabiendas en las ferias ó en los mercados por furtar algo».

Claro es que, si se compara la importancia que en la historia del derecho mercantil, pueden tener las 60 leyes dedicadas á esta materia en el Código de Las Partidas, de las cuales tan solo 22 se refieren al derecho marítimo, con la que tiene el título LIII de las Basílicas del emperador Leon el Filósofo, publicadas entre los siglos IX y X, es realmente pobre nuestro Código del siglo XIII; pero si se tienen en cuenta, tan solo nuestros escasos precedentes legales, y, sobre todo, la azarosa vida de los reinos de Castilla y León durante los primeros siglos de la Reconquista, es muy de elogiar la conducta del Rey Sabio, que recogió en su obra legislativa aquellas tan interesantes manifestaciones de la vida jurídico mercantil, hasta entonces tan abandonadas de todos los que se dedicaban á trabajos de esta indole.

Estas disposiciones, y las de la famosa compilación conocida en Castilla con el nombre de Fuero de Leyron (Rooles de Olerón), que indudablemente rigío en ella[1]), debieron bastar á satisfacer las necesidadas del comercio de Castilla y Leon hasta el término de la Reconquista, pues los Códigos y compilaciones publicados posterior-

[1]) Que los Rooles de Oleron, ó Fuero de Leyron, como se llamó en Castilla, estuvieron en vigor en este Reino es cosa que puede asegurarse, aun cuando no haya declaración precisa, ni de autoridad que lo dispusiera, ni de escritor de la época que lo atestigue. Las razones en que se apoya esta afirmación son las siguientes: En la colección de Leyes y Estatutos de España, así de la Corona de Castilla como de la de Aragón, desde el siglo XIII hasta el XVII relativos á ordenanzas de comercio naval, de seguros marítimos y de armamentos, que publicó, á fines del siglo XVIII, el ilustre historiador, *Dn. Antonio Capmany y Monpalau, como Apéndice á las Costumbres Maritimas del Libro del Consulado*, Madrid, 1791, incluye una traducción española de las Leyes de Lairón, sacadas, dice, de un códice de papel y letra de principios del siglo XV, existente en la Real Biblioteca del Escorial. Contiene dicho Códice una nota final, en la que el copista anónimo declara que dicho fuero concuerda con todas les leyes que están en el título de la quinta Partida. «El qual fuero, añade, por aquellas leyes es aprobado, e manda que por el sean librados todos los mareantes, e los juicios que por él se dieren que valan». Y, aun cuando no resulta cierto, ni que aquellas leyes de Partida aprobaran el Fuero, ni, mucho menos, que mande que por él sean librados todos los maerantes, é los juiciosque por él se dieren que valan, es verdad, sin embargo, que entre las leyes del título de la quinta Partida y las del Fuero hay completo acuerdo; lo cual quiere decir que si, como es de suponer, este acuerdo no fué casual, sino que se debío á que los redactores de las Partidas tuvieron á la vista un ejemplar de dicho Fuero, é incluyeron algunas de sus leyes en el citado Código, esto lo harian por estar en uso entre los navegantes de los costas españolas del Cantábrico. Es más; aun, en el caso de que, en aquel entonces, no hubieran estado en uso tales Leyes de Layron entre los españoles, el hecho de transcribir en las Partidas algunas de sus disposiciones es una especie de aprobación tácita, que debío darlas mayor importancia. Quizá sea esta la aprobación á que hace referencia el copista. Y, si esto es así, no cabe duda que se corrío algo más de lo necesario el copista, al afirmar que manda que por él sean libràdos los mareantes; cosa que, sin embargo, no tiene nada de particular, por que los copistas de la edad media se atrevieron á e so, y á mucho más. — Que los mercaderes de Castilla se rigieron en el siglo XIV por el Fuero de Leyron es indudable; por que el rey Carlos V de Francia, en su Ordenanza de 1364, al conceder á aquellos el derecho de comerciar en los puertos de Leure y Harfleur, en Normandía, dispuso que sus diferencias se juzgasen, *selon le droit de Leyron*; lo cual es de presumir que lo solicitaran igualmente los propios mercaderes. — Por todas estas circunstancias, asi como, por la de que, estando perfectamente demostrado que la autoridad de los Rooles de Oleron se extendío hasta regiones muy lejanas de su punto de origen, (todas las orillas del Báltico) es de creer que en las costas españoles del Cantábrico, tan inmediatas á ese punto de origen rigieran desde su aparición. Lo contrario seria verdaderamente inexplicable, dada la fuerza expansiva que han tenido todas las compilaciones de costumbres maritimas de todos los tiempos.

as the former treats of "how he who lends his moneys, in order to fit out or build a ship, or other edifice, has the better right thereon, to be paid before any other", and the second of "how he who is the holder of things which are in a warehouse or carries them from one place to another must be paid before the other debts", and in Title XIV, of the same, two other laws, XXII and XXIII, treat respectively, as to the first, of "how the members may pay among themselves the losses and damages which may be caused to the company from their fault", and as to the second, of "how the damage caused to the company by deceit by any of the members, ought to be paid".

Lastly, in the seventh Partida, Title XVI, appears law X, which treats "of the deceptions which men make in games and with loaded dice, or who knowingly stir up strife in fairs or markets in order to steal something".

It is clear that, if the importance which the 60 laws dedicated to this matter in the Code de Las Partidas possess in the history of mercantile law, only 22 of which refer to maritime law, is compared with the importance of Title LIII of the Basilicas of the Emperor Leo the Philosopher, published between the ninth and tenth centuries, our Code of the thirteenth century is really poor; but if there are taken into account, both our scanty legal precedents, and above all the hazards of life in the kingdoms of Castilla and León during the first centuries of the Reconquest, the conduct of the Wise King is much to be praised, in gathering into his legislative work such interesting manifestations of the mercantile juridical life, which up to that time had been abandoned by all who dedicated themselves to labours of this nature.

These provisions, and those of the famous compilation, known in Castilla under the name of Fuero de Leyron (Roles de Oleron), which undoubtedly were in force therein[1]), must have sufficed to satisfy the commercial necessities of Castilla and León until the end of the Reconquest, as the Codes and compilations published

[1]) That the Roles de Oleron, or Fuero de Leyron, as they were called in Castilla, were in force in this kingdom is a thing which may be asserted, even although there is no precise nor authoritative declaration which so provides, nor any writer of the time who gives evidence thereof. The reasons which support this statement are the following: In the collection of the Laws and Statutes of Spain, both of the Crown of Castilla and of Aragón, from the thirteenth to the seventeenth centuries, relating to sea commerce, maritime insurance and equipments, published at the end of the eighteenth century, by the illustrious historian, *Don Antonio Capmany y Monpalau*, as an appendix to *las Costumbres Maritimas del Libro del Consulado*, Madrid, 1791, is included a Spanish translation of the Laws of Oleron, taken, as he says, from a paper manuscript in writing of the beginning of the XVth century, then in the Royal Library at the Escorial. The said manuscript contains a final note in which the anonymous copyist declares that the said Fuero agrees with all the laws which are in the Title of the fifth Partida. "Which Fuero" he adds, "is approved by those laws, and commands that all navigators should be tried thereby, and that all judgments given in accordance therewith should be valid". And even if it is not certain, either that those laws of the Partida approved the Fuero, or much less that it commands all navigators to be tried thereby, and that all judgments given in accordance therewith should be valid, it is nevertheless true that there is complete agreement between the laws of the title of the Fifth Partida and those of the Fuero; which means to say, that if, as may be supposed, this agreement was not accidental, but due to the fact that those who drew up Las Partidas had before them a copy of the said Fuero, and included some of its laws in the said laws they would do this because of their being in use among the seamen of the Spanish Cantabrian coasts. And more; even if those laws of Oleron were not in use at that time among the Spaniards, the fact of transcribing some of their provisions in las Partidas is a kind of tacit approbation, to which the greatest importance must be given. Perhaps this is the approbation to which the copyist refers. And if this is so, there is no doubt that the copyist went further than he need, in affirming that by it the navigators should be tried; a fact, however, which is not extraordinary, for the copyists of the Middle Ages were bold enough for much more than that. — That the merchants of the XIVth century were governed by the Fuero de Leyron is undoubted; for king Carlos V of France, in his Ordinance of 1364, in granting them the right to trade in the ports of Lorient and Harfleur in Normandy, provided that their disputes should be tried "according to the law of Leyron", which raises a presumption that the merchants also themselves asked for it. — From all these particulars as well as from the perfectly proved fact that the Roles de Oleron extended to regions very far from their place of origin (to all the shores of the Baltic), it may be believed that on the Spanish Cantabrian coasts, so near the place of origin, they governed from the time of their appearance. Considering the expansive force of all compilations of maritime customs of all times, the contrary would be truly inexplicable.

mente apenas si contienen pceceptos legales de importancia relativos á esta materia[1]).

Aragón y Cataluña terminan por completo la obra de su reconquista en el siglo XIII, con las empresas del valeroso rey Dn. Jaime I, el Conquistador, que arrebató al poderío musulmán las islas Baleares, el reino de Valencia y el de Murcia, si bien este último con el propósito no de hacerlo suyo, sino de entregarselo, como lo hizo en efecto, á su yerno el rey de Castilla, Dn. Alfonso X. Y aunque ta les empresas suponen la concentración de la actividad de los pueblos en muy distinto sentido del que requieren las artes de la industria, y el comercio, una y otrase desarrollaron con una impulsión muy superior á la de Castilla y Leon, debido sin duda, al espectáculo sugestivo de las repúblicas italianas, que alcanzan en esta época el máximun de su poderio y explendor, y al, no menos, educador del Rosellón y la Provenza, que parecen, en aquel entonces, ser los focos luminosos de donde irradian la civilización y la cultura de la edad media. Solo asi se explica que, en ese siglo XIII, al poco tiempo de la conquista de Valencia (12 años despues) en 1250, al dar, el propio rey Dn. Jaime I, á los valencianos su Código general, traducido del derecho justinianeo, incluyera en él una serie de disposiciones muy interesantes relativas al derecho marítimo[2]), y que, no siendo estas suficientes para el desarrollo que la industria de la navegación adquiriera en poco tiempo en la ciudad de Valencia, hiciera, en 1258, extensivas á la misma, las ordenanzas que en dicha fecha aprobó para Barcelona; ordenanzas que habian sido redactadas por los prohombres de mar de esta última para el régimen y policia de las embarcaciones mercantes. Todavía pocos años más tarde, en 1283, se creaba en Valencia, por el rey Dn. Pedro III de Aragón, la jurisdicción consular; instituyendo en el siguiente año un tribunal de apelación para las causas de comercio. Y tanto, y tan importante, debío ser esta jurisdicción comercial desde sus comienzos, que los manuscritos y primeras ediciones que se hicieron del famoso libro de las Costumbres Maritimas de Barcelona, conocido vulgarmente con el nombre de Libro del Consulado de Mar, llevan al frente, repartido en cuarenta y dos capítulos, un verdadero Código procesal de dichos tribunales, y una serie de preceptos, que pueden llamarse, con exactitud y propiedad, la ley orgánica de constitución de los mismos[3]).

En este mismo siglo XIII, la hoy insignificante ciudad de Tortosa (considerada desde el punto de vista comercial, aunque muy importante desde el punto de vistas agricola industrial) promulga, en 1279, por mandado de la Señoria de la ciudad, su notabilisimo Código de las Costumbres; en el que, á más de las varias disposicionas esparcidas por el Código referentes al derecho marítimo, hay una parte de

[1]) Los Códigos, ó compilaciones legales, publicados con posterioridad á Las Partidas hasta fines del siglo XV son: las leyes para los Adelantados mayores, las Leyes Nuevas, el Ordenamiento de las Tafurerias, el Ordenamiento de Alcalá, las Ordenanzas Reales de Castilla y las Leyes de Toro. Y, de todos estos, solo hay unas cuantas disposiciones de derecho mercantil, ó que con él se relacionen, en el Ordenamiento de Alcalá y en las Ordenanzas Reales de Castilla. — En el primero, hay una Ley única, del título XXIV, unificando los pesos y medidas en todo el reino de Castilla, y dos más en el título XXXII, la L y la LI, que tratan de los navios. La primera, que trata de que non aya pecio (daño ó menoscabo) ningun navio, y la segunda, de que no pueda embargarse ni detenerse ningun navio por deudas contraidas fuera del reino. — En las segundas, que son una recopilación de leyes mandada formar por los Reyes Católicos al Doctor Alonso Diaz de Montalvo, hay hasta unas diez y seis leyes referentes á cosas del comercio terrestre y marítimo; de las cuales, dos, son reproducción de las ya citadas del Ordenamiento de Alcalá relativas á los navios, y alguna de las de las Partidas. De las demás, puede decirse que las más importantes son las del rey Dn. Enrique IV, confirmando los privilegios concedidos por el mismo á las famosas ferias francas de Medina del Campo, y tambien las de Dn. Juan II y los Reyes Católicos sobre los cambiadores. — He aquí ahora la indicación de esas leyes: en el libro V, título VIII, las leyes 1ª y 5ª; en el libro VI, título VIII, las seis que lo forman; en el título IX, la ley 18; en el título XII, las leyes 2ª, 3ª, 4ª, 6ª y 10ª; en el libro VII, titulo I, la ley 21; y en el libro VIII, título III, la ley XI.

[2]) Estas leyes marítimas, en número de diez y siete, han sido transcritas por *Pardessus, Collection des Lois* etc ob. cit. tomo 5°, pag. 333 y siguientes; haciendo constar, respecto á algunas de ellas, que no son procedentes del derecho romano.

[3]) Para enmarañar más el asunto, ya de suyo bastante complicado, respecto al verdadero origen del Libro del Consulado se ha descubierto, hace unos cuantos años, en el Archivo Municipal de Valencia, un manuscrito del mismo, al parecer más antiguo que todos los que pudo consultar el erúdito Capmany cuando publicó su edición del Consulado de 1791, y en el que los valencianos quisieran encontrar un apoyo para que resultara Valencia la cuna de esta inmortal compilación de costumbres marítimas.

afterwards scarcely contain any legal precepts of importance dealing with this matter[1]).

Aragón and Cataluña completely finish the work of their Reconquest in the XIIIth century, by the exploits of the valiant king Don Jaime (James) I, the Conqueror, who seized the Balearic Isles, and the kingdoms of Valencia and Murcia from the Musulman power, although he took the latter with the intention, not of making it his own, but of delivering it, as in fact he did, to his son-in-law the king of Castilla, Don Alfonso X. And although such undertakings presume the concentration of the activity of the people in a sense very different from that required by the arts of industry and commerce, both were developed with an impulse very superior to that of Castilla and León, which was due no doubt, to the suggestive spectacle of the Italian Republics, which in this age reached the maximum of their power and splendor, and no less to the educative influence of Rosellon and Provence, which appeared at that time to be centres of light, whence radiated the civilisation and culture of the Middle Ages. Thus only is it explained that, in that XIIIth century, a short time (12 years) after the conquest of Valencia, in 1250, on king Don Jaime I giving to the Valencians his general Code, translated from the Justinian law, there should be included therein a series of very interesting provisions relating to maritime law[2]), and that, as these were not sufficient for the development of the seafaring industry, acquired in a short time by the City of Valencia, there should in 1258 be the Ordinances in extension thereof, which he approved for Barcelona; ordinances which had been drawn up by its leading seamen for the government and discipline of merchant vessels. Yet a few years later, in 1283, the consular jurisdiction was created in Valencia by king Don Pedro III of Aragón; who instituted a court of appeal for commercial causes in the following year. And of so great importance must this commercial jurisdiction have been from its commencement, that the manuscripts and first editions of the famous book of las Costumbres Marítimas de Barcelona, commonly known by the name of Libro del Consulado de Mar, have at the beginning, divided into 42 chapters, a veritable code of procedure for the said tribunals, and a series of precepts, which may be called with correctness and propriety, the organic law of their constitution[3]).

In this same XIIIth century, the now insignificant city of Tortosa (considered from the commercial point of view, though very important from the agricultural and industrial points of view) promulgates, in 1279, by order of the Lord of that city, its very notable Código de las Costumbres; in which, besides the various provisions scattered throughout the Code referring to maritime law, there is one part, which

---

[1]) The Codes or legal compilations, published previous to Las Partidas up to the end of the XVth century, are: Las Leyes para los Adelantados mayores, las Leyes Nuevas, el Ordunamiento de las Tafurerias, el Ordenamiento de Alcalá. las Ordenanzas Reales de Castilla and las Leyes de Toro. In all these there are only a few provisions of mercantile law or related thereto, and these are in the Ordenamiento de Alcalá and the Ordenanzas Reales de Castilla. — In the first there is a single law, in Title XXIV, unifying the weights and measures in the whole kingdom of Castilla, and two more, the Lth and the LIst in Title XXXII. treating of ships: the first, which treats of no vessel having pecio (damage or depreciation), and the second, of no vessel being arrested or detained for debts contracted outside the kingdom. — In the second, which are re-compilations entrusted by the Catholic King to Doctor Alonso Diaz de Montalvo, there are even some sixteen laws referring to affairs of land and sea commerce; two of which are a reproduction of those already cited from the Ordenamiento de Alcalá relating to vessels, and one from las Partidas. Of the others it may be said that the most important are those of king Don Enrique IV, confirming the privileges granted by himself to the famous Free Fairs of Medina del Campo, and also those of Don Juan II and the Catholic Kings on money-changers. The following are the references to those laws; in book V. Title VIII, laws 1 and 5; in book VI, Title VIII, its six laws; Title IX, law 18; Title XII, laws 2, 3, 4, 6 and 10; in book VII, Title I, law 21; and in book VIII, Title III, law 11.

[2]) These maritime laws, seventeen in number, have been transcribed by *Pardessus*. Collection des Lois, etc., volume 5, page 333 and the following: showing with respect to some of them, that they do not proceed from the Roman law.

[3]) To complicate still more the matter of the true origin of the Libro del Consulado, already sufficiently complicated, a manuscript thereof was discovered a few years ago in the municipal archives of Valencia, which appears to be the most ancient of all those the learned Capmany could have consulted when he published his edition of the Consulado in 1791, and in which the Valencians would like to find a support to prove that Valencia was the cradle of this immortal compilation of maritime customs.

él, que bajo el epigrafe ó rúbrica de «Consuetudines et usus maris», contiene una serie muy importante de reglas de derecho comercial que, reproducidas en el ya citado libro del Consulado, han planteado el, hasta ahora insoluble problema, de si los redactores del Código de Tortosa tuvieron á la vista el libro del Consulado, ó, si por el contrario, los que redactaron este último tuvieron presente aquel, como asegura el ilustre historiador del Código de Tortosa, Dn. Bienvenido Oliver[1]).

Al lado de estas dos insignes ciudades, ó, mejor dicho, dominandolas por su superior importancia, por las condiciones de su puerto natural, y por su posición privilegiada en el Mediterráneo, Barcelona, en los siglos XIII, XIV y XV, parece ser la directora de todo el movimiento comercial de los Estados de la corona de Aragón. Y, de una parte, los reyes concediendo privilegios á los barceloneses, de otra los magistrados municipales dictando edictos y ordenanzas relativas al comercio, y, de otra, los propios comerciantes y navegantes recogiendo las costumbres marítimas del Mediterraneo en el, nunca bastante elogiado, Libro del Consulado de Mar, hacen que el nombre de Barcel onaperdure en los anales de la historia del comercio, y pueda parangonarse con los de sus ilustres rivales, Montpeller y Marsella, en Francia, Pisa, Génova y Venecia, en Italia.

La legislación mercantil de Barcelona, en este periodo que estamos reseñando, es mas extensiva é intensiva que la de Castilla; pues, refiriendonos tan solo á la labor legislativa de los reyes de Aragon y magistrados municipales de la ciudad, nos encontramos regulada la jurisdicción comercial, creada la casa Lonja ó casa de contratación, organizada la clase de los mercaderes, reglamentadas la industria de los banqueros, corredores y palanquineros, regimentado el gobierno de las naves mercantes, creados los consulados de Africa y Levante, y reguladas los letras de cambio, los seguros marítimos, el préstamo á la gruesa, y otras instituciones. Y, si á esto se añade, que, en la compilación de costumbres locales, que sancionó el rey Dn. Pedro III de Aragón, en 1283, conocida con el nombre de *Recognoverunt proceres*, (por ser estas las palabras primeras del primer capítulo de las mismas) se contienen una serie de disposiciones, relativas tanto al comercio por tierra como al marítimo[2]), y que, todo ello, era complemento de la mas extensa y más completa de cuantos compilaciones de costumbres marítimas han gozado de autoridad en los mares de Europa, del Consulado de Mar[3]), se podrá formar una idea aproximada de lo que fué el comercio de la ciudad de Barcelona en los últimos tiempos de la edad media, y de la perfección lograda por su legislación mercantil.

* * *

[1]) *Oliver: Historia del Derecho de Cataluña Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa.* Madrid 1876—81, tomo 3° pag. 247 «Todo lo cual viene á demostrar que las disposiciones marítimas del Código de Tortosa, lejos de ser un extracto del Libro del Consulado, constituyen, por el contrario, una de las fuentes que sirvieron para la redacción de esta célebre compilación marítima».

[2]) En el *Recognoverunt Próceres* hay disposiciones de derecho mercantil tan notables como la de declarar irreivindicables las ventas en que interviniere corredor, la prohibición impuesta á estos de poder practicar por su cuenta operaciones comerciales de la clase de las en que interviene como mediador, la de que los libros de los banqueros merecen tal fé que los pagos que estos hicieren á sus clientes ó terceros puedan acreditarse con los asientos de sus libros, y la de que estando las naves dispuestas á emprender un viaje no pueda detenerse ni al mercader ni al marinero que hubieren de embarcar en ella, ni estan obligados á contestar la demanda, ni á seguir el juicio que contra ellos se intentare si prestan fianza suficiente hasta su regreso.

[3]) El Consulado de Mar, por la extensión de las materias que trata, y hasta por el modo especial de tratarlas, no es comparable ni con las Leyes Rhodias, ni con los Rooles de Oberon, ni con ninguno de los ordenamientos ó Estatutos que produjeron las repúblicas italianas. Es infinitamente superior á todos ellos, y aun lleva ventaja á algunos Códigos modernos. De entre las obras legales de los siglos XVI al XVIII, inclusives, solo las Ordenanzas marítimas de Luis XIV, de 1781, pueden considerarse más completas. — Desde un comienzo le falto la ordenación. El, ó los compiladores del Consulado, se conoce que no tenian grandes exigencias respecto al particular; y, hasta que Capmany, en 1791, lo ordenó, distribuyendo sistemáticamente en catorce títulos, á los que puso los correspondientes epigrafes, fué dificil formarse cabal idea de lo que era, y orientarse entre los 252 capitulos que constituyen propiamente el Libro del Consulado, (pues lo que con este nombre se publicó por primera vez comprendia nada menos que 334 capitulos, entre los que figuraban, á más del Código de los costumbres maritimas, la ley procesal y orgánica del tribunal consular de Valencia, la fórmula del juramento que habian de prestar los abogados en el tribunal comercial de Mallorca, las fórmulos y cálculos que habian de emplearse para determinar el tonelajo de los navios y una serie de disposiciones de los reyes de Aragón

under the heading or rubric "Consuetudines et usus maris", contains a very important series of rules of commercial law which, reproduced in the already cited Libro del Consulado, have originated the hitherto insoluble problem, whether those who drew up the Código de Tortosa had before them the Libro del Consulado, or if on the other hand those who drew up the latter had the former before them, as Don Bienvenido Oliver, the illustrious historian of the Código de Tortosa, asserts[1]).

By the side of these two remarkable cities, or rather dominating them by its greater importance, by the conditions of its natural harbour, and by its privileged situation on the Mediterranean, Barcelona, in the XIIIth, XIVth and XVth centuries, appears to be the director of all the commercial movement of the Estates of the Crown of Aragón. On the one hand, kings granting privileges to its inhabitants, on another the municipal magistrates issuing proclamations and ordinances with regard to commerce, and on another hand, the merchants and navigators themselves collecting the maritime customs of the Mediterranean in the never sufficiently praised Libro del Consulado de Mar, cause the name of Barcelona to endure in the annals of the history of commerce, and to match its illustrious rivals, Montpelier and Marseilles in France, Pisa, Genoa and Venice in Italy.

The mercantile legislation of Barcelona, in this period which we are epitomising, is more extensive and intensive than that of Castilla; for, referring only to the legislative labour of the kings of Aragón and the municipal magistrates of the city, we find the commercial jurisdiction regulated, the Casa Lonja (Exchange) or the Casa de Contratación (Contract House) created, the class of the merchants organized, the banking, broking and carrying businesses regulated, the command of merchant vessels regularised, the consulates of Africa and the Levant created, and bills of exchange, maritime insurances, bottomry loans and other institutions regulated. And if one adds to this that a series of provisions is contained, relating both to land and sea commerce[2]), in the compilation of local customs, sanctioned by the king Don Pedro III of Aragón in 1283, and known by the name of *Recognoverunt Proceres* (from these being the first words of the first chapter thereof) and that all that was the complement of the Consulado del Mar, the most extensive and complete of all the compilations of maritime customs which have been authoritative on the seas of Europe[3]), an approximate idea may be formed of the commerce of the City of Barcelona during the end of the Middle Ages, and of the perfection attained by its mercantile legislation.

* * *

[1]) *Oliver*: *Historia del Derecho de Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa.* Madrid, 1876—81, volume 3, page 247, "All of which goes to show that the maritime provisions of the Código de Tortosa, far from being an extract from the Libro del Consulado, form, on the contrary, one of the sources which helped in the drafting of this celebrated maritime compilation".

[2]) In the *Recognoverunt Proceres* there are such notable provisions of the mercantile law as that which declares that sales in which a broker has taken part are not subject to *Reivindicatio*, the prohibition of brokers of practising on their own account commercial operations of the same class as those in which they take part as intermediaries, the provision that bankers' books are good evidence, that payment made by them to their clients or third persons may be proved by the entries therein, and another, that when vessels are ready to sail they cannot be detained either by a merchant or seaman who should have embarked therein, that they are not obliged to answer an action, nor pursue an action brought against them, if they offer sufficient security for their return.

[3]) The Consulado del Mar, by the extent of its subject matter, and even by the special way in which it treats it, cannot be compared either with the Rhodian Law, or the Roles de Oleron, or with any of the Ordinances or statutes produced by the Italian Republics. It is infinitely superior to them all, and even has the advantage of some modern codes. Among the legal works of the XVIth to the XVIIIth centuries inclusive, only the maritime ordinances of Louis XVI in 1781 can be considered more complete. — From the beginning it failed in arrangement. The king or the compilers of the Consulado were not aware of the great requirements in that particular; and until Capmany in 1791 arranged it by distributing it systematically into fourteen titles, to which he placed suitable headlines, it was difficult to form an adequate idea of what it was, and to steer between the 252 chapters which properly constituted the Libro del Consulado, (for what was published under this name at first comprised no less than 334 chapters, among which figured, besides the Code of maritime customs, the laws of procedure and the organic law of the consular tribunal of Valencia, the form of oath which advocates had to take in the commercial tribunal of Mallorca, the formulas and calculations which had to be employed to determine the tonnage of vessels and a series of provisions of the kings of Aragón about fitting out vessels as corsairs). —

La unión de los reinos de Castilla y Aragón, realizada por el matrimonio de los Reyes Católicos, y conseguida por modo definitivo en sus sucesores; la toma de Constantinopla por los turcos, dando el golpe de muerte al comercio del Mediterraneo, sobre todo al practicado para relacionarse con la India; el descubrimiento del Nuevo Mundo por el insigne genovés, Cristobal Colón, al servicio de la corona de Castilla; y el descubrimiento del camino directo por mar para las Indias orientales, hecho por el ilustre portugués, Vasco de Gama, cambian por completo la orientación del comercio de la Península española, é imprimen al mismo una fisonomía distinta, creando nuevos focos de actividad comercial, y encaminando el derecho mercantil por otros rumbos precursores de los que sigue en la época contemporanea.

Y, por de pronto, conviene advertir, que esos nuevos focos de actividad comercial, que hacen que la España del siglo XVI presente los caracteres de una gran nación, desde el punto de vista económico industrial, no deben á los reyes de la casa de Austria otra cosa que una serie de medidas desacertadas que dan al traste con ellos; pues si, durante el citado siglo XVI, alcanzan extraordinaria preponderancia, Burgos, con su Casa de Contratación y su Consulado, centro del comercio de Castilla con todo el Norte de Europa, Sevilla, con su Casa de Contratación de las Indias y su Consulado, y Medina del Campo, con sus famosas ferias francas, reguladores del crédito europeo, la gloria de todo ello debe atribuirse á la sabia política de los Reyes Católicos, que supieron dar vida á esos núcleos, creados por expontáneas exigencias de la vida nacional[1]).

Los reyes de la Casa de Austria preocupados con los problemas de la política general europea, de la que se creyeron, ellos, obligados á ser los portaestandartes, no prestaron atención alguna á los intereses nacionales, sacrificandolos, por el contrario, á sus fines de dominación política y religiosa. No fueron legisladores, al estilo de Alfonso X de Castilla y Jaime I de Aragón, ni supieron rodearse de ministros de talla y altura, como lo hicieron los reyes de Francia, desde Enrique IV á Luis XIV; legislarón, si, pero al detalle, resolviendo minucias de momento, y amontonando disposición sobre disposición, hasta hacer de nuestros cuerpos legales un verdadero bosque inextricable.

La Nueva Recopilación, hecha en 1562, con el plausible propósito de introducir un poco de órden en el caos de nuestra legislación, fué una obra deplorable por

sobre el armamento en corso). — Los epígrafes de los catorce títulos en que dividio Capmany el Consulado son los siguientes: I, De los Obligaciones entre el patron ó naviero, el constructor, y los accionistas, en orden á la fábrica y venta del buque. II, De las obligaciones del contramaestre, del escribano y de otros oficiales de mar. III, De las obligaciones entre el patrón y los marineros de las tripulación. IV, De los actos, contratos y condiciones de los fletamentos entre patrón y cargador. V, De la carga, estiva, y descarga de los géneros, y de los daños causados en ellos en esta maniobra. VI, De la encomienda del buque y de los géneros para un viaje. VII, Del orden y reglas del anclaje de la nave en rada, en playa, ó en puerto. VIII, De las mutuas obligaciones entre el patron, los mercaderes y pasageros embarcados. IX, De los impedimentos de patrón y mercader para emprender ó continuar el viaje. X, De la conserva entre naves y de sus condiciones y estilos. XI, De la echazón y de las demás averias que acontecen en el mar. XII, De las averias causadas á una nave mercante, por insulto de bajeles enemigos ó de corsarios. XIII, De las mutuas obligaciones entre el patrón y los interesados en el buque. XIV, De la observancia de los contratos y de la buena fé en la compra y venta de las mercaderias.

[1]) El tribunal del Consulado de Burgos fué creado con jurisdicción propia, por los Reyes Católicos en 21 de julio de 1494, pero la Casa de Contratación de Burgos existia con bastante anterioridad; pues del erudito y concienzudo trabajo, publicado por el *Doctor Garcia de Quevedo*, con el título de *Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538, que ahora de nuevo, se publican, anotadas y precedidas de un bosquejo historico del Consulado*, Burgos, 1905, se deduce, fundadisimamente que, la Casa de Contratación y aun el Consulado, aunque sin atribuciones jurisdiccionales, datan del siglo XIV, sin que pueda precisarse la fecha de su fundación. — La Casa de Contratación de Indias de Sevilla fué creada por la pragmática de los Reyes Católicos de 20 de enero de 1503. Y, á la de Bilbao, ya existente, quizá desde época anterior á la de Burgos, el Rey Fernando (por haber muerto ya la Reina Isabel en 1504), por otra de 22 de junio de 1511, la concedio la jurisdicción comercial, en los mismos terminos que ya tenia Burgos desde 1494. — Las ferias de Medina del Campo, segun asegura el *P. Fray. Tomás Mercado*, (*Summa de Tratos y Contratos*, Sevilla, 1587, libro IV, capítulo IV, folio 169), fueron creadas por «Dn. Hernando, rey de Aragón, cuando era solo Infante de Castilla y gobernador della, por el rey Dn. Juan, su sobrino»; y sus privilegios fueron reconocidos y confirmados por el rey Dn. Enrique IV, primero, y, despues, por los Reyes Católicos.

The union of the kingdoms of Castilla and Aragón, which took place by the marriages of the Catholic kings, and was definitely followed up in the time of their successors; the taking of Constantinople by the Turks, which gave the death blow to commerce in the Mediterranean, especially to that carried on with India; the discovery of the New World by the distinguished Genoese Christopher Colombus, in the service of the Crown of Castilla; and the discovery of the direct road by sea to the East Indies, made by the distinguished Portuguese Vasco de Gama, completely changed the bearings of the trade of the Spanish Peninsula, and impressed upon it a distinct characteristic, creating new centres of commercial activity, and starting commercial law on other routes which were the forerunners of those which it follows at the present time.

And it is convenient to notice forthwith, that those new centres of commercial activity, which cause the Spain of the XVIth century to present the characteristics of a great nation, from the economic and industrial points of view, owe nothing to the kings of the house of Austria but a series of ill-considered measures which ruined them; for, during the said XVIth century, the following towns attained extraordinary preponderance. Burgos with its Casa de Contratación and its Consulado, the centre of the trade of Castilla with the whole of the north of Europe, Sevilla, with its Casa de Contratación for the Indies and its Consulado, and Medina del Campo, with its famous free fairs, which regulated the course of European credit; and the glory of all that must be attributed to the political wisdom of the Catholic Kings, who succeeded in giving life to those centres, which had been created by the spontaneous exigencies of the national life[1]).

The kings of the house of Austria, preoccupied with the problems of general European politics, of which they believed themselves obliged to be the standard-bearers, paid no attention to the interests of the nation, but, on the contrary, sacrificed them to their ends of political and religious domination. They were not legislators after the manner of Alfonso X of Castilla and Jaime I of Aragón, nor did they know how to surround themselves with great ministers, as did the kings of France from Henry IV to Louis XIV; they legislated indeed, but in detail, deciding the minutiae of the moment, and piled up provision on provision until they made a veritable tangled forest of our bodies of law.

The Nueva Recopilación, made in 1562, with the plausible intention of introducing some order into the chaos of our legislation, was a deplorable work from all points

---

The headlines of the fourteen titles into which Capmany divided the Consulado are the following: I. The obligations between the owner or managing owner, builder, and the share-holders, in order to build and sell a vessel. II. The obligations of the chief officer, supercargo and other seagoing officers. III. The obligations between owner and crew. IV. The acts, contracts and conditions of the affreightments between owner and consignor. V. The loading, stowing and unloading of the goods, and of the damages caused them in this operation. VI. The insurances of the véssel and goods for a voyage. VII. The order and rules for anchoring a ship in a roadstead, to the shore or in harbour. VIII. The mutual obligations of the owner, merchants and passengers on board. IX. The hindrances to owner and merchant from beginning or continuing the voyage. X. Ships sailing in company and of its conditions and customs. XI. Jettison and other losses which happen at sea. XII. Losses caused to a merchant ship by attack of enemies' vessels or of corsairs. XIII. The mutual obligations between the master and the persons interested in the vessel. XIV. The observance of contracts and good faith in buying and selling merchandise.

[1]) The tribunal of the Consulado of Burgos was created with its own jurisdiction by the Catholic Kings on 21 July 1494, but the Casa de Contratación of Burgos was in existence with sufficient authority; for from the learned and conscientious work, published by *Doctor Garcia de Quevedo*, with the title of *Ordenanzas del Consulado de Burgos de* 1538, *que ahora de nuevo, se publican, anotadas y precedidas de un bosqejo historico del Consulado*, Burgos, 1905, it appears as a most fundamental fact that the Casa de Contratación and even the Consulado, but without powers of jurisdiction, date from the XIVth century, though the precise date of their foundation is uncertain. — The Casa de Contratación de Indias of Sevilla was created by a Rescript of the Catholic Kings of 20 January 1503. And to that of Bilbao, which existed perhaps at a time anterior to that of Burgos, King Fernando (Queen Isabel having died in 1405), by a Rescript of 22 June 1511, granted commercial jurisdiction in the same terms as Burgos had possessed it from 1494. — The fairs of Medina del Campo, as asserted by *P. Fray. Tomás Mercado*, (*Summa de Tratos y Contratos*, Sevilla, 1587, book IV. chapter IV, folio 169), were created by "Don Fernando king of Aragón, when he was only Infante of Castilla and governor thereof, by king Don Juan, his nephew"; and its privileges were acknowledged and confirmed first by king Don Enrique IV, and afterwards by the Catholic Kings.

todos conceptos, y que trae á las mientes el adagio tan conocido de que «de buenas intenciones está el infierno empedrado». Y, aunque la Recopilacion de las Leyes de Indias de 1671 es, sobre todo en lo referente al derecho mercantil español muy superior[1]), tampoco es una obra exenta de defectos muy capitales, como los tiene igualmente, y no pequeños en numero, la Novisima Recopilación que, aunque hecha en el siglo XIX, en 1805, contiene integra la legislación de los siglos XV al XVIII inclusives[2]). Del fárrago de leyes que nuestros monarcas dieron referentes al comercio, aunque, las más, no tienen nada que ver con el derecho mercantil, propiamente dicho[3]), lo verdaderamente interesante fué lo relativo á las franquicias

[1]) Por el sistema que siguieron nuestros monarcas de la Casa de Austria, (sistema que ya databa de los antiguos monarcas castellanos) de resolver por si mismos cuanto afectaba á la gobernación del Reino, aunque ello tuviera caracter particular, se multiplicaron de un modo prodigioso las disposiciónes legales, en términos que maravilla como pudieron tener tiempo, no ya para resolver con acierto lo que resolvieron, pero ni siquiera para enterarse de lo que se les ponía á la firma. La consecuencia de todo ello fué la que tenía que ser. Y es, que, si de una parte la inagotable fuente legislativa manaba sin cesar toda suerte de disposiciones, más ó menos acertadas ó desacertadas, los encargados de aplicarlas remplazaban frecuentemente su voluntad á la voluntad regia; lo cual, tratandose de nuestras extensisimas posesiones en el Nuevo Mundo y en el Archipielego asiatico y de Oceanía, podía hacerse con gran impunidad por la mucha agua que habia de por medio entre la Metrópoli y sus colonias. — Dicho esto, que conviene tener muy en cuenta para no formarse idea equivocada de lo que fué nuestro régimen colonial, á juzgar tan solo por las Leyes de Indias, indiquemos brevemente el contenido de esta Recopilación en lo referente al comercio y el derecho mercantil. — El título XVIII del libro IV trata Del comercio, mantenimientos y frutos de las Indias; el XIII del libro VIII trata De las Alcábalas (la alcábala era el impuesto que se cobraba en todas las compras y ventas); los títulos I al XIV (ambos inclusive) del libro IX tratan de la Real Audiencia y Casa de Contratación de Sevilla; los siguientes hasta el XXIV inclusive, del personal de las flotas y armadas de la carrera de las Indias; y el resto, ó sea desde el XXV al XLVI (tambien inclusives), de las materias siguientes. — De la universidad de mareantes, de los marineros y pajes de nao; De los pasajeros y licencias para ir á las Indias y volver á estos Reinos; De los extranjeros que pasan á las Indias, y su composición y naturaleza que en ellas pueden adquirir para tratar y contratar; De los fabricadores y calafates, fábricas y aderezos de navios y su arqueamiento; De la jarcia; De las armadas y flotas; Del aforamiento y fletes; Del apresto de las armados y flotas; De los registros; De la carga y descarga de los navios; De la visita de los navios en estos reinos, y en las Indias, y de los guardas mayores y otros; De la navegación y viaje de las armados y flotas; De los navios de aviso que se despachan á las Indias, y de ellas á España; De los navios arribados, derrotados y perdidos; De los aseguradores, riesgos y seguros de la carrera de Indias; De los jueces oficiales de registros de las Islas de Canaria; Del comercio y navegación de las Islas de Canaria; De la navegación y comercio de las Islas de Barlovento y provincias adyacentes y de las permisiones; De los puertos, De las armadas del mar del Sur; De la navegación y comercio de las Islas Filipinas, China, Nueva España y Perú; y De los Consulados de Lima y Mexico. — El total de leyes contenidas en los títulos reseñados es, nada menos que, de mil ochocientos cincuenta y seis; advirtiendo, que en ellas hay muchas refundidas, y que una sola, que es la instrucción dada por la Reina Gobernadora, en Madrid á 26 de octubre de 1674 á los Generales de la armada y flotas de Indias y á los demás ministros á quienes toca el apresto y despacho de ellas, tiene, nada menos, que sesenta y un capítulos ó leyes.

[2]) Tambien contiene algunas anteriores de los siglos XIII y XIV, puesto que en ella se refundieron las Ordenanzas Reales de Castilla, y se insertaron las Leyes de Toro y muchas leyes del Fuero Real y del Ordenamiento de Alcala, y alguna del Estilo.

[3]) Aparte de alguna disposición suelta, que puede encontrarse desperdigada en los ocho primeros libros de la Novisima Recopilación, como, por ejemplo, la Ley VII del título XXI del libro 6°, relativa á los registros de las casas, de los comerciantes extrangeros en los casos de sospecha fundada de contrabando, todo lo que al comercio y al derecho mercantil se refiere hallase incluido en el Libro noveno y siguientes de dicho cuerpo legal. El libro noveno lleva el siguiente epigrafe: Del comercio, moneda y minas. — El título I de este libro trata De la Junta general de Comercio, Moneda y Minas, en doce leyes. El segundo, De los Consulados marítimos y terrestres, en diez y ocho. El tercero, De las cambios y bancos publicos, en ocho. El cuarto trata, De los mercaderos y comerciantes y sus contratas, en diez y siete. El quinto, De los revendedores, regatones y buhoneros, en trece. El sexto, De los corredores, en ocho. El octavo, De los navios y mercaderias, en once. El noveno, De los pesos y medidas, en cinco. El décimo, Del marco y pesas del oro, plata y moneda; su valor y ley, en veintiocho. El undécimo, Del Contraste y Fiel público, en tres. Los décimo tercero al décimo sexto inclusive, de las cosas prohibidas de introducir y extraer del reino. El décimo séptimo, De la moneda, su curso y valor. Y los décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, de las minas. — En el libro décimo, que lleva el epigrafe, De los contratos y obligaciones: testamentos y herencias, hay, en el titulo primero, (De los contratos y obligaciones en general), de interés para comerciantes, las leyes XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV; en el octavo, (De los préstamos), las leyes II, III, IV y V; en el noveno, (De los depósitos y confianzas), la ley I; en el

of view, recalling the well-known adage "hell is paved with good intentions". And although the Recopilación de las leyes de Indias of 1671 is very superior, especially with reference to the Spanish mercantile law[1]), still it is not a work exempt from very capital defects, such as are contained also and not less in number in the Novisima Recopilación which, although made in the XIXth century, in 1805, contains the entire legislation of the XVth to the XVIIIth centuries inclusive[2]).

Of the farrago of laws given by our monarchs in reference to commerce, although most have nothing to do with mercantile law, properly so called[3]), what was really interesting was that referring to the franchises granted for the fairs of Medina del

[1]) By the system followed by our monarchs of the House of Austria (a system which indeed dated from the ancient monarchs of Castilla), of themselves deciding everthing which affected the government of the kingdom, although of a private character, legal provisions were multiplied in a prodigious manner, in terms which cause astonishment as to how they had time not only to decide with accuracy what they did decide, but even to become acquainted with what they signed. The consequence of all that was inevitable: which is that, if on the one hand, every kind of provision sprang from that inexhaustible fountain of law, more or less to the point, the persons charged with their application frequently replaced the royal will with their own; which, when speaking of our very extensive possessions in the New World, in the Asiatic Archipelago and in Oceania, could be done with great impunity, for much water lay between the Metropolis and its colonies. — Having said this, which it is convenient to keep in mind so as not to form a wrong idea of the nature of our colonial governance, judged only by las Leyes de Indias, let us shortly point out the contents of this Recopilación so far as it refers to commerce and mercantile law. Title XVIII of book IV treats of the commerce, maintenance and produce of the Indies; the XIIIth of book VIII treats of the Alcábalas (the Alcábala was a tax on all purchases and sales); Titles I to XIV inclusive of book IX treat of the Real Audencia and the Casa de Contratación of Sevilla (the Royal Court of Appeal and Contract House); the following to the XXIVth inclusive, of the personnel of the merchant and naval fleet sailing to the Indies; and the rest, that is from the XXVth to the XLVIth inclusive, of the following matters: The guild of the seafaring men, of the sailors and cabinboys; the passengers and licences to go to the Indies and return to these realms; the foreigners who go to the Indies and the composition which they have to pay and the naturalisation which they can acquire to trade and contract; the builders and caulkers, workshops and equipment of vessels and their tonnage; the rigging; the naval and merchant fleets; gauging and freights; fitting out the naval and merchant fleets; the registers; loading and unloading the vessels; the inspection of the vessels in these realms, and in the Indies, and the Chief and other inspectors; the navigation and voyage of the naval and merchant vessels; the despatch-boats sent to the Indies, and thence to Spain; ships taking refuge, broken up or lost; the insurers, risks and insurances on the route to the Indies; the official judges of registers in the Canary Isles; the commerce and navigation of the Canary Isles; the commerce and navigation of the West Indian (Barlovento) Islands, and the adjacent provinces and of the permits; the ports, the men of war of the Southern Sea; the navigation and commerce of the Philippine Islands, China, and Peru; and the Consulados of Lima and Mexico. — The total of the laws contained under those condensed titles is no less then 1856; and it may be remarked that among them are many that are recast, and that one alone, which is the instruction given by the Queen Regent in Madrid on 26 October 1674 to the Admirals of the Fleet and of the merchants ships of the Indies and to the other ministers whose duty it was to attend to their fitting out and despatch, has no less than 61 chapters or laws.

[2]) It also contains some previous to the 13th and 14th centuries, as the Royal Ordinances of Castilla were redrafted therein and there were inserted the laws of Toro and many laws from the Fuero Real and from the Ordinance of Alcala, and one of the Estilo.

[3]) Apart from any isolated provision, which may be met scattered in the first eight books of the Novisima Recopilación, as for example law VII of Title XXI of book VI, relating to searching the houses of foreign merchants in cases of well founded suspicion of contraband, everything referring to commerce and mercantile law is found included in the ninth and following books of the said book of law. The ninth book has the following heading: Of commerce, money and mines. Title I of this book treats of the general Committee of commerce, money and mines, in twelve laws. The second, of the Land and maritime Consulados, in eighteen laws. The third, of exchanges and public banks, in eight. The fourth treats of traders and merchants and their contracts, in sixteen. The fifth, of retailers, hucksters and pedlers, in thirteen. The sixth of brokers, in eight. The eighth, of vessels and merchandise, in eleven. The ninth, of weights and measures, in five. The tenth, of the mark and weights of gold, silver and money; their value and law, in twenty-eight. The eleventh, of the Public assay office and officer, in three. The thirteenth to the sixteenth inclusive, of things which it was forbidden to import into or export from the realm. The seventeenth, of money, its currency and value. And the eighteenth, nineteenth and twentieth, of mines. In the tenth book, which has the heading, Contracts and obligations: wills and inheritances, there are in the first title (Contracts and obligation in general), of interest to merchants, laws XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII and XXIV; in the eighth (Loans), laws II, III, IV and V; in the ninth (Deposits and guarantees), law I; in the twelfth (Sales and purchases, and the alcábala tax), laws II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVII and XVIII; and in the thirteenth (The right to

otorgadas á las ferias de Medina del Campo, y á la creación de las Casas de Contratación de Burgos Sevilla y Bilbao, con el reconocimiento de la jurisdicción especial de las mismas sobre los mercaderes que á una y á otra habian de acudir forzosamente, y la facultad, para los respectivos Consulados, de poder dictar las ordenanzas necesarias para su gobierno y régimen de los asuntos comerciales en que habian de intervenir y entender; porque de esta facultad, que implicaba una independencia del cuerpo de los mercaderes, (ya que los reyes, en uso de su indiscutible, y, entonces, indiscutida soberanía, se reservaron tan solo el derecho de que fueran sometidas á su conocimiento y aprobación las ordenanzas que tuvieren por conveniente dictar los dichos Consulados) resultaron obras tan importantes como las ordenanzas de Burgos de 1538[1]), las de Sevilla de 1556[2]) y las de Bilbao de 1560 y 1737[3]); siendo lo notable de esta potente manifestación

duodécimo, (De las ventas y compras, y derecho de alcabala), las II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVII y XVIII; y en el décimo tercero, (De los retractos y tanteos), las X, á XXI, ambas inclusivas. — En el libro undécimo, (De los juicios civiles, ordinario y ejecutivos), hay, en el título vigésimo octavo, (De los juicios ejecutivos), la ley I; en el trigésimo primero, (De las prendas, represarias y embargos), las leyes IV y X; y en el trigésimo segundo, (De los juicios de accredores; alzamientos, quiebras y cesión de bienes de los deudores), las diez leyes que contiene. — En el libro duodécimo, (De los delitos y sus penas; y de los juicios criminales), en el título vigésimo segundo, (De las usuras y logros), hay la ley V. — Y, por último, en el Suplemento de la Novisima Recopilación, que sigue el mismo orden en la distribución de materias que este, en el libro noveno hay diez leyes (no tiene más) que se refieren á cosas mercantiles.

[1]) Aun cuando antes de 1538 la Casa de Contratación de Burgos, haciendo uso del privilegio concedido por los Reyes Católicos en 1494, hubo de tener Ordenanzas que debieron ser aprobadas por los monarcas, pues que de ellas se hace especial mención, sin protesta de ninguna clase en la Real Cédula de 1495, y á ellas se refieren igualmente algunas de las disposiciónes de las de 1538, no consta, hasta ahora, de un modo fehaciente, que las tales Ordenanzas primitivas fueran de 1495, como aseguran *Capmany*, Ob. cit. tomo I, pag. LXII, y *Alvarez del Manzano*, Ob. cit. tomo I, pag. 416, bajo la autoridad de aquel. Otro tanto ha de decirse de las de 1514 y 1520, de las que la diligencia del erudito *Garcia de Quevedo*, Ob. cit., no ha encontrado rastro alguno. Las de 1511, que publicaron, *Capmany*, Ob. cit., y *Pardessus*, Ob. cit., aunque con la fecha de 1512, fueron reproducidas en las de 1538. De las que no tuvieron noticia alguna ni Capmany ni Pardessus, puesto que ninguno de ellos las menciona siquiera, es de las de 1572 y 1766, tambien de Burgos, de las cuales hay sin embargo bastantes ejemplares impresos. — La formación de las ordenanzas de 1538 fué autorizada por Real Cédula de 3 de enero de 1520; quedaron aprobadas por los mercadores en 1535, y obtuvieron la sanción regia por Real Cédula de 18 de setiembre de 1538, no imprimiendose, sin embargo, hasta el año 1553. — Desde el comienzo de la confirmación y petición de poder, hasta la confirmación de ellas por el monarca, comprende noventa capítulos, leyes ú ordenanzas ó como se las quiera llamar, pues no llevan en el original otra indicación que la del número de órden correspondiente. — En la tercera comienzan las Ordenanzas, siendo, hasta la XLVI inclusive, una serie de disposiciónes que pudieran llamarse la ley orgánica del Consulado, entre las que se hallan interpoladas otras que nada tienen que ver con ella, referentes á préstamos, ventas compañias, factores, letras de cambio, fletamentos y cargamentos de mercaderias. Desde la LVII hasta la LXXXVIII inclusive son un completo código de seguros marítimos. Y las tres últimas son: el pie de las Ordenanzas y suplicación para confirmarlas, una diligencia notorial, y el pie de la confirmación real. — En 1540 se aprobó por el rey un nuevo modelo de póliza, distinto del que contenian las Ordenanzas, por que habian variado los usos en las estaplas de Flandes, Italia, Portugal é Ingleterra; y en 1572 se aprobaron otras nuevas Ordenanzas, que en su mayor parte fueron las de 1538 ligeramente modificadas, y de las que hace un estudio comparativo Garcia de Quevedo en su ya citado libro. — Las de 1766 son totalmente distintas á las anteriores; y fueron hechas, más que por razón de necesidad, (puesto que la inportancia del Consulado y Casa de Contratación habian pasado á la historia durante el siglo XVII) en previsión de un renacimiento comercial de Burgos, que no llegó nunca. En las nuevas Ordenanzas se especifican cuidadosamente las condiciones que han de reunir los que formen parte de la asociación de mercaderes, las obligaciones de todos los funcionarios consulares lo referente á letras de cambio, compañias mercantiles, corredores de comercio etc; pero nada se dice respecto al gran comercio que, á través de los mares, antes se había hecho, como no sea que acerca de él se proveera, «luego que se empieze á verificar aumento de tráfico». *Garcia de Quevedo*, Ob. cit. pags. 140 y 141.

[2]) La Casa de Contratacion de las Indias de Sevilla no tuvo una verdadera jurisdicción consular, organizada al estilo de las de Valencia, Barcelona, Burgos y Bilbao, hasta el 23 de Agosto de 1543, en que el emperador Carlos 5° la creó por su Real Cédula de dicha fecha; pero es evidente que existia con anterioridad una cierta jurisdiccion, quizá desde 1503, en que se fundó la Casa de Contratación, por cuanto el propio emperador, en su ordenanza de 15 de agosto de 1539 para poner término á los conflictos de jurisdicción entre los jueces de la Contratación y los demás tribunales de Sevilla, dicta ciertas reglas para lo sucesivo, que implican el reconocimiento de

[Continuación de la nota 2 y nota 3 veáse pag. 15.]

Campo, and to the creation of the Casas de Contratación of Burgos, Sevilla and Bilbao, with the recognition of their special jurisdiction over the merchants who were forced to resort to one or the other, and the authorisation of the respective Consulados to issue ordinances, necessary for their government and the ruling of the commercial matters in which they had to intervene and try; because from this authorisation, which implied the independence of the body of merchants (although the kings, in exercise of their indisputable, and at that time, undisputed sovereignty, only reserved to themselves the right that the ordinances which the said Consulados thought it convenient to issue should be submitted to their notice and approbation), there resulted works as important as the Ordinances of Burgos in 1538[1]), those of Sevilla in 1556[2]), and those of Bilbao in 1560 and 1737[3]); and what is remarkable in this powerful manifestation of the mercantile juridical life of Spain is that the merchants

buy back), laws X to XXI inclusive. — In the eleventh book (Ordinary and executive civil actions), there is in the twenty eighth title (Executive actions), law I; in the thirty first (Mortgages, reprisals and arrests), laws IV and X; and in the thirty second (Creditors' actions, concealment of goods, bankruptcies and *cessio bonorum* of the debtors), the ten laws which it contains. In the twelfth book (Crimes and their penalties; and criminal proceedings), there is law V in the twenty second Title (Usury and interest). — And lastly, in the ninth book of the supplement to the Novisima Recopilación which follows the same order in the arrangement of its subject matter, there are the whole ten laws which refer to mercantile affairs.

[1]) Even though before 1538, the Casa de Contratación de Burgos, making use of the privilege granted by the Catholic Kings in 1494, had to have their Ordenanzas approved by the monarchs, since there is special mention threof without protest of any kind in the Real Cédula (Royal Rescript) of 1495, and some of the provisons of the Ordenanzas of 1538 likewise refer to that, it is not even now completely clear that those primitive Ordenanzas were of the year 1495, as Capmany asserts, Op. cit. volume I, page 62, and *Alvarez del Manzano*, Op. cit. volume I, page 416, on his authority. The same must be said of those of 1514 and 1520, no trace of which has been found by the diligent search of the learned *Garcia de Quevedo*, Op. cit. Those of 1511, which *Capmany*, Op. cit. and *Pardessus*, Op. cit. published, though with the date 1512, were reproduced in those of 1538. Those of 1572 and 1766, also of Burgos, of which there are several printed copies, were not known by Capmany or Pardessus, for neither of them mentions them. — The drawing up of the Ordenanzas of 1538 was authorised by Royal Rescript of the 3rd January 1520; they were approved by the merchants in 1535, and obtained the Royal sanction by Real Cédula of 18 September 1538, but were not printed until the year 1553. — From the beginning of the confirmation and petition for the power to the confirmation thereof by the monarch, it comprises ninety chapters, laws or ordinances, or whatever they may be called, for in the original they have no mark beyond that of their numerical order. — In the third begin the Ordenanzas, which as far as XLVI inclusive, are a series of provisions which might be called the organic law of the Consulado, among which others are to be found interpolated which have nothing to do with it, referring to loans, sales, companies, agents, bills of exhange, affreightments and cargoes of merchandise. From the LVIIth to the LXXXVIIIth inclusive they form a complete code of maritime insurance. And the last three are: the close of the Ordenanzas and the supplication to confirm them, a notarial certification, and the close of the Royal confirmation. In 1540 the king approved a new model contract, different from that contained in the Ordenanzas, by which the customs in the Staples of Flanders, Italy, Portugal and England were altered; and in 1572 fresh Ordenanzas were approved, which for the most part were those of 1538 slightly modified, and of which *Garcia de Queveda* makes a comparative study in his already cited book. — Those of 1766 are totally different from the foregoing; and were made not so much from necessity (for the importance of the Consulado and Casa de Contratación had passed into history during the XVIIth century) as in the expectation of the commercial resurrection of Burgos, which never took place. In the new Ordenanzas are carefully specified the conditions which the members of the Guild of merchants have to fulfil, the obligations of all the consular functionaries with regard to bills of exchange, mercantile companies, commercial brokers etc., but nothing is said about the greater commerce across the seas, as there was no occasion to provide therefor "until an increase of trade should begin to take place". *Garcia de Quevedo*, Op. cit. pages 140 and 141.

[2]) The Casa de Contratación de las Indias of Sevilla had no true consular jurisdiction, organized after the manner of those of Valencia, Barcelona, Burgos and Bilbao, until the 23rd August 1543, when the emperor Charles V created it by his Royal Rescript of that date, but it is evident that a certain jurisdiction existed before that, perhaps from 1503, when the Casa de Contratación was founded, for the Emperor himself in his ordinance of 15 August 1539, for putting an end to the conflicts of jurisdiction between the judges of the Casa de Contratación and the other tribunals of Sevilla, issued certain rules for the future, which imply the recognition of the said jurisdiction.

[Continuation of note 2 and note 3, page 15.]

de la vida jurídico mercantil de España que los mercaderes de la antigua Corona de Aragón, que tan visibles y notables muestras de su empuje y poderio dieron desde los siglos XIII al XV inclusive, rendidos, al parecer, por aquel magno esfuerzo, vivieron, durante los siglos posteriores, del recuerdo de su pasada grandeza, sin contribuir al avance realizado por el derecho mercantil en esta epoca.

Aun cuando las citadas Ordenanzas de Burgos y de Sevilla difieren grandemente la una de la otra, tanto por su extension como por su forma, coinciden, sin embargo, ambas en el estudio extenso que hacen del contrato de seguros marítimos[1]). Estudio, tan magistralmente hecho, que á las dos Ordenanzas puede hacerse extensivo el elogio que de la de Sevilla hizo el ilustre jurisconsulto francés, Mr. Arthur Desjardins (muerto ya por desgracia para la ciencia) al decir que con esta última se entra en el dominio del derecho moderno, por que todo está ya preparado para la codificación de las leyes comerciales marítimas[2]). Y, si de estas Ordenanzas españolas del siglo XVII puede decirse lo que queda dicho, de las de Bilbao, de 1737, puede asegurarse que son el primer Código de derecho mercantil del mundo, ya que en ellas se reunieron, por primera vez, las materias todas del derecho mercantil terrestre y marítimo, formando un solo cuerpo legal[3*]).

dicha jurisdicción. — La Casa de Contratación dictó tambien algunas ordenanzas para su gobierno, puesto que, por lo menos, se conocen las de 1507, sobre préstamos á la gruesa, que publicó, Pardessus en su Collection, Ob. cit.; pero hasta 1554 no tuvo unas Ordenanzas generales. Dos años despues, en 14 de junio de 1556, eran aprobadas otras nuevas, tambien de caracter general, puesto que los veintiseis, primeros capítulos se refieren á la elección del tribunal del Consulado, su organización y modo de proceder; y desde el veintisiete al sesenta, que es el ultimo, están dedicados exclusivamente á la regulación de los seguros marítimos Como apendice tienen dichas Ordenanzas cinco modelos de pólizas verdaderamente notables. — La parte referente á los seguros fué publicada por *Capmany* en su *Apéndice al Consulado*, Ob. cit., y por *Pardessus* en su *Collection*, Ob. cit.; y, aparte de los ediciones especiales que de ellas se hicieron, se insertaron casi íntegras, con algunas ligeras modificaciones, en la Recopilación de Leyes de Indias.

3) La importancia marítima de la villa de Bilbao, y su situación excepcional sobre su hermosa ria, hicieron que, ya en el siglo XIII (es decir, mucho antes que su rival, la ciudad de Burgos) fuera una villa comercial de primer órden, en la que sus mercaderes debieron estar organizados desde muy antiguo; pues, aun cuando hasta 1511, por Real Cédula de 22 de junio, no tuvo un Consulado y una jurisdicción comercial, análoga á la de Burgos, al decir de algunos autores *(Lafuente, Discurso de inauguración del curso de 1869 á 1870 en el Instituto vizcaino*, citado por *Alvarez del Manzano*, Ob. cit. pag. 420) ya, en 1459, tuvo unas primitivas Ordenanzas de escasa importancia. Celosos los comerciantes bilbainos de los privilegios concedidos á Burgos, contra los cuales habian siempre protestado ante los monarcas, era natural que, habiendo conseguido estos últimos la aprobación de sus famosas Ordenanzas de 1538, y mas tarde los de Sevilla, en 1556, las suyas, hicieran los bilbainos unas, que recibieron la aprobación regia, igualmente, por Real Cédula de 15 de diciembre de 1560. — Estas Ordenanzas, más extensas que las ya citadas de Burgos y Sevilla, contienen setenta y cinco capítulos, de los cuales los veintidos primeros se refieren á la organización del Consulado, los siguientes, hasta el setenta y uno inclusive, á los seguros marítimos (si bien entre ellos se hallan interpolados algunos referentes al modo de proveer á la necesidad de dinero para la compra de vituallas y aparejos estando en viaje, y al reparto y distribución de averías gruesas y ordinarias). Y los, setenta y dos á setenta y cinco, el uno, á la prohibición de admitir escritos de abogados, el otro, á la determinacion de algunas reglas de procedimiento, el siguiente al valor de las letras de cambio y de otros efectos de crédito, y, el último, á las apelaciones en las causas de comercio. Estas ordenanzas, adicionadas en 1665, y confirmadas en 1688, se imprimieron y publicaron en 1691. — Preocupados, como se ha visto, tanto los mercaderes bilbainos, como los de Sevilla y Burgos, por los problemas del derecho mercantil marítimo, y, sobre todo, por los relativos á los seguros, todas las demás materias del derecho mercantil puede decirse que estaban huerfanas de disposiciónes legales. Y, como á esta necesidad habia atendido ya la ordenanza terrestre francesa de 1673, y la influencia francesa se dejaba sentir en nuestra patria con gran fuerza, sobre todo desde que ocuparon el trono de España los descendientes de Luis XIV, desde 1725 empezaron en Bilbao las ansias de reformar la legislación mercantil. En 1731 consiguieron la aprobación regia de las reformas propuestas, pero, descontentos los más exigentes, en 1739 volvio á tratarse entre los mercaderes bilbainos de una nueva y más radical reforma, la cual fué sancionada y promulgada por Real Cédula de 2 de diciembre de 1737.

1) Veáse las notes 1), 2), 3).

2) *Desjardins, Introduction historique à l'étude du Droit Commercial Maritime.* Paris 1890, pag. 106.

3*) Constan estas Ordenanzas de veintinueve capítulos, divididos en números ó articulos; los ocho primeros, dedicados á la organización y régimen del Consulado; los siete siguientes, á los mercaderes y sus libros, compañias de comercio, compraventas (contratas), letras de cambio, vales, libranzas y cartas-órdenes de crédito (de comercio) y corredores; el diez y seis, á los corre-

of the ancient Crown of Aragón, who gave such visible and notable proofs of their energy and power from the XIIIth to the XVth centuries inclusive, were exhausted apparently by that great effort, and during the following centuries lived on the recollection of their past grandeur, without contributing to the advance realised in this period by the mercantile law.

Although the recited Ordenanzas of Burgos and Sevilla greatly differ from each other, both in their extent and form, they both agree, nevertheless, in the ample study they make of the contract of maritime insurance[1]). This study was made in so masterly a manner that there may be extended to the two Ordenanzas the eulogy which the illustrious French jurisconsult, M. Arthur Desjardins (now deceased, unfortunately for science) applied to that of Sevilla, in saying that with this latter the domain of modern law is entered upon, for that everything is now prepared for the codification of the commercial maritime laws[2]). And if what was said of the Ordinances of Bilbao of 1737 may be said of the Spanish Ordinances of the XVIIth century, it may be asserted that they are the first Code of mercantile law in the world, since every matter of mercantile law, applicable to land and sea, is combined therein for the first time in the form of a single body of law[3*]).

The Casa de Contratación also issued some ordinances for its government, for at least those of 1507 about bottomry loans are known, which Pardessus published in his collection, Op. cit.; but until 1554 it had no general ordinances. Two years afterwards, namely in 1556, other new ones were passed, also of a general character, for the first 26 chapters refer to the election of the tribunal of the Consulado, its organization and mode of procedure; and from the 27th to the 70th, which is the last, they are devoted exclusively to the regulation of maritime insurances. As an appendix, the said Ordenanzas have five models of policies which are really notable. — The part referring to insurances was published by *Capmany* in his *Apéndice al Consulado*, Op. cit. and by *Pardessus* in his *Collection*, Op. cit.; and a part from special editions which were made, they were inserted almost entire, but with some slight modifications, in the *Recopilación de Leyes de Indias*.

[3]) The maritime importance of the town of Bilbao, and its exceptional situation on its beautiful river, made it, even in the XIIIth century (that is to say, much earlier than its rival, the city of Burgos) a commercial town of the first order, in which its merchants must have been organized from very ancient times; for, although until, by the Royal Rescript of 22 June 1511, it had not a Consulado and commercial jurisdiction, analogous to those of Burgos, still in the opinion of some authors (*Lafuente, Discurso de inauguracion del curso de 1869 a 1870 en el Instituto Vizcaino*, cited by *Alvarez del Manzano*, Op. cit. page 420) already in 1459 it had some primitive Ordenanzas of slight importance. The merchants of Bilbao, being jealous of the privileges granted to Burgos, against which they had always protested to the monarchs, it was natural that as the latter had obtained the approbation of their famous Ordenanzas of 1538, and the merchants of Sevilla theirs in 1556, those of Bilbao should frame their own, which received the royal approbation, likewise by Royal Rescript, on 15 December 1560. — These Ordenanzas, more extensive than those already cited of Burgos and Sevilla, contain 75 chapters, of which the first 22 refer to the organization of the Consulado, the following to the 71st inclusive, to maritime insurances (although among them are to be found interpolated some referring to the mode of meeting the necessity for money to buy victuals and outfit, while on a voyage, and for the sharing and distribution of general and common average). Of the 72nd to the 75th, one refers to the prohibition of the admission of writings by advocates, another to the determination of certain rules of procedure, the following one to the value of bills of exchange and other documents of credit, and the last to appeals in commercial cases. These ordinances, which were added to in 1665 and confirmed in 1688, were printed and published in 1691. Both the merchants of Bilbao and those of Sevilla and Burgos, being preoccupied, as we have seen, with the problems of the maritime mercantile law, and above all with those relating to insurances, the remaining subject-matter of the mercantile law may be said to have been a stranger to legal provisions. And as the French inland ordinance of 1673 had already attended to this necessity, and the French influence was allowed to be felt with great power in our country, especially from the time that the descendants of Louis XIV occupied the throne of Spain, the desire to reform the mercantile legislation began in Bilbao from 1725. — In 1731 they obtained the royal approbation of the proposed reforms, but the most exacting were discontented and in 1739 a new and more radical reform was discussed among the merchants of Bilbao, which was sanctioned and promulgated by Royal Rescript of 2 December 1737.

[1]) See the three preceding notes.

[2]) *Desjardins, Indroduction historique à l'étude du Droit Commercial Maritime.* Paris 1890, page 106.

[3*]) These Ordenanzas consist of 29 chapters, divided into numbers or articles; the first eight are dedicated to the organization and governance of the Consulado; the seven following, to merchants and their books, commercial companies, sales (contracts), bills of exchange, orders for goods, drafts and commercial letters of credit and brokers; the sixteenth, to interpreting brokers;

Este paso decisivo, y tan importante, en la historia del derecho mercantil español fué debido al resurgimiento de la vida comercial, producido por la sábia politica de los reyes de la Casa de Borbón. Y asi, como es timbre legítimo de orgullo para Barcelona, el que su libro del Consulado de Mar extendiera su autoridad por todo el Mediterraneo, lo es ciertamente, y muy grande tambien para la industriosa villa de Bilbao, el que sus Ordenanzas locales se extendieran en poco tiempo por toda la Península, y trascendiendo de ella llegaran á ser el Código general de todas nuestras dilatadas colonias americanas sobreviviendo en ellas hasta muchos años despues de proclamada su independencia[1]). Y, aun cuando es indudable que los redactores de estas Ordenanzas hubieron de inspirarse en el ejemplo de Francia, y de sus famosas Ordenanzas de 1673 y 1681, hay que decir, en honor de ellos, que no fueron ni copistas ni traductores, sino que hicieron una obra genuinamente española, expresión fiel de las necesidades jurídicas del comercio, y hasta de los prejuicios de la sociedad española del siglo XVIII.

* * *

Con tales antecedentes es facil suponer que, al traspasar los umbrales del siglo XIX, y habiendose iniciado en Francia el movimiento codificador moderno á principios de siglo, con un sentido de amplitud y generalidad que no podian tener los intentos de los siglos XVII y XVIII, España no habia de quedarse rezagada en la obra de progreso del derecho mercantil. Y esto, con tanto más motivo, cuanto que, apesar de que la invasión napoleónica y la guerra de la Independencia parecian haber creado abismos insondables entre las naciones de una y otra de las vertientes de los Pirineos, los espíritus cultos de nuestra patria tuvieron siempre fija su vista en la nacion francesa, que política, económica é intelectualmente había sabido sobreponerse á la España mundial, que crearon y aniquilaron los mismos Austrias en el escaso periodo de dos siglos. Y esto, sin contar, con que aquel grandioso movimiento de fines del siglo XVIII, que se llama la Revolución francesa, hecho con un sentido tan profundamente humano, y tan superior, por ello, á todos los movimientos políticos de todos los pueblos, había de hacer forzosamente que fuera Francia, en aquella época, faro potentisimo de inextinguible luz, hacia el cual habian de converger las miradas de todos los que amaban la reforma y mejora de las instituciones juridico-sociales.

Por esta consideración, y, aun más por la de que todo nuevo regimen político precisa la reforma de la legislación existente para evitar los rozamientos entre lo antiguo y lo nuevo, las Cortes de Cadiz, el mismo día en que se nombraba la comision redactora de la Constitución política, promulgada más tarde, en 1812, aceptaban el pensamiento de codificar nuestro derecho; y, por la tanto, de redactar un nuevo Código de comercio con caracter general para la nación española. Los azares de la lucha con los ejércitos de Napoleón, y los problemas políticos de palpitante actualidad en que hubieron de interveuir aquellas Cortes, hicieron que, al ocurrir la restauración absolutista en 1814, la tarea de la confección de los Códigos no se hubiera ni siquiera empezado. Por idénticas razones, en el periodo liberal del 1820 al 23, se pensó de igual modo en la codificación, y se llegó de nuevo á la segunda restauración absolutista, sin haber dado un solo paso en este sentido; hasta que el transcurso de los años, aumentando, de una parte, las exigencias de la vida comercial, que á la fuerza se modernizaba, y apagando, de otra, los brios y la terquedad de caracter del testarudo Fernando VII, tan opuesto á todo lo que oliera á transpirinaico (revolucionario ó imperialista), hizo que el ministro de Hacienda, de aquel absolutista y tiránico monarca, Dn. Luis Lopez Ballesteros, acogiera favorablemente la exposición que en 29 de noviembre de 1827 presentaba el ilustre

dores intérpretes; el diez y siete, á las quiebras; y los restantes, hasta el veintitres inclusive, al comercio marítimo (flotamentos, naufragios, averias, seguros, préstamo á la gruesa, capitanes, pilotos, contramaestres y marinos). Los cuatro últimos tienen ya un caracter marcadamente local, pues se refieren al piloto mayor del puerto y ria de Bilbao, á los pilotos lemanes ó de costa, al régimen de la ria, á los carpinteros, calafates, gabarreros y barqueros.

[1]) A esta difusión extraordinaria de unas Ordenanzas que nacieron con caracter local, debío contribuir, y no poco, el hecho de haberse publicado, como leyes del Reino, en la Novisima Recopilación, el capítulo noveno, relativo á los libros de los comerciantes (ley XIV, del título IV del libro X) y el onceno, referente á las compra-ventas mercantiles (ley XVIII del mismo título y libro). En America estuvieron en vigor en todas les repúblicas hispano-americanas, hasta la publicación de sus respectivos Códigos de comercio. El último Estado americano que las abandonó fue Mexico, en donde rigieron hasta que se puso en vigor el Código de 1884.

This decisive step, so important in the history of Spanish mercantile law, was due to the resurrection of the commercial life produced by the wise policy of the kings of the House of Bourbon. And as the extension of the authority of its book, the Consulado del Mar, over all the Mediterranean is a legitimate stamp of pride to Barcelona, it is certainly very much the same for the industrious town of Bilbao, that its local Ordenanzas should be extended within a short time throughout the whole Peninsula, and more than that, should come to be the general Code of all our far-of American colonies, and should survive therein for many years after the declaration of their independence[1]). And though it is undoubted that the draftsmen of these Ordenanzas must have been inspired by the example of France, and her famous Ordinances of 1673 and 1681, it must be said in their honour that they made a work which was genuinely Spanish, and a faithful expression of the juridical necessities of commerce, and even of the prejudices of Spanish society of the XVIIIth century.

* * *

With such antecedents, it is easy to suppose that, on crossing the threshold of the XIXth century, and there having begun in France the modern codifying movement of the commencement of the century, with a feeling of breadth and generalisation which the attemps of the XVIIth and XVIIIth centuries could not possess, Spain could not remain in the rear in the progressive work of the mercantile law. And this with all the greater motive as, in spite of the Napoleonic invasion and the war of the Independence having appeared to create bottomless depths between the two nations on the slopes of the Pyrenees, the enlightened spirits of our fatherland ever had their eyes fixed on the French nation, which politically, economically and intellectually had succeeded in imposing itself on the Spanish world-power, which the Austrias created and over-threw in the short period of two centuries. And this without reckoning that that grandiose movement of the end of the XVIIIth century, called the French revolution, made with a feeling so profoundly human, and from that fact, so superior to all the political movements of all peoples, made the France of that time the most powerful lighthouse of inextinguishable brilliance, towards which the looks of all who loved reform and the improvement of juridico-social institutions necessarly converged.

For this reason, and even more because every new political régime requires the reform of existing legislation in order to avoid friction between the old and new, the Cortes of Cadiz on the day on which the committee was appointed to draw up the political Constitution, which was afterwards promulgated in 1812, welcomed the idea of codifying our law; and with that object, of drawing up a new Code of Commerce of a general nature for the Spanish nation. The hazards of the strife with the armies of Napoleon, and the political problems of palpitating actuality in which those Cortes had to take part, brought it about that on the absolutist restoration of 1814 the task of compiling the Codes was not even begun. For identical reasons, codification was likewise thought of in the liberal period of 1820 to 1823, but the second absolutist restoration arrived without a single step in this direction having been taken; until the passage of years, which increased on the one hand the exigencies of commercial life, of necessity becoming modernised, and extinguished, on the other hand, the vigour and pertinacity of the obstinate Fernando VII, so opposed to everything that smacked of the revolutionary or imperialist country beyond the Pyrennees, caused Don Luis Lopez Ballesteros, the minister of the Exchequer of that absolute and tyrannical monarch, to receive favourably the representation made on the 29th of November 1827 by the illustrious jurist Don Pedro Sainz de Andino, that a

---

the seventeenth, to bankruptcies; and the remainder, to twenty three inclusive, to maritime commerce (affreightments, shipwrecks, average, insurances, bottomry loans, masters, pilots, chief officers and seamen). The four last have a markedly local character, for they refer to the head pilot of the port and rivermouth of Bilbao, to the harbour and coast pilots, to the government of the river mouth, to carpenters, caulkers, lightermen and boatmen.

[1]) To this extraordinary dispersion of certain Ordenanzas which were born with a local character, there must have contributed not a little, the fact of there having been published as laws of the Realm, in the Novisima Recopilación, chapter nine, relating to merchant's books (law XIV, of Title IV, Book X) and the eleventh, referring to mercantile sales (law XVIII of the same Title and Book). — They were in force in America in all the Hispano-American Republics, until the publication of their respective commercial codes. The last Americam state to abandon them was Mexico, where they ruled until the Code of 1884 was put into force.

jurisconsulto, Dn. Pedro Sainz de Andino, para que se promulgara un Código de comercio, cuyo proyecto se comprometía á redactar él mismo.

Aceptado el pensamiento, y el compromiso de Dn. Pedro Sainz de Andino, se nombró una comisión compuesta de magistrados y jurisconsultos, de la que se hizo secretario á aquel; y, terminado el proyecto de la comisión y el que elaboró por su cuenta el Sr. Sainz de Andino, el monarca, teniendo á la vista ambos, y habiendo leido por si mismo el de este último[1]) lo aprobó y promulgó como ley del reino por su Real Decreto de 30 de mayo de 1829, para empezar á regir en 1° de enero de 1830.

Derogaronse, por el mismo Real Decreto, todas las Leyes, Ordenanzas y disposiciones anteriores que se opusieran al nuevo Código; y, de este modo, quedó realizada la unidad legislativa, tan importante en esta rama del derecho; la cual no habia llegado anteriormente á ser completa, apesar de lo que hemos dicho antes de las Ordenanzas de Bilbao, que tropezaron siempre con alguna resistencia en los puertos de la antigua corona de Aragón[2]).

Quedaba todavia por realizar la unidad del procedimiento, por que á ello no había atendido el nuevo Código, y los recientes tribunales de comercio, que sustituian á los antiguos Consulados, seguian las practicas que tradicionalmente se habian ido creando en los mismos. Pero á esta necesidad se acudío muy en breve, publicando, en 24 de julio de 1830, la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, que había de sustituir, á partir de dicho dia, todo el procedimiento antiguo; y en la que se disponía que, en lo no previsto por dicha ley, se atuvieran los tribunales á las leyes comunes sobre procedimientos judiciales[3]).

Tanto esta nueva Ley, como la orgánica, que, con fecha 10 de setiembre de 1831, se publicó, creando la Bolsa oficial de Madrid, y regularizando la contratación de efectos públicos y valores comerciales, fueron obra tambien del insigue jurisconsulto, Sainz de Andino, á quien, con muy buen acuerdo encomendó su redacción el ministro de Hacienda, Sr. Ballesteros[4]). Siendo muy de notar, en honra y gloria del autor de nuestras leyes comerciales, que la obra de un solo hombre resultó muy superior á la de la serie de hombres eminentes que colaboraron en la confección del Código de comercio francés de 1807; y, tambien inmensamente superior, á la que realizó la comisión de magistrados y jurisconsultos que en España prepararon el proyecto de Código de comercio, que fué desechado para publicar el del Sr. Sainz de Andino[5]).

Tan superior resultó el Código español sobre los hasta entonces publicados[6]), que merecío unánimes elogios de la prensa de casi todas las naciones, y, muy es-

[1]) De suponer es que leyera los dos proyectos; pero en la Real Orden de 3 de junio de 1829, que se dirigio á Dn. Pedro Sainz de Andino, se leen estas palabras: «El Rey N. Sr. se ha dignado *leer por si mismo* con el mayor aprecio y agrado el proyecto de Código que V. S. ha remitido en 27 de mayo último».

[2]) Sainz de Andino, en su citada exposición al ministro de Hacienda, lo afirma en estos términos: «por otra parte hay algunas provincias, como son Cataluña y Valencia, en donde se conservan sus leyes y costumbres particulares, á que se atienen sus consulados, con preferencia á las de Bilbao».

[3]) Articulo 462 de la citada Ley.

[4]) Por Real orden de 3 de junio de 1829 se confirio al Sr. Sainz de Andino el encargo de que, á tenor de lo prevenido en el artículo 1219 del Código de commercio, presentase un proyecto de Ley provisional de Enjuiciamiento mercantil para mientras no se promulgare el Código general de Enjuiciamiento. — El propio Dn. *Pedro Sainz de Andino*, en su *Ensayo crítico sobre la contratación de la Bolsa de comercio*, Madrid, 1845, Parte primera (única que se publicó) pag. XIV, lo dice así: «por que habiendo yo formado el proyecto de ley de Bolsa, que fué aprobado, decretado y sancionado por el difunto monarca, el señor Dn. Fernando VII (Q. E. E. G.) á 10 de setiembre de 1831».

[5]) El Código que redactó la comisión era mucho más breve que el frances, pues este tiene 648 artículos y aquel tenia tan solo 462; lo cual era ya un defecto grandisimo, porque Francia, al publicar, en 1807, su Código de comercio tenia como derecho supletorio un Código civil reciento, mientras que el derecho supletorio del proyecto español se encerraba en ese inmenso fárrago de nuestras leyes civiles, que empezaban en el Fuero Juzgo y terminaban en la Novisima Recopilación y Coleccion de Decretos. Pensó la comisión, y no pensó bien, que bastaba formular en el Código los principios generales, y dejar á los Tribunales el cuidado de irlos desenvolviendo; lo cual revelaba ya una impotencia y un aplazamiento, puesto que solo á fuerza de litigios y cuestiones se hubiese llegado á lo que de una vez llegó con su Código, Sainz de Andino. Por eso el proyecto de este era casi tres veces mayor que el de la comisión. Tenia 1219 artículos.

[6]) A la fecha de la publicación del Código español solo se habian promulgado dos Códigos en Italia; en 1819, el Código de las Dos Sicilias, con el titulo de Leggi di eccezione per gli affari

Code of commerce should be promulgated, the bill for which he promised to draw up himself.

On the acceptance of the idea and the promise of Don Pedro Sainz de Andino, a commission was appointed of judges and jurists, of which he became secretary; and on the bill of the commission being finished, and that elaborated on his own account by Sr. Sainz Andino, the monarch, having both before him, and having read the latter himself[1]), approved and promulgated it as the law of the Kingdom by his Royal Decree of 30 May 1829, to come into force on 1 January 1830.

By the same Royal Decree all the preceding Laws, Ordinances and provisions which were inconsistent with the new Code were repealed; and in this way, legislative unity, which is so important in this branch of the law, was realised; previously, this had not been completely attained, in spite of what we have said above of the Ordinances of Bilbao, which always stumbled against some resistance in the ports of the ancient Crown of Aragón[2]).

It still remained to realise the unity of procedure, for the new Code had not attended to this, and the recent Tribunals of Commerce, which took the place of the old Consulados, followed the practices which the latter had been creating for themselves from old times. But this necessity was shortly attended to by the publication on 24 July 1830 of the Law of Procedure in commercial business and causes, which from that day replaced the whole of the old procedure; and in which it was provided that, so far as that law did not apply, the tribunals should abide by the common law of judicial procedure[3]).

Both this new law and the organic law, which was published under the date of 10 September 1831, creating the official Exchange of Madrid, and regulating contracts for public and commercial securities, were also the work of the distinguished jurist, Sainz de Andino, to whom the Minister of the Exchequer readily agreed to entrust its drafting[4]). It is very remarkable and to the honour and glory of the author of our commercial laws, that the work of a single man proved far superior to that of the series of eminent men who collaborated in drawing up the French Commercial Code of 1807; and it was also immensely superior to that achieved by the commission of judges and jurists in Spain who prepared the bill for the Code of Commerce, which was rejected in order to publish that of Sr. Sainz de Andino[5]).

The Spanish Code proved so superior to those previously published[6]), that it deserved the unanimous praise of the Press of almost all nations, and very specially

[1]) It might have been supposed that he would read both bills; but in the Royal Order of of 3 June 1829, which he addressed to Don Pedro Sainz de Andino, are these words: "The King our Lord has thought fit to read for himself with the greatest appreciation and pleasure the bill for the Code which you sent on 27 May last".

[2]) Sainz de Andino, in his cited representation to the Minister of the Exchequer, affirms it in these terms: "on the other hand there are some provinces, like Cataluña and Valencia, where their own particular laws and customs are preserved, to which their Consulados attend in preference to those of Bilbao".

[3]) Article 462 of the said law.

[4]) By Royal order of 3 June 1829 the duty was conferred on Sr. Sainz de Andino of presenting, in accordance with the provisions of article 1219 of the Code of Commerce, a bill for a provisional law of mercantile procedure, until a general Code of procedure should be promulgated. — *Don Pedro de Andino* himself says in his *Ensayo critico sobre la contratación de la Bolsa de comercio*, Madrid, 1845, First Part (the only one published) page 14: "because I had already drawn up the bill for the law of the Exchange, which was approved, decreed and sanctioned by the late Monarch, Don Fernando VII (R.I.P.) on 10 September 1831".

[5]) The Code which was drawn up by the commission was much shorter than the French, the latter having 648 articles and the former 462; which to begin with was a great defect, because France in publishing her Code of commerce in 1807 had a recent Civil Code as a supplementary law, while the supplementary law to the Spanish bill was inclosed in that immense farrago of our civil laws, which began in the Fuero Juzgo and ended in the Novisima Recopilación and Colección de Decretos. The commission thought, but not wisely, that it was sufficient to formulate general principles in the Code, and to leave to the tribunals the task of unravelling them; which revealed both impotence and procrastination, for it was only by dint of ligitation and dispute that it would have reached the point which Sainz de Andino reached with his Code at once. For this reason the bill of the latter was almost three times larger than that of the commission. It had 1219 articles.

[6]) At the date of the publication of the Spanish Code only two Codes had been published in Italy; in 1819 the Code of the Two Sicilies, with the title: *Leggi di eccezione per gli affari del com-*

pecialmente de la francesa; pudiendo señalar entre los que le prodigaron sus alabanzas á los dos eminentes profesores de la Francia, las mas indiscutibles autoridades de su tiempo, Saint-Joseph y Pardessus[1]).

Y, aunque no pueda decirse de la obra de Sainz de Andino que estuviera exenta de defectos, siendo el principal de ellos el no haberse preocupado de las corrientes más puras del derecho comercial de los paises germánicos y anglo sajones[2]), es lo cierto que su Código fué muy superior al frances, que le sirvió de modelo, por que supo recoger la jurisprudencia creada por los tribunales de comercio de Francia, y la doctrina creada por los jurisconsultos de aquel pais para dar vida al Código de Napoleón. A más de esto, tuvo muy en cuenta las necesidadas del comercio español; y supo, como los redactores de las Ordenanzas de Bilbao de 1737, hacer una obra nacional, que encajara perfectamente en el medio social para el que había sido discurrida. La prueba más palmaria de esta afirmación está, en que, así como las Ordenanzas de Bilbao extendieron su autoridad por todas nuestras antiguas colonias de América, de igual modo extendío su autoridad nuestro Código de comercio por las, recien constituidas repúblicas hispano-américanas, apesar de que, en ellas, el nombre español, y todo lo que de España procedia, evocaba recuerdos dolorosos, que solo producian desafección para la madre patria[3]).

Si de las Ordenanzas de Bilbao puede decirse que, siendo un verdadero Código, es, sin embargo, un Código de mercaderes, del de 1829 puede decirse que, apesar de continuar agremiados en aquella época los comerciantes españoles[4]), fué un ver-

del commercio; y en 1821 el Regolamento provisorio di commercio para los Estados Pontificios. En las demas naciones, á excepción de los Paises Bajos, no se habian hecho todavia intentos de codificación del derecho mercantil. En los Paises Bajos, de 1821 á 1826, se habian elaborado una serie de proyectos de leyes comerciales que, con algunas ligeras modificaciones, se codificaron por virtud de la ley de 16 de mayo de 1829. Este Código (nonnato) había de empezar á regir en 1° de febrero de 1831.

[1]) *Saint-Joseph*, en la Introdución de su libro, *Concordance entre les Codes de commerce* étrangers *et le Code de commerce français* dice: que «el Código español llena las lagunas que tiene el frances», y que «no solo fué un progreso respecto á la codificación francesa, sino un beneficio para España y sus colonias». — *Pardessus* en un notable trabajo, escrito á raiz de la publicación de nuestro Código de comercio, y que insertó integro en su *Diccionario de la Legislación Mercantil de España*, Madrid, 1849, pag. 80 y siguientes, Dn. *Pablo Avecilla*, dice entre otras cosas lo que sigue: «En este estado de la legislación comercial moderna ha salido á la luz pública el Código español, y si hubieramos de dar crédito á esas perpetuas declamaciones cou que generalmente se denigra á España y á su gobierno, parece que estabamos en el caso de preguntar si era posible que en España se hiciese nada bueno, ni siquiera tolerable. Pero por más que refunfuñen los que se empeñan en pintar á la España, cual si estuviese sumida en la barbarie y en la ignorancia, no podemos menos de decir con sinceridad que su nuevo Código es mucho más perfecto que todos los que han salido á luz hasta ahora». Y, mas adelante, añade: «el Código de comercio español ha abrazado la totalidad de las materias más usuales en el comercio, y necesitariamos descender á detalles muy minuciosos para demostrar la prudencia con que se hallan resueltas en el las más importantes cuestiones. En efecto, estan tratadas de un modo conforme á la jurisprudencia universal; sin que se noten ni preocupaciones nacionales*) ni costumbres de provincias. No tenemos inconveniente en asegurar que cualquier pais que por su situación pueda dedicarse al comercio de mar y tierra podría adoptar este Código en su totalidad. Es evidente que los Estados que en el día se hallan sin legislación comercial, ó que la tienen incompleta, hallarán en el Código español un modelo perfecto; y luego que esta obra llegue á ser conocida, podrá invocarse ante los tribunales como una excelente autoridad doctrinal». El elogio como se vé no puede ser más completo.

[2]) Esas corrientes de derecho comercial eran muy poco conocidas en los paises latinos, porque el prejuicio religioso cerraba la puerta á todo lo que procedía de aquellos paises. De no haber sido asi, Sainz de Andino pudo haber estudiado los proyectos de leyes comerciales de los Paises Bajos, elaborados por la comisión especial que al efecto se nombró, y aprobados por el Parlamento, los cuales fueron provisionalmente publicados en el Journal Officiel, en los años de 1822 á 1826. V. *Gustave Tripels, Les Codes Néerlandais*, Paris 1886, Pag. VI.

[3]) La difusión de nuestro Código se inicío tan pronto en América que, por Decreto de 4 de diciembre de 1831, sancionado el 8 del mismo, por el Presidente del Congreso de la República del Ecuador se sustituyeron las Ordenanzas de Bilbao, vigentes en aquel Estado, por el Código de comercio español, del que se suprimío el libro V, referente á la jurisdicción comercial.

[4]) Las Cortes de Cadiz, en 8 de junio de 1813, decretaron la libertad industrial, aboliendo de golpe las asociaciones gremiales, en concepto de privilegiadas; pero, por Real orden de 29 de junio de 1815, el agradecido Fernando VII derogó dicha disposición, restableciendo las ordenanzas gremiales, aunque con algunos reparos. Por Real Decreto de 20 de enero de 1834 se,

*) Esta afirmación no es del todo exacta.

of the French; the two eminent professors of France, and the most indisputable authorities of their time, Saint-Joseph and Pardessus, being the most prominent in their praises[1]).

And although it cannot be said that the work of Sainz de Andino is free from faults, the principal of them being his not having informed himself of the purer currents of the commercial law of the Germanic and Anglo-Saxon countries[2]), it is certain that his code was very superior to the French, which he used as his model, for he was wise enough to gather the jurisprudence created by the commercial tribunals of France, and the doctrine created by the jurists of that country, in order to give life to the Code of Napoleon. And besides this, he took into account the necessities of Spanish commerce; and like the compilers of the Ordinances of Bilbao in 1737, was able to make a national work, which perfectly gathered in what was previously discursive in that social medium. The most obvious proof of that assertion is that, as the Ordinances of Bilbao extended their authority over all our ancient colonies of America, in like manner our Code of commerce extended its authority throughout the recently formed Hispano-American republics, in spite of the fact that in them the Spanish name and everything proceeding from Spain evoked painful memories, which produced only disaffection towards the mother-country[3]).

If it may be said of the Ordinances of Bilbao that, although they form a real Code, they are nevertheless a Code for merchants, it may be said of that of 1829 that, in spite of the Spanish merchants of that time continuing to be associated in guilds[4]),

---

mercio; and in 1821 the *Regolamento provisorio di commercio para los Estados Pontificios*. In all other nations, with the exception of the Netherlands, there had been no attempt at codification of the mercantile law. In the Netherlands, from 1821 to 1826, a series of bills of commercial laws had been elaborated which with some slight alterations were codified by the law of 16 May 1829. This stillborn Code was to come into force on 1 February 1831.

[1]) Saint Joseph, in the Introduction to his book, *Concordance entre les Codes de commerce étrangers et le Code de commerce français* says that "the Spanish Code fills the gaps left in the French" and that "not only was it an advance on the French codification, but a benefit to Spain and her colonies". — Pardessus in a notable work, written close on the publication of our Code of Commerce, which Don Pablo Avecilla inserted entire in his *Diccionario de la Legislación Mercantil de España*, Madrid, 1849, page 80 et seq, says, among other things, as follows: "In this state of modern commercial legislation, the Spanish Code issued into the public light, and if we were to give credit to those perpetual complaints with which Spain and its government are generally defamed, it appears that we are to ask if it is possible that anything good or even tolerable should be done in Spain. — But in spite of the snarls of those who undertake to paint Spain as if it were plunged in barbarism and ignorance, we cannot do less than say with sincerity that its new Code is much more perfect than all which have been born up to now". And he adds further on: "the Spanish Code of commerce has embraced the whole of the most usual matters of commerce, and we find it necessary to descend to very minute details in order to show the prudence with which it has solved the most important questions. In fact, they are treated in a way which agrees with universal jurisprudence; without there being remarked either national preoccupations*) or provincial customs. We may assert that every country, which by its position can devote itself to commerce by sea and land, may adopt this Code as a whole. It is clear that the States which at this time are without a commercial legislation, or which have an incomplete one, will find a perfect model in the Spanish Code; and as soon as this work comes to be known, it can be cited to the tribunals as an excellent doctrinal authority". The eulogy, it is evident, cannot be more complete.

[2]) Those currents of commercial laws were very little known in the Latin countries, because religious prejudice closed the gate to everything proceeding therefrom. If this had not been so, Sainz de Andino would have been able to study the bills of the commercial laws of the Netherlands, elaborated by the special commission appointed for that purpose, and passed by the Parliament, which were provisionally published in the *Journal Officiel* in the years 1822 to 1826. See *Gustave Tripels, Les Codes Néerlandais*, Paris 1886, page 6.

[3]) The spread of our Code in America began so quickly that by a Decree of 4 December 1831, sanctioned on the 8th of the same month by the President of the Congress of the Republic of Ecuador, the Ordenanzas of Bilbao, then in force in that State, were replaced by the Spanish Code of commerce, with the exception of Book V, which refers to commercial jurisdiction.

[4]) The Cortes of Cadiz decreed industrial liberty on 8 January 1813, and abolished the guilds at one stroke, so far as they were privileged; but by Royal order of 29 June 1815, the grateful Fernando VII repealed that provision, and re-established the ordenanzas of the guilds, with some alterations. By Royal Decree of 20 January 1834 the privileged jurisdictions of the guilds were

---

*) This affirmation is not altogether correct.

dadero Código de comercio, en el que los intereses de clase quedaron á un lado para atender á los intereses generales del comercio; que erán, y son al propio tiempo, los de la sociedad española. Asi se explica como, habiendose resucitado á raiz de la muerte de Fernando VII, el pensamiento de los legisladores de las Cortes de Cadiz, y de las Cortes liberales del 1820 al 23, de codificar nuestro derecho, aun estando codificado ya el mercantil, y, habíendose ya nombrado, en 1834, la primera de las comisiones, que en el transcurso de los años habian de dedicar sus trabajos á la elaboracion de un nuevo proyecto de Código, que remplazara al entonces vigente, se tardara en esta labor la friolera de cincuenta y un años hasta ser publicado, en 1885, el que aetualmente rige, y está en vigor desde 1° de enero de 1886[1]).

Por de contado que, durante esos cincuenta y un años, la mayor parte de las comisiones nombradas no hicieron labor frúctifera, á excepción tan solo de la de 1839, que llegó á presentar un proyecto de ley provisional, que no cuajó, y de la de 1869, que, al cabo de cinco años de trabajo asiduo, confeccionó un proyecto de Código de comercio, que, publicado por iniciativa de las Cortes en 1880, se remitío para su informe, por virtud de la Ley de 7 de mayo del mismo año, á las Andiencias, Colegios de Abogados, Academias de Derecho, Universidades, Juntas provinciales de Agricultura, Industria y Comercio y demás Corporaeiones competentes. Revisado de nuevo, en vista de los informes emitidos, se presentó como proyeeto de ley á las Cortes, por virtud del Real Dicreto de 18 de marzo de 1882; cuyo proyecto, aprobado con ligeras modificaciones en general muy aeeptables, y en parte empeorado[2]) por obra de los Cuerpos Colegisladores, es el que actualmente rige, con las modificaciones en él introducidas por las leyes posteriores que ha habido necesidad de dictar.

El Código de 1829, en cuanto á su extructura, siguiendo en esto á su modelo el francés de 1807, se separó de su predecesor, las Ordenanzas de Bilbao, intercalando, entre el estudio de los eontratos del eomercio terrestre y de los quiebras, los contratos del comercio marítimo, y llevando al último libro, el quinto, lo que en aquellas estaba al principio, lo relativo á la organización de los tribunales de comercio, y algunos escasos preceptos referentes al procedimiento judicial en los negocios de comercio[3]). Del Código francés se diferencia en haber dividido el libro primero de este, que lleva el epígrafe «Del comercio en general» en dos; el primero, con el título «De los comerciantes y agentes del comercio», y, el segundo, con el «De los contratos del comereio en general, sus formas y efectos», obligado á ello por la mayor extensión dada á la materia contractual; pues, en tanto que el francés solo trata

suprimieron los fueros privilegiados de las asociaciones gremiales, á excepción del fuero de comercio aplicable á las obligaciones mercantiles; y, si bien se concendío una gran libertad, quedaron subsistentes las asociaciones gremiales, hasta que por la Ley, 2—6 de diciembre de 1836, se restablecio en toda su integridad el Decreto de las Cortes de Cadiz, y quedaron abolidos los gremios en concepto de corporaciones legales.

[1]) La exposición de motivos, que precede al proyecto de Código de Comercio, publicado por virtud del Real Decreto de 18 de marzo de 1882, contiene la historia completa de las vicisitudes de la reforma, á partir de 1834. Puede verse esta exposición en el Proyecto de Código de Comercio, publicado en edición especial por el Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid 1882.

[2]) Obra de los Cuerpos Colegisladores fué la tan desastrosa enmienda del artículo 870, por virtud de la que la suspension de pagos pudo servir para amparo de toda suerte de comerciantes criminales; pues mediante ella consiguieron la declaración de suspensión de pagos los que de otro modo hubieran sido declarados quebrados culpables ó frandulentos.

[3]) La distribución en libros y en títulos del Código es la siguiente: Libro Primero. De los comerciantes y agentes del comercio. Título I. De la aptitud legal para ejercer el comercio y calificación legal de los comerciantes. Tit. II . De las obligaciónes comunes á todos los que profesan el comercio. Tit. III. De los oficios auxiliares del comerciante y sus obligaciones respectivas. Libro Segundo. De los contratos del comercio en general y sus formas y efectos. Tit. I. Disposiciones preliminares sobre la formación de las obligaciones de comercio. Tit. II. De las compañias mercantiles. Tit. III. De las compras y ventas mercantiles. Tit. IV. De las permutas. Tit. V. De los préstamos y de los réditos de las cosas prestadas. Tit. VI. De los depósitos mercantiles. Tit. VII. De los afianzamientos mercantiles. Tit. VIII. De los seguros de conducciones terrestres. Tit. IX. Del contrato y letras de cambio. Tit. X. De las libranzas y de los vales ó pagarés á la orden. Tit. XI. De las cartas órdenes de crédito. Tit. XII. Disposiciones generales sobre la prescripción de los contratos mercantiles. — Libro Tercero. Del comercio marítimo. Tit. I. De las naves. Tit. II. De las personas que intervienen en el comercio marítimo. Tit. III. De los contratos especiales del comercio marítimo. Tit. IV. De los riesgos y daños del comercio marítimo. Tit. V. De la prescripción en las obligaciones peculiares del comercio marítimo. — Libro Cuarto. De las quiebras. Tit. I. Del estado de

it was a true Code of Commerce, in which class interests were put on one side to attend to the general interests of commerce; which were, and are at the present time, those of the Spanish community. It is thus explained how, although the idea of codifying our law, entertained by the legislators of the Cortes of Cadiz and of the liberal Cortes of 1820 to 1823, has risen again, close upon the death of Fernando VII, the mercantile laws being already codified, and how although there was appointed in 1834 the first of the commissions, which in the lapse of years had to devote their labours to the elaboration of a new bill which should replace the Code in force at that time, the trifle of fifty one years' delay should take place in this labour, before the present Code which has been in force from 1 January 1886, was published in 1885[1]).

Of course the greater part of the commissions appointed during those fifty one years produced no fruitful labour, with the exception only of that of 1839, which managed to present a bill for a provisional law which failed, and of that of 1869, which at the end of five years of assiduous labour, composed a bill for a Code of Commerce, which was published at the instance of the Cortes in 1880, and under the Law of 7 May of the same year, was sent for their report to the Courts of Appeal, Colleges of Advocates, Academies of Law, Universities, Provincial Committees of Agriculture, Industry and Commerce and other competent Corporations. After being revised anew, in view of these reports, it was presented to the Cortes as a bill, by virtue of the Royal Decree of 18 March 1882; and this bill, which was passed with slight and generally acceptable alterations, though partly damaged[2]) by the work of both Houses of Parliament, is that which is at present in force, with the alterations introduced therein by later laws which it has been necessary to pass.

The Code of 1829 followed in its structure the French model of 1807, and departed from its predecessor, the Ordinances of Bilbao, by inserting the contracts of maritime commerce between the study of contracts of land commerce and bankruptcies, and by carrying to the fifth and last book what in the former had been the beginning, namely, that relating to the organization of the commercial tribunals, and some scanty precepts referring to judicial procedure in commercial matters[3]). It differs from the French Code in having divided its first book, which has the heading "Of commerce in general" into two, the first with the title "Merchants and commercial agents", and the second, "Of commercial contracts in general, their forms and effects", because of the greater space given to the subject of contracts; for, while the French only deals with contracts of partnership, agency and exchange, the

---

suppressed, with the exception of the commercial jurisdiction which applied to mercantile obligations; and although great liberty was granted, the guilds subsisted until by the Law, 2—6 December 1836, the Decree of the Cortes of Cadiz was restored in its entirety, and the guilds as legal corporations were abolished.

[1]) The preamble, which precedes the bill for the Code of Commerce, published by virtue of the Royal Decree of 18 March 1882, contains the complete history of the vicissitudes of the reform from 1834. This preamble may be seen in the bill of the Code of Commerce, published in a special edition by the Minister of Grace and Justice, Madrid 1882.

[2]) The very disastrous amendment of article 870 was the work of both the Houses of Parliament, by virtue of which suspension of payment may serve to support every kind of criminal trader; for by means thereof those who would have been declared culpable or fraudulent bankrupts succeeded in obtaining the declaration of suspension of payment.

[3]) The arrangement of the Code in Books and Titles is as follows: First Book. Merchants and commercial agents. Title I. Legal capacity to practise commerce and the legal qualification of merchants. Tit. II. Obligations common to all who carry on commerce. Tit. III. Functions in aid of the merchant and their respective obligations. — Second Book. Commercial contracts in general, their forms and effects. Tit. I. Preliminary provisions on the formation of commercial obligations. Tit. II. Mercantile companies. Tit. III. Mercantile sales. Tit. IV. Barter. Tit. V. Loans and the reward for things lent. Tit. VI. Mercantile deposit. Tit. VII. Mercantile guarantees. Tit. VIII. Insurance of carriage by land. Tit. IX. Contract and bills of exchange. Tit. X. Drafts, orders for goods and promissory notes to order. Tit. XI. Letters of credit. Tit. XII. General provisions on prescription of mercantile contracts. — Third Book. Maritime commerce. Tit. I. Vessels. Tit. II. Persons who take part in maritime commerce. Tit. III. Special contracts of mercantile commerce. Tit. IV. Risks and dangers of maritime commerce. Tit. V. Prescription in obligations peculiar to maritime commerce. — Fourth Book. Bankruptcies. Tit. I. The state of bankruptcy and its different kinds. Tit. II. Declaration of bankruptcy. Tit. III. Effects and retrospective action of the declaration of bankruptcy. Tit. IV. Provisions following on the declaration of bankruptcy. Tit. V. Appointment and functions of assignees. Tit. VI. Administration

de los contratos de sociedad, comision y cambio, el español trataba, á más de estos[1]) (tambien más extensamente estudiados) de las compras y ventas, de las permutas, de los préstamos, de los depósitos, de los afianzamientos, de los seguros de conducciones terrestres, de las libranzas y de las cartas órdenes de crédito.

No planteó nuestro derecho, ni en las escasas leyes que dedica la Novisima Recopilación á las letras de cambio, ni en los muchos y minuciosos preceptos que respecto á ellas contienen las Ordenanzas de Bilbao, el problema que, tan radicalmente y con tanto acierto, resolvía la Ordenanza francesa del comercio terrestre de 1673, al declarar, en el artículo 2 del título XII, referente á la jurisdicción consular, que esta jurisdicción era la llamada á entender entre toda clase de personas, siempre que se tratara de letras de cambio ó de remesas de dinero de plaza á plaza; y cuando el Sr. Sainz de Andino hubo de encontrarse en su Código frente á frente de esta cuestión, inspirandose en una estrechez de miras, muy propia de nuestras tradiciones jurídicas en materia de derecho civil[2]), se separó de su modelo el Código francés, resolviendo la aplicación de las leyes y de la jurisdicción mercantil si las letras se habian girado entre comerciantes ó por causa de operaciones comerciales, y la de las leyes y la jurisdicción ordinaria si se trataba de deslindar los derechos y obligaciones provenientes de las letras que pudiesen afectar á los no comerciantes que intervinieren en las mismas. Por este, y otros defectos análogos (no muchos afortunadamente) podrá censurarse á nuestro Código de 1829; y por ellos, y por las deficiencias naturales que el desarrollo consiguiente del comercio iba encontrando en aquella obra, es de alabar que ya no rija; pero bueno es hacer constar, á guisa de epitafio, que, como conjunto, es un verdadero modelo, que no debieran echar nunca en olvido nuestros legisladores; y que, con relación á la época en que uno y otro se promulgaron, y, sobre todo, teniendo en cuenta el estado de la ciencia juridico española en 1829 y en 1885, es, indudablemente, el Código derogado muy superior al vigente en la actualidad[3]).

Apesar de lo completo que era este Código (quizá el más completo de cuantos se han publicado), y, apesar de que los propósitos de su sustitución por otro más perfecto, se tradujeron, como ya hemos dicho, en el nombramiento de la primera comisión de 1834, como la tarea fué harto dificil, puesto que si consiguío realizarse, esto se hizo al cabo de cincuenta y un años de haberse nombrado tal comisión reformadora, hubo necesidad de acudir, desde el primer momento, á llenar los vacios y deficiencias advertidas en la legislación mercantil, dictando nuevas

quiebra y de sus diferentes especies. Tit. II. De la declaración de quiebra. Tit. III. De los efectos y retroacción de la declaración de quiebra. Tit. IV. De las disposiciónes consiguientes á la declaración de quiebra. Tit. V. Del nombramiento de sindicos y sus funciones. Tit. VI. De la administración de la quiebra. Tit. VII. Del examen y reconocimiento de los créditos contra la quiebra. Tit. VIII. De la graduación y pago de los acreedores. Tit. IX. De la calificación de la quiebra. Tit. X. Del convenio, entre los acreedores y el quebrado. Tit. XI. De la rehabilitación. Tit. XII. De la cesión de bienes. — Libro Quinto. De la administración de justicia en los negocios de comercio. Til. I. De los tribunales y jueces que han de conocer en las causas de comercio. Tit. II. De la organización de los tribunales de comercio. Tit. III. De la competencia de los tribunales de comercio. Tit. IV. De los procedimientos judiciales en las causas de comercio.

[1]) Por no hacer más extensa la nota anterior no he incluido en ella los epígrafes de las secciones en que aparecen subdivididos muchos de los títulos del Código. Y, para que no resulte contradicción entre dicha nota y el texto, he de advertir que Sainz de Andino incluyó indebidamente entre los auxiliares del comerciante á los comisionistas, de los que se ocupa en la seccion segunda del titulo III, del libro primero, en cuya sección estudia todo lo referente al contrato de comisión.

[2]) Pesó sobre nuestros civilistas la tradición romana y la canónica, y era muy dificil sustraerse á ellas en España en la primera mitad del siglo XIX. Por eso Sainz de Andino optó en este punto por la solución menos conforme á lo que el derecho mercantil requeria.

[3]) Nuestros legisladores de 1885 se olvidaron de dos contratos importantisimos que conviene llevar á los Códigos de comercio, como ya han hecho algunos paises: el de edición y el de cuenta-corriente. En el derecho cambiario abandonaron en parte la tradición romanista y canónica, pero no tuvieron valor para imitar por completo la legislación alemana de 1847. En materia de sociedades mercantiles se quedaron tambien rezagados, no comprendiendo el verdadero caracter de las sociedades comanditarias por acciones, y, no regulando las sociedades de responsabilidad limitada del derecho inglés y alemán. Y, en materia de suspensiones de pagos, se olvidaron por completo, de lo que Holanda y Bélgica han hecho, en su Código, la primera, y en sus leyes comerciales, la segunda, discurriendo un engendro que fué un verdadero padrón de ignominia para el Código.

Spanish, besides dealing with them more extensively[1]), treated also of sale, barter, loan, deposit, guarantee, insurance of land carriage, merchants' bills and letters of credit.

Neither in the scanty laws which the Novisima Recopilación devotes to bills of exchange, nor in the many and minute precepts thereon which are contained in the Ordinances of Bilbao, did our law attempt the problem which the French Ordinance of land commerce of 1673 solved so radically and with such success, when, in article 2 of Title XII, referring to the consular jurisdiction, it declared that this jurisdiction was intended to apply between all classes of persons, whenever there was a question of bills of exchange or remittances of money from place to place; and when Sr. Sainz de Andino had to face this question in his Code, being inspired by a narrowness of view, very natural to our juridical traditions in matters of civil law[2]), he departed from his model, the French Code, deciding for the application of the mercantile laws and jurisdiction, if the bills were drawn between merchants, or by reason of commercial transactions, and of the ordinary laws and jurisdiction, in dealing with the delimitation of the rights and obligations arising from bills which might affect non-merchants who are parties to them. For this and other defects (fortunately not many) our Code of 1829 may be censured; and for those and the natural deficiencies which the consequent development of commerce continued to find in that work, it is a matter for congratulation that it is no longer in force; but it is well to make it clear, by way of an epitaph, that taken as a whole it is a real model, which our legislators should never leave in oblivion; and that considering the time at which both were promulgated, and above all, the state of Spanish juridical knowledge in 1829 and in 1885, the repealed Code is far superior to that now in force[3]).

In spite of the completeness of this Code (perhaps the most complete of all that have been published), and in spite of the proposals for the substitution of another more perfect Code, made, as we have already said, on the appointment of the first commission of 1834, as the task was extremely difficult, and it therefore was not brought to a conclusion until the end of fifty one years from the appointment of that reforming commission, it was necessary from the first moment in order to supply the omissions and deficiencies noticed in the mercantile legislation, to resort to the

of the bankruptcy. Tit. VII. Examination and proof of debts against the bankruptcy. Tit. VIII. Classification and payment of creditors. Tit. IX. The kind of bankruptcy. Tit. X. Arrangement between creditors and bankrupt. Tit. XI. Discharge. Tit. XII. Cessio bonorum. — Fifth Book. Administration of Justice in commercial business. Tit. I. Tribunals and judges to try commercial cases. Tit. II. Organization of the Tribunals of Commerce. Tit. III. Jurisdiction of the Tribunals of commerce. Tit. IV. Judicial procedure in commercial cases.

[1]) In order not to make the previous note more extensive, I did not include therein the headings of the sections into which many of the titles of the Code are divided. And, in order that there may be no contradiction between that note and the text, I must notice that Sainz de Andino improperly included factors among the auxiliaries of the merchant, with whom the second section of Title III of the first book is engaged, in which section everything referring to the contract of agency is considered.

[2]) Roman and Canonical tradition weighed heavily upon our writers on Civil Law, and in the first half of the XIXth century it was very difficult to get away from them. For this reason Sainz de Andino on this point chose a solution little in agreement with the requirements of mercantile law.

[3]) Our legislators of 1885 forgot two very important matters which Commercial Codes should contain, as has already been done in some countries, namely, copyright and current account. In the law of exchange, the Roman and Canonical tradition was partly abandoned, but they had not the boldness to imitate the German legislation of 1847 in its completeness. They were backward also in the matter of mercantile partnerships, not understanding the true character of partnerships limited by shares, and not regulating companies with limited liability according to the English and German law. And in the matter of suspension of payment, they completely forgot what Holland and Belgium had done in their Codes: the first, in her Code and commercial laws, the second, inventing an abortion which was a perfect brand of infamy on the Code.

disposiciónes legales, complementarias, unas, y modificativas, otras, de los preceptos del Código.

La primera, y más necesaria, de que ya hemos hablado, fué la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio de 24 de julio de 1830; porque aun cuando, no muy apropiadamiente, incluyó el Sr. Sainz de Andino en su Código de comercio, un número bastante considerable de preceptos de caracter procesal relativos á las quiebras, y algunos, no muchos, referentes al procedimiento judicial en las causas de comercio, fué preciso colmar las lagunas y deficiencias que dejaban unos y otros por medio de la citada Ley; que estuvo vigente hasta la publicación del Decreto-Ley de 6 de diciembre de 1868, en cuyo artículo 12, y como consecuencia de la supresion de los tribunales de comercio, se declaró derogada dicha Ley, si bien en el 13 se exceptuaron de esta derogación el título V, referente al procedimiento de quiebras, y el VIII, referente al procedimiento de apremio; los cuales, desde aquella fecha, quedaron adicionados á la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855, hasta que en la reforma de esta, en 1881, (que es la Ley de Enjuiciamiento vigente) se refundieron é incorporaron á ella[1]).

La segunda de las cosas á que hubo de acudirse, y á que acudió el propio autor del Código, como ya hemos dicho[2]), preparando el proyecto que habia de convertirse en Ley, fué la contratación en Bolsa de los efectos públicos y valores comerciales cotizables; á cuyo fin se creó, en 10 de setiembre de 1831, la Bolsa oficial de Madrid, dictandose, al propio tiempo, la ley orgánica de esta institución, y las reglas necesarias para la negociación de unos y otros efectos. Y como, á los indudables beneficios que hubo de reportar al crédito público la regularización de la compra y venta de los títulos del Estado, hubieron de acompañar los abusos á que se prestan estas operaciones[3]), cediendo los legisladores á los apremios de la opinión pública, que pedía un remedio radical, para cortar aquellos, dictaronse desde 1841 á 1848 una serie de disposiciones contradictorias que, tras de no remediar nada[4]), pusieron de relieve la carencia de un criterio seguro en tan delicada materia; hasta que, en 8 de febrero de 1854, se dictó la Ley provisional para el régimen de la Bolsa de Madrid, y en 11 de marzo del mismo año el Reglamento para su ejecución.

Los principios fundamentales, tanto de esta Ley como de su Reglamento, quedaron derogados, asi como los artículos correspondientas del Código de comercio, por virtud de los Decretos de 30 de noviembre de 1868 y 12 de enero de 1869 (inspirados en el espíritu liberal de la Revolución de 1868) que declararon libre la profesion de corredor y agente de cambio y Bolsa, y libre, igualmente, la creación de Bolsas de comercio, Casas de Contratación, Pósitos, Lonjas, Alhóndigas y demas establecimientos en que se reunen los comerciantes y sus agentes para cualquier negociación mercantil. Pero no puede decirse que esta derogación fuera total, por cuanto se dispuso en el artículo 5° del último de estos Decretos que, interin se dictase una ley sobre contratación pública (y no llegó á publicarse mientras rigió, el Código de 1829) continuasen subsistentes las disposiciones porque se regían la Bolsa de Madrid, Casas de Contratación etc. Restableciose de nuevo, y por completo, la legislación de Bolsas de 1852, por Decreto de 10 de julio de 1874, sin otra modificación que la de no reducir el número de corredores y agentes, alli donde, por efecto de la libertad concedida anteriormente, excedieren del número taxativamente marcado en la Ley; y hasta la publicación del nuevo Código no hubo ya más alteraciones en esta materia que las introducidas por el Real Decreto de 12 de marzo de 1875, relativo á las operaciones á plazos sobre efectos públicos, y los de 6 de abril y 31 de julio del mismo año que aprobaron los Reglamentos interiores de los Colegios de Agentes y Corredores de Madrid.

Por mucha que fuera la previsión del redactor del Código de comercio, no existiendo, como no existian entonces otras sociedadas por acciones que las escasas

[1]) El procedimiento de quiebras, en el título XIII del libro II, y el de apremio en negocios de comercio, en el XVI del mismo libro.

[2]) Vease p. 17 la nota 4.

[3]) Estos abusos, cuando no exceden de ciertos límites, son naturales ó inevitables, y, aun pudiera decirse, tolerables; pero cuando exceden de ellos, y exceden con frecuencia, entonces no son imputables á los bolsistas, sino á los malos gobiernos y á la politica desacertada de los mismos.

[4]) No remediaron por lo dicho en la nota anterior.

passing of new legal provisions, some supplementing, and others altering the precepts of the Code.

The first and most necessary (of which we have already spoken) was the Law of Procedure in commercial business and cases, of 24 July 1830; because even though Sr. Sainz de Andino included in his Code of Commerce, not very appropriately, a somewhat considerable number of precepts of a procedure character, referring to bankruptcies, and some, but not many, referring to judicial procedure in commercial cases, it was necessary to supply the omissions and deficiencies of both by means of the said law; which was in force until the publication of the Decree-Law of 6 December 1868, by article 12 whereof, in consequence of the suppression of the commercial tribunals, the said law was declared to be repealed, although by article 13, Title V, referring to bankruptcy procedure, and Title VIII, referring to execution, were excepted from this repeal; and these were added from that date to the Law of Civil Procedure of 1855, until in the reform of the latter in 1881 (which is the Law of Civil Procedure now in force) they were recast and incorporated therein[1]).

The second of the things to which it was necessary to attend, and to which the author of the Code himself attended, as we have already said[2]), by preparing the bill which was to be turned into a law, was contracting on the exchange in public and commercial securities there quoted; at the end of which the official Exchange of Madrid was created on 10 September 1831, and at the same time the organic law of this institution and the necessary regulations for dealing in both securities were passed at the same time. And as the abuses to which these transactions lend themselves must have accompanied the undoubted benefits which the regulating of the sales of the State securities must have brought to the public credit[3]), the legislators, yielding to the pressure of public opinion, which asked for a radical remedy to end them, passed a series of contradictory provisions from 1841 to 1848 which, besides remedying nothing[4]), exposed the want of a safe criterion in so delicate a matter; until on 8 February 1854 the provisional Law for the government of the Exchange of Madrid was passed, and on 11 March of the same year the Regulation for carrying it into effect.

The fundamental principles, both of this Law and of the Regulation, and the corresponding articles of the Code of Commerce, were repealed by the Decrees of 30 November 1868 and 12 January 1869 (inspired by the liberal spirit of the revolution of 1868) which declared the profession of broker and agent of money exchanges and on the Exchange to be free, and free likewise the creation of Commercial Exchanges, Casas de Contratación, Granaries, Marts, bonded Warehouses and other establishments where merchants and their agents meet for any mercantile business. But it cannot be said that there was a total repeal, for by article 5 of the last of these decrees it was provided that, until a law on public contracting should be passed (and none was passed while the Code of 1829 was in force) the provisions by which the Exchange of Madrid, Casas de Contratación etc., were governed should continue subsisting. By decree of 10 July 1874, the legislation of the Exchanges of 1852 was again completely re-established, with no other alteration than that of not reducing the number of brokers and agents, which then, by the effect of the liberty previously granted, exceeded the number limited by the Law; and until the publication of the new Code there were no more alterations in this matter than those introduced by the Royal Decree of 12 March 1875, relating to credit transactions in public securities, and those of 6 April and 31 July of the same year, which approved the internal regulations of the Colleges of Agents and Brokers of Madrid.

However great the foresight of the compiler of the Code of Commerce, as there did not then exist any other companies with share capital than the few which owed

[1]) The bankruptcy procedure in Title XIII of book II, and that of execution in commercial business, in the XVIth of the same book.

[2]) See page 17, note 4.

[3]) These abuses, when they do not exceed certain limits, are natural and inevitable, and, it may even be said, tolerable; but when they exceed them, and exceed with frequency, then it is impossible not to impute both bad government and unconsidered policy to the members.

[4]) No remedy has been found for what is said in the preceding note.

que debian su vida al privilegio[1]), éra natural que las disposiciones del Código en esta materia resultaran deficientes al sentirse los primeros síntomas del desarrollo industrial y mercantil de nuestra patria, iniciado vigorosamente á mediados del siglo XIX, apenas apagados los ecos de la sangrienta guerra civil carlista de los comienzos del reinado de Isabel II. La consideración que antecede, unida al deseo de corregir los abusos, casi inevitables, en toda nueva institución que, por la ineducación consiguiente del medio social se producen, y para los que hubo de resultar ineficaz la aprobación previa de los estatutos y reglamentos de las sociedados anónimas, dada por los tribunales de comercio, á tenor de lo prevenido en el Código, dieron por resultado la legislación suspicaz y recelosa de que fué modelo acabado la ley de 28 de enero de 1848, el Reglamento de 17 de febrero del mismo año, sobre sociedades por acciones, y la real orden y Reglamento de 12 de diciembre de 1857, sobre inspección de estas por los Gobernadores y Delegados especiales del Gobierno. En idéntico espíritu se inspiraron la Ley de 28 de enero de 1856, sobre sociedades anónimas de crédito, y el Reglamento para la inspección de las mismas, de 30 de julio de 1865. El movimiento revolucionario de 1868, incompatible en absoluto con tales disposiciones, las derogó radicalmente por Decreto de 28 de octubre del mismo año, restableciendo en todo su vigor los preceptos del Código de comercio, hasta que el Gobierno presentase á las Cortes un proyecto de Ley sobre asociación industrial y mercantil. Y, como el tal proyecto no se llegó á redactar, el Decreto del 68 rigió hasta la publicación del nuevo Código.

Nuestro Banco privilegiado de emisión, el Banco Nacional de España, es heredero directo del Banco de San Carlos, creado por Real Cédula de 2 de junio de 1782, inserta en la Novisima Recopilación (ley 6ª, título III, libro IX), al cual dio vida y muerte el Estado, pues él le concedio el privilegio que le habia de permitir desarrollarse con holgura, y él le puso, por exigencias y apremios del Tesoro, en la necesidad de liquidarse. Lo que de esta liquidación pudo salvarse sirvió de base para la creación, en 9 de julio de 1829, del Banco Español de San Fernando, el cual convivío desde 25 de enero de 1844 (fecha del Real Decreto de su creación) con el Banco de Isabell II, hasta el 25 de febrero de 1847, en que, por Real Decreto de dicho día, se refundío con el de San Fernando. Reorganizado por la Ley de 4 de mayo de 1847, que le concedío el privilegio de la emisión de billetes, en 28 de enero de 1856, por Ley de esta fecha, cambió su denominación por la de Banco de España; recibiendo la confirmación de su privilegio por un plazo de 25 años, y declarando compatible con su existencia las de los Bancos, tambien de emisión, de Barcelona y Cadiz, recientemente creados, y permitiendo que en las demás capitales de provincia, ó póblaciones importantes del reino en que se creyese necesario, se pudiese crear uno nuevo, ó una sucursal del de España, con facultad para emitir billetes en igualdad de condiciones de los que ya funcionaban

Esta libertad relativa se sustituyó con otra más amplia, decretada por la Ley de 11—19 de octubre de 1869, que respetó, sin embargo, los Bancos ya existentes; la cual desapareció por completo al publicarse el Decreto-Ley de 19 de marzo de 1874, que cambió la denominación de Banco de España por la de Banco Nacional de España, y concedió á este el privilegio exclusivo de la emisión de billetes; cuyo privilegio ha sido reconocido por el actual Código de comercio[2]).

Nuestras instituciones de crédito territorial no tuvieron realidad, ni antes ni despues del Decreto de 5 de enero de 1869 que las reconocío vida legal, hasta que la Ley de 2 de diciembre de 1872 dío nacimiento, con ayuda del Banco Hipotecario de Paris y del de los Paises Bajos, al Banco Hipotecario Español; Banco privilegiado y único, cuya concesión se hizo por 99 años, y cuyos Estatutos se aprobaron por Real Decreto de 31 de enero de 1873, y se reformaron en 12 de octubre de 1875. El privilegio exclusivo que el Banco disfruta, y que ha sido reconocido por el Código de comercio vigente[3]) no lo tuvo desde su origen, sino que fué obra del Real Decreto de 24 de julio de 1875.

[1]) Tan escasos que, segun mis noticias, no existía entonces en España más sociedad anónima que el Banco Español de San Fernando, recientemente creado, aprovechando los restos del naufragio del Banco de San Carlos, pues las compañias privilegiadas de comercio interior y exterior creadas en el siglo XVIII habian desaparecido todas. Para el conocimiento de lo que fueran estas compañias privilegiadas puede consultarse el libro *de Colmeiro, Historia de la Economia Política en España*, Madrid, 1863, tomo 11, capítulo LXXX.

[2]) Artículo 179. — [3]) Artículo 201.

their existence to a special franchise[1]), it was natural that the provisions of the Code in this matter should prove deficient upon the first symptoms of the industrial and mercantile development of our country being felt, a development which was vigourously initiated in the middle of the XIXth century, when the echoes of the bloody Carlist war at the beginning of the reign of Isabel II had scarcely ceased. The foregoing consideration, united to the desire to correct abuses, almost inevitable in every new institution, and which are produced by the consequent want of education of the social medium, and with regard to which an ineffective result was bound to follow the previous approbation of their constitution and by laws of the limited companies (afforded by the Commercial Tribunals, in accordance with the provision of the Code), produced suspicious and distrustful legislation, the finished model of which was the law of 28 January 1848, the Regulation of 17 February of the same year, on partnerships with share capital, and the Royal Order and Regulation of 12 December 1857, on inspection thereof by special Governors and Delegates of the Government. An identical spirit inspired the law of 28 January 1856, on limited credit companies, and the Regulation for their inspection of 30 July 1865. The revolutionary movement of 1868, which was absolutely incompatible with such provisions, radically abolished them by Decree of 28 October of the same year, which re-established the precepts of the Commercial Code in all their vigour, until the Government should present to the Cortes a bill on industrial and mercantile associations. And as such bill was never drawn up, the Decree of 1868 ruled until the publication of the new Code.

Our privileged Bank of issue, the Banco Nacional de España, is direct heir of the Banco de San Carlos, created by Royal Rescript of 2 June 1782, inserted in the Novisima Recopilación (law 6, title III, book IX), to which the State gave both life and death, as it granted privilege which would have allowed it to develope at leisure, and by the demands and pressure of the Treasury, forced it to liquidate. What could be saved from this liqidation formed the basis of the creation on 9 July 1829, of the Banco Español de San Fernando, which existed by the side of the Banco de Isabel II from 25 January 1844 (the date of the Royal Decree which created it), until 25 February 1847, when by Royal Decree of that day it was amalgamated with that of San Fernando. Having been reorganized by the Law of 4 May 1847, which granted it the privilege of issuing banknotes, it changed its name for that of the Banco de España on 28 January 1856 by a law of that date; and received a confirmation of its privilege for a term of 25 years, and it was declared that the Bancos de Barcelona and Cadiz, both recently created issuing banks, were compatible with its existence, and leave was granted to found a new bank or a branch of the Banco de España in the other Provincial capitals, or important populous places in the Kingdom where it should be thought necessary, with power to issue banknotes on the same conditions as the banks already so doing.

This relative liberty was replaced by one more ample, decreed by the Law of 11—19 October 1869, which nevertheless respected the already existing banks; but this completely disappeared on the publication of the Decree-Law of 19 March 1874, which changed the name of the Banco de España to that of the Banco Nacional de España, and granted it the exclusive privilege of the issue of banknotes; which privilege has been recognised by the existing Code of Commerce[2]).

Our institutions of territorial credit had no substance, either before or after the Decree of 5 January 1869, which recognised their legal existence, until the law of 2 December 1872 gave birth to the Banco Hipotecario Español, with the help of the Banque Hypothécaire de Paris and that of the Netherlands as the only privileged bank, with a concession for 99 years, and with a constitution approved by Royal Decree of 31 January 1873, and reformed on 12 October 1875. The exclusive privilege which the bank enjoys, and which was recognised by the Commercial Code in force[3]) was not possessed originally, but was the work of the Royal Decree of 24 July 1875.

---

[1]) So few, that according to my knowledge, there was then no other existing limited company in Spain than the Banco de San Fernando, recently created on the wreckage of the Banco de San Carlos, as the privileged companies for internal and external commerce, created in the XVIIIth century had all disappeared. Refer to the book of *Colmeiro*, *Historia de la Economica Política en España*, Madrid, 1863, vol. II, chapter LXXX, for information as to what these privileged companies were.

[2]) Article 179. — [3]) Article 201.

Si el transporte terrestre en su forma ordinaria, en la época de la confección del Código del Sr. Sainz de Andino no tuvo cabida en él más que de soslayo, al tratar del seguro de conducciones terrestras (título VIII del libro 2°), claro es que los transportes por ferrocarril tuvieron que regirse por leyes posteriores; y, aun cuando la primera ley que en España se dictó relativa á estos importantisimos medios de comunicación, lleva la fecha de 20 de febrero de 1850, nada se proveyó en ella respecto al transporte ferroviario, ni tampoco á la constitución de las compañias necesarias para la construcción y explotación de las vias ferreas, ya que el Estado abandonó, desde un principio, al interés privado esta industria de la locomoción férrea. La Ley de 3 de junio de 1855 proveyó á esta última necesidad, dictando las reglas precisas para la constitución y funcionamiento de estas compañías; pero, para encontrar las primeras prescripciones de nuestro derecho sobre el transporte por ferrocarril, hay que llegar hasta el Reglamento dictado para la ejecución de la Ley de policia y conservación de los ferrocarriles, aprobado por Real Decreto de 8 de julio de 1859, apesar de que la citada Ley es de 14 de noviembre de 1855.

Las deficiencias de este Reglamento se subsanaron por numerosas disposiciones posteriores, que no hemos ni siquiera de enumerar, ya que uno y otras han sido derogados por el Real Decreto de 8 de setiembre de 1878, que aprobó el Reglamento vigente para la ejecución de la nueva Ley de policia de ferrocarriles de 23 de noviembre de 1877. En cuanto á la constitución y funcionamiento de las Compañías de ferrocarriles, los preceptos de la Ley del 55 quedaron derogados por la de 19 de octubre de 1869, que declaró libre la formación de toda clase de compañias, aunque fueran de las concesionarias de obras Públicas. Por último, respecto á ferrocarriles estimando con razón el legislador que los preceptos del Código de comercio relativos á las quiebras no habian podido inspirarse en las necesidades que, en casos tales, requería la índole especial de los compañías ferroviarias, dictó la Ley de 2—12 de noviembre de 1869, todavia vigente en su mayor parta[1]).

Tambien los almacenes generales de depósito fueron objeto de algunas disposiciones legales posteriores al Código; siendo, la primera, la Ley de 9 de julio de 1862, y, la segunda y última, la de 30 de diciembre de 1878.

Tal es el cuadro de la legislación mercantil española anterior á la publicación del Código de comercio vigente, el cual quedará bosquejado del todo con una indicación rapida de las reformas parciales que sufrió el Código de 1829, desde su primitiva redacción á la que ofrecia el año de 1885, en que terminó su existencia legal.

Antes de 1868 el texto del Código de comercio no sufrío alteración alguna, aun cuando algunos de sus preceptos resultaron, derogados, unos, y modificados, otros, por las leyes de 28 octubre —1° noviembre de 1837, relativa a la compra de buques extranjeros, y las relativas á sociedades por acciones, de que hemos hecho mencion anteriormente. Pero el movimiento revolucionario de 1868, cuyo espíritu era abiertamente contrario al que había dictado aquellas disposiciones, restableció el texto primitivo del Código, al derogar, como derogó, aquellas, é introdujo, por primera vez, importantes reformas, como consecuencia de la supresión de los Tribunales de comercio llevada á cabo por el Decreto-Ley de 6 de diciembre de 1868.

Por virtud de este Decreto-Ley quedó derogado todo el libro 5° del Código de comercio, y el art. 325 del mismo; modificados 24 artículos[2]), en el sentido de que las actuaciones judiciales á que los mismos se refieren, y que habian de practicarse en los tribunales de comercio, en los sucesivo habian de practicarse en los Juzgados de 1ª instancia, redactados de nuevo diez y seis artículos[3]); y enmendados todos aquellos que hablaban de los Intendentes de provincia, sustituidos por los Gobernadores, de los Tribunales de comercio, remplazados por los Jueces de 1ª instancia, y de los Jueces comisarios de las quiebras, que desaparecieron para dar lugar á los actuales Comisarios.

La derogación de la Ley de Bolsa de 1854 por el Decreto de 12 de enero de 1867, estableciendo una libertad completa en la creación y régimen de las Bolsas

---

[1]) Una parte de sus preceptos han pasado al Código comercio, figurando en la sección octava del título I del libro 4°; y el resto ha quedado subsistente por no haberse derogado, y ser complementarios sus preceptos de los del Código. La subsistencia de esta Ley la declaró explicitamente la exposición de motivos que precede al Proyecto de Código de comercio.

[2]) Son estos artículos los 121, 122, 148, 149, 151, 208, 230, 593, 644, 669, 670, 674, 679, 745, 781, 794, 940, 945, 946, 947, 948, 974, 976, 977, 986, 988 y 990.

[3]) Los artículos 16. 31, 40, 96, 110. 112, 114. 115 174, 1044, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143 y 1144.

As at the time of the making of the Code of Sr. Sainz de Andino, carriage by land in its ordinary form was not fitted in as more than a side issue, in treating of insurance of land carriage (title VIII of book 2), it is clear that carriage by rail had to be governed by subsequent laws; and even when the first law was passed in Spain relating to these very important means of communication, of the date of 20 February 1850, no provision was made therein respecting carriage by rail, nor for the formation of companies necessary for the construction and working of railroads, since the State on principle abandoned this industry of locomotion by iron to private interest. The Law of 3 June 1855 provided for this last necessity, by passing precise rules for the constitution of these companies; but, in order to meet with the first provisions of our law on carriage by rail, we must come to the Regulation passed for carrying out the Law for the policing and preservation of the railroads, approved by Royal Decree of 8 July 1859, although the said Law is of 14 November 1855.

The deficiencies of this Regulation were supplied by numerous later provisions, which we need not even mention, since both Law and provisions were repealed by Royal Decree of 8 September 1878, which approved the Regulation in force for carrying out the new Law for policing railroads of 19 November 1877. As regards the constitution and working of the railroad companies, the provisions of the Law of 1855 were repealed by that of 19 October 1869, which declared the formation of every kind of company to be free, although they might be concessionaires of public works. Lastly, as regards railroads, the legislator rightly thinking that the provisions of the Code of Commerce relating to bankruptcies had not been inspired by the necessities which, in such cases, the special nature of railroad companies required, passed the Law of 2—12 November 1869, which is still for the most part in force[1]).

General deposit warehouses, also, were the subject-matter of some legal provisions subsequent to the Code; the first being the Law of 9 July 1862, and the second and last, that of 30 December 1878.

That is the picture of the Spanish mercantile legislation prior to the publication of the present Code of Commerce, which will be sketched as a whole with a rapid indication of the partial reforms suffered by the Code of 1829, from its first drafting to the shape offered by the year 1885, when its legal existence ended.

Before 1868 the text of the Code of Commerce underwent no alteration, although some of its provisions had been repealed, and others modified, by the laws of 28 October to 1 November 1837, relating to the purchase of foreign ships, and referring to companies with share capital, of which we have already spoken. But the revolutionary movement of 1868, the spirit of which was openly opposed to that which had passed those provisions, restored the primitive text of the Code by repealing them as it did, and for the first time introduced important reforms, as the consequence of the suppression of the Tribunals of Commerce, which was accomplished by the Decree-Law of 6 December 1868.

By virtue of this Decree-Law the whole of the 5th book of the Code of Commerce and article 325 thereof were repealed; 24 articles were altered[2]) in the sense that the judicial formation of records to which they refer, and which formerly took place in the commercial tribunals, was thenceforth to take place in the Courts of first instance, as drafted anew in sixteen articles[3]), and all those which spoke of Provincial Intendentes were altered by substituting Governors, and those which spoke of Tribunals of Commerce, by substituting Judges of first instance, and those which spoke of Judges as receivers in bankruptcy, who disappeared to give place to the present receivers.

The repeal of the Law of the Exchange of 1854 by the Decree of 12 January 1867, which established complete liberty for the foundation and government of Commercial

---

[1]) One part of its provisions has gone to the Commercial Code, as the 8th section of title I of book 4; and the rest has remained from not having been repealed, and from its precepts being supplementary to those of the Code. The continued existence of this Law was explicitly declared in the preamble to the bill for the Code of Commerce.

[2]) The articles are Nos. 121, 122, 148, 149, 151, 208, 230, 593, 644, 669, 670, 674, 679, 745, 781, 794, 940, 945, 946, 947, 948, 974, 976, 977, 986, 988 and 990.

[3]) Articles 16, 31, 40, 96, 110, 112, 114, 115, 174, 1044, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143 and 1144.

de comercio y en la negociación de los efectos cotizables, afectó á los artículos del Código referentes á los corredores de comercio; pero este Decreto-Ley no se cuidó, como el anterior, de disponer las alteraciones que ello había de producir en el texto del Código. Texto que quedó restablecido en 1874 al volver á la legislación antigua.

Y, por último, aun cuando la reforma completa del Código se avecinaba, por que los trabajos de la Comisión nombrada en 1867 iban avanzando, las Cortes del reino aprobaron la Ley de 30 de julio de 1878, por la que se suprimieron dos artículos del Código referentes al convenio de los acreedores con el quebrado[1]), y se redactaron de nuevo otros once[2]).

* * *

Nuestra legislación mercantil, á partir del Código de 1829, fué haciendose extensiva á Cuba, Puerto Rico y Filipinas en las siguientes fechas:

Por Real cédula de 1° de febrero de 1832 se dispuso la observancia del Código de comercio en la Isla de Cuba; por otra de 17 del mismo més y año se hizo extensivo á Puerto Rico, y por otra de 26 de julio, tambien de 1832 á las islas Filipinas.

El Decreto-Ley de 6 de diciembre de 1868 que suprimió en la Península los Tribunales y la jurisdicción especial de comercio, reformando en su consecuencia algunos artículos del Código y suprimiendo todo el libro V, se hizo extensivo á todas nuestras provincias de Ultramar por Decreto de 1° de febrero de 1869; y la reforma de algunos artículos del Código, decretada por la Ley de 30 de julio de 1878, se hizo igualmente extensiva á Ultramar por el Real Decreto de 1° de noviembre del mismo año.

Por Real Decreto de 19 de octubre de 1853 se hizo extensiva á las provincias de Ultramar la Ley de 28 de enero de 1848 y el Reglamento de 17 de febrero del mismo año sobre sociedadas anónimas. Y por otro Decreto de 17 de setiembre de 1869 se derogaron, al igual que en la Península, las anteriores disposiciones. Por Real Decreto de 16 de agosto de 1878 se publicó un nuevo Reglamento para la constitucion de sociedades anónimas, que estuvo en vigor hasta la publicacion del Código de 1885 en dichas provincias ultramarinas.

Por Real Decreto de 25 de enero de 1855 se creó el Banco Español de Filipinas. Por uno de 6 de febrero del mismo año el Banco Español de la Habana. Y por otro de 10 de abril de 1866 el Banco Español de Puerto-Rico. Y, por último, por otro de 16 de agosto de 1878 se dispuso que no hubiese en las Provincias de Ultramar otros Bancos de emisión, privilegiados, más que los que llevaban los nombres de Banco Español de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas.

Por Real Decreto de 5 de julio de 1869 se creó la Bolsa oficial de comercio de la Habana, y se aprobó el Reglamento para el régimen interior de la misma.

Por Real Decreto de 12 de agosto de 1881 se hizo aplicable á Ultramar la Ley de 12 de noviembre de 1869 sobre quiebra y suspension de pagos de las compañías de ferrocarriles.

Y por otro de 12 de marzo de 1885 se aplicó á Ultramar la Ley de 9 de julio de 1862 sobre Almacenes generales de depósito.

* * *

El Código de comercio que rige actualmente, y del que ya hemos dicho que se publicó por Real Decreto de 22 de agosto de 1885, para entrar en vigor el 1° de enero de 1886, se publica íntegro en esta obra en concepto de texto legal, y por consiguiente no hemos de decir de él en esta reseña histórica otra cosa, sino que, por Real Decreto de 28 de enero de 1886, se hizo extensivo á Cuba y Puerto-Rico, con la modificación necesaria de algunos de sus articulos[3]). Que, por otro de 6

[1]) Los artículos 1145 y 1161.

[2]) Los artículos 1°, 17, 1062, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1105, 1147, 1150 y 1158.

[3]) La reforma del Código para su aplicación en Cuba y Puerto Rico se hizo con más buena voluntad que acierto, pues, yo, que por aquel entonces hacía mis estudios para las oposiciones á la cátedra de derecho mercantil que más tarde obtuve, advertí en seguida que se habian quedado por reformar, y por las mismas razones que lo habian sido los modificados, un número mayor de artículos que resultaban de aplicación imposible. — La circunstancia de ser, yo en aquella fecha empleado del Ministerio de Ultramar me movío á llamar la atención acerca de ello á mis compañeros de la Dirección general de Gracia y Justicia del Ministerio, á los individuos de la Comisión de Códigos de Ultramar, y hasta al Subsecretario, y, aunque

Exchanges and in operations in securities quoted on the Exchange, affected the articles of the Code which refer to commercial brokers; but this Decree-Law did not take care, as did the previous one, to provide for the alterations which it had to produce in the text of the Code: a text which was re-established in 1874 on returning to the old legislation.

And lastly, even when the complete reform of the Code was drawing near, for the labours of the Commission appointed in 1867 were well advanced, the Cortes of the Realm passed the Law of 30 July 1878, by which the two articles of the Code referring to arrangements of creditors with the bankrupt were suppressed[1]), and eleven others were redrafted[2]).

* * *

Starting with the Code of 1829, our mercantile legislation was gradually extended to Cuba, Puerto Rico and the Philippines on the following dates:

By Royal Rescript of 1 February 1832 the observance of the Code of Commerce was imposed on the Island of Cuba; by another of the 17th of the same month and year it was extended to Puerto Rico, and by another of 26 July 1832 to the Philippine Islands.

The Decree-Law of 6 December 1868, which suppressed the special commercial tribunals and jurisdiction in the Peninsula, and consequently altered certain articles of the Code and suppressed the whole of book V, was extended to all our over-sea provinces by Decree of 1 February 1869; and the reform of certain articles of the Code, made by Law of 30 July 1878, was likewise extended to the over-sea provinces by Royal Decree of 1 November of the same year.

By Royal Decree of 19 October 1853, the Law of 28 January 1848 and the Regulation of 17 February of the same year on limited companies, was extended to the over-sea provinces. And by another Decree of 17 September 1869 the previous provisions were repealed, just as in the Peninsula. By Royal Decree of 16 August 1878 the new Regulation for the formation of limited companies was published, which was in force in the said over-sea provinces until the publication of the Code of 1885.

By Royal Decree of 25 January 1855 the Banco Español de Filipinas was founded. By one of 6 February of the same year, the Banco Español de Puerto Rico. And lastly, by another of 16 August 1878 it was provided that there should be no other privileged banks of issue in the over-sea provinces except those which bore the names of Banco de Cuba, Puerto Rico and Filipinas.

By Royal Decree of 5 July 1869 the official Commercial Exchange of Havana was created, and the Regulation for the internal government thereof was approved.

By Royal Decree of 12 August 1881 the Law of 12 November 1869 on bankruptcy and suspension of payment of railroad companies was applied over-sea.

And by another of 12 March 1885 the Law of 9 July 1862 on general warehouses was applied over-sea.

* * *

The Code of Commerce now in force, which, as we have already said, was published by Royal Decree of 22 August 1885, so as to come into force on 1 January 1886, is published as a whole as the legal text of this book, and consequently we have nothing more to say of it in this historical review, than that it was extended to Cuba and Puerto Rico, by Royal Decree of 28 January 1886, with the necessary modification of certain of its articles[3]). That, by another of 6 August 1888 it was extended,

---

[1]) Articles 1145 and 1161.

[2]) Articles 1, 17, 1062, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1105, 1147, 1150 and 1158.

[3]) The amendment of the Code in order to be applied to Cuba and Puerto Rico was done with more good intention than success for I, who was then studying for the competitive examinations for the professorship which I afterwards obtained, quickly noticed that, for the same reasons as prompted the alterations already made, further amendments were needed in a great number of articles which it was impossible to apply. — The circumstance that I was then employed in the Colonial Office prompted me to call the attention of my colleagues on the Directorate of the Ministry of Grace and Justice, and of the members of the Commission on the Codes for the Colonies, and even of the Assistant Secretary, to the subject, and although all had to agree that I was right, no

de agosto de 1888, se hizo extensivo, tambien con las consiguientes modificaciones, á Filipinas. Y que ha sido el inspirador de la reforma de las leyes comerciales de México, ya que su nuevo Código de comercio de 15 de setiembre de 1889, que empezó á regir en 1° de enero siguiente, ha reproducido en gran parte (pudiera decirse que casi en totalidad) el nuestro.

todos hubieron de convenir en que tenía razón, ninguno se atrevío á cargar con la responsabilidad de tener que confesar en la Gaceta que los encargados de la reforma lo habian hecho muy mal, por cuyo motivo resultó que no fué posible (advertidos ya del desaguisado) publicar la edición oficial del Código de comercio vigente en Las Antillas. — Pendiente de publicación la reforma del Código para Filipinas, hablé de todo esto con el entonces presidente de la Comisión de Código de Ultramar, mi querido maestro, el sabio hacendista, Dn. Laureano de Figuerola, quien me pidio la nota de los artículos que no se habian reformado. La nota se utilizó para la reforma del Código que habia de regir en Filipinas; y, para que no resultara confesado en la Gaceta el error padecido en el Roal Decreto de 28 de enero de 1886, hizo el Ministerio de Ultramar insertar integro en la Gaceta el Código reformado para Filipinas, y publicó, además, una edición oficial del mismo.

Bibliography.

I. General works.

A) Legal Bibliographies.

Torres Campos, Manuel: Bibliografía española contemporánea del Derecho y de la Política. — 2 vol. I, 1800—1880; II, 1881—1896. Madrid. 1883—1897.

B) Collections of statutes.[1])

Novisima **Recopilación** de las leyes de España, dividida en doce libros en que se reforma la Recopilación publicada por el Sr. Dn. Felipe II en el año 1567, y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales y otras providencias recopiladas y expedidas hasta el de 1804, mandada formar por el Sr. Dn. Carlos IV. Edición oficial. Madrid. 1805—1807. 6 tomos[2]).

Fuero Juzgo en latin y castellano, cotejado con los más antiguos y preciosos códices por la Real Academia Española. Madrid. 1815.

Opusculos legales del Rey Dn. Alfonso el Sabio, publicados por la Real Academia de la Historia. 2 tomos (Tomo I Espéculo. Tomo II Fuero Real y Estilo). Madrid. 1836.

Las siete **Partidas** del Rey Dn. Alfonso el Sabio. Cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia. 3 tomos. Madrid. 1807.

Los **Códigos** españoles concordados y anotados. 12 tomos. Madrid. 1872—1873. (Contiene el texto íntegro de nuestros antiguos Códigos hasta la Novísima y las Ordenanzas de Bilbao.)

Martinez Alcubilla, Marcelo: Códigos antiguos de España. Colección completa de todos los Códigos de España desde el Fuero Juzgo hasta la Novísima Recopilación. Madrid. 1885—86. 2 tomos. (Es la última de las publicadas y la más manuable).

Abella, Joaquin: Los Códigos españoles vigentes en la Península y Ultramar, anotados y concordados. Madrid. 1890.

Medina, Leon, y **Marañón**, Manuel: Leyes civiles de España conforme á los textos oficiales. Novísma edición. Madrid. 1905.

[1]) Una colección completa de todas nuestras leyes no existe ni oficial ni particular. Oficial ni siquiera hay la de Códigos. Nuestros antiguos Códigos se publicaron aisladamente, por el Estado unos, por las Reales Academias (Española y de la Historia), otros. Colecciones completas, tanto de los antiguos como de los modernos Códigos, solo tenemos las formadas por los particulares. De estas citaremos tan solo las más corrientes.

[2]) El Suplemento á la Novísima Recopilación que contiene las disposiciones publicadas en 1805 y 1806, y algunas pragmáticas olvidadas al formar la Novísima, se incluyó en el tomo 6° de esta.

[1]) A complete collection, either official or private, of all our laws is not in existence. Nor is there an official collection of Codes. Our old Codes were published one by one, some by the State, others by the Royal Academies of Spain and of History. As complete collections of the old and modern Codes we only possess those formed by private persons. We cite only the most common.

[2]) The Supplement to the Novísima Recopilación, which contains the provisions published in 1805 and 1806, and some Royal Ordinances forgotten in forming the Novísima, is included in Vol. 6 thereof.

also with the consequent modifications, to the Philippines. And that it was the inspirer of the reform of the commercial laws of Mexico, in that her new Code of Commerce of 15 September 1889, which came into force on the following January 1, to a great extent (it might almost be said, wholly) reproduced our own.

one dared to take the responsibility of having to confess in the Gazette that those who had been entrusted with the reform had done it very badly, for which reason it became impossible (as has already been boldly hinted) to publish the official edition of the Code of Commerce in force in the West Indies. — Pending the publication of the reform of the Code for the Philippines, I spoke of all this to the then President of the Commission for the Colonial Codes, my beloved master, the learned Minister of Finance, Don Laureano de Figuerola, who asked me for a list of the articles which had not been amended. The list was used for the amendment of the Code for the Philippines; and in order not to confess the mistake in the Royal Decree of 28 January 1886, in the Gazette, the Colonial Minister inserted in the Gazette the entire amended Code for the Philippines, and published also an official edition thereof.

Colección legislativa de España. Edición oficial. (Es continuación de la Colección de decretos y órdenes que se empezó á publicar desde 1814. El titulo de Colección legislativa de España lo lleva desde 1846. Van publicados, hasta 1906, 182 volúmenes[1]), sin contar los 10 que contienen los decretos y órdenes de las Cortes liberales de 1810 á 1812 y de 1820 á 1823 y que se publicaron en los años de 1820 á 1823).

Boletin de la Revista general de Jurisprudencia y Legislación. (Organo oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.) Colección completa de la legislación española desde 1853, primer año de su publicación. Madrid. 1853. Van publicados 126 tomos hasta 1905.

Gaceta de Madrid. Se publica desde mediados del siglo XVII, y es el órgano oficial del Gobierno. El texto oficial de las leyes, reales decretos, reales órdenes y demás disposiciones gubernativas es el que se publica en la Gaceta, en la cual es obligatoria su inserción desde la Real órden de 22 de setiembre de 1836.

C) Systematic views and introductions of Law, Encyclopaedias.

Febrero ó Libreria de Jueces, Abogados y Escribanos. La 1a edic. es de 1789—90; la última, publicada con el titulo de Febrero novisimo es de Paris, 1870, 6 tomos.

Escriche, Joaquin: Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia. La 1a edic. es de Paris, 1831; la última publicada en España es de Madrid, 1874—76, 4 tomos; y la última de todas es de Paris, 1881.

Arrazola, Lorenzo: Enciclopedia española de Derecho y Administración, ó nuevo teatro universal de la legislación de España é Indias, Madrid. 1848—72. 13 tomos (sin terminar).

Escosura, Patricio de la: Diccionario universal del Derecho español constituido en todos sus ramos. Madrid. 1852—53. 4 tomos (sin terminar).

Martinez Alcubilla, Marcelo: Diccionario de la Administración española. La 1a edic. es de 1858, la última, 5a edic. Madrid. 1891—95. 9 tomos. Publica todos los años un Apéndice con el título de Boletin jurídico administrativo. Es la obra más completa que existe en España. Contiene todos los Códigos, todas las Leyes en vigor y todos los Reales Decretos, Reales ordenes, Reglamentos, Circulares y las Sentencias que forman jurisprudencia. Se publica con gran regularidad y con índices muy completos alfabéticos y cronológicos.

Mas y Abad, Celestino: Diccionario general de la Legislación española, civil y penal, canónica, administrativa y marítima, de la especial de Indias, la de los antiguos reinos de Aragón y del Principado de Cataluña y Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra. Madrid. 1877. Tomo 1o (A. B.) (sin terminar).

Sanchez de las Matas y Delgado del Campillo, Epifanio: Novisimo diccionario de legislación y jurisprudencia. Madrid. 1883.

Oliva Bridgman, Santiago: Novisimo Diccionario de Legislación y Jurisprudencia. Barcelona 1888—90, 4 tomos. Apéndices de 1888—89 y 90, 3 tomos. Barcelona. 1888—1890.

Gomez Herrero, Teodoro: Diccionario — guia legislativo español — 2 tomos. Madrid. 1902. Apéndices de 1901 y 1902.

Martinez Moreda, Mateo: El Consultor para todos. Diccionario de legislación vigente, con un prólogo del Exmo Sr. Dn. Francisco Lastres. 3 tomos. Madrid. 1905.

[1]) Falta el volumen de 1897. | [1]) The volume for 1897 is wanting.

Barrera y Montenegro, José Ma. de la: Nociones de Derecho civil, mercantil y penal, distribuidas en lecciones y adicionado con el discurso pronunciado en la Universidad de Oviedo sobre interés y usura. Valladolid. 1881.

Lamas y Varela, Luis: Novisimo manual de derecho comprensivo de todas las reformas de que ha sido objeto nuestra legislación hasta el presente. 3a ed. Madrid. 1878.

D) Journals and collections of commercial law.

Revista general de Legislación y Jurisprudencia Fué fundada en Madrid en 1853 por Dn. Ignacio Miquel, Dn. José Reus y Dn. Pedro Gomez de la Serna. Fué continuadora de la revista „El Derecho" que se fundó en Madrid en 1847 par Dn. Francisco Cárdenas. De El Derecho se publicaron 12 tomos, y de la Revista general van publicados 107 tomos, que comprenden hasta fin de 1905.

Revista de los Tribunales y de Legislación Universal. Fué fundada en Madrid en 1875 por Dn. Valentin Torrecilla, y continuada por Dn. Vicente Romero Girón. Van publicados hasta fin de 1905, 39 tomos.

Romero Girón, Vicente, y **Garcia Moreno**, Alejo: Colección de las Instituciones políticas y jurídicas de los pueblos modernos — Madrid. 1882. 12 tomos y 16 apéndices, el último de 1905.

Revista Juridica de Cataluña. Barcelona. 1895. Hasta 1905, 11 tomos.

E) Reports and leading cases on commercial law.

Sentencias del Tribunal Supremo de justicia. (Coleccion legislativa de España). Ed. of. Las sentencias del Tribunal Supremo desde 1838 hasta 1860 se publicaron en los tomos correspondientes de la Coleccion legislativa con las Leyes, Reales Decretos y demás disposiciones legales. A partir de dicha fecha, y formando parte de la Colección legislativa se publican en volumenes á parte. Madrid, 1860 á 1905 — 93 volúmenes — Faltan desde julio de 1891 á julio de 1897.

Sentencias y Autos del Tribunal Supremo, se publican por la Gaceta oficial de Madrid desde 19 de marzo de 1873 hasta el dia, en pliegos sueltos y encuadernables. Un volumen cada año. Madrid. 1873 á 1905. 33 tomos.

Jurisprudencia Civil, publicada por la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Colección completa de las sentencias del Tribunal Supremo desde 1838 hasta el dia. Madrid. 1897. Van publicados hasta fin de 1905, 101 tomos.

Estasén, Pedro: Repertorio de la jurisprudencia mercantil, desde 1838 hasta 1892. Barcelona 1894. — Desde 1892 á 1902. Barcelona. 1903.

Pastor y Alvira, Julian: Recopilación de la jurisprudencia mercantil del Tribunal Supremo. Zaragoza. 1867.

II. Special literature on the commercial law.

1. Commercial Code.

Código de comercio. Edición oficial. Madrid. 1885.

Código de comercio para las Islas Filipinas y demás Archipielagos españoles de Oceania. Ministerio de Ultramar. Ed. of. Madrid. 1888.

a. Official documents.

Proyecto de Código de comercio. Edición oficial. Madrid. 1882.

Lastres, Francisco: Dictamen de la Comisión nombrada por el Congreso en la proposición de ley relativa á suspensión de pagos y quiebras. Ed. of. Madrid. 1893.

Silvela, Luis, **Comas**, Augusto, y **Azcárate**, Gumersindo: Informe que sobre el proyecto de Código y tribunales de comercio presentan al claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Madrid. 1882.

Observaciones al proyecto de Código de comercio por una comisión de comerciantes banqueros. Madrid. 1881.

b. Commentaries

Abella, Joaquin: Novisimo Código de comercio comentado y concordado con el antiguo, con las disposiciones comerciales vigentes en España etc. y con las legislaciones de los principales pueblos de Europa y América. 2a ed. Madrid. 1897.

Albacete, Salvador de: Código de comercio, precedido de un prólogo de .... Biblioteca judicial. 3 tomos. Madrid. 1885.

Amat, Vicente: Código de comercio comentado y anotado con la jurisprudencia del Tribunal, Supremo, y completado con otras varias disposiciones legales vigentes en la materia. (Biblioteca económica de legislación y jurisprudencia.) Barcelona. 1903.

Armas y Saenz, Ramón de: Código de comercio comentado. Habana. 1886.

Castilla Folcrá, Antonio: Código de comercio, decretado y sancionado en 22 de agosto de 1885, con notas y aclaraciones etc. Madrid. 1885.

Novisimo **Código** de comercio: Manual de legislacion mercantil seguido de las leyes y disposiciones y notas que lo completan etc. Barcelona. 1886.

Código de comercio de 1885. Publicado por la Crónica legislativa. Madrid. 1885.

Código de comercio de 1885, comentado y concordado con el anterior y con los extranjeros por la redacción de la Revista general de Legislación y jurisprudencia. 2 tomos. Madrid. 1886.

Código de comercio vigente en la Península Cuba, Puerto Rico y Filipinás, comentado por la redaccion de la Revista de los Tribunales. 10a ed. Madrid. 1904.

Gallostra y Frau, José: Código de comercio español vigente en la Península é islas de Cuba y Puerto Rico. Contiene la concordancia literal con los de Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Portugal; la exposición de motivos con que fué presentado á las Cortes, una sección bibliográfica y los Reglamentos para la organización y régimen del Registro Mercantil y de las Bolsas de comercio en la Penins. é islas de C. y Pto. Rco. y el interior de la Bolsa de Madrid, con otras disposiciones aclaratorias y la organización de las Cámaras de comercio. Madrid. 1887.

Garcia Moreno, Alejo: Código de comercio de 1885 con las reformas hasta 1903 y anotado con la doctrina de los autores y todas las sentencias del Tribunal Supremo. Biblioteca económica del abogado. 7a ed. Madrid. 1904.

Lopez y Diaz, Manuel Domingo: Nuevo Código de comercio comparado con el antiguo, con notas y aclaraciones etc. con un prólogo de Dn. Aureliano Linares Rivas. Madrid. 1885.

Llivi, Francisco de P., y **Freixa y Rabasó**, Eusebio: Código de comercio de 22 de agosto de 1885, anotado y concordado con el de 30 de mayo de 1829 etc. Madrid. 1885.

Moya y Jimenez, Luis: Código de comercio comentado y precedido de un estudio histórico, crítico y doctrinal. Madrid. 1885.

Muñoz Ortiz, J.: Novisimo Código de comercio, vigente con una multitud de notas aclaratorias. 2a ed. Barcelona. 1888.

Ossorio y Gallardo, Angel: Legislación mercantil terrestre; compilación de las disposiciones vigentes en España acerca del derecho mercantil terrestre y jurisprudencia del Tribunal Supremo referentes á la misma materia. Madrid. 1896.

Prudhomme, Henri: Code de commerce espagnol, promulgué le 22 août 1885 mis en vigueur le 1er jánvier 1886. Traduit et annoté. Paris. 1891.

Reglamento para la organización y régimen del Registro mercantil en las islas de Cuba y Puerto Rico etc. Madrid. 1886.

Reglamentos para la organización y régimen del Registro mercantil y de las Bolsas de comercio y Real Decreto creando el Registro de ultimas voluntades. Revista de las Tribunales. Madrid. 1885. 1 folleto.

Romero Girón, Vicente: El nuevo Código de comercio, profusamente anotado y concordado con nuestra legislación anterior y con la jurisprudencia nacional y extranjera y exposición de motivos del proyecto del Sr. Alonso Martinez, precedido de una introducción y seguido de treinta y seis apéndices que contienen cuantas disposiciones dictadas hasta el dia, aclaran, amplian ó explican los preceptos de aquel. Madrid. 1902.

Ros y Biosca, José Ma.: Código de comercio promulgado en 22 de agosto de 1885,concordado con el de 30 de mayo de 1829, anotado con las disposiciones del derecho civil y administrativo, jurisprudencia del Tribunal Supremo etc. Valencia. 1886.

Soler y Castelló, Federico: Código de comercio comentado según las disposiciones del derecho civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de justicia, concordado con las disposiciones del Código penal, leyes de Enjuiciamiento civil, Hipotecaria y del Notariado etc. precedido de una introduccion histórica. 2a ed. notablemente corregida y aumentada con los Reglamentos del Registro mercantil y Bolsas de comercio y demás disposiciones publicadas hasta el dia. Madrid. 1886.

Teófilo y Doroteo: Código de comercio profusamente anotado y precedido de una breve reseña del movimiento mercantil á través de los siglos. ed. especial para las Universidades. (Biblioteca jurídico escolar.) Madrid. 1902.

c. Handbooks and Treatises.

Alvarez del Manzano, Faustino: Curso de Derecho Mercantil filosófico, histórico y vigente (español y extranjero). 2a ed. corregida y aumentada. Madrid. 1903. Tomo 1°. Parte general. Del tomo 2° van publicados 4 cuaderuos.

Alvarez del Manzano, Faustino: Programa de Derecho Mercantil de España y de las principales naciones de Europa y América. Madrid. 1878.

Avecilla, Pablo: Diccionario de la legislación mercantil de España. Madrid. 1849.

Ayala Junguita, P. y G.: Derecho mercantil ó cartera del comerciante. Vitoria. 1888.

Benito, Lorenzo: Lecciones de Derecho Mercantil con sujeción al programa oficial publicado en la Gaceta del 5 de agosto de 1889 para las oposiciones á la judicatura. Madrid. 1889.

Benito, Lorenzo: Ensayo de una introducción al estudio del Derecho Mercantil (Preliminares é historia). Valencia. 1896.

Benito, Lorenzo: Contestación al programa de Derecho Mercantil publicado en la Gaceta de 4 de diciembre de 1896 para las oposiciones á las plazas vacantes de Registradores de la Propiedad. 4a ed. Madrid. 1897.

Benito, Lorenzo: Las Bases del Derecho Mercantil. Barcelona. 1903. (Tomo XXXIV de la Colección de Manuales Soler.)

Benito, Lorenzo: Manual de Derecho Mercantil. Tomo 1°. (Derecho Mercantil español —Parte general). Valencia. 1904.

Bergamin, Francisco: Ensayos históricos del Derecho Mercantil. Málaga. 1875.

Blanco Constans, Francisco: Estudios elementales de Derecho Mercantil, según la filosofiá, la historia y la legislación positiva vigente en España y en las principales naciones de Europa y América. 2a ed. 2 tomos. Madrid. 1901—1902.

Bonilla y San Martin, Adolfo: Plan de Derecho Mercantil de España y de las principales naciones de Europa y América. Madrid. 1903.

Bonilla y San Martin, Adolfo: Derecho Mercantil español. Contestación al programa para oposiciones al Notariado. Madrid. 1904.

Bonilla y San Martin, Adolfo: Un laboratorio de derecho. Cuestiones teórico prácticas de Derecho Mercantil resueltas por los alumnos de dicha asignatura en la Universidad de Valencia (Biblioteca de Revista Juridica — vol. VII). Madrid. 1904.

Carreras y Gonzalez, Mariano y **Gonzalez Revilla**, Leopoldo: Elementos del Derecho Mercantil de España. 6a ed. y de Derecho Mercantil internacional, legislación de Aduanas y Tratados de comercio por Gonz. Rev (L.). 3a ed. Madrid. 1902.

Cencillo Briones, Jesús: Cuestionario contestado sobre Código de comercio. 2a ed. Madrid. 1887.

Checa y Sanchez, Ricardo: El porvenir de los Códigos de comercio. (Discurso de apertura del curso de 1899 à 900 de la Universidad de Sevilla.) Sevilla. 1899.

Emperador, Cándido: Nociones preliminares al estudio del Derecho Mercantil de España y de las principales naciones de Europa y América. Zaragoza. 1886.

Estasén, Pedro: Instituciones de Derecho Mercantil. 8 tomos. Madrid. 1889—96.

Garcia de Quevedo y Concellón, Eloy: Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538 que ahora de nuevo se publican, anotadas y precedidas de un bosquejo histórico del Consulado. Burgos. 1905.

Gestoso, Luis: Apuntes de Derecho Mercantil internacional. Valencia. 1886.

Gracia, Rafael, y **Benito**, Lorenzo: Cuestiones de Derecho Mercantil. Madrid. 1885.

Heredia, Rafael, y **Jaen**, R.: El comercio y las leyes. Explicación de las vigentes en España que más directamente se relacionan con el comercio usual etc. Madrid. 1901.

Heredia, Rafael: Manual del comerciante. Historia del Comercio. Legislación mercantil. Cálculos Partida doble (Teoría y práctica). Madrid. 1905.

Lopez Cerezo, Victor G.: Prontuario de legislación mercantil ó ligeros apuntes para facilitar el estudio de aquella asignatura. Santander. 1896.

Lopez Larrubia, Vicente, y **Martinez Martin**, Alberto: El Código de comercio interpretado por el Tribunal Supremo, con un prólogo de Dn. Rafael de Andrade y Navarrete. 2 tomos. Madrid. 1902.

Lopez Toral, Fernando: Diccionario mercantil con todas las voces frases y locuciones usadas en el comercio de España y de las Américas españolas. Zaragoza. 1882.

Luanco, Miguel: Lecciones elementales de Derecho Mercantil, arregladas al programa que rige en las oposiciones para el ingreso en el cuerpo de Aduanas etc. Madrid. 1887.

Martin Veña, Manuel: Tratado de Derecho Mercantil español, comparado con la legislación de Alemania y Francia. Madrid. 1891.

Moret y Remisa, Lorenzo: Exposición razonada del Código de comercio vigente en España y los de las principales naciones de Europa y América. Tomo 1°. Madrid. 1886.

Pancorbo, Manuel: Lecciones de Derecho Mercantil arregladas al programa de esta asignatura para las oposiciones de ingreso en el cuerpo de Aduanas. 3a ed. Madrid. 1884.

Perez Requeijo, Ramón: Legislación mercantil universal ó tratado didáctico de Derecho Mercantil, seguido de la legislación mercantil española vigente y su comparación con la extrangera y un apéndice sobre sistema aduaneros. Valladolid. 1898.

Rubio y Lopez, José: Novisimo manual de Derecho mercantil, arreglado á la legislación vigente sobre esta materia y al Código de comercio. Madrid. 1897.

Salom y Puig, Salvador: Lecciones elementales de Derecho Mercantil . . . Valencia. 1891.

Sanchez Lafuente, E.: Contestación á los cuestionarios de Código de comercio y al de organización y operaciones del Banco de España. Madrid. 1897.

Sanchez Mata, Nicasio, y **Alaba**, Leopoldo: Exposición del Derecho Mercantil de España y de las principales naciones de Europa y América. Salamanca. 1884.

Scaccia y Straka: Derecho Mercantil de España. Explicaciones completas de ... conforme al programa oficial de la Universidad de Valladolid. Valladolid. 1903.

Soler, Eduardo: Manual de Derecho Mercantil. Biblioteca enciclopédica popular ilustrada. Madrid. 1882.

Soler y Castelló, Federico: Diccionario de la legislación mercantil de España comparada con la vigente en las principales naciones de Europa y América. Madrid. 1887.

Supino, David: Derecho Mercantil. Traducido de la 4a ed. y anotado extensamente con las diferencias del derecho español por Lorenzo Benito. Madrid. 1895.

Ureña y Smenjaud, Rafael: Ensayo de un plán orgánico de un curso de Derecho Mercantil de España y de las principales naciones de Europa y América. Madrid. 1888 (sin terminar, suspendida su publicación).

Viso, Salvador: Lecciones elementales de Derecho Mercantil de España. 3a ed. arreglada por Salvador Salóm. Valencia. 1887.

Vivante, Cesar: Derecho Mercantil. Traducción, prólogo y notas por Francisco Blanco Constans. Madrid. 1894.

Zarzoso y Ventura, Ezequiel: Diccionario de legislación y jurisprudencia mercantil. Valencia. 1881.

d. Special Essays.

1. Contracts of Sale.

Lastres, Francisco: Los actos de comercio y la jurisdicción mercantil. Conferencia. Madrid. 1888.

Sastre y Martinez, Manuel Ma.: Límite entre los actos mercantiles y los que caen bajo el dominio del derecho común. Habana. 1891.

Rodriguez y Vigurl, Luis: La comercialidad de los inmuebles. Santiago. 1901.

Zurita Nieto, Benito: Los actos de commercio considerados en si mismos y en relación con los comerciantes (Estudios de legislación mercantil comparada, tomo 1°). Madrid. 1899.

2. Commercial Register.

Estadística del Registro Mercantil formada por la Dirección general de los Registros. Ed. of. Madrid. 1901.

3. Conclusion of Contracts.

Benito, Lorenzo: Legislación española sobre la correspondencia en materia civil y comercial (Estudio hecho para servir de Apéndice á la traducción española del Tratado sobre la correspondencia .... de Ramella). Madrid. 1898.

Bonilla y San Martin, Adolfo: Sobre los efectos de la voluntad unilateral (propia ó agena) en materia de legislación comercial. Madrid. 1901.

4. Stock Exchange.

Bertrán, Marcos Jesús: Operaciones de Bolsa. (Colección de Manuales Soler — vol. 48.) Barcelona. 1904.

Boguñá y Baxeras, Jacinto: Dictamen sobre efectos públicos al portador. Barcelona. 1903.

Capdeville, Edmundo: La Bolsa al alcance de todos. Las operaciones en las Bolsas de Madrid, Paris, Bruselas. Obra seguida de un vocabulario de los principales terminos bursátiles. Madrid. 1905.

Sobre la **contratación** de efectos públicos. Del monopolio de los. Agentes de Bolsa. Madrid. 1857.

Diez Pinedo, Eduardo: Anuario de la Bolsa, del Comercio y de la Banca para 1906 (Año XV) Madrid. 1906.

Galvez Pinal, Cesar: Pequeño manual de las operaciones de Bolsa. Madrid. 1899.

Garcia Diaz, Eduardo: Legislación sobre contratación en Bolsa, agentes de cambio y corredores de comercio y disposiciones de caracter general sobre efectos públicos con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Madrid. 1885.

Gomez Moreno, Ramón: Manual de la contratacion bursatil, ordenado con observaciones sobre los respectivos proyectos del nuevo Código de comercio y reglamentos de Bolsa, y otras noticias de interés para las negociaciones de efectos publicos y valores cotizables. Madrid. 1886.

Maluquer y Viladot, Juan: Irreivindicación de efectos al portador en los casos de robo, hurto ó extravio. Estudio sobre las Bolsas de comercio y sus agentes mediadores. Anotado con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, seguido de Apéndices que contienen las disposciones legales que afectan a estos materias y formularios prácticos; con un prologo del Exmo Sr. Dn. Antonio Maura. Barcelona. 1901.

Manual de la legislacion de la bolsa publicado por la Junta Sindical del Colegio de Agentes de cambio de Madrid. Madrid. 1880.

Montero y Vidal, José: La Bolsa, el Comercio y las Sociedades mercantiles. Madrid. 1887.

Prats, J.: Responsabilidad de la fianza de los agentes de Bolsa. Madrid. 1905.

5. *Commercial Associations.*

Benito, Lorenzo: Formas que pueden adoptar las sociedades mercantiles (Conferencia). Madrid. 1904.

Cueto, José A. del: De la sociedad civil con formas mercantiles. (Discurso de apertura de curso de la Universidad de Habana.) Habana. 1891.

Ortega y Gasset, M.: Informe consulta sobre las sociedades anónimas y el articulo 157 del Código de comercio. Madrid. 1901.

Pedregal, Manuel: Sociedades cooperativas. Madrid. 1888.

6. *Commission Agency.*

Benito, Lorenzo: El mandato mercantil (Conferencia). Barcelona. 1904.

Estasén: El viajante y el representante de comercio segun el derecho español. Barcelona. 1904.

7. *Account Current.*

Carbonell y Ruiz, Ramon I.: La cuenta corriente y sus efectos jurídicos. Habana. 1894.

Vallés y Pujals, José: El contrato de cuenta corriente. Barcelona. 1906.

8. *Insurance.*

Estasén, Pedro: Los seguros. Barcelona. 1906.

Larrabure, A.: Significación del seguro sobre la vida humana, con un prólogo de Dn. Miguel de Unamuno. Salamanca. 1901.

Reboul, Eugenio: Estudios sobre seguros. Traducción de Lázaro Gil Marconell, seguida de una reseña histórica de las sociedades de seguros sobre la vida establecidas en España y una ligera explicación de sus estatutos. Madrid. 1875.

Sorribas Zaldin, Juan Antonio: Memoria dilucidando un tema de seguros sobre la vida. Barcelona. 1883.

9. *Bills of exchange, Promissory notes, Cheques.*

Barrachina, Federico, y **Talavera,** Carlos Antonio: Código de comercio español, jurisprudencia y leyes extranjeras en materia de cambio. Alicante. 1893.

Benito, Lorenzo: La letra de cambio (Conferencia). Figueras. 1906.

Estasén, Pedro: El aval. Barcelona. 1902.

Gallardo, J.: Cuestiones de derecho internacional sobre la letra de cambio. Madrid. 1898.

Huguet y Campaña, Pedro: La letra de cambio y demás documentos mercantiles, así de giro como al portador, segun las leyes vigentes en la Península, Ultramar y Filipinas, Codigos de comercio extranjeros y jurisprudencia del Tribunal Supremo con numerosos modelos para los más importantes casos de emisión y giro y notas y apéndices aclaratorios. Barcelona. 1894.

Mata y Sanz, Francisco: El contrato de cambio. Valencia. 1893.

Miñana y Villagrasa, Emilio: Ordenanza general alemana sobre el cambio. Traducción directa del alemán, comparada con las principales legislaciones cambiarias de Europa y América. Con una introducción por Dn. Adolfo Bonilla y San Martin. Madrid. 1903.

Mora, Federico: Del cheque. Habana. 1885.

Oliver Esteller, Bienvenido: Congrès international de Droit commercial d'Anvers. Des innovations introduites dans la législation de la lettre de change, Billets á ordre et cheques par le nouveau Code de commerce d'Espagne. Anvers. 1885.

Zapatero, Manuel: El derecho maritimo y la letra de cambio segun el Congreso de Derecho comercial de Amberes. Madrid. 1886.

10. *Maritime Law*[1]).

Agacino y Martinez, Eugenio: Diccionario de la legislación maritima. Madrid. 1888.

Godinez y Mihura, Manuel: Elementos de derecho maritimo español. Madrid. 1892.

Gonzalez Mareto, Fernando, y **Tapia y Casanovas,** José: Manual de los Tribunales de Marina. Madrid. 1903.

---

[1]) The literature on maritime mortgage will be found on p. 33 post.

Jacobs, Victor, et **Ouverx,** Lambert: La loi espagnole rélative au commerce maritime; traduite et mis en concordance avec les lois similaires allemande, belge, française, italienne et neerlandaise. Bruxelles. Paris. 1886.

Madariaga, Ramón de: Cuestiones de derecho marítimo. Con un prólogo de Dn. Pedro Dorado Montero (El contrato mercantil de transporte marítimo. Retencion del cargamento. Embargo de naves. Notas sobre abordage marítimo.) Madrid. 1899.

Moreno y Lorenzo, Joaquin: La jurisdicción de marina. Tratado de todas las leyes y disposiciones de constante aplicación en los Tribunales de Marina. Madrid. 1896.

Palacios, Lorenzo: Anuario marítimo legislativo para 1894. Madrid. 1894.

Puzo, N.: El derecho marítimo español codificado. Madrid. 1882.

Puzo, N.: Tratado de Derecho marítimo español. 2a ed. con un prólogo de Dn. Leandro Sarralegui y Medina. Madrid. 1887.

Raikes, F. W.: The maritime Codes of Spain and Portugal. London. 1896.

Ruiz y Gil, Cristobal: Manual de legislación del marino mercante. Madrid. 1904.

Vinlegra, Salvador: Estudio sobre la clasificación de las averias por gastos causados con motivo ú ocasion de arribada. Cadiz. 1878.

11. Bankruptcy and Insolvency.

Bustamante y Martinez, Juan F.: De la necesidad de reformar los artículos del Codigo de comercio relativos á la suspensión de pagos. De la jurisprudencia sentada respecto de distintas cuestiones legales. Discurso pronunciado en la apertura del Tribunal Supremo de Justicia en 1894. Madrid. 1894.

Cuervo, Manuel Froilán: Tratado de quiebras. Habana. 1881. Tomo 1°.

Checa y Sanchez, Ricardo: La suspensión de pagos. Sevilla. 1889.

Estasén, Pedro: Tratado de las suspensiones de pagos y de las quiebras. Estudio teórico práctico del sobreseimiento en el pago y cumplimiento de las obligaciones mercantiles, según doctrina de la legislación española y la jurisprudencia. Madrid. 1899.

Grau Granell, Francisco: Estudio crítico del proyecto de ley sobre la suspensión de pagos. Barcelona. 1902.

Jorro Miranda, José: La suspension de pagos. Prólogo del Exmo Sr. Dn. Eduardo Dato. Valencia. 1902.

Martorell y Rovira, Luis, y **Nogués,** Emilio J. M.: Quiebras y suspensiones de pagos. Comentarios al libro IV del vigente Código de comercio, concordado y comparado con esta parte de la legislación mercantil de Portugal, Francia etc. con una carta prólogo de Dn. Francisco **Pi y Margall.** 2 tomos. Madrid. 1890.

Redondo, Remigio Antón: Qniebras. Manual sobre el procedimiento en los juicios universales de quiebras. Madrid. 1898.

Rives y Marti, Francisco de P.: Concurso de acreedores y quiebras. (Teoria y práctica de actuaciones judiciales en materia de ...) con sus preliminares quita y espera, suspensión de pagos; prólogo del Exmo Sr. Dn. José Mª Manresa y Navarro. 2 tomos. 2ª ed. Madrid. 1904.

Roig y Bergadá, José: La suspensión de pagos en el vigente Código de comercio. Barcelona. 1891.

12. Commercial Courts.

Benito, Lorenzo: Los Tribunales de comercio (Conferencia). Barcelona. 1905.

Gomez Chaix, Pedro: Apuntes acerca de los Tribunales de comercio y su establecimiento en España. Málaga. 1892.

Jurado en las cuestiones mercantiles. Forma práctica para el planteamiento del..... Tema 5° del Congreso Nacional Mercantil de 1886, Publicadas la discusion y conclusiones votadas acerca del mismo por Dn. Manuel Zapatero y Garcia en el libro titulado. Congreso Nacional Mercantil celebrado en Madrid en mayo de 1886. Madrid. 1887.

Jurisdicción especial de comercio. Convendria restablecer la.... En caso afirmativo, en que forma y con que condiciones? Tema 2° del Congreso Nacional Mercantil de 1881. Publicadas la discusión y conclusiones respecto al mismo. Y en los apendices una Exposicion del Circulo de la Union Mercantil de Madrid al Exmo Sr. Ministro de Fomento, una Exposición de la Academia Cientifico Mercantil de Barcelona, un Proyecto de jurados mercantiles por el Exmo Sr. Dn. Eduardo Perez Pujol y una Memoria de Dn. Vicente Bas y Cortés, (en el libro titulado Actas del Congreso Nacional Mercantil — Noviembre-diciembre de 1881). Madrid. 1882.

Tribunales de comercio. Si conviene restablecerlos en España. Caso afirmativo, cual habria de ser su organizacion? Tema 12° del Congreso juridico español de 1886. Ponencias de Dn.

Bernabé Dávila y Dn. Juan Ma. Lopez Diez — de Dn. Luis Silvela — Enmiendas de — Dn. Bienvenido Oliver y Esteller — Dn. José Elias de Molins — Dn. Guillermo B. Rolland — Dn. José Montes y Dn. Francisco Isern — Dn. Mario Navarro Amandi. 1886. Varios folletos publicados en Madrid 1886.

III. Usages and customs.

Estasén, Pedro: Costumbres marítimas de la costa de Cataluña. Ensayo sobre los contratos conocidos con el nombre de mota, participación en madera, y relaciones juridicas á que dan lugar. Memoria premiada. Barcelona. 1880.

IV. Special commercial laws.

a. Banks.

Banco hipotecario de España. Estatutos. Madrid. 1903.

Banco Nacional de España. Leyes, estatutos y reglamento. Madrid. 1905.

Lisbonna Fabrat, Enrique: Los Bancos de emision de Europa, con una introducción por el Exmo Sr. Dn. Juan de Morales y Serrano. Madrid. 1896.

Munlesa, Mariano S.: Observaciones generales sobre los Bancos de emisión, precedidas de un artículo sobre las nuevas operaciones del Banco de España. Madrid. 1887.

Ranero, ..: El Banco Nacional de España. Reseña histórica estadistica de sus principales operaciones desde su reorganización por el decreto-ley de 19 de marzo de 1874. Madrid. 1890.

b. Carriers, railways, telegraphs etc.

Amieva, S.: Guia de transportes por ferrocarril. Madrid. 1897.

Bona, Felix de: De la explotación y tarifas de los ferrocarriles españoles. Dictamen de la comisión de le Sociedad Económica Matritense, redactado por el presidente de la misma Dn... Madrid. 1877.

Bona, Felix de: El Estado y los caminos de hierro. La cuestión de las tarifas. Articulos. Madrid. 1883.

Bravo y Molto, Emilio: Legislación de ferrocarriles (Biblioteca judicial). Madrid. 1891.

Bravo y Molto, Emilio: Legislacion de comunicaciones. 2 tomos. Madrid. 1891.

Broca y Navarro, Juan: El cartero Compilación de órdenes, instrucciones, tarifas, artículos y noticias relativas al ramo de correos. Madrid. 1883.

Colleccion legislativa de ferrocarriles etc. Madrid. 1877.

Compañel, Joaquin: Guía del empleado de correos. Madrid. 1877. (Hay además dos apéndices. Madrid. 1880.)

Convenio celebrado entre España y Francia el 8 de diciembre de 1880, fijando reglas para el cambio entre los dos paises de cartas con valores declarados. Madrid. 1881.

El **Comercio** Español. Policía de ferrocarriles (Ley de 14 de noviembre de 1879 sobre) Biblioteca judicial del comerciante, publicada, comentada y anotada por la redacción de ....., conteniendo todas las leyes y reglamentos referentes al tráfico mercantil 1er vol. Madrid. 1876.

Diaz Aguasol, Florencio: Manual de los transportes por caminos de hierro. Madrid. 1901.

Elguezabal y Orive, Juan: Manual de correos y telégrafos. Haro. 1895.

Fernandez Duro, Antonio: Tarifa para el franqueo y porte de la correspondencia que se cambie entre España y los paises extranjeros con arreglo al tratado que se firmó en Paris en 1 de junio de 1878, vigente desde 1 de agosto de 1881. Madrid. 1881.

Foyé, R.: Manual del contrato de transporte. Barcelona. 1886.

Foyé, R: Los caminos de hierro de España, Recopilación ordenada de las disposiciones legales vigentes sobre ferrocrriles y tramvias, en sus diferentes periodos de estudio, construcción y explotacion, legislación y jurisprudencia. Barcelona. 1894.

Gaceta de los Caminos de Hierro. Colección legislativa de ferrocarriles publicada por la ... Madrid. 1891 y 1892.

Garcés, Benito Vicente: Diccionario razonado, legislativo y práctico de los ferrocarriles españoles, bajo el apecto legal, técnico, administrativo y comercial de los mismos, con la colaboración de Dn. José Gonzalez Alvarez. 2a ed. 4 tomos. Madrid. 1882.

Gonzalez de las Cuevas, José, y **Sastre y Rodriguez**, Francisco: Diccionario general de ferrocarriles, legislativo, administrativo, técnico y económico, publicado bajo la direccion de Dn. Pedro Fernandez del Rincón. Madrid. 1887.

Gutierrez, Francisco de A.: Legislación de correos (Servicio interior é internacional). Madrid. 1893.

Hurtado de Urtasun, Alfredo: Consultor administrativo y mercantil de ferrocarriles. Resumen de las disposiciones vigentes, tarifas y su aplicación. Zaragoza. 1893.

Luque, Cándido, y **Pallardo,** Alfredo: Guia-consultor de los agentes y funcionarios de todas clases de la inspección administrativa y mercantil de ferrocarriles. Madrid. 1881.

Maristany, Eduardo: Impresiones de un viaje por los Estados Unidos. Barcelona. 1905.

Maristany, Eduardo: La conferencia ferroviaria de 1905. Estudios económicos sobre la explotación comercial de los ferrocarriles españoles. Barcelona. 1905 Tomo I°, 1906 Tomos II y III.

Martin Gamero, Andrés: Problemas juridicos y comerciales á que da origen el contrato de transporte. Biblioteca juridica de ferrocarriles tomo 1°. Madrid. 1890.

Martin Gamero, Andrés: Constitución y organización de las compañias de ferrocarriles, y caracter juridico, condiciones y relaciones de sus empleados. Msdrid. 1890.

Monreal Suarez, Manuel: Legislación de ferrocarriles con un minucioso estudio sobre la concesión, construcción, explotación y quiebras de los caminos de hierro. Madrid. 1902.

Navasqüés, Emilio C. de: De los convenios de correos y de la correspondencia internacional. Madrid. 1873.

Reynals y Rabassa, Estanislao: Las compañias de ferrocarriles y el Estado. Barcelona. 1866.

Torre, Enrique de la: Legislación comercial de ferrocarriles. Madrid. 1902.

Unión universal de correos convenida entre España y provincias españolas de Ultramar, Alemania; República Argentina; Austria-Hungría; Bélgica; Brasil; Dinamarca y Colonias danesas; Egipto; Estados-Unidos de la América del Norte; Francia y Colonias francesas; Gran Bretaña y diferentes Colonias inglesas; India Británica; Canadá; Grecia; Italia; Japón; Luxemburgo; México; Montenegro; Noruega; Paises Bajos y Colonias neerlandesas; Perú; Persia; Portugal y Colonias portuguesas; Rumanía; Rusia; Servia; Salvador; Suecia; Suiza y Turquía. Madrid. 1879.

Vega Armentero, R.: Una cuestion grave. Los ferrocarriles españoles. Madrid. 1884.

Verdegay y Fiscovvich, Eduardo: Historia del correo desde sus orígenes hasta nuestros dias, con un apéndice que comprende la legislación interior de los paises que forman la unión postal universal. Madrid. 1894.

c. Maritime Mortgage.

Ayllon y Altolaguirre, Emilio: El comercio y la hipoteca naval. Madrid. 1893.

Diaz Valero, Carlos: Ley sobre hipoteca naval de 21 de agosto de 1893 anotada, concordada y comentada. Madrid. 1893.

Gonzalez Revilla, Leopoldo: La hipoteca naval en España. Estudio de legislación mercantil comparada. Madrid. 1888.

Gonzalez Revilla, Leopoldo: La hipoteca naval. Observaciones al proyecto de ley del Ministerio de Gracia y Justicia. Madrid. 1890.

Gonzalez Revilla, Leopoldo: Manual práctico de la hipoteca naval, comentarios y texto de la ley de 21 de agosto de 1893. Madrid. 1894.

Es conveniente el establecimiento de la **Hipoteca maritima?** En caso afirmativo, sobre que bases debiera organizarse? Tema 9° del Congreso juridico de Barcelona de 1888. Ponencias de Dn. Faustino Alvarez del Manzano, Dn. Raimundo Durán y Ventosa, Dn. Marceliano Isabal, Dn. Agustin de Ondovilla. — Enmiendas de Dn. Santiago Oliva y Bridgman, Dn. Lorenzo Benito. — Discursos de Dn. José Gonzalo de las Casas, Dn. S. Oliva, Dn. Juan Reig, Dn. R. Durán, Dn. M. Isabaly, Dn. Ignacio Hidalgo Saavedra, publicados en las Actas del Congreso Juridico de Barcelona (setiembre de 1888). Barcelona. 1899.

Manual práctico de la hipoteca naval. Comentarios y texto de la ley de 21 de agosto de 1893 por la Revista de los Tribunales. Madrid. 1893.

d. Chambers of commerce.

Benito, Lorenzo: Las Cámaras de comercio (Conferencia). Madrid. 1899.

Navarro, Felipe B.: Las Cámaras de comercio. Madrid. 1885.

e. Consular Law.

Avendaño. Joaquin: Reflexiones acerca de la organización consular de España con motivo del proyecto de ley que para su reforma presentó á las Cortes el diputado Dn. Plácido Jove y Hevia. Genóva. 1865.

Bernal de O'Reilly, Antonio: Práctica consular de España. Formularios de cancillerias consulares. Havre. 1864.

Bernal de O'Reilly, A.: Elementos para el ejercicio de la carrera consular. Bayona. 1883.

Castro y Casaleiz, Antonio de: Guía práctica del diplomático español. Madrid. 1887. 2 tomos.

Cortés y Morales, Balbino: Diccionario razonado de Legislación y jurisprudencia diplomático-consular, ó Repertorio para la carrera de Estado, y mejor consulta de las obligaciones y derechos de las personas, conforme á la moral, á la política y al derecho civil, con multitud de voces ó palabras legales. Madrid. 1874.

Jove y Hevia, Plácido de: Guía práctica para los consulados de España con un apéndice en el que se incluyen casos prácticos y modelos para todos los asuntos importantes de una cancillería consular. Madrid. 1858.

Del procedimiento judicial en las cuestiones civiles mercantiles.

Introducción.

Las primeras indicaciones que en nuestras leyes civiles se encuentran respecto á la jurisdicción especial en materia de comercio datan nada menos que del siglo VII, en cuya segunda mitad se publicó el Fuero Juzgo. Como decimos en otro lugar[1]) la ley II del titulo III del libro IX de este Código dispone que los mercaderes de ultraportos sean juzgados por sus jueces y por sus leyes; y, si bien esto se refiere á los extranjeros, no deja de ser tal precepto el reconocimiento y la consagración legal de una práctica mucho más antigua.

En los primeros tiempos de la época de la Reconquista de España debieron continuar las cosas de igual modo, tanto porque el Fuero Juzgo fué el Código general de los españoles hasta el siglo XIII, en que en Castilla y Aragon florecen los reyes legisladores, como porque las condiciones en que se realizaba la reconquista no permitieron la organización de un régimen judicial regular que ofreciera garantias de justicia á los mercaderes. En este siglo, y en los paises de Levante, que no han de preocuparse ya de la obra de la reconquista, adquieren los mercaderes tan gran fuerza en la vida social que el rey de Aragón D. Pedro III, crea en Valencia, en 1283 la jurisdicción consular, que en 1347 habia de concederse de igual modo á Barcelona; si bien en esta última ciudad parece que desde 1279 existia ya una cierta jurisdicción mercantil que fué consentida por los magistrados municipales[2]).

En Castilla y León, hasta la terminación de la Reconquista, en el siglo XV, (1492) no hay más noticia segura de jurisdicción mércantil que la suministrada por Las Partidas. En la Ley III del titulo VII de la quinta Partida se dice: »Pero los pleitos e las debdas que los mercaderes fizieren, después que vinieren á las ferias nuevas ó á las otras viejas, ó las que ovieren fechas á otra parte, á que prometieron de complir, é de pagar en ellas, tenudos son de las complir é si non quisieren, *pueden los apremiar, los alcaldes é los mayorales de las ferias que los cumplan.*« Dos años después de la toma de Granada por los Reyes Católicos se concede á Burgos (1494) la creación de un Consulado con jurisdicción propia, al estilo de los ya existentes en Valencia y Barcelona. En 1503, al crearse la Casa de Contratación de las Indias de Sevilla, se estableció en ella una cierta jurisdicción comercial que el emperador Carlos V reconoció en su Ordenanza de 1539, y que organizó definitivamente en 1543. En 1511 se concedió á Bilbao la jurisdicción consular; en 1632 á Madrid; en 1682 á San Sebastian; en 1762 á Zaragoza y en 1784 á Sevilla: Con esto, y con la reorganización en 1758, 1762 y 1766 de los Consulados ya existentes en Barcelona, Valencia y Burgos, resultó extendida la jurisdicción comercial por toda la Peninsula al promulgarse el Código de comercio de 1829.

Con el nuevo Código desapareció la antigua jurisdicción consular para ser sustituida por los Tribunales de comercio (tambien compuestos de cónsules) que habian de entender en los negocios y causas mercantiles, á tenor de lo dispuesto en el articulo 1178 del mismo. Donde no hubiere Tribunal de comercio se encomendaba la jurisdicción mércantil, en los mismos términos que á este, á los jueces ordinarios dentro del territorio de su jurisdicción. Y, como el Código no determinaba donde habian de funcionar estos tribunales, el Real Decreto de 7 de Febrero de 1831

[1]) V. la introducción histórica, pag. 4.

[2]) *Capmany: Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona.* Madrid, 1779—92. Tomo 1.°, Parte 2.°, pag. 153.

Letamendi, Agustín de: Atribuciones consulares ó manual para los cónsules de España en paises extranjeros. Madrid. 1835.

Letamendi, Agustin: Tratado de jurisprudencia diplomático-consular, y manual práctico para la carrera de Estado. Madrid. 1843.

Maluquer y Salvador, Miguel: Derecho consular español. Madrid. 1899. (Apéndices de los años 1900—1901.)

Maluquer y Salvador, José: Anuario diplomático y consular español. Madrid. 1889.

Toda y Güell, Eduardo: Derecho consular de España. Madrid. 1889.

Judical Procedure in Mercantile Civil Matters.

Introduction.

The first signs which we meet in our civil laws of any special jurisdiction in matters of commerce, date no later than the VIIth century, in the second half of which the Fuero Juzgo was published. As we have said elsewhere[1]), law II of title III of book IX of this Code provides that merchants from over the seas shall be judged by their own judges and by their own laws; and although this refers to foreigners, still this provision is the legal recognition and consecration of a much earlier practice.

In the first times of the period of the Reconquest of Spain things must have continued in the same state, both because the Fuero Juzgo was the general Code of the Spaniards until the XIIIth century, in which the lawgiving kings of Castilla and Aragón were flourishing, and also because the conditions in which the Reconquest took place did not permit the organization of a regular judicial régime offering guarantees of justice to the merchants. In this century, and in the countries of the Levant, which had not to be engaged in the work of the Reconquest, the merchants acquired so great a power in social life that Don Pedro III, King of Aragón, created the consular jurisdiction in Valencia in 1283, which in like manner had to be granted to Barcelona in 1347; although in this last city there appears to have existed from 1279 a certain mercantile jurisdiction with the consent of the municipal judges[2]).

In Castilla and León, there is no further certain notice of mercantile jurisdiction until the termination of the Reconquest in the XVth century (1492), than that supplied by Las Partidas. In Law III of Title VII of the Fifth Partida it is said: "But the actions arising from debts incurred by the merchants who may come to the new fairs or to other old ones, or from those which they have incurred in another place, to be fulfilled and paid in the former, they are bound to fulfil and if they do not wish that, the mayors and overseers of the fairs may compel them to fulfil them". Two years after the taking of Granada by the Catholic Kings, the foundation of a Consulado with its own jurisdiction was granted to Burgos (1494), after the manner of those existing in Valencia and Barcelona. In 1503, at the creation of the Casa de Contratación de las Indias in Sevilla, there was established therein a certain commercial jurisdiction which the Emperor Charles V recognised in the Ordenanza of 1539, and which he finally organized in 1543. In 1511 consular jurisdiction was granted to Bilbao; in 1632 to Madrid; in 1682 to San Sebastian; in 1762 to Zaragoza and in 1784 to Sevilla. With this, and with the reorganization in 1758, 1762 and 1766 of the Consulados already existing in Barcelona, Valencia and Burgos, the consular jurisdiction became extended throughout the whole Peninsula at the promulgation of the Code of Commerce of 1829.

With the new Code the ancient consular jurisdiction disappeared and was replaced by the Tribunals of Commerce (likewise composed of consuls) which had to try mercantile business and causes, as provided in article 1178 thereof. Where there was no Tribunal of Commerce the mercantile jurisdiction was entrusted in the same terms as to the former, to ordinary judges within the territory of their jurisdiction. And as the Code did not determine where these tribunals were to operate, the Royal Decree of 7 February 1831 provided for this want, by enacting in article 1 that the

---

[1]) See the historical introduction, page 4.

[2]) *Capmany*: *Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona*, Madrid, 1779—92. Volume I, Part. 2, page 153.

proveyó á esta necesidad, disponiendo en su artículo 1.° que los tribunales de comercio fuesen de dos clases, en relación con la importancia comercial de las respectivas poblaciones en que existieren ó se crearen; y en el 2.°, declarando de primera clase los existentes en Barcelona, Bilbao, Cadiz, Coruña, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla y Valencia, y de segunda los de Alicante, Burgos, Canarias, Granada, Jerez de la Frontera, Murcia, Pamplona, San Lucar de Barrameda, San Sebastian y Zaragoza.

Los nuevos tribunales de comercio no dieron los resultados que de ellos se esperaban; y fueron tales y tantos los abusos que á su sombra se cometieron que al morir en 1868, por virtud del Decreto, Ley 6—8 de Diciembre, nadie lamentó su desaparición.

A partir de dicha fecha no hay en España diferencia alguna entre la jurisdicción ordinaria y la mércantil, excepción hecha de algunos preceptos de derecho procesal aplicables tan solo en cuestiones mércantiles, de que luego hablaremos; y aunque la opinión se agita con bastante fuerza en demanda del restablecimiento de la jurisdicción especial mércantil, el hecho no tiene otra importancia que el de una protesta contra los defectos de nuestra administración de justicia, más sensibles cuando afectan á intereses comerciales, pero que será del todo impotente para conseguir dicho restablecimiento[1]).

Parte primera.

Titulo único. De los Tribunales de justicia.

Capítulo primero. Número, clases y organización de los Tribunales civiles que entienden en las cuestiones mércantiles.

I. Tribunales ordinarios.

En general entienden en esta clase de cuestiones los tribunales ordinarios, pero pueden entender, á voluntad de los interesados, en las condiciones y forma en que indicaremos más adelante, los tribunales arbitrales ó los de amigables componedores.

El número y clase de los tribunales civiles, así como su organización y funciones se halla determinado en la llamada Ley orgánica sobre el Poder judicial, publicada y promulgada con carácter provisional el 15 de Setiembre de 1870, en cumplimiento de lo mandado en la de 23 de Junio del mismo, en la Ley adicional á la orgánica, publicada y promulgada el 14 de Octubre de 1882 á tenor de lo dispuesto en la de 15 de Junio del mismo año, y en la reciente Ley de justicia municipal de 5 de Agosto de 1907.

El territorio de España é islas adyacentes (Baleares y Canarias) se divide para la administración de justicia en términos municipales, partidos y distritos. En cada término municipal habrá un Juzgado municipal, constituído por un juez, un fiscal y un secretario, con sus suplentes respectivos. En los mismos términos municipales funcionará en los casos que determina la propia Ley de justicia municipal un Tribunal municipal compuesto del juez con dos adjuntos. En las poblaciones donde exista más de un Juzgado de primera instancia, el número de Juzgados y Tribunales municipales será igual al de aquellos, salvo casos excepcionales que apreciará el Ministro de Gracia y Justicia, oyendo á las Salas de Gobierno de las Audiencias respectivas. A cada partido corresponde un juez de primera instancia[2]); á cada distrito una Audiencia; y á toda la nación un Tribunal Supremo de Justicia. Los jueces y tribunales municipales han de residir en el pueblo respectivo; los jueces de primera instancia en la cabeza del partido, las Audiencias en la capital del distrito, y el Tribunal Supremo en la capital del reino.

Los juzgados municipales son desempeñados por un solo juez nombrado, como su suplente, por las Salas de Gobierno de las Audiencias territoriales, con asistencia de los decanos de los Colegios de Abogados y Notarios. Los adjuntos, que con el

[1]) Vease mi folleto, *Los Tribunales de Comercio*. Barcelona 1905.

[2]) Con arreglo al art. 12 de la citada Ley Orgánica, en cada circunscripción deberia haber un juez de instrucción (para lo criminal), y en cada partido un Tribunal de partido; pero las escaseces de nuestros presupuestos han hecho imposible la conversión del Juzgado con un solo juez, en el Tribunal de partido compuesto de tres jueces.

tribunals of Commerce should be of two classes, according to the commercial importance of the respective populations in which they existed or should be created; and by declaring in article 2, that the following existing tribunals should be of the first class: Barcelona, Bilbao, Cadiz, Coruña, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla and Valencia, and of the second class: Alicante, Burgos, the Canaries, Granada, Jerez de la Frontera, Murcia, Pamplona, San Lucar de Barrameda, San Sebastian and Zaragoza.

The new tribunals of commerce did not give the results expected of them; and such and so many were the abuses committed under their shade, that on their decease in 1868, by virtue of the Decree-Law, 6—8 December, no one mourned their disappearance.

From that date there has been no difference between the ordinary and mercantile jurisdiction in Spain, except in certain precepts of the law of procedure applying only to mercantile questions, of which we shall shortly speak; and although opinion is powerfully agitated in favour of the re-establishment of the special mercantile jurisdiction, that fact is only important as a protest against the defects in our administration of justice, which are more felt when they affect mercantile interests, but which will prove to be wholly powerless to obtain that re-establishment[1]).

First Part.

The only Title. The Tribunals of Justice.

First Chapter. Number, kinds and organization of the Civil Tribunals which try mercantile questions.

I. Ordinary Tribunals.

In general, the ordinary tribunals try this class of questions, but at the wish of the persons interested, the arbitral tribunals or friendly arbitrators may try them under the conditions and in the way which we shall point out further on.

The number and kind of the Civil Tribunals, their organization and functions, are determined in the Organic Law on the Judicial authority, published and promulgated with a provisional character on 15 September 1870, in fulfilment of the mandate in the law of 23 June of the same year, and in the Law supplementary to the Organic, which was published and promulgated 14 October 1882, in accordance with the provisions in that of 15 June of the same year, and in the recent Law of Municipal Justice of 5 August 1907.

The territory of Spain and the adjacent Balearic and Canary Islands are divided for the purpose of the administration of Justice into municipal areas, partidos and districts[2]). In each municipal area there will be a municipal court, formed of one judge, one public prosecutor and one secretary (master), with their respective substitutes. In the same municipal areas, a municipal Tribunal composed of a judge with two assessors sit in the cases determined by the said Law of Municipal Justice. In localities where there is more than one court of first instance, the number of municipal Court and Tribunals will be the same as in the former, saving exceptional cases, which the Minister of Grace and Justice must determine, after hearing the Administrative Courts of the respective Courts of Appeal. Each partido has a judge of first instance[2]); each district has one Court of Appeal; and the whole nation, a Supreme Tribunal of Justice. The judges of the Municipal Tribunals must reside in their respective locality; the judges of first instance, at the head-quarters of the partido, the Courts of Appeal, in the capital of the district, and the Supreme Tribunal, in the capital of the Realm.

The functions of the municipal Courts are performed by a single judge, who, as well as his substitute, is appointed by the Administrative Courts of the territorial Courts of Appeal, with the assistance of the Deans of the Colleges of

[1]) See my pamphlet, *Los Tribunales de Comercio.* Barcelona 1905.

[2]) In accordance with art. 12 of the said Organic Law there must be a magistrate for criminal matters in each division, and in each partido a tribunal thereof; but the meagreness of our budgets has made impossible the conversion of the Juzgado with a single judge into the Tribunal of the Partido with three judges.

juez municipal han de componer el Tribunal municipal, son nombrados en igual forma. El cargo dura cuatro años, y es obligatorio para aquellos en quienes no concurra alguna de las excusas ó causas de renuncia que determina la citada Ley de 1907 en su art. 9; y ha de preferirse á los que reunan las circunstancias generales especificadas en el art. 9, y fueren, además, funcionarios de la carrera judicial, en situación de excedencia forzosa, ó de excedencia voluntaria con un año por lo menos de anterioridad á la fecha de su nombramiento, ó aspirantes á la carrera judicial que hubiesen obtenido su plaza por oposición, ó abogados; y á falta de unos y otros los que posean algun título académico expedido por el Estado, y en último término los vecinos que sabiendo leer y escribir tengan circunstancias más recomendables. La nueva Ley ha declarado incompatible el cargo de juez municipal con los cargos de senador, diputado á Cortes, diputado provincial ó concejal, con el ejercicio de toda otra jurisdicción, y con el de la abogacía, con los cargos de procurador ó agente de negocios, con los de funcionarios públicos, y con cualesquiera servicios retribuídos por el Estado, la Real Casa, la provincia ó el municipio, con los destinos de empresas ó sociedades mercantiles privilegiadas ó subvencionadas por la Nación y con los de compañías arrendatarias de rentas nacionales, provinciales ó municipales.

Los juzgados de primera instancia son tambien unipersonales, y con arreglo al artículo 4.° del Real Decreto de 29 de Diciembre de 1838 se dividen en tres categorias: de entrada, de ascenso y de término. El ingreso en la carrera, según el artículo 35 de la Ley adicional á la orgánica, ha de hacerse por la categoria de jueces de entrada. Y para ser nombrado se requiere, á más de las condiciones generales á que antes nos hemos referido, la de pertenecer al Cuerpo de Aspirantes á la judicatura, en cuyo cuerpo se ingresa por oposición, ó ser funcionario judicial cesante ó excedente de las categorias fijadas en el artículo 3.° del Real Decreto de 22 de Diciembre de 1902[1]). Tambien, según el artículo 42 de dicha ley adicional podrán ingresar en la categoria de jueces de término ciertos funcionarios de la carrera judicial ó abogados que hayan ejercido su profesión en determinadas condiciones. La diferencia entre los Juzgados de entrada, ascenso y término no afecta para nada á las atribuciones y facultades de los jueces que son en todos las mismas. Es, tan solo, cuestión de sueldo y categoría. Los jueces de Madrid y Barcelona tienen categoría y sueldo de magistrados; los primeros desde la publicación de la Ley Orgánica, y los segundos desde la de la Ley de 15 de Marzo del año 1906.

Las Audiencias territoriales[2]) son quince; todas ellas de igual categoria, excepto las de Madrid y Barcelona que se consideran de ascenso[3]). Para el examen de los asuntos civiles en que han de entender tiene cada Audiencia una Sala de lo Civil compuesta de cuatro magistrados y un Presidente de Sala, excepto en las de Las Palmas, Palma y Pamplona en que una sola Sala entiende en lo civil y criminal, y en las de Madrid y Barcelona en que hay dos Salas de lo Civil con un respectivo Presidente cada una.

Al frente de cada Audiencia hay un Presidente y una Sala de Gobierno, compuesta de los Presidentes de Sala, y del Fiscal de la Audiencia. En cada Audiencia hay un Secretario de Gobierno que es el Secretario del Tribunal y el de la Sala de Gobierno. Las Salas de justicia tienen tambien sus respectivos Secretarios, llamados antes Relatores.

El Tribunal Supremo de Justicia fué creado en España por los legisladores de las Cortes de Cadiz. La Constitución politica de 1812, en su artículo 259, lo instituyó con la denominación de Supremo Tribunal de Justicia. Sufrió las vicisitudes por que pasó dicha Constitución, hasta que en 1834, por Real Decreto de 24 de marzo,

---

[1]) Son estas categorias: Vicesecretarios interinos de Audiencia de lo Criminal, ó Secretario judicial; Jueces de entrada de Ultramar ó Promotores fiscales de entrada y sus asimilados de Ultramar.

[2]) Se llaman territoriales para distiguirlas de las de lo criminal que son muchas más. Tambien en los juzgados estableció la Ley orgánica una separación completa entre lo civil y lo criminal, pues para lo primero creó los Tribunales de partido y para lo segundo los jueces de instrucción; pero esta separación no existe, por cuanto un mismo juez se llama de instrucción cuando interviene en lo criminal, y de primera instancia cuando interviene en lo civil. Las actuales Audiencias son herederas directas de las antiguas Chancillerias.

[3]) La de Madrid porque asi lo dispone el art. 40 de la Ley orgánica, y la de Barcelona por la reforma de este articulo decretada por la Ley de 15 marzo del año 1906.

Advocates and Notaries. The assessors, who with the municipal judge, must form the municipal Tribunal, are appointed in the same way. The office lasts four years, and is compulsory on those who have none of the excuses or reasons for resigning, determined by the said Law of 1907, article 9; and the following are to be preferred: — those who combine the general circumstances specified in article 9, and who are also officials of the judicial career, in the position of a supernumerary, either compulsorily or voluntarily, for at least a year prior to the date of their appointment, or aspirants for the judicial career, who have obtained their place after competitive examination, or advocates; and in default of all these, those who possess an Academic title issued by the State, and in the last resort, inhabitants who know how to read and write and have the most commendable qualifications. The new law declared the office of municipal judge to be incompatible with offices of senator, parliamentary deputy, provincial deputy or municipal councillor, with the exercise of any other jurisdiction, and with the profession of advocate, with the duties of solicitor or business agent, of public official, and any services remunerated by the State, the Royal house, the province or municipality, with appointments in mercantile companies or partnerships with privileges or subventions from the Nation, and in companies which are lessees of national, provincial or municipal income.

The courts of the first instance are also unipersonal, and in accordance with art. 4 of the Royal Decree of 29 December 1838 are divided into three categories: de entrada, ascenso and termino. The entrance into the career, according to art. 35 of the Law additional to the Organic must be made through the category of judges "de entrada". And for nomination there is required, besides the general conditions to which we have before referred, membership of the Corps of Aspirants (Cuerpo de Aspirantes) to the Judicial Bench, which body is entered by competitive examination, or being an ex-judicial functionary or a supernumerary of the categories fixed by art. 3 of the Royal Decree of 22 December 1902[1]). Likewise, according to art. 42 of the said additional Law, certain functionaries of judicial career and advocates who have practised their profession in certain conditions are admissible to the category of judges "de termino". The difference between the Courts "de entrada, ascenso y termino" in no wise affects the attributes and powers of the judges, which are the same in all. It is only a question of pay and category. The judges of Madrid and Barcelona have the category and pay of judges of the Court of Appeal; the former from the publication of the Organic Law, the latter from that of the Law of 15 March 1906.

There are five territorial Courts of Appeal[2]); all of the same category, except those of Madrid and Barcelona which are considered as "de ascenso"[3]). For the investigation of the civil affairs which they have to try, each Court of Appeal has a Chamber on the Civil side, composed of four judges and its President, except in those of Las Palmas, Palma and Pamplona, in which a single Chamber tries both the civil and criminal cases, and in those of Madrid and Barcelona in which there are two Chambers on the Civil side, each one with its own President.

At the head of each Court of Appeal there is a President and an Administrative Court, composed of the Presidents of the Chambers and of the Public Prosecutor of the Court of Appeal. In each Court of Appeal there is a Court Secretary who is the Secretary of the Tribunal and of the Administrative Court. The Chambers of Justice have likewise their respective Secretaries (masters), formerly called Relators.

The Supreme Tribunal of Justice in Spain was created by the Cortes of Cadiz. The State Constitution of 1812, by art. 259, founded it under the name of Supremo Tribunal de Justicia. It suffered from the vicissitudes through which the said Constitution passed, until by the Royal Decree of 24 March 1834, it was finally organized

---

[1]) These categories are: Interim Subsecretaries of the Court of Appeal on the criminal side, or judicial secretary; Colonial judges "de entrada" and Attorneys General "de entrada" and their Colonial colleagues.

[2]) They are called territorial to distinguish them from the criminal, which are many more. In the Juzgados, likewise, the Organic Law established a complete separation between the civil and criminal, as for the civil it created the Tribunals "de partido" and for the second, the magistrates; but this separation does not now exist, for the same judge is called a magistrate when acting on the criminal side, and of the first instance when acting on the civil. The present Courts of Appeal are the direct heirs of the old Chancillerias.

[3]) That of Madrid, because art. 40 of the Organic Law so provides, and that of Barcelona by the amendment of this article by Law of 15 March 1906.

se organizó definitivamente con el nombre de Tribunal Supremo de España é Indias; y su creación determinó la supresión de los Consejos de Castilla é Indias, de los puede decirse heredero directo en sus funciones judiciales. La Ley Orgánica le llama Tribunal Supremo tan solo. Su organización ha variado mucho desde su creación. Segun la Ley orgánica se componia de un Presidente, cuatro Presidentes de Sala y veinte y ocho magistrados á razon de siete magistrados por Sala.

Eran estas: la Sala de lo civil, la Sala de admisión en lo criminal, la Sala de casación en lo criminal y la Sala de recursos contra la Administración. Al reorganizarse el Consejo de Estado por el Real Decreto de 20 de Enero de 1875, y conferir á este alto cuerpo el caracter de Tribunal Contencioso administrativo[1]), se suprimió la última de las Salas. Por la Ley de presupuestos de 1893 se suprimió la Sala tercera de este Tribunal, cuya nueva organización y competencia se reguló por el Real Decreto de 29 de agosto del mismo año, quedando reducido entonces á dos Salas, una de lo civil y otra de lo criminal, cada una con su Presidente respectivo y nueve magistrados la primera y ocho la segunda.

Suprimido de nuevo por la Ley de 5 de abril de 1904 el Tribunal de lo Contencioso administrativo del Consejo de Estado, se ha creado, por virtud de la misma, una nueva Sala en el Supremo, compuesta de un Presidente y seis magistrados, de los cuales tres han de ser procedentes de la carrera administrativa en el grado de jefe superior de administración. El Tribunal Supremo tiene, lo mismo que las Audiencias territoriales, una Sala de Gobierno, compuesta del Presidente del Tribunal, de los Presidentes de las Salas de Justicia y del Fiscal, y un Secretario de Gobierno que lo es de la Sala de este nombre, del Tribunal y de la Presidencia. Hay tambien un Vicesecretario. Las Salas de justicia tienen sus respectivos Secretarios, que antes se llamaban relatores.

Todos los cargos de la judicatura son inamovibles, como garantia para la más recta administración de justicia. Los jueces y magistrados que ejerzan funciones permanentes, sin limitación de tiempo; los que tuvieren limitación, por el tiempo que se les señalare. Y esta inamovilidad consiste en el derecho á no ser destituidos, suspensos, trasladados ni jubilados sinó por las causas taxativas que la ley marca[2]). Como defensa, contra el posible abuso que pudiera resultar del ejercició del poder judicial, conceden, la Ley Orgánica y la de Enjuiciamiento civil y criminal, á los particulares que conceptuen lesionados sus derechos por actos de los jueces y magistrados, el recurso de responsabilidad civil y criminal; el primero, para la reparación económica de los daños sufridos, y el segundo, para la reparación penal[3]).

II. Tribunales arbitrales.

Los Tribunales arbitrales son nombrados por voluntad de las partes; las cuales han de hacer la designación del juez ó jueces por si mismos, pudiendo ser uno, tres ó cinco, con la condición de que el tercero, por lo menos, ha de ser designado de común acuerdo lo mismo que si se designase uno solo.

Los árbitros han de ser letrados, mayores de veinticinco años y han de estar en el pleno uso de los derechos civiles. Su nombramiento ha de hacerse en escritura pública la cual habrá de ajustarse á las condiciones taxativamente marcadas en el artículo 793 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Las actuaciones[4]) del juicio arbitral se han de practicar por ante un escribano[5]) del Juzgado de primera instancia designado por los árbitros. El procedimiento á que han de ajustarse es el que marca la ley para el juicio correspondiente, excepto en lo referente á los plazos, ya que

[1]) La *jurisdicción contencioso-administrativa* es la llamada á resolver las cuestiones litigiosas que se promueven entre la Administración activa en materias de su competencia y los particulares que consideran lesionados sus derechos por los actos de aquella.

[2]) Artículos 221 á 243 de la Ley orgánica.

[3]) La responsabilidad criminal se exige con arreglo á lo prevenido en el capitulo 1.° del titulo V de la Ley orgánica, y en el titulo II del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de septiembre de 1882. Y la civil, con arreglo á lo dispuesto en el capitulo II del titulo V de la Ley orgánica y en el titulo VII del libro II de la Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de febrero de 1881.

[4]) *Actuaciones* se llama al conjunto de actos que constituyen el pleito; los cuales han de quedar debidamente reseñados en el expediente judicial.

[5]) *Escribano* es el nombre que se dá á los secretarios de los juzgados de primera instancia; y se llaman asi porque son los encargados de hacer constar por escrito cuanto es de interés en el pleito.

under the name of Tribunal Supremo de España é Indias; and its foundation was the occasion of the suppression of the Consejos de Castilla é Indias, of whose judicial functions it may be said to be the direct heir. The Organic Law called it only Tribunal Supremo. Its organization has varied much since its creation. According to the Organic Law it was composed of a President, four Presidents of the Chamber and twenty eight judges, being seven judges per Chamber.

They were the following: the Chamber on the civil side, the Chamber of admission on the criminal, the Chamber of Appeal on the criminal side and the Chamber of Appeal against the Administration. On the reorganization of the Council of State by Royal Decree of 20 January 1875, there was conferred on this high body the character of Tribunal Contencioso-administrativo[1]), and the last of the Chambers was suppressed. By the budget of 1893 the third Chamber of this Tribunal was suppressed, and the new organization and jurisdiction of the latter was regulated by Royal Decree of 29 August of the same year, it being then reduced to two Chambers, one on the Civil side, and one on the Criminal, each with its President and with nine judges in the first and eight in the second.

The Tribunal Contencioso-administrativo of the Council of State was again suppressed by the Law of 5 April 1904, and by the same law a new Chamber of the Supreme Court was created, composed of a President and six judges, of whom three must have had an administrative carreer in the grade of Higher Chief of administration. The Supreme Tribunal has, like the territorial Courts of Appeal, a Governing Chamber, composed of the President of the Tribunal, of the Presidents of the Chambers of Justice and of the Public Prosecutor, and a secretary of the Government who is the Secretary of the Chamber, of the Tribunal and of the Presidency. There is also a sub-secretary. The Chambers of Justice have their own secretaries, who were formerly called Relators.

All the judicial officers are removeable, as guarantee of the most correct administration of justice. The ordinary and appeal judges perform permanent functions, without limitation of time; those who are limited, for the time which is appointed. And this irremoveability consists in the right of not being dismissed, suspended, transferred or superannuated, except for the definite reasons set out in the law[2]). As a defence against the possible abuse of the exercise of the judicial power, the Organic law and that of Civil and Criminal Procedure grant to individuals who consider their rights injured by the acts of the judges, an appeal of Civil and Criminal responsibility; the former, for reparation in money for damages suffered, and the latter for penal reparation[3]).

II. Tribunals of Arbitration.

The tribunals of arbitration are appointed at the will of the parties, who must themselves nominate the judge or judges, whether one, three or five, provided that the third at least must be nominated by common accord, just as if only one were appointed.

The arbitrators must be barristers of more than 25 years of age and in full enjoyment of their civil rights. Their appointment must be made by notarial instrument which must conform to the conditions which are definitely set out in article 793 of the Law of Civil Procedure. The records[4]) of the Court of arbitration must be drawn up in the presence of a master[5]) of the Court of first instance nominated by the arbitrators. The procedure which has to be followed is that which the law defines for the corresponding action, except in reference to times, while it is obligatory that

[1]) The contencioso-administrativa jurisdiction is so called from its deciding questions in litigation arising between the Administration acting within its jurisdiction and individuals who consider their rights damaged by the acts thereof.

[2]) Articles 221 and 243 of the Organic Law.

[3]) Criminal responsibility is claimed in accordance with the provisions of chapter I, title V of the Organic Law, and of title II, book IV of the Law of Criminal Procedure of 14 September 1882, and Civil, in accordance with the provisions of chapter II, title V of the Organic Law, and of title VII, book II of the Law of Civil Procedure of February 3rd 1881.

[4]) *Actuaciones* are the whole of the documents which constitute the case, and which have to be duly reviewed in the file.

[5]) *Escribano* is the name given to the masters of the Courts of first instance: and they are so called because it is their duty to cause everything which is of interest in the case to appear in writing.

es forzoso que la sentencia[1]) se dicte dentro del término señalado en la escritura de compromiso de las partes[2]). La sentencia arbitral se ha de dictar en igual forma que la de los jueces de primera instancia; y de lo resuelto en ella se puede entablar la apelación[3]) ante la Audiencia respectiva, aunque pagando, la parte que lo intente, si fuere una sola, la multa que previamente ha de estipularse en la citada escritura de compromiso.

El Tribunal arbitral puede tambien constituirse para fallar un pleito ya incoado ante el juzgado correspondiente; en cuyo caso, nombrado el tribunal en la forma ya indicada, dejará de entender en el pleito el juez de primera instancia. Tambien puede constituirse para fallar en segunda instancia una cuestión ya resuelta en primera; en cuyo caso el procedimiento será el mismo que se seguiria ante la Audiencia, y la sentencia que recayere podrá impugnarse ante el Tribunal Supremo, lo mismo que si se tratare del fallo de aquella.

III. Tribunal de amigables componedores.

El nombramiento de los amigables componedores se hace del mismo modo y en las mismas condiciones que quedan indicadas para el nombramiento de los árbitros; teniendo en cuenta que para ser amigable componedor basta ser varon, mayor de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y saber leer y escribir. Los amigables componedores no han de ajustarse á procedimiento ni formalismo legal alguno más que en la redacción de la sentencia, que habrá de dictarse por ante Notario público, el cual queda encargado de notificarsela á los interesados, entregándoles copia de la misma. La sentencia ha de dictarse por mayoria de votos, y si esta no se consigue queda sin efecto el compromiso. De estas sentencias solo puede recurrirse al Tribunal Supremo en los casos y condiciones taxativamente marcados en la Ley.[4]).

Capítulo segundo. Competencia de los Tribunales.

La jurisdicción ordinaria es la competente pára conocer en los negocios civiles que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros[5]).

En materia comercial por razón de la categoria de los distintos jueces y Tribunales corresponde:

A los jueces municipales: intervenir en la celebración de los actos de conciliación[6]), ejercer la jurisdicción voluntaria en los negocios de comercio en los pueblos que no sean cabeza de partido (es decir donde no tenga su residencia oficial el juez de primera instancia) siempre que lo requiera la urgencia del negocio ó la circunstancia de existir los medios de prueba ó las mercancías ó valores de que se trate ó de haber ocurrido los hechos en el lugar ó en la circunscripción del juzgado municipal[7]); ordenar y practicar en los asuntos civiles, de que hayan de conocer los Tribunales municipales, las diligencias necesarias hasta ponerlos en estado de celebración de juicio, ejecutar los autos y sentencias que dicte el Tribunal municipal y desempeñar comisiones auxiliatorias en materia civil.

---

[1]) Las resoluciones judiciales reciben los nombres de providencias, autos y sentencias. Son *providencias* los acuerdos referentes á cuestiones de trámite. Son *sentencias* las resoluciones definitivas que ponen término al juicio en una instancia ó en un recurso extraordinario, ya aclarando por completo la cuestión planteada al juez, ya imposibilitando la continuación del juicio. Y es *auto* toda resolución judicial que no sea ni providencia ni sentencia.

[2]) Esta escritura ha de ser pública.

[3]) La *apelación* es el recurso que la ley concede al litigante para acudir al juez ó Tribunal superior del que dictó la resolución judicial definitiva (auto ó sentencia) con objeto de que no prospere lo resuelto por el inferior (aunque lo resuelto por las Audiencias puede impugnarse, no son apelables sus acuerdos). La apelación puede admitirse en uno ó en ambos efectos. *La apelación en un solo efecto* supone la posibilidad de la rectificación del acuerdo, pero no impide por el momento la ejecución de lo acordado. *La apelación de ambos efectos* supone una verdadera paralización de la acción judicial hasta que se resuelva la apelación.

[4]) Los preceptos legales referentes á estos juicios de árbitros y de amigables componedores están contenidos en las secciones 1.ª y 2.ª del titulo V del libro II de la Ley de Enjuiciamiento civil.

[5]) Tanto la Ley org. como la de Enj. civ. señalan excepciones á este principio, pero las omitimos porque no afectan á ninguna de las cuestiones mercantiles que pueden suscitarse en nuestros Tribunales.

[6]) Más adelante, al tratar de las formalidades necesarias para incoar un juicio, diremos en que consisten estos actos de conciliación.

[7]) Art. 270 de la Ley Org. y 2, 110 de la Ley de Enj. civ.

judgment[1]) should be pronounced within the time stated in the submission of the parties[2]).

An arbitral decision must be pronounced in the same form as that of the judges of first instance; and from the decision an appeal[3]) may be brought before the proper Court of Appeal, on payment by the party bringing it, if it is a single appeal, of the fine previously agreed in the submission.

A tribunal of arbitration may also be formed in order to decide an action already commenced before the proper court; in which case, the tribunal having been appointed as already indicated, the judge of first instance shall cease to try the case. It may also be formed to decide in the Court of second instance a question already decided in the first; in which case the procedure shall be the same as in the Court of Appeal, and the judgment may be challenged before the supreme Tribunal, as if it were a decision of the former.

III. Tribunal of Friendly Arbitrators.

The appointment of friendly arbitrators is made in the same way and in the same conditions as are indicated for the appointment of judicial arbitrators; remembering that to be friendly arbitrators it is enough to be a man who has reached majority, is in full enjoyment of his civil rights and knows how to read and write. Friendly arbitrators have not to conform to any legal procedure or formalism other than drawing up the judgment, which has to be pronounced before a Notary Public, whose duty it is to notify it to the interested parties by delivering them copies thereof. Judgment must be given by majority of votes, and otherwise the submission is void. An appeal can only be brought to the Supreme Tribunal in the cases and conditions definitely set out in the law[4]).

Second Chapter. Jurisdiction of the Tribunals.

The ordinary jurisdiction is competent to try civil matters which arise on Spanish territory between Spaniards, between foreigners and between Spaniards and foreigners[5]).

In commercial matters, by reason of the category of the different judges and tribunals, it is the part of the municipal judges: to take part in the acts of conciliation[6]), to carry on the voluntary jurisdiction in commercial matters in places which are not the head quarters of the partido (that is to say, where the judge of first instance has not got his official residence), whenever it is required by the urgency of the business or by the circumstance of the means of proof or the merchandise or valuables in question, existing, or of facts having occurred, in the place or division of the municipal court[7]); to order and take the necessary steps in civil matters, which have to be tried by the Municipal Tribunals, until they are placed in a condition for the action to be tried, to execute the decrees and judgments of the municipal Tribunal and to discharge auxiliary commissions in civil matters.

---

[1]) The judicial decisions receive the names of *providencias, autos* and *sentencias*. *Providencias* are decisions referring to matters of procedure. *Sentencias* are final decisions which put an end to the action (where there is no appeal) or to an extraordinary appeal, whether by completely clearing up the question put to the judge, or by making the continuation of the action impossible. An *auto* is every judicial decision which is neither *providencia* not *sentencia*.

[2]) This instrument must be notarial.

[3]) The *apelación* is the appeal granted by the law to the litigant for the purpose of applying to the judge or Tribunal superior to that which pronounced the final judicial decision (*auto* or *sentencia*) to reverse the decision of the inferior court. Although the decision of the Court of Appeal may be challenged, its *acuerdos* are not appealable. The *apelación* may be of one or both effects. That of a single effect supposes the possibility of correcting the decision without stay of execution. That of both effects supposes a real stay of the action until the appeal is decided.

[4]) The legal precepts which refer to the proceedings before judicial and friendly arbitrators are contained in sections 1 and 2 of title V, book II of the Law of Civil Procedure.

[5]) Both the Organic Law and that of Civil Procedure point out exceptions to this principle, but we omit them because they do not affect any of the mercantile questions which can arise in our tribunals.

[6]) Further on, we shall state the nature of these acts of conciliation, when treating of the formalities necessary for starting an action.

[7]) Art. 270 of the Organic Law and 2, 110 of the Law of Civil Procedure.

A los Tribunales municipales: conocer en primera instancia en materia civil: 1.° de las demandas cuyo valor no pase de 500 pesetas[1]); 2.° de los juicios atribuídos á los jueces municipales por alguna ley; 3.° de las cuestiones que surjan entre posaderos y huéspedes, cocheros y viajeros, agentes de emigración y emigrantes, marineros ó patrones de embarcaciones y personas que transporten, siempre que tales cuestiones se refieran á gastos de posadas ó fondas, importe de transporte de mercaderías ó de peaje de viajeros, indemnizaciones relacionadas con estas cuestiones, salarios devengados con ocasión de dicha clase de servicios y relaciones ó divergencias entre comprador y vendedor de animales en las ferias siempre que en ninguno de los relacionados casos exceda la reclamación de 1500 pesetas; y por último conocer de las cuestiones que se susciten en las ferias siempre que la cuantía de la cosa litigiosa no exceda tampoco de 1500 pesetas.

A los jueces de primera instancia: ejercer la jurisdicción voluntaria en los negocios de comercio; conocer en primera instancia en todos los negocios mercantiles que no correspondan á los jueces municipales; y en segunda en los juicios verbales.

A las Audiencias, en las Salas de lo civil: conocer en segunda instancia de todos los asuntos mercantiles en que hayan conocido previamente y en primera instancia los jueces de este nombre.

Y al Tribunal Supremo, en la Sala de lo civil: conocer de la admisión y fallo de los recursos de casación[2]) por infracción de ley, de doctrina legal[3]) ó quebrantamiento de forma[4]) que se presentaren contra los fallos[5]) de las Audiencias en materia comercial, y los de recursos de casación contra las sentencias de los amigables componedores[6]).

Entre los jueces y Tribunales de una misma clase y categoria la competencia en las cuestiones comerciales se regula del modo siguiente:

Es juez competente aquel á quien los litigantes se hubieren sometido expresa ó tácitamente, siempre que se trate de juez ordinario con jurisdicción para conocer de la clase y grado del negocio de que se trate. La sumisión expresa se hace renunciando claramente y terminantemente á su propio fuero[7]), y designando con toda precisión el juez á quien se sometieren. Y la tácita se hace, por el demandante, desde el momento en que acude á un juez que no es el propio por razón del fuero, y por el demandado, cuando después de personado en el juicio[8]) no se opone dentro del término legal á que continue interviniendo el juez elegido por el demandante[9]).

[1]) Se exceptuan las demandas de terceria y demás incidentales de otro juicio, y las que se deduzcan por reconvención en los juicios de mayor ó de menor cuantia. — Las *tercerias* son incidentes que pueden suscitarse en cualquier juicio declarativo ó ejecutivo por quien se conceptua con mejor derecho á la cosa objeto de la contienda judicial. — La *reconvención* consiste en la alegación que el demandado hace contra el demandante de un derecho que destruye las pretensiones de este, y le convierte en demandado á su vez.

[2]) El *recurso de casación* como su mismo nombre indica (por su procedencia francesa de la palabra *casser*, romper) es un recurso mediante el que se rompe, se anula una sentencia.

[3]) Se llama *doctrina legal* á las reglas de derecho que el propio Tribunal Supremo formula en sus sentencias para fundamentar sus fallos.

[4]) El *quebrantamiento de forma* es el que se produce cuando se infringen los preceptos esenciales de las leyes de procedimiento.

[5]) *Fallo* es sinónimo de auto ó sentencia; pero en esta última se llama *fallo* la parte resolutiva en que el juez ó Tribunal decide la cuestión que se ventila; y se llama asi porque es de ley que dicha parte empiece con la palabra *fallo*.

[6]) Las atribuciones del Tribunal Supremo en materia civil, y por consiguiente en materia comercial, hállanse determinadas en el Real Decreto sobre organización y competencia del mismo de 29 de agosto de 1893. — Además de lo dicho en el texto, los tribunales civiles entienden, á partir de los jueces de primera instancia, de resolver las competencias que se susciten respecto al conocimiento de los asuntos entre los inferiores respectivos que estén dentro del partido ó distrito en que ejerzan su autoridad; resolver las cuestiones que se refieran á la responsabilidad civil en que hayan incurrido los inferiores respectivos, encargados de la administración de justicia, (entendiendo el Tribunal Supremo en pleno de las responsabilidades civiles que traten de exigirse á algunos de sus magistrados ó Presidentes) y de los recursos de queja contra los inferiores en los casos que la ley señala.

[7]) Para este efecto se entiende por *fuero propio* el que la ley determina para el caso de no estar los litigantes de acuerdo respecto al juez.

[8]) Se llama *personarse en el juicio* la presentación en él del demandado por medio de procurador (en los casos en que se requiere la intervención de este), dándose por notificado de la entrega de la copia de la demanda.

[9]) Si se opusiere, dentro de los seis dias siguientes al de la notificación de la providencia del juez para que conteste la demanda, no se le podrá obligar á su contestación hasta que se re-

It is the part of the municipal Tribunals: to try civil matters as courts of first instance: 1. in claims the value whereof does not exceed 500 pesetas[1]); 2. In actions allotted to the municipal judges by any law; 3. In matters which arise between innkeepers and guests, drivers and passengers, emigration agents and emigrants, seamen or master-owners of vessels and the persons whom they carry, provided that such questions refer to the charges of inns, the amount of the carriage of merchandise or passenger toll, damages relating to these questions, pay due and occasioned by the said classes of services and relations, or differences between buyer and seller of animals in fairs, provided that in none of the said cases the claim exceeds 1500 pesetas.

To the judges of first instance it pertains: to carry out the voluntary jurisdiction in matters of commerce; to try in first instance all mercantile matters which do not belong to the municipal judges; and in the second instance, to try verbal proceedings.

In the Civil Chambers of the Courts of Appeal it pertains: to try in the second instance all mercantile matters which have been previously tried in the courts of first instance by the judges thereof.

To the Civil Chamber of the Supreme Tribunal it pertains: to try the admissibility and decree in appeals of cassation[2]) for breach of the law or legal doctrine[3]) or breach of form[4]) which are entered against the decrees[5]) of the Courts of Appeal in commercial matters, and appeals of cassation against the judgments of friendly arbitrators[6]).

Between the judges and Tribunals of the same class and category the jurisdiction in commercial questions is regulated in the following manner: The competent judge is the one to whom the litigants have submitted themselves expressly or tacitly, provided that he is an ordinary judge with power to try the class and grade of business in question. Express submission is made by clearly and definitely renouncing their proper forum[7]), and defining the judge to whom they submit themselves. Tacit submission is made by the plaintiff from the moment that he applies to a judge who is not the judge of his own forum, and by the defendant, when, after he has appeared in the action[8]), he does not in proper time object to the judge chosen by the plaintiff continuing to take part[9]).

[1]) Third party claims and other interlocutory proceedings in another's action are excepted, and counterclaims in actions of the greater or less amount. *Tercerias* are interlocutory proceedings which may arise in any declaratory or executive action by one who conceives that he has a better right to the subject-matter of the judicial dispute. — *Reconvención* is a pleading by the defendant against the plaintiff of a right which destroys the latter's claims and converts him into a defendant.

[2]) The appeal of *casación*, as its name indicates, by its French origin fron the word *casser*, to quash, is an appeal by means of which a judgment is quashed or annulled.

[3]) *Doctrina legal* means the rules of law which the Supreme Tribunal draws up in its judgment in order to found its decrees.

[4]) *Quebrantamiento de forma* is that which is produced when the essential precepts of the laws of procedure are broken.

[5]) *Fallo* is synonymous with *auto* or *sentencia*, but in the latter the decisive part is called *fallo*, in which the judge or tribunal decides the questions in dispute; and it is so called because that part by law has to begin with the word *fallo*.

[6]) The powers of the Supreme Tribunal in civil and consequently in commercial matters were determined by the Royal Decree of 29 August 1893, on the organization and jurisdiction thereof. — Besides what is said in the text, the civil tribunals, except the judges of first instance, try questions of jurisdiction which arise with respect to the trial of matters between the inferior courts which are within the partido or district in which they exercise their authority; decide questions referring to the civil liability incurred by the inferior courts entrusted with the administration of justice (the Supreme Tribunal having complete power to try the civil liability claimed against any of its judges or Presidents), and the appeals against a refusal of leave to appeal by the inferior courts in cases defined by the law.

[7]) For this purpose *fuero propio* means that determined by the law when the parties are not agreed on the judge.

[8]) *Personarse en juicio* means the appearance of the defendant by means of his solicitor (in the cases in which his intervention is required), acknowledging the notice of the delivery of the copy of the claim.

[9]) If he objects, within six days following the notification of the order of the judge that the claim be answered, he cannot be obliged to answer until the question of competence is decided.

En las poblaciones en que haya dos ó más jueces de primera instancia no podrá designarse especialmente á uno con exclusión de los demás, sinó que entenderá en el pleito el juez á quien corresponda por repartimiento[1]). La sumisión expresa ó tácita á un Juzgado para la primera instancia se entiende hecha para la segunda al superior jerárquico de este, sin que en ningun caso, ni con ningun pretexto, pueda hacerse lo contrario.

A falta de sumisión expresa ó tácita será juez competente en las cuestiones mercantiles: 1.° En los juicios en que se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y á falta de este, á elección del demandante, el del domicilio del demandado, ó el del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento[2]). Si fueren varios los demandados y tuvieren distintas residencias, siendo una la obligación, y no habiendose designado previamente lugar para su cumplimiento, será juez competente, á elección del demandante, el del domicilio de cualquiera de los demandados. — 2.° En los juicios en que se ejerciten acciones[3]) reales sobre bienes muebles ó semovientes, el del lugar en que se hallen, ó el del domicilio del demandado, á elección del demandante; y lo mismo en el caso en que se ejerciten acciones mixtas (personales y reales á la vez). — 3.° En las demandas[4]) sobre rendición y aprobación de cuentas el del lugar en donde deban presentarse; y si no estuviere determinado previamente el del domicilio del poderdante ó dueño de las cosas, ó el del lugar dnode se administraren, á elección de este. — 4.° En las demandas sobre obligaciones de garantia, el que lo sea para conocer de la obligación principal. — 5.° En las demandas sobre reconvención el que conociere ya en el litigio planteado, excepto en el caso en que la cuantia de la reconvención sea superior á la de que puede entender dicho juez; en cuyo caso se reserva su derecho al que reconviene para que lo ejercite donde proceda. — 6.° En las quiebras[5]), cuando fuere voluntaria la presentación del quebrado, el del domicilio del mismo; y si la quiebra se promovió por los acreedores el de cualquiera de los lugares donde se hubiere incoado un procedimiento ejecutivo, salvo que el quebrado, ó el mayor número de acreedores, solicitaren que la quiebra se sustancie en el del domicilio de aquel. — 7.° En los embargos preventivos el del lugar en que se hallaren los bienes que se han de embargar; pudiendo, en casos de urgencia, entender el juez municipal, si en dicho lugar no residiere el de primera instancia.

Las cuestiones de competencia solo pueden promoverse á instancia de parte por medio de las excepciones inhibitoria y declinatoria[6]). A un tiempo, ni simultaneamente, no pueden entablarse las dos. El juez que se considere incompetente sin que las partes promuevan la competencia, solo podrá abstenerse de conocer oyendo previamente al Ministerio fiscal y comunicándoselo asi á los interesados.

El domicilio de los comerciantes individuales, para los efectos de esta competencia, y en lo relativo á las cuestiones judiciales que tuvieren por causa de su negocio, será el del pueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales, y si

suelva la cuestión de competencia, Pasado dicho término solo podrá oponerse al contestar á la demanda, y su oposición no detendrá la marcha del juicio.

1) El *repartimiento* se hace por turno entre los distintos juzgados de una misma población, y, dentro del juzgado, entre las distintas escribanias del mismo. Los jueces tienen prohibido cursar ningun negocio en el que no conste la diligencia de reparto.

2) El *emplazamiento* es la citación hecha por el juez al demandado para que se persone en el juicio á responder de lo que se le pide.

3) *Acción* es el medio que la ley concede para poder recabar el cumplimiento de un derecho que se nos niega, y *excepción* es el medio que la ley concede para oponerse fundamento al ejercicio de la acción. Las excepciones son de dos clases: *dilatorias y perentorias;* las primeras, sin prejuzgar el fondo de lo que se pide, paralizan el ejercicio judicial de la acción por algun defecto sustancial; las segundas atacan la existencia del derecho en que se funda la acción.

4) La *demanda* es el escrito en que se pide justicia en forma legal. La forma legal consiste en exponer suscintamente, y numerados, los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoye la pretensión. Ha de expresarse en ella tambien la clase de acción que se ejercita cuando por ella haya de determinarse la competencia.

5) Las *quiebras* son los juicios procedentes cuando un comerciante ó agente mediador colegiado sobresee de un modo general en el pago de sus obligaciones, no habiendo podido conseguir una declaración judicial de suspensión de pagos.

6) La *inhibitoria* es la que se plantea ante el juez competente para que recabe del que no lo es el conocimiento de la cuestión judicial entablada. Y la *declinatoria* es la que se plantea ante el que se considera incompetente para que se abstenga de conocer, y remita los autos al juez competente.

In places where there are two or more judges of first instance, one cannot be specially appointed to the exclusion of the others, but the judge to whom it is allotted shall try the action[1]). Express or tacit submission to a Court of first instance is understood to be made for the second instance to the official superior of the latter, and in no case and under no pretext can the contrary be done.

In default of express or tacit submission the following shall be the competent judge in mercantile questions: 1. In personal actions, the judge of the place where the obligation is to be performed, and in default thereof, at the election of the plaintiff, either the judge of the address of the defendant or of the place of the contract, if the defendant is there, even casually, and the summons can be served on him[2]). If there are several defendants and they have different places of residence, and there is but one obligation, and no defined place for its performance, the judge of the address of any of the defendants, at the election of the plaintiff, shall be the competent judge. — 2. In real actions[3]) respecting moveable or self-moving property, the judge of the place where it is, or of the address of the defendant, at the election of the plaintiff; and likewise in the case of mixed actions (both personal and real at the same time). — 3. In claims[4]) for rendering and passing accounts, the judge of the place where they should be produced; and if there is no previously determined place, the judge of the place of the principal or owner of the things, or at his election, the judge of the place where they are administered. — 4. In claims arising from obligations of guaranty, the same judge as the one for trying the principal obligation. — 5. In counterclaims, the judge who already has cognisance of the original action, except when the amount of the counterclaim is greater than that which the said judge can try; in which case the defendant's right is reserved in order that he may bring his proper action. — 6. In bankruptcies[5]), when the application of the bankrupt is voluntary, the judge of his address; and if the bankruptcy is promoted by the creditors, the judge of any of the places where an executive proceeding has been commenced, save that the bankrupt or the greater number of the creditors may apply that the bankruptcy may be proved before the judge of the address of the bankrupt. — 7. In preventive arrests, the judge of the place where the property, which is the subject of the arrest is situated; though in cases of urgency, the municipal judge has jurisdiction, if the judge of first instance does not reside in the said place.

Questions of jurisdiction can only be raised by a party by means of defences tending to prohibit or decline jurisdiction[6]). The two defences cannot be filed or be on the file at the same time. A judge who considers that he has no jurisdiction, the question not being raised by either of the parties, can only decline the trial after hearing the Procurator Fiscal and giving notice to that effect to the interested parties.

The address of the individual merchants, for the purpose of this jurisdiction, and with reference to legal disputes which they may have by reason of their business, shall be that of the place where they have the centre of their commercial transactions,

---

After that time he can only object to answering the claim, and his objection will not stay the action.

[1]) The *repartimiento* (division) is made by turn between the different courts of the same place, and within the court, between the different offices thereof. The judges are forbidden to pursue any affair in the absence of the order making the division.

[2]) *Emplazamiento* is the summons of the judge directed to the defendant to appear and answer the claim.

[3]) *Acción* is the means granted by the law for obtaining the fulfilment of a denied right, and *excepción* (defence) is the means granted by the law, to oppose as a matter of substance the bringing of the action. Defences are of two classes: dilatory and peremptory; the former, without prejudice to the substance of the claim, stay the progress of the action for some substantial defect; the latter attack the existence of the right on which the action is based.

[4]) *Demanda* is the writing in which justice is sought in legal form. The legal form consists in setting out shortly and numerically the facts and legal bases on which the claim is founded. The class of action must also be expressed therein, when the jurisdiction is determined thereby.

[5]) *Quiebras* are actions which proceed when a merchant or a collegiate commercial agent suspends generally the payment of his obligations, and has not been able to obtain a judicial declaration of suspension of payment.

[6]) The *inhibitoria* defence is that filed before a judge having jurisdiction in order that he may withdraw the trial from one who has not. And the *declinatoria* defence is that which is filed before a judge who is considered to have no jurisdiction in order that he may abstain from the trial, and send the record to a judge who has.

tuvieren varios establecimientos, situados en diferentes partidos judiciales, podrán ser demandados en aquel en que tuvieren el establecimiento principal, ó en el que se hubieren obligado, á elección del demandante. El de los comerciantes sociales, el de su domicilio social; y si este no constare en la escritura de constitución social se determinará de igual modo que si se tratara de un comerciante individual.

En los casos en que el demandado no tuviere su domicilio[1]) en algun punto de la Península, Islas Balcares ó Canarias, será juez competente el de su residencia[2]). Los que no tuvieren domicilio ni residencia fija podrán ser demandados en el lugar en que se hallen, ó en el de su última residencia, á elección del demandante.

Todo esto tiene aplicación igualmente á los extranjeros que acudieren á los Juzgados españoles promoviendo actos de jurisdicción voluntaria, interviniendo en ellos, ó compareciendo en juicio como demandados ó como demandantes contra españoles ó contra extranjeros, cuando proceda que conozca la jurisdicción española con arreglo á las leyes del reino ó á los tratados con otras potencias[3]).

Parte segunda. Del procedimiento.

Titulo primero. Procedimiento contencioso.

Capítulo primero. Cuestiones previas.

I. Clases de procedimiento.

El procedimiento judicial que ha de seguirse en las cuestiones civiles comerciales es de dos clases: el contencioso y el llamado de jurisdicción voluntaria. El contencioso es el que se emplea cuando las partes no convienen en sus reciprocas pretensiones y acuden á la autoridad judicial para que decida quien tiene razón legalmente, y el llamado de jurisdicción voluntaria es el que se emplea cuando sin contienda entre partes precisa la intervención judicial para la práctica de ciertos hechos que conviene acreditar en forma legal porque de ellos pueden derivar derechos ó responsabilidades. El procedimiento contencioso civil no ofrece especialidad alguna en materia comercial fuera del procedimiento de apremio en negocios de comercio y del procedimiento de quiebras; en cambio el de jurisdicción voluntaria ofrece una serie de preceptos especiales en esta materia, agrupados en la segunda parte del libro III de la Ley de Enjuiciamiento civil, bajo el epígrafe siguiente: «De los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio.»

II. Formalidades para incoar un juicio.[4])

§ 1.° *Capacidad.*

Para incoar un juicio es preciso estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y de no estarlo, tener el representante legitimo que según la ley es llamado á suplir la incapacidad de que estuviere afecto el representado. Las entidades colectivas (corporaciones, sociedades etc.) solo podrán incoarlo por su representante legal.

[1]) La Ley municipal de 2 de octubre de 1877 en sus articulos 11 y 12 divide los habitantes de un término municipal en *residentes* y *transeuntes*, y los residentes en vecinos y domiciliados; diferenciándose los *vecinos* de los *domiciliados* en que los primeros son los españoles emancipados que residiendo habitualmente en el término se hallan inscritos con este caracter en el padrón del pueblo, mientras que los segundos son los no emancipados que residen habitualmente formando parte de la casa ó familia de un vecino. Transeuntes son todos los demás. — El *domicilio* de que habla la Ley de Enj. civ. á que se refiere el texto es el lugar que habitan de un modo permanente el vecino ó el domiciliado.

[2]) Por *residencia* se entiende en este caso el lugar en donde se habita con cierta estabilidad pero en el que no se tiene la consideración de vecino (V. la nota anterior).

[3]) Con arreglo á lo prevenido en el articulo 15 del Cod. de com. los extranjeros dedicados al comercio en España están sujetos en todo lo que al ejercicio de su profesión se refiere á la jurisdicción de los Tribunales de la nación, salvo lo que en casos particulares pueda establecerse en los Tratados y Convenios con las Potencias.

[4]) Como el presente trabajo está hecho para servir de guia á los comerciantes, y á los que no siéndolo tuvieren alguna cuestión judicial por causa ó á consecuencia de una operación mercantil, téngase en cuenta que, aún cuando la ley procesal, á que nos hemos de referir constantemente, tiene un sentido más amplio, la exposición que de sus preceptos hemos de hacer de aqui en adelante la haremos prescindiendo de todo lo que no tenga interés para los que se dedican al comercio ó practican accidentalmente algun acto mercantil.

and if they have several establishments, situated in different judicial partidos, they may be defendants in that in which they have the principal establishment, or in that of the place of the obligation, at the election of the plaintiff. The address of merchants in partnerships shall be that of the partnership; and if this does not appear in the instrument forming the partnership, it shall be determined in like manner as if it were a question of an individual merchant.

In cases in which the defendant has not his address[1]) at any place in the Peninsula, the Balearic or Canary Islands, the judge of his residence shall be the competent judge[2]). Those who have neither address nor fixed residence may be made defendants in the place where they are, or in that of their last residence, at the election of the plaintiff.

All this applies equally to foreigners who resort to the Spanish Courts and promote acts of voluntary jurisdiction, by taking part therein, or by appearing in an action as defendants or as plaintiffs against Spaniards or against foreigners, when the Spanish jurisdiction proceeds to try the case in accordance with the laws of the Realm or treaties with other Powers[3]).

Second Part. Procedure.

First Title. Contentious Procedure.

First Chapter. Preliminary Matters.

I. Classes of Procedure.

The judicial procedure which has to be followed in civil commercial questions is of two classes; the contentious and that called the voluntary jurisdiction. The contentious is that which is employed when the parties are not agreed on their mutual claims, and resort to the judicial authority to decide who is legally right, and the voluntary jurisdiction is that which is employed when, without any strife between the parties, judicial intervention is necessary for the doing of certain acts which it is convenient to prove in legal form, because from them rights or liabilities may arise. The civil contentious procedure has no peculiarity in commercial matters except the process of execution in commercial business and the bankruptcy procedure; while on the other hand, the voluntary jurisdiction affords a series of special precepts in this matter, which are grouped together in the 2nd part of Book III of the Law of Civil Procedure, under the following heading: "Acts of voluntary jurisdiction in matters of Commerce."

II. Formalities for bringing an action.[4])

§ 1. *Capacity.*

To commence an action, it is necessary to be in the full exercise of one's civil rights, and in default thereof, to have a legal representative, who according to the law, is called in to supply the incapacity with which the principal is affected. Collective entities (corporations, companies, etc.,) can only commence one by their legal representative.

---

[1]) The municipal Law of 2 October 1877, arts. 11 and 12 divides the inhabitants of a municipal area into residents and passengers, and the residents into *vecinos* and *domiciliados*; distinguishing the *vecinos* from the *domiciliados* on the ground that the former are Spaniards who are sui juris and habitually residing in the area and are inscribed as such in the local register, while the latter are persons who, not being sui juris, reside habitually in and form part of the house or family of a *vecino*. All others are passengers. — The *domicilio* of which the Law of Civil Procedure speaks and to which the text refers, is the place where the *vecino* or *domiciliado* permanently dwell.

[2]) By *residencia* is meant in this case the place where a person dwells with a certain constancy, but in which he is not a *vecino*, properly so called (See the preceding note.).

[3]) In accordance with the provisions of art. 15 of the Code of Commerce foreigners who are engaged in commerce in Spain, are as regards the practice of their profession, subject to the jurisdiction of the National Tribunals, except as provided in Treaties or Conventions with the Powers in particular cases.

[4]) As the present work is intended to serve as a guide to merchants, and for those who, not being merchants, have some legal questions caused by or the consequence of a commercial transaction, it must be remembered that, even when the law of procedure, to which we have constantly to refer, has a wider meaning, the exposition of its precepts which we have to proceed to make, we shall effect by putting on one side everything which is of no interest to those who devote themselves to commerce or casually perform some mercantile act.

§ 2.° *Designación de procurador y letrado.*

La comparecencia en juicio[1]) se ha de hacer por medio de procurador legalmente habilitado[2]) para funcionar en el Juzgado ó Tribunal que conozca en el asunto y con poder declarado bastante por un letrado[3]). El poder se ha de acompañar forzosamente con el primer escrito que se presente al Juzgado, sin cuyo requisito no se dará curso á la petición que se haga.

No precisa la intervención del procurador: en los actos de conciliación; en los juicios en que conozcan en primera instancia los jueces municipales; en los de menor cuantia; en los de árbitros y amigables componedores; en las quiebras y suspensiones de pagos, cuando se limite la comparecencia á la presentación de los titulos de crédito ó derechos para concurrir á las juntas de acreedores; en los incidentes de pobreza, embargos preventivos y diligencias urgentes que sean preliminares del juicio; y en los actos de jurisdicción voluntaria. En todos estos casos la comparecencia pueden hacerla los interesados por si mismos, ó por medio de sus administradores ó apoderados; entendiéndose que el apoderado que lo sea solo para el pleito tendrá que ser procurador habilitado siempre que lo hubiere en el pueblo.

Como el procurador responde de todos los gastos que ocasione el juicio ha de estar habilitado de los fondos necesarios para hacer frente á dichos gastos, pudiendo reclamarlos judicialmente, á su poderdante por mediacion del juez ó Tribunal que entiende en el asunto, una vez entablado, si aquel no se los facilitó con la antelación debida; salvo el caso en que dicho poderdante haya obtenido el beneficio de pobreza para litigar, ó mientras se sustanciare la pobreza, si la incoó al mismo tiempo que el pleito.

Tambien los litigantes han de estar dirigidos por letrados habilitados[4]) legalmente para ejercer su profesión ante el Juez ó Tribunal que conozca del asunto, en términos de que no se despachará ninguna petición que no lleva firma de letrado. Y pueden prescindir de él: en los actos de conciliación, en los juicios de que conocen en primera instancia los jueces muncipales y en los actos de jurisdicción voluntaria.

§ 3.° *Defensa por pobre.*

Si al incoar un pleito se pretende litigar como pobre, ya que la justicia se administra gratuitamente á los que lo son en el sentido legal, hay que acreditar esta circunstancia ante el propio juez que haya de entender en el asunto; y el expediente que se instruya al efecto se tramitará como un incidente de la cuestión principal, oyendo en el mismo á la parte contraria y al abogado del Estado[5]); entendiendo que mientras se tramite este incidente no podrá darse curso á la demanda. Los jueces podrán, sin embargo, durante dicha tramitación, practicar gratuitamente aquellas actuaciones de cuyo aplazamiento pudiera seguirse perjuicio irreparable al que pretende la pobreza.

Para conseguir, los comerciantes, el beneficio de la declaración de pobreza han de acreditar, si viven solo de su comercio, que pagan una contribución industrial inferior: á 65 y 50 pesetas respectivamente en las capitales de provincia de primera y segunda clase; á 40 en las de tercera y cuarta y demás poblaciones que pasen de 20 000 almas; á 30 en las cabezas de partido judicial de término y demás poblaciones que tengan más de 10 000 almas y menos de 20 000; á 25 en las cabezas

[1]) La *comparecencia en juicio* es el acto de presentarse al juez en demanda de justicia.

[2]) La *habilitación de los procuradores judiciales* la dá el titulo correspondiente expedido por el Estado, después de acreditar la suficiencia necesaria en un examen celebrado en la Audiencia ante el Tribunal correspondiente.

[3]) El *bastanteo* es el examen que hace un letrado del poder conferido al procurador para litigar. Si del examen resulta ser el poder suficiente, lo declara asi sobre el mismo poder, estampando la formula «es bastante», y firmando con su nombre y apellido esta declaración.

[4]) La *habilitación del letrado* la dá el titulo de Abogado expedido por el Estado, después de acreditar la aprobación en una Universidad en el examen final de la carrera de derecho. A más del titulo hay que acreditar haber cumplido 21 años, estar inscrito en el Colegio de Abogados de la respectiva Audiencia y pagar la contribución industrial correspondiente. Para ejercer la profesión en Juzgado en que no haya Audiencia, ni por consiguiente Colegio, se necesitará ser vecino ó domiciliado del pueblo en donde haya de ejercer, estar inscrito en el Juzgado y pagar la contribución.

[5]) Los *abogados del Estado* son los funcionarios que forman parte del Cuerpo de este nombre, y que, á las órdenes de la Dirección general de lo Contencioso del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, intervienen en todos los asuntos judiciales ó contenciosos que afectan á la Hacienda.

§ 2. *Appointment of Solicitor and Counsel.*

Appearance in an action[1]) must be made by means of a solicitor lawfully qualified[2]) to act in the Court or Tribunal which has cognisance of the matter, and acting under an authority passed by counsel[3]). The authority must accompany the first document presented to the Court, and in its absence the application will not be allowed to proceed.

The intervention of a solicitor is not necessary: in acts of conciliation; in actions tried in the first instance by municipal judges; in those of the lesser amount; in those before judicial or friendly arbitrators; in bankruptcies and suspensions of payment, when appearance is confined to the production of proofs of debt or rights for the purpose of taking part in creditors' meetings; in interlocutory proceedings on the ground of poverty, preventive arrests and urgent steps which are preliminary to an action; and in acts of the voluntary jurisdiction. In all these cases the interested parties may make the appearance themselves or by means of their managers or attorneys; but an attorney who is such only for the action must be a qualified solicitor, whenever there is one in the place.

As the solicitor is responsible for all the expenses occasioned by the action, he has to be provided with the funds necessary to meet those expenses, and he may claim them of his principal by applying to the Judge or Tribunal which tries the matter, when it is once started, if the former does not duly provide them in advance; except when the principal has obtained the benefit of poverty for the purpose of the litigation, or while he is substantiating his poverty, if he has commenced to do so at the same time as the action.

Litigants have also to be guided by barristers[4]) legally qualified to practice their profession before the Judge or Tribunal which tries the case, so that no application will be attended to which does not bear the counsel's signature. But they may dispense with him: in acts of concialition, in actions which are tried in the first instance by the municipal judges, and in acts of voluntary jurisdiction.

§ 3. *Defence by a pauper.*

If at the commencement of an action a man claims to litigate as a pauper, for justice is administered gratuitously to those who are such in a legal sense, this fact must be proved before the judge who has to try the matter; and the file which he draws up for that purpose will proceed as incidental to the principal question, and the opposite party and the State advocate[5]) will be heard therein; and while this interlocutory matter is proceeding the action will be stayed. However, during the course of the said proceeding, the judges may gratuitously draw up those documents, the postponement of which might irreparably prejudice the person who claims poverty.

To obtain the benefit of the declaration of poverty, merchants who live solely by their trade, have to prove that they pay a lower industrial tax: of 65 and 50 pesetas respectively in the provincial capitals of the first and second class; of 40 in those of the third and fourth class and in other places which exceed 20,000 souls; of 30 in the head-quarters of the judicial *partido de termino* and other places which have more than 10,000 and less than 20,000 souls; of 25 in the head-quarters of the

---

[1]) *Comparencia en juicio* is the act of presenting oneself to the judge and claiming justice.

[2]) *Habilitación de los procuradores judiciales* is conferred by the proper document issued by the State, after proof of the necessary qualification in an examination conducted before the proper Tribunal in the Court of Appeal.

[3]) *Bastanteo* is the examination by counsel of the authority, conferred on the solicitor. for bringing the action. If the examination proves the authority to be sufficient, he so declares on the power itself, by stamping the formula "it is sufficient", and signing this declaration with his name and surname.

[4]) The *habilitación del letrado* gives him the title of advocate, issued by the State, after proof of having passed a final University examination in law. He must also be proved to be 21 years of age, to be registered at the college of Advocates of the Court of Appeal and to pay the proper industrial tax. To practice in a Court where there is no Court of Appeal, and consequently no College, it will be necessary to be a *vecino* or *domiciliado* in the place where he proposes to practice, to be registered in the Court and to pay the tax.

[5]) The *abogados del Estado* are officials who form part of the Corporation of that name, and who, under the orders of the general Direction of State Contentious Matters, a branch of the ministry of the Exchequer, take part in all judicial or contentious matters which affect the Exchequer

de partido judicial de ascenso y entrada y demás poblaciones que tengan más de 5000 almas y menos de 10 000; y á 20 en las demás poblaciones. Si, á más de su comercio tuvieren, algun otro modo de vivir se computarán los rendimientos que tengan por todos conceptos, y si lo que percibe por unos y otros no llegare al importe del doble jornal de un bracero en la localidad en que reside, se les tendrá por pobres. Si estuviere casado y tuviere hijos cuyos bienes usufructue[1]), se computarán sus rendimientos y los de su mujer é hijos, y si entre todos no excedieren del importe del jornal de tres braceros de la localidad, se les tendrá por pobres.

Si no fuere comerciante el que litiga por una cuestión comercial, para disfrutar de los beneficios que la ley concede al pobre en el sentido legal ha de acreditar: que vive de un jornal ó salario eventual, y si tuviere un salario ó sueldo permanente ó una renta de sus bienes, que ni esta ni aquel exceden del doble jornal de un bracero en la localidad en que reside. Si vive de una industria se considerará pobre lo mismo que el comerciante por razón de la cuota que satisfaga de contribución, y si no tiene oficio, profesión ni industria, y tuviere bienes, habrán de estar estos embargados ó cedidos judicialmente á sus acreedores. En este caso, si pagados los acreedores quedaren bienes sobrantes, se aplicarán estos al pago de los gastos judiciales, á pesar de la declaración de pobreza.

Aún probados los anteriores extremos, podrá el juez denegar el beneficio de pobreza, si por el número de criados que tuvieren, por el alquiler de la casa que habiten ó por otros cualesquiera signos exteriores pueda inferirse que sus medios son superiores á los que quedan indicados.

Para la tramitación del incidente de pobreza habrá de nombrarse, si lo solicita el litigante, abogado y procurador de oficio[2]), y obtenida la declaración de pobre tendrá derecho igualmente á que se le nombren de oficio para la cuestión principal. El abogado nombrado de oficio podrá excusarse de defender al litigante si cree insostenible su pretensión; y si del informe, que habrán de dar dos letrados, designados para ello por el Colegio de Abogados, ó los dos que el juez designe donde no lo hubiere, resulta igualmente insostenible, se negarán al litigante los beneficios de la declaración de pobreza. Si el informe fuere favorable á la pretensión del litigante, entonces se nombrará un nuevo abogado de oficio, para quien es la defensa obligatoria.

§ 4.° *Acto de conciliación.*

Antes de la presentación de la demanda al juez, en los llamados juicios declarativos, será preciso intentar el llamado acto de conciliación, que, como su mismo nombre, indica tiene por objeto poner de acuerdo á los que pretenden litigar, para matar de este modo el pleito antes de que nazca. Solo en el caso de que el acuerdo entre las partes no sea posible (cuyo extremo se ha de acreditar con la certificación judicial correspondiente, que ha de acompañarse á la demanda, de haberse celebrado ó de haberse intentado sin efecto), se podrá dar curso al pleito.

Se exceptuan, sin embargo, de este requisito: los juicios verbales; los, que se promuevan como incidencia ó consecuencia de otro juicio, ó de un acto de jurisdicción voluntaria; los, en que sean demandantes ó demandados la Hacienda pública, los Municipios, los Establecimientos de Beneficencia, y en general las Corporaciones civiles de caracter público; los, en que estén interesados menores ó incapacitados para la libre administración de sus bienes; los, en que el demandado sea persona desconocida ó ausente ó sin residencia conocida, ó con residencia fuera del territorio del juzgado en donde haya de ventilarse el pleito, (salvo si el demandante residiera en el mismo pueblo que el demandado); los, en que se intente deducir la responsabilidad civil contra jueces y magistrados; los, en que se encomiende la decisión á árbitros ó amigables componedores; y los, llamados universales (de quiebra tratándose de comerciantes) y los ejecutivos.

---

[1]) Hijos que están todavia sometidos á la patria potestad y no viven con independencia de sus padres, ó están sometidos á su tutela, por hallarse incapacitados, á pesar de ser mayores de edad.

[2]) Los nombramientos de *abogado y procurador de oficio* se hacen por turno en los respectivos Colegios ó en los Juzgados correspondientes. Algunos Colegios de Abogados nombran un cierto número de abogados de oficio entre los que se inscriben ultimamente y lo solicitan. — Estos abogados á cambio de este servicio no pagan contribución, encargándose el Colegio de satisfacer á la Hacienda las cuotas correspondientes de los abogados de oficio por un reparto hecho sobre los demás colegiados.

judicial *partido de ascenso* and *entrada* and other places which have more than 5,000 and less than 10,000 soul; and of 20 in other places. If they have any other means of living besides their commerce, their income from all sources shall be reckoned, and if what they receive from all does not amount to double the wages of a day labourer in the locality where he resides, they shall be considered paupers. If he is married and has children the income of whose property he enjoys[1]), his income and that of his wife and children shall be added together, and if the whole does not exceed the amount of the wages of three day labourers of the locality, they shall be considered paupers.

If the plaintiff in a commercial question is not a merchant, in order to enjoy the benefits which the law grants to a legal pauper, he must prove that he lives on day or casual wages, and if he has permanent wages or pay or income from property, that both together do not exceed double the wages of a day labourer in the locality where he resides. If he lives on an industry, he shall be considered as a pauper, just like a merchant, by reason of the amount of tax which he pays, and if he has no employment, profession or industry, but has property, this must have been arrested or judicially assigned to his creditors. In this case, if there is a surplus after paying the creditors, it shall be applied to the payment of the legal expenses, in spite of the declaration of poverty.

The judge may refuse the benefit of poverty, even when the preceding requisites are proved, if from the number of servants which they keep, the rent of the house which they inhabit or from any other external indications, it may be inferred that their means are greater than those which are stated.

For the interlocutory proceeding on poverty, an official counsel and solicitor[2]) must be appointed, on the application of the litigant, and on obtaining the declaration of poverty, he shall likewise be entitled to the official appointments for the purpose of the principal question. The official counsel may excuse himself from defending the litigant if he believes his contention to be not maintainable; and if from the report which two counsel, appointed thereto by the College of Advocates, or in default, the two appointed by the judge, have to give, it appears equally without foundation, the benefits of the declaration of poverty shall be refused the litigant. If the report is favourable to the contention of the litigant, then a fresh official counsel shall be appointed, and on him the defence is obligatory.

§ 4. *Act of Conciliation.*

Before presenting the Claim to the Judge in declaratory actions, it is necessary to try the act of conciliation, which, as its name implies, is intended to reconcile those who propose to litigate, and thus to kill the action before it is born. Only when reconciliation is impossible may the action pursue its course, and this result must be proved by the proper judicial certificate (which has to accompany the Claim) that it has been performed or that it has been attempted without effect.

However, the following are excepted from this requirement: verbal actions; those which are brought as an incident or consequence of another action, or of an act of the voluntary jurisdiction; those in which the plaintiff or defendants are the Public Exchequer, the Municipalities, the *Establecimientos de Beneficencia*, and, in general, Civil Corporations of a public character; those in which minors or persons subject to legal incapacity for the free administration of their property are interested; those in which the defendant is a person unknown or absent or with residence unknown, or with residence outside the territory of the Court where the action is to be heard, (except when the plaintiff resides in the same locality as the defendant); those in which it is attempted to enforce civil liability against ordinary or appeal judges; those in which the decision is entrusted to judicial or friendly arbitrators; and those which are called universal (dealing with the bankruptcy of merchants) and the executive actions.

---

[1]) Children who are still under the *patria potestas* and do not live independently of their parents, or are under their guardianship, from being subject to some legal incapacity, although of age.

[2]) The appointments of the official counsel and solicitor are made in turn in the respective Colleges and Courts. Some Colleges of Advocates appoint a certain number of official counsel from among those who are last registered and who apply for it. — In exchange for this service, these advocates do not pay the tax, but the College has the duty of paying the Exchequer the amounts which affect the official advocates by dividing them among the other members.

El acto de conciliación se ha de intentar ante el juez municipal del domicilio ó de la residencia del demandado y si se suscitare competencia ó recusación[1]) del juez municipal se tendrá por intentado el acto, y la certificación que esto acredite bastará para poder plantear el pleito. Para la celebración de este acto se presentarán las correspondientes papeletas fechadas (una más de los que sean los demandados) y con las indicaciones precisas para que se conozca la pretensión y la persona ó personas de quien se pretende. Hechas las citaciones por el Juzgado, se señalará, dentro de un plazo que no baje de 24 horas, ni exceda de 8 dias desde la citación, el que en que ha de celebrarse, al cual pueden acudir los interesados ó sus apoderados, acompañados, cada uno, de un hombre bueno[2]). En la presencia del juez expondrá el demandante su pretensión; contestará el demandado, y, después de replicar y contrarreplicar, uno y otro, si no se hubieren puesto de acuerdo, procurará avenirlos el juez y los hombres buenos, y si no lo consiguieren se dará por terminado el acto. Si el demandado no compareciere, y, sí, el demandante, se tendrá por intentado el acto, y surtirá iguales efectos que si se hubiere celebrado.

Lo convenido en el acto de conciliación se llevará á efecto por el mismo juez municipal, como si se tratare de la ejecución de una sentencia dictada en juicio verbal, siempre que su cuantia no exceda de 500 pesetas. Si excede, tendrá lo convenido el valor y la eficacia de un contrato consignado en escritura pública[3]).

III. Clasificación de los juicios.

El procedimiento contencioso en los juicios es distinto según la distinta naturaleza de estos. Por eso distingue la ley entre los llamados declarativos y ejecutivos, los ordinarios y los especiales y los universales y singulares[4]). Los declarativos son al mismo tiempo ordinarios y singulares; los ejecutivos son especiales y singulares. Y los universales son declarativos especiales, si bien en ocasiones pueden no ser contenciosos por no haber oposición entre las partes que en ellos intervienen. Los juicios declarativos ordinarios son: el juicio verbal[5]) el de menor cuantia[6]) y el de mayor cuantia[7]); siendo el propiamente ordinario este último, porque cuando la ley habla del juicio ordinario sin indicación ninguna respecto á su cuantia es á él al que se refiere. Los juicios ejecutivos[8]) son: el que lleva este nombre en la ley, y el que ha de seguirse para la ejecución de las sentencias firmes[9]) cuando no se cumplen estas voluntariamente por el condenado en ellas. Los juicios ordinarios

[1]) La *recusación* es la oposición, fundada en motivo legal, á ser juzgado por un juez ó magistrado de quien puede sospecharse, por el citado motivo, que no tendrá la suficiente imparcialidad que se requiere para la administración de justicia.

[2]) Se llaman *hombres buenos*, porque su misión, aparte de la de asesorar al que lo lleva, es la de procurar la avenencia.

[3]) Las *escrituras públicas* son las otorgadas ante Notario y con las formalidades legales. La ley las equipara á los documentos públicos y solemnes, y su exhibición en juicio tiene fuerza probatoria eficaz respecto á lo en ellas convenido ó reconocido siempre que hayan sido cotejadas con sus matrices (escrituras originales que se conservan en el protocolo del notario) sacadas de estas con citación de parte, ó no hayan sido impugnadas por aquella á quien perjudiquen.

[4]) Son *declarativos* los juicios en que se pretende el reconocimiento de un derecho, y *ejecutivos* los en que se pretende el cumplimiento de un derecho que no puede desconocerse por constar su existencia de un modo auténtico y fehaciente. Son *ordinarios* los que se ajustan al procedimiento general de la ley, y *especiales* los que tienen señalado un procedimiento propio y exclusivo de los mismos. Son *universales* los que tienen por objeto el deslinde de una serie de derechos contenidos en la universalidad de un patrimonio, y *singulares* los que afectan al reconocimiento ó cumplimiento de un solo derecho.

[5]) *Verbal* es el que procede cuando la cantidad que se reclama no excede de 500 pesetas; y se llama asi, porque las actuaciones principales se practican de palabra y á presencia del juez.

[6]) *Menor cuantia* cuando la cantidad que se reclama excede de 500 pesetas y no pasando de 3000, no haya de despacharse ejecutivamente.

[7]) *Mayor cuantia* cuando la cantidad que se reclama excede de 3000 pesetas, y no procede el juicio ejecutivo.

[8]) Se llaman *ejecutivos* por dos razones: la primera, porque solo se trata de cumplir ó ejecutar aquello á que se tiene perfecto derecho, y, la segunda, por la rapidez del procedimiento que en el mismo se sigue. Para ser ejecutivos es preciso que la cantidad á reclamar exceda de 500 pesetas.

[9]) Se llama *sentencia firme* á la que ya no puede impugnarse, y es irrevocable.

The act of conciliation must be attempted before the municipal judge of the address or residence of the defendant and if objection is made to the competence of the judge or if he is challenged[1]), the act shall be considered attempted, and the certificate proving this shall suffice for commencing the action. For the performance of this act the proper dated contentions shall be presented (one more than there are defendants) and with precise statements in order that the claim and the person or persons against whom it is made may be known. After the summonses have been issued by the judge, notice shall be given, between 24 hours and eight days from the summons, of the time when the act is to be performed, at which the persons interested or their attorneys may attend, each being accompanied by a good man[2]). The plaintiff must explain his claim in the presence of the judge; the defendant must answer, and after reply and rejoinder, and if they have not come to an agreement, the judge and the good man must endeavour to make them agree, and if they do not succeed, the act terminates. If the defendant does not appear, but the plaintiff does, the act will be considered attempted, and will produce the like effects as if it were performed.

The agreement arrived at in the act of conciliation must be carried into effect by the same municipal judge, as if it were a question of executing a judgment in a verbal action, provided that the amount does not exceed 500 pesetas. If this is exceeded, the agreement will have the force of a contract stated in a notarial instrument[3]).

III. Classification of Actions.

Contentious procedure in actions differs according to the different nature thereof. Therefore the law distinguishes between those called declaratory and executive, ordinary and special, universal and singular[4]). Declaratory actions are at the same time ordinary and singular; executive actions are special and singular. Universal actions are declaratory and special, although on certain occasions they may not be contentious, through there being no opposition between the parties taking part in them. The ordinary declaratory actions are: the verbal action[5]), that of the lesser amount[6]), and that of the greater amount[7]); and properly speaking the last action is the ordinary, for when the law speaks of the ordinary action, without any statement of amount, it is to this that it refers. The executive[8]) actions are: that which bears this name in law, and that which has to be followed in the execution of final judgments[9]) when the person condemned therein does not voluntarily fulfil them. The ordinary actions,

---

[1]) *Rescusación* is the objection, based on a lawful reason, to being tried by the judge who, for the said reason, may be suspected of not having that sufficient impartiality which is required for the administration of justice.

[2]) *Buenos Hombres* are so called because their mission, apart from aiding their principal, is to procure the agreement.

[3]) *Escrituras publicas* are documents executed before a notary and with the legal formalities. The law makes them equivalent to public and solemn documents, and their production in court has probatory force, which is efficient in respect of what is agreed or acknowledged therein, provided that they have been compared with their originals (which are kept in the archive of the notary and taken therefrom on summons of the party), or if they have not been attacked by the party whom they prejudice.

[4]) Declaratory actions are those in which the recognition of a right is claimed, and the executive, those in which is claimed the performance of a right which cannot be disregarded, by reason of its existence appearing in an authentic and sufficient manner. Ordinary actions are those to which the general legal procedure applies, and the special, those which have a procedure special and exclusive to themselves. The universal are those which have for their object the demarcation of a series of rights contained in the universality of an inheritance, and singular those which affect the recognition or performance of a single right.

[5]) The *Verbal* action is that in which the amount claimed does not exceed 500 pesetas; it is so called because the principal steps are by word of mouth and in the presence of the Judge.

[6]) An action is of the lesser amount when the sum claimed exceeds 500 pesetas and does not exceed 3000, and is not executive in form.

[7]) An action is of the greater amount when the sum claimed exceeds 3000 pesetas, and is not executive in form.

[8]) They are called executive for two reasons: first, because there is only a question of performing that to which the plaintiff has a perfect right, and secondly, from the rapidity of the procedure. It is essential that the amount claimed should exceed 500 pesetas.

[9]) *Sentencia firme* is a judgment which cannot be attacked, and is irrevocable.

son, como ya hemos dicho, los declarativos; y los especiales son los ejecutivos y el universal de quiebra[1]). Y por último, los singulares son todos los enumerados, excepto el universal de quiebra.

IV. Reglas para determinar la clase del juicio declarativo.

Independientemente de la cantidad á que ha de ascender el importe de lo reclamado para determinar la cuantia del juicio, y que ya queda indicada en otro lugar[2]), se tramitará como de mayor cuantia toda petición dirigida al juzgado, cuya cuantia sea inestimable, ó no pueda determinarse con sujeción á las siguientes reglas:

Si se reclama el pago de una pensión vitalicia (seguro de renta) se multiplicará la anualidad por 10, y el producto determinará la cuantia. En las obligaciones pagaderas á plazos se calculará la cuantia por el importe total de la obligación cuando se discuta la validez de esta. Cuando varios créditos pertenecieren á diversos acreedores, pero procedieren de un mismo titulo, y el deudor fuese único, si cada acreedor de por si, ó cada grupo de acreedores, entablaren por separado su pretensión de pago, se calculará, como valor para determinar la cuantia del juicio, el total á que ascienda lo que se reclama. En los casos en que en una misma demanda se comprenda más de un crédito contra un mismo deudor, el total de los créditos reunidos determinará su cuantia. Cuando se solicite el pago del capital del crédito, con más los intereses devengados y no pagados, si estos fueren ciertos y liquidos, se computará el importe de uno y otros para fijar la cuantia, pero con relación á la fecha de la demanda. Si se pidiere la indemnización de daños y perjuicios, y se fija su importe, se sumará igualmente esta cantidad al importe de la obligación principal para calcular la cuantia.

Si la cuantia del pleito no pudiere determinarse á tenor de las reglas que quedan indicadas, el que acuda al juez habrá de fijar la clase de juicio que ha de seguirse.

V. Cuestiones que pueden suscitarse en la determinación de la cuantia del juicio.

Si el juez no estuviere conforme con el resultado del cálculo para fijar la cuantia del juicio, ó con la designación de la clase de juicio, á falta de cálculo para determinar esta, declarará su incompetencia en un auto que será apelable en ambos efectos.

El demandado puede no conformarse con la cuantia ó designación de la clase del pleito hecha por el demandante, cuya disconformidad ha de manifestarla en los cuatro primeros dias del plazo que se le ha señalado para contestar á la demanda y el juez en una comparecencia de las partes que al efecto decretará dentro de los seis dias siguientes, procurará que se pongan de acuerdo, y si, ni aún por medio de peritos, que pueden nombrar los interesados (el juez puede designar un tercero en caso necesario) se consigue el acuerdo, se hará constar el resultado en un acta que suscribirán todos, incluso el juez; y, este, en el término de dos dias, resolverá lo que estime pertinente. Si resolviere que el juicio es de mayor cuantia no se dará recurso alguno contra su acuerdo; si de menor cuantia solo se dará el recurso de nulidad[3]); y si se declara que procede el juicio verbal ante juez municipal el auto será apelable en ambos efectos. Si la duda respecto á la cuantia se suscita en el juicio verbal ante juez municipal, este, en el acto de la comparecencia, resolverá. Si se declara competente no es apelable su resolución más que en el caso de que se apele de la sentencia definitiva, y entonces el juez de primera instancia podrá declarar nulo todo lo actuado si resultare de mayor ó de menor cuantia. Y si se declara incompetente, su resolución será apelable en ambos efectos.

[1]) *Especiales* hay bastantes más que los enumerados pero estos son los únicos cuyo conocimiento interesa al comerciante ó al que practica actos mercantiles. En ocasiones el comerciante tendrá que intentar un juicio de retracto ó interdicto; lo primero si es copártícipe en la propiedad de una nave y quiere adquirir lo que vendió su condueño, y lo segundo si fuere sindico de una quiebra, y hubiere que recobrar bienes que pertenezcan á la misma, pero que estuvieren en poder de un tercero que los adquirió por un contrato declarado ineficaz por los efectos que produce la retroacción de la quiebra; pero, aún cuando asi sea, estos dos juicios son civiles por excelencia, y no hemos creido necesario exponer su tramitación por no hacer interminable este trabajo, que asi y todo, resultará excesivo.

[2]) Véanse las notas 5, 6 y 7 de la página 44.

[3]) El *recurso de nulidad* hay que anunciarlo dentro de los tres dias siguientes al auto, y solo puede interponerse al propio tiempo que el de apelación de la sentencia. Si el recurso de nulidad prospera se inutiliza todo lo actuado con posterioridad á lo que motivó su interposición.

as we have already said, are the declaratory; and the special are the executive, and the universal in bankruptcy[1]). And lastly, the singular are all those enumerated, except the universal one of bankruptcy.

IV. Rules for determining the class of Declaratory action.

Independently of the amount which the value of the relief claimed has to reach in order to determine the amount of the action, which has been already shown in another place[2]), every application to the Court the amount of which is not capable of estimation, or which cannot be determined according to the following rules, will proceed as an action of the greater amount.

If payment of a life annuity is claimed (income insurance), the annuity must be multiplied by 10, and the answer will determine the amount. In bonds payable at intervals the amount must be calculated by the total value of the bond, when the validity thereof is in dispute. When several debts belong to different creditors, but proceed from the same root of title, and there is but one debtor, if each creditor by himself, or each group of creditors, brings a separate action for payment, the total amount of what is claimed shall be calculated as the value to determine the amount of the action. In cases in which more than one debt are included in the same action against the same debtor, the total of the united debts shall determine its amount. When the action is for payment of the principal of a debt, together with the interest due but not paid, if the latter is certain and net, the value of both shall be computed in order to fix the amount, but with relation to the date of the action. If compensation for damage is applied for, and the amount is fixed, this also must be added to the value of the principal obligation in order to calculate the amount.

If the amount of the action cannot be determined according to the rules here indicated, the person who applies to the judge will have to fix the class of action which is to be pursued.

V. Questions which may arise in determining the amount of the action.

If the judge does not agree with the result of the calculation for fixing the amount of the action, or with the choice of the class of action in the absence of a calculation to fix the same, he must declare his incompetence in a decree which will be subject to appeal with a stay of execution.

The defendant may disagree with the amount or choice of the class of action made by the plaintiff, and this disagreement must be shown within the first four days of the time fixed to answer the claim, and on an appearance of the parties, which the judge shall order for that purpose within the six following days, he must endeavour to make them agree, and if this agreement is not arrived at even by means of experts, whom the parties interested may appoint (the judge may appoint a third, if necessary) he must set out the result in a minute, which must be signed by all, including the judge; and the latter must decide what he considers appropriate, within two days. If he decides that the action is of the greater amount there will be no appeal from this decision; if of the lesser amount, there will only be an appeal for nullity[3]); and if he decides that a verbal action should proceed before the municipal judge, the order will be appealable with stay of execution. If the doubt respecting the amount arises in a verbal action before the municipal judge, the latter must decide it, on the appearance of the parties. If he declares himself competent, his decision is not appealable except on appeal from the final judgment, and then the judge of first instance may declare that everything done is void, if it proves to be of the greater or lesser amount. And, if he declares himself incompetent, his decision is appealable with a stay of execution.

---

[1]) There are several more special actions than those enumerated, but these are the only ones the knowledge of which interests merchants or persons who practise mercantile acts. Occasionally the merchant will have to bring an action "de retracto" or for an injunction; the former, if he is co-owner of a vessel and wishes to acquire what his co-owner has sold; and the second, if he is assignee in bankruptcy, and wishes to recover property belonging thereto, but which is in the control of a third person who has acquired it by a contract declared void through the retroactive effect of the bankruptcy; but, although this may be so, these two actions are civil *par excellence*, and we have not thought it necessary to explain their procedure so as not to make this work, which in any case will prove excessive, endless.

[2]) See notes 5, 6 and 7 of page 44.

[3]) Notice of the appeal for nullity must be given within the three days following the order, and this can only be brought at the same time as that of the appeal from the judgment. If the appeal for nullity succeeds, everything done subsequently to that which occasioned the appeal is set aside.

Capítulo segundo. Juicio ordinario de mayor cuantia.

I. Partes en que puede considerarse dividido.

Como este juicio es el más regular, ya que en él se concede la mayor amplitud á las partes, hablaremos de él refiriendonos á las distintas partes en que puede considerarse dividido que son: preparación, planteamiento, discusión, prueba, sentencia é impugnación de la sentencia; si bien esta última la estudiaremos después de exponer los demás juicios declarativos ordinarios.

II. Preparación.

A este periodo corresponde la práctica de lo que ya quedó indicado al hablar de las formalidades necesarias para incoar un juicio; pero á más de aquello puede, antes del planteamiento del mismo, pedirse algo que interese tener previamente esclarecido. Asi, puede pedirse, al que ha de ser demandado, que declare judicialmente sobre algún hecho relativo á su personalidad, sin cuyo conocimiento no pueda empezarse el juicio; que exhiba ó deposite, según los casos, la cosa mueble que tenga en su poder y ha de ser objeto de la contienda judicial; que el vendedor ó el comprador, en el caso de evicción[1]), exhiba los titulos ó documentos que se refieran á la cosa vendida; ó que un socio exhiba los documentos ó las cuentas que se refieren á la gestión social en los casos en que proceda con arreglo á derecho. Tambien en casos de verdadera urgencia, como cuando por la edad avanzada de un testigo, peligro inminente de su vida, proximidad de ausencia á punto donde las comunicaciones sean dificiles ó tardias, ó por otro motivo poderoso, que apreciará el juez, pudiera, el que ha de plantear la cuestión, perder su derecho por falta de justificación oportuna, se podrá pedir el examen de las personas que se encontraren en alguno de estos casos.

III. Planteamiento.

El juicio se plantea con la presentación de la demanda, á la que se ha de acompañar la copia ó copias necesarias para que pueda entregarse una á cada uno de los demandados si fuesen varios. En esta demanda se ha de fijar con toda claridad lo que se pide y la persona contra quien se pide. A más de la copia ó copias referidas, se han de acompañar á la demanda: el poder conferido al procurador para litigar, la certificación del acto de conciliación celebrado en los casos en que este fuere preciso ó de haber intentado su celebración; el documento ó documentos que acrediten el caracter con el que el litigante se presenta en el juicio, en el caso de tener la representación legal de alguna persona individual ó social á quien pertenezca el derecho reclamado; y todos aquellos en que se funde el derecho del reclamante si los tuviere á su disposición, y de no tenerlos tendrá que hacer la designación del archivo ó lugar en donde se encuentren los originales; entendiéndose que los tiene á su disposición siempre que obren en un protocolo[2]) ó archivo público del que puedan obtenerse copias fehacientes. Si alguno de los documentos presentados excediere de 25 pliegos, queda relevado de presentar la copia.

Presentada la demanda en forma, y no suscitándose por parte del juez cuestión alguna de competencia, se confiere traslado de la demanda y sus anejos al demandado, á quien se le emplaza para que comparezca y se persone en juicio. Este emplazamiento habrá de hacerse directamente al interesado por medio de cédula, ó al pariente más cercano ó familiar que se hallare en su domicilio de no estar aquel, ó á los criados ó vecinos del mismo; y si, ni aún esto fuera posible, se le emplazará por medio de edictos[3]). Si no compareciese dentro del término, se le podrá acusar de rebeldia[4]), y, previo un nuevo emplazamiento por la mitad del término

[1]) La *evicción* es la obligación que tiene el vendedor de una cosa de responder de ella al comprador cuando se pone en duda el derecho de propiedad que sobre la misma tenia aquel. Como las cosas mercantiles son en general irreivindicables, sobre todo cuando han sido enagenadas en almacen ó tienda abiertos al público, la evicción no procede, en general, en las compraventas mercantiles, pero procederá en los casos en que siendo la venta mercantil no sea comerciante el vendedor.

[2]) El *protocolo* es el archivo del notario en el que se custodian los originales de los documentos en que él intervino, llamados *matrices*.

[3]) Se llaman *edictos* las disposiciones del juez ó Tribunal haciendo público lo que no ha podido notificarse á alguna de las partes, ya por haber sido declarado en rebeldia el interesado ó ya por ignorarse su domicilio, y tambien lo que interesa hacer conocer á muchos, como en los casos de subasta.

[4]) *Acusar la rebeldia* es hacer constar la resistencia á los mandatos de la autoridad judicial.

Second Chapter. Ordinary action of the greater amount.

I. Parts into which it may be considered to be divided.

As this action is the most common, since the greatest freedom is granted therein to the parties, we will speak of it in reference to the different parts into which it may be considered to be divided, and these are: preparation, filing, pleadings, proof (evidence), judgment and impugning the judgment; although we shall study this last, after explaining the other declarative ordinary actions.

II. Preparation.

To this time belongs the practice which has already been pointed out in speaking of the formalities necessary to commence an action; but in addition to that, something may be asked which it is important to have previously cleared up, before the filing thereof. Thus the proposed defendant may be asked to make a judicial declaration concerning any fact relating to his person, without the knowledge of which the action cannot be commenced; that he produce or deposit, as the case may be, the moveable which he has in his control, and which is to be the subject-matter of the judicial dispute; that the seller or purchaser, in case of eviction[1]), produce the titles or documents referring to the thing sold; or that a partner produce the documents or accounts which refer to the partnership management in the case of proceedings according to law. Also in cases of real urgency, as when by reason of the advanced age of a witness, imminent danger to his life, approaching absence in a place where communication is difficult or slow, or for any other reason which the judge considers of weight, the party who has to file the action may lose his right for want of timely evidence, he may apply for the examination of the persons who are in any of these positions.

III. Filing.

The action is started by presenting the claim, which has to be accompanied by the necessary copy or copies for delivery of one to each of the defendants, if there are several. In this claim the relief and the person from whom it is sought must be stated with perfect clearness. Besides the said copy or copies, there have to accompany the claim: the authority for bringing the action, conferred on the solicitor, the certificate of performance of the act of conciliation in those cases in which it is necessary to be made or attempted; the document or documents proving the character in which the litigant brings the action, when he is the legal representative of any individual or corporate person owning the right claimed; and all those on which the right of the plaintiff is based, if he has them at his disposition, and if he has not got them, he must point out the archive or place where the originals are to be found; it being understood that he has them at his disposition, whenever they are in a public register[2]) or archive from which authentic copies can be obtained. If any of the documents produced exceed 25 sheets, he is relieved from producing a copy.

When the Claim has been duly presented, and no question of competence arises on the part of the judge, a copy of the Claim and its annexed documents are served on the defendant, who is then summoned to appear in the action. This summons must be communicated by means of a writ directed to the party interested or to the nearest or most intimate relation at his address, if he is not there, or to the servants or neighbours; and if even that is not possible, he shall be summoned by means of advertisements[3]). If he does not appear within the time, he may be accused of default[4]), and after a new summons for half the previous time, on non-appearance, he shall be

[1]) *Evicción* is the obligation on the seller of a thing to answer therefor to the purchaser, when the former's right of ownership thereof is disputed. As mercantile things are not in general subject to *Reivindicatio*, and above all when they have been sold in a warehouse or shop open to the public, *evicción* in mercantile sales generally has no place, but it lies when the sale is mercantile and the seller is not a merchant.

[2]) The protocol is the archive of the notary in which are kept the originals (called Matrices) of the documents in which he takes part.

[3]) *Edictos* are the orders of a judge or tribunal publishing what it has not been possible to notify to one of the parties, either because he has been declared in default or from his address being unknown, and also what is important to make known to many people, as in the case of an auction.

[4]) *Acusar de rebeldia* is to disclose resistance to the orders of the judicial authority.

del anterior, y sin comparecencia, se le declarará en rebeldia, y se tendrá por contestada la demanda, á instancia del actor. Si los demandados fuesen varios no se podrá acusar la rebeldia á ninguno de ellos hasta que transcurra el plazo concedido al último que se emplazó.

Si el demandado se persona en juicio dentro del término, se le tendrá por parte en el pleito y se le concederá un plazo para contestar.

Pero, como la cuestión puede estar mal planteada, la ley consiente que antes de contestar á la demanda, ó bien al mismo tiempo de contestar, se aleguen por el demandado las excepciones dilatorias, teniendo en cuenta que, si se plantean antes y con oportunidad[1]), suspenderán el curso del pleito hasta que se diluciden estas cuestiones previas, y, si se plantean al contestar, solo lo suspenden cuando se reconoce la verdad de la excepción alegada.

Estas excepciones son: la incompetencia de jurisdicción, de que ya hemos hablado[2]); la falta de personalidad del demandante, ya por no tener la capacidad necesaria para estar en juicio[3]), ó por no acreditar en debida forma el caracter ó representación con que reclama; la del procurador del demandante, por insuficiencia ó ilegalidad del poder: la del demandado por no tener el caracter ó la representación con que se le demanda; la *litis pendencia*[4]) en otro Juzgado ó Tribunal; y, por último, el defecto legal en el modo de proponer la demanda[5]). Si el demandante fuere extranjero tambien será excepción dilatoria la del arraigo del juicio[6]) en los casos y en la forma que en la nación á que pertenezca se exija á los españoles.

Las excepciones han de formularse en un mismo escrito, salvo las que, por no hacerlo oportunamente, se formulen al tiempo de contestar á la demanda. Se sustanciarán en forma de juicio por el procedimiento rápido que la ley señala para los incidentes[7]), y de que más adelante hablaremos.

IV. Discusión.

Admitida la demanda, y resueltas á favor del demandante las cuestiones incidentales que puedan haberse promovido al alegar en tiempo y forma las excepciones dilatorias que hubiere propuesto el demandado, se entra de lleno en el periodo de la discusión del pleito con la contestación á la demanda, que ha de hacerse dentro del término marcado por el juez, ó dentro de la prórroga, si se hubiere solicitado y concedido.

Esta contestación ha de presentarse en igualdad de condiciones que la demanda, con el poder y la documentación necesaria en que funde su oposición á esta, tanto originales como en copia; y en forma análoga en cuanto á la exposición. En esta contestación deberán alegarse las excepciones perentorias que tuviere y las dilatorias no propuestas en tiempo hábil, asi como la reconvención en los casos que proceda[8]). Tambien podrá pedirse en la contestación, por causa de urgencia, el examen de testigos, en igual forma, y por los mismos motivos que en las diligencias preparatorias del juicio pudo pedir el demandante.

1) Es decir dentro de los seis dias siguientes al de la notificación de la providencia en que se ordena contestar á la demanda.

2) Al tratar de la competencia.

3) Tambien de esto hemos hablado al tratar de las formalidades necesarias para incoar un juicio.

4) La *litis pendencia* supone el planteamiento anterior de la misma cuestión judicial, todavia en curso, ante otro juez ó Tribunal.

5) *Defecto legal en proponer la demanda* Consiste este defecto en que la demanda no se haya redactado en la forma que previene la ley.

6) El *arraigo del juicio* existe cuando el extranjero garantiza previamente las responsabilidades pecuniarias que pudieren exigírsele como consecuencia de la cuestión judicial planteada. Esta excepción, aunque consignada en la L. de Enj. civ., no puede prosperar, á partir de la declaración del art. 27 del Cód. civ. que concede á los extranjeros los mismos derechos civiles que las leyes conceden á los españoles, á excepción de la práctica de las profesiones que requieran titulo del Estado para su ejercicio y del desempeño de cargos que tengan aneja autoridad ó jurisdicción.

7) Los *incidentes* son cuestiones secundarias que surgen al plantear el pleito ó durante su tramitación, y que han de tener relación inmediata con el asunto principal que se ventila ó han de referirse á la validez ó nulidad del procedimiento.

8) La *reconvención* procede en todo caso en el que se puede oponer un derecho á otro, salvo aquel en que por razón de la materia no pueda conocer de ella el mismo juez que entiende en la cuestión planteada.

declared in default, at the instance of the plaintiff, and shall be considered to have answered the Claim. If there are several defendants, none of them can be accused of default until the time appointed for the last has transpired.

If the defendant appears to the action within the time, he will be a party thereto, and will be appointed a time to answer.

But as an action may not be wrongly started, the law allows that before or at the time of answering the Claim, dilatory defences may be pleaded by the defendant, remembering that if they are filed before the answer and in due time[1]), the action will be stayed untill these previous questions are decided, and that if they are filed at the time of the answer, it is only stayed if the truth of the pleaded defence is acknowledged.

These defences are: want of jurisdiction, of which we have already spoken[2]); absence of personality in the plaintiff, whether for not having the legal capacity necessary to appear in legal proceedings[3]), or for not duly proving the character or representative capacity in which he sues; insufficiency or illegality of the authority of the solicitor to the plaintiff; the defendant not having the character or representative capacity in which he is sued; *litis pendencia*[4]) in another Court or Tribunal; and lastly, a legal defect in the mode of putting forward the Claim[5]). If the plaintiff is a foreigner there will also be the dilatory defence of security for costs[6]) in those cases and in the form in which the nation to which he belongs requires it of Spaniards.

The defences have to be drawn up on the same document, except those which from being out of time, are drawn up at the time of answering the Claim. They must be substantiated in the same mode of rapid procedure as the law directs for interlocutory applications[7]), of which we shall speak further on.

IV. Pleadings.

After admission of the Claim, and when the incidental questions which have been put forward at the instance of the defendant in duly pleading dilatory defences, have been decided in favour of the plaintiff, the case, on the answer to the Claim, enters on the time for argument, which must be within the term fixed by the judge, or within its extension, if this has been applied for and granted.

This answer has to be presented in like conditions as the Claim, with the authority and documents, both original and copies, necessary to found its opposition thereto; and in an analogous way as regards production. In this Answer the peremptory defences and the dilatory defences not put forward in time must be pleaded, as well as the counterclaim, where available[8]). Application may also be made in the Answer for the examination of witnesses by reason of urgency, in the same way and on the same grounds as the plaintiff may apply for them in the steps preparatory to the action.

---

1) That is to say, within the six days following the notification of the order to answer the Claim.

2) In dealing with jurisdiction.

3) We have also spoken of this in dealing with the formalities necessary for commencing an action.

4) *Litis Pendencia* supposes the previous starting of the same and still existing litigation before another Judge or Tribunal.

5) *Defecto legal en proponer la demanda.* This defect consists in the Claim not being drawn up in legal form.

6) *Arraigo del juicio* exists when the foreigner gives security in advance for the pecuniary liabilities which may be claimed of him as a consequence of the action. This defence, although set out in the Law of Civil Procedure, cannot succeed since the declaration in art 27 of the Civil Code, which grants to foreigners the same civil rights as their laws grant to Spaniards, except the practice of the professions which require a State licence and except the discharge of duties which have authority or jurisdiction annexed.

7) *Incidentes* are secondary questions which arise on starting the action or during its course and which must have immediate relation with the principal matter in question, or refer to the validity or nullity of procedure.

8) *Reconvención* applies to every case in which one right may be opposed to another, except when, by reason of the subject-matter, the same judge who tries the principal action cannot try it.

Las excepciones y la reconvención se discutirán al mismo tiempo y en la misma forma que la cuestión principal, excepto la excepción de cosa juzgada, siendo única; porque entonces, á petición del demandado, podrá tramitarse como si fuera un incidente.

Trasladada la contestación al demandante este podrá replicar, si lo cree oportuno, dentro del plazo que se le señale para ello, en cuyo caso, el demandado puede contestar á la réplica en el escrito llamado de dúplica. En estos escritos, una y otra parte, fijarán definitivamente sus pretensiones y las razones legales que tengan en su apoyo, pudiendo modificar y adicionar lo consignado en la demanda y contestación, tanto respecto á lo principal como á lo accesorio, siempre que no se altere lo fundamental del pleito; debiendo negar ó reconocer paladinamente los hechos alegados por el contrario que les sean perjudiciales; en la inteligencia de que el silencio ó las evasivas se tendrán por una confesión explicita. Tambien pedirán por medio de *otrosi*[1]) que se falle el pleito sin más trámites ó que se reciba á prueba.

Si no se contestare á la demanda, ó si no se presentaren los escritos de réplica y dúplica dentro de los respectivos plazos, á petición de la parte contraria, se dan por presentados, y se sigue la tramitación natural del juicio.

V. Prueba.

§ 1.° *Periodos en que se divide y modo de practicarla.*

El periodo de prueba no es de necesidad en este juicio, por cuanto solo se recibirá el pleito á prueba si asi conviene á ambas partes, ó cuando conviniendo á una sola no se opone la otra, y, si se opone, decide el juez que se reciba á prueba después de oir el informe de los defensores de una y otra. Contra la resolución del juez, favorable á la celebración de la prueba, no se dá recurso alguno, pero la contraria es apelable en ambos efectos.

El término de prueba puede ser ordinario ó extraordinario, según que haya de practicarse en la Península ó fuera de la Península. El término de prueba se divide en dos partes, el primero para proponer y el seguno para practicar. Si después de los escritos de réplica y dúplica ocurriere algun hecho de influencia notoria en la decisión del pleito ó hubiere llegado á noticia de alguna de las partes alguno anterior, del cual juren no haber tenido conocimiento antes, podrán alegarlo durante el primer periodo de la prueba exponiéndolo concretamente en un escrito que se llamará de ampliación, al cual contestará la parte contraria confesando ó negándolo ó alegando otros hechos que aclaren ó desvirtuen el del escrito de ampliación.

Las pruebas habrán de concretarse á los hechos que como definitivos se hayan fijado en los escritos de réplica y dúplica ó en los de demanda y contestación, y en los de ampliación si los hubiere, siempre que no hayan sido confesados llanamente por la parte á quien perjudiquen.

Las pruebas se practicarán en audiencia pública con asistencia de las partes y de sus defensores, á quienes se citará previamente para que concurran á presenciarlas si quisieren; y si las pruebas hubieren de practicarse fuera del lugar en que resida el juez, podrán las partes designar persona que las presencie en su representación.

§ 2.° *Medios de prueba.*

Lo son: la confesión en juicio; los documentos públicos y solemnes; los documentos privados y la correspondencia; los libros de los comerciantes; el dictamen pericial; el reconocimiento judicial y los testigos.

A. Confesión en juicio. Desde que se reciba el pleito á prueba hasta la citación para sentencia en primera instancia, todo litigante está obligado á declarar bajo juramento, cuando asi lo exijiere el contrario. Esto aparte de la obligación de declarar en las diligencias preparatorias del pleito cuando lo decrete el juez á petición de parte.

El juramento que ha de prestar el declarante podrá ser, á voluntad de la otra parte, decisorio ó indecisorio[2]). Las preguntas[3]) á que ha de contestar han de for-

[1]) El *otrosi* es una palabra bárbara, y de significación curialesca tan solo, que se emplea al comienzo de un párrafo para advertir que se va á tratar de una cosa distinta de lo pedido como principal en el escrito. Equivale al modo adverbial «*además de esto.*»

[2]) *Juramento decisorio* se llama el que presta el declarante cuando la parte que solicita su declaración admite como prueba plena ó inconcusa cuanto diga aquel. El *indecisorio* el que solo perjudica al declarante.

[3]) Las preguntas hechas por escrito se llaman, con arreglo al tecnicisno legal, *posiciones*; y la contestación á estas recibe el nombre de *absolución* de posiciones.

The defences and counterclaim will be argued at the same time and in the same way as the principal question, except the defence of *res judicata*, if it is the only one; for then, on the application of the defendant, it may be tried as if it were an interlocutory proceeding.

When the Answer has been delivered to the plaintiff, he may reply, if he thinks fit, within the time fixed therefor, in which case the defendant may answer the Reply in a document called the Rejoinder. In these documents both parties must define their contentions and the legal reasons supporting them, and can alter and add to what is set forth in the Claim or Counterclaim, with regard both to what is principal and accessory, provided that the foundation of the action is not altered; they must clearly deny or admit the facts pleaded by the other side by which they are prejudiced; in the sense that silence or evasive answers will be held to be an explicit admission. Likewise they may apply by means of *otrosi*[1]) that the decision be given without further procedure or that it be received to proof.

If the Claim is not answered, or if the Reply and Rejoinder are not presented within their respective times, they will, on the application of the opposite party, be considered to be presented, and the natural course of the action will be followed.

V. Proof.

§ 1. *Times into which it is divided and the mode of proceeding.*

The period of proof is not a matter of necessity in this action, for it will only be received to proof if it suits both parties, or when it suits one party and the other does not oppose, or, if he opposes, the judge decides that it be received to proof after hearing the representatives of both sides. There is no appeal against the decision of the judge, if it is in favour of the evidence being given, but if adverse, it is appealable with a stay of execution.

The time for proof may be ordinary or extraordinary, according to whether it has to be performed within or without the Peninsula. The time for proof is divided into two parts, the first to propose and the second to perform. If after the Reply and Rejoinder there happens any fact of obvious importance for the decision of the action, or which had come to the notice of one of the parties somewhat earlier, and of which they swear that they had not had knowledge before, they may plead it during the first period of the proof, by setting it out concisely in a document called the ampliation, to which the opposite party must answer by admitting or denying it or by pleading other facts which explain or exhaust the document of ampliation.

The proofs must be confined to the facts which have been definitely fixed by the Reply and Rejoinder or in the Claim and Answer, and in the Ampliation, if any, provided that they have not been fully admitted by the party prejudiced by them.

The proofs shall take place in public hearing in the presence of the parties and their representatives, who shall be previously summoned to attend if they so desire; and if the evidence has to be taken away from the place in which the judge resides, the parties may appoint a person to be present on their behalf.

§ 2. *Means of proof.*

These are: admission in the action; public and solemn documents; private documents and correspondence; merchants' books; the opinion of experts; judicial verification and witnesses.

A. *Admission in the action.* After receiving the action to proof and until the summons for judgment in a Court of first instance, every litigant is bound to depose on oath, when so required by his opponent. This is besides the obligation to depose in the steps preparatory to the action when so ordered by the judge on the application of a party.

The oath which the deponent has to take may be decisive or indecisive, at the wish of the other party[2]). The questions[3]) which he has to answer must be set out

[1]) *Otrosi* is a barbarous word with only a forensic meaning. It is used at the beginning of a paragraph to introduce something different from the principal object of the document. It is equivalent to "Moreover".

[2]) *Juramento decisorio* is the oath taken by the deponent when the party who applies for his deposition admits whatever he says as full and incontrovertible evidence. The *indecisorio* oath is one which can only injure the deponent.

[3]) In legal technicality, questions asked in writing are called *posiciones* (interrogatories); and the answer to them receives the name of *absolución* de posiciones.

mularse por escrito, y presentarse al juez en pliego cerrado ó abierto, ó bien presentarse en el acto del interrogatorio. Al juez corresponde declarar la pertinencia ó impertinencia de las preguntas. Si no compareciere, ni alegare justa causa para ello en la segunda citación se le tendrá por confeso. El declarante ha de responder por si mismo y de palabra, salvo si la pregunta se refiere á hechos que no sean personales del declarante; en cuyo caso puede negarse á contestar ó pedir que se oiga la declaración de un tercero que hubiere intervenido en ellos á nombre del litigante; pero en este caso tendrá que pasar por lo que este declare. Las contestaciones han de ser afirmativas ó negativas, pudiendo agregarse las explicaciones que el juez estime necesarias. Las partes podrán hacerse por si mismas las preguntas que de momento, y á presencia del juez, crea este precisas para esclarecer los hechos. La parte que se negare á declarar, ó que no concurriere sin justa causa á la segunda citación, se la tendrá por confesa.

B. Documentos publicos y solemnes. Son documentos de esta clase los autorizados por un notario ó empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley[1]). Entre estos, y por la condición notarial que les asigna el Código de de comercio á los agentes de Bolsa y corredores colegiados de comercio, figuran las certificaciones expedidas por los mismos con referencia al libro registro de sus respectivas operaciones. Tambien lo son las ejecutorias[2]) y actuaciones judiciales de todas clases.

Si el documento público se aporta por uno de los litigantes tan solo, y es impugnada su autenticidad ó exactitud por el otro, habrá de cotejarse con su original, prévia citación de la parte á quien perjudique, á no ser que se trate de ejecutorias y certificaciones de sentencias expedidas en forma legal por el Tribunal que las hubiere dictado, ó de escrituras públicas antiguas que carezcan de protocolo, ya por no haberlo tenido ó ya por haber desaparecido.

Si se aporta por orden del juez, (y asi han de aportarse todos los que no pudieren acompañarse originales al formular la demanda), el cotejo posterior es innecesario, porque el mandamiento judicial[3]) ha de ser compulsorio, dice la ley, y prévia citación de la parte perjudiciada.

Los documentos otorgados en otras naciones tendrán el mismo valor que los autorizados en España, siempre que el asunto ó materia sobre que versen sea licito y permitido por las leyes de España; tengan los otorgantes la aptitud y capacidad legal para obligarse con arreglo á las leyes de su pais; su otorgamiento se haya ajustado á lo prevenido en las respectivas leyes del lugar en que se otorgaron; y esté debidamente legalizado, y contenga los demás requisitos necesarios para su autenticidad en España.

Todo documento redactado en cualquier idioma que no sea el castellano habrá de presentarse acompañado de la traducción correspondiente; y si esta fuere privada, y se impugnare por falta de fidelidad y exactitud, habrá de remitirse para su traducción oficial á la oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado.

C. Documentos privados, correspondencia y libros de los comerciantes. Los documentos privados y la correspondencia, que obren en poder de los litigantes, se han de presentar originales, y unirse á los autos[4]). Si forman parte de un expediente, legajo ó libro podrán exhibirse para que se saque testimonio[5]) de lo que señalen los interesados; y lo mismo ha de hacerse si el documento obra en poder de un ter-

[1]) V. la nota respecto á las escrituras públicas. Las solemnidades requeridas por la ley para los demás documentos públicos consisten en que el documento expedido por un funcionario público ha de referirse al ejercicio de sus funciones; y si se trata de copias ó certificaciones de documentos existentes en archivo público ó dependencia del Estado ó corporación pública se expidan por el encargado de su custodia, y por mandato de autoridad competente.

[2]) *Ejecutoria* es el documento público y solemne en que se transcribe una sentencia firme. (Vide pag. 38 la nota 1.)

[3]) *Mandamiento* es la órden que el juez dirige á los funcionarios que le están en cierto modo subordinados, como los registradores de la propiedad y notarios del distrito, para que expidan las certificaciónes ó testimonios correspondientes de sus registros ó protocolos. Y se llama *compulsorio* porque es obligación del que lo expide cotejarlo con el original á que se refiere. Tambien se llama *mandamiento* á la órden dirigida á los auxiliares de la administración de justicia dependientes del juzgado para que hagan ó ejecuten alguna cosa.

[4]) Los *autos* son el expediente original del pleito.

[5]) *Sacar testimonio* es reproducir por funcionario público competente el documento ó la parte de él que se exhibe para determinados efectos.

in writing, and presented to the judge in closed or open sheets, or presented at the time of the examination. The judge must declare the relevancy or irrelevancy of the questions. If the deponent does not appear, nor plead a just cause for absence, on the second summons, he will be held to have admitted. The deponent has to answer in person and orally, except when the question refers to facts which are not personal to him, in which case he may refuse to answer or may apply that the deposition of a third party, who has taken part therein in the name of the litigant, may be heard; but in this case he will have to abide by what the latter deposes. The answers have to be either affirmative or negative, but if the judge considers them necessary, explanations may be added. The parties may themselves ask the questions which, at the moment and in presence of the judge, the latter thinks necessary to explain the facts. The party who refuses to depose, or who, without just cause does not attend on the second summons, will be held to have admitted.

B. *Public and solemn documents.* Documents of this class are those authenticated by a notary or public official with the solemnities required by law[1]). Among those, and by reason of the notarial character given by the Code of Commerce to brokers on the Exchange and collegiate commercial brokers, are the certificates issued by them with reference to the register-book of their respective transactions. Final judgments[2]) and judicial documents of all classes are the same.

If the public document is put in by one of the litigants alone, and its authenticity or correctness is challenged by the other, it must be compared with its original, on previous summons to the party prejudiced, except in the case of final judgments or certificates of judgments issued in legal form by the tribunal which pronounced them, or of ancient public documents which are unregistered, either from not having been registered or from the register having disappeared.

If it is put in by order of the judge (and thus all have to be put in which could not be attached as originals on formulating the Claim[3]), subsequent comparison is unnecessary, because the judicial order must be compulsory, as says the law, on previous summons to the party prejudiced.

Documents executed in other countries will have the same value as those authenticated in Spain, provided that the matter or subject-matter to which they relate is lawful and permitted by the laws of Spain; that the grantors have legal fitness and capacity to bind themselves according to the laws of their country; that their execution has been agreeable to the provisions of the laws of the place of execution; and that they are duly legalised (by notarial certification), and contain the other requisites necessary for authenticity in Spain.

Every document expressed in any language other than the Castillian, must be produced accompanied by the corresponding translation; and if the latter is a private document and is impugned for want of faithfulnees and correctness, it will have to be sent for official translation to the office of the Interpretation of Languages in the Ministry for Foreign Affairs.

C. *Private documents, correspondence and merchants' books.* Private documents and correspondence, which are under the control of the litigants, must be presented as originals, and attached to the record[4]). If they form part of a file, bundle or book, they may be produced for the purpose of making certified copies[5]) of what the interested parties point out; and the same must be done if the document is in the control

---

[1]) See note with respect to notarial documents. The formalities required by the law for other public documents are, that the document issued by a public official must relate to the exercise of his functions; and in the case of copies or certificates of documents in the public archives or charge of the State or a public corporation, that they are issued by the person entrusted with their custody, and by order of a competent authority.

[2]) *Ejecutoria* is the public and solemn document in which a final judgment is transcribed. (See page 38, note 1.)

[3]) *Mandamiento* is the order directed by the judge to the officials who are in some way his subordinates, as the registrars of ownership and the notaries of the district, to issue certificates or certified copies of their registers. And they are called *compulsorio* because it is the duty of the person who issues it to compare it with the original to which it refers.

[4]) *Autos* are the original file in the action.

[5]) *Sacar testimonio* is the reproduction of the document, or the part thereof which is produced for certain purposes, by a competent public officer.

cero, que no quiere desprenderse de él y consiente su exhibición. Si el documento privado se reconoce por la parte perjudicada hace prueba plena. El reconocimiento puede hacerse en los escritos de contestación á la demanda ó en los de réplica y dúplica y ampliación. De no hacerse asi habrán de reconocerse bajo juramento y á presencia del juez. Si se negare la autenticidad del mismo habrá de procederse al cotejo de letras, ya por confrontación con otros documentos indubitados, ó por escrito hecho á presencia del juez con intervención de peritos revisores, sin que sea obligatorio para el juez el dictamen pericial.

Para la prueba de la correspondencia y libros de los comerciantes se tendrá en cuenta lo que dispone el Código de comercio[1]).

D. Dictamen pericial. Cuando sea preciso para apreciar la importancia de algun hecho tener ciertos conocimientos técnicos, cientificos, artisticos ó industriales, procederá el dictamen pericial, que habrán de dar los llamados peritos[2]).

El perito ó peritos, (han de ser uno ó tres), habrán de nombrarse por acuerdo de las partes, y, de no ponerse de acuerdo para el nombramiento, se hará este por el juez, sorteándolos, si dentro del partido judicial hubieren tres ó más que paguen la contribución correspondiente por la profesión de que se trate por cada uno de los que hubieren de nombrarse. Si no llegaren al número indicado, el juez designará libremente los que se necesiten. Los peritos podrán ser recusados por las partes cuando haya motivo racional para dudar de la imparcialidad de su informe.

Podrán las partes pedir al perito ó peritos, al emitir su informe si fuere verbal, ó después de emitido si fuere escrito, y en el acto de su ratificación[3]) ante el juez, cuantas explicaciones consideren precisas para el esclarecimiento del hecho de que se trate. Si hubiere discordia entre los peritos cada uno emitirá de palabra ó redactará por escrito su informe.

El informe pericial no obliga al juez.

E. Reconocimiento judicial. Consiste esta prueba en la inspección ocular hecha por el juez de algo que conviene que éste examine por si mismo. A esta inspección podrán acompañar al juez las partes contendientes, sus representantes y letrados, y, en ocasiones, personas prácticas ó peritas que puedan ilustrar al juez. Unos y otros podrán hacer de palabra las observaciones que crean pertinentes, pero á los últimos les recibirá previamente juramento de decir verdad.

Del resultado de la inspección y las observaciones que durante la misma se hicieren se extenderá la oportuna acta, que firmarán todos los que á ella concurran.

F. Testigos. Esta prueba tiene escasisima importancia en el derecho comercial, fuera de lo referente á la justificación de ciertos hechos que pueden ocurrir durante la navegación maritima, ya que, respecto de los contratos, declara el artículo 51 del Código de comercio que por si sola no es bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuantia exceda de 1500 pesetas. Y respecto de los que no pasen de esta cifra tiene el comercio, en la inmensa mayoria de los casos, otros muchos medios de prueba preferibles al de la de testigos.

Solo los hechos, que no puedan probarse por ninguno de los otros medios de prueba hasta aqui enumerados, podrán acreditarse por medio de testigos; y eso teniendo en cuenta lo que acabamos de decir respecto á los contratos cuya cuantia exceda de 1500 pesetas.

Los testigos han de ser capaces[4]), y no han de tener tacha[5]). Se han de presentar préviamente en lista y han de ser interrogados separadamente y por orden de lista

[1]) V. los artículos 46, 47 y 48 del Cód. de com. en el texto de las leyes.

[2]) *Peritos* son, los que, por razón de su titulo oficial, tienen reconocida competencia en la materia de que se trata. Si la aptitud requerida no está reglamentada por las leyes, ó no hubiere peritos con titulo profesional en el lugar en que haya de decidirse la cuestión, podrá serlo cualquier persona entendida ó práctica en la materia, siendo preferidos los que paguen contribución por el arte ó profesión de que se trate.

[3]) La *ratificación* es la declaración de conformidad con la que consta en un escrito referente á manifestaciones hechas de palabra ó por escrito por el que se ratifica.

[4]) Son incapaces naturalmente: los locos ó dementes; los ciegos y sordos, en las cosas cuyo conocimiento depende de la vista ó del oido; y los menores de catorce años.

[5]) *Tacha en los testigos* es tener incapacidad legal para serlo. Y son incapaces legalmente: el que es pariente por consanguinidad ó afinidad dentro del cuarto grado civil del litigante que le haya presentado; el que es socio, dependiente ó criado del que lo presente; el que tiene interés directo ó indirecto en el pleito ó en otro semejante; el que ha sido condenado por falso testimonio; ó el que es amigo intimo ó enemigo de uno de los litigantes.

of a third person, who does not desire to part with it and consents to its production. If the document is acknowledged by the party prejudiced thereby, it affords conclusive evidence. The acknowledgment may be made in the Answer to the Claim or in the Reply, Rejoinder or Ampliation. Otherwise it must be acknowledged on oath and in the presence of the judge. If the authenticity thereof is denied, proof must proceed by comparison of the letters, or by comparison with other undoubted documents, or by writing made in the presence of the judge and experts, but the judge is not bound to take the opinion of the latter.

For proving correspondence and books of merchants attention must be paid to the provisions of the Code of Commerce[1]).

D. *Opinion of Experts.* When for the appreciation of the bearing of any fact, it is necessary to have certain technical, scientific, artistic or industrial knowledge, opinion must be taken of persons called experts[2]).

The expert or experts (there must be one or three), must be appointed by agreement between the parties, and if they do not agree on the appointment, the expert shall be appointed by the judge by lot, if there are within the judicial partido three or more who pay the proper tax of the profession in question for each one of those who have to be appointed. If they do not amount to the number indicated, the judge shall be at liberty to nominate those who are required. Experts may be challenged by the parties when there is any reasonable ground for doubting the impartiality of their report.

The parties may apply to the expert or experts on issuing their report, if it is verbal, or after issuing it, if in writing, or at the time of its ratification[3]) before the judge, for any explanations which they may consider necessary for clearing up the fact in question. If there is a disagreement between the experts, each shall issue his report verbally or in writing.

An expert report does not bind the judge.

E. *Verification by the judge.* This evidence consists in ocular inspection by the judge of something which it is proper that he should examine himself. At this inspection the judge may be accompanied by the contending parties, their representatives and counsel, and, on occasions, by practical or expert persons who can enlighten the judge. Both may make the verbal observations which they think pertinent, but the latter must previously take an oath to speak the truth.

A proper record must be made of the result of the inspection and observations made during it, which must be signed by all who have taken part therein.

F. *Witnesses.* This evidence is of very slight importance in commercial law, except in proving certain facts which take place during a maritime voyage, since article 51 of the Code of Commerce declares with respect to contracts, that verbal evidence is not alone sufficient to prove the existence of a contract the amount of which exceeds 1500 pesetas. And in respect of those which do not exceed this figure, commerce has, in the immense majority of cases, many other means of proof which are preferable to that of witnesses.

Only facts which cannot be proved by any of the other means of evidence hitherto enumerated, may be proved by means of witnesses; taking also into account what we have just said with respect to contracts the amount whereof exceeds 1500 pesetas.

Witnesses must not be subject to any natural[4]) or legal incapacity[5]). A list of them must be previously produced, and they must be interrogated separately and

[1]) See articles 46, 47 and 48 in the text of the law.

[2]) Experts are those who by reason of their official title, have a recognized competence in the matter in question. If the fitness required is not regulated by the law, or there are no experts with professional title in the place where the question is to be decided, any person learned or practising in the matter may be so, with preference to those who pay tax for the art or profession in question.

[3]) *Ratificación* is the declaration that statements made by word of mouth or in writing by the person who is corroborated, agree with what appears in a writing.

[4]) The following are naturally incapable: idiots and madmen; the blind and deaf, in cases the decision of which depends on sight or hearing; and children under 14 years of age.

[5]) *Tacha en los testigos* is to have legal incapacity to give evidence. The following are legally incapable: a person who is related by consanguinity or affinity within the fourth civil degree to the litigant who presents him; a partner, clerk or servant of the same; a person who has a direct or indirect interest in the action or a like action; who has been convicted of giving false evidence; or who is an intimate friend or enemy of one of the litigants.

á presencia del juez y de las partes si quieren asistir, después de prestar juramento de decir verdad y con arreglo á los interrogatorios de preguntas y repreguntas que habrán de redactarse por escrito oportunamente.

§ 3.° *Resultado de las pruebas.*

Practicadas las pruebas propuestas, y unidas estas á los autos, informarán las partes oralmente ó por escrito acerca del resultado de las mismas. El informe escrito es lo que se llama escrito de conclusiónes y el oral es la llamada vista pública.

El escrito de conclusiones procede cuando ninguna de las partes pidió, dentro de los tres dias siguientes á haberles notificado la providencia del juez mandando unir las pruebas á los autos, que se celebrara la vista pública; ó cuando, habiéndolo solicitado una de las partes, y no estando conforme en ello la otra, lo acordare asi el juez. En este escrito, que habrán de redactar cada una de las partes, se hará un resumen claro, breve y metódico de los hechos objeto del debate, del resultado de las pruebas propuestas y practicadas en relación con dichos hechos, y de las pretensiones que, como consecuencia de todo lo actuado, se mantienen, con los fundamentos de derecho que se alegaren en los respectivos escritos del debate judicial y la cita, sin comentarios, de las demás disposiciones aplicables al caso.

Presentados estos escritos, ó transcurrido el término que se señaló para ello sin haberlos presentado, se declara concluso el pleito, y se manda traer los autos á la vista con citación de las partes para sentencia.

Cuando se hubiere acordado la celebración de la vista pública, se entregarán los autos á las partes para su instrucción; y terminada esta, se señalará dia para la vista, en el que oirá el juez á los defensores de las partes que se presenten. Y terminados los informes, ó sin ellos, si no hubieren acudido los respectivos defensores, se declarará concluso el pleito para sentencia.

VI. Sentencia.

La sentencia[1]) pone término á la contienda judicial en la respectiva instancia. Tratándose de juicios declarativos ordinarios ha de dictarse y publicarse[2]) en el plazo maximo de doce dias después de concluso el pleito, ó de quince si los autos excedieren de mil folios (hojas), sin que por ninguna razón ni pretexto pueda aplazarse, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito, ni aún en el caso de oscuridad é insuficencia de la ley, ó falta de ella[3]); incurriendo en responsabilidad el juez que tal hiciere, salvo de que hubiere de fundarse en el supuesto de la existencia de un delito; pero entonces, oyendo el parecer del Ministerio fiscal[4]) si se estimare necesaria la formación de causa criminal, habrá de dictarse un auto de suspensión de sentencia.

La sentencia deberá ser clara, precisa y congruente con las pretensiones formuladas en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando ó absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos objeto del debate, con la debida separación unos de otros. La condena de frutos, intereses ó daños y perjuicios ha de hacerse fijando su importe liquido, y de no ser posible esto, las bases para hacer su liquidación, y, si ni aún esto es posible, se hará la condena, á reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia.

Firmada y publicada no pueden variarse ni modificarse los términos de la sentencia por ningun motivo, pero si aclarar algun concepto oscuro, ó suplir cualquiera omisión que se advierta sobre lo discutido en el pleito; pero estas aclaraciones ó adiciones han de hacerse de oficio dentro del del dia siguiente al de la notificación.

[1]) V. pag. 38 la nota 1.

[2]) La *publicación de la sentencia* es la lectura de la misma hecha, en el Juzgado ó Tribunal constituido en audiencia pública, por el propio juez ó magistrado ponente después de extendida en los autos y firmada. Esta publicación ha de estar autorizada por escribano ó secretario del juzgado ó Tribunal.

[3]) Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido (dice el articulo 6 del Cód. civ.) se aplicará la costumbre del lugar y, en su defecto los principios generales del derecho.

[4]) El *Ministerio fiscal*, representado en todos los juzgados y Tribunales por uno ó varios funcionarios (fiscales), es el que representa directamente el interés público ó social en la administración de justicia.

in order of the list in the presence of the judge and of the parties who desire to be present, after taking an oath to speak the truth in accordance with the questions of the examination in chief and the cross-examination, which must be reduced to writing in good time.

§ 3. *Result of the evidence.*

When the proposed evidence has been taken and attached to the record, the parties may address the Court on the result thereof orally or in writing. The written address is what is called the document of conclusions and the oral is called the public hearing.

The document of conclusions is used when none of the parties has applied for a public hearing within the three days following the receipt of the notice of the judge's order directing the evidence to form part of the record; or when on the application of one party and the opposition of the other, the judge so orders. In this document, which each of the parties has to draw up, there must be a clear, brief and orderly resumé of the facts which are the subject-matter of the dispute, of the result of the evidence put forward and taken in relation to the said facts, and of the contentions which are supported as the consequence thereof, with the grounds of law which they plead in the respective documents of the judicial discussion, and the citation, without comment, of other provisions applicable to the case.

On the presentation of these documents, or on the expiration of the time appointed therefor without their being presented, the action is declared closed, and an order is made to bring the record to trial with citation of the parties for judgment.

When a public hearing has been ordered, the record must be delivered to the parties for their information; and subsequently a day must be appointed for the hearing, on which the judge will hear the representatives of the parties who present themselves. At the end of the speeches, or without them, if the respective representatives have not attended, the action must be declared closed for judgment.

VI. Judgment.

Judgment[1]) puts an end to the judicial dispute in that Court. In the case of ordinary declaratory actions, it must be pronounced and published[2]) within the maximum time of twelve days after the close of the action, or fifteen, if the record exceeds a thousand pages, and for no reason or pretext may the decision of the questions which have been discussed in the action be put off, deferred or refused, not even in the case of obscurity or insufficiency of the law, or the want thereof[3]); the judge who so acts incurs liability, except when his action is based on the supposition of the existence of a crime; but then, after hearing the opinion of the Public Prosecutor[4]) as to whether he thinks it necessary to start a criminal prosecution, he must pronounce an order suspending judgment.

The judgment must be clear, concise and agreeable to the contentions formulated in the action, and must make the required declarations, condemning or acquitting the defendant, and deciding all the points which have been the subject-matter of the dispute, duly distinguishing one from another. Judgment for produce, interest or damages must be given by fixing the net amount thereof, and if this is not possible, the bases for calculating the same, and if this again is not possible, judgment must be given, reserving the fixing of the amount and making it effective on the execution of the judgment.

When a judgment has been once signed and published, the terms thereof cannot be altered for any reason, except to explain some obscurity, or to supply any omission of what has been discussed in the action; but these explanations and additions must be officially made within the day following that of the notification.

---

1) See page 38, note 1.

2) The publication of the judgment is the reading thereof in the Court or Tribunal met for public hearing, by the same ordinary judge or the President of the Court of Appeal, after it is drawn up in the record and signed. This publication must be verified by the master or secretary of the Court or Tribunal.

3) Art. 6 of the Civil Code says that when there is no law exactly applicable to the point in controversy, the customs of the place, or in default thereof, the general principles of the law must be applied.

4) The Public Prosecutor, represented in all the Courts and Tribunals by one or more officials (fiscals), is the person who directly represents the public or social interest in the administration of justice.

Notificada la sentencia á las partes, no puede estimarse, sin embargo, como firme más que por la conformidad de estas, manifestada tácitamente por dejar transcurrir los cinco dias siguientes al de la notificacion sin apelar de ella; entendiendose que estos cinco dias se cuentan, en el caso de haber pedido aclaración ó adición de la misma, desde la notificación del auto en que se haga ó se deniegue lo pedido. Transcurrido este plazo la sentencia se considera firme, sin necesidad de declaración especial para ello. Si es absolutoria[1]) queda definitivamente terminada la contienda judicial, y si es condenatoria[2]) entra de lleno en el periodo de ejecución.

Interpuesta la apelación en tiempo[3]) y forma, se ha de admitir forzosamente por el juez que dictó la sentencia, quedando esta en suspenso mientras se tramita aquella, ya que la apelación de una sentencia en juicio declarativo ordinario de mayor cuantia es siempre admisible en ambos efectos. Esta apelación dá lugar á la segunda instancia, que corresponde ya al periodo de impugnación de la sentencia.

Capítulo tercero. Juicio ordinario de menor cuantia y juicio verbal.

I. Juicio ordinario de menor cuantia.[4])

La tramitación de este juicio se acomoda á las reglas que quedan indicadas respecto al de mayor cuantia; salvo las diferencias que vamos á indicar brevemente.

Todos los plazos para las actuaciones son más breves, á excepción del término extraordinario de prueba, cuando proceda, y del de apelación de la sentencia ó autos, asi como los que la ley concede para impugnar las providencias del juez. No existe plazo especial para personarse en juicio, debiendo hacerse esto al mismo tiempo que se contesta á la demanda. Si el demandado no se presenta en tiempo se le declara en rebeldia sin nuevo emplazamiento. En el periodo de discusión no hay más escritos que el de demanda y contestación. Si, el demandado, cree improcedente el juicio de menor cuantia, puede oponerse dentro de los cuatro primeros dias. En la contestación á la demanda habrán de proponerse todas las excepciones, tanto dilatorias como perentorias; las cuales se resolverán al tiempo de dictar la sentencia; absteniéndose de resolver sobre la cuestión de fondo si procediere la estimación de alguna de las excepciones dilatorias. Si la excepción de reconvención tiene por objeto un asunto de mayor cuantia el juez declarará la improcedencia sin ulterior recurso, y continuará su curso el pleito. El resultado de las pruebas se apreciará en información oral (vista pública), pues no hay escrito de conclusiones. La sentencia se dictará dentro de los cinco dias siguientes al de la comparecencia, y es apelable en ambos efectos. Si, durante la tramitación, se interpusiere en tiempo y forma apelación contra algun auto se tendrá por interpuesta, pero sin interrumpir el curso del pleito; y si se reprodujere la apelación, al mismo tiempo que se interpone la de la sentencia, se tramitarán, en la segunda instancia, las dos apelaciones al mismo tiempo.

II. Juicio verbal.[5])

Su tramitación es mucho más rápida que la de los anteriores. Se inicia por escrito, por medio de una sencillisima demanda, extendida en papel común, en la que se han de hacer constar: los nombres, domicilio, profesión ú oficio del demandante y demandado ó demandados; la pretensión que se deduce; la fecha de presentación al juez; la firma del demandante ó de un testigo á su ruego, si no supiere ó pudiere firmar. De esta demanda se acompañarán las copias necesarias, según el número de los demandados.

Si, el Tribunal municipal, se declarare incompetente, dictará auto á continuación de la demanda, y en la misma papeleta en que se contenga esta; el cual se comunicará al demandante para que haga uso de su derecho, ya apelando del auto, ya acudiendo al juez competente.

---

1) *Sentencia absolutaria* es la en que no se accede á la petición hecha al juez ó Tribunal.

2) Sentencia condenatoria es la en que se manda ú ordena algo que puede consistir en hacer ó no hacer, pero siempre de conformidad, en todo ó en parte, con lo que se pidió en la demanda, ó en la contestación á la demanda si hubo reconvención.

3) Dentro de los cinco dias, y suscrita por letrado.

4) V. pag. 44 la nota 6.

5) V. pag. 44 la nota 7.

When the judgment has been notified to the parties, it still cannot be considered final except by their agreement, tacitly shown by allowing the five days following the notification to expire without appealing against it; it being understood that these five days are reckoned, when there is no application for an explanation or addition thereto, from the notification of the order made or from the refusal of the application. After the expiration of this time the sentence is considered final, without the necessity of a special declaration thereof. If the judgment is in favour of the defendant[1]), the judicial dispute is finally terminated, and if it is against the defendant[2]), it enters fully into the period of execution.

If an appeal is entered in due time[3]) and form, the judge who pronounced the judgment is bound to admit it, and the judgment is stayed while the appeal is proceeding, for an appeal from a judgment in an ordinary declaratory action of the greater amount always operates as a stay. This appeal goes to the Court of second instance which belongs to the period for impugning the judgment.

Third Chapter. Ordinary Action of the lesser amount and the verbal action.

I. Ordinary action of the lesser amount.[4])

The procedure in this action follows the rules pointed out in respect of that of the greater amount; saving the differences which we proceed briefly to indicate.

All the times for the written proceedings are shorter, except the extraordinary time for the proof, when it takes place, and that of the appeal from the judgment or orders, as also those granted by the law for impugning the orders of the judge on procedure. There is no special time for appearing in the action, but this must be done at the time of answering the Claim. If the defendant does not appear in time, he is declared to be in default (rebeldia) without further summons. During the period for pleading, there are no other documents than the Claim and Answer. If the defendant considers an action of the lesser amount improper, he may object within the first four days. All the defences, both dilatory and peremptory, must be taken in the Answer to the Claim; these must be decided at the time of pronouncing the judgment; but the question of substance must not be decided, if the trial of any of the dilatory defences is proceeding. If a counterclaim has an affair of the greater amount for its subject-matter, the judge must declare it to be bad without further appeal, and the action will continue its course. The result of the evidence must be stated in oral speeches (public hearing) but there is no document of conclusions. Judgment must be pronounced within the five days following that of the appearance, and is appealable with stay of execution. If during the proceedings an appeal is entered in due time and form against any order, it will be considered entered, but without interrupting the course of the action; and if the appeal is reproduced at the same time as that from the judgment is entered, both appeals will proceed in the Court of second instance at the same time.

II. Verbal Action.[5])

Its procedure is much more rapid than that of the former. It begins in writing on ordinary paper with a most simple Claim, in which have to appear : the names, addresses, professions or offices of the plaintiff and defendant or defendants; the contention which is made; the date of presentation to the judge; the signature of the plaintiff, or of a witness at his request if he cannot write. This Claim must be accompanied by the necessary copies, according to the number of the defendants.

If the Municipal Tribunal declares that it has no jurisdiction, it must make an order in continuation of the Claim, and on the same document as that on which the latter is contained; which must be communicated to the plaintiff in order that he may avail himself of his right, either to appeal from the order or to go before a competent judge.

---

1) *Sentencia absolutoria* is a judgment in which the application made to the judge or Tribunal is not acceeded to.

2) *Sentencia condenatoria* is that in which something is commanded or ordered which may consist in doing or not doing, but always wholly or partly in accordance with what is sought in the Claim, or in the Answer to the Claim, if there is a Counterclaim.

3) Within the five days, and it must be signed by counsel.

4) See page 44, note 6.

5) See page 44, note 7.

Si, por el contrario, se creyere competente el Tribunal municipal, dentro de segundo dia, dictará providencia citando á las partes á una comparacencia en el dia y hora seña lados, que habrá de celebrarse, después de pasadas veinte y cuatro horas de la citación, y antes de los seis dias. En esa comparecencia, á la cual podrán concurrir los interesados, acompañados de alguna persona, que hable por ellos en defensa de su derecho, expondrán las partes sus respectivas pretensiones, y, después, se admitirán las pruebas pertinentes que cada uno aduzca, uniéndose los documentos á los autos. A continuación del acta, que habrán de firmar todos los concurrentes, y en la que se ha de hacer constar el resultado de la comparencia, dictará el juez, dentro del mismo dia, y, á lo más tardar dentro del siguiente, la sentencia definitiva. Si, el demandado hubiese opuesto reconvención, por cantidad mayor de 250 pesetas, ó superior á 1500, si se trata de un contrato celebrado en una feria, el juez reservará en la sentencia el derecho que asista al demandante, para que use de él en forma procedente.

La sentencia, pronunciada en juicio verbal, es apelable en ambos efectos, ya en el acto de la notificación, ya dentro de los tres dias siguientes, para ante el juez de primera instancia del partido.

Capítulo cuarto. De la segunda instancia en los juicios declarativos. (Impugnación de la sentencia.)

I. Segunda instancia en los juicios de mayor y de menor cuantía.

Esta segunda instancia representa una completa sumisión de lo debatido en el juicio á la autoridad superior de la que dictó la sentencia impugnada. Por eso, en los juicios de mayor y menor cuantia entiende en segunda instancia la Audiencia territorial del distrito, y, en los verbales, el juez de primera instancia del partido.

Ya hemos dicho, que, interpuesta en tiempo y forma la apelación de una sentencia, ha de admitirse forzosamente, emplazando á las partes para ante el superior, dentro del término legal, al cual remitirá el inferior los autos. Si el apelante, ó apelantes[1]), no se personaren en forma, transcurrido que sea el plazo señalado para ello, sin necesidad de instancia del apelado, se declarará desierta la apelación, y firme la sentencia, sin ulterior recurso, devolviéndose los autos al Juzgado de donde procedan. En este caso las costas[2]), causadas por la apelación hasta declararla desierta[3]), habrá de satisfacerlas el apelante, ó apelantes.

Si el apelado no se personare en tiempo no por eso se detendrá el curso de la segunda instancia; y, si se personare después, se le tendrá por parte, pero sin retroceder en el procedimiento.

En cualquier estado de esta segunda instancia, puede el apelante desistir de la apelación pagando las costas causadas; pero para ello hace falta, ó que el litigante se ratifique con juramento en el escrito en que se pide el desistimiento, ó que el procurador presente poder especial para esto. Por incapacidad del litigante, al ratificarse en el desistimiento, ó por insuficiencia del poder, puede oponerse al desistimiento el apelado; y, subsanados estos defectos, si los hubiere, ó no habiendo oposición, se declarará firme la sentencia apelada, en los términos ya indicados, salvo el caso de que el apelado se hubiese adherido á la apelación y se opusiere por tanto al desistimiento; pues, entonces, teniendo por desistido al apelante, é imponiéndole el pago de las costas causadas, seguirá su curso la segunda instancia. Si, el desistimiento fuere anterior al momento indicado, puede el apelante adherirse, y evitar de esa manera que sea firme la sentencia apelada.

En los juicios de mayor cuantia, personado el apelante en tiempo y forma, la Sala, que entienda en la segunda instancia, mandará al relator ó secretario de la misma

[1]) Como la sentencia puede no haber satisfecho á las dos partes contendientes, la apelación puede interponerse por las dos, en cuyo caso las dos son reciprocamente apelante y apelado.

[2]) Las *costas* son los gastos hechos durante el juicio para el pago de abogado y procurador, cuando son necesarios legalmente uno y otro; de los derechos de los funcionarios judiciales que intervienen en la práctica de las diligencias; de los peritos nombrados; de los funcionarios administrativos, cuya intervención se ordena por el juez ó por la ley cuando sus servicios se retribuyen con arreglo á tarifa ó arancel; y del papel sellado que ha de emplearse en la tramitación del juicio.

[3]) Se declara *desierta* una apelación cuando el apelante desiste de ella después de intentada, y no se opone á ello el apelado.

If, on the other hand, the Municipal Tribunal considers itself competent, it must within the second day make an order summoning the parties to appear on a stated day and hour, and this must take place after 24 hours but before six days from the summons. At that appearance, when the interested parties may attend, accompanied by some person to speak on behalf of their rights, the parties must put forward their respective contentions, and afterwards the relevant evidence offered by each will be admitted, and the documents must be attached to the record. Immediately after the record thereof, which must be signed by all the parties present, and in which the result of the appearing must be set out, the tribunal must pronounce the final judgment on the same day, or at the latest on the following day. If the defendant has filed a Counterclaim for more than 250 pesetas, or for more than 1500 if it is a question of a contract made at a fair, the tribunal must in its judgment reserve the right in favour of the defendant, in order that he may avail himself of it in the proper way.

The judgment pronounced in a verbal action is appealable with stay of execution, either at the time of the notification, or within the three following days, before the judge of first instance of the "district".

Fourth Chapter. Court of Second Instance in declaratory actions. (Appeals from the Judgment.)

1. Appeals in actions of the greater and lesser amount.

This appeal represents a complete submission of the questions in dispute in the action to an authority superior to that which pronounced the impugned judgment. Therefore, in actions of the greater and lesser amount, the Court of second instance is understood to be the territorial Court of Appeal of the district, and in the verbal actions, the judge of first instance of the "district".

We have already said that when an appeal from a judgment is entered in due time and form, it is bound to be admitted and the parties summoned within the legal time to the superior court, to which the inferior court must transmit the record. If the appellant or appellants[1]) do not duly present themselves, after the time appointed therefor, without the necessity of any step by the respondent, the appeal must be declared abandoned, and the judgment to be final without further appeal, and the record must be returned to the Court from which it proceeded. In this case, the costs[2]) caused by the appeal up to its being declared abandoned[3]) must be paid by the appellant or appellants.

The course of the appeal will not be delayed by the respondent not presenting himself in due time; and if he afterwards presents himself, this will be good for the future, but without having any retroactive effect.

At any stage of the appeal the appellant may abandon it on paying the costs caused thereby; but for this it is necessary, either that the litigant should ratify on oath the document in which he applies for the abandonment, or that the solicitor should produce a special power for that purpose. The respondent may object to the abandonment on the ground of the incapacity of the litigant to ratify the same, or of the insufficiency of the power; and on these defects, if any, being made good, or if there is no opposition, the judgment under appeal will be declared final in the terms already indicated, except when the respondent has adopted the appeal and to that extent objected to the abandonment; for then, the appellant being held to have abandoned, and ordered to pay the costs caused thereby, the second appeal will follow its course. If the abandonment was previous to the moment indicated, the appellant may adopt it, and thus avoid the judgment under appeal becoming final.

In actions of the greater amount, when the appellant has appeared in due time and form, the Chamber which hears the appeal must order the master or secretary

---

[1]) As the judgment may not have satisfied either of the contending parties, an appeal may be entered by each of them, in which case, each is reciprocally appellant and respondent.

[2]) Costs are the expenses incurred during the action for payment of counsel and solicitor, when both are legally necessary; of the fees of the judicial officers who take part in making the orders on procedure; of the experts appointed; of the administrative officers, whose intervention is ordered by the judge or by the law, when their services are remunerated according to a tariff or scale; and of the stamped paper which has to be used in the course of the action.

[3]) An appeal is said to be abandoned when the appellant desists therefrom after it is entered, and the respondent does not object.

formar el apuntamiento[1]), el cual, en unión de los autos, se entregará á las partes para que se instruyan sus respectivos letrados. Estos, al devolver uno y otros, manifestarán su conformidad ó disconformidad con el apuntamiento; pidiendo, en este último caso, que se hagan en él las adiciones y rectificaciones que crean procedentes. En este escrito es en el que puede el apelado adherirse á la apelación, si hay algo en la sentencia que no le favorezca. Tambien en este escrito, y por un otrosi, deberá reproducirse la reclamación que por quebrantamiento de forma en el procedimiento se hubiere hecho en tiempo oportuno, y no hubiere sido atendida, siempre que sea de las que dan lugar al recurso de casación. Y, por último, y tambien por otrosi, se pedirá que se reciba el pleito á prueba, si se cree necesario, y hay justa causa para ello.

Las justas causas para recibir el pleito á prueba en la segunda instancia son: 1.° Que el juez hubiere desestimado en primera instancia alguna de las propuestas, y la Sala la estimare pertinente. — 2.° Que por cualquier causa, no imputable al que la solicite, no hubiera podido practicarse en tiempo oportuno la propuesta. — 3.° Par haber ocurrido con posterioridad al término concedido para proponerla algun hecho nuevo de decisiva influencia en el pleito. — 4.° Por haber llegado á conocimiento de la parte interesada algun hecho anterior tambien de decisiva influencia, jurando no haberlo sabido oportunamente. — Y 5.° Que el demandado, declarado en rebeldia, se haya personado en autos, tanto en primera como en segunda instancia, con posterioridad al término concedido para proponer prueba en la primera.

En los cuatro primeros casos la prueba se circunscribirá á los hechos á que se refieren, pero en el último se podrán practicar todas las que propongan las partes, y declare pertinentes la Sala.

Sin necesidad del recibimiento á prueba podrá pedirse, por una sola vez, la confesión judicial sobre hechos que no hayan sido objeto de posiciones en la primera instancia; y tambien, que se unan á los autos documentos de fecha posterior á la demanda ó contestación, y aún los de fecha anterior, siempre que se jurare no haber tenido conocimiento de ellos, ó siempre que designados oportunamente en la demanda no hubieren podido adquirirse para su presentación en el periodo de prueba, por causa que no fuere imputable al que lo solicita. Practicadas las pruebas, unidas á los autos, y adicionado el apuntamiento con el resultado de estos, se entregarán para su instrucción á las partes; las cuales, al devolver los autos y el apuntamiento, manifestarán su conformidad ó disconformidad con él, pidiendo en este último caso las aclaraciones, rectificaciones, ó adiciones que crean precisas. Hechas estas, ó devueltos los autos y el apuntamiento con la conformidad de las partes, se entregarán, unos y otro, al Magistrado ponente para su instrucción; y terminada esta, se señala el dia para la celebración de la vista pública. Practicada esta, y salvo el que la Sala considere necesario, para mejor proveer, la práctica de alguna diligencia que pueda estimarse necesaria para la acertada resolución, se dictará sentencia dentro de los quince dias siguientes de la celebración de la vista, ó del señalado para ella si no se celebró.

A instancia de las partes, ó á petición de una sola, y previo acuerdo confirmatorio de la Sala, en el supuesto de la oposición de la parte contraria, podrá sustituirse el informe oral de la vista con una alegación en derecho impresa; pero para ello es preciso que el pleito sea de mayor cuantia, y que su gravedad é importancia se aprecie por la Sala. Con las alegaciones en derecho habrá de imprimirse el apuntamiento; y repartido el impreso á los magistrados que hayan de fallar, y unido á los autos, se empezará á contar el término para dictar sentencia.

Si en la votación para sentencia hubiere discordia[2]) se decretará nueva vista, ó se repartirá á los nuevos magistrados que hayan de entender en ella las alegaciones en derecho impresas; y, conseguido el acuerdo por mayoria, se redactará la sentencia.

---

[1]) El *apuntamiento* es el extracto de los autos, hecho de manera que contenga todo lo necesario para poderse formar juicio completo de todo lo actuado, de las pretensiones deducidas por los litigantes, y del resultado de las pruebas practicadas.

[2]) La *discordia* es la falta de conformidad en la apreciación de los hechos ó en la inteligencia del derecho aplicable, en términos de no poderse formar mayoria en la votación de las cuestiones comprendidas en la sentencia que ha de formularse. En ese caso, si el número de los discordantes es impar, se nombrarán dos nuevos magistrados, y si es par, tres, para que, en unión de los que ya entendieron, oigan de nuevo á las partes y resuelvan.

thereof to draw up the resumé[1]), which must be delivered to the parties together with the record, in order that they may instruct their respective counsel. The latter, on returning the documents, must express their agreement or disagreement with the resumé; and in the latter case must apply that the additions and corrections which they consider proper should be made therein. It is in this document that the respondent may adopt the appeal, if there is anything in the judgment unfavourable to him. Likewise in this document or by an additional document, the objection founded on a breach of the forms of procedure, made in due time but not acceded to, must be reproduced, provided that it is one of those which give rise to an application to quash. And lastly, also by an additional document, an application must be made, if necessary, for further evidence, if there is good reason therefor.

The good reasons for taking further evidence in the Court of Appeal are: 1. That the judge of first instance has rejected evidence put forward, and the Chamber deems it relevant; — 2. That for a reason for which the applicant is not responsible, it has not been possible to take the proffered evidence in due time; — 3. That a new fact with decisive effect on the action has occurred after the time granted for producing it; — 4. That some fact of decisive effect has come to the knowledge of the party interested, and he swears that he did not know it in time; and 5. That the defendant, declared to be in default, has appeared on the record, both in the Court of first and second instance, after the time granted for offering evidence in the first.

In the first four cases evidence must be confined to the facts to which it refers, but in the last all the evidence offered by the parties may be taken, if declared relevant by the Chamber.

Without the necessity of taking further evidence, a single application may be made for an admission in Court of facts which have not been the subject-matter of interrogatories in the Court below; and also that documents subsequent to the Claim and Answer may be added to the record, and likewise those of an earlier date provided that the applicant swears that he had no knowledge of them, or that, though they were duly noticed in the Claim, he was not able to acquire them for production at the time of the proof, for a reason for which he was not responsible. The evidence having been taken and attached to the record, with the resumé of the result of the latter, they must be delivered to the parties for their instruction; and they, on returning the resumé and the record, must state their agreement or disagreement therewith, and in the latter case, apply for the explanations, corrrections or additions which they consider necessary. When these have been made, or the record and resumé returned for the agreement of the parties, the whole must be delivered to the presiding Judge for his information; and when this is completed, a day must be appointed for the public hearing. When this has been held, unless the Chamber considers it necessary, for the purpose of making a better order, that some step should be taken which it thinks necessary for a just decision, judgment shall be pronounced within the fifteen days following the public hearing, or the day appointed therefor if it is not held.

At the instance of the parties, or on the application of one alone, with the previous confirmatory order of the Chamber in case of the objection of the opposite party, the oral speech at the hearing may be replaced by a printed pleading of law; but for this it is necessary that the action should be of the greater amount, and that its gravity and importance should be appreciated by the Chamber. The resumé must be printed together with the pleadings of law; and when the print has been delivered to the judges who are to decide, and attached to the record, the time for pronouncing judgment begins to run.

If the judges disagree on the judgment, a fresh hearing must be ordered, and the printed pleadings[2]) of law must be delivered to the new judges who are to hear the case; and judgment be drawn up according to the decision of the majority.

---

[1]) The *apuntamiento* is the extract from the record, made so as to contain everything necessary for forming a complete judgment of all the documents, of the contentions of the litigants and of the results of the evidence.

[2]) *Discordia* is the failure to agree in the appreciation of the fact or the law applicable, so that there is no possibility of forming a majority in voting on the questions comprised in the judgment which has to be drawn up. In this case, if the number of the dissentient judges is not the same, two fresh judges must be added, and if it is the same, three, so that, together with those who have already heard the case, they may hear the parties anew and come to a decision.

La sentencia asi acordada, después de publicarse y notificarse á las partes, será firme si contra ella no se interpone en tiempo y forma el recurso de casación. Y, si fuere confirmatoria de la de primera instancia, habrá de condenar en las costas de la segunda instancia al apelante.

En el juicio de menor cuantia la tramitación de la segunda instancia es igual que la del de mayor cuantia, salvo el acortamiento de los plazos, y el no existir el trámite de instrucción de las partes con la entrega de autos y el apuntamiento, pudiendo instruirse estas en la Secretaria de Sala de la Audiencia, donde tendrán á su disposición los autos y el apuntamiento. En el plazo de seis dias, que se conceden al relator ó secretario para la formación del apuntamiento, podrá el apelado adherirse á la apelación, y las partes proponer la prueba. La sentencia habrá de dictarse dentro de los cinco dias siguientes á la celebración de la vista.

II. Segunda instancia en los juicios verbales.

La segunda instancia en los juicios verbales se resuelve en una comparecencia de las partes ante el juez de primera instancia, en el supuesto de que el apelante se haya personado en tiempo; pues, de lo contrario, se declara desierto el recurso, se imponen las costas al apelante, y se devuelven los autos al inferior para la ejecución de la sentencia, que ya es firme por esta circunstancia. Cuando ha lugar á la comparecencia para oir á las partes sobre la apelación, ya asistan ambas, ya una sola, ó ya ninguna, el juez dictará sentencia definitiva, confirmando ó revocando la del Tribunal municipal, é imponiendo las costas al apelante en el primer caso. Si por razón de incompetencia del Tribunal municipal, por tratarse de un juicio superior al verbal por su cuantia, se hubiese entablado el recurso de nulidad contra el auto denegatorio, se resolverá este en la sentencia, declarando nulas todas las actuaciones practicadas.

La sentencia de segunda instancia de los juicios verbales es siempre firme porque la ley no admite recurso alguno contra ella.

Capítulo quinto. Del recurso de casación contra las sentencias definitivas.[1]

I. Sus clases. Cuando procede cada uno de ellos.

El conocimiento de los recursos de casación[2] en materia civil corresponde exclusivamente á la Sala primera del Tribunal Supremo[3]. Estos recursos son de tres clases: el recurso por infracción de ley ó de doctrina legal, el recurso por quebrantamiento de forma; y el especial contra las sentencias de los amigables componedores.

La infracción de ley ó de doctrina legal ha de haberse cometido en la parte dispositiva de la sentencia; y puede consistir: en la violación, interpretación errónea ó aplicación indebida de leyes ó doctrinas legales; en la falta de congruencia entre lo pedido por las partes y lo acordado; en que se conceda más de lo que se pidió, ó se deje sin resolver alguna cuestión debidamente planteada; en que haya sobre lo mismo otra sentencia contraria, y se haya alegado á tiempo esta excepción; en la incompetencia por razón de la materia, tanto por exceso como por defecto; y cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho ó de hecho, si este último resulta de documentos ó actos auténticos que hagan patente la equivocación del que dictó la sentencia.

La infracción por quebrantamiento de forma ha de haberse cometido durante la sustanciación del juicio[4]; siendo, además, preciso que si la falta se cometió en la primera instancia se pidiera en tiempo y forma su subsanación, y que, denegada

[1]) Son *sentencias definitivas* las pronunciadas por las Audiencias en la resolución de las cuestiones judiciales civiles de que conocen en segunda instancia y ponen término al juicio; asi como en la de los incidentes que produzcan este efecto, por hacer imposible su continuación; las que declaran haber ó no lugar á oir á un litigante condenado en rebeldia; y las que pongan término á las contiendas suscitadas en actos de jurisdicción voluntaria*). — La ley extiende á mayor número de casos este concepto, que yo reduzco á lo que afecta á las cuestiones comerciales.

[2]) V. pag. 39 la nota 2.

[3]) Según su organización actual, que difiere de la que tenia cuando se publicó la Ley de Enj. civ.

[4]) La *sustanciación* equivale á tramitación.

*) Tambien tienen el caracter de sentencias definitivas, según la ley, las dictadas por los amigables componedores.

The judgment so agreed, on being published and notified to the parties, is final if an appeal to quash it is not entered in due time and form. And if it confirms the judgment of the Court below, the appellant must be ordered to pay the costs of the appeal.

In actions of the lesser amount, the procedure on appeal is the same as that of the greater amount, except the shortering of the times, and there being no procedure for instructing the parties with the delivery of the record and résumé, they being at liberty to inform themselves in the Office of the Appeal Chamber, where the record and the resumé will be at their disposal. Within the space of six days granted to the master or secretary for drawing up the resumé, the respondent may adopt the appeal, and the parties offer evidence. Judgment must be pronounced within the five days following the hearing.

II. Appeal in verbal actions.

The appeal in verbal actions is decided on the appearance of the parties before the judge of first instance, supposing that the appellant has appeared in due time; and, if he has not done so, the appeal is declared abandoned, the appellant is ordered to pay the costs, and the record is returned to the inferior court for execution of the judgment, which by this circumstance has become final. When the parties should appear for the trial of the appeal, whether both or one only or none are present, the Municipal Tribunal must pronounce final judgment, confirming or reversing that of the inferior court, and in the first case, imposing the costs on the appellant. If the appeal is for nullity against a decree refusing relief on the ground of want of jurisdiction of the municipal tribunal in dealing with a case which, from its amount, is higher than the verbal, this shall be decided in the judgment, and all the previous record in the action shall be declared void.

The judgment on appeal in verbal actions is always final, for the law does not allow any further appeal.

Fifth Chapter. The appeal to quash final judgments.[1]

I. Their kinds. When each of them lies.

The trial of appeals to quash[2] in civil matters pertains exclusively to the First Chamber of the Supreme Tribunal[3]. These appeals are of three kinds: the appeal for breach of the law or legal doctrine, the appeal for breach of form, and the special appeal against the awards of friendly arbitrators.

The breach of law or legal doctrine must have been committed in the operative part of the judgment, and may consist: in the violation, erroneous interpretation or wrong application of laws or legal doctrines; in the absence of conformity between the relief sought by the parties and that granted; in granting more than is sought, or failing to decide some question which was duly formulated; in there being a contrary judgment on the same point, when this defence is pleaded in time; in want of jurisdiction by reason of the subject-matter, whether for excess or insufficiency; and when there has been some error of law or fact in appreciating the evidence, and the error of fact is proved by authentic documents or acts which clearly show the mistake of the judge who pronounced the judgment.

The breach of form must have been committed during the course of the action[4]; and it is also necessary, if the fault was committed in a Court of first instance, that its amendment should have been applied for in due time and form, and that, if it has

---

[1]) *Sentencias definitivas* are those pronounced by the Courts of Appeal in deciding civil questions of law tried in the court of second instance, and which put an end to the action; also in interlocutory appeals which produce the same effect, by making the continuation of the action impossible; those which declare whether a litigant, declared to be in default, is to be heard or not; and those which put an end to disputes arising from acts of the voluntary jurisdiction*). The awards pronounced by friendly arbitrators are also final in point of law.

[2]) See page 39, note 2.

[3]) According to its present organization, which differs from that which it had when the Law of Civil Procedure was published.

[4]) *Sustanciación* is equivalent to course of the action.

---

*) The law extends this definition to a greater number of cases, but I limit it to that which affects mercantile questions.

por el juez. se reprodujera la petición de enmienda en tiempo y forma, y haya sido denegada igualmente por la Audiencia. Si la infracción se cometió en la segunda instancia, será admisible tambien el recurso, aún cuando no se hubiere reclamado contra ella, siempre que esto ya no fuere posible. Las infracciones que dan lugar á este recurso son: todas aquellas faltas de procedimiento que produzcan indefensión[1]), como el no emplazamiento de las personas á quienes afecte el juicio, ó la no citación para la práctica de diligencias que les interesen, asi como para la públicación de la sentencia; el no recibimiento del pleito á prueba ó la denegación de la práctica de alguna que sea de verdadero interés; la incompetencia de jurisdicción que no haya sido declarada por el Tribunal Supremo, ó no sea la que dá lugar al recurso por infracción de ley; por intervenir en la sentencia un juez que haya sido recusado fundadamente; ó por haberse dictado por un número menor de jueces del que manda la ley.

El recurso contra las sentencias de los amigables componedores procede, cuando la sentencia se dictó fuera del plazo señalado para ello en el compromiso, ó cuando resolviere puntos no sometidos á su decisión.

El recurso por infracción de ley ó de doctrina legal no se dá contra las sentencias definitivas de las Audiencias en toda clase de pleitos; pues la ley no lo consiente en los de menor cuantia ni en los ejecutivos. En cambio el recurso por quebrantamiento de forma se dá en todos, excepto en los verbales.

II. Tiempo ó momentos en que pueden considerarse divididos.

En los recursos de casación hay tres momentos perfectamente caracterizados: el de su interposición, el de su admisión y el de su resolución.

§ 1.° *Interposición.*

A su vez puede considerarse este momento dividido en otros dos: el de su preparación ante el Tribunal que dictó el fallo, y el de su formalización ante la Sala de lo civil del Tribunal Supremo.

A. Preparación ante el Tribunal que dictó el fallo. Aparte de la diferencia de plazos señalados para estas preparación y formalización, algunos más cortos en los por quebrantamiento de forma que en los por infracción de ley ó doctrina legal, la diferencia fundamental, que entre uno y otro existe, estriba en que, como ya hemos dicho, hay que preparar el primero durante la sustanciación del pleito, protestando de la falta cometida, siempre que sea posible. Dentro de los diez dias de publicada la sentencia habrá de manifestarse por escrito la intención de interponer el recurso pidiendo para ello certificación literal de la misma, y de la de primera instancia, si por la aceptación del todo ó parte de esta no se reprodujeren todos ó algunos de sus resultandos[2]) y considerandos[3]). Pedida en tiempo la certificación de la sentencia el Tribunal habrá de disponer que se entregue, y que se emplace á las partes, para su comparecencia ante el Tribunal Supremo dentro del término legal. Si se pidiere la certificación, fuera del término antes indicado, la Audiencia la denegará, entregando copia del auto denegatorio al interesado, el cual podrá acudir en recurso de queja al Tribunal Supremo dentro del plazo legal, quien resolverá si procede ó nó mantener el auto denegatorio, sin ulterior recurso. Si se anula este tendrá la Audiencia que expedir la certificación de la sentencia, y paralizar su ejecución si á ello se hubiere dado comienzo. El mismo dia en que se haga la entrega de la certificación, la Audiencia remitirá al Supremo el apuntamiento y la certificación de los votos reservados si los hubiere, ó la negativa en el caso de no haberlos.

B. Formalización. Si el recurso no se formaliza ante el Supremo, dentro del plazos legal, quedará la sentencia firme sin ulterior recurso. La formalización resulta: de la presentación del procurador, con poder bastante para que se le tenga por parte, y se le comuniquen los autos, con la certificación de votos reservados si los hubiere

[1]) La *indefensión* tanto quiere decir como imposibilidad de contender en juicio en igualdad de condiciones que la parte contraria, por negarse al indefenso los medios que la ley le dá para el mantenimiento de su derecho.

[2]) Se llaman *resultandos* á la exposición de los hechos que sirven de base á la resolución judicial; y se llaman asi porque es de ley que los párrafos en que esta exposición se hace empiezen con la palabra *resultando.*

[3]) Se llaman *considerandos* los párrafos en que se exponen los fundamentos legales en que se basa el fallo; y se llaman asi porque es de ley que tales párrafos empiecen con la palabra *considerando.*

been refused by the judge, the application for amendment should have been reproduced in due time and form, and have been likewise refused by the Court of Appeal. If the breach has been committed in the Court of second instance, the appeal is also admissible, even when there has been no objection made, provided that this was not possible. The breaches which give rise to this appeal are: all those faults in procedure which cause unfairness[1]), as that of not citing the persons affected by the action, or not citing them for carrying out the orders which interest them, as well as for the publication (delivery) of the judgment; not receiving the action to proof, or refusing the evidence offered by any person which is of real interest; want of jurisdiction, which has not been so declared by the Supreme Court, or which is not that which gives rise to the appeal for breach of the law; from a judge taking part in a judgment, who has been challenged on good grounds; or from a judgment being pronounced by a less number of judges than is commanded by the law.

An appeal lies against the award of friendly arbitrators, when the award is given outside the time fixed for it in the submission, or when it decides points which were not submitted to their decision.

An appeal for breach of the law or legal doctrines does not lie from the final judgments of the Courts of Appeal in all kinds of action; for the law does not allow it in actions of the lesser amount nor in executory actions. On the other hand, an appeal for breach of form is given in all actions, except the verbal.

II. Times or periods into which appeals may be considered divided.

In appeals for quashing a judgment, there are three perfectly distinct periods: that of entry, of admission and of decision.

§ 1. *Entry.*

This period may in its turn be considered as divided into two: that of its preparation before the Tribunal which pronounced the judgment, and that of its legalisation before the Civil Chamber of the Supreme Tribunal.

A. *Preparation before the Tribunal which pronounced the judgment.* Apart from the difference of the times fixed for preparation and legalisation, some being shorter in appeals for breach of form than in those for breach of law or legal doctrine, the fundamental difference which exists between the two is founded on the necessity of preparing the former during the course of the action, and of objecting to the fault committed whenever it is possible. Within ten days of the publication of the judgment, the intention to enter the appeal must be shown by writing and by applying for that purpose for a literal certified copy thereof, and of the judgment in the Court of first instance, if on receiving the whole or part of the former, the whole or some of the findings[2]) of fact or recitals of law[3]) are not reproduced. If the certified copy of the judgment is applied for in time, the Tribunal must order that it be delivered, and that a time within the legal limit be fixed for the parties to appeal before the Supreme Tribunal. If the certified copy is applied for outside the said time, the Court of Appeal must refuse it, and deliver a copy of the order so refusing to the party interested, who may appeal "de queja" within the lawful time to the Supreme Tribunal, which will decide whether the order shall stand or be reversed, without further appeal. If it is reversed, the Court of Appeal must issue the certified copy of the judgment, and stay its execution if this has already commenced. On the same day as the certified copy is delivered, the Court of Appeal must remit to the Supreme Court the resumé and the certificate of the reserved votes, if any, or the negative in case there are none.

B. *Legalisation.* If the appeal is not legalised before the Supreme Court within the legal times, the judgment will be final without further appeal. The legalisation takes place: by the appearance of the solicitor with power sufficient for taking part therein, and the communication to him of the record, with the certificate of the

[1]) *Indefensión* is the impossibility of fighting an action on equal terms with the opposite party, from being denied the means afforded by the law for the maintenance of the right.

[2]) *Resultandos* mean the setting out of the facts which form the basis of the judicial decision; and they are so called because the paragraphs in which they are set out have to begin with the word *resultando.*

[3]) *Considerandos* mean the paragraphs setting out the legal grounds on which the judgment is based; and they are so called because those paragraphs have to begin with the word *considerando.*

y el apuntamiento si lo solicitare; de la constitución del depósito prévio para atender al pago de costas y responsabilidades; y de la presentación del escrito en que se interponga el recurso.

El depósito prévio, de que hemos hablado, asciende á la cantidad de 1000 pesetas, y se ha de constituir en establecimiento público destinado al efecto (la Caja de Depósitos), cuando no se litigue como pobre, sea el recurso por infracción de ley ó doctrina legal y las sentencias de las dos instancias fueren conformes de toda conformidad[1]), ó se intente el recurso contra las sentencias de los amigables componedores, ó contra las pronunciadas en los actos de jurisdicción voluntaria. Si el recurso se interpone por quebrantamiento de forma el depósito ha de ser de 500 pesetas. Y, si la cuantia de la cosa litigiosa es inferior á 3000 pesetas, se limitará el depósito á la sexta parte en los casos primeramente indicados, y á la dozava parte si se tratare de quebrantamiento de forma.

El escrito de interposición se ha de acompañar del poder del procurador, si no se hubiere presentado antes, ó no se litigara por pobre, y se hubiere solicitado su nombramiento de oficio; del documento que justifique la constitución del depósito prévio en los casos indicados; de la certificación de la sentencia y de las copias necesarias para conocimiento de las partes. Si el recurso es por infraccion, de ley ó de doctrina legal se citará con toda precisión la ley ó doctrina infringida, y el concepto en que lo haya sido, haciendolo con la debida separación si son dos ó más los motivos de casación que se invocan; y si es por quebrantamiento, el caso que lo motive, de entre los que taxativamente señala la ley[2]), y las reclamaciones hechas en tiempo y forma contra la infracción, ó la indicación de que estas no pudieron hacerse por referirse á la segunda instancia, y en ocasión en que ya no era posible. En los recursos por infracción de ley ó doctrina legal, si se quiere evitar que la Audiencia, á instancia de parte, proceda á ejecutar la sentencia recurrida, es forzoso comunicar á la misma, dentro de los quince dias siguientes, la presentación del escrito de interposición.

Pueden interponerse á un tiempo los dos recursos; en cuyo caso hay que plantear, primero, el recurso por quebrantamiento de forma, y prometer, en un otrosi, al formalizar este, que, si se denegare, se interpondrá el por infracción de ley ó de doctrina legal. Lo cual se explica, porque, concedido que sea el primero, ya no hay sentencia sobre que fundar el segundo. La tramitación es la misma ya indicada para uno y otro, salvo la diferencia del plazo señalado para interponer el segundo, de no prosperar el primero, que es más breve que el ordinario.

§ 2.° *Admisión.*

Formalizado asi el recurso se entra de lleno en el trámite de admisión ó denegación del mismo; en el que, y en los recursos por infracción de ley ó doctrina legal, ha de oirse al Ministerio fiscal. Si este lo creyere improcedente por defecto en la forma de su interposición, la Sala, sin más tramite, resolverá su admisión ó denegación. Si la improcedencia afecta á la cuestión de fondo, entonces, para su resolución, ha de oir el Tribunal en audiencia pública á las partes y al Ministerio fiscal, y en el correspondiente auto acordará: no haber lugar á la admisión, imponiendo las costas al recurrente, con devolución del depósito si lo hubiere; ó su admisión en todo ó en parte, según sea uno solo ó varios los motivos alegados, y en este caso unos sean estimables y otros no.

En el recurso por quebrantamiento, después de examinar la Sala si el recurso interpuesto se acomoda ó no á lo prevenido en la ley para poderlo interponer decidirá de su admisión ó denegación.

Contra estos acuerdos, si son favorables á la admisión, no se dá recurso alguno, pero si son contrarios, tratándose del interpuesto por quebrantamiento de forma, puede ante la misma Sala recurrir en queja el perjudicado, dentro del plazo legal; la cual, examinando de nuevo el asunto, resolverá definitivamente, y sin ulterior recurso lo que proceda.

§ 3.° *Resolución.*

Admitido el recurso se entra en el periodo de su resolución ó sustanciación, en el cual hay el emplazamiento de las partes, para personarse ante la Sala á sostener ó impugnar el recurso, si se trata del por quebrantamiento de forma, y, en uno y

[1]) Se dice que son *conformes de toda conformidad* dos sentencias cuando coinciden en el fallo del asunto, aún cuando varien en la condena de costas.

[2]) La Ley de Enj. civ. en su artículo 1693.

reserved votes, if any, and the resumé, if he applies for it; by the previous payment in of the deposit to await the payment of costs and liabilities; and by the production of the document by which he enters the appeal.

The previous deposit, of which we have spoken, amounts to the sum of 1000 pesetas, and must be paid into the public establishment appointed for that purpose (the Deposit Office), when the litigant is not suing *in forma pauperis*, whether the appeal is for breach of the law or legal doctrine and the judgments of the two courts agreed in all particulars[1]), or the appeal is brought against the awards of friendly arbitrators, or against those pronounced in the acts of the voluntary jurisdiction. If the appeal is entered for breach of form, 500 pesetas have to be paid in. And, if the amount of the subject-matter of the action is less than 3000 pesetas, the deposit must be confined to the sixth part, in the cases first indicated, and to the twelfth part, if it is a question of breach of form.

The document entering the appeal must be accompanied by the power of the solicitor, if it has not been presented before, or if the ligitant is suing *in forma pauperis*, and his official appointment has been applied for; by the document proving the previous payment of the deposit in the cases indicated; by the certified copy of the judgment and the necessary copies for the information of the parties. If the appeal is for breach of the law or legal doctrine, the law or legal doctrine infringed must be cited accurately, and the sense in which it has been infringed, making proper distinction, if there are two or more grounds for the appeal; and if it is for breach of form, one of the grounds which are limited by the law[2]), and the objections made in due time and form against the breach, or a statement why these could not be made in the reference to the second court, and the reason why it was not then possible. If it is desired to prevent the Court of Appeal from proceeding to execute the judgment under appeal, when there is a further appeal for breach of the law or legal doctrine, it is necessary to give notice to that Court of the filing of the notice of appeal, within the fifteen following days.

The two appeals may be entered at the same time; in which case, the appeal for breach of form has to be filed first, with a promise by an "otrosi" on drafting the latter, that if it is rejected, that for breach of the law or legal doctrine shall be entered. This is explained by the fact that if the first is granted, there is no judgment on which to base the second. The procedure for both is the same as that already indicated, except the difference of the time appointed for filing the second, if the first fails, which is shorter than the ordinary time.

§ 2. *Admission.*

When the appeal has been thus legalised, it completely enters into the procedure of admission or the refusal thereof; in which, and in the appeals for breach of the law or legal doctrine, the Public Prosecutor has to be heard. If the latter contends that the appeal is bad on account of a flaw in the form of its entry, the Chamber without further steps must decide on its admission or rejection. If the flaw affects the substantial question, the Tribunal must hear the parties and the Public Prosecutor in open court, and in the corresponding decree must agree: to reject the appeal with costs against the appellant, with return of the deposit, if any; or to admit it in whole or in part, according as there are one or more grounds pleaded, and in the latter case, as some are good and others bad.

In the appeal for breach of form, the Chamber must decide on its admission or rejection, after inquiring if the appeal agrees or not with the provisions of the law for that purpose.

If these decisions are favourable to the admission, there is no further appeal, but if adverse, and it is an appeal for breach of form, the unsuccessful party may appeal "en queja" before the same Chamber within the legal time; and after examining the matter afresh, this Chamber must finally decide, without further appeal.

§ 3. *Decision.*

When the appeal has been admitted, it enters upon the period of its decision, for which the parties must be summoned to appear before the Chamber to support or oppose the appeal, if it is a question of breach of form, and in both cases there is

[1]) Two judgments are said to be *conformes de toda conformidad*, when they agree in the judgment of the affair, although they may differ in the order as to costs.

[2]) Law of Civil Procedure, art. 1693.

otro, la entrega de los autos ó el apuntamiento (este es el mandado formar por la Sala al relator ó secretario en el de quebrantamiento) á las partes para su instrucción; pudiendo, tanto el recurrente como los recurridos, pedir, cuando es por infracción, que se unan á los autos los documentos existentes en los de la Audiencia, siempre que sean de importancia decisiva, y no estén reseñados suficientemente en el apuntamiento de este; sobre cuya petición acordará la Sala lo que crea oportuno, sin ulterior recurso. Si es por quebrantamiento, podrán pedir la ampliación, ó rectificación del apuntamiento del Supremo, si lo estiman procedente; sobre cuya petición resolverá tambien la Sala en los términos ya indicados respecto á la petición de documentos. Y, mediante una nueva instrucción de las partes, si se hubieren traido nuevos documentos, ó hecho adiciones ó rectificaciones al apuntamiento, se declarará concluso para la vista en audiencia pública. Antes de la celebración de esta, en los recursos por infracción, el relator redactará una nota de lo más esencial del recurso, cuyo conocimiento puede interesar á las partes y á los magistrados llamados á resolver, la cual se entregará á unos y á otros dos dias antes del señalado para la vista. Celebrada esta, el Tribunal, dentro del plazo de 15 y 10 dias respectivamente, segun que se trate de infraccion ó de quebrantamiento, dictará sentencia, declarando no haber lugar al recurso, ó casando la sentencia del inferior. En el primer caso se condenará en las costas al recurrente, y á la pérdida del depósito constituido, dándole la aplicación que dispone la ley[1]); y en el segundo, se ordenará la devolución del depósito. Si se tratare de infracción de ley ó de doctrina legal se dictará á continuación la sentencia que en justicia proceda; y si se tratare de quebrantamiento de forma se dispondrá la devolución de los autos á la Audiencia para que se reponga el pleito al estado anterior á la comisión de la falta, y se sustancie de nuevo con arreglo á ley; acordando además las correcciones y prevenciones que estime necesarios respecto del inferior.

III. Recurso de casación contra las sentencias de amigables componedores.

El recurso de casación contra las sentencias de los amigables componedores es mucho más sencillo que los hasta aqui reseñados. Se plantea ante el Tribunal Supremo, dentro del plazo legal, acompañando al escrito de formalización, el testimonio del compromiso, el de la sentencia y el documento que acredite el depósito con las copias necesarias. Se expresará la causa en que se funde, y se alegarán los motivos de casación en parrafos separados y numerados; y, previo el emplazamiento de las partes, se sustanciará del mismo modo que los recursos por quebrantamiento. Si la Sala estima que el fallo se dictó fuera de término casará la sentencia y decretará la devolución del depósito al recurrente; y, si entiende que la sentencia resuelve otros puntos que no fueron sometidos al juicio de los amigables componedores, la casará en lo que constituya exceso, y acordará igualmente la devolución del depósito.

IV. Desistimiento. — Publicación de la sentencia.

En todos los recursos cabe el desistimiento de él[2]). Si esto tiene lugar en el recurso por infracción, antes de haber acordado el Tribunal sobre su admisión, se acordará la devolución de todo el depósito; y si se desiste después de admitido, y antes del señalamiento para la vista, se devolverá la mitad, reservando la otra mitad para la aplicación que dispone la ley. En el recurso por quebrantamiento, si se desiste antes de la vista, se devolverá siempre la mitad del depósito.

Las sentencias sobre no admisión de los recursos en todo ó en parte, y las en que se declare la procedencia ó improdedencia de la casación se publicarán en la Gaceta de Madrid y en la Colección Legislativa[3]).

Capítulo sexto. Recurso de revisión. (Recurso extraordinario contra las sentencias firmes.)

Declarada firme la sentencia, ya por haberla consentido la parte perjudicada, ó ya por haber apurado el procedimiento, queda todavia, en casos contados, y dentro

[1]) La mitad del importe del depósito que se declara perdido para el recurrente condenado, se entregará á la parte contraria como indemnización de perjuicios, y la otra mitad se reserva para las indemnizaciones que procedan, en los casos en que, por ser parte en el pleito el ministerio fiscal, hubiere este interpuesto y perdido el recurso.

[2]) El *desistimiento* es el abandono voluntario del litigio.

[3]) Por eso su doctrina constituye la llamada doctrina legal.

the delivery of the record and resumé to the parties for their instruction (this is what the master or in case of breach of form, the secretary, is ordered to draw up by the Chamber). Both the appellant and respondents may apply, if it is a case of breach of the law or legal doctrine, that the documents in the Court of Appeal may be attached to the record, provided that they are of decisive importance and are not sufficiently reviewed in the resumé thereof; and on this application the Chamber will make a proper order without further appeal. If the appeal is for breach of form, they may apply for the "ampliación" (amplification) or correction of the resumé of the Supreme Tribunal, if they think well; on which application the Chamber will likewise decide as already indicated with respect to the application for documents. And after fresh instruction of the parties, if new documents are delivered, or additions or corrections made in the resumé, the appeal must be declared closed for hearing in open court. Before the public hearing of appeals for breach of the law or legal doctrine, the master must draw up a note of the most essential part of the appeal, the knowledge of which may interest the parties and the judges, called upon to decide, and this must be delivered to one and the other two days before the date appointed for the hearing. After the hearing, the Tribunal must pronounce judgment within 15 and 10 days respectively, according to whether it is a question of breach of law or of form, rejecting the appeal, or quashing the judgment of the inferior court. In the first case the appellant will be condemned to pay costs, and to the loss of the sum paid in, applying the latter as provided by the law[1]); and in the second case, the return of the deposit will be ordered. If it is a question of breach of the law or of legal doctrine, judgment must forthwith be pronounced as justice requires, and if it is a question of breach of form, the return of the record to the Court of Appeal must be ordered in order that the action may be replaced in the state in which it was before the breach, and proceed a new according to the law; ordering likewise the corrections and admonitions which it considers necessary with respect to the inferior court.

III. Appeal to quash awards of friendly arbitrators.

The appeal to quash awards of friendly arbitrators is much more simple than those already reviewed. It is entered in the Supreme Tribunal within the legal time, accompanied by the document legalising the appeal, the certified copy of the submission, of the award and of the document proving the payment in, together with the necessary copies. It must express the *causa* on which it is based, and the grounds for quashing must be pleaded in separate and numbered paragraphs; and after the citation of the parties, it will proceed in the same way as appeals for breach of form. If the Chamber is of opinion that the award was given out of time, it must quash the award and order the return of the deposit to the appellant; and if it is of opinion that the award decides other points, which were not submitted to the judgment of the friendly arbitrators, the Chamber must quash it so far as it is excessive, and also order the return of the deposit.

IV. Abandonment. — Publication of the Judgment.

In all appeals, abandonment thereof is allowed[2]). If this takes place in the appeal for breach of law, before the Tribunal has decided on its admission, the return of the whole of the deposit must be ordered; and if it is abandoned after the admission, and before the appointment for the hearing, half must be returned and the other half reserved to be applied as the law provides. In the appeal for breach of form, half the deposit must always be returned, if it is abandoned before the hearing.

The judgments refusing admission of the appeals in whole or in part, and those allowing or dismissing the appeal to quash, must be published in the *Gaceta de Madrid* and in the *Collección Legislativa*[3]).

Sixth Chapter. Appeal for Rehearing (Extraordinary appeal against final judgments.)

When the judgment has been rendered final, either by the losing party having consented thereto, or from having exhausted the procedure, there still remains in

[1]) Half the amount of the deposit which is declared lost by the unsuccessful appellant, must be paid to the opposite party as compensation for damages, and the other half is reserved for the compensations happening in those cases in which the Public Prosecutor is a party to the action, and has entered an appeal and lost it.

[2]) *Desistimiento* is the voluntary abandonment of the litigation.

[3]) Thereby its doctrine constitutes what is called legal doctrine.

de los cinco años siguientes á ser firme, el recurso extraordinario de revisión que puede intentarse: por haber recobrado la parte perjudicada documentos decisivos detenidos por fuerza mayor ó por obra de la parte en cuyo favor se sentenció; por haber averiguado la parte perjudicada que los documentos que sirvieron de base á la sentencia se habian reconocido y declarado falsos con posterioridad á esta; por haber sido condenados como testigos falsos los que declararon sobre hechos que sirvieron de base á la sentencia, cuando la condena afecte á esos mismos hechos; y por haber averiguado que la sentencia firme se consiguió por cohecho[1]) violencia ú otra maquinación fraudulenta.

Dentro de los tres meses de averiguados estos extremos, y antes de los cinco años de publicada la sentencia firme, habrá de interponerse el recurso ante el Tribunal Supremo, acompañando el documento que acredite el depósito prévio de 2000 pesetas, ó el de la sexta parte de la cuantia de la cosa objeto del litigio si su valor no excede de 12 000 pesetas.

Con el emplazamiento de todos los que hubieren litigado ó de sus causahabientes[2]), y en la forma en que se sustancian los incidentes, y con intervención del Ministerio fiscal, se resolverá la admisión ó no admisión del recurso. Si durante la sustanciación se plantea una cuestión criminal se suspenderá el recurso hasta que quede ventilada esta por sentencia ejecutoria. Tambien podrá suspenderse la ejecución de la sentencia recurrida siempre que la Sala, con audiencia del Ministerio fiscal, asi lo acuerde, si lo solicita el recurrente, y dá fianza suficiente para responder de los daños que resulten de la suspensión, en el caso de no prosperar el recurso.

Si el Tribunal estima procedente la revisión rescindirá en su fallo, y de acuerdo con lo que de él se hubiere solicitado, el todo ó parte de la sentencia recurrida, expidiendo la correspondiente certificación de aquel para que las partes usen de su derecho, según les convenga, y en forma de juicio; debiendo servir de base para este las declaraciones hechas en la revisión, sobre las cuales no podrá discutirse ya. La rescisión de la sentencia recurrida producirá todos sus efectos legales, salvo los derechos adquiridos que deban respectarse con arreglo á la ley[3]).

Si el recurso se declara improcedente se condenara en todas las costas del juicio al recurrente, y á la pérdida del depósito prévio. Contra la sentencia dictada en recurso de revision no se da recurso alguno.

Capítulo séptimo. Ejecución de las sentencias.[4])

I. Ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales españoles.

Las sentencias firmes, condenatorias, han de cumplirse, porque la ley garantiza su ejecución por todos los medios á su alcance. Por eso, de ordinario, se cumplen por el perjudicado sin necesidad de la intervención judicial, pues esta supone nuevos gastos que habrá de satisfacer el que se resiste á su cumplimiento.

La intervención judicial en este caso solo tiene lugar á instancia de parte; es decir, á petición del que consiguió á su favor la sentencia; y corresponde al juez ó Tribunal que entendió en primera instancia en el asunto.

En toda sentencia condenatoria se ha de disponer una ó varias de estas cosas: el pago de una cantidad líquida ó ilíquida; la entrega de una cosa determinada mueble ó inmueble; ó el hacer ó dejar de hacer cosa determinada.

---

[1]) El *cohecho* existe cuando el juez ó magistrado recibe por si ó por persona intermedia, para inclinar su animo en un sentido determinado, dádivas ó regalos de la parte que consigue la sentencia á su favor.

[2]) *Causahabientes* en este caso son los continuadores de la personalidad de los litigantes.

[3]) Se refiere á la irreivindicación de las cosas muebles enajenadas mercantilmente, y á la de los inmuebles que resulte de la inscripción en el Registro de la propiedad.

[4]) La ejecución de las sentencias es el término natural de un juicio; pero como en el caso de la resistencia del condenado á cumplir lo que se le ordena la intervención del juez ó Tribunal solo puede tener lugar á instancia de parte, y acomodándose á un procedimiento que constituye un juicio especial, muy parecido al juicio ejecutivo, hemos creido que este es el momento más oportuno para tratar de esta materia, ya que enseguida hemos de hablar de los juicios especiales que puedan interesar á los comerciantes.

certain cases, and within the five years which follow its becoming final, the extraordinary appeal for rehearing, which may be brought: on the ground that the losing party has recovered decisive documents, which had been detained by *vis major* or the contrivance of the party in whose favour judgment was delivered; on the ground that the losing party has ascertained that the documents which formed the foundation of the judgment had been previously examined and declared false; on the ground that those who gave evidence about the facts which formed the foundation of the judgment have been condemned as false witnesses, when the condemnation concerned the same facts; and on the ground that he has ascertained that the final judgment was obtained by bribery[1]), force or other fraudulent contrivance.

Within three months of ascertaining these facts, and before the five years from the publication of the final judgment, the appeal must be entered in the Supreme Tribunal, accompanied by the document proving the previous payment in of 2000 pesetas, or of the sixth part of the subject-matter of the litigation, if this does not exceed 12000 pesetas.

The admission or non-admission of the appeal must be decided after the citation of all the former litigants or their sucessors in right[2]), and as is done in interlocutory matters, and with the intervention of the Public Prosecutor. If a criminal proceeding is started during the progress of the case, the appeal must stand over until this has reached a judgment capable of execution. Execution of the judgment under appeal may also be stayed whenever the Chamber so orders, on the application of the appellant, after hearing the Public Prosecutor, and on the appellant giving sufficient security to answer the damages resulting from the suspension, in case the appeal fails.

If the Tribunal decides that there should be a rehearing, it must, in its judgment and agreeably with the application made, rescind the judgment under appeal in whole or in part, and issue the corresponding certified copy thereof in order that the parties may avail themselves of their right as they think fit, and in form of an action. The declarations made on the appeal for rehearing must form the grounds of the action and about these there may be no further dispute. The rescission of the judgment appealed against will produce all its legal effects, saving acquired rights which must be respected in accordance with the law[3]).

If the appeal is declared to be bad, the appellant will be condemned in all the costs of the proceeding, and the loss of the previous deposit. There is no appeal against the judgment pronounced on an appeal for rehearing.

Seventh Chapter. Execution of Judgments.[4])

I. Execution of judgments pronounced by the Spanish Tribunals.

Final adverse (condemnatory) judgments must be performed, for the law guarantees their execution by all the means in its power. For this reason they are generally performed by the prejudiced party without the necessity of judicial intervention, as this involves fresh expenses which must be paid by the person who resists the performance.

The judicial intervention in this case only takes place at the instance of a party; that is to say, on the application of the one who obtained the judgment in his favour; and this comes before the Judge or Tribunal who heard the matter in the first instance.

In every adverse judgment, one or some of the following things must be provided: the payment of a net or unliquidated sum; the delivery of a certain moveable or immoveable; or the doing or not doing a certain thing.

[1]) *Cohecho* exists when the ordinary or appeal judge personally or through some intermediary, receives gifts or presents from the party who obtains a judgment in his favour, to influence his mind in a certain way.

[2]) *Causahabientes* in this case are those who continue the personality of the litigants.

[3]) This refers to the impossibility of recovering moveables which have been sold in commerce, and immoveables inscribed on the Register of Ownership.

[4]) The execution of the judgments is the natural termination of an action; but as in the case of resistance by the unsuccessful party to performing what he is ordered to do, the intervention of the Judge or Tribunal can only occur at the instance of a party, and by means of a proceeding which forms a special action, very similar to the executive action, we have thought that this is the most fitting moment to treat of this matter, as we have forthwith to speak of the special actions of interest to merchants.

Si se tratare del pago de una cantidad líquida se procederá siempre, y sin necesidad de prévio requerimiento personal[1]) al condenado, al embargo[2]) de bienes de su propiedad, en la forma y por el orden prevenidos para el juicio ejecutivo[3]). El avaluo[4]), y la venta consiguiente, de los bienes embargados para el pago de la cantidad se hará tambien del modo dispuesto para el procedimiento de apremio[5]), después del juicio ejecutivo.

Si se tratare del pago de una cantidad ilíquida, ó de otra cualquiera cosa que no pueda tener, por cualquier causa, inmediata ejecución, á instancia del acreedor, se podrá decretar el embargo de bienes en cantidad suficiente, á juicio del juez, para asegurar el pago de lo principal y las costas de la ejecución; cuyo embargo solo podrá eludir el deudor dando fianza suficiente á satisfacción del juez.

Si se tratare de la entrega de una cosa mueble se procederá inmediatamente á poner en posesión de ella al que la ganó en juicio, prácticando las diligencias que al efecto solicite el interesado. Y si, por ser mueble, no pudiere ser habida, se procederá como en el caso en que la condena fuere de resarcimiento de daños y perjuicios.

Si se tratare de hacer, ó de no hacer, se procurará dar cumplimiento á lo ordenado; y, si el condenado, no lo cumpliere en el caso de hacer, dentro del plazo que se le señale, el juez dispondrá que se practique á su costa. Si por ser personalisimo el hecho no pudiera verificarse en esta forma, se procederá como si la condena fuere de resarcimiento de daños y perjuicios. Si en el de no hacer lo hiciere, entonces, se procederá de igual manera que en el caso anterior.

Si el resarcimiento de daños y perjuicios se fijó en la sentencia, en previsión de su incumplimiento, en una determinada cantidad, se procederá como cuando esta es líquida. Y si no se fijó, hayánse ó no establecido las bases para ello, con la relación de unos y otros, hecha por el que tiene derecho al resarcimiento, se procederá á un pequeño juicio entre las partes para obtener la conformidad, ó resolver, en caso contrario, lo que proceda. La conformidad se consigue por manifestación escrita, hecha por el condenado al contestar dentro del término legal al escrito de la parte contraria en que se hizo la relación de daños y perjuicios, ó por haber dejado transcurrir el plazo sin contestación. En caso de disconformidad se recibe á prueba este incidente, si lo solicita alguna de las partes, y lo acuerda asi el juez; y, prévia la práctica de la prueba ó pruebas acordadas, y la comparecencia de las partes para informar de palabra al juez acerca del resultado de las mismas, resolverá éste, en el término de tres dias, lo que proceda. Este auto será apelable en un solo efecto.

En caso de cantidad ilíquida en frutos, rentas, utilidades ó productos de cualquier clase con ó sin bases para liquidarla, al deudor corresponde, dentro del plazo que al efecto se le señale, presentar la correspondiente liquidación; y si, dentro de este plazo, ó del segundo que puede señalarsele, y que no ha de exceder de la mitad del primero, no la contestare, se dispondrá que la formule el acreedor, procediéndose, entonces, lo mismo que en el caso de resarcimiento de daños de que acabamos de hablar. Si el deudor presentó la liquidación en tiempo, y el acreedor está conforme, se hará efectiva la suma como si se tratare del pago de una cantidad líquida.

Si la sentencia condena á la rendición de cuentas y entrega del saldo, se procederá del mismo modo que tratándose del pago de cantida ilíquida.

Y si el pago ha de ser de cantidad determinada de frutos en especie[6]), y no se entregaren, se reducirá su importe á metálico, calculándolo con arreglo al precio medio del dia, si este se fijó en la sentencia, y, si no, del en que esta debió cumplirse. El precio se acreditará por certificación de la Junta sindical del Colegio de corredores, si lo hubiere, y, si no, por certificación de la autoridad municipal.

---

[1]) El *requerimiento* es la intimación hecha á una persona, á quien incumbe el cumplimiento de algo para que lo ejecute sin violencia.

[2]) El *embargo* es la traba impuesta por autoridad judicial ó adminsitrativa sobre las cosas propiedad del deudor, y, por virtud de la que, quedan dichas cosas afectas en primer término al pago de la deuda que la motivó.

[3]) Hablaremos de ello al tratar de este juicio.

[4]) El *avaluo* es la valoracion ó tasación de los bienes.

[5]) El *apremio* consiste en la realización de los bienes embargados hasta dejar con su importe satis fecho el todo ó parte de la cantidad importe de la deuda.

[6]) *Frutos en especie*, cosa susceptible de pesarse, contarse ó medirse.

If it directs payment of a net amount, there must always and without the necessity of a previous personal demand[1]) be an arrest[2]) of property, in the form and order provided for the executive action[3]). The valuation[4]) and consequent sale of the goods arrested for payment of the amount must also be effectuated in the manner provided for the procedure of *apremio*[5]), after an executive action.

If it orders the payment of an unliquidated sum or any other thing, which for any reason cannot be followed by immediate execution at the instance of the creditor, an arrest of the property may be ordered to an amount sufficient, in the opinion of the judge, to secure payment of the principal and the costs of the execution; and this arrest can only be avoided by the debtor by giving sufficient security to the satisfaction of the judge.

If it is a question of the delivery of a moveable, the person who has gained the action must forthwith be placed in possession thereof, by the measures applied for by the interested party for that purpose. And if the moveable cannot be obtained, execution shall proceed as in a case of a judgment for compensation in damages.

If it is a question of doing or not doing an act, fulfilment of the act ordered must be obtained; and if the unsuccessful party, in the case of doing a thing, fails to perform it within the time appointed, the judge must order that it be done at his expense. If, for personal reasons, the act cannot be done in this way, execution shall proceed as in a case of a judgment for compensation in damages. If it is a question of not doing a thing, the same kind of proceedings must be taken as in the preceding case.

If the compensation in damages is fixed by the judgment as a definite amount, execution must proceed, in case of non-performance, as when the amount is net. And if it is not fixed, then whether the bases therefor are established or not, on a report to that effect made by the party who is entitled to the compensation, a brief hearing must take place between the parties in order to obtain an agreement, or in default thereof, a decision, as to the proceedings. Agreement is obtained by a written document on the part of the unsuccessful party undertaking to answer, within the legal time, the document of the opposite party in which he makes a report on the damages, or by his having allowed the time to expire without answering. In case of disagreement, this matter must be received to proof, if any of the parties applies for it and the judge so agrees; and, after the evidence has been taken and the parties have appeared to report verbally to the judge on the result thereof, the latter must decree the appropriate order within the term of three days. This order is appealable without a stay of execution.

In the case of an unliquidated amount in produce, income, profits or proceeds of any sort, with or without the bases for assessing them, it is the duty of the debtor to present the corresponding statement within the time appointed thereof; and if an answer is not given, within this time or one extension therefor, which must not exceed half of the first period, an order must be made that the creditor draw it up, proceeding thereafter as in the case of the compensation in damages, of which we have already spoken. If the debtor presented the statement in time, and the creditor agreed thereto, the sum must paid as in the case of payment of a net amount.

If the judgment orders that accounts be rendered and the balance paid, the proceedings will follow the same course as if it was a matter of the payment of an unliquidated amount.

And if payment has to be made of a fixed amount of specific produce[6]), and it is not delivered, its value must be reduced to money, by calculating according to the middle price of the day, if this day is fixed by the judgment, and if not, then of the day when the order ought to be performed. The price must be proved by a certificate of the Governing Body of the College of Brokers, if any, and if none, then by the certificate of the municipal authority.

---

[1]) *Requerimiento* is the intimation made to a person, who is under an obligation to perform something, to perform it without violence.

[2]) *Embargo* is the arrest imposed by the judicial or administrative authority on things which are the property of the debtor, by virtue of which the said things are affected in the first place to the payment of the debt which caused the arrest.

[3]) We will speak of this in treating of that action.

[4]) *Avaluo* is the valuation or appraisement of the property.

[5]) *Apremio* consists in the realisation of the arrested property so as to pay the whole or part of the amount of the debt with the proceeds.

[6]) *Frutos en specie*, means a thing capable of being weighed, counted or measured.

Salvo las apelaciones en los incidentes sobre cuestiones no controvertidas en el pleito, ni decididas en la ejecutoria, que podrán seguirse en todos sus trámites, las que se produzcan en las diligencias de ejecución solo se admitirán en un efecto; no dándose, contra el fallo que dicte la Audiencia en segunda instancia, recurso alguno.

Las costas de la ejecución habrá de abonarlas el que se opuso al cumplimiento de la sentencia, y las de los incidentes las satisfará el que resulte condenado á su pago; y, no habiendo expresa condenación, satisfará cada uno las causadas á su instancia.

II. Ejecución de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros.

Las sentencias firmes, dictadas en pais extranjero, tendrán en España la fuerza que establezcan los respectivos Tratados. Si no los hay, tendrán la fuerza que en el pais de procedencia se conceda á las de España. Y si no hay ni Tratado, ni reglas, ni precedentes, se ejecutarán las sentencias que reunan las circunstancias siguientes: que se hayan dictado á consecuencia de una acción personal[1]); que no se hayan dictado en rebeldia; que la obligación de que se trate sea lícita en España; y que la carta ejecutoria tenga toda la autenticidad necesaria en el pais de origen y en España[2]).

Si, á tenor de lo que queda dicho, la sentencia es susceptible de ejecución en España se solicitará esto del Tribunal Supremo, (salvo si en el Tratado existente se dispusiere otra cosa); se acordará la traducción hecha con arreglo á derecho[3]); y, previa comparecencia de la parte perjudicada, á quien se emplazará por conducto de la Audiencia, en cuyo territorio esté domiciliada, (á quien se comunicará, lo mismo que al Ministerio fiscal, la sentencia), se resolverá si debe ó no darse cumplimiento á la misma, sin ulterior recurso. Si se deniega se devolverá la sentencia al que la presentó; y si se accede se comunicará á la Audiencia, para que esta lo haga al juez de primera instancia del domicilio del perjudicado, para su ejecución en los términos que hemos indicado.

Capitulo octavo. Juicio ejecutivo.

I. Cuando procede.

Tiene este juicio un estrecho parentesco con el que queda reseñado para la ejecución de las sentencias, solo que, como al ejecutivo no ha precedido otro juicio en el que se haya reconocido la existencia del derecho en que se funda la reclamación judicial, puede tener mayor número de incidentes que aquel; y, además, sea la que sea la resolución del juez ó Tribunal que en él entienda, queda siempre á las partes expedito el camino para intentar un juicio ordinario en aclaración de sus respectivos derechos.

El juicio ejecutivo solo procede cuando existe una deuda por cantidad líquida en dinero superior á 500 pesetas, ó especie que, reducida á metálico, exceda de dicha santidad, y sea deuda vencida, que resulte acreditada de uno cualquiera de los ciguientes titulos, (que son los que traen, según el tecnicismo legal, aparejada ejecución): La primera copia[4]) de toda escritura pública, ó la segunda[5]) que esté dada en virtud de mandamiento judicial, con citación de la persona á quien deba perjudicar ó á su causante; cualquier documento privado que haya sido reconocido

[1]) Las acciones reales que dán lugar á contienda judicial han de ventilarse en el lugar en que radica la cosa á que se refieren, y la ejecución de la sentencia corresponde tambien al juez que la dictó.

[2]) Para que tenga esa autenticidad en España es preciso: certificación del Cónsul español del lugar de procedencia respecto á la verdad de los nombres del juez ó jueces y actuarios que la suscriben, y legalización de sus firmas. La firma del Cónsul ha de estar legalizada, á su vez, por el representante diplomático de España en aquella nación; y, á su vez, la firma del representante ha de serlo por el Ministerio de Estado.

[3]) La traducción ha de hacerse por la oficina de interpretación de lenguas del Ministerio de Estado.

[4]) La primera copia, porque ya hemos dicho en pag. 46 la nota 2 que los originales de las escrituras, que reciben el nombre de matrices, quedan en poder del notario, y constituyen reunidas el protocolo.

[5]) La segunda no tiene razón de ser mientras existe la primera; y, por eso, no se solicita; más que en el caso de pérdida por robo, extravio ó destrucción, ó de oponerse á su entrega apesar del mandato judicial, el que obtuvo la primera.

Except appeals in interlocutory matters on questions not in dispute in the action, nor decided in the final judgment, which may pursue their course to the end, those from orders of execution are only allowed without a stay of execution; and there is no further appeal from the judgment of the Court of Appeal of second instance.

The costs of the execution must be paid by the party who refused to carry out the judgment, and those of interlocutory proceedings by him who was ordered to pay them; and if there was no express order, each must pay those caused at his instance.

II. Execution of judgments pronounced by Foreign Tribunals.

Final judgments, pronounced in a foreign country, will have in Spain the effect which is settled by the respective treaties. If there are none, they will have the same effect as is granted to those of Spain, in the country where they have been pronounced. And if there are neither Treaty, rules nor precedents, the judgments which combine the following requisites will be carried out: — that they have been pronounced as the result of a personal action[1]); that they have not been pronounced in default; that the obligation in question is lawful in Spain; and that the final order possesses all the authentication which is necessary both in the country of origin and in Spain[2]).

If, having regard to what has been said, the judgment is capable of execution in Spain, an application for that purpose must be made to the Supreme Tribunal (unless otherwise provided in the existing treaty); a translation must be ordered to be lawfully made[3]); and, after appearance of the prejudiced party, who must be summoned through the channel of the Court of Appeal of the territory in which he is resident (to whom and to the Public Prosecutor the judgment must be communicated), it must be decided whether the same ought to be carried out or not, without further appeal. If it is refused, the judgment must be returned to the party who presented it; and if it is granted, it must be communicated to the Court of Appeal, in order that the latter may communicate it to the judge of first instance of the address of the prejudiced party, for execution thereof in the way we have pointed out.

Eighth Chapter. Executive Action.

I. When it lies.

This action has a limited relationship with that which is set apart for the execution of judgments, in that, as the executive action is not preceded by any other action in which the existence of the right on which the claim at law is based has been recognised, it may have a greater number of interlocutory matters than the former; and besides, whatever be the decision of the Judge or Tribunal which tries it, it always remains a rapid road for the parties to bring an ordinary action to settle their respective rights.

An executive action only lies when there is a money debt for a net amount of more than 500 pesetas, or a specific thing which exceeds that amount when reduced to money, or a due debt which is proved by any of the following titles (which are those that, in legal technical terms, involve prompt execution): — the first copy[4]) of every notarial document, or the second[5]) when issued by virtue of an order of the judge, after summoning the person who may be prejudiced thereby, or his predecessor in title; — any private document which has been acknowledged on oath in the

---

[1]) Real actions which give rise to a legal dispute, must be heard at the place where the thing to which they refer is situated, and the execution of the judgment pertains also to the judge who pronounced it.

[2]) The following elements are required for authentication in Spain: certification by the Spanish Consul of the place where the judgment was pronounced as to the truth of the names of the judge or judges and masters who sign it, and the verification of their signatures. The signature of the Consul must likewise be verified by the diplomatic representative of Spain in that nation; and, again, the signature of the representative must be verified by the Ministry of State.

[3]) The translation must be made by the office for the translation of languages in the Ministry for Foreign Affairs.

[4]) The first copy, for we have already said on page 46, note 2, that the originals of the documents which receive the name of "*matrices*" remain in the control of the notary, and when joined together form the archive.

[5]) The second has no raison d'être as long as the first is in existence; and for that reason the person who obtained the first does not apply for it, except in case of loss by robbery, straying or destruction, or refusal to deliver it in spite of the order of the judge.

bajo juramento ante el juez competente para despachar la ejecución; la confesión de la deuda hecha ante juez competente; las letras de cambio, sin necesidad de reconocimiento judicial respecto del aceptante que no hubiere puesto tacha de falsedad á su aceptación al tiempo del protesto por falta de pago; cualesquiera titulos al portador ó nominativos emitidos legalmente, y sus cupones, cuando el importe de ellos pueda reclamarse, siempre que los titulos confronten con el talonario y los cupones con los titulos; y las pólizas originales de contratos celebrados con intervención de agente de Bolsa ó corredor colegiado, que estén firmadas por los contratantes y el agente ó corredor, con tal de que se compruebe esto, en virtud, de mandamiento judicial, y con citacion de la parte contraria, con el libro registro del agente ó corredor, y este resulte arreglado á lo prevenido en la ley.

II. Preparación del juicio.

Deducese de esto que, en la mayor parte de los casos, el juicio ejecutivo requiere una preparación, ya que para poder entrar en él, (salvo si se tratare de escrituras públicas, ó de proceder contra el aceptante de una letra que no opuso tacha de falsedad en el acto del levantamiento del protesto por falta de pago). es forzoso pedir: el prévio reconocimiento de la firma del deudor; la confesión en juicio de la deuda; la confrontación de los titulos y cupones con sus talonarios ó con los propios titulos; ó la confrontación de las pólizas de los contratos con el libro registro del agente ó corredor que los autorizó. A más de esto, conviene tener en cuenta, que, en ocasiones, y ante el temor de que los actos del deudor puedan hacer ilusoria la responsabilidad resultante de la existencia del titulo ejecutivo, cabe tambien que, antes de empezar el juicio ejecutivo, haya que acudir al embargo preventivo. Asi, pues, puede decirse, que en esta clase de juicios hay tres periodos perfectamente marcados: el de preparación, el de sustanciación y el de ejecución de sentencia ó procedimiento de apremio.

§ 1.° *Embargo preventivo.*[3])

En los casos en que se considere necesario este, antes que practicar ninguna otra diligencia preparatoria, conviene pedir el embargo preventivo; el cual procederá si el deudor fuere extranjero no naturalizado en España; si siendo español, ó extrangero no naturalizado, no tuviere domicilio conocido, ó bienes raices en el lugar donde corresponda exigirle el pago de la deuda; si, aún teniendo domicilio conocido, en el caso de ser español ó extranjero naturalizado, se hubiere ausentado sin haber dejado persona que le represente legalmente, y si la hubiere dejado esta ignorare su residencia; ó si se ocultare, ó existiere motivo racional, aún no ocultándose, de que malbaratará sus bienes para causar perjuicio á sus acreedores.

En cualquiera de estos casos, y, prévia la presentación con la solicitud de embargo del documento que acredite la existencia del crédito, podrá decretarse aquel, con la urgencia que el caso requiera, sin necesidad de oir al deudor, y sin consentirle recurso contra el embargo, siempre que el titulo sea de los que no necesitan la preparación del juicio. El deudor podrá impedir el embargo, no obstante lo que acabamos de decir, siempre que en el acto mismo de trabarlo pague ó afiance suficientemente el importe de la deuda. En el caso de afianzamiento, y hasta que el juez resuelva si es ó no admisible, se adoptarán provisionalmente las medidas necesarias para evitar la ocultación de los bienes, ó cualquier otro abuso que pudiera cometer el deudor.

El embargo se trabará en los bienes designados al efecto; y, si no se hubieren designado, podrá designarlos el acreedor en el momento de la diligencia de embargo, ó el dependiente del juzgado á quien esta se encomendare, pero por el orden siguiente: dinero metálico; efectos públicos; alhajas de oro, plata ó piedras preciosas; créditos realizables en el acto; frutos y rentas de toda especie; bienes semovientes; los demás bienes muebles que no sean de los indicados; bienes inmuebles; sueldos ó pensiones; y, por último, créditos y derechos no realizables en el acto. Dentro de este orden, conviene tener en cuenta, que la ley establece ciertas excepciones ó prohibiciones, fundadas en exigencias del servicio público las unas, y en consideraciones humanitarias las otras. Por razón de lo primero, prohibe que puedan embargarse las vias férreas abiertas al público; ni sus estaciones, almacenes, talleres, terrenos, obras y edificios

[3]) Tambien procede el embargo preventivo por deudas que no excedan de 500 pesetas; pero en este caso el embargo habrá de decretarse por el juez municipal á quien corresponda, y el juicio subsiguiente para hacerla efectiva será un juicio verbal.

presence of the judge who has jurisdiction to issue the execution; — admission of the debt made before the same judge; — bills of exchange, without any necessity of a judicial verification of the acceptor, unless he has placed a charge of forgery of his acceptance at the time of the protest for want of payment; — any bearer or nominal securities lawfully issued, and the coupons thereof, when the amount of the latter can be claimed, provided that the securities compare with the counterfoil and the coupons with the securities; — and the original contracts of bargains made through an agent on the Exchange or a Collegiate broker, which are signed by the contracting parties and agent or broker, provided that this is proved under an order of the judge, and after summoning the opposite party, by the register book of the agent or broker, and that this proves to have been kept in accordance with the provisions of the law.

II. Preparation of the Action.

It follows from this that in the majority of cases, the executive action requires preparation, for in order to start this action (except in the case of notarial instruments or of proceeding against an acceptor of a bill who has not placed a charge of forgery at the time of drawing up the protest for want of payment) it is necessary to apply for: the previous verification of the signature of the debtor; the admission of the debt in Court; the comparison of the securities with their counterfoils and coupons with their own securities; or the comparison of the contracts with the register book of the agent or broker who authenticated them. And besides this, it is convenient to remember that on certain occasions and when there is a fear that acts of the debtor may make the liability resulting from the existence of an executive title illusory, it is possible before beginning the executive action, to resort to preventive arrest. It may be said then, that in this class of action there are three perfectly marked periods: preparation, substantiation, and execution of judgment or the proceeding called *apremio.*

§ 1. *Preventive Arrest.*[1])

When it is considered necessary, it is convenient to apply for the preventive arrest, before taking any other preparatory step; and this is available if the debtor is a foreigner not naturalised in Spain; if the debtor is a Spaniard or a foreigner not naturalised, who has no known address or real property in the place where the payment of the debt should be demanded; if, though having a known address, the Spaniard or naturalised foreigner has absented himself without leaving any person as his legal representative, or if he has left the latter ignorant of his residence; or if he conceals himself, or there is any reasonable fear, even when he is not concealing himself, of his dissipating his property in order to prejudice his creditors. In any of these cases, and after the presentation of the document which proves the existence of the debt, together with the application for arrest, the latter may be ordered, if the urgency of the case requires it, without the necessity of hearing the debtor, and without any appeal against the arrest, provided that the title is one of those which do not require the preparation of an action. Notwithstanding what we have just said, the debtor can stop the arrest, provided that at the time of applying it, he pays, or gives sufficient security for, the amount of the debt. In case he offers security, and until the judge decides whether it is admissible or not, the necessary measures for preventing concealment of property or for preventing any other abuse which the debtor may commit, must be adopted provisionally.

The arrest will attach those properties pointed out for that purpose; and if they have not been pointed out, the creditor[1]) may do so at the time of arrest being executed, or the clerk of the Court to whom this has been entrusted, but in the following order: cash; public securities; jewels of gold, silver or precious stones; credits realisable at once; produce or income of every kind; animals; other moveables; immoveables; salaries or pensions; and lastly credits and rights which are not realisable at once. Within the limits of this order, it is well to remember that the law enacts certain exceptions or prohibitions, some based on the exigencies of the public service, and others on humanitarian considerations. On the former ground, it prohibits the arrest of railroads open to the public; also their stations, warehouses, workshops, lands, permanent works and buildings which are necessary for their use; also loco-

[1]) There is also preventive arrest for debts which do not exceed 500 pesetas; but in this case the arrest must be ordered by the municipal judge to whom the case belongs, and the subsequent action to make it effective will be a verbal action.

que sean necesarios para su uso; ni las locomotoras, carriles y demás efectos del material fijo y móvil destinados al movimiento de la linea. Y, por razón de lo segundo, prohibe que el lecho cotidiano del deudor, de su cónyuge é hijos; las ropas del preciso uso de los mismos; los instrumentos necesarios para el arte ú oficio á que aquel puede estar dedicado, ni el salario, sueldo, pensión ó retribución, ó su equivalente que no exceda de 2 pesetas 50 céntimos al dia. Y, si excedieren de esta cantidad, ha de procurarse que en ningun caso, ni por ningun motivo, sea el haber que quede libre al embargado inferior á dicha cantidad. Respecto de los que excedan de ella, no se podrá embargar tampoco más de la quinta parte, si no pasan de 2500 pesetas anuales; más de la tercera, si exceden de 2500, y no pasan de 5000; ni más de la mitad desde esta última cifra en adelante. Entendiéndose, que estas cantidades han de computarse perfectamente líquidas; es decir, hecha deducción de los descuentos, impuestos ó gravámenes públicos que puedan pesar sobre los mismos; y sin que, contra lo asi dispuesto, pueda prevalecer ningun convenio ni directo ni indirecto del deudor con sus acreedores, aunque resultare hecho con intervención judicial[1]).

Si el embargo se hiciere sobre inmuebles se limitará á librar mandamiento por duplicado al registrador de la propiedad, para que extienda en el libro registro la anotación preventiva correspondiente. Si sobre muebles ó semovientes se depositarán en persona de responsabilidad. Si de metálico ó efectos públicos en el establecimiento destinado al efecto, si lo hubiere en el lugar del embargo; depositándose, en caso contrario, lo mismo que los demás muebles, pero exigiendo del depositario las garantias suficientes, mientras se acuerde su traslación á un establecimiento de los indicados.

Cuando los bienes embargados estuvieren en poder de un tercero se constituirá á este en depositario, poniéndolo en conocimiento del embargado. Y, si el embargo se hiciere sobre frutos y rentas, se constituirá una administración judicial, que se confiará á la persona que el acreedor designe.

Conseguido el embargo, deberá pedirse su ratificación en el juicio ejecutivo ó declarativo que proceda, debiendo presentar la correspondiente demanda en el preciso término de 20 dias, que puede reducirse á 10 á voluntad del embargado; transcurrido el cual, sin haber presentado la demanda, ni la ratificación del embargo, quedará nulo de derecho, y á solicitud del deudor, y sin audiencia del acreedor, se dejará sin efecto. Sin embargo, entablada la demanda, y durante la sustanciación del juicio, podrá pedirse el embargo preventivo; pero para acordarlo y practicarlo, si procede, se formará pieza separada de los autos ejecutivos.

Si se deja sin efecto el embargo, por improcedente, se impondrán las costas al que lo solicitó, y tambien los daños y perjuicios que se estimen[2]); y, si se deja sin efecto, por nulidad producida por no presentar la demanda en tiempo, ó no haber pedido la ratificación del embargo, se dispondrá otro tanto, asi como la cancelación de la fianza, si se prestó, ó la cancelación de la anotación preventiva que se hiciere en el registro de la propiedad. Y si se dejare sin efecto, por otro cualquier motivo, entonces, se acordará lo que proceda, según los casos, en materia de costas é indemnización.

Si el titulo en que se apoya la pretensión del embargo es de los que necesitan reconocimiento ó confrontación prévia[3]), podrá decretarse tambien, aunque por cuenta y riesgo del que lo solicita. Lo mismo podrá hacerse aún cuando se trate de un documento suscrito por otro, aunque á nombre del deudor por no saber firmar, siempre que, citado este por dos veces consecutivas, con el intervalo de 24 horas, para declarar bajo juramento sobre la certeza del documento, no compareciere al llamamiento judicial. Y lo mismo procederá en el caso de que hubiere reconocido el documento, pero negare la existencia de la deuda. Sin embargo, como en tales casos la seguridad no es la misma que cuando se traba el embargo preventivo por la exhibición de un titulo ya ejecutivo, si el que lo solicita, no tuviere responsabilidad

[1]) La Ley de 12 de julio de 1906 ha reformado en el sentido indicado los articulos correspondientes de la de Enj. civ., favoreciendo á los pobres más de lo que les favorecia esta.

[2]) Esto supone que despues de decretado se ha opuesto á ello el deudor, demostrando la sinrazón del embargo. De aqui la indemnización de daños y perjuicios. Esta oposición habrá de hacerse dentro de los cinco dias siguientes al de la notificación del auto de ratificación del embargo, ó antes, sustanciándose en la forma de los incidentes.

[3]) Aún cuando la ley sólo se refiere al caso del documento privado que requiere el prévio reconocimiento de la firma, es evidente que lo mismo puede y debe hacerse en el caso de tratarse de titulos, cupones ó pólizas que requieran su confrontación.

motives, rails and other effects of fixed or moveable material, destined for the traffic of the line. And on the latter ground, it prohibits the arrest of the usual bed of the debtor, his wife and children; the clothes necessary for their use; the instruments necessary for the art or office to which he applies himself, and the salary, pay, pension or reward or their equivalent, not exceeding 2 pesetas 50 cents per day. And if they exceed this amount, care must be taken that in no case and for no reason should the property which remains free from the arrest be less than that amount. With regard to the property which is greater than that amount, no more than the fifth part may be arrested if it does not exceed 2500 pesetas per annum; nor more than the third part, if it exceeds 2500 pesetas and does not exceed 5000; nor more than a half from this figure upwards. It must be understood that these amounts must be calculated absolutely net; that is to say, discounts, public taxes or charges on the property must be deducted; and no agreement to the contrary either direct or indirect, made by the debtor with his creditors, will prevail, although it be made by leave of the judge[1]).

If the arrest attaches immoveables, it must be confined to delivering the order in duplicate to the registrar of ownership, in order that he may draw up the corresponding preventive note in the register book. If it attaches moveables or animals, they must be deposited with a responsible person. If it attaches cash or public securities, they must be deposited in the establishment appointed for that purpose, if there is one at the place of the arrest; and in default, they must be deposited like other moveables, but always on requiring sufficient security from the depositary, until their removal to one of the appointed establishments.

When the arrested property is in the control of a third person, he will become the depositary, by giving him notice of the arrest. And if the arrest attaches produce and income, a judicial administration must be formed, which will be entrusted to the person nominated by the creditor.

When the arrest has been obtained, its ratification must be applied for in the proper executive or declaratory action, it being necessary to file the Claim within the peremptory time of 20 days, which may be reduced to 10 at the wish of the defendant[1]). After this time has expired without the Claim having been filed or the arrest ratified, the latter will be void, and will be so declared on the application of the debtor and without hearing the creditor. However, the preventive arrest may be applied for, after the Claim has been filed, and during the course of the action; but if so, in order that it may be decreed and carried into effect, a file must be formed, which will be separate from the executive record.

If the arrest becomes void as inapplicable to the case, the costs and the assessed damages[2]) must be inflicted on the applicant, and if it becomes void through the Claim not being filed in time, or through ratification of the arrest not having been applied for, a similar order must be made, together with the cancellation of the security, if any, or the cancellation of the preventive note in the register of ownership. And if it becomes void for any other reason, then a proper order must be made for costs and compensation, according to the case.

If the title on which the claim to the arrest is based, is one of those which requires previous acknowledgment or comparison[3]), it may likewise be ordered, though at the risk of the applicant. The same may be done when it is a case of a document signed by another, because the debtor does not know how to write, provided that the latter does not appear to the summons of the judge, after having been cited on two consecutive days with the interval of 24 hours, to declare on oath regarding the authenticity of the document. And the same will happen, when he has acknowledged the document, but denied the existence of the debt. Nevertheless, as the security is not the same in such cases as when a preventive arrest attaches on production of a title which is already executive, if the applicant is not of known responsibility

---

[1]) The law of 12 July 1906 amended the corresponding articles of the Code of Civil Procedure in this sense, favouring the poor more than the former law.

[2]) This supposes that after the decree has been made, the debtor has objected to it, by showing the groundlessness of the arrest. Hence the compensation for damages. This objection must be made within the five days following the notification of the order ratifying the arrest, or before, on its being supported as an interlocutory proceeding would be.

[3]) Although the law only refers to the case of a private document requiring the previous acknowledgment of the signature, it is evident that the same may and ought to take place in the case of securities, coupons or contracts which require comparison.

conocida, para estar á las resultas de los perjuicios y costas que pudieren ocasionarse, deberá el juez exigirle fianza bastante á su juicio; y si se la admitiere personal, la responsabilidad definitiva será del juez que la consintió.

Si la deuda no excediere de 500 pesetas, el juez municipal decretará el embargo preventivo que se hubiere pedido, siempre que lo estime procedente, al tiempo de acordar la citación para el juicio verbal; y lo ratificará, ó dejará sin efecto en la sentencia, segun que condene ó absuelva al demandado; imponiendo al demandante, en este último caso, las costas, y los daños y perjuicios cuando el demandado los hubiere reclamado en el juicio.

§ 2.° *Reconocimiento de firma de un documento privado.*

Ha de solicitarse del juez la citación del deudor para este reconocimiento; y si el deudor no compareciere, apesar del segundo llamamiento, bajo apercibimiento de tenerle por confeso si no comparece, se tendrá por reconocida la firma para los efectos de la ejecución, y se despachará esta si se acompaña acta de protesto ó de requerimiento notarial al pago ó certificación de acto de conciliación, siempre que no resulte de alguno de estos documentos que la oposición al pago se fundó en la falsedad de la firma. De no existir protesto, acta de requerimiento ó certificación de acto de conciliación, habrá de citarse por tercera y última vez al deudor; y si no comparece, ni alega justa causa que se lo impida, á petición del acreedor, se tendrá por reconocida la firma, y se despachará la ejecución.

Si comparece el deudor, y reconoce la firma, aunque niegue la deuda, á petición del acreedor, podrá despacharse la ejecución. Y si dijere que no puede asegurar si la firma es suya, se le interrogará acerca de la certeza de la deuda; y, si la confiesa, podrá despacharse la ejecución. Si la negare no hay ejecución posible; y al acreedor no le queda otro recurso que el de acudir al juicio ordinario correspondiente.

§ 3.° *Confesión en juicio de la deuda.*

Cuando no exista documento ninguno que acredite la deuda podrá prepararse la ejecución pidiendo al juez que cite al deudor, para que confiese, bajo juramento, la certeza de la deuda; siendo preciso, para ello, que el deudor esté en el pueblo cuando se le haga la citación, que sea esta personal, y que en la cédula de citación se exprese el motivo de esta, la cantidad que se reclame y el origen de la deuda. Si no se hallare al deudor en su habitación solo podrá entregarse la cédula al pariente más cercano; y si, después de tres citaciones, hechas bajo apercibimiento de tenerle por confeso, no compareciere, ni alegare justa causa que se lo impida, se tendrá por reconocida la deuda, y podrá despacharse la ejecución. Si comparece, y niega la deuda, no hay ejecución posible, y solo queda el camino del juicio ordinario[1]).

§ 4.° *Confrontación de titulos y cupones.*

Habrá de solicitarse del juez la práctica de esta diligencia en el domicilio comercial de la entidad que los emitió, con la intervención del director, ó persona que al efecto represente al deudor. Si la confrontación resulta conforme, no será obstáculo para despachar la ejecución la protesta de falsedad del titulo, si bien, esta, podrá alegarse dentro del juicio en forma de excepción.

§ 5.° *Comprobación de pólizas suscritas por corredor ó agente de Bolsa colegiado.*

Para preparar la ejecución con pólizas originales suscritas por corredor ó agente de Bolsa colegiado habrá de solicitarse del juez la práctica de esta diligencia en el domicilio del corredor ó agente, para que, con citación de la parte contraria, se haga el examen del asiento correspondiente que ha de existir en el libro, y se compruebe si este se lleva ó no con arreglo á la ley. Si el resultado de esta diligencia es favorable al que exhibe la póliza queda preparada la ejecución; y, si no lo fuere, solo le queda expedito el juicio ordinario correspondiente.

III. Sustanciación del juicio.

La demanda ejecutiva se ha de formular en los mismos términos que la ordinaria; pero conteniendo la protesta de abonar pagos legitimos. Ha de ir acompañada, tam-

[1]) Aunque la confesión de una deuda, hecha al absolver posiciones en un juicio ordinario, después de contestada la demanda, es una verdadera confesión judicial, declara la ley, sin embargo, que, esta, no podrá servir de fundamento á una ejecución, para abandonar el juicio ordinario.

for answering the damages and costs which may be occasioned, the judge must require what he considers sufficient security; and if he allows personal security the final responsibility will be that of the judge who allowed it.

If the debt does not exceed 500 pesetas, the municipal judge will order the preventive arrest applied for, if he thinks it applicable to the case, at the time of ordering the summons to the verbal action; and he must either ratify it or declare it to be void, according as he condemns or absolves the defendant; in the latter case, inflicting on the plaintiff the costs and damages, when the defendant has claimed them in the action.

§ 2. *Verification of the signature of a private document.*

The judge must be applied to for the summons to the debtor to make this acknowledgment; and if the debtor does not appear after a second summons warning him that his non-appearance will be equivalent to an admission, the signature must be held to have been acknowledged for the purposes of the execution, and this will be issued, if it is accompanied by the document of protest or notarial demand for payment or a certificate of the act of conciliation, provided that it does not appear from any of these documents that the objection to payment is founded on the forgery of the signature. If there is no protest, document of demand or certificate of the act of conciliation, the debtor must be summoned for the third and last time; and if he does not appear or plead some just cause which prevents him, the signature must be held to be acknowledged and execution will issue on the application of the creditor.

If the debtor appears and acknowledges the signature, but denies the debt, execution may issue on the application of the creditor. And if he says that he cannot assert that the signature is his, he must be examined as to the truth of the debt; and, if he admits it, execution may issue. If he denies it, execution is not possible; and the creditor has no other recourse but to resort to the proper ordinary action.

§ 3. *Admission of the debt in Court.*

When there is no document in existence which proves the debt, execution may be set on foot by applying to the judge to summon the debtor to admit the truth of the debt on oath; it being necessary for that purpose, that the debtor should be in the place where the summons is made, that it should be personal, and that in the notice of the summons, the ground thereof, the amount claimed and the origin of the debt should be expressed. If the debtor is not found in his dwelling, the notice may only be delivered to his nearest relation; and if, after three citations, made with a warning that he will be held to have admitted, he does not appear or plead a just cause which prevents him, the debt must be held to be acknowledged, and execution may issue. If he appears and denies the debt, no execution is possible, and the road by an ordinary action alone remains[1]).

§ 4. *Comparison of securities and coupons.*

Application for this process must be made to the judge of the commercial address of the legal person who issued them, in the presence of the director, or of the person who represents the debtor for that purpose. If the comparison agrees, an objection on the ground of forgery of the security will not prevent the issue of the execution, although the objection may be pleaded as a defence to the action.

§ 5. *Proof of contracts signed by a broker or Collegiate agent on the Exchange.*

In order to prepare execution on contracts signed by a broker or Collegiate agent on the Exchange, this process must be applied for to the judge of the address of the broker or agent, in order that, on citation of the opposite party, an examination may be made of the corresponding entry which ought to exist in the book, and that it may be proved whether this is kept in accordance with the law or not. If the result of this process is favourable to the person who produces the contract, execution is prepared; if it is otherwise, only the corresponding ordinary action is available.

III. Substantiation of the Action.

The executive Claim must be drawn up in the same terms as the ordinary Claim; but must contain the protest of making lawful payments. It must also be accompanied

[1]) Although admission of a debt, made in answering interrogatories in an ordinary action, after answer, is a true legal admission, the law, nevertheless, declares that this cannot serve as a ground for an execution, so as to abandon the ordinary action.

bien, de la copia de la misma, y de la de los documentos en que se basa. Si la deuda fuere en especie de las que se cuentan, pesan ó miden, ó en efectos de comercio, se hará la computación á metálico por el precio pactado; y, en su defecto, por el precio del mercado, que se acreditará con la certificación correspondiente de la Junta sindical del Colegio de corredores, si lo hubiere en la plaza, y, no habiéndolo, con certificación de la autoridad municipal, correspondiente, en el primer caso, y por la de dos corredores ó comerciantes, en el segundo. Si la deuda fuere de efectos públicos, ó de cualesquiera otros valores cotizables en Bolsa, se computará su valor efectivo en metálico por el precio de cotización que arroje el Boletin oficial de cotización correspondiente al dia del vencimiento de la obligación.

Si el juez encontrare conforme el titulo despachará la ejecución; y si creyere que la obligación ó el titulo son nulos, ó que este último no tiene fuerza ejecutiva, ya por defectos extrinsecos, ó por no haber vencido el plazo, ó no ser exigible la cantidad, ó ser ilíquida, la denegará, sin tener que oir, en ningun caso, al demandado.

Tanto la ejecución, como su denegación, se han de decretar por auto del juez, contra el que, si fuere de denegación puede recurrirse, pidiendo, primero, su reposición[1]), y si esta no se concede podrá apelarse del auto. Esta apelación habrá de admitirse en ambos efectos, y habrá de sustanciarse por la Audiencia, con emplazamiento, tan solo, del ejecutante.

Despachada la ejecución se entregará el mandamiento á un alguacil[2]) del juzgado, el cual requerirá de pago al deudor, á presencia del actuario[3]). Si pagare el deudor en el acto la deuda y las costas causadas se hará constar el pago en los autos por medio de diligencia[4]), dándose recibo por el actuario. El juez mandará entregar al ejecutante el importe de la deuda reclamada, y se dará por terminado el juicio.

Si, para evitar mayores gastos, consigna el deudor la cantidad reclamada en manos del actuario, reservándose el derecho de oponerse á la ejecución, se acordará por el juez la entrega, á aquel, de las copias de la demanda y documentos que se acompañen, emplazándole para que se persone en los autos dentro del plazo legal. Si no se personase le declarará en rebeldia; y mandando el juez traer los autos á la vista para sentencia, con citación, tan solo, del ejecutante, dictará esta. Si se personare, oponiéndose en tiempo y forma, se le tendrá por opuesto, y se le señalará el plazo para que formalice la oposición. Si no la formaliza, sin necesidad de instancia del ejecutante, dictará sentencia el juez, mandando, para ello, traer los autos á la vista, con citación de las partes.

Para que se considere formalizada la oposición en toda regla, es preciso fundarla en una de estas excepciones: Falsedad del título ejecutivo ó del acto que le hubiere dado caracter de tal; pago, compensación de crédito líquido[5]) que resulte de documento ejecutivo; prescripción[6]); quita ó espera[7]); pacto ó promesa de no pedir; falta de personalidad en el ejecutante ó en su procurador[8]); novación[9]); transacción[10]); compromiso de sujetar la decisión del asunto á árbitros ó amigables com-

---

[1]) El *recurso de reposición* tiene por objeto pedir al juez que examine de nuevo el asunto, y rectifique su acuerdo.

[2]) *Alguacil* es el último agente en la escala de los funcionarios de la administración de justicia; es, digamoslo asi, el brazo ejecutor de la justicia civil (— tambien los es de la criminal, aunque no de un modo tan absoluto, porque en esta hay el verdugo encargado de la ejecución de la pena de muerte —), ya que á él se le encomienda la práctica material de los embargos, notificaciones y citaciones.

[3]) *Actuario* es el funcionario judicial que autoriza las actuaciones todas del pleito.

[4]) *Diligencia* es la práctica, ó ejecución, de lo mandado por el juez. Y se llama, tambien, del mismo modo, la relación escrita que hace el actuario en los autos de lo ejecutado por mandato del juez.

[5]) *Compensación de crédito líquido* quiere decir existencia de otro crédito análogo á favor del deudor y en contra del acreedor (igual ó mayor), que produce los efectos del pago.

[6]) *Prescripción.* Transcurso del tiempo máximo, dentro del que es forzoso reclamar nuestras acciones ó derechos para que puedan prosperar en juicio.

[7]) *Quita* es la reducción del crédito, consentida por el acreedor. *Espera* es el aplazamiento del vencimiento que consta en el título.

[8]) Véase la pág. 42.

[9]) *Novación* es la sustitución de una obligación por otra, ya alterando el objeto ó las condiciones principales de la primera, ya sustituyendo la persona del deudor; ó ya subrogando á un tercero en los derechos del acreedor.

[10]) *Transacción* es un contrato celebrado entre acreedor y deudor, en el que, cediendo una y otra parte de lo que estiman que es un derecho, evitan la provocación de un pleito, ó ponen término al ya comenzado.

by a copy of the protest and of the documents on which it is based. If the debt consists of specific things, which are counted, weighed or measured, or of commercial securities, a cash calculation must be made at the agreed price; and in default, at the market price, which must be proved by the corresponding certificate of the governing body of the College of brokers, if there is one in the place, and if there is not, then by the certificate of the corresponding municipal authority, in the first case, and by that of two brokers or merchants in the second. If the debt is one of public securities, or of any other securities quotable on the Exchange, their cash value must be calculated by the price of the quotation on the day of the maturity of the obligation, shown by the Official Bulletin of quotations.

If the judge finds that the title agrees, he must issue execution; and if he believes that the title or obligation is void, or that the latter has no executive force, either through formal defects, or through being not mature, or through the amount being not payable, or not liquidated, he must refuse it, without having in any case to hear the defendant.

Both execution and the refusal thereof must be decreed by order of the judge, against one who, in case of refusal, can appeal by applying first for rehearing[1]), and if this is not granted, he may appeal from the order. This appeal must be admitted with stay of execution, and must be substantiated by the Court of Appeal, on summons to the plaintiff only.

When execution has been issued, the order must be delivered to a bailiff[2]) of the Court, who must demand payment of the debtor in the presence of the master[3]). If the debtor pays the debt and the costs at the time, payment must appear in the record by means of a minute[4]), and a receipt must be given by the master. The judge must order payment of the debt claimed to the plaintiff, and the action will be at an end.

If, in order to avoid greater expenses, the debtor pays the amount claimed into the hands of the master, reserving the right of objecting to the execution, the judge must order copies of the claim and the accompanying documents to be delivered to him, and summon him to appear to the record within the legal time. If he does not so appear, he must be declared in *rebeldia* (default); and the judge must order the record to be brought to a hearing for judgment, and pronounce judgment after summoning the plaintiff only. If he appears in due time and form, he must be held to have objected, and a time must be appointed him for drawing up his objection. If he does not draw this up, the judge must pronounce judgment, without the necessity of an application by the plaintiff, and for that purpose must order the record to be brought to the hearing, both parties being summoned.

In order that the objection may be held to be duly drawn up, it is necessary that it should be based on one of the following defences: — forgery of the executive title or of the document which would have given such a character; payment, set-off of a net debt[5]), proved by an executive document; prescription[6]); partial release or extension of time[7]); an agreement or promise not to sue; want of legal qualification on the part of the plaintiff or of his solicitors[8]); novation[9]); compromise[10]); agreement

[1]) The appeal de *reposición* is an application to the judge to examine the matter anew, and rectify his order.

[2]) *Alguacil* is the lowest officer on the scale of officials in the administration of justice; he is, so to speak, the executive arm of civil justice (it is the same in criminal justice, but not in so absolute a manner, for in the latter there is the executioner, charged with carrying out the death penalty), for the material performance of the arrests, notifications and citations is entrusted to him.

[3]) *Actuario* is the judicial officer who authenticates all the documents in the action.

[4]) *Diligencia* is the performance or execution of the order of the judge. The written report made by the master in the record of the execution of the order of the judge is also so called.

[5]) *Compensación de credito liquido* means the existence of another and similar (equal or greater) debt in favour of the debtor and against the creditor; which produces the effect of payment.

[6]) *Prescription.* Expiration of the extreme time within which it is incumbent upon us to claim our rights of action and rights in order that they may succeed at law.

[7]) *Quita* is the reduction of the debt, consented to by the creditor. *Espera* is the postponement of the time of maturity appearing on the title.

[8]) See page 42.

[9]) *Novación* is the substitution of one obligation for another, either by altering the subject-matter or the principal conditions of the original, or by changing the person of the debtor; or by subrogating a third person to the rights of the creditor.

[10]) *Transacción* is a contract made between creditor and debtor, in which, by both parties conceding what they consider a right, they avoid the institution of an action or terminate one already commenced.

ponedores, otorgado en forma legal; la incompetencia de jurisdicción; la plus-petición[1]); exceso en la computación á metálico de las deudas en especie; la nulidad de la obligación ó del título que sirvió para despachar la ejecución; la carencia de fuerza ejecutiva del título; y el no tener el ejecutado el carácter ó la representación con que se le demanda. Si el título ejecutivo, que sirve de base á la ejecución, es una letra de cambio, solo se admitirán las cinco primeras excepciones para que quede formalizada en regla la oposición. Al tiempo de formalizar esta, habrá de proponerse la prueba que se estime necesaria.

Del escrito de oposición se dará traslado al demandante para que conteste, y proponga, á su vez la prueba. Y si no la hubiere propuesto ninguno, citará el juez para sentencia, mandando entregar al ejecutado copia del escrito de contestación á la oposición, y celebrando vista del pleito si lo solicitare alguna de las partes dentro del plazo legal. Si se solicitó prueba por alguna de las partes, señalará el juez el término legal para proponerlas; dentro de cuyo término habrán de practicarse las propuestas que el juez haya declarado admisibles, y proponerse las que no lo hubieren sido, sobre las cuales resolverá el juez, lo mismo que si se tratare del juicio ordinario. Concluída la práctica de las pruebas, ó transcurrido el término sin haberlas practicado todas, mandará el juez que se unan á los autos las practicadas; y que se pongan estos de manifiesto á las partes para su instrucción. Pasado el término de instrucción, citará á estas para sentencia, en la forma que queda dicho anteriormente.

IV. Embargo.

Procede el embargo en todos aquellos casos en que el deudor no paga el total de la cantidad importe de la deuda y las costas causadas, ya por no querer hacerlo en el acto del requerimiento, después de despachada la ejecución, ya por no habérsele encontrado en su domicilio las dos veces que ha de buscársele, según previene la ley, y entregado la cédula de requerimiento á las personas que la ley designa á este efecto[2]); ó ya porque, no siendo conocido dicho domicilio, é ignorándose su paradero, se ha decretado el embargo por el juez, á instancia de parte, y sin la diligencia del requerimiento al pago, que es en tal caso de imposible cumplimiento, si no se toma el acuerdo de requerir para ello á la persona en cuyo poder radiquen los bienes del deudor. En el caso de que se practicare el embargo sin el prévio requerimiento al pago, se harán este y la citación de remate[3]) en una misma diligencia, que se hará pública fijándola en el tablón de edictos[4]) y en el *Diario de Avisos*[5]), donde lo hubiere, y sino en el *Boletin Oficial*[6]) de la provincia; y si el juez lo estima pertinente en la *Gaceta de Madrid*[7]).

El embargo se hará sobre los bienes dados en prenda ó hipoteca como especialmente afectos al pago de la deuda; y, no habiéndolos, ó siendo insuficientes, se procederá al de los demás que se encontraren, por el orden indicado al hablar de los embargos preventivos[8]), y con las mismas excepciones y prohibiciones que allí se indican. A este embargo, lo mismo que al preventivo, puede concurrir el acreedor, para designar, dentro de la serie legal, los bienes que especialmente han de embargarse, así como designar la persona del depositario.

Durante el curso del juicio, puede pedirse la mejora del embargo ó su ampliación. La mejora, en el caso de que pueda dudarse de la suficiencia de los bienes embargados para el pago del crédito y las costas; en el haberse entablado una ter-

[1]) *Plus-petición*, exceso en el pedir.

[2]) Véase la pág. 65. Si pagare por el deudor alguna de estas personas no se practicará lo embargo.

[3]) *Remate* es la adjudicación de bienes hecha en subasta pública; y la *citación de remate* es el aviso que se hace al deudor para que sepa que se va á proceder á la venta judicial para pago de su deuda.

[4]) El *tablón de edictos* es el sitio donde se fijan estos para conocimiento del público que asiste al Juzgado ó Tribunal. Se la llama tablón porque de ordinario es un trozo de madera. (tabla), sujeto á la pared, á suficiente altura, para que se pueda leer lo que en el mismo se fija.

[5]) El *Diario de Avisos* es el periódico oficial de la localidad.

[6]) El *Boletin Oficial* es el periódico oficial de la provincia.

[7]) La *Gaceta de Madrid* es el periódico oficial del Gobierno, en donde se insertan las leyes, reales decretos, reales ordenes, reglamentos, circulares, etc., que interesa poner en conocimiento de la nación.

[8]) Véase la pág. 62.

to submit the matter to the decision of judicial or friendly arbitrators, executed in legal form; incompetence of the jurisdiction; excessive relief[1]); excess in the cash calculation of debts in specie; nullity of the obligation or title on which execution was issued; want of executive force in the title; and the defendant not having his proper or the representative character in which he is sued. If the executive title on which execution was based, is a bill of exchange, the first five defences only will be admitted in drawing up the objection according to rule. At the time of drawing this up, the evidence which is considered necessary must be produced.

The document of objection must be delivered to the plaintiff in order that he may answer it, and produce the evidence in his turn. And if he does not produce any, the judge must summon for judgment, ordering a copy of the document in answer to the objection to be delivered to the defendant, and hearing the action on the application of either party within the legal time. If evidence is applied for by either of the parties, the judge must appoint the legal time to produce it; within which time such proposed evidence as the judge has declared admissible must be taken, and that which the judge has not allowed must be produced in order that he may decide thereon, as in an ordinary action. When the taking of the evidence is finished, or the time has expired without it all having been taken, the judge must order that the evidence taken be attached to the record; and that the record should be exhibited to the parties for their instruction. At the termination of the instruction, he must summon the parties to judgment, as has previously been said.

IV. Arrest.

An arrest may be granted in all cases in which the debtor does not pay the total amount of the debt and costs, either from not wishing to do so at the time of the demand, after execution has been issued, or from his not having been found at his address on the two occasions that he was sought for, according to the provision of the law, and the notice of the demand having been delivered to the persons designated by the law for that purpose[2]); or because, from both his address and his dwelling-place being unknown, the arrest has been ordered by the judge at the instance of the party, without the formality of the demand of payment, which in that case it is not possible to perform, if there is no decision given to make the demand for that purpose on the person in control of the immoveable property of the debtor. When an arrest is granted without the previous demand for payment, this and the summons to the auction[3]) must be done by the same proceeding, which must be published by fixing it on the advertisement board[4]) and inserting it in the *Diario de Avisos*[5]) if any, and if there is none, then in the *Boletin Oficial*[6]) of the province; and if the judge thinks fit, in the *Gaceta de Madrid*[7]).

The arrest will attach property given in pledge or mortgage as specifically affected to the payment of the debt; and if there is no such property, or it is insufficient, it will attach all other property, in the order indicated when speaking of preventive arrests[8]), and with the same exceptions and prohibitions as there indicated. As in the case of the preventive arrest, the creditor may attend this arrest, in order to point out the property which is to be specially arrested, according to the legal series, as well as to point out the individual depositary.

During the course of the action, the bettering or the extension of the arrest may be applied for. The bettering, when it may be doubted if the property arrested is sufficient for the payment of the debt and costs; or if a claim by a third party has

[1]) *Plus-petición*, excess in the relief.

[2]) See page 65. If one of these persons pays on behalf of the debtor, the arrest must not be granted.

[3]) *Remate* is the adjudication of property made at a public auction; and the *citación de remate* is the notice given to the debtor to inform him that a judicial sale is about to take place for payment of his debt.

[4]) The *tablón de edictos* is the place where advertisements are fixed to give notice to the public to attend at the Court or Tribunal. It is called *tablón*, because generally speaking it is a piece of wood (tabla) attached to the wall at a sufficient height for reading the periodical of the locality.

[5]) The *Diario de Avisos* is the official periodical of the locality.

[6]) The *Boletin Oficial* is the official periodical of the province.

[7]) The *Gaceta de Madrid* is the official periodical of the Government, wherein are inserted the laws, Royal decrees, regulations, circulars, etc. which it is important to bring to the notice of the nation.

[8]) See page 62.

cería; ó en el pedirse el de bienes especialmente hipotecados á la seguridad de la deuda. Y la ampliación, siempre que, durante el juicio, y antes de pronunciarse la sentencia de remate, venza algún plazo de la obligación por la que se ejecuta. La ampliación se concederá sin necesidad de retrotraer el procedimiento; y considerándose comunes á la ampliación los trámites del juicio ya practicados. También podrá pedirse la ampliación respecto de los plazos que vencieren después de la sentencia de remate; en cuyo caso el juez, presentada la demanda de ampliación, llamará los autos á la vista con citación de las partes, mandando entregar copia de aquella al deudor; y, si este no se opone, en el término de tres días dictará sentencia para que se tenga por ampliada la de remate, á tenor de lo nuevamente solicitado, siguiéndose adelante la ejecución. Si se opusiere, entonces, se dará á la demanda de ampliación el trámite de la demanda ejecutiva que ya hemos indicado anteriormente[1]).

Hecho el embargo, se citará de remate al deudor; ya en su domicilio, si fuere conocido; ya por medio de edictos, en la forma indicada[2]); mandándole entregar la copia de la demanda y del título y documentos que se acompañen para que se oponga ó consienta la ejecución; dándose, ya, en cualquiera de estos dos casos, al juicio la tramitación que hemos dicho[3]) en los casos en que no hubo embargo; teniendo en cuenta que, á más de las excepciones entonces indicadas, como utilizables para la oposición, puede fundarse esta, también, en no haber sido citado de remate con las formalidades legales.

Sentencia é impugnación de la misma. La sentencia que se dicte en el juicio ejecutivo es distinta, según que se haya hecho el pago en el acto del requerimiento, ó la consignación del importe de la deuda y costas, ó se haya consentido el embargo.

En el primer caso, como el pago se hace al actuario, el juez ordenará que se mande pagar al ejecutante, y que el resto se aplique al pago de costas, prévia tasación de las mismas, devolviendo el sobrante, si lo hubiere, al ejecutado.

En el segundo y tercero, si el fallo es condenatorio, dictará sentencia de remate, mandando seguir adelante la ejecución, y expresando la cantidad que ha de pagarse al acreedor; hará las declaraciones que estime procedentes sobre las excepciones opuestas; y dispondrá el pago de las costas, por cuenta del ejecutado, previa tasación; salvo el caso de que, habiendo alegado y probado alguna de las excepciones legales admisibles, hubiese consignado, al tiempo de formularla, la cantidad importe de la deuda. Si el fallo no fuere condenatorio, y puede no serlo por tres motivos: nulidad de actuaciones, incompetencia de jurisdicción y absolución; si es por el primero, se decretará la nulidad de todo lo actuado, mandando reponer los autos al estado que tuvieren cuando se practicó lo que ha producido la nulidad; si por el segundo, se estimará la incompetencia, dejando sin resolver todo lo demás; y si por el tercero, se decretará no haber lugar á pronunciar la sentencia de remate, haciendo, adémas, las declaraciones pertinentes respecto á las excepciones alegadas y á las costas, que se impondrán al ejecutante. Si se decretare la nulidad de lo actuado, se impondrán las costas por mitad á los litigantes, salvo que haya motivos bastantes para imponerlas á uno de ellos por su temeridad, ó, por vía de corrección, al funcionario que hubiere dado lugar á la nulidad del procedimiento.

Todas estas sentencias son apelables en ambos efectos; y si se tratare de la sentencia de remate, ó sea condenatoria, podrá ejecutarse, á petición de parte, siempre que preste, dentro del término legal, fianza bastante, á juicio del juez, para responder en el caso de que por revocación del fallo se vea obligado á devolver lo que se le entregue; cuya fianza quedará cancelada de derecho si el superior confirma la sentencia del inferior.

La sentencia dictada en juicio ejecutivo no produce la excepción de cosa juzgada; y las partes pueden ventilar de nuevo sus derechos en el juicio ordinario correspondiente.

---

[1]) Véase la pág. 65.
[2]) Véase la pág. 66.
[3]) Véase la pág. 65, 66.

been entered; or by applying for the attachment of property specifically mortgaged as security for the debt. And the extension whenever in the course of the action and before judgment for an auction, any time matures in respect of the obligation for which execution has issued. The extension will be granted without the necessity of the proceeding being retroactive; and the steps already practised in the action will be considered as for the benefit of the extension. Extension may also be applied for in respect of times maturing after the judgment for an auction; in which case the judge, on the demand for extension being presented, must summon the parties and call in the record for trial, ordering a copy of the demand to be delivered to the debtor; and if the latter does not oppose, he must deliver judgment within the term of three days, to the effect that the judgment for the auction should be considered extended according to the prayer of the new application and that the execution should proceed. If he opposes, the claim for extension must take the same course as that of the claim for execution which we have already pointed out[1]).

When the arrest has been made, the debtor must be summoned to the auction; either at his address, if it is known; or by means of advertisements in the form indicated[2]); and an order must be made to deliver him a copy of the Claim and of the title and documents which accompany it, in order that he may oppose or consent to the execution; and in each of these two cases the procedure of the cases in which there is no arrest, of which we have spoken[3]), must be followed; remembering that, besides the defences then indicated as available grounds of opposition, this may also be based on the defendant not having been summoned to the auction with the legal formalities.

Judgment and impugnment thereof. Judgment pronounced in the executive action differs, according to whether payment has been made at the time of the demand, or the amount of the debt and costs has been paid into Court, or the arrest has been consented to.

In the first case, as payment is made to the master, the judge must order payment to be made to the plaintiff, and that the rest should be applied in payment of the costs, after taxation, returning the surplus, if any, to the defendant.

In the second and third cases, if the judgment is against the defendant, judgment for auction must be pronounced, and the execution ordered to proceed, with a statement of the amount which has to be paid to the creditor; the judge must make the declarations which he considers proper on the defences entered; and order payment of the costs by the defendant after taxation, except in the case when, after pleading and proving one of the admissible legal defences, he has paid the amount of the debt into Court, at the time of drawing it up. If the judgment is not condemnatory, — and it cannot be so for three reasons; namely, nullity of the record, incompetence of the jurisdiction, and acquittal, — if it is for the first reason, nullity of the whole of the record must be decreed, and an order be made to restore the record to the state in which it was when the cause of the nullity took place; and if for the second reason, the question of jurisdiction must be considered, without deciding anything else; and if for the third reason, judgment for the auction must be refused in the decree, and the proper declarations made respecting the legal defences pleaded, and the costs which must be imposed on the plaintiff. If the nullity of the record is decreed, half the costs must be imposed on each of the litigants, unless there are sufficient grounds for imposing them on one of them on account of his rashness, or on the official who occasioned the nullity, by way of punishment.

All these judgments are appealable with stay of execution, but if it is a case of a judgment for an auction or is against the defendant, it may be executed on the application of the plaintiff, provided that he offers security within the legal time which in the opinion of the judge is sufficient, in case the judgment is reversed and he is obliged to return what has been delivered to him; and this security will be cancelled in law if the superior court confirms the judgment of the inferior.

A judgment pronounced in an executive action does not produce the defence of *res judicata*; and the parties may try their rights anew in the corresponding ordinary action.

---

[1]) See page 65.
[2]) See page 66.
[3]) See pages 65—66.

Capítulo noveno. Ejecución de la sentencia de remate ó procedimiento de apremio.

I. Procedimiento ordinario de apremio (avalúo, subasta y pago).

Las sentencias de remate se ejecutan por el procedimiento de apremio, siempre que sean firmes; y no siéndolo, por estar pendientes de apelación, cuando el ejecutante haya dado fianza suficiente para estar á las resultas de dicha apelación.

Si lo embargado fuere dinero, sueldos, pensiones ó créditos realizables en el acto, se hará, á solicitud del ejecutante, pago inmediato del crédito y costas, prévia tasación de estas. Si valores de comercio endosables, ó títulos al portador, emitidos por el Gobierno, ó las sociedades, ó particulares autorizados para ello, y son cotizables en Bolsa, se venderán por medio de agente, donde lo hubiere, y sino, por medio de corredor de comercio; haciéndose con su importe el pago, en iguales términos que en el caso anterior.

Si el embargo fué de bienes muebles ó inmuebles, habrán de subastarse[1]) públicamente, por la cantidad que de antemano hubiesen convenido acreedor y deudor; y sino, previo avalúo de los mismos, hecho por peritos nombrados por las partes, ó por el juez, si lo estima conveniente (en el caso de que por cualquier circunstancia no haya designado el que le corresponde el deudor, ó designado hubiere renunciado el nombrado segundamente), y se tratase de bienes inmuebles ó alhajas de importancia. En caso de discordia, podrá nombrarse un tercero, en la forma que indicamos al hablar del dictamen pericial[2]).

Si se tratare de inmuebles, antes de proceder á su avaluo, habrá de expedirse mandamiento judicial al registrador de la propiedad del partido correspondiente, para que expida la certificación de cargas que pesen sobre la finca ó fincas, ó la de estar libres de cargas, y requerir al deudor para que presente los títulos en la escribanía. Si de la certificación del registrador resultaren cargas, se hará saber á los acreedores el estado de la ejecución para que intervengan, si quieren, en el avalúo y subasta; lo cual podrán hacer personándose en autos, y nombrando, á su costa, un perito que, con los del ejecutante y ejecutado, intervenga en el avalúo.

Si el deudor presenta los títulos, se formará con ellos ramo separado[3]); y se comunicará al ejecutante para que manifeste si los encuentra conformes ó no, y pida, en este último caso, lo que considere necesario al efecto. Si no se presentaren, podrá apremiar el juez al deudor del modo que crea oportuno para que los presente, ó mandar al registrador de la propiedad que libre certificación de lo que respecto á ellos resulte en el registro; y, en su caso, testimonio de las escrituras de los bienes ejecutados. Y si esto no diere resultado, ó no existieren títulos de dominio, podrá suplirse su falta por los medios que al efecto previene la Ley Hipotecaria; practicándose todo ello á instancia del ejecutante, y á costa del ejecutado.

Practicado el avalúo, se anunciará la subasta por edictos y en los periódicos oficiales, por un plazo de 8 á 20 días, según que se trate de muebles ó de inmuebles ó alhajas de importancia; expresando en los edictos si hay ó no títulos de propiedad, y en el primer caso, que están á disposición de los que pretendan acudir á la subasta en la escribanía del juzgado. Para acudir á esta es preciso constituir previamente en poder del juzgado, ó en el establecimiento destinado al efecto, una cantidad que represente por lo menos el 10 % del avalúo, que se devolverá á sus respectivos dueños en el caso de que no se les adjudiquen los bienes.

La subasta puede celebrarse simultáneamente en el juzgado en que se siguió la ejecución y en el del lugar en que radiquen los bienes, si no fuere el mismo; y pueden celebrarse una, dos y tres subastas, siempre que no haya compradores que ofrezcan, por lo menos, el importe del avalúo en la primera, y las dos terceras partes de este en la segunda. La tercera se hará, sin señalar precio mínimo de venta. En estas

[1]) La *subasta* es la venta hecha al que, entre los varios á quienes se ofrece la cosa por vender, paga un precio mayor que el que ofrecieron los demás.

[2]) Véase la pág. 49.

[3]) *Ramo separado* se llama al conjunto de documentos y diligencias que constituyen pieza ó expediente distinto de los autos principales, aun cuando se consideren formando parte de los mismos.

Ninth Chapter. Execution of a judgment for auction or the proceeding called apremio.

I. Ordinary proceeding of Apremio (valuation, auction and payment).

Judgments for an auction are carried out by the proceeding called *apremio* provided that they are final; and if they are not so, in consequence of appeals being pending, when the plaintiff has given sufficient security to answer the results of the appeal.

If the arrested property is money, wages, pensions or debts which are realisable at once, immediate payment of the debt and costs, after taxation of the latter, will be made on the application of the plaintiff. If the property consists of commercial securities, passing by endorsement, or bearer securities issued by the Government or companies or persons authorised for that purpose, and are quotable on the Exchange, they must be sold through an agent, if any, and otherwise through a commercial broker; and the proceeds thereof must be applied as in the previous case.

If the arrest is on moveable or immoveable property, it must be sold by public auction[1]), at the reserve price previously agreed between the creditor and debtor; and otherwise, after previous valuation thereof, made by experts appointed by the parties, or by the judge, if he deems it convenient (when for any reason the debtor has not made an appointment, or the person appointed has resigned the appointment, and another has not been appointed), and in the case of immoveables or jewels of importance. In case of their disagreement, a third may be appointed, as we have already pointed out in speaking of the opinion of experts[2]).

Before proceeding to their valuation in the case of immoveables, the judge must issue an order to the Registrar of Ownership in the corresponding District to issue a certificate of the charges on the estate or estates, or that there are no charges, and require the debtor to produce the titles in the office of the court. If charges are shown by the certificate of the registrar, notice of the execution must be given to the creditors in order that, if they wish, they may take part in the valuation and auction; which they may do by appearing on the record and appointing an expert at their own expense, to take part in the valuation with those of the plaintiff and defendant.

If the debtor produces the titles, a separate file must be formed thereof[3]); and notice must be given to the plaintiff in order that he may show whether he agrees them or not, and in the latter case, in order that he may make the application which he considers necessary for that purpose. If they are not produced, the judge may arrest the debtor at his discretion, in order that he may produce them or may order the Registrar of Ownership to issue a certificate of what appears in the register with regard to them; and in a proper case, a certified copy of the documents of the property in execution. And if this gives no result, or if there are no titles of ownership, their absence may be supplied by the means provided for that purpose in the Law of Mortgage; all of which must be done at the instance of the plaintiff, and at the cost of the defendant.

After the valuation, the auction must be announced by advertisements and in the official periodicals for the space of from 8 to 20 days, according to whether it is a sale of moveables or of immoveables or jewels of importance; stating in the advertisements whether there are any titles to the property or not, and if there are, that they are in the office of the Court at the disposal of those who propose to attend the sale. In order to attend the sale, it is necessary to previously pay into court or to the establishment appointed for that purpose, an amount representing at least 10% of the valuation, which will be returned to the respective owners if the property is not adjudicated to them.

The auction may proceed simultaneously in the Court where the execution is proceeding and in the place where the property is situated, if they are not the same; and one, two or three auctions may be held, whenever there are no buyers who offer at least the valuation price at the first auction, and two third parts thereof at the second. The third will be held without reserve. In these auctions the defendant is

[1]) *Subasta* is the sale made to the one who, among several persons to whom the thing is offered for sale, pays a higher price than the others.

[2]) See page 49.

[3]) *Ramo separado* means a combination of documents and minutes of orders executed, which constitute a file distinct from the principal record, even when they are considered to form part thereof.

subastas el ejecutado tiene derecho en cualquier momento, antes del remate, de pagar el crédito y las costas para que queden libres los bienes, ó el de presentar personas que mejoren la postura[1]), cuando en la tercera subasta hiciere alguien proposición por un precio inferior al de las dos terceras partes del que sirvió de base á la segunda. En este caso, si el que hizo la primera proposición tiene interés en ello, se celebrará una nueva subasta entre este y el que presentó el deudor mejorando el precio.

El ejecutante tiene, también, derecho en estas subastas á quedarse con los bienes subastados por las dos terceras partes del precio del avalúo, si no hubo compradores en la primera, y por las dos terceras partes del precio fijado para la segunda en igual caso; ó bien, si lo prefiere, pedir, después de esta segunda subasta declarada desierta, que se le entreguen los bienes subastados en administración, para aplicar sus productos al pago de intereses y extinción del capital del crédito. En este caso no procederá la tercera subasta; y ejecutante y ejecutado habrán de ponerse de acuerdo respecto á la forma de administrar y rendir cuentas; y si no se pusieren de acuerdo, la administración y la rendición de cuentas se practicará en la forma corriente en el país donde radiquen los bienes; pudiendo el ejecutado, en cualquier momento, hacer que cese la administración pagando el resto de su deuda, y el ejecutante cesar en la administración, y pedir nueva subasta por el precio que resulte rebajado el 25% del avalúo; pudiéndose quedar la finca por las dos terceras partes de dicho precio si no hubiere compradores.

Cuando haya comprador en la subasta (si es en la tercera por un precio igual ó superior á las dos terceras partes del de la segunda, y si es en la segunda y primera por un precio igual ó inferior al señalado en cada una de estas), se aprobará la proposición en el mismo acto; mandando al depositario que entregue los bienes muebles ó semovientes al adjudicatario, previa la consignación del precio, que habrá de hacerse dentro de tercero día. Y si se trata de inmuebles, el remate se aprobará también en el mismo acto; pero no se exigirá la consignación del precio, que ha de hacerse en el término de ocho días, hasta que se haya practicado por el actuario la liquidación de cargas, si las hubiere, y estén conformes con ella el comprador y las partes. Si no estuvieren conformes, el juez examinará las objeciones que á la misma hagan, y resolverá su aprobación, ó mandará hacer las rectificaciones necesarias.

Aun habiendo comprador en las condiciones indicadas, no se podrá aprobar en el mismo acto de la subasta la venta si la proposición se hace en tercera subasta, y se ofrece el pago á plazos, ó con alguna otra condición, ó si se ha celebrado subasta doble; pues, en el primer caso, hay necesidad de poner la proposición modificada en conocimiento del acreedor para que este resuelva si se queda los bienes por las dos terceras partes del precio de la segunda subasta, aprobándose la proposición tal como se hizo en caso contrario; y, en el segundo, habrá de esperar el juez que conozca de los autos á que se le comunique el resultado de la otra subasta para hacer la adjudicación al mejor postor. Si las proposiciones fuesen iguales, entonces, habrá de procederse á una nueva subasta entre los dos compradores.

También en el caso de no consignarse el precio en el plazo señalado habrá de procederse á otra nueva subasta en quiebra, quedando el comprador de la anterior responsable de la disminución de precio y de los gastos que esta ocasione.

Consignado el precio, el deudor tendrá la obligación de otorgar la escritura de venta, y si no lo hiciere, la otorgará el juez; y, hecho esto, se entregarán al comprador los títulos de propiedad, y se le pondrá en posesión de los bienes.

Del precio de venta, consignado ante el juez, se deducirá, en primer término, el importe de los créditos hipotecarios que fueren anteriores al del ejecutante, depositándose á disposición de los respectivos acreedores, y el resto, si no bastare á cubrir el capital é intereses del crédito, se entregará al ejecutante. Si fuere superior, se le hará pago de dicho capital é intereses y, previa tasación de las costas, se le abonará de ellas lo que le corresponda; quedando el remanente, si lo hubiere, á disposición del deudor, salvo que estuviere retenido judicialmente para el pago de otros créditos.

Si los créditos que sirvieron de base á la ejecución fueren títulos al portador con hipoteca de inmuebles, y si el precio de venta no alcanza á cubrir el importe de todos, se prorrateará el que corresponda á cada título, se pagará la parte correspondiente á los que fueren propiedad del ejecutante, y el resto se depositará á disposición de los dueños de los demás.

---

[1]) Se llama *postura* á la proposición hecha en la subasta.

entitled to pay the debt and costs, at any moment before the sale, so as to free the property, or to produce persons who will bid more[1]), when there is a bid at the third auction at a sum lower than that which served as the base of the second. In this case, if the first bidder has an interest therein, a new auction must be held between him and the buyer produced by the debtor to better the price.

In these auctions, the plaintiff is entitled, also, to retain the offered property at the two third parts of the price of the valuation, if there were no buyers at the first auction, and at two thirds of the reserve at the second auction, in the same way; or if he prefers, he may apply after the second auction has been declared fruitless, that the property offered should be delivered to him to manage, so as to apply the produce to the payment of interest and the extinction of the principal of the debt. In this case the third auction must not be held; and the parties must agree as to the form of the management and rendering accounts; and if they do not agree the management and rendering accounts must be performed as is customary in the country where the property is situated, the defendant having the power at any moment to put an end to the management by paying the rest of his debt; and the plaintiff may stop the management and apply for a fresh sale at 25% below the valuation; and may retain the estate at two thirds of the said price, if there are no buyers.

Where there is a buyer at the auction (if at the third, at a price equal to or above the two third parts of the second, and if at the second or first, at a price equal to or higher than the reserve in each of them), the bid must be approved at once, and the depositary ordered to deliver the moveables or animals to the buyer, after the price has been paid into court, which must be done within the third day. And in the case of immoveables the auction must be approved at once; but payment into court will not be required, though this must be done at the end of eight days, until them aster has effected the settlement of the charges, if any, and the buyer and the parties are agreed thereon. If they are not agreed, the judge must examine the objections made thereto, and either approve it or order the necessary corrections.

Even when there is a buyer in the circumstances indicated, the sale cannot be approved at the time of the auction, if the bid is made at the third auction, and the offer is to pay by instalments, or under some other condition, or if there has been a double auction; for, in the first case it is necessary to bring the altered bid to the notice of the creditor, in order that he may decide whether he will retain the property at the two thirds of the price of the second auction, or on the other hand that he may approve the bid as made; and in the second case, the judge must wait until he ascertains the result of the other auction from the record communicated to him, in order that he may adjudicate the property to the highest bidder. If the bids were equal, a fresh auction must take place between the two buyers.

Also if the price is not paid into court at the time fixed, a fresh auction in bankruptcy must be held, the buyer at the former being liable for the diminution in price and the expenses which this occasions.

When the price has been paid into court, the debtor is bound to execute the instrument of sale, and if he does not do so, the judge must execute it; and when this has been done, the titles of ownership must be delivered to the buyer, and he must be put in possession of the property.

From the price of the sale paid into court there must be deducted in the first place, the amount of the mortgage debts prior to that of the plaintiff, by depositing it at the disposal of the respective creditors, and the rest must be delivered to the plaintiff, if it is not sufficient to cover the principal and interest. If it is greater, he must be paid the principal and interest, and after previous taxation of the costs, he must be paid those of his side; the surplus, if any, being at the disposal of the defendant, except what is retained in court for the payment of other debts.

If the debts on which the execution was based were bearer securities with a mortgage of immoveables, and if the sale price does not cover the amount of all of them, the amount which corresponds to each security must be apportioned, and the part corresponding to those held by the plaintiff must be paid, and the rest deposited at the disposal of the owners of the others.

---

[1]) *Postura* is the proposal made at the auction.

El comprador de fincas gravadas con hipoteca tendrá derecho á que, á petición suya, se cancelen[1]) las hipotecas y demás gravámenes que pesen sobre las mismas, mediante mandamiento judicial al registrador de la propiedad.

Si la adjudicación de la finca se hizo al ejecutante en pago de su crédito hipotecario, podrá pedir la cancelación de los posteriores, siempre que el precio de adjudicación no fuere suficiente para su total pago; pero no el de los anteriores que siempre subsistirán.

Las costas de la defensa del deudor, causadas durante la ejecución, no tendrán nunca preferencia; y serán las últimas que se deduzcan, antes de entregar el remanente al deudor.

Todas las apelaciones que se interpongan durante el apremio se admitirán en un solo efecto; exceptuándose de esta regla las de los incidentes á que dé lugar la administración y rendición de cuentas, en los casos en que esta se confie al acreedor, y las de los demás incidentes que se sustancien en pieza ó ramo separado, ó que no tengan relación con las ventas de bienes y pago al acreedor de su crédito.

II. Procedimiento de apremio en negocios de comercio.

Con este título figuran en la Ley de Enjuiciamiento civil una serie de preceptos, que no son, en último término, otra cosa que el reconocimiento de que el juicio ejecutivo y la vía de apremio son posibles tratándose de ciertos créditos mercantiles, en beneficio de los que impone la ley alguna mayor brevedad, acortando algunos plazos, y estableciendo alguna pequeña diferencia, que vamos á señalar.

Este procedimiento ha de intentarse en los juzgados de primera instancia; y sólo es admisible por crédito liquido contra los siguientes deudores:

Los consignatarios á quienes sean entregadas las mercaderías, ó cualquier otra persona que las hubiere recibido legítimamente, por el precio de los transportes marítimos ó terrestres, con tal que no haya transcurrido un mes desde el día de la entrega. Esto se acreditará con el conocimiento ó la carta porte original firmada por el cargador, y el recibo de las mercaderías contenidas en este documento.

Los aseguradores y asegurados en los seguros marítimos, por el importe de las pérdidas y daños, ó de los premios de que respectivamente responden; acreditando sus créditos no satisfechos por la escritura pública, póliza ó contrato privado del que resulte probado el seguro.

Los cargadores y capitanes de las naves, por las vituallas suministradas para aprovisionamiento de estas, y los consignatarios de las mismas cuando se haya hecho de su cuenta el suministro; acreditando sus créditos por las facturas valoradas de los géneros aprobados por el que dió la orden para su entrega.

Los mismos cargadores, y los capitanes cuando la nave estuviere en lugar dondo no se encontraren aquellos, por el pago de los salarios vencidos de la tripulación, ajustada por mesadas ó viajes; comprobado esto por las copias de las contratas extendidas en el libro de contabilidad que ha de entregar el capitan á los interesados, y en las que han de constar los alcances que corresponden á cada uno; y, en el caso de que este hubiere rehusado dar estas copias, por el testimonio hecho á presencia del mismo de lo que arrojen los asientos de los libros, cuya exhibición podrá decretarse, á este efecto, judicialmente.

Y, por último, contra los que hubieren contratado con intervención de corredor colegiado, por los corretajes devengados en la negociación; acreditados estos por las facturas de los contratos ó negocios de que procedan, firmadas por el deudor, ó por las pólizas de que deben conservar un ejemplar, y, á falta de esto, por las copias de los asientos del libro registro, llevado con las formalidades legales.

En todos estos casos, salvo el de que el título en que se funde el acreedor sea escritura pública ó póliza intervenida por corredor, se requerirá el previo reconocimiento de la firma ó la confesión judicial antes del auto en que se decrete el apremio. Tratándose del pago de corretajes, si no hay factura que reconocer, se podrá exigir ó la confesión judicial ó la exhibición de los libros de comercio, si el deudor fuere comerciante.

La demanda, el requerimiento al pago y el embargo han de hacerse del modo ya indicado; y, trabado este, se citará al deudor para la venta de los bienes embargados, si dentro de tercero día no propone una de estas excepciones: falsedad del título;

[1]) *Cancelar* es anular válidamente un asiento de un libro en el que consta la existencia de una determinada obligación.

The buyer of estates burdened with a mortgage is entitled on his own application to the cancellation[1]) of the mortgages and other charges thereon, by means of an order of the judge to the Registrar of Ownership.

If the adjudication of the estate is made to the plaintiff in payment of his mortgage debt, he may apply for the cancellation of the subseqnent debts, provided that the price of the adjudication is not sufficient for their total payment; but not that of the prior debts, which will always subsist.

The costs of the defence of the debtor, caused during the execution, will never have priority; and will be the last to be deducted before payment of the balance to the debtor.

All the appeals brought during this execution will be admitted without stay of execution; excepting from this rule those interlocutory matters to which management and rendering of accounts give rise, when entrusted to the creditor, and other interlocutory matters which proceed on a separate file, or which have no relation to the sales of property and payment to the creditor of his debt.

II. Proceeding of Apremio in commercial matters.

A series of precepts appear under this Title in the Law of Civil Procedure, which are not in substance different from the acknowledgment that the executive action and the proceeding of *apremio* are available when certain mercantile debts are in question, for the benefit of which the law imposes some further brevity, by shortening certain times and enacting some small difference, which we proeeed to point out.

This proceeding must be taken in the courts of first instance; and is only admissible for a liquidated debt against the following debtors:

Consignees to whom merchandise is delivered, or any other person who has lawfully received it, for the price of maritime or land carriage, provided that one month has not expired since the day of delivery. This must be proved by the original bill of lading signed by the consignor, and the receipt for the merchandise comprised in this document;

The insurers and assured in maritime insurances, for the amount of the losses and damages, or of the premiums for which they are respectively liable; proving their unpaid debts by the notarial instrument, policy or private contract which proves the insurance;

The consignors and masters of vessels for victuals supplied for provisioning the same, and the consignees thereof when the supply has been made on their account; proving the debts by the priced invoices of the goods, passed by the person who gave the order for their delivery;

The consignors and masters, when the vessel is in a different place from the former, for payment of the wages due to the crew, when agreed by months or voyages; tbis being proved by copies of the contracts written out in the account book which the master has to deliver to the persons interested, and in which the balances due to each appear; and when the master has refused to give copies, by the certified copy of the results of the entries in the books made in his presence, production of which books may be ordered for this purpose by the judge;

And lastly, against those who have contracted through a Collegiate broker, for the brokerages due on the negociation; these being proved by the invoices of the contracts or business from which they proceed, signed by the debtor, or by the contracts, a copy of which they ought to keep, and in default thereof, by copies of the entries in the register-book, kept with the lawful formalities.

In all these cases, except that in which the title on which the creditor relies is a notarial instrument or a contract made through a broker, there will be required either a previous acknowledgment of the signature or an admission in court before the decree on which the *apremio* is ordered. If it is a question of the payment of brokerages and there is no invoice to acknowledge, the plaintiff may demand either an admission in court or, if the debtor is a merchant, production of the commercial books.

The Claim, the demand for payment and the arrest must be made in the way already indicated; and on the arrest attaching, the debtor must be cited for the sale of the arrested property, if he does not file one of the following defences within the

[1]) *Cancelar* means validly to annul an entry in a book by which the existence of a certain obligation is shown.

falta de personalidad en el que lo presenta; pago; transacción ó compromiso; cuyas excepciones han de alegarse y probarse en dicho plazo, no admitiéndose otros medios de prueba que la documental ó la de confesión judicial. Si los documentos, presentados como prueba de la excepción alegada por el deudor, han de ser cotejados, podrá ampliarse hasta 10 días el término de prueba.

En la primera audiencia que celebre el juez, después de practicada la prueba, ó de transcurridos los tres días sin haber presentado oposición, llamará los autos á la vista con citación de las partes para sentencia; y, celebrada la vista, si alguna de las partes la solicitare, dictará sentencia de remate dentro del tercero día, ó declarando que no procede el apremio; no siendo apelable esta sentencia.

Para la ejecución de la sentencia de remate, ó sea para el apremio, el acreedor que lo solicite habrá de dar fianza, si la pidiere el deudor, para asegurar las resultas del juicio ordinario que puede promover este para la revocación de la sentencia; cuya fianza caducará de derecho si en el término de seis meses no se incoa el juicio con la presentación de la demanda.

Las compañías é instituciones de crédito territorial podrán, en las operaciones de préstamos hipotecarios que realicen, emplear el procedimiento de apremio para el pago de los préstamos vencidos en todo ó en parte, utilizando los medios especiales que para ello les concedió el decreto-ley de 5 de febrero de 1869. Con arreglo á esta disposición legal, requerido que sea por escrito el deudor para el pago de su crédito, si no lo satisface dentro de segundo día, podrá la compañía pedir al juez que decrete la venta en sabasta del inmueble hipotecado, ó el secuestro del mismo, para que, entregado que sea á la compañía, lo administre esta, y aplique al pago de los descubiertos los frutos y rentas del mismo. Si, después de acordado el secuestro, y concedida la administración de la finca á la compañía, estima esta insuficientes las rentas ó productos para la extinción de su crédito, podrá pedir, también, la venta en subasta de la misma. Contra las resoluciones judiciales que decreten el secuestro y entrega en administración á la compañía no se dará recurso alguno; ni podrá suspenderse el secuestro, ó enajenación en su caso, salvo que la demanda se funde en título inscrito en el registro de la propiedad anterior al de la compañía.

Capítulo décimo. De las tercerías.

La tercería es un juicio incidental que puede suscitarse en cualquier otro juicio, pero que generalmente se plantea en los ejecutivos; por cuya razón hablaremos de él ahora.

Las tercerías pueden ser de dominio, cuando se reclama la propiedad de los bienes embargados, ó de mejor derecho, cuando se tiene un título al que la ley concede preferencia sobre el que sirvió de base al ejecutante. Pueden deducirse en cualquier estado del juicio; pero, si se trata de la de dominio, no se admitirá después de otorgada la escritura, ó consumada la venta, ó de hecha la adjudicación en pago ó entrega al ejecutante; y, si de mejor derecho, después de pagado el crédito. En uno y otro caso habrá de acompañarse con la demanda el título en que se apoye.

Las tercerías no suspenden el juicio ejecutivo; se sustancian en pieza separada; y se tramitan conforme al juicio declarativo á que corresponden. En ellas, ejecutante y ejecutado representan el papel de demandados. Si se allanaren[1]), ó no contestaren, llamará el juez los autos á la vista, con citación de las partes; y dictará sentencia, que es apelable en ambos efectos.

Cuando la tercería sea de dominio, luego que en el juicio ejecutivo recaiga sentencia firme de remate, se suspenderá el procedimiento de apremio respecto de los bienes objeto de la tercería hasta la resolución de esta. Y si fuere de mejor derecho, no se suspenderá el procedimiento de apremio; y el importe de la venta de los bienes embargados para pago del crédito se depositará convenientemente, hasta que se resuelva quién tiene mejor derecho al cobro de la cantidad en litigio.

Capítulo undécimo. Juicio de quiebra.

I. Su naturaleza. Secciones en que se divide.

Este juicio universal es exclusivo tan solo de los comerciantes y de los agentes mediadores del comercio. Los que no sean ni una ni otra cosa habrán de sujetarse,

[1]) *Allanarse á la demanda* es confesar que asiste la razón al demandante.

third day: forgery of the title; want of legal capacity of the person who produces it: payment; compromise or submission to arbitration; and these defences must be pleaded and proved within the said time, and no other means of proof are allowed except documentary or admission in court. If the documents produced as evidence of the defence pleaded by the debtor, have to be compared, the time for the proof may be extended to 10 days.

At the first hearing before the judge after the evidence has been taken, or after the expiration of three days without an objection being filed, the record must be called in for the hearing and the parties cited for judgment; and after the hearing, and on the application of either of the parties, judgment for an auction must be pronounced within the third day, or a declaration refusing the *apremio*; and this judgment is not appealable.

If the debtor applies for it, the creditor who made the application for the judgment for an auction must give security for the execution thereof, i.e. for the *apremio*, so as to insure the results of the ordinary action which the debtor may institute for revocation of the judgment; and this security will become void if the action is not begun by filing the Claim within six months.

Companies and institutions of land credit may employ the proceeding of *apremio* in their transactions of mortgage loans, for the payment of loans which are due in whole or in part, and make use of the special means granted for that purpose by the Decree-Law of 5 February 1869. When a debtor has been required in writing, according to the provisions of this law, to pay his debt, and he neglects to pay it within the second day, the company may apply to the judge for an order for sale by auction of the mortgaged estate, or for the sequestration thereof, in order that the company may be put in possession and manage the same, and apply the produce and rents thereof to the payment of the loan. If, after sequestration has been ordered and possession of the estate granted to the company, the latter considers the rents and produce insufficient to extinguish its debt, it may likewise apply for a sale by auction thereof. There is no appeal against the decisions of the judge ordering sequestration and conferring the management; nor may the sequestration or sale be stayed, unless the Claim is founded on a title inscribed in the Register of Ownership, prior to that of the company.

Tenth Chapter. Third Party proceedings.

Terceria is an incidental action which may be raised in any other action, but which is generally started in executive actions; for which reason we shall proceed to speak of it at once.

Third party proceedings may be founded on *dominium*, when the ownership of the arrested property is claimed, or on superior right, when there is a title to which the law grants priority over that on which the plaintiff relies. They may be brought at any stage of the action; but if they claim ownership, they must not be admitted after the instrument has been executed, or the sale consummated, or adjudication in payment or delivery to the plaintiff has been made; nor, if they are founded on superior right, after the debt has been paid. In both cases the Claim must be accompanied by the title on which it is based.

Third party proceedings do not stay the executive action; they are substantiated by means of a separate file; and they proceed like the corresponding declaratory action. Both plaintiff and defendant appear in them as defendants. If they are admitted[1]), or not answered, the judge must call in the record for trial, and cite the parties, and pronounce judgment, which is appealable with stay of execution.

When the third party proceedings are based on ownership, as soon as final judgment for an auction is pronounced in the executive action, the proceeding of *Apremio* must be stayed with respect to the property subject to the third party proceedings until the decision thereof. And if it is based on superior right, the proceeding of *Apremio* will not be stayed; and the amount of the sale of the arrested property must be paid in, until it is decided who has the better right to recover the sum in dispute.

Eleventh Chapter. Bankruptcy Action.

I. Its nature. Sections into which it is divided.

This universal action is exclusively that of merchants and the intermediary agents of commerce. Persons who are neither the one nor the other must submit

[1]) *Allanarse á la demanda* is to admit that reason is on the side of the palintiff.

en casos análogos, al juicio de concurso de acreedores. Por eso, y, siendo el más general este último, dispone la ley que, en lo no previsto en el de quiebras, habrá de seguirse, á título de disposición legal supletoria, lo determinado para el caso en el de concurso de acreedores. También hay comerciantes sociales que tienen en materia de quiebras un procedimiento especial; tales son, las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas, que se rigen por la ley de 12 de Noviembre de 1869, y de las que hablaremos con la separación debida.

El procedimiento ordinario de quiebra se dividirá en cinco secciones, arreglando las actuaciones de cada una de ellas en su respectivo expediente judicial, que se subdividirá en los ramos que se conceptúen necesarios para el buen orden y claridad del procedimiento; y, sobre todo, para que la quiebra siga su curso sin entorpecimientos por los incidentes que surjan, y no puedan sustanciarse á la vez. Estas cinco secciones son: la de declaración de la quiebra, que comprenderá, á más de todo lo que á esta declaración se refiere, lo relativo al nombramiento, separación y renovación de los síndicos, y al convenio de los acreedores con el quebrado; la de administración de la quiebra, que comprenderá, desde la ocupación de los bienes del quebrado hasta la liquidación total y rendición de cuentas de los síndicos administradores; la de retroacción de la quiebra, que comprenderá todo lo relativo á los contratos y actos de administración del quebrado anteriores á la declaración de la quiebra, que deban ó puedan anularse ó rescindirse según la ley; y la de calificación y rehabilitación del quebrado.

II. Declaración de la quiebra.

§ 1.° *Quién, cómo y cuándo ha de hacerla.*

La declaración de la quiebra ha de hacerla el juez de primera instancia del domicilio del quebrado, á solicitud de este, ó de cualquier acreedor legítimo.

El quebrado no podrá solicitar la declaración de quiebra pasados los tres días siguientes al en que cesó en el pago corriente de sus obligaciones. Presentada en tiempo, para que se dé á su solicitud el curso correspondiente, habrá de hacer constar en ella, no solo su domicilio particular sino su domicilio comercial y todos los escritorios, almacenes y dependencias, y establecimientos de comercio ó industriales que sean de su propiedad ó pertenencia; y habrá de acompañar, á la misma, el balance general de sus negocios, y una memoria ó relación que exprese las causas directas é inmediatas de la quiebra, con todos los justificantes que estime oportunos. Tanto la solicitud, como el balance y la memoria, habrán de presentarse firmadas por el quebrado, ó por persona debidamente autorizada para ello; en cuyo caso habrá de acompañarse copia fehaciente del poder que esta tuviere. Si la declaración de quiebra se solicita en nombre de una sociedad colectiva ó comanditaria, habrá de expresarse en la solicitud el nombre y domicilio de todos los socios colectivos; firmándola, así como el balance y la memoria, todos los socios de esta clase que residan en el pueblo al tiempo de presentarse unas y otro al Juzgado. Para la debida justificación del extremo referente á la presentación de la solicitud en tiempo oportuno, el actuario certificará, al pié de la misma, el día y hora de esta presentación, librando testimonio de ello al portador de la solicitud si lo pidiere.

En la primera audiencia que celebre el juez declará la quiebra; fijando en el auto que dicte al efecto, aunque con la condición de «por ahora y sin perjuicio de tercero», la época á que deban retrotraerse los efectos de la declaración, respecto del día que resultare haber cesado el quebrado en el pago corriente de sus obligaciones. En el mismo auto se dispondrá la acumulación al juicio de quiebra de las ejecuciones que haya pendientes contra el quebrado en el mismo juzgado ó en otros; á excepción tan sólo de los en que solo se persigan bienes hipotecados.

Si la declaración de quiebra la solicita acreedor legítimo, habrá de acreditar su condición de tal, con el testimonio de la ejecución, despachada á su instancia contra el deudor, ó con documento fehaciente de su crédito, y la situación del quebrado; probando, en dicha forma, que este ha cesado, de un modo general, en el pago corriente de sus obligaciones; ó bien el hecho de su fuga ú ocultación, acompañado del cierre de sus escritorios ó almacenes, sin haber dejado al frente de ellos persona que pueda dirigirlos, y procure el cumplimiento de sus obligaciones. Probados que sean estos extremos, á juicio del juez, hará este la declaración de quiebra, sin citación, ni audiencia del quebrado.

themselves, in analogous cases, to the creditors' meeting. For this reason and because the latter is the most general, the law provides that where there is no provision in bankruptcy, that which is enacted for the creditors'meeting must be followed, as a supplementary legal provision. There are also commercial companies which have special procedure in bankruptcies; such as, railroad companies and other public works, which are governed by the law of 12 November 1869, of which we shall speak separately.

The ordinary procedure in bankruptcy is divided into five sections, and the record of each of them is arranged in its own judicial file, which must be subdivided into the branches which are thought necessary for the good order and clearness of procedure; and above all, in order that the bankruptcy may follow its course without obstruction from interlocutory matters which cannot be at once substantiated. These five sections are: declaration of bankruptcy, including also the appointment, removal and renewal of the assignees, and the agreement of the creditors with the bankrupt; the administration of the bankruptcy, from taking possession of the property of the bankrupt to the total liquidation and rendering of accounts by the assignees; the retroactive effect of the bankruptcy, which will include everything relating to the contracts and acts of management of the bankrupt previous to the declaration of bankruptcy which may or can be annulled or rescinded according to the law; and the classification and discharge of the bankrupt.

II. Declaration of Bankruptcy.

§ 1. *Who has to declare it, and how and when.*

The declaration of bankruptcy has to be made by the judge of first instance of the address of the bankrupt, on the application of the latter or of any lawful creditor.

A bankrupt cannot apply for a declaration of bankruptcy after the expiration of three days following that on which he suspended the current payment of his obligations. If presented in time, it is necessary, in order that the application may proceed, that there should be stated therein not only his private address but his business address and those of all his offices, warehouses and branches, and of the commercial and industrial establishments which belong to him; and it must be accompanied by the general balance sheet of his business, and a report expressing the direct and immediate causes of the bankruptcy, with all the evidence which he deems fit. The application, balance sheet and report must be presented already signed by the bankrupt, or by a person duly authorised for that purpose; in the latter case it must be accompanied by an authenticated copy of the power given to the latter. If the declaration of bankruptcy is applied for by an unlimited or limited partnership, the application must state the names and addresses of all the unlimited partners; and all the partners of that class who reside in the place at the time of one or the other being presented to the Court, must sign the application, balance sheet and report. For the due proof of the application having been presented in time, the master must certify the day and hour of this presentation at the foot thereof, and deliver a certified copy thereof to the bearer of the application if he asks for it.

The judge must declare the bankruptcy at the first hearing; fixing in the order which he makes for that purpose, although with the condition "for the present and without prejudice to third persons", the date to which the effects of the declaration have to retroact, having regard to the day on which the bankrupt proves to have suspended the current payment of his obligations. In the same order he must transfer to the bankruptcy action, all the executions which are pending against the bankrupt in the same court or elsewhere, excepting only those in which only mortgaged property is sought to be attached.

If the declaration of bankruptcy is applied for by a lawful creditor, he must prove his status as such, with the certified copy of the execution, issued at his instance against the debtor, or by an authenticated document proving his debt, and the position of the bankrupt; proving in the same way that the latter has generally suspended the current payment of his obligations; or the fact of his flight or concealment, accompanied by the closing of his offices or warehouses, without having left at the head of them some person to direct them and procure the performance of his obligations. If these facts are proved to the satisfaction of the judge, he must make the declaration of bankruptcy, without summoning or hearing the bankrupt.

Cuando la declaración de quiebra se haga á instancia de acreedor, lo mismo que en el caso de que, al hacerse á solicitud del quebrado, no se haya acompañado el balance general de sus negocios, se le mandará que lo forme en el término de 10 días; poniéndole de manifiesto en su propio escritorio por el comisario los libros y papeles de la quiebra. Y si por ausencia, incapacidad ó negligencia no se pudiere formar por el quebrado, se nombrará un comerciante experto que lo redacte en el término de 15 días; exhibiéndole el comisario, también, en el escritorio del quebrado, los libros y papeles necesarios al efecto.

§ 2.° *Medidas que han de adoptarse á consecuencia de esta declaración.*

Tanto en el caso de que solicite la declaración de quiebra el quebrado, como en el de que se solicite por acreedor legítimo, al decretar el juez esta declaración, habrá de proceder á lo siguiente: al nombramiento de comisario de la quiebra, hecho en la persona de un comerciante matriculado[2]), si le hubiere, (ejerciendo, en el caso de no haberlo, el propio juez las funciones de comisario, con las excepciones que más adelante diremos); al arresto del quebrado en su casa, si diere en el acto fianza de cárcel segura, y en defecto de darla, en la cárcel; á la ocupación judicial de todo lo que pertenezca al quebrado, y los libros, papeles y documentos de su giro; al nombramiento de depositario, en persona de confianza del juez, á cuyo cargo se pondrá la conservación de todos los bienes ocupados al deudor hasta que se nombren los síndicos; á la publicación de la quiebra por medio de edictos, que se fijarán en el pueblo del domicilio del quebrado, y en los demás en que tuviere establecimientos mercantiles, y se insertarán, en el Diario de Avisos de la localidad, si lo hubiere, y en el Boletín Oficial de la provincia, (y en la Gaceta de Madrid si el juez estimare esto último ser necesario, en atención á las circunstancias de la quiebra); á la detención de la corespondencia del quebrado; y á la convocación de los acreedores del quebrado á la primera junta general.

A. Nombramiento de comisario y ocupación de bienes y papeles del quebrado. Hecha por el juez la designación de comisario, se le comunicará de oficio su nombramiento; y este, si acepta, procederá inmediatamente á la ocupación de bienes y papeles en la forma siguiente: Todos los almacenes y depósitos de mercaderías y efectos del quebrado quedarán cerrados bajo dos llaves, que tendrán el comisario y depositario. En el escritorio ó despacho del quebrado se hará otro tanto; haciendo constar en el acto, por diligencia, el número, clases y estado de los libros de comercio que se encuentren; y, poniéndose en cada uno de ellos, á continuación de la última partida, una nota de las hojas escritas que tenga, firmada por el juez y el escribano. Si los libros no tuvieren las formalidades legales, se rubricarán por los mismos todas sus hojas. El quebrado puede asistir por sí, ó por persona que debidamente le represente, á estas diligencias; y, si lo solicitare, se le dará una tercera llave, y firmará, y rubricará los libros con el juez y el escribano. En el acto de la ocupación del escritorio se formará inventario del dinero, letras, pagarés y demás documentos de crédito que se encuentren pertenecientes al quebrado; y se pondrán en un arca con dos llaves, tomándose las precauciones necesarias para su seguridad y custodia. Los bienes muebles del quebrado, que no se hallen en almacenes que puedan cerrarse, y los semovientes, se entregarán al depositario bajo inventario; dejando al quebrado las ropas y muebles de uso diario, que el comisario estime que le son necesarios. Los bienes raíces se pondrán bajo la administración del depositario. Con los bienes que se hallen fuera del lugar del domicilio del quebrado se procederá del mismo modo, oficiando para ello á los jueces respectivos; y si los tenedores de dichos bienes fueren personas de responsabilidad, atendido su valor, se les nombrará depositarios de los mismos para evitar mayores gastos.

Si la declaración de quiebra afecta á una sociedad colectiva ó comanditaria, la ocupación de bienes, en los términos indicados, se hará extensiva á todos los socios colectivos.

[2]) Como el Código de Comercio vigente no impone á los comerciantes individuales, como lo hacía el anterior, la obligación de matricularse, podrá nombrarse comisario de la quiebra un comerciante cualquiera, esté ó no inscrito en el Registro mercantil.

When the declaration of bankruptcy is made at the instance of a creditor, and also when it is made on the application of a bankrupt, but unaccompanied by the general balance sheet of his business, this must be ordered to be drawn up within the term of 10 days; and the receiver[1]) must exhibit the books and papers of the bankruptcy in the bankrupt's office. And if it cannot be drawn up by the bankrupt on account of his absence, legal incapacity or negligence, an expert merchant must be appointed to draw it up within the term of 15 days; the receiver likewise exhibiting the books and papers necessary for that purpose in the office of the bankrupt.

§ 2. *Measures which have to be adopted in consequence of this declaration.*

Whether the declaration of bankruptcy is applied for by the bankrupt or by a lawful creditor, the judge, in making this declaration, must proceed as follows: — to the appointment of the receiver in the bankruptcy of a registered[2]) merchant, if any (if there is none, the judge himself will perform the duties of receiver, with the exceptions stated below); — to the restraint of the bankrupt in his house, if he at once gives sufficient bail, or in default thereof, in the prison; — to taking possession by the judge of everything belonging to the bankrupt, and the books, papers and documents of his business; — to the appointment of a person trusted by the judge as depositary, charged with the preservation of all the property of the debtor until the appointment of the assignees; to the publication of the bankruptcy by means of advertisements, which must be posted up in the locality of the bankrupt's address, and in the other places where he had mercantile establishments, and be inserted in the *Diario de Avisos* of the locality, if any, and in the *Boletin Oficial* of the Province, (and in the *Gaceta de Madrid*, if the judge thinks this necessary, having regard to the circumstances of the bankruptcy); to the detention of the correspondence of the bankrupt; and to summoning the creditors of the bankrupt to the first general meeting.

A. *Appointment of receiver and taking possession of the assets and papers of the bankrupt.* When the judge has appointed the receiver, this appointment must be officially communicated; and the latter, if he accepts, must immediately proceed to take possession of the assets and papers in the following way: — All the warehouses containing merchandise of the bankrupt, must be closed by two keys, which the receiver and depositary will keep. The same must be done in the office of the bankrupt; and a statement must be made in the ordered document, of the number, kind and condition of the books of the merchant which are found; and immediately after the last entry in each of the books, a note must be made of the written pages which it contains, and be signed by the judge and secretary. If the books have not been kept in legal form, they must rubricate all the pages thereof. The bankrupt may be present at these steps himself, or by a duly authorised representative, and if he applies for it he must have a third key, and sign and rubricate the books as well as the judge and secretary. On taking possession of the office, an inventory must be made of the money, bills, promissory notes and other documents of credit belonging to the bankrupt, there found; and they must be placed in a chest with two keys, and all necessary precautions taken for their safety and custody. The moveable assets of the bankrupt which are not in warehouses that can be shut, and the animals, must be delivered to the depositary after an inventory has been made thereof; the bankrupt being left with the clothing and furniture of his daily use, which the receiver thinks necessary for him. The immoveable property must be placed under the management of the depositary. The same procedure must be followed with the assets which are away from the address of the bankrupt, the proper judges officiating for that purpose; and if the persons in possession of such assets are persons of responsibility, having regard to their value, they must be appointed depositaries thereof, so as to avoid greater expense.

If the declaration of bankruptcy applies to an unlimited or limited partnership, the taking possession of the assets, in the way indicated, must extend to all the unlimited partners.

---

[1]) *Comisario* is the person who discharges certain powers which the law confers on him in bankruptcy actions, for the purpose of securing the assets, and their due administration. *Vocabulario Jurídico* by *E. Oliver*, Madrid. (Note by translator.)

[2]) As the present Code of Commerce, differing from the former, does not impose on merchants the duty of being registered, any merchant may be appointed receiver in a bankruptcy, whether he is inscribed on the mercantile register or not.

B. Arresto del quebrado. El arresto del quebrado se hará por el alguacil del juzgado, á quien se le dará el oportuno mandamiento, en virtud del cual requerirá al quebrado ante el actuario para que en el acto preste fianza de cárcel segura, en la cantidad que el juez hubiere fijado. Si la presta personal (es decir, por medio de persona de responsabilidad), hipótecaria ó en metálico, quedará arrestado en su casa; y, en caso contrario, se le llevará á la cárcel; ordenando su ingreso en ella por el correspondiente mandamiento dirigido al director de ella.

C. Publicación de la quiebra. La fijación de los edictos de la quiebra, y su inserción en los periódicos oficiales, se acreditará en autos en forma conveniente; y en ellos se incluirá la prohibición de que nadie haga pagos ni entrega de efectos al quebrado sinó al depositario; bajo pena de que los tales pagos y entregas no extingan las obligaciones pendientes. Tambien se prevendrá, en los mismos, á todas las personas que tengan en su poder bienes del quebrado, que hagan manifestación de ellos al comisario; bajo pena de ser tenidas por cómplices del quebrado. Y, por último, se anunciará, también, en dichos edictos el día, la hora y el lugar de la celebración de la primera junta general de acreedores; convocándoles á la misma, bajo apercibimiento de pararles el perjuicio consiguiente.

D. Retención de la correspondencia del quebrado. La retención de la correspondencia del quebrado se hará oficiando al administrador de correos; previniéndole que la ponga á disposición del juez; quien dispondrá la entrega al comisario, para que, á presencia del quebrado ó de su apoderado, ó de la persona á cuyo cargo estuviere la dirección de sus negocios, si se hubiere ausentado antes de la declaración de quiebra, la abra; entregando al depositario la que se refiera á los negocios del quebrado, y á este, ó á su representante, la que se refiera á otros asuntos.

§ 3.° *Oposición de la declaración de quiebra.*

Del Auto de declaración de quiebra, dictado á instancia de acreedor legítimo, podrá alzarse el quebrado dentro de los ocho días siguientes á su publicación, pidiendo su reposición al juez. Y, como la oposición del quebrado no puede paralizar el expediente de quiebra, se formará en este caso expediente separado para tramitar la oposición; el cual se encabezará con la solicitud y justificación del acreedor que instó la quiebra, y con el testimonio del auto de declaración; en vista de cuyos antecedentes podrá ampliar su oposición; entregándole para ello, si lo hubiere solicitado, el expediente de oposición por término de tres días. Este expediente se tramitará en la forma de los incidentes, entre el quebrado de una parte y el acreedor que instó la quiebra de otra; pudiendo, también, intervenir en él los demás acreedores á quienes interese la quiebra; pero sin retrotraer el procedimiento. Si el acreedor se allana, si no impugna en el término de ocho días la oposición del quebrado, ó si consigue este probar la improcedencia de la declaración de quiebra, se repondrá el auto, dejando sin efecto la declaración; y, cesando la intervención judicial, se hará entrega al deudor por el depositario y actuario de los fondos, bienes, libros, papeles y correspondencia intervenida; rindiendo cuentas al deudor el depositario, si hubiere practicado algunos actos de administración. La acción de daños y perjuicios, que compete al quebrado repuesto contra el acreedor ó acreedores que instaron la quiebra, se sustanciará por los trámites del juicio ordinario que proceda.

§ 4.° *Levantamiento del arresto.*

Consentida la declaración de quiebra, podrá pedir el quebrado el levantamiento del arresto, ó la expedición de un salvoconducto[1]); pero esto no podrá concedérsele hasta después de terminada la ocupación de sus bienes, papeles y libros, y, siempre que del informe del comisario, hecho en vista del examen de los libros y papeles, no resulten méritos para apreciar la quiebra de culpable ó fraudulenta. El levantamiento del arresto, ó el salvoconducto se concederán bajo juramento de presentarse al juez siempre que se le llame.

§ 5.° *Atribuciones del comisario y del depositario.*

Corresponde al comisario de la quiebra: Autorizar todos los actos de ocupación, que han de practicarse en la forma reseñada anteriormente. — Disponer, en caso de urgencia, dando cuenta de ello al juez para que resuelva lo que proceda,

[1]) El *salvoconducto* es el permiso dado por el juez al arrestado para poder salir del lugar en que lo sufre sin incurrir en responsabilidad.

B. *Arrest of the bankrupt.* The arrest of the bankrupt must be effected by the bailiff of the court, to whom the proper order must be handed, by virtue of which he must require the bankrupt in the presence of the master to at once give bail in the amount fixed by the judge. If he offers personal bail (that is to say, by means of a person of responsibility), or by a mortgage or in cash, he will remain under arrest at his own house; and if not, he must be taken to the prison; his entry therein being commanded by the proper order directed to the governor thereof.

C. *Publication of the bankruptcy.* The posting up of the advertisements of the bankruptcy, and their insertion in the official papers, must be proved on the record in a suitable way; and they must include the prohibition of anyone making payments or delivering goods to the bankrupt, unless it be to the depositary; on pain of the payments and deliveries not extinguishing the pending obligations. They must also contain a warning that all persons having assets of the bankrupt in their control must declare the fact to the receiver; on pain of being held to be accomplices of the bankrupt. And lastly, the advertisements must announce the day, hour and place for holding the first general meeting of creditors; summoning them thereto with a warning of the resulting damage which will await them.

D. *Retention of the bankrupt's correspondence.* The retention of the bankrupt's correspondence must be done through an order to the postmaster to place it at the disposal of the judge, who must order its delivery to the receiver, so that he may open it in the presence of the bankrupt or his attorney, or of the person entrusted with the management of his business, if he had absented himself before the declaration of bankruptcy, delivering to the depositary that referring to the business of the bankrupt, and to the latter or his representative that referring to other matters.

§ 3. *Opposition to the declaration of bankruptcy.*

The bankrupt may appeal from the declaration of bankruptcy, pronounced at the instance of a lawful creditor, within the eight days following its publication, by applying to the judge for its rehearing. And as the opposition of the bankrupt cannot stay the bankruptcy file, a separate file must be formed for the proceeding in opposition; which must begin with the application and proof of the creditor who instituted the bankruptcy, and a certified copy of the order declaring the bankruptcy; and on inspection of the foregoing documents, he may amplify his opposition, and the file in opposition must be delivered to him for that purpose, if he has applied for it, for the term of three days. This file must proceed as an interlocutory matter, between the bankrupt on the one part and the creditor who instituted the bankruptcy on the other; but other creditors interested in the bankruptcy may take part therein, but so as not to delay the proceeding. If the creditor submits, or does not impugn the opposition of the bankrupt within eight days, or if the latter succeeds in proving that the declaration of bankruptcy is bad, the record must be withdrawn and the declaration annulled; and, the intervention of the court being at an end, the funds, assets, books, papers and correspondence must be delivered by the depositary and master to the debtor; the depositary must render accounts to the debtor, if he has practised any acts of management. Any action for damages by the debtor against the creditor or creditors who instituted the bankruptcy, must be substantiated by means of the ordinary action which is available.

§ 4. *Revocation of the Arrest.*

If the declaration of bankruptcy is consented to, the bankrupt may apply for the revocation of the arrest, or the issue of a licence[1]); but this can only be granted him after taking possession of his assets, papers and books, and provided that it does not appear from the report of the receiver, made on examination of the books and papers, that there are grounds for considering the bankruptcy culpable or fraudulent. Revocation of the arrest, or the licence, will be granted on oath that he will present himself before the judge whenever he is called.

§ 5. *Attributes of the Receiver and of the Depositary.*

It is the duty of the receiver in the bankruptcy: To authorise all acts of taking possession, which have to be performed as above mentioned; — To give orders, in case of urgency, for everything concerning the safety and preservation of the

[1]) The *salvoconducto* is the permission granted to the arrested person by the judge for leaving the place where he is undergoing arrest, without incurring liability.

todo lo que interese à la seguridad y conservación de los bienes de la masa[1]). — Presidir las juntas de acreedores que se acuerden por el juez. — Hacer el examen de todos los libros, documentos y papeles concernientes al tráfico del quebrado, para dar los informes que requiera el juzgado. — Inspeccionar todas las operaciones del depositario y de los síndicos de la quiebra. — Cuidar del buen manejo y administración de la misma. — Activar las diligencias referentes á la liquidación y calificación de los créditos, y dar cuenta al juez de los abusos que advierta en todo esto. — Abrir la correspondencia del quebrado, en los términos ya indicados. — Formar, en los tres días siguientes á la declaración de la quiebra, el estado de los acreedores del quebrado; convocándoles individualmente por circular, remitida á todos, para la celebración de la primera junta; y — Autorizar, para asistir á la misma á los acreedores que, no habiendo sido convocados, por no resultar sus créditos ni del balance ni de los libros, prueben documentalmente que lo son; á reserva, sin embargo, de la responsabilidad en que pudieren incurrir por la suposición fraudulenta de tales créditos.

El depositario, antes de dar principio á sus funciones de administrador, prestará juramento de ejercer bien y fielmente su encargo; y, una vez hecho esto, practicará con los documentos de crédito vencidos de la quiebra todo lo necesario para su cobro y conservación y ejercicio de las acciones correspondientes, en el caso de que esto no pudiere efectuarse. Firmará, también, con el visto bueno[2]) del comisario los endosos, y cualquier otro documento de obligación ó descargo que afecte á la quiebra. Procederá á la venta de todos aquellos efectos que no puedan conservarse sin deterioro; y hará los gastos indispensables para la custodia y conservación de los que tenga en depósito; contando, previamente, con la autorización del comisario. Por sus trabajos, y teniendo en cuenta la cuantia y naturaleza de los bienes de la quiebra, se le señalará una retribución, que no podrá exceder de 15 pesetas diarias; y cobrará, además, el importe del $^1/_2$ % sobre las cantidades que recaude, y el de los gastos que tenga que hacer en concepto de administrador depositario.

§ 6.° *Celebración de la primera junta de acreedores.*

El día para la celebración de la primera junta de acreedores se fijará, teniendo en cuenta el tiempo absolutamente preciso para que los acreedores que se hallen en España reciban la noticia de la quiebra, y puedan asistir, ó nombrar personas que los representen en ella.

El tiempo máximo para esta convocatoria será el de 30 días, contados desde la declaración de la quiebra. Y si, por cualquier motivo, no pudiere celebrarse, se designará por edicto, que se fijará en los estrados del juzgado, el más inmediato posible, para que llegue á conocimiento de los acreedores dentro de los 15 días siguientes.

A la primera junta de acreedores asistirán: el comisario, para presidirla; el depositario, para informar por escrito acerca de su administración, presentando también una nota de gastos é ingresos; y el quebrado, no alzado[3]), si quiere concurrir, por sí, estando en libertad, ó por medio de apoderado. Los acreedores habrán de concurrir á la misma personalmente; y, si prefieren ser representados en ella, el representante habrá de tener poder para ello, y habrá de exhibirse este al comisario. En esta primera junta se dará conocimiento del balance y memoria del quebrado; y con los libros y papeles de la quiebra á la vista, se harán todas las comprobaciones que sean necesarias para aclarar las dudas de los concurrentes.

§ 7.° *Elección de los síndicos. Su nombramiento, capacidad, derechos y obligaciones, y su separación.*

Hecho esto, y dado cuenta de su gestión por el depositario, se procederá á la elección de los síndicos de la quiebra.

Estos han de ser siempre tres; de los cuales, los dos primeros han de ser elegidos por los votos de los acreedores que representen la mayor suma del capital, y el tercero por los acreedores cuyos votos no hayan podido computarse para la mayoría de capital. Estas votaciones han de ser nominales; y se han de hacer constar así en el acta de la junta.

[1]) El conjunto de bienes de la quiebra, que ha de responder á los acreedores del pago de sus respectivos créditos, es lo que recibe el nombre de *masa de la quiebra*.

[2]) El *visto bueno* es la fórmula que estampa, acompañada de su firma, la persona llamada á intervenir un documento suscrito por otra.

[3]) *Quebrado alzado* es que el se fuga, abandonando su domicilio comercial para no responder de sus descubiertos á los acreedores, y eludir la acción de la justicia.

assets of the estate[1]), and report thereon to the judge in order that he may decide on the steps to be taken; — To preside at the meetings of creditors ordered by the judge; — To examine all the books, documents and papers which concern the trade of the bankrupt, in order to give the reports which the court requires; — To care for the good management and administration thereof; — To promote measures referring to the liquidation and classification of the debts, and give account to the judge of the abuses he may notice therein; — To open the correspondence of the bankrupt, as already indicated; — Within the three days following the declaration of the bankruptcy, to draw up the status of the creditors of the bankrupt; summoning them individually to the first meeting, by circular sent to all; — To authorise those creditors to be present thereat, who have not been summoned, from their debts not appearing either in the balance sheet or in the books, but who prove by documentary evidence that they are such; reserving, however, their liability in case the suggestion of the debts is fraudulent.

The depositary, before beginning his functions as administrator, must take an oath well and faithfully to fulfil his charge; and when once he has done this, he must take the necessary steps with regard to the matured documents of credit of the bankruptcy, for their collection and preservation and for bringing the appropriate actions, if this is not possible. He must also sign the endorsements, with the "approved"[2]) of the receiver, and any other document binding or discharging the assets of the bankruptcy. He must proceed to the sale of all the goods which cannot be kept without deterioration; and must pay the expenses indispensable for the safety and preservation of those which he has on deposit; but always with the previous authorisation of the receiver. For his labours, taking into account the amount and nature of the assets of the bankruptcy, a reward must be alloted to him, which must not exceed 15 pesetas per diem; and he will receive likewise ½% on the sums which he recovers, and the expenses which he incurs as administering depositary.

§ 6. *The first meeting of creditors.*

The day for holding the first meeting of creditors must be fixed, by taking into account the time which is absolutely necessary for the creditors who are in Spain to receive the notice of the bankruptcy, and to appoint persons to represent them thereat.

The maximum time for the summons is 30 days, reckoned from the declaration of the bankruptcy. And if for any reason it cannot be held, the nearest possible day must be appointed by a placard, posted in the halls of the court, so that it may come to the notice of the creditors within the 15 following days.

There must be present at the first meeting of creditors: the receiver, as president, the depositary, to report in writing on his administration, and to present a note of the expenses and receipts; and the bankrupt, if he has not absconded[3]), if he desires to be present in person and is at liberty, or his attorney. The creditors will be present in person; and if they prefer to be represented thereat, the representative must have a special power for that purpose, and must produce it to the receiver. The balance sheet and report of the bankrupt must be reported to the first meeting; and with the help of the books and papers of the bankruptcy ready for inspection, all the evidence which is necessary for proving the debts of the persons present must be taken.

§ 7. *Election of the assignees. Their appointment, legal capacity, rights and duties. and their removal.*

When this has been done, and the depositary has given account of his management, the election of the assignees of the bankruptcy must take place.

There must always be three of these; of whom the first two must be elected by the votes of the creditors who represent the majority of the principal, and the third by the creditors whose votes cannot have been counted in the majority of the principal. These votes must be take in the individual names; and so they must appear in the minute of the meeting.

[1]) The combination of the assets of the bankruptcy, which has to answer to the creditors for the payment of their respective credits, receives the name of *masa de la quiebra.*

[2]) *Visto bueno* is the formula which the person, called upon to intervene in a document written by another, stamps and signs.

[3]) *Quebrado alzado* means that he has fled from his commercial address, to avoid answering for his deficiencies to his creditors, and to elude justice.

Para poder ser síndico se requiere: ser acreedor del quebrado, ó intervenir en la quiebra como representante de un acreedor, á ser posible; ser, ó haber sido, comerciante; ser mayor de edad; y tener su residencia habitual en el lugar en que se haya declarado la quiebra. Aceptado el cargo se les exigirá juramento, en igual forma que al depositario antes de entrar en funciones.

Este nombramiento se anunciará por circular, redactada por el comisario, á los acreedores que no hubieren asistido á esta primera junta.

Los síndicos, aceptado el cargo, y puestos en posesión de él, reemplazan al depositario, y sus atribuciones serán las siguientes: La administración de todos los bienes de la quiebra. — La recaudación de todos los créditos de la misma y el pago de los gastos de administración, y los precisos para la conservación y beneficio de los bienes de la quiebra. — La comprobación y rectificación del balance, y formación del definitivo. — El examen de los documentos justificativos del derechos que pretenden tener los acreedores de la quiebra, y el informe que de los mismos han de dar á la junta de acreedores, llamada á resolver sobre esto. — La defensa de los derechos de la quiebra, y el ejercicio de las acciones y excepciones que la competan. — Promover la convocación y celebración de las juntas de acreedores en los casos que marca la ley, ó en los casos extraordinarios en que lo aconsejen las circunstancias: Y procurar la venta de los bienes de la quiebra cuando proceda, y en la forma que proceda.

Los síndicos, en pago de sus servicios, tienen derecho á un $1/2$% de lo que recauden por créditos y derechos de la quiebra; á un 2% de los productos de las ventas de mercaderías; y á un 1%, en las ventas y adjudicaciones de inmuebles ó derechos que no se refieran al giro ó negocio del quebrado. A cambio de esto responden á la masa de la quiebra de todos los daños y perjuicios que resulten por abuso en el ejercicio de su cargo, ó por su negligencia ó descuido.

Su nombramiento habrá de ratificarse por los acreedores reconocidos de la quiebra, en la junta de calificación de créditos; y si el crédito que los síndicos representen, suyo ó ajeno, no fuere reconocido en dicha junta, ó promovieren por su cuenta acción alguna contra la masa de la quiebra, caducarán sus nombramientos. Tanto en este caso, como en el de la no ratificación de su nombramiento, habrá de procederse por la junta á la elección de otro ú otros que reemplacen á los que dejen de serlo. También podrá decretar el juez su separación, á instancia justificada de acreedor legítimo, ó por informe del comisario, siempre que uno ú otro demuestren los abusos, negligencia ó descuido de los mismos.

III. Administración de la quiebra.

El expediente de administración de la quiebra se encabezará con el testimonio del auto de la declaración de esta; y tras él se transcribirá el acta de ocupación, inventario y depósito de bienes, hecha por el comisario; á la que se unirán todas las diligencias originales, que para la ocupación y depósito de los que no se encuentren en el lugar de la quiebra se hubieren practicado por los respectivos jueces de los lugares donde aquellos radiquen. Las extracciones que hayan de hacerse de los almacenes ó escritorios ocupados, se harán prévia providencia formal del comisario; y su ejecución se hará constar por diligencia, que suscribirán, este, el depositario y el actuario. Del mismo modo se harán los ingresos de caudales que hayan de depositarse en el arca destinada al efecto; en la que se conservarán tan solo los que se conceptúen precisos para las atenciones de la quiebra; depositándose el metálico restante y los efectos públicos en el establecimiento público destinado al efecto. Y de igual modo habrá de procederse á las ventas urgentes de efectos de la quiebra que se precisen, á juicio del depositario.

En este expediente de administración se hará constar el nombramiento de los síndicos con todas sus incidencias; y después, se acordará la formación del inventario definitivo; al cual habrá de citarse al quebrado, para que asista por sí ó por medio de apoderado. Formalizado que sea este, se hará entrega de todo lo que lo constituya á los síndicos, á quienes en los tres días siguientes á su nombramiento rendirá cuenta de su administración el depositario; cuyas cuentas habrán de ser aprobadas por el juez, con audiencia del depositario, de los síndicos, y previo informe del comisario.

Los gastos precisos para cubrir las atenciones de la quiebra, se fijarán por el juez, en vista de las necesidades ordinarias á que haya de atender; y los extraordinarios, que excedan de 500 pesetas, se acordarán, también, por el juez, pero á pro-

For being appointed assignee it is necessary: to be a creditor of the bankrupt, or to take part in the bankruptcy as representing a creditor, if possible; to be, or have been, a merchant; to be of full age; and to reside habitually in the place where the bankruptcy has been declared. On accepting the duty, they must take an oath in the same form as the depositary before entering on their functions.

This appointment must be announced by circular, drawn up by the receiver, and sent to the creditors who have not been present at this first meeting.

The assignees, on accepting the duty and being put in possession, take the place of the depositary, and their powers are as follows: — To administer all the assets of the bankruptcy; — To collect all the debts thereof and pay the expenses of administration, and those necessary for the preservation and benefit of the assets of the bankruptcy; — To prove, correct and finally draw up the balance sheet; To examine the documents proving the rights claimed by the creditors of the bankruptcy, and to report thereon to the meeting of creditors, called to decide thereon; — To defend the rights of the bankruptcy, and bring the actions and file the defences which are available; — To summon and hold both the statutory meetings of creditors and those which extraordinary circumstances show to be available; — To sell the assets of the bankruptcy when and as possible.

As payment for their services, the assignees are entitled to ½% of what they recover on account of the debts and rights of the bankruptcy; to 2% of the proceeds of the sale of merchandise, and to 1% on the sales and adjudications of immoveables or rights which do not relate to the business of the bankrupt. On the other hand they are liable to the estate of the bankruptcy for all loss and damage resulting from abuse in the performance of their duty, and for their negligence or carelessness.

Their appointment must be ratified by the recognised creditors of the bankruptcy, in the meeting for the classification of debts; and if the debt which the assignees represent, whether their own or another's, is not admitted at the said meeting, or if they, on their own behalf, bring any action against the estate of the bankruptcy, their appointments will lapse. Both in this case and if their appointment is not ratified, the meeting must proceed to the election of another or others to replace those who cease to act. Also the judge may order their removal, at the justified instance of a lawful creditor, or on a report by the receiver, whenever the one or the other show abuses, negligence or carelessness on their part.

III. Administration of the Bankruptcy.

The file of the administration of the bankruptcy must begin with the certified copy of the decree declaring the same; and after that, the minute of taking possession of the inventory and deposit of the assets, made by the receiver, must be transcribed; to which must be attached all the original measures for taking possession and making deposit of the assets which are not in the place of the bankruptcy, taken by the respective judges of the places where they are situate. Removals from the occupied warehouses and offices must take place after the previous formal order of the receiver; and their carrying out must appear in a minute signed by the receiver, depositary and master. The receipt of the funds which have to be deposited in the chest appointed for that purpose must take place in the same way; but in this chest only those funds should be kept which are thought necessary for the business of the bankruptcy; the surplus cash and the public securities being deposited in the public establishment appointed for that purpose. And in the same way urgent sales of the effects of the bankruptcy, which are considered necessary by the depositary, must take place.

In this file of the administration must appear the appointment of the assignees with all its incidental steps; and afterwards, the formation of the final inventory must be agreed on; to which the bankrupt must be summoned to attend, either in person or by attorney. When this has been drawn up, everything contained therein must be delivered to the assignees, to whom the depositary must render an account of his administration within the three days following their appointment; and these accounts must be approved by the judge after hearing the depositary and the assignees and on the previous report of the receiver. The expenses necessary for meeting the requirements of the bankruptcy must be fixed by the judge, in view of the ordinary necessities which have to be kept in mind; and extraordinary expenses, exceeding 500 pesetas, must also be allowed by the judge, but on proposal of the assignees and

puesta de los síndicos, y previo informe del comisario; y lo mismo se hará con los extrajudiciales que el juez considere necesarios en cada caso. Para los que no excedan de 500 pesetas bastará la autorización del comisario á los síndicos.

La venta de los efectos mercantiles de la quiebra se propondrá por los síndicos al comisario; y, con el informe de este, acordará el juez lo que proceda; fijando el precio mínimum, sobre el que no podrá hacerse rebaja alguna sin causa fundada á juicio del mismo comisario. En la venta habrá de intervenir corredor de comercio; y, donde no lo haya, habrá de hacerse en subasta pública, que se anunciará tres días antes, por lo menos, por edictos y avisos en los periódicos locales. La regulación de precios se hará sobre las facturas de coste de los artículos, aumentándolos á tenor del precio corriente en plaza.

Si hubieren de rebajarse por bajo del precio de coste, habrán de venderse en subasta pública. Por medio de peritos se justipreciarán los muebles que no sean efectos de comercio, y los inmuebles. Los peritos se nombrarán por el quebrado y el comisario; y, en caso de discordia, el juez nombrará un tercero. Ni por sí, ni por tercera persona, podrán los síndicos adquirir bienes de la quiebra; y, si lo hicieren, de cualquier manera que sea, se confiscarán los bienes en beneficio de la quiebra; obligándoles á satisfacer el precio, si no lo hubieren entregado.

Corresponde á los síndicos el ejercicio de todos los derechos y obligaciones que correspondieren al quebrado sobre los bienes de la quiebra; debiendo suministrar, este á aquellos, cuantas noticias tenga y estime necesarias para la marcha de la quiebra; y, estando en libertad el quebrado, podrán los síndicos utilizar los servicios personales de este en los trabajos de adminstración y liquidación. El quebrado tiene, á su vez, el derecho de exigir á los síndicos, por conducto del comisario, todas las noticias que puedan convenirle sobre el estado de la quiebra; haciéndoles, también, por el mismo conducto, cuantas observaciones crea pertinentes para la mejor marcha de la administración y liquidación.

Los síndicos deberán entregar semanalmente al comisario, para que se depositen en el arca de caudales, todos los fondos que hubieren recaudado por cualquier concepto; conservando en su poder, tan sólo, los que el comisario conceptúe necesarios para los gastos corrientes de la administración. Mensualmente habrán de presentar un estado de las cuentas de la administración, que el comisario pasará con un informe al juez, para que este acuerde lo que haya lugar. Los acreedores podrán exigir copia de estos estados; y hacer, en vista de los mismos, las observaciones que crean convenientes. A instancia de los síndicos, y previo informe del comisario, el juez podrá acordar la traslación de los caudales existentes en el arca al establecimiento público destinado al efecto. Las providencias que, respecto de la administración de la quiebra, adopte el comisario podrán reformarse por el juez, á instancia de los síndicos, ó de cualquier acreedor.

Entre los gastos de administración figurán los de la alimentación del quebrado y su familia; los cuales tendrán derecho á ella si aquel se hubiere presentado espontáneamente á la quiebra dentro del plazo legal. La cuota la fijará el juez; relacionándola con la condición del quebrado y el número de personas de que se compone su familia, el haber que resulte del balance general, y los caracteres de la quiebra. Los alzados no podrán pedir alimentos; y los que disfruten los quebrados que fueren calificados de fraudulentos, cesarán, de derecho, desde que sea firme el auto de calificación.

Terminada la liquidación de la quiebra, ó acabada esta por convenio de los acreedores y el quebrado, los síndicos rendirán cuenta de su administración; la cual habrá de ser examinada y aprobada por la junta general de acreedores, convocada al efecto, con asistencia del quebrado; oyendo, antes, si se considerase necesario, á una comisión nombrada para que haga el reconocimento y comprobación de la misma. Los reparos que á esta rendición de cuentas se hagan, se sustanciarán, en forma, ante el juez de la quiebra; no siendo obstáculo la aprobación de la junta para que el quebrado, ó cualquier acreedor disidente, las impugne en juicio dentro de los ocho días siguientes á su aprobación. También los síndicos, que por cualquier motivo dejaren de serlo durante la quiebra, habrán de rendir sus cuentas dentro de los quince días siguientes; las cuales se examinarán, con informe de los nuevos síndicos, en la primera

on the previous report of the receiver; and the same must be done with the extra-judicial expenses which the judge considers necessary in each case. The authorisation of the receiver by the assignees will be sufficient for expenses which do not exceed 500 pesetas.

The sale of the mercantile goods of the bankruptcy must be proposed by the assignees to the receiver; and the judge must allow the same on the report of the latter, on fixing the minimum price, from which no reduction may be made, except for a reason which in the opinion of the receiver is justified. A commercial broker must take part in the sale; and where there is none, there must be a public auction, which must be announced at least three days before, by means of placards and advertisements in the local papers. The prices must be regulated by the cost invoices of the articles, as increased by the current local price.

If it is necessary to sell below the cost price, they must be sold by public auction. The moveables which are not commercially negotiable securities, and the immoveables, must be valued by experts. The experts must be appointed by the bankrupt and receiver; and, in case of disagreement, the judge must appoint a third. The assignees cannot acquire the assets of the bankruptcy either personally or through a third person; and if they do so in any way whatever, the assets will be confiscated for the benefit of the bankruptcy. They will be compelled to pay the price, if they have not already done so.

It is the duty of the assignees to enforce all the rights and perform all the obligations of the bankrupt with regard to the assets of the bankruptcy; and the latter must supply them with all the information which he has and thinks necessary for the progress of the bankruptcy; and, if the bankrupt is at liberty, the assignees may utilise his personal services in the labours of administration and liquidation. The bankrupt, on his side, is entitled to demand of the assignees, through the receiver, all the information which they can give him about the condition of the bankruptcy; and he may supply them also, through the same channel, with all criticisms which he considers in point, for the better progress of the administration and liquidation.

Each week the assignees must deliver to the receiver, for deposit in the cash chest, all the funds which they have recovered on any ground; only retaining in their control those which the receiver considers necessary for the current expenses of the administration. Each month they must present the statement of the accounts of the administration, which the receiver must pass on to the judge with his report, in order that the latter may make any necessary order. The creditors may demand a copy of these statements; and on inspecting them, may make the criticisms which they think suitable. At the instance of the assignees and on the previous report of the receiver, the judge may order the transfer of the funds in the chest to the public establishment appointed for that purpose. The orders which the receiver makes with regard to the administration of the bankruptcy may be amended by the judge, at the instance of the assignees or of any creditor.

Among the expenses of the administration must figure those for the support of the bankrupt and his family; who will be entitled thereto, if the former has spontaneously presented himself in the bankruptcy within the legal time. The amount must be fixed by the judge; taking into consideration the condition of the bankrupt and the number of the persons composing his family, the assets shown by the general balance sheet and the characteristics of the bankruptcy. Those who have absconded cannot apply for maintenance; and that enjoyed by bankrupts who are adjudged fraudulent must cease by law, from the signature of the qualifying decree.

After the liquidation of the bankruptcy, or if this is terminated by an agreement between the creditors and the bankrupt, the assignees must render an account of their administration; which must be examined and approved in the presence of the bankrupt by a general meeting of creditors, summoned for that purpose; and, if it is considered necessary, after hearing a committee, appointed to examine and approve the same. The objections made to this rendering of accounts must be duly substantiated before the judge of the bankruptcy; and the approbation of the meeting is no obstacle to the bankrupt or any dissentient creditor impugning them within the eight days following their approbation. Assignees, who for any reason vacate their office during the bankruptcy, must render their accounts within the 15 following days; and these must be examined together with a report of the new assignees,

junta general que se celebre. Las repeticiones[1]) de los acreedores, ó del quebrado contra los síndicos por causa de su administración, se sustanciarán en ramo separado, y por los trámites del juicio ordinario á que correspondan.

IV. Retroacción de la quiebra.

Los efectos de la declaración de la quiebra se extienden, no solo á los actos posteriores á la fecha de dicha declaración, sinó también á los anteriores; sometiéndose, así, á una especie de juicio de revisión los practicados dentro de cierto tiempo, que ofrezcan alguna irregularidad perjudicial á los intereses de los acreedores. Pero este juicio de revisión sólo puede intentarse por los legítimos y definitivos representantes de la masa, es decir, por los síndicos; si bien todos los acreedores y el comisario podrán excitar el celo de los síndicos, cuando advirtieren alguna omisión en esto, acudiendo los primeros al comisario; y si este no hiciere, en apoyo de su pretensión, lo que ellos creen que debiera practicarse, podrán acudir en queja al juez.

Para facilitar la acción de unos y otros, y, á fin de que pueda cumplirse lo que la ley dispone, los síndicos están obligados, dentro de los diez días siguientes á haberse hecho cargo de los libros y papeles de la quiebra, á redactar los siguientes estados. Uno; de los pagos hechos por el quebrado en los quince días anteriores á la declaración de quiebra por deudas y obligaciones directas, cuyo vencimiento fuere posterior á esta. — Otro; de los contratos celebrados en los treinta días anteriores á dicha declaración, que, por considerarse fraudulentos, sean ineficaces á tenor del artículo 880 del Código de comercio, y de las donaciones intervivos á que se refiere el mismo artículo. — Y otro, por último; de los contratos á que se refiere el artículo 881 del citado Código.

Los estados primero y segundo se comprobarán y visarán[2]) por el comisario; y, hecho esto, dirigirán los síndicos sus reclamaciones extrajudiciales contra quien proceda, para el reintegro á la masa de lo que á esta pertenece por virtud de la ley; y si resultaren ineficaces aquellas, acudirán á la vía judicial, con la previa autorización del comisario. Para la formación del tercer estado, harán los síndicos las averiguaciones necesarias, al efecto de poder probar que en los contratos, á que el mismo se refiere, ha intervenido fraude; y si encontraran tales datos, harán una exposición motivada al comisario; quien, en vista de ella, y de lo que por su parte pueda averiguar, acordará ó denegará la autorización á los síndicos, para que entablen las demandas correspondientes.

Las demandas que los síndicos entablaren sobre los pagos indebidos, á que se refiere el primero de los estados que han de redactar, se acompañarán con la prueba documental que los acredite; y, si esto no pudiere hacerse, se preparará el juicio con la confesión judicial prévia. La pretensión de los síndicos y la prueba se comunicará por término de tres días al demandado; y, si no contestare, ó su contestación no fuere concluyente contra la prueba de los síndicos, se le condenará á la devolución. Si, por la contestación, dedujere el juez que hay méritos bastantes para recibir el incidente á prueba se acordará esta por término de ocho días; y se fallará, después, por los trámites legales de los incidentes. Justificándo los síndicos con la escritura que los contratos á que se refiere el segundo de los estados, son ineficaces con arreglo al Código de comercio, procederán al reintegro de los bienes que pertenecen á la masa, presentando demanda de interdicto de recobrar[3]). Las resoluciones judiciales que recaigan en uno y otro caso se ejecutarán, aunque contra ellas se interponga recurso de apelación. Las demandas de nulidad ó de revocación, incoadas respecto de los contratos á que se refiere el tercero de los estados, se sustanciarán en el juicio ordinario correspondiente, y ante el juez competente.

V. Examen, graduación y pago de créditos contra la quiebra.

Se encabezará esta pieza de autos con el estado general de los acreedores de la quiebra; y, á continuación, dictará el juez providencia, señalando el término dentro del cual se han de presentar á los síndicos los títulos justificativos de sus créditos,

---

[1]) La *repetición* consiste en pedir á otro lo que por su culpa ha tenido que pagarse, ó se ha dejado de percibir.

[2]) *Visar;* poner el visto bueno.

[3]) El *interdicto de recobrar* es el procedimiento sumarísimo, por virtud del que, y mediante el auxilio judicial, el que ha sido arbitrariamente despojado de la pacífica posesión de una cosa, la recobra.

at the first general meeting which is held. Claims[1]) of the bankrupt or the creditors against the assignees on account of their administration, must be substantiated in a separate file, and by the procedure of the proper ordinary action.

IV. Retroaction of the bankruptcy.

The effects of the declaration of the bankruptcy extend, not only to acts subsequent to the date of the said declaration, but also to preceding ones; those taking place within a certain time and presenting any irregularity prejudicial to the interests of the creditors, being subjected to a kind of action for revision. But this action for revision can only be brought by the lawful and definite representatives of the estate, that is to say, by the assignees; although all the creditors and the receiver may stimulate the zeal of the assignees, when they notice any omission therein, and the first-named may resort to the receiver; and if the latter does not act in support of their claim, as they think he ought to act, they may complain to the judge.

To facilitate the action of both of them, and in order to fulfil the requirements of the law, the assignees are bound, within the 10 days following their taking charge of the books and papers of the bankruptcy, to draw up the following statements: First; of the payments made by the bankrupt within the 15 days previous to the declaration of the bankruptcy for direct debts and obligations, the maturity whereof was subsequent thereto. — Second; of the contracts made within the 30 days previous to the said declaration, which, being considered fraudulent, are void within the meaning of article 880 of the Code of Commerce, and of the gifts *inter vivos* to which the same article refers. — And lastly; of the contracts referred to by article 881 of the said Code.

The first and second statements must be approved and passed[2]) by the receiver; and when this has been done, the assignees must make their extra-judicial demands for the payment to the estate of what belongs to it by law; if these are ineffectual, they must resort to the judicial method, on the previous authorisation of the receiver. In drawing up the third statement, the assignees must make the necessary investigations, for the purpose of seeing whether there has been fraud in the contracts to which it refers; and if such facts are found, they must lay a reasoned statement before the receiver; who, after examining it and making such inquiries as are in his power, must grant or refuse authorisation to the assignees to file the corresponding Claims.

The Claims filed by the assignees for improper payments, referred to in the first of the statements which they have to draw up, must be accompanied by the documentary evidence proving them, and, if this cannot be done, the action must be prepared by means of the previous admission in court. The claim and evidence of the assignees must be communicated to the defendant within the term of three days; and if he does not answer, or his Answer is not conclusive against the evidence of the assignees, he must be condemned to repay. If the judge gathers from the Answer that there are sufficient merits for the purpose, he must order the matter to be received to proof within the term of eight days; and judgment will be given through the procedure lawful for interlocutory matters. If the assignees prove by the document that the contracts referred to in the second of the statements are void by the Code of Commerce, they must proceed to recover the assets belonging to the estate by filing a claim for an interdict to recover possession[3]). The judicial decisions which are given in either case must be carried into execution, although an appeal be entered against them. The Claims for nullity or revocation, commenced in respect of the contracts referred to in the third of the statements, must be substantiated in the corresponding ordinary action, and before the competent judge.

V. Examination, classification and payment of debts against the bankrupt.

This part of the record must begin with the general statement of the creditors of the bankruptcy; and the judge must forthwith make an order fixing the time within which the titles proving their debts must be presented to the assignees, and

[1]) Repetición consits in suing another for what, through his *culpa*, he has had to pay or has failed to receive.

[2]) *Visar*; to mark "approved".

[3]) The *interdicto de recobrar* is a most summary proceeding, by means of which and with the help of the Court, a person who has been arbitrarily despoiled of the pacific possession of a thing, recovers it.

y el día en que ha de celebrarse la junta para su examen y reconocimiento. Estos plazos serán determinados por el juez; el primero, teniendo en cuenta la extensión de los negocios y dependencias de la quiebra, dentro de un tiempo máximo de 60 días para los acreedores, residentes en España (los residentes en el extranjero que estén más acá del Rin y de los Alpes y los de las islas Británicas tendrán de tiempo 60; los que estén más allá, 100 días; los de Ultramar que estén más acá de los cabos de Esperanza y de Hornos, 8 meses y el doble de este tiempo los que estén más allá); el segundo, ó sea el de celebración de la junta, será el duodécimo después del plazo señalado para la presentación de documentos; advirtiendo que los acreedores, que por razón de su residencia en el extranjero los presenten dentro del plazo legal, aun cuando sea después de celebrada la junta, tendrán derecho á que se celebre otra ú otras para que resuelvan respecto á sus créditos; sin que esta dilación pueda producirles perjuicio.

Dentro del término señalado, deberán los acreedores entregar á los síndicos los documentos justificativos de sus créditos, acompañados de copia literal de los mismos, para que, cotejados, pongan al pié la nota de conformidad, y de quedar los originales en su poder; cuyas copias, así diligenciadas, se entregarán á los acreedores. Los síndicos confrontarán con los papeles y libros de la quiebra los documentos justificativos de los créditos; y extenderán sobre cada crédito un informe referente al resultado del cotejo, y á la condición y naturaleza del crédito. En los ocho días siguientes á la términación del plazo de presentación de créditos, formarán un estado completo de los presentados, con la relación de todos los justificantes; cuyo estado se pasará al comisario, y copia de él al quebrado ó su representante. El comisario cerrará el estado de créditos con una diligencia; considerándose, después de esto, en mora todos los demás créditos no presentados; los cuales perderán por esta causa el privilegio que tuvieren con arreglo á la ley, y quedarán reducidos á la categoría de créditos comunes. El reconocimiento de la legitimidad de estos créditos, cuando pretendan cobrar la parte que les corresponda como créditos comunes, se hará judicialmente, y á sus expensas, con citación y audiencia de los síndicos. Si la reclamación del acreedor moroso se hiciere después de repartido el haber de la quiebra, no se les atenderá.

Respecto de los créditos presentados en tiempo oportuno la junta resolverá por mayoría de votos, sobre el informe de los síndicos, su reconocimiento ó exclusión, uno por uno. La mayoría habrá de ser de la mitad más uno de los votantes, siempre que estos representen las tres quintas partes del total importe de los créditos presentados. El acuerdo, favorable ó desfavorable, de la junta deja á salvo el derecho de los que se sienten perjudicados por él para impugnar judicialmente este ante el juez de la quiebra, y dentro del plazo de 30 días; pero el acreedor excluído dejará de tener voz activa en la quiebra. Si cualquier acreedor impugna judicialmente un crédito reconocido por la junta, pagará las costas procesales; salvo el caso en que el juez le dé la razón; porque, entonces, las costas correrán á cargo de la masa de la quiebra. Terminada la junta se devolverán sus títulos de crédito á todos los acreedores; á los excluídos, para que puedan usar de su derecho de impugnación; y á los reconocidos, con una nota al pié, suscrita por los síndicos y visada por el comisario, en la que conste su reconocimiento y la cantidad reconocida. Contra la validez de los acuerdos de la junta, por la falta de formalidades legales en su celebración, ó en la adopción de sus acuerdos, podrá presentarse instancia, dentro de los 30 dias siguientes á su celebración, por acreedor que no hubiere votado en pró de la resolución que pretenda impugnar, ó por el quebrado, cuando no esté conforme.

Las demandas de los acreedores sobre reconocimiento de sus créditos, ó sobre agravios producidos en su graduación, se sustanciarán, teniendo por parte á los síndicos y á los acreedores cuyos créditos se impugnen. Para formalizar la oposición se entregarán los autos, con todos los antecedentes relativos al reconocimiento y graduación de créditos, al opositor ú opositores por término de seis días; y lo mismo se hará para su contestación. Si fueren muchos los créditos impugnados podrá ampliarse el término hasta doce días, si el juez lo creyere necesario; y, transcurrido el término, el juez dictará sentencia en el de ocho días; dando á este juicio la tramitación de los incidentes. La sentencia dictada es apelable en ambos efectos.

En vista del acta de la junta de graduación se procederá al repartimiento de los fondos disponibles de la quiebra por el orden de clases y prelación legal que de ella resulte. Las cantidades que pudieren corresponder á los acreedores, que tengan

the day on which the meeting for their examination and admission is to be held. These times must be determined by the judge; bearing in mind, in the case of the first, the extent of the business and branches of the bankruptcy, within the maximum time of 60 days for the creditors residing in Spain (those residing abroad who are this side of the Rhine and the Alps or in the British Isles have 60 days; those further away 100 days; those who are oversea but this side of the Cape of Good Hope and Cape Horn, 8 months, and those who are further away double this time); the second, that is for holding the meeting, must be the twelfth day after the time fixed for the presentation of documents; remembering that the creditors, who by reason of residing abroad present them within the legal time, although after the meeting has been held, will be entitled to hold another meeting or other meetings for deciding on their debts, without this postponement having power to injure them.

The creditors must deliver the documents proving their debts to the assignees within the time fixed, with a literal copy thereof, in order that after comparing them, a note of their assent may be placed at the foot, and that the originals remain in their control; and these copies, thus noted, must be delivered to the creditors. The assignees must compare the documents proving the debts with the papers and books of the bankruptcy; and with regard to each debt must draw up a report referring to the result of the comparison, and to the state and nature of the debt. Within the eight days following the termination of the time for the presentation of the debts, they must draw up a complete statement of those presented, with a report on all the evidence; and this statement must be handed to the receiver, and a copy thereof to the bankrupt or his representative. The receiver must close the statement of debts with an order; and after this, all other unpresented debts will be considered out of time; and for this reason will lose the privilege which they had by law, and be reduced to the category of common debts. When it is attempted to recover their part as common debts, the acknowledgment of the lawfulness of these debts must be made in court, and at their expense, after summoning and hearing the assignees. If the claim of the creditor in default is made after the estate of the bankruptcy has been divided, he will not be heard.

The meeting must decide by a majority of votes as to the debts presented in due time, on their admission or rejection, one by one, with the report of the assignees. There must be at least a bare majority of the voting creditors, representing three fifth parts of the total amount of the presented debts. The favourable or unfavourable decision of the meeting leaves unimpaired the right of those who think themselves prejudiced thereby, to impugn it before the judge of the bankruptcy within the space of 30 days; but the rejected creditor will cease to have an active voice in the bankruptcy. If any creditor impugns a debt admitted by the meeting, he must pay the costs of the proceeding unless the judge decides in his favour; for in that case the costs will be borne by the estate of the bankruptcy. At the termination of the meeting the titles of their debts must be returned to all the creditors; to those rejected, that they may avail themselves of their right to appeal; and to those admitted, with a note at the foot, signed by the assignees and marked by the receiver, stating their admission and the amount thereof. Against the validity of the decisions of the meeting, for want of the legal formalities in holding it, or in adopting their decisions, an action may be brought within the 30 days following the meeting, by a creditor who has not voted in favour of the decision which he proposes to impugn, or by the bankrupt, if he is not agreeable.

The claims of the creditors with respect to the admission of their debts, or to the grievances caused by their classification, must be substantiated by making the assignees and the creditors whose debts are impugned parties. In order to draw up the opposition, the record must be delivered with all the antecedent documents relating to the admission and classification of debts, to the opponent or opponents for the term of six days; and the same must be done for the Answer thereto. If there are many debts impugned, the time may be extended to twelve days, if the judge thinks it necessary; and after that time, the judge must pronounce judgment thereon in eight days; applying to this action the procedure applicable to interlocutory matters. The judgment is appealable with stay of execution.

On consideration of the minute of the meeting for classification, the division of the disposable funds of the bankruptcy must proceed by order of class and the legal preference resulting therefrom. The amounts which may belong to those credi-

pendiente contra la masa demanda para el reconocimiento ó graduación de sus créditos, se incluirán en el estado de repartición; pero no se entregarán hasta la decisión del pleito que cause ejecutoria. Las que correspondan á los que, teniendo sus créditos reconocidos, sean objeto de impugnación, no se entregarán sino prévia constitución de la fianza necesaria, á juicio de los síndicos, para responder de las resultas del juicio. Para los repartos sucesivos, dará cuenta mensualmente el comisario al juez de las cantidades recaudadas, y del total de los fondos disponibles, á fin de que este acuerde uno nuevo, siempre que en estos sea posible pagar un 5% de los créditos aun pendientes de cobro. A este efecto, podrán los acreedores pedir al comisario que les facilite todas las noticias y datos referentes á recaudación, existencias y créditos pendientes, para en su vista poder solicitar del juez nuevos repartos. Para el percibo de lo que á cada acreedor corresponda, deberán presentarse los títulos originales; extendiéndose sobre los mismos la nota de pago, firmada por el acreedor ó su apoderado y los síndicos; y dando, además, recibo por separado de la cantidad percibida, librada á favor de los síndicos.

Concluída que sea la liquidación de la quiebra, rendirán cuentas de ella los síndicos; para cuyo examen convocará el juez junta general de acreedores que conserven interés y voz en la quiebra; la cual resolverá sobre este extremo en la forma que ya hemos indicado antes al hablar de las funciones de los síndicos[1]).

VI. Calificación de la quiebra y rehabilitación del quebrado.

El expediente de calificación empezará con el informe que el comisario ha de redactar una vez practicada la ocupación de bienes, papeles y libros del quebrado. Los síndicos, dentro de los 15 días siguientes á su nombramiento, presentarán al juez una exposición circunstanciada sobre los caracteres que á su juicio tenga la quiebra; determinando, en vista de ellos, la clase á que corresponde. Y esta exposición, unida á los autos, que se pasará al Ministerio fiscal para que, calificando á su vez la quiebra, persiga el delito ó falta que de la misma resulte. Esta calificación, unida á los autos, se entregará al quebrado para que, en término de seis días, conteste lo que crea oportuno. Si el quebrado no se opone, ó no contesta, el juez llamará los autos á la vista, y hará la calificación definitiva. Si el quebrado se opone, se recibirán á prueba los autos; y se continuará la tramitación de esta contienda por los trámites establecidos en la ley para los incidentes. La sentencia que en ella recaiga, será apelable en ambos efectos; ejecutándose, sin embargo, en cuanto á la libertad del quebrado, si en la misma se hubiere decretado por considerarse fortuita la quiebra. Si se calificare, por el juez, la quiebra de culpable ó fraudulenta, el propio juez mandará sacar testimonio de lo necesario para proceder criminalmente contra el quebrado. Contra este acuerdo no se dá recurso ninguno; y los síndicos no podrán ser parte en la causa criminal más que por acuerdo de la junta general de acreedores. Sin embargo, cualquiera de estos, y, á sus expensas, podrá mostrarse parte[2]) en ella; sin que pueda repetir, después, contra la masa, aun cuando su intervención hubiese resultado beneficiosa á esta.

La rehabilitación del quebrado no podrá intentarse hasta después de terminado el juicio de calificación; habrá de intentarse en el mismo expediente en que se hizo esta, ante el mismo juez que intervino en la quiebra. A la demanda de rehabilitación habrá de acompañar el quebrado las cartas de pago originales, ó los recibos en que conste el reintegro total de los acreedores, ó el de la parte de sus créditos acordada en el convenio con estos. El juez dispondrá que la demanda, y sus justificantes y todos los antecedentes de la quiebra se examinen por el comisario; el cual informará sobre la procedencia ó improcedencia de la rehabilitación; y, en vista de este informe, resolverá concederla, denegarla ó suspenderla, según que resulte justificada ó no la petición, ó no quede suficientemente probada. La rehabilitación del quebrado hace cesar todos los efectos legales de la declaración de la quiebra.

---

[1]) V. la pág. 75.

[2]) *Mostrarse parte* es tanto como intervenir voluntariamente en el procedimiento seguido de oficio.

tors who have a claim pending against the estate for the admission or classification of their debts, must be included in the statement of dividend; but must not be paid until the decision of the action which occasions the final decree. The amounts belonging to those who have admitted, but impugned, debts, must not be paid until they have given the security necessary, in the judgment of the assignees, to answer for the results of the action. For the purpose of future divisions the receiver must give to the judge a monthly account of the amounts recovered, and of the total of the disposable funds, in order that he may order a new dividend, whenever it is possible to pay 5% of the debts which are still unpaid. For this purpose the creditors may apply to the receiver to afford them all information and facts relating to the collection, existing funds and pending debts, in order that on consideration thereof they may apply to the judge for fresh dividends. For receiving what belongs to each creditor, the original titles must be produced; and thereon must be written the receipt, signed by the creditor or his attorney and the assignees; giving also a separate receipt for the amount received, made out in favour of the assignees.

As soon as the liquidation of the bankruptcy is concluded, the assignees must render an account thereof; for the examination of which the judge must summon a general meeting of the creditors who retain an interest and voice in the bankruptcy; which must decide on this matter as we have already indicated when speaking of the functions of the assignees[1]).

VI. Characterisation of the bankruptcy and discharge of the bankrupt.

The file of the characterisation must begin with the report which the receiver has to draw up as soon as he has taken possession of the assets, papers and books of the bankrupt. The assignees, within the 15 days following their appointment, must present to the judge a circumstantial explanation of the characteristics of the bankruptcy in their opinion; and on consideration thereof must fix the class to which it belongs. And this explanation, attached to the record, must be handed to the Public Prosecutor, in order that he, again characterising the bankruptcy, may prosecute the crime appearing therein. This characterisation, attached to the record, must be delivered to the bankrupt, in order that he may answer as he thinks fit within the term of six days. If the bankrupt does not oppose or does not answer, the judge must call in the record for the hearing, and make the final characterisation. If the bankrupt does not oppose, the record will be received to proof; and this dispute must proceed according to the procedure enacted by law for interlocutory matters. The judgment therein is appealable with stay of execution; but, nevertheless, it must be executed as regards the liberty of the bankrupt, if this has been therein ordered on the ground of the bankruptcy being adjudged fortuitous. If the judge should decide that the bankruptcy is culpable or fraudulent, the same judge must order the necessary certified copies of documents to be made for criminal proceedings to be taken against the bankrupt. There is no appeal against this decree; and the assignees cannot be parties to the criminal proceedings, except by a resolution of a general meeting of creditors. But any one of them, at his own expense, may individually take part therein[2]); but he cannot afterwards claim over against the estate, even when his intervention has proved beneficial thereto.

The discharge of the bankrupt cannot be applied for until after the termination of the process of characterisation; but it must be done on the same file as the latter, and before the same judge as took part in the bankruptcy. The bankrupt must accompany the application for discharge with the original receipts, or those which show payment in full to the creditors, or that for the part of their debts agreed in the composition made with them. The judge must order the application, the evidence supporting it and all the antecedent steps in the bankruptcy, to be examined by the receiver; who must report whether the discharge should be granted or not; and on considering this report, the judge must decide whether to grant, refuse or suspend it, according as the application is proved or not, or is insufficiently proved. The discharge of the bankrupt causes all the legal effects of the declaration of bankruptcy to cease.

---

[1]) See page 75.

[2]) *Mostrarse parte* means to intervene voluntarily in an official proceeding.

VII. Convenio entre los acreedores y el quebrado.

Este convenio, que puede poner término á la quiebra, sin necesidad de tener que llegar á liquidar el caudal del quebrado, solo pueden celebrarlo los quebrados fortuitos. Por eso, dispone la ley, que no podrá darse curso á ninguna proposición de convenio antes de haberse hecho la calificación de la quiebra, ni de estar reconocidos los créditos en la junta de acreedores. Sin embargo, admite la posibilidad de poder presentar dicha proposición antes de que se celebre dicha junta; solo que, en tal caso, no deberá darse cuenta de la proposición hasta después de hecho el reconocimiento; y solo podrán tomar parte en la deliberación y acuerdo sobre la misma los que tuvieren reconocidos sus créditos. Respecto de la admisión, y apesar de lo dicho, hay que tener en cuenta, que podrá admitirse la proposición, aun en el caso de quiebra culpable ó fraudulenta, cuando se trate de sociedades en las que las responsabilidades criminales por razón de la quiebra hayan de deducirse contra los administradores ó gerentes tan solo; á condición, de que, estos, no continuen representando á la sociedad, ni se presenten las proposiciones por su conducto.

En la solicitud de convenio, que puede presentarse por el quebrado, ó por cualquiera de los acreedores, han de formularse con toda precisión y claridad las proposiciones que se hagan; y ha de obligarse, el que la suscriba, á satisfacer los gastos á que dé lugar la convocatoria y celebración de la junta, aunque se defienda por pobre; asegurando el pago á satisfacción del juez. Deberá acompañar, además, tantas copias de las proposiciones cuantos sean los acreedores reconocidos.

Si la proposición de convenio se presenta cuando debe convocarse, ó estando ya convocada, la junta de graduación de créditos, ó cualquier otra posterior, se dará cuenta de ella en primer término, sin necesidad de convocatoria especial; pero, tanto en este caso, como en el de presentarse antes de haberse celebrado la de reconocimiento de créditos, será preciso que la proposición quede entregada con la antelación necesaria, para poder hacer llegar á manos de los acreedores las respectivas copias, veinticuatro horas antes de la celebración de la junta. Cuando fuere preciso hacer convocatoria especial para ello, el juez la acordará, señalando día, hora y sitio para la celebración de la junta; debiendo mediar entre esta y aquella un plazo de 15 días por lo menos, que á juicio del juez, y, teniendo en cuenta las circunstancias de la quiebra, podría llegar á 30. La citación de los acreedores, reconocidos ó pendientes de reconocimiento, cuyos domicilios se conozcan, será personal, y con entrega de las copias; la de los ausentes, cuyo domicilio se ignore, se hará por edictos, con indicación del objeto. La convocatoria de la junta para convenio produce el efecto inmediato de la suspensión temporal de los trámites pendientes de la pieza de autos relativa al examen, reconocimiento, graduación y pago de créditos; también, los de la administración, en lo referente á la enajenación de bienes de la quiebra.

Aceptado el convenio por los acreedores, podrá impugnarse por los que no hubieren asentido á él, ó por los no asistentes á la junta, dentro de los ocho días siguientes. Esta oposición, que habrá de formularse por escrito, se trasladará al quebrado y á los síndicos; y, si estos no se allanaren, se recibirá el incidente á prueba por término de 30 días; tramitándose hasta dictar sentencia en la forma de los incidentes. Esta sentencia será apelable en un solo efecto. Si no hubiere oposición al convenio, en el término marcado de ocho días, el juez llamará los autos; y, en vista de la pieza de declaración de la quiebra, y de la de calificación, resolverá lo que proceda; que habrá de ser, ó la aprobación del convenio, ó la continuación de la quiebra.

Capítulo duodécimo. Suspensión de pagos y quiebra de las companías de ferrocarriles y demás obras públicas.

La ley 2—12 noviembre de 1869 dictó una serie de disposiciones de carácter procesal aplicables á las suspensiones de pagos y quiebras de las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas, cuyos preceptos han sido declarados en vigor, por la Ley de Enjuiciamiento Civil, primero, y por el Código de comercio, después, en el que se han reproducido algunos. Aquí, para completar lo dicho respecto al juicio de quiebra, haremos, tan sólo, las indicaciones precisas de los preceptos no transcritos en el Código de comercio, y que tienen carácter procesal.

Presentada por la sociedad la proposición de convenio (y esta puede presentarse lo mismo en el estado de suspensión de pagos que en el de quiebra), el juez mandará

VII. Composition agreed between the creditors and the bankrupt.

This agreement, which may put an end to the bankruptcy without the necessity of liquidating the estate of the bankrupt, can only be made by those who are bankrupt through fortuitous circumstances. Therefore the law enacts that no proposal for a composition may proceed until after the characterisation of the bankruptcy, nor before the debts have been admitted in the meeting of creditors. However, it allows the proposal to be presented before the said meeting is held; although, in that case, the proposal cannot be taken into consideration until after the admission of debts has been effected; and only those whose debts have been admitted can take part in the discussion and resolution thereon. In spite of what has been said respecting the admission, it has to be borne in mind that even in the case of culpable or fraudulent bankruptcy, the proposal may be admitted in the case of societies in which the criminal liabilities arising in the bankruptcy are to be enforced only against the directors or managers; but on the condition that the latter should not continue to represent the society and that no proposals should be made through them.

In the application for composition, which may be presented by the bankrupt or by any of the creditors, the proposals which are made must be set out with perfect precision and clearness; and it must bind the person who signs it to pay the expenses of summoning and holding the meeting, although conducted *in forma pauperis*; and he must guarantee the payment to the satisfaction of the judge. It must be accompanied also by as many copies of the proposals as there are admitted creditors.

If the proposal for composition is presented when the meeting for the classification of debts or any later meeting ought to be summoned, or is already summoned, it must be taken into consideration at the earliest time, without the necessity of summoning a special meeting; but both in this case, and if it is presented before the meeting for the admission of debts is held, it will be necessary that it should be delivered at the time necessary for the respective copies to reach the hands of the creditors twenty four hours before the meeting is held. When it is necessary to summon a special meeting for that purpose, the judge must order it and fix a day, hour and place for holding it; and an interval of at least 15 days must intervene between the appointment and the meeting, a time which at the discretion of the judge, and taking into consideration the circumstances of the bankruptcy, may amount to 30 days. The summons to the creditors, whether admitted or awaiting admission, whose addresses are known, must be personal, with delivery of the copies; that for the absent, whose address is unknown, must be made by advertisements stating the purpose. The summons to the meeting for composition has the immediate effect of temporarily suspending the pending proceedings of the record, relating to the examination, admission, classification and payment of debts; also the administrative proceedings referring to the sale of the assets of the bankruptcy.

If the composition is accepted by the creditors, it may be impugned within the following eight days by those who have not assented thereto, or by those who were not present at the meeting. This opposition, which must be made in writing, must be delivered to the bankrupt and the assignees; and if the latter do not acquiesce, the matter must be received to proof for the term of 30 days; proceeding as in interlocutory matters up to the delivery of judgment. This judgment is appealable without stay of execution. If there is no opposition to the composition within the fixed term of eight days, the judge must call in the record; and on consideration of the files of the declaration of bankruptcy, and of the characterisation, he must make the proper order; which must be either approving the composition or continuing the bankruptcy.

Twelfth Chapter. Suspension of payment and bankruptcy of Railroad and other Public Works companies.

Law 2—12 November of 1869 enacted a series of provisions for the procedure applicable to the suspensions of payment and bankruptcies of railroad and other public works companies, which were declared to be in force, first by the Law of Civil Procedure, and afterwards by the Code of Commerce, in which some are reproduced. In order to complete what has been said with respect to the bankruptcy action, we will here only indicate the necessary precepts, which are not transcribed in the Code of Commerce, and are in the nature of procedure.

When the company has presented a proposal for composition (and this may be done either in a state of suspension of payment or of bankruptcy), the judge must

que en el término de 15 días se publique en los periódicos oficiales, ó en su defecto en uno de los de más publicidad del lugar del juicio, Madrid, Barcelona, Sevilla, Paris, Londres y Bruselas, un edicto convocando á los acreedores, para que en el término de tres meses acudan á adherirse á la proposición de convenio que se insertará en el edicto. En los convenios no tendrán representación las obligaciones en cartera, ni las pignoradas.

La adhesion podrá hacerse en cualquier forma; pero es preciso acompañar á la misma, cuando se trata de obligacionistas, un resguardo del depósito de los títulos ó cupones, con la numeración que tuvieren, en las Cajas del Gobierno, en las de los Bancos, en las de la compañía deudora y sus sucursales y banqueros, ó en los Consulados españoles del extranjero, ó en los Consulados extranjeros de España. La personalidad de los acreedores, no obligacionistas, se acreditará por las indicaciones del balance de la compañía referentes á los mismos; y su adhesión se hará también en cualquier forma.

El auto del juez, declarando aprobado el convenio, ó la continuación, ó apertura de la quiebra definitiva, es apelable dentro del término de 30 días desde su publicación en la Gaceta; pudiendo recibirse el pleito á prueba en segunda instancia si se alegase algun hecho pertinente á juicio de la Audiencia. Contra la sentencia que dicte esta se dará el recurso de casación; pero, si la de primera instancia fuere de aprobación del convenio, se ejecutará este, sin perjuicio de ulterior resolución.

El auto declaratorio de la quiebra se pondrá en conocimiento del Gobierno; pero no se notificará á las partes, ni se publicará por edictos, hasta tanto que aquel se haya incautado del ferrocarril y sus dependencias, y haya organizado provisionalmente su administración y explotación. Inmediatamente después de organizado provisionalmente el servicio de explotación, se procederá á la tasación del camino; debiendo anunciarse la subasta con término de seis meses para que tenga lugar al año de organizado el servicio, ó antes si se hubieren reconocido y graduado los créditos.

El rematante podrá ofrecer en esta subasta, como precio del remate, los créditos de cualquier clase que tuviere contra la compañía; comprometiéndose: A satisfacer á metálico los créditos que se declaren, ó estén declarados preferentes. A dar participación á prorrata á todos los créditos de su clase que lo soliciten dentro de seis meses, y se asocien al efecto; y reconocer y obligarse á pagar á los que no se asocien por el importe que representen, hecha prorrata entre el total de ellos del valor líquido en venta, deducidos los pagos preferentes. A depositar, si fuere obligacionista, en el término de 30 días, una cantidad en dinero ó valores del Estado al precio de cotización (reponiendo cada dos meses las bajas, si las hubiere) equivalente al importe de los créditos de trabajo personal, y los procedentes de expropiaciones, obras y material, por lo que resulte en el balance de la compañía; á salvo de lo que arroje respecto de esto la graduación. Si el rematante fuere acreedor común, consignará, además, en depósito, dentro del mismo plazo, lo necesario para pagar los cupones vencidos y amortización no satisfechos; hipotecando, también, el camino á las obligaciones impuestas por el remate. Si el precio del remate se pagare en dinero, lo que reste, después de deducido el importe de la garantía retirada del depósito, y los gastos de aprecio y subasta, se depositará en la Caja general de Depósitos, á disposición del juez que conozca de la quiebra; pasando el ferrocarril, libre de toda deuda á manos del nuevo concesionario. Realizada la subasta en esta forma, quedarán cancelados los títulos, y extinguida la hipoteca sobre el camino respecto de los créditos asociados; y el rematante, ó nuevo concesionario, se entenderá subrogado á la anterior empresa con relación al Estado en todos los derechos y obligaciones referentes al ferrocarril subastado.

El auto declaratorio de la quiebra se notificará á los acreedores que la instaron, y al Consejo de Administración de la compañía; y se publicará, además, por edictos, que se insertarán, como ya se ha dicho al hablar de la publicación de la proposición de convenio. Dicho auto contendrá la convocatoria de los acreedores de la compañía á la primera junta general, que tendrá lugar tres meses después de su publicación en la Gaceta. Los tenedores de títulos al portador, para ser admitidos en las juntas, y poder ser parte en el juicio de quiebra, los exhibirán al juez; y, resultando legítimos, se les estampará un sello que diga: «confrontado para la quiebra»; y se devolverán, quedando en los autos nota expresiva del número, série, capital y cupones.

order that within the term of 15 days an advertisement should be published in the official papers, or in default, in one with the greatest publicity in the place of the action, and in Madrid, Barcelona, Seville, Paris, London and Brussels, summoning the creditors to meet within the term of three months, to agree to the proposal for composition, which must be inserted in the advertisement. Unissued or pledged bonds cannot be represented in the compositions.

Adherence to the compositions may be expressed in any form; but in the case of bondholders, it is necessary that it be accompanied by a receipt for the deposit of the securities or coupons, containing their enumeration, in the coffers of the Government or of the Banks of the debtor company, its branches and bankers, or in the Spanish Consulates abroad, or in the foreign Consulates in Spain. The identity of the creditors who are not bondholders, must be proved by the entries in the balance sheet of the company referring to the same; and their adherence may be expressed in any way.

The order of the judge declaring the composition approved, or a definite bankruptcy to be continued or begun, is appealable within the term of 30 days from its publication in the *Gaceta*; and the action may be received to proof in the Court of second instance, if any fact is pleaded which is subject to the jurisdiction of the Court of Appeal. There is an appeal for quashing the judgment pronounced by the latter; but if that of first instance was in approbation of the composition it must be carried into execution, without prejudice to a further decision.

The order declaring the bankruptcy must be brought to the knowledge of the Government; but must not be notified to the parties nor published in advertisements, until the Government has taken possession of the railroad and its appurtenances, and has provisionally organized its administration and working. Immediately after the working service has been provisionally organized, a valuation of the road must be made, and a public auction announced at the end of six months, so as to take place within the year of the service being organized, or before, if the debts have been admitted and classified.

As the price of the sale, the highest bidder at this auction may offer the debts of any class which he has against the company; promising: to pay the declared debts or those which are declared preference debts, in cash; to give proportionate participation to all the debts of their class which apply for it within six months and combine for that purpose; and to admit and bind himself to pay those which are not combined according to the amount which they represent, in proportion to the total thereof, out of the net amount of the sale, after deducting the preferential payments; if he is a bondholder, to deposit within the term of 30 days, an amount of money or State securities at quoted prices (replacing any falls every two months) equivalent to the amount of debts for personal work, and those proceeding from expropriations, works and material, according to the balance sheet of the company; except as altered by the classification of debts. If the highest bidder is an ordinary creditor, he must also pay into court within the same time, the sum necessary to pay the coupons due and amortisation of those not paid; and must also mortgage the road for the obligations imposed by the sale. If the price of the auction is paid in money, the rest, after deducting the amount of the guarantee withdrawn from the deposit, and the expenses of the valuation and auction, must be deposited in the general Office of Deposits, at the disposal of the judge in charge of the bankruptcy; the railroad passing, free of all debts, to the hands of the new concessionaire. When the auction has taken place in this way, the securities will be cancelled, and the mortgage over the road in respect of the combined debts extinguished; and the buyer or new concessionaire will be subrogated to the former company as regards the State, in respect of all rights and obligations relating to the sold railroad,

The decree declaring the bankruptcy must be notified to the creditors who promote it, and to the Board of the company; and also be published in advertisements, which must be inserted as already said when speaking of the publication of the proposal for compromise. The decree must contain the summons to the creditors of the company to attend the first general meeting, which must take place three months after its publication in the *Gaceta*. In order to be admitted to the meetings and enabled to take part in the bankruptcy action, the holders of bearer securities must produce them to the judge; and if they prove to be lawful, they must be marked with a stamp which says: "confrontado para la quiebra" (compared for the bank-

El tenedor de estos títulos confrontados tendrá siempre la representación de los mismos.

No habiendo postores en la primera subasta que cubran el avalúo total del ferrocarril, se anunciará inmediatamente, con término de seis meses, la segunda, en que se admitirán posturas que cubran las dos terceras partes de dicho avalúo.

Mientras el camino no se enajene, y siga explotándolo el Estado, los acreedores tendrán derecho á percibir los productos líquidos, durante el tiempo por que se hubiere hecho la concesión anulada. Si el gobierno arrendase la explotación, los acreedores tendrán derecho al precio de arrendamiento, hasta su completo pago.

La compañía quebrada, mientras dure la quiebra, estará representada con arreglo á lo que á este efecto dispongan sus estatutos; y, á falta de disposición especial por un Consejo de Administración.

Capítulo décimotercero. Tramitación de los incidentes.

Como las cuestiones incidentales, sean de la clase que sean, pueden surgir en toda clase de juicios, hemos reservado el tratar de ellas por vía de apéndice á los diversos juicios que quedan reseñados.

Para que puedan ser calificadas de incidentes, las cuestiones que se susciten en un juicio es preciso que tengan inmediata relación con el asunto principal objeto del pleito, ó con la validez del procedimiento. Por eso previene la ley que los jueces rechazarán de oficio las cuestiones que no ofrezcan estos caracteres; sin perjuicio del derecho que asista á los que las promuevan para usar de él en la forma correspondiente. Contra esta providencia procederá el recurso de reposición; y si no se estimare, el de apelación en un solo efecto.

Los incidentes que, por exigir una resolución prévia, sirvan de obstáculo á la continuación del procedimiento, se sustanciarán en la misma pieza de autos; quedando, mientras tanto, en suspenso el curso de la cuestión principal. Se consideran tales, á más de los que determina la ley expresamente, los incidentes que afecten: A la nulidad de actuaciones, ó de alguna providencia. A la personalidad de cualquiera de los litigantes, ó de su procurador, por hechos ocurridos después de contestada la demanda. A cualquier incidente que ocurra durante el juicio, que haga absolutamente imposible la continuación de la cuestión principal sin su resolución prévia. Los incidentes, que no sean obstáculo al curso de la cuestión principal, se sustanciarán en pieza separada, para no interrumpir el curso de la misma.

La pieza separada se formará, á costa de la parte que lo promovió: con el escrito original que dé lugar al incidente, ó testimonio de lo que á él se refiera, si aquel contiene otras pretensiones ajenas al incidente; con los documentos originales que se acompañaren á dicho escrito, y que se relacionen con el incidente; y con el testimonio de los particulares que consten en los autos principales, y puedan interesar á la cuestión planteada. Esta designación podrá hacerse por una y otra parte. El que la promovió, dentro de los tres días siguientes á la notificación de la providencia en que se mandó formar pieza separada. Y el contrario, dentro de los otros tres que sigan á aquellos, si el juez lo creyera conveniente; para lo cual se les pondrán de manifiesto los autos en la escribanía del juzgado.

Formada la pieza, ó promovido el incidente en autos, se dará traslado por seis dias á la parte contraria para que conteste. El recibimiento á prueba se hará si ambas partes lo solicitan; en el escrito promoviendo el incidente, la una, y en el de contestación, la otra. Si lo solicitare una sola se recibirá, ó no, según lo estime el juez. El término de prueba, único para proponerla y practicarla, será de 10 días como mínimum y 20 como máximum; pudiéndose conceder el extraordinario cuando se sustancien en pieza separada, ó cuando se refieran á la personalidad de los litigantes, ó sus procuradores. El resto de las actuaciones, hasta dictar sentencia, es el mismo que el de las del juicio de menor cuantía. Esto mismo se observará en los incidentes que se promuevan en segunda instancia, ó durante la sustanciación del recurso de casación.

La sentencia que recaiga en los incidentes que se promuevan en segunda instancia, será suplicable ante la Sala de la Audiencia. Dentro de los tres días, siguientes al de la entrega de la copia del escrito de súplica á la parte contraria, podrá contestar esta lo que tenga por conveniente.

ruptcy); and must be returned, a note being placed in the record expressing the number, series, principal and coupons. The holder of these compared securities will always be entitled to represent the same.

If there are no bidders at the first auction who bid up to the whole valuation of the railroad, the second must be announced immediately, to be held at the end of six months, in which bids amounting to two third parts of the said valuation must be accepted.

As long as the road is not sold, but continues to be worked by the State, the creditors will be entitled to receive the net proceeds, during the time that the concession is annulled. If the Government lets the working thereof, the creditors will be entitled to the rent of the lease until they are paid in full.

While the bankruptcy lasts, the bankrupt company must be represented in accordance with the provisions of its constitution for this purpose; and in default of any special provision, by its Board.

Thirteenth Chapter. Interlocutory Proceedings.

We have reserved the treatment of interlocutory questions of all kinds, which may arise in all classes of actions, as an appendix to the various actions which we have reviewed.

In order that the questions arising in an action may be classed as interlocutory, it is necessary that they should have an immediate relation to the principal subject-matter of the action, or with the validity of the procedure. The law therefore provides that the judges must dismiss of their own motion questions which do not bear these characteristics; without prejudice to the right in favour of their promoters to make use thereof in proper form. There is an appeal for rehearing this order; and if it is not successful, an appeal without stay of execution.

Interlocutory matters which obstruct an action because they require previous decision, must be substantiated by using the same file; the principal question being stayed meanwhile. Applications which raise the question of the nullity of the record, or of some order, are so considered, as well as those expressly determined by the law: also those referring to the legal capacity of the litigants, or of their solicitor, by reason of facts which have happened after the Answer to the Claim; and any matter which occurs during the action, making the continuation of the principal question impossible until it has been decided. Interlocutory matters which do not obstruct the course of the principal question, are substantiated on a separate file, so as not to interrupt the course thereof.

The separate file must at the cost of the moving party be formed: — of the original document which gives rise to the application, or a certificed copy of what refers to it, if the former contains other claims which are foreign to the application; of the original documents accompanying the former, and which are related to the application; and of the certified copy of the circumstances appearing on the principal record, which are relevant to the question. Either party may point out these documents: the moving party, within the three days following the notification of the order to form the separate file; and the opposite party, within the three following days, if the judge thinks fit; for which purpose the record must be produced in the office of the Court.

When the file has been drawn up, or the interlocutory application moved on the record, it must be delivered for six days to the opposite party to answer. Reception to proof must take place if both parties apply for it; the one party, by the document moving the matter, and the other by the Answer. If one only applies therefor, it will be received or not according to the discretion of the judge. The time for the proof (there is only one for proposing and taking it) will be from the minimum of 10 days to the maximum of 20; but an extraordinary time may be granted when they are substantiated on a separate file, or when they refer to the legal capacity of the litigants or their solicitors. The rest of the proceedings, up to judgment, is the same as in the action for lesser amount. The same must be observed in the interlocutory matters which are moved in the court of second instance, or during the substantiation of the appeal for quashing.

The judgment in interlocutory matters, moved before the court of second instance, is appealable to the Appeal Chamber. Within three days following the delivery of the notice of appeal to the opposite party, the latter may answer as he thinks fit.

Transcurrido dicho término, con, ó sin contestación, resolverá la Sala lo que estime justo. Contra esta sentencia se dará el recurso de casación, si procede. Contra las sentencias que dicte el Supremo en los incidentes no se dará recurso alguno.

Capítulo décimocuarto. Juicio en rebeldía.

La posibilidad de que el demandado no acuda al juicio, ya desde su principio, ya después de empezado, y sea esto, ya por voluntad de no acudir ó ya por imposibilidad de hacerlo, no es motivo suficiente para paralizar la acción de la justicia; pero si lo es para admitir ciertas irregularidades en el juicio, sólo explicables, por el natural deseo de que los fallos de los Tribunales tengan todas las garantías de acierto necesarias.

Declarado en rebeldía un demandado, el Tribunal no ha de preocuparse de él ya, en lo sucesivo; y, para asegurar su responsabilidad, se podrá, á instancia de parte, decretar la retención de sus muebles y el embargo de los inmuebles, en cuanto unos y otros se conceptuen necesarios al efecto. La retención puede decretarse dejándolos en poder del mismo demandado, ó de un tercero que ofreciere garantias suficientes á juicio del juez. Si no las ofreciere, ó no las prestare, se depositarán en toda regla, corriendo los gastos y riesgos del depósito á cargo del rebelde. El embargo de los inmuebles se hará en la forma indicada[2]). Y, tanto la retención como el embargo, continuará hasta la conclusión del juicio.

Sea cualquiera el motivo de la rebeldía, y sea cualquiera el estado del pleito, si comparece el rebelde se le tendrá por parte en él; pero sin que ello determine un retroceso en el procedimiento. Sin embargo, si comparece transcurrido el término de prueba de primera instancia ó durante la segunda, podrá, á petición suya, recibirse otra vez el pleito á prueba, siempre que este se refiera á cuestiones de hecho. También podrá pedir que se alce la retención ó el embargo, si alega y justifica para ello, que su incomparecencia fué debida á fuerza mayor insuperable; haciéndose de esto pieza separada para no entorpecer el pleito.

Conociéndose el domicilio del rebelde, á instancia de parte, podrá notificársele personalmente la sentencia, tanto de primera como de segunda instancia; y, de no solicitarse esto, se hará por medio de edictos, en los que se insertará tan sólo el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia, que se publicarán además en el Boletín Oficial de la provincia, en el Diario de Avisos, si lo hubiere, y en la Gaceta, si el juez lo creyere necesario. El plazo para interponer el recurso de apelación, ó de casación, en uno y otro caso será el legal; contándose, en el de la publicación por edictos, desde el día siguiente al de su publicación en el Boletin Oficial.

Contra las sentencias firmes, dictadas en rebeldía en los juicios ejecutivos, ó en cualesquiera otros en que pueda promoverse un juicio posterior sobre el mismo objeto, no se dará recurso alguno; pero, si el rebelde no se encontrare en ninguno de los dos casos citados anteriormente, podrá intentar el recurso de audiencia dentro de los plazos que ahora diremos. Por esta razón, y mientras no hayan transcurrido dichos plazos, sólo podrán ejecutarse tales sentencias cuando la cosa objeto del litigio fuere dinero ó cosa fungible, y el que insta su cumplimiento preste fianza bastante á juicio del juez para estar á las resultas del recurso de audiencia posible. Esto no obsta, sin embargo, para que si el rebelde tuviere bienes inmuebles, pueda, el que ha obtenido sentencia á su favor, pedir la correspondiente anotación preventiva de su derecho en el Registro de la propiedad.

Este recurso de audiencia habrá de solicitarse dentro de los tres meses de ser firme la sentencia, cuando se trate de juicios verbales; pero para ello es preciso que acredite: que no se le citó personalmente; y que la cédula de citación entregada á los parientes, familiares, criados ó vecinos, de que habla la ley, no se le pudo entregar por una causa que no le pueda ser imputable en manera alguna; y, si la citación se hizo por edictos, que, cuando se publicaron, y durante la sustanciación del juicio, estuvo ausente del pueblo.

En los demás juicios habrá de ejercitarse este recurso: Dentro del plazo de cuatro meses, por el declarado en rebeldía, después de habérsele emplazado per-

[2]) V. el embargo en el juicio ejecutivo, pág. 66.

At the expiration of that time, with or without answer, the Chamber must decide as it thinks just. An appeal for quashing this judgment may lie. There is no appeal against the judgments of the Supreme Court on interlocutory applications.

Fourteenth Chapter. The Action "en Rebeldia."[1])

The possibility that the defendant may not attend the action, either at its commencement, or afterwards, either intentionally or through being unable to do so, is not a sufficient reason for paralyzing the action of justice; but is sufficient to allow certain irregularities in the action, which are only explicable by the natural desire that the judgments of the Tribunals should have all the guarantees necessary for success.

When a defendant has been declared in default, the Tribunal has not subsequently to pay attention to him; and in order to secure his liability, it may, at the instance of a party, decree the retention of his moveable and the arrest of his immoveable property, as it considers one or the other necessary for that purpose. Retention may be ordered by leaving it in the possession of the defendant himself, or in that of a third person, who offers security to the satisfaction of the judge. If this is not offered nor given, the property must be regularly deposited, the expenses and risks of the deposit being borne by the defaulter. Arrest of the immoveables must be effected as already indicated[2]). And both retention and arrest will continue until the end of the action.

Whatever be the cause of the default, and whatever the state of the action, the defaulter will take part therein on appearance; but without this having the effect of setting back the proceedings. Nevertheless, if he appears after the time for proof in the Court of first instance or in the course of the second instance, the action may on his application again be received to proof, provided that this refers to questions of fact. He may also apply that the retention and arrest may be dissolved, if he pleads and proves for that purpose that his non-appearance was due to insuperable *vis major*; and does this on a separate file so as not to obstruct the action.

If the address of the defaulter is known, the judgment either of the Court of first or second instance may be notified to him personally, at the instance of a party; and if this is not applied for, it must be done by means of advertisements, in which must be inserted only the heading and the operative part of the judgment, which must be published also in the *Boletin Oficial* of the Province, the *Diario de Avisos*, if any, and in the *Gaceta*, if the judge thinks it necessary. The time for entering an appeal, either ordinary or for quashing, is the legal time; reckoned in the case of publication by advertisements, from the day following that of its publication in the *Boletin Oficial*.

There is no appeal against final judgments pronounced against a defaulter in executive actions, or in any other actions when a subsequent action may be brought in respect of the same subject-matter; but, if the defaulter is in neither of these positions, the appeal to the higher Court may be brought within the times already stated. For this reason, and so long as the said times have not transpired, such judgments can only be executed when the subject-matter of the litigation is money or *res fungibiles* and when the party insisting on its being carried out gives security to the satisfaction of the judge, for answering the results of a possible appeal to the higher Court. Nevertheless, if the defaulter has immoveables, this does not prevent the party who has obtained a judgment in his favour, from applying that the corresponding preventive note of his right should be entered on the Register of Ownership.

This appeal must be applied for within three months of the judgment becoming final, in the case of verbal actions; but for this purpose, it is necessary to prove: that the defaulter was not personally summoned; that the writ of summons delivered to the relations, intimate friends, servants or neighbours, as allowed by law, could not be delivered to him for a reason which cannot in any way be imputed to him; and, if the summons was by advertisements, that he was absent from the place when they were published, and during the substantiation of the action.

This appeal must be brought in other actions: — By the party declared in default, within the space of four months from his being personally summoned; provided

[1]) Omissions by a defendant which in Spanish law amount to Contempt, do not in English law amount to more than a default, unless it is a default in obeying the order of the Court. Translator.

[2]) See arrest in executive actions, page 66.

sonalmente; siempre, que acredite que, durante todo el tiempo transcurrido desde dicho emplazamiento hasta la citación para sentencia, estuvo impedido de comparecer por fuerza mayor, no interrumpida.

Dentro del plazo de ocho meses, contados desde la publicación de la sentencia en el Boletin Oficial, por el emplazado por cédula que no se le entregó personalmente; siempre que acredite que, los que al efecto la recibieron, no se la pudieron entregar, por causa que no le sea imputable.

Dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la ejecutoria en el Boletin Oficial, siempre que acredite haber estado constantemente fuera del pueblo en que se siguió el juicio desde el emplazamiento hasta la citación para sentencia; y, que, asimismo, estaba ausente del pueblo de su última residencia, cuando en él se publicaron los edictos para emplazarle.

El recurso de audiencia contra las sentencias de los juicios verbales se planteará ante el juez de primera instancia del partido á que pertenezca el juez municipal que la dictó; quien decidirá, sin ulterior recurso, si procede, ó no, oir al litigante rebelde; comunicando su resolución al juez municipal para que la cumpla. En los demás casos se sustanciará en forma de incidente, con audiencia de los interesados que hayan sido parte en el pleito, ya ante la Audiencia á que corresponda, ó ya ante el Tribunal Supremo, en los casos en que este hubiere dictado sentencia. Contra la resolución de la Audiencia, favorable ó desfavorable al condenado en rebeldia, sólo procederá el recurso de casación. Contra la del Tribunal Supremo no se da recurso alguno. Solo en el caso de que el litigante favorecido por la sentencia se hubiere opuesto á este recurso, y fuere resuelto en su contra, procederá imponerle las costas del mismo.

Si la resolución del Tribunal fuere favorable al litigante rebelde, se comunicará esta al juez de primera instancia que dictó la sentencia, se ordenará la devolución de los autos si obraren en el Tribunal superior, y se abrirá de nuevo el juicio; haciendo de demandante el condenado en rebeldía y de demandado el que obtuvo sentencia á su favor; entregando á uno y á otro, por ocho días, los autos para que expongan lo que crean pertinente en forma legal; admitiendo el pleito á prueba, si lo solicitare alguno de ellos, y la cuestión litigiosa versare sobre hechos, por la mitad de los plazos legales; salvo el término extraordinario de prueba, que podrá concederse íntegro si hubiere motivo fundado para ello. La sustanciación de lo demás del pleito se hará, ya todo, en la forma ordinaria. Si durante esta sustanciación volviera á ser declarado en rebeldía el que fué condenado de esta manera, se sobreseerá el procedimiento[1]), y se declarará firme, y sin recurso alguno contra ella, la sentencia impugnada.

Título segundo. Procedimiento no contencioso.

Capítulo único. De los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio.

Para eludir las responsabilidades que pudieren resultar de no acreditar en debida forma ciertos hechos frecuentes en la vida comercial, y en los que pudiera haber intereses encontrados, previene la ley la intervención de la autoridad judicial; la cual, sólo á instancia de parte, puede conocer de dichos hechos. En general, esta intervención corresponde á los jueces de primera instancia, salvo en aquellos casos en que la urgencia del negocio, ó la circunstancia de encontrarse los medios de prueba, ó las mercancias ó valores de que se trate, en sitios en donde no pueda ser la acción del juez de primera instancia tan rápida como el caso requiere, ó por ocurrir en el extranjero, exijan la intervención del juez municipal ó la del Cónsul español respectivo; cuyas circunstancias harán constar estas autoridades en el auto que dicten al efecto.

En estas actuaciones judiciales deberán intervenir, siendo citados al efecto, á más de los que las promuevan, los terceros á quienes puedan perjudicar; y podrán solicitar su intervención todos los que se crean interesados en el asunto; cuya pretensión rechazará de plano el juez cuando fuere notoriamente impertinente. Y si las diligencias pudiesen afectar á los intereses públicos, ó á personas ausentes, incapacitadas ó ignoradas, se citará al Ministerio fiscal para que intervenga en las mismas. Advirtiendo que, tanto la intervención de los terceros á quienes se cita, como la del Ministerio fiscal, se han de limitar á que tengan el debido conocimiento de las per-

---

[1]) *Sobreseer el procedimiento* es la suspensión ó cesación del mismo por falta de motivo legal para continuarlo.

that he proves that during the whole of the time from the said summons to the citation for judgment, he was prevented from appearing by uninterrupted *vis major.* — Within the space of eight months, reckoned from the publication of the judgment in the *Boletin Oficial*, by a party summoned by writ which was not delivered to him personally: provided that he proves that those who received it for that purpose, were not able to deliver it for a reason which is not imputable to him. — Within the space of one year, reckoned from the publication of the final judgment in the *Boletin Oficial*, provided that he proves that he has been continuously away from the place in which he was sued, from the summons until the citation for judgment; and that he was likewise absent from the place of his last residence, when the advertisements summoning him were published thereat.

The appeal to the higher Court against the judgments in verbal actions must be brought before the judge of first instance of the "partido" of the municipal judge who pronounced it; who must proceed to hear the defaulting litigant without further appeal, as to whether it lies or not; and must communicate his decision to the municipal judge for him to carry it out. In other cases it must be substantiated as an interlocutory application, by hearing the interested persons who have been parties to the action, either in the corresponding Court of Appeal or in the Supreme Tribunal when the latter has pronounced the judgment. Whether the decision of the Court of Appeal is favourable to the defaulter or not, only the appeal for quashing lies. There is no appeal from the decision of the Supreme Tribunal. The successful litigant in the Court below will only be condemned to pay the costs of the appeal when he has resisted it and it has been decided against him.

If the decision of the Tribunal is favourable to the defaulting litigant, this must be communicated to the judge of first instance who pronounced the judgment, and the return of the record, if used in the higher Court, must be ordered, and the action begun anew; the record being delivered to both plaintiff and defendant for eight days, in order that they may set out what they consider pertinent in legal form; and if neither of them applies for it, and the question in litigation turns upon facts, admitting the action to proof for half the legal times; saving the extraordinary time for proof, which may be granted in full, if there is good reason therefor. The substantiation of the rest of the action will entirely follow the ordinary form. If the defendant, who has already been condemned as in default, is again condemned on that ground during the substantiation, the proceeding must be stayed[1]), and the impugned judgment declared final and without appeal.

Second Title. Non-contentious Proceedings.

Single Chapter. Acts of voluntary jurisdiction in commercial business.

In order to avoid the liabilities which may result from not proving in due form certain facts which are frequent in and of interest to commercial life, the law provides for the intervention of the judicial authority, which can try those facts, but only when set in motion by some one. This intervention generally pertains to the judges of first instance, except when the urgency of the business or the fact that the means of proof or the merchandise or valuables in question are in places where the action before a judge of first instance cannot be as rapid as the case requires, or that it has happened abroad, demands the intervention of the municipal judge or that of the proper Spanish Consul; circumstances which these authorities must state in the order or record which they issue for that purpose.

Besides the moving parties, third parties who may be prejudiced must be cited to intervene in these judicial measures; and all who believe themselves to be interested may apply to take part in the affair; but this claim must be promptly dismissed by the judge, if it is notoriously irrelevant. And if the orders may affect public interests or persons absent or subject to legal incapacity or unknown, the Public Prosecutor must be summoned to take part therein. It must be noticed that both the intervention of third persons who are summoned, and of the Public Prosecutor, must be confined to obtaining due knowledge of the persons who apply, in order that they

[1]) *Sobreseer el procedimiento* is the suspension or cessation thereof from the absence of a legal reason for continuing it.

sonas que las promueven, para que puedan informar al juez respecto al carácter con que intervienen, y á su capacidad legal, en relación con dicho carácter; pues cualquier otra reclamación que tuvieren que hacer, referente á cosa distinta de la indicada, no cabe en la instrucción de estas diligencias, salvo si se tratare de algun defecto en las mismas que podrá subsanar el mismo juez; quien, en vista de lo actuado, resolverá lo que proceda; mandando que se archiven las diligencias, y que se dé á los interesados testimonio de la parte que soliciten. Entendiéndose, que esta resolución compete siempre al juez de primera instancia, aun cuando las primeras diligencias haya tenido que practicarlas, por las razones antes indicadas, el juez municipal.

De las resoluciones dictadas en estos expedientes cabe la apelación, ya en ambos efectos, si se trata del que promovió las diligencias, ya en uno solo, si se trata de los demás que intervengan en ellas. La apelación ante el juez de primera instancia se sustancia en una sola audiencia, que ha de celebrarse dentro de tercero día después de personado el apelante, á la cual habrá de citarse á todos los interesados para que expongan lo que tengan por conveniente, y de la que se levantará el acta correspondiente, al efecto de que el juez, dentro también de los tres días siguientes, resuelva. Las apelaciones ante las Audiencias se sustancian en igual forma que los incidentes. Contra estas resoluciones en segunda instancia no hay recurso; quedando á los interesados, no satisfechos con ellas, el derecho de intentar por la vía contenciosa el juicio ordinario que proceda en su caso.

Estos preceptos son los que dicta la ley con carácter general para esta clase de cuestiones; y á ellos habrán de acomodarse, en lo posible, los cónsules españoles que en ellas intervengan. Los demás preceptos complementarios, dictados para casos especiales, que prevee el Código de comercio, los expondremos en su lugar correspondiente al ocuparnos en el texto auténtico de dichos casos.

Abreviaturas.

Cód. de com. . . .	Código de comercio.
Cód. c.	Código civil.
Cód. pen.	Código penal.
L. Enj. c.	Ley de Enjuiciamiento civil.
L. Hip.	Ley Hipotecaria.
L. del T.	Ley del Timbre.
Regl. Nav. Merc. .	Reglamento para la Navegación Mercante.
Regl. Polic. fc. . .	Reglamento para la ejecución de la Ley de policía de ferrocarriles.
Del proc. jud. en las cuest. civ. merc. .	Del procedimiento judicial en las cuestiones civiles mercantiles.

may inform the judge of the character of their intervention, and of their legal capacity in relation to that character; as any other claim which they have to make, referring to something different from that indicated, is not included in the drawing up of these orders, unless it is a question of some defect therein, which may be remedied by the same judge; who, on inspecting the record, must make the proper order; directing that the orders be recorded, and a certified copy of the part which they require delivered to the parties interested. It must be understood that this decision is always a matter for the judge of first instance, even when for the reasons above indicated, the municipal judge has had to make the first orders.

There is an appeal with stay of execution from the decisions pronounced in connection with these files, if entered by the party who applied for the orders, but without stay, if entered by other persons taking part therein. The appeal before the judge of first instance is substantiated at a single hearing, which must be held within the third day after the appeal has been entered, to which all the persons interested must be cited to expound their views, and of which a corresponding minute of the judge's decision must be made within the three following days. The appeals before the Court of Appeal are substantiated in the same way as interlocutory applications. There is no appeal from these decisions of the Court of second instance; but interested persons who are dissatisfied therewith are entitled to bring the proper ordinary contentious action. These precepts are those pronounced by the law as having general application to this kind of question; and the Spanish Consuls who take part therein must conform to them as far as possible. We will expound the supplementary precepts provided by the law for special cases, in their proper place, when dealing with the actual text of those cases.

Abbreviations.

Cod. de com.	Código de comercio.
Cód. c.	Código civil.
Cód. pen.	Código penal.
L. Enj. c.	Ley de Enjuiciamiento civil.
L. Hip.	Ley Hipotecaria.
L. del T.	Ley del Timbre.
Regl. Nav. Merc.	Reglamento para la Navegación Mercante.
Regl. Polic. fc.	Reglamento para la ejecución de la Ley de policia de ferrocarriles.
Del proc. jud. en las cuest. civ. merc.	Del procedimiento judicial en las cuestiones civiles mercantiles.

Indice alfabético

de los términos técnicos empleados en las leyes procesales que han sido explicados por medio de notas.

Código de Comercio.

Libro primero. De los comerciantes y del comercio en general.

Título I. De los comerciantes y de los actos de comercio.

Art. 1. Son comerciantes, para los efectos de este Código: 1.° Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican á él habitualmente; — 2.° Las compañías mercantiles ó industriales que se constituyeren con arreglo á este Código.

2. Los actos de comercio, sean ó comerciantes los que los ejecuten, y estén ó no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza; y á falta de ambas reglas, por las del derecho común[1]).

Serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código, y cualesquiera otros de naturaleza análoga[2]).

3. Existirá la presunción legal del ejercicio habitual del comercio, desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, ó de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil.

4. Tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas que reunan las condiciones siguientes: 1.° Haber cumplido la edad de 21 años; — 2.° No estar sujetas á la potestad del padre[3]) ó de la madre ni á la autoridad marital[4]): — 3.° Tener la libre disposición de sus bienes[5]).

---

1) Las palabras derecho común se refieren al derecho civil; pero entendiendo por tal no todo el derecho civil español, sino tan solo la legislación general contenida en el Código civil vigente, y sus leyes complementarias, pues el llamado derecho foral, propio de Aragón, Cataluña, Mallorca, Navarra, las Provincias Vascongadas y algo de Galicia, no tiene nada que ver con el derecho comercial, por declararlo así terminantemente el propio Código civil en su artículo 16 que dice: «En las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de estas se suplirá por las disposiciones de este Código». Y para que no haya lugar á duda lo ha declarado así igualmente el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 27 de diciembre de 1888. — A la doctrina de este artículo 2 del Cód. de com. es forzoso hacer una aclaración, ó mejor dicho una rectificación, y es la siguiente: El derecho común ó civil no es cierto que tenga el carácter de supletorio del mercantil, como parece deducirse del texto legal, pues una parte de él, es de inmediata y preferente aplicación al mismo derecho mercantil, aun tratándose de cuestiones comerciales. Todos los principios generales, contenidos en el Cód. c. referentes á la capacidad de las personas, y muy especialmente los relativos á las obligaciones y contratos contenidos en los Títulos 1.° y 2.° del Libro IV, en cuanto no estén expresamente derogados por alguna disposición contraria del Cód. de com. forman parte integrante del derecho comercial, no á título de derecho supletorio, sino de ley aplicable en primer término en las cuestiones comerciales*); siendo derecho supletorio, propiamente tal, toda la parte del Cód. c. referente á las reglas particulares de los contratos civiles, que son también contratos mercantiles.

2) La analogía necesaria para determinar la naturaleza mercantil de un contrato, no especificado como tal en el Cód. de com., incumbe de una parte á los comerciantes que lo modelan, acomodándolo á formas genuinamente mercantiles, y de otra á los tribunales de justicia, que al resolver sobre las cuestiones que con ocasión del mismo se susciten le asignan su verdadero carácter para determinar la ley que les ha de ser aplicable.

3) Del artículo 167 del Cód. c. se deduce que no están sujetos á la potestad del padre ó de la madre, los huérfanos; ó sea los que carecen de padre y madre, los emancipados y los adoptados. — Con relación á los primeros, hay que tener en cuenta, que, aun no siendo huérfanos de padre y madre, pueden los hijos no emancipados, ni adoptados no estar sujetos á la patria potestad en los casos siguientes: Respecto de la madre viuda (art. 168, Cód. c.), que pierde esta potestad si contrajere segundas nupcias, siempre que su difunto esposo no hubiese previsto expresamente en su testamento que en caso tal no deba perderla; entendiéndose (art. 172, Cód. c.) que si enviudase por segunda vez y la hubiese perdido, la recobrará en el momento en que tal ocurra. Y respecto del padre, ó de la madre, indistintamente, en los casos en que por causa de delito ó de incapacidad se les declare privados ó

[Continuación de la nota 4 y nota 5 véase pag. 90.]

---

*) Por la importancia que tienen estos preceptos para comprender la legislación comercial española los publicamos íntegros entre las leyes complementarias.

Commercial Code.

First Book. Merchants and commerce in general.

Title I. Merchants and Acts of Commerce.

Art. 1. The following are merchants for the purposes of this Code: 1. Those who have legal capacity to practise commerce and habitually devote themselves thereto — 2. Mercantile or industrial associations which are constituted in accordance with this Code.

2. Acts of commerce, whether performed by merchants or not, and whether specified in this Code or not, are governed by the provisions contained therein; and in default thereof, by the commercial customs generally observed in each place; and in default of both, by those of the common law[1]).

The acts comprised in this Code and all others of an analogous nature[2]) shall be considered acts of commerce.

3. There shall be a legal presumption of the habitual practise of commerce, from the fact that the person who proposes to practise it announces by circulars' newspapers, handbills, posters exposed to the public view, or in any other way, an establishment which has for its object any mercantile transaction.

4. Persons who combine the following conditions shall have legal capacity for the habitual practice of commerce: 1. Having completed the age of 21 years; — 2. Not being subject to the *potestas* of their father[3]) or mother, nor to marital authority[4]); — 3. Having the free disposal of their property[5]).

[1]) The words "common law" refer to the Civil law; but that means not all the Spanish Civil law, but only the general legislation contained in the Civil Code in force, and in its supplementary laws, since what is called the law of the *fueros*, proper to Aragón, Cataluña, Mallorca, Navarra, the Basque Provinces and part of Galicia, have nothing to do with the commercial law, as is definitely declared in the same Civil Code, article 16 whereof says: "In matters which are governed by special laws, the deficiencies thereof shall be supplied by the provisions of this Code". And so that there may be no doubt, the Supreme Tribunal of Justice has likewise so declared in the judgment of 27 December 1888. It is necessary to make the following explanation, or rather a correction of the doctrine of article 2 of the Code of Commerce: It is not certain that the common or civil law is of a character supplementary to the mercantile, as appears to follow from the text of the law, as one part thereof applies immediately and preferentially to the mercantile law itself, and even deals with commercial questions. All the general principles contained in the Civil Code, referring to personal capacity, and very specially those relating to the obligations and contracts contained in Titles 1 and 2 of Book IV, so far as they are not expressly repealed by any contrary provision of the Code of Commerce, form an integral part of the commercial law, not as a supplementary law, but as the law which applies in the first instance to commercial questions *); but all that part of the Civil Code which refers to the separate rules for civil contracts, which are likewise mercantile contracts, are a supplementary law, properly so called.

[2]) The analogy which is necessary to determine the mercantile nature of a contract which is not specified as such in the Code of Commerce, depends on the one hand on the merchants who draft them, using forms which are genuinely mercantile, and on the other hand, on the Tribunals of Justice, which, in deciding questions which happen to arise thereon, assign them their true character, in order to determine the law which has to be applied to them.

[3]) We gather from art. 167 of the Civil Code that orphans are not subject to the *potestas* of father or mother; that is to say, those who have neither father nor mother, and emancipated and adopted children. With regard to the first class, we must remember that even when they have not lost both father and mother, children who are neither emancipated nor adopted may not be subject to the *patria potetas* in the following cases: A widowed mother loses this *potestas* on contracting a second marriage (art. 168, Civil Code), provided that her deceased husband has not expressly provided in his will that she should not lose it in that event; and it is understood (art. 172 Civil Code) that if she becomes a widow for the second time and has lost it, she will recover it the moment this occurs. And both father and mother, when they are declared to be deprived or suspended in the exercise of this *potestas* on account of crime or incapacity. In order that the crime

[For continuation, and notes 4 and 5, See page 90.]

*) In consequence of the importance of these precepts for the comprehension of the Spanish commercial legislation, we publish them as a whole among the supplementary laws.

5. Los menores de 21 años y los incapacitados[1]) podrán continuar, por medio de sus guardadores[2]), el comercio que hubieren ejercido sus padres ó sus causantes. Si los guardadores carecieren de capacidad legal para comerciar, ó tuvieren alguna incompatibilidad, estarán obligados á nombrar uno ó más factores que reunan las condiciones legales, quienes les suplirán en el ejercicio del comercio.

6. La mujer casada, mayor de 21 años, podrá ejercer el comercio con autorización de su marido, consignada en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil.

7. Se presumirá igualmente autorizada para comerciar la mujer casada que, con conocimiento de su marido, ejerciere el comercio.

suspensos del ejercicio de esta potestad. Para que el delito ó la incapacidad puedan ser causa de privación (art. 169 y 170, Cód. c.) es preciso sentencia firme en causa criminal en la que se imponga como pena especial esta privación, ó sentencia en la que se imponga, como accesoria, la pena de interdicción civil. También por sentencia firme en pleito de divorcio puede imponerse esta privación, mientras duren los efectos del divorcio. Los incapacitados ó ausentes también estarán privados del ejercicio de la patria potestad cuando se hubiere hecho judicialmente la declaración de incapacidad ó de ausencia, y mientras subsistan una ú otra. Los motivos de delito determinantes de la privación ó suspensión de la patria potestad son (art. 171, Cód. c.): la dureza excesiva en el modo de tratar á los hijos, ó las órdenes ó consejos ó ejemplos corruptores que les dieren. — La emancipación se consigue (art. 314, Cód. c.), por la mayor edad, por el matrimonio del menor y por concesión del padre ó de la madre que ejerza la patria potestad. La mayor edad empieza á los 23 años cumplidos (art. 320, Cód. c.), y el mayor de edad, que no está incapacitado por algún otro motivo, es capaz para todos los actos de la vida á excepción de aquellos que requieren una edad especial. El matrimonio produce de derecho la emancipación (art. 315, Cód. c.) con las limitaciones siguientes: — Si fuere el marido menor de diez y ocho años (art. 59, Cód. c.) no podrá administrar sin el consentimiento de su padre, en defecto de este, sin el de su madre, y á falta de ambos, sin el de su tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas. Y sea ó no mayor de diez y ocho años, mientras no llegue á la mayor edad, no podrá sin el consentimiento de su padre, madre ó tutor tomar dinero á préstamo, gravar ni enajenar los bienes raíces. — Si el matrimonio se contrajo sin solicitar previamente la licencia ó el consejo paterno, según los casos, entonces (art. 50 Cód. c.) ni siquiera tendrá el marido, hasta la mayor edad, la libre administración de sus bienes. — La emancipación por concesión del padre ó de la madre (art. 316 Cód. c.) ha de hacerse por escritura pública ó por comparecencia ante el juez municipal. Y para que surta efecto contra tercero, ha de inscribirse en el Registro civil; advirtiendo que esta emancipación no puede concederse (art. 318, Cód. c.) más que al menor que tenga diez y ocho años cumplidos y preste su consentimiento. Los efectos de esta emancipación hasta el cumplimiento de la mayor edad son los mismos que los de la emancipación por el matrimonio (art. 317, Cód. c.). — Los huérfanos de padre y madre pueden emanciparse del poder tutelar en igualdad de condiciones que los no huérfanos se emancipan del poder paterno y con iguales efectos. La emancipación se ha de conceder por acuerdo del Consejo de familia, con aprobación del Presidente de la Audiencia territorial del distrito y oído el Fiscal. Este acuerdo del Consejo de familia no podrá tomarse sino cuando se considere conveniente al menor. También habrá de inscribirse esta emancipación en el Registro de tutelas (art. 322, 323, 324, Cód. c.). — Aun cuando el adoptado no está sujeto á la patria potestad, para los efectos del precepto del Código de comercio á que se refiere esta nota es como si lo estuviera.

[4]) No están sujetas á la autoridad marital las mujeres solteras y las casadas cuyos maridos hubieren sido condenados por sentencia firme de divorcio, estuvieren declarados legalmente ausentes, estuvieren sufriendo condena que lleve aneja la pena de interdicción civil, ó estuvieren sujetos á tutela por incapacidad manifiesta.

[5]) La libre disposición de sus bienes solo la tienen, con arreglo al derecho común, los mayores de edad que no tienen ninguna otra incapacidad; pues tanto los emancipados como los huérfanos habilitados de edad no pueden hasta llegar á la mayor edad tomar dinero á préstamo, ni gravar ni vender bienes inmuebles sin consentimiento de su padre, en defecto de este sin el de su madre, y por falta de ambos sin el de su tutor (art. 317 y 324, Cód. c.).

[1]) Son incapacitados, á más de los menores de edad, no emancipados legalmente ni habilitados de edad si fueren huérfanos: los locos ó dementes, aunque tengan intérvalos lúcidos, y los sordomudos que no sepan leer y escribir; los que por sentencia firme hubieren sido declarados pródigos, y los que estuvieren sufriendo la pena de interdicción civil (art. 200, Cód. c.). — Se entiende por pródigo el que por no saber ó no querer administrar su fortuna la dilapida. — La pena de interdicción civil priva al penado, mientras la sufre, de los derechos de la patria potestad, tutela, protutela, de la participación en el consejo de familia, de la autoridad marital, de la administración de bienes y del derecho de disponer de los propios por actos entre vivos (art. 43, Cód. pen.).

[2]) La antigua distinción entre la tutela y la guardaduría, que procedía del derecho romano, ya no existe á partir de la publicación del Cód. c. Por eso donde dice el Cód. de com. guardadores ha de leerse tutores.

5. Minors under 21 years and persons subject to legal incapacity[1]) may by means of their guardians[2]) continue the commerce which had been carried on by their parents or predecessors in right. If the guardians lack legal capacity to trade, or have any disability, they shall be obliged to appoint one or more managers who combine the legal conditions, to take their place in carrying on the trade.

6. A married woman of more than 21 years of age may practise commerce with the authorisation of her husband, set out in a notarial instrument which shall be inscribed in the Mercantile Register.

7. A married woman who practises commerce with the knowledge of her husband shall likewise be presumed authorised to trade.

---

or incapacity may be the cause of deprivation (art. 169 and 170, Civil Code) there must be a final judgment in a criminal prosecution, in which this deprivation is imposed as a special punishment, or a judgment in which civil interdiction is imposed as an additional punishment. This deprivation may also be imposed by a final judgment in an action for divorce, as long as the effects of the divorce last. Persons who are incapacitated or absent may also be deprived of the exercise of the *patria potestas* when a declaration of incapacity or absence has been made by the Court, and as long as the one or the other exists. The grounds which determine the deprivation or suspension of the *patria potestas* are (art. 171, Civil Code): excessive harshness in the treatment of the children, or the corrupt orders, advice or examples given them. Emancipation is obtained (art. 314, Civil Code) by attaining majority, by marriage of a minor, and by grant of the father or mother in exercise of the *patria potestas*. Majority begins with the completion of 23 years (art. 320, Civil Code), and a person of full age who is not under any legal incapacity for any other reason, has capacity for all the acts of life, except those which require a special age. Marriage produces emancipation by law (art. 315, Civil Code) with the following limitations: If the husband is under eighteen years (art. 59, Civil Code) he cannot administer the conjugal partnership without the consent of his father or, in default thereof, without that of his mother, and in default of both without that of his guardian, Nor can he appear in Court without the presence of the said persons. And whether he is above eighteen years or not, he cannot borrow money, or charge or alienate his real estate without the consent of his father, mother or guardian, until he attains majority. If the marriage has taken place without previous application for the paternal licence or the council, as may be, then (art. 50, Civil Code) the husband will not enjoy the free administration of his own property until he attains majority. Emancipation by grant of the father or mother (art. 316, Civil Code) must be by notarial instrument or by appearing before the municipal judge. And in order that it may take effect as regards a third person, it must be inscribed in the Civil Register; but it must be noticed that this emancipation cannot be granted (art. 318, Civil Code) except to a minor who has completed eighteen years and who expresses his consent. The effects of this emancipation, until he attains majority, are the same as those of emancipation by marriage (art. 317, Civil Code). Orphans who have lost both father and mother may be emancipated from the *potestas* of their guardians in like circumstances as those who are not orphans are emancipated from the *patria potestas*, and with like effects. The emancipation has to be granted by resolution of the Family Council, with the approbation of the President of the territorial Court of Appeal of the district, after hearing the Public Prosecutor. This resolution of the Family Council cannot be passed unless it is considered advantageous to the minor. This emancipation must also be inscribed in the Register of Guardianships (art. 322. 323, 324, Civil Code). Although an adopted child is not subject to the *patria potestas*, he is as if he were subject thereto, for the purpose of the precept of the Code of Commerce to which this note refers.

[4]) The following are not subject to marital authority: single women, and married women whose husbands have been condemned by a final judgment of divorce, who have been declared absent in the eye of the law, who are undergoing a sentence which carries the annexed penalty of civil interdiction, or who are subject to guardianship for manifest incapacity.

[5]) According to the common law, only persons who are of full age and who have no other legal incapacity, have the free disposal of their property; as both those who are emancipated and orphans who are qualified with respect to age, cannot until they attain majority, either borrow money, charge or sell their immoveable property without the consent of their father, or in default, without that of their mother, and in default of both, without that of their guardian (art. 317 and 324. Civil Code).

[1]) Besides minors, the following are wanting in legal capacity: orphans who are neither legally emancipated nor qualified with respect to age; idiots or mad persons, although with lucid intervals; deaf mutes, who do not know how to read and write; those who have been declared prodigals by a final judgment, and those who have undergone the punishment of civil interdiction (art. 200, Civil Code). A prodigal means a person who wastes his fortune through ignorance or want of will to administer it. The punishment of civil interdiction, while it is being endured, deprives the punished person of the rights of *patria potestas*, guardianship, intervening guardianship, the right of taking part in the Family Council, marital authority, administration of property and the right to dispose of his own property by acts *inter vivos* (art. 43, Penal Code.)

[2]) The ancient distinction between *tutela* and *guardaduria*, which was derived from the Roman Law, ceased to exist with the publication of the Civil Code. Therefore where the Code of Commerce says *Guardadores*, we must read *Tutores*.

8. El marido podrá revocar libremente la licencia concedida, tácita ó expresamente, á su mujer para comerciar, consignando la revocación en escritura pública[1]), de que también habrá de tomarse razón en el Registro Mercantil, publicándose además en el periódico oficial del pueblo, si lo hubiere, ó, en otro caso, en el de la provincia, y anunciándolo á sus corresponsales por medio de circulares.

Esta revocación no podrá en ningún caso perjudicar derechos adquiridos antes de su publicación en el periódico oficial[2]).

9. La mujer que al contraer matrimonio se hallare ejerciendo el comercio, necesitará licencia de su marido para continuarlo.

Esta licencia se presumirá concedida ínterin el marido no publique, en la forma prescrita en el artículo anterior, la cesación de su mujer en el ejercicio del comercio.

10. Si la mujer ejerciere el comercio en los casos señalados en los artículos 6.°, 7.° y 9.° de este Código, quedarán solidariamente obligados á las resultas de su gestión mercantil todos sus bienes dotales[3]) y parafernales[4]), y todos los bienes y derechos que ambos cónyuges tengan en la comunidad ó sociedad conyugal, pudiendo la mujer enajenar é hipotecar los propios y privativos suyos, así como los comunes.

Los bienes propios del marido podrán ser también enajenados é hipotecados por la mujer, si se hubiere extendido ó se extendiere á ellos la autorización concedida por aquél.

11. Podrá igualmente ejercer el comercio la mujer casada, mayor de 21 años, que se halle en alguno de los casos siguientes: 1.° Vivir separada de su cónyuge por sentencia firme de divorcio[5]); — 2.° Estar su marido sujeto á curaduría[6]); — 3.° Estar el marido ausente[7]), ignorándose su paradero, sin que se espere su regreso; — 4.° Estar su marido sufriendo la pena de interdicción civil.

12. En los casos á que se refiere el artículo anterior, solamente quedarán obligados á las resultas del comercio los bienes propios de la mujer, y los de la comunidad ó sociedad conyugal que se hubiesen adquirido por esas mismas resultas, pudiendo la mujer enajenar é hipotecar los unos y los otros.

Declarada legalmente la ausencia del marido, tendrá además la mujer las facultades[8]) que para este caso le conceda la legislación común.

13. No podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa ó económica en compañías mercantiles ó industriales: 1.° Los senten-

---

[1]) Se llama escritura pública á la autorizada por Notario.

[2]) Los periódicos oficiales á que se refiere este artículo son: el del pueblo, el *Diario de Avisos*; y el de la provincia, el *Boletín Oficial.* Uno y otro llevan además el nombre del pueblo ó el de la provincia á que corresponden.

[3]) Son bienes dotales los que la mujer aporta al matrimonio al tiempo de contraerlo y los que durante él adquiera por herencia, legado ó donación con este carácter (art. 1336, Cód. c.). También lo son los inmuebles adquiridos durante el matrimonio por permuta con otros bienes dotales, por derecho de retracto perteneciente á la mujer; por dación en pago de la dote; y por compra con dinero perteneciente á la dote (art. 1337, Cód. c.).

[4]) Son bienes parafernales los que la mujer aporta al matrimonio sin incluirlos en la dote, y los que adquiere después de constituída esta sin agregarlos á ella (art. 1381, Cód. c.). De manera que la condición de parafernales y dotales la determina únicamente la voluntad de la mujer ó la del que la donó ó trasmitió los bienes.

[5]) Para que la sentencia firme de divorcio pueda producir este efecto, es preciso que la culpabilidad del divorcio se impute en la sentencia al marido, pues de no ser así, la mujer separada de su marido por sentencia firme en la que se declare su culpabilidad, es incapaz para comerciar, por no tener la libre disposición de sus bienes, ya que el artículo 73 del Cód. c. al determinar los efectos del divorcio dice en su apartado 5.° que el marido inocente conservará, si la tuviere, la administración de los bienes de la mujer, la cual solo tendrá derecho á alimentos. Y como por otra parte si el marido inocente no tuviere la administración de los bienes de la mujer culpable, los productos de esta administración quedarán siempre afectos al levantamiento de las cargas matrimoniales por tener el carácter de bienes gananciales, de los que en este caso corresponde disponer al marido, siempre resultará incapacitada la mujer culpable del divorcio para poder ejercer el comercio (art. 1401 y 1412, Cód. c.). —

[6]) En lugar de curaduría léase tutela (v. nota 2, p. 90.).

[7]) La ausencia del marido ha de estar de clarada judicialmente, y no produce efectos hasta seis meses después de su publicación en los periódicos oficiales (art. 186, Cód. c.).

[8]) Estas facultades están determinadas en el artículo 188 del Cód. c., pero no afectan en en nada á los preceptos del Cód. de com. referentes al ejercicio del comercio por la mujer del declarado legalmente ausente.

8. A husband may freely revoke the licence to his wife to trade, whether granted tacitly or expressly, by setting out the revocation in a notarial instrument[1]), which must also be registered in the Mercantile Register, and published in the official paper of the place, if any, or, if none, in that of the province, and announced to his correspondents by means of circulars.

This revocation can in no case prejudice rights acquired before its publication in the official paper[2]).

9. A woman who is practising commerce at the time of the celebration of the marriage shall require the licence of her husband to continue it.

This licence shall be presumed to be granted as long as her husband refrains from publishing, as prescribed in the preceding article, that his wife is ceasing to practise commerce.

10. If a wife practises commerce, as stated in articles 6, 7 and 9 of this Code, the following shall be jointly and severally bound by the results of her mercantile trade: all the property of her dowry[3]) and paraphernalia[4]), and all the property and rights which both spouses have in the conjugal community or partnership, and the wife may alienate and mortgage her own separate property, as well as the common property.

The separate property of the husband may likewise be alienated and mortgaged by the wife, if the authorisation granted by him has extended or shall extend thereto.

11. A married woman, above 21 years of age, may likewise practise commerce in any of the following cases: 1. When she is living apart from her husband under a final sentence for divorce[6]); — 2. When her husband is a ward[5]); — 3. When her husband is absent[7]), and his abode in unknown, and his return is not expected; — 4. When her husband is suffering the punishment of civil interdiction.

12. In the cases referred to in the preceding article, only the separate property of the wife, and that of the conjugal community or partnership which has been acquired by the results of the commerce, are bound by the results, the wife being able to alienate and mortgage both the one and the other.

When the absence of the husband has been legally declared, the wife shall likewise have the powers[8]) granted for this case by the common law.

13. The following cannot practise commerce or have any direct administrative or economic employment or right of intervention in mercantile or industrial societies:

---

1) *Escritura publica* is an instrument authenticated by a notary.

2) The official papers to which this article refers are: that of the place, the *Diario de Avisos*; and that of the province, the *Boletin Oficial.* Each bears the name of the place or of the province to which it belongs.

3) *Bienes dotales* means the property which the wife brings to the marriage at the time of its celebration, and that which, during the marriage, she acquires as such by inheritance, legacy or gift (art. 1336, Civil Code); likewise immoveables acquired during the marriage in exchange for other dotal property, by right of *retracto* belonging to the wife; or by gift in payment of dowry; or by purchase with money belonging to the dowry (art. 1337, Civil Code).

4) *Paraphernalia* means property not included in the dowry, which the wife brings to the marriage, and that which she acquires after its celebration but does not add thereto (art. 1381, Civil Code). So that the wish of the wife or that of the donor or transferor of the property alone determines whether it is part of the paraphernalia or dowry.

5) For a final judgment of divorce to produce this effect, it is necessary that the guilt of the divorce should be imputed to the husband by the sentence, for, if this is not so, a woman separated from her husband under a final sentence which declares her own guilt, is incapable of trading, from not having the free disposal of her property, for art. 73 of the Civil Code, in determining the effects of divorce, says in paragraph 5, that, if he had it before, the innocent husband shall retain the administration of the property of his wife, who shall only be entitled to maintenance. And, as on the other hand, if the innocent husband had not the administration of the property of the guilty wife, the proceeds of this administration shall always be applied to paying off matrimonial charges, from having the character of *bienes gananciales*, the disposal whereof, in this case, belongs to the husband, the guilty wife will always be incapacitated from practising commerce (art. 1401 and 1412, Civil Code).

6) Instead of *curaduria*, read *tutela* (see note 2, page 90).

7) The absence of the husband must be judicially declared, and does not take effect until six months after its publication in the official papers (art. 186, Civil Code).

8) These powers are determined by art. 188 of the Civil Code, but they in no way affect the precepts of the Code of Commerce which refer to the practice of commerce by the wife of a person who has been legally declared absent.

ciados á pena de interdicción civil, mientras no hayan cumplido sus condenas ó sido amnistiados ó indultados; — 2.° Los declarados en quiebra, mientras no hayan obtenido rehabilitación, ó estén autorizados, en virtud de un convenio aceptado en junta general de acreedores y aprobado por la autoridad judicial, para continuar al frente de su establecimiento; entendiéndose en tal caso limitada la habilitación á lo expresado en el convenio; — 3.° Los que, por leyes ó disposiciones especiales, no puedan comerciar[5]).

14. No podrán ejercer la profesión mercantil por sí ni por otro, ni obtener cargo ni intervención directa administrativa ó económica en sociedades mercantiles ó industriales, dentro de los límites de los distritos, provincias ó pueblos en que desempeñan sus funciones: 1.° Los magistrados, jueces y funcionarios del ministerio fiscal en servicio activo. Esta disposición no será aplicable á los alcaldes, jueces y fiscales municipales ni á los que accidentalmente desempeñen funciones judiciales ó fiscales; — 2.° Los jefes gubernativos, económicos ó militares de distritos, provincias ó plazas; — 3.° Los empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, nombrados por el Gobierno[1]). Exceptúanse los que administren y recauden por asiento, y sus representantes; — 4.° Los agentes de cambio y corredores de comercio, de cualquiera clase que sean; — 5.° Los que por leyes ó disposiciones especiales no puedan comerciar[2]) en determinado territorio.

15. Los extranjeros y las compañías constituídas en el extranjero podrán ejercer el comercio en España; con sujeción á las leyes de su país, en lo que se refiera á su capacidad para contratar; y á las disposiciones de este Código, en todo cuanto concierna á la creación de sus establecimientos dentro del territorio español[3]), á sus operaciones mercantiles y á la jurisdicción de los tribunales de la Naicón.

Lo prescrito en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo que en casos particulares pueda establecerse por los tratados y convenios con las demás Potencias.

Título II. Del registro mercantil.

16. Se abrirá en todas las capitales de provincia un Registro Mercantil, compuesto de dos libros independientes, en los que se inscribirán: 1.° Los comerciantes particulares; — 2.° Las sociedades.

En las provincias litorales, y en las interiores donde se considere conveniente por haber un servicio de navegación, el Registro comprenderá un tercer libro destinado á inscripción de los buques.

17. La inscripción en el Registro Mercantil será potestativa para los comerciantes particulares, y obligatoria para las sociedades que se constituyan con arreglo á este Código ó á leyes especiales, y para los buques[4]).

18. El comerciante no matriculado no podrá pedir la inscripción de ningún documento en el Registro Mercantil ni aprovecharse de sus efectos legales.

---

[1]) No pueden comerciar por leyes ó disposiciones especiales los eclesiásticos y los agentes mediadores del comercio. A los primeros se lo prohiben las leyes canónicas (antes se lo prohibía también el Cód. de com. de 1829); á los segundos el propio Cód. de com. vigente, á declarar, como declara, en su artículo 892, que se considerará quiebra fraudulenta la del agente que hubiere hecho por su cuenta, y en nombre propio ó ajeno, alguna operación de tráfico ó giro.

[2]) No pueden comerciar dentro del territorio en que ejercen su jurisdicción los Notarios, porque así se deduce del espíritu de la Ley sobre constitución del Notariado de 28 de mayo de 1862 y expresamente del art. 28 del Reglamento de 9 de noviembre de 1874.

[3]) Este precepto del Cód. es consecuencia natural del art. 2 de la Constitución Política de 1876 que autoriza á los extranjeros para establecerse libremente en territorio español, ejercer en él su industria ó dedicarse á cualquiera profesión para cuyo desempeño no exijan las leyes título de aptitud, expedidos por las autoridades españolas.

[4]) Por Real Orden de 27 de diciembre de 1885 se dispuso que se abriera el libro destinado á la inscripción de buques en los Registros mercantiles de las capitales siguientes: Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Almería, Málaga, Cádiz, Huelva, Coruña, Santander, Bilbao, San Sebastián, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife; y además en los puertos de Gijón, Rivadeo, Vigo, Motril, Cartagena y Palamós, estando dicho libro registro á cargo de los Registradores de la propiedad de los indicados puntos, excepto el de Palamós, que está á cargo del fiscal del Juzgado municipal.

1. Those sentenced to the punishment of civil interdiction, so long as they have not completed their sentences or been amnestied or pardoned; — 2. Those who have been declared bankrupt, so long as they have not obtained their discharge, or been authorised by virtue of a composition accepted by a general meeting of creditors and approved by the judicial authority, to continue at the head of their establishment; it being understood, in that case, that the qualification for trading (discharge) is limited to what is expressed in the composition; — 3. Those who by special laws or provisions, are not able to trade[1]).

14. The following cannot practise the mercantile profession, either in person or by another, nor obtain direct administrative or economic employment or right of intervention in mercantile or industrial societies, within the boundaries of the districts, provinces or localities wherein they discharge their functions: 1. Appeal and ordinary judges and the officials of the ministry of the Public Prosecutor in active employment. This provision shall not apply to mayors, municipal judges and public prosecutors, nor to those who casually perform judicial or fiscal functions; — 2. The Government, economic or military heads of districts, provinces or localities; — 3. Persons employed in the collection and administration of the State funds, appointed by the Government[1]); except those who administer and collect by contract, and their representatives; — 4. Exchange agents and commercial brokers of all kinds; — 5. Persons who are unable to trade in certain territory, by virtue of special laws or provisions[2]).

15. Foreigners and companies formed abroad may practise commerce in Spain, subject to the laws of their country as regards their capacity to contract, and to the provisions of this Code, in all that concerns the creation of their establishments within Spanish territory[3]), their commercial transactions and the jurisdiction of the National Tribunals.

The provisions of this article shall be understood without prejudice to what may be enacted by treaties and conventions with other Powers in particular cases.

Title II. The Mercantile Register.

16. In all the provincial capitals there shall be opened a Mercantile Register in which shall be inscribed: 1. The individual merchants; — 2. The societies.

In the littoral provinces, and in the interior provinces where it is considered convenient through there being a service of navigation, the Register shall include a third book, kept for the inscription of vessels.

17. Inscription in the Mercantile Register shall be facultative for individual merchants, and obligatory for the societies which are formed in accordance with this Code or special laws, and for vessels[4]).

18. An unregistered merchant cannot apply for the inscription of any document on the Mercantile Register, nor take advantage of its legal effects.

---

[1]) Ecclesiastical persons and commercial agents, by virtue of special laws and provisions, are not able to trade. The former are prohibited by the Canonical laws (formerly also by the Commercial Code of 1829); the latter, by the present Code, art. 892, which declares that the bankruptcy of an agent, who has effected any trade or business transaction on his own account, either in his own name or another's, shall be held fraudulent.

[2]) Notaries cannot trade within the territory in which they exercise their jurisdiction, as follows from the spirit of the law on the constitution of the Notariate of 28 May 1862, and it is expressly stated in art. 28 of the Regulation of 9 November 1874.

[3]) This precept of the Code is the natural consequence of art. 2 of the Political Constitution of 1876, which authorizes foreigners to freely establish themselves in Spanish territory, to practise their industry therein or to devote themselves to any profession for the discharge of which the laws do not require a certificate of ability issued by the Spanish authorities.

[4]) By the Royal Order of 27 December 1885 it was provided that a book for the inscription of vessels should be opened in the following capitals: Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Almería, Malaga, Cádiz, Huelva, Coruña, Santander, Bilbao, San Sebastián, Palma de Mallorca and Santa Cruz de Tenerife; and also in the ports of Gijón, Rivadeo, Vigo, Motril, Cartagena and Palamós, the said book being in the charge of the Registrars of Ownership of the said ports, except in Palamós, where it is in the charge of the public prosecutor of the municipal Court.

19. El Registrador llevará los libros necesarios para la inscripción, sellados, foliados y con nota expresiva, en el primer folio, de los que cada libro contenga, firmada por el juez municipal.

Donde hubiere varios jueces municipales, podrá firmar la nota cualquiera de ellos.

20. El Registrador anotará por orden cronológico en la matrícula é índice general todos los comerciantes y compañías que se matriculen, dando á cada hoja el número correlativo que le corresponda.

21. En la hoja de inscripción de cada comerciante ó sociedad se anotarán: 1.° Su nombre, razón social[1]) ó título; — 2.° La clase de comercio ú operacionesá

[1]) La razón social es el nombre distintivo de las sociedades colectivas y comanditarias; y se llama así porque en él se incluyen los nombres de los socios colectivos ó el de uno de estos tan sólo. — Aun cuando el nombre, la razón social ó título han constituido siempre para el comerciante individual ó social una verdadera propiedad asegurada y garantida por las leyes, no había sido esta propiedad objeto de disposiciones especiales hasta la publicación de la nueva Ley sobre propiedad industrial de 16 de mayo de 1902, pues el precepto del artículo 152 del vigente Cód. de com. que prohibe adoptar una denominación idéntica á la de otra compañía preexistente es un precedente de escasísimo valor. — En la citada Ley se han suplido las deficiencias de nuestra legislación acerca del particular en la forma siguiente: — En el artículo 1.° se hace constar que forma parte de la propiedad industrial el nombre comercial, siempre que se hayan cumplido respecto al mismo las condiciones que al efecto impone la Ley. Para ello es preciso que se solicite el registro de dicho nombre, el que una vez concedido asegurará la protección legal (art. 6). La solicitud que ha de hacerse á este efecto, dirigida al ministro de Fomento, habrá de presentarse con los documentos correspondientes en la Secretaría del Gobierno civil de la provincia respectiva, excepto en Madrid en donde habrá de hacerse directamente en el Ministerio del ramo (art. 56). A dicha solicitud, en la que ha de hacerse constar el nombre, apellido y domicilio habitual del interesado y de su representante, si la gestión se hiciere por conducto de este último, se ha de acompañar la expresión completa y detallada por triplicado del nombre comercial, un cliché tipográfico que sea reproducción en tamaño reducido de dicho nombre comercial, ostentado para distinguir el establecimiento, y diez pruebas ó impresiones del referido cliché (art. 90). Y el artículo 59 del Reglamento de 12 de junio de 1903, dictado por Real Decreto de dicha fecha para la aplicación de esta Ley, añade; que cuando formen parte integrante del nombre comercial que se trata de registrar las palabras *Sociedad* ó *Compañía* ú otras similares que den á entender que se trata de una razón social, se acompañará testimonio en forma de la escritura de constitución social, ó certificación de la inscripción en el Registro mercantil, á tenor de lo prevenido en el Cód. de com. — Según la Ley que estamos examinando, se entiende por nombre comercial, el nombre, razón social ó denominación bajo los cuales se da á conocer al público un establecimiento agrícola, fabril ó mercantil (art. 33). Y se considera como nombre de un establecimiento: los establecimientos, con ó sin el nombre de pila entero ó abreviado, de los agricultores, industriales ó comerciantes que los posean; las razones ó firmas sociales; las denominaciones sociales de las compañías mercantiles en todas sus formas; las denominaciones de fantasía ó especiales; y las denominaciones de las fincas destinadas á una explotación agrícola, industrial ó comercial (art. 34). — La inscripción del nombre comercial en el registro de la propiedad industrial es potestativo, pero sólo esta constituirá una propiedad exclusiva á favor del inscrito que producirá efectos jurídicos desde la fecha de la inscripción (art. 36). La duración de estos efectos es indefinida. Ello no obstante deberán hacerse constar en el Registro todos los cambios y alteraciones que sobrevengan, tanto para que conserven su valor legal contra tercero, como por lo que puedan influir en la caducidad de su registro, ya sea por voluntad del propietario, ya por extinción de la razón social, ya por desaparición de la personalidad jurídica que la posea (art. 54). — Se denegará el registro de un nombre comercial: cuando el nombre, razón social ó denominación, no se distinga lo suficientemente de otro nombre comercial ya registrado; ó cuando sin consentimiento expreso del propietario de un nombre comercial ya registrado, acreditado por documento fehaciente, se empleen las palabras antiguo almacén, antigua fábrica, etc; antiguo gerente, antiguo jefe de taller, empleado de . . . ., ex-Director de . . . ., etc; sucesor ó sucesores de . . . ., sucursal de . . . ., ó representante de . . . ú otras similares (art. 38). — El poseedor de un certificado de registro de un nombre comercial, es el único que puede añadir á su nombre la mención de «registrado» (art. 39). Las modificaciones y cambios de nombre comercial serán objeto de nueva inscripción (art. 40), debiendo satisfacer por cada una de ellas la cantidad de 25 pesetas, abonables de una sola vez en papel de pagos al Estado (art. 55). — Los derechos consiguientes á esta propiedad del nombre comercial inscrito son: poder perseguir criminalmente ante los Tribunales á los que lo usen, falsifiquen ó imiten de modo que pueda confundirse con el legítimo; poder pedir civilmente ante los Tribunales ordinarios la indemnización de todos los daños que por el uso indebido, la falsificación ó imitación se le hayan producido al propietario; y poder oponerse válidamente á que se expida por el Registro un nuevo título igual al ya inscrito y no caducado ó que por su semejanza induzca á confusión (art. 41, 32 y 28). — Para que surta efecto contra tercero la cesión y transmisión de esta propiedad ha de hacerse indispensablemente por instrumento público (art. 93), que habrá de presentarse en la oficina del Registro acompañado de 15 pesetas en papel de pagos al Estado por derecho de registro (art. 94). — Por último, caducará el uso del nombre comercial: — 1.° Por desaparición ó extinción de la personalidad á quien perteneciere, sin ser sustituído legítimamente por quien pudiera

19. The Registrar shall keep the books necessary for the inscription, stamped paged and with a note on the first leaf, expressing the pages contained in each book signed by the municipal judge.

Where there are several municipal judges, any one of them may sign the note.

20. The Registrar shall enter by chronological order in the list and general index all the merchants and societies which are registered, giving its correlative number to each page.

21. The following shall be entered on the page for the inscription of each merchant: 1. His name, firm name[1]) or title; — 2. The kind of commerce or transaction

[1]) The *razón social* is the distinctive name of unlimited and limited partnerships; and it is thus called because it includes the names of the unlimited partners or of one of them alone. Even when the name, firm name or title has always constituted a true property in the individual or social merchant, assured and guaranteed by the laws, this property had not been the subject of special provisions until the publication of the new law of 16 May 1902, on industrial ownership; since the precept of art. 152 of the present Commercial Code, which prohibits the adoption of a name identical with that of another pre-existing association, is a precedent of very slight value. The cited law supplied the deficiencies of our legislation on this matter in the following way: In art. 1, it states that the commercial name forms part of the industrial property, provided that the conditions imposed by the Law for that purpose have been fulfilled. For that purpose it is necessary to apply for the registration of the name, and this, when once granted, will assure legal protection (art. 6). The application made for this purpose, addressed to the Minister de Fomento (Public Works, Trade, etc.), must be presented with the corresponding documents in the Office of the Civil Government of the respective provinces, except in Madrid, where it must be done directly to that Ministry (art. 56). This application, which must state the name, surname and habitual address of the person interested and of his representative, if it is made through the latter, must be accompanied by a full and detailed statement in triplicate of the commercial name, a printed reduced reproduction of the said commercial name, displayed to distinguish the establishment, and ten copies or impressions of the said print (art. 90.) And art. 59 of the Regulation of 12 June 1903, issued by Royal Decree of the same date for applying this law, adds: that when the words *Sociedad* or *Compañia* or other like words, which tend to show a firm name, form an integral part of the firm name, it must be accompanied by a certified copy of the social constitution in the form of a notarial instrument, or a certificate of the inscription in the Mercantile Register, as provided by the Commercial Code. According to the law which we are examining, the commercial name means the name, firm name or denomination under which an agricultural, industrial or mercantile establishment announces itself to the public (art. 33). And the following is considered the name of an establishment: establishments, with or without the whole or shortened baptismal names of the agriculturists, manufacturers or merchants who possess them; social styles or names; the social denominations of mercantile companies in all their forms; fancy or special denominations; and those of estates intended for agricultural, industrial or commercial exploitation (art. 34). Inscription of the commercial name in the register of industrial ownership is facultative, and this will only constitute an exclusive property in favour of the inscribed, so as to produce juridical effects, from the date of the inscription (art. 36). The duration of these effects is indefinite. Notwithstanding this, all the changes and alterations which occur must be entered in the register, both for preserving its legal value against a third person, and by the influence it may have on the lapse of its registration, whether by the wish of the owner, or by extinction of the firm name, or by the disappearance of the juridical personality which it possesses (art. 54). Registration of a commercial name will be refused: when the name, firm name, or denomination is not sufficiently distinguished from another commercial name already registered; or when, without the express consent of the owner of a commercial name already registered, proved by an authoritative (probatory) document, the following words are used: The old warehouse, The old Factory, etc; The old Manager, The old Head of the Workshop, Employed by . . . . , ex-Director of . . . . , etc; Successor or Successors of . . . . , Branch of . . . . . , or Representative of . . . . , or other similar words (art. 38). The possessor of a certificate of registration of a commercial name is the only person who may add "registered" to his name (art. 39). Alterations or changes in the commercial name shall be the subject of a fresh inscription (art. 40), and for each of them the sum of 25 pesetas must be paid in State receipt stamps by one payment (art. 55). The following are the rights arising from the ownership of an inscribed commercial name: to prosecute those who use, forge or imitate it in such a way as to be confused with the lawful name; to apply to the ordinary civil tribunals for compensation for all the damage caused to the owner from improper use, forgery or imitation; to succeed in objecting to the issue by the Registry of a new title like that already inscribed and still subsisting, or which produces confusion by its similarity (arts. 41, 32 and 28). In order that an assignment or transfer of this property may take effect against a third person, it is absolutely necessary that it should be done by notarial instrument (art. 93), which must be produced at the office of the Registry accompanied by 15 pesetas in State receipt stamps, as a registration fee (art. 94). Lastly, the use of the commercial name shall lapse: 1. By the disappearance or extinction of the personality to whom it belonged, without a lawful sucessor being legally constituted, or by the disuse of the name for industrial or commercial ends during three consecutive years, except in duly proved cases of *vis major*; — 2. By the final judgment of com-

que se dedique; — 3.° La fecha en que deba comenzar ó haya comenzado sus operaciones; — 4.° El domicilio, con especificación de las sucursales que hubiere establecido, sin perjuicio de inscribir las sucursales en el Registro de la provincia en que estén domiciliadas; — 5.° Las escrituras de constitución de sociedad mercantil, cualesquiera que sean su objeto ó denominación; así como las de modificación, rescisión ó disolución de las mismas sociedades; — 6.° Los poderes generales, y la revocación de los mismos, si la hubiere, dados á los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios; — 7.° La autorización del marido para que su mujer ejerza el comercio, y la habilitación legal ó judicial de la mujer para administrar sus bienes por ausencia ó incapacidad del marido; — 8.° La revocación de la licencia dada á la mujer para comerciar; — 9.° Las escrituras dotales[1]), las capitulaciones matrimoniales[2]) y los títulos que acrediten la propiedad de los parafernales de las mujeres de los comerciantes; — 10.° Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de ferrocarriles y de toda clase de sociedades, sean de obras públicas, compañías de crédito ú otras, expresando la serie y número de los títulos de cada emisión, su interés, rédito, amortización y prima, cuando tuviesen una ú otra, la cantidad total de la emisión, y los bienes, obras, derechos ó hipotecas, cuando los hubiere, que se afecten á su pago. También se inscribirán, con arreglo á los preceptos expresados en el párrafo anterior, las emisiones que hicieren los particulares; — 11.° Las emisiones de billetes de banco, expresando su fecha, clases, series, cantidades é importe de cada emisión; — 12.° Los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, en la forma y modo que establezcan las leyes[3]).

Las sociedades extranjeras que quieran establecerse ó crear sucursales en España, presentarán y anotarán en el Registro, además de sus estatutos y de los documentos que se fijan para las españolas, el certificado expedido por el cónsul español de estar constituídas y autorizadas con arreglo á las leyes del país respectivo.

22. En el Registro de buques se anotarán: 1.° El nombre del buque, clase de aparejo, sistema ó fuerza de las máquinas si fuese de vapor, expresando si son caballos nominales ó indicados; punto de construcción del casco y máquinas; año de la misma; material del casco, indicando si es de madera, hierro, acero ó mixto; dimensiones principales de eslora, manga y puntal; tonelaje total y neto; señal distintiva que tiene en el Código Internacional de Señales; por último, los nombres y domicilios de los dueños y partícipes de su propiedad; — 2.° Los cambios en la propiedad de los buques, en su denominación ó en cualquiera de las demás condiciones enumeradas en el párrafo anterior; — 3.° La imposición, modificación y cancelación de los gravámenes de cualquier género que pesen sobre los buques.

23. La inscripción se verificará, por regla general, en virtud de copias notariales de los documentos que presente el interesado.

---

sucederle, ó por el no uso de dicho nombre con fines industriales ó comerciales durante tres años consecutivos, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados; — 2.° Por sentencia firme de los Tribunales competentes (art. 112). Y se declarará nula la petición de registro de nombre comercial por la falta de abono de la cuota anteriormente señalada como derechos de inscripción (art. 113).

[1]) Las escrituras dotales son aquellas en las que la mujer entrega la dote al marido al tiempo de contraer matrimonio ó después de contraído.

[2]) Las capitulaciones matrimoniales son las escrituras que marido y mujer hacen al tiempo de contraer matrimonio para determinar el régimen económico del matrimonio ó para hacer constar las aportaciones respectivas de los cónyuges y las donaciones que mutuamente se hagan con ocasión del matrimonio.

[3]) El texto de este apartado 12 parece indicar la necesidad de una ley complementaria respecto á la forma y modo como han de hacerse las inscripciones de estos títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica en el Registro mercantil; pero esto no es más que uno de tantos defectos de redacción como tiene el Cód. de com. — Las disposiciones legales que regulan hoy este derecho de propiedad industrial son, como hemos dicho ya, en la nota 1, p. 93, la Ley de 16 de mayo de 1902 y el Reglamento para su aplicación de 12 de junio de 1903 en las que se regula muy minuciosamente todo lo relativo: á las patentes de invención é introducción; á las marcas ó signos distintivos de la producción y del comercio y los dibujos y modelos de fábrica; al nombre comercial y á las recompensas industriales. — Como complemento á lo indicado en la nota 1, p. 93 respecto al nombre comercial hemos de añadir aquí que como dicho nombre puede utilizarse á la vez como marca comercial dispone la ley (art. 37) que en este caso han de hacerse dos inscripciones por separado, ya que, como marca, representa el distintivo de los objetos elaborados ú ofrecidos al consumo, y, como nombre, se aplica sólo á las muestras ó rótulos, escaparates y demás accesorios propios para diferenciar el establecimiento.

to which he devotes himself; — 3. The date on which he is to begin or has begun hi transactions; — 4. The address and the established branches, without prejudice to the inscription of the branches in the Registry of the province in which they are domiciled; — 5. The notarial instruments constituting the mercantile society, whatever be its object or denomination; as well as those altering, rescinding or dissolving the society; — 6. The general powers, and their revocation, if any, given to managers, subordinates and other agents; — 7. The authorisation granted by a husband to his wife to practise commerce, and the legal or judicial qualification of the wife to administer her property on the ground of the absence or incapacity of the husband; — 8. The revocation of the licence granted to a wife to trade; — 9. Dower[1]) and other marriage settlements[2]) and the titles which prove the ownership of the paraphernalia of merchants' wives; — 10. The issues of shares, cedulas and bonds of railroads and all kinds of companies, whether companies for public works, credit or others, expressing the series and number of the securities of each issue, their interest, income, amortisation and premium, when they have one or the other, the total amount of the issue, and the property, works, rights or mortgages, if any, affected to their payment. Issues made by individuals shall also be inscribed in accordance with the precepts expressed in the preceding paragraph; — 11. Issues of bank notes, expressing their dates, classes, series, amounts and value of each issue; — 12. The titles of industrial ownership, patents for invention and trade marks, as enacted by the laws[3]).

Foreign societies which wish to establish themselves or create branches in Spain shall produce and enter in the Register a certificate issued by the Spanish Consul that they are constituted and authorised in accordance with the laws of the respective countries, in addition to their constitution and the documents required for Spanish societies.

22. There shall be entered in the Register of vessels: 1. The name of the vessel, kind of rig, system or power of the engines, if it is a steamer, stating if the horse power is nominal or indicated; place of building the hull and engines; the year thereof; material of the hull, stating whether it is of wood, iron, steel or partly one and partly the other; principal dimensions of the overall length, beam and draught; gross and net tonnage; its distinctive signal in the International Code of Signals; lastly, the names and addresses of the owners and part-owners thereof; — 2. Changes in the ownership of the vessels, in their denomination, or in any other of the conditions enumerated in the preceding paragraph; — 3. The imposition, alteration and cancellation of incumbrances of any kind on the vessels.

23. As a general rule, inscription shall be effected by virtue of notarial copies of the documents produced by the interested person.

---

petent Tribunals (art. 112). And an application for the registration of a commercial name shall be declared void by non-payment of the amount previously fixed as the fees for registration (art. 113).

[1]) *Escrituras dotales* are those by which a wife delivers her dowry to her husband at the time of or subsequent to the celebration of the marriage.

[2]) *Capitulaciones matrimoniales* are the documents made by the husband and wife at the time of the celebration of the marriage, in order to determine the economic *regime* of the marriage or to state the respective contributions of the spouses and the gifts mutually made on the occasion of the marriage.

[3]) The text of this paragraph 12 appears to show the necessity for a supplementary law respecting the form and mode in which inscription of these titles of industrial ownership, patents for invention and trade marks have to be made in the Mercantile Register; but this is only one of many defects made in drafting the Commercial Code. The legal provisions which now regulate this right of industrial ownership are, as we have already said in note 1, p. 93 the Law of 16 May 1902 and the Regulation of 12 June 1903, applying it, which regulate very minutely everything relating to patents for invention and introduction, trade marks and the signs distinctive of the production and trade and the designs and models of manufactures; the industrial name and industrial rewards. Supplementing what we have said in note 1, p. 93 about the commercial name, we must add that as the said name may be utilised at the same time as a trade mark, the law provides (art. 37) that in this case two separate inscriptions must be made, for, as a trade mark, it distinguishes the objects manufactured or offered for consumption, and as a name, it applies only to samples or posters, shop windows and other accessories for the establishment.

La inscripción de los billetes, obligaciones ó documentos nominativos y al portador, que no lleven consigo hipotecas de bienes inmuebles, se hará en vista del certificado del acta en que conste el acuerdo de quien ó quienes hicieren la emisión y las condiciones, requisitos y garantías de la misma.

Cuando estas garantías consistan en hipoteca de inmuebles, se presentará, para la anotación en el Registro Mercantil, la escritura correspondiente, después de su inscripción en el de la propiedad.

24. Las escrituras de sociedad no registradas surtirán efecto entre los socios que las otorguen; pero no perjudicarán á tercera persona, quien, sin embargo, podrá utilizarlas en lo favorable.

25. Se inscribirán también en el Registro todos los acuerdos ó actos que produzcan aumento ó disminución del capital de las compañías mercantiles, cualquiera que sea su denominación, y los que modifiquen ó alteren las condiciones de los documentos inscritos.

La omisión de este requisito producirá los efectos expresados en el artículo anterior.

26. Los documentos inscritos sólo producirán efecto legal en perjuicio de tercero desde la fecha de su inscripción, sin que puedan invalidarlos otros, anteriores ó posteriores, no registrados.

27. Las escrituras dotales y las referentes á bienes parafernales de la mujer del comerciante, no inscritas en el Registro Mercantil, no tendrán derecho de prelación sobre los demás créditos.

Exceptúanse los bienes inmuebles y derechos reales inscritos á favor de la mujer en el Registro de la propiedad con anterioridad al nacimiento de los créditos concurrentes.

28. Si el comerciante omitiere hacer en el Registro la inscripción de los bienes dotales ó parafernales de su mujer, podrá ésta pedirla por sí ó podrán hacerlo por ella sus padres, hermanos ó tíos carnales[1]), así como los que ejerzan ó hayan ejercido los cargos de tutores ó curadores de la interesada, ó constituyan ó hayan constituído la dote.

29. Los poderes no registrados producirán acción entre el mandante y el mandatario; pero no podrán utilizarse en perjuicio de tercero, quien, sin embargo, podrá fundarse en ellos en cuanto le fueren favorables.

30. El Registro Mercantil será público. El Registrador facilitará á los que las pidan, las noticias referentes á lo que aparezca en la hoja de inscripción de cada comerciante, sociedad ó buque. Asimismo expedirá testimonio literal del todo ó parte de la mencionada hoja, á quien lo pida en solicitud firmada.

31. El Registrador mercantil tendrá bajo su custodia, donde hubiere Bolsa, ejemplares de la cotización diaria de los efectos que se negocien y de los cambios que se contraten en ella.

Estos ejemplares servirán de matriz para todos los casos de averiguación y comprobación de cambios y cotizaciones en fechas determinadas.

32. El cargo de Registrador mercantil se proveerá por el Gobierno, previa oposición.

Título III. De los libros y de la contabilidad del comercio.

33. Los comerciantes llevarán necesariamente: 1.° Un libro de inventarios y balances; — 2.° Un libro diario; — 3.° Un libro mayor; — 4.° Un copiador ó copiadores de cartas y telegramas; — 5.° Los demás libros que ordenen las leyes especiales.

Las sociedades y compañías llevarán también un libro ó libros de actas, en las que constarán todos los acuerdos que se refieran á la marcha y operaciones sociales, tomados por las juntas generales y los consejos de administración.

34. Podrán llevar además los libros que estimen convenientes, según el sistema de contabilidad que adopten.

Estos libros no estarán sujetos á lo dispuesto en el art. 36; pero podrán legalizar[2]) los que consideren oportunos.

[1]) Tios carnales son los hermanos del padre ó madre.

[2]) Legalizar los libros es presentarlos en forma como dice el art. 36 del Cód. de com., al juez municipal para que se sellen y se estampe en ellos la nota del número de folios que tienen.

The inscription of banknotes, bonds or documents, both nominal and to bearer, which do not involve the mortgage of immoveables, shall be effected on inspection of the certificate of the minute stating the resolution of the maker or makers of the issue, and the conditions, requisites, and guarantees thereof.

When these guarantees consist of a mortgage of immoveables, the corresponding instrument shall be presented for entry in the Mercantile Register after its inscription in the Register of Ownership.

24. Unregistered instruments of partnership shall take effect between the partners who execute them; but shall not prejudice a third person, who may, nevertheless, avail himself of them so far as they are favourable.

25. There shall also be inscribed in the Register all resolutions and acts which increase or diminish the capital of mercantile societies of every denomination, and those which modify or alter the conditions of the inscribed documents.

The omission of this requisite shall produce the effects stated in the preceding article.

26. Inscribed documents only take legal effect to the prejudice of a third person from the date of their inscription, without other preceding or subsequent unregistered documents having power to invalidate them.

27. Instruments dealing with dowry and those referring to the paraphernalia of a merchant's wife, which are not inscribed in the Mercantile Register, shall not take priority over other debts.

Immoveable property and real rights inscribed in favour of the wife on the Register of Ownership, previous to the origin of the rival debts, are excepted.

28. If a merchant omits to register the dowry and paraphernalia of his wife, she may herself apply therefor or her parents, brothers or the brothers or sisters of her father or mother[1]) may do so for her, as well as those who exercise or who have exercised the functions of guardians or curators of the woman interested, or the persons who are giving or who have given the dowry.

29. Unregistered powers shall produce a right of action between the principal and agent; but they cannot be used in prejudice of a third person who, nevertheless, may rely upon them so far as they are favourable.

30. The Mercantile Register shall be public. The Registrar shall supply those who apply therefor with information referring to what appears on the page of inscription of each merchant, society or vessel. Likewise, he shall issue a certified copy of all or part of the said page to any person making a signed application therefor.

31. In places where an Exchange exists, the mercantile Registrar shall have under his care copies of the daily quotations of the goods which are dealt in and the exchanges contracted therein.

These copies shall be the originals for all cases of judicial inquiry and proof of exchanges and quotations on certain dates.

32. The appointment of mercantile Registrar shall be in the hands of the Government, after a competitive examination.

Title III. Commercial Books and Account-keeping.

33. Merchants shall be bound to keep: 1. A book of inventories and balance sheets; — 2. A day book; — 3. A ledger; — 4. A copy book or books for letters and telegrams; — 5. Others books ordered by special laws.

Partnerships and companies shall also keep a book or books of minutes, in which shall be set out all resolutions referring to the course of business and social transactions, passed by the general meetings and the boards of directors.

34. They may also keep other books which they think suitable, according to the system of accounting adopted by them.

These books shall not be subject to the provisions of art. 36; but those which they consider fit may be legalised[2]).

---

[1]) *Tios carnales* are the brothers and sisters of the father or mother.

[2]) To legalise books is to produce them to the municipal judge, as stated in art. 36 of the Commercial Code, so that they may be stamped and marked with the number of folios which they contain.

35. Los comerciantes podrán llevar los libros por sí mismos ó por personas á quienes autoricen para ello.

Si el comerciante no llevare los libros por sí mismo, se presumirá concedida la autorización al que los lleve, salvo prueba en contrario.

36. Presentarán los comerciantes los libros á que se refiere el art. 33, encuadernados, forrados y foliados, al juez municipal del distrito en donde tuvieren su establecimiento mercantil, para que ponga en el primer folio de cada uno nota firmada de los que tuviere el libro.

Se estampará además en todas las hojas de cada libro el sello del juzgado municipal que lo autorice[1]).

37. El libro de inventarios y balances[2]) empezará por el inventario que deberá formar el comerciante al tiempo de dar principio á sus operaciones, y contendrá: 1.° La relación exacta del dinero, valores, créditos, efectos al cobro, bienes muebles é inmuebles, mercaderías y efectos de todas clases, apreciados en su valor real y que constituyan su activo. — 2.° La relación exacta de las deudas y toda clase de obligaciones pendientes, si las tuviere, y que formen su pasivo. — 3.° Fijará, en su caso, la diferencia exacta entre el activo y el pasivo, que será el capital con que principia sus operaciones.

El comerciante formará además anualmente, y extenderá en el mismo libro, el balance general de sus negocios, con los pormenores expresados en este artículo y de acuerdo con los asientos del diario, sin reserva ni omisión alguna, bajo su firma y responsabilidad.

38. En el libro diario[3]) se asentará por primera partida el resultado del inventario de que trata el artículo anterior, dividido en una ó varias cuentas consecutivas, según el sistema de contabilidad que se adopte.

Seguirán después día por día todas sus operaciones, expresando cada asiento el cargo y descargo de las respectivas cuentas.

Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera que sea su importancia, ó cuando hayan tenido lugar fuera del domicilio, podrán anotarse en un solo asiento las que se refieran á cada cuenta y se hayan verificado en cada día, pero guardando en la expresión de ellas, cuando se detallen, el orden mismo en que se hayan verificado.

Se anotarán asimismo, en la fecha en que las retire de caja, las cantidades que el comerciante destine á sus gastos domésticos, y se llevarán á una cuenta especial que al intento se abrirá en el libro mayor.

39. Las cuentas con cada objeto ó persona en particular, se abrirán además por Debe y Haber en el libro mayor[4]), y á cada una de estas cuentas se trasladarán, por orden riguroso de fechas, los asientos del diario referentes á ellas.

40. En el libro de actas[5]) que llevará cada sociedad, se consignarán á la letra los acuerdos que se tomen en sus juntas ó en las de sus administradores, expresando la fecha de cada una, los asistentes á ellas, los votos emitidos y demás que conduzca

---

1) Por Real Orden de 29 de diciembre de 1885 se dispuso que los jueces municipales no cobrasen derecho alguno por la legalización de los libros de los comerciantes. — Por el art. 154 de la vigente Ley del Timbre de 1.° de enero de 1906 se dispone que los libros de los comerciantes no podrán ser autorizados por los jueces municipales sin el reintegro previo del timbre que tienen obligación de pagar. — Y por Real Orden de 12 de diciembre de 1906 se dispuso que las sucursales de sociedades mercantiles no están obligadas á reintegrar los libros que lleven, cuando por la clase y naturaleza de las operaciones que practiquen no sea necesaria la legalización de los mismos por los Juzgados municipales; pero tendrán que reintegrarlos cuando los legalizen por voluntad ó necesidad. Esto mismo dispone el art. 154 de la L. del T.

2) El reintegro de este libro con arreglo al citado art. 154 de la L. del T. es de 7 pesetas por el primer folio y 25 céntimos de peseta por cada uno de los demás, tratándose de Bancos, sociedades, mercantiles é industriales, empresas de vapores, compañías de seguros marítimos y terrestres y sobre la vida. — Tratándose de comerciantes particulares, nacionales ó extranjeros, que acomoden su contabilidad á las prescripciones del Código de comercio, el reintegro será de 9 pesetas por el primer folio y 15 céntimos por cada uno de los demás. — El reintegro se verificará en papel de pagos al Estado en el que el Juez municipal estampará la nota correspondiente.

3) Este libro está sujeto al mismo reintegro que el de Inventarios. (Véase la nota anterior.)

4) También este libro ha de reintegrarse del mismo modo que el de Inventarios. (Véase la nota 1, *supra*.)

5) En los libros de actas de las sociedades mercantiles se pondrá timbre de una peseta, clase 11ª (art. 183 de la L. del T.).

35. Merchants may keep the books themselves or by persons authorised by them for that purpose.

If a merchant does not himself keep the books, it shall be presumed that he has authorised the person who keeps them, saving proof to the contrary.

36. Merchants shall produce the books referred to in art. 33, bound with leather backs and paged, to the municipal judge of the district of the mercantile establishment, in order that he may place on the first leaf of each a signed note of the leaves which the books contains.

The seal of the municipal court which authenticates it shall likewise be stamped on all the pages of each book[1]).

37. The book of inventories and balance sheets[2]) shall commence with the inventory which the merchant must draw up at the time of beginning his operations and shall contain: 1. An exact account of the money, securities, credits, effects due to him, moveable and immoveable property, merchandise and goods of all kinds, appraised at their true value and constituting his assets; — 2. An exact account of the debts and all kinds of outstanding obligations, if any, constituting his liabilities; — 3. He shall state, when possible, the exact difference between the assets and liabilities, which will form the capital with which he begins his operations.

A merchant shall likewise draw up every year and write out in the same book, under his signature and responsibility the general balance sheet of his business, with the other details stated in this article, in accordance with the entries in the day-book, without any concealment or omission.

38. The first entry in the day-book[3]) shall be the balance shown by the inventory mentioned in the preceding article, divided into one or several consecutive accounts according to the system of accounting adopted.

All his subsequent operations shall follow day by day, each entry expressing whether the items are to credit or debit of the respective accounts.

When the transactions are numerous, whatever be their importance, or when they have taken place away from the office, those which refer to each account and have been effected on each day, may be noted in a single entry, but when they are detailed they shall be expressed in the same order as they are effected.

The sums which the merchant intends for his household expenses shall likewise be entered on the date when he removes them from the chest, and they shall be carried to a separate account, which shall be opened for that purpose in the ledger.

39. Accounts for each subject-matter or individual shall likewise be opened on the debit and credit sides of the Ledger[4]), and the entries in the day-book referring thereto shall be transferred to each of these accounts in rigorous order of date.

40. In the minute book[5]) which each society shall keep, the resolutions passed in their meetings or in those of their administrators, shall be literally set out, stating the date of each meeting, those present thereat, the votes given and other particulars

---

[1]) By Royal Order of 29 December 1885, it was provided that the municipal judges should not take any fee for legalising merchant's books. By art 154 of the current Stamp Act, 1 January 1906, it is provided that merchant's books cannot be authorised by the municipal judges without previous payment of the obligatory stamp. And by Royal Order of 12 Decenber 1906, it was provided that the branches of mercantile societies are not bound to pay on the books which they keep, when from the kind and nature of the transactions which they practise, legalisation thereof by the municipal judges is not necessary; but they will have to pay when the books are legalised either voluntarily or by necessity. Art. 154 of the Stamp Act provides the same.

[2]) By the said art. 154 of the Stamp Act, the payment for this book is 7 pesetas for the first folio and 25 céntimos for each of the others, in the case of banks, mercantile and industrial societies, steamboat companies, and companies for sea, land and life insurance. In the case of individual merchants whether Spanish or foreign, who keep their accounts according to the provisions of the Commercial Code, the payment will be 5 pesetas for the first leaf and 15 céntimos for each of the others. Payment must be made by State receipt paper on which tho judge shall mark the corresponding note.

[3]) This book is subject to tho same payments as that of the Inventories (see the previous note)

[4]) This book has likewise to be paid for in tho same way as that of the inventories (see note 1, *supra*).

[5]) A stamp of one peseta, class 11 must be placed in the minute books of mercantile societies (art. 183 of the Stamp Act.)

al exacto conocimiento de lo acordado; autorizándose con la firma de los gerentes, directores ó administradores que estén encargados de la gestión de la sociedad, ó que determinen los estatutos ó bases por que ésta se rija.

41. Al libro copiador[1]) se trasladarán, bien sea á mano, ó valiéndose de un medio mecánico cualquiera, íntegra y sucesivamente, por orden de fechas, inclusas la antefirma y firma, todas las cartas que el comerciante escriba sobre su tráfico, y los despachos telegráficos que expida.

42. Conservarán los comerciantes cuidadosamente, en legajos y ordenadas, las cartas y despachos telegráficos que recibieren, relativos á sus negociaciones.

43. Los comerciantes, además de cumplir y llenar las condiciones y formalidades prescritas en este título, deberán llevar sus libros con claridad, por orden de fechas, sin blancos, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras, y sin presentar señales de haber sido alterados sustituyendo ó arrancando los folios, ó de cualquier otra manera.

44. Los comerciantes salvarán á continuación, inmediatamente que los adviertan, los errores ú omisiones en que incurrieren al escribir en los libros, explicando con claridad en qué consistían, y extendiendo el concepto tal como debiera haberse estampado.

Si hubiere transcurrido algún tiempo desde que el yerro se cometió ó desde que se incurrió en la omisión, harán el oportuno asiento de rectificación, añadiendo al margen del asiento equivocado una nota que indique la corrección.

45. No se podrá hacer pesquisa de oficio por juez ó tribunal ni autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes llevan sus libros con arreglo á las disposiciones de este Código, ni hacer investigación ó examen general de la contabilidad en las oficinas ó escritorios de los comerciantes.

46. Tampoco podrá decretarse á instancia de parte la comunicación, entrega ó reconocimiento general de los libros, correspondencia y demás documentos de los comerciantes, excepto en los casos de liquidación, sucesión universal ó quiebra.

47. Fuera de los casos prefijados en el artículo anterior, sólo podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de los comerciantes, á instancia de parte, ó de oficio, cuando la persona á quien pertenezcan tenga interés ó responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición.

El reconocimiento se hará en el escritorio del comerciante, á su presencia ó á la de persona que comisione, y se contraerá exclusivamente á los puntos que tengan relación con la cuestión que se ventile, siendo éstos los únicos que podrán comprobarse.

48. Para graduar la fuerza probatoria de los libros de los comerciantes, se observarán las reglas siguientes: — 1.° Los libros de los comerciantes probarán contra ellos, sin admitirles prueba en contrario; pero el adversario no podrá aceptar los asientos que le sean favorables y desechar los que le perjudiquen, sino que, habiendo aceptado este medio de prueba, quedará sujeto al resultado que arrojen en su conjunto, tomando en igual consideración todos los asientos relativos á la cuestión litigiosa; — 2.° Si en los asientos de los libros llevados por dos comerciantes no hubiere conformidad, y los del uno se hubieren llevado con todas las formalidades expresadas en este título, y los del otro adolecieren de cualquier defecto ó carecieren de los requisitos exigidos por este Código, los asientos de los libros en regla harán fe contra los de los defectuosos, á no demostrarse lo contrario por medio de otras pruebas admisibles en derecho; — 3.° Si uno de los comerciantes no presentare sus libros, ó manifestare no tenerlos, harán fe contra él los de su adversario, llevados con todas las formalidades legales, á no demostrar que la carencia de dichos libros procede de fuerza mayor, y salvo siempre la prueba contra los asientos exhibidos por otros medios admisibles en juicio; — 4.° Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los requisitos legales y fueren contradictorios, el juez ó tribunal juzgará por las demás probanzas, calificándolas según las reglas generales del derecho.

[1]) El citado art. 154 de la L. del T. dispone que el libro copiador de cartas y telegramas se reintegre á razón de cinco céntimos de peseta por folio si pertenece á algún Banco, sociedad mercantil ó industrial, empresa de vapores, compañía de seguros marítimos y terrestres y sobre la vida; y de 2 y ½ céntimos de peseta si se trata de comerciantes particulares nacionales ó extranjeros.

which may conduce to the exact knowledge of what has been agreed; and they shall be authenticated by the signatures of the managers, directors or administrators who are entrusted with the management of the society, or who determine the constitution or bases by which it is governed.

41. All letters which a merchant writes about his trade, and the telegraphic depatches which he sends, must be transferred to the copy-book[1]), either by hand or by some mechanical process, entirely and successively in order of date, including the concluding part and the signature.

42. Merchants shall carefully preserve in orderly bundles, the letters and telegraphic despatches which they receive relating to their business.

43. Besides performing and fulfilling the conditions and formalities prescribed by this Title, merchants must keep their books clearly, in order of date, without blanks, intercalations, deletions or erasures, and without showing signs of having been altered by substituting or tearing out leaves, or in any other manner.

44. Immediately they notice them, merchants shall forthwith correct errors or omissions which occur in writing in the books, clearly explaining in what they consist, and writing out how they ought to have been entered.

If some time has elapsed since the error was committed, or the omission occurred, they shall make the proper rectifying entry, adding a note to indicate the correction in the margin of the mistaken entry.

45. No ex officio investigation may be made by a judge or tribunal or any authority, to inquire if the merchants keep their books in accordance with the provisions of this Code, nor may any general investigation or examination be made of the account-keeping in the offices or counting-houses of the merchants.

46. Communication, delivery or general inspection of the books, correspondence and other merchants' documents may not be ordered at the instance of a party to an action, except in cases of liquidation, universal succession or bankruptcy.

47. Apart from the cases stated in the preceding article, production of merchants' books and documents can only be ordered at the instance of a party or of the judge, when the person to whom they belong has an interest or liability in the matter in which production is made.

The inspection shall be made in the counting-house of the merchant, in his presence or that of a person commissioned by him, and shall be directed exclusively to the points which are related to the matter in question, these being the only ones which may be proved.

48. In order to protect the probatory force of merchants' books, the following rules shall be observed: 1. Merchants' books shall be evidence against them, without admitting any evidence to the contrary; but the opponent cannot accept the entries which are favourable to him and reject those which prejudice him, and having accepted this means of proof, he shall be subject to the result shown by the whole of it, taking all the entries relating to the question in litigation into equal consideration; — 2. If the entries in the books kept by two merchants do not agree, and those of one of them have been kept with all the formalities expressed in this Title, and those of the other suffer from any defect or are wanting in the requisites demanded by this Code, the entries in the books in order shall be conclusive evidence against those in the defective books, unless the contrary is shown by means of other evidence admissible in law; — 3. If one of the merchants does not produce his books, or show that he has not got them, those of his opponent, kept with all the legal formalities, shall be sufficient evidence against him, unless he shows that the absence of the said books comes from *vis major*, and saving always evidence by other means admissible in law against the entries produced; — 4. If the merchants' books have all the legal requisites and are contradictory, the judge or tribunal shall decide by other evidence, and shall weigh it according to the general rules of law.

---

[1]) The said art. 154 of the Stamp Act provides that the book for copying letters and telegrams must be paid at the rate of 5 céntimos per folio if it belongs to any bank, mercantile or industrial society, steamboat company, company for sea, land or life insurance; and 2½ céntimos in the case of individual merchants, whether Spanish or foreign.

49. Los comerciantes y sus herederos ó sucesores conservarán los libros, telegramas y correspondencia de su giro en general, por todo el tiempo que éste dure y hasta cinco años después de la liquidación de todos sus negocios y dependencias mercantiles.

Los documentos que conciernan especialmente á actos ó negociaciones determinadas, podrán ser inutilizados ó destruídos, pasado el tiempo de prescripción de las acciones que de ellos se deriven, á menos de que haya pendiente alguna cuestión que se refiera á ellos directa ó indirectamente, en cuyo caso deberán conservarse hasta la terminación de la misma.

Título IV. Disposiciones generales sobre los contratos de comercio.

50. Los contratos mercantiles, en todo lo relativo á sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y á la capacidad de los contratantes, se regirán, en todo lo que no se halle expresamente establecido en este Código ó en leyes especiales, por las reglas generales del derecho común[1]).

51. Serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase á que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el derecho civil tenga establecidos[2]). Sin embargo, la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas, á no concurrir con alguna otra prueba.

La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegramas reunan las condiciones ó signos convencionales que previamente hayan establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado.

52. Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede: 1.° Los contratos que, con arreglo á este Código ó á las leyes especiales, deban reducirse á escritura ó requieran formas ó solemnidades necesarias para su eficacia; — 2.° Los contratos celebrados en país extranjero en que la Ley exija escrituras, formas ó solemnidades determinadas, para su validez, aunque no las exija la Ley española.

En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas, no producirán obligación ni acción en juicio.

53. Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción aunque recaigan sobre operaciones de comercio.

54. Los contratos que se celebren por correspondencia, quedarán perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta ó las condiciones con que ésta fuere modificada.

55. Los contratos en que intervenga agente ó corredor, quedarán perfeccionados cuando los contratantes hubieren aceptado su propuesta.

56. En el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato por los medios de derecho, ó la pena prescrita; pero utilizando una de estas dos acciones, quedará extinguida la otra, á no mediar pacto en contrario.

57. Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas ó escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.

---

[1]) Esas reglas generales del derecho común á que se refiere este art. son las contenidas en los Títulos I y II del Libro IV del Cód. c., artículos 1088 á 1314, ambos inclusive, que pueden verse entre las leyes complementarias del Cód. de com.

[2]) Los medios de prueba que tiene establecidos el derecho civil son: los documentos públicos (art. 1216 al 1224 del Cód. c.); los documentos privados (art. 1225 al 1230 del Cód. c.); la confesión (art. 1231 al 1239 del Cód. c.); la inspección personal del juez (art. 1240 y 1241 del Cód. c.); la prueba de peritos (art. 1242 y 1243 del Cód. c.); la prueba de testigos art. 1244 al 1248 del Cód. c.); y las presunciones (art. 1249 al 1253 del Cód. c.). — A más de esto, deberá tenerse en cuenta lo que acerca de los medios de prueba dispone la Ley de Enjuiciamiento civil que puede verse en el estudio «Del procedimiento judicial en las cuestiones civiles-mercantiles».

49. Merchants and their heirs or successors shall preserve the books, telegrams and correspondence of their general business, for all the time that this lasts, and until five years after the liquidation of all their mercantile business and branches.

Documents which specially concern certain acts or transactions, may be rendered useless or destroyed after the time for prescription of the actions derived therefrom, unless there is some pending question which refers to them directly or indirectly, in which case they must be preserved until the termination thereof.

Title IV. General provisions as to commercial contracts.

50. Mercantile contracts, in all that relates to their requisites, alterations, defences, interpretation and extinction and legal capacity of the contractors, shall be governed by the general rules of the Common Law[1]), in everything that is not expressly enacted by this Code or by special laws.

51. Mercantile contracts, whatever be the form and language in which they are made, the class to which they belong and the amount of their subject-matter, shall be valid and give rise to legal obligations and rights of action, provided that their existence appears by one of the means enacted by the Civil Law[2]). Nevertheless, declarations by witnesses shall not by themselves alone be sufficient to prove the existence of a contract the amount whereof exceeds 1,500 pesetas, if unsupported by any other evidence.

Telegraphic correspondence shall only give rise to an obligation between contractors who have previously admitted this means by a written contract, and provided that the telegrams combine the conditions or agreed marks which the contractors have previously arranged, if in fact they have thus agreed.

52. The following shall be excepted from the provisions of the preceding article: 1. Contracts which, in accordance with this Code or special laws, must be reduced to writing or which require forms or solemnities necessary for their validity; — 2. Contracts made in a foreign country in which the law requires certain instruments, forms or solemnities for their validity, even though the Spanish law does not so require.

In both cases, contracts which do not fulfil the particulars respectively required, shall not give rise to any legal obligation or right of action.

53. Unlawful agreements do not give rise to any obligation or right of action, although they concern commercial transactions.

54. Contracts made by correspondence shall be perfected from the time of the answer accepting the proposal or the conditions by which this is modified.

55. Contracts in which an agent or broker takes part, shall be perfected when the contractors have accepted his proposal.

56. In a mercantile contract fixing a penal compensation against the party who does not perform it, the prejudiced party may demand performance of the contract or the prescribed penalty by legal means; but by making use of one of these two actions, the other is extinguished, in the absence of an agreement to the contrary.

57. Commercial contracts shall be carried out and performed in good faith, according to the terms in which they are made and drafted, without upsetting the true meaning proper and usual to the spoken or written words by arbitrary interpretations, or restricting the effects which are naturally derived from the way in which the contractors have explained their intention and contracted their obligations.

---

[1]) These general rules of the Common Law to which this article refers, are those contained in Titles I and II of Book IV of the Civil Code, arts. 1,088 to 1314 inclusive, which will be found among the supplementary laws of the Commercial Code.

[2]) The means of proof which the Civil Law has enacted, are: public documents (art. 1216 to 1224 of the Civil Code); private documents (art. 1225 to 1230 of the Civil Code); admissions (art. 1231 to 1239 of the Civil Code); personal inspection by the judge (art. 1240 and 1241 of the Civil Code); the evidence of experts (art. 1242 and 1243 of the Civil Code); the evidence of witnesses (art. 1244 to 1248 of the Civil Code); and presumptions (art. 1249 to 1253 of the Civil Code). — Besides this, attention must be paid to the provisions of the Law of Civil Procedure on the means of proof, which may be seen in the study "Judicial procedure in civil mercantile matters" *ante*.

58. Si apareciere divergencia entre los ejemplares de un contrato que presenten los contratantes, y en su celebración hubiere intervenido agente ó corredor, se estará á lo que resulte de los libros de éstos, siempre que se encuentren arreglados á derecho.

59. Si se originaren dudas que no puedan resolverse con arreglo á lo establecido en el artículo 2.° de este Código, se decidirá la cuestión á favor del deudor.

60. En todos los cómputos de días, meses y años, se entenderán: el día, de veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calendario gregoriano, y el año, de trescientos sesenta y cinco días.

Exceptúanse las letras de cambio, los pagarés y los préstamos, respecto á los cuales se estará á lo que especialmente para ellos establece este Código.

61. No se reconocerán términos de gracia, cortesía ú otros, que, bajo cualquiera denominación, difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino los que las partes hubieren prefijado en el contrato, ó se apoyaren en una disposición terminante de derecho.

62. Las obligaciones que no tuvieren término prefijado por las partes, ó por las disposiciones de este Código, serán exigibles á los diez días después de contraídas, si sólo produjeren acción ordinaria, y al día inmediato, si llevaren aparejada ejecución[1]).

63. Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, comenzarán: 1.° En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las partes ó por la Ley, al día siguiente de su vencimiento. — 2.° En los que no lo tengan, desde el día en que el acreedor interpelare judicialmente al deudor, ó le intimare la protesta de daños y perjuicios hecha contra él ante un juez, notario ú otro oficial público autorizado para admitirla.

Título V. De los lugares y casas de contratación mercantil.

Sección primera. De las bolsas de comercio.

64. Los establecimientos públicos legalmente autorizados en que de ordinario se reunen los comerciantes y los agentes intermedios colegiados, para concertar ó cumplir las operaciones mercantiles expresadas en esta sección, se denominarán Bolsas de Comercio.

65. Podrá el Gobierno establecer ó autorizar la creación de Bolsas de Comercio, donde lo juzgue conveniente.

También las sociedades constituídas con arreglo á este Código, podrán establecerlas, siempre que la facultad de hacerlo sea uno de sus fines sociales.

Esto no obstante, para que tenga carácter oficial la cotización de las operaciones realizadas y publicadas en esta clase de Bolsas, será indispensable que haya autorizado el Gobierno dichas operaciones antes de comenzar á ser objeto de la contratación pública que la cotización acredite.

El Gobierno podrá conceder dicha autorización, previos los informes que estime necesarios sobre su conveniencia pública.

66. Tanto las Bolsas existentes como las de nueva creación, se regirán por las prescripciones de este Código.

67. Serán materia de contrato en Bolsa: 1.° Los valores y efectos públicos; — 2.° Los valores industriales y mercantiles emitidos por particulares ó por sociedades ó empresas legalmente constituídas; — 3.° Las letras de cambio, libranzas, pagarés y cualesquiera otros valores mercantiles; — 4.° La venta de metales preciosos, amonedados ó en pasta; — 5.° Las mercaderías de todas clases y resguardos de depósitos; — 6.° Los seguros de efectos comerciales contra riesgos terrestres ó marítimos; — 7.° Los fletes y transportes, conocimientos y cartas de porte; — 8.° Cualesquiera otras operaciones análogas á las expresadas en los números anteriores, con tal de que sean lícitas conforme á las leyes.

Los valores y efectos á que se refieren los números 1.° y 2.° de este artículo, sólo se incluirán en las cotizaciones oficiales cuando su negociación se halle autorizada, conforme al art. 65, en las Bolsas de creación privada, ó estén declarados negociables para las Bolsas de creación oficial.

---

[1]) Los títulos que llevan aparejada ejecución son los que permiten incoar ante los tribunales el llamado procedimiento ejecutivo. La enumeración de estos títulos, así como el procedimiento indicado pueden verse en el estudio «Del procedimiento judicial en las cuestiones civiles-mercantiles».

58. If a difference appears between the copies of a contract produced by the contractors, and an agent or broker has taken part in making it, it shall be decided by the result of his books, if they are found to be kept according to the law.

59. If doubts arise which cannot be solved according to the enactment in art. 2 of this Code, the question shall be decided in favour of the debtor.

60. In all computations of days, months and years it shall be understood that a day means one of twenty four hours; months are as set forth in the Gregorian Calendar, and the year is of three hundred and sixty five days.

Bills of exchange, promissory notes and loans are excepted, with respect to which the special enactments of this Code concerning them must be abided by.

61. Days of grace or courtesy or other times which, under any denomination, postpone the performance of mercantile obligations, shall not be recognised, excepting those which the parties have determined in the contract, or which rest upon a distinct provision of the law.

62. Obligations which have no time fixed by the parties, or by the provisions of this Code, shall be demandable ten days after they have been contracted, if they give rise to an ordinary action, and on the next day, if they carry prompt execution[1]).

63. The effects of delay in performing mercantile obligations shall commence: 1. In contracts which have a fixed day for their performance, on the day following their maturity; — 2. In those which have not, from the day on which the creditor makes a judicial demand on the debtor, or gives him notice of a protest for damages made against him before a judge, notary or other public officer authorised to accept it.

Title V. Mercantile places and contract houses.

First Section. Commercial Exchanges.

64. The legally authorised public establishments in which merchants and collegiate intermediary agents ordinarily meet for the purpose of making or performing the mercantile transactions expressed in this section, are called Commercial Exchanges (Bolsas de Comercio).

65. The Government may establish or authorise the creation of Commercial Exchanges, where it thinks fit.

Likewise societies constituted according to this Code may establish them, provided that the power of doing so is one of their objects.

Notwithstanding this, in order that the quotation of the transactions realised and published in this kind of Exchange may have an official character, it shall be indispensable that the Governement shall have authorised the said transactions before commencing to be the subject of the public contracting which the quotation proves.

The Government may grant the said authorisation, after such previous reports on its public convenience as it deems necessary.

66. Both existing and future Exchanges shall be governed by the provisions of this Code.

67. The following shall be the subject matters of a contract on Exchange: 1. Public securities and effects; — 2. Industrial and mercantile securities issued by individuals or by legally constituted societies or undertakings; — 3. Bills of exchange, orders to pay, promissory notes and all other mercantile securities; — 4. The sale of precious metals, coined or bullion; — 5. Merchandise of all kinds and warehouse receipts; — 6. Insurances of commercial effects against land or sea risks; — 7. Freights and carriage, bills of lading; — 8. All other operations analogous to those expressed in the preceding numbers, provided that they are lawful in conformity with the laws.

The securities and effects to which numbers 1 and 2 of this article refer, shall only be included in the official quotations when their negotiation is authorised, according to art. 65, in the Exchanges created privately, or are declared negotiable for Exchanges officially created.

---

[1]) Claims which carry prompt execution are those which permit an executive action to be brought before the tribunals. The enumeration of these claims and the procedure indicated, may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

68. Para incluirlos en las cotizaciones oficiales de que habla el artículo anterior, se comprenderán bajo la denominación de efectos públicos: 1.° Los que por medio de una emisión representen créditos contra el Estado, las provincias ó los municipios, y legalmente estén reconocidos como negociables en Bolsa; — 2.° Los emitidos por las naciones extranjeras, si su negociación ha sido autorizada debidamente por el Gobierno, previo dictamen de la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio.

69. También podrán incluirse en las cotizaciones oficiales, como materia de contrato en Bolsa, los documentos de crédito al portador emitidos por establecimientos, compañías ó empresas nacionales, con arreglo á las Leyes y á sus estatutos, siempre que el acuerdo de su emisión, con todos los demás requisitos enumerados en el art. 21, aparezca convenientemente inscrito en el Registro Mercantil, lo mismo que en los de la Propiedad[1]) cuando, por su naturaleza, deban serlo, y con tal de que estos extremos previamente se hayan hecho constar ante la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio.

70. Para incluir en las cotizaciones oficiales, como materia de contrato en Bolsa, los documentos de crédito al portador, de empresas extranjeras constituídas con arreglo á las leyes del Estado en que dichas empresas radiquen, se necesitará la autorización previa de la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio, una vez acreditado que la emisión está hecha con arreglo á la Ley y á los estatutos de la compañía de la que los valores procedan, y que se han llenado todos los requisitos que en las mismas disposiciones se prescriban, y como no medien razones de interés público que lo estorben.

71. La inclusión en las cotizaciones oficiales, de los efectos ó valores al portador emitidos por particulares, no podrá hacerse sin autorización de la Junta sindical del Colegio de Agentes de Cambio, que la concederá siempre que sean hipotecarios ó estén suficientemente garantidos á su juicio y bajo su responsabilidad.

72. No podrán incluirse en las cotizaciones oficiales: 1.° Los efectos ó valores procedentes de compañías ó sociedades no inscritas en el Registro Mercantil; — 2.° Los efectos ó valores procedentes de compañías que, aunque estén inscritas en el Registro Mercantil, no hubieren hecho las emisiones con arreglo á este Código ó á leyes especiales.

73. Los reglamentos fijarán los días y horas en que habrán de celebrarse las reuniones de las Bolsas creadas por el Gobierno ó por los particulares, una vez que éstas adquieran carácter oficial, y todo lo concerniente á su régimen y policía interior, que estará en cada una de ellas á cargo de la Junta sindical del Colegio de Agentes. El Gobierno fijará el arancel de los derechos de los agentes[2]).

Sección segunda. De las operaciones de bolsa.

74. Todos, sean ó no comerciantes, podrán contratar sin intervención de agente de cambio colegiado las operaciones sobre efectos públicos ó sobre valores industriales ó mercantiles; pero tales contratos no tendrán otro valor que el que naciere de su forma y les otorgare la Ley común[3]).

75. Las operaciones que se hicieren en Bolsa se cumplirán con las condiciones y en el modo y forma que hubiesen convenido los contratantes, pudiendo ser al contado ó á plazo, en firme ó á voluntad, con prima ó sin ella, expresando, al anunciarlas, las condiciones que en cada una se hubiesen estipulado.

De todas estas operaciones nacerán acciones y obligaciones exigibles ante los tribunales[4]).

---

[1]) Han de inscribirse en el Registro de la propiedad cuando tengan garantía hipotecaria.

[2]) Tanto lo relativo á los días y horas en que han de celebrarse las reuniones de las Bolsas, como lo referente á los aranceles de los agentes quedó determinado en el Reglamento interino que para la organización y régimen de las Bolsas de comercio se publicó por Real Decreto de 31 de diciembre de 1885.

[3]) Las pólizas por operaciones de Bolsa al contado y á plazo á que se refiere este artículo están sujetas al timbre proporcional fijado para las operaciones hechas por mediación de agente colegiado, y no se reconocerá por los tribunales validez alguna á los documentos que representen tales operaciones, ni producirán efecto legal cuando no estén expedidos en el papel timbrado que el Estado expende con tal objeto (art. 22 L. del T.).

[4]) Para que puedan producirse estos efectos es preciso además que tales operaciones hayan devengado el impuesto correspondiente según dispone el art. 22 de la L. del T.; el cual previene

68. For the purpose of being included in the official quotations spoken of by the preceding article, the following shall be comprised under the denomination of public securities: 1. Those of an issue representing debts due by the State, provinces or municipalities, and which have been legally admitted as negotiable on the Exchange; — 2. Those issued by foreign nations, if their negotiation has been duly authorised by the Government, after a decision of the governing Board of the College of Exchange Agents.

69. There may also be included in the official quotations, as the subject-matter of contracts on Exchange, documents of credit to bearer issued by national establishments, companies or undertakings, in accordance with the laws and their constitutions, provided that the resolution for their issue, and all the other requisites enumerated in art. 21, are suitably inscribed in the mercantile Register, and also on the Register of Ownership[1]) when from their nature they ought to be so inscribed, and provided that these requirements are previously proved to the Governing Board of the College of Exchange Agents.

70. In order that documents of credit to bearer issued by foreign undertakings constituted in accordance with the laws of the State in which the said undertakings are situated, may be included in the official quotations, as subject-matter of contracts on Exchange, the previous authorisation of the Governing Board of the College of Exchange Agents shall be necessary, on proof that the issue has been made in accordance with the law and constitution of the issuing company, and that they have fulfilled all the requirements prescribed in the said provisions, and when there are no reasons of public interest to prevent it.

71. Inclusion in official quotations of effects or securities to bearer issued by individuals, cannot be made without the authorisation of the Governing Board of the College of Exchange Agents, which shall grant it, provided that they are mortgage securities or are sufficiently secured in their judgment and under their responsibility.

72. The following may not be included in the official quotations: 1. Effects or securities issued by companies or societies which are not inscribed on the Mercantile Register; — 2. Effects or securities issued by companies which, although they are inscribed on the Mercantile Register, have not made the issues in accordance with this Code or special laws.

73. The regulations shall fix the days and hours for the meetings of the Exchanges created by the Government or by individuals, when once they have acquired an official character, and everything that concerns their internal government and discipline, which in each of them shall be in the charge of the Governing Board of the College of Agents. The government shall fix the scale of the Agents' fees[2]).

Second Section. Transactions on Exchange.

74. All persons, whether merchants or not, may, without the intervention of a Collegiate Exchange Agent, make contracts with reference to transactions in public or industrial or mercantile securities; but such contracts shall have no other value than that arising from their form and given them by the Common Law[3]).

75. Transactions effected on Exchange shall be performed with the conditions and in the manner and form which have been agreed between the contractors, and they may be for cash or on credit, with a premium or not, but expressing, on their announcement, the conditions stipulated in each case.

All these transactions give rise to rights of action and obligations, which may be enforced by the tribunals[4]).

---

[1]) When they contain a mortgage security, they must be inscribed on the Register of Ownership.

[2]) Both the days and hours for the meetings of the Exchanges, and the scales of the agents' fees were fixed by the interim Regulation for the organization and government of the Commercial Exchanges, published by the Royal Decree of 31 December 1885.

[3]) Contracts for transactions on Exchange, whether for cash or on credit, to which this article refers, are subject to the proportional stamp fixed for transactions effected through collegiate agents, and documents representing such transactions will not be recognised as valid by the tribunals, nor will they have any legal effect, unless they are issued on the stamped paper which the State provides for that purpose (art. 22 of the Stamp Act).

[4]) For producing these effects, it is necessary also that such transaction shall have paid tho tax imposed by art. 22 of the stamp Act; which warns the tribunals and the Governing Board of the

76. Las operaciones al contado[1]) hechas en Bolsa se deberán consumar el mismo día de su celebración, ó, á lo más, en el tiempo que medie hasta la reunión siguiente de Bolsa.

El cedente estará obligado á entregar, sin otra dilación, los efectos ó valores vendidos, y el tomador á recibirlos, satisfaciendo su precio en el acto.

Las operaciones á plazo[2]) y las condicionales se consumarán de la misma manera en la época de la liquidación convenida.

77. Si las transacciones se hicieren por mediación de agente de cambio colegiado, callando éste el nombre de comitente, ó entre agentes con la misma condición[3]),

á los tribunales y á la Junta sindical del Colegio de agentes que carecen de validez alguna las operaciones que no se ajusten á lo preceptuado en dicha ley y deben ser consideradas como nulas.

[1]) Las pólizas de contratación al contado sobre efectos públicos, valores industriales ó mercantiles y mercaderías se expedirán precisamente en los efectos timbrados que con este objeto expende el Estado con sujeción á la siguiente escala:

Cuantía efectiva de la operación				Timbre Clase	Timbre Precio Pesetas
Hasta	1 000	pesetas		19a	0,10
Desde	1 000,01	hasta	2 500	18a	0,25
,,	2 500,01	,,	5 000	17a	0,50
,,	5 000,01	,,	10 000	16a	1,00
,,	10 000,01	,,	20 000	15a	2,00
,,	20 000,01	,,	30 000	14a	3,00
,,	30 000,01	,,	40 000	13a	4,00
,,	40 000,01	,,	50 000	12a	5,00
,,	50 000,01	,,	70 000	11a	7,00
,,	70 000,01	,,	100 000	10a	10,00
,,	100 000,01	,,	250 000	9a	25,00
,,	250 000,01	,,	500 000	8a	50,00
,,	500 000,01	,,	750 000	7a	75,00
,,	750 000,01	,,	1 000 000	6a	100,00
,,	1 000 000,01	,,	1 250 000	5a	125,00
,,	1 250 000,01	,,	1 500 000	4a	150,00
,,	1 500 000,01	,,	1 750 000	3a	175,00
,,	1 750 000,01	,,	2 000 000	2a	200,00
,,	2 000 000,01	,,	en adelante	1a	250,00

(art. 22 de la L. del T.)

[2]) Las pólizas para las operaciones á plazo serán siempre dos, una para el vendedor y otra para el comprador, y habrán de extenderse también en los efectos timbrados que expende el Estado, con sujeción á la siguiente escala:

Cuantía efectiva de la operación.				Timbre Clase	Timbre Precio Pesetas
Hasta	5 000	pesetas		12a	0,10
Desde	5 000,01	hasta	12 500	11a	0,25
,,	12 500,01	,,	25 000	10a	0,50
,,	25 000,01	,,	50 000	9a	1,00
,,	50 000,01	,,	100 000	8a	2,00
,,	100 000,01	,,	150 000	7a	3,00
,,	150 000,01	,,	200 000	6a	4,00
,,	200 000,01	,,	250 000	5a	5,00
,,	250 000,01	,,	350 000	4a	7,00
,,	350 000,01	,,	500 000	3a	10,00
,,	500 000,01	,,	1 250 000	2a	25,00
,,	1 250 000,01	,,	en adelante	1a	50,00

En las operaciones llamadas ,,dobles" se aplica el impuesto á cada póliza reducido á la mitad del mismo (art. 22 de la L. del T.).

[3]) Las pólizas que los agentes mediadores en las operaciones á plazo deben recibir de sus comitentes, cuando callen los nombres de estos, llevarán timbre de 10 céntimos de peseta, considerándoselas como segundas ó terceras copias de la respectiva póliza principal, cuyo número de órden de emisión deberá al efecto consignarse en las mismas (art. 22 de la L. del T.).

76. Transactions for cash[1]) effected on an Exchange must be completed on the same day as they are made, or at latest before the next meeting of the Exchange.

The transferor shall be bound to deliver without further delay, the effects or securities sold, and the transferee to receive them, and pay their price at the same time.

Transactions on credit[2]) and conditional transactions shall be completed in the same way at the time of the agreed settlement.

77. If the transactions are effected through a Collegiate broker on Exchange, and he is silent as to the name of his principal, or between brokers in like manner[3]),

---

College of Agents that transactions which do not conform to the precepts of the said law have no validity and must be considered void.

[1]) Cash contracts for public, industrial or mercantile securities or merchandise are bound to be issued on stamped paper, provided by the State for this purpose, according to the following scale:

Actual amount of the transaction				Stamp Class	Stamp Price Pesetas
Not exceeding	1 000	pesetas		19.	0,10
From	1 000,01	to	2 500	18.	0,25
,,	2 500,01	,,	5 000	17.	0,50
,,	5 000,01	,,	10 000	16.	1,00
,,	10 000,01	,,	20 000	15.	2,00
,,	20 000,01	,,	30 000	14.	3,00
,,	30 000,01	,,	40 000	13.	4,00
,,	40 000,01	,,	50 000	12.	5,00
,,	50 000,01	,,	70 000	11.	7,00
,,	70 000,01	,,	100 000	10.	10,00
,,	100 000,01	,,	250 000	9.	25,00
,,	250 000,01	,,	500 000	8.	50,00
,,	500 000,01	,,	750 000	7.	75,00
,,	750 000,01	,,	1 000 000	6.	100,00
,,	1 000 000,01	,,	1 250 000	5.	125,00
,,	1 250 000,01	,,	1 500 000	4.	150,00
,,	1 500 000,01	,,	1 750 000	3.	175,00
,,	1 750 000,01	,,	2 000 000	2.	200,00
,,	2 000 000,01	,,	and upwards	1.	250,00

(art. 22 of the Stamp Act.)

[2]) Contracts for credit transactions shall always be two, one for the seller and the other for the buyer, and they must likewise be drawn up on the stamped paper supplied by the State, subject to the following scale:

Actual amount of the transaction				Stamp Class	Stamp Price Pesetas
Not exceeding	5 000	pesetas		12.	0,10
From	5 000,01	to	12 500	11.	0,25
,,	12 500,01	,,	25 000	10.	0,50
,,	25 000,01	,,	50 000	9.	1,00
,,	50 000,01	,,	100 000	8.	2,00
,,	100 000,01	,,	150 000	7.	3,00
,,	150 000,01	,,	200 000	6.	4,00
,,	200 000,01	,,	250 000	5.	5,00
,,	250 000,01	,,	350 000	4.	7,00
,,	350 000,01	,,	500 000	3.	10,00
,,	500 000,01	,,	1 250 000	2.	25,00
,,	1 250 000,01	,,	and upwards	1.	50,00

In transactions which are called "double" the tax applies to each contract but only to half the amount thereof (art. 23 of the Stamp Act).

[3]) The contracts which the brokers have to receive from their principals in transactions on credit, when the names of their principals are concealed must be stamped at 10 céntimos, as they are considered as second or third copies of the principal contract, and their number in order of issue must be marked thereon for that purpose (art. 22 of the Stamp Act).

y el agente colegiado, vendedor ó comprador, demorase el cumplimiento de lo convenido, el perjudicado por la demora podrá optar en la Bolsa inmediata entre el abandono del contrato, denunciándolo á la Junta sindical, ó el cumplimiento del mismo.

En este último caso, se consumará con la intervención de uno de los individuos de la Junta sindical, comprando ó vendiendo los efectos públicos convenidos, por cuenta y riesgo del agente moroso, sin perjuicio de la repetición de éste contra el comitente.

La Junta sindical ordenará la realización de la parte de fianza del agente moroso necesaria para satisfacer inmediatamente estas diferencias.

En las negociaciones sobre valores industriales y mercantiles, metales ó mercaderías, el que demore ó rehuse el cumplimiento de un contrato, será compelido á cumplirlo por las acciones que nazcan según las prescripciones de este Código.

78. Convenida cada operación cotizable, el agente de cambio que hubiere intervenido en ella la extenderá en una nota firmada, entregándola acto continuo al anunciador, quien, después de leerla al público en alta voz, la pasará á la Junta sindical.

79. Las operaciones que se hicieren por agente colegiado sobre valores ó efectos públicos, se anunciarán de viva voz en el acto mismo en que queden convenidas sin perjuicio de pasar la correspondiente nota á la Junta sindical.

De los demás contratos se dará noticia en el *Boletín de cotización*, expresando el precio máximo y mínimo en las compras de mercaderías, transportes y fletamentos, el tipo del descuento y el de los cambios en los giros y préstamos.

80. La Junta sindical se reunirá transcurridas las horas de Bolsa, y, en vista de las negociaciones de efectos públicos que resulten de las notas entregadas por los agentes colegiados, y con la noticia de las ventas y demás operaciones intervenidas por los mismos, extenderá el acta de la cotización, remitiendo una copia certificada al Registro Mercantil.

Sección tercera. De los demás lugares públicos de contratación. De las ferias, mercados y tiendas.

81. Tanto el Gobierno como las sociedades mercantiles que estuvieren dentro de las condiciones que señala el art. 65 de este Código, podrán establecer lonjas ó casas de contratación.

82. La autoridad competente anunciará el sitio y la época en que habrán de celebrarse las ferias, y las condiciones de policía que deberán observarse en ellas.

83. Los contratos de compra-venta celebrados en feria, podrán ser al contado, ó á plazos: los primeros habrán de cumplirse en el mismo día de su celebración, ó, á lo más, en las veinticuatro horas siguientes.

Pasadas éstas sin que ninguno de los contratantes haya reclamado su cumplimiento, se considerarán nulos, y los gajes, señal ó arras que mediaren quedarán á favor del que los hubiere recibido.

84. Las cuestiones que se susciten en las ferias sobre contratos celebrados en ellas, se decidirán en juicio verbal[1]) por el juez municipal del pueblo en que se verifique la feria, con arreglo á las prescripciones de este Código, siempre que el valor de la cosa litigiosa no exceda de 1.500 pesetas. Si hubiere más de un juez municipal, será competente el que eligiere el demandante.

85. La compra de mercaderías en almacenes ó tiendas abiertas al público, causará prescripción de derecho á favor del comprador respecto de las mercaderías, adquiridas, quedando á salvo en su caso los derechos del propietario de los objetos vendidos, para ejercitar las acciones civiles[2]) ó criminales[3]) que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente.

Para los efectos de esta prescripción, se reputarán almacenes ó tiendas abiertas al público: 1.° Los que establezcan los comerciantes inscritos; — 2.° Los que esta-

[1]) La tramitación del juicio verbal puede verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civil.-merc».

[2]) La prescripción en el caso de este artículo imposibilita el ejercicio de la acción reivindicatoria, y las acciones civiles de que aquí se habla tienen por objeto recabar, del que fué causa del despojo hecho al propietario, el valor de la cosa vendida, y la consiguiente indemnización de daños y perjuicios.

[3]) Las acciones criminales son las correspondientes á los delitos que pueden ser causa del despojo.

and the Collegiate broker, whether seller or buyer, delays in carrying out the contract, the person prejudiced by the delay may choose either to abandon the contract at the next Exchange, by denouncing it to the Governing Board, or to carry out the contract.

In the latter case it shall be carried out through the intervention of one of the members of the Governing Board, who shall buy or sell the agreed public securities, on account and at the risk of the broker in delay, but without prejudice to the latter's rights of action against the principal.

The Governing Board shall order the realisation of the necessary part of the security of the broker in delay so as to pay these differences immediately.

In transactions in industrial and mercantile securities, metals or merchandise, the person who delays or refuses to carry out his contract shall be compelled to perform it by means of the actions which arise from the provisions of this Code.

78. As each quotable transaction is agreed, the broker who has taken part therein shall draw it up on a signed note, and deliver it at once to the crier, who after reading it to the public in a loud voice, shall hand it to the Governing Board.

79. Transactions effected by a Collegiate broker in public securities or effects, shall at once be announced in a loud voice at the time when they are agreed, without prejudice to handing the corresponding note to the Governing Board.

Notice of other contracts shall be given in the *Boletin de cotización*, stating the maximum and minimum price in purchases of merchandise, in carriage and affreightments, the rate of discount and that of the exchanges in the bills and loans.

80. The Governing Board shall meet on the close of the Exchange, and on inspecting the transactions in public securities, appearing from the notes delivered by the Collegiate brokers, and with the information of the sales and other transactions in which they have taken part, shall draw up the document of quotations, and send a certified copy to the Mercantile Register.

Third Section. Other public places for contracting. Fairs, markets and shops.

81. Both the Government and the mercantile houses which are within the conditions defined by art. 65 of this Code, may establish exchanges or contract houses.

82. The competent authority shall announce the place and time in which fairs are to be held, and the police conditions which must be observed therein.

83. Contracts of sale effected in a fair may be for cash or on credit; the former must be performed on the same day that they are made or at latest within the following twenty four hours.

After the expiration thereof, without either of the contractors having claimed their performance, they shall be considered void, and the pledges, handsel or earnest money shall remain in the hands of the person who has received them.

84. Questions which arise in fairs respecting contracts made therein, shall be decided in verbal action[1]), by the municipal judge of the place where the fair is held, in accordance with the provisions of this Code, provided that the value of the thing in litigation does not exceed 1,500 pesetas. If there is more than one municipal judge, the one chosen by the plaintiff shall be competent.

85. The purchase of merchandise in warehouses and shops open to the public shall cause an absolute prescription with respect to the acquired merchandise in favour of the buyer, saving the rights of the owner of the things sold, to bring his civil[2]) or criminal[3]) actions against the person who wrongfully sold them.

For the purposes of this prescription, the following shall be reputed warehouses or shops open to the public: 1. Those established by registered merchants; — 2. Those

---

[1]) The procedure in the verbal action may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

[2]) The prescription given by this article prevents the *reivindicatio* action from being brought, and the civil actions, here spoken of, are intended to recover the value of the thing sold and the consequent compensation in damages, from the person who caused the owner to be plundered.

[3]) The criminal actions are those pertaining to the crimes which may be the cause of the plundering.

blezcan los comerciantes no inscritos, siempre que los almacenes ó tiendas permanezcan abiertos al público por espacio de ocho días consecutivos, ó se hayan anunciado por medio de rótulos, muestras ó títulos en el local mismo, ó por avisos repartidos al público ó insertos en los diarios de la localidad.

86. La moneda en que se verifique el pago de las mercaderías compradas al contado en las tiendas ó establecimientos públicos, no será reivindicable.

87. Las compras y ventas verificadas en establecimiento, se presumirán siempre hechas al contado, salvo la prueba en contrario.

Título VI. De los agentes mediadores del comercio, y de sus obligaciones respectivas.

Sección primera. Disposiciones comunes á los agentes mediadores del comercio.

88. Estarán sujetos á las Leyes mercantiles como agentes mediadores del comercio: Los agentes de cambio y Bolsa; — Los corredores de comercio; — Los corredores intérpretes de buques.

89. Podrán prestar los servicios de agentes de Bolsa y corredores, cualquiera que sea su clase, los españoles y los extranjeros; pero sólo tendrán fe pública los agentes y los corredores colegiados.

Los modos de probar la existencia y circunstancias de los actos ó contratos en que intervengan agentes que no sean colegiados, serán los establecidos por el derecho mercantil ó común[2]) para justificar las obligaciones.

90. En cada plaza de comercio se podrá establecer un Colegio de Agentes de Bolsa, otro de Corredores de Comercio, y en las plazas marítimas uno de Corredores Intérpretes de Buques.

91. Los Colegios de que trata el artículo anterior, se compondrán de los individuos que hayan obtenido el título correspondiente por reunir las condiciones exigidas en este Código.

92. Al frente de cada Colegio habrá una Junta sindical elegida por los colegiados.

93. Los agentes colegiados tendrán el carácter de notarios en cuanto se refiera á la contratación de efectos públicos, valores industriales y mercantiles, mercaderías y demás actos de comercio comprendidos en su oficio, en la plaza respectiva.

Llevarán un libro-registro[3]) con arreglo á lo que determina el art. 36, asentando en él por su orden, separada y diariamente, todas las operaciones en que hubiesen intervenido[4]), pudiendo además llevar otros libros con las mismas solemnidades. Los libros y pólizas de los agentes colegiados harán fe en juicio.

94. Para ingresar en cualquiera de los Colegios de Agentes á que se refiere el art. 90, será necesario: 1.° Ser español ó extranjero naturalizado; — 2.° Tener capacidad para comerciar con arreglo á este Código; — 3.° No estar sufriendo pena correccional ó aflictiva[5]); — 4.° Acreditar buena conducta moral y conocida

---

[2]) Respecto al valor de los términos del derecho común, vease la nota número 1, y respecto á los medios de prueba de las obligaciones vease el Capítulo V del Libro 4 del Cód. c. incluído entre las leyes complementarias del Cód. de com.

[3]) Tanto este libro registro, como los demás que quieran llevar los agentes si pretenden legalizarlos han de reintegrarse del mismo modo que el libro diario de los comerciantes particulares (art. 155 de la L. del T.). (Veanse las pág. 96, notas 2 y 3.)

[4]) En los asientos que hagan de dichas operaciones habrán de hacer constar el número de orden que lleven los documentos timbrados en que se hicieron constar aquellas. La falta de este requisito ó cualquier error en los asientos que no se salvare en debida forma se castigará ó corregirá, según el art. 24 de la L. del T., con una multa de 100 á 2000 pesetas, además del reintegro que en su caso proceda.

[5]) Las penas aflictivas á que se refiere este artículo son: Cadena perpetua; reclusión perpetua; relegación perpetua; extrañamiento perpetuo; cadena temporal; reclusión temporal; relegación temporal; extrañamiento temporal; presidio mayor; prisión mayor; confinamiento; inhabilitación absoluta perpetua; inhabilitación absoluta temporal; inhabilitación especial perpetua ó temporal para cargo público, derecho de sufragio activo y pasivo, profesión ú

established by unregistered merchants, provided that the warehouses or shops remain open to the public for the space of eight consecutive days, or have been announced by means of posters, samples or titles in the place itself, or by advertisements distributed to the public or inserted in the newspapers of the locality.

86. The money by which payment is made for merchandise bought for cash in public shops or establishments, cannot be reclaimed.

87. The purchases and sales effected in the establishment shall always be presumed to be made for cash, saving proof to the contrary.

Title VI. Commercial agents and their respective obligations.

First section. Provisions common to commercial agents.

88. The following shall be subject to the commercial laws as commercial agents: Exchange agents (or brokers); commercial brokers; interpreting ship-brokers.

89. Spaniards and foreigners may render service as Exchange agents and brokers of all kinds; but only Collegiate agents and brokers shall enjoy public credit as attached to their statements[1]).

The manner of proving the existence and particulars of the acts and contracts in which non-Collegiate agents take part, shall be those enacted by the mercantile or common law[2]) for proving obligations.

90. In each commercial place, a College of Exchange Agents may be founded, and another of Commercial Brokers, and in maritime places, one of Interpreting Shipbrokers.

91. The Colleges with which the previous article deals, shall be composed of individuals who have obtained the proper personal right, by combining the conditions required by this Code.

92. At the head of each College there shall be a Governing Board elected by the Collegiate members.

93. The Collegiate agents shall have the character of notaries so far as refers to contracting in public effects, industrial and mercantile securities, merchandise and other acts of commerce comprised in their duties in the place in question.

They shall keep a register-book[3]) in accordance with art. 36, entering therein by order, separately and daily, all the transactions in which they have taken part[4]), and they may also keep other books with the same formalities. The books and contracts of the Collegiate agents are evidence in actions.

94. To enter any of the Colleges of Agents, referred to in art. 90, it shall be necessary: 1. To be a Spaniard or a naturalised foreigner; — 2. To have legal capacity to trade in accordance with this Code; — 3. Not to be undergoing any correctional or penal punishment[5]); — 4. To prove good moral conduct and known probity, by

---

[1]) *Fe publica* or public credit is enjoyed by the documents and registers of notaries, masters of the courts, Collegiate brokers and other functionaries who are publicly authorised to take part in contracts and other solemn acts, and causes these documents to be good evidence on production. *Vocabulario Juridico*, by E. Olivier (Note by translator).

[2]) Respecting the meaning of the term "common law", see note 1, p. 89, and with respect to proof of obligations, see Chapter V, Book 4 of the Civil Code, included among the supplementary laws of the Code of Commerce.

[3]) If brokers desire to legalise either this register-book or the others which they may wish to keep, they must be paid for in the same way as the day-book of individual merchants (art. 155 of the Stamp Act). (See page 96, notes 2 and 3.)

[4]) In the entries of the said transactions, there must be stated the number in order of the stamped documents in which the transactions have been set out. The want of this requisite and any other mistake in the entries which is not duly corrected, shall be punished or corrected according to art 24 of the Stamp Act, with a fine of from 100 to 2000 pesetas, besides the payment due on the books.

[5]) The *penas aflictivas* referred to in this art. are: Penal servitude for life; imprisonment for life; perpetual banishment; temporal penal servitude; temporal imprisonment; temporal banishment; and other similar punishments; absolute disqualification both perpetual and temporal; special disqualification, both perpetual and temporal, for public office, active and passive right of suffrage, profession or office. Correctional punishments are: correctional imprisonment:

probidad, por medio de una información judicial de tres comerciantes inscritos; — 5.° Constituir en la Caja de Depósitos ó en sus sucursales, ó en el Banco de España, la fianza que determine el Gobierno; — 6.° Obtener del Ministerio de Fomento el título correspondiente, oída la Junta sindical del Colegio respectivo.

95. Será obligación de los agentes colegiados: 1.° Asegurarse de la identidad y capacidad legal para contratar de las personas en cuyos negocios intervengan, y, en su caso, de la legitimidad de las firmas de los contratantes. Cuando éstos no tuvieren la libre administración de sus bienes[1]), no podrán los agentes prestar su concurso sin que preceda la debida autorización con arreglo á las Leyes[2]); — 2.° Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de hacer supuestos que induzcan á error á los contratantes; — 3.° Guardar secreto en todo lo que concierna á las negociaciones que hicieren, y no revelar los nombres de las personas que se las encarguen, á menos que exija lo contrario la Ley ó la naturaleza de las operaciones, ó que los interesados consientan en que sus nombres sean conocidos; — 4.° Expedir, á costa de los interesados que la pidieren, certificación de los asientos respectivos de sus contratos[3]).

96. No podrán los agentes colegiados: 1.° Comerciar por cuenta propia; — 2.° Constituirse en aseguradores de riesgos mercantiles; — 3.° Negociar valores ó mercaderías por cuenta de individuos ó sociedades que hayan suspendido sus pagos, ó que hayan sido declarados en quiebra ó en concurso, á no haber obtenido rehabilitación; — 4.° Adquirir para sí los efectos de cuya negociación estuvieren encargados, salvo en el caso de que el agente tenga que responder de faltas del comprador al vendedor; — 5.° Dar certificaciones que no se refieran directamente á hechos que consten en los asientos de sus libros; — 6.° Desempeñar los cargos de cajeros, tenedores de libros ó dependientes de cualquier comerciante ó establecimiento mercantil.

97. Los que contravinieren á las disposiciones del artículo anterior, serán privados de su oficio por el Gobierno, previa audiencia de la Junta sindical y del interesado, el cual podrá reclamar contra esta resolución por la vía contencioso-administrativa[4]).

Serán además responsables civilmente del daño que se siguiere por faltar á las obligaciones de su cargo.

98. La fianza de los agentes de Bolsa, de los corredores de comercio y de los corredores intérpretes de buques estará especialmente afecta á las resultas de las operaciones de su oficio, teniendo los perjudicados una acción real preferente contra la misma, sin perjuicio de las demás que procedan en derecho[5]).

Esta fianza no podrá alzarse, aunque el agente cese en el desempeño de su cargo, hasta transcurrido el plazo que se señala en el artículo 946, sin que dentro de él se haya formalizado reclamación.

Sólo estará sujeta la fianza á responsabilidades ajenas al cargo, cuando las de éste se hallen cubiertas íntegramente.

Si la fianza se desmembrare por las responsabilidades á que está afecta, ó se disminuyere por cualquiera causa su valor efectivo, deberá reponerse por el agente en el término de veinte días.

---

oficio. — Y las correccionales son: presidio correccional; prisión correccional; destierro; reprensión pública; suspensión de cargo público, derecho de sufragio activo y pasivo, profesión ú oficio; y arresto mayor.

[1]) No tienen la libre administración de sus bienes los menores de edad no emancipados ó no habilitados de edad si son huérfanos y los mayores incapacitados por declaración judicial. (Véanse la pág. 89, nota 3 y pág. 90, notas 4 y 5.)

[2]) Corresponde dar esta autorización al tutor autorizado especialmente para ello por acuerdo del consejo de familia (art. 269, Cod. c.).

[3]) Llevarán estas certificaciones un timbre de 2 pesetas, clase 10ª (art. 183 de la L. del T.).

[4]) La vía contencioso-administrativa es la que permite á los particulares oponerse á las resolucio nes del Gobierno que perjudiquen sus derechos; y para hacer factible esto existen los Tribunales contencioso-administrativos de las Audiencias territoriales y la Sala tercera del Tribunal Supremo de Justicia.

[5]) La acción real ha de hacerse efectiva sobre la misma fianza en tanto que ella alcanze á cubrir la responsabilidad civil contraida por el agente; y las demás que procedan en derecho serán: la correspondente acción criminal en el caso de que la conducta del agente haga sospechar la comisión de un delito y la correspondiente acción personal, cuando la fianza no bastare á cubrir toda la responsabilidad civil.

means of a judicial report of three registered merchants; — 5. To lodge the security, fixed by the Government, in the Caja de Depósitos or its branches, or in the Bank of Spain; — 6. To obtain the corresponding diploma from the Ministry de Fomento, after hearing the Governing Board of the College.

95. It shall be the duty of the Collegiate brokers: 1. To insure the identity and legal capacity for contracting of the persons in whose business they take part, and, where necessary, the lawfulness of the signatures of the contractors. — When the latter have not the free management of their property[1]), brokers may not assist without previous due authorisation, according to the law[2]); — 2. To forward business with correctness, precision and clearness, and to abstain from making suggestions which may mislead the contractors; — 3. To keep secret everything which concerns the transactions which they effect, and not to reveal the names of their principals, unless the law or the nature of the transactions requires the contrary, or the persons interested consent to their names being known; — 4. To issue a certificate of the respective entries of their contracts, at the cost of the interested persons who apply for it[3]).

96. Collegiate brokers cannot: 1. Trade on their own account; — 2. Constitute themselves insurers of mercantile risks; — 3. Negotiate securities or merchandise on account of individuals or societies which have suspended payment, or which have been declared bankrupt or insolvent, and have not obtained their discharge; — 4. Acquire for themselves the effects, with the negotiation whereof they are entrusted, except when the broker has to answer to the seller for the neglect of the buyer; — 5. Give certificates which do not refer directly to facts which appear from the entries in their books; — 6. Discharge the duties of cashiers, book-keepers or subordinates of any merchant or mercantile establishment.

97. Those who contravene the provisions of the preceding article, shall be deprived of their office by the Government, after hearing the Governing Board and the person interested, who may appeal against this decision by a contentious administrative proceeding[4]).

They shall also be civilly liable for the damage resulting from their failing in the obligations of their office.

98. The security given by Exchange brokers, commercial brokers and interpreting shipbrokers shall be specially affected to the results of their official transactions, and the persons prejudicied shall have a preferential right by a real action against the security, without prejudice to their other lawful rights of action[5]).

This security cannot be released, although the broker ceases to discharge his office, until the time defined in art. 946 has elapsed, unless an action has been brought within that time.

The security shall only be subject to liabilities foreign to his office when those of the latter are entirely covered.

If the security is curtailed by the liabilities to which it is affected, or its actual value is diminished from any cause, it must be replaced by the broker within the term of twenty days.

---

banishment; public rebuke; suspension of public office, active and passive right of suffrage, profession or office; and greater arrest.

[1]) Minors who are not emancipated, orphans who are not qualified with regard to age, and persons deprived of legal capacity by judicial declaration, have not the free management of their property (See page 89, note 3 and page 90, notes 4 and 5).

[2]) The duty of giving this authorisation falls on the guardian, specially authorised for that purpose by the Family Council (art. 269, Civil Code).

[3]) These certificates carry a stamp of 2 pesetas, class 10 (art. 183 of the Stamp Act).

[4]) The *via contencioso-administrativa* is that accorded to individuals to oppose decisions of the Governnment prejudicing their rights; and for enforcing this, there are the *Tribunales contencioso-administrativos* of the territorial Courts of Appeal and the third Chamber of the Supreme Tribunal of Justice.

[5]) The real action must be made effective on the same security, so far as it is sufficient to cover the civil liability contracted by the broker; and the others arising from the law will be the corresponding criminal action when the conduct of the broker causes a suspicion that a crime has been committed, and the corresponding personal action, when the security is not sufficient to cover the total civil liability.

99. En los casos de inhabilitación, incapacidad ó suspensión de oficio de los agentes de Bolsa, corredores de comercio y corredores intérpretes de buques, los libros que con arreglo á este Código deben llevar se depositarán en el Registro Mercantil.

Sección segunda. De los agentes colegiados de cambio y bolsa.

100. Corresponderá á los agentes de cambio y Bolsa: 1.° Intervenir privativamente en las negociaciones y transferencias de toda especie de efectos ó valores públicos cotizables, definidos en el art. 68; — 2.° Intervenir, en concurrencia con los corredores de comercio, en todas las demás operaciones y contratos de Bolsa, sujetándose á las responsabilidades propias de estas operaciones.

101. Los agentes de Bolsa que intervengan en contratos de compra-venta ó en otras operaciones al contado ó á plazo, responderán al comprador de la entrega de los efectos ó valores sobre que versen dichas operaciones, y al vendedor, del pago del precio ó indemnización convenida.

102. Anotarán los agentes de Bolsa en sus libros, por orden correlativo de numeración y de fechas, todas las operaciones en que intervengan[1]).

103. Los agentes de Bolsa se entregarán recíprocamente nota suscrita de cada una de las operaciones concertadas, en el mismo día en que las hayan convenido. Otra nota, igualmente firmada, entregarán á sus comitentes, y éstos á los agentes, expresando su conformidad con los términos y condiciones de la negociación.

Las notas ó pólizas que los agentes entreguen á sus comitentes, y las que se expidan mutuamente, harán prueba contra el agente que las suscriba, en todos los casos de reclamación á que dieren lugar.

Para determinar la cantidad líquida á reclamar, expedirá la Junta sindical certificación en que se haga constar la diferencia en efectivo que resulte contra el comitente, en vista de las notas de la operación[2]).

La conformidad de los comitentes, una vez reconocida en juicio su firma, llevará aparejada ejecución[3]), siempre que se presente la certificación de la Junta sindical, de que habla el párrafo anterior.

104. Los agentes de Bolsa, además de las obligaciones comunes á todos los agentes mediadores, enumeradas en los artículos 95, 96, 97 y 98, serán responsables civilmente por los títulos ó valores industriales ó mercantiles que vendieren después de hecha pública por la Junta sindical la denuncia de dichos valores como de procedencia ilegítima.

105. El presidente, ó quien hiciere sus veces, y dos individuos, á lo menos, de la Junta sindical asistirán constantemente á las reuniones de la Bolsa, para acordar lo que proceda en los casos que puedan ocurrir.

La Junta sindical fijará el tipo de las liquidaciones mensuales al cerrarse la Bolsa del último día del mes, tomando por base el término medio de la cotización del mismo día.

La misma Junta será la encargada de recibir las liquidaciones parciales y practicar la general del mes.

Sección tercera. De los corredores colegiados de comercio.

106. Además de las obligaciones comunes á todos los agentes mediadores del comercio, que enumera el art. 95, los corredores colegiados de comercio estarán obligados: 1.° Á responder legalmente de la autenticidad de la firma del último cedente, en las negociaciones de letras de cambio ú otros valores endosables. — 2.° Á asistir y dar fe, en los contratos de compra-venta, de la entrega de los efectos y de su pago, si los interesados lo exigieren; — 3.° Á recoger del cedente y entregar al tomador las letras ó efectos endosabes que se hubieren negociado con su inter-

[1]) Veaso la pág. 103, nota 3.

[2]) Los *Vendís* en las operaciones al contado, dice el art. 22 de la L. del T., serán de cuatro clases: de 10 céntimos de peseta para las operaciones cuya cuantía efectiva no exceda de 20 000 pesetas; de 25 céntimos, para las de 20 001 á 50 000; de 50 céntimos, para las de 50 001 á 100 000; y de una peseta, para las que excedan de 100 000 pesetas. Las demás notas que expidan con referencia á sus libros registro llevarán timbre de una peseta, y si las expidieron en forma de certificación de dos pesetas (art. 183, L. del T.).

[3]) Quiero decir esto que la cantidad á cobrar podrá reclamarse en juicio ejecutivo. (Veaso este en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ. merc.»)

99. In cases of disqualification, legal incapacity or suspension from office of Exchange brokers, commercial brokers or interpreting shipbrokers, the books which they have to keep in accordance with this Code shall be deposited in the Mercantile Register.

Second Section. Collegiate and Exchange Brokers.

100. Billbrokers and Exchange brokers are entitled: 1. Alone to take part in the negotiations and transfers of every kind of public quotable effects or securities, defined in art. 68; — 2. To take part, concurrently with the commercial brokers, in all other transactions and contracts on Exchange, subject to the liabilities proper to these operations.

101. Exchange brokers who take part in contracts of sale or other transactions for cash or credit, shall be liable to the buyer for the delivery of the effects or securities which are the subject matter of the said operations, and to the seller, for the payment of the price or the agreed consideration.

102. Exchange brokers shall note in their books, in correlative order of number and date, all the operations in which they take part[1]).

103. Exchange brokers shall reciprocally deliver a signed note of each of the agreed operations, on the same day as they have been agreed. They shall deliver another note signed in like manner to their principals, and the latter to their brokers, expressing their agreement with the terms and conditions of the transaction.

The notes or contracts which the brokers deliver to their principals, and those which are issued reciprocally, shall be evidence against the broker who signs them, in every action to which they give rise.

In order to determine the net amount to be claimed, the Governing Board shall issue a certificate, in which shall be stated the actual cash difference against the principal, on inspecting the notes of the transactions[2]).

The conformity of the principals, when once their signature has been judicially verified, shall carry prompt execution[3]), provided that the certificate of the Governing Board, which is spoken of in the preceding paragraph is produced.

104. Besides the obligations common to all agents, enumerated in articles 95, 96, 97 and 98, Exchange agents shall be civilly liable for the industrial or mercantile securities or valuables which they sell after the denunciation of the said securities has been published by the Governing Board, as having an unlawful origin.

105. The President or Vice-president and at least two members of the Governing Board, shall be continuously present at the meetings of the Exchange, for deciding on the proper steps in the cases which may occur.

The Governing Board shall fix the rate of the monthly settlements on the closing of the Exchange on the last day of the month, basing it on the middle price of the quotation of the same day.

The same Board shall be charged with receiving the special settlements and carrying out the general monthly settlement.

Third Section. Collegiate Commercial brokers.

106. Besides the obligations common to all commercial agents, as enumerated in art. 95, Collegiate commercial brokers shall be bound: 1. To answer at law for the authenticity of the signature of the ultimate assignor, in transactions in bills of exchange or other endorsable instruments; — 2. In contracts of sale, to be present and authenticate the delivery of the goods and their payment, if the interested parties require it; — 3. To collect from the assignor and deliver to the assignee, the bills or endorsable securities which have been negotiated with their intervention; — 4. To collect

[1]) See page 103, note 3.

[2]) The brokers'notes in cash transactions, says art. 22 of the Stamp Act, shall be of four classes: 10 centimos for operations whose actual amount does not exceed 20 000 pesetas; 25 centimos for those from 20 001 to 50 000; 50 centimos for those from 50 001 to 100 000; and one peseta for those which exceed 100 000 pesetas. The other notes which they issue, referring to their register-books, shall carry a one peseta stamp, and if they are issued in the form of a certificate, two pesetas (art. 183 of the Stamp Act).

[3]) This means to say that the amount may be claimed in an executive action. (See the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".)

vención. — 4.° Á recoger del tomador y entregar al cedente el importe de las letras ó valores endosables negociados.

107. Los corredores colegiados anotarán en sus libros, y en asientos separados, todas las operaciones en que hubieren intervenido, expresando los nombres y el domicilio de los contratantes, la materia y las condiciones de los contratos.

En las ventas, expresarán la calidad, cantidad y precio de la cosa vendida, lugar y fecha de la entrega, y la forma en que haya de pagarse el precio.

En las negociaciones de letras, anotarán las fechas, puntos de expedición y de pago, términos y vencimientos, nombres del librador, endosante y pagador, los del cedente y tomador, y el cambio convenido.

En los seguros con referencia á la póliza, se expresarán, además del número y fecha de la misma, los nombres del asegurador y del asegurado, objeto del seguro, su valor según los contratantes, la prima convenida, y, en su caso, el lugar de carga y descarga, y precisa y exacta designación del buque ó del medio en que haya de efectuarse el transporte.

108. Dentro del día en que se verifique el contrato, entregarán los corredores colegiados á cada uno de los contratantes una minuta firmada, comprensiva de cuanto éstos hubieren convenido.

109. En los casos en que por conveniencia de las partes se extienda un contrato escrito[1]), el corredor certificará al pie de los duplicados[2]) y conservará el original.

110. Los corredores colegiados podrán, en concurrencia con los corredores intérpretes de buques, desempeñar las funciones propias de estos últimos, sometiéndose á las prescripciones de la sección siguiente de este título.

111. El Colegio de Corredores, donde no lo hubiere de Agentes, extenderá cada día de negociación una nota de los cambios corrientes y de los precios de las mercaderías; á cuyo efecto, dos individuos de la Junta sindical asistirán á las reuniones de la Bolsa, debiendo remitir una copia autorizada de dicha nota al Registro Mercantil.

Sección cuarta. De los corredores colegiados intérpretes de buques.

112. Para ejercer el cargo de corredor intérprete de buques, además de reunir las circunstancias que se exigen á los agentes mediadores en el art. 94, será necesario acreditar, bien por examen ó bien por certificado de establecimiento público, el conocimiento de dos lenguas vivas extranjeras.

---

[1]) Por virtud de lo dispuesto en el art. 190 de la L. del T. estos contratos se sujetarán al pago del impuesto gradual lo mismo que los que se eleven á escritura pública, ó sea con sujeción á la siguiente escala, inserta en el artículo 15:

Cuantía del documento.				Timbre	
				Clase	Precio Pesetas
Hasta	500	pesetas		11ª	1
Desde	500,01	hasta	1 000	10ª	2
„	1 000,01	„	1 500	9ª	3
„	1 500,01	„	2 000	8ª	4
„	2 000,01	„	2 500	7ª	5
„	2 500,01	„	3 500	6ª	7
„	3 500,01	„	5 000	5ª	10
„	5 000,01	„	12 500	4ª	25
„	12 500,01	„	25 000	3ª	50
„	25 000,01	„	37 500	2ª	75
„	37 500,01	„	50 000	1ª	100

cuya escala es sólo aplicable al primer pliego de la primera copia. — Las segundas y demás copias que se expidan, á instancia de los interesados para quienes se haya expedido la primera que respectivamente les corresponda, llevarán el timbre de 3 pesetas, clase 9ª á no ser que por su cuantía les corresponda papel de clase inferior con arreglo á la anterior escala. — Cuando la cuantía exceda de 50 000 pesetas, el primer pliego de la primera copia será de 100 pesetas, clase 1ª; pero antes de entregarse al interesado habrá de presentarse en la oficina liquidadora del impuesto de derechos reales á fin de pagar dos pesetas por cada 1000 ó fracción de 1000 que exceda de las expresadas 50 000. — El segundo y siguientes pliegos, tanto de la primera copia como de las demás, pagarán timbre de clase 11ª, ó sea de una peseta (art. 20 de la L. del T.).

[2]) Para el efecto del pago del impuesto del timbre estos duplicados son las copias de que se habla en la nota anterior.

from the assignee and pay to the assignor the value of the bills or endorsable instruments which have been negotiated.

107. Collegiate brokers shall note in their books, and by separate entries, all the operations in which they have intervened, stating the names and addresses of the contractors, and the subject-matter and conditions of the contracts.

In sales, they shall state the quality, quantity and price of the thing sold, the place and date of delivery, and the way in which the price is to be paid.

In bill transactions they shall note the dates, places of issue and payment, times and maturities, names of the drawer, endorser and payer, those of the assignor and assignee, and the agreed exchange.

With reference to the contracts of insurance, they shall state, besides the number and date thereof, the names of the insurer and assured, the subject-matter of the insurance, its value according to the contractors, the agreed premium, and the place of loading and unloading, if any, and the precise and exact description of the vessel or of the means by which the carriage is to be effected.

108. On the same day as the contract is made, Collegiate brokers shall deliver a signed note to each of the contractors, comprising the full particulars of the agreement.

109. When a contract is writtem out for the convenience of the parties[1]), the broker shall certify at the foot of the duplicates[2]) and shall preserve the original.

110. Collegiate brokers may, concurrently with the interpreting shipbrokers, discharge the duties proper to the latter, subject to the provisions of the following section of this Title.

111. Where there is no College of Exchange Brokers, the College of Brokers shall each business day draw up a note of the current exchanges and the prices of the merchandise; for which purpose, two members of the Governing Board shall be present at the meetings of the Exchange, and must send an authorised copy of the said note to the Mercantile Register.

Fourth Section. Collegiate interpreting Shipbrokers.

112. For performing the office of interpreting shipbroker, besides combining the particulars required of agents by art. 94, it shall be necessary to prove the knowledge of two living foreign languages, either by examination or by certificate of a public establishment.

[1]) By virtue of the provisions of art. 190 of the Stamp Act, these contracts will be subject to the payment of the same graduated tax as those which are contained in a notarial instrument, i.e. according to the following scale in art. 15: which scale only applies to the first sheet of the first copy.

Amount of the document				Stamp	
				Class	Price Pesetas
Not exceeding	500	pesetas		11.	1
From	500,01	to	1 000	10.	2
,,	1 000,01	,,	1 500	9.	3
,,	1 500,01	,,	2 000	8.	4
,,	2 000,01	,,	2 500	7.	5
,,	2 500,01	,,	3 500	6.	7
,,	3 500,01	,,	5 000	5.	10
,,	5 000,01	,,	12 500	4.	25
,,	12 500,01	,,	25 000	3.	50
,,	25 000,01	,,	37 500	2.	75
,,	37 500,01	,,	50 000	1.	100

The second and futher copies, issued at the instance of the interested persons to whom the first, to which they respectively belong, was issued, shall bear a stamp of 3 pesetas, class 9, unless its amount requires paper of an inferior class according to the preceding scale. When the amount exceeds 50 000 pesetas, the first sheet of the first copy shall be 100 pesetas, class 1; but before being delivered to the interested person, it must be produced at the office of Royal taxes for the purpose of paying two pesetas per 1000 or fraction of 1000 above the said 50 000. The second and third sheets, both of the first and subsequent copies, shall pay the stamp of class 11, that is, one peseta (art. 20 of the Stamp Act).

[2]) For the purpose of paying the stamp tax, these duplicates are the copies spoken of in the preceding note.

113. Las obligaciones de los corredores intérpretes de buques serán: 1.° Intervenir en los contratos de fletamento, de seguros marítimos y préstamos á la gruesa[1]), siendo requeridos; — 2.° Asistir á los capitanes y sobrecargos de buques extranjeros, y servirles de intérpretes, en las declaraciones, protestas y demás diligencias que les ocurran en los tribunales y oficinas públicas; — 3.° Traducir los documentos que los expresados capitanes y sobrecargos extran jeros hubieren de presentar en las mismas oficinas, siempre que ocurriere duda sobre su inteligencia, certificando estar hechas las traducciones bien y fielmente[2]); — 4.° Representar á los mismos en juicio cuando no comparezcan ellos, el naviero ó el consignatario del buque.

114. Será asimismo obligación de los corredores intérpretes de buques llevar: 1.° Un libro copiador de las traducciones que hicieren, insertándolas literalmente; — 2.° Un registro del nombre de los capitanes á quienes prestaren la asistencia propia de su oficio, expresando el pabellón, nombre, clase y porte del buque, y los puertos de su procedencia y destino; — 3.° Un libro diario de los contratos de fletamento en que hubieren intervenido, expresando en cada asiento el nombre del buque, su pabellón, matrícula y porte; los del capitán y del fletador; precio y destino del flete; moneda en que haya de pagarse; anticipos sobre el mismo, si los hubiere; los efectos en que consista el cargamento; condiciones pactadas entre el fletador y capitán sobre estadías, y el plazo prefijado para comenzar y concluir la carga[3]).

115. El corredor intérprete de buque conservará un ejemplar del contrato ó contratos que hayan mediado entre el capitán y el fletador.

Libro segundo. De los contratos especiales del comercio.

Título primero. De las compañías mercantiles.

Sección primera. De la constitución de las compañías y de sus clases.

116. El contrato de compañía, por el cual dos ó más personas se obligan á poner en fondo común bienes, industria ó alguna de estas cosas, para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituído con arreglo á las disposiciones de este Código.

Una vez constituída la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos.

117. El contrato de compañía mercantil celebrado con los requisitos esenciales del derecho[4]), será válido y obligatorio entre los que lo celebren, cualesquiera que sean la forma, condiciones y combinaciones lícitas y honestas con que lo constituyan, siempre que no estén expresamente prohibidas en este Código.

Será libre la creación de Bancos territoriales, agrícolas, y de emisión y descuento; de sociedades de crédito, de préstamos hipotecarios, concesionarias de obras públicas, fabriles, de almacenes generales de depósito, de minas, de formación de capitales y rentas vitalicias, de seguros, y demás asociaciones que tuvieren por objeto cualquiera empresa industrial ó de comercio.

118. Serán igualmente válidos y eficaces los contratos entre las compañías mercantiles y cualesquiera personas capaces de obligarse, siempre que fueren lícitos y honestos, y aparecieren cumplidos los requisitos que expresa el artículo siguiente.

---

1) Las pólizas relativas á los contratos de fletamento, préstamo á la gruesa é hipoteca naval, háganse ó no por escritura pública, estarán sujetos al pago del impuesto del timbre con arreglo á su cuantía, y á tenor de la escala proporcional transcrita en la pág. 105, nota 2 (art. 176 de la L. del T.). — En los seguros marítimos el impuesto se satisface anualmente por las empresas aseguradoras. (Vease la pág. 92, nota 3.)

2) Estas certificaciones están sujetas igualmente al pago del impuesto del timbre de 2 pesetas, clase 10ª (art. 183 L. del T.).

3) Todos estos libros, á tenor del articulo 155 de la L. del T. deben reintegrarse lo mismo que los libros Diario y Mayor de los comerciantes particulares. (Veanse la pág. 90, notas 1 y 2.)

4) Los requisitos esenciales del derecho son: capacidad en los contratantes, consentimiento válidamente prestado, objeto lícito y causa verdadera. La doctrina legal referente á estos extremos puede verse en la parte del Cód. c. transcrita entre los textos de las leyes complementarias del Cód. de com.

113. The duties of interpreting shipbrokers shall be: 1. To take part in contracts of affreightment, maritime insurance and bottomry loans[1]), when required; — 2. To assist masters and supercargoes of foreign vessels, and serve them as interpreters in the declarations, protests and other steps which they have to take in the tribunals and public offices; — 3. To translate the documents which the said foreign masters and supercagoes have to produce in the same offices, whenever there is any doubt as to their meaning, and to certify that these translations have been well and faithfully made[2]); — 4. To represent the same in court, when the shipowner or consignee of the vessel does not appear.

114. It shall likewise be the duty of interpreting shipbrokers to keep: 1. A copy-book of the translations made by them, and to insert them literally; — 2. A register of the masters to whom they render the assistance proper to their office, stating the flag, name, class and tonnage of the vessels, and their ports of origin and destination; — 3. A day-book of the contracts of affreightment in which they have taken part, stating in each entry the name of the vessel, her flag, register and tonnage; the names of the master and freighter; price and destination of the freight; the money in which it has to be paid; advances thereon, if any; the goods of which the cargo is composed; conditions about lay-days agreed between the freighter and master and the arranged time for beginning and ending the loading[3]).

115. The interpreting shipbrokers shall keep a copy of the contract or contracts which they have arranged between the master and the freighter.

Second Book. Special Commercial Contracts.

Title I. Mercantile Associations.

First Section. The constitution and kinds of associations.

116. The social contract, by which two or more persons bind themselves to place property to industry or one of them in a common fund for the purpose of profit, shall be mercantile, whatever be the kind thereof, provided that it is framed in accordance with the provisions of this Code.

When a mercantile association has been constituted, it shall be possessed of juridical personality in all its acts and contracts.

117. The contract of a mercantile association, made with the essential legal requisites[4]), shall be valid and binding on those who make it, whatever be the lawful and honourable form, conditions and combinations with which it is constituted, provided that they are not expressly prohibited by this Code.

The foundation of the following shall be free: territorial (land) and agricultural banks; banks of issue and discount; societies of credit, mortgage loans, concessionaires of public works, of manufactures, general deposit warehouses, of mines, for the formation of permanent and life annuities, of insurance, and other associations which have any industrial or commercial undertaking for their object.

118. Contracts between mercantile associations and any persons capable of binding themselves shall likewise be valid and effectual, provided that they are lawful and honourable, and the requirements expressed in the following article are complied with.

---

[1]) Contracts relating to affreightment, bottomry loan and maritime mortgage, whether by notarial instrument or not, shall be subject to the payment of the stamp tax, according to its amount, and the proportional scale set out on page 105, note 2 (art. 176 of the Stamp Act). In maritime insurances, the tax is paid annually by the insuring companies. (See page 92, note 3.)

[2]) These certificates are likewise subject to the payment of the Stamp tax of 2 pesetas, class 10 (art. 183 of the Stamp Act).

[3]) All these books, according to art. 155 of the Stamp Act, have to pay the same as the day-books and ledgers of individual merchants. (See page 90, notes 1 and 2.)

[4]) The essential requisites of the law are: legal capacity of the contractors; consent validly expressed, lawful object and true consideration. The legal doctrine referring to these requisites may be seen in the part of the Civil Code which is transcribed among the texts of the supplementary laws of the Commercial Code.

119. Toda compañía de comercio, antes de dar principio á sus operaciones, deberá hacer constar su constitución, pactos y condiciones, en escritura pública[1]) que se presentará para su inscripción en el Registro Mercantil, conforme á lo dispuesto en el art. 17[2]).

Á las mismas formalidades quedarán sujetas, con arreglo á lo dispuesto en el art. 25, las escrituras adicionales que de cualquiera manera modifiquen ó alteren el contrato primitivo de la compañía.

Los socios no podrán hacer pactos reservados, sino que todos deberán constar en la escritura social.

120. Los encargados de la gestión social que contravinieren á lo dispuesto en el artículo anterior, serán solidariamente responsables[3]) para con las personas extrañas á la compañía con quienes hubieren contratado en nombre de la misma.

121. Las compañías mercantiles se regirán por las cláusulas y condiciones de sus contratos, y, en cuanto en ellas no esté determinado y prescrito, por las disposiciones de este Código.

122. Por regla general, las compañías mercantiles se constituirán adoptando alguna de las siguientes formas: 1.ª La regular colectiva, en que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen á participar, en la proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones; — 2.ª La comanditaria, en que uno ó varios sujetos aportan capital determinado al fondo común, para estar á las resultas de las operaciones sociales dirigidas exclusivamente por otros con nombre colectivo; — 3.ª La anónima, en que formando el fondo común los asociados por partes ó porciones ciertas, figuradas por acciones ó de otra manera indubitada, encargan su manejo á mandatarios ó administradores amovibles que representen á la compañía bajo una denominación apropiada al objeto ó empresa á que destine sus fondos.

123. Por la índole de sus operaciones podrán ser las compañías mercantiles: Sociedades de crédito; — Bancos de emisión y descuento; — Compañías de crédito territorial; — Compañías de minas; — Bancos agrícolas; — Concesionarias de ferrocarriles, tranvías y obras públicas; — De almacenes generales de depósito; — Y de otras especies, siempre que sus pactos sean lícitos, y su fin la industria ó el comercio.

124. Las compañías mutuas de seguros contra incendios, de combinaciones tontinas sobre la vida para auxilios á la vejez, y de cualquiera otra clase, y las cooperativas de producción, de crédito ó de consumo, sólo se considerarán mercantiles, y quedarán sujetas á las disposiciones de este Código, cuando se dedicaren á actos de comercio extraños á la mutualidad, ó se convirtieren en sociedades á prima fija.

[1]) Estas escrituras habrán de liquidarse para el pago del impuesto del timbre, teniendo en cuenta su capital social, aunque no se desembolse desde luego, y del propio modo se liquidarán las escrituras de ampliación ó aumento de capital, en las que únicamente se exigirá la diferencia (art. 16, L. del T.).

[2]) El Consejo de Estado en pleno, en su informe de 14 de mayo de 1906, emitido para resolver las reclamaciones formuladas contra el Reglamento dictado por el Ministro de la Gobernación para el régimen y servicio de la Gaceta de Madrid y de la Guía Oficial de España, aceptado y transcrito por el propio Ministro en su Real Orden de 23 de julio del mismo año, ha declarado que, en lo que no ha sido derogada expresamente, está en vigor la Ley de 11—19 de octubre de 1869, y por tanto su artículo 3; el cual dispone, entre otras cosas, que las compañías, dentro del plazo de 15 días, á contar desde la fecha de su constitución, vendrán obligadas por medio de sus gerentes, administradores ó directores á presentar al Gobernador de la provincia en donde aquella tenga su domicilio, una copia autorizada de la escritura social, con sus estatutos ó reglamentos si los hubiere, así como del acta de constitución, para remitirla al Ministerio de Fomento. — También tendrán los expresados administradores la obligación de publicar en la Gaceta de Madrid y Boletín oficial de la provincia respectiva, dentro del indicado plazo, los referidos documentos para que lleguen á conocimiento del público (Apartado 9 del artículo 13 del citado Reglamento de la Gaceta aprobado por Real Orden de 23 de julio de 1906). — Téngase en cuenta que aun cuando los preceptos transcritos de esta Ley de 1869 no excluyen de su cumplimiento á ninguna compañía ó sociedad, no son sin embargo de aplicación más que á las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, ya que esta clase de sociedades estaban sujetas á la publicación de dicha Ley á una serie de trabas y restricciones extraordinarias. Y como el objeto de esta fué el decretar la libre creación de las referidas sociedades, las medidas acordadas en sustitución de las que quedaban derogadas sólo pueden considerarse exigibles respecto de estas.

[3]) La obligación solidaria que impone la ley á los encargados de la gestión social en este caso les hace responsables del pago de la totalidad de las deudas sociales, que pueden exigirse íntegramente de cualquiera de ellos.

119. Every commercial association, before beginning its operations, must cause its constitution, agreements and conditions to be set out in a notarial instrument[1]) which shall be produced for its inscription in the mercantile Register, according to the provision of art. 17[2]).

Additional instruments, which in any way modify or alter the original contract of the association, shall be subject to the same formalities, in accordance with the provisions of art. 25.

Members may not make secret agreements, but all must appear in the social instrument.

120. The persons in charge of the social management who contravene the provisions of the preceding article, shall be jointly and severally liable[3]) to the persons foreign to the association, with whom they have contracted in its name.

121. Mercantile associations shall be ruled by the terms and conditions of their contracts, and, so far as is not determined and prescribed therein, by the provisions of this Code.

122. As the general rule, mercantile associations shall be constituted by adopting one of the following forms: 1. The ordinary unlimited form, in which all the members, in the collective name, and under a social style, promise to share the same rights and obligations, in the proportion which they settle; — 2. The limited form, in which one or more persons bring fixed capital into the common fund, to abide by the results of the social operations, directed exclusively by others in the collective name; — 3. The limited form, in which the members who form the common fund in certain proportions, represented by shares or in some other undoubted manner, entrust its management to removable agents or administrators who represent the association under a denomination appropriate to the object or undertaking to which it applies its funds.

123. According to the nature of their operations, mercantile associations may be: Credit Societies; — Issuing and discount banks; — Companies of territorial credit (Land banks); — Mining companies; — Agricultural banks; — Concessionaires of railroads, tramways and public works; — Of general deposit warehouses; — And of other kinds, provided that their agreements are lawful, and their object, industry or commerce.

124. Mutual insurance companies against fire, tontine companies, or for insuring in favour of old age, and of all other kinds, co-operative producing companies for credit or for consumption, shall only be considered mercantile and be subject to the provisions of this Code, when they devote themselves to acts of commerce without mutual liability, or convert themselves into societies with a fixed premium.

[1]) These instruments must pay the stamp tax, according to their social capital, although it is not paid at once, and in the same way the instruments increasing the capital must pay the tax, but only on the difference in amount (art. 16 of the Stamp Act).

[2]) The Council of State, in its report of 14 May 1906, issued to decide on the complaints made against the regulation, issued by the Secretary of State for the Home Office for the government and service of the *Gaceta de Madrid* and of the *Guia Oficial de España*, and accepted and transcribed by the same Minister in his Royal Order of 23 July of the same year, plainly declared that, so far as it had not been expressly repealed, the Law of 11—19 of October 1869, and therefore its art. 3, was still in force; and this provides, among other things, that companies, within the term of 15 days, reckoned from the date of their constitution, shall be bound by means of their managers, administrators or directors, to present to the Governor of the Province in which they have their address, an authenticated copy of the social instrument, with their articles or regulations, if any, together with the minute of their foundation, to be sent to the Ministry de Fomento. Likewise, the said administrators shall be bound to publish the said documents in the *Gaceta de Madrid* and the *Boletin Oficial* of the respective Province, within the said term, in order that they may come to the knowledge of the public (Paragraph 9 of article 13 of the said Regulation of the *Gaceta* approved by Royal Order of 23 July 1906). It must be borne in mind that although the transcribed precepts of this law of 1869 do not exclude any company or society from fulfilling it, they do not apply except to limited companies and limited partnerships with share capital, seeing that, on the publication of the said law, this class of society was subject to a series of extraordinary trammels and restrictions. And, as the object thereof was to decree the free foundation of the said societies, the measures which were passed in substitution for those which were repealed, can only be considered to apply to these associations.

[3]) The joint and several obligation imposed by the law, of the persons in charge of the social management in this case, makes them liable for the payment of the whole of the social debts, which may be wholly demanded from any of them.

Sección segunda. De las compañías colectivas.

125. La escritura social de la compañía colectiva deberá expresar: El nombre, apellido y domicilio de los socios; — La razón social; — El nombre y apellido de los socios á quienes se encomiende la gestión de la compañía y el uso de la firma social; — El capital que cada socio aporte en dinero efectivo, créditos ó efectos, con expresión del valor que se dé á éstos ó de las bases sobre que haya de hacerse el avalúo; — La duración de la compañía; — Las cantidades que en su caso se asignen á cada socio gestor anualmente para sus gastos particulares[1]); — Se podrán también consignar en la escritura todos los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios quieran establecer.

126. La compañía colectiva habrá de girar bajo el nombre de todos sus socios, de algunos de ellos ó de uno solo, debiéndose añadir, en estos dos últimos casos, al nombre ó nombres que se expresen, las palabras «y compañía».

Este nombre colectivo constituirá la razón ó firma social, en la que no podrá incluirse nunca el nombre de persona que no pertenezca de presente á la compañía.

Los que, no perteneciendo á la compañía, incluyan su nombre en la razón social, quedarán sujetos á responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la penal si á ella hubiere lugar.

127. Todos los socios que formen la compañía colectiva, sean ó no gestores de la misma, estarán obligados personal y solidariamente, con todos sus bienes, á las resultas de las operaciones que se hagan á nombre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla.

128. Los socios no autorizados debidamente para usar de la firma social, no obligarán con sus actos y contratos á la compañía, aunque los ejecuten á nombre de ésta y bajo su firma.

La responsabilidad de tales actos en el orden civil ó penal, recaerá exclusivamente sobre sus autores.

129. Si la administración de las compañías colectivas no se hubiere limitado por un acto especial á alguno de los socios, todos tendrán la facultad de concurrir á la dirección y manejo de los negocios comunes, y los socios presentes se pondrán de acuerdo para todo contrato ú obligación que interese á la sociedad.

130. Contra la voluntad de uno de los socios administradores que expresamente la manifieste, no deberá contraerse ninguna obligación nueva; pero si, no obstante, llegare á contraerse, no se anulará por esta razón, y surtirá sus efectos, sin perjuicio de que el socio ó socios que la contrajeren respondan á la masa social del quebranto que ocasionaren.

131. Habiendo socios especialmente encargados de la administración, los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquéllos ni impedir sus efectos.

132. Cuando la facultad privativa de administrar y de usar de la firma de la compañía haya sido conferida en condición expresa del contrato social, no se podrá privar de ella al que la obtuvo; pero si éste usare mal de dicha facultad, y de su gestión resultare perjuicio manifiesto á la masa común, podrán los demás socios nombrar de entre ellos un coadministrador[2]) que intervenga en todas las ope-

---

[1]) Con arreglo á la Ley de 29 de marzo de 1900 creando el impuesto sobre utilidades de la riqueza mobiliaria pagarán los gerentes ó administradores de estas sociedades el 10% de dichas cantidades.

[2]) El nombramiento de coadministrador ha de solicitarse del juez por medio de expediente de jurisdicción voluntaria, pidiendo por escrito que se reciba información sobre la mala administración; y acreditado este extremo se nombre el coadministrador que ellos designen á tenor de lo prevenido en este artículo del Cód. de com.; de cuyo escrito se acompañará copia que será entregada al socio administrador en el acto de la citación que al efecto le haga el juez (art. 2162 de la Ley de Enjuiciamiento civil). El socio administrador objeto de este expediente podrá hacer en él una contrainformación en defensa de sus actos y presentar los documentos que la justifiquen (art. 2163 L. Enj. c.). Y practicadas que sean la información y la contrainformación, en el caso en que esta se intente, el juez oirá en comparecencia (es decir verbalmente) á los interesados y resolverá dictando un auto en el que acordará si procede ó no el nombramiento solicitado (art. 2164 L. Enj. c.); y nombrará en caso afirmativo á la persona designada por los socios promovedores del expediente; contra cuya designación podrá oirse al administrador intervenido, y si los motivos de su oposición fueren fundados, citará el juez á nueva comparecencia;

Second Section. Unlimited Partnerships.

125. The social instrument of an unlimited partnership must state: The name, surname and address of each partner; — The firm name; — The names and surnames of the partners to whom the management of the partnership and the use of the firm signature is entrusted; — The capital which each partner contributes in cash, credits or goods, expressing the value attributed to the latter or the bases on which their valuation has proceeded; — The duration of the partnership; — The annual amounts allotted to each managing partner for his private expenses[1]); — All other lawful agreements and special conditions which the partners wish to arrange may also be set out in the instrument.

126. An unlimited partnership must trade under the name of all its members, of some of them or of one alone, but in the last two cases, the words "y compañia" must be added to the names which are expressed.

This collective name shall constitute the style or signature of the firm, wherein the name of a person who does not actually belong to the partnership may never be included.

Persons who, while not belonging to the partnership, include their name in the social style, shall be subject to joint and several liability, without prejudice to any criminal liability which may be available.

127. All the members who form the unlimited partnership, whether they are managers thereof or not, shall be personally and jointly and severally bound, with all their property, by the results of the transactions made in the name and on account of the partnership, under the signature thereof, and by a person who is authorised to use it.

128. The members who are not duly authorised to use the social signature, shall not bind the partnership by their acts and contracts, although they carry them out in the name thereof and under its signature.

The civil or criminal liability for such acts shall fall exclusively upon their authors.

129. If the administration of unlimited partnerships is not confined to some one of the members by a special document, all shall have the power of joining in the direction and management of the partnership business, and the partners who are present may agree on every contract or obligation which interests the partnership.

130. No new obligation may be contracted against the wish of one of the managing partners, who manifests it expressly; but if, notwithstanding this, it is in fact contracted, it shall not be annulled for this reason, but shall take effect, without prejudice to the liability of the partner or partners who contracted it to the social estate for the damage occasioned.

131. When there are partners specially entrusted with the management, the others may not oppose or obstruct their operations or hinder the effects thereof.

132. When the exclusive power of management and of using the signature of the partnership has been conferred by an express condition in the contract of partnership, the person who has obtained it cannot be deprived thereof; but if he makes a bad use of this power, and his management causes manifest injury to the partnership estate, the other partners may appoint a joint manager[2]) from among them-

[1]) According to the Law of 29 March 1900, creating the tax on profits from moveable wealth, the managers or administrators of these partnerships will pay 10% on the said amounts.

[2]) The appointment of joint manager must be applied for to the judge by means of the course of voluntary jurisdiction, by a written application that information should be received about the bad management; and that on proof thereof, the joint manager nominated by them according to the provisions of this article of the Commercial Code, should be appointed; this writing must be accompanied by a copy which should be delivered to the managing partner at the time of the summons, issued for the purpose by the judge (art. 2162 of the Law of Civil Procedure). The managing partner against whom this file is directed, may attach thereto a counter-information in defence of his acts and present the justifying documents (art. 2163 of the Law of Civil Procedure). After both the information and the counter-information, if any, has been filed, the judge must hear the interested parties on their appearance (that is to say orally), and must decide by pronouncing a decree in which he must state whether the appointment applied for shall be made or not (art. 2164 of the Law of Civil Procedure); and in the affirmative case, he must appoint the person nominated by the partners who have promoted the matter; but the manager may be heard

raciones, ó promover la rescisión del contrato ante el juez ó tribunal competente, que deberá declararla, si se probare aquel perjuicio.

133. En las compañías colectivas, todos los socios, administren ó no, tendrán derecho á examinar el estado de la administración y de la contabilidad, y hacer, con arreglo á los pactos consignados en la escritura de la sociedad ó las disposiciones generales del derecho, las reclamaciones que creyeren convenientes al interés común[1]).

134. Las negociaciones hechas por los socios en nombre propio y con sus fondos particulares, no se comunicarán á la compañía ni la constituirán en responsabilidad alguna, siendo de la clase de aquellas que los socios puedan hacer lícitamente por su cuenta y riesgo[2]).

135. No podrán los socios aplicar los fondos de la compañía ni usar de la firma social para negocios por cuenta propia; y en el caso de hacerlo, perderán en beneficio de la compañía la parte de ganancias que, en la operación ú operaciones hechas de este modo, les pueda corresponder, y podrá haber lugar á la rescisión del contrato social en cuanto á ellos, sin perjuicio del reintegro de los fondos de que hubieren hecho uso, y de indemnizar además á la sociedad de todos los daños y perjuicios que se le hubieren seguido.

136. En las sociedades colectivas que no tengan género de comercio determinado, no podrán sus individuos hacer operaciones por cuenta propia sin que preceda consentimiento de la sociedad, la cual no podrá negarlo sin acreditar que de ello le resulta un perjuicio efectivo y manifiesto.

Los socios que contravengan á esta disposición, aportarán al acervo común el beneficio que les resulte de estas operaciones, y sufrirán individualmente las pérdidas si las hubiere.

137. Si la compañía hubiere determinado en su contrato de constitución el género de comercio en que haya de ocuparse, los socios podrán hacer lícitamente por su cuenta toda operación mercantil que les acomode, con tal que no pertenezca á la especie de negocios á que se dedique la compañía de que fueren socios, á no existir pacto especial en contrario.

138. El socio industrial no podrá ocuparse en negociaciones de especie alguna, salvo si la compañía se lo permitiere expresamente; y en caso de verificarlo, quedará al arbitrio de los socios capitalistas excluirlo de la compañía, privándole de los beneficios que le correspondan en ella, ó aprovecharse de los que hubiere obtenido contraviniendo á esta disposición.

139. En las compañías colectivas ó en comandita ningún socio podrá separar ó distraer del acervo común más cantidad que la designada á cada uno para sus gastos particulares; y si lo hiciere, podrá ser compelido á su reintegro como si no hubiese completado la porción del capital que se obligó á poner en la sociedad.

140. No habiéndose determinado en el contrato de compañía la parte correspondiente á cada socio en las ganancias, se dividirán éstas á prorrata de la porción de interés que cada cual tuviere en la compañía, figurando en la distribución los socios industriales, si los hubiere, en la clase del socio capitalista de menor participación.

141. Las pérdidas se imputarán en la misma proporción entre los socios capitalistas, sin comprender á los industriales, á menos que por pacto expreso se hubieren éstos constituído partícipes en ellas.

---

y si en ella no se pusieren de acuerdo los socios interesados en el nombramiento de coadministrador y el administrador, nombrará el juez á otra persona que habrán de designar de nuevo los mismos socios (art. 2165, L. Enj. c.).

[1]) Si el administrador ó los administradores no consintieren este examen de la administración ó de la contabilidad podrá acudirse por escrito al juez, y este ordenará que en el acto se le pongan de manifiesto al socio ó socios que lo soliciten los libros y documentos de la sociedad que quiera ó quieran examinar, y si, apesar de esto, se resistiere eladministrador ó administradores, adoptará el juez las medidas necesarias para obligarle al cumplimiento de lo mandado art. 2166, L. Enj. c.).

[2]) Este precepto lo ha reproducido haciéndolo extensivo á todo nombre comercial la Ley sobre propiedad industrial de 16 de mayo de 1902 en los términos que puede verse en la pág. 93, nota 1.

selves to intervene in all the operations, or may apply for rescission of the contract to the competent judge or tribunal, which shall declare the same, if that damage is proved.

133. In unlimited partnerships, all the members, whether they manage or not, shall be entitled to examine the state of the management and of the account-keeping, and to make the objections they think consistent with the common interest, in accordance with the agreements stated in the instrument of partnership[1]) or the general provisions of the law.

134. Transactions effected by partners in their own name and with their private funds, shall not be communicated to the partnership nor make it liable in any way, if they are of a kind which the partners may lawfully effect on their own account and at their own risk[2]).

135. Partners may not apply the funds of the partnership nor use the social signature for business on their own account; and in case of doing so, they shall lose for the benefit of the partnership, the part of the profits which belongs to them in the transaction or transactions effected in this way, and with regard to themselves, there may be rescission of the contract of partnership, without prejudice to the restoration of the funds of which they have made use, and to indemnifying the partnership for all damage which may result thereto.

136. In unlimited partnerships which have no defined class of commerce, their members shall not be able to effect transactions on their own account without the previous consent of the partnership, which may not refuse the same without proving that an actual and manifest injury would result therefrom.

Partners who infringe this provision shall bring the profit resulting from these transactions into the common fund, and shall personally bear the losses, if any.

137. If in its constitutive contract the partnership has defined the class of commerce in which it is to be engaged, the partners may lawfully effect on their own account every mercantile transaction which suits them, provided that it does not belong to the species of business to which the partnership in which they are partners devotes itself, unless there is a special agreement to the contrary.

138. An industrial partner may not engage in transactions of any kind, unless the partnership expressly permits it; and if he does so, the capitalist partners shall have the option of expelling him from the partnership, depriving him of the profits therein which belong to him, or of appropriating those which he has obtained by infringing this provision.

139. In unlimited and limited partnerships, no partner may withdraw or abstract from the common fund a greater amount than that appointed to each for his personal expenses; and if he does so, he may be compelled to repay it, as if he had not fully paid the portion of the capital which he was obliged to bring into the partnership.

140. If the share of each partner in the profits has not been determined in the contract of partnership, these shall be divided in proportion to the interest which each has in the partnership, the industrial partners, if any, figuring in the distribution in the same class as the capitalist partner with the least participation.

141. Losses shall be borne between the capitalist partners in the same proportion, without including the industrial partners, unless the latter have been made participants therein by express agreement.

---

against this nomination, and if the grounds of his opposition are well founded, the judge must summon to a new hearing; and if the partners interested in the appointment of the joint manager and the manager do not then come to terms, the judge must appoint another person whom the same partners must nominate afresh (art. 2165 of the Law of Civil Procedure).

[1]) If the manager or managers do not consent to this examination of the administration or account-keeping, a written application may be made to the judge, and he must at once order that the partnership books and documents, required to be examined, should be shown to the partner or partners applying therefor, and if the manager or managers refuse in spite of this, the judge must adopt the measures which are necessary to compel the carrying out of his order (art. 2166, of the Law of Civil Procedure).

[2]) The law on industrial ownership of 16 May 1902 reproduced this precept and extended it to every commercial name, in the terms which may be seen on page 93, note 1.

142. La compañía deberá abonar á los socios los gastos que hicieren, é indemnizarles de los perjuicios que experimentaren, con ocasión inmediata y directa de los negocios que aquélla pusiere á su cargo; pero no estará obligada á la indemnización de los daños que los socios experimenten, por culpa suya, caso fortuito ni otra causa independiente de los negocios, mientras se hubieren ocupado en desempeñarlos.

143. Ningún socio podrá transmitir á otra persona el interés que tenga en la compañía, ni sustituirla en su lugar para que desempeñe los oficios que á él le tocaren en la administración social, sin que preceda el consentimiento de lossocios.

144. El daño que sobreviniere á los intereses de la compañía por malicia, abuso de facultades ó negligencia grave de uno de los socios, constituirá á su causante en la obligación de indemnizarlo, si los demás socios lo exigieren, con tal que no pueda inducirse de acto alguno la aprobación ó la ratificación expresa ó virtual del hecho en que se funde la reclamación.

Sección tercera. De las compañías en comandita.[1)]

145. En la escritura social de la compañía en comandita constarán las mismas circunstancias que en la colectiva.

146. La compañía en comandita girará bajo el nombre de todos los socios colectivos, de algunos de ellos ó de uno solo, debiendo añadirse, en estos dos últimos casos, al nombre ó nombres que se expresen, las palabras «y compañía», y en todos, las de «sociedad en comandita».

147. Este nombre colectivo constituirá la razón social, en la que nunca podrán incluirse los nombres de los socios comanditarios.

Si algún comanditario incluyese su nombre ó consintiese su inclusión en la razón social, quedará sujeto, respecto á las personas extrañas á la compañía, á las mismas responsabilidades que los gestores, sin adquirir más derechos que los correspondientes á su calidad de comanditario.

148. Todos los socios colectivos, sean ó no gestores de la compañía en comandita, quedarán obligados personal y solidariamente á las resultas de las operaciones de ésta, en los propios términos y con igual extensión que los de la colectiva, según dispone el art. 127.

---

1) Las compañías comanditarias, tanto las ordinarias como las constituídas por acciones y las sociedades anónimas mercantiles ó industriales, hasta la publicación de la Ley de 27 de marzo de 1900, habían venido satisfaciendo sus cuotas al Tesoro con arreglo á las tarifas correspondientes de la contribución industrial y de comercio. Pero esta ley, que estableció la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, y que gravaba los beneficios obtenidos por el trabajo sin el concurso del capital, los del capital exclusivamente y los obtenidos conjuntamente por el trabajo y el capital en el ejercicio de industrias no gravadas en otra forma, imponía un tanto por ciento sobre las utilidades líquidas de las sociedades por acciones. Con este motivo surgieron dudas y diferencias de apreciación respecto á la inteligencia y alcance del indicado precepto que dieron lugar á una serie de disposiciones aclaratorias; hasta que, por último, la Ley de 3 de agosto de 1907 ha cortado de raíz todo esto, disponiendo, en su art. 2.°, que, á partir del 1.° de enero de 1908, tanto las sociedades anónimas como las comanditarias por acciones dedicadas á la fabricación, dejarán de tributar por la tarifa 3.ª de la contribución industrial y pagarán por las utilidades que obtengan, sujetándose en absoluto á la Ley de 1900, á la que ya estaban sujetas las sociedades anónimas y comanditarias por acciones de carácter puramente comercial. — En su consecuencia; desde el 1.° de enero de 1908 todas las sociedades por acciones, sean de la clase que sean, pagarán por los beneficios obtenidos, así como los accionistas de las mismas habrán de contribuir por razón de los dividendos que perciban. — Las sociedades, según la tarifa 3.ª de dicha Ley, pagarán: — El 15%, los Bancos de emisión; El 12%, las sociedades por acciones, excepto las mineras, y las que encargadas por arrendamiento ó concierto de servicios propios del Estado tengan estipulada con él la exención de la contribución industrial; Este mismo 12%, las compañías anónimas que exploten tranvías y demás concesiones, no siendo de ferrocarriles, sean ó no revertibles al Estado ó á los Municipios, el 7%, las compañías anónimas de ferrocarriles y las dedicadas á la explotación de canales y á la navegación; El 6%, las sociedades de producción y de consu moy las cooperativas de crédito, á excepción de las cooperativas de todas clases que pertenezcan á las clases obreras. — Los accionistas por su parte habrán de satisfacer: el 5% de los dividendos de las acciones de los Bancos de emisión; el 3% de los de las acciones de las sociedades anónimas de todas clases y de los de las compañías de ferrocarriles ó que exploten tranvías, canales y demás concesiones, sean ó no revertibles al Estado ó á los Municipios, y los de las acciones de las compañías anónimas dedicadas á la navegación, y el 2% de los de las acciones de las sociedades mineras. — Sobre todo esto hay que tener en cuenta que la nueva Ley de 3 de agosto de 1907 ha establecido un recargo de 10 céntimos.

142. The partnership must pay the partners the expenses which they incur, and indemnify them for the damage which they suffer, as the immediate and direct result of the business entrusted to them; but shall not be bound to indemnify the losses which the partners suffer by their own *culpa*, fortuitous event or other cause independent of the business, while they have been engaged in carrying it on.

143. No partner may transfer the interest which he has in the partnership to another person, nor substitute him in his place for discharging the duties which concern him in the social administration, without the previous consent of the partners.

144. Damage which results to the interests of the partnership through malice, abuse of powers or gross negligence of one of the partners, shall bind the partner who causes it to make it good, if the other partners so require, provided that express or implied approbation or ratification of the act on which the claim is based is not to be gathered from any act.

Third Section. Limited Partnerships.[1)]

145. In the social instrument of a limited partnership the same particulars shall be stated as in the case of the unlimited partnership.

146. A limited partnership shall trade under the name of all the unlimited partners, of some of them, or of only one, but in the last two cases they must add to the expressed name or names the words "y compañia", and in all cases, the words "sociedad en comandita".

147. This collective name shall constitute the style of the firm, wherein the names of the limited partners may never be included.

If any limited partner includes his name or consents to its inclusion in the style of the firm, he shall, with respect to persons foreign to the partnership, be subject to the same liabilities as the managing partners, without acquiring more rights than those which belong to him in his character of limited partner.

148. All the unlimited partners, whether they are managers of the limited partnership or not, shall be personally bound, both jointly and severally, by the results of the transactions thereof, in the same terms and to the like extent as those in an unlimited partnership according to art. 127.

---

1) Limited partnerships, whether ordinary or constituted with share capital, and mercantile or industrial limited companies, until the publication of the Law of 27 March 1900, had been paying their quotas to the treasury according to the scale of the industrial and commercial tax. But this law, which established the tax on profits from moveable wealth, and burdened the benefits obtained by labour without the aid of capital, by capital exclusively and by labour and capital jointly, in carrying on industries which were not taxed in any other way, imposed so much per cent on the net profits of societies with share capital. Thence arose doubts and differences of interpretation respecting the meaning and extent of the said provision, which occasioned a series of explanatory provisions; until, at last, the law of 3 August 1907 put a thorough stop to all this by providing in art. 2 that from 1 January 1908, both limited companies and limited partnerships with share capital, which are devoted to manufacture, shall cease to pay by scale 3 of the industrial tax and shall pay on the profits which they obtain, and be absolutely subject to the Law of 1900, to which both limited companies and limited partnerships with share capital of a purely commercial character were already subject. Consequently, from 1 January 1908, all societies with share capital, of whatever kind they are, must pay on the profits obtained, and their shareholders must pay on the dividends which they receive. According to scale 3 of the said Law, the societies will pay: 15%. Banks of issue; 12%, societies with share capital, except mining companies, and those which, being charged by lease or agreement with services proper to the State, have therein stipulated for exemption from the industrial tax; The same 12%, limited companies which exploit tramways and other concessions, not being railroads, whether revertible to the State or Municipalities or not; 7% limited railroad companies and those for exploiting canals and for navigation; 6%, societies for production and distribution, cooperative credit societies, except all kinds of cooperative society which belong to the working classes. Shareholders on their part have to pay: 5% on the share dividends of banks of issue; 3% on the share dividends of limited companies of all kinds and of railroad companies and of those which exploit tramways, canals and other concessions, whether revertible to the State or Municipalities or not, and on shares of limited companies dedicated to navigation, and 2% on the share dividends of mining companies. Besides all this it must be remembered that the new law of 3 August 1907 has established a new tax of 10 céntimos. By laws of 29 Dec. 1910 this was reduced to 5 céntimos but a tax on capital was imposed, and permanent corporations were also subjected to a tax of $^1/_4$% on their property of all descriptions.

Tendrán además los mismos derechos y obligaciones que respecto á los socios de la compañía colectiva quedan prescritos en la sección anterior.

La responsabilidad de los socios comanditarios por las obligaciones y pérdidas de la compañía, quedará limitada á los fondos que pusieren ó se obligaren á poner en la comandita, excepto en el caso previsto en el art. 147.

Los socios comanditaros no podrán hacer acto alguno de administración de los intereses de la compañía, ni aun en calidad de apoderados de los socios gestores.

149. Será aplicable á los socios de las compañías en comandita lo dispuesto en el art. 144.

150. Los socios comanditarios no podrán examinar el estado y situación de la administración social sino en las épocas y bajo las penas que se hallen prescritas en el contrato de constitución ó sus adicionales.

Si el contrato no contuviese tal prescripción, se comunicará necesariamente á los socios comanditarios el balance de la sociedad á fin de año, poniéndoles de manifiesto, durante un plazo que no podrá bajar de quince días, los antecedentes y documentos precisos para comprobarlo y juzgar de las operaciones.

Sección cuarta. De las compañías anónimas.[1])

151. En la escritura social de la compañía anónima deberá constar: El nombre, apellido y domicilio de los otorgantes; — La denominación de la compañía; — La designación de la persona ó personas que habrán de ejercer la administración, y modo de proveer las vacantes; — El capital social, con expresión del valor que se haya dado á los bienes aportados que no sean metálico, ó de las bases según las que habrá de hacerse el avalúo; — El número de acciones en que el capital social estuviere dividido y representado; — El plazo ó plazos en que habrá de realizarse la parte de capital no desembolsado al constituirse la compañía, expresando en otro caso quién ó quiénes quedan autorizados para determinar el tiempo y modo en que hayan de satisfacerse los dividendos pasivos; — La duración de la sociedad; — Las operaciones á que destine su capital; — Los plazos y forma de convocación y celebración de las juntas generales ordinarias de socios, y los casos y el modo de convocar y celebrar las extraordinarias; — La sumisión al voto de la mayoría de la junta de socios, debidamente convocada y constituída, en los asuntos propios de su deliberación; — El modo de contar y constituirse la mayoría, así en las juntas ordinarias como en las extraordinarias, para tomar acuerdo obligatorio.

Se podrá además consignar en la escritura todos los pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente establecer.

152. La denominación de la compañía anónima será adecuada al objeto ú objetos de la especulación que hubiere elegido.

No se podrá adoptar una denominación idéntica á la de otra compañía preexistente.

153. La responsabilidad de los socios en la compañía anónima por las obligaciones y pérdidas de la misma, quedará limitada á los fondos que pusieron ó se comprometieron á poner en la masa común.

154. La masa social, compuesta del fondo capital y de los beneficios acumulados, será la responsable, en las compañías anónimas, de las obligaciones contraídas, en su manejo y administración, por persona legítimamente autorizada, y en la forma prescrita en su escritura, estatutos ó reglamentos.

155. Los administradores de la compañía anónima serán designados por los socios en la forma que determinen su escritura social, estatutos ó reglamentos[2]).

156. Los administradores de las compañías anónimas son sus mandatarios, y, mientras observen las reglas del mandato, no estarán sujetos á responsabilidad perso-

---

[1]) Véase la nota anterior

[2]) Los administradores, consejeros, directores, gerentes, comisionados, delegados, representantes, etc., de las sociedades mercantiles de todas clases pagarán por el impuesto de utilidades el 10% de sus sueldos, dietas, asignaciones, retribuciones ó gratificaciones ordinarias ó extraordinarias que disfruten por razón de sus cargos; á excepción de los jefes de las sucursales, cualquiera que sea su nombre, que figuren en el escalafón de empleados de la sociedad y disfruten de sueldo fijo, que satisfarán el 5% tan sólo, salvo si se tratare de sucursales de sociedades extranjeras cuyos jefes se considerarán como directores de las mismas para los efectos de esta contribución. — Los nombramientos de los consejeros de las sociedades anónimas y los de los directores, gerentes, administradores ó representantes de las sociedades se reintegrarán con timbre de 25 pesetas, clase 4ª (art. 180 de la L. del T.).

They shall likewise have the same rights and obligations as are provided in the preceding Section with regard to the members of an unlimited partnership.

The liability of the limited partners for the obligations and losses of the partnership, shall be confined to the funds which they contribute or are bound to contribute to the partnership, except in the case provided for by art. 147.

Limited partners cannot perform any act of administering the interests of the partnership, not even as attorneys of the managing partners.

149. The provisions of art. 144 shall apply to members of limited partnerships.

150. Limited partners cannot examine the condition and position of the social administration, except at the times and under the penalities which are provided in the constitutive contract or in any additions thereto.

If the contract does not contain that provision, the balance sheet of the partnership shall of necessity be communicated to the limited partners at the end of the year, and the preceding balance sheets and the documents necessary to vouch it and judge of the transactions, must be exhibited for a time which may not be less than fifteen days.

Fourth Section. Limited Companies.[1]

151. The social instrument of a limited company must state; The names, surnames and addresses of the persons who execute it; — The denomination of the company; — The designation of the person or persons who are to carry on the administration, and the mode of supplying vacancies; — The capital, with a statement of the value attributed to the contributed assets which are not cash, or the bases on which the valuation has to be made; — The number of shares by which the capital is divided and represented; — The time or times at which the part of the capital which is not paid at the formation of the company is to be paid up, or stating the person or persons authorised to fix the time and manner in which the calls have to be paid; — The duration of the company; — The transactions for which its capital is intended; — The times and form of summoning and holding the ordinary general meetings of members, and the occasions and manner of summoning and holding the extraordinary meetings; — The submission to the vote of the majority of the meeting of members, when duly summoned and constituted, in matters proper for their deliberation; — The mode of counting and constituting the majority, for passing a binding resolution, both in the ordinary and extraordinary meetings.

All lawful agreements and special conditions which the members think fit to establish, may likewise be set out in the instrument.

152. The denomination of a limited company shall be adapted to the object or objects of the chosen venture.

It cannot adopt a denomination which is identical with that of another preexisting company.

153. The liability of the members of a limited company for the obligations and losses thereof, shall be confined to the funds which they contribute or have promised to contribute to the common estate.

154. The common estate, composed of the capital fund and accumulated profits shall be that which is liable, in limited companies, for the obligations contracted in its management and administration, by a lawfully authorised person, and in the way prescribed by its constitution or bye-laws.

155. The administrators (general managers) of a limited company shall be appointed by the members as determined by its constitution or bye-laws[2]).

156. The administrators of limited companies are their agents, and as long as they observe the rules of the mandate, shall not be subject to personal or joint or

---

[1]) See the preceding note.

[2]) The administrators, counsellors, directors, managers, agents, delegates, representatives, etc., of mercantile societies of all kinds pay as the tax on profits, 10% of their ordinary or extraordinary salaries, allowances, participations, remunerations or gratuities which they enjoy by virtue of their offices; with the exception of the chiefs of the branches, of whatever denomination they be, who figure in the list of employés of the society, and enjoy a fixed salary, who only pay 5%, except in the case of branches of foreign societies, the chiefs whereof are considered as directors for the purpose of this tax. Appointments of counsellors of limited companies and those of the directors, managers, administrators or representatives of companies pay with a 25 peseta stamp, class 4 (art. 180 of the Stamp Act).

nal ni solidaria por las operaciones sociales; y si, por la infracción de las Leyes y estatutos de la compañía, ó por la contravención á los acuerdos legítimos de sus juntas generales, irrogaren perjuicios y fueren varios los responsables, cada uno de ellos responderá á prorrata.

157. Las compañías anónimas tendrán obligación[1]) de publicar mensualmente en la *Gaceta* el balance detallado de sus operaciones, expresando el tipo á que calculen sus existencias en valores y toda clase de efectos cotizables.

158. Los socios ó accionistas de las compañías anónimas no podrán examinar la administración social ni hacer investigación alguna respecto á ella, sino en las épocas y en la forma que prescriban sus estatutos y reglamentos.

159. Las compañías anónimas existentes con anterioridad á la publicación de este Código, y que vinieren rigiéndose por sus reglamentos y estatutos, podrán elegir entre continuar observándolos ó someterse á las prescripciones del Código.

Sección quinta. De las acciones.

160. El capital social de las compañías en comandita, perteneciente á los socios comanditarios, y el de las compañías anónimas, podrá estar representado por acciones ú otros títulos equivalentes[2]).

[1]) Esta obligación, sin sanción alguna, no se cumplía por parte de las compañías, pero al arrendarse el servicio de la publicación de la Gaceta la empresa arrendataria ha recabado del Ministro de la Gobernación la publicación del Reglamento de la Gaceta y en el apartado 10 del artículo 13 del mismo se reproduce esta prescripción. — Comprendiendo el Consejo de Estado, al emitir su informe de 14 de mayo de 1906, que esta prescripción ha de resultar una carga demasiado sonerosa para las sociedades anónimas de pequeño capital, aconseja al Gobierno que por el Ministerio de Gracia y Justicia se redacte el oportuno proyecto de ley reformando este artículo del Cód. de com. en el sentido de que para las indicadas sociedades sea anual la obligación de publicar sus balances en la Gaceta. Por ley de 25 Junio de 1908. «Las Compañias anónimas tendran obligación de publicar anualmente en la Gaceta el balance detallado de su situación económica, expresando el típo á que calculen sus existencias en valores y toda clase de efectos cotisables»; asi sustituyendose el art. autiguo por el art. nuevo.

[2]) Por derechos de timbre han de satisfacer las acciones, certificados ó extractos de las mismas que no expresen valor alguno, ó sean de parte alícuota de un capital que no se determine, como fijo, un timbre de 2 pesetas, clase 10a, por cada acción ó fracción (art. 159 de la L. del T.). — Si son representativas de cantidad fija, ó bien de parte alícuota de capital fijo; si su duración no excede de 10 años pagarán con arreglo á la siguiente escala:

Cuantía de la acción.				Timbre Clase	Timbre Precio Pesetas
Hasta	50	pesetas		12a	0,10
Desde	50,01	hasta	500	11a	1,00
,,	500,01	,,	1 000	10a	2,00
,,	1 000,01	,,	1 500	9a	3,00
,,	1 500,01	,,	2 000	8a	4,00
,,	2 000,01	,,	2 500	7a	5,00
,,	2 500,01	,,	3 500	6a	7,00
,,	3 500,01	,,	5 000	5a	10,00
,,	5 000,01	,,	12 500	4a	25,00
,,	12 500,01	,,	25 000	3a	50,00
,,	25 000,01	,,	37 500	2a	75,00
,,	37 500,01	,,	50 000	1a	100,00

Cuando excedan de 50 000 pesetas llevarán, además, los timbres móviles correspondientes á la diferencia, á razón de 2 pesetas por cada 1000 pesetas ó fracción de ellas (art. 158 de la L. del T.). — Si las acciones fueren de una duración superior á 10 años pagarán el doble de lo indicado en la anterior escala (art. 165 de la L. del T.). Y si fueren extranjeras, para poder circular en España, llevarán el mismo timbro que las españolas, en la forma y modo que se determine en el Reglamento para la ejecución de esta Ley; pudiéndose, para facilitar su circulación, fijar un tanto alzado (art. 162 de la L. del T.). — A más de este timbre fijo satisfarán las acciones por razón de timbre de negociación ó transmisión el 1 por 1000 de su valor efectivo al tipo medio de su cotización en el año precedente, ó en el tiempo menor transcurrido desde la emisión. Para que se tome como base el tipo medio de cotización será preciso que hayan sido objeto de alguna cotización en seis meses distintos con respecto á un año, y en otro caso su capitalización se hará como si no fueren cotizables ó sea tomando como base el capital que á razón de 5% resulte del dividendo repartido en el año precedente, y en su defecto por evaluación (art. 169 de la L. del T.). — Las sociedades extranjeras por acciones quedan obligadas en equivalencia de este timbre de negociación ó transmisión al

several liability for the social operations; and if, through infringement of the laws and constitution of the company, or through breach of the lawful resolutions of their general meetings, they cause damage and several persons are responsible, each of them shall be liable *pro rata*.

157. Limited companies shall be bound[1]) to publish monthly in the *Gaceta* a detailed balance sheet of their operations, stating the figure at which they calculate their holdings in securities and every kind of quotable effects.

158. Members or shareholders of limited companies cannot examine the social administration or make any investigation with regard thereto, except at the times and in the way prescribed by their constitution and bye-laws.

159. Limited companies existing prior to the publication of this Code, and which are governed by their bye-laws and constitution, may elect to continue to observe them or to submit to the provisions of this Code.

Fifth Section. Shares.

160. The social capital of limited partnerships which belongs to the limited partners, and that of limited companies, may be represented by shares or other equivalent titles[2]).

[1]) This obligation, which had no sanction attached to it, was not complied with on the part of the companies, but on making the contract for the publication of the *Gaceta*, the lessee company applied for and obtained from the Minister of the Home Office, the publication of the Regulation of the *Gaceta*, and in paragraph 10 of article 13 thereof this provision is reproduced. On issuing its report of 14 May 1906, the Council of State, understanding that this provision had resulted in a charge which was too onerous for limited companies with a small capital, advised the Government that a suitable bill should be drawn up by the Minister of Grace and Justice to amend this article of the Commercial Code in the sense that for such companies the obligation of publishing their balance sheets in the *Gaceta* should be annual. By the law of 25 June 1908 the following was substituted for this art. 157, "Limited companies shall be bound to publish yearly in the *Gaceta* a detailed balance-sheet of their economic position, stating the figure at which they calculate their holdings in securities and every kind of quotable effects".

[2]) For Stamp duty, shares, certificates or extracts thereof which do not state any value, that is to say, an aliquot part of a capital which is not fixed, must pay a stamp of 2 pesetas, class 10, for each share or fraction thereof (art. 159 of the Stamp Act). If they represent a fixed amount or aliquot part of fixed capital and if its duration does not exceed 10 years, they will pay according to the following scale:

Amount of the share					Stamp	
					Class	Price Pesetas
Not exceeding	50	pesetas			12.	0,10
From	50,01	to	500		11.	1,00
,,	500,01	,,	1 000		10.	2,00
,,	1 000,01	,,	1 500		9.	3,00
,,	1 500,01	,,	2 000		8.	4,00
,,	2 000,01	,,	2 500		7.	5,00
,,	2 500,01	,,	3 500		6.	7,00
,,	3 500,01	,,	5 000		5.	10,00
,,	5 000,01	,,	12 500		4.	25,00
,,	12 500,01	,,	25 000		3.	50,00
,,	25 000,01	,,	37 500		2.	75,00
,,	37 500,01	,,	50 000		1.	100,00

When they exceed 50 000 pesetas they must also bear adhesive stamps corresponding to the difference, at the rate of 2 pesetas per 1000 pesetas or fraction thereof (art. 158 of the Stamp Act). If the shares are of a greater duration than 10 years, they must pay double that indicated on the above scale (art. 165 of the Stamp Act). If they are foreign shares, they must bear, for circulation in Spain, the same stamp as the Spanish shares, as determined by the Regulation for carrying this law into effect; and, for facilitating their circulation, they may fix a lump sum (art. 162 of the Stamp Act). Besides this fixed stamp, shares have to pay the negotiation or transfer stamp of 1 per 1000 of their actual value at the middle price quoted in the preceding year, or in any less time which has expired since their issue. In order that the middle quoted price may be taken as the basis, it is necessary that it should have been the subject of some quotation in six distinct months in the year, and in any other case, its capitalisation must be ascertained as if the shares were not quotable, that is, by taking as the basis, the capital which at 5% results from the dividend paid in the previous year, and in default thereof, by valuation (art. 169 of the Stamp Act). Foreign companies with share capital are obliged to pay, as the equivalent of this stamp on negotiation

161. Las acciones podrán ser nominativas ó al portador.

162. Las acciones nominativas deberán estar inscritas en un libro que llevará al efecto la compañía, en el cual se anotarán sus sucesivas transferencias[1]).

163. Las acciones al portador estarán numeradas y se extenderán en libros talonarios[2]).

164. En todos los títulos de las acciones, ya sean nominativas ó al portador, se anotará siempre la suma de capital que se haya desembolsado á cuenta de su valor nominal, ó que están completamente liberadas.

En las acciones nominativas, mientras no estuviese satisfecho su total importe, responderán del pago de la parte no desembolsada, solidariamente y á elección de los administradores de las compañías, el primer suscritor ó tenedor de la acción, su cesionario y cada uno de los que á éste sucedan, si fueren transmitidas, contra cuya responsabilidad, así determinada, no podrá establecerse pacto alguno que la suprima.

Entablada la acción para hacerla efectiva contra cualquiera de los enumerados en el párrafo anterior, no podrá intentarse nueva acción contra otro de los tenedores ó cedentes de las acciones, sino mediante prueba de la insolvencia del que primero ó antes hubiere sido objeto de los procedimientos.

Cuando las acciones no liberadas sean al portador, responderán solamente del pago de sus dividendos los que se muestren como tenedores de las mismas acciones. Si no compareciesen, haciéndose imposible toda reclamación personal, las compañías podrán acordar la anulación de los títulos correspondientes á las acciones por las que se hubieren dejado de satisfacer los dividendos exigidos para el completo pago del valor de cada una. En éste caso las compañías tendrán la facultad de expedir títulos duplicados de las mismas acciones, para enajenarlos á cuenta y cargo de los tenedores morosos de los anulados.

Todas las acciones serán nominativas hasta el desembolso de 50 por 100 del valor nominal. Después de desembolsado este 50 por 100, podrán convertirse en acciones al portador, si así lo acordasen las compañías en sus estatutos, ó por actos especiales posteriores á los mismos.

165. No podrán emitirse nuevas series de acciones mientras no se haya hecho el desembolso total de la serie ó series emitidas anteriormente. Cualquier pacto

---

pago del impuesto de 1 por 1000 anual sobre los capitales, así fijos como circulantes, que tengan destinados, ó que destinen en lo sucesivo, á sus operaciones ó negocios en España. En este segundo caso, las personas ó entidades que las representen en España han de dar conocimiento al Centro directivo del ramo, por conducto de la respectiva Delegación de Hacienda, en el plazo de un mes, á contar desde el día en que comiencen sus operaciones, de la razón social bajo que la respectiva sociedad esté constituída, clase de operaciones ó negocios á que se dedique en España, é importe de los capitales que destine á los mismos, acompañando á su declaración una certificación de estar inscrita en el Registro mercantil. Esto mismo harán siempre que los capitales declarados se aumenten ó disminuyan. — Las declaraciones de los capitales que están destinados á dichas operaciones ó negocios, se justificarán también con las indicadas certificaciones; y en todos los casos que quedan determinados, se comprobarán por dos peritos, uno nombrado por el Centro directivo del ramo y el otro por la sociedad interesada; y en caso de discordia ó de conveniencia en interés del Estado, por un tercero, nombrado por el Ministro de Hacienda, quien resolverá fijando sin ulterior recurso, los capitales que deban tributar. Los capitales que se fijen serán revisados cada tres años, observándose las mismas formalidades, á no ser que se presente declaración de haber sido aumentados ó disminuídos, en cuyo caso, dicho período comenzará á contarse desde la fecha de la resolución que sobre la misma se dicte. — En el caso de que las sociedades no presenten la correspondiente declaración en el plazo indicado, ó dejen de nombrar perito en el que se les señale para que las represente en la comprobación, se procederá de oficio por la Administración á determinar los capitales que deban tributar, fijándose estos en definitiva y sin ulterior recurso, por el Ministro de Hacienda (art. 170 de la L. del T.). — Las sociedades extranjeras de seguros satisfarán el impuesto anual del 1 por 1000 tan sólo sobre los capitales que garanticen sus operaciones en España, á cuyo propósito deberán presentar al final de cada año, en el Centro directivo del ramo, su Balance general de situación y demás documentos que la Administración considere necesarios. — Tanto estas sociedades como las demás extranjeras deberán reintegrar los libros de sus direcciones ó sucursales en España como queda dicho para las sociedades españolas. (Véase la nota 2, pág. 96) (art. 171, L. del T.) — Este 1 por 1000 que han de satisfacer tanto las sociedades españolas como las extranjeras se pagará por las mismas en metálico, como responsables directas para el Tesoro (art. 169 L. del T.).

[1]) Estos libros habrán de reintegrarse del mismo modo que los libros de contabilidad de las sociedades. (Véase la pág. 96, nota 2.)

[2]) En los talones ó matrices de estos libros es en los que han de fijarse los timbres correspondientes á las acciones. (Véase la pág. 113, nota 2.)

161. Shares may be nominal or to bearer.

162. Nominal shares must be registered in a book which the company shall keep for that purpose, in which their successive transfers shall be entered[1]).

163. Bearer shares shall be numbered and written out in counterfoiled books[2]).

164. In all share certificates, whether nominal or bearer, there shall always be noted the amount of the capital which has been paid up on account of their nominal value, or that they are fully paid.

As long as nominal shares are not fully paid, the first subscriber or holder of the shares, his transferee and each succeeding transferee, if they have been transferred, shall be liable for the payment of the unpaid part, both jointly and severally and at the election of the administrators of the companies, and no agreement may be set up to extinguish this liability, thus determined.

When once an action has been commenced to make the liability effective against any one of the persons enumerated in the preceding paragraph, a fresh action cannot be brought against another of the holders or assignees of the shares, except on proof of the insolvency of the person who had been the object of the proceedings in the first or previous place.

When partly paid shares are to bearer, those who are shown to be holders thereof shall alone be liable for the payment of the calls thereon. If they do not appear, and thus make personal claims impossible, the companies may resolve to annul the certificates representing the shares in respect of which the calls required for the full payment of the value of each have not been paid. In this case the companies shall have the power to issue duplicate certificates of the same shares, in order to sell them on account and at the charge of the holders who are in default with regard to those which are annulled.

All shares shall be nominal until the payment of 50 per cent. of the nominal value. After this 50 per cent. has been paid, they may be converted into bearer shares, if the companies so decide by their constitution, or by special act subsequent thereto.

165. New series of shares may not be issued so long as full payment has not been made on the series, whether one or more, previously issued. Any agreement

---

or transfer, a tax of 1 per 1000 a year on their capitals, both fixed and circulating, which they have applied or may thereafter apply to their operations or business in Spain. In this latter case, the persons or entities who represent them in Spain must give notice to the Centro directivo, through the proper Delegación of the Exchequer, within the space of one month, reckoned from the day on which they commence their operations, of the social style under which the company is formed, the class of operations or business to which it is devoted in Spain, and the amount of capital intended therefor, accompanying their declaration with a certificate of being inscribed on the Mercantile Register. They must do the same whenever their declared capitals are increased or diminished. The declarations of the capitals which are intended for the said operations or business, must likewise be proved by like certificates; and in all cases in which they are fixed, they must be verified by two experts, one appointed by the Centro directivo and the other by the interested company; and in case of disagreement or if the interest of the State so requires, by a third, appointed by the Chancellor of the Exchequer, who will decide and fix the capitals which have to pay the tax, without further appeal. The fixed capitals must be reviewed every three years, with observance of the same formalities, unless a declaration is presented that they have been increased or diminished, in which case the said period will commence to run from the date of the decision pronounced thereon. In case the companies do not present the corresponding declaration within the said time, or fail to nominate the expert within the time appointed, for representing them at the verification, the Administration must proceed on their own account to determine the capitals which have to pay the tax, these being finally fixed by the Chancellor of the Exchequer without further appeal (art. 170 of the Stamp Act). Foreign insurance societies will only pay the annual tax of 1 per 1000 on the capitals which guarantee their operations in Spain, for which purpose, they must at the end of each year present to the Centro directivo, their general balance sheet showing their position, and the other documents which the Administration may consider necessary. Both these societies and other foreign companies must pay on their central and branch books in Spain as has been explained of Spanish societies. (See note 2, page 96, art. 171 of the Stamp Act). This 1 per 1000 which both Spanish and foreign societies have to pay, must be paid by them in cash, as liable directly to the Treasury (art. 169 of the Stamp Act).

[1]) These books must pay the same as the societies' accounts books, (See page 96, note 2).

[2]) The counterfoils of these books is where the stamps which correspond to the shares have to be fixed. (See page 113, note 2.)

en contrario, contenido en la escritura de constitución de sociedad, en los estatutos ó reglamentos, ó cualquier acuerdo tomado en junta general de socios, que se oponga á éste precepto, será nulo y de ningún valor.

166. Las compañías anónimas únicamente podrán comprar sus propias acciones con los beneficios del capital social para el solo efecto de amortizarlas.

En caso de reducción del capital social, cuando procediese conforme á las disposiciones de éste Código, podrán amortizarlas también con parte del mismo capital, empleando al efecto los medios legales que estimen convenientes.

167. Las compañías anónimas no podrán prestar nunca con la garantía de sus propias acciones.

168.[1]) Las sociedades anónimas reunidas en junta general de accionistas previamente convocada al efecto, tendrán la facultad de acordar la reducción ó el aumento del capital social, y la modificación ó disolucion de la Sociedad.

En ningún caso podrán tomarse estos acuerdos en las juntas ordinarias, si en la convocatoria ó con la debida anticipación no se hubiese anunciado la discusión y votación sobre todos los asuntos que expresa el párrafo anterior, ó sobre aquel acerca del cual haya de recaer acuerdo.

Los estatutos de cada Compañía determinarán el número de socios y participación de capital que habrán de concurrir á las juntas en que hayan de tomarse estos acuerdos, sin que en ningún caso pueda ser la representación de los socios inferior á los dos tercios de su número y la del capital á las dos terceras partes de su cuantía, si son nominativas las acciones que lo constituyen. Si fueran al portador bastará la representación de las dos terceras partes del capital.

Si en la primera convocatoria no se reunieran las mayorias establecidas en el párrafo anterior podrá hacerse segunda convocatoria siempre que los estatutos no lo prohiban, para tratar tan sólo de los asuntos objeto de la primera, y los acuerdos que se adopten serán válidos cuando concurran á ellos la mitad más uno del número de socios y la representación de la major parte del capital social, si las acciones son nominativas, á esta representación solamenta, si las acciones son al portador.

Los administradores podrán cumplir desde luego el acuerdo de reducción tomado legalmente por la junta general, si el capital efectivo restante, después de hecha, excediere en un 75 por 100 del importe de las deudas y obligaciones de la compañía.

En otro caso, la reducción no podrá llevarse á efecto hasta que se liquiden y paguen todas las deudas y obligaciones pendientes á la fecha del acuerdo, á no ser que la compañía obtuviere el consentimiento previo de sus acreedores.

Para la ejecución de este artículo, los administradores presentarán al juez ó tribunal un balance en el que se apreciarán los valores en cartera al tipo medio de cotización del último trimestre, y los inmuebles por la capitalización de sus productos según el interés legal del dinero.

169. No estarán sujetos á represalias en caso de guerra los fondos que de la pertenencia de los extranjeros existieren en las sociedades anónimas.

Sección sexta. Derechos y obligaciones de los socios.

170. Si, dentro del plazo convenido, algún socio no aportare á la masa común la porción del capital á que se hubiere obligado, la compañía podrá optar entre proceder ejecutivamente[2]) contra sus bienes para hacer efectiva la porción del capital que hubiere dejado de entregar, ó rescindir el contrato en cuanto al socio remiso, reteniendo las cantidades que le correspondan en la masa social.

171. El socio que por cualquier causa retarde la entrega total de su capital, transcurrido el término prefijado en el contrato de sociedad, ó, en el caso de no haberse prefijado, desde que se establezca la caja, abonará á la masa común el interés legal[3]) del dinero que no hubiere entregado á su debido tiempo, y el importe de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado con su morosidad.

---

[1]) Esto artículo queda redactado conforme al Ley de 29 de Junio 1911, publicada en la *Gaceta* de 1 de Julio 1911. (El traductor.)

[2]) Es decir por el procedimiento ó juicio ejecutivo que puede verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ. merc.»

[3]) El 5%.

to the contrary contained in the constitutive instrument of the company, in the constitution or bye-laws, or in any resolution passed in a general meeting of the members, which is opposed to this provision, shall be void and of no effect.

166. Limited companies may only buy their own shares with the profits of the social capital for the sole purpose of cancelling them.

In case of the reduction of the social capital, when proceeding in conformity with the provisions of this Code, they may likewise cancel them with part of the capital itself, and employ the legal means which they think fit for that purpose.

167. Limited companies may never lend on the security of their own shares.

168.[1]) Limited companies in general meeting of shareholders previously called for that purpose shall have the power of deciding on the reduction or increase of the social capital, and the alteration or dissolution of the company.

These resolutions may in no case be passed by general meetings, unless the discussion and voting on all matters expressed in the preceding paragraph, or on whatever matter a resolution is to be taken, has been announced in the summons or with due notice.

The constitution of each company shall determine the number of members and participation of capital which have to be present at the meetings in which these resolutions are to be taken, but in no case may the representation of members be less then two thirds of their number and that of the capital than two third parts of the amount thereof, if the shares which constitute it are nominal. If they are to bearer, the representation of two third parts of the capital shall be sufficient.

If the majorities enacted by the preceding paragraph do not attend at the first summons, a second summons may be issued, provided that the constitution does not forbid it, in order to deal only with the matters which were the subject-matter of the first summons, and the resolutions which are adopted shall be valid when a bare majority of the number of members and the representation of the greater part of the social capital attend them, if the shares are nominal, and the latter representation only, if the shares are to bearer.

The administrators may forthwith carry out the resolution for reduction, legally passed by the general meeting, if the actual capital remaining after the reduction exceeds the amount of the debts and obligations of the company by 75 per cent.

In any other case, the reduction may not be carried into effect until all the debts and obligations which are pending at the date of the resolution are settled and paid, unless the company obtains the previous consent of its creditors.

For carrying out this article, the administrators shall present a balance sheet to the judge or tribunal, in which the securities in the portfolio shall be valued at the middle price as quoted during the last three months, and immoveables by the capitalisation of their proceeds according to the legal interest of money[3]).

169. In case of war, the funds belonging to foreigners invested in limited companies shall not be subject to reprisals.

Sixth Section. Rights and obligations of the Members.

170. If within the agreed time any member does not bring into the common estate the portion of capital for which he was bound, the association may choose between proceeding by executive action[2]) against his property in order to secure the portion of the capital which he failed to pay and rescinding the contract as regards the member in default, but retaining the sums which belong to him in the social estate.

171. A member who for any reason delays the full payment of his capital, after the time fixed in the social contract, or when it has not been fixed, then after the coffers have been established, shall pay the legal interest[3]) on the money which he failed to pay at the due time into the common estate, and the amount of the damage which he has caused by his delay.

---

[1]) This art. is as altered by the Law of 29 June 1911, published in the *Gaceta* of 1 July 1911 (Translator).

[2]) That is to say, by executive proceeding or action, which may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

[3]) 5%.

172. Cuando el capital ó la parte de él que un socio haya de aportar consista en efectos, se hará su valuación en la forma prevenida en el contrato de sociedad; y, á falta de pacto especial sobre ello, se hará por peritos elegidos por ambas partes y según los precios de la plaza, corriendo sus aumentos ó disminuciones ulteriores por cuenta de la compañía.

En caso de divergencia entre los peritos, se designará un tercero, á la suerte, entre los de su clase, que figuren como mayores contribuyentes en la localidad, para que dirima la discordia.

173. Los gerentes ó administradores de las compañías mercantiles no podrán negar á los socios el examen de todos los documentos comprobantes de los balances que se formen para manifestar el estado de la administración social, salvo lo prescrito en los artículos 150 y 158.

174. Los acreedores de un socio no tendrán, respecto á la compañía, ni aun en el caso de quiebra del mismo, otro derecho que el de embargar y percibir lo que por beneficios ó liquidación pudiera corresponder al socio deudor.

Lo dispuesto al final del párrafo anterior no será aplicable á las compañías constituídas por acciones, sino cuando éstas fueren nominativas; ó cuando constare ciertamente su legítimo dueño, si fueren al portador.

Sección séptima. De las reglas especiales de las compañías de crédito.

175. Corresponderán principalmente á la índole de estas compañías las operaciones siguientes: 1.ª Suscribir ó contratar empréstitos con el Gobierno, corporaciones provinciales ó municipales; — 2.ª Adquirir fondos públicos y acciones ú obligaciones de toda clase de empresas industriales ó de compañías de crédito; — 3.ª Crear empresas de caminos de hierro, canales, fábricas, minas, dársenas, almacenes generales de depósito, alumbrado, desmontes y roturaciones, riegos, desagües y cualesquiera otras industriales ó de utilidad pública; — 4.ª Practicar la fusión ó transformación de toda clase de sociedades mercantiles, y encargarse de la emisión de acciones ú obligaciones de las mismas; — 5.ª Administrar y arrendar toda clase de contribuciones y servicios públicos, y ejecutar por su cuenta, ó ceder, con la aprobación del Gobierno, los contratos suscritos al efecto; — 6.ª Vender ó dar en garantía todas las acciones, obligaciones y valores adquiridos por la sociedad, y cambiarlos cuando lo juzgaren conveniente; — 7.ª Prestar sobre efectos públicos, acciones ú obligaciones, géneros, frutos, cosechas, fincas, fábricas, buques y sus cargamentos, y otros valores, y abrir créditos en cuenta corriente, recibiendo en garantía efectos de igual clase; — 8.ª Efectuar por cuenta de otras sociedades ó personas toda clase de cobros ó de pagos, y ejecutar cualquiera otra operación por cuenta ajena; — 9.ª Recibir en depósito toda clase de valores en papel y metálico, y llevar cuentas corrientes con cualesquiera corporaciones, sociedades ó personas; — 10.ª Girar y descontar letras ú otros documentos de cambio.

176. Las compañías de crédito podrán emitir obligaciones por una cantidad igual á la que hayan empleado y exista representada por valores en cartera, sometiéndose á lo prescrito en el título sobre Registro Mercantil.

Estas obligaciones[1]) serán nominativas ó al portador, y á plazo fijo, que no baje, en ningún caso, de treinta días, con la amortización, si la hubiere, é intereses que se determinen.

Sección octava. Bancos de emisión y descuento.[2])

177. Corresponderán principalmente á la índole de estas compañías las operaciones siguientes:

Descuentos, depósitos, cuentas corrientes, cobranzas, préstamos, giros, y los contratos con el Gobierno ó corporaciones públicas.

178. Los Bancos no podrán hacer operaciones á más de noventa días.

Tampoco podrán descontar letras, pagarés ú otros valores de comercio, sin la garantía de dos firmas de responsabilidad.

179. Los Bancos podrán emitir billetes al portador, pero su admisión en las transacciones no será forzosa. Esta libertad de emitir billetes al portador, conti-

[1]) Estas obligaciones deben reintegrarse con el timbre correspondiente, que es el mismo ya indicado para las acciones (art. 168, L. del T.). (Véase la pág. 113, nota 2.)

[2]) Véase lo que acerca de estos Bancos de emisión dice la pág. 110, nota 1.

172. When the capital or the part thereof which a member has to contribute consists of effects, the valuation thereof shall be made as provided in the social contract; and in default of special agreement thereon, it shall be made by experts chosen by both parties and according to the local prices, their subsequent increases or depreciations being borne by the association.

In case of disagreement between the experts, a third shall be appointed by lot from among those of their class who figure as the greatest taxpayers in the locality, for the purpose of settling the dispute.

173. Managers or administrators of mercantile associations may not refuse the members the examination of all the documents which verify the balance sheets which are drawn up to show the state of the social administration, saving the provisions of articles 150 and 158.

174. With respect to the association, the creditors of a member, in case of his bankruptcy, have no other right than that of arresting and receiving what may belong to the debtor-member as profits or by liquidation.

The provision at the end of the preceding paragraph shall not apply to companies formed with shares, unless they are nominal; or when, if to bearer, their lawful owner is clearly shown.

Seventh Section. Special rules for Credit Companies.

175. The following shall be the principal operations which pertain to the nature of these companies: 1. To subscribe or contract loans with the Government, provincial or municipal corporations; — 2. To acquire public funds and shares and bonds of every kind of industrial undertaking or of credit companies; — 3. To found companies for railroads, canals, manufactories, mines, docks, general deposit warehouses, lighting, clearing and reclamation, irrigation, land drainage and every other company, whether industrial or of public utility; — 4. To undertake the amalgamation or reconstruction of every kind of mercantile society, and the issue of the shares and bonds thereof; — 5. To administer and lease every kind of public tax and service, and to carry out on its own account, or with the approbation of the Government to assign, the contracts signed for that purpose; — 6. To sell or give as security, all the shares and securities acquired by the company, and to change them when they think fit; — 7. To lend on public securities, shares or bonds, merchandise, produce, harvests, estates, factories, vessels and their cargoes, and other valuables, and open credits on current account, receiving effects of the like kind as security; — 8. To effect every kind of collection and payment on account of other societies or persons, and to carry out any other operation on another's account; — 9. To receive on deposit every kind of valuable, whether in paper or in cash, and to keep current accounts with any corporations, societies or persons; — 10. To negotiate and discount bills or other exchange documents.

176. Credit companies may issue bonds to an amount equal to that which they have employed and which still exists in securities in their portfolio, subject to the provisions of the Title on the Mercantile Register.

These bonds[1]) shall be nominal or to bearer, and for a fixed time, which shall in no case be less than thirty days, with the amortisation, if any, and the interest which may be determined.

Eighth Section. Issue and discount banks.[2])

177. The following shall be the principal operations which pertain to the nature of these companies: discounts, deposits, current accounts, collections, loans, bills, and contracts with the Government or public corporations.

178. Banks may not effect transactions at more than ninety days.

Nor may they discount bills, promissory notes or other commercial securities without the guarantee of two responsible signatures.

179. Banks may issue bearer notes, but they cannot be compelled to accept them in the transactions. This power to issue bearer notes shall, nevertheless, be

---

[1]) These bonds must pay the corresponding stamp duty, which is the same as has already been indicated for shares (art. 168 of the Stamp Act). (See page 113, note 2.)

[2]) See what is said about these issue banks on page 110, note 1.

nuará, sin embargo, en suspenso mientras subsista el privilegio de que actualmente disfruta por Leyes especiales el Banco Nacional de España[1]).

180. Los Bancos conservarán en metálico en sus cajas la cuarta parte, cuando menos, del importe de los depósitos y cuentas corrientes á metálico y de los billetes en circulación.

181. Los Bancos tendrán la obligación de cambiar á metálico sus billetes en el acto mismo de su presentación por el portador.

La falta de cumplimiento de esta obligación producirá acción ejecutiva[2]) á favor del portador, previo un requerimiento al pago, por medio de notario.

182. El importe de los billetes en circulación, unido á la suma representada por los depósitos y las cuentas corrientes, no podrá exceder, en ningún caso, del importe de la reserva metálica y de los valores en cartera realizables en el plazo máximo de noventa días.

183. Los Bancos de emisión y descuento publicarán, mensualmente al menos, y bajo la responsabilidad de sus administradores, en la *Gaceta* y *Boletín oficial* de la provincia, el estado de su situación.

Sección novena. Compañías de ferrocarriles y demás obras públicas.[3])

184. Corresponderán principalmente á la índole de estas compañías las operaciones siguientes: 1.ª La construcción de las vías férreas y demás obras públicas, de cualquiera clase que fueren; — 2.ª La explotación de las mismas, bien á perpetuidad, ó bien durante el plazo señalado en la concesión.

185. El capital social de las compañías, unido á la subvención, si la hubiere, representará por lo menos la mitad del importe del presupuesto total de la obra.

Las compañías no podrán constituirse mientras no tuvieren suscrito todo el capital social y realizado el 25 por 100 del mismo.

186. Las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas podrán emitir obligaciones al portador ó nominativas[4]), libremente y sin más limitaciones que las consignadas en este Código y las que establezcan en sus respectivos estatutos.

Estas emisiones se anotarán necesariamente en el Registro Mercantil de la provincia; y si las obligaciones fuesen hipotecarias, se inscribirán además dichas emisiones en los Registros de la Propiedad correspondientes.

Las emisiones de fecha anterior tendrán preferencia sobre las sucesivas para el pago del cupón y para la amortización de las obligaciones, si las hubiere.

187. Las obligaciones que las compañías emitieren, serán, ó no, amortizables, á su voluntad y con arreglo á lo determinado en sus estatutos.

---

[1]) Aunque el Banco Nacional de España es el heredero del primer Banco público español, ó sea del Banco de San Carlos, creado por Real Cédula de 2 de junio de 1782, como Banco privilegiado para la emisión de billetes existe desde el 4 de mayo de 1849; pues por la Ley de dicha fecha se le concedió la facultad de poderlo hacer por valor de 100 millones de reales (25 millones de pesetas). Llevaba entonces el nombre de Banco Español de San Fernando. — La Ley por que se rige este es el Decreto Ley de 19 de marzo de 1874 con las modificaciones en la misma introducidas por las leyes de 14 de julio de 1891 y 13 de mayo de 1902 y el Real Decreto de 9 de agosto de 1898. — Por virtud de estas disposiciones el privilegio exclusivo del Banco para la emisión de billetes se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 1921, y el límite máximo de su emisión se ha fijado en la cantidad de 2000 millones de pesetas que habrán de estar garantidos por una reserva metálica de la tercera parte (de la cual la mitad habrá de ser oro) cuando los billetes puestos en circulación no excedan de 1200 millones de pesetas. En lo que exceda de esta cifra, mientras no pase de 1500 millones habrá de estar garantido por el 40% por lo menos en oro y el resto hasta completar el 60%, en plata. Y en lo que exceda de esta cifra hasta el límite de los 2000 millones, el 50% por lo menos en oro; y el resto hasta el 70% en plata. — Los Estatutos por que se rige el Banco llevan la fecha de 10 de diciembre de 1900, y su Reglamento es de 5 de enero de 1901; y las operaciones á que se dedica á más de la principal, ó sea la de la emision de billetes, son: los depósitos; las cuentas corrientes; los descuentos; los préstamos con garantías de valores; los créditos con garantía; los giros y negociaciones y los cobros y pagos por cuenta ajena. Las condiciones á que ha de ajustarse para practicarlas se determinan en el Capítulo 1.° de sus Estatutos y en el Título II de su Reglamento.

[2]) Es decir que puede hacerse efectivo por el procedimiento ó juicio ejecutivo que puede verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ. merc.»

[3]) Véase la pág. 110, nota 1 respecto al impuesto sobre utilidades que afecta á estas clases de compañías.

[4]) Estas obligaciones estarán sujetas al pago del impuesto del timbre. (Véase la pág. 114, nota 2.)

in suspense as long as the privilege which the National Bank of Spain at present enjoys under special laws, subsists[1]).

180. Banks shall keep in bullion in their coffers at least the fourth part of the amount of the cash deposits and current accounts and of the notes in circulation.

181. Banks shall be under the obligation to change their notes for cash on presentment thereof by the bearer.

Failure to fulfil this obligation shall give rise to an executive action[2]) in favour of the bearer, after demand for payment through a notary.

182. The amount of notes in circulation, combined with the sum represented by the deposits and current accounts, may in no case exceed the amount of the metallic reserve and the securities in the portfolio which are realisable within the maximum time of ninety days.

183. Issue and discount banks shall at least every month publish a statement of their position in the *Gaceta* and *Boletin Oficial* of the province under the responsibility of their administrators.

Ninth Section. Railroad Companies and other companies for public works.[3])

184. The following shall be the principal operations pertaining to the nature of these companies: 1. The construction of railroads and other public works of every kind; — 2. Working the same, either in perpetuity, or during the time stated in the concession.

185. The social capital of the companies, combined with the subvention, if any, shall represent at least half of the amount of the total estimate for the work.

The companies may not be formed until the whole of the social capital has been subscribed and 25 per cent paid thereon.

186. Companies for railroads and other public works may issue bearer or nominal bonds[4]) freely and with no further limitations than those stated in this Code and those established by their respective constitutions.

These issues shall necessarily be entered on the Mercantile Register of the province, and if the bonds are mortgage bonds, the said issues shall also be inscribed in the proper Register of Ownership.

Issues of an earlier date shall have preference over the succeeding issues for payment of the coupon and amortisation, if any, of the bonds.

187. Bonds issued by the companies shall be amortisable or not, according to their wish and what their constitutions determine.

---

[1]) Although the National Bank of Spain is heir to the first Spanish public bank, that is, the Banco de San Carlos, created by Letters Patent of 2 June 1782, as a privileged bank of issue, it dates from 4 May 1849; as by the law of that date a concession was granted for issuing notes to the amount of 100 millions of reals (25 millions of pesetas). It then had the name of Banco Español de San Fernando. The law by which the Bank is governed is the Decree Law of 19 March 1874 with the amendments introduced therein by the laws of 14 July 1891 and 13 May 1902 and the Royal Decree of 9 August 1898. By virtue of these provisions, the exclusive privilege of the Bank for the issue of notes was extended to 31 December 1921, and the maximum limit of issue was fixed at the sum of 2000 millions of pesetas which have to be secured by a metallic reserve of the third part thereof, half of which must be in gold when the notes in circulation do not exceed 1200 millions of pesetas. The excess of this figure, so long as it does not pass 1500 millions, has to be secured by at least 40% in gold and the remaining 60% in silver. And as to the excess of this figure up to the limit of 2000 millions, at least 50% in gold and the rest up to 70% in silver. The constitution by which the bank is governed bears the date of 10 December 1900, and its Regulation, that of 5 January 1901; and the operations to which it is devoted, besides the principal one of issuing notes, are: deposits; current accounts; discounts; loans guaranteed by securities; secured credits; bill transactions and collection and payment on another's account. The conditions to which it has to conform in order to effect them are determined by Chapter I of its constitution and Title II of its Regulation.

[2]) That is to say, they may be made effective by means of the executive proceeding or action, which may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

[3]) See page 110, note 1, respecting the income tax on this kind of company.

[4]) These bonds are subject to the payment of the Stamp tax. (See page 114, note 2).

Siempre que se trate de ferrocarriles ú otras obras públicas que gocen subvención del Estado, ó para cuya construcción hubiese precedido concesión legislativa ó administrativa, si la concesión fuese temporal, las obligaciones que la compañía concesionaria emitiere quedarán amortizadas ó extinguidas dentro del plazo de la misma concesión, y el Estado recibirá la obra, al terminar este plazo, libre de todo gravamen.

188. Las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas podrán vender, ceder y traspasar sus derechos en las respectivas empresas, y podrán también fundirse con otras análogas.

Para que estas transferencias y fusiones tengan efecto, será preciso: 1.° Que lo consientan los socios por unanimidad, á menos que en los estatutos se hubieren establecido otras reglas para alterar el objeto social; — 2.° Que lo consientan asimismo todos los acreedores. Este consentimiento no será necesario cuando la compra ó la fusión se lleven á cabo sin confundir las garantías é hipotecas y conservando los acreedores la integridad de sus respectivos derechos.

189. Para las transferencias y fusión de compañías á que se refiere el artículo anterior, no será necesaria autorización alguna del Gobierno, aun cuando la obra hubiere sido declarada de utilidad pública para los efectos de la expropiación, á no ser que la empresa gozare de subvención directa del Estado, ó hubiese sido concedida por una Ley ú otra disposición gubernativa.

190. La acción ejecutiva á que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil[1]) respecto á los cupones vencidos de las obligaciones emitidas por las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas, así como á las mismas obligaciones á que haya cabido la suerte de la amortización, cuando la hubiere, sólo podrá dirigirse contra los rendimientos líquidos que obtenga la compañía y contra los demás bienes que la misma posea, no formando parte del camino ó de la obra ni siendo necesarios para la explotación.

191. Las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas podrán dar á los fondos que dejen sobrantes la construcción, explotación y pago de créditos á sus respectivos vencimientos, el empleo que juzguen conveniente, al tenor de sus estatutos.

La colocación de dichos sobrantes se hará combinando los plazos de manera que no queden en ningún caso desatendidas la construcción, conservación, explotación y pago de los créditos, bajo la responsabilidad de los administradores.

192. Declarada la caducidad de la concesión, los acreedores de la compañía tendrán por garantía: 1.° Los rendimientos líquidos de la empresa; — 2.° Cuando dichos rendimientos no bastaren, el producto líquido de las obras, vendidas en pública subasta, por el tiempo que reste de la concesión; — 3.° Los demás bienes que la compañía posea, si no formaren parte del camino ó de la obra, ó no fueren necesarios á su movimiento ó explotación[2]).

Sección décima. Compañías de almacenes generales de depósito.

193. Corresponderán principalmente á la índole de estas compañías las operaciones siguientes: 1.ª El depósito, conservación y custodia de los frutos y mercaderías que se les encomienden; — 2.ª La emisión de sus resguardos nominativos ó al portador.

194. Los resguardos que las compañías de almacenes generales de depósito expidan por los frutos y mercancías que admitan para su custodia, serán negociables, se transferirán por endoso, cesión ú otro cualquiera título traslativo de dominio, según que sean nominativos ó al portador, y tendrán la fuerza y valor del conocimiento mercantil.

Estos resguardos expresarán necesariamente la especie de mercaderías, con el número ó la cantidad que cada uno represente.

195. El poseedor de los resguardos tendrá pleno dominio sobre los efectos depositados en los almacenes de la compañía, y estará exento de responsabilidad por las reclamaciones que se dirijan contra el depositante, los endosantes ó poseedores anteriores, salvo si procedieren del transporte, almacenaje y conservación de las mercancías.

---

[1]) Véase el juicio ejecutivo en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ. merc.»

[2]) Respecto al procedimiento para hacer efectivas estas garantías, véase el estudio «Del procedimiento judicial en las cuestiones civiles-mercantiles».

In the case of railroads and other public works in the enjoyment of a subvention from the State, or when a legislative or administrative concession, if temporary, has preceded their construction, the bonds which the concessionaire company issues shall be amortised and extinguished within the term of the said concession, and the State shall receive the work at the end of this term free of all charges.

188. Companies for railroads and other public works may sell, assign and transfer their rights in their respective undertakings, and likewise may be amalgamated with other analogous undertakings.

In order that these transfers and amalgamations may be valid, it shall be necessary: 1. That the shareholders unaminously consent thereto, unless other rules have been enacted in their constitution for altering the social object; — 2. That all the creditors likewise consent thereto. This consent shall not be necessary when the purchase or amalgamation is completed without the guarantees and mortgages suffering *confusio* (being merged) and when the creditors preserve the whole of their respective rights.

189. No authorisation of the Government shall be necessary for the transfers and amalgamations of companies, to which the preceding article refers, even when the work has been declared of public utility for the purposes of expropriation, unless the undertaking is in the enjoyment of a direct subvention from the State, or has been granted by a Law or other disposition of the Government.

190. The executive action to which the Law of Civil Procedure refers[1]) for matured coupons of bonds issued by companies for railroads and other public works, as well as the bonds themselves on which the lot for amortisation, if any, has fallen, can only be made effective on the net income obtained by the company and on other property which it possesses which does not form part of the road or of the work and is not necessary for the working thereof.

191. Companies for railroads and other public works may employ the surplus funds after construction, exploitation and payment of debts at their respective maturities, as they think fit, according to their constitution.

The allocation of the said surplus funds shall be effected by a combination of times which in no event may leave the construction, preservation, exploitation and payment of the debts unattended to, subject to the liability of the administrators.

192. If the concession is declared to have lapsed, the creditors of the company shall have as security: 1. The net income of the undertaking; — 2. When the said income is not sufficient, the net proceeds of the works, as sold by public auction, for the remainder of the time of the concession; — 3. The other property which the company possesses, if it does not form part of the road or the work, or if it is not necessary for its working or exploitation[2]).

Tenth Section. General deposit warehouses.

193. The following are the principal operations which pertain to the nature of these companies: 1. The deposit, preservation and custody of the produce and merchandise entrusted to them; — 2. The issue of nominal or bearer receipts.

194. The receipts issued by companies for general deposit warehouses for produce and merchandise which they admit to their custody, shall be negotiable, shall be transferred by indorsement, assignment or any other title which transfers ownership, according as they are nominal or bearer, and shall have the force and value of a mercantile bill of lading.

These receipts must state the species of merchandise, with the number or quantity represented by each.

195. The holder of the receipts shall have full dominion over the goods deposited in the warehouses of the company, and shall be free from liability for claims against the depositor, the indorsers or previous holders, unless they proceed from the carriage, warehousing and preservation of the merchandise.

---

[1]) See the executive action in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

[2]) As to the proceeding to make these securities effective, see the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

196. El acreedor que, teniendo legítimamente en prenda un resguardo, no fuere pagado el día del vencimiento de su crédito, podrá requerir á la compañía para que enajene los efectos depositados, en cantidad bastante para el pago, y tendrá preferencia sobre los demás débitos del depositante, excepto los expresados en el artículo anterior, que gozarán de prelación.

197. Las ventas á que se refiere el artículo anterior se harán en el depósito de la compañía, sin necesidad de decreto judicial, en subasta pública anunciada previamente, y con intervención de corredor colegiado, donde lo hubiere, y en su defecto, de notario.

198. Las compañías de almacenes generales de depósito serán en todo caso responsables de la identidad y conservación de los efectos depositados, á ley de depósito retribuído.

Sección undécima. Compañías ó Bancos de crédito territorial.

199. Corresponderán principalmente á la índole de estas compañías las operaciones siguientes: 1.ª Prestar á plazos sobre inmuebles; — 2.ª Emitir obligaciones y cédulas hipotecarias[1]).

200. Los préstamos se harán sobre hipoteca de bienes inmuebles cuya propiedad esté inscrita en el Registro á nombre del que constituya aquélla, y serán reembolsables por anualidades[2]).

201. Estas compañías no podrán emitir obligaciones ni cédulas al portador mientras subsista el privilegio de que actualmente disfruta por Leyes especiales el Banco Hipotecario de España[3]).

202. Exceptúanse de la hipoteca exigida en el artículo 200 los préstamos á las provincias y á los pueblos, cuando estén autorizados legalmente para contratar empréstitos, dentro del límite de dicha autorización, y siempre que el reembolso del capital prestado, sus intereses y gastos, estén asegurados con rentas, derechos y capitales ó recargos ó impuestos especiales.

Exceptúanse, asimismo, los préstamos al Estado, los cuales podrán hacerse, además, sobre pagarés de compradores de bienes nacionales.

Los préstamos al Estado, á las provincias y á los pueblos podrán ser reembolsables á un plazo menor que el de cinco años.

203. En ningún caso podrán los préstamos exceder de la mitad del valor de los inmuebles en que se hubiere de constituir la hipoteca.

Las bases y formas de la valuación de los inmuebles se determinarán precisamente en los estatutos ó reglamentos.

204. El importe del cupón y el tanto de amortización de las cédulas hipotecarias que se emitan por razón de préstamo, no será nunca mayor que el importe de la renta líquida anual que por término medio produzcan en un quinquenio los inmuebles ofrecidos y tomados en hipoteca como garantía del mismo préstamo. El cómputo se hará siempre relacionando entre sí el préstamo, el rendimiento del inmueble hipotecado y la anualidad de las cédulas que con ocasión de aquél se emitan. Esta anualidad podrá ser, en cualquier tiempo, inferior á la renta líquida anual de los respectivos inmuebles, hipotecados como garantía del préstamo y para la emisión de las cédulas.

205. Cuando los inmuebles hipotecados disminuyan de valor en un 40 por 100, el Banco podrá pedir el aumento de la hipoteca hasta cubrir la depreciación, ó la rescisión del contrato, y entre estos dos extremos optará el deudor.

[1]) Respecto á estas obligaciones y cédulas véase la pág. 116, nota 1.

[2]) Esta clase de préstamos están sujetos al impuesto sobre utilidades creado por la Ley de 27 de marzo de 1900; y, con arreglo á ella, se pagará el 3% de los intereses de las cédulas y préstamos hipotecarios; tomándose para estos ,como base para la liquidación, el rédito legal (el 5%) cuando no se hayan pactado intereses.

[3]) El Banco Hipotecario de España se creó por la Ley de 2 de diciembre de 1872. Su duración, según la misma, es de 99 años; pero su condición de único, y por lo tanto de privilegiado en lo referente á la facultad de emitir cédulas y obligaciones hipotecarias sólo data del Decreto-Ley de 24 de julio de 1875. Y los Estatutos por que hoy se rige fueron aprobados por Real Decreto de 12 de octubre de 1875. — El motivo determinante de la creación de este Banco fue el de la negociación de los pagarés de los compradores de bienes nacionales, y sobre todo el de la negociación de los billetes hipotecarios del Tesoro, cuya garantia consistía en los bienes nacionales pendientes de venta. — Las operaciones á que se dedica á más de las ya indicadas están minuciosamente especificadas en el Título 1.° de sus Estatutos, y son las mismas que el Cód. de com. detalla como propias de esta clase de Bancos.

196. A creditor who is the lawful pledgee of a receipt, and who is not paid on the day when his debt becomes due, may require the company to sell the deposited goods, to an amount sufficient for the payment, and shall have preference over the other debts of the depositor, except those stated in the preceding article, which shall have priority.

197. The sales referred to in the preceding article shall take place in the warehouse of the company, without the necessity of a judicial decree, by a public auction previously announced, and with the intervention of a Collegiate broker, where there is one, and in his default, of a public notary.

198. Companies for general deposit warehouses shall in all cases be responsible for the identity and preservation of the deposited goods, according to the law of deposit for reward.

Eleventh Section. Land mortgage companies or banks.

199. The following shall be the principal operations pertaining to the nature of these companies: 1. To lend by instalments on immoveables; — 2. To issue bonds and mortgage cedulas[1]).

200. The loans shall be made on mortgage of immoveable property, the ownership whereof is inscribed in the Register in the name of the mortgagor, and shall be repayable by annuities[2]).

201. These companies may not issue bearer bonds or cedulas as long as the privilege exists which is now enjoyed by the Banco Hipotecario de España under special laws[3]).

202. Loans to the provinces and to localities are excepted from the mortgage required by article 200, when they are legally authorised to contract loans and within the limit of the said authorisation, provided that the repayment of the lent principal, its interest and expenses, are secured on revenue, dues and property or new charges or special taxes.

Loans to the State are likewise excepted, which may also be made on the promissory notes of purchasers of national property.

Loans to the State, to provinces and to localities may be repayable at a less time than five years.

203. In no case may the loans exceed half the value of the immoveables on which the mortgage is constituted.

The bases and forms of the valuation of immoveables shall be exactly determined by the constitutions or regulations.

204. The amount of the coupon and the quantum for amortisation of the mortgage cedulas issued on account of the loan, shall never be greater than the amount of the net annual income produced on an average of five years by the immoveables offered and taken on mortgage as security for the same loan. The computation shall always be made according to the relation *inter se* of the loan, the income of the mortgaged immoveable and the annuity on the cedulas issued on account thereof. This annuity may at any time be less than the net annual income of the respective immoveables mortgaged as security for the loan and for the purpose of issuing the cedulas.

205. When the mortgaged immoveables depreciate 40 per cent. in value, the Bank may apply for an increase of the mortgage sufficient to cover the depreciation, or for rescission of the contract, and the debtor shall choose between these two extremes.

---

1) As to these bonds and cedulas, see page 116, note 1.

2) This kind of loan is subject to the income tax created by the law of 27 March 1900; and according thereto, 3% must be paid on the interest of the mortgage cedulas and loans; and the legal interest of 5% must be taken as the basis of this payment, when interest has not been agreed.

3) The Banco Hipotecario de España was founded by the Law of 2 December 1872. Its duration according to the same law is 99 years; but its position as the only and therefore the privileged bank, as regards the power of issuing mortgage cedulas and bonds, only dates from the Decree-Law of 24 July 1875. And the constitution by which it is governed was approved by the Royal Decree of 12 October 1875. The determining reason for the creation of this bank was the negotiation of the promissory notes of the purchasers of national property, and especially the negotiation of the Treasury mortgage notes, the guarantee whereof consists of the national property which is still for sale. The operations to which it is devoted, besides those already indicated, are minutely specified in Title I of its constitution, and are the same as are detailed by the Commercial Code as proper to this kind of bank.

206. Los Bancos de crédito territorial podrán emitir cédulas hipotecarias por una suma igual al importe total de los préstamos sobre inmuebles.

Podrán, además, emitir obligaciones especiales por el importe de los préstamos al Estado, á las provincias y á los pueblos.

207. Las cédulas hipotecarias y obligaciones especiales de que trata el artículo anterior, serán nominativas ó al portador, con amortización ó sin ella, á corto ó á largo plazo, con prima ó sin prima.

Estas cédulas y obligaciones, sus cupones y las primas, si las tuvieren, producirán acción ejecutiva en os términos prevenidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil[1]).

208. Las cédulas hipotecarias y obligaciones especiales, lo mismo que sus intereses ó cupones y las primas que les estén asignadas, tendrán por garantía, con preferencia sobre todo otro acreedor ú obligación, los créditos y préstamos á favor del Banco ó compañía que las haya emitido y en cuya representación estuvieren creadas, quedando, en consecuencia, afectos especial y singularmente á su pago esos mismos préstamos y créditos.

Sin perjuicio de esta garantía especial, gozarán la general del capital de la compañía, con preferencia también, en cuanto á éste, sobre los créditos resultantes de las demás operaciones.

209. Los Bancos de crédito territorial podrán hacer también préstamos con hipoteca, reembolsables en un período menor de cinco años.

Estos préstamos á corto término serán sin amortización y no autorizarán la emisión de obligaciones ó cédulas hipotecarias, debiendo hacerse con los capitales procedentes de la realización del fondo social y de sus beneficios.

210. Los Bancos de crédito territorial podrán recibir, con interés ó sin él, capitales en depósito, y emplear la mitad de los mismos en hacer anticipos por un plazo que no exceda de noventa días, así sobre sus obligaciones y cédulas hipotecarias, como sobre cualesquiera otros títulos de los que reciben en garantía los Bancos de emisión y descuento.

Á falta de pago por parte del mutuario, el Banco podrá pedir, con arreglo á lo dispuesto en el art. 323, la venta de las cédulas ó títulos pignorados.

211. Todas las combinaciones de crédito territorial, inclusas las asociaciones mutuas de propietarios, estarán sujetas, en cuanto á la emisión de obligaciones y cédulas hipotecarias, á las reglas contenidas en esta sección.

Sección duodécima. De las reglas especiales para los Bancos y sociedades agrícolas.

212. Corresponderá principalmente á la índole de estas compañías: 1.° Prestar en metálico ó en especie, á un plazo que no exceda de tres años, sobre frutos, cosechas, ganados ú otra prenda ó garantía especial; — 2.° Garantizar con su firma pagarés y efectos exigibles[2]) al plazo máximo de noventa días, para facilitar su descuento ó negociación al propietario ó cultivador; — 3.° Las demás operaciones que tuvieren por objeto favorecer la roturación y mejora del suelo, la desecación y saneamiento de terrenos, y el desarrollo de la agricultura y otras industrias relacionadas con ella.

213. Los Bancos ó sociedades de crédito agrícola podrán tener fuera de su domicilio agentes que respondan por sí de la solvencia de los propietarios ó colonos que soliciten el auxilio de la compañía, poniendo su firma en el pagaré que ésta hubiere de descontar ó endosar.

214. El aval ó el endoso puestos por estas compañías ó sus representantes, ó por los agentes á que se refiere el artículo precedente, en los pagarés del propietario ó cultivador, darán derecho al portador para reclamar su pago directa y ejecutivamente[3]), el día del vencimiento, del cualquiera de los firmantes.

215. Los pagarés del propietario ó cultivador, ya los conserve la compañía, ya se negocien por ella, producirán á su vencimiento la acción ejecutiva[4]) que corresponda, con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra los bienes del propietario ó cultivador que los haya suscrito.

[1]) Véase el juicio ejecutivo en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ. merc».

[2]) Estos pagarés y efectos exigibles están sujetos al pago del impuesto del timbre lo mismo que las letras de cambio y los pagarés á la orden. (Véase la nota 1 del artículo 444.)

[3]) Es decir, por el procedimiento ó juicio ejecutivo que puede verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ. merc.»

[4]) Véase la nota anterior.

206. Territorial credit banks may issue mortgage cedulas for a sum equal to the total amount of the loans on immoveables,

They may likewise issue special bonds for the amount of the loans to the State, the provinces and the localities.

207. The mortgage cedulas and special bonds, with which the preceding article deals, shall be nominal or bearer, with or without amortisation, for a short or long period, with a premium or without.

These cedulas and bonds, their coupons and premiums, if any, shall occasion an executive action, as provided by the Law of Civil Procedure[1]).

208. The mortgage cedulas and special bonds, together with their interest or coupons and the premiums which are attributed to them, shall have as guarantee, in preference to every other creditor or obligation, the credits and loans in favour of the Bank or company which issued them, to represent which they were created, those same loans and credits being in consequence specially and individually affected to their payment.

Without prejudice to this special guarantee, they shall enjoy the general security of the capital of the company, with like preference with regard to the latter, over the debts resulting from other transactions.

209. Territorial credit banks may also make loans on mortgage, repayable in a period less than five years.

These short term loans shall be without amortisation and shall not authorise the issue of mortgage bonds or cedulas, but must be made from capital arising from realisation of the social fund and profits thereof.

210. Territorial credit banks may receive capital sums on deposit, with or without interest, and employ half thereof in making advances for a term not exceeding ninety days, both on their mortgage bonds and cedulas, and on any other securities which issue and discount banks receive as guarantee.

On default of payment on the part of the borrower, the Bank may apply for the sale of the pledged cedulas or securities, according to the provisions of art. 323.

211. All territorial credit combinations, including mutual associations of proprietors, shall be subject to the rules contained in this section as far as concerns the issue of mortgage bonds and cedulas.

Twelfth Section. Special rules for agricultural banks and societies.

212. The principal operations pertaining to the nature of these companies shall be: 1. To lend in cash or specific articles, for a term not exceeding three years, on produce, harvests, herds or other specific pledge or guarantee; — 2. To guarantee under their signature promissory notes and negotiable securities[2]) for a maximum time of ninety days, to enable an owner or cultivator to discount or negotiate them; — 3. Other operations intended to promote the reclamation and improvement of the soil, the drainage of lands, and the development of agriculture and other industries related thereto.

213. Agricultural credit banks or societies may have, away from their address, agents who are personally responsible for the solvency of the owners or farmers who apply for the aid of the society, by signing the promissory note which the latter has to discount or indorse.

214. The *aval* or indorsement placed by these companies or their representatives or by the agents referred to in the preceding article on the promissory notes of the owner or cultivator, shall entitle the holder to claim their direct payment on the day of their maturity, from any of the signatories, by means of an executive action[3]).

215. The promissory notes of the owner or cultivator, whether the society keeps or negotiates them, shall at their maturity occasion the corresponding executive action[4]), in accordance with the Law of Civil Procedure, against the property of the owner or cultivator who signed them.

[1]) See the executive action in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

[2]) These promissory notes and negotiable securities are subject to payment of the same stamp tax as bills of exchange and promissory notes to order. (See note 1 to art. 444).

[3]) That is, by the executive proceeding or action, which may be seen in the study "Judicial proceedings in mercantile civil matters".

[4]) See the previous note.

216. El interés y la comisión que hubieren de percibir las compañías de crédito agrícola y sus agentes ó representantes, se estipularán libremente dentro de los límites señalados por los estatutos.

217. Las compañías de crédito agrícola no podrán destinar á las operaciones á que se refieren los números 2.° y 3.° del art. 212, más que el importe del 50 por 100 del capital social, aplicando el 50 por 100 restante á los préstamos de que trata el número 1.° del mismo artículo.

Sección décimatercera. Del término y liquidación de las compañías mercantiles.

218. Habrá lugar á la rescisión parcial del contrato de compañía mercantil colectiva ó en comandita, por cualquiera de los motivos siguientes: 1.° Por usar un socio de los capitales comunes y de la firma social para negocios por cuenta propia; — 2.° Por ingerirse en funciones administrativas de la compañía el socio á quien no competa desempeñarlas, según las condiciones del contrato de sociedad; — 3.° Por cometer fraude algún socio administrador en la administración ó contabilidad de la compañía; — 4.° Por dejar de poner en la caja común el capital que cada uno estipuló en el contrato de sociedad, después de haber sido requerido para verificarlo; — 5.° Por ejecutar un socio por su cuenta operaciones de comercio que no le sean lícitas con arreglo á las disposiciones de los artículos 136, 137 y 138; — 6.° Por ausentarse un socio que estuviere obligado á prestar oficios personales en la sociedad, si, habiendo sido requerido para regresar y cumplir con sus deberes, no lo verificare ó no acreditare una causa justa que temporalmente se lo impida; — 7.° Por faltar de cualquier otro modo uno ó varios socios al cumplimiento de las obligaciones que se impusieron en el contrato de compañía.

219. La rescisión parcial de la compañía producirá la ineficacia del contrato con respecto al socio culpable, que se considerará excluído de ella, exigiéndole la parte de pérdida que pueda corresponderle, si la hubiere, y quedando autorizada la sociedad á retener, sin darle participación en las ganancias ni indemnización alguna, los fondos que tuviere en la masa social, hasta que estén terminadas y liquidadas todas las operaciones pendientes al tiempo de la rescisión.

220. Mientras en el Registro Mercantil no se haga el asiento de la rescisión parcial del contrato de sociedad, subsistirá la responsabilidad del socio excluído, así como la de la compañía, por todos los actos y obligaciones que se practiquen, en nombre y por cuenta de ésta, con terceras personas.

221. Las compañías, de cualquiera clase que sean, se disolverán totalmente por las causas que siguen: 1.ª El cumplimiento del término prefijado en el contrato de sociedad, ó la conclusión de la empresa que constituya su objeto; — 2.ª La pérdida entera del capital; — 3.ª La quiebra de la compañía.

222. Las compañías colectivas y en comandita se disolverán además totalmente por las siguientes causas: 1.ª La muerte de uno de los socios colectivos, si no contiene la escritura social pacto expreso de continuar en la sociedad los herederos del socio difunto, ó de subsistir ésta entre los socios sobrevivientes; — 2.ª La demencia ú otra causa que produzca la inhabilitación de un socio gestor para administrar sus bienes[1]); — 3.ª La quiebra de cualquiera de los socios colectivos.

223. Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita ó presunta de los socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituídas; y si los socios quieren continuar en compañía, celebrarán un nuevo contrato, sujeto á todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el art. 119.

224. En las compañías colectivas ó comanditarias por tiempo indefinido, si alguno de los socios exigiere su disolución, los demás no podrán oponerse sino por causa de mala fe en el que lo proponga.

Se entenderá que un socio obra de mala fe, cuando, con ocasión de la disolución de la sociedad, pretenda hacer un lucro particular que no hubiera obtenido subsistiendo la compañía.

225. El socio que por su voluntad se separase de la compañía ó promoviere su disolución, no podrá impedir que se concluyan del modo más conveniente á los

[1]) Respecto á las otras causas que, á más de la demencia, pueden inhabilitar al socio gestor para administar sus bienes, véase la pág. 90, nota 1.

216. The interest and commission which agricultural societies, their agents or representatives are to receive, shall be freely arranged within the limits fixed by the constitution.

217. Agricultural credit companies may not devote to the operations referred to in numbers 2 and 3 of art. 212, more than the amount of 50 per cent. of the social capital, applying the remaining 50 per cent. to the loans treated of by number 1 of the same article.

Thirteenth Section. The termination and liquidation of mercantile associations.

218. The social contract of an unlimited or limited mercantile partnership may be partially rescinded for any of the following reasons: 1. Use by a partner of the common capital and the firm signature for business on his own account; — 2. Meddling in the administrative functions of the partnership by a partner who is not competent to discharge them, according to the terms of the partnership contract; — 3. Fraud committed by any managing partner in the administration or account-keeping of the partnership; — 4. Failure to place in the common chest the capital which each stipulated in the partnership contract, after having been required to do so; — 5. Carrying out by a partner on his own account commercial operations which are not lawful to him in accordance with the provisions of articles 136, 137 and 138; — 6. Absence of a partner who was bound to render personal services to the partnership, if, having been required to return and fulfil his duties, he fails so to do or to prove just cause which temporarily prevents him; — 7. Failure by one or more partners to fulfil in any way the obligations which were imposed by the contract of partnership.

219. Partial rescission of the partnership shall occasion the avoidance of the contract with regard to the culpable partner, who shall be considered as expelled therefrom, but liable for his share of loss, if any; the partnership being authorised to retain the funds which he had in the social estate, until all the transactions pending at the time of the rescission are terminated and settled, without his being given participation in the profits or any compensation.

220. Until the partial rescission of the partnership contract is entered on the Mercantile Register, the liability of the expelled partner shall subsist, as well as that of the partnership, for all the acts and obligations which they effect with third persons in the name and on account thereof.

221. Associations of every kind shall be totally dissolved for the following reasons: 1. Completion of the term fixed in the social contract or the conclusion of the undertaking which constituted its object; — 2. Entire loss of the capital; — 3. Bankruptcy of the association.

222. Unlimited and limited partnerships shall likewise be totally dissolved for the following reasons: 1. The death of one of the unlimited partners, if the instrument of partnership does not contain an express agreement that the heirs of the deceased partner shall continue in the partnership or that it should subsist as between the surviving partners; — 2. Lunacy or any other cause which occasions the disqualification of the managing partner to administer its property[1]); — 3. Bankruptcy of any of the unlimited partners.

223. Mercantile associations shall not be considered to be extended by the implied or presumed wish of the members, after the term for which they were formed has expired; and if the members wish to continue in association, they shall make a new contract, subject to all the formalities provided for their foundation, according to the provisions of art. 119.

224. In unlimited or limited partnerships for an undefined time, if any of the partners desire their dissolution, the others cannot object, except on the ground of bad faith in the one who proposes it.

It shall be understood that a partner is acting in bad faith, when, taking advantage of the dissolution of the partnership, he endeavours to make a private gain which he would not have obtained if the partnership had subsisted.

225. A partner who leaves the partnership by his own wish or promotes its dissolution, may not prevent the pending transactions being concluded in the way

---

[1]) With regard to the other causes, besides lunacy, which may disqualify the managing partner from administering its property, see page 90, note 1.

intereses comunes las negociaciones pendientes, y mientras no se terminen no se procederá á la división de los bienes y efectos de la compañía.

226. La disolución de la compañía de comercio, que proceda de cualquiera otra causa que no sea la terminación del plazo por el cual se constituyó, no surtirá efecto en perjuicio de tercero hasta que se anote en el Registro Mercantil.

227. En la liquidación y división del haber social se observarán las reglas establecidas en la escritura de compañía, y en su defecto, las que se expresan en los artículos siguientes.

228. Desde el momento en que la sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los socios administradores para hacer nuevos contratos y obligaciones, quedando limitadas sus facultades, en calidad de liquidadores, á percibir los créditos de la compañía, á extinguir las obligaciones contraídas de antemano, según vayan venciendo, y á realizar las operaciones pendientes.

229. En las sociedades colectivas ó en comandita, no habiendo contradicción por parte de alguno de los socios, continuarán encargados de la liquidación los que hubiesen tenido la administración del caudal social; pero si no hubiese conformidad para esto de todos los socios, se convocará sin dilación junta general y se estará á lo que en ella se resuelva, así en cuanto al nombramiento de liquidadores de dentro ó fuera de la sociedad, como en lo relativo á la forma y trámites de la liquidación y á la administración del caudal común.

230. Bajo pena de destitución, deberán los liquidadores: 1.° Formar y comunicar á los socios, dentro del término de veinte días, el inventario del haber social, con el balance de las cuentas de la sociedad en liquidación, según los libros de su contabilidad; — 2.° Comunicar igualmente á los socios todos los meses el estado de la liquidación.

231. Los liquidadores serán responsables á los socios de cualquiera perjuicio que resulte al haber común por fraude ó negligencia grave en el desempeño de su encargo, sin que por eso se entiendan autorizados para hacer transacciones ni celebrar compromisos sobre los intereses sociales, á no ser que los socios les hubieren concedido expresamente estas facultades.

232. Terminada la liquidación y llegado el caso de proceder á la división del haber social, según la calificación que hicieren los liquidadores ó la junta de socios que cualquiera de ellos podrá exigir que se celebre para este efecto, los mismos liquidadores verificarán dicha división dentro del término que la junta determinare.

233. Si alguno de los socios se creyese agraviado en la división acordada, podrá usar de su derecho ante el juez ó tribunal competente[1]).

234. En la liquidación de sociedades mercantiles en que tengan interés personas menores de edad ó incapacitadas, obrarán el padre, madre ó tutor de éstas, según los casos, con plenitud de facultades como en negocio propio, y serán válidos é irrevocables, sin beneficio de restitución[2]), todos los actos que dichos representantes otogaren ó consintieren por sus representados, sin perjuicio de la responsabilidad que aquéllos contraigan para con éstos por haber obrado con dolo ó negligencia.

235. Ningún socio podrá exigir la entrega del haber que le corresponda en la división de la masa social, mientras no se hallen extinguidas todas las deudas y obligaciones de la compañía, ó no se haya depositado su importe, si la entrega no se pudiere verificar de presente.

236. De las primeras destribuciones que se hagan á los socios se descontarán las cantidades que hubiesen percibido para sus gastos particulares, ó que bajo otro cualquier concepto les hubiese anticipado la compañía.

[1]) Respecto al modo y manera de determinar esta competencia, vease el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ. merc.»

[2]) El beneficio de restitución era el derecho concedido por nuestras leyes civiles á los menores para que dentro de los cuatro años siguientes á la mayor edad pudiesen pedir la rescisión de aquellos contratos celebrados por los tutores ó representantes legales que considerasen lesivos para sus intereses. Hoy, por virtud de lo que dispone el art. 1291 del Cód. c., sólo existe este beneficio en favor de los menores, cuando se trate de contratos celebrados por los tutores sin autorización del consejo de familia, siempre que la lesión sufrida exceda de la cuarta parte del valor de la cosa objeto del contrato. El plazo para ejercer este derecho es también el de 4 años, á contar desde la mayor edad (art. 1299, Cód. c.).

most convenient to the common interest; and until they are ended, the division of the property and effects of the partnership shall not take place.

226. Dissolution of a commercial association which proceeds from any other cause than the termination of the time for which it was constituted, shall not take effect to the prejudice of a third person until it is entered on the Mercantile Register.

227. In the liquidation and division of the social assets, the rules established in the constitutive instrument shall be observed, and in default thereof, those which are expressed in the following articles.

228. From the moment that the society is declared in liquidation, the representative capacity of the administrating members to effect new contracts and obligations shall cease, their powers as liquidators being limited to receiving the credits of the society, to extinguishing the obligations previously contracted, as they become due, and to carrying out the pending transactions.

229. In unlimited or limited partnerships, when there is no objection on the part of any of the partners, those who have had the administration of the social property shall continue in charge of the liquidation; but if all the partners do not agree to this, a general meeting shall be summoned without delay and the resolutions thereof shall be observed, both as to the appointment of liquidators from within or without the partnership, and in relation to the form and procedure of the liquidation and to the administration of the common property.

230. The liquidators are bound, on pain of dismissal: 1. To form an inventory of the social assets and communicate it to the members within the term of twenty days, with the balance sheet of the partnership in liquidation, according to its account books; — 2. To communicate also the state of the liquidation to the members every month.

231. The liquidators shall be responsible to the partners for any damage resulting to the common property through fraud or gross negligence in the discharge of their duty, without being considered authorised on that ground to effect compromises or submit to arbitrations on the social interests, unless the partners have expressly granted them these powers.

232. When the liquidation is closed, and the time has arrived to proceed to the division of the social property, according to the judgment of the liquidators or of a meeting of the members, which any of them may demand to be held for this purpose, the same liquidators shall effect the said division within the term determined by the meeting.

233. If any of the partners thinks himself aggrieved by the division which has been decided on, he may enforce his right before the competent judge or tribunal[1]).

234. In the liquidation of mercantile societies, in which minors or persons subject to legal incapacity are interested, their father, mother or guardian, as the case may be, shall act with full powers as if in their own affairs, and all the acts which the said representatives perform or consent to their principals performing, shall be valid and irrevocable, without the benefit of restitution[2]), but without prejudice to the liability which the former contract towards the latter for having acted fraudulently or negligently.

235. No member may demand the delivery of the property which belongs to him in the division of the social estate, until all the debts and obligations of the society are extinguished, or the value thereof has been deposited, if present payment is not possible.

236. The amounts which they have received for their private expenses or any advances which the society has made them on any ground, shall be deducted from the first distributions that are made to the members.

---

1) With regard to the mode and manner of determining this competence, see the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

2) The benefit of restitution was the right granted to minors by our civil laws that, within four years after their majority, they might apply for the rescission of those contracts made by their guardians or legal representatives, which they might consider harmful to their interests. Now, by virtue of the provisions of art. 1291 of the Civil Code, this benefit only exists in favour of minors, in the case of contracts made by guardians without the authorisation of the Family Council, provided that the *laesio* suffered exceeds the fourth part of the value of the subject-matter of the contract. The time for enforcing this right is also that of 4 years, reckoned from majority (art. 1299 of the Civil Code).

237. Los bienes particulares de los socios colectivos que no se incluyeron en el haber de la sociedad al formarse ésta, no podrán ser ejecutados para el pago de las obligaciones contraídas por ella, sino después de haber hecho excusión del[1]) haber social.

238. En las compañías anónimas en liquidación continuarán, durante el período de ésta, observándose las disposiciones de sus estatutos en cuanto á la convocación de sus juntas generales, ordinarias y extraordinarias, para dar cuenta de los progresos de la misma liquidación y acordar lo que convenga al interés común.

Título II. De las cuentas en participación.

239. Podrán los comerciantes interesarse los unos en las operaciones de los otros, contribuyendo para ellas con la parte del capital que convinieren, y haciéndose partícipes de sus resultados prósperos ó adversos en la proporción que determinen.

240. Las cuentas en participación no estarán sujetas en su formación á ninguna solemnidad, pudiendo contraerse privadamente de palabra ó por escrito, y probándose su existencia por cualquiera de los medios reconocidos en derecho, conforme á lo dispuesto en el art. 51.

241. En las negociaciones de que tratan los dos artículos anteriores no se podrá adoptar una razón comercial común á todos los partícipes, ni usar de más crédito directo que el del comerciante que las hace y dirige en su nombre y bajo su responsabilidad individual.

242. Los que contraten con el comerciante que lleve el nombre de la negociacion, sólo tendrán acción contra él, y no contra los demás interesados, quienes tampoco la tendrán contra el tercero que contrató con el gestor, á no ser que éste les haga cesión formal de sus derechos.

243. La liquidación se hará por el gestor, el cual, terminadas que sean las operaciones, rendirá cuenta justificada de sus resultados.

Título III. De la comisión mercantil.

Sección primera. De los comisionistas.

244. Se reputará comisión mercantil el mandato, cuando tenga por objeto un acto ú operación de comercio y sea comerciante ó agente mediador del comercio el comitente ó el comisionista.

245. El comisionista podrá desempeñar la comisión contratando en nombre propio ó en el de su comitente.

246. Cuando el comisionista contrate en nombre propio, no tendrá necesidad de declarar quién sea el comitente, y quedará obligado de un modo directo, como si el negocio fuese suyo, con las personas con quienes contratare, las cuales no tendrán acción contra el comitente, ni éste contra aquéllas, quedando á salvo siempre las que respectivamente correspondan al comitente y al comisionista entre sí.

247. Si el comisionista contratare en nombre del comitente, deberá manifestarlo; y, si el contrato fuere por escrito, expresarlo en el mismo ó en la antefirma, declarando el nombre, apellido y domicilio de dicho comitente.

En el caso prescrito en el párrafo anterior, el contrato y las acciones derivadas del mismo producirán su efecto entre el comitente y la persona ó personas que contrataren con el comisionista; pero quedará éste obligado con las personas con quienes contrató, mientras no pruebe la comisión, si el comitente la negare, sin perjuicio de la obligación y acciones respectivas entre el comitente y el comisionista.

248. En el caso de rehusar un comisionista el encargo que se le hiciere, estará obligado á comunicarlo al comitente por el medio más rápido posible, debiendo confirmarlo, en todo caso, por el correo más próximo al día en que recibió la comisión.

Lo estará, asimismo, á prestar la debida diligencia en la custodia y conservación de los efectos que el comitente le haya remitido, hasta que éste designe nuevo

[1]) Hacer excusión significa haber apurado el procedimiento judicial ó extrajudicial hasta conseguir cobrar todo lo que consienta el valor de los bienes del deudor.

237. The separate property of the unlimited partners which was not included in the property of the partnership at the formation thereof, cannot be taken in execution for the payment of the partnership obligations, until after *excusio*[1]) has been effected on the social property.

238. During the period of liquidation of limited companies, the provisions of their constitutions shall continue to be observed with regard to summoning their general ordinary and extraordinary meetings, to give account of the progress of the liquidation and to decide on what is convenient to the general interest.

Title II. Accidental partnerships. Joint adventurers.

239. Some merchants may be interested in the transactions of others, contributing for those purposes the share of the capital which they agree, and becoming co-owners of the prosperous or adverse results in the proportion which they fix.

240. The obligations of joint adventurers shall not be subject to any solemnities at their formation, but may be contracted privately by word of mouth or by writing, and their existence may be proved by any of the means recognised in law, according to the provisions of art. 51.

241. In the transactions of which the two preceding articles treat, a trade name common to all the adventurers may not be adopted, nor may the direct credit be used of another than the one who effects and directs the transactions in his name and under his individual responsibility.

242. Those persons who contract with the merchant who gives his name in the transaction, shall only have a right of action against him, and not against the other persons interested, nor shall the latter have a right of action against the third person who contracted with the manager, unless the latter has formally assigned his rights to them.

243. Liquidation shall be effected by the manager, who, when the transactions are ended, shall render a verified account of their results.

Title III. Mercantile Agency.

First Section. Factors.

244. A mandate shall be considered a mercantile agency, when it has a commercial act or transaction for its subject-matter and the principal or commission agent is a merchamt or commercial agent.

245. A factor may discharge his commission by contracting in his own name or in that of his principal.

246. When the factor contracts in his own name, he shall not be obliged to declare who his principal is, and he shall be directly bound, as if the business were his own, to the persons with whom he contracts, who shall have no right of action against the principal, nor the latter against the former, saving always those which respectively belong to the principal and factor *inter se*.

247. If the factor contracts in the name of the principal, he must so state it, and if the contract is in writing, he must express it therein or in the part before the signature, declaring the name, surname and address of the said principal.

In a case provided for by the preceding paragraph, the contract and the rights of action derived therefrom shall take effect between the principal and the person or persons who contracted with the factor; but the latter shall be bound to the persons with whom he contracted, until he proves the commission, if the principal denies it, without prejudice to the obligation and respective rights of action between the principal and the factor.

248. If a factor refuses a commission which is entrusted to him, he shall be bound to communicate the fact to the principal by the most rapid means that are possible, and must, in every case, confirm it by the post nearest the day on which he received the commission.

He shall likewise be bound to show due diligence in the custody and preservation of the goods which the principal has remitted to him, until the latter appoints a

[1]) To effect *excusio* means to have exhausted the judicial or extrajudicial proceedings so as to have recovered all the value of the debtor's property.

comisionista, en vista de su negativa, ó hasta que, sin esperar nueva designación, el juez ó tribunal se haya hecho cargo de los efectos, á solicitud del comisionista[1]).

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en los dos párrafos anteriores, constituye al comisionista en la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios que por ello sobrevengan al comitente.

249. Se entenderá aceptada la comisión siempre que el comisionista ejecute alguna gestión, en el desempeño del encargo que le hizo el comitente, que no se limite á la determinada en el párrafo segundo del artículo anterior.

250. No será obligatorio el desempeño de las comisiones que exijan provisión de fondos, aunque se hayan aceptado, mientras el comitente no ponga á disposición del comisionista la suma necesaria al efecto.

Asimismo podrá el comisionista suspender las diligencias propias de su encargo, cuando, habiendo invertido las sumas recibidas, el comitente rehusare la remisión de nuevos fondos que aquél le pidiere.

251. Pactada la anticipación de fondos para el desempeño de la comisión, el comisionista estará obligado á suplirlos, excepto en el caso de suspensión de pagos ó quiebra del comitente.

252. El comisionista que, sin causa legal, no cumpla la comisión aceptada ó empezada á evacuar, será responsable de todos los daños que por ello sobrevengan al comitente.

253. Celebrado un contrato por el comisionista con las formalidades de derecho, el comitente deberá aceptar todas las consecuencias de la comisión, salvo el derecho de repetir contra el comisionista por faltas ú omisiones cometidas al cumplirla.

254. El comisionista que en el desempeño de su encargo se sujete á las instrucciones recibidas del comitente, quedará exento de toda responsabilidad para con él.

---

[1]) Para que el juez se haga cargo de estos efectos será preciso que se solicite de él por escrito la constitución del depósito, expresando en relación el pormenor de los mismos, y designando la persona que haya de ser el depositario que habrá de ser comerciante matriculado, si lo hubiere en la plaza, y en su defecto un contribuyente que pague la cuota de contribución que el juez conceptúe suficiente, atendido el valor del depósito y las condiciones de la localidad. Las garantias que ha de ofrecer el depositario para la seguridad del depósito se apreciarán libremente por el juez; de tal manera que si el propuesto por el que solicita el depósito no las reuniere á juicio del juez podrá designar por su cuenta otra persona que en su opinión las reuna (art. 2119, L. Enj. c.). — Para la constitución del depósito el actuario extenderá la diligencia de entrega al depositario, detallando el número y estado de los efectos depositados; haciendo constar en su caso las diferencias que existan entre la relación que se acompañó al escrito en que se solicitó el depósito y esta otra relación que ha de hacer el actuario (art. 2121, L. Enj. c.). — A estas rectificaciones ha de prestar su conformidad el depositante; y si no la prestare, y la diferencia fuere de cantidad tan sólo, hará el actuario, á presencia del depositante y depositario, un recuento minucioso, cuyo resultado se considerará como definitivo. Si la diferencia fuere de calidad, el juez nombrará por sorteo entre los corredores colegiados, si los hubiere, ó en su defecto entre los comerciantes matriculados en la clase á que pertenezcan los efectos, un perito que los clasifique, extendiendose de todo ello el acta correspondiente. El perito así nombrado no será recusable (art. 2122, L. Enj. c.); y mientras se procede á todo esto dispondrá provisionalmente el juez lo necesario para la custodia y conservación de los efectos que hayan de depositarse (art. 2123, L. Enj. c.). — Si el recibo y conservación de los efectos exigieren algunos gastos, y no hubiere de momento quien se prestare á satisfacerlos, el juez decretará la venta de los que conceptúe necesarios, cuya venta se hará en subasta pública, previa tasación de un perito nombrado por el dueño de aquellos si se presentare, ó por el Ministerio fiscal, si se hallare ausente, y otro por el juez, anunciándose la subasta, con un plazo no menor de ocho días ni mayor de quince, por edictos, que se fijarán en los estrados del Juzgado, y que habrán de insertarse en el *Boletin oficial* de la provincia y periódicos de la localidad, si el juez lo juzgare necesario, en atención al valor de dichos efectos. — Si estuviere presente el dueño de los efectos, y prestare su conformidad al perito nombrado por el juez bastará uno solo; y si optare por nombrar uno por su parte, y no se pusieren de acuerdo los dos peritos nombrados, el juez designará por sorteo un tercero (art. 2124, L. Enj. c.). — Si en la subasta no hubiere postor ó las posturas hechas no cubrieren las dos terceras partes de la tasación, se hará una segunda subasta, y una tercera, si fuere necesario, dentro de otro término igual, con rebaja del 20% en cada una de la cantidad que hubiere servido de tipo para la anterior (art. 2125, L. Enj. c.).

fresh factor on hearing of his refusal, or until, without waiting for a fresh appointment, the judge or tribunal takes charge of the goods, on the application of the factor[1]).

Want of fulfilment of any of the obligations enacted in the two preceding paragraphs, makes the factor liable to indemnify the principal for the damage which happens to him on that account.

249. A commission shall be considered to be accepted whenever the factor performs any operation in discharge of the duty imposed on him by the principal which is not limited to that determined in the second paragraph of the preceding article.

250. The discharge of commissions which require provision of funds shall not be obligatory, although accepted, until the principal places the sum necessary for that purpose at the disposal of the factor.

A factor may likewise suspend the measures proper to his commission, when, having applied the sums received, the principal refuses to remit fresh funds which the former applies for.

251. When the advance of funds for the discharge of the commission has been agreed, the factor shall be bound to supply them, except in the case of suspension of payment or bankruptcy on the part of the principal.

252. A factor who, without lawful cause, does not perform a commission which he has accepted or has begun to discharge, shall be liable for all the damage which happens to the principal on that account.

253. When a contract has been made by a factor with the formalities of the law, the principal shall be bound to accept all the consequences of the commission, saving the right of suing the factor for negligence of commission or omission in performing it.

254. A factor who, in the discharge of his commission, submits to the instructions received from the principal, shall be free from all liability with respect to the latter.

---

[1]) In order that the judge may take charge of these goods, it shall be necessary that he should be applied to in writing for the constitution of the deposit, the details thereof being expressed in the report, and nominating the person who is to be the depositary, who must be a registered merchant, if there is one in the place, and in default, a tax-payer who pays an amount of tax which the judge considers sufficient, in consideration of the value of the deposit and the conditions of the locality. The guarantees which the depositary has to offer for the safety of the deposit shall be at the discretion of the judge; provided that, if the person proposed by the applicant for the deposit does not possess them, in the opinion of the judge, he may on his own account appoint another person who in his opinion does combine them (art. 2119 of the Law of Civil Procedure). In order to constitute the deposit, the master shall draw up an order to deliver to the depositary, detailing the number and condition of the deposited goods; stating the differences, if any, which exist between the report which accompanied the application for the deposit and this other report which the master has to make (art. 2121 of the Law of Civil Procedure). The depositor must express his agreement with these corrections; and if he does not so do, and the difference is one of amount only, the master shall make a minute recount in the presence of the depositor and depositary, the result whereof shall be considered final. If the difference is one of quality, the judge shall appoint an expert by lot to classify the goods from among the incorporated brokers, if any, and in default, from among the merchants registered in the class to which the goods belong, all of which shall be drawn up in the corresponding minute. The expert so appointed shall not be challenged (art. 2122 of the Law of Civil Procedure); and while this is proceeding, the judge shall make the necessary provisional order for the custody and preservation of the goods which are to be deposited (art. 2123 of the Law of Civil Procedure). If the receipt and preservation of the goods cause any expenses, and there is no one who offers to pay them at the moment, the judge shall order the sale of what he considers necessary, and this sale shall be by public auction, after valuation by an expert appointed by the owner, if he presents himself, or by the public prosecutor, if the former is absent, and another by the judge, announcing the sale for not less than eight, nor more than fifteen days, by advertisements, which shall be posted up in the halls of the Court, and inserted in the *Boletin Oficial* of the province and the newspapers of the locality, if the judge thinks it necessary, bearing in mind the value of the said goods. If the owner of the goods is present and agrees to the expert appointed by the judge, one will be sufficient; and if he chooses to appoint one on his side, and the two appointed experts do not agree, the judge shall nominate a third by lot (art. 2124 of the Law of Civil Procedure). If there is no bidder at the auction or the bids do not cover two third parts of the valuation, there shall be a second auction, and a third, if necessary, within another equal term, at a lower price of 20% in each auction on the price of the reserve for the previous auction (art. 2125 of the Law of Civil Procedure).

255. En lo no previsto y prescrito expresamente por el comitente, deberá el comisionista consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio.

Mas si estuviere autorizado para obrar á su arbitrio, ó no fuere posible la consulta, hará lo que dicte la prudencia y sea más conforme al uso del comercio, cuidando del negocio como propio. En el caso de que un accidente no previsto hiciere, á juicio del comisionista, arriesgada ó perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender el cumplimiento de la comisión, comunicando al comitente, por el medio más rápido posible, las causas que hayan motivado su conducta.

256. En ningún caso podrá el comisionista proceder contra disposición expresa del comitente, quedando responsable de todos los daños y perjuicios que por hacerlo le ocasionare.

Igual responsabilidad pesará sobre el comisionista en los casos de malicia ó de abandono.

257. Serán de cuenta del comisionista los riesgos del numerario que tenga en su poder por razón de la comisión.

258. El comisionista que, sin autorización expresa del comitente, concertare una operación á precios ó condiciones más onerosas que las corrientes en la plaza á la fecha en que se hizo, será responsable al comitente del perjuicio que por ello le haya irrogado, sin que le sirva de excusa alegar que al mismo tiempo y en iguales circunstancias hizo operaciones por su cuenta.

259. El comisionista deberá observar lo establecido en las Leyes y reglamentos respecto á la negociación que se le hubiere confiado, y será responsable de los resultados de su contravención ú omisión. Si hubiere procedido en virtud de órdenes expresas del comitente, las responsabilidades á que haya lugar pesarán sobre ambos.

260. El comisionista comunicará frecuentemente al comitente las noticias que interesen al buen éxito de la negociación, participándole, por el correo del mismo día, ó del siguiente, en que hubieren tenido lugar, los contratos que hubiere celebrado.

261. El comisionista desempeñará por sí los encargos que reciba, y no podrá delegarlos sin previo consentimiento del comitente, á no estar de antemano autorizado para hacer la delegación; pero podrá, bajo su responsabilidad, emplear sus dependientes en aquellas operaciones subalternas que, según la costumbre general del comercio, se confían á éstos.

262. Si el comisionista hubiere hecho delegación ó sustitución con autorización del comitente, responderá de las gestiones del sustituto, si quedare á su elección la persona en quien había de delegar, y, en caso contrario, cesará su responsabilidad.

263. El comisionista estará obligado á rendir, con relación á sus libros, cuenta especificada y justificada de las cantidades que percibió para la comisión, reintegrando al comitente, en el plazo y forma que éste le prescriba, del sobrante que resulte á su favor.

En caso de morosidad abonará el interés legal[1]).

Serán de cargo del comitente el quebranto y extravío de fondos sobrantes, siempre que el comisionista hubiere observado las instrucciones de aquél respecto á la devolución.

264. El comisionista que, habiendo recibido fondos para evacuar un encargo, les diere inversión ó destino distinto del de la comisión, abonará al comitente el capital y su interés legal[2]), y será responsable, desde el día en que los recibió, de los daños y perjuicios originados á consecuencia de haber dejado de cumplir la comisión[3]), sin perjuicio de la acción criminal á que hubiere lugar.

265. El comisionista responderá de los efectos y mercaderías que recibiere, en los términos y con las condiciones y calidades con que se le avisare la remesa, á no ser que haga constar, al encargarse de ellos, las averías y deterioros que resulten, comparando su estado con el que conste en las cartas de porte ó fletamento, ó en las instrucciones recibidas del comitente.

[1]) El 5%. — [2]) El 5%.

[3]) A tenor del art. 1106 del Cód. c. la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida sufrida, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor.

255. The factor must consult the principal with regard to everything which has not been expressly provided and prescribed by him, provided that the nature of the business so permits.

But if he is authorised to act at his discretion, or consultation is not possible, he shall do what prudence dictates or what is most agreeable to the usage of commerce, but caring for the business as if it were his own. If an unforeseen accident happens which, in the judgment of the factor, makes the performance of the received instructions risky or detrimental, he may suspend the performance of the commission, and by the most rapid means possible shall acquaint the principal with the reasons which have guided his conduct.

256. In no case can the factor proceed contrary to the express directions of the principal, without being liable for all the damage which is occasioned him by so doing.

A factor shall incur the like liability in cases of malice or abandonment.

257. The risk of the cash which he has in his control by reason of the commission shall be borne by the factor.

258. A factor who, without the express authorisation of the principal, arranges a transaction at prices or under conditions which are more onerous than those current in the place at the date on which it was effected, shall be liable to the principal for the damage which he has occasioned him thereby, and he cannot be excused by pleading that at the same time and in similar circumstances he effected transactions on his own account.

259. A factor must observe the enactments in the laws and regulations with regard to the negotiation which has been entrusted to him, and shall be liable for the results of his infringement or omission. If he has proceeded under express orders of the principal, the liabilities which are incurred shall fall upon both.

260. A factor shall frequently advise the principal of the news which interests the good success of the negotiation, acquainting him with the contracts which he has made by the post of the same day or that following the day on which they have taken place.

261. A factor shall himself discharge the commissions which he receives, and may not delegate them without the previous consent of the principal, unless he has been authorised beforehand to effect the delegation; but, under his own responsibility, he may employ his own subordinates in those inferior operations which are entrusted to them by the general custom of commerce.

262. If a factor has made a delegation or substitution with the authorisation of the principal, he shall be liable for the acts of the substitute, if the person of the delegate was at his election, and if this was not the case, his liability shall cease.

263. A factor shall be obliged to render a specific and proved account, with reference to his books, of the amounts which he has received for the commission, repaying the resulting favourable surplus to the principal when and as the latter directs.

In case of delay, he shall pay the legal interest[1]).

The loss and mislaying of the surplus funds shall be borne by the principal, provided that the factor has observed the instructions of the latter with regard to the return.

264. A factor who, having received funds for the discharge of a commission, applies them to an investment or purpose different from that of the commission, shall pay the capital and its legal interest[2]) to the principal, and shall be liable from the day that he received them for the damage occasioned by his having failed to perform the commission[3]), without prejudice to any criminal proceeding.

265. A factor shall be liable for the goods and merchandise which he receives, in the terms and with the conditions and qualities with which the remittance is advised to him, unless, on taking charge thereof, he proves the resulting damage and deterioration, comparing their condition with that stated in the bills of lading or the charter-party, or in the instructions received from the principal.

---

[1]) 5%. — [2]) 5%.

[3]) According to art. 1106 of the Civil Code, compensation for damage includes, ont only the amount of the loss sustained, but also the loss of the profit which the plaintiff failed to obtain.

266. El comisionista que tuviere en su poder mercaderías ó efectos por cuenta ajena, responderá de su conservación en el estado que los recibió. Cesará esta responsabilidad cuando la destrucción ó el menoscabo sean debidos á casos fortuitos, fuerza mayor, transcurso de tiempo ó vicio propio de la cosa[1]).

En los casos de pérdida parcial ó total por el transcurso del tiempo ó vicio propio de la cosa, el comisionista estará obligado á acreditar en forma legal el menoscabo de las mercaderías, poniéndolo, tan luego como lo advierta, en conocimiento del comitente.

267. Ningún comisionista comprará para sí ni para otro lo que se le haya mandado vender, ni venderá lo que se le haya encargado comprar, sin licencia del comitente.

Tampoco podrá alterar las marcas de los efectos que hubiere comprado ó vendido por cuenta ajena.

268. Los comisionistas no pueden tener efectos de una misma especie pertenecientes á distintos dueños, bajo una misma marca, sin distinguirlos por una contramarca que evite confusión y designe la propiedad respectiva de cada comitente.

269. Si ocurriere en los efectos encargados á un comisionista alguna alteración que hiciere urgente su venta para salvar la parte posible de su valor, y fuere tal la premura que no hubiere tiempo para dar aviso al comitente y aguardar sus órdenes, acudirá el comisionista al juez ó tribunal competente, que autorizará la venta con las solemnidades y precauciones que estime más beneficiosas para el comitente[2]).

270. El comisionista no podrá, sin autorización del comitente, prestar ni vender al fiado ó á plazos, pudiendo en estos casos el comitente exigirle el pago al contado, dejando á favor del comisionista cualquier interés, beneficio ó ventaja que resulte de dicho crédito á plazo.

271. Si el comisionista, con la debida autorización, vendiere á plazo, deberá expresarlo en la cuenta ó avisos que dé al comitente, participándole los nombres de los compradores; y, no haciéndolo así, se entenderá, respecto al comitente, que las ventas fueron al contado.

272. Si el comisionista percibiere sobre una venta, además de la comisión ordinaria, otra, llamada de garantía, correrán de su cuenta los riesgos de la cobranza, quedando obligado á satisfacer al comitente el producto de la venta en los mismos plazos pactados por el comprador.

273. Será responsable de los perjuicios que ocasionen su omisión ó demora, el comisionista que no verificare la cobranza de los créditos de su comitente en las épocas en que fueren exigibles, á no ser que acredite que usó oportunamente de los medios legales para conseguir el pago.

274. El comisionista encargado de una expedición de efectos, que tuviere orden para asegurarlos, será responsable, si no lo hiciere, de los daños que á éstos sobrevengan, siempre que estuviere hecha la provisión de fondos necesaria para pagar el premio del seguro, ó se hubiere obligado á anticiparlos y dejare de dar aviso inmediato, al comitente, de la imposibilidad de contratarle.

Si durante el riesgo el asegurador se declarase en quiebra, tendrá el comisionista obligación de renovar el seguro, á no haberle prevenido cosa en contrario el comitente.

---

[1]) El Cód. c. aclara estos conceptos en su art. 1105 cuando dice que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieren podido preverse, ó que, previstos, fueran inevitables.

[2]) El comisionista habrá de solicitarlo por escrito del juez, expresando el número y clase de efectos que hayan de venderse, y el juez nombrará en el acto perito que reconozca los géneros en aquel mismo día, ó á lo más tardar en el siguiente. Si del informe pericial resultare ser necesaria la venta, el juez dictará auto ordenando su tasación y venta en pública subasta, adoptando las medidas que sean conducentes para la debida publicidad, teniendo en cuenta para ello, no solo el valor de los efectos, sino también la mayor ó menor urgencia de la venta, según su estado de conservación. — Si en la primera subasta no hubiere postor ó las posturas hechas no cubren las dos terceras partes del precio de tasación se anunciará por igual término una segunda ó sucesivas subastas con el 20% de rebaja en cada una. Y si la cantidad, producto de la venta no hubiere de tener inmediata aplicación se depositará á disposición de quien corresponda, deducido el importe de toda clase de gastos que se hayan hecho con ocasión de la venta. El depósito, en este caso, se hará en el establecimiento público destinado al efecto; y en su defecto en un comerciante matriculado de reconocida responsabilidad, y si no le hubiere en persona que tenga esta última circunstancia (art. 2161 y 2129, L. Enj. c.).

266. A factor who has merchandise or goods under his control on account of another, shall be liable for their preservation in the condition in which he received them. This liability shall cease when the destruction or deterioration is due to fortuitous events, *vis major,* lapse of time or inherent defect of the thing[1]).

In case of partial or total loss due to lapse of time or inherent defect of the thing, a factor shall be bound to prove the deterioration of the merchandise in legal form, bringing it to the knowledge of the principal as soon as he notices it.

267. No factor shall buy what he has been commissioned to sell, either on his own or another's account, or sell what he has been commissioned to buy, without leave of the principal.

Nor may he alter the trade marks of goods which he has bought or sold on another's account.

268. Factors may not have goods of the same species belonging to different owners, under the same mark, without distinguishing them by a countermark to avoid confusion and designate the respective ownership of each principal.

269. If any alteration takes place in the goods entrusted to a factor, which makes their sale urgent in order to save as much as possible of their value, and the pressure is so great that there is not time to advise the principal and await his orders, the factor shall resort to the competent judge or tribunal, who shall authorise the sale with the formalities and precautions which are considered most beneficial to the principal[2]).

270. Without the authorisation of the principal, a factor may not lend or sell on credit or for payment by instalments, the principal in these cases having power to demand cash payment from him, abandoning in favour of the factor any interest, profit or advantage resulting from the said credit.

271. If a factor sells on credit, with due authorisation, he must express the same in the account or advices which he renders to the principal, acquainting him with the names of the buyers; and if he does not do so, it shall be understood that, as concerns the principal, the sales were for cash.

272. If, besides the ordinary commission on a sale, a factor receives another which is called *del credere,* the risks of the collection shall be borne by him, and he shall be bound to pay the proceeds of the sale to the principal at the same times as are agreed by the buyer.

273. A factor who does not effect the collection of the credits of his principal at the times at which they are payable, shall be liable for the damage occasioned by his omission or delay, unless he proves that in due time he made use of the legal means for suing for the payment.

274. A factor entrusted with the despatch of goods, with an order to insure them, shall, if he does not so do, be liable for the damage which happens to them, provided that the principal has made the necessary provision of funds for paying the insurance premium, or that the factor was bound to advance them and failed to give immediate notice to the principal of the impossibility of effecting the insurance.

If the insurer is declared bankrupt during the currency of the risk, the factor shall be bound to renew the insurance, unless the principal has arranged anything different with him.

---

[1]) The Civil Code explains these conceptions in its art. 1105, saying that no one shall be liable for those events which could not be foreseen, or which, though foreseen, were unavoidable.

[2]) The factor must apply for it in writing addressed to the judge, expressing the number and class of goods which are to be sold, and the judge must at once appoint an expert to examine the goods on the same day, or on the following day at the latest. If the report of the expert shows that the sale is necessary, the judge must make an order for their valuation and sale by public auction, taking steps which lead to due publicity, bearing in mind for that purpose, not only the value of the goods, but also the greater or lesser urgency of the sale, according to their state of preservation. — If at the first sale there is no bidder, or the bids do not cover the two third parts of the amount of the valuation, a second or successive auctions must be announced with like notice but with 20% reduction in each case. And if the amount produced by the sale is not to be immediately applied, it must be deposited at the disposal of the person to whom it may belong, after deducting the total of every kind of expense which has been occasioned by the sale. In this case, the deposit must be effected in the public establishment appointed for that purpose; and in default, with a registered merchant of known responsibility, and in default, with any person who fulfils the last requirement (art. 2161 and 2129 of the Law of Civil Procedure).

275. El comisionista que en concepto de tal hubiere de remitir efectos á otro punto, deberá contratar el transporte, cumpliendo las obligaciones que se imponen al cargador en las conducciones terrestres y marítimas.

Si contratare en nombre propio el transporte, aunque lo haga por cuenta ajena, quedará sujeto para con el porteador á todas las obligaciones que se imponen á los cargadores en las conducciones terrestres y marítimas.

276. Los efectos que se remitieren en consignación, se entenderán especialmente obligados al pago de los derechos de comisión, anticipaciones y gastos que el comisionista hubiere hecho por cuenta de su valor y producto.

Como consecuencia de esta obligación: 1.° Ningún comisionista podrá ser desposeído de los efectos que recibió en consignación, sin que previamente se le reembolse de sus anticipaciones, gastos y derechos de comisión; — 2.° Por cuenta del producto de los mismos géneros deberá ser pagado el comisionista con preferencia á los demás acreedores del comitente, salvo lo dispuesto en el art. 375.

Para gozar de la preferencia consignada en este artículo, será condición necesaria que los efectos estén en poder del consignatario ó comisionista, ó que se hallen á su disposición en depósito ó almacén público, ó que se haya verificado la expedición consignándola á su nombre, habiendo recibido el conocimiento, talón ó carta de transporte firmada por el encargado de verificarla.

277. El comitente estará obligado á abonar al comisionista el premio de comisión, salvo pacto en contrario.

Faltando pacto expresivo de la cuota, se fijará ésta con arreglo al uso y práctica mercantil de la plaza donde se cumpliere la comisión.

278. El comitente estará asimismo obligado á satisfacer al contado al comisionista, mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos, con el interés legal[1]) desde el día en que los hubiere hecho hasta su total reintegro.

279. El comitente podrá revocar la comisión conferida al comisionista, en cualquier estado del negocio, poniéndolo en su noticia, pero quedando siempre obligado á las resultas de las gestiones practicadas antes de haberle hecho saber la revocación.

280. Por muerte del comisionista ó su inhabilitación se rescindirá el contrato; pero por muerte ó inhabilitación del comitente no se rescindirá, aunque pueden revocarlo sus representantes.

Sección segunda. De otras formas del mandato mercantil. Factores, dependientes y mancebos.

281. El comerciante podrá constituir apoderados ó mandatarios generales ó singulares para que hagan el tráfico en su nombre y por su cuenta en todo ó en parte, ó para que le auxilien en él.

282. El factor deberá tener la capacidad necesaria para obligarse con arreglo á este Código, y poder de la persona por cuya cuenta haga el tráfico.

283. El gerente de una empresa ó establecimiento fabril ó comercial por cuenta ajena, autorizado para administrarlo, dirigirlo y contratar sobre las cosas concernientes á él, con más ó menos facultades, según haya tenido por conveniente el propietario, tendrá el concepto legal de factor, y le serán aplicables las disposiciones contenidas en esta sección.

284. Los factores negociarán y contratarán á nombre de sus principales, y, en todos los documentos que suscriban en tal concepto, expresarán que lo hacen con poder ó en nombre de la persona ó sociedad que representen.

285. Contratando los factores en los términos que previene el artículo precedente, recaerán sobre los comitentes todas las obligaciones que contrajeren.

Cualquiera reclamación para compelerlos á su cumplimiento, se hará efectiva en los bienes del principal, establecimiento ó empresa, y no en los del factor, á menos que estén confundidos con aquéllos.

286. Los contratos celebrados por el factor de un establecimiento ó empresa fabril ó comercial, cuando notoriamente pertenezca á una empresa ó sociedad conocidas, se entenderán hechos por cuenta del propietario de dicha empresa ó sociedad, aun cuando el factor no lo haya expresado al tiempo de celebrarlos, ó se alegue

[1]) El 5%.

275. A factor who, in that character, has to remit goods to another place, must contract for the carriage and fulfil the obligations imposed on a consignor in land and sea transport.

If he contracts for the carriage in his own name, although doing so on account of another, he shall, as regards the carrier, be subject to all the obligations which are imposed on consignors in land and sea transport.

276. Goods which are remitted to a factor, shall be understood as specially bound to the payment of the lawful commission, advances and expenses which the factor has incurred on account of their value or proceeds.

Consequent on this obligation: 1. No factor may be dispossessed of the goods which he has received as factor, without having been previously paid his advances, expenses and lawful commission; — 2. The factor must be paid in preference to the other creditors of the principal, out of the proceeds of the same goods, except as provided in art. 375.

In order to enjoy the preference stated in this article, it shall be a necessary condition that the goods shall be in the control of the consignee or factor, or that they shall be at his disposal in a public depository or warehouse, or shall have been consigned to his name, and he shall have received the bill of lading or check signed by the person whose duty it is to sign the same.

277. The principal shall be bound to pay the commission to the factor, saving an agreement to the contrary.

If there is no express agreement as to the amount, it shall be fixed according to the mercantile usage and practice of the place where the commission is fulfilled.

278. The principal shall likewise be bound, on receiving a proved account, to pay in cash to the factor the amount of all his expenses and disbursements, with legal interest[1]) from the day on which he incurred them until their total repayment.

279. A principal may revoke the commission conferred on a factor, at any state of the business, by bringing the fact to his notice, but always remaining bound by the results of the operations effected before having informed him of the revocation.

280. The contract shall be rescinded by the death or disability of the factor; but it shall not be rescinded by the death or disability of the principal, although his representatives may have the power to revoke it.

Second Section. Other forms of mercantile mandate. Managers, subordinates and assistants.

281. A merchant may constitute general or particular attorneys or agents to trade in his name and on his account in whole or in part, or to aid him therein.

282. A manager must have the legal capacity which is necessary for binding himself in accordance with this Code, and a power from the person on whose account he trades.

283. A manager on another's account of a manufacturing or commercial undertaking or establishment authorised to administer and direct it and to contract in the matters which concern it, with greater or less powers, as the proprietor has thought fit, shall have the legal conception of manager, and the provisions contained in this section shall apply to him.

284. Managers shall negotiate and contract in the names of their principals, and in all the documents which they sign in that character, they shall state that they do so with the power and in the name of the person or society that they represent.

285. When managers contract in the terms provided in the preceding article, all the obligations which they contract shall fall on their principals. All claims to compel them to perform the same, shall be enforced on the property of the principal, of the establishment or undertaking, and not on that of the manager, unless they are confused together.

286. The contracts made by the manager of a manufacturing or commercial establishment or undertaking, when he notoriously belongs to a known undertaking or society, shall be understood as made on account of the owner of the said undertaking or society, even when the manager has not so stated at the time of making them,

---

[1]) 5%.

abuso de confianza, transgresión de facultades ó apropiación por el factor de los efectos objeto del contrato, siempre que estos contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y tráfico del establecimiento, ó si, aun siendo de otra naturaleza, resultare que el factor obró con orden de su comitente, ó que éste aprobó su gestión en términos expresos ó por hechos positivos.

287. El contrato hecho por un factor en nombre propio, le obligará directamente con la persona con quien lo hubiere celebrado; mas si la negociación se hubiere hecho por cuenta del principal, la otra parte contratante podrá dirigir su acción contra el factor ó contra el principal.

288. Los factores no podrán traficar por su cuenta particular, ni interesarse en nombre propio ni ajeno en negociaciones del mismo género de las que hicieren á nombre de sus principales, á menos que éstos los autoricen expresamente para ello.

Si negociaren sin esta autorización, los beneficios de la negociación serán para el principal, y las pérdidas, á cargo del factor.

Si el principal hubiere concedido al factor autorización para hacer operaciones por su cuenta ó asociado á otras personas, no tendrá aquél derecho á las ganancias ni participará de las pérdidas que sobrevinieren.

Si el principal hubiere interesado al factor en alguna operación, la participación de éste en las ganancias será, salvo pacto en contrario, proporcionada al capital, que aportore; y no aportando capital, será reputado socio industrial.

289. Las multas en que pueda incurrir el factor por contravenciones á las Leyes fiscales ó reglamentos de administración pública en las gestiones de su factoría, se harán efectivas desde luego en los bienes que administre, sin perjuicio del derecho del principal contra el factor por su culpabilidad en los hechos que dieren lugar á la multa.

290. Los poderes conferidos á un factor se estimarán subsistentes mientras no le fueren expresamente revocados, no obstante la muerte de su principal ó de la persona de quien en debida forma los hubiere recibido.

291. Los actos y contratos ejecutados por el factor serán válidos, respecto de su poderdante, siempre que sean anteriores al momento en que llegue á noticia de aquél por un medio legítimo la revocación de los poderes ó la enajenación del establecimiento.

También serán válidos con relación á terceros, mientras no se haya cumplido, en cuanto á la revocación de los poderes, lo prescrito en el número 6.° del art. 21.

292. Los comerciantes podrán encomendar á otras personas, además de los factores, el desempeño constante, en su nombre y por su cuenta, de alguna ó algunas gestiones propias del tráfico á que se dediquen, en virtud de pacto escrito ó verbal; consignándolo en sus reglamentos las compañías, y comunicándolo los particulares por avisos públicos ó por medio de circulares á sus corresponsales.

Los actos de estos dependientes ó mandatarios singulares no obligarán á su principal sino en las operaciones propias del ramo que determinadamente les estuviere encomendado.

293. Las disposiciones del artículo anterior serán igualmente aplicables á los mancebos de comercio que estén autorizados para regir una operación mercantil, ó alguna parte del giro y tráfico de su principal.

294. Los mancebos encargados de vender al por menor en un almacén público, se reputarán autorizados para cobrar el importe de las ventas que hicieren, y sus recibos serán válidos, expidiéndolos á nombre de sus principales.

Igual facultad tendrán los mancebos que vendan en los almacenes por mayor, siempre que las ventas fueren al contado y el pago se verifique en el mismo almacén; pero cuando las cobranzas se hubieren de hacer fuera de éste, ó procedan de ventas hechas á plazos, los recibos se firmarán necesariamente por el principal ó su factor, ó por apoderado legítimamente constituído para cobrar.

295. Cuando un comerciante encargare á su mancebo la recepción de mercaderías y éste las recibiere sin reparo sobre su cantidad ó calidad, surtirá su recepción los mismos efectos que si la hubiere hecho el principal.

296. Sin consentimiento de sus principales, ni los factores ni los mancebos de comercio podrán delegar en otros los encargos que recibieren de aquéllos; y en caso de hacerlo sin dicho consentimiento, responderán directamente de las gestiones de los sustitutos y de las obligaciones contraídas por éstos.

or an abuse of confidence or infringement of powers or appropriation by the manager of the goods which were the subject-matter of the contract is pleaded, provided that these contracts affect objects which are included in the course and trade of the establishment, or if, being of another nature, it is shown that the manager acted under the order of his principal, or that the latter ratified his action in express terms or by positive acts.

287. A contract made by a manager in his own name shall bind him directly to the person with whom it was made; but if the transaction was effected on account of the principal, the other contracting party may bring his action against the manager or against the principal.

288. Managers may not trade on their private account, nor interest themselves in their own or another's name in transactions of the same kind as those which they effect in the name of their principals, unless the latter expressly authorise them thereto.

If they negotiate without this authorisation, the profits of the negotiation shall belong to the principal, and the losses shall be borne by the factor.

If the principal has authorised the factor to effect operations on his own account or associated with other persons, the former shall not be entitled to the profits nor shall he share in the resulting losses.

If the principal has given the manager an interest in any transaction, the participation of the latter in the profits, in the absence of an agreement to the contrary, shall be in proportion to the capital which he brings in; and if he does not bring in capital he shall be considered an industrial partner.

289. Fines which the manager may incur for contraventions of the fiscal laws or the regulations of the public administration in the acts of his management, shall at once be enforced on the property which he administers, without prejudice to the right of the principal against the manager for his culpability in the acts which gave rise to the fine.

290. Powers conferred on a manager shall be considered to be subsisting until they are expressly revoked, notwithstanding the death of his principal or of the person from whom he received them in due form.

291. Acts and contracts carried out by a manager shall be valid with regard to the person who conferred the powers, provided that they are previous to the moment when the revocation of the powers or the alienation of the establishment came to the notice of the former by lawful means.

They shall likewise be valid with relation to third persons, until the provisions of No. 6 of art. 21, respecting the revocation of powers, have been complied with.

292. Merchants may by virtue of a written or verbal agreement, entrust other persons besides managers with the constant discharge, in their name and on their account, of any act or acts proper to the trade to which they devote themselves; companies stating the fact in their regulations, and communicating the particulars to their correspondents by public notices or by means of circulars.

The acts of these particular subordinates or agents shall not bind their principal except in transactions proper to the branch which has been definitely entrusted to them.

293. The provisions of the preceding article shall likewise apply to commercial assistants who are authorised to control a mercantile transaction, or any part of the business or trade of their principal.

294. Assistants authorised to sell by retail in a public warehouse, shall be considered authorised to collect the value of the sales made by them, and their receipts shall be valid, when they issue them in the name of their principals.

Assistants who sell wholesale in warehouses shall have the same power, provided that the sales are for cash and the payment made in the same warehouse; but when the collections are made away therefrom, or arise from sales on credit, the receipts shall necessarily be signed by the principal or his manager, or by an attorney lawfully constituted for the purpose of collection.

295. When a merchant entrusts his assistant with the acceptance of merchandise, and the latter accepts it with no objection as to quantity or quality, his acceptance shall have the same effect as if it were effected by the principal.

296. Without the consent of their principals, neither managers nor commercial assistants may delegate to others the commissions which they have received from the former; and if this is done without the said consent, they shall be directly liable for the acts of their substitutes and for the obligations contracted by the latter.

297. Los factores y mancebos de comercio serán responsables á sus principales de cualquier perjuicio que causen á sus intereses por haber procedido en el desempeño de sus funciones con malicia, negligencia ó infracción de las órdenes ó instrucciones que hubieren recibido.

298. Si, por efecto del servicio que preste, un mancebo de comercio hiciere algún gasto extraordinario ó experimentare alguna pérdida, no habiendo mediado sobre ello pacto expreso entre él y su principal, será de cargo de éste indemnizarle del quebranto sufrido.

299. Si el contrato entre los comerciantes y sus mancebos y dependientes se hubiere celebrado por tiempo fijo, no podrá ninguna de las partes contratantes separarse, sin consentimiento de la otra, de su cumplimiento, hasta la terminación del plazo convenido.

Los que contravinieren á esta cláusula, quedarán jujetos á la indemnización de daños y perjuicios, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.

300. Serán causas especiales para que los comerciantes puedan despedir á sus dependientes, no obstante no haber cumplido el plazo del empeño: 1.ª El fraude ó abuso de confianza en las gestiones que les hubieren confiado; — 2.ª Hacer alguna negociación de comercio por cuenta propia, sin conocimiento expreso y licencia del principal; — 3.ª Faltar gravemente al respeto y consideración debidos á éste ó á las personas de su familia ó dependencia.

301. Serán causas para que los dependientes puedan despedirse de sus principales, aunque no hayan cumplido el plazo del empeño: 1.ª La falta de pago en los plazos fijados del sueldo ó estipendios convenidos; — 2.ª La falta del cumplimiento de cualquiera de las demás condiciones concertadas en beneficio del dependiente; — 3.ª Los malos tratamientos ú ofensas graves por parte del principal.

302. En los casos de que el empeño no tuviere tiempo señalado, cualquiera de las partes podrá darlo por fenecido, avisando á la otra con un mes de anticipación.

El factor ó mancebo tendrá derecho, en este caso, al sueldo que corresponda á dicha mesada.

Título IV. Del depósito mercantil.

303. Para que el depósito sea mercantil, se requiere: 1.° Que el depositario, al menos, sea comerciante; — 2.° Que las cosas depositadas sean objetos de comercio; — 3.° Que el depósito constituya por sí una operación mercantil, ó se haga como causa ó á consecuencia de operaciones mercantiles.

304. El depositario tendrá derecho á exigir retribución por el depósito, á no mediar pacto expreso en contrario.

Si las partes contratantes no hubieren fijado la cuota de la retribución, se regulará según los usos de la plaza en que el depósito se hubiere constituído.

305. El depósito quedará constituído mediante la entrega, al depositario, de la cosa que constituya su objeto.

306. El depositario está obligado á conservar la cosa objeto del depósito según la reciba, y á devolverla con sus aumentos, si los tuviere, cuando el depositante se la pida.

En la conservación del depósito, responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia ó negligencia, y también de los que provengan de la naturaleza ó vicio de las cosas, si en estos casos no hizo por su parte lo necesario para evitarlos ó remediarlos, dando aviso de ellos además al depositante inmediatamente que se manifestaren.

307. Cuando los depósitos sean de numerario, con especificación de las monedas que los constituyan, ó cuando se entreguen sellados ó cerrados[1]), los aumentos ó bajas que su valor experimente serán de cuenta del depositante.

Los riesgos de dichos depósitos correrán á cargo del depositario, siendo de cuenta del mismo los daños que sufrieren, á no probar que ocurrieron por fuerza mayor ó caso fortuito insuperable[2]).

[1]) Con arreglo al art. 182 de la L. del T. los resguardos de estos depósitos, así como los de alhajas y efectos análogos, ó simplemente de documentos que no devenguen interés, de cualquier clase que sean, satisfagan ó no dichos depósitos premios de custodia, se han de reintegrar con timbre de 2 pesetas, clase 10.ª.

[2]) Vease la pág. 126, nota 1.

297. Managers and commercial assistants shall be liable to their principals for all damage which they cause to their interests by having proceeded in the discharge of their functions with malice or negligence or in breach of the orders or instructions which they have received.

298. If by the effect of the service which he renders, a commercial assistant incurs any extraordinary expense or suffers any loss, and there has been no express agreement thereon between him and his principal, it shall be the duty of the latter to compensate for the loss suffered.

299. If the contract between merchants and their assistants and subordinates has been made for a fixed time, neither of the contracting parties, without the consent of the other, may withdraw from its performance, until the end of the agreed time.

Those persons who infringe this clause shall be subject to an indemnity for damages, except as provided in the following articles.

300. The following shall be special reasons for which merchants may dismiss their subordinates, notwithstanding that they have not completed the time of their employment: 1. Fraud or abuse of confidence in the operations which are entrusted to them; — 2. Effecting any commercial transaction on their own account, without the express knowledge and leave of the principal; — 3. Grossly failing in the respect and consideration due to the latter or to the members of his family or relationship.

301. The following shall be reasons for which subordinates may leave their principals, although they have not completed the time of their employment: 1. Failure to pay the wages or agreed salaries at the fixed times; — 2. Failure to fulfil any other condition made for the benefit of the subordinate; — 3. Bad treatment or gross offences on the part of the principal.

302. When the employment has not a stated time, either party may terminate it, by giving the other a month's notice.

In that case, the manager or assistant shall be entitled to the pay which corresponds to the said term of one month.

Title IV. Mercantile deposit.

303. In order that a deposit may have a mercantile character, it is necessary: 1. That in any case the depositary should be a merchant; — 2. That the things deposited should be objects of commerce; — 3. That the deposit should constitute in itself a mercantile operation, or be made as a cause or consequence of mercantile operations.

304. The depositary shall be entitled to demand a reward for the deposit, unless there is an express agreement to the contrary.

If the contracting parties have not fixed the amount of the reward, it shall be regulated by the usage of the place where the deposit has been constituted.

305. A deposit shall be constituted by means of the delivery to the depositary of the thing which constitutes its subject-matter.

306. A depositary is bound to preserve the subject-matter of the deposit according to the receipt, and to return it with its increment, if any, when the depositor applies therefor.

In preserving the deposit, the depositary shall be responsible for the depreciation and damage suffered by the things deposited through his malice or negligence, and likewise for those which proceed from the nature or defect of the things, if in the latter case, he has not on his part done what is necessary to avoid or remedy them, as well as given notice thereof to the depositor immediately they become evident.

307. When the deposits are in coin, with particulars of the moneys which constitute them, or when they are delivered sealed or closed[1]), the rises or falls in their value shall be borne by the depositor.

The risks of the said deposits shall be borne by the depositary, as well as the damages which they may suffer, unless it is proved that they occurred through *vis major* or an unvoidable accident[2]).

---

[1]) According to art. 182 of the Stamp Act, the receipts for these deposits, as well as those for jewels and like effects, or merely for documents which do not earn interest, of whatever kind they be, whether the deposits pay a reward for custody or not, have to bear a stamp of 2 pesetas, class 10.

[2]) See page 126, note 1.

Cuando los depósitos de numerario se constituyeren sin especificación de monedas ó sin cerrar ó sellar[1]), el depositario responderá de su conservación y riesgos, en los términos establecidos por el párrafo segundo del art. 306.

308. Los depositarios de títulos, valores, efectos ó documentos que devenguen intereses[2]), quedan obligados á realizar el cobro de éstos en las épocas de sus vencimientos, así como también á practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos que les correspondan con arreglo á disposiciones legales.

309. Siempre que, con asentimiento del depositante, dispusiere el depositario de las cosas que fueren objeto de depósito, ya para sí ó sus negocios, ya para operaciones que aquél le encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propios del depositante y depositario, y se observarán las reglas y disposiciones aplicables al prestámo mercantil, á la comisión ó al contrato que en sustitución del depósito hubieren celebrado.

310. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, los depósitos verificados en los Bancos, en los almacenes generales, en las sociedades de crédito ó en otras cualesquiera compañías, se regirán en primer lugar por los estatutos de las mismas, en segundo por las prescripciones de este Código, y últimamente, por las reglas del derecho común, que son aplicables á todos los depósitos[3]).

---

[1]) Los documentos de resguardo de metálico, cuando no disfruten interés alguno por el depósito, se reintegrarán con timbre de una peseta (art. 183 de la L. del T.). Si devengaren interés se sujetarán al pago del timbre con arreglo á la escala gradual de la siguiente nota.

[2]) Los resguardos de estos depósitos satisfarán por derechos de timbre, según su valor con sujeción á la siguiente escala:

Cuantía efectiva del depósito.				Timbre	
				Clase	Precio Pesetas
Hasta	2 000	pesetas		16a	0,10
Desde	2 000,01	hasta	5 000 id	15a	0,25
,,	5 000,01	,,	10 000 id	14a	0,50
,,	10 000,01	,,	20 000 id	13a	1,00
,,	20 000,01	,,	40 000 id	12a	2,00
,,	40 000,01	,,	60 000 id	11a	3,00
,,	60 000,01	,,	80 000 id	10a	4,00
,,	80 000,01	,,	100 000 id	9a	5,00
,,	100 000,01	,,	140 000 id	8a	7,00
,,	140 000,01	,,	en adelante	7a	10,00

Este impuesto se pagará empleando timbres móviles, que habrán de inutilizarse estampando encima la fecha del documento en que se fijen; entendiéndose que la falta de este requisito se considerará como omisión del timbre á los efectos de la sanción correccional (art. 187 y 9 de la L. del T.)

[3]) Las reglas del derecho común aplicables á todos los depósitos están contenidas en el Título XI del Libro 4 del Cód. c., pero de ellas, unas son inaplicables al deposito mercantil á que hace referencia este artículo, como las relativas al depósito necesario y al secuestro ó depósito judicial, otras son innecesarias, por cuanto reproducen ó contradicen lo expuesto en el Cód. de com. y unas cuantas tan solo (las menos) son las que pueden conceptuarse como derecho supletorio, y las que por lo tanto vamos á reproducir. — Helas aquí: — El depositario no puede exigir que el depositante pruebe ser propietario de la cosa depositada. Sin embargo, si llega á descubrir que la cosa ha sido hurtada y quién es su verdadero dueño debe hacer saber á este el depósito. Si el dueño á pesar de esto no reclama en el término de un mes, quedará libre de toda responsabilidad el depositario, devolviendo la cosa depositada á aquel de quien la recibió (art. 1771). — Cuando sean dos ó más los depositantes, si no fuesen solidarios y la cosa admitiere división, no podrá pedir cada uno de ellos más que su parte. Cuando haya solidaridad ó la cosa no admita división, regirá lo dispuesto en los art. 1141 y 1142 del Cód. c. (que pueden verse en las leyes complementarias) (art. 1772). — Cuando el depositante pierde, después de hacer el depósito, su capacidad para contratar, no puede devolverse el depósito sino á los que tengan la administración de sus bienes y derecho (art. 1773). — Cuando al hacerse el depósito se designó lugar para la devolución, el depositario debe llevar á él la cosa depositada; pero los gastos que ocasione la traslación serán de cargo del depositante. No habiéndose designado lugar para la devolución, deberá hacerse esta en el que se halle la cosa depositada, aunque no sea el mismo en que se hizo el depósito, con tal de que no haya intervenido malicia de parte del depositario (art. 1774). — El depósito debe ser restituído al depositante cuando lo reclame, aunque en el contrato se haya fijado un plazo ó tiempo determinado para la devolución. Esta disposición no tendrá lugar cuando judicialmente haya sido embargado el depósito en poder del depositario, ó se haya notificado á este la oposición de un tercero

When deposits of coin are constituted without the moneys being specified, and without closing or sealing[1]), the depositary shall be responsible for their preservation and risks, in the terms enacted by the second paragraph of art. 306.

308. Depositaries of securities, valuables, effects or documents which earn interest[2]) are bound to collect the same at the times of their maturities, as well as take whatever steps are necessary in order that the deposited effects may preserve their value and rights according to the legal provisions.

309. Whenever, with the consent of the depositor, the depositary disposes of the things which were the subject-matter of the deposit, whether for himself or his business, or for transactions which the former entrusts to him, the rights and obligations proper to the depositor and depositary shall cease, and the rules and provisions applicable to mercantile loan, to agency or to the contract which may have been made in substitution for the deposit, shall be observed.

310. Notwithstanding the provisions in the preceding articles, deposits made in Banks, general warehouses, credit societies or any other companies, shall be governed in the first place by the constitutions of the same, in the second place by the provisions of this Code, and lastly, by the rules of the common law which apply to all deposits[3]).

[1]) Receipts for cash, when they do not earn any interest for the deposit, have to bear a stamp of 1 peseta (art. 183 of the Stamp Act). If they earn interest, they are subject to payment of a stamp according to the graduated scale in the following note.

[2]) The receipts for these deposits must pay stamp duty on their value, according to the following scale:

Actual amount of the deposit				Stamp	
				Class	Price Pesetas
Not exceeding	2 000	pesetas		16.	0,10
From	2 000,01	to	5 000	15.	0,25
,,	5 000,01	,,	10 000	14.	0,50
,,	10 000,01	,,	20 000	13.	1,00
,,	20 000,01	,,	40 000	12.	2,00
,,	40 000,01	,,	60 000	11.	3,00
,,	60 000,01	,,	80 000	10.	4,00
,,	80 000,01	,,	100 000	9.	5,00
,,	100 000,01	,,	140 000	8.	7,00
,,	140 000,01	,,	upwards	7.	10,00

This tax must be paid by using adhesive stamps, which must be cancelled by stamping upon them the date of the document on which they are fixed, it being understood that the absence of this requirement will be considered as the omission of the stamp for the purposes of prosecution (art. 187 and 9 of the Stamp Act).

[3]) The rules of the common law which apply to all deposits are contained in Title XI of Book 4 of the Civil Code, but some of these are not applicable to mercantile deposit, to which this article refers, such as those relating to compulsory deposit and sequestration or judicial deposit, while others are unnecessary, inasmuch as they reproduce or contradict the provisions of the Code of Commerce, and only a few (the least important) can be regarded as supplementary law, and these for that reason we proceed to reproduce as follows: The depositary cannot demand that the depositor should prove that he is the owner of the deposit. Nevertheless, if he comes to discover that the thing has been stolen and who the true owner is, he must make known the deposit to the latter. If in spite of this, the owner does not claim it within the term of one month, the depositary shall be free from all liability, on returning the deposit to the person from whom he received it (art. 1771). When there are two or more depositors and they are not joint owners and the thing admits of division, one of them cannot apply for more than his share. When there is joint ownership or the thing does not admit of division, the provisions of arts. 1141 and 1142 of the Civil Code shall govern (which may be seen in the supplementary laws) (art. 1772). When after effecting the deposit, the depositor loses his legal capacity to contract, the deposit can only be returned to those who are empowered to administer his property and rights (art. 1773). When on effecting the deposit, a place is designated for the return, the depositary must bring the deposit thither; but the expenses occasioned by the transport shall be borne by the depositor. If there is no place designated for the return, this must be effected where the deposit is situated, although it is not the same as that where the deposit was made, provided that there has been no malice on the part of the depositary (art. 1774). The deposit must be restored to the depositor when he claims it, although a time has been fixed in the contract for the return. This provision shall not apply when the deposit in the control of the depositary has been judicially arrested, or when he has been noti-

Título V. De los préstamos mercantiles.

Sección primera. Del préstamo mercantil.

311. Se reputará mercantil el préstamo, concurriendo las circunstancias siguientes: 1.ª Si alguno de los contratantes fuere comerciante; — 2.ª Si las cosas prestadas se destinaren á actos de comercio.

312. Consistiendo el préstamo en dinero[1]), pagará el deudor devolviendo una cantidad igual á la recibida, con arreglo al valor legal que tuviere la moneda al tiempo de la devolución, salvo si se hubiere pactado la especie de moneda en que había de hacerse el pago, en cuyo caso la alteración que hubiese experimentado su valor, será en daño ó en beneficio del prestador.

En los préstamos de títulos ó valores[2]), pagará el deudor devolviendo otros tantos de la misma clase é idénticas condiciones, ó sus equivalentes si aquéllos se hubiesen extinguido, salvo pacto en contrario.

Si los préstamos fueren en especie[3]), deberá el deudor devolver, á no mediar pacto en distinto sentido, igual cantidad en la misma especie y calidad, ó su equivalente en metálico si se hubiere extinguido la especie debida.

313. En los préstamos por tiempo indeterminado, ó sin plazo marcado de vencimiento, no podrá exigirse al deudor el pago sino pasados treinta días, á contar desde la fecha del requerimiento notarial que se le hubiere hecho.

314. Los préstamos no devengarán interés si no se hubiere pactado por escrito.

315. Podrá pactarse el interés del préstamo, sin tasa ni limitación de ninguna especie.

Se reputará interés toda prestación pactada á favor del acreedor[4]).

316. Los deudores que demoren el pago de sus deudas después de vencidas, deberán satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento el interés pactado para este caso, ó en su defecto el legal[5]).

Si el préstamo consistiere en especie, para computar el rédito se graduará su valor por los precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en que deba hacerse la devolución, el día siguiente al del vencimiento, ó por el que determinen peritos, si la mercadería estuviere extinguida al tiempo de hacerse su valuación.

Y si consistiere el préstamo en títulos ó valores, el rédito por mora será el que los mismos valores ó títulos devenguen, ó en su defecto el legal[6]), determinándose el precio de los valores por el que tengan en Bolsa, si fueren cotizables, ó en la plaza ne otro caso, el día siguiente al del vencimiento.

317. Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizar los intereses líquidos y no satisfechos, que, como aumento de capital, devengarán nuevos réditos.

318. El recibo del capital por el acreedor, sin reservarse expresamente el derecho á los intereses pactados ó debidos, extinguirá la obligación del deudor respecto á los mismos.

á la restitución ó traslación de la cosa depositada (art. 1775). — El depositario que tenga justos motivos para no conservar el depósito podrá, aun antes del término designado, restituirlo al depositante; y, si este lo resiste, podrá obtener del juez su consignación (art. 1776). — El depositario que por fuerza mayor hubiere perdido la cosa depositada y recibido otra en su lugar, estará obligado á entregar esta al depositante (art. 1777). — El heredero del depositario, que de buena fé haya vendido la cosa que ignoraba ser depositada, solo está obligado á restituir el precio que hubiere recibido, ó á ceder sus acciones contra el comprador en el caso de que el precio no se le haya pagado (art. 1778). — El depositario puede retener en prenda la cosa depositada hasta el completo pago de lo que se le deba por razón del depósito (art. 1780).

[1]) Los préstamos que no se consisten en pagarés á la orden, háganse ó no en escritura pública, si su cuantía excede de 10 pesetas quedarán sujetos al pago proporcional por derechos de timbre que marca la escala gradual de la nota 56 (art. 190 de la L. del T.).

[2]) Cuando los títulos ó valores no sean valores públicos, el documento en que conste el préstamo se rentegrará del mismo modo que los en dinero á que se refiere la nota anterior (art. 190, L. del T.).

[3]) Están sujetos al mismo derecho de timbre que los á que se refieren las dos anteriores notas (art. 190, L. del T.).

[4]) Estos préstamos están sujetos al impuesto de utilidades; y pagarán, con arreglo á la tarifa 2.ª de la Ley de 27 de marzo de 1900, el 3% de los intereses; — tomándose la base del rédito legal cuando no consten los intereses pactados.

[5]) Este interés legal que era el 6% á la publicación del Cód. de com., y que por el art. 1108 del Cód. c. siguió siendo el mismo, ha quedado reducido al 5% desde la Ley de 2 de agosto de 1899.

[6]) Véase la nota anterior.

Title V. Mercantile loans.

First Section. The mercantile loan.

311. A loan shall be considered mercantile, in the combination of the following circumstances: 1. If one of the contractors is a merchant; — 2. If the things lent are intended for acts of commerce.

312. When the loan consists of money[1]), the debtor shall pay by returning an amount equal to that received, according to the legal value of the money at the time of the return, unless the species of money in which payment is to be made has been agreed, in which case the alteration which its value may have experienced shall accrue to the damage or benefit of the lender.

In loans of securities or valuables[2]), the debtor shall pay by returning others of the same kind and in the same condition, or their equivalents, if they have been cancelled, saving an agreement to the contrary.

If the loans are of fungibles[3]), in the absence of an agreement to the contrary, the debtor shall return a like quantity of the same species or quality, or their equivalent in cash if the fungible due has been extinguished.

313. In loans for an uncertain time, or without a term stated for maturity, payment cannot be demanded of the debtor until thirty days have expired, reckoned from the date of the notarial demand made on him.

314. Loans shall not earn interest unless it has been agreed in writing.

315. Interest on a loan may be agreed without measure or limitation of any kind.

Every consideration agreed in favour of the creditor shall be considered interest[4]).

316. Debtors who delay payment of their debts after they are due, must pay the interest which is agreed for this event, or in default of agreement, the legal interest[5]), from the day following the maturity.

If the loan consists of fungibles, then for the purpose of computing the interest their value shall be regulated by the prices of the lent merchandise in the place where it has to be returned, on the day following the maturity, or by the value fixed by experts, if the merchandise is extinguished at the time of making its valuation.

And if the loan consists of securities or valuables, the interest for delay shall be that earned by the same securities or valuables, or in default thereof, the legal interest[6]), the price of the securities being fixed by that which they have on Exchange, if they are quotable, or otherwise at the place, on the day following the maturity.

317. Interest due and unpaid shall not earn interest. The contractors may nevertheless capitalise the net unpaid interest, which added to the principal shall earn fresh interest.

318. The receipt of the principal by the creditor, without expressly reserving the right to the interest agreed or due, shall extinguish the obligation of the debtor in respect thereof.

---

fied of the opposition of a third person to the return or removal of the deposit (art. 1775). A depositary who has just cause for not keeping the deposit, may restore it to the depositor before the stated time; and if the latter objects, he may obtain its deposit in Court from the judge (art. 1776). A depositary who has lost the deposit through *vis major* and has received another in its place, shall be obliged to deliver the latter to the depositor (art. 1777). The heir of a depositary who has sold the thing in good faith, not knowing that it was a deposit, shall only be obliged to return the price which he has received, or to assign his rights of action against the buyer if the price has not been paid (art. 1778). The depositary may retain the deposit as a pledge until the complete payment of what is due by reason of the deposit (art. 1780).

[1]) Loans which do not consist in promissory notes to order, whether made by notarial instrument or not, if their amount exceeds 10 pesetas, are subject to proportional payment of the stamp duty marked in the graduated scale of note 56 (art. 190 of the Stamp Act).

[2]) When the securities or valuables are not public securities, the document in which the loan appears must pay in the same way as those in money, to which the previous note refers (art. 190 of the Stamp Act).

[3]) They are subject to the same stamp duty as those to which the two preceding notes refer (art. 190 of the Stamp Act).

[4]) These loans are subject to income tax; and must pay 3% on the profits, according to tariff 2 of the Law of 27 March 1900; taking the legal interest as the basis, when there is no agreed interest. (Loans evidenced by a written document not to bearer now pay 5% [Translator].)

[5]) This interest, which was 6% at the publication of the Code of Commerce, and which by art. 1108 of the Civil Code continued the same, was reduced to 5% by the Law of 2 August 1899.

[6]) See the preceding note.

Las entregas á cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán en primer término al pago de intereses por orden de vencimientos, y después al del capital.

319. Interpuesta una demanda, no podrá hacerse la acumulación de interés al capital para exigir mayores réditos.

Sección segunda. De los préstamos con garantía de efectos ó valores públicos.[1])

320. El préstamo con garantía de efectos cotizables, hecho en póliza[2]) con intervención de agentes colegiados, se reputará siempre mercantil.

El prestador tendrá, sobre los efectos ó valores públicos pignorados conforme á las disposiciones de esta sección, derecho á cobrar su crédito con preferencia á los demás acreedores, quienes no podrán retirar de su poder dichos efectos, á no ser satisfaciendo el crédito constituído sobre ellos.

321. Los derechos de preferencia de que se trata en el artículo anterior, sólo se tendrán sobre los mismos títulos en que se constituyó la garantía; para lo cual, si ésta consistiere en títulos al portador, se expresará su numeración en la póliza del contrato; y si en inscripciones ó efectos transferibles, se hará la transferencia á favor del prestador, expresando en la póliza, además de las circunstancias necesarias para justificar la identidad de la garantía, que la transferencia no lleva consigo la transmisión de la propiedad.

322. Á voluntad de los interesados podrá suplirse la numeración de los títulos al portador con el depósito de éstos en el establecimiento público que designe el reglamento de Bolsas.

323. Vencido el plazo del préstamo, el acreedor, salvo pacto en contrario, y sin necesidad de requerir al deudor, estará autorizado para pedir la enajenación de las garantías, á cuyo fin las presentará con la póliza á la Junta sindical, la que, hallando su numeración conforme, las enajenará en la cantidad necesaria por medio de agente colegiado, en el mismo día, si fuere posible, y si no, en el siguiente.

Del indicado derecho sólo podrá hacer uso el prestador durante la Bolsa siguiente al día del vencimiento del préstamo.

324. Los efectos cotizables al portador, pignorados en la forma que determinan los artículos anteriores, no estarán sujetos á reivindicación mientras no sea reembolsado el prestador, sin perjuicio de los derechos y acciones del propietario desposeído contra las personas responsables según las Leyes, por los actos en virtud de los cuales haya sido privado de la posesión y dominio de los efectos dados en garantía.

Título VI. De la compraventa y permuta mercantiles y de la transferencia de créditos no endosables.

Sección primera. De la compraventa.

325. Será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron, ó bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.

326. No se reputarán mercantiles: 1.° Las compras de efectos destinados al consumo del comprador ó de la persona por cuyo encargo se adquirieren; — 2.° Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores ó ganaderos, de los frutos ó productos de sus cosechas ó ganados, ó de las especies en que se les paguen las rentas; — 3.° Las ventas que, de los objetos construídos ó fabricados por los ar-

[1]) Si la operación de préstamo consiste en la apertura de un crédito con garantía de valores cotizables, las pólizas de esta llevarán el timbre correspondiente á la mitad del crédito que corresponda á las pólizas de préstamo con garantía de valores cotizables. (Véase la nota siguiente.) Esto en el supuesto de que las cantidades recibidas no lleguen á exceder de la mitad del crédito, pues si exceden pagarán la totalidad de lo que corresponde al crédito como si fuera una póliza de préstamo con garantía de efectos cotizables (art. 139, L. del T.).

[2]) Estas pólizas están sujetas al pago del timbre con arreglo á la escala gradual que para las letras de cambio puede verse en la nota 1 de la pág. 151 (art. 138, L. del T.). — Los duplicados de estas pólizas, lo mismo que los de las de crédito, á que se refiere la nota anterior, llevarán un timbre fijo de 10 céntimos de peseta, clase 16.a si (la cuantía de la operación no excede de 7000 pesetas, y de una peseta si excede de dicha cifra art. 139, L. del T.).

Payments on account, when there is no express appropriation, shall in the first place be attributed to the payment of the interest in order of its becoming due, and afterwards to payment of the principal.

319. If a formal claim has been made, the interest cannot be capitalised in order to demand greater interest.

Second Section. Loans with the guarantee of public effects or securities.[1])

320. A loan with guarantee of quotable effects, made by a contract[2]) with the intervention of incorporated brokers, shall always be considered mercantile.

The lender shall be entitled to recover his debts on the public effects or securities, pledged in accordance with the provisions of this section, in preference to the other creditors, who may not withdraw the said effects from his control, except on paying the debt which is secured thereon.

321. The rights of preference with which the previous article deals shall only affect the very securities which constituted the guarantee; for which purpose, if the latter consists of bearer securities, their enumeration shall be expressed in the contract; and if it consists of registered or transferable securities, the transfer shall be made in favour of the lender, and besides the particulars necessary for proving the identity of the guarantee, the contract shall state that the transfer does not carry the transmission of the ownership.

322. At the wish of the interested persons, the enumeration of the bearer securities may be supplemented by the deposit thereof in the public establishment appointed by the Regulations of the Exchanges.

323. When the loan has become due, the creditor, in the absence of an agreement to the contrary, and without the necessity of making a demand upon the debtor, shall be authorised to apply for the sale of the securities, for which purpose he shall produce them with the contract to the Governing Board, which on finding the enumeration to tally, shall sell a sufficient amount thereof by means of a collegiate broker on the same day, if possible, and if not, then on the following day.

The lender may only make use of the said right during the Exchange following the day of the maturity of the loan.

324. Quotable bearer securities, pledged in the form determined by the preceding articles, shall not be liable to *reivindicatio* until the lender has been repaid, without prejudice to the rights and rights of action of the dispossessed owner against the persons who are responsible according to law, for the acts by virtue whereof he has been deprived of the possession and *dominium* of the securities given in guarantee.

Title VI. Mercantile sale and barter and the transfer of unindorsable credits.

First Section. Sale.

325. A purchase of chattels shall be mercantile when made in order to resell them, either in the same form as that in which they were bought, or in a different form, with the intention of profiting by the resale.

326. The following shall not be considered mercantile: 1. Purchases of goods intended for the consumption of the buyer or of the person by whose order they are acquired; — 2. Sales made by proprietors and farmers or by graziers, of the produce of their harvests or flocks or of the kind in which the rents are paid; — 3. Sales made by artizans in their workshops, of objects made or manufactured by them; — 4. Resale

[1]) If the loan transaction consists in the opening of a credit with the guarantee of quotable securities, the contracts thereof must bear the stamp corresponding to half the debt which is contained in the contracts of loan with guarantee of quotable securities. (See the following note). This supposes that the amounts received do not exceed half the debt, but if they do exceed it, they must pay the whole of the duty which corresponds to the debt as if it were a contract of loan with the guarantee of quotable securities (art. 139 of the Stamp Act).

[2]) These contracts are subject to the payment of stamp duty according to the graduated scale, which, as affecting bills of exchange, may be seen in note 1 on page 151 (art. 138 of the Stamp Act). The duplicates of these contracts, as well as those of the debts to which the previous note refers, must bear a fixed stamp of 10 centimos, class 16, if the amount of the transaction does not exceed 7000 pesetas, and of one peseta if it exceeds that figure (art. 139 of the Stamp Act).

tesanos, hicieren éstos en sus talleres; — 4.° La reventa que haga cualquiera persona no comerciante del resto de los acopios que hizo para su consumo.

327. Si la venta se hiciere sobre muestras ó determinando calidad conocida en el comercio, el comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados, si fueren conformes á las muestras ó á la calidad prefijada en el contrato.

En el caso de que el comprador se negare á recibirlos, se nombrarán peritos por ambas partes, que decidirán si los géneros son ó no de recibo[1]).

Si los peritos declarasen ser de recibo, se estimará consumada la venta, y en el caso contrario, se rescindirá el contrato[2]), sin perjuicio de la indemnización á que tenga derecho el comprador.

328. En las compras de géneros que no se tengan á la vista ni puedan clasificarse por una calidad determinada y conocida en el comercio, se entenderá que el comprador se reserva la facultad de examinarlos y de rescindir libremente el contrato si los géneros no le convinieren.

También tendrá el comprador el derecho de rescisión si por pacto expreso se hubiere reservado ensayar el género contratado.

329. Si el vendedor no entregare en el plazo estipulado los efectos vendidos, podrá el comprador pedir el cumplimiento ó la rescisión del contrato, con indemnización, en uno y otro caso, de los perjuicios que se le hayan irrogado por la tardanza.

330. En los contratos en que se pacte la entrega de una cantidad determinada de mercaderías en un plazo fijo, no estará obligado el comprador á recibir una parte, ni aun bajo promesa de entregar el resto; pero si aceptare la entrega parcial, quedará consumada la venta en cuanto á los géneros recibidos, salvo el derecho del comprador á pedir por el resto el cumplimiento del contrato ó su rescisión, con arreglo al artículo anterior.

331. La pérdida ó deterioro de los efectos antes de su entrega, por accidente imprevisto ó sin culpa del vendedor, dará derecho al comprador para rescindir el contrato, á no ser que el vendedor se hubiere constituído en depositario de las mercaderías con arreglo al art. 339, en cuyo caso se limitará su obligación á la que nazca del depósito.

332. Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de los efectos comprados, podrá el vendedor pedir el cumplimiento ó rescisión del contrato, depositando judicialmente[3]) en el primer caso las mercaderías.

El mismo depósito judicial podrá constituir el vendedor siempre que el comprador demore hacerse cargo de las mercaderías.

Los gastos que origine el depósito serán de cuenta de quien hubiese dado motivo para constituirlo.

333. Los daños y menoscabos que sobrevinieren á las mercaderías, perfecto el contrato y teniendo el vendedor los efectos á disposición del comprador en el lugar y tiempo convenidos, serán de cuenta del comprador, excepto en los casos de dolo[4]) ó negligencia del vendedor.

---

[1]) El supuesto del artículo este es el de que comprador y vendedor se encuentren en el lugar de la entrega y nombren los peritos correspondientes que han de decidir respecto á si los géneros vendidos son ó no de recibo; pero cuando esto no ocurre, porque los géneros se venden en una parte y se entregan en otra, entonces el comprador, al hacerse cargo de ellos, si no los creyere de recibo, habrá de acudir al juez solicitando por escrito que se extienda diligencia de reconocimiento haciendo constar las circunstancias que concurran en ellos, ó pidiendo, si lo considera preciso, el nombramiento por el juez de un perito que los reconozca. Si el comprador por su parte nombrara otro, y no se pusieren de acuerdo, el juez designará por suerte un tercero en discordia (art. 2127, L. Enj. c.).

[2]) La rescisión á que hace referencia tanto este artículo como los demás relativos á la compraventa en que se habla igualmente de rescisión, no es precisamente la á que se refieren los artículos 1290 á 1299 del Cód. c. (que pueden verse entre las leyes complementarias del Cód. de com.) porque en dichos artículos la rescisión supone la consumación del contrato, mientras que la rescisión en el supuesto del Cód. de com. y en lo referente á la compra-venta no implica la consumación del contrato, sino rompimiento tan solo del vínculo legal creado al quedar perfecto el contrato por el consentimiento de las partes.

[3]) La forma y manera de constituir este depósito es la misma que hemos expuesto al tratar del depósito judicial que puede pedir el comisionista. (Véase la pág. 124, nota 1).

[4]) El dolo, según el art. 1269 del Cód. c., existe cuando, con palabras ó maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes es inducido el otro á celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho.

made by any person who is not a merchant, of the remainder of the supplies which he acquired for his own consumption.

327. If a sale is made according to samples or a fixed quality known in commerce, the buyer may not refuse to accept the contracted goods, if they agree with the samples or the quality fixed by the contract.

If the buyer refuses to receive them, experts shall be appointed by both parties to decide if the goods are receivable or not[1]).

If the experts declare that they are receivable, the sale shall be considered completed, and in the contrary case, the contract shall be rescinded[2]).

328. In purchases of goods which are not in sight and cannot be classified by a fixed quality known in commerce, it shall be understood that the buyer reserves the power of examining them and of freely rescinding the contract if the goods do not suit him.

The buyer shall likewise be entitled to rescission, if the examination of the contracted goods was reserved by express agreement.

329. If the seller does not deliver the goods sold at the time stipulated, the buyer may apply for performance or rescission of the contract, with compensation in either case for the damage which the delay has occasioned him.

330. In contracts by which the delivery of a certain quantity of merchandise at a fixed time is agreed, the buyer shall not be bound to receive a part, even under promise to deliver the rest; but if he accepts the partial delivery, the sale shall be completed as regards the received goods, saving the right of the buyer, as regards the rest, to apply for performance or rescission of the contract in accordance with the preceding article.

331. Loss or deterioration of the goods before their delivery, by unforeseen accident or without *culpa* of the seller, shall entitle the buyer to rescind the contract, unless the seller has constituted himself depositary of the merchandise in accordance with article 339, in which case his obligation shall be limited to that which arises from the deposit.

332. If the buyer refuses without just cause to accept the goods bought, the seller may apply for performance or rescission of the contract, on judicially depositing[3]) the merchandise, in the first alternative.

The seller may make the same judicial deposit whenever the buyer delays to take charge of the merchandise.

The expenses caused by the deposit shall be borne by him who has occasioned its being made.

333. Damage and depreciation suffered by merchandise after the contract is perfected and the seller is holding the goods at the disposal of the buyer at the agreed place and time, shall be borne by the buyer, except in the case of fraud[4]) or negligence of the seller.

---

[1]) The supposition of this article is that the buyer and seller meet at the place of delivery and appoint the experts who are to decide whether the sold goods are receivable or not; but when this does not happen, through the goods being sold in one place and delivered in another, then the buyer on taking charge thereof, if he does not think them receivable, must make a written application to the judge to issue an order for their examination, stating the particulars with relation to the goods, or, if he thinks it necessary, applying for the appointment by the judge of an expert to examine them. If the buyer appoints another on his side, and they do not agree, the judge shall appoint a third by lot, in case of disagreement (art. 2127 of the Law of Civil Procedure).

[2]) The rescission referred to both in this article and in the others relating to sales which likewise speak of rescission, is not exactly that referred to by articles 1290 to 1299 of the Civil Code (which may be seen among the laws supplementary to the Code of Commerce) because in the said articles rescission supposes the completion of the contract, whereas as supposed by the Code of Commerce in reference to sales, it does not imply the completion of the contract, but only the breaking of the legal chain created when the contract became perfect by the consent of the parties.

[3]) The form and manner of constituting this deposit is the same as we have expounded in dealing with the judicial deposit which a factor may apply for (See page 124, note 1).

[4]) According to art. 1269 of the Civil Code, fraud exists when by the crafty words or artifices on the part of one of the contractors the other is induced to make a contract which he would not have made in their absence.

334. Los daños y menoscabos que sufran las mercaderías, aun por caso fortuito, serán de cuenta del vendedor en los casos siguientes: 1.° Si la venta se hubiere hecho por número, peso ó medida, ó la cosa vendida no fuere cierta y determinada, con marcas y señales que la identifiquen; — 2.° Si por pacto expreso ó por uso del comercio, atendida la naturaleza de la cosa vendida, tuviere el comprador la facultad de reconocerla y examinarla previamente; — 3.° Si el contrato tuviere la condición de no hacer la entrega hasta que la cosa vendida adquiera las condiciones estipuladas.

335. Si los efectos vendidos perecieren ó se deterioraren á cargo del vendedor, devolverá al comprador la parte de precio que hubiere recibido.

336. El comprador que, al tiempo de recibir las mercaderías, las examinare á su contento, no tendrá acción para repetir contra el vendedor, alegando vicio ó defecto de cantidad ó calidad en las mercaderías.

El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad ó calidad de las mercaderías recibidas enfardadas ó embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo, y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, ó fraude.

En estos casos, podrá el comprador optar por la rescisión del contrato ó por su cumplimiento con arreglo á lo convenido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios que se le hubieren causado por los defectos ó faltas.

El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de la entrega, que se haga el reconocimiento, en cuanto á cantidad y calidad, á contento del comprador[1]).

337. Si no se hubiere estipulado el plazo para la entrega de las mercaderías vendidas, el vendedor deberá tenerlas á disposición del comprador dentro de las veinticuatro horas siguientes al contrato.

338. Los gastos de la entrega de los géneros en las ventas mercantiles serán de cargo del vendedor hasta ponerlos, pesados ó medidos, á disposición del comprador, á no mediar pacto expreso en contrario.

Los de su recibo y extracción fuera del lugar de la entrega, serán de cuenta del comprador.

339. Puestas las mercaderías vendidas á disposición del comprador, y dándose éste por satisfecho, ó depositándose aquéllas judicialmente en el caso previsto en el art. 332, empezará para el comprador la obligación de pagar el precio al contado ó en los plazos convenidos con el vendedor.

Éste se constituirá depositario de los efectos vendidos, y quedará obligado á su custodia y conservación según las leyes del depósito.

340. En tanto que los géneros vendidos estén en poder del vendedor, aunque sea en calidad de depósito, tendrá éste preferencia sobre ellos á cualquiera otro acreedor, para obtener el pago del precio con los intereses ocasionados por la demora.

341. La demora en el pago del precio de la cosa comprada constituirá al comprador en la obligación de pagar el interés legal[2]) de la cantidad que adeude al vendedor.

342. El comprador que no haya hecho reclamación alguna fundada en los vicios internos de la cosa vendida, dentro de los treinta días siguientes á su entrega, perderá toda acción y derecho á repetir por esta causa contra el vendedor.

343. Las cantidades que, por vía de señal, se entreguen en las ventas mercantiles, se reputarán siempre dadas á cuenta del precio y en prueba de la ratificación del contrato, salvo pacto en contrario.

344. No se rescindirán las ventas mercantiles por causa de lesión; pero indemnizará daños y perjuicios el contratante que hubiere procedido con malicia ó fraude en el contrato ó en su cumplimientos, in perjuicio de la acción criminal.

345. En toda venta mercantil el vendedor quedará obligado á la evicción y saneamiento en favor del comprador[4]), salvo pacto en contrario.

---

[1]) Si el comprador pusiere dificultades para este reconocimiento, entonces podrá solicitarse que se haga judicialmente en la forma indicada en la nota 2, pág. 133.

[2]) El 5%.

[4]) La evicción es la obligación, que pesa naturalmente sobre el vendedor de una cosa, de garantir la propiedad de la misma, ya que el supuesto lógico de la venta es que la cosa vendida es propiedad del vendedor. — El saneamiento es la obligación que pesa

334. Damage and depreciation suffered by merchandise, even by a fortuitous event, shall be borne by the seller in the following cases: 1. If the sale has been made by number, weight or measure, or the thing sold was not certain and determined, with marks and tokens which identify it; — 2. If by express agreement or by the usage of commerce, bearing in mind the nature of the thing sold, the buyer has the power of examining it beforehand; — 3. If the contract contained the condition that delivery should not be made until the thing sold had acquired the stipulated conditions.

335. If the sold goods perish or suffer deterioration at the charge of the seller, he shall return to the buyer the part of the price which he has received.

336. A buyer who examines the merchandise to his satisfaction at the time of receiving it, shall have no right of action to reclaim against the seller, pleading vice or defect of quantity or quality in the merchandise.

A buyer shall be entitled to reclaim against the seller for defect in quantity or quality of merchandise which is received in packages or bales, provided that he brings his action within the four days following the day of its receipt, and the damage does not proceed from a fortuitous event, defect inherent in the thing, or fraud.

In these cases the buyer shall have an option for the rescission of the contract or of its performance as agreed, but always with compensation for the damage which has been caused him by the defects or faults.

The seller may avoid this claim by requiring examination to be made to the satisfaction of the buyer[1]) at the time of the delivery, both as to quantity and quality.

337. If the time for the delivery of the sold merchandise has not been agreed, the seller must hold it at the disposal of the buyer within the twenty four hours following the contract.

338. The expenses of the delivery of the goods included in mercantile sales shall be borne by the seller, until placing them, weighed or measured, at the disposal of the buyer, if there is no express agreement to the contrary.

Those of their receipt and removal from the place of delivery, shall be borne by the buyer.

339. When the sold merchandise has been placed at the disposal of the buyer, and he has expressed himself satisfied therewith, or when it has been judicially deposited as provided by art. 332, the obligation will begin on the part of the buyer to pay the price at once or at the times agreed with the seller.

The latter shall become the depositary of the sold goods, and shall be bound to their custody and preservation according to the laws of deposit.

340. As long as the sold goods are in the control of the seller, although as a deposit, he shall have preference over them as against every other creditor, in order to obtain payment of the price with the interest occasioned by the delay.

341. Delay in payment of the price of the thing bought shall oblige the buyer to pay the legal interest[2]) on the amount which he owes the seller.

342. A buyer who has not made any claim based on the internal defects of the thing sold within the thirty days following its delivery, shall lose every action and right to claim against the seller on this ground.

343. The amounts which are paid in mercantile sales by way of earnest money shall always be considered as paid on account of the price and are evidence of the ratification of the contract, saving an agreement to the contrary.

344. Mercantile sales shall not be rescinded on the ground of *laesio*[3]); but a contractor who has acted with malice or fraud in the contract or in its performance shall compensate for the damage, without prejudice to criminal proceedings.

345. In every mercantile sale the seller shall be bound to warrant the title and against latent defects in favour of the buyer[4]), saving an agreement to the contrary.

---

[1]) If the buyer places difficulties in the way of this examination, then the seller may apply that it should be made judicially as indicated in note 2, page 133.

[2]) 5%.

[3]) *Laesio* means damage caused by the contractual price being unjust. (Translator.]

[4]) *Evicción* is the obligation which naturally affects the seller of a thing, to guarantee the title thereto, as the logical ground of the sale is that the thing sold is the property of the seller. *Saneamiento*, in the same way, is the obligation which affects the seller to answer for the good

Sección segunda. De las permutas.

346. Las permutas mercantiles se regirán por las mismas reglas que van prescritas en este título respecto de las compras y ventas, en cuanto sean aplicables á las circunstancias y condiciones de aquellos contratos.

Sección tercera. De las transferencias de créditos no endosables.

347. Los créditos mercantiles no endosables ni al portador, se podrán transferir por el acreedor sin necesidad del consentimiento del deudor, bastando poner en su conocimiento la transferencia.

El deudor quedará obligado para con el nuevo acreedor en virtud de la notificación, y desde que tenga lugar no se reputará pago legítimo sino el que se hiciere á éste.

348. El cedente responderá de la legitimidad del crédito, y de la personalidad con que hizo la cesión; pero no de la solvencia del deudor, á no mediar pacto expreso que así lo declare.

---

del mismo modo sobre el vendedor de responder del buen estado de la cosa no aparente sino interna, es decir de los vicios ó defectos que tuviere ocultos. — Tiene lugar la evicción cuando se prive al comprador por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior á la compra de todo ó parte de la cosa comprada; es decir, cuando se ejerce la acción reivindicatoria. Y es tan natural esta obligación, que en toda compra-venta responde el vendedor de ella, aunque nada se haya expresado en el contrato; pudiendo, como es lógico, pactar sobre ella, ya aumentándola, ya restringiéndola ó ya suprimiéndola, sin que en este último caso pueda el tal pacto amparar la mala fe del vendedor, pues la ley considera nulo un pacto de esta especie. — A más de este límite, impuesto por la moral social, la renuncia por parte del comprador de su derecho á la evicción tiene otro, cual es, el de que despojado el comprador de la cosa que compró por el que la reivindicó, tiene derecho á la devolución del precio entregado por ella, á no ser que expresamente hubiere renunciado también á esto. — Sin embargo de lo dicho, ha de tenerse en cuenta que la obligación del vendedor está supeditada á la que tiene el comprador de hacer que se le notifique á aquel la demanda reivindicatoria, pues si el comprador prescindiere de pedir esta notificación queda libre el vendedor de la responsabilidad por evicción. — Esta notificación al vendedor ha de hacerse dentro del plazo que la ley concede para contestar á la demanda; entendiéndose que la notificación judicial hecha al vendedor suspende el plazo para la contestación del comprador, mientras no transcurre el concedido al vendedor; y que si este no compareciere á contestar á la demanda se entenderá que deja de producir efecto la suspensión del plazo para el comprador. — Despojado el comprador de la cosa por sentencia firme, salvo en el caso de renuncia del derecho de evicción, podrá exigir al vendedor lo siguiente: 1.° La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor ó menor que el de la venta. 2.° Los frutos ó rendimientos, si se le hubiere condenado á entregarlos al que le haya vencido en juicio. 3.° Las costas del pleito que haya motivado la evicción, y, en su caso, las del seguido con el vendedor para el saneamiento, ó sea en el caso de que este se negare á responder de evicción. 4.° Los gastos del contrato si los hubiere pagado el comprador, y S. 5.° Los daños é intereses y los gastos voluntarios ó de puro recreo ú ornato, si se vendió de mala fe. — Si la evicción produjo tan solo la pérdida parcial de la cosa, si esta pérdida fuere de tal importancia con relación á la misma, que sin dicha parte no la hubiere adquirido el comprador, podrá este exigir la rescisión del contrato, pero obligándose á devolver la cosa, sin más gravámenes que los que tuviere al adquirirla. Y esto mismo podrá hacerse en el caso de que la venta hubiese sido de dos ó más cosas conjuntamente por un precio alzado, ó particular para cada una de ellas, si despojado el comprador de alguna ó algunas acreditase el comprador que no habría comprado unas sin otras. — Por el saneamiento está obligado el vendedor á responder de los vicios ó defectos ocultos que tuvieren las cosas, cuando el que las adquiere no es un perito que por razón de su profesión ú oficio está obligado á conocerlos aunque no sean aparentes. Para que estos vicios ó defectos ocultos obliguen al vendedor al saneamiento es preciso que se manifiesten antes de los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida, que la hagan impropia para el uso á que se la destina ó que dificulten de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador no las hubiese adquirido, ó de adquirirlas habría dado por ellas un menor precio. — El saneamiento como la evicción es renunciable pero; como esta renuncia no puede amparar la mala fe del vendedor, la renuncia es nula cuando el vendedor no ignoraba los vicios ó defectos ocultos de las cosas. En cambio la ignorancia por parte del vendedor no le exime de responder por esta causa. Cuando proceda este saneamiento el comprador podrá optar entre el desistimiento del contrato, exigiendo el abono de los gastos que pagó, ó el mantenimiento del mismo, exigiendo una rebaja en el precio proporcional á la importancia del defecto ó vicio, estimado por peritos. Esto en el supuesto de que el vendedor hubiere procedido de buena fe, pues si conocía tales vicios ó defectos y no los manifestó al comprador tendrá este la misma opción; y, si prefiere la rescisión del contrato, tendrá derecho además á la indemnización de daños y perjuicios. — Si los vicios ó defectos ocultos produjeren la pérdida de la cosa, distingue la ley los casos según que el vendedor tuviere ó no conocimiento de ellos y

Second Section. Barter.

346. Mercantile barter is governed by the same rules as are provided in this Title in respect of purchases and sales, so far as they are applicable to the circumstances and conditions of those contracts.

Third Section. Transfer of unindorsable credits.

347. Mercantile credits which are neither indorsable nor to bearer, may be transferred by the creditor without the necessity of the consent of the debtor, it being sufficient to bring the transfer to his notice.

The debtor shall be bound to the new creditor by virtue of the notification, and from that taking place, no payment shall be considered lawful but that which is made to the latter.

348. The assignor shall answer for the lawfulness of the credit, and for the character in which he made the assignment; but not for the solvency of the debtor, unless there is an express agreement which so declares.

---

condition of the thing, not patent but latent, that is to say for hidden vices or defects. Eviction takes place when a buyer is ousted by final judgment and by virtue of a right prior to the purchase, from the whole or part of the thing bought: that is to say, when the *reivindicatio* action is brought. And so natural is this obligation, that the seller answers for it in every sale, although nothing has been expressed in the contract; but, as is logical, an agreement may be made on the matter, either increasing, restricting or suppressing it, without such an agreement in the last case being a ground for aiding bad faith in the seller, since the law considers a contract of this kind to be void. But besides this limitation, which is imposed by social morality, the renouncing by a buyer of his right to a good title has another result, which is, that the buyer who has been ousted from the thing which he has bought by the party who has claimed it, is entitled to the return of the price paid therefor, unless he has expressly renounced this as well. In spite of what has been said, it must be remembered that the obligation of the seller is subject to that of the buyer to notify him of the *reivindicatio* action, as if the buyer neglects to apply for this notification, the seller is free from liability for eviction. This notification must be made to the seller within the time granted by the law for answering the claim; it being understood that the judicial notification made to the seller suspends the time for the answer of the buyer, until the time granted to the seller has elapsed; and that if the latter does not appear to answer the Claim, it shall be understood that the suspension of time ceases to take effect as regards the buyer. If the buyer has been ousted from the thing by a final judgment, he may demand the following from the seller, except in the case of renouncing the right of eviction: I. Restitution of the value of the thing sold at the time of the eviction, whether greater or less than that of the time of the sale; 2. The produce or income, if he has been condemned to deliver them to him who has won the action; 3. The costs of the action for eviction, and those of the action against the seller for latent defect, if any, or of that in which the latter has denied his liability for eviction if any; 4. The costs of the contract, if the buyer has paid them, and 5. Damages and interest and expenses which are voluntary or purely recreative or ornate, if it was sold in bad faith. If the eviction only caused the partial loss of the thing, and if this loss was of such importance with regard thereto that, without the said part, the buyer would not have acquired it, the latter may demand rescission of the contract, but under the obligation to return the thing with no more charges than those which it had when he acquired it. And the same can be done in a case in which the sale was of two or more things jointly, at an aggregate price, or at a separate price for each, if the ousted buyer of one or more of them proves that he would not have bought some without the others. By *saneamiento* a seller is obliged to answer for latent vices or defects in the things, when he who acquires them is not an expert who by reason of his profession or office is bound to be aware of them, although they are not patent. In order that these latent vices or defects may bind the seller to remedy them, it is necessary that they should become evident before six months, reckoned from the delivery of the thing sold, that they make it unsuitable for the use for which it was intended, or so difficult of use in this way that if he had known them, the buyer would not have acquired the thing, or if he had acquired, it would have given a lower price therefor. *Saneamiento*, like eviction, may be renounced, but as this renouncing cannot aid bad faith in the seller, it is void when the seller was not ignorant of the latent vices or defects of the things. On the other hand, ignorance on the part of the seller does not excuse him from liability on this ground. When *saneamiento* is available, the buyer may choose between abandoning the contract, requiring payment of the costs which he has paid, and confirming the contract, demanding an abatement in the price, in proportion to the importance of the defect or vice as appraised by experts. This supposes that the seller acted in good faith, since, if he was aware of such vices or defects and did not acquaint the buyer with them, the latter will have the same option; and if he prefers rescission of the contract, he will be entitled also to compensation for damages. If the latent vices or defects caused the loss of the thing, the law distinguishes the cases according to whether the seller was or was not aware thereof, and whether or not it was lost by fortuitous event or by *culpa* of the buyer. If it was lost neither by fortuitous event nor *culpa* of

Título VII. Del contrato mercantil de transporte terrestre.[1]

349. El contrato de transporte por vías terrestres ó fluviales de todo género, se reputará mercantil: 1.° Cuando tenga por objeto mercaderías ó cualesquiera efectos del comercio; — 2.° Cuando, siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el porteador ó se dedique habitualmente á verificar transportes para el público.

según que se pierdan ó no por caso fortuito ó por culpa del comprador. Si se perdió, no por caso fortuito ni culpa del comprador, y el vendedor ignoraba la existencia del vicio ó defecto que produjo tal pérdida, tendrá la obligación de devolver el precio de venta y abonar los gastos del contrato que hubiese pagado el comprador. Si los conocía deberá satisfacer además los daños y perjuicios. Si se perdió por caso fortuito ó culpa del comprador resultando tener algún vicio oculto al tiempo de realizarse la venta, el vendedor está obligado á devolver el precio que recibió por la cosa, deducido el valor que esta tuviere al tiempo de perderse. Y si obró de mala fe, es decir, si conocía la existencia de los vicios que determinaron la pérdida y si los ocultó al comprador, deberá también abonarle los daños é intereses. — Por último, dice la ley que en las ventas judiciales el vendedor responde del saneamiento en los mismos términos, pero que no habrá nunca lugar á la responsabilidad por daños y perjuicios. (Artículos 1474 á 1482 y 1484 á 1489 del Cód. c.).

[1]) El transporte de la correspondencia postal telegráfica ó telefónica, el de valores declarados y el de mercaderías en paquetes postales no es mercantil según nuestras leyes, porque constituye un servicio público monopolizado por el Estado, cuya explotación puede ceder en determinadas condiciones á los particulares. — Las disposiciones legales por que se rigen estos transportes son las siguientes: — *Servicio postal:* El Real Decreto de 7 de junio de 1898, aprobando el Reglamento para el régimen y servicio del ramo de correos (Gacetas del 12 al 16 de junio) con las adiciones y modificaciones introducidas en él por los Reales Decretos de 27 de junio de 1899 (Gaceta de 29 de junio), 25 de mayo de 1905 (Gaceta de 27 de Mayo), 7 de diciembre del mismo año (Gaceta de 13 de mayo), y 30 de octubre 1906 (Gaceta de 1.° de noviembre), y la Real orden de 30 de noviembre de 1899 (Gaceta de 1.° de diciembre). A más de esto hay que tener en cuenta que el transporte de la correspondencia internacional se rige por el Convenio de la Unión universal de correos de 1 de junio de 1878 (Gaceta 17 de abril de 1879), el de 4 de julio de 1891 (Gaceta 30 de junio de 1892) y el de 15 de junio de 1897 (Gacetas, 1, 2 y 3 de enero de 1903); debiendo tener presente que este transporte entre Portugal y España se rige por el Convenio de 7 de mayo de 1883 y el de 2 de julio de 1886, publicados en las Gacetas de 7 de octubre de 1885 y 23 de octubre de 1886. El último de estos dos convenios ha sido ligeramente modificado por el Real Decreto de 16 de octubre de 1889 (Gaceta 19 diciembre 1889). El servicio de paquetes postales con Marruecos está regulado por el Real Decreto de 28 de agosto de 1902 (Gaceta 31 de agosto de 1902) y la Instrucción de 29 de setiembre del mismo año (Gaceta, 3 de octubre del mismo). — Completan esta legislación del servicio postal la Ley de 21 de agosto de 1896 sobre falsificación de sellos y viñetas en uso en las naciones que forman la Unión universal y una serie de Reales órdenes sobre paquetes postales cuya enumeración resultaría enojosa. — *Servicio telegráfico.* Hasta la Ley de 22 de abril de 1855 no pudo utilizarse por los paticulares este medio de comunicación, que existía para las necesidades del servicio oficial del Estado desde 27 de noviembre de 1852, y con anterioridad era utilizado por las compañías de ferrocarriles (me refiero á la telegrafía eléctrica). Pero en 1855 se implantó este servicio ajustando las tarifas al sistema de zonas, hasta que la Ley de Presupuestos de 11 de enero de 1861 abolió dicho sistema, implantando el que rije en la actualidad, ó sea el del precio único, calculado por la cantidad de palabras empleadas, á partir de un mínimum que se fijó en diez palabras, y que hoy es de quince, incluyendo en estas las necesarias para las señas, con las excepciones: de los telegramas que se cursen entre las estaciones telegráficas de una misma provincia, que pagarán la mitad de dicho precio; los destinados á la publicidad en los periódicos, que satisfarán también la mitad de la tasa ordinaria; y los que se trasmitan desde las 12 de la noche á las 8 de la mañana en determinadas estaciones, que pagarán doble de dicha tasa. — He aquí ahora la fecha de las Leyes y Reales Decretos que regulan el servicio interior de comunicaciones telegráficas. Reales Ordenes hay también muchas, pero solo citaremos por excepción alguna. — Leyes: A más de las ya citadas de 22 de abril de 1855 y 11 de enero de 1861 hay que tener en cuenta: la de 29 de diciembre de 1881, estableciendo las bases para el servicio público que pueden prestar las compañías de ferrocarriles (Gaceta, 6 enero, 1882); la de 6 de abril de 1888, reduciendo la tasa para el servicio de los periódicos políticos (Colección legislativa, tomo 140); y la de Presupuestos de 31 de diciembre de 1901, en cuyo artículo 12 se señala la doble tasa para los telegramas que se presenten entre 12 de la noche y 8 de la mañana en las estaciones de servicio limitado que se eleven á permanentes durante el año de 1902 (Gaceta 1.° enero, 1902). — Reales Decretos: El de 22 de mayo de 1864, sobre forma de pago y trasmisión y entrega de telegramas, certificados, reclamaciones, etc. (Gaceta 30 noviembre); el de 8 de febrero de 1872, sobre despachos dirigidos á los buques y desde los buques (Gaceta 9 febrero); el de 6 de julio de 1872, sobre establecimiento de semáforos (Gaceta 7 julio); el de 6 de octubre de 1883 sobre tasa del servicio interior (Gaceta, 7 octubre); el de 7 de mayo de 1889, sobre abono á precio reducido para empresas periodísticas y arrendamiento de conductores ó líneas (Gaceta 10 mayo); el de 11 de noviembre de 1890, sobre reducción tasa de telegramas destinados á la publicidad (Gaceta 13 noviembre); el de 18 de noviembre de 1890, sobre arriendo de transmisión telegráfica ó de conductores á empresas periodísticas y agencias telegráficas (Gaceta 23 noviembre); el de 2 de

Title VII. Mercantile contract of land carriage.[1])

349. The contract of carriage by land or river ways of every kind shall be considered mercantile: 1. When it has merchandise or any commercial effects for its subject-matter; — 2. When, whatever the subject-matter may be, the carrier is a merchant or habitually devotes himself to effecting carriage for the public.

---

the buyer, and the seller was ignorant of the vice or defect which caused that loss, he will be bound to return the price of the sale and pay the costs of the contract which the buyer had paid. If he was aware of them, he must also pay damages. If it was lost by fortuitous event or *culpa* of the buyer, but it is shown that it had some latent vice at the time of the sale, the seller is bound to return the price which he had received for the thing, deducting the value thereof at the time of the loss. And if he acted in bad faith, that is to say, if he was aware of the existence of the vices which caused the loss, and concealed them from the buyer, he must also pay him damages. Lastly, the law says that in judicial sales the seller is liable for latent defects in the same terms, but that there shall never be any liability for damages. (articles 1474 to 1482 and 1484 to 1489 of the Civil Code).

[1]) The carriage of postal, telegraphic or telephonic correspondence, of declared valuables and of merchandise in postal packets, is not mercantile according to our laws, because it constitutes a public service monopolized by the State, the working whereof may be assigned to individuals under certain conditions. The legal provisions by which these services are governed are the following: *Postal service*: The Royal Decree of 7 June 1898, approving the Regulation for governing the service of the postal branch (*Gacetas* of 12 to 16 June) with the additions and amendments introduced therein by the Royal Decrees of 27 June 1899 (*Gaceta* of 29 June), 25 May 1905 (*Gaceta* of 27 May), 7 December of the same year (*Gaceta* of 13 May), and 30 October 1906 (*Gaceta* of 1 November) and the Royal Order of 30 November 1899 (*Gaceta* of 1 December). Besides this it must be remembered that the carriage of international correspondence is governed by the Convention of the Universal Postal Union of 1 June 1878 (*Gaceta* of 17 April 1879), that of 4 July 1891 (*Gaceta* of 30 June 1892) and that of 15 June 1897 (*Gacetas* of 1, 2, and 3 January 1903); and it must be borne in mind that this carriage between Portugal and Spain is governed by the Convention of 7 May 1883 and that of 2 July 1886, published in the *Gacetas* of 7 October 1885 and 23 October 1886. The last of these two Conventions has been slightly altered by the Royal decree of 16 October 1889 (*Gaceta* of 19 December). The service of postal packets with Morocco is regulated by the Royal Decree of 28 August 1902 (*Gaceta* of 31 August 1902) and the instruction of 29 September of the same year (*Gaceta* of 3 October). The law of 21 August 1896 on the forgery of stamps and designs in use in the nations which form the Universal Union and a series of Royal Orders on postal packets, the enumeration whereof would be troublesome, complete this legislation on the postal service. *Telegraphic service*. Until the law of 22 April 1855 this means of communication, which existed for the necessities of the official State service from 27 November 1852, and was previously used by the railroad companies (I refer to the electric telegraph) could not be used by individuals. But in 1855 this service was inaugurated and the tariffs arranged on the zone system until the Revenue Act of 11 January 1861 abolished this system and started that which is now in force, viz. that of the single price, calculated by the number of words employed, with a fixed minimum of ten words (now it is fifteen), including therein the words necessary for the addresses, excepting: telegrams which travel between telegraph stations in the same province, which pay half the price; those intended to be published in the newspapers, which likewise pay half the ordinary amount; and those which are despatched between 12 at night and 8 in the morning in certain stations, which pay double the amount. Here follow the dates of the Laws and Royal Decrees which regulate the inland service of telegraphic communications. There are likewise many Royal Orders, but we will only cite exceptional ones. Laws: Besides those already cited of 22 April 1855 and 11 January 1861 there must be remembered: that of 29 December 1881, establishing the bases of the public service which may be rendered by the railroad companies (*Gaceta*, 6 January 1882); that of 6 April 1888, reducing the charge for the service of political newspapers (*Colección Legislativa*, vol 140); and the Revenue Act of 31 December 1901, in art. 12 whereof is fixed the double charge for telegrams presented between 12 at night and 8 in the morning, in stations with limited service which were raised to permanent stations during the year 1902 (*Gaceta* of 1 January 1902). Royal Decrees: That of 22 May 1864, on the form of payment, transmission and delivery of telegrams, certificates, claims etc. (*Gaceta* of 30 November); that of 8 February 1872 on despatches sent to and from vessels (*Gaceta* of 9 February); That of 6 July 1872, on semaphore stations (*Gaceta* of 7 July); that of 6 October 1883 on the charge for inland service (*Gaceta* of 7 October); that of 7 May 1889 on payment at a reduced price for newspaper undertakings and leasing of wires and lines (*Gaceta* of 10 May); that of 11 November 1890, on reduction in the charge for telegrams intended for publicity (*Gaceta* of 13 November); that of 18 November 1890, on leasing telegraphic transmission or wires to newspaper undertakings and telegraphic agencies (*Gaceta* of 23 November); that of 2 January 1891, approving the Regulation for the application of the preceding law (*Gaceta* of 4 January); and that of 20 June 1904, authorising the employment of dialects in private telegrams (*Gaceta* of 21 June). Royal Orders: The most important are: that of 25 February 1861, approving the Regulation for the inland service, (*Colección Legislativa*,

350. Tanto el cargador como el porteador de mercaderías ó efectos, podrán exigirse mutuamente que se extienda una carta de porte[1]) en que se expresarán: 1.° El nombre, apellido y domicilio del cargador; — 2.° El nombre, apellido y domicilio del porteador; — 3.° El nombre, apellido y domicilio de la persona á quien ó á cuya orden vayan dirigidos los efectos, ó si han de entregarse al portador de la misma carta; — 4.° La designación de los efectos, con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas ó signos exteriores de los bultos en que se contengan; — 5.° El precio del transporte; — 6.° La fecha en que se hace la expedición; — 7.° El lugar de la entrega al porteador; — 8.° El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario; — 9.° La indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo si sobre este punto mediare algún pacto.

351. En los transportes que se verifiquen por ferrocarriles ú otras empresas sujetas á tarifas ó plazos reglamentarios, bastará que las cartas de porte ó declaraciones de expedición facilitadas por el cargador se refieran, en cuanto al precio, plazos y condiciones especiales del transporte, á las tarifas y reglamentos cuya aplicación solicite; y si no determinare tarifa, deberá el porteador aplicar el precio de las que resulten más baratas, con las condiciones que á ellas sean inherentes, consignando siempre su expresión ó referencia en la carta de porte que entregue al cargador[2]).

---

enero de 1891, aprobando el Reglamento para la aplicación del anterior, (Gaceta 4 enero); y el de 20 junio de 1904, autorizando el empleo de los dialectos en los telegramas particulares (Gaceta 21 junio). — Reales órdenes: Las más importantes son: la de 25 de febrero de 1861, aprobando el Reglamento para el servicio interior, (Colección legislativa, tomo 85); la de 28 de noviembre de 1863, redactando de nuevo los art. 22 y 23 del anterior Reglamento, (Colección legislativa, tomo 90); la de 7 de enero de 1882, sobre telegramas con clave (Gaceta 13 enero); y la de 10 de agosto de 1905, que dió nueva redacción al art. 6 del Reglamento de 2 de enero de 1891 (Gaceta, 12 agosto). — El servicio internacional telegráfico se halla regulado por el Convenio de San Petersburgo de 22 de julio de 1875 y el Reglamento para su ejecución de París de 1 de junio de 1878 (Gaceta 17 abril, 1879) revisado y modificado en varias ocasiones, siendo la última la hecha en Londres el 10 de julio de 1903 (Gacetas 9 y 10 febrero 1904). — Con Portugal tenemos un Convenio especial de 14 de enero de 1880, y con este país y Francia, otro relativo á telegramas destinados á la publicidad, fechado en Lisboa el 3 de marzo de 1899 (Gaceta 22 marzo). Y, por último, para la comunicación cablegráfica submarina el Convenio de París de 14 de marzo de 1894, declaración de 1 de diciembre de 1886, 23 de marzo de 1887 y protocolo final de 7 de julio de 1887 (Gaceta 19 marzo, 1888). — *Servicio telefónico.* Se creó este servicio por el Real Decreto de 11 de agosto de 1884, regularizándolo el Reglamento de 12 de agosto del mismo año (Gaceta 15 agosto); y, tanto este Reglamento como las numerosas disposiciones publicadas con posterioridad, han sido derogados por el Real Decreto de 9 de junio de 1903 que aprobó el Reglamento vigente para este servicio (Gaceta 16 junio y rectificación hecha en la de 2 de julio siguiente); cuyo Reglamento ha sido modificado en algunos de sus artículos por los de 19 de enero de 1904 (Gaceta 20 enero) y 14 de agosto del mismo año (Gaceta 19 agosto). — El empleo de los dialectos en los telefonemas ha sido autorizado por el Real Decreto, ya citado, de 20 de junio de 1904. — Los transportes por ferrocarril, antes de la publicación de este Código, se regían exclusivamente por las disposiciones legales dictadas al efecto, ya que el Cód. de com. de 1829 no había podido prever las condiciones á que habían de sujetarse estos. Hoy les son aplicables, á más de los artículos correspondientes de este Título VII, las de los Capítulos VII y VIII del Reglamento de 8 de setiembre de 1878 (Gaceta 22 setiembre) para la ejecución de la Ley de policía de ferrocarriles de 23 de noviembre de 1877 (Gaceta, 24 noviembre), reformado por Real Decreto de 10 de mayo de 1901 (Gaceta 12 mayo) cuyas disposiciones iremos citando y concordando con los respectivos artículos del Código.

[1]) Estas cartas de porte lo mismo que los billetes y talones resguardos de los ferrocarriles y empresas de transportes de todas clases satisfarán por derechos de timbre si su cuantía excede de 10 pesetas y no pasa de 1000, 10 céntimos de peseta, desde 1000,01 á 2000. 25 céntimos de peseta, y desde 2000,01 en adelante, 50 céntimos. Este reintegro se hará con timbres móviles, pero si prefirieren las empresas pagarlo en metálico en el modo y forma que se disponga en el reglamento de esta ley podrán deducir las mismas por premio de cobranza un 1,50%. (Art. 189, L. del T.). — Aun cuando no lo dice la ley, ha de entenderse el precepto transcrito en el sentido de que si la carta de porte es doble el impuesto ha de satisfacerse tan solo por la que expide al cargador la empresa de transporte.

[2]) El art. 111 del Regl. Polic. f. c. dispone que todo el que remita mercancías á las estaciones de los ferrocarriles hará la declaración previa de su número, peso y calidad. Y el 113 que las Compañías están obligadas á facturar los bultos que se les presenten; á cuyo efecto, y para que esta facturación se haga ordenadamente, la empresa deberá llevar dos libros talonarios foliados; uno en que anotará los efectos que deben transportarse con la velocidad de los viajeros; y otro, en donde se tomará razón de los que han de conducirse

350. Both the consignor and the carrier of merchandise or goods may mutually require that a bill of lading[1]) be drawn up, in which shall be stated: 1. The name, surname and address of the consignor; — 2. The name, surname and address of the carrier; — 3. The name, surname and address of the person to whom or to whose order the goods are addressed, or if they are to be delivered to the bearer of the said bill of lading; — 4. The description of the goods, stating their generic quality, their weight and the exterior marks or signs of the packages in which they are contained; — 5. The charge for the carriage; — 6. The date on which the despatch is effected; — 7. The place of delivery to the carrier; — 8. The place and time at which delivery has to be made to the consignee; — 9. The compensation to be paid by the carrier in case of delay, if there is any agreement made on this point.

351. In carriage by railroad or other undertakings which are subject to regulated tariffs or times, it shall be sufficient if the bills of lading or the declarations for carriage, made by the consignor, refer in the matter of the charges, times and special conditions of the carriage, to the tariffs and regulations the application whereof he requires; and if the tariff does not fix them, the carrier must charge the price of the cheapest tariffs, with the conditions which belong thereto, and shall always state the same or refer thereto in the bill of lading which he delivers to the consignor[2]).

volume 85); that of 28 November 1863, redrafting arts. 22 and 23 of the foregoing Regulation, (*Colección Legislativa*, vol. 90); that of 7 January 1882 on code telegrams (*Gaceta* of 13 January); and that of 10 August 1905, which redrafted art. 6 of the Regulation of 2 January 1891 (*Gaceta* of 12 August). The international telegraph service is regulated by the Convention of St. Petersburg of 22 July 1875 and the Regulation of Paris for carrying it into effect of 1 June 1878 (*Gaceta* of 17 April 1879) which has been revised and amended on several occasions, the last being that made in London on 10 July 1903 (*Gacetas* of 9 and 10 February 1904). We have a special Convention with Portugal of 14 January 1880, and with the same country and France, one relating to telegrams intended for publicity, dated at Lisbon, 3 March 1899 (*Gaceta* of 22 March). And, lastly, for submarine cable communication, the Convention of Paris of 14 March 1894, the declaration of 1 December 1886, 23 March 1887 and the final protocol of 7 July 1888). *Telephone service.* This service was created by Royal Decree of 11 August 1884, and regularised by the Regulation of 12 August of the same year (*Gaceta* of 15 August); and both this Regulation and the numerous provisions published afterwards have been repealed by the Royal Decree of 9 June 1903 which approved the Regulation now in force for this service (*Gaceta* of 16 June and amendment made therein on the 2 July following); which Regulation has been amended in several of its articles by those of 19 January 1904 (*Gaceta* of 20 January) and 14 August of the same year (*Gaceta* of 19 August). The employment of dialects in the telephones was authorised by Royal Decree of 20 June 1904, already cited. Carriage by railroad, before the publication of this Code, was exclusively governed by the legal provisions enacted for that purpose, since the Code of Commerce of 1829 could not foresee the conditions to which they would have to be subject. Besides the corresponding articles of this Title VII, there now apply to them those of Chapters VII and VIII of the Regulation of 8 September 1878 (*Gaceta* of 22 September) for carrying out the law of railroad police of 23 November 1877 (*Gaceta* of 24 November), amended by Royal Decree of 10 May 1901 (*Gaceta* of 12 May) the provisions whereof we shall proceed to cite and collate with the corresponding articles of the Code.

[1]) These bills of lading just as the tickets and checks of railroad companies and undertakings for transport of all kinds, must pay stamp duty of 10 céntimos if the amount exceeds 10 pesetas but not 1000 pesetas, of 25 céntimos, from 1000,01 to 2000, and of 50 céntimos from 2000,01 pesetas upwards. This payment must be made by adhesive stamps, but if the undertakings prefer to pay it in cash, as provided in the Regulation of this law they may deduct a premium for collection at 1,50%. (Art. 189 of the Stamp Act). Although the law does not say so, the above precept must be understood in the sense that if the bill of lading is in duplicate, the duty is to be paid only on the one which the transport undertaking issues to the consignor.

[2]) Art. 111 of the Railroad Police Regulation provides that every person who sends merchandise to the railroad stations must make a previous declaration of its number, weight and quality. And art. 113 that the Companies are bound to book the packages which are presented to them; for which purpose, and in order that this booking may be done in due order, the undertaking must keep two paged and counterfoiled books; one in which the goods which are to be carried with the speed of the passenger trains shall be entered, and the other in which shall be

352. Las cartas de porte ó billetes en los casos de transporte de viajeros[1]), podrán ser diferentes, unos para las personas y otros para los equipajes; pero todos contendrán la indicación del porteador, la fecha de la expedición, los puntos de salida y llegada, el precio, y, en lo tocante á los equipajes, el número y peso de los bultos, con las demás indicaciones[2]) que se crean necesarias para su fácil identificación[3]).

353. Los títulos legales del contrato entre el cargador y porteador, serán las cartas de porte, por cuyo contenido se decidirán las contestaciones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, sin admitir más excepciones que las de falsedad y error material en su redacción[4]).

Cumplido el contrato, se devolverá al porteador la carta de porte que hubiere expedido, y en virtud del canje de este título por el objeto porteado, se tendrán

---

en los trenes de las mercancías. En dichos libros se hará constar el peso y precio del transporte por el mismo orden de fechas en que aparezcan anotados en el registro los objetos facturados, á no ser que el remitente consienta voluntariamente en su prorrogación. Al tiempo de la entrega se dará al remitente ó encargado el talón ó carta de porte á que se refiere el art. 351 del Cód. de com. — Respecto á precios y tarifas del transporte de mercancías que han de hacer las Compañías de ferrocarriles he aquí extractada la doctrina contenida en los art. 127 á 136 inclusive del Regl. Pol. f. c. — Los precios ordinarios de la tarifa se aplicarán á todos los paquetes ó bultos que constituyan una sola remesa de más de 50 kilógramos si la hiciere un mismo individuo y va dirigida á una misma persona. Si la remesa la hiciere una empresa de mensajerías ú otro intermediario cualquiera, solo disfrutarán del beneficio anterior cuando los efectos remesados estuvieren embalados en un solo bulto. Los encargos y los excedentes de equipajes (véanse la notas 3, pág. 138 y 5, pág. 139) en las condiciones anteriormente indicadas se considerarán para dichos efectos como un solo bulto. — Las asimilaciones de los objetos transportables que no estén especificados en las tarifas, se harán provisionalmente por las empresas y por razón de analogía, pero dando cuenta de ello al Ministerio de Fomento para que las apruebe, modifique ó deseche. — Los bultos que contengan mercancías de clases diversas pagarán por la tarifa que corresponda á la más elevada. — Dentro de las tarifas máximas que tengan concedidas, y sin perjudicar los puertos ó industrias nacionales en beneficio de los extranjeros, podrán establecerse otras tarifas especiales entre determinados puntos de la linea, sin que tengan opción á ellas otros distintos. También podrán reducirse los precios de la tarifa en favor de los remitentes que acepten plazos más largos que los fijados para la pequeña velocidad, ó que ofrezcan cualquier otra ventaja para la Compañía, sin que ello excuse nunca la responsabilidad por el mal servicio. Estas reducciones ó beneficios habrán de hacerse á todos los que acepten el servicio en igualdad de condiciones, y de ellas deberá la empresa dar cuenta al Gobierno, haciéndolas constar además en un registro que estará foliado y rubricado por el jefe de la inspección mercantil y á disposición del público; al cual deberá hacérsele saber la existencia de tales tarifas especiales al tiempo de facturar para que escoja la que más le convenga. Los precios así fijados en las tarifas especiales no podrán aumentarse sino transcurrido un año desde su publicación; advirtiendo que toda alteración que se intente en los precios de tarifa deberá ponerse en conocimiento del Gobierno con un mes de anticipación al día en que debe publicarse, y se comunicará á los gobernadores de las provincias atravesadas por el ferrocarril para que estos dispongan su publicación 15 días antes del en que ha de empezar á regir la nueva tarifa.

[1]) Véase la nota 2, pág. 137 para lo relativo al impuesto del timbre que han de satisfacer los billetes de los pasajeros.

[2]) La nueva Ley de 3 de agosto de 1907 ha fijado el impuesto de transportes, que grava el precio de los billetes de los pasajeros, en cualquier medio de locomoción terrestre ó fluvial, en un 29%, á partir del 1.° de enero de 1908; salvo en el caso de que las compañías hicieren una reducción de un 25% de más sobre los precios ordinarios, pues entonces, á tenor de lo dispuesto en el párrafo 2.° del art. 4.° de la Ley de 20 de marzo de 1900, el impuesto del Tesoro será de un 10% tan solo.

[3]) Se comprende bajo la denominación de equipaje las prendas y efectos destinados al abrigo, adorno y aseo de los viajeros de su inmediato uso y los libros y herramientas de su arte y oficio contenidos en barriles, cofres, maletas, arquillas, cajones, sombrereras, sacos de noche, alforjas, saquillos, almohadas, ó bajo otra cubierta cualquiera, ó bien á la vista sin embalaje alguno. — El viajero que lleve en su equipaje joyas, pedrerías, billetes de Banco, dinero, acciones de sociedades industriales, títulos de la deuda pública ú otros objetos de valor debera hacerlo constar, exhibiéndolos antes de verificarse el registro, manifestando la suma total que estos efectos representen, ya sea según su valor en venta, ya por el precio en que los estime. — La falta de este requisito relevará de responsabilidad á la empresa en caso de sustracción ó extravío. — Los equipajes deberán transportarse en los mismos trenes que conduzcan á sus dueños y se entregarán al terminar el viaje. (Art. 106, 107 y 116 del Regl. Polic. f. c.).

[4]) Respecto á las Compañías de ferrocarriles es preciso tener en cuenta que según el art. 126 del Regl. Polic. f. c., las hojas de expedición entregadas por la empresa á los conductores de los trenes de mercancias harán fe en favor de los dueños que hubieren perdido su resguardo, siempre que identifiquen la persona.

352. In the case of the carriage of passengers[1]), the bills of lading and the tickets may be distinct, some for the people and others for the baggage; but all shall contain a statement of the carrier, the date of the despatch, places of departure and arrival, the charge, and as regards the baggage, the number and weight of the packages, with other indications[2]) which are thought necessary for their easy identification[3]).

353. The legal titles of the contract between the consignor and carrier shall be the bills of lading, by the contents whereof the disputes which arise over their execution and fulfilment shall be decided, without any defences being admitted other than those of forgery and material mistake in their drafting[4]).

When the contract has been performed, the bill of lading which he has issued shall be returned to the carrier, and by virtue of the exchange of this title for the

entered those which have to be carried in goods trains. In the said books shall be entered the weight and charge of the carriage in the same order of dates as the booked goods are noted in the register, unless the sender voluntarily consents to their being deferred. At the time of the delivery, the check or bill of lading referred to in art. 351 of the Code of Commerce shall be given to the sender or the person in charge. With regard to the charges and tariffs for carriage which the railroad companies have to make, here follows the doctrine contained in arts 127 to 136 inclusive of the Railroad Police Regulation: — The ordinary charges of the tariff shall apply to all packages or parcels which constitute a single remittance of more than 50 kilograms, if made by the same individual and addressed to the same person. If a transport agency or other intermediary makes the remittance, they shall only enjoy the preceding benefit when the remitted goods are packed in a single package. Parcels and excess luggage (see note 3 below, and note 5 on page 139) in the conditions above indicated shall be considered as a single package. Approximate charges for transportable objects which are not specified in the tariffs, shall be made by the undertakings provisionally and by way of analogy, but giving account thereof to the Board of Trade for their allowance, alteration or disallowance. Packages which contain merchandise of different classes shall pay according to the highest tariff of the merchandise. Within the limits of the maximum tariffs allowed, and without prejudicing the national ports or industries for the benefit of foreigners, they may establish other special tariffs between certain places on the line, without other places having a right thereto. The tariff charges may likewise be reduced in favour of senders who accept times which are longer than those fixed for the slowest speed, or who offer any other advantage to the company, but without that ever excusing liability for bad service. These reductions or benefits must be given to all who accept the service in like conditions, and the undertaking must give account thereof to the Government, stating them likewise in a register which shall be paged and rubricated by the Chief of Mercantile Inspection and be open to the public; who must be informed of the existence of such special tariffs at the time of booking, in order that they may choose which best suits them. The charges thus fixed in the special tariffs cannot be increased until after the lapse of a year from their publication; and every alteration which is intended in the tariff charges must be brought to the notice of the Government one month in advance of the day on which it is to be published, and shall be communicated to the Governors of the provinces traversed by the railroad in order that they may provide for its publication 15 days before the new tariff is to come into force.

[1]) See note 2, page 137, for the Stamp duty which the passenger tickets have to pay.

[2]) The new Law of 3 August 1907 fixed the transport duty on the price of passenger tickets, by every means of land or river locamotion, at 29%, from 1 January 1908; except when the companies make a reduction of 25% or more on the ordinary prices, as then, according to the provision of paragraph 2 of art. 4 of the Law of 20 March 1900, the Treasury tax shall be only 10%.

[3]) Under the term "baggage" are included the possessions and effects intended for the protection, adornment and comfort of passengers, for their immediate use, the books and implements of their art and calling contained in barrels, trunks, port-manteaus, boxes, chests, hat-boxes, hold-alls, saddle bags, bags, cushions, or in any other covering whatever, or to be seen without any covering. A passenger who carries in the baggage, jewels, precious stones, banknotes, money, shares of industrial societies, securities of the public debt, or other objects of value, must produce them before registration, and must show the total sum which those effects represent, either according to their value or the price at which he estimates them. Want of this requisite will relieve the undertaking from liability in case of their being taken away or lost. The baggage must be carried in the same trains as carry their owners and must be delivered up at the end of the journey. (Art. 106, 107 and 116 of the Railroad Police Regulation).

[4]) With regard to railroad companies, it is necessary to remember that according to article 126 of the Railroad Police Regulation, the lists of goods delivered by the undertaking to the guards of the goods trains will be evidence in favour of the owners who have lost their receipts, provided that they identify the person.

por canceladas las respectivas obligaciones y acciones, salvo cuando en el mismo acto se hicieren constar por escrito las reclamaciones que las partes quisieran reservarse, excepción hecha de lo que se determina en el art. 366.

En caso de que por extravío ú otra causa no pueda el consignatario devolver, en el acto de recibir los géneros, la carta de porte suscrita por el porteador, deberá darle un recibo de los objetos entregados, produciendo este recibo los mismos efectos que la devolución de la carta de porte.

354. En defecto de carta de porte, se estará al resultado de las pruebas jurídicas que haga cada parte en apoyo de sus respectivas pretensiones, conforme á las disposiciones generales establecidas en este Código para los contratos de comercio[1]).

355. La responsabilidad del porteador comenzará desde el momento en que reciba las mercaderías, por sí ó por medio de persona encargada al efecto, en el lugar que se indicó para recibirlas[2]).

356. Los porteadores podrán rechazar los bultos que se presenten mal acondicionados para el transporte; y si hubiere de hacerse por camino de hierro, insistiendo en el envío, la empresa los porteará, quedando exenta de toda responsabilidad si hiciere constar en la carta de porte su oposición[3]).

357. Si, por fundadas sospechas de falsedad en la declaración del contenido de un bulto, determinare el porteador registrarlo, procederá á su reconocimiento ante testigos, con asistencia del remitente ó consignatario.

No concurriendo el que de éstos hubiere de ser citado, se hará el registro ante notario, que extenderá un acta del resultado del reconocimiento, para los efectos que hubiere lugar.

Si resultare cierta la declaración del remitente, los gastos que ocasionare esta operación y la de volver á cerrar cuidadosamente los bultos, serán de cuenta del porteador, y, en caso contrario, de cuenta del remitente[4]).

358. No habiendo plazo prefijado para la entrega de los efectos, tendrá el porteador la obligación de conducirlos en las primeras expediciones de mercaderías iguales ó análogas, que hiciere al punto en donde deba entregarlos; y, de no hacerlo así, serán de su cargo los perjuicios que se ocasionen por la demora[5]).

---

[1]) Véase la nota anterior.

[2]) Toda entrega que se verifique en el local designado á los encargados de la empresa para recibir los efectos que deben transportarse se tendrá por bien hecha y legalmente realizada. No se considerarán como tales encargados los dependientes secundarios, exclusivamente destinados á los trabajos materiales y á las ocupaciones mecánicas de las oficinas y estaciones (art. 112 Regl. Polic. f. c.). Y en su consecuencia la responsabilidad de la empresa existirá desde el momento de dicha entrega aunque el encargado de este servicio no haya tomado la correspondiente razón en los libros de registro (art. 114, Regl. Polic. f. c.).

[3]) Este art. concuerda con el 123 del Regl. Polic. f. c.; y se completa con el 124 que dice que no obstante la responsabilidad de la Compañía en el supuesto de no haber hecho constar su protesta en el resguardo, podrá, sin embargo, declinar aquella si probare que las averías son debidas á un siniestro que no le es imputable. — La facultad de rechazar ó negarse á efectuar ciertos transportes las Compañías de ferrocarriles se extiende según el art. 122 del citado Reglamento á los embalajes vacíos, á las mercancías susceptibles de averiarse durante el transporte, á las que necesiten una segunda cubierta para conservarse y á las que por su escaso valor no basten á cubrir los gastos de transporte, siempre que no preceda el pago al contado del precio de transporte según tarifa.

[4]) Concuerda con el 117 del Regl. Polic. f. c. cuya doctrina se completa con lo prevenido en los 118 y 120 del mismo. En el primero, y partiendo del supuesto de haberse comprobado la falsedad de la declaración, se previene: que «extendida el acta de reconocimiento, la empresa la remitirá al Gobernador de la provincia para los efectos á que haya lugar en la vía gubernativa, sin perjuicio de pasarla también al Tribunal competente si diese ocasión á un procedimiento civil ó criminal». En el segundo se dispone: que «el que haga una declaración falsa al remitir sus mercancias á la estación con el fin de satisfacer un derecho menor que el consignado en la tarifa abonará desde luego á la empresa el doble del exceso que resulte, resarciéndola de todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado». — A más de esto es preciso tener en cuenta, según dispone el art. 119 de este Reglamento que la sospecha de fraude ni el pretexto de hacer por este ú otro motivo el registro de los bultos de que se compone una expedición pueden autorizar el retraso en el plazo convenido por los remitentes, ya que el registro puede practicarlo la empresa en el punto de entrega.

[5]) De conformidad con esto el Regl. Pol. f. c. previene: que los animales, mercancías y cualesquiera otros efectos que hayan de transportarse en los trenes de gran velocidad, saldrán en el primero que comprenda vagones de todas clases, siempre que hayan sido presentados al registro tres horas antes de la señalada para la partida. Si no hubiere trenes con carruajes de todas

object carried, the respective obligations and rights of action shall be held to be cancelled, except when at the same time claims are made in writing which the parties desire to reserve, save as determined by art. 366.

When from loss or other cause, the consignee cannot return the bill of lading signed by the carrier at the time of receiving the goods, he must give him a receipt for the objects delivered, and this receipt shall produce the same effect as the return of the bill of lading.

354. In the absence of the bill of lading, the dispute shall be determined by the result of the legal evidence which each party produces in support of his contentions, according to the general provisions enacted by this Code for commercial contracts[1]).

355. The liability of the carrier shall commence from the moment when he receives the merchandise, by himself or by means of a person entrusted for that purpose in the place which was indicated for receiving it[2]).

356. Carriers may refuse packages which are presented in bad condition for carriage; and if it is to be made by railroad, and despatch is insisted on, the undertaking shall carry them, but shall be exempt from all responsibility, if it causes its objection to be stated on the bill of lading[3]).

357. If from well founded suspicions of the falsity of the declaration of the contents of a package, the carrier decides to examine it, he shall proceed to its examination before witnesses, in the presence of the sender or consignee.

If the sender or consignee, having been summoned, does not attend, the examination shall take place before a notary, who shall draw up a minute of the results of the examination, for the effects which may be available.

If the declaration of the sender proves to be true, the expenses occasioned by this operation and by carefully reclosing the packages, shall be borne by the carrier, and in the contrary case, by the sender[4]).

358. If there is no fixed time for the delivery of the goods, the carrier shall be bound to carry them in the first despatches of similar or analogous merchandise which he effects to the place where he has to deliver it, and if he does not do so, the damage which is occasioned by the delay shall be borne by him[5]).

---

[1]) See the preceding note.

[2]) Every delivery made at the place pointed out to the foremen of the undertaking for receiving goods which are to be transported, shall be held well and lawfully made. Subordinate employés exclusively appointed for the material labours and the mechanical occupations of the offices and stations, shall not be considered as such foremen (art. 112 of the Railroad Police Regulation). And consequently the liability of the undertaking shall exist from the moment of the said delivery, although the foreman in this service has not made the proper entry in the books of the register (art. 114 of the Railroad Police Regulation).

[3]) This art. agrees with art. 123 of the Railroad Police Regulation; and it is completed by art. 124 which says that, nothwithstanding the liability of the Company, when it has not stated its protest in the receipt, it may, nevertheless, decline responsibility, if it proves that the damage is due to a disaster which is not imputable to it. The power of rejecting or refusing to effect certain transports, on the part of railroad companies, extends, according to art. 122 of the said Regulation, to empty bales, to merchandise which is susceptible of being damaged during the transport, to that which requires a second covering for preserving it and to that which from its small value is not sufficient to cover the expenses of carriage, provided that the tariff for the carriage is not paid by cash in advance.

[4]) This agrees with art. 117 of the Railroad Police Regulation, the doctrine whereof is completed by the provisions of arts. 116 and 120 thereof. In the first, starting with the supposition that the falsity of the declaration has been proved, it is provided: that "when the minute of examination has been drawn up, the undertaking shall send it to the Governor of the province for the effects which may be available to the Government, without prejudice to its being handed also to the competent Tribunal, if it should occasion a civil or criminal proceeding". In the second it is provided that "a person who makes a false declaration on sending his merchandise to a station, with the intention of paying a less duty than that set out in the tariff, shall at once pay double the resulting excess to the undertaking, and shall compensate it for all the damage which he has occasioned it". Besides this, it is necessary to remember that, according to art. 119 of this Regulation, neither the suspicion of fraud nor the pretext of making an examination of the packages which form a consignment, for this or any other reason, can authorise a delay in the time agreed with the senders, as the undertaking may effect the examination at the place of delivery.

[5]) In agreement with this, the Railroad Police Regulation provides: that animals, merchandise and any other goods which are to be carried with great speed, shall leave in the first train which comprises wagons of all classes, provided that they have been presented at the register three hours before that fixed for the departure. If there are no trains with carriages of all classes which

359. Si mediare pacto entre el cargador y el porteador sobre el camino por donde deba hacerse el transporte, no podrá el porteador variar de ruta, á no ser por causa de fuerza mayor; y en caso de hacerlo sin ella, quedará responsable de todos los daños que por cualquier otra causa sobrevinieren á los géneros que transporta, además de pagar la suma que se hubiese estipulado para tal evento.

Cuando por la expresada causa de fuerza mayor el porteador hubiera tenido que tomar otra ruta que produjese aumento de portes, le será abonable este aumento mediante su formal justificación.

360. El cargador podrá, sin variar el lugar donde deba hacerse la entrega, cambiar la consignación de los efectos que entregó al porteador, y éste cumplirá su orden, con tal que, al tiempo de prescribirle la variación de consignatario, le sea devuelta la carta de porte suscrita por el porteador, si se hubiere expedido, canjeándola por otra en que conste la novación del contrato.

Los gastos que esta variación de consignación ocasione, serán de cuenta del cargador.

361. Las mercaderías se transportarán á riesgo y ventura del cargador, si expresamente no se hubiere convenido lo contrario.

En su consecuencia, serán de cuenta y riesgo del cargador todos los daños y menoscabos que experimenten los géneros durante el transporte, por caso fortuito, fuerza mayor ó naturaleza y vicio propio de las cosas.

La prueba de estos accidentes incumbe al porteador[1]).

362. El porteador, sin embargo, será responsable de las pérdidas y averías que procedan de las causas expresadas en el artículo anterior, si se probare en su contra que ocurrieron por su negligencia ó por haber dejado de tomar la precauciones que el uso tiene adoptadas entre personas diligentes, á no ser que el cargador hubiese cometido engaño en la carta de porte, suponiéndolas de género ó calidad diferentes de los que realmente tuvieren[2]).

Si, á pesar de las precauciones á que se refiere este artículo, los efectos transportados corrieran riesgo de perderse, por su naturaleza ó por accidente inevitable, sin que hubiese tiempo para que sus dueños dispusieran de ellos, el porteador podrá proceder á su venta[3]), poniéndolos con este objeto á disposición de la autoridad judicial ó de los funcionarios que determinen disposiciones especiales.

363. Fuera de los casos prescritos en el párrafo segundo del art. 361, el porteador estará obligado á entregar los efectos cargados, en el mismo estado en que, según la carta de porte, se hallaban al tiempo de recibirlos[4]), sin detrimento ni

---

clases que recorran el trayecto á donde van consignados, deberán transportarse en el primero que parta, sea expreso ó correo. — Cuando el transporte haya de verificarse á pequeña velocidad la expedición se hará lo más tarde á las cuarenta y ocho horas de la entrada de los efectos. Para el transporte de los animales de tiro y silla se avisará con las horas de anticipación que se fije en las tarifas (art. 125). — Para la debida inteligencia de este y otros preceptos análogos del Regl. Pol. f. c. conviene tener en cuenta: que el artículo 105 clasifica los objetos transportables en equipajes, encargos, mercancías y ganados de todas clases; que el 106 define los equipajes en la forma indicada en la nota 3, pág. 138 y que los 108, 109 y 110 definen los encargos, mercancías y ganados. — Según estos, son encargos todos los bultos sueltos que sin estar sujetos á la declaración de su contenido requieren un cuidado especial y se transportan con la velocidad de los viajeros. Son mercancías todos los efectos que no son equipajes ni encargos. Y son ganados, no solo los vacuno, de cerda, de lana y cabrío sino los animales de tiro, carga, silla, los perros y demás animales domésticos y las aves de corral y de recreo colocadas en jaulas ó cajones con verjas.

[1]) Concuerda este último párrafo con el art. 138 del Regl. Pol. f. c.

[2]) No se tendrá por caso de fuerza mayor el robo, sino cuando la empresa haga constar que hizo cuanto le fué posible para impedirlo; tampoco el incendio, si no prueba que ni fué ocasionado por la imprudencia ó descuido de sus empleados, ni por la insuficiencia ó mala condición de los medios de transporte (art. 139, Regl. Pol. f. c.). — Las empresas serán siempre responsables de la sustracción ó deterioro de los efectos que se les hayan entregado, ya provenga el daño de sus mismos empleados, ó ya de los extraños que concurran á sus oficinas (art. 145). — En relación con estos preceptos está el del segundo apartado del art. 111 que dispone: que las empresas adoptarán medidas especiales de precaución para el transporte de las mercancías que pudieran producir explosiones ó incendios, ó cuyo deterioro y contacto perjudique más ó menos á las demás.

[3]) La venta judicial á que hace referencia este artículo habrá de hacerse en la forma que puede verse en la nota 2, pág. 126.

[4]) No obstante esto la empresa podrá reparar los embalajes y cobrar el importe de las reparaciones cuando acredite haberlo hecho para la buena conservación de las mercancías, que de

359. If there is an agreement between the consignor and carrier about the route by which the carriage is to be effected, the carrier may not vary the route, except on the ground of *vis major*; and if he varies it without that cause, he shall be liable for all the damage which ensues from any other cause to the goods which he transports, besides paying the sum which has been agreed for that event.

When, through the said cause of *vis major*, the carrier has had to take another route which has produced an increase of freights, this increase shall be payable on the formal proof thereof.

360. Without changing the place where delivery is to be made, the consignor may change the consignment of the goods which he delivered to the carrier, and the latter shall comply with his order, provided that, at the time of ordering him to change the consignee, the bill of lading signed by the carrier, if any has been issued, is returned to him, changing it for another in which the novation of the contract appears.

The expenses caused by this change of consignment shall be borne by the consignor.

361. Merchandise shall be carried at the risk and hazard of the consignor, if there is no express agreement to the contrary.

Consequently, all damage and deterioration suffered by the goods during the transport, by fortuitous event, *vis major* or the inherent nature and defect of the things shall be at the account and risk of the consignor.

The proof of these occurences lies on the carrier[1]).

362. The carrier shall, nevertheless, be liable for losses and damage which proceed from the causes expressed in the preceding article, if it is proved against him that they occurred through his negligence or through having failed to take the precautions which custom has adopted among diligent persons, unless the consignor has committed fraud in the bill of lading, suggesting goods of a kind or character different from those which they were in fact[2]).

If, in spite of the precautions to which this article refers, the transported goods run risk of being lost, by their nature or unavoidable accident, without there being time for their owners to give directions about them, the carrier may proceed to their sale[3]), and place them for this purpose at the disposal of the judicial authority or of the officials to give special directions.

363. Besides the cases provided for in the second paragraph of art. 361, the carrier shall be bound to deliver the consigned goods in the same condition as they were in at the time of receiving them[4]), according to the bill of lading, without any

---

go the way the goods are consigned, they must be carried in the first train which leaves, whether express or mail. When the transport is to be made at slow speed, despatch shall be effected at the latest forty eight hours after the entry of the goods. For the carriage of draught and riding animals, the company shall be advised at the advance hours fixed in the tariffs (art. 125). For the proper understanding of this and other analogous precepts of the Railroad Police Regulation it is convenient to bear in mind that art. 105 classifies transportable objects into baggage, parcels, merchandise and cattle of all kinds; that art. 106 defines baggage as indicated in note 3, page 138, and that arts. 108, 109 and 110 define the parcels, merchandise and cattle. According to these, parcels are all loose packages which, without being subject to a declaration of their contents, require special care and are carried with the speed of passenger trains. Merchandise means all effects which are not baggage or parcels. And cattle means not only bovine animals, pigs, sheep and goats but also draught, pack and saddle animals, dogs and other domestic animals, cage birds and birds for sport placed in cages or boxes with gratings.

1) This last paragraph agrees with art. 138 of the Railroad Police Regulation.

2) Robbery shall not be considered a case of *vis major*, unless the undertaking proves that it did overthing possible to prevent it; nor shall fire, if it is not proved that it was not caused by the imprudence or carelessness of its employés, nor by the insufficiency or bad condition of the means of transport (art. 139 of the Railroad Police Regulation). Undertakings shall aways be liable for the removal or deterioration of the goods which have been delivered to them, whether the loss proceeds from their own employés or from strangers resorting to their offices (art. 145). Related to these precepts there is that in the second paragraph of art. 111, which provides that the undertakings shall adopt special means of precaution for the carriage of merchandise which may produce explosions or fires, or whose deterioration or contact more or less injures other merchandise.

3) The judicial sale referred to in this article must be effected in the way which may be seen in note 2, page 126.

4) Nevertheless, the undertaking may repair the coverings and recover the expense of these repairs, when it proves to have done it for the good preservation of the merchandise, which other-

menoscabo alguno, y no haciéndolo, á pagar el valor que tuvieren los no entregados, en el punto donde debieran serlo y en la época en que correspondía hacer su entrega[1]).

Si ésta fuere de una parte de los efectos transportados, el consignatario podrá rehusar el hacerse cargo de éstos, cuando justifique que no puede utilizarlos con independencia de los otros[2]).

364. Si el efecto de las averías á que se refiere el art. 361 fuera sólo una disminución en el valor del género, se reducirá la obligación del porteador á abonar lo que importe esa diferencia de valor, á juicio de peritos.

365. Si, por efecto de las averías, quedasen inútiles los géneros para su venta y consumo en los objetos propios de su uso, no estará obligado el consignatario á recibirlos, y podrá dejarlos por cuenta del porteador, exigiéndole su valor al precio corriente en aquel día.

Si entre los géneros averiados se hallaren algunas piezas en buen estado y sin defecto alguno, será aplicable la disposición anterior con respecto á los deteriorados, y el consignatario recibirá los que estén ilesos, haciéndose esta segregación por piezas distintas y sueltas, y sin que para ello se divida un mismo objeto, á menos que el consignatario pruebe la imposibilidad de utilizarlos convenientemente en esta forma.

El mismo precepto se aplicará á las mercaderías embaladas ó envasadas, con distinción de los fardos que aparezcan ilesos[3]).

366. Dentro de las veinticuarto horas siguientes al recibo de las mercaderías, podrá hacerse la reclamación contra el porteador, por daño ó avería que se encontrase en ellas al abrir los bultos, con tal que no se conozcan por la parte exterior de éstos las señales del daño ó avería que diere motivo á la reclamación, en cuyo caso sólo se admitirá ésta en el acto del recibo[4]).

Transcurridos los términos expresados, ó pagados los portes, no se admitirá reclamación alguna contra el porteador sobre el estado en que entregó los géneros porteados[5]).

367. Si ocurrieren dudas y contestaciones entre el consignatario y el porteador sobre el estado en que se hallen los efectos transportados al tiempo de hacerse al primero su entrega, serán éstos reconocidos por peritos nombrados por las partes, y un tercero en caso de discordia, designado por la autoridad judicial, haciéndose constar por escrito las resultas[6]); y si los interesados no se conformaren con el dicta-

---

otra manera se habrían perdido ó deteriorado (art. 142, Regl. Pol. f. c.). — Conforman por completo con la doctrina del Cód. de com. los art. 121 y 146 del citado Regl., ya que el primero exime de toda responsabilidad á la empresa que recibió los efectos bajo cubierta sellada y los entrega al remitente ó consignatario con los sellos intactos, y el segundo la exime igualmente de toda responsabilidad por los extravíos ó pérdidas que pudieren ocurrir si la empresa alquiló todo el espacio de uno de los vagones y no intervino ni directa ni indirectamente en la carga y expedición de las mercancias que en él se transporten.

1) Hay que tener en cuenta, sin embargo, que según el art. 148 del Regl. Polic. f. c. las empresas no son responsables de las mermas naturales, cuando no exceden de las proporciones ordinarias ni pueden atribuirse á dolo ó incuria.

2) En relación con este artículo ha de entenderse el 152 del Regl. Pol. f. c. que dice así: Si el dueño de bultos ó paquetes momentáneamente extraviados hubiere sido indemnizado de su pérdida, podrá la empresa, cuando fuesen recobrados, citarle para presenciar su apertura, y, hecha su entrega, recobrará la cantidad que satisfizo, abonando los daños y perjuicios por el retraso. — Si del reconocimiento de los efectos resultare un fraude cometido por el dueño en sus declaraciones la empresa tendrá á su vez derecho al resarcimiento de daños y perjuicios, debiendo dar conocimiento del hecho á los Tribunales de justicia.

3) Concuerda con este último párrafo el art. 151 del Regl. Pol. f. c., pero añade lo siguiente: Se exceptúan los casos fortuitos y de fuerza mayor, los cuales han de ser comprobados en el mismo día y lugar en que ocurran, y no por certificados obtenidos posteriormente, y después de comenzadas las actuaciones, á no ser que una perturbación del orden público haya impedido á las autoridades el libre ejercicio de sus funciones.

4) Para poder hacer efectivo este derecho precisa exigir que se haga el reconocimiento judicial de los efectos transportados en la forma indicada en la nota 1, pág. 133.

5) Concuerda con el art. 158 del Regl. Pol. f. c.)

6) Concuerda con los art. 156 y 157 del Regl. Pol. f. c. que conceden al consignatario el derecho de comprobación del peso de las mercancías que se le entreguen, siendo de su cuenta los gastos si resultare conforme ó con solo la diferencia que consiente el art. 148 (véase la nota 1, *supra*) y en caso contrario de la empresa, y que determinan el modo y manera de hacer el reconocimiento judicial de los bultos cuando lo exija el consignatario.

deterioration or damage, and if he fails so to do, he shall be bound to pay the value of the undelivered goods, as at the place where they ought to be delivered at the proper time for their delivery[1]).

If this affects one part of the carried goods, the consignee may refuse to accept the goods, when he proves that he cannot make use thereof independently of the others[2]).

364. If the effect of the damage, referred to in art. 361, was only a diminution in the value of the goods, the obligation of the carrier shall be confined to paying the amount of that difference in value according to the opinion of experts.

365. If by the effect of the damage the goods are rendered useless for their sale and consumption for the purposes proper to their use, the consignee shall not be bound to accept them, but may leave them on account of the carrier, and demand their value at the price current on that day.

If among the damaged goods there are found some pieces in good condition and without any defect, the above provision shall apply with respect to the damaged goods, and the consignee shall accept those which are uninjured, and this segregation shall be made by distinct and separate pieces, and without dividing a particular object for that purpose, unless the consignee proves the impossibility of using them conveniently in this way.

The same precept shall apply to merchandise in bales or receptacles, with respect to the parcels which appear uninjured[3]).

366. Within the four and twenty hours following the receipt of the merchandise, a claim may be made against the carrier for damage found therein on opening the parcels, provided that the signs of the damage which occasions the claim are not known by the exterior part thereof, in which case the claim shall only be admitted when made at the time of the receipt[4]).

After the expiration of the stated times or payment of the carriage, no claim shall be admitted against the carrier with regard to the condition in which he delivered the carried goods[5]).

367. If doubts or disputes arise between the consignee and carrier about the condition in which the carried goods are found at the time of their delivery to the former, they shall be examined by experts appointed by the parties, and in case of disagreement, by a third, appointed by the judicial authority, and the result shall be stated in writing[6]); and if the interested persons do not assent to the expert deci-

wise would have been lost or deteriorated (art. 142 of the Railroad Police Regulation). Arts. 121 and 146 of the said Regulation entirely agree with the doctrine of the Code of Commerce, although the first exempts the undertaking from all liability when it has received the goods under sealed cover and delivers them to the sender or consignee with the seals intact, and the second likewise exempts it from all liability for deviation or loss which may occur when the undertaking has let the whole of the space of one of the wagons and has not interfered directly or indirectly with the loading and despatch of the merchandise carried therein.

[1]) It must be remembered, however, that, according to art. 148 of the Railroad Police Regulation, undertakings are not responsible for natural wastages, when they do not exceed ordinary proportions and cannot be attributed to fraud or carelessness.

[2]) With reference to this article, one has to understand art. 152 of the Railroad Police Regulation, which says as follows: If the owner of the packages or packets which have temporarily gone astray, has been compensated for their loss, the undertaking may, when they have been recovered, summon him to be present at the opening thereof, and when they have been delivered, may recover the amount which it paid, but paying damages for the delay. If it is proved by the examination of the goods that a fraud was committed by the owner in his declarations, the undertaking shall in its turn be entitled to compensation for damages, and must give notice of the fact to the Tribunals of Justice.

[3]) Art. 151 of the Railroad Police Regulation agrees with this last paragraph, but adds the following: Cases of accident and *vis major* are excepted and these have to be proved on the same day and in the same place where they occur, and not by certificates afterwards obtained, and after the commencement of the drafting of the documents, unless a disturbance of public order has impeded the authorities in the free exercise of their functions.

[4]) In order to make this right effective, it is necessary that a judicial examination of the carried goods should be made, as indicated in note 1, page 133.

[5]) This agrees with art. 158 of the Railroad Police Regulation.

[6]) This agrees with arts. 156 and 157 of the Railroad Police Regulation, which grant to the consignee the right of testing the weight of the merchandise delivered to him, he bearing the expenses, if it proves correct, or with only the difference allowed by art. 148 (see note 1, *supra*) and in the contrary case, the undertaking, and which determine the mode and manner of making the judicial examination of the parcels, when the consignee demands it.

men pericial y no transigieren sus diferencias, se procederá por dicha autoridad al depósito de las mercaderías en almacén seguro[1]), y usarán de su derecho como correspondiere.

368. El porteador deberá entregar sin demora ni entorpecimiento alguno al consignatario los efectos que hubiere recibido, por el solo hecho de estar designado en la carta de porte para recibirlos; y, de no hacerlo así, será responsable de los perjuicios que por ello se ocasionen.

369. No hallándose el consignatario en el domicilio indicado en la carta de porte, negándose al pago de los portes y gastos, ó rehusando recibir los efectos[2]), se proveerá su depósito por el juez municipal, donde no le hubiere de primera instancia, á disposición del cargador ó remitente, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, surtiendo este depósito todos los efectos de la entrega[3]).

370. Habiéndose fijado plazo para la entrega de los géneros, deberá hacerse dentro de él, y en su defecto pagará el porteador la indemnización pactada en la carta de porte, sin que el cargador ni el consignatario tengan derecho á otra cosa.

Si no hubiere indemnización pactada, y la tardanza excediere del tiempo prefijado en la carta de porte, quedará responsable el porteador de los perjuicios que haya podido causar la dilación[4]).

371. En los casos de retraso por culpa del porteador, á que se refieren los artículos precedentes, el consignatario podrá dejar por cuenta de aquél los efectos transportados, comunicándoselo por escrito antes de la llegada de los mismos al punto de su destino.

Cuando tuviere lugar este abandono, el porteador satisfará el total importe de los efectos como si se hubieren perdido ó extraviado.

No verificándose el abandono, la indemnización de daños y perjuicios por los retrasos no podrá exceder del precio corriente que los efectos transportados tendrían en el día y lugar en que debían entregarse; observándose esto mismo en todos los demás casos en que esta indemnización sea debida.

372. La valuación de los efectos que el porteador deba pagar en casos de pérdida ó extravío, se determinará con arreglo á lo declarado en la carta de porte, sin admitir al cargador pruebas sobre que, entre el género que en ella declaró, había objetos de mayor valor, y dinero metálico.

Las caballerías, carruajes, barcos, aparejos y todos los demás medios principales y accesorios de transporte, estarán especialmente obligados á favor del cargador, si bien en cuanto á los ferrocarriles dicha obligación quedará subordinada á lo que determinen las Leyes de concesión respecto á la propiedad, y á lo que este Código establece sobre la manera y forma de efectuar los embargos y retenciones contra las expresadas compañías[5]).

---

[1]) El depósito judicial á que se refiere este artículo habrá de hacerse en la forma indicada en la nota 1, pág. 124.

[2]) En relación con esta negativa dice el art. 155 del Regl. Pol. f. c. que la persona á quien se dirija una mercancia no podrá negarse á recibirla aun en día festivo, si se hallase en su domicilio cuando le sea presentada.

[3]) Este depósito ha de hacerse igualmente en la forma indicada en la nota 1, pág. 124.

[4]) Concuerda este artículo con los 137, 149 y 159 del Regl. Pol. f. c. — El 149 dice, en su segunda parte; que la empresa tiene igual responsabilidad que en el caso de falta de entrega en el plazo convenido, cuando rotulados los bultos con toda claridad y precisión, sin que puedan dar lugar á dudas, se hiciere su entrega á persona distinta de la que debe recibirlos. — En el caso de que la entrega haya de hacerse no en el domicilio del consignatario sino en la estación del ferrocarril dice el art. 125, que los efectos de cualquier clase que hayan de transportarse en los trenes de gran velocidad estarán á la disposición del consignatario dos horas después de la llegada del tren, y si el transporte se hiciere á pequeña velocidad á las veinticuatro horas de su llegada. — Para facilitar la comunicación de las poblaciones con las estaciones inmediatas dice el art. 153 que podrán las compañías establecer servicios ordinarios de transporte, quedando, sin embargo, en libertad los interesados de verificar el transporte empleando carruajes propios ó personas de su confianza, siempre que previamente lo adviertan los remitentes al hacer la entrega de los bultos. En tal caso la empresa habrá de dar aviso de la llegada de los trenes al consignatario en el término señalado en el art. 125. Transcurridas 48 horas desde el aviso, si el consignatario no acudiese á sacar las mercancias empezarán desde entonces á devengar derechos. — Por último el art. 150 á más de las responsabilidades civiles en que incurran las empresas por extravío ó averías de mercancias cuando uno ú otras sean debidos á abandono ó incuria de las mismas, y cuando los retrasos excedan de una cuarta parte, hasta el doblo del plazo reglamentario ó del convenido para la entrega, dice que serán penadas con multas.

[5]) Véase el art. 190 de este Cód.

sion and do not compromise their differences, the said authority shall proceed to the deposit of the merchandise in a safe warehouse[1]), and they shall make use of their respective rights.

368. A carrier must deliver the goods which he has received, without any delay or misdelivery, to the consignee, from the sole fact of his being designated in the bill of lading to receive them; and, if he fails to do so, he shall be liable for the damage occasioned thereby.

369. If the consignee is not to be found at the address indicated in the bill of lading, or refuses to pay the freight and expenses, or to receive the goods[2]), the deposit thereof at the disposal of the consignor or sender shall be ordered by the municipal judge, where there is no judge of first instance, without prejudice to a third person of superior right, this deposit having all the effects of delivery[3]).

370. When a time has been fixed for delivery of the goods, it must be effected within the same, and in default thereof, the carrier shall pay the compensation agreed in the bill of lading, and the consignor or consignee shall not be entitled to anything else.

If no compensation has been agreed, and the delay exceeds the time fixed by the bill of lading, the carrier shall be liable for the damage which the delay may have caused[4]).

371. In cases of delay, due to the *culpa* of the carrier, to which the preceding articles refer, the consignee may leave the carried goods to the account of the former, by communicating the fact to him in writing before the arrival thereof at the place of their destination.

When this abandonment takes place, the carrier shall pay the total value of the goods as if they had been lost or miscarried.

When there is no abandonment, the compensation for damage for delay may not exceed the current price of the carried goods on the day and at the place where they ought to be delivered; and the same shall be observed in all other cases in which compensation is due.

372. The valuation of the goods for which the carrier has to pay in the case of loss or miscarriage, shall be determined according to the declarations in the bill of lading, without the consignor being allowed to prove that among the goods which he declared therein there were objects of greater value and hard money.

Horses, vehicles, vessels, appurtenances and all other principal and accessory means of transport, shall be specifically bound in favour of the consignor, although, as regards railroads, the said obligation shall be subordinated to the provisions of the Laws of the concession with respect to the ownership and to the enactments of this Code on the manner and form of effecting arrests and detentions against the said companies[5]).

---

1) The judicial deposit, to which this art. refers, must be made as indicated in note 1, page 124.

2) In connection with this refusal, art. 155 of the Railroad Police Regulation says that the person to whom the merchandise is consigned cannot refuse to receive it even on a public holiday, if he is found at his address when it is presented.

3) This deposit must likewise be effected as indicated in note 1, page 124.

4) This art. agrees with arts. 137, 149 and 159 of the Railroad Police Regulation. Art. 149 says, in its second part, that the undertaking has the like liability on default of delivery in the time agreed, when the parcels are labelled with entire clearness and precision, so that there is no occasion for doubt, and delivery is made to a person different from the one who ought to receive them. When delivery is to be made, not at the address of the consignee, but at the railroad station, art. 125 says that goods of every class which are to be carried in trains of great speed shall be at the disposal of the consignee two hours after the arrival of the train, and if the carriage is to be at slow speed, four and twenty hours after their arrival. In order to facilitate communication between localities and the nearest stations, art. 153 says that the companies may establish ordinary transport services, the interested persons being nevertheless at liberty to effect the transport by using their own vehicles or persons whom they trust, provided that the senders previously give notice of the fact on delivering the parcels. In that case the undertaking must advise the consignee of the arrival of the trains, as stated in art. 125. After the expiration of 48 hours from this advice, if the consignee does not attend to remove the merchandise, charges shall then begin to be earned. Lastly, art. 150 says that the undertakings shall be punished by fines, besides the civil liabilities which they incur for miscarriage or damage to merchandise, when one or the other are due to their mislaying or carelessness and when the delivery of more than a fourth part is delayed beyond double the regulation or agreed time for delivery.

5) See art. 190 of this Code.

373. El porteador que hiciere la entrega de las mercaderías al consignatario en virtud de pactos ó servicios combinados con otros porteadores, asumirá las obligaciones de los que le hayan precedido en la conducción, salvo su derecho para repetir contra éstos, si no fuere él el responsable directo de la falta que ocasione la reclamación del cargador ó consignatario.

Asumirá igualmente el porteador que hiciere la entrega, todas las acciones y derechos de los que le hubieren precedido en la conducción.

El remitente y consignatario tendrán expedito su derecho contra el porteador que hubiere otorgado el contrato de transporte, ó contra los demás porteadores que hubieren recibido sin reserva los efectos transportados.

Las reservas hechas por los últimos no les librarán, sin embargo, de las responsabilidades en que hubieren incurrido por sus propios actos[1]).

374. Los consignatarios á quienes se hubiere hecho la remesa no podrán diferir el pago de los gastos y portes de los géneros que recibieren, después de transcurridas las veinticuatro horas siguientes á su entrega; y, en caso de retardo en este pago, podrá el porteador exigir la venta judicial de los géneros que condujo, en cantidad suficiente para cubrir el precio del transporte y los gastos que hubiese suplido[2]).

375. Los efectos porteados estarán especialmente obligados á la responsabilidad del precio del transporte y de los gastos y derechos causados por ellos durante su conducción ó hasta el momento de su entrega.

Este derecho especial prescribirá á los ocho días de haberse hecho la entrega, y una vez prescrito, el porteador no tendrá otra acción que la que le corresponda como acreedor ordinario.

376. La preferencia del porteador al pago de lo que se le deba por el transporte y gastos de los efectos entregados al consignatario, no se interrumpirá por la quiebra de éste, siempre que reclamare dentro de los ocho días expresados en el artículo precedente.

377. El porteador será responsable de todas las consecuencias á que pueda dar lugar su omisión en cumplir las formalidades prescritas por las Leyes y reglamentos de la Administración pública, en todo el curso del viaje y á su llegada al punto á donde fueren destinadas, salvo cuando su falta proviniese de haber sido inducido á error por falsedad del cargador en la declaración de las mercaderías.

Si el porteador hubiere procedido en virtud de orden formal del cargador ó consignatario de las mercaderías, ambos incurrirán en responsabilidad.

378. Los comisionistas de transportes estarán obligados á llevar un registro[3]) particular, con las formalidades que exige el art. 36, en el cual asentarán por orden

---

[1]) Acerca de este servicio combinado prescribe el Regl. Pol. f. c., en sus art. 115, 147 y 154, que al Gobierno, de acuerdo con las empresas, es á quien incumbe fijar las estaciones en las que deben expedirse billetes de viajeros y facturar mercancías con destino á todos los puntos enlazados con ferrocarriles, aun cuando estos pertenezcan á otras empresas, considerándose para los efectos del transporte como una sola línea, y siendo de perfecta aplicación en casos tales la Real Orden de 10 de enero de 1863, que para este efecto se considera como formando parte del Reglamento. (Esta Real Orden es la que determina los plazos máximos dentro de los que han de hacerse las empresas respectivas las entregas de las mercancías que han de recorrer sus líneas, tanto si enlazan de un modo directo como si tienen sus estaciones separadas aunque dentro de una misma localidad). — Cuando se trate de servicios combinados con otras empresas de transportes terrestres ó marítimos podrán las empresas convenirlos como quisieren; quedando autorizadas las de ferrocarriles para imponer la condición de que los precios serán los mismos cuando, yendo las mercancías dirigidas á los puntos que resulten favorecidos por la tarifa combinada, prefieran los remitentes ó consignatarios hacer por su cuenta los transportes por tierra ó por agua, empleando carruajes ó embarcaciones propias. — En caso de pérdida ó avería de los efectos transportados no podrá la empresa primeramente encargada de su conducción reclamar contra las que la sucedan en el transporte, si no prueba que se los entregó en buen estado. Para los efectos de esta contratación de transportes combinados se consideran todas las compañías de ferrocarriles ligadas entre sí sin solución de continuidad, como si fueran una sola.

[2]) Para hacer efectivo este derecho ha establecido la ley procesal un procedimiento especial de apremio en negocios de comercio que puede verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ. merc.» — Concuerda este art. del Cód. con el 141 del Regl. Pol. f. c. que concede á las empresas que no han dado lugar á reclamaciones por los transportes verificados, acción para el cobro de los gastos de transporte y custodia.

[3]) Este libro habrá de reintegrarse de igual modo que el de los comerciantes particulares. (Véase la pág. 96, nota 2) (Art. 155, L. del T.).

373. A carrier who effects delivery of merchandise to the consignee by virtue of agreements or services in combination with other carriers, shall assume the obligations of those who have preceded him in the transport, saving his right to claim over against them, if he is not the one directly responsible for the fault which occasions the claim of the consignor or consignee.

The carrier who has effected the delivery shall likewise assume all the rights of action and rights of those who have preceded him in the transport.

The sender and consignee shall have a direct right against the carrier who made the contract of carriage, or against the other carriers who received the carried goods without reserve.

Nevertheless, reservations made by the latter shall not free them from liabilities which they have incurred by their own acts[1]).

374. The consignees to whom a consignment has been made, cannot defer payment of the expenses and carriage of the goods which they have received, after the expiration of four and twenty hours following their delivery; and in case of delay in this payment, the carrier may demand the judicial sale of the goods which he carried, in an amount sufficient to cover the charge for the carriage and the expenses which he has met.[2])

375. The carried goods shall be specially bound for the liability for the charges for the carriage and the expenses and dues caused thereby during their carriage or until the moment of their delivery.

This special right shall be prescribed by the expiration of eight days from delivery being made, and when once it is prescribed, the carrier shall have no other right of action than that which belongs to him as an ordinary creditor.

376. The preferential right of the carrier to the payment of what is due to him for the carriage and expenses of the goods delivered to the consignee, shall not be broken off by the bankruptcy of the latter, provided that he makes his claim within the eight days stated in the preceding article.

377. A carrier shall be liable for all the consequences which may arise from his omission to comply with the formalities prescribed by the laws and regulations of the public Administration, in the whole course of the journey and at arrival at the place of destination, except when his fault proceeds from his having been led into error by the falsity of the consignor in the declaration of the merchandise.

If the carrier has acted under a formal order of the consignor or consignee of the merchandise, both shall incur the liability.

378. Transport agents shall be bound to keep a separate register[3]), with the formalities required by art. 36, in which they shall enter in progressive order of num-

[1]) With respect to this combined service, arts. 115, 147 and 154 of the Railroad Police Regulation provide that the Government, in agreement with the companies, has the duty of fixing the stations at which passenger tickets must be issued and merchandise booked to all places connected by railroads, even when they belong to other undertakings, they being considered for the purpose of transport as one line, the Royal Order of 10 January 1863 which for this purpose is considered as forming part of the Regulation, wholly applying to such cases. (This Royal Order is that which determines the maximum times within which the respective undertakings have to effect deliveries of the merchandise which is to pass over their lines, both when they directly connect and when they have separate stations within the same locality.) In the case of services in combination with other undertakings for land or sea carriage, the undertakings may make any agreements they please; the railroad undertakings being authorised to impose the condition that the charges shall be the same, when the merchandise is consigned to places which are favoured by the combined tariff, and the senders or consignees prefer to effect the carriage by land or water on their own account, employing their own vehicles or vessels. In case of loss or damage of carried goods the undertaking primarily charged with their carriage cannot claim over against those which succeed it in the transport, if it does not prove that it delivered them in good condition. For the purpose of this contracting for combined carriage, all the railroad companies are considered to be tied together without breach of continuity, as if they were one line.

[2]) In order to make this right effective, the law of procedure has established a special proceeding for execution in commercial matters, which may be seen in the study "Judicial Procedure in Mercantile civil matters". This art. of the Code agrees with art. 141 of the Railroad Police Regulation, which grants an action for the recovery of the expenses of carriage and custody to the undertakings which have not given occasion for claims for the transports effected.

[3]) This book must pay in the same way as that of private merchants. (see page 96 , note 2.) (Art. 155 of the Stamp Act.)

progresivo de números y fechas todos los efectos de cuyo transporte se encarguen, con expresión de las circunstancias exigidas en los artículos 350 y siguientes para las respectivas cartas de porte.

379. Las disposiciones contenidas desde el artículo 349 en adelante, se entenderán del mismo modo con los que, aun cuando no hicieren por sí mismos el transporte de los efectos de comercio, contrataren hacerlo por medio de otros, ya sea como asentistas de una operación particular y determinada, ó ya como comisionistas de transportes y conducciones.

En cualquiera de ambos casos quedarán subrogados en el lugar de los mismos porteadores, así en cuanto á las obligaciones y responsabilidad de éstos, como respecto á su derecho[1]).

[1]) Para completar esta larga serie de notas referentes al transporte y sobre todo teniendo en cuenta que el contrato de pasaje por vias terrestres no ha merecido la atención de los confeccionadores de nuestro Cód. de com. será forzoso que transcribamos los artículos correspondientes á ello que se contienen en el Regl. Pol. f. c. — He aquí los artículos en cuestión: — Art. **95.** El viajero que no presente el billete que le da derecho á ocupar un asiento en los trenes, ó que, teniéndolo de clase inferior, ocupe uno de la superior pagará en el primer caso el doble de su precio, según tarifa, y en el segundo dos veces la diferencia de su importe, á contar desde la estación en que verificó su entrada en los trenes, hasta el punto donde termine su viaje. — A no justificar el viajero el punto de su entrada en el tren, el doble precio se evaluará por la distancia recorrida desde el sitio en que haya tenido lugar la última comprobación de billetes. — **96.** Dado caso que un viajero pase más allá del punto indicado en su billete, abonará sólo el exceso que corresponda al aumento del trayecto recorrido, siempre que hubiera avisado al jefe del tren antes de salir de la estación en que deba terminar el valor de su billete. — Si no hiciese previamente esta advertencia, satisfará el doble del importe correspondiente al exceso de trayecto que hubiese recorrido sin billete. — **97.** El viajero que por falta de carruajes se viese en la necesidad de entrar en uno de clase superio· al designado en su billete, nada satisfará á la empresa por el exceso del precio. — Si, por el contrario, tuviese que ocupar una localidad de clase inferior, la empresa le devolverá el importe de su billete tan pronto como termine el viaje. — **98.** Se prohibe rigurosamente: — 1.° Entrar y salir en los coches por otra portezuela que no sea la que se abre sobre los andenes. — 2.° Trasladarse de uno á otro coche ó avanzar el cuerpo fuera de su caja durante la marcha. — 3.° Entrar ó salir en los coches, á no ser en las estaciones y cuando el tren se halle completamente parado; — 4.° Subir á los coches puesto ya el tren en movimiento; — 5.° Admitir en los coches más viajeros que los correspondientes á los asientos que contengan. — **99.** No se permitirá la entrada en los coches á ninguna persona en estado de embriaguez, ni á la que lleve consigo armas de fuego cargadas ó paquetes que por su forma, volumen ó mal olor, puedan molestar á los viajeros. — Tampoco será admitido en el andén ningún individuo con arma de fuego sin que antes se compruebe que se halla descargada. — **100.** Los viajeros tienen derecho á que los empleados de la empresa ó del Gobierno hagan salir del carruaje á todo el que por su falta de compostura, palabras ó acciones, ofenda el decoro de los demás, altere el orden establecido ó produzca disturbios ó disgustos, como también á los que fumen en el carruaje destinado á los no fumadores. — **101.** Reservarán siempre las empresas uno ó más compartimentos de primera clase en los trenes de viajeros para las señoras que, viajando solas, lo soliciten, y otro en el cual no se permita fumar. — Dichos compartimentos irán señalados con carteles en que se indique su objeto. — **102.** Se prohibe llevar perros en los carruajes de viajeros. — No obstante, la empresa podrá admitir en vagones especiales á los que no quieran separarse de sus perros, siempre que éstos lleven bozales. — **103.** Si por algún viajero se infringiesen las disposiciones de este reglamento, el agente de la Inspección administrativa, ó en su defecto, ya los jefes de las estaciones, ya los de los trenes, le dirigirán las amonestaciones oportunas, instruyendo la correspondiente sumaria en averiguación de los hechos, cuando así lo exija su gravedad. — **104.** Para que los viajeros puedan consignar sus reclamaciones, no sólo contra la empresa, sino contra sus agentes y empleados, habrá en cada estación un registro que será visado mensualmente por los encargados de la Inspección administrativa y mercantil. — Y respecto á los derechos que concede el Regl. á los viajeros por causa de los retrasos de los trenes hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 150 con la adición introducida en el mismo por el Real Decreto de 1.° de mayo de 1901. — El art. 150 en la parte relativa á los viajeros dice así: El retraso injustificado de los trenes de viajeros será siempre penado con arreglo al art. 12 de la Ley de 23 de noviembre de 1877 cuando exceda de 10 minutos por cada 100 kilómetros de recorrido para los expresos y 20 minutos en igual trayecto para los mixtos. — Y la adición del Real Decreto citado es como sigue: — Para los efectos del párrafo anterior, los trenes mixtos serán considerados como correos cuando conduzcan la correspondencia pública, si en la línea respectiva no hay otro tren denominado especialmente correo; pero no perderán su carácter de mixtos para todos los efectos reglamentarios, aunque conduzcan también correspondencia si no hubiese ningún otro tren de viajeros ni diario de mercancías que recorra el mismo trayecto que ellos. — Los retrasos se apreciarán únicamente al final del itinerario del tren cuando la longitud total del recorrido no pase de 200 kilómetros. Si excediese de dicha cifra, se fraccionará en trayectos parciales, cuya extensión fijará en cada caso la Dirección general de Obras públicas, con audiencia de las divisiones de ferrocarriles y de las compañías, siendo penables también los retrasos injustificados en la hora de llegada á cada uno de los puntos de subdivisión cuando exceda de los límites arriba indicados,

bers and dates, all the goods the transport whereof is entrusted to them, expressing the particulars required by No. 350 and the following articles for the corresponding bills of lading.

379. The provisions contained from article 349 onwards shall be understood in the same way as regards those who, when they do not themselves effect the transport of commercial goods, contract to effect it by means of others, whether as contractors for a particular and certain transaction, or as agents for transport and carriage.

In either of the two cases they shall be subrogated to the rights of the actual carriers, both as regards the obligations and liability of the latter, and with respect to their rights[1]).

[1]) In order to complete this long series of notes referring to transport and above all bearing in mind that the contract of passage by land ways has not deserved the attention of the compilers of our Code of Commerce, it will be necessary for us to transcribe the articles corresponding thereto which are contained in the Railroad Police Regulation. Here follow the articles in question: Art. **95.** A traveller who does not produce the ticket which gives him the right to occupy a seat in the trains, or who, having a ticket for an inferior class, occupies one of a superior class, shall pay in the first case double its price according to the tariff, and in the second case, twice the difference in their value, reckoned from the place where he entered the train to the place where his journey terminates. If the traveller does not prove the place of his entry on the train, the double fare shall be estimated by the distance traversed from the place where the last inspection of tickets took place. **96.** If a traveller passes beyond the place indicated in his ticket, he shall only pay the excess which corresponds to the increase of the journey traversed, provided that he has advised the chief guard of the train before leaving the station where the value of his ticket ought to terminate. — If he does not give this previous notice, he shall pay double the amount which corresponds to the excess of the journey which he has traversed without a ticket. — **97.** A traveller who, from want of carriages, finds himself in the necessity of entering one of a class superior to that stated on his ticket, shall pay nothing to the undertaking for excess fare. — If, on the contrary, he has to occupy a place of an inferior class, the undertaking shall return him the value of his ticket as soon as the journey terminates. — **98.** It is strictly forbidden: 1. To enter and leave the coaches by a door which is not one which opens on the platforms. — 2. To move from one coach to another or to lean the body out of the coach while the train is moving. — 3. To enter or leave the coaches, except at the stations and when the train has completely stopped. — 4. To mount the coaches when the train is already in motion. — 5. To allow more travellers in the coaches than those corresponding to the seats which they contain. — **99.** Entry into coaches shall not be permitted to any person in a state of drunkenness, or to one who carries with him loaded fire-arms or parcels which by their shape, size or bad smell may annoy the travellers. — Nor shall any person be admitted on a platform with a fire-arm until it is proved to be unloaded. — **100.** Travellers are entitled that the employés of the company or the Government should cause everyone to leave the carriage who, by his want of cleanliness, by his words or actions, offends the decorum of the others, alters the established order or causes disturbances or quarrels, as well as those who smoke in a carriage intended for non-smokers. — **101.** The companies shall always reserve one or more first class compartments in passenger trains for ladies who are travelling alone and apply therefor, and another in which smoking is not allowed. — The said compartments shall be marked by labels which indicate their object. — **102.** It is prohibited to take dogs in the passenger carriages. — Nevertheless, the company may admit in special coaches those who do not wish to be separated from their dogs, provided that the latter are wearing muzzles. — **103.** If the provisions of this Regulation are infringed by any traveller, the agent of the administrative Inspection, or in default, either the chiefs of the stations or those of the trains, shall give suitable warnings, and draw up the corresponding summary in proof of the facts, if the gravity thereof so requires. — **104.** In order that travellers may make their complaints, not only against the company but against their agents and employes there shall be in each station a register which shall be inspected monthly by the persons charged with the administrative and mercantile Inspection. — And with regard to the rights which the Regulation grants to travellers on the ground of the delay of the trains, the provision of art. 150 with the addition introduced therein by the Royal Decree of 1 May 1901 must be borne in mind. — Art. 150 says in the part which refers to travellers: Unjustified delay of passenger trains shall always be punished according to art. 12 of the Law of 23 November 1877 when it exceeds 10 minutes for each 100 kilometres traversed by expresses and 20 minutes for the same distance traversed by mixed trains. — And the addition made by the said Royal Decree is as follows: For the purposes of the preceding paragraph, mixed trains shall be considered as mail trains when they convey public correspondence, if there is no other train on the line which is specially called a mail train; but they shall not lose their character of mixed trains for all the purposes of the Regulation, although they also carry correspondence, if there is no other passenger train nor day goods train which travels the same way as they do. — Delays shall only be reckoned at the end of the train journey when the total length of the way traversed does not exceed 200 kilometres. — If it exceeds the said figure, it shall be divided into partial distances, the length whereof shall in each case be fixed by the general Direction of Public Works, after hearing the railroad divisions and the companies; unjustified delay in the hour of arrival at each one of the points

Título VIII. De los contratos de seguro.

Sección primera. Del contrato de seguro en general.

380. Será mercantil el contrato de seguro, si fuere comerciante el asegurador, y el contrato, á prima fija; ó sea, cuando el asegurado satisfaga una cuota única ó constante, como precio ó retribución del seguro.

381. Será nulo todo contrato de seguro: 1.° Por la mala fe probada de alguna de las partes al tiempo de celebrarse el contrato; — 2.° Por la inexacta declaración del asegurado, aun hecha de buena fe, siempre que pueda influir en la estimación de los riesgos; — 3.° Por la omisión ú ocultación, por el asegurado, de hechos ó circunstancias que hubieran podido influir en la celebración del contrato.

382. El contrato de seguro se consignará por escrito, en póliza ó en otro documento público ó privado suscrito por los contratantes.

383. La póliza del contrato de seguro deberá contener: 1.° Los nombres del asegurador y asegurado; — 2.° El concepto en el cual se asegura; — 3.° La designación y situación de los objetos asegurados, y las indicaciones que sean necesarias para determinar la naturaleza de los riesgos; — 4.° La suma en que se valúen los objetos del seguro, descomponiéndola en sumas parciales, según las diferentes clases de los objetos; — 5.° La cuota ó prima que se obligue á satisfacer el asegurado; la forma y el modo del pago, y el lugar en que deba verificarse; — 6.° La duración del seguro; — 7.° El día y la hora desde que comienzan los efectos del contrato; — 8.° Los seguros ya existentes sobre los mismos objetos; — 9.° Los demás pactos en que hubieren convenido los contratantes.

384. Las novaciones que se hagan en el contrato durante el término del seguro, aumentando los objetos asegurados, extendiendo el seguro á nuevos riesgos, reduciendo éstos ó la cantidad asegurada, ó introduciendo otra cualquiera modificación esencial, se consignarán precisamente en la póliza del seguro.

385. El contrato de seguro se regirá por los pactos lícitos consignados en cada póliza ó documento, y, en su defecto, por las reglas contenidas en este título.

---

tomando para origen de recorrido la hora en que hubiera salido el tren del punto de subdivisión inmediatamente anterior al que se considere. — La acumulación de dos ó más retrasos parciales en la marcha de un mismo tren, no dará lugar á imposición de más de una multa; pero se considerará circunstancia agravante para graduar la cuantía ó la pena. — En los puntos de empalme de itinerarios se fijará para la *espera* de trenes en combinación un cierto plazo á más del tiempo señalado en los cuadros de marcha. — Transcurrido el tiempo de parada indicado en los itinerarios con más la prórroga ó plazo de espera, se dará la salida al tren derivado; pero éste deberá salir á la hora reglamentaria en el caso de que se sepa con certeza en la estación que no podrá llegar á ella el otro tren dentro del plazo de espera. — A la llegada al empalme del tren que ha sufrido el retraso, será potestativo en la compañía causante de aquél, disponer ó no en el término de tres horas un tren especial para conducir los viajeros á su destino. — Transcurrido dicho plazo sin haber puesto tren especial á disposición de los viajeros, podrán éstos optar por una de tres cosas: primera, rescisión del contrato de transporte, con devolución en el acto por la compañía del importe total de los billetes de que sean portadores; segunda, la continuación del viaje en el primer tren regular, salvo si fuere expreso, que salga de la estación en la dirección conveniente, siendo de cuenta de la compañía costearles albergue y comida, de la clase y precios de tarifa establecidos en las fondas de la línea, durante las paradas forzosas que resulten, y en este caso, á los viajeros que hubieren de ocupar asientos de clase inferior á la designada en sus billetes, se les devolverá el importe correspondiente al trayecto que recorran hasta el término del viaje, y los que tengan que ocupar asiento de clase superior no abonarán la diferencia; tercera, continuación del viaje en las condiciones ordinarias, conservando íntegros los derechos que puedan corresponderles con arreglo á las leyes para entablar contra la compañía las reclamaciones que estimaren procedentes. — La Dirección general de Obras públicas, á propuesta de las Divisiones de ferrocarriles, y oyendo á las empresas, determinará cuáles son los trenes que deben ser considerados como únicos en una extensión determinada, bien pertenezcan á una sola ó á varias Compañías, y desígnense ó no con el mismo número en los itinerarios correspondientes á diversos trayectos del recorrido total. — La misma Dirección, con iguales trámites, fijará también los puntos que han de considerarse como de enlace ó empalme de itinerarios, así como los plazos que deban esperarse en ellos los trenes combinados. — Las multas á que se refiere el art. 12 de la Ley de 23 de noviembre de 1877 citado en el transcrito art. 150 del Regl. varían entre un mínimum de 250 pesetas y un máximum de 2500.

Title VIII. Insurance contracts.

First Section. The contract of insurance in general.

380. A contract of insurance shall be mercantile, if the insurer is a merchant, and the contract is at a fixed premium; whether the assured pays a single or a recurring sum as the price or consideration for the insurance.

381. A contract of insurance shall be void: 1. By the proved bad faith of any of the parties at the time of the contract being made; — 2. By the incorrect declaration by the assured, even when made in good faith, provided that it may influence the estimation of the risks; — 3. By the omission or concealment, on the part of the assured, of facts or circumstances which might have influenced the making of the contract.

382. The contract of insurance shall be set out in writing, either in a policy or other notarial or private document, signed by the contractors.

383. The policy of the contract of insurance must contain: 1. The names of the insurer and assured; — 2. The object with which the insurance is made; — 3. The designation and situation of the insured subject-matter, and the indications which are necessary to determine the nature of the risks; — 4. The sum at which the subject-matter of the insurance is valued, resolving it into separate sums, according to the different kinds of subject-matter; — 5. The sum or premium which the assured is bound to pay; the form and manner of the payment, and the place where it has to be made; — 6. The duration of the insurance; — 7. The day and hour from which the effects of the contract commence; — 8. The already existing insurances on the same subject-matter; — 9. The other bargains on which the contractors have agreed.

384. Changes which are made in the contract during the term of the insurance, increasing the insured subject-matter, extending the insurance to new risks, reducing the risks or the amount insured, or introducing any other essential alteration, shall be exactly set out in the insurance policy.

385. The contract of insurance shall be governed by the lawful bargains set out in each policy or document, and in default thereof, by the rules contained in this Title.

---

of the subdivision being punishable, when it exceeds the limits above indicated, taking for the beginning of the journey the hour at which the train left the place of subdivision immediately before that which is under consideration. — The accumulation of two or more partial delays in the progress of the same train, shall not occasion the imposition of more than one fine; but it shall be considered an aggravating circumstance for the purpose graduating the amount or the punishment. — At the places of connection in the journeys, a certain waiting time beyond that stated in the time-tables shall be fixed for trains running in connection. — After the time for waiting indicated in the time-tables has expired, with the extended time for waiting in addition, the starting train shall be ordered to leave; but this must leave at the regulation hour when it is known with certainty in the station that the other train cannot arrive there within the waiting time. — On the arrival of the delayed train at the junction, it shall be in the power of the company causing the delay, to arrange or not a special train to convey the passengers to their destination within the space of three hours. — When the said time has expired without a special train having been placed at the disposal of the travellers, the latter may choose one of three things: first, rescission of the contract of carriage, with prompt return by the company of the whole value of the tickets whereof they are holders; second, continuation of the journey in the first regular train, other than an express, which leaves the station in the proper direction, it being at the cost of the company to provide them lodging and food during the enforced delays which result of the kind and at the tariff prices established in the hotels of the line, and in this case, if the passengers have to occupy seats of a class inferior to that stated on their tickets, the amount corresponding to the way traversed up to the end of the journey shall be returned to them, and those who have to occupy a seat of a superior class shall not pay the difference; third, continuation of the journey in ordinary conditions, saving the rights which may belong to them according to the laws of bringing against the companies the claims which they consider available. — The general Direction of Public Works, on the proposition of the Railroad Divisions, and on hearing the companies, shall determine which are the trains which are to be considered as the only trains in a determined extension, whether they belong to a single company or several companies, and whether they should be designated or not with the same number in the itineraries which belong to the different lines of the total traversed. — The same Direction, following the same procedure, shall also fix the points which are to be considered as those of crossing or connection of the itineraries, as well as the times which the trains in connection are to wait therein. — The fines referred to in art. 12 of the Law of 23 November 1877, cited in the transcribed art. 150 of the Regulation, range between a minimum of 250 pesetas and a maximum of 2500.

Sección segunda. Del seguro contra incendios.[1])

386. Podrá ser materia del contrato de seguro contra incendios todo objeto mueble ó inmueble que pueda ser destruído ó deteriorado por el fuego.

387. Quedarán exceptuados de esta regla los títulos ó documentos mercantiles, los del Estado ó particulares, billetes de Banco, acciones y obligaciones de compañías, piedras y metales preciosos, amonedados ó en pasta, y objetos artísticos, á no ser que expresamente se pactare lo contrario, determinando en la póliza el valor y circunstancias de dichos objetos.

388. En el contrato de seguros contra incendios, para que el asegurador quede obligado, deberá haber percibido la prima única convenida ó las parciales en los plazos que se hubiesen fijado.

La prima del seguro se pagará anticipadamente, y por el pago la hará suya el asegurador, sea cualquiera la duración del seguro.

389. Si el asegurado demorase el pago de la prima, el asegurador podrá rescindir el contrato dentro de las primeras cuarenta y ocho horas, comunicando inmediatamente su resolución al asegurado.

Si no hiciere uso de este derecho, se entenderá subsistente el contrato, y tendrá acción ejecutiva para exigir el pago de la prima ó primas vencidas, sin otro requisito que el reconocimiento de las firmas de la póliza.

390. Las sumas en que se valúen los efectos del seguro, las primas satisfechas por el asegurado, las designaciones y las valuaciones contenidas en la póliza, no constituirán por sí solas prueba de la existencia de los efectos asegurados en el momento y en el local en que ocurra el incendio.

391. La sustitución ó cambio de los objetos asegurados, por otros de distinto género ó especie no comprendidos en el seguro, anulará el contrato, á contar desde el momento en que se hizo la sustitución.

392. La alteración ó la transformación de los objetos asegurados, por caso fortuito ó por hecho de tercera persona, darán derecho á cualquiera de las partes para rescindir el contrato.

393. El seguro contra incendios comprenderá la reparación ó indemnización de todos los daños y pérdidas materiales causados por la acción directa del fuego y por las consecuencias inevitables del incendio, y en particular: 1.° Los gastos que ocasione al asegurado el transporte de los efectos con el fin de salvarlos; — 2.° Los menoscabos que sufran estos mismos objetos salvados; — 3.° Los daños que ocasionen las medidas adoptadas por la autoridad en lo que sea objeto del seguro, para cortar ó extinguir el incendio.

394. En los seguros contra accidentes meteorológicos, explosiones de gas ó de aparatos de vapor, el asegurador sólo responderá de las consecuencias del incendio que aquellos accidentes originen, salvo pacto en contrario.

---

[1]) Las compañías ó empresas aseguradoras contra incendios satisfarán como impuesto anual de timbre correspondiente á los contratos que celebren, tres céntimos por cada 1000 pesetas de capital asegurado si el seguro es á prima, y dos céntimos si el seguro fuere mutuo, entendiéndose que este impuesto habrá de satisfacerse igualmente por los seguros que se contraten en el extranjero siempre que tengan por objeto bienes inmuebles, muebles ó valores situados en España, y que las sociedades extranjeras de seguros contra incendios deberán satisfacer el mismo impuesto por los contratos que celebren en España. — Toda ocultación de seguro contratado ó de cantidad, según el caso, será castigada con una multa de 100 á 2000 pesetas sin perjuicio de que la Administración pública pueda con auxilio de la autoridad judicial proceder á la investigación de la contabilidad de la empresa y á la liquidación y cobranza de lo que resultare no haberse satisfecho con arreglo á ley. — Las empresas aseguradoras llevarán á este efecto por cada clase de seguros un registro de inscripción de pólizas por orden correlativo de numeración, en la forma que se disponga por el Reglamento de la L. del T. (29 April 1909) como auxiliares de su contabilidad, reintegrados á razón de 5 céntimos por folio, cuyo reintegro se verificará en papel de pagos al Estado, debiendo ser presentados á la respectiva Delegación de Hacienda para que los autorice y rubrique á la vez que suscriba la correspondiente nota en el papel de pagos al Estado. — Por último, la ley hace responsables del pago del timbre á los directores y gerentes de las empresas, sin perjuicio de que perciban su importe de los interesados en los seguros (Art. 176 á 179 y 227 de la L. del T.). — Por virtud de lo dispuesto en la Ley de 27 de marzo de 1900, con arreglo á la tarifa 3.ª de la misma pagarán, en concepto de impuesto sobre utilidades, las compañías de seguros de incendios nacionales y extranjeras el 2% de las primas de los seguros efectuados ó que efectúen.

Second Section. Fire insurance.[1])

386. Every moveable or immoveable object which can be destroyed or deteriorated by fire, may be the subject-matter of the contract of insurance.

387. Mercantile securities or documents, those of the State or individuals, banknotes, shares and bonds of companies, precious stones and metals, coined or bullion, and objects of art shall be excepted from this rule, unless it is expressly agreed to the contrary, and the value and particulars of the said objects are fixed in the policy.

388. In order that the insurer may be bound by a contract of fire insurance, he must have received the single agreed premium or the successive premiums at the times which have been fixed.

The insurance premium shall be paid in advance, and by the payment he shall become owner thereof, whatever be the duration of the insurance.

389. If the assured delays the payment of the premium, the insurer may rescind the contract within the first forty eight hours, by immediately communicating his decision to the assured.

If he does not avail himself of this right, the contract shall be understood to be subsisting, and he shall have a right of executive action for demanding payment of the premium or premiums due, with no other requisite than the judicial verification of the signatures of the policy.

390. The sums at which the insured effects are valued, the premiums paid by the assured, the designations and valuations contained in the policy, shall not of themselves only constitute proof of the existence of the insured effects at the moment and place where the fire occurs.

391. Substitution or change of the insured objects, for others of a different genus or species, not included in the insurance, shall annul the contract, reckoned from the moment when the substitution was effected.

392. Alteration or transformation of the insured objects, by fortuitous event or by act of a third person, shall entitle any of the parties to rescind the contract.

393. The fire insurance shall include the repair or indemnity of all the material damages and losses caused by the direct action of the fire and by the unavoidable consequences of the burning, and in particular: 1. The expenses occasioned to the assured by the removal of the effects for the purpose of salving them; — 2. The deterioration suffered by the same salved objects; — 3. The damage to the subject-matter of the insurance occasioned by the measures adopted by authority, in order to limit or extinguish the burning.

394. In assurances against meteorological accidents, explosions of gas or of steam apparatus, the insurer shall only be liable for the consequences of the burning which those accidents originate, saving an agreement to the contrary.

---

[1]) Companies or undertakings which insure against fire must pay as annual stamp duty on the contracts made by them, three céntimos for every 1000 pesetas of principal money insured, if the insurance is for a premium, and two céntimos if the insurance is mutual, it being understood that this duty must be paid likewise for the insurances which they contract abroad, provided that they have as their subject-matter immoveables, moveables or valuables situated in Spain, and that foreign societies for insurance against fire must pay the same duty on contracts which they make in Spain. Every concealment of a contracted insurance or of the amount, as may be, will be punished by a fine of 100 to 1000 pesetas without prejudice to the power of the Public Administration, with the aid of the judicial authority, proceeding to examine the accounts of the undertaking and to the settlement and recovery of what proves not to have been paid according to the law. For this purpose, insurance undertakings shall keep a register for the inscription of policies for each class of insurance, by correlative order of enumeration, in the form provided by the Regulation of the Stamp Act (29 April 1909) as aids to the account-keeping, paid at the rate of 5 céntimos per folio, which payment must be made on the paper for payments to the State, and must be produced to the proper Delegation of the Exchequer in order that they may be authenticated and rubricated at the same time that the corresponding note is signed on the paper for payments to the State. Lastly, the law makes the directors and managers of the undertakings responsible for payment of the stamp, without prejudice to their recovering the amount thereof from the persons interested in the insurances (Art. 176 to 179 and 227 of the Stamp Act). By virtue of the provision of the Law of 27 March 1900, tariff 3, both national and foreign fire insurance companies must pay as income tax, 2% of the premiums of the insurances effected or which may be effected.

395. El seguro contra incendios no comprenderá, salvo pacto en contrario, los perjuicios que puedan seguirse al asegurado por suspensión de trabajos, paralización de industria, suspensión de rendimientos de la finca incendiada, ó cualesquiera otras causas análogas que ocasionen pérdidas ó quebrantos.

396. El asegurador garantizará al asegurado contra los efectos del incendio, bien se origine de caso fortuito, bien de malquerencia de extraños, ó de negligencia propia ó de las personas de las cuales responda civilmente.

El asegurador no responderá de los incendios ocasionados por el delito del asegurado, ni por fuerza militar en caso de guerra, ni de los que se causen en tumultos populares, así como de los producidos por erupciones, volcanes y temblores de tierra.

397. La garantía del asegurador sólo se extenderá á los objetos asegurados y en el sitio en que lo fueron, y en ningún caso excederá su responsabilidad de la suma en que se valuaron los objetos ó se estimaron los riesgos.

398. El asegurado deberá dar cuenta al asegurador: 1.° De todos los seguros anterior, simultánea ó posteriormente celebrados; — 2.° De las modificaciones que hayan sufrido los seguros que se expresaron en la póliza; — 3.° De los cambios y alteraciones en calidad que hayan sufrido los objetos asegurados y que aumenten los riesgos.

399. Los efectos asegurados por todo su valor no podrán serlo por segunda vez mientras subsista el primer seguro, excepto el caso en que los nuevos aseguradores garanticen ó afiancen el cumplimiento del contrato celebrado con el primer asegurador.

400. Si en diferentes contratos un mismo objeto hubiere sido asegurado por una parte alícuota de su valor, los aseguradores contribuirán á la indemnización á prorrata de las sumas que aseguraron.

El asegurador podrá ceder á otros aseguradores parte ó partes del seguro, pero quedando obligado directa ó exclusivamente con el asegurado.

En los casos de cesión de parte del seguro, ó de reaseguro, los cesionarios que reciban la parte proporcional de la prima quedarán obligados, respecto al primer asegurador, á concurrir en igual proporción á la indemnización, asumiendo la responsabilidad de los arreglos, transacciones y pactos en que convinieren el asegurado y el principal ó primer asegurador.

401. Por muerte, liquidación ó quiebra del asegurado, y venta ó traspaso de los efectos, no se anulará el seguro, si fuere inmueble el objeto asegurado.

Por muerte, liquidación ó quiebra del asegurado, y venta ó traspaso de los efectos, si el objeto asegurado fuere mueble, fábrica ó tienda, el asegurador podrá rescindir el contrato.

En caso de rescisión, el asegurador deberá hacerlo saber al asegurado ó á sus representantes en el plazo improrrogable de quince días.

402. Si el asegurado ó su representante no pusieren en conocimiento del asegurador cualquiera de los hechos enumerados en el párrafo segundo del artículo anterior, dentro del plazo de quince días, el contrato se tendrá por nulo desde la fecha en que aquellos hechos hubieren ocurrido.

403. Los bienes muebles estarán afectos al pago de la prima del seguro con preferencia á cualesquiera otros créditos vencidos.

En cuanto á los inmuebles, se estará á lo que disponga la Ley Hipotecaria[1]).

404. En caso de siniestro, el asegurado deberá participarlo inmeditamente al asegurador, prestando asimismo ante el juez municipal una declaración comprensiva de los objetos existentes al tiempo del siniestro, y de los efectos salvados, así como del importe de las pérdidas sufridas, según su estimación.

---

[1]) La Ley Hipotecaria en su art. 168, apartado 6.° establece una hipoteca legal á favor de los aseguradores sobre los bienes asegurados por los premios del seguro de dos años; y si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubieren hecho. Y el art. 220 concede al asegurador la preferencia de su crédito sobre los demás por los premios de los dos años ó los últimos dividendos que no se hubieren devengado. — Devengados y no satisfechos los premios de dos ó más años ó los últimos dividendos (dos ó más) conceden los art. 219 y 221 al asegurador de bienes inmuebles el derecho de poder exigir la constitución de una hipoteca especial sobre dichos bienes por toda la cantidad que importaren dichos premios ó dividendos, cuya inscripción no surtirá efecto sino desde su fecha.

395. Saving an agreement to the contrary, a fire insurance shall not include damage which is suffered by the insured by suspension of work, stoppage of industry, suspension of income from the burnt property, or any other like causes which occasion loss.

396. The insurer shall guarantee the insured against the effects of the fire, whether it originates from a fortuitous event, or from the ill will of strangers, or his own negligence or that of persons for whom he is civilly responsible.

The insurer shall not be liable for fires occasioned by the crime of the assured, nor by military force in case of war, nor for those which are caused in popular tumults, nor for those produced by eruptions, volcanoes and earthquakes.

397. The guarantee of the insurer shall only extend to the objects insured and at the place where they were, and in no case shall his liability exceed the sum at which the subject-matter was valued or the risks estimated.

398. The assured must give account to the insurer: 1. Of all insurances whether made previously, simultaneously or subsequently; — 2. Of the alterations which have occurred in the insurances which were stated in the policy; — 3. Of the changes and alterations in quality which have been suffered by the insured subject-matter and which increase the risks.

399. Effects insured for their whole value cannot be insured a second time during the subsistence of the first insurance, except when the new insurers guarantee or secure the performance of the contract made with the first insurer.

400. If the same subject-matter has been insured in different contracts for portions of its value, the insurers shall contribute to the indemnity in proportion to the sums which they insured.

An insurer may assign to other insurers a part or parts of the insurance, but shall remain directly or exclusively bound as regards the assured.

In cases of assignment of part of the insurance or of reinsurance, the assignees who receive the proportional part of the premium shall as regard the original insurer, be bound to join in the indemnity in like proportion, and shall assume the responsibility of the arrangements, compromises and bargains made by the assured and the principal or original insurer.

401. If the subject-matter insured is an immoveable, the insurance shall not be annulled by the death, liquidation or bankruptcy of the assured, or sale or transfer of the effects.

If the subject-matter insured is a moveable, factory or shop, the insurer may rescind the contract on the death, liquidation or bankruptcy of the assured or by sale or transfer of the effects.

In case of rescission, the insurer must make it known to the assured or to his representatives within the space of fifteen days, a term which cannot be extended.

402. If the assured or his representative does not bring any one of the facts enumerated in the second paragraph of the preceding article to the knowledge of the insurer within the space of fifteen days, the contract shall be held void from the date on which those facts occurred.

403. Moveable property shall be affected to the payment of the insurance premium in preference to any other due debts.

With regard to immoveables, the provisions of the Law of Mortgage[1]) shall govern.

404. In case of casualty, the assured must immediately give notice to the insurer, and shall likewise lay before the municipal judge a declaration comprising the subject-matter as existing at the time of the casualty, and of the salved effects, as well as the amount, according to his estimation, of the losses suffered.

[1]) The Law of Mortgage in its art. 168, paragraph 6, enacts a legal mortgage in favour of insurers over the insured property for the premiums of insurance of two years; and if the insurance is mutual, for the two last contributions called. And art. 220 grants the insurer preference for his debt over other debts, for the premiums of two years or the last contributions which have not become due. If the premiums of two or more years or the last contributions (two or more) are due and not paid, arts 219 and 221 grant to the insurer of immoveable property the right to demand the formation of a special mortgage over the property for the full amount of the said premiums or contributions, the inscription whereof will only take effect from its date.

405. Al asegurado incumbe justificar el daño sufrido, probando la preexistencia de los objetos antes del incendio.

406. La valuación de los daños causados por el incendio, se fijará por peritos en la forma establecida en la póliza, por convenio que celebren las partes, ó, en su defecto, con arreglo á lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil[1]).

407. Los peritos decidirán: 1.° Sobre las causas del incendio; — 2.° Sobre el valor real de los objetos asegurados, el día del incendio, antes de que éste hubiere tenido lugar; — 3.° Sobre el valor de los mismos objetos después del siniestro, y sobre todo lo demás que se someta á su juicio.

408. Si el valor de las pérdidas sufridas excediere de la cantidad asegurada, el asegurado será reputado su propio asegurador por este exceso, y sufragará la parte alícuota que le corresponda de pérdidas y gastos.

409. El asegurador estará obligado á satisfacer la indemnización fijada por los peritos, en los diez días siguientes á su decisión, una vez consentida.

En caso de mora, el asegurador abonará al asegurado el interés legal de la cantidad debida, desde el vencimiento del término expresado.

410. La decisión de los peritos será título ejecutivo contra al asegurador, si fuere dada ante notario; y si no lo fuere, previo reconocimiento y confesión judicial de los peritos, de sus firmas y de la verdad del documento.

411. El asegurador optará, en los diez días fijados en el art. 409, entre indemnizar el siniestro ó reparar, reedificar ó reemplazar, según su género ó especie, en todo ó en parte, los objetos asegurados, y destruídos por el incendio, si convinieren en ello.

412. El asegurador podrá adquirir para sí los efectos salvados, siempre que abone al asegurado el valor real, con sujeción á la tasación de que trata el caso 2.° del art. 407.

413. El asegurador, pagada la indemnización, se subrogará en los derechos y acciones del asegurado, contra todos los autores ó responsables del incendio, por cualquier carácter y título que sea.

414. El asegurador, después del siniestro, podrá rescindir el contrato para accidentes ulteriores, así como cualquier otro que hubiere hecho con el mismo asegurado, avisando á éste con quince días de anticipación y devolviéndole la parte de prima correspondiente al plazo no transcurrido.

415. Los gastos que ocasionen la tasación pericial y la liquidación de la indemnización, serán de cuenta y cargo, por mitad, del asegurado y del asegurador; pero si hubiere exageración manifiesta del daño por parte del asegurado, éste será el único responsable de ellos.

Sección tercera. Del seguro sobre la vida.[2])

416. El seguro sobre la vida comprenderá todas las combinaciones que puedan hacerse, pactando entregas de primas ó entregas de capital á cambio de disfrute de renta vitalicia ó hasta cierta edad, ó percibo de capitales, al fallecimiento de persona cierta, en favor del asegurado, su causahabiente ó una tercera persona, y cualquiera otra combinación semejante ó análoga.

417. La póliza del seguro sobre la vida contendrá, además de los requisitos que exige el artículo 383, los siguientes: 1.° Expresión de la cantidad que se asegura, en capital ó renta; — 2.° Expresión de las disminuciones ó aumentos del capital ó renta asegurados, y de las fechas desde las cuales deberán contarse aquellos aumentos ó disminuciones.

418. Podrá celebrarse este contrato de seguro por la vida de un individuo ó de varios, sin exclusión de edad, condiciones, sexo ó estado de salud.

[1]) Véase para el nombramiento de peritos y su modo de funcionar nuestro estudio Del proc. jud. en las cuest. civ. merc.

[2]) Todo lo dicho en la nota anterior respecto á las empresas de seguros sobre incendios tiene perfecta aplicación á las de seguros sobre la vida, sin más que tener en cuenta que por razón del impuesto anual del timbre, en vez de los tres ó dos céntimos que por cada mil pesetas de capital asegurado han de satisfacer aquellas, satisfarán estas dos pesetas por cada mil de las cantidades recaudadas por seguros de vida (art. 177, L. del T.). — En concepto de utilidades, y á tenor de lo dispuesto en la Ley de 27 de marzo de 1900, pagarán el 0,50 % las primas de los seguros nuevos ó antiguos efectuados en España por las compañías regulares de seguros de vida.

405. The assured is bound to prove the damage suffered by evidence of the pre-existence of the objects before the fire.

406. The valuation of the damage caused by the fire shall be fixed by experts, as laid down in the policy, by agreement between the parties, or in default thereof, according to the provisions of the Law of Civil Procedure[1]).

407. The experts shall decide: 1. On the causes of the fire; — 2. On the actual value of the insured subject-matter on the day of the fire and before this had taken place; — 3. On the value of the same subject-matter after the casualty, and on everything else which is submitted to their judgment.

408. If the value of the losses suffered exceeds the amount insured, the assured shall be considered his own insurer as to this excess, and shall defray the share of the losses and expenses which corresponds thereto.

409. The insurer shall be bound to pay the indemnity fixed by the experts within the ten days following their decision, when once it has been agreed.

In case of delay, the insurer shall pay the assured the legal interest on the amount due, from the expiration of the said term.

410. The decision of the experts shall form an executive cause of action against the insurer, if it was given before a notary; and if it was not so given, after judicial verification and admission by the experts of their signatures and of the truth of the document.

411. Within the ten days fixed by art. 409, the insurer shall choose between indemnifying the casualty or repairing, rebuilding or replacing the insured objects destroyed by the fire, according to their genus and species, in whole or in part, if they agreed thereto.

412. The insurer may acquire the salved effects for himself, provided that he pays to the assured the actual value, according to the valuation dealt with by case 2 of art. 407.

413. When he has paid the indemnity, the insurer shall be subrogated to the rights and rights of action of the assured, by whatever character or title, against all the authors or persons responsible for the fire.

414. After the casualty, the insurer may rescind the contract as regards subsequent accidents, and every other insurance which he may have made with the same assured, on giving the latter fifteen days notice and returning him the part of the premium which corresponds to the unexpired time.

415. The expenses occasioned by the expert valuation and the liquidation of the indemnity shall be borne by the assured and insurer in equal halves; but if there was an evident exaggeration of the damage on the part of the assured, the latter shall be the only one responsible for them.

Third Section. Life insurance.[2])

416. Life insurance shall include all the combinations which can be made, by bargaining for payment of premiums or capital in exchange for the enjoyment of an annuity for life or to a certain age, or the receipt of principal sums at the death of a certain person, in favour of the assured, his successor in right or a third person, and all other like or analogous combinations.

417. A policy of life insurance shall contain the following, besides the requirements demanded by article 383: 1. Statement of the amount insured in principal or income; — 2. Statement of the diminutions or increments of the principal or income insured, and the dates from which those increments or diminutions are to be reckoned.

418. A contract of life insurance may be made on the life of one individual or of several, without exclusion of age, conditions, sex or state of health.

---

[1]) For the appointment of experts and their mode of acting, see our study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

[2]) Everything which is said respecting fire insurance companies in the preceding note entirely applies to those of life insurance, bearing in mind however, that for annual stamp duty, instead of the two or three céntimos which the latter have to pay on each 1 000 pesetas of principal insured, the former must pay two pesetas on each thousand of the amounts secured by the life insurances (art. 177 of the Stamp Act). According to the provisions of the Law of 27 March 1900, they must pay as income tax the $^1/_2$% of the premiums of new and old insurances made in Spain by the ordinary life insurance companies.

419. Podrá constituirse el seguro á favor de una tercera persona, expresando en la póliza el nombre, apellido y condiciones del donatario ó persona asegurada, ó determinándola de algún otro modo indudable.

420. El que asegure á una tercera persona es el obligado á cumplir las condiciones del seguro, siendo aplicable á éste lo dispuesto en los artículos 426 y 430.

421. Sólo el que asegure y contrate directamente con la compañía aseguradora, estará obligado al cumplimiento del contrato como asegurado y á la entrega consiguiente del capital, ya satisfaciendo la cuota única, ya las parciales que se hayan estipulado.

La póliza, sin embargo, dará derecho á la persona asegurada, para exigir de la compañía aseguradora el cumplimiento del contrato.

422. Sólo se entenderán comprendidos en el seguro sobre la vida los riesgos que específica y taxativamente se enumeren en la póliza.

423. El seguro para el caso de muerte no comprenderá el fallecimiento, si ocurriere en cualquiera de los casos siguientes: 1.° Si el asegurado falleciere en duelo ó de resultas de él; — 2.° Si se suicidare; — 3.° Si sufriere la pena capital por delitos comunes.

424. El seguro para el caso de muerte no comprenderá, salvo el pacto en contrario y el pago correspondiente por el asegurado de la sobreprima exigida por el asegurador: 1.° El fallecimiento ocurrido en viajes fuera de Europa; — 2.° El que ocurriere en el servicio militar de mar ó tierra en tiempo de guerra; — 3.° El que ocurriere en cualquier empresa ó hecho extraordinario y notoriamente temerario é imprudente.

425. El asegurado que demore la entrega del capital ó de la cuota convenida, no tendrá derecho á reclamar el importe del seguro ó cantidad asegurada, si sobreviniere el siniestro ó se cumpliere la condición del contrato estando él en descubierto.

426. Si el asegurado hubiere satisfecho varias cuotas parciales y no pudiere continuar el contrato, lo avisará al asegurador, rebajándose el capital asegurado hasta la cantidad que esté en justa proporción con las cuotas pagadas, con arreglo á los cálculos que aparecieren en las tarifas de la compañía aseguradora, y habida cuenta de los riesgos corridos por ésta.

427. El asegurado deberá dar cuenta al asegurador, de los seguros sobre la vida, que anterior ó simultáneamente celebre con otras compañías aseguradoras.

La falta de este requisito privará al asegurado de los beneficios del seguro, asistiéndole sólo el derecho á exigir el valor de la póliza.

428. Las cantidades que el asegurador deba entregar á la persona asegurada, en cumplimiento del contrato, serán propiedad de ésta, aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquiera clase del que hubiere hecho el seguro á favor de aquélla.

429. El concurso ó quiebra del asegurado no anulará ni rescindirá el contrato de seguro sobre la vida; pero podrá reducirse, á solicitud de los representantes legítimos de la quiebra, ó liquidarse en los términos que fija el art. 426.

430. Las pólizas de seguros sobre la vida, una vez entregados los capitales ó satisfechas las cuotas á que se obligó el asegurado, serán endosables, estampándose el endoso en la misma póliza, haciéndose saber á la compañía aseguradora de una manera auténtica por el endosante y el endosatario.

431. La póliza de seguros sobre la vida, que tenga cantidad fija y plazo señalado para su entrega, ya en favor del asegurado, ya en el del asegurador, producirá acción ejecutiva respecto de ambos[1]).

La compañía aseguradora, transcurrido el plazo fijado en la póliza para el pago, podrá además rescindir el contrato, comunicando su resolución en un término que no exceda de los veinte días siguientes al vencimiento, y quedando únicamente en beneficio del asegurado el valor de la póliza.

---

[1]) La acción ejecutiva permite emplear para el cobro de lo debido el procedimiento ejecutivo que puede verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.» — Pero con arreglo á lo prevenido en la Ley sobre utilidades de 27 de marzo de 1900 habrán de satisfacer el 0,50% de las primas de los seguros que efectúen en España las compañías aseguradoras. Otro tanto habrán de pagar por el mismo concepto las cooperativas de seguros y las de transportes.

419. An insurance may be constituted in favour of a third person, by expressing in the policy the name, surname and conditions of the beneficiary or person insured or by determining him in any other certain way.

420. He who insures a third person is the one who is bound to perform the conditions of the insurance, and the provisions of arts. 426 and 430 shall apply to the latter.

421. Only the person who insures and contracts directly with the insurance company shall be bound to the performance of the contract as the assured and to the consequent payment of the premium, whether by paying a single premium or the successive premiums which have been agreed.

Nevertheless, the policy shall entitle the person insured to demand performance of the contract by the insurance company.

422. Only the risks which are specifically and exclusively enumerated in the policy shall be understood to be included in a life insurance.

423. An insurance on death shall not include a death occurring in any of the following circumstances: 1. If the insured dies in a duel or from the results thereof; — 2. If he commits suicide; — 3. If he suffers capital punishment for ordinary crimes.

424. An insurance for the case of death shall not include, unless there is a bargain to the contrary and corresponding payment by the assured of the premium required by the insurer: 1. A death occurring in journeys outside Europe; — 2. Occurring on military service on sea or land in time of war; — 3. Occurring in any undertaking or act which is extraordinarily and notoriously rash and imprudent.

425. An assured who delays payment of the principal or agreed premium, shall not be entitled to claim the surrender value of the insurance or the insured amount, if the casualty occurs or the condition of the contract is fulfilled while he is still uncovered.

426. If the assured has paid several successive premiums and cannot continue the contract, he shall advise the insurer thereof, and the principal insured shall be lowered to the amount which is in just proportion to the paid premiums, according to the calculations which appear in the tariffs of the insurance company, and on taking into account the risks run by the latter.

427. The assured must give account to the insurer of the life insurances which he previously or simultaneously makes with other insuring companies.

Absence of this requisite shall deprive the assured of the benefits of the insurance, retaining only the right to demand the surrender value of the policy.

428. The amounts which the insurer has to pay to the person assured in fulfilment of the contract shall be the property of the latter, even against the claims of the lawful heirs and of every class of creditor of the person who has made the insurance in favour of the former.

429. The insolvency or bankruptcy of the assured shall not annul or rescind the contract of life insurance; but on petition of the lawful representatives of the bankruptcy, it may be reduced or surrendered as fixed by art. 426.

430. When once the principal sums or premiums to which the assured is bound, have been paid, policies of life insurance shall be indorsable, by stamping the indorsement on the same policy, and notice being given to the insurance company in an authentic manner by the indorser and indorsee.

431. A policy of life insurance which has a fixed amount and a time stated for its payment, whether in favour of the assured, or of the insurer, shall give rise to a right of executive action in respect of each[1]).

After the time fixed in the policy for the payment, the insurance company may likewise rescind the contract, on communicating its decision within a time which does not exceed twenty days following the due date, and the surrender value of the policy shall alone remain for the benefit of the assured.

---

[1]) For recovery of the debt, the executive action permits the employment of the executive procedure which may be seen in the study "Judicial proceedings in mercantile civil matters". But according to the provisions of the Income tax Law of 27 March 1900, there must be paid 0,50% of the premiums on insurances made by insurance companies in Spain. Cooperative insurance and transport insurance companies must pay the like.

Sección cuarta. Del seguro de transporte terrestre.[1])

432. Podrán ser objeto del contrato de seguro contra los riesgos de transporte todos los efectos transportables por los medios propios de la locomoción terrestre.

433. Además de los requisitos que debe contener la póliza, según el art. 383, la de seguro de transportes contendrá: 1.° La empresa ó persona que se encargue del transporte; — 2.° Las calidades específicas de los efectos asegurados, con expresión del número de bultos y de las marcas que tuvieren; — 3.° La designación del punto en donde se hubieren de recibir los géneros asegurados, y del en que se haya de hacer la entrega.

434. Podrán asegurar, no sólo los dueños de las mercaderías transportadas, sino todos los que tengan interés ó responsabilidad en su conservación, expresando en la póliza el concepto en que contratan el seguro.

435. El contrato de seguro de transportes comprenderá todo género de riesgos, sea cualquiera la causa que los origine; pero el asegurador no responderá de los deterioros originados por vicio propio de la cosa ó por el transcurso natural del tiempo, salvo pacto en contrario.

436. En los casos de deterioro por vicio de la cosa ó transcurso del tiempo, el asegurador justificará judicialmente el estado de las mercaderías aseguradas, dentro de las veinticuatro horas siguientes á su llegada al lugar en que deban entregarse.

Sin esta justificación no será admisible la excepción que proponga para eximirse de su responsabilidad como asegurador.

437. Los aseguradores se subrogarán en los derechos de los asegurados, para repetir contra los porteadores los daños de que fueren responsables con arreglo á las prescripciones de este Código.

Sección quinta. De las demás clases de seguros.[2])

438. Podrá ser asimismo objeto del contrato de seguro mercantil cualquiera otra clase de riesgos que provengan de casos fortuitos ó accidentes naturales, y los pactos que se consignen deberán cumplirse, siempre que sean lícitos y estén conformes con las prescripciones de la sección primera de este título.

Título IX. De los afianzamientos mercantiles.

439. Será reputado mercantil todo afianzamiento que tuviere por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato mercantil, aun cuando el fiador no sea comerciante.

440. El afianzamiento mercantil deberá constar por escrito, sin lo cual no tendrá valor ni efecto.

441. El afianzamiento mercantil será gratuito, salvo pacto en contrario.

442. En los contratos por tiempo indefinido, pactada una retribución al fiador, subsistirá la fianza hasta que, por la terminación completa del contrato principal que se afiance, se cancelen definitivamente las obligaciones que nazcan de él, sea cual fuere su duración, á no ser que por pacto expreso se hubiere fijado plazo á la fianza.

Título X. Del contrato y letras de cambio.

Sección primera. De la forma de las letras de cambio.

443. La letra de cambio se reputará acto mercantil, y todos los derechos y acciones que de ella se originen, sin distinción de personas, se regirán por las disposiciones de este Código.

[1]) Los aseguradores de esta clase de seguros no han sido objeto de ninguna declaración especial en la L. del T., sin duda por la escasa importancia que alcanzan esta clase de seguros, pero sus pólizas, por virtud de lo dispuesto en el art. 190 de la misma, si exceden de 10 pesetas pagarán timbre proporcional á su cuantía con sujeción á la escala que puede verse en la nota 2, pág. 105.

[2]) Los seguros que se efectúen sobre los accidentes del trabajo están exentos de todo impuesto de timbre (art. 177, L. del T.). — Las demás compañías aseguradoras que se propongan la reparación ó indemnización de daños ó perjuicios sobre las cosas ó propiedades, cualquiera que sea su organización, pagarán el 2% de las primas de los seguros que efectúen en España.

Fourth Section. Insurance of land transport.[1]

432. All effects transportable by means proper to locomotion by land, may be the subject-matter of a contract of insurance against transport risks.

433. Besides the requisites which a policy must contain, according to art. 383, a policy of insurance of transport shall contain: 1. The undertaking or person charged with the transport; — 2. The specific qualities of the insured effects, with statement of the number of packages and their marks; — 3. Definition of the place where the insured goods are to be received, and of that where delivery is to be effected.

434. Not only the owners of the carried merchandise, but all who have an interest or responsibility in their preservation, may insure, by stating in the policy the character in which they contract the insurance.

435. The contract for insurance of transport shall include every kind of risk, from whatever cause arising; but the insurer shall not be liable for deterioration caused by the inherent defect of the thing or by natural lapse of time, saving a bargain to the contrary.

436. In cases of deterioration by defect of the thing or lapse of time, the insurer shall judicially prove the condition of the merchandise insured within the twenty four hours following their arrival at the place where they are to be delivered. In the absence of this proof, the defence which he may put forward in order to exempt himself from his liability as insurer, shall not be admissible.

437. The insurers shall be subrogated to the rights of the assured, for the purpose of reclaiming against the carriers the damage for which they are responsible according to the provisions of this Code.

Fifth Section. Other kinds of Insurance.[2]

438. Every other kind of risk arising from fortuitous events or natural accidents, may likewise be the subject-matter of mercantile insurance, and the bargains which they set out must be performed, provided that they are lawful and conform to the provisions of the first section of this Title.

Title IX. Mercantile guarantees.

439. Every guarantee which is intended to secure the performance of a mercantile contract shall be considered mercantile, even when the guarantor is not a merchant.

440. A mercantile guarantee must appear in writing, in the absence whereof it shall be void.

441. A mercantile guarantee shall be gratuitous, saving a bargain to the contrary.

442. When, in contracts for an indefinite time, the guarantor has bargained for a reward, the guarantee shall subsist until by the complete termination of the principal contract which is insured, the obligations arising therefrom are finally cancelled, whatever be their duration, unless by express bargain a time has been fixed for the guarantee.

Title X. Contracts and bills of exchange.

First Section. The form of bills of exchange.

443. A bill of exchange shall be considered a mercantile act, and all the rights and rights of action originated thereby shall be governed by the provisions of this Code, without distinction of persons.

[1]) Insurers of this kind of insurance have not been the object of any special declaration in the Stamp Act, doubtless on account of the slight importance acquired by this kind of insurance, but by virtue of the provisions in art. 190 thereof, their policies which exceed 10 pesetas must pay a stamp proportionate to their amount as shown by the scale which may be seen in note 2, page 105.

[2]) Workmens'accident insurances are exempt from all Stamp duty (art. 177 of the Stamp Act). Other insurance companies which offer the repair or indemnity of damage to things or properties, whatever be their organization, must pay 2% of the premiums on the insurances which they effect in Spain.

444. La letra de cambio deberá contener, para que surta efecto en juicio[1]): 1.° La designación del lugar, día, mes y año en que la misma se libra; — 2.° La época en que deberá ser pagada; — 3.° El nombre y apellido, razón social ó título de aquel á cuya orden se mande hacer el pago; — 4.° La cantidad que el librador manda pagar, expresándola en moneda efectiva ó en las nominales que el comercio tuviere adoptadas para el cambio; — 5.° El concepto en que el librador se declara reintegrado por el tomador, bien por haber recibido su importe en efectivo, ó mercaderías ú otros valores lo cual se expresará con la frase de «valor recibido», bien por tomárselo en cuenta en las que tenga pendientes, lo cual se indicará con la de «valor en cuenta» ó «valor entendido»; — 6.° El nombre y apellido, razón social ó título de aquel de quien se recibe el importe de la letra, ó á cuya cuenta se carga; — 7.° El nombre y apellido, razón social ó título de la persona ó compañía á cuyo cargo se libra, así como también su domicilio; — 8.° La firma del librador, de su propio puño, ó de su apoderado al efecto con poder bastante.

445. Las cláusulas de «valor en cuenta» y «valor entendido» harán responsable al tomador de la letra del importe de la misma en favor del librador, para exigirlo ó compensarlo en la forma y tiempo que ambos hayan convenido al hacer el contrato de cambio.

446. El librador podrá girar la letra de cambio: 1.° Á su propia orden[2]); — 2.° Á cargo de una persona, para que haga el pago en el domicilio de un tercero; — 3.° Á su propio cargo, en lugar distinto de su domicilio; — 4.° Á cargo de

[1]) Las letras de cambio cuyo vencimiento no exceda de seis meses llevarán el timbre del precio que corresponda á su cuantía con arreglo á la siguiente escala:

Cuantía del efecto				Timbre Clase	Precio Pesetas
Hasta	100	pesetas		16a	0,10
Desde	100,01	hasta	250	15a	0,25
,,	250,01	,,	500	14a	0,50
,,	500,01	,,	1 000	13a	1,00
,,	1 000,01	,,	2 000	12a	2,00
,,	2 000,01	,,	3 000	11a	3,00
,,	3 000,01	,,	4 000	10a	4,00
,,	4 000,01	,,	5 000	9a	5,00
,,	5 000,01	,,	7 000	8a	7,00
,,	7 000,01	,,	10 000	7a	10,00
,,	10 000,01	,,	20 000	6a	20,00
,,	20 000,01	,,	30 000	5a	30,00
,,	30 000,01	,,	40 000	4a	40,00
,,	40 000,01	,,	50 000	3a	50,00
,,	50 000,01	,,	75 000	2a	75,00
,,	75 000,01	,,	100 000	1a	100,00

— Cuando la cuantía de la letra exceda de 100 000 pesetas se fijarán además en la misma los timbres móviles correspondientes á la diferencia ó exceso, á razón de una peseta por cada 1000 pesetas ó fracción de ellas, inutilizándose dichos timbres fijando en ellos la fecha del documento. — Si el vencimiento de las letras excediere de seis meses devengarán por derecho de timbre el doble del fijado en la anterior escala (art. 138 de la L. del T.). — El Estado expenderá al público las letras de cambio, pagarés á la orden y pólizas de préstamo con garantías de valores cotizables con el timbre especial de la anterior escala. Sin embargo los Bancos, sociedades legalmente constituídas, Montes de Piedad y los comerciantes nacionales ó extranjeros que acomoden su contabilidad á las prescripciones del Cód. de com., podrán acudir á la Dirección general del ramo, por conducto de las respectivas Delegaciones de Hacienda, para timbrar los impresos especiales de dichos efectos que presenten (art. 143 L. de T.). — Los giros que se hagan por telégrafo se reintegrarán fijando en el original en que se redacte el telegrama los timbres móviles correspondientes á su cuantía con arreglo á la escala anterior, y según el plazo de su vencimiento, inutilizándolos en la forma indicada para los timbres que han de fijarse en las letras de más de 100 000 pesetas (art. 145 L. del T.). — Se prohibe á todas las personas, Bancos y sociedades, establecimientos públicos y comercios que guarden en caja por su cuenta ó cuenta ajena las letras de cambio y demás efectos comerciales que no lleven el timbre correspondiente (art. 152, L. del T.).

[2]) La ley de 29 de julio de 1903 modificó este artículo, suprimiendo de él las palabras siguientes, que figuraban en la redacción primitiva del texto legal: *expresando retener en sí mismo el valor de ella.*

444. In order that it may have legal effect, a bill of exchange must contain[1]): 1. Statement of the place, day, month and year of the drawing thereof; — 2. The time at which it is to be paid; — 3. The name and surname, firm name or title of the person to whose order payment is ordered to be made; — 4. The amount which the drawer orders to be paid, stating it in actual money or in the nominal moneys which commerce has adopted for the exchange; — 5. The character in which the drawer is declared to be paid by the taker, whether by having received its amount in cash, or merchandise or other valuables which shall be expressed by the phrase "value received", or by its being taken on account of pending bills, which shall be shown by the phrase "value in account" or "value understood"; — 6. The name and surname, firm name or title of the person from whom the value of the bill is received or to whose account it is charged; — 7. The name and surname, firm name or title of the person or company at whose charge it is drawn, as well as his address; — 8. The signature of the drawer, with his own hand, or that of his attorney who holds a sufficient power for that purpose.

445. The terms "value in account" and "value understood" shall make the taker of the bill liable to the drawer for the amount thereof, for the purpose of demanding it or setting it off as and when both have agreed at making the contract of exchange.

446. A drawer may draw a bill of exchange: 1. To his own order[2]); — 2. On another person, in order that he may pay at the address of a third; — 3. On himself, at a place different from his address; — 4. On another, at the same place as the resi-

[1]) Bills of exchange whose period does not exceed six months must bear a stamp of a price corresponding to their amount, according to the following scale:

Actual amount				Stamp	
				Class	Price Pesetas
Not exceeding	100	pesetas		16.	0,10
From	100,01	to	250	15.	0,25
,,	250,01	,,	500	14.	0,50
,,	500,01	,,	1 000	13.	1,00
,,	1 000,01	,,	2 000	12.	2,00
,,	2 000,01	,,	3 000	11.	3,00
,,	3 000,01	,,	4 000	10.	4,00
,,	4 000,01	,,	5 000	9.	5,00
,,	5 000,01	,,	7 000	8.	7,00
,,	7 000,01	,,	10 000	7.	10,00
,,	10 000,01	,,	20 000	6.	20,00
,,	20 000,01	,,	30 000	5.	30,00
,,	30 000,01	,,	40 000	4.	40,00
,,	40 000,01	,,	50 000	3.	50,00
,,	50 000,01	,,	75 000	2.	75,00
,,	75 000,01	,,	100 000	1.	100,00

When the amount of the bill exceeds 100 000 pesetas, adhesive stamps corresponding to the difference or excess must be fixed thereon, at the rate of one peseta for each 1 000 pesetas or fraction thereof, cancelling the said stamps by placing thereon the date of the document. If the periods of the bills exceed six months, they must pay as stamp duty double the sums fixed in the preceding scale (art. 138 of the Stamp Act). The State shall issue to the public both bills of exchange, promissory notes to order and contracts of loan with guarantees of quotable securities with the special stamp of the preceding scale. Nevertheless, Banks legally constituted, societies, pawn shops and national and foreign merchants who adjust their accounting to the provisions of the Code of Commerce, may apply to the branch General Direction, through the corresponding Delegations of the Exchequer, to impress special stamps on the documents which they present (art. 143 of the Stamp Act). Telegraphic drafts must pay by affixing to the original telegram the adhesive stamps which correspond to their amount according to the preceding scale and the date of maturity, cancelling them in the way indicated for stamps which are to be affixed to bills of more than 100 000 pesetas (art. 145 of the Stamp Act). All persons, Banks and societies, public and commercial establishments, are forbidden to keep in their coffers either on their own account or that of another, bills of exchange and other commercial documents which do not bear the proper stamp (art. 152 of the Stamp Act).

[2]) The Law of 29 July 1903 altered this article, by suppressing the words following, which appeared in the original draft of the legal text: *expresando retener en si mismo el valor de ella.*

otro, en el mismo punto de la residencia del librador; — 5.° Á nombre propio, pero por orden y cuenta de un tercero, expresándose así en la letra.

Esta circunstancia no alterará la responsabilidad del librador, ni el tenedor adquirirá derecho alguno contra el tercero por cuya cuenta se hizo el giro.

447. Todos los que pusieren firmas á nombre de otro en letras de cambio, como libradores, endosantes ó aceptantes, deberán hallarse autorizados para ello con poder de las personas en cuya representación obraren, expresándolo así en la antefirma.

Los tomadores y tenedores de letras tendrán derecho á exigir á los firmantes la exhibición del poder.

Los administradores de compañías se entenderán autorizados por el solo hecho de su nombramiento.

448. Los libradores no podrán negar á los tomadores de las letras la expedición de segundas y terceras[1]) y cuantas necesiten y les pidan de un mismo tenor, siempre que la petición se hiciere antes del vencimiento de las letras, salvo lo dispuesto en el art. 500, expresando en todas ellas que no se reputarán válidas sino en el caso de no haberse hecho el pago en virtud de la primera ó de otras de las expedidas anteriormente.

449. En defecto de ejemplares duplicados de la letra expedida por el librador, podrá cualquier tenedor dar al tomador una copia, expresando que la expide á falta del original que se trate de suplir.

En esta copia deberán insertarse literalmente todos los endosos que contenga el original.

450. Si la letra de cambio adoleciere de algún defecto ó falta de formalidad legal, se reputará pagaré á favor del tomador y á cargo del librador.

Sección segunda. De los términos y vencimiento de las letras.

451. Las letras de cambio podrán girarse al contado ó á plazo por uno de estos términos: 1.° Á la vista; — 2.° Á uno ó más días, á uno ó más meses vista; — 3.° Á uno ó más días, á uno ó más meses fecha; — 4.° Á uno ó más usos; — 5.° Á día fijo ó determinado; — 6.° Á una feria[2]).

452. Cada uno de estos términos obligará al pago de las letras, á saber: 1.° El de la vista, en el acto de su presentación; — 2.° El de días ó meses vista, el día en que se cumplan los señalados, contándolos desde el siguiente al de la aceptación, ó del protesto por falta de haberla aceptado; — 3.° El de días ó meses fecha y el de uno ó más usos, el día en que cumplan los señalados, contándose desde el inmediato al de la fecha del giro; — 4.° Las giradas á día fijo ó determinado, en el mismo; — 5.° Las giradas á una feria, el último día de ella.

453. El uso de las letras giradas de plaza á plaza en lo interior de la Península é Islas adyacentes, será el de sesenta días.

El de las letras giradas en el extranjero sobre cualquier plaza de España, será: En las de Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania, sesenta días; — En las demás plazas, noventa días.

454. Los meses para el término de las letras se computarán de fecha á fecha.

Si en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente al de la fecha en que la letra se expidió, se entenderá que vence el último día del mes.

455. Todas las letras deberán satisfacerse el día de su vencimiento, antes de la puesta del sol, sin término de gracia ó cortesía.

Si fuere festivo el día del vencimiento, se pagará la letra en el precedente.

Sección tercera. De las obligaciones del librador.

456. El librador estará obligado á hacer provisión de fondos oportunamente á la persona á cuyo cargo hubiere girado la letra, á no ser que hiciere el giro por cuenta de un tercero, en cuyo caso será de éste dicha obligación, salva siempre la responsabilidad directa del librador respecto al tomador ó tenedor de la letra, y la del tercero por cuenta de quien se hizo el giro, respecto al librador.

[1]) Estos ejemplares pueden expedirse sin timbre alguno (art. 148, L. del T.).

[2]) Téngase en cuenta con respecto al vencimiento lo consignado ya en la nota 1, pág. 151, ó sea que si el vencimiento excede de seis meses el derecho de timbre es doble.

dence of the drawer; — 5. To himself, but by order and on account of a third person, and so expressed in the bill.

This circumstance shall not alter the liability of the drawer, nor shall the holder acquire any right against the third person on whose account the draft was made.

447. All who place their signatures to the name of another on bills of exchange, as drawers, indorsers or acceptors, must be authorised for that purpose by a power from the persons in representation of whom they act, and shall so state in the part before their signature.

Takers and holders of bills shall be entitled to demand production of the power from the signatories.

Administrators of companies shall be understood as authorised by the sole fact of their appointment.

448. Drawers may not refuse to the takers of bills the issue of second and third[1]) and as many copies as they need and apply for of the same tenor, provided that the application is made before the maturity of the bills, saving the provisions of art. 500, and stating on all of them that they will not be considered valid, except when payment has not been made by virtue of the first or other copies previously issued.

449. In default of duplicate copies of the bill issued by the drawer, any holder may give a copy to the taker, expressing that he issues it in default of the original which it is intended to supplement.

All the indorsements which the original contains must be inserted in this copy.

450. If a bill of exchange suffers from any defect or want of legal formality, it shall be considered a promissory note in favour of the taker and at the charge of the drawer.

Second Section. Terms and maturity of bills.

451. Bills of exchange may be drawn for cash or on credit for one of the following terms: 1. At sight; — 2. At one or more days' or one or more months' sight; — 3. At one or more days or one or more months from date; — 4. At one or more usances; — 5. At a fixed or certain day; — 6. At a fair[2]).

452. Each of these terms shall compel payment of the bills, as follows: 1. That of at sight, on presentment; — 2. That of days' or months' sight, on the day on which the stated terms are completed, reckoning them from the day following the acceptance or protest for want of acceptance; — 3. That of at days or months from date or at one or more usances, on the day on which thes tated terms are completed, reckoned from the day immediately following the date of the draft; — 4. Drafts at a day fixed or certain, on the same day; — 5. Drafts at a fair, the last day thereof.

453. The usance of bills drawn from place to place in the interior of the Peninsula and the adjacent Isles, shall be that of sixty days.

That of bills drawn abroad on any place in Spain shall be: As to those of Portugal, France, England, Holland and Germany, sixty days; — As to those of other places, ninety days.

454. For the purpose of maturity of bills, months shall be reckoned from date to date.

If there is no day in the month of the maturity equivalent to that of the date on which the bill was issued, it shall be understood to be due on the last day of the month.

455. All bills must be paid on the day of their maturity, before sunset, without term of grace or courtesy.

If the day of maturity is a public holiday, the bill shall be paid on the preceding day.

Third Section. Obligations of the drawer.

456. The drawer shall be bound to provide the drawee with funds in good time, unless the draft is made on account of a third person, in which case the obligation shall fall on the latter, saving always the direct liability of the drawer to the taker or holder of the bill, and that of the third person on account of whom the draft was made, to the drawer.

---

[1]) These copies may be issued without any stamp (art. 148 of the Stamp Act).

[2]) Bear in mind what has already been stated in note 1, page 151, with regard to maturity, that is, that if the period exceeds six months, the stamp duty is double.

457. Se considerará hecha la provisión de fondos, cuando, al vencimiento de la letra, aquel contra quien se libró, sea deudor de una cantidad igual, ó mayor, al importe de ella, al librador ó al tercero por cuya cuenta se hizo el giro.

458. Los gastos que se causaren por no haber sido aceptada ó pagada la letra, serán á cargo del librador ó del tercero por cuya cuenta se libró, á menos que pruebe que había hecho oportunamente la provisión de fondos, ó que resultaba acreedor conforme al artículo anterior, ó que estaba expresamente autorizado para librar la cantidad de que dispuso.

En cualquiera de los tres casos, podrá exigir el librador, del obligado á la aceptación y al pago, la indemnización de los gastos que por esta causa hubiere reembolsado al tenedor de la letra.

459. El librador responderá civilmente de las resultas de su letra á todas las personas que la vayan sucesivamente adquiriendo y cediendo.

Los efectos de esta responsabilidad se especifican en los artículos 456, 458 y en el siguiente.

460. Cesará la responsabilidad del librador cuando el tenedor de la letra no la hubiere presentado ó hubiere omitido protestarla en tiempo y forma, siempre que pruebe que, al vencimiento de la letra, tenía hecha provisión de fondos para su pago, en los términos prescritos en los artículos 456 y 457.

Si no hiciere esta prueba, reembolsará la letra no pagada, aunque el protesto se hubiere sacado fuera de tiempo, mientras la letra no haya prescrito. Caso de hacer dicha prueba, pasará la responsabilidad del reembolso á aquel que aparezca en descubierto de él, en tanto que la letra no esté prescrita.

Sección cuarta. Del endoso de las letras.

461. La propiedad de las letras de cambio se transferirá por endoso.

462. El endoso deberá contener: 1.° El nombre y apellido, razón social ó título de la persona ó compañía á quien se transmite la letra; — 2.° El concepto en que el cedente se declare reintegrado por el tomador, según se expresa en el número 5.° del art. 444; — 3.° El nombre y apellido, razón social ó título de la persona de quien se recibe ó á cuenta de quien se carga, si no fuere la misma á quien se traspasa la letra; — 4.° La fecha en que se hace; — 5.° La firma del endosante ó de la persona legítimamente autorizada que firme por él, lo cual se expresará en la antefirma.

463. Si se omitiere la expresión de la fecha en el endoso, no se transferirá la propiedad de la letra, y se entenderá como una simple comisión de cobranza.

464. Si se pusiere en el endoso una fecha anterior al día en que realmente se hubiere hecho, el endosante será responsable de los daños que por ello se sigan á un tercero, sin perjuicio de la pena en que incurra por el delito de falsedad, si se hubiere obrado maliciosamente.

465. Los endosos firmados en blanco, y aquellos en que no se exprese el valor, transferirán la propiedad de la letra y producirán el mismo efecto que si en ellos se hubiere escrito «valor recibido».

466. No podrán endosarse las letras no expedidas á la orden, ni las vencidas y perjudicadas.

Será lícita la transmisión de su propiedad por los medios reconocidos en el derecho común[1]; y si, no obstante, se hiciere el endoso, no tendrá éste otra fuerza que la de una simple cesión.

467. El endoso producirá en todos y en cada uno de los endosantes la responsabilidad al afianzamiento del valor de la letra, en defecto de ser aceptada, y á su reembolso, con los gastos de protesto y recambio, si no fuere pagada á su vencimiento, con tal que las diligencias de presentación y protesto se hayan practicado en el tiempo y forma prescritos en este Código.

Esta responsabilidad cesará por parte del endosante que, al tiempo de transmitir la letra, haya puesto la cláusula de «sin mi responsabilidad».

En este caso, el endosante sólo responderá de la identidad de la persona cedente ó del derecho con que hace la cesión ó endoso.

[1]) Los medios reconocidos, en el derecho común no son otros que la cesión, que puede ser gratuita (donación) ú onerosa (venta), y la trasmisión por herencia ó legado.

457. Provision of funds shall be considered to be made, when, at the maturity of the bill, the drawee is debtor to the drawer or to the third person on account of whom the draft was made, in a sum equal to or greater than the amount thereof.

458. The expenses caused by the bill not having been accepted or paid, shall be borne by the drawer or the third person on account of whom it was drawn, unless he proves that he made provision of funds in due time, or that he was creditor in accordance with the preceding article, or that he was expressly authorised to draw the amount of which he disposed.

In either of the three cases, the drawer may demand indemnity for the expenses which he has paid to the holder of the bill on this ground, from the person bound to accept or pay.

459. The drawer shall be civilly responsible for the liabilities on his bill to all persons who successively acquire and assign it.

The effects of this liability are specified in articles 456, 458 and in the following article.

460. This liability of the drawer shall cease when the holder of the bill has not presented it or has omitted to protest it in due time and form, provided that he proves that at the maturity of the bill he had provided funds for its payment, as provided in articles 456 and 457.

If he fails to prove this, he shall pay the unpaid bill, although the protest has been taken out beyond the time, as long as the bill is not prescribed. If he does prove the above, the liability for payment shall pass to the person who appears to be uncovered in respect thereof, as long as the bill is not prescribed.

Fourth Section. Indorsement of bills.

461. The ownership of bills of exchange shall be transferred by indorsement.

462. The indorsement must contain: 1. The name and surname, firm name or title of the person or company to whom the bill is transferred; — 2. The character in which the assignor is declared to be paid by the taker, as expressed in number 5 of art. 444; — 3. The name and surname, firm name or title of the person from whom it is received or on account of whom it is charged, if he is not the same as the person to whom the bill is transferred; — 4. The date on which it is made; — 5. The signature of the indorser or of the person lawfully authorised to sign for him, which shall be expressed above the signature.

463. If the date is omitted to be stated in the indorsement, the ownership of the bill shall not be transferred, and it shall be understood as a simple commission to collect.

464. If a date previous to the day on which it was actually made is put in the indorsement, the indorser shall be liable for the damage which ensues therefrom to a third person, without prejudice to the penalty which he incurs for the crime of falsity, if he has acted maliciously.

465. Indorsements signed in blank, and those in which the value is not stated, shall transfer the ownership of the bill and produce the same effect as if "value received" were written thereon.

466. Bills which are not issued to order, overdue and prejudiced bills cannot be indorsed.

Transfer of their ownership by the means acknowledged by the common law shall be lawful[1]); and if, nevertheless, an indorsement is made, this shall have no other effect than that of a simple assignment.

467. The indorsement shall produce the liability on the part of all and each of the indorsers, to guarantee the value of the bill, in default of acceptance, and of its payment with the expenses of protest and re-exchange, if it is not paid at maturity, provided that the measures of presentment and protest have been effected when and as provided by this Code.

This liability shall cease as regards an indorser who, at the time of transferring the bill, has put the term "sin mi responsabilidad" (without recourse).

In this case, the indorser shall only be responsible for the identity of the assignor or for the right with which the assignment or indorsement is made.

---

1) The means acknowledged by the common law are no other than assignment, which may be gratuitous (gift) or onerous (sale), and transfer by way of inheritance or legacy.

468. El comisionista de letras de cambio ó pagarés endosables se constituye garante de los que adquiera ó negocie por cuenta ajena, si en ellos pusiere su endoso, y sólo podrá excusarse fundadamente de ponerlo, cuando haya precedido pacto expreso dispensándole el comitente de esta responsabilidad. En este caso, el comisionista podrá extender el endoso á la orden del comitente, con la cláusula de «sin mi responsabilidad».

Sección quinta. De la presentación de las letras y de su aceptación.

469. Las letras que no fueren presentadas á la aceptación ó al pago dentro del término señalado, quedarán perjudicadas, así como también si no se protestaren oportunamente.

470. Las letras giradas en la Península é Islas Baleares sobre cualquier punto de ellas, á la vista ó á un plazo contado desde la vista, deberán ser presentadas al cobro ó á la aceptación dentro de los cuarenta días de su fecha.

Podrá, sin embargo, el que gire una letra á la vista ó á un plazo contado desde la vista, fijar término dentro del cual debe hacerse la presentación; y en este caso el tenedor de la letra estará obligado á presentarla dentro del plazo fijado por el librador.

471. Las letras giradas entre la Península é Islas Canarias se presentarán, en los casos á que aluden los dos artículos anteriores, dentro del término de tres meses.

472. Las letras giradas entre la Península y las Antillas españolas ú otros puntos de Ultramar que estuvieren más acá de los cabos de Hornos y Buena Esperanza, cualquiera que sea la forma del plazo designado en su giro, se presentarán al pago ó á la aceptación, cuando más, dentro de seis meses.

En cuanto á las plazas de Ultramar que estén más allá de aquellos cabos, el término será de un año.

473. Los que remitieren letras á Ultramar, deberán enviar, por lo menos, segundos ejemplares en buques distintos de los en que fueron las primeras; y si probaren que los buques conductores habían experimentado accidente de mar que entorpeció su viaje, no entrará en el cómputo del plazo legal el tiempo transcurrido hasta la fecha en que se supo aquel accidente en la plaza donde residiere el remitente de las letras.

El mismo efecto producirá la pérdida real ó presunta de los buques.

En los accidentes ocurridos en tierra y notoriamente conocidos, se observará igual regla en cuanto al cómputo del plazo legal.

474. Las letras giradas á la vista ó á un plazo contado desde la vista, en países extranjeros, sobre plazas del territorio de España, se presentarán al cobro ó á la aceptación dentro de los cuarenta días siguientes á su introducción en el Reino; y las giradas á fecha, en los plazos en ellas contenidos[1]).

475. Las letras giradas en territorio español sobre países extranjeros, se presentarán con arreglo á la legislación vigente en la plaza donde hubieren de ser pagadas.

476. Los tenedores de las letras giradas á un plazo contado desde la fecha, no necesitarán presentarlas á la aceptación.

El tenedor de la letra podrá, si lo cree conveniente á sus intereses, presentarla al librado antes del vencimiento; y en tal caso, éste la aceptará, ó expresará los motivos por que rehusa el hacerlo.

477. Presentada una letra á la aceptación dentro de los plazos marcados en los artículos anteriores, deberá el librado aceptarla por medio de las palabras «acepto» ó «aceptamos», estampando la fecha, ó manifestar al portador los motivos que tuviere para negar la aceptación.

Si la letra estuviere girada á la vista ó á un plazo contado desde ésta, y el librado dejare de poner la fecha de la aceptación, correrá el plazo desde el día en que el tenedor pudo presentar la letra sin atraso del correo; y si, hecho el cómputo

---

[1]) Las letras de cambio libradas en el extranjero y las libradas en territorios no sujetos al impuesto del timbre (las provincias Vascongadas) que haya de pagarse en plazas españolas no exceptuadas del pago de este impuesto, antes de que puedan ser negociadas, aceptadas y pagadas se reintegrarán con arreglo á su cuantía y vencimiento (véase la pág. 151, nota 1) con los timbres móviles correspondientes que se inutilizarán con la fecha del día en que se hage el reintegro (artículo 146 L. del T.).

468. A broker in indorsable bills of exchange or promissory notes constitutes himself a guarantor of those which he acquires or negotiates on another's account, if he places his indorsement thereon, and he can only be thoroughly excused from placing it there, when preceded by an express agreement by which the principal absolves him from this responsibility. In this case, the broker may draw up the indorsement according to the order of the principal, with the term "without recourse".

Fifth Section. Presentment and acceptance of bills.

469. Bills which are not presented for acceptance or payment within the stated time, shall be prejudiced, as also if they are not protested in due time.

470. Bills drawn in the Peninsula and the Balearic Isles on any place therein, at sight or after sight, must be presented for collection or acceptance within forty days from their date.

Nevertheless, the drawer of a bill at sight or after sight, may fix a time within which presentment must be made; and in this case, the holder of the bill shall be bound to present it within the time fixed by the drawer.

471. Bills drawn between the Peninsula and the Canary Islands shall be presented within the term of three months, in the cases to which the two preceding articles allude.

472. Bills drawn between the Peninsula and the Spanish West Indies or other Oversea places which are on this side of Cape Horn and the Cape of Good Hope, whatever be the form of the time defined in their draft, shall be presented for payment or acceptance within six months at the longest.

As regards Oversea places which are beyond those capes, the time shall be one year.

473. Persons who remit bills oversea must send at least second copies in different vessels from those in which the first were sent; and if they prove that the carrying vessels have suffered an accident at sea which has hindered their voyage, the time which has elapsed from the date on which that accident was known in the place where the remitter of the bills resides, shall not enter into the reckoning of the legal time.

Actual or presumed loss of the vessels shall produce the same effect.

The like rule with regard to the computation of the legal time shall be observed in accidents which have occurred on land and are notoriously known.

474. Bills drawn at sight or after sight in foreign countries on places in the territory of Spain shall be presented for collection or acceptance within the forty days following their introduction into the Realm; and those drawn at a date, within the times contained therein[1]).

475. Bills drawn in Spanish teritory on foreign countries, shall be presented in accordance with the system of law in force in the place where they are to be paid.

476. Holders of bills drawn at a time reckoned from the date, need not present them for acceptance.

If he thinks it agreeable to his interests, the holder of the bill may present it to the drawee before maturity; and in that case the latter shall accept it, or shall express the grounds on which he declines to do so.

477. When a bill has been presented for acceptance within the times set out in the preceding articles, the drawee must accept it by means of the words "acepto" or "aceptamos" and stamping the date, or must show the bearer the grounds which he has for declining acceptance.

If the bill was drawn at sight or after sight, and the drawee fails to place the date of the acceptance, the time shall run from the day on which the holder could present the bill without postal delay; and if, when the computation has been thus

[1]) Bills of exchange drawn abroad and those drawn in territories which are not subject to the stamp duty (the Basque provinces) which have to be paid in Spanish places not exempt from the payment of this duty, before they can be negotiated, accepted and paid, must pay according to their amount and maturity (see page 151, note 1) by the corresponding adhesive stamps, which must be cancelled with the date of the day on which payment is made (art. 146 of the Stamp Act).

de este modo, resultare vencido el plazo, será cobrable la letra el día inmediato siguiente al de la presentación.

478. La aceptación de la letra habrá de ponerse ó denegarse el mismo día en que el portador la presente con este objeto, y la persona á quien se exija la aceptación no podrá retener la letra en su poder bajo pretexto alguno.

Si la letra presentada á la aceptación hubiere de ser pagada en distinto lugar del de la residencia del aceptante, deberá expresarse en ella el domicilio en que hubiere de efectuarse el pago.

El que, recibiendo una letra para aceptarla, si es á su cargo, ó para hacerla aceptar, si es al de un tercero, conservándola en su poder á disposición de otro ejemplar ó copia, avisase por carta, telegrama ú otro medio escrito haber sido aceptada, quedará responsable para con el librador y endosantes de ella, en los mismos términos que si la aceptación se hallase puesta sobre la letra que motivó el aviso, aun cuando tal aceptación no haya tenido lugar ó aun cuando niegue la entrega del ejemplar aceptado á quien legítimamente la solicite.

479. No podrán aceptarse las letras condicionalmente, pero sí limitarse la aceptación á menor cantidad de la que la letra importa, en cuyo caso será protestable por el resto hasta la total cantidad del giro.

480. La aceptación de la letra constituirá al aceptante en la obligación de pagarla á su vencimiento, sin que pueda relevarle del pago la excepción de no haberle hecho provisión de fondos el librador, ni otra alguna, salvo la de falsedad de la aceptación.

481. En el caso de negarse la aceptación de la letra de cambio, se protestará, y en virtud del protesto tendrá derecho el tenedor á exigir del librador, ó de cualquiera de los endosantes, que afiancen á su satisfacción el valor de la letra, ó depositen su importe, ó le reembolsen con los gastos de protesto y recambio, descontando el rédito legal por el término que falte hasta el vencimiento.

También podrá el tenedor, aunque tenga aceptada la letra por el librado, si éste hubiese dejado protestar otras aceptaciones, acudir antes del vencimiento á los indicados en ella, mediante protesto de mejor seguridad.

482. Si el poseedor de la letra dejare pasar los plazos fijados, según los casos, sin presentarla á la aceptación, ó no hiciere sacar el protesto, perderá todo derecho á exigir el afianzamiento, depósito ó reintegro, salvo lo dispuesto en el art. 525.

483. Si el poseedor de la letra no la presentare al cobro el día de su vencimiento, ó, en defecto de pago, no la hiciere protestar al siguiente, perderá el derecho á reintegrarse de los endosantes; y en cuanto al librador, se observará lo dispuesto en los artículos 458 y 460.

El poseedor no perderá su derecho al reintegro, si por fuerza mayor no hubiera sido posible presentar la letra ó sacar en tiempo el protesto.

484. Si las letras tuvieren indicaciones, hechas por el librador ó endosantes, de otras personas de quienes deba exigirse la aceptación en defecto de la designada en primer lugar, deberá el portador sacado el protesto si aquélla se negare á aceptarla, reclamar la aceptación de los sujetos indicados.

485. Los que remitieren letras de una plaza á otra fuera del tiempo necesario para que puedan ser presentadas ó protestadas oportunamente, serán responsables de las consecuencias que se originen por quedar aquéllas perjudicadas.

Sección sexta. De aval y sus efectos.

486. El pago de una letra podrá afianzarse con una obligación escrita, independientemente de la que contraen el aceptante y endosante, conocida con el nombre de aval[1]).

487. Si el aval estuviere concebido en términos generales y sin restricción, responderá, el que lo prestare, del pago de la letra, en los mismos casos y formas que la persona por quien salió garante; pero si la garantía se limitare á tiempo, caso, cantidad ó persona determinada, no producirá más responsabilidad que la que nazca de los términos del aval.

---

[1]) El aval de una letra constituído en documento distinto de ella estará sujeto al pago del timbre fijado para la letra (art. 149 L. del T.).

made, the time proves to have elapsed, the bill shall be recoverable on the day immediately following that of presentment.

478. Acceptance of a bill must be placed thereon or declined on the same day as the holder presents it with this object, and the person of whom acceptance is demanded may not retain the bill in his control on any pretext whatever.

If a bill presented for acceptance is to be paid in a place different from that of the residence of the acceptor, the address where payment is to be made must be expressed thereon.

A person who receives a bill for acceptance, if it is drawn upon him, or to cause it to be accepted, if it is drawn on a third person, and who keeps it in his control to be attached to another copy, and by letter, telegram or other written means, advises that it has been accepted, shall be liable to the drawer and indorsers thereof, in the same terms as if the acceptance were placed on the bill which occasioned the advice, even when that acceptance has not taken place or when he declines delivery of the accepted copy to a person who lawfully applies therefor.

479. Bills cannot be accepted conditionally, but the acceptance may be limited to a less amount than that of the bill, in which case it may be protested for the remainder up to the total amount of the draft.

480. Acceptance of the bill shall bind the acceptor to pay it at its maturity, and he cannot be relieved from the payment by the defence that the drawer has not provided him with funds, nor by any other defence, except that of forgery of the acceptance.

481. If acceptance of a bill of exchange is declined, it shall be protested, and by virtue of the protest the holder shall be entitled to demand that the drawer or any of the indorsers, should guarantee the value of the bill to his satisfaction, or deposit the amount thereof, or pay him, with the expenses of protest and re-exchange, less the discount for the legal interest for the time which intervenes to maturity.

Likewise although the bill has been accepted by the drawee, if the latter has allowed other acceptances to be protested, the holder may apply to the persons indicated thereon before maturity, by means of a protest for greater security.

482. If the holder of a bill allows the respective fixed times to pass, without presenting it for acceptance, or has not taken out a protest, he shall lose all right to demand the guarantee, deposit or payment, save as provided in art. 525.

483. If the holder of a bill does not present it for collection on the day of its maturity, or on default of payment, fails to protest it on the following day, he shall lose the right to payment by the indorsers; and as regards the drawer, the provisions of articles 458 and 460 shall be observed.

The holder shall not lose his right to payment, if it has not been possible to present the bill or take out the protest in time on account of *vis major*.

484. If the bills bear references, made by the drawer or indorsers, to other persons of whom acceptance must be demanded in default of the drawee defined in the first place, the holder, having taken out the protest if the latter declines to accept it, must claim acceptance of the persons indicated.

485. Persons who remit bills from one place to another outside the time which is necessary for their being presented or protested in due time, shall be liable for the consequences which are caused by their being prejudiced.

Sixth section. The aval and its effects.

486. Payment of a bill may be guaranteed by a written undertaking known by the name of *aval*[1]), independently of the obligation contracted by the acceptor and indorser.

487. If the *aval* is conceived in general terms and without restriction, the giver thereof shall be liable for the payment of the bill, in the same events and ways as the person for whom he went security; but if the guarantee is limited in time, event, amount or to a certain person, it shall not occasion greater liability than that which arises from the terms of the *aval*.

---

[1]) The *aval* of a bill, constituted by a different document, will be subject to payment of the stamp which is fixed for tho bill (art. 149 of the Stamp Act).

Sección séptima. Del pago.

488. Las letras de cambio deberán pagarse al tenedor el día de su vencimiento, con arreglo al art. 455.

489. Las letras de cambio deberán pagarse en la moneda que en las mismas se designe, y si la designada no fuere efectiva, en la equivalente, según el uso y costumbre en el mismo lugar del pago.

490. El que pague una letra de cambio antes de que haya vencido, no quedará libre de satisfacer su importe, si resultare no haber pagado á persona legítima.

491. El pago de una letra vencida hecho al portador, se presumirá válido, á no haber precedido embargo de su valor por auto judicial[1]).

492. El portador de la letra, que solicite su pago, está obligado á acreditar al pagador la identidad de su persona, por medio de documentos, ó convecinos que le conozcan ó salgan garantes de su identidad.

La falta de esta justificación no impedirá la consignación del importe de la letra por el pagador, dentro del día de su presentación, en un establecimiento ó persona á satisfacción del portador y del pagador, en cuyo caso el establecimiento ó persona conservarán en su poder la cantidad en depósito hasta el legítimo pago.

Los gastos y riesgos que este depósito ocasione serán de cuenta del tenedor de la letra.

493. El portador de una letra no estará obligado á percibir su importe antes del vencimiento; pero si lo aceptare, será válido el pago, á no ser en caso de quiebra del pagador en los quince días siguientes, conforme á lo dispuesto en el art. 879.

494. Tampoco podrá obligarse al portador, aun después del vencimiento, á recibir una parte y no el todo de la letra, y, sólo conviniendo en ello, podrá pagarse una parte de su valor y dejar la otra en descubierto.

En este caso, se podrá protestar la letra por la cantidad que hubiere dejado de pagarse, y el portador la retendrá en su poder, anotando en ella la cantidad cobrada y dando recibo separado de lo percibido.

495. Las letras aceptadas se pagarán precisamente sobre el ejemplar que contenga la aceptación[2]).

Si se pagare sobre alguno de los otros, quedará, el que lo hubiere hecho, responsable del valor de la letra al tercero que fuere portador legítimo de la aceptación.

496. No podrá el aceptante ser compelido al pago, aun cuando el portador del ejemplar distinto del de la aceptación se comprometa á dar fianza á satisfacción de aquél; pero en este caso, el portador podrá pedir el depósito y formular el protesto en los términos que establece el art. 498.

Si el aceptante admitiere voluntariamente la fianza y realizare el pago, quedará aquélla cancelada de derecho luego que haya prescrito la aceptación que dió motivo al otorgamiento de la fianza.

497. Las letras no aceptadas podrán pagarse después de su vencimiento, y no antes, sobre las segundas, terceras ó demás expedidas conforme al art. 448; pero no sobre las copias dadas según lo dispuesto en el art. 449, sin que se acompañe á ellas alguno de los ejemplares expedidos por el librador.

498. El que hubiere perdido una letra, aceptada ó no, y el que tuviere en su poder una primera aceptada á disposición de la segunda, y carezca de otro ejemplar para solicitar el pago, podrá requerir al pagador para que deposite el importe de la letra en el establecimiento público destinado á este objeto, ó en persona de

---

[1]) Este embargo habrá de solicitarse del juez por escrito; el cual, en vista de lo solicitado mandará requerir á quien procede para que deposite el valor de la letra en poder de quien convengan los interesados, y en caso de que esto no sea posible en el establecimiento público destinado al efecto, y si no lo hubiere en un comerciante matriculado de reconocida responsabilidad ó en su defecto en persona que tenga esta última circunstancia. — Verificado el embargo ó depósito, el juez fijará al solicitante un término prudencial, en relación con la distancia y facilidad de comunicaciones que exista con la plaza en donde se libró la letra, para que presente la segunda letra, ó pida en el juicio correspondiente el embargo definitivo de su valor, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho término sin haberlo hecho, se alzará el embargo ó depósito provisional. — Apesar de esto, el juez, mediando justa causa podrá prorrogar el plazo concedido al solicitante (art. 2128, 2129, 2130 L. de Enj. c.).

[2]) Si la aceptación se estampó sobre algún ejemplar que no fuere el original de la letra, y este no se acompañare, sea cualquiera la causa, habrá de reintegrarse el ejemplar aceptado con los timbres móviles correspondientes á su cuantía (art. 148, L. del T.).

Seventh Section. Payment.

488. Bills of exchange must be paid to the holder on the day of their maturity, according to art. 455.

489. Bills of exchange must be paid in the money which is defined therein, and if the defined money is not current, then in its equivalent, according to the usage and custom of the place of payment.

490. A person who pays a bill of exchange before it is mature, shall not be relieved from paying its amount, if it proves not to have been paid to the lawful person.

491. Payment of a matured bill made to the holder shall be presumed valid, if there has been no previous arrest of its value by judicial decree[1]).

492. The holder of a bill who applies for its payment is bound to prove to the payer the identity of his person, by means of documents, or neighbours who are acquainted with him or who warrant his identity.

Absence of this proof shall not hinder payment of the amount of the bill by the payer, within the day of its presentment, in an establishment or to a person to the satisfaction of the holder and payer, in which case the establishment or person shall keep the amount in its or his control on deposit, until lawful payment.

The expenses and risks occasioned by this deposit shall be borne by the holder of the bill.

493. The holder of a bill shall not be bound to receive its value before the maturity; but if he does accept it, the payment shall be valid, except in the case of the bankruptcy of the payer within the fifteen following days, according to the provisions of art. 879.

494. Nor shall the holder be obliged, even after the maturity, to receive a part and not the whole of the bill, and only when he agrees thereto, may a part of its value be paid and the rest be left uncovered.

In this case, the bill may be protested for the amount which has failed to be paid, and the holder shall retain it in his control, noting thereon the amount collected and giving a separate receipt for what he has received.

495. Accepted bills shall necessarily be paid on the copy which contains the acceptance[2]).

If it is paid on any of the others, he who has so paid it shall be liable for the value of the bill to the third person who is the lawful holder of the acceptance.

496. The acceptor cannot be compelled to pay, even when the holder of the copy, other than that of the acceptance, promises to give security to his satisfaction; but in this case, the holder may apply for the deposit and draw up the protest as enacted in art. 498.

If the acceptor voluntarily permits the guarantee and makes payment, the security shall *ipso facto* be cancelled as soon as the acceptance which gave rise to the granting of the guarantee is prescribed.

497. Unaccepted bills may be paid after their maturity, and not before, on the second, third or other copies issued according to art. 448; but not on copies given according to the provisions of art. 449, unless they are accompanied by one of the copies issued by the drawer.

498. A person who has lost a bill, whether accepted or not, and he who has in his control a first copy which is accepted to be attached to the second copy thereof, and lacks the other copy for applying for payment, may require the payer to deposit the amount of the bill in the public establishment appointed for this purpose, or with

---

[1]) Application for this arrest must be made to the judge in writing; and on examination of the application he shall require the proper person to deposit the value of the bill in the control of a person agreed by the interested parties, and if this is not possible, then in the public establishment appointed for that purpose, and in default, then with a registered merchant of known responsibility, or in default, with a person who has this last qualification. When the arrest or deposit has been made, the judge shall grant the applicant a time which is reasonable, taking into account the distance and facility of communication with the place where the bill was drawn, for the presentment of the second bill, or the application in the proper court for the definite arrest of its value, with a warning that if the said time elapses without this being done, the provisional arrest or deposit will be set aside. Nevertheless, if there is good reason, the judge may extend the time granted to the applicant (art. 2128, 2129, 2130 of the Law of Civil Procedure).

[2]) If the acceptance is printed on any copy which is not the original of the bill, and this does not accompany it for any reason, the accepted copy must pay by adhesive stamps corresponding to its amount (art. 148 of the Stamp Act).

mutua confianza, ó designada por el juez ó tribunal en caso de discordia[1]); y si el obligado al pago se negare al depósito, se hará constar la resistencia por medio de protesto igual al procedente por falta de pago, y con este documento conservará el reclamante sus derechos contra los que sean responsables á las resultas de la letra.

499. Si la letra perdida hubiere sido girada en el extranjero ó en Ultramar, y el portador acreditare su propiedad por sus libros y por la correspondencia de la persona de quien hubo la letra, ó por certificación del corredor que hubiere intervenido en la negociación, tendrá derecho á que se le entregue su valor, si, además de esta prueba, prestare fianza bastante; cuyos efectos subsistirán hasta que se presente el ejemplar de la letra dado por el mismo librador, ó hasta que ésta haya prescrito.

500. La reclamación del ejemplar que haya de sustituir á la letra perdida, deberá hacerse por el último tenedor á su cedente, y así sucesivamente de uno á otro endosante, hasta llegar al librador.

Ninguno podrá rehusar la prestación de su nombre é interposición de sus oficios para que sea expedido el nuevo ejemplar, satisfaciendo el dueño de la letra los gastos que se causen hasta obtenerlo.

501. Los pagos hechos á cuenta del importe de una letra por la persona á cuyo cargo estuviere girada, disminuirán en otro tanto la responsabilidad del librador y de los endosantes.

Sección octava. De los protestos.

502. La falta de aceptación ó de pago de las letras de cambio deberá acreditarse por medio de protesto, sin que el haber sacado el primero exima al portador de sacar el segundo, y sin que, ni por fallecimiento de la persona á cuyo cargo se gira, ni por su estado de quiebra, pueda dispensarse al portador de verificar el protesto.

503. Todo protesto por falta de aceptación ó de pago, impone á la persona que hubiere dado lugar á él la responsabilidad de gastos, daños y perjuicios.

504. Para que sea eficaz el protesto, deberá necesariamente reunir las condiciones siguientes: 1.ª Hacerse antes de la puesta del sol del día siguiente al en que se hubiere negado la aceptación ó el pago; y si aquél fuere feriado, en el primer día hábil; — 2.ª Otorgarse ante notario público[2]); — 3.ª Entenderse las diligencias con el sujeto á cuyo cargo esté girada la letra, — en el domicilio donde corresponda evacuarlas, si en éste pudiera ser habido; — y, no encontrándose en él, con los dependientes, si los tuviere; ó, en defecto de éstos, con su mujer, hijos ó criados, ó con el vecino de que habla el art. 505; — 4.ª Contener copia literal de la letra, de la aceptación, si la tuviere, y de todos los endosos é indicaciones comprendidos en la misma; — 5.ª Hacer constar el requerimiento á la persona que debe aceptar ó pagar la letra; y, no estando presente, á aquella con quien se entiendan las diligencias; — 6.ª Reproducir asimismo la contestación dada al requerimiento; — 7.ª Expresar en la misma forma la conminación de ser los gastos y perjuicios á cargo de la persona que hubiere dado lugar á ellos; — 8.ª Estar firmado por la persona á quien se haga, y, no sabiendo ó no pudiendo, por dos testigos presentes; — 9.ª Expresar la fecha y hora en que se ha practicado el protesto; — 10.ª Dejar en el acto extendida copia del mismo en papel común á la persona con quien se hubieren entendido las diligencias.

505. El domicilio legal para practicar las diligencias del protesto, será: 1.° El designado en la letra; — 2.° En defecto de esta designación, el que tenga de presente el pagador; — 3.° Á falta de ambos, el último que se le hubiere conocido.

No constando el domicilio del librado en ninguno de los tres sitios anteriormente señalados, se acudirá un vecino con casa abierta, del lugar donde hubiere de tener efecto la aceptación y el pago, con quien se entenderán las diligencias y á quien se entregará la copia.

506. Sea cual fuere la hora á que se saque el protesto, los notarios retendrán en su poder las letras, sin entregar éstas ni el testimonio del protesto al portador

---

[1]) El procedimiento para conseguir del juez este depósito es el que ya queda indicado en la nota 1, pág. 156.

[2]) Deberán abstenerse los notarios de protestar letras ni documentos que no estén extendidos en el papel y timbre correspondientes (art. 150 L. del T).

a person who is mutually trusted, or appointed by the judge or tribunal in case of disagreement[1]); and if the person obliged to pay declines the deposit, this refusal shall be shown by means of a protest similar to that for non-payment, and by this document the claimant shall preserve his rights against those who are responsible for the liabilities on the bill.

499. If the lost bill has been drawn abroad or oversea, and the holder proves his ownership by his books and by the correspondence with the person from whom he had the bill, or by certificate of the broker who took part in the negotiation, he shall be entitled to payment of its value, if he offers sufficient guarantee, in addition to this proof; the effects whereof shall continue until the copy of the bill issued by the same drawer is presented, or until it is prescribed.

500. The claim on the copy which is to replace the lost bill, must be made by the last holder on his assignor, and so successively from one to another indorser, until arriving at the drawer.

No one may refuse to offer his name and the interposition of his good offices in order that the new copy may be issued, on the owner of the bill paying the expenses which are caused until it is obtained.

501. Payments made by the drawee on account of the amount of a bill, shall to that extent diminish the liability of the drawer and of the indorsers.

Eighth Section. Protests.

502. The failure to accept or pay bills of exchange must be proved by means of protest, and protest in default of acceptance does not exempt the holder from protest in default of payment, nor can the holder be excused from making the protest, either by the death of the drawee or by his bankruptcy.

503. Every protest for failure to accept or pay, imposes the liability for expenses and damages on the person who has occasioned it.

504. For the protest to be valid, it must necessarily combine the following conditions: 1. It must be made before sunset of the day following that on which the acceptance or payment has been refused; and on the first business day if that is a public holiday; — 2. It must be executed before a notary public[2]); — 3. The measures must be addressed to the drawee, at the address where it is proper to perform them, if he is to be found therein; and if he is not to be found therein, then to his subordinates, if any; or, in default, to his wife, children or servants, or to the inhabitant spoken of in art. 505; — 4. It must contain a literal copy of the bill, of the acceptance, if any, and of all the indorsements and references comprised therein; — 5. It must show the demand on the person who ought to accept or pay the bill; and, if he is not present, on the person to whom the measures were addressed; — 6. It must also reproduce the answer to the demand; — 7. It must express in the same way the warning that the expenses and damages would have to be borne by the person who occasioned them; — 8. It must be signed by the person whom it is made for, and if he does not know how to write or cannot do so, by two witnesses then present; — 9. It must express the date and hour at which it is made; — 10. A copy thereof on ordinary paper must be left at the same time with the person to whom the measures were addressed.

505. The legal address for effecting the measures of the protest shall be: 1. That defined in the bill; — 2. In default of this definition, the present address of the payer; — 3. In default of both, his last known address.

If the drawee does not appear to have an address in any of the three places previously named, resort shall be had to an inhabitant with open house of business in the place where the acceptance and payment has to take effect, to whom the measures shall be addressed and the copy shall be delivered.

506. Whatever be the hour at which the protest is taken out, the notaries shall retain the bills in their control, and shall not deliver them or the certified copy of

[1]) The proceding to obtain this deposit from the judge is that which has already been indicated in note 1, page 156.

[2]) Notaries must abstain from protesting bills and documents which are not drafted on proper and stamped paper (art. 150 of the Stamp Act).

basta la puesta del sol del día en que se hubiese hecho; y si el protesto fuere por falta de pago, y el pagador se presentase entre tanto á satisfacer el importe de la letra y los gastos del protesto, admitirán el pago, haciéndole entrega de la letra con diligencia en la misma de haberse pagado y cancelado el protesto.

507. Si la letra protestada contuviere indicaciones, se hará constar en el protesto el requerimiento á las personas indicadas, y sus contestaciones y la aceptación ó el pago si se hubieren prestado á verificarlo.

En tales casos, si las indicaciones estuvieren hechas para la misma plaza, el término para la ultimación y entrega del protesto se ampliará hasta las once de la mañana del día siguiente hábil.

Si las indicaciones fuesen para plaza diferente, se cerrará el protesto como si no las contuviere, pudiendo el tenedor de la letra acudir á ellas dentro de un término que no exceda del doble tiempo que el que emplea el correo para llegar al mismo lugar desde el primeramente señalado, requiriendo notarialmente por su orden á las personas indicadas en cada plaza, y renovando con las mismas el protesto, si hubiere motivo para éste.

508. Todas las diligencias del protesto de una letra habrán de redactarse en un mismo documento, extendiéndose sucesivamente por el orden con que se practiquen.

De este documento dará el notario copia testimoniada al portador, devolviéndole la letra original.

509. Ningún acto ni documento podrá suplir la omisión y falta del protesto, para la conservación de las acciones que competen al portador contra las personas responsables á las resultas de la letra.

510. Si la persona á cuyo cargo se giró la letra se constituyere en quiebra, podrá protestarse por falta de pago aun antes del vencimiento; y protestada, tendrá el portador expedito su derecho contra los responsables á las resultas de la letra.

Sección novena. De la intervención en la aceptación y pago.

511. Si protestada una letra de cambio por falta de aceptación ó de pago, se presentare un tercero ofreciendo aceptarla ó pagarla por cuenta del librador ó por la de cualquiera de los endosantes, aun cuando no haya previo mandato para hacerlo, se le admitirá la intervención para la aceptación ó el pago, haciéndose constar una ú otro á continuación del protesto, bajo la firma del que hubiere intervenido y del notario, expresándose en la diligencia el nombre de la persona por cuya cuenta se haya verificado la intervención.

Si se presentaren varias personas á prestar su intervención, será preferido el que lo hiciere por el librador; y si todos quisieren intervenir por endosantes, será preferido el que lo haga por el de fecha anterior.

512. El que prestare su intervención en el protesto de una letra de cambio, si la aceptare, quedará responsable á su pago como si hubiese sido girada á su cargo, debiendo dar aviso de su aceptación por el correo más próximo, á la persona por quien ha intervenido; y si la pagare, se subrogará en los derechos del portador mediante el cumplimiento de las obligaciones prescritas á éste, con las limitaciones siguientes: 1.ª Pagándola por cuenta del librador, sólo éste le responderá de la cantidad desembolsada, quedando libres los endosantes; — 2.ª Pagándola por cuenta de uno de éstos, tendrá el derecho de repetir contra el mismo librador, contra el endosante por cuenta de quien intervino y contra los demás que le precedan en el orden de los endosos, pero no contra los que sean posteriores.

513. La intervención en la aceptación no privará al portador de la letra protestada del derecho á exigir del librador ó de los endosantes el afianzamiento á las resultas que ésta tenga.

514. Si el que no aceptó una letra, dando lugar al protesto por esta falta, se prestare á pagarla á su vencimiento, le será admitido el pago con preferencia al que intervino ó quiso intervenir para la aceptación ó el pago; pero serán de su cuenta los gastos causados por no haber aceptado la letra á su tiempo.

515. El que interviniere en el pago de una letra perjudicada, no tendrá otra acción que la que competiría al portador contra el librador que no hubiere hecho á tiempo provisión de fondos, ó contra aquel que conservara en su poder el valor de la letra sin haber hecho su entrega ó reembolso.

the protest to the holder until sunset of the day on which it is made; and if the protest is for want of payment, and the payer meanwhile presents himself to pay the amount of the bill and the expenses of the protest, they shall allow the payment, and deliver him the bill with a written note thereon that it has been paid and the protest cancelled.

507. If the protested bill contains references, the demand on the persons indicated (referees) shall be shown on the protest, with their answers and the acceptance or payment, if they have offered to make it.

In such cases, if the references were made for the same place, the term for the completion and delivery of the protest shall be extended until eleven o'clock of the morning of the following business day.

If the references were for a different place, the protest shall be closed as if it did not contain them, and the holder of the bill may apply to them within a term which does not exceed double the time which the post takes to arrive at the same place from that primarily appointed, and a notarial demand shall be made by his order on the persons indicated in each place, and the protest shall be renewed with regard to the same, if there is any reason therefor.

508. All the measures of the protest of a bill shall be drafted on the same document, and shall be written out in the successive order in which they are effected.

The notary shall give a certified copy of this document to the holder, and shall return him the original bill.

509. No act or document can supply the omission or want of protest, for the purpose of preserving the rights of action which are competent to the holder against the persons who are liable on the bill.

510. If the drawee of a bill becomes bankrupt, it may be protested for want of payment even before maturity; and after it has been protested, the holder shall have his right expedited against the persons liable on the bill.

Ninth Section. Acceptance and payment for honour.

511. If, when a bill of exchange has been protested for want of acceptance or payment, a third person presents himself and offers to accept or pay it on account of the drawer or of any of the indorsers, even when there is no previous mandate so to do, his intervention for acceptance or payment shall be admitted, and each shall be shown as a continuation of the protest, with the signature of the intervener and notary, expressing in the note the name of the person on whose behalf the intervention is made.

If several persons present themselves to offer their intervention, the one who does so on behalf of the drawer shall be preferred; and if all desire to intervene for indorsers, the one who does so for the indorser of earliest date shall be preferred.

512. The person who offers his intervention in the protest of a bill of exchange, and accepts it, shall be responsible for its payment as if it had been drawn upon him, and he must give notice of its acceptance by the first post to the person for whom he has intervened; and if he pays it, he shall be subrogated to the rights of the holder for the performance of the obligations prescribed therein, with the following restrictions: 1. When he pays it on behalf of the drawer, the latter alone shall be liable to him for the amount paid, the indorsers being free; — 2. When he pays it on behalf of an indorser, he shall be entitled to claim both against the drawer himself, against the indorser on whose behalf he intervened, and against the others who precede him in the order of the indorsements, but not against the subsequent indorsers.

513. Intervention in the acceptance shall not deprive the holder of the protested bill of the right to demand the guarantee of the liabilities on the bill by the drawer or the indorsers.

514. If a person who has not accepted a bill and has occasioned the protest on this ground, offers to pay it at its maturity, he shall be allowed to pay it in preference to him who intervened or wished to intervene for acceptance or payment; but he shall bear the expenses caused by his not having accepted the bill in due time.

515. A person who intervenes in the payment of a prejudiced bill, shall have no other right of action than that which would be competent to the holder against the drawer who has not made provision of funds in due time, or against the former when he keeps the value of the bill in his control, without delivering the bill or repaying it.

Sección décima. De las acciones que competen al portador de una letra de cambio.

516. En defecto de pago de una letra de cambio presentada y protestada en tiempo y forma, el portador tendrá derecho á exigir del aceptante, del librador ó de cualquiera de los endosantes, el reembolso con los gastos de protesto y recambio; pero intentada la acción contra alguno de ellos, no podrá dirigirla contra los demás sino en caso de insolvencia del demandado.

517. Si el portador de la letra protestada dirigiere su acción contra el aceptante antes que contra el librador y endosantes, hará notificar á todos ellos el protesto por medio de notario público, dentro de los plazos señalados en la sección quinta de este título para recoger la aceptación; y si se dirigiere contra alguno de los segundos, hará dentro de los mismos plazos igual notificación á los demás.

Los endosantes á quienes no se hiciere esta notificación quedarán exentos de responsabilidad, aun cuando el demandado resulte insolvente, y lo mismo se entenderá respecto del librador que probare haber hecho oportunamente provisión de fondos.

518. Si hecha excusión en los bienes del deudor[1]) ejecutado para el pago ó reembolso de una letra, sólo hubiere podido percibir el portador una parte de su crédito, podrá dirigirse contra los demás por el resto de su alcance hasta su completo reembolso, en la forma establecida en el art. 516.

Lo mismo se verificará en el caso de declararse en quiebra el ejecutado; y si todos los responsables de la letra se encontraren en igual caso, tendrá el reclamante derecho á percibir de cada masa el dividendo correspondiente á su crédito, hasta que sea extinguido en su totalidad.

519. El endosante que reembolsare una letra protestada, se subrogará en los derechos del portador de la misma, á saber: 1.° Si el protesto fuere por falta de aceptación, contra el librador y los demás endosantes que le precedan en orden, para el afianzamiento del valor de la letra, ó el depósito en defecto de fianza; — 2.° Si fuere por falta de pago, contra el mismo librador, aceptante y endosantes que le precedan, para el reintegro del valor de la letra y de todos los gastos que hubiere satisfecho.

Si para hacer el reembolso concurrieren el librador y endosantes, será preferido el librador; y, concurriendo sólo endosantes, el de fecha anterior.

520. Tanto el librador como cualquiera de los endosantes de una letra protestada, podrán exigir, luego que llegue á su noticia el protesto, que el portador reciba el importe con los gastos legítimos y les entregue la letra con el protesto y la cuenta de resaca.

521. La acción que nace de las letras de cambio para exigir en sus casos respectivos del librador, aceptantes y endosantes el pago ó el reembolso, será ejecutiva, debiendo despacharse la ejecución, en vista de la letra y del protesto, sin otro requisito que el reconocimiento judicial que hagan de su firma el librador ó endosantes demandados. Igual acción corresponderá al librador contra el aceptante, para compelerle al pago.

El reconocimiento de la firma no será necesario para despachar la ejecución contra el aceptante, cuando no se hubiere puesto tacha de falsedad en el acto del protesto por falta de pago.

522. La acción que se ejercite para conseguir el afianzamiento ó el depósito del valor de una letra de cambio en los casos en que proceda con arreglo á lo dispuesto en los artículos 481, 492 y 498 de este Código, se acomodará á los trámites prevenidos en el libro 3.°, parte 2.ª, título 3.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil[2]), bastando acompañar á la demanda, en el primer caso, el protesto que acredite la falta de la aceptación de la letra.

523. Contra la acción ejecutiva por letras de cambio, no se admitirán más excepciones que las consignadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil[3]).

---

[1]) Véase la pág. 123, nota 1.

[2]) El procedimiento ejecutivo puede verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.».

[3]) A más de las excepciones consignadas en el art. 1464 y 1465 de la L. de Enj. c., que pueden verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.», hay que tener en cuenta que el art. 151 de lo L. del T. dispone que todo efecto de comercio que no esté

Tenth Section. Rights of action by the holder of a bill of exchange.

516. On default of payment of a bill of exchange presented and protested in due time and form, the holder shall be entitled to demand payment with the expenses of protest and re-exchange from the acceptor, the drawer or any of the indorsers; but when an action has been brought against one of them, he cannot sue the others except when the defendant is insolvent.

517. If the holder of the protested bill brings his action against the acceptor before bringing one against the drawer and indorsers, he shall cause the protest to be notified to all of them by means of a notary public, within the times set out in the fifth section of this Title for obtaining the acceptance; and if he brings it against any of the indorsers, he shall make the like notification to the others within the same times.

The indorsers to whom this notification is not made shall be exempt from liability, even when the defendant proves to be insolvent, and the same shall be understood with respect to the drawer who proves that he made timely provision of funds.

518. If after execution on the property of a debtor[1]) who has been sued for payment or repayment of a bill, the holder has only been able to recover a part of his credit, he may sue the others for the rest of his account until his complete repayment, as enacted in art. 516.

The same shall take place when the defendant is declared bankrupt; and if all who are liable on the bill are in the same state, the claimant shall be entitled to receive from each estate the dividend which corresponds to his credit, until it is wholly extinguished.

519. An indorser who pays a protested bill shall be subrogated to the rights of the holder thereof, namely: 1. If the protest was for want of acceptance, against the drawer and the other indorsers who precede him in order, for the guarantee of the value of the bill, or the deposit in default of guarantee; — 2. If it was for want of payment, against the said drawer, the acceptor and the preceding indorsers, for payment of the value of the bill and all the expenses which he has incurred.

If the drawer and indorsers are ready to make the repayment, the drawer shall be preferred; and if the indorsers only, then the one of earliest date.

520. Both the drawer and any of the indorsers of a protested bill may demand, as soon as the protest comes to their notice, that the holder should receive the amount with the lawful expenses and should deliver them the bill with the protest and the account for the re-draft.

521. The action arising from bills of exchange for demanding payment or repayment from the drawer, acceptors and indorsers respectively, shall be executive, and execution must issue on inspection of the bill and protest, with no other requisite than the judicial verification of their signatures by the defendant drawer or indorsers. A like action is available to the drawer against the acceptor, to compel him to pay.

Verification of the signature shall not be necessary for the purpose of issuing execution against the acceptor, when an objection of forgery has not been made at the time of the protest for want of payment.

522. An action brought to obtain the guarantee or the deposit of the value of a bill of exchange in the cases which proceed in accordance with the provisions of articles 481, 492 and 498 of this Code, shall follow the procedure in book 3, part. 2, title 3 of the Law of Civil Procedure[2]), and it is sufficient, in the first case, that the protest which proves the want of acceptance of the bill should accompany the claim.

523. No other defences shall be allowed in an executive action on bills of exchange, than those set out in the Law of Civil Procedure[3]).

---

[1]) See page 123, note 1.

[2]) The executive procedure may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

[3]) Besides the defences set out in arts. 1464 and 1465 of the Law of Civil Procedure, which may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters", it must be remembered that art. 151 of the Stamp Act provides that every commercial draft which is not written out

524. La cantidad de que un acreedor haga remisión ó quita al deudor contra quien repita el pago ó reembolso de una letra de cambio, se entenderá condonada también á los demás que sean responsables de las resultas de la cobranza.

525. No tendrá efecto la caducidad de la letra perjudicada por falta de presentación, protesto y su notificación en los plazos que van determinados, respecto del librador ó endosante que, después de transcurridos dichos plazos, se hubiere saldado del valor de la letra en sus cuentas con el deudor, ó reembolsado con valores ó efectos de su pertenencia.

526. Las letras de cambio protestadas por falta de pago, devengarán interés, en favor de los portadores, desde la fecha del protesto.

Sección undécima. Del recambio y resaca.

527. El portador de una letra de cambio protestada podrá reembolsarse de su importe y gastos de protesto y recambio girando una nueva letra contra el librador ó uno de sus endosantes, y acompañando á este giro la letra original, el testimonio del protesto y la cuenta de resaca, que sólo contendrá las partidas siguientes: 1.ª Capital de la letra protestada; — 2.ª Gastos del protesto; — 3.ª Derechos del sello para la resaca; — 4.ª Comisión de giro á uso de la plaza; — 5.ª Corretaje de la negociación; — 6.ª Gastos de la correspondencia; — 7.ª Daño de recambio.

En esta cuenta se expresará el nombre de la persona á cuyo cargo se gira la resaca.

528. Todas las partidas de la resaca se ajustarán al uso de la plaza, y el recambio, al curso corriente el día del giro; lo cual se justificará con la cotización oficial de la Bolsa, ó con certificación de agente ó corredor oficial, si los hubiere, ó, en su defecto, con la de dos comerciantes matriculados.

529. No podrá hacerse más que una cuenta de resaca por cada letra de cambio, cuya cuenta satisfarán los endosantes de uno en otro hasta que se extinga con el reembolso del librador.

Tampoco habrá que abonar más de un recambio, y su importe se graduará aumentando ó disminuyendo la parte que á cada uno corresponda, según que el papel sobre la plaza á que se dirija la resaca, se negocie en la de su domicilio con premio ó con descuento, cuya circunstancia se acreditará mediante certificación de agente, corredor ó comerciante.

530. El portador de una resaca no podrá exigir interés legal de su importe, sino desde el día en que requiriere, en la forma del art. 63 de este Código, á la persona de quien tenga derecho de cobrarlo.

Título XI. De las libranzas, vales y pagarés á la orden, y de los mandatos de pago llamados cheques.

Sección primera. De las libranzas y de los vales y pagarés á la orden.[2]

531. Las libranzas, vales ó pagarés á la orden deberán contener: 1.° El nombre específico de la libranza, vale ó pagaré; — 2.° La fecha de la expedición; — 3.° La cantidad; — 4.° La época del pago; — 5.° La persona á cuya orden se habrá de hacer el pago, y, en las libranzas, el nombre y domicilio de la persona contra quien estén libradas; — 6.° El lugar donde deberá hacerse el pago; — 7.° El origen y especie del valor que representen; — 8.° La firma del que expida la libranza, y, en los vales ó pagarés, la del que contrae la obligacion de pagarlos.

---

extendido en el papel correspondiente del que expenda el Estado, ó reintegrado en forma, si fuere de los que se extendiesen en papel común, no podrá admitirse por Tribunal ni oficina pública de ningún orden y grado, careciendo por tanto de la eficacia *ejecutiva* que los documentos mercantiles llevan aparejada. Esto no obsta para que, como obligación puramente civil, pueda utilizarse la forma de enjuiciar que para compeler al cumplimiento de las de este último orden reconoce el derecho común.

[2]) Los pagarés á la orden y las libranzas también á la orden están sujetos al pago del impuesto del timbre en los mismos términos y condiciones que las letras. (Véanse las notas desde la pág. 151 (1) hasta la pág. 150 (3), ambas inclusives.)

524. An amount which a creditor remits in whole or in part to a debtor who is sued for payment or repayment of a bill of exchange, shall be understood as forgiven likewise to the others who are responsible for the results of the collection.

525. Subsequent invalidity of a bill which is prejudiced by want of presentment, protest and its notification in the fixed times, shall not take effect as regards a drawer or indorser who, after the expiration of the said times, has balanced the value of the bill in his accounts with the debtor, or has paid it by securities or effects belonging to him.

526. Bills of exchange protested for want of payment shall earn interest in favour of the holders, from the date of the protest.

Eleventh Section. Re-exchange and re-draft.[1]

527. The holder of a protested bill of exchange may repay himself its amount and the expenses of protest and re-exchange by drawing a new bill against the drawer or one of his indorsers, and this draft shall be accompanied by the original bill, the certified copy of the protest and the account of the re-draft, which shall only contain the following items: 1. Principal sum of the protested bill; — 2. Expenses of the protest; — 3. Stamp duties on the re-draft; — 4. Commission on the draft according to the local usage; — 5. Brokerage for the negotiation; — 6. Expenses of the correspondence; — 7. Damages for re-exchange.

The name of the person on whom the re-draft is drawn shall be stated in this account.

528. All the items of the re-draft shall conform to the local usage, and the re-exchange to the rate current on the day of the draft; which shall be proved by the official quotation of the Exchange, or by the certificate of an official agent or broker, if any, or in default, by that of two registered merchants.

529. No more than one re-draft account may be made for each bill of exchange, which account the indorsers shall pay from one to the other until it is extinguished by the payment of the drawer.

Nor must more than one re-exchange be paid, and its amount shall be graduated by increasing or lessening the part which affects each, according as a draft on the place to which the re-draft is addressed is negotiated in its domicil with a premium or a discount, a circumstance which shall be proved by a certificate of an agent, broker or merchant.

530. The holder of a re-draft cannot demand legal interest on its amount, except from the day on which the demand is made, in the way enacted by art. 63 of this Code, on the person from whom he is entitled to recover it.

Title XI. Drafts, promissory notes to order, and orders to pay, called cheques.

First Section. Drafts, vales and promissory notes to order.[2]

531. Drafts, *vales*[3]) or promissory notes to order must contain: 1. The specific name of the draft or promissory note; — 2. The date of the issue; — 3. The amount; — 4. The time for payment; — 5. The person to whose order payment is to be made, and in the drafts, the name and address of the person on whom they are drawn; — 6. The place where payment is to be made; — 7. The origin and species of the value which they represent; — 8. The signature of the person who issued the draft, and in promissory notes, that of the person who contracts the obligation to pay them.

---

on paper issued by the State, or duly paid, if it is one of those which should be written out on ordinary paper, cannot be admitted by a Tribunal or public office of any order or grade, and that it therefore lacks the prompt executive validity which mercantile documents have. This does not prevent that, as a purely civil obligation, the form of action may be utilised to compel the performance of those of the latter order which are recognised by the common law.

1) This is also called "cross bill". (Translator.)

2) Promissory notes to order, and drafts, also to order, are subject to the payment of stamp duty in the same terms and conditions as bills (See the notes from page 151 (1) to page 159 (3) inclusive).

3) *Vale* may be an order for specified goods by one merchant on another with whom he has an open credit. (Translator.)

Los vales que hayan de pagarse en distinto lugar del de la residencia del pagador, indicarán un domicilio para el pago.

532. Las libranzas á la orden entre comerciantes, y los vales ó pagarés también á la orden, que procedan de operaciones de comercio, producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio, excepto en la aceptación, que es privativa de éstas.

Los vales ó pagarés que no estén expedidos á la orden, se reputarán simples promesas de pago, sujetas al derecho común ó al mercantil, según su naturaleza, salvo lo dispuesto en el título siguiente.

533. Los endosos de las libranzas y pagarés á la orden deberán extenderse con la misma expresión que los de las letras de cambio.

Sección segunda. De los mandatos de pago llamados cheques.

534. El mandato de pago, conocido en el comercio con el nombre de cheque, es un documento que permite al librador retirar, en su provecho ó en el de un tercero, todos ó parte de los fondos que tiene disponibles en poder del librado.

535. El mandato de pago deberá contener: El nombre y la firma del librador, nombre del librado y su domicilio, cantidad y fecha de su expedición, que habrán de expresarse en letra, y si es al portador, á favor de persona determinada[2]) ó á la orden[3]): en el último caso, será transmisible por endoso.

536. Podrá librarse dentro de la misma plaza de su pago ó en lugar distinto; pero el librador está obligado á tener anticipadamente hecha la provisión de fondos en poder del librado.

537. El portador de un mandato de pago deberá presentarle al cobro dentro de los cinco días de su creación si estuviere librado en la misma plaza, y á los ocho días si lo fuere en otra diferente.

El portador que dejare pasar este término, perderá su acción contra los endosantes, y también la perderá contra el librador si la provisión de fondos hecha en poder del librado desapareciese porque éste suspendiera los pagos ó quebrase.

538. El plazo de ocho días que fija el artículo anterior para los mandatos de pago librados de plaza á plaza, se entenderá ampliado hasta los doce días de su fecha para los librados en el extranjero.

539. El pago del mandato se exigirá al librado en el acto de la presentación. La persona á quien se pague expresará en el recibí su nombre y la fecha del pago.

540. No podrán expedirse duplicados de los mandatos de pago, sin haber anulado previamente los originales, después de vencidos, y obtenido la conformidad del librado.

541. El librador ó cualquier tenedor legal de un mandato de pago tendrá derecho á indicar en él que se pague á banquero ó sociedad determinada, lo cual expresará escribiendo cruzado en el anverso el nombre de dicho banquero ó sociedad, ó solamente las palabras «y compañía».

El pago hecho á otra persona que no sea el banquero ó sociedad indicada, no relevará de responsabilidad al librado si hubiese pagado indebidamente.

542. Serán aplicables á estos documentos las disposiciones contenidas en este Código respecto á la garantía solidaria del librador y endosantes, al protesto y al ejercicio de las acciones provenientes de las letras de cambio.

---

[2]) Los cheques al portador, y los expedidos á favor de persona determinada, llevarán: timbre móvil de 10 céntimos de peseta, clase 16ª, cuando su cuantía no exceda de 25000 pesetas; timbre de 25 céntimos, clase 15ª desde 25 000,01 á 50 000 pesetas; y timbre de 50 céntimos, clase 12ª desde 50 000,01 pesetas en adelante; pero si fueren satisfechos ó renovados por el librador se considerarán como pagarés ó letras para los efectos del pago del timbre, á no ser que lleven unido el correspondiente protesto, en el que conste, además, que en la fecha en que se expidió el cheque tenía el librado en su poder, de la propiedad y á disposición del librador, fondos suficientes para satisfacerlo. — Los timbres se inutilizarán estampando en ellos la fecha del documento (art. 140 L. del. T.).

[3]) Los cheques á la orden están sujetos al pago del impuesto del timbre en los mismos términos y condiciones que las letras de cambio. (Véanse las notas pág. 151 (1) hasta la pág. 159 (3) ambas inclusives.)

Vales[1]) which are to be paid in a place different from that of the payer, shall indicate a place for the payment.

532. Drafts to order between merchants, and *vales*[1]) or promissory notes, also to order, which proceed from commercial transactions, shall produce the same obligations and effects as bills of exchange, except as regards acceptance, which is peculiar to the latter.

Vales[1]) or promissory notes which are not issued to order, shall be considered as simple pronises to pay, subject to the common law or to the mercantile law, according to their nature, saving the provisions of the following Title.

533. Indorsements on drafts and promissory notes to order must be expressed in the same way as those on bills of exchange.

Second Section. Orders to pay, called cheques.

534. The order to pay, known in commerce by the name of cheque, is a document which permits the drawer to withdraw, for his benefit or that of a third person, all or part of the funds which he has at his disposal in the control of the drawee.

535. The order to pay must contain: I. The name and signature of the drawer, name of the drawee and his address, amount and date of its issue, which must be expressed in words, and whether it is to bearer, in favour of a person certain[2]) or to order[3]): in the last case, it shall be transferable by indorsement.

536. A cheque may be drawn in the same place as that of its payment or in a different place; but the drawer is bound to have made an advance provision of funds in the control of the drawee.

537. The bearer of an order to pay must present it for collection within five days from its making, if it is drawn in the same place, and within eight days, if it is drawn in a different place.

The holder who allows this time to pass, shall lose his right of action against the indorsers, and he shall likewise lose it as against the drawer, if the provision of funds made in the control of the drawee disappears because the latter suspends payment or becomes bankrupt.

538. The space of eight days fixed by the preceding article for orders to pay drawn from place to place, shall be understood to be extended to twelve days from their date for those drawn abroad.

539. Payment of the order shall be demanded of the drawee at the time of the presentment. The person to whom it is paid shall express his name and the date of the payment on the receipt.

540. Duplicates of orders to pay cannot be issued, unless the originals have been previously annulled after maturity, and after the consent of the drawee has been obtained.

541. The drawer or any legal holder of an order to pay shall be entitled to indicate thereon that it be paid to a banker or a certain society, which he shall express by writing across the face the name of the said banker or society, or only the words "y compañia".

Payment made to a person other than the banker or society indicated, shall not release the drawee from liability, if he has paid improperly.

542. The provisions contained in this Code with reference to the joint and several guarantee of the drawer and indorsers, to the protest and bringing the actions arising from bills of exchange, shall apply to these documents.

---

[1]) *Vale* may be an order for specicfied goods by one merchant on another with whom he has an open credit. (Translator.)

[2]) Cheques to bearer, and those issued in favour of a certain person, must carry: an adhesive stamp of 15 céntimos, class 16, [when their amount does not exceed 25 000 pesetas; of 25 céntimos, class 15, from 25 000,01 to 50 000 pesetas; 50 centimos, class 12 from 50 000,01 pestas upwards;] but if they are paid or renewed by the drawer they will be considered as promissory notes or bills for the purpose of paying stamp duty, unless they are attached to the corresponding protest, in which it is shown also that on the date on which it was issued the drawee had in his control, sufficient funds to pay it, belonging to and at the disposal of the drawer. The stamps must be cancelled by printing thereon the date of the document (art. 140 of the Stamp Act). The words in brackets were repealed by the Stamp Act of 1911, and the ordinary stamp on cheques was increased from 10 to 15 céntimos (Translator).

[3]) Cheques to order are subject to the payment of stamp duty in the same terms and conditions as bills of exchange. (See notes on pages 151 to 159 inclusive.)

543. Regirán para las órdenes de pago en cuenta corriente de los Bancos ó sociedades mercantiles, conocidas bajo el nombre de talones, las disposiciones anteriores en lo que les sean aplicables[1]).

Título XII. De los efectos al portador y de la falsedad, robo, hurto ó extravío de los mismos.

Sección primera. De los efectos al portador.

544. Todos los efectos á la orden, de que trata el título anterior, podrán emitirse al portador y llevarán, como aquéllos, aparejada ejecución[2]) desde el día de su vencimiento, sin más requisito que el reconocimiento de la firma del responsable á su pago. El día del vencimiento se contará según las reglas establecidas para los efectos expedidos á la orden, y contra la acción ejecutiva no se admitirán más excepciones que las indicadas en el art. 523.

545. Los demás efectos al portador, bien sean de los enumerados en el art. 68, ó bien billetes de Banco, acciones ú obligaciones de otros Bancos, compañías de crédito territorial, agrícola ó mobiliario, de compañías de ferrocarriles, de obras públicas, industriales, comerciales ó de cualquier otra clase, emitidas conforme á las Leyes y disposiciones de este Código, producirán los efectos siguientes: 1.° Llevarán aparejada ejecución dichos títulos, lo mismo que sus cupones[3]), desde el día del vencimiento de la obligación respectiva, ó á su presentación, si no le tuvieren señalado; — 2.° Serán transmisibles por la simple tradición del documento; — 3.° No estarán sujetos á reivindicación si hubieren sido negociados en Bolsa con intervención de agente colegiado, y, donde no lo hubiere, con intervención de notario público ó corredor de comercio.

Quedarán á salvo los derechos y acciones del legítimo propietario contra el vendedor ú otras personas responsables según las Leyes, por los actos que le hayan privado de la posesión y dominio de los efectos vendidos.

546. El tenedor de un efecto al portador tendrá derecho á confrontarlo con sus matrices siempre que lo crea conveniente.

Sección segunda. Del robo, hurto ó extravío de los documentos de crédito y efectos al portador.

547. Serán documentos de crédito al portador, para los efectos de esta sección, según los casos: 1.° Los documentos de crédito contra el Estado, provincias ó municipios, emitidos legalmente; — 2.° Los emitidos por Naciones extranjeras cuya cotización haya sido autorizada por el Gobierno á propuesta de la Junta sindical del Colegio de Agentes; — 3.° Los documentos de crédito al portador, de empresas extranjeras constituídas con arreglo á la Ley del Estado á que pertenezcan; — 4.° Los documentos de crédito al portador emitidos con arreglo á su Ley constitutiva por establecimientos, compañías ó empresas nacionales; — 5.° Los emitidos por particulares, siempre que sean hipotecarios ó estén suficientemente garantidos.

548. El propietario desposeído, sea cual fuere el motivo, podrá acudir ante el juez ó tribunal competente, para impedir que se pague á tercera persona el capital, los intereses ó dividendos vencidos ó por vencer, así como también para evitar que se transfiera á otro la propiedad del título ó conseguir que se le expida un duplicado.

Será juez ó tribunal competente el que ejerza jurisdicción en el distrito en que se halle el establecimiento ó persona deudora.

549. En la denuncia que al juez ó tribunal haga el propietario desposeído, deberá indicar el nombre, la naturaleza, el valor nominal, el número, si lo tuviere, y la serie de los títulos; y además, si fuere posible, la época y el lugar en que vino á ser propietario, y el modo de su adquisición; la época y el lugar en que recibió los últimos intereses ó dividendos, y las circunstancias que acompañaron á la desposesión.

---

[1]) También son aplicables á estos talones los preceptos de la L. del T. á que hacen referencia las dos anteriores notas.

[2]) El procedimiento ejecutivo por el cual puede hacerse efectivo el valor de estos documentos puede verse en el estudio «Del proc. judic. en las cuest. civ.-merc.»

[3]) Véase la nota anterior.

543. The preceding provisions, so far as they are applicable, shall govern orders to pay on current account of Banks and mercantile societies[1]) known under the name of "Talon".

Title XII. Securities to bearer and the forgery, robbery, theft or mislaying thereof.

First Section. Securities to bearer.

544. All securities to order, dealt with in the preceding Title, may be issued to bearer, and these, like those to order, shall carry prompt execution[2]) from the day of their maturity, with no further requisite than the verification of the signature of the person liable for their payment. The day of the maturity shall be reckoned according to the rules enacted for securities issued to order, and no defences to the executive action other than those indicated in article 523 shall be admitted.

545. Other securities to bearer, whether among those enumerated in art. 68, or bank notes, shares or bonds of other Banks, companies for lending on land, agricultural or chattel security, railroad companies, for public works, industrial, commercial or of any other kind, issued in conformity with the Laws and provisions of this Code, shall produce the following effects: 1. The said securities and their coupons[3]) shall carry prompt execution, from the day of the maturity of the respective obligations, or on their presentment, if no day is stated therein; — 2. They shall be transferable by simple delivery of the document; — 3. They shall not be subject to *reivindicatio*, if they have been negotiated on the Exchange with the intervention of a Collegiate agent, and where there are none, with the intervention of a notary public or a commercial broker.

The rights and rights of action of the lawful owner against the seller or other persons who are liable by law, for the acts which have deprived him of the possession and *dominium* of sold securities shall remain unaffected.

546. The holder of a security to bearer shall be entitled to compare it with its matrix whenever he may think fit.

Second Section. Robbery, theft or mislaying of documents of credit and securities to bearer.

547. For the purposes of this section, the following shall be documents of credit, as the case may be: 1. Lawfully issued documents of credit against the State, provinces or municipalities; — 2. Those issued by foreign nations, the quotation whereof has been authorised by the Government on the proposal of the Governing Board of the College of Agents; — 3. Bearer documents of credit, issued by foreign undertakings in accordance with the law of the State to which they belong; — 4. Bearer documents of credit, issued in accordance with the Law of their constitution by national establishments, companies or undertakings; — 5. Those issued by individuals, provided that they are secured by mortgage or other sufficient guarantee.

548. An owner who has been dispossessed on any ground whatever, may apply to the competent judge or Tribunal, to prevent payment to a third person of the principal, interest or dividends, due or to become due, as well as to avoid the ownership of the security being transferred to another, or to obtain the issue to himself of a duplicate.

The judge or Tribunal which exercises jurisdiction in the district wherein is the debtor establishment or person shall be the competent one.

549. In the information which the dispossessed owner lays before the judge or tribunal, he must indicate the name, nature, nominal value, number, if any, and the series of the securities; and likewise, if it is possible, the time and place at which he became owner, and the mode of their acquisition; the time and place at which he received the last interest or dividends, and the particulars of the dispossession.

---

[1]) The provisions of the Stamp Act to which the two preceding notes refer, likewise apply to these talones. (*Talones* are sight drafts with counterfoils which act as vouchers. Translator.)

[2]) The executive proceeding whereby the value of these documents can be made effective, may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

[3]) See the previous note.

El desposeído, al hacer la denuncia, señalará, dentro del distrito en que ejerza jurisdicción el juez ó tribunal competente, el domicilio en que habrán de hacérsele saber todas las notificaciones.

550. Si la denuncia se refiriese únicamente al pago del capital ó de los intereses ó dividendos vencidos ó por vencer, el juez ó tribunal, justificada que sea en cuanto á la legitimidad de la adquisición del título, deberá estimarla, ordenando en el acto: 1.° Que se publique la denuncia inmediatamente en la *Gaceta de Madrid*, en el *Boletín oficial* de la provincia y en el *Diario oficial de Avisos* de la localidad, si lo hubiere, señalando un término breve dentro del cual pueda comparecer el tenedor del título; — 2.° Que se ponga en conocimiento del centro directivo que haya emitido el título, ó de la compañía ó del particular de quien proceda, para que retengan el pago de principal é intereses.

551. La solicitud se sustanciará con audiencia del ministerio fiscal y en la forma que para los incidentes prescribe la Ley de Enjuiciamiento Civil[1]).

552. Transcurrido un año desde la denuncia sin que nadie la contradiga, y si en el intervalo se hubieren repartido dos dividendos, el denunciante podrá pedir al juez ó tribunal autorización, no sólo para percibir los intereses ó dividendos vencidos ó por vencer, en la proporción y medida de su exigibilidad, sino también el capital de los títulos, si hubiere llegado á ser exigible.

553. Acordada la autorización por el juez ó tribunal, el desposeído deberá, antes de percibir los intereses ó dividendos ó el capital, prestar caución bastante y extensiva al importe de las anualidades exigibles y además al doble valor de la última anualidad vencida.

Transcurridos dos años desde la autorización sin que el denunciante fuere contradicho, la caución quedará cancelada.

Si el denunciante no quisiere ó no pudiere prestar la caución, podrá exigir de la compañía ó particular deudores el depósito de los intereses ó dividendos vencidos ó del capital exigible, y recibir á los dos años, si no hubiere contradicción, los valores depositados.

554. Si el capital llegare á ser exigible después de la autorización, podrá pedirse bajo caución ó exigir el depósito.

Transcurridos cinco años sin oposición desde la autorización, ó diez desde la época de la exigibilidad, el desposeído podrá recibir los valores depositados.

555. La solvencia de la caución se apreciará por los jueces ó tribunales.

El denunciante podrá prestar fianza y constituirla en títulos de renta sobre el Estado, recobrándola al terminar el plazo señalado para la caución.

556. Si en la denuncia se tratare de cupones al portador separados del título, y la oposición no hubiere sido contradicha, el opositor podrá percibir el importe de los cupones, transcurridos tres años á contar desde la declaración judicial estimando la denuncia.

557. Los pagos hechos al desposeído en conformidad con las reglas antes establecidas, eximen de toda obligación al deudor; y el tercero que se considere perjudicado, sólo conservará acción personal contra el opositor que procedió sin justa causa.

558. Si, antes de la liberación del deudor, un tercer portador se presentare con los títulos denunciados, el primero deberá retenerlos y hacerlo saber al juez ó tribunal y al primer opositor, señalando á la vez el nombre, vecindad ó circunstancias por las cuales pueda venirse en conocimiento del tercer portador.

La presentación de un tercero suspenderá los efectos de la oposición hasta que decida el juez ó tribunal.

559. Si la denuncia tuviere por objeto impedir la negociación ó transmisión de títulos cotizables, el desposeído podrá dirigirse á la Junta sindical del Colegio de Agentes, denunciando el robo, hurto ó extravío, y acompañando nota expresiva de las series y números de los títulos extraviados, época de su adquisición y título por el cual se adquirieron.

---

[1]) La tramitación de estos incidentes puede verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest civ.-merc.»

On laying the information, the dispossessed person shall state the address at which all notifications are to be made to him within the district in which the competent judge or tribunal exercises jurisdiction.

550. If the information refers only to the payment of the principal or of the interest or dividends due or to become due, the judge or tribunal, however the lawfulness of the acquisition of the security is proved, shall judge the fact and at once order: 1. That the information be immediately published in the *Gaceta de Madrid*, in the *Boletin Oficial* of the province and in the *Diario oficial de Avisos* of the locality, if any, stating a short time within which the holder of the security may appear; — 2. That notice be given to the central directorate which has issued the security, or the company or individual from whom it proceeds, in order that they may withhold the payment of the principal and interest.

551. The application shall be substantiated by hearing the public prosecutor and in the way prescribed by the Law of Civil Procedure for interlocutory applications[1]).

552. When one year has expired from the information without anyone contradicting it, and if in the interval two dividends have been divided, the informer may apply to the judge or tribunal for authorisation, not only to collect the interest or dividends due or to become due, in the proportion and measure in which they are demandable, but likewise the principal of the securities, if they have become payable.

553. If the authorisation is granted by the judge or tribunal, the person dispossessed, before collecting the interest or dividends or the principal, shall give sufficient security extending to the amount of the payable annuities and also to double the value of the last due annuity.

The security shall be cancelled on the expiration of two years from the authorisation, if the informer has not been contradicted.

If the informer does not wish or is not able to give the security, he may require the debtor company or individual to deposit the due interest or dividends or the payable principal, and if there is no contradiction he may receive the deposited values at the end of the two years.

554. If the principal becomes payable after the authorisation, he may apply for it on giving security or may require the deposit.

After the expiration of five years from the authorisation without opposition, or ten from the time of their becoming payable, the person dispossessed may receive the deposited values.

555. The sufficiency of the security shall be appraised by the judges or tribunals.

The informer may offer and constitute a guarantee on securities issued by the State, recovering it at the end of the time fixed for the security.

556. If the information deals with bearer coupons detached from the security, and the opposition has not been contradicted, the opponent may receive the amount of the coupons, after three years reckoned from the judicial declaration on the information.

557. Payments made to the dispossessed person in conformity with the above enacted rules, exempt the debtor from all responsibility; and a third person who considers himself prejudiced shall only retain a right of personal action against the opponent who proceeded without just cause.

558. If, before the liberation of the debtor, another holder presents himself with the denounced securities, the former must retain them and give notice to the judge or tribunal and to the first opponent, stating at the same time the name, habitation or particulars by which it may come to the knowledge of the other holder.

The appearance of a third person shall suspend the effects of the opposition until the judge or tribunal decides.

559. If the information was intended to prevent the negotiation or transfer of quotable securities, the dispossessed person may apply to the Governing Board of the College of Agents, informing them of the robbery, theft or mislaying, with an accompanying note stating the series and numbers of the strayed securities, the time of their acquisition and the title by which they were acquired.

---

[1]) This interlocutory procedure may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

La Junta sindical, en el mismo día de Bolsa ó en el inmediato, fijará aviso en el tablón de edictos; anunciará, al abrirse la Bolsa, la denuncia hecha, y avisará á las demás juntas de síndicos de la Nación, participándoles dicha denuncia.

Igual anuncio se hará, á costa del denunciante, en la *Gaceta de Madrid*, en el *Boletín oficial* de la provincia y en el *Diario oficial de Avisos* de la localidad respectiva.

560. La negociación de los valores robados, hurtados ó extraviados, hecha después de los anuncios á que se refiere el artículo anterior, será nula, y el adquirente no gozará del derecho de la no reivindicación; pero sí quedará á salvo el del tercer poseedor contra el vendedor y contra el agente que intervino en la operación.

561. En el término de nueve días, el que hubiere denunciado el robo, hurto ó extravío de los títulos deberá obtener el auto correspondiente del juez ó tribunal, ratificando la prohibición de negociar ó enajenar los expresados títulos.

Si este auto no se notificare ó pusiere en conocimiento de la Junta sindical en el plazo de los nueve días, anulará la Junta el anuncio y será válida la enajenación de los títulos que se hiciere posteriormente.

562. Transcurridos cinco años, á contar desde las publicaciones hechas en virtud de lo dispuesto en los artículos 550 y 559, y de la ratificación del juez ó tribunal á que se refiere el 561, sin haber hecho oposición á la denuncia, el juez ó tribunal declarará la nulidad del título sustraído ó extraviado, y lo comunicará al centro directivo oficial, compañía ó particular de que proceda, ordenando la emisión de un duplicado á favor de la persona que resultare ser su legítimo dueño.

Si dentro de los cinco años se presentase un tercer opositor, el término quedará en suspenso hasta que los jueces ó tribunales resuelvan.

563. El duplicado llevará el mismo número que el título primitivo; expresará que se expidió por duplicado; producirá los mismos efectos que aquél, y será negociable con iguales condiciones.

La expedición del duplicado anulará el título primitivo, y se hará constar así en los asientos ó registros relativos á éste.

564. Si la denuncia del desposeído tuviere por objeto, no sólo el pago del capital, dividendos ó cupones, sino también impedir la negociación ó transmisión en Bolsa de los efectos cotizables, se observarán, según los casos, las reglas establecidas para cada uno en los artículos anteriores.

565. No obstante lo dispuesto en esta sección, si el desposeído hubiese adquirido los títulos en Bolsa, y á la denuncia acompañara el certificado del agente en el cual se fijasen y determinasen los títulos ó efectos de manera que apareciese su identidad, antes de acudir al juez ó tribunal podrá hacerlo al establecimiento ó persona deudora, y aun á la Junta sindical del Colegio de Agentes, oponiéndose al pago y solicitando las publicaciones oportunas. En tal caso, el establecimiento ó casa deudora y la Junta sindical estarán obligados á proceder como si el juzgado ó tribunal les hubiere hecho la notificación de estar admitida y estimada la denuncia.

Si el juez ó tribunal, dentro del término de un mes, no ordenare la retención ó publicación, quedará sin efecto la denuncia hecha por el desposeído, y el establecimiento ó persona deudora y Junta sindical estarán libres de toda responsabilidad.

566. Las disposiciones que preceden no serán aplicables á los billetes del Banco de España, ni á los de la misma clase emitidos por establecimientos sujetos á igual régimen, ni á los títulos al portador emitidos por el Estado, que se rijan por Leyes, Decretos ó Reglamentos especiales.

Título XIII. De las cartas-órdenes de crédito.

567. Son cartas-órdenes de crédito las expedidas de comerciante á comerciante ó para atender á una operación mercantil[1]).

568. Las condiciones esenciales de las cartas-órdenes de crédito serán: 1.ª Expedirse en favor de persona determinada, y no á la orden. 2.ª Contraerse á una

[1]) Las cartas-órdenes de crédito por cantidad fija están sujetas al pago del impuesto del timbre en los mismos términos y condiciones que las letras. (Véanse las notas de la pág. 151 (1)

On the same Exchange day or on the following, the Governing Board shall post up a notice on the notice board; and at the opening of the Exchange shall announce the information which has been laid, and shall give notice to the other National Governing Boards, apprising them of the said information.

The like announcement shall be made, at the cost of the informer, in the *Gaceta de Madrid*, in the *Boletin Oficial* of the province and in the *Diario oficial de Avisos* of the corresponding locality.

560. The negotiation of stolen or strayed securities, made after the announcements to which the previous article refers, shall be void, and the buyer shall not be entitled to refuse *reivindicatio*; but the right of the possessor against the seller and against the agent who took part in the transaction shall remain intact.

561. The person who has denounced the robbery, theft or straying of the securities must obtain the corresponding decree from the judge or tribunal, ratifying the prohibition of the negotiation or alienation of the said securities, within the term of nine days.

If this decree is not notified or brought to the notice of the Governing Board within the space of nine days, the Board shall annul the announcement and the subsequent alienation of the securities shall be valid.

562. After the expiration of five years, reckoned from the publications made by virtue of the provisions in arts. 550 and 559, and the ratification by the judge or tribunal to which art. 561 refers, without opposition having been made to the information, the judge or tribunal shall declare the nullity of the stolen or strayed security, and shall communicate it to the head official directorate, company or individual from which it proceeds, ordering the issue of a duplicate in favour of the person who proves to be its lawful owner.

If a third person presents himself within the five years, the term shall be in suspense until the judges or tribunals decide.

563. The duplicate shall bear the same number as the original security; shall state that it is issued as a duplicate; shall produce the same effects as the former, and shall be negotiable in like conditions.

The issue of the duplicate shall annul the original security, and so it shall be made to appear in the entries or registers relating thereto.

564. If the information of the dispossessed person was intended, not only for the payment of the principal, dividends or coupons, but also to prevent the negotiation or transfer on the Exchange of the quotable securities, the rules enacted for each purpose in the preceding articles shall be observed, as the case may be.

565. Notwithstanding the provisions of this section, if the dispossessed person has acquired the securities on the Exchange, and the information is accompanied by the certificate of the agent, in which the securities or effects are fixed and determined in such a manner as to show their identity, before applying to the judge or tribunal, he may do so to the debtor establishment or person, and even to the Governing Board of the College of Agents, opposing the payment and applying for the proper publications. In that case, the debtor establishment or house of business and the Governing Board shall be bound to proceed as if the court or tribunal had notified them of the information being admitted and judged.

If within the term of one month, the judge or tribunal does not order the retention or publication, the information laid by the dispossessed person shall be inoperative and the debtor establishment or person and the Governing Board shall be free from all liability.

566. The preceding provisions shall not apply to the notes of the Bank of Spain, nor to those of the same class issued by establishments subject to the like regimen, nor to bearer securities issued by the State, which are governed by special Laws, Decrees or Regulations.

Title XIII. Letters of credit.

567. Letters of credit are those issued by a merchant to a merchant or to wait upon a mercantile transaction[1]).

568. The essential conditions of letters of credit shall be: 1. That they be issued in favour of a certain person, and not to order; — 2. That they are confined to

---

[1]) Letters of credit for a fixed amount are subject to the payment of stamp duty in the same terms and conditions as bills. (See notes to pages 151 to 159 inclusive.) Letters of credit without

cantidad fija y específica, ó á una ó más cantidades indeterminadas, pero todas comprendidas en un máximum cuyo límite se ha de señalar precisamente.

Las que no tengan alguna de estas últimas circunstancias serán consideradas como simples cartas de recomendación.

569. El dador de una carta de crédito quedará obligado hacia la persona á cuyo cargo la dió, por la cantidad pagada en virtud de ella, dentro del máximum fijado en la misma.

Las cartas-órdenes de crédito no podrán ser protestadas aun cuando no fueren pagadas, ni el portador de ellas adquirirá acción alguna por aquella falta contra el que se la dió.

El pagador tendrá derecho á exigir la comprobación de la identidad de la persona á cuyo favor se expidió la carta de crédito.

570. El dador de una carta de crédito podrá anularla, poniéndolo en conocimiento del portador y de aquel á quien fuere dirigida.

571. El portador de una carta de crédito reembolsará sin demora al dador la cantidad recibida.

Si no lo hiciere, podrá exigírsele por acción ejecutiva, con el interés legal y el cambio corriente en la plaza en que se hizo el pago, sobre el lugar en que se verifique el reembolso.

572. Si el portador de una carta de crédito no hubiere hecho uso de ella en el término convenido con el dador de la misma, ó, en defecto de fijación de plazo, en el de seis meses, contados desde su fecha, en cualquier punto de Europa, y de doce en los de fuera de ella, quedará nula de hecho y de derecho.

Libro tercero. Del comercio marítimo.[1]

Título primero. De los buques.

573. Los buques mercantes constituirán una propiedad que se podrá adquirir y transmitir por cualquiera de los medios reconocidos en el derecho[2]). La adquisición de un buque deberá constar en documento escrito, el cual no producirá efecto respecto á tercero si no se inscribe en el Registro Mercantil.

hasta 159 (3) inclusives.) — Las cartas-órdenes sin límite llevarán á su expedición el timbre móvil de una peseta, clase 13ª; pero si se realizaran en cantidad superior á 1000 pesetas se reintegrará la diferencia con sujeción á la escala de la nota 1, pág. 151, inutilizándose los timbres que al efecto se pongan con la fecha correspondiente. Cuando se trate de cartas-órdenes de cantidad limitada, llevarán á su expedición el timbre móvil de 10 céntimos de peseta, clase 16ª, reintegrándose la diferencia con arreglo á dicha escala al hacerse efectiva, á tenor de la cantidad que se vaya percibiendo (art. 141, L. de T.).

[1]) La legislación consular tiene una relación muy inmediata con el derecho marítimo por cuanto los Cónsules son en los puertos á donde arriban los buques españoles los representantes del Estado español para todos los efectos de la aplicación de las leyes directamente comerciales ó que se relacionan de un modo más ó menos directo con el comercio y la navegación. Por eso daremos aquí una indicación ligera de las leyes por que se rige el cuerpo consular en estas materias. — El cuerpo consular hállase hoy regulado por la Ley orgánica publicada por Real Decreto de 27 de abril de 1900 (Gaceta de 15 de mayo y rectificación del 17); la cual, con el correspondiente Reglamento, fué redactada por el Ministro de Estado con arreglo á la Ley de Bases de 28 de marzo del mismo año (Gaceta de 29 de marzo). Esta disposición ha sido completada con el Real Decreto de 1.° de setiembre de 1906 (Gaceta de 8 de setiembre y rectificación de 4 de octubre). — La jurisdicción consular está regulada por el Real Decreto de 29 de setiembre de 1848 (Colección Legislativa, tomo 45, página 159); y los funcionarios consulares han de tener en cuenta en el ejercicio de su cargo, á más de las disposiciones del Código de comercio que á ellos directamente encomiendan ciertos servicios, los de las leyes civiles que les confieren muchas atribuciones en razón á la naturaleza de sus funciones y una multitud de Reales Decretos, Reales órdenes de los Ministerios de Estado, Marina y Hacienda que sería fatigoso enumerar aquí.

[2]) Los medios reconocidos en el derecho con aplicación á los buques son: la construcción, la ocupación, la trasmisión *inter vivos* (gratuita, donación) (onerosa, enajenación) y *mortis causa* (herencia ó legado) y la prescripción. — De la construcción no dice nada el Cód. c. que tenga aplicación á los buques salvo algún que otro artículo relativo al derecho de accesión respecto á los bienes muebles (Sección 3.° Capítulo 2.°, Título 2.° del Libro II). La ocupación en los buques tan sólo es título de adquirir para el Estado por virtud de lo que disponen el artículo 617 del Cód. c., el artículo 1.° de la Ley sobre bienes mostrencos de 9—16 de mayo de 1835, el 9.° de la Ley de puertos de 7 de mayo de 1880. La donación se rige en absoluto por las prescripciones del Cód. c. (Título 2.°

a fixed and specified sum, or one or more undetermined amounts, but all included in a maximum, the limit whereof must be precisely defined.

Those which lack any of these last particulars shall be considered as simple letters of recommendation.

569. The giver of a letter of credit shall be bound to the drawee for the amount paid by virtue thereof, within the maximum fixed therein.

Letters of credit cannot be protested even when they are not paid, nor shall the holder thereof acquire any right of action for that failure as against the giver thereof.

The payer shall be entitled to require proof of the identity of the person in whose favour the letter of credit was issued.

570. The giver of a letter of credit may annul it, by giving notice thereof to the holder, and to the person to whom it was directed.

571. The holder of a letter of credit shall repay the received amount to the giver without delay.

If he fails to do so, it may be demanded of him by an executive action, with the legal interest and the exchange current in the place where the payment was made on the place where the repayment is made.

572. If the holder of a letter of credit has not made use thereof within the time agreed with the giver thereof, or in default of a fixed time, within that of six months reckoned from its date, in any place in Europe, and of twelve months in places outside the same, it shall be void *de facto et de jure.*

Third Book. Maritime Commerce.[1]

Title I. The vessels.

573. Merchant vessels shall constitute an ownership which may be acquired and transferred by any of the means recognised in law[2]. The acquisition of a vessel must appear in a written document, which shall produce no effect with respect to a third person, if it is not inscribed in the Mercantile Register.

---

limit shall bear at the time of their issue an adhesive stamp for one peseta, class 13; but if they are paid in an amount above 1 000 pesetas, they must pay the difference under the scale in note 1, page 151, cancelling the stamps placed for that purpose by the corresponding date. When it is a matter of letters of credit for a limited amount, they must bear at their issue an adhesive stamp for 10 céntimos, class 16, the difference being paid according to the said scale on their being made effective, according to the amount which is collected (art. 141 of the stamp Act).

[1]) The consular legislation has a very immediate relation to the maritime law, as the consuls in the ports where Spanish vessels arrive are the representatives of the Spanish State for all the purposes of the application of the laws which are directly commercial or which relate in a more or less direct manner to commerce and navigation. We therefore give here a slight indication of the laws by which the consular body is governed in these matters. — The consular body is now regulated by the Organic Law published by Royal Decree of 27 April 1900 (*Gaceta*, 15 and correction of 17 May); which, with the corresponding Regulation was drafted by the Minister of Foreign Affairs according to the Law of Bases of 28 March of the same year (*Gaceta*, 29 March). This provision was completed by the Royal Decree of 1 September 1906 (*Gaceta*, 8 September and correction, 4 October). — The consular jurisdiction is regulated by the Royal Decree of 29 September 1848 (Colleccíón Legislativa, volume 45, page 159); and in the exercise of their functions the consular officials have to remember, besides the provisions of the Code of Commerce which directly entrusts them with certain services, those of the civil laws which confer many powers relating to the nature of their functions, and a multitude of Royal Decrees, Royal orders of the Ministries of Foreign Affairs, Marine and Exchequer, which it would be tedious to enumerate here.

[2]) The means recognised in law, which apply to vessels are: building, *occupatio*, transfer *inter vivos* (gratuitous, gift; onerous, sale) and *mortis causa* (inheritance or legacy) and prescription. — Of the construction of a vessel the Civil Code says nothing which applies to vessels, except what an article contains with reference to the right of accession with respect to chattels (Section 3, Chapter 2, Title 2, Book II). *Occupatio* of vessels is only an acquisitive title by the State by virtue of the provisions of art. 617 of the Civil Code, art. 1 of the Law on unowned property of 9—16 May 1835, art. 9 of the Law on harbours of 7 May 1880. Gifts are absolutely governed by the provisions of the Civil Code (Title 2 of Book III). Alienation by the combined pro-

También se adquirirá la propiedad de un buque por la posesión de buena fe, continuada por tres años, con justo título debidamente registrado.

Faltando alguno de estos requisitos, se necesitará la posesión continuada de diez años para adquirir la propiedad.

El capitán no podrá adquirir por prescripción el buque que mande.

574. Los constructores de buques podrán emplear los materiales y seguir, en lo relativo á su construcción y aparejos, los sistemas que más convengan á sus intereses. Los navieros y la gente de mar se sujetarán á lo que las Leyes y reglamentos de Administración pública dispongan sobre navegación, aduanas, sanidad, seguridad de las naves, y demás objetos análogos.

575. Los partícipes en la propiedad de un buque gozarán del derecho de tanteo y retracto en las ventas hechas á extraños[1]); pero sólo podrán utilizarlo dentro de los nueve días siguientes á la inscripción de la venta en el Registro, y consignando el precio en el acto.

576. Se entenderán siempre comprendidos en la venta del buque el aparejo, respetos, pertrechos y máquina si fuere de vapor, pertenecientes á él, que se hallen á la sazón en el dominio del vendedor.

No se considerarán comprendidos en la venta las armas, las municiones de guerra, los víveres ni el combustible.

El vendedor tendrá la obligación de entregar al comprador la certificación de la hoja de inscripción del buque en el Registro hasta la fecha de la venta.

577. Si la enajenación del buque se verificase estando en viaje, corresponderán al comprador íntegramente los fletes que devengare en él desde que recibió el último cargamento, y será de su cuenta el pago de la tripulación y demás individuos que componen su dotación, correspondiente al mismo viaje.

---

del Libro III). La enajenación por los preceptos combinados del Cód. de com. Sección 1.ª del Título VI del Libro II y Títulos I y II del Libro III, y, como supletorios, los del Cód. c. Título IV del Libro IV. La trasmisión mortis causa por los preceptos del Cód. c., Título III del Libro III. Y la prescripción por los preceptos á ella referentes del Título 1.° del Libro III del Cód. de com. y los del Cód. c., Título XVIII del Libro IV que sean aplicables, en tanto que es derecho supletorio del Cód. de com.

[1]) El ejercicio del derecho de tanteo, ó sea el de poder adquirir una cosa antes de su venta, con preferencia al que pretende comprarla y tiene convenido su adquisición con el vendedor, estaba regulado en el antiguo Cód. de com., y á este ejercicio se refiere el artículo 2167 de la L. de Enj. c. que dice así: «Cuando á algún partícipe en la propiedad de una nave le convenga hacer uso del derecho de tanteo á que se refiere el art. 612 del Cód. (se trata del Cód. de com. de 1829), ó trate de precaverlo en conformidad á lo dispuesto en el 613 (que no tiene equivalente en el Cód. actual), bastará que requiera dentro del término legal al vendedor ó á sus copartícipes, por medio de acta notarial, consignando en el primer caso en poder del Notario la cantidad precio de la venta». — Con arreglo á la legislación de 1829, este tanteo podía ejercitarse antes y después de la venta. Antes; en todo tiempo, siempre que el vendedor no hubiere notificado á los condueños la venta concertada, pues hecha esta notificación sólo podía tantearse dentro de los tres días siguientes á la misma. Después; podía tantearse dentro de los tres días siguientes á la celebración de la venta (esto no era tanteo, esto era retracto), en el supuesto de que el vendedor no les hubiere hecho la notificación antes indicada, pues hecha, y transcurridos los tres días, sin que ningún condueño pretendiere tantear dentro de los mismos, podía vender libremente su parte. — Ahora bien, no regulado el derecho de tanteo en el Cód. de com. vigente y no siendo tampoco aplicables á este los artículos 1636 y 1637 del Cód. c. que regulan los derechos y obligaciones que respecto á este tanteo tienen el dueño del dominio útil y el dueño del dominio directo en el censo enfitéutico, y estando en vigor el artículo 2167 de la L. de Enj. c., ¿cabe que tengan aplicación los preceptos de los artículos 612 y 613 del Cód. de com. de 1829 cuya doctrina hemos transcrito? En mi sentir, y por razón de analogía con lo que ocurre con los preceptos referentes á la quiebra, que apesar de la derogación del Cód. anterior han subsistido en cuanto se relacionan con la L. de Enj. c. y suplen sus deficiencias y las del Cód. vigente, hay que contestar afirmativamente siempre que no contradigan lo prevenido en este. — Por esta razón, y respecto al derecho de tanteo á que se refiere este artículo 575, hay que decir que el condueño puede tantear la concertada venta dentro de los tres días de la notificación notarial que le hiciere el vendedor, ó en cualquier tiempo antes de celebrados si se prescindió de dicha notificación, ajustándose en uno y otro caso á lo prevenido en el artículo 2167 de la L. de Enj. c. — En cuanto al derecho de retracto, ó sea el de poder un condueño sustituirse al comprador después de realizada la venta, esto se regulará por lo expresamente prevenido en este artículo 575 y por lo que dispone el 1522 del Cód. c. que dice: Cuando dos ó más copropietarios quieran usar del retracto sólo podrán hacerlo á prorrata de la porción que tengan en la cosa común.

Ownership of a vessel shall also be acquired by possession in good faith, continued for three years, with a just and duly registered title.

If any of these requisites are wanting, continuous possession for ten years will be necessary in order to acquire ownership.

A master cannot acquire by prescription the vessel which he commands.

574. Builders of vessels may employ the materials and, in all that relates to their construction and equipment, may follow the systems which are most agreeable to their interests. Managing owners and seafaring men shall be subject to what the Laws and regulations of the public Administration provide on navigation, customs, sanitation, safety of the vessels and other like subjects.

575. Co-owners of a vessel shall be entitled to the right of *tanteo* and *retracto* in sales made to other persons[1]); but may only make use thereof within the nine days following the inscription of the sale in the Register, and by at once paying the price into Court.

576. The tackle[2]), spare parts, stores and engines, if it is a steamer, which belong thereto and are at the time in the *dominium* of the seller, shall always be understood as included in the sale of the vessel.

Arms, munitions of war, provisions and fuel shall not be considered as included in the sale.

The seller shall be bound to deliver to the buyer the certificate of the page of inscription of the vessel in the Register up to the date of the sale.

577. If the sale of the vessel is effected while she is on a voyage, the freights earned thereon from the reception of the last cargo shall belong wholly to the buyer, and the payment of the crew and other individuals who compose her complement which belong to the same voyage shall be borne by him.

cepts of the Code of Commerce, Section 1, Title VI of Book II and Titles I and II of Book III and as supplementary laws, those of the Civil Code, Title IV of Book IV. Transmission *mortis causa* by the precepts of the Civil Code, Title III, Book III. And prescription by the precepts referring thereto in Title I, Book III of the Code of Commerce and those of the Civil Code, Title XVIII, Book IV, which applies so far as it is law supplementary to the Code of Commerce.

[1]) The exercise of the right of *tanteo*, that is of the power of acquiring a thing after its sale, in preference to the person who proposes to buy it, and has agreed with the seller for its purchase, is regulated by the old Code of Commerce, and art. 2167 of the Law of Civil Procedure refers to this exercise, saying: "When it is convenient to a co-owner of a vessel to make use of the right of *tanteo* to which art. 612 of the Code refers (that is, of the Code of Commerce of 1829), or it is a matter of preventing it in accordance with the provisions of art. 613 (there is no equivalent of this in the present Code), it shall be sufficient that within the legal time a demand be made on the seller or on his co-owners, by means of a notarial note, paying in the former case the amount of the price of the sale into the hands of the notary." — According to the legislation of 1829, this *tanteo* may be exercised before or after the sale. Before; at any time, provided that the seller has not notified to the co-owners an agreed sale, as after this notification has been made, the right can only be exercised within the three days following the same. After; the right of *tanteo* may be exercised within the three days following the making of the sale (this was not *tanteo* but *retracto*), supposing that the seller had not given them the notification above indicated, since, if he had made it, and the three days had expired, without any co-owner endeavouring to purchase within the same time, he could freely sell his part. — Well, as the right of *tanteo* is not regulated by the present Code of Commerce, and arts. 1636 and 1637 of the Civil Code do not apply thereto, which regulate the rights and obligations possessed with regard thereto by the usufructuary and the owner of the *dominium* subject to an annual payment, and as art. 2167 of the Law of Civil Procedure is in force: Do the precepts of arts. 612 and 613 of the Code of Commerce of 1829, the doctrine whereof we have transcribed, apply? In my opinion, and reasoning from the analogy of what occurs with the precepts referring to bankruptcy, which in spite of the repeal of the old Code have subsisted so far as they relate to the Law of Civil Procedure, and supplement its deficiencies and those of the Code now in force, one must answer in the affirmative, provided that they do not contradict the provisions of the latter. — For this reason, and with respect to the right of *tanteo* to which this art. 575 refers, one must say that the co-owner may exercise his right of *tanteo* within three days from the notarial notification made by the seller, or at any time before the sales are made, if this notification is dispensed with, conforming in either case to the provisions of art. 2167 of the Law of Civil procedure. — With regard to the right of *retracto*, that is the power of a co-owner to substitute himself for the buyer after the sale has been made, this will be regulated by the express provisions of this article and those of art. 1522 of the Civil Code, which says: When two or more co-owners wish to make use of the right of *retracto*, they can only do so in proportion to their shares in the common property.

[2]) *Aparejo* includes both tackle, sails and standing rigging (Translator).

Si la venta se realizase después de haber llegado el buque al puerto de su destino, pertenecerán los fletes al vendedor y será de su cuenta el pago de la tripulación y demás individuos que componen su dotación, salvo en uno y otro caso el pacto en contrario.

578. Si, hallándose el buque en viaje ó en puerto extranjero, su dueño ó dueños lo enajenaren voluntariamente, bien á españoles ó á extranjeros con domicilio en capital ó puerto de otra Nación, la escritura de venta se otorgará ante el cónsul de España del puerto en que rinda el viaje, y dicha escritura no surtirá efecto respecto de tercero, si no se inscribe en el Registro del consulado. El cónsul transmitirá inmediatamente copia auténtica de la escritura de compra y venta de la nave al Registro Mercantil del puerto en que se hallare inscrita y matriculada.

En todos los casos la enajenación del buque debe hacerse constar, con la expresión de si el vendedor recibe en todo ó en parte su precio si en parte ó en todo conserva algún crédito sobre el mismo buque. Para el caso de que la venta se haga á súbdito español, se consignará el hecho en la patente de navegación.

Cuando, hallándose el buque en viaje, se inutilizare para navegar, acudirá el capitán al juez ó tribunal competente del puerto de arribada, si éste fuere español[1]); y si fuere extranjero, al cónsul de España si lo hubiere, al juez ó tribunal ó á la autoridad local, donde aquél no exista; y el cónsul ó el juez ó tribunal, ó, en su defecto, la autoridad local, mandarán proceder al reconocimiento del buque[2]).

Si residieren en aquel punto el consignatario ó el asegurador, ó tuvieren allí representantes, deberán ser citados para que intervengan en las diligencias por cuenta de quien corresponda.

579. Comprobado el daño del buque y la imposibilidad de su rehabilitación para continuar el viaje, se decretará la venta en pública subasta, con sujeción á las reglas siguientes: 1.ª Se tasarán, previo inventario, el casco del buque, su aparejo, máquinas, pertrechos y demás objetos, facilitándose el conocimiento de estas diligencias á los que deseen interesarse en la subasta; — 2.ª El auto ó decreto que ordene la subasta se fijará en los sitios de costumbre, insertándose su anuncio en los diarios del puerto donde se verifique el acto, si los hubiese, y en los demás que determine el tribunal. El plazo que se señale para la subasta no podrá ser menor de veinte días[3]); — 3.ª Estos anuncios se repetirán de diez en diez días y se hará constar su publicación en el expediente; — 4.ª Se verificará la subasta el día señalado, con las formalidades prescritas en el derecho común para las ventas judiciales[4]); — 5.ª Si la venta se verificase estando la nave en el extranjero, se observarán las prescripciones especiales que rijan para estos casos.

---

1) El juez ó tribunal competente, hoy, en España es el Juzgado de 1.ª instancia á quien corresponda.

2) Para acreditar la necesidad de vender una nave, que en viaje se haya inutilizado para la navegación, y no pueda ser rehabilitada para continuarla, el capitán ó patrón solicitará por escrito del juez que sea reconocida por peritos, acompañando con la solicitud el acta de visita ó reconocimiento (si se hubiere practicado antes de emprender el viaje) y el diario de navegación para que el actuario extienda en los autos testimonio de él. — El nombramiento de los peritos habrá de hacerse en la forma siguiente: uno por el capitán, que habrá de designarse al tiempo de solicitar el reconocimiento y otro por el Ministerio fiscal en representación del naviero ausente ó sin representación legal, pues si existiere consignatario del buque corresponderá á este el nombramiento del segundo perito, si no prestare su conformidad al designado por el capitán. El tercero en discordia, en caso necesario, lo designará el juez por sorteo. — Si de la información pericial resultaren acreditadas la inutilización para la navegación y la imposibilidad de habilitarlo para continuar el viaje, el juez decretará la venta con las formalidades establecidas en el art. 579 del Cód. de com.; y la cantidad que la subasta produzca, deducidos los gastos de toda clase, se depositará á disposición del naviero (art. 2161, regla 6.ª y 2148 de la L. de Enj. c.). — Como en el antiguo Cód. de com. el acta de visita ó reconocimiento era siempre obligatoria antes de emprender el viaje, y hoy es potestativa del capitán, y sólo obliga á ella el nuevo Cód. en el supuesto de que lo soliciten los pasajeros ó cargadores, aun cuando la regla transcrita del art. 2161 no hace salvedad alguna en lo referente á esta acta, hemos creído necesario hacerla, intercalando las palabras comprendidas en el paréntesis.

3) Si en la primera subasta no hubiere postor (comprador), ó las posturas (proposición de compra) hechas no cubren las dos terceras partes de la tasación, se anunciará por igual término una segunda ó sucesivas subastas con el 20% de rebaja en cada una (art. 2161, regla 7° L. de Enj. c.).

4) Estas formalidades son las indicadas para el acto del remate en el procedimiento de apremio que pueden verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.».

If the sale is made after the vessel has arrived at the port of her destination, the freights shall belong to the seller and the payment of the crew and the other individuals who compose her complement shall be borne by him, saving a bargain to the contrary in either case.

578. If, when the vessel is on a voyage or in a foreign port, her owner or owners sell her voluntarily, either to Spaniards or to foreigners residing in the capital or port of another nation, the instrument of sale shall be executed before the Spanish consul of the port at which the voyage is given up, and the said instrument shall have no effect with respect to a third person, if it is not inscribed in the Register of the consulate. The consul shall immediately transmit an authenticated copy of the instrument of purchase and sale of the ship to the Mercantile Registry of the port where she is inscribed and registered.

In all cases of the sale of a vessel, it must be clearly stated whether the seller receives her price in whole or in part, and if he retains any debt on the said vessel, either in part or in whole. When the sale is made to a Spanish subject, the fact shall be stated in the licence to navigate.

When a vessel which is on a voyage becomes unseaworthy, the master shall apply to the competent judge or tribunal of the port of refuge, if the latter is Spanish[1]); and if it is foreign, to the Spanish consul, if any, and where there is none, to the judge or tribunal or local authority; and the consul or judge or tribunal, or in default, the local authority, shall order a survey of the vessel to be made[2]).

If the consignee or the insurer resides in that place, or if they have representatives there, they must be summoned to take part in the measures on account of the person affected.

579. If the damage to the vessel and the impossibility of repairing her to continue the voyage is proved, a sale by public auction shall be ordered, subject to the following rules: 1. After an inventory has been made, the hull of the vessel, her tackle, engines, stores and other articles shall be valued, giving notice of these steps to those persons who desire to be interested in the auction; — 2. The order or decree ordering the auction shall be posted in the customary places, and the advertisement thereof shall be inserted in the newspapers of the port where the sale takes place, if any there are, and in other papers determined by the tribunal. The interval appointed for the auction may not be less than twenty days[3]): — 3. These advertisements shall be repeated every ten days and their publication shall be shown in the file; — 4. The auction shall be held on the stated day, with the formalities prescribed by the common law for judicial sales[4]); — 5. If the sale takes place while the vessel is abroad, the special provisions governing those cases shall be observed.

---

[1]) The competent judge or tribunal at the present time in Spain is the respective Court of first instance.

[2]) In order to prove the necessity for selling a ship which becomes unseaworthy in the course of a voyage, and cannot be repaired to continue it, the master shall make a written application to the judge that she should be surveyed by experts, accompanying the application with the minute of the inspection or survey (if any has taken place before the voyage began) and with the log, in order that the master of the court may draw up a certified copy thereof in the record. — The appointment of the experts must be made in the following way: one by the master, who must nominate him at the time of applying for the survey, and another by the Public Prosecutor representing the absent shipowner or one who has no legal representative, as, if there is a consignee of the vessel, it will be his duty to appoint the second expert, if he does not express his assent to the one appointed by the master. In case of disagreement, a third shall be appointed by the judge by lot if necessary. — If the unseaworthiness and the impossibility of repairing the vessel to continue the voyage is proved by the expert report, the judge shall order the sale with the formalities enacted in art. 579 of the Code of Commerce; and the amount produced by the auction, after deducting the expenses of every kind, shall be deposited at the disposal of the shipowner (art. 2161, rule 6, and 2148 of the Law of Civil Procedure). — As in the old Code of Commerce, the minute of inspection or survey was always necessary before commencing a voyage, and at the present time is in the discretion of the master, and the new Code only compels it when the passengers or consignors apply therefor, even though the above written rule of art. 2161 makes no reservation with reference to this minute, we have thought it necessary to do so by interposing the words included in the parentheses.

[3]) If there is no bidder at the first auction, or the bids which are made do not cover two third parts of the valuation, a second or successive auctions shall be announced with the like notice, at 20% rebate at each (art. 2161, rule 7 of the Law of Civil Procedure).

[4]) These formalities are those indicated for the auction in the proceeding by *apremio*, which may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

580. En toda venta judicial de un buque para pago de acreedores, tendrán prelación por el orden en que se enumeran: 1.° Los créditos á favor de la Hacienda pública que se justifiquen mediante certificación oficial de autoridad competente; — 2.° Las costas judiciales del procedimiento, según tasación aprobada por el juez ó tribunal; — 3.° Los derechos de pilotaje, tonelaje y los de mar ú otros de puertos, justificados con certificaciones bastantes de los jefes encargados de la recaudación; — 4.° Los salarios de los depositarios y guardas del buque y cualquier otro gasto aplicado á su conservación desde la entrada en el puerto hasta la venta, que resulten satisfechos ó adeudados en virtud de cuenta justificada y aprobada por el juez ó tribunal; — 5.° El alquiler del almacén donde se hubieren custodiado el aparejo y pertrechos del buque, según contrato; — 6.° Los sueldos debidos al capitán y tripulación en su último viaje, los cuales se comprobarán mediante liquidación que se haga en vista de los roles y de los libros de cuenta y razón del buque, aprobada por el jefe del ramo de marina mercante, donde lo hubiere, y en su defecto, por el cónsul ó juez ó tribunal; — 7.° El reembolso de los efectos del cargamento que hubiere vendido el capitán para reparar el buque, siempre que la venta conste ordenada por auto judicial celebrado con las formalidades exigidas en tales casos, y anotada en la certificación de inscripción del buque; — 8.° La parte del precio que no hubiere sido satisfecha al último vendedor, los créditos pendientes de pago por materiales y mano de obra de la construcción del buque, cuando no hubiere navegado, y los provenientes de reparar y equipar el buque y de proveerle de víveres y combustible en el último viaje. Para gozar de esta preferencia los créditos contenidos en el presente número, deberán constar por contrato inscrito en el Registro Mercantiló si fueren de los contraídos para el buque estando en viaje y no habiendo regresado al puerto de su matrícula, estarlo con la autorización requerida para tales casos, y anotados en la certificación de inscripción del mismo buque; — 9.° Las cantidades tomadas á la gruesa sobre el casco, quilla, aparejo y pertrechos del buque antes de su salida, justificadas con los contratos según derecho y anotados en el Registro Mercantil; las que hubiere tomado durante el viaje con la autorización expresada en el número anterior, llenando iguales requisitos, y la prima del seguro acreditada con la póliza del contrato ó certificación sacada de los libros del corredor; — 10.° La indemnización debida á los cargadores por el valor de los géneros embarcados que no se hubieren entregado á los consignatarios, ó por averías sufridas de que sea responsable el buque, siempre que una y otras consten en sentencia judicial ó arbitral.

581. Si el producto de la venta no alcanzare á pagar á todos los acreedores comprendidos en un mismo número ó grado, el remanente se repartirá entre ellos á prorrata.

582. Otorgada é inscrita en el Registro Mercantil la escritura de venta judicial hecha en pública subasta, se reputarán extinguidas todas las demás responsabilidades del buque en favor de los acreedores.

Pero si la venta fuere voluntaria y se hubiere hecho estando en viaje, los acreedores conservarán sus derechos contra el buque hasta que regrese al puerto de matrícula, y tres meses después de la inscripción de la venta en el Registro, ó del regreso.

583. Si encontrándose en viaje necesitare el capitán contraer alguna ó algunas de las obligaciones expresadas en los números 8.° y 9.° del articulo 580, acudirá al juez ó tribunal, si fuese en territorio español, y si no, al cónsul de España, caso de haberlo, y en su defecto, al juez ó tribunal ó autoridad local correspondiente, presentando la certificación de la hoja de inscripción de que trata el art. 612, y los documentos que acrediten la obligación contraída.

El juez ó tribunal, el cónsul ó la autoridad local en su caso, en vista del resultado del expediente instruído, harán en la certificación la anotación provisional de su resultado, para que se formalice en el Registro cuando el buque llegue al puerto de su matrícula, ó para ser admitida como legal y preferente obligación en el caso de venta antes de su regreso, por haberse vendido el buque á causa de la declaración de incapacidad para navegar.

La omisión de esta formalidad impondrá al capitán la responsabilidad personal de los créditos perjudicados por su causa.

584. Los buques afectos á la responsabilidad de los créditos expresados en el art. 580, podrán ser embargados y vendidos judicialmente, en la forma prevenida en el art. 579, en el puerto en que se encuentren, á instancia de cualquiera

580. In every judicial sale of a vessel for payment of creditors, the following shall have preference in the order in which they are enumerated: 1. Debts in favour of the public Exchequer, proved by an official certificate of competent authority; — 2. Law costs of the proceeding according to an estimate passed by the judge or tribunal; — 3. Dues for pilotage and on tonnage and sea and harbour dues, proved by sufficient certificates of the chiefs entrusted with the collection; — 4. Remuneration of the depositaries and guards of the vessel, every other expense applied to her preservation from entrance into the port up to the sale, which are paid or due by virtue of a proved account passed by the judge or tribunal; — 5. Hire of the warehouse, where the tackle and stores of the vessel have been kept, according to contract; — 6. The pay due to the master and crew on her last voyage, which shall be proved by calculation made on inspection of the muster-rolls and books of account and entry of the vessel, passed by the chief of the branch of the merchant marine, where there is one, and in default, by the consul or judge or tribunal; — 7. Repayment for the goods of the cargo which the master has sold to repair the vessel, provided that the sale is shown to have been ordered by judicial decree made with the formalities enacted for such cases, and noted on the certificate of registration of the vessel; — 8. The part of the price which has not been paid to the last seller, debts pending by way of payment for materials and work in the building of the vessel, when she has not been navigated, and those proceeding from the repair and fitting out of the vessel and from providing her with provisions and fuel on the last voyage. In order that the debts contained in this number may enjoy preference, they must appear by a contract inscribed on the Mercantile Register, or if they are among those contracted on behalf of the vessel while on a voyage, and she has not returned to the port of her register, they must have been contracted with the authorisation required for such cases, and noted on the certificate of registration of the said vessel; — 9. Sums borrowed on bottomry bond on the hull, keel, tackle and stores of the vessel before her departure, proved by lawful contracts and entered on the Mercantile Register; those which were borrowed during the voyage with the authorisation stated in the preceding number, and after the like requirements have been fulfilled, and the premium of insurance proved by the policy or certificate taken from the books of the broker; — 10. The compensation due to the consignors for the value of the shipped goods which have not been delivered to the consignees, or for damages suffered for which the vessel is liable, provided that in either case the debt is shown by a judicial or arbitral decision.

581. If the proceeds of the sale are insufficient to pay all the creditors comprised in the same number or grade, the remainder shall be divided between them *pro rata*.

582. When the instrument of judicial sale, made at the public auction, has been executed and inscribed on the Mercantile Register, all the other liabilities of the vessel in favour of the creditors shall be considered extinguished.

But if the sale was voluntary and has been made while she was on a voyage, the creditors shall preserve their rights against the vessel until she returns to the port of register, and for three months after the inscription of the sale on the Register or after her return.

583. If, while she is on a voyage, it is necessary for the master to contract one or more of the obligations expressed in numbers 8 and 9 of article 580, he shall apply to the judge or tribunal, if he is on Spanish territory, amd if not, to the Spanish consul, if any, and in default, to the corresponding local judge or tribunal or authority, producing the certificate of the page of inscription dealt with by art. 612, and the documents which prove the contracted obligation.

The judge or tribunal, the consul or local authority, as may be, on inspecting the result of the file which has been drawn up, shall make a provisional note of the result on the certificate, in order that it may be drawn up on the Register when the vessel arrives at the port of her register, or in order that it may be admitted as a legal and preferential obligation in case of sale before her return, from the vessel having been sold by reason of a declaration of unseaworthiness.

Omission of this formality shall impose on the master personal liability for the debts which are prejudiced on account thereof.

584. Vessels subject to liability for the debts expressed in art. 580, may be judicially arrested and sold, as provided by art. 579, at the port where they are found, at the instance of any of the creditors; but if they have been loaded and

de los acreedores; pero si estuvieren cargados y despachados para hacerse á la mar, no podrá verificarse el embargo sino por deudas contraídas para aprestar y avituallar el buque en aquel mismo viaje, y aun entonces cesará el embargo si cualquier interesado en la expedición diese fianza de que regresará el buque dentro del plazo fijado en la patente, obligándose, en caso contrario, aunque fuere fortuito, á satisfacer la deuda en cuanto sea legítima.

Por deudas de otra clase cualquiera, no comprendidas en el citado art. 580, sólo podrá ser embargado el buque en el puerto de su matrícula.

585. Para todos los efectos del derecho sobre los que no se hiciere modificación ó restricción por los preceptos de este Código, seguirán los buques su condición de bienes muebles.

Título II. De las personas que intervienen en el comercio marítimo.

Sección primera. De los propietarios del buque, y de los navieros.

586. El propietario del buque y el naviero serán civilmente responsables de los actos del capitán y de las obligaciones contraídas por éste para reparar, habilitar y avituallar el buque, siempre que el acreedor justifique que la cantidad reclamada se invirtió en beneficio del mismo.

Se entiende por naviero la persona encargada de avituallar ó representar el buque en el puerto en que se halle.

587. El naviero será también civilmente responsable de las indemnizaciones en favor de tercero, á que diere lugar la conducta del capitán en la custodia de los efectos que cargó en el buque; pero podrá eximirse de ella haciendo abandono del buque con todas sus pertenencias, y de los fletes que hubiere devengado en el viaje.

588. Ni el propietario del buque ni el naviero responderán de las obligaciones que hubiere contraído el capitán, si éste se excediere de las atribuciones y facultades que le correspondan por razón de su cargo ó le fueron conferidas por aquéllos.

No obstante, si las cantidades reclamadas se invirtieron en beneficio del buque, la responsabilidad será de su propietario ó naviero.

589. Si dos ó más personas fueren partícipes en la propiedad de un buque mercante, se presumirá constituída una compañía por los copropietarios.

Esta compañía se regirá por los acuerdos de la mayoría de sus socios.

Constituirá mayoría la relativa de los socios votantes.

Si los partícipes no fueren más de dos, decidirá la divergencia de parecer, en su caso, el voto del mayor partícipe. Si son iguales las participaciones, decidirá la suerte.

La representación de la parte menor que haya en la propiedad, tendrá derecho á un voto; y proporcionalmente los demás copropietarios tantos votos como partes iguales á la menor.

Por las deudas particulares de un partícipe en el buque, no podrá ser éste detenido, embargado ni ejecutado en su totalidad, sino que el procedimiento se contraerá á la porción que en el buque tuviere el deudor, sin poner obstáculo á la navegación.

590. Los copropietarios de un buque serán civilmente responsables, en la proporción de su haber social, á las resultas de los actos del capitán, de que habla el art. 587.

Cada copropietario podrá eximirse de esta responsabilidad por el abandono ante notario de la parte propiedad del buque, que le corresponda.

591. Todos los copropietarios quedarán obligados, en la proporción de su respectiva propiedad, á los gastos de reparación del buque y á los demás que se lleven á cabo en virtud de acuerdo de la mayoría[2]).

[2]) Cuando una nave necesite reparación, y alguno de los partícipes no consienta en que se haga ó no provee de los fondos necesarios para ella, el que la conceptúe indispensable acudirá al juez, pidiendo que se reconozca la nave por peritos. Reconocida esta por los que nombren el reclamante y su opositor, y tercero en caso de discordia, resultando necesaria la recomposición, el juez mandará requerir al que no haya aportado los fondos para que

cleared to put to sea, arrest cannot be effected except for debts contracted in order to fit out and victual the vessel for that same voyage, and even then the arrest shall cease if any person interested in the expedition gives security that the vessel shall return within the time fixed in the licence to navigate, binding himself, in the contrary event, although it be fortuitous, to pay the debt in so far as it is lawful.

For debts of any other kind, not included in the said art. 580, the vessel can only be arrested in the port of her register.

585. Vessels shall continue to be deemed chattels for all legal purposes which are not altered or limited by the precepts of this Code.

Title II. Persons who take part in maritime commerce.

First Section. Owners and managing owners of the vessel.

586. The owner of the vessel and the managing owner shall be civilly liable for the acts of the master and for the obligations contracted by him for repairing, fitting out and victualling the vessel, provided that the creditor proves that the amount claimed was spent for the benefit thereof.

By managing owner is meant the person entrusted with victualling or representing the vessel in the port where she is[1]).

587. The managing owner shall likewise be civilly liable for compensation due to a third person, occasioned by the conduct of the master in the custody of the goods loaded on the vessel; but he may exempt himself therefrom by abandoning the vessel with all her belongings, and the freight which she has earned on the voyage.

588. Neither the owner of the vessel nor the managing owner shall be liable for the obligations contracted by the master, if the latter exceeds the powers and faculties which belong to him by reason of his command or which were conferred on him by the former.

Nevertheless, if the amounts claimed were spent for the benefit of the vessel, the liability shall fall on her owner or managing owner.

589. If two or more persons are co-owners of a merchant vessel, a partnership shall be presumed to be formed by the co-owners.

This partnership shall be governed by the resolutions of the majority of its members.

The majority shall be constituted according to the members who vote.

If the co-owners are not more than two, a difference of opinion, if any, shall be decided by the vote of the principal co-owner. If their shares are equal, the lot shall decide.

The person who represents the smallest share in the ownership, shall be entitled to one vote; and the other co-owners shall have in proportion as many votes as they have shares equal to the smallest.

A vessel can neither be detained, arrested, nor taken in execution as a whole for the private debts of a co-owner thereof, but the procedure shall be confined to the share which the debtor has in the vessel, without obstructing the navigation.

590. Co-owners of a vessel shall be civilly liable in proportion to their joint property, for the results of the acts of the master, spoken of by art. 587.

Each co-owner may exempt himself from this liability by abandoning before a notary that share in the ownership of the vessel which belongs to him.

591. All the co-owners shall be bound, in proportion to their respective ownership, for the expenses of repairing the vessel and the other expenses which are incurred by virtue of a decision of the majority[2]).

---

[1]) "Managing owner" includes "ship's husband" for the purposes of this translation (W. A. Bewes, Translator).

[2]) When a ship requires repairs and one of the co-owners does not consent to their being done or does not provide the funds necessary for that purpose, the one who considers them indispensable must apply to the judge, asking that the ship should be surveyed by experts. When she has been surveyed by those appointed by the claimant and his opponent, and a third in case of disagreement, and the repair is found to be necessary, the judge must order a demand on

Asimismo responderán en igual proporción á los gastos de mantenimiento, equipo y pertrechamiento del buque, necesarios para la navegación.

592. Los acuerdos de la mayoría respecto á la reparación, equipo y avituallamiento del buque en el puerto de salida, obligarán á la minoría, á no ser que los socios en minoría renuncien á su participación, que deberán adquirir los demás copropietarios, previa tasación judicial del valor de la parte ó partes cedidas.

También serán obligatorios para la minoría los acuerdos de la mayoría sobre disolución de la compañía, y venta del buque.

La venta del buque deberá verificarse en pública subasta, con sujeción á las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, á no ser que por unanimidad convengan en otra cosa los copropietarios, quedando siempre á salvo los derechos de tanteo y retracto consignados en el art. 575.

593. Los propietarios de un buque tendrán preferencia en su fletamento sobre los que no lo sean, en igualdad de condiciones y precio. Si concurriesen dos ó más de ellos á reclamar este derecho, será preferido el que tenga mayor participación; y si tuvieren la misma, decidirá la suerte.

594. Los socios copropietarios elegirán el gestor que haya de representarlos con el carácter de naviero.

El nombramiento de director ó naviero será revocable á voluntad de los asociados.

595. El naviero, ya sea al mismo tiempo propietario del buque, ó ya gestor de un propietario ó de una asociación de copropietarios, deberá tener aptitud para comerciar, y hallarse inscrito en la matrícula de comerciantes de la provincia.

El naviero representará la propiedad del buque, y podrá, en nombre propio y con tal carácter, gestionar judicial y extrajudicialmente cuanto interese al comercio.

596. El naviero podrá desempeñar las funciones de capitán del buque, con sujeción, en todo caso, á lo dispuesto en el art. 609.

Si dos ó más copropietarios solicitaren para sí el cargo de capitán, decidirá la discordia el voto de los asociados; y si de la votación resultare empate, se resolverá en favor del copropietario que tuviere mayor participación en el buque.

Si la participación de los pretendientes fuere igual y hubiere empate, decidirá la suerte.

597. El naviero elegirá y ajustará al capitán y contratará en nombre de los propietarios, los cuales quedarán obligados en todo lo que se refiera á reparaciones pormenor de la dotación, armamento, provisiones de víveres y combustible y, fletes del buque, y, en general, á cuanto concierna á las necesidades de la navegación.

598. El naviero no podrá ordenar un nuevo viaje, ni ajustar para él nuevo flete, ni asegurar el buque, sin autorización de su propietario ó acuerdo de la mayoría de los copropietarios, salvo si en el acta de su nombramiento se le hubieren concedido estas facultades.

Si contratare el seguro sin autorización para ello, responderá subsidiariamente de la solvencia del asegurador.

599. El naviero gestor de una asociación rendirá cuenta á sus asociados del resultado de cada viaje del buque, sin perjuicio de tener siempre á disposición de los mismos los libros y la correspondencia relativa al buque y á sus expediciones.

600. Aprobada la cuenta del naviero gestor por mayoría relativa, los copropietarios satisfarán la parte de gastos proporcional á su participación, sin perjuicio de las acciones civiles ó criminales que la minoría crea deber entablar posteriormente.

---

lo verifique en el término de ocho días, bajo apercibimiento de que no haciéndolo será privado de su parte, abonándole sus copartícipes por justiprecio el valor que tuviera antes de la reparación, justiprecio que se hará por los mismos peritos que hayan reconocido la nave. — Si el condueño no conforme con la reparación se negare á recibir la cantidad que por justiprecio le correspondiere, se depositará por el juez dicha cantidad á disposición del condueño citado, reservándole la acción que pueda corresponderle para que la ejercite en el juicio que proceda según la cuantía (art. 2161, regla 8° L. de Enj. c.).

They shall likewise be liable in equal proportion for the expenses of maintenance, fitting out and storing the vessel, as necessary for the navigation.

592. The decisions of the majority respecting the repair, fitting out and victualling the vessel in the port of departure, shall bind the minority, unless the members of the minority resign their co-ownership, which the other co-owners must acquire, after judicial appraisement of the value of the share or shares assigned.

The resolutions of the majority about the dissolution of the partnership, and the sale of the vessel, shall likewise be binding on the minority.

The sale of the vessel must be effected by public auction, subject to the provisions of the Law of Civil Procedure, unless the co-owners unanimously decide otherwise, saving always the rights of *tanteo* and *retracto* stated in art. 575.

593. Owners of a vessel shall have preference in her affreightment over those who are not owners, the conditions and price being equal. If two or more of them claim this right at the same time, the one who holds the largest share shall be preferred; and if they hold the same, the lot shall decide.

594. Co-owning members shall choose a manager who is to represent them in the character of managing owner.

The appointment of manager or managing owner shall be revocable at the wish of the members.

595. The managing owner, whether he is at the same time owner of the vessel or manager for an owner or an association of co-owners, must be qualified for trading, and be inscribed on the register of merchants of the province.

The managing owner shall represent the ownership of the vessel, and in his own name and in that character, may perform both judicial and extrajudicial operations so far as they concern commerce.

596. A managing owner may discharge the functions of master of the vessel, subject in all cases to the provisions of art. 609.

If two or more co-owners apply for the master's command for themselves, the disagreement shall be decided by the vote of the members; and if the voting results in a tie, it shall be decided in favour of the co-owner who has the larger share in the vessel.

If the share of the claimants is equal and there is a tie, the lot shall decide.

597. The managing owner shall choose and arrange with the master and shall contract in the name of the owners, who shall be bound in all that refers to repairs, details of the crew, armament, provisions, fuel and freights of the vessel, and in general, in all that concerns the needs of navigation.

598. A managing owner cannot order a new voyage, nor agree a new freight therefor, nor insure the vessel, without the authorisation of his owner or the resolution of the majority of the co-owners, unless these powers have been granted him in the document of his appointment.

If he contracts an insurance without authorisation therefor, he shall be liable secondarily for the solvency of the insurer.

599. The managing owner of an association shall render account to its members of the result of each voyage of the vessel, without prejudice to always holding at their disposition the books and correspondence relating to the vessel and her voyages.

600. When the accounts of the managing owner have been passed by a bare majority, the co-owners shall pay the part of the expenses proportionate to their shares, without prejudice to the civil or criminal actions which the minority think right to initiate afterwards.

---

the one who has not supplied funds to supply them within eight days, warning him that if he fails so to do, he will be deprived of his share, his co-owners paying him as the proper price, the value which she had before the repair, an appraisement which must be made by the same experts as surveyed the vessel. — If the co-owner who does not agree to the repair, refuses to accept the amount which belongs to him as the appraised value, the said amount must be deposited by the judge at the disposal of the said co-owner, reserving him any right of action which he may have so that he may bring it in the court which is the proper one according to the amount in question (art. 2161, rule 8 of the Law of Civil Procedure).

Para hacer efectivo el pago, los navieros gestores tendrán la acción ejecutiva[1]), que se despachará en virtud del acuerdo de la mayoría, y sin otro trámite que el reconocimiento de las firmas de los que votaron el acuerdo.

601. Si hubiere beneficios, los copropietarios podrán reclamar del naviero gestor el importe correspondiente á su participación por acción ejecutiva[2]), sin otro requisito que el reconocimiento de las firmas del acta de aprobación de la cuenta.

602. El naviero indemnizará al capitán de todos los gastos que con fondos propios ó ajenos hubiere hecho en utilidad del buque.

603. Antes de hacerse el buque á la mar, podrá el naviero despedir á su arbitrio al capitán é individuos de la tripulación cuyo ajuste no tenga tiempo ó viaje determinado, pagándoles los sueldos devengados según sus contratas, y sin indemnización alguna, á no mediar sobre ello pacto expreso y determinado.

604. Si el capitán ú otro individuo de la tripulación fueren despedidos durante el viaje, percibirán su salario hasta que regresen al puerto donde se hizo el ajuste, á menos que hubiere justo motivo para la despedida; todo con arreglo á los art. 636 y siguientes de este Código.

605. Si los ajustes del capitán é individuos de la tripulación con el naviero tuvieren tiempo ó viaje determinado, no podrán ser despedidos hasta el cumplimiento de sus contratos, sino por causa de insubordinación en materia grave, robo, hurto, embriaguez habitual, ó perjuicio causado al buque ó á su cargamento por malicia ó negligencia manifiesta ó probada.

606. Siendo copropietario del buque el capitán, no podrá ser despedido sin que el naviero le reintegre del valor de su porción social, que, en defecto de convenio de las partes, se estimará por peritos nombrados en la forma que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil[3]).

607. Si el capitán copropietario hubiere obtenido el mando del buque por pacto especial expreso en el acta de la sociedad, no podrá ser privado de su cargo sino por las causas comprendidas en el art. 605.

608. En caso de venta voluntaria del buque, caducará todo contrato entre el naviero y el capitán, reservándose á éste su derecho á la indemnización que le corresponda, según los pactos celebrados con el naviero.

El buque vendido quedará afecto á la seguridad del pago de dicha indemnización, si, después de haberse dirigido la acción contra el vendedor, resultare éste insolvente.

Sección segunda. De los capitanes y de los patrones de buque.

609. Los capitanes y patrones deberán ser españoles, tener aptitud legal para obligarse con arreglo á este Código, hacer constar la pericia, capacidad y condiciones necesarias para mandar y dirigir el buque, según establezcan las Leyes, Ordenanzas ó Reglamentos de marina ó navegación, y no estar inhabilitados con arreglo á ellos para el ejercicio del cargo.

Si el dueño de un buque quisiere ser su capitán careciendo de aptitud legal para ello, se limitará á la administración económica del buque y encomendará la navegación á quien tenga la aptitud que exigen dichas Ordenanzas y Reglamentos[4]).

---

[1]) Véase el juicio ejecutivo en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.»

[2]) Véase la nota anterior.

[3]) Véase respecto al nombramiento de peritos lo dicho acerca de esto al tratar de la prueba pericial y las disposiciones generales en los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.»

[4]) Las disposiciones de las ordenanzas y Reglamentos referentes á las condiciones necesarias de aptitud para poder ser capitán ó patrón hállanse compiladas en el Reglamento para la Navegación Mercante formado por el Ministerio de Marina y aprobado por Real Orden del mismo de 1.° de enero de 1885. — Estas disposiciones son las siguientes: — Art. 6. Todo dueño ó armador de buque está autorizado para tripularlo con el número de hombres que considere necesarios, estén ó no inscritos con anterioridad en los Registros de las comandancias de Marina, si bien deberán inscribirse desde el momento en que se dediquen á la navegación y pueden igualmente conferir el mando del buque á las personas que tengan por conveniente, pertenezcan ó no á las clases de pilotos ó patrones, con tal que sea español, tenga veintiún

For enforcing payment the managing owners shall have a right of executive action[1]), which shall be started by virtue of the decision of the majority, and with no further procedure than the verification of the signatures of those who voted the resolution.

601. If there are profits, the co-owners may claim from the managing owner the amounts corresponding to their shares by executive action[2]), with no other requisite than the verification of the signatures to the minute approving the account.

602. The managing owner shall indemnify the master for all expenses which he has incurred for the profit of the vessel with his own or another's funds.

603. Before the vessel puts to sea, the managing owner may dismiss at his discretion the master and members of the crew the agreement with whom has no fixed time or voyage, paying them their wages due according to their contracts, and without any compensation, unless there is an express and definite bargain thereon.

604. If the master or other members of the crew are dismissed during the voyage they shall receive their pay until they return to the port where the agreement was made, unless there was a just reason for the dismissal; all in accordance with art. 636 and the following articles of this Code.

605. If the agreements of the master and members of the crew made with the managing owner have a definite time or voyage, they cannot be dismissed until the fulfilment of their articles, except by reason of insubordination in a serious matter, robbery, theft, habitual drunkenness, or damage caused to the vessel or her cargo by evident and proved malice or negligence.

606. If the master is a co-owner of the vessel, he cannot be dismissed unless the managing owner pays him the value of his share, which, in default of agreement between the parties, shall be appraised by experts appointed as enacted by the Law of Civil Procedure[3]).

607. If the co-owning master has obtained command of the vessel by special bargain, expressed in the partnership document, he cannot be deprived of his charge except for the reasons contained in art. 605.

608. In case of the voluntary sale of the vessel, every contract between the managing owner and the master shall lapse, reserving to the latter his right to compensation, according to the bargains made with the managing owner.

The sold vessel shall be affected as security for the payment of the said compensation, if, after bringing an action against the seller, he proves to be insolvent.

Second Section. Masters.

609. Masters must be Spaniards, with legal qualification to bind themselves according to this Code, and must show their skill, capacity and conditions necessary for commanding and sailing the vessel, as the Laws, Ordinances or Regulations of Marine and Navigation enact, and that they are not disqualified thereby for performing their charge.

If the owner of a vessel wishes to be her master, but lacks legal qualification therefor, he shall be confined to the economic administration of the vessel and shall entrust the navigation to one who has the qualifications required by the said Ordinances and Regulations[4]).

---

1) See the executive action in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

2) See the previous note.

3) Respecting the appointment of experts, see what has been said thereon when treating of the evidence of experts and the general provisions in acts of voluntary jurisdiction in commercial matters, in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

4) The provisions of the Ordinances and Regulations referring to the conditions which are necessary qualifications for being master, are compiled in the Regulation for Merchant Navigation, formed by the Ministry of Marine and approved by Royal Order of 1 January 1885. — These provisions are the following: — Art. 6. Every owner or managing owner of a vessel is authorised to man it with the number of hands which he considers necessary, whether they are previously inscribed or not in the Registers of the Naval Commanders, although they must be inscribed from the moment when they devote themselves to navigation; and they may likewise confer the command of the vessel on the person they think fit, whether he belongs or not to the classes of pilots*) or masters, provided that he is a Spaniard of twenty one years

---

*) The word "pilot" as here used means a qualified navigating officer, and generally corresponds do "mate" (Translator).

610. Serán inherentes al cargo de capitán ó patrón de buque las facultades siguientes: 1.ª Nombrar ó contratar la tripulación en ausencia del naviero, y hacer la propuesta de ella estando presente, pero sin que el naviero pueda imponerle ningún individuo contra su expresa negativa; — 2.ª Mandar la tripulación y dirigir el buque al puerto de su destino, conforme á las instrucciones que hubiese

años cumplidos, y reemplazarlos cuando tengan por conveniente, dando previo conocimiento á la autoridad de Marina del puerto, que deberá anotarlo en la patente y notificarlo al comandante de Marina de la provincia á que corresponda, para las anotaciones que procedan en sus asientos. — 7. Para garantizar las vidas de los tripulantes y pasajeros y los intereses del comercio se exigirá por las autoridades de Marina, en el despacho de los buques, el número de pilosto que les correspondan con arreglo al artículo siguiente. — 8. Todo buque que emprenda navegación de altura ha de llevar, además del capitán, un primero ó segundo piloto con el cargo de la derrota, y otro segundo ó tercero si el capitán no fuese piloto. — Cuando la navegación sea al Pacífico, llevará dos primeros ó segundos y un tercero, pudiendo prescindirse de uno de los primeros ó segundos si el capitán fuese piloto. — 9. Los buques de cabotaje que no salen de los límites de sus departamentos, pueden ser dispensados de llevar piloto cuando los comandantes de Marina juzguen prudentemente que no lo necesitan, atendido su tonelaje y cargamento. — Los destinados exclusivamente á la pesca sobre las costas no están obligados á llevar piloto. — 10. Los pilotos reciben su instrucción teórica en las Escuelas náuticas ó Institutos de segunda enseñanza, y la práctica en los buques mercantes. — La teórica abraza en un curso de tres años la Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría, Topografía, Geografía física y política, Física experimental, Dibujo lineal é hidrográfico, Cosmografía y pilotaje. — La práctica comprende el ejercicio del pilotaje, la maniobra y los convenios internacionales sobre luces y maniobras para evitar abordajes. — 11. Los exámenes de la parte teórica se verifican en las mismas Escuelas de náutica ó Institutos de segunda enseñanza, y en vista de su resultado se les expiden certificaciones de aptitud para navegar como meritorio hasta adquirir los conocimientos prácticos. — 12. Los exámenes de la parte práctica para adquirir el título de pilotos y para pasar de una clase á otra en el orden ascendente, se verifican en las Mayorías generales de los departamentos ó apostaderos en los tres últimos días hábiles de cada uno de los meses de Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre, tomando parte en cada uno los que lo hubieren solicitado en el periodo comprendido entre su fecha y la del anterior. — 13. Presidirá el examen el mayor general, pudiendo delegar cuando sus ocupaciones no se lo permitan en un capitán de navío, y por falta de éstos en uno de fragata, y serán vocales dos jefes y dos oficiales, si el examinando aspira á las clases de primero ó segundo piloto, y sólo el presidente y los dos oficiales, si aspira á la de tercero. — 14. Las condiciones necesarias para ser admitidos á examen en las Mayorías generales son las siguientes: — *A. Para terceros.* Presentar certificación de aptitud en los estudios teóricos expedido en las Escuelas náuticas autorizadas por el Gobierno, ó en los Institutos de segunda enseñanza, y acreditar con documentos expedidos por los comandantes de Marina y debidamente legalizados, que han verificado en buque de vela dos viajes redondos de Europa á América ó Golfo de Guinea, ó desde las Antillas al Río de la Plata ó Golfo de Guinea, ó uno desde Europa á Filipinas por el Cabo de Buena Esperanza, ó al Pacífico por el de Hornos, ó cuatro de altura de 100 á 200 leguas cada uno, ó doble número de viajes si fuesen en buques de vapor. — *B. Para segundos.* Hacer constar que son terceros, aunque no hayan recibido el nombramiento definitivo, y acreditar con documentos expedidos por los comandantes de Marina y debidamente legalizados, que han verificado en buque de vela, como terceros ó meritorios, tres viajes redondos de Europa á América ó Golfo de Guinea, ó desde las Antillas al Río de la Plata ó Golfo de Guinea, ó dos desde Europa á Filipinas por el Cabo de Buena Esperanza, ó al Pacífico por el de Hornos, ó seis de altura de 100 á 200 leguas cada uno, ó doble número de viajes si fuesen en buques de vapor. — *C. Para primeros.* Hacer constar que son segundos, aunque no hayan recibido el nombramiento definitivo, y acreditar con documentos expedidos por los comandantes de Marina y debidamente legalizados, que han verificado en buque de vela, como segundos, terceros ó meritorios, cinco viajes redondos de Europa á América ó Golfo de Guinea, ó desde las Antillas al Río de la Plata ó Golfo de Guinea, ó tres desde Europa á Filipinas por el Cabo de Buena Esperanza, ó al Pacífico por el de Hornos, ó diez de altura de 100 á 200 leguas cada uno, ó doble número de viajes si fuesen en buques de vapor. — 15. Para el cómputo de los viajes de que trata el artículo anterior, será indiferente haberlos hecho en buque español ó extranjero, siempre que se verifique ejerciendo la profesión y no de pasajero; se considerará como realizado el que fuese interrumpido por naufragio, y para los casos en que no se determine expresamente otra equivalencia, se contarán cada dos viajes en buque de vapor como uno en buque de vela; un viaje á Filipinas ó al Pacífico, como dos á la América Oriental, y dos de altura de 100 á 200 leguas en cualquier mar, como uno á la América Oriental. — 16. Las actas del examen, con las censuras de aprobado ó desaprobado, se remitirán al capitán ó comandante general del departamento ó apostadero en que se verifican, quien, después que le conste que hay entregado el papel sellado correspondiente, expedirá á los aprobados títulos provisionales de habilitación para navegar en la clase que hubieren alcanzado, y remitirán una copia del acta á la autoridad superior del departamento ó apostadero en que se hallen inscritos los examinados, para que por dicha autoridad se les expidan los nombramientos definitivos y se dispongan la anotación correspondiente en sus asientos. — 18. Toda embarcación de cabotaje ó pesca que

610. The following powers shall be inherent in a master's command: 1. To appoint or contract with the crew, in the absence of the managing owner, and to propose the crew, when he is present, but without the managing owner being able to insist on any individual against his express refusal; — 2. To command the crew and sail the vessel to the port of her destination, according to the instructions which

of age; and may replace him when they think fit, giving previous notice to the Marine authority of the port, who must note it on the licence and notify it to the Naval Commander of the corresponding province, for the annotations which are proper in his entries. — **7.** In order to guarantee the lives of the crew and passengers and the interests of commerce, the Naval authorities shall require, in clearing the vessel, the number of pilots which belong to them according to the following article. — **8.** Every vessel which sails for the high seas must carry, besides the master, a first or second pilot in charge of the route, and another second or a third, if the master is not a pilot. — When the course is to the Pacific, she shall carry two first or second and one third, but one of the first or second may be dispensed with, if the master is a pilot. — **9.** Coasting vessels which do not leave the limits of their departments, may be discharged from carrying a pilot, when the Naval Commanders prudently deem them unnecessary, in view of their tonnage and cargo. — Those exclusively intended for fishing along the coasts are not obliged to carry a pilot. — **10.** Pilots receive their theoretical instruction in the nautical schools or Institutes of secondary education, and their practice in merchant vessels. — The theory embraces in a course of three years, arithmetic, algebra, trigonometry, topography, physical and political geography, experimental physics, line and hydrographic drawing, cosmography and navigation. — The practice includes the exercise of navigation, working the vessel and the international conventions on lights and manoeuvring to avoid collision. — **11.** The examinations in the theoretic part are held in the same nautical schools and Institutes of secondary education, and in view of their result, certificates are issued of qualification for navigation, without pay, until the acquisition of practical knowledge. — **12.** The examinations in the practical part for acquiring the title of pilot and for passing from one class to another in ascending order, are held in the Commander's office of the naval Departments or naval stations in the three last business days of each of the months of February, April, June, August, October and December, those taking part therein who have applied in the period between its date and that of the former examination. — **13.** The Commander General shall preside at the examination, but when his occupations do not permit it, may delegate to a captain of a man of war, and in default, to the captain of a frigate, and two chiefs and two officers shall vote, if the person examined aspires to the classes of first or second pilot, and only the president and two officers, if he aspires to the third. — **14.** The conditions necessary for being admitted to the examination at the Commander's Office are the following: *A. For third pilots.* To produce a certificate of qualification in the theoretic studies, issued by the nautical schools authorised by the government, or by the institutes of secondary education, and to prove by documents issued by the commandants of Marine and duly authenticated, that they have made two round sailing voyages from Europe to America or the Gulf of Guinea, or from the West Indies to the river La Plata or the Gulf of Guinea, or one from Europe to the Phillipines by the Cape of Good Hope, or to the Pacific by Cape Horn, or four on the high seas of 100 to 200 leagues each, or double the number of voyages in steam vessels. — *B. For second pilots.* To show that they are third pilots, although they may not have received a definite diploma, and to prove by documents issued by the Commandants of Marine and duly authenticated, that as third or unpaid pilots, they have made three round sailing voyages from Europe to America or the Gulf of Guinea, or from the West Indies to the river La Plata or the Gulf of Guinea, or two from Europe to the Phillipines by the Cape of Good Hope, or to the Pacific by Cape Horn, or six on the high seas of 100 to 200 leagues each, or double the number of voyages in steam vessels. — *C. For first pilots.* To show that they are second pilots, although they have not received a definite diploma, and to prove by documents issued by the Naval Commanders and duly authenticated, that as second, third or unpaid pilots they have made five round sailing voyages from Europe to America or the Gulf of Guinea, or from the West Indies to the river La Plata or the Gulf of Guinea, or three from Europe to the Phillipines by the Cape of Good Hope, or to the Pacific by Cape Horn, or ten on the high seas of 100 to 200 leagues each, or double the number of voyages in steam vessels. — **15.** For reckoning the voyages with which the previous article deals, it shall be a matter of indifference whether they are made in a Spanish or foreign vessel, provided that they are made professionally and not as a passenger; a voyage interrupted by shipwreck shall not be considered as made, and for those cases for which no other equivalent is expressly determined, each two voyages in a steamer shall be reckoned as one in a sailing vessel; one voyage to the Phillipines or the Pacific as two to the east coast of America, and two on the high seas on any sea, as one to the east coast of America. — **16.** The answers to the examination, with the marks of approval or disapproval, shall be remitted to the captain or Commander General of the department or station where they are made, who, after he is assured that the corresponding stamped paper has been paid, shall issue to the successful candidates provisional titles of qualification to navigate in the class which they have reached, and shall send a copy of the document to the higher authority of the department or station in which the candidates are inscribed, in order that the definite diplomas may be issued by the said authority and that they may place the corresponding note among

recibido del naviero; — 3.ª Imponer con sujeción á los contratos y á las Leyes y Reglamentos de la marina mercante, y estando á bordo, penas correccionales á los que dejen de cumplir sus órdenes ó falten á la disciplina, instruyendo, sobre los delitos cometidos á bordo en la mar, la correspondiente sumaria, que entregará á las autoridades que de ella deban conocer, en el primer puerto á que arribe; — 4.ª Contratar el fletamento del buque en ausencia del naviero ó su consignatario, obrando conforme á las instrucciones recibidas y procurando con exquisita diligencia por los intereses del propietario; — 5.ª Tomar todas las disposiciones convenientes para conservar el buque bien provisto y pertrechado, comprando al efecto lo que fuere necesario, siempre que no haya tiempo de pedir instrucciones al naviero; — 6.ª Disponer en iguales casos de urgencia, estando en viaje, las reparaciones en el casco y máquinas del buque y su aparejo y pertrechos que sean absolutamente precisas para que pueda continuar y concluir su viaje; pero si llegase á un punto en que existiese consignatario del buque, obrará de acuerdo con éste.

611. Para atender á las obligaciones mencionadas en el artículo anterior, el capitán, cuando no tuviere fondos ni esperase recibirlos del naviero, se los procurará según el orden sucesivo que se expresa: 1.° Pidiéndolos á los consignatarios del buque ó corresponsales del naviero; — 2.° Acudiendo á los consignatarios de

---

salga de los puertos debe ir á cargo de un patrón. Con arreglo á lo dicho en el art. 1.°, el armador ó dueño puede confiarlo á la persona que tenga por conveniente; pero si no perteneciese á la clase de pilotos ó patrones examinados, con nombramiento, habrá de tener veintiún años cumplidos y llevar además un patrón examinado que le asesore en los asuntos profesionales, para garantía de las vidas de los tripulantes. Los cambios de patrones se anotarán en los roles por las autoridades de Marina en los puertos en que se verifique el cambio. — **19.** Para obtener nombramiento de patrón es necesario tener venticinco años cumplidos de edad, estar inscrito en alguna comandancia ó distrito, y acreditar los conocimientos que expresa el artículo siguiente ante una Junta compuesta del comandante de Marina de la provincia, presidente, y como vocales el segundo comandante y los ayudantes, completándose en caso necesario hasta el número de siete, incluso el presidente, con capitanes de la clase de pilotos ó patrones examinados, elegidos en las embarcaciones que se hallaren en el puerto. — **20.** Las materias sobre que ha de versar el examen de los patrones son las siguientes: — *Para los patrones de cabotaje.* Leer y escribir, manejo del aparejo de los buques costaneros y del cabotaje de la provincia, modo de evitarlos, según la clase de cargamento, y de tumbarlos ó dar la quilla para coger alguna agua alta ó baja, asi como vararlos: conocimiento de las costas en que ha de navegar, de sus bajos, bancos y placeres; de las corrientes y mareas; vientos que reinan en aquéllas; con cuáles conviene navegar atracando las mismas, ó con cuáles deben separarse de ellas; cuarteo de la aguja; situarse por medio de la sonda, y otros métodos prácticos para deducir la distancia de la costa y rumbos que han de hacerse; modo de entrar y salir de los puertos de la provincia y de algunos otros del Océano y Mediterráneo; precauciones que deben tomar en los temporales, tanto en la mar como en puerto; modo de remediar averías; conocimiento de los faros existentes en las costas en que naveguen, y de las leyes marítimas sanitarias y de policía de los puertos; de las prevenciones impresas en el rol, y de lo que les concierne en el Código de comercio, del reglamento de luces y maniobras para evitar abordajes. — *Para los patrones de pesca.* Manejo de las velas de los buques de esta industria en las provincias; nombre y manejo de las artes de uso en los mismos y de las ordenanzas á que están sujetas; modo de estivarlos para que resistan el aparejo, si fuese necesario, y de tumbarlos hasta dar la quilla para coger alguna agua alta ó baja, así como vararlos; conocimiento de la costa en que hayan de pescar, de sus bajos, bancos y placeres; de las corrientes y mareas; vientos reinantes; con cuáles conviene atracarla y con cuáles separarse; algún conocimiento de la aguja; precauciones que deben tomar en los temporales, tanto en la mar como en puerto; modo de remediar averías; conocimiento de los faros de dicha costa, y de la entrada y salida de los puertos de la misma, ó inteligencia en las reglas de ellos y en las leyes marítimas sanitarias; luces que deben llevar los barcos de pesca. — **21.** Del resultado del examen se levantará acta en un libro destinado al efecto y sin que sea necesario dar cuenta del resultado á la autoridad superior del departamento ó apostadero, expedirá título de patrón de cabotaje ó patrón de pesca (sin designar la embarcación que hayan de patronear), á los que resultaren aprobados. Si además de las condiciones dichas reuniesen los aprobados las de haber hecho campaña en los buques de guerra sin nota desfavorable, se les formará asiento de patrones. En el caso contrario no tendrá ingreso en esta clase distinguida aunque pueda ejercer sus funciones. — **22.** Cuando en alguna localidad hubiere escasez de patrones y no se presente nadie á prestar el examen necesario, podrán los comandantes de Marina habilitar para mientras dure la necesidad á los hombres de mar inscritos, á quienes, previo examen de lo preciso para ejercer el cargo, considere capaces para suplir la escasez transitoria, debiendo cesar estas habilitaciones tan pronto como haya disponibles patrones con nombramiento.

he has received from the managing owner; — 3. Subject to the contracts and to the Laws and Regulations of the merchant marine, to impose correctional punishments, when he is on board, on those who fail to comply with his orders or are wanting in discipline, drawing up the proper summary in respect to crimes committed on board while at sea, which he shall deliver to the authorities which ought to try it, at the first port at which he arrives; — 4. To contract for freighting the vessel, in the absence of the managing owner or her consignee, acting according to received instructions and working with consummate diligence for the interests of the owner; — 5. To take all fitting measures to keep the vessel well provided and found and to buy what is necessary for that purpose, provided that there is no time for applying for instructions from the managing owner; — 6. To give orders in like cases of urgency, while on a voyage, for repairs to the hull and engines of the vessel and her tackle and stores which are absolutely necessary for continuing and finishing her voyage; but if she arrives at a place where a consignee of the vessel exists, he shall act in agreement with the latter.

611. In order to attend to the duties mentioned in the preceding article, the master, when he has not funds and does not expect to receive them from the managing owner, shall procure them in the successive order here stated: 1. By applying for them to the consignees of the vessel or the correspondents of the managing owner; —

their entries. — **18.** Every coasting or fishing vessel must sail in charge of a master. According to what is said in article 1, the managing owner or owner may entrust it to the person he thinks fit; but if he does not belong to the class of examined pilots or masters, with diploma, he must have completed twenty one years of age and have also an examined master to help him in the professional matters, as a guarantee of the lives of the crew. Changes in the masters shall be noted on the muster-rolls by the marine authorities of the ports where the change is made. — **19.** In order to obtain a nomination as master, it is necessary to have completed twenty one years of age, to be inscribed in some command or district, and to prove the knowledge expressed in the following article before a Board composed of the Commandant of Marine of the province, as president, and the second Commander and his adjutants as members, and if necessary, filling up to the number of seven, including the president, with captains of the class of examined pilots or masters, chosen from the vessels which are in the port. — **20.** The subjects on which the examination of master owners have to turn are the following: *For coasting master owners.* To read and write, and handle the tackle of the coasting vessels of the province, the mode of avoiding vessels, according to the kind of cargo, and of heaving down or up in order to take a high or low sea, as well as of beaching them; knowledge of the coast on which they are to sail, their bays and banks; of the currents and tides; the prevailing winds; with what winds it is proper to make the coasts and with which to keep away therefrom; boxing the compass; to fix the situation by means of soundings, and other practical methods of ascertaining the distance from the coast and the courses to be laid; the mode of entering and leaving the ports of the province and any other Ocean and Mediterranean ports; the precautions which should be taken in storms, both at sea and in harbour; the mode of repairing damages; knowledge of the lighthouses on the coasts where they sail, and of the maritime, sanitary and police laws of the ports; of the warnings printed on the muster-roll, and the relative parts of the Code of Commerce, of the regulations for lights and manoeuvres to avoid collisions. *For master owners of fishing boats.* Management of the sails of the vessels in the provinces engaged in this industry; name and use of the nets which are customary therein and of the ordinances to which they are subject; the mode of stowing them so that they may resist the heaving tackle, if necessary, and of heaving the vessel so as to take a high or low sea, as well as of beaching them; knowledge of the coast on which they are to fish, of its bays and banks; of the currents and tides; the reigning winds with which it is proper to make the land and with which to keep away therefrom; some knowledge of the compass; precautions to be taken in storms, both at sea and in harbour; the mode of repairing damages; knowledge of the lighthouses on the said coast, and of entering and leaving the ports thereof, and understanding of the bye-laws thereof and of the maritime sanitary laws; the lights which fishing boats have to carry. — **21.** A record shall be made of the result of the examination in a book kept for that purpose; and without its being necessary to give account of the result to the higher authority of the department or station, a title of coasting master or fishing master shall be issued to the successful candidates (without defining the boat which they are to command). If in addition to the said conditions, the successful candidates combine those of having made a campaign in men of war without an unfavourable record, they shall be entered as masters. In the contrary case, they shall not enter this distinguished class, although they may exercise their functions. — **22.** When there is a scarcity of masters in any place and no one presents himself for the necessary examination, the Naval Commanders may, so long as the necessity lasts, license inscribed seamen, whom they consider capable of supplying the passing want, after examining into what is needful for exercising the command, but these licences must lapse as soon as masters with diplomas are available.

la carga ó á los interesados en ella; — 3.° Librando sobre el naviero; — 4.° Tomando la cantidad precisa por medio de préstamo á la gruesa; — 5.° Vendiendo la cantidad de carga que bastare á cubrir la suma absolutamente indispensable para reparar el buque y habilitarle para seguir su viaje.

En estos dos últimos casos habrá de acudir á la autoridad judicial del puerto, siendo en España, y al cónsul español, hallándose en el extranjero; y en donde no le hubiere, á la autoridad local, procediendo con arreglo á lo dispuesto en el art. 583 y á lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil[1]).

612. Serán inherentes al cargo de capitán las obligaciones que siguen: 1.ª Tener á bordo, antes de emprender el viaje, un inventario detallado del casco, máquinas, aparejo, pertrechos, respetos y demás pertenencias del buque; la patente Real ó de navegación[2]); el rol de los individuos que componen la dotación del buque, y las contratas con ellos celebradas; la lista de pasajeros; la patente de sanidad; la certificación del Registro, que acredite la propiedad del buque y todas las obligaciones que hasta aquella fecha pesaran sobre él; los contratos de fletamento, ó copias autorizadas de ellos; los conocimientos ó guías de la carga, y el acta de la visita ó reconocimiento pericial, si se hubiere practicado en el puerto de salida[3]); — 2.ª Llevar á bordo un ejemplar de este Código; — 3.ª Tener tres libros foliados

[1]) Cuando un capitán de buque necesite obtener licencia judicial para contraer un préstamo á la gruesa, deberá solicitarlo haciendo una información ó presentando documentos que justifiquen la urgencia y no haber podido encontrar fondos por los medios enumerados en el art. 611 del Cód. de com. Pedirá además al juez que nombre un perito que reconozca la nave y fije la cantidad necesaria para reparaciones, rehabilitación y aprovisionamiento. Y este, en vista de la declaración pericial, mandará publicar los anuncios, que se fijarán en los sitios de costumbre, é insertarán en el *Boletín oficial* de la provincia y *Diario de Avisos* de la localidad, si lo hubiere, en los que se consignará sucintamente la pretensión del capitán de la nave y la cantidad que el perito haya fijado. — Concedida por el juez la autorización para contraer el préstamo, si, á pesar de ello, el capitán no encontrare la cantidad necesaria, podrá pedir la venta de la parte de cargamento que fuere indispensable. Esta venta se hará, previa tasación de peritos nombrados en la forma indicada en la nota 2, pág. 167, y en subasta pública, anunciada y verificada con las formalidades legales. (Véase las notas 3 y 4, pág. 167) (Art. 2161, regla 9°, L. de Enj. c.)

[2]) Por virtud de lo dispuesto en el Regl. Nav. Merc., esta patente deberá contener siempre tantos sellos por valor de 17,50 pesetas, como periodos de tres años cuente desde la fecha de su expedición, bien entendido que dichos sellos deberán colocarse en todo el primer año de cada periodo, bajo la pena de una multa de 1,25 pesetas por cada tonelada de las que mida el buque en caso de omisión injustificable, y cuya multa se cargará al dueño del mismo. — La fianza que establecía la ordenanza de Marina de 1802 en su título X, art. 2.°, para garantizar el buen uso de las patentes de navegación, quedó abolida por decreto de 6 de mayo de 1873, quedando subsistente la obligación de hacer buen uso de ellas.

[3]) El art. 43 del citado Regl. para la Nav. Merc. dice lo siguiente respecto á los documentos que han llevar los buques mercantes: — *I. Buques de navegación de altura.* *A*) Real patente de navegación arreglada al modelo que á continuación se inserta (modelo *A*). — La falta de esta en buque ó llevarla falsa ó doble, autoriza la confiscación del buque y de la carga. — *B*) Escritura de propiedad. La falta de este documento hace poner en duda la nacionalidad del buque, puesto que los españoles han de ser precisamente propiedad de españoles. — *C*) Patente de sanidad, visada en su caso por el cónsul de la nación á que se dirige el buque. La falta de este documento ó del requisito expresado autoriza la detención del buque en cuarentena ú observación, hasta que las Juntas de Sanidad se cercioren del estado satisfactorio de la salud en el buque y en el puerto de procedencia. — *D*) Cuaderno de bitácora ó diario de navegación con los datos necesarios para apreciar todas las circunstancias del viaje cuando el buque se dirija á Ultramar ó al extranjero. La falta de este documento autoriza á tratar al buque como sospechoso. Debe ser presentado á los comandantes de Marina, funcionarios de Aduanas y Cónsules en el extranjero siempre que lo reclamen. — *E*) Rol de equipaje y lista de pasajeros firmado por la autoridad de Marina ó Cónsul español del puerto de salida. La falta de este documento hace á los capitanes sospechosos de ocultar individuos que no han podido embarcar legalmente, además de la responsabilidad en que incurran por desobediencia á los preceptos legales. — *F*) Póliza de fletamento si no navega por cuenta de los dueños. — *G*) Manifiesto de la carga en que se exprese sin enmiendas, raspaduras ni adiciones interlineales, el nombre del buque y su capitán, tonelaje, bandera, remitente, consignatario, procedencia, destino, número, clase, marcas, numeración, contenido y peso bruto de los bultos, y demás indicaciones especiales que en cada caso exija la legislación que á la sazón rigiere en el ramo de Aduanas. — *II. Buques de cabotaje.* — *A*) Licencia para navegar expedida por el comandante de Marina de su provincia. — *B*) Escritura de propiedad. — *C*) Patente de sanidad. — *D*) Diario de navegación si se dirije al extranjero. — *E*) Rol de equipaje y lista de pasajeros. — *F*) Póliza de fletamento si no navega por

2. By applying to the consignees of the cargo or the persons interested therein; — 3. By drawing on the managing owner; — 4. By borrowing the needful amount by means of a bottomry bond; — 5. By selling the cargo to an amount sufficient to cover the sum which is absolutely indispensable for repairing the vessel and fitting her for pursuing her voyage.

In the last two cases, he must apply to the judicial authority of the port, if he is in Spain, and to the Spanish consul, if he is abroad; and if there is none, then to the local authority, proceeding according to the provisions of art. 583 and the enactments of the Law of Civil Procedure[1]).

612. The following duties shall be inherent in a master's command: 1. To have on board, before commencing the voyage, a detailed manifest of the hull, engines, tackle, stores, spare parts and other appurtenances of the vessel; the Royal licence or licence for navigation[2]); the muster-roll of the individuals who compose the complement of the vessel, and the contracts made with them; the list of passengers; the bill of health; the certificate of the Registry, proving the ownership of the vessel and all the obligations affecting the vessel up to that date; the contracts of affreightment, or authenticated copies thereof; the bills of lading or checks of the cargo, and the record of the expert visit or survey, if it has taken place at the port of sailing[3]); — 2. To carry a copy of this Code on board; — 3. To keep three paged

---

[1]) When a master of a vessel requires to obtain a judicial licence for contracting a bottomry loan, he must apply therefor by making a report and producing documents which prove the urgency and that he has not been able to find the funds by the means enumerated in art. 611 of the Code of Commerce. He shall likewise apply to the judge to appoint an expert to survey the vessel and fix the amount necessary for repairs, refitting and provisioning. And the judge, on examining the expert declaration, shall order the publication of advertisements, which shall be posted up in the accustomed places, and inserted in the *Boletin Oficial* of the province and *Diario de Avisos* of the locality, if any, wherein the proposal of the master of the vessel and the amount fixed by the expert shall be succinctly stated. — If, after the judge has granted the authorisation for contracting the loan, the master, in spite of it, does not meet with the necessary amount, he may apply for the sale of an indispensable portion of the cargo. This sale shall be made after valuation by experts appointed as indicated in note 2, page 167, and by public auction, advertised and effected with the legal formalities (see notes 3 and 4, page 167; art. 2161, rule 9 of the Law of Civil Procedure).

[2]) By virtue of the provisions of the Regulation for Merchant Navigation, this licence must always contain as many stamps of the value of 17,50 pesetas, as there are periods of three years from the date of its issue, it being understood that the said stamps must be affixed entirely within the first year of each period, under the penalty of a fine of 1,25 pesetas per ton of the vessel, in case of unjustifiable omission, which fine shall be borne by the owner of the vessel. The security enacted by the Marine Ordinance of 1802, Title X, art. 2, for guaranteeing the proper use of the licences for navigation, was abolished by decree of 6 May 1873, the obligation to make proper use of them still remaining.

[3]) Art. 43 of the Regulation for Merchant Vessels says as follows with respect to the documents which merchant vessels have to carry: *I. Vessels sailing the high seas. A*) A Royal licence to navigate according to the model which is hereinafter inserted (model *A*). — If a vessel fails to carry this or carries a false or deceitful licence, this authorises the confiscation of the vessel and her cargo. — *B*) The instrument of ownership. The want of this document places the nationality of the vessel in doubt, as Spanish vessels have necessarily to be the property of Spaniards. — *C*) Bill of health, with *visé*, if necessary, of the consul of the nation to which the vessel sails. Want of this document or of the *visé* authorises the detention of the vessel in quarantine or observation, until the Boards of Health ascertain the satisfactory state of health both on the vessel and in the port whence she sailed. — *D*) The log, containing the facts necessary for appreciating all the circumstances of the voyage when the vessel sails oversea or abroad. Want of this document authorises the vessel being treated as suspected. The following must be produced to the Commandants of Marine, Customs Officers and Consuls abroad, whenever they demand it. — *E*) The muster-roll and list of passengers, signed by the Marine authority or the Spanish Consul of the port of departure. Want of this document causes masters to be suspected of concealing persons who could not have embarked lawfully, besides the liability which they incur from disobeying the legal precepts. — *F*) Charter-party, if she is not sailing on account of the owners. — *G*) Manifest of the cargo, expressing without amendments, erasures or interlineal additions, the name of the vessel and her master, tonnage, flag, consignor, consignee, port of sailing and destination, number, class, marks, enumeration, contents and gross weight of the packages, and other special particulars which the legislation in force at the time in the branch of Customs requires in each case. — *II. Coasting vessels.* — *A*) Licence to navigate, issued by the Commandant of Marine of her province. — *B*) Instrument of ownership. — *C*) Bill of health. — *D*) The log, if she is sailing abroad. — *E*) Muster-roll and list of passengers. — *F*) Charter-party if she is not sailing on account of her owners. — *G*) Manifest of the cargo. — *III. Fishing Boats.* —

y sellados, debiendo poner al principio de cada uno nota expresiva del número de folios que contenga, firmada por la autoridad de marina, y en su defecto, por la autoridad competente[1]). En el primer libro, que se denominará «diario de navegación», anotará día por día el estado de la atmósfera, los vientos que reinen, los rumbos que se hacen, el aparejo que se lleva, la fuerza de las máquinas con que se navegue, las distancias navegadas, las maniobras que se ejecuten y demás accidentes de la navegación; anotará también las averías que sufra el buque en su casco, máquinas, aparejo y pertrechos, cualquiera que sea la causa que las origine, así como los desperfectos y averías que experimente la carga, y los efectos é importancia de la echazón si ésta ocurriera; — y en los casos de resolución grave que exija asesorarse ó reunirse en junta á los oficiales de la nave y aun á la tripulación y pasajeros, anotará los acuerdos que se tomen. Para las noticias indicadas se servirá del cuaderno de bitácora y del de vapor ó máquinas que lleva el maquinista. En el segundo libro, denominado «de contabilidad», registrará todas las partidas que recaude y pague por cuenta del buque, anotando con toda especificación, artículo por artículo, la procedencia de lo recaudado, y lo invertido en vituallas, reparaciones, adquisición de pertrechos ó efectos, víveres, combustible, aprestos, salarios y demás gastos, de cualquiera clase que sean. Además insertará la lista de todos los individuos de la tripulación, expresando sus domicilios, sus sueldos y salarios y lo que hubieren recibido á cuenta, así directamente como por entrega á sus familias. En el tercer libro, titulado «de cargamentos», anotará la entrada y salida de todas las mercaderías, con expresión de las marcas y bultos, nombres de los cargadores y consignatarios, puertos de carga y descarga y los fletes que devenguen. En este mismo libro inscribirá los nombres y procedencia de los pasajeros, el número de bultos de sus equipajes y el importe de los pasajes; — 4.ª Hacer, antes de recibir carga, con los oficiales de la tripulación y dos peritos, si lo exigieren los cargadores y pasajeros, un reconocimiento del buque, para conocer si se halla estanco con el aparejo y máquinas en buen estado y con los pertrechos necesarios para una buena navegación, conservando certificación del acta de esta visita, firmada por todos los que la hubieren hecho, bajo su responsabilidad. Los peritos serán nombrados, uno por el capitán del buque y otro por los que pidan su reconocimiento, y en caso de discordia nombrará un tercero la autoridad de marina del puerto[2]); — 5.ª Permanecer constantemente en su buque con la tripulación mientras se recibe á bordo la carga, y vigilar cuidadosamente su estiva; no consentir que se embarque ninguna mercancía ó materias de carácter peligroso, como las sustancias inflamables ó explosivas, sin las precauciones que están recomendadas para sus envases y manejo y aislamiento; no permitir que se lleve sobre cubierta carga alguna que por su disposición, volumen ó peso dificulte las maniobras marineras y pueda comprometer la seguridad de la nave; y en el caso de que la naturaleza de las mercancías, la índole especial de la expedición, y principalmente la estación favorable en que aquélla se emprenda, permitieran conducir sobre cubierta alguna carga, deberá oir la opinión de los oficiales del buque y contar con la anuencia de los cargadores y del naviero; — 6.ª Pedir práctico á costa del buque en todas las circunstancias que lo requieran las necesidades de la navegación, y más principalmente cuando haya de entrar en puerto, canal ó río, ó tomar una rada ó fondeadero que ni él ni los oficiales y tripulantes del buque conozcan; — 7.ª Hallarse sobre cubierta en las recaladas y tomar el mando en las entradas y salidas de puertos, canales, ensenadas y ríos, á menos de no tener á bordo práctico en el ejercicio de sus funciones. No deberá pernoctar fuera del buque sino por motivo grave ó por razón de oficio; — 8.ª Presentarse, así que tome puerto por

---

cuenta de sus dueños. — *G*) Manifiesto de la carga. — *III. Barcos de pesca.* — *A.*) Licencia de pesca, expedida por el comandante de Marina de su provincia ó ayudante del distrito. — E.) Rol de equipaje en el cual se exprese además la clase de pesca á que se dedica.

[1]) Estos libros deberán reintegrarse en igual forma que el libro diario de los comerciantes particulares (véase la pág. 96, nota 2) (art. 155 de la L. del T.).

[2]) Si el capitán se opusiere á este reconocimiento los pasajeros ó cargadores que lo deseen podrán pedir por escrito al juez que lo disponga, haciendo al propio tiempo la designación del perito que por su parte propongan, para que, en unión del que por la suya designare el capitán requerido al efecto judicialmente, ó del que nombrare el juzgado, en el supuesto de que aquel se resistiere á las órdenes de este, dictaminen acerca del estado del buque. — Si los peritos así nombrados no se pusieren de acuerdo, se designará el tercero por la autoridad de marina del puerto.

and stamped books, and to put at the beginning of each a note stating the number of pages which it contains, signed by the Marine authority, and in default thereof, by the competent authority[1]). In the first book, which shall be called "the log", he shall note day by day the state of the atmosphere, the prevailing winds, the courses taken, the sail carried, the engine power with which they are sailing, the distances sailed, the manoeuvres executed and other incidents of the navigation; he shall also note the damages suffered by the vessel in her hull, engines, tackle and stores, however caused, as also the deterioration and damage suffered by the cargo, and the effects and extent of jettision, if any; and in cases of grave decision requiring the assistance in combined meeting of the officers of the vessel and even of the crew and passengers, he shall enter the decisions which are taken. For these notes he shall make use of the binnacle book and the book of the steamer or engines which is kept by the engineer. In the second book, called the "account-book", he shall enter all the items which he receives and pays on account of the vessel, noting specifically, item by item, the origin of the receipt, and the expenditure in victuals, repairs, purchase of stores and effects, provisions, fuel, supplies, pay and other expenses of every kind. He shall also insert a list of all the members of the crew, stating their addresses, their pay and wages and what they have received on account, either directly or by payment to their families. In the third book, entitled "cargoes", he shall note the entry and dispatch of all the merchandise, stating the marks and packages, names of the consignors and consignees, ports of loading and discharge and the freights which they earn. In this same book he shall enter the names of the passengers and whence they come, the number of packages in their baggage and the amount of the passage-money; — 4. Before receiving cargo, and if required by the consignors and passengers, to make a survey of the vessel with the officers and two experts, to ascertain if she is staunch with the tackle and machinery in good condition and with the stores necessary for good navigation, preserving a certificate of the record of this inspection, signed by all who made it, under his responsibility. The experts shall be appointed, one by the master of the vessel and the other by those who apply for their survey, and in case of disagreement, the Marine authority of the port shall appoint a third[2]); — 5. To remain constantly on the vessel with the crew, while the cargo is being received on board, and to carefully watch her stowing; not to consent to take on board any merchandise or materials of dangerous character, as inflammable or explosive substances, without the precautions which are enjoined for their coverings, handling and isolation; not to allow to be carried on deck any cargo which by its position, volume or weight impedes the work of the seamen and may compromise the safety of the vessel; and in case the nature of the merchandise, the special nature of the voyage, and chiefly the favourable season in which the latter is commenced, should permit any cargo to be carried on deck, he must hear the opinion of the officers of the vessel and rely on the assent of the consignors and of the managing owner; — 6. To apply for a pilot at the cost of the vessel in all circumstances in which the necessities of navigation require it, and chiefly when she has to enter a port, canal or river, or take a roadstead or anchorage which neither he nor the officers and crew of the vessel know; — 7. To be on deck when making land and to take command while entering and leaving ports, canals, creeks and rivers, unless he has a pilot on board who is exercising his functions. He must not spend a night away from the vessel except for a serious reason or in discharge of his duty; — 8. As soon as he enters a harbour of refuge, to present himself to the marine authority, if he is in Spain, and to the Spanish consul, if abroad, within twenty four hours, and to make to him a declaration of the name,

---

A) Licence to fish, issued by the Commandant of Marine of her province or the adjutant of the district. — *B*) Muster-roll, in which is also stated the kind of fishing to which she is devoted.

[1]) These books must pay the same as the ledgers of individual merchants (see page 96, note 2) (art. 155 of the Stamp Act).

[2]) If the master opposes this survey, the passengers or consignors who desire it may make a written application to the judge to order it, nominating at the same time the expert whom they propose on their part, in order that, in union with the one appointed by the master on a judicial requirement to that effect, or with the one appointed by the judge, if the former disobeys his orders, they may come to a decision about the state of the vessel. — If the experts, so appointed, do not agree, the third shall be appointed by the Marine authority of the port.

arribada forzosa, á la autoridad marítima, siendo en España, y al cónsul español, siendo en el extranjero, antes de las veinticuatro horas, y hacerle una declaración del nombre, matrícula y procedencia del buque, de su carga y motivo de arribada; cuya declaración visarán la autoridad ó el cónsul, si después de examinada la encontraren aceptable, dándole la certificación oportuna para acreditar su arribo y los motivos que lo originaron. Á falta de autoridad marítima ó de cónsul, la declaración deberá hacerse ante la autoridad local; — 9.ª Practicar las gestiones necesarias ante la autoridad competente, para hacer constar en la certificación del Registro Mercantil del buque las obligaciones que contraiga conforme al art. 583; — 10.ª Poner á buen recaudo y custodia todos los papeles y pertenencias del individuo de la tripulación que falleciere en el buque, formando inventario detallado, con asistencia de los testigos pasajeros, ó, en su defecto, tripulantes; — 11.ª Ajustar su conducta á las reglas y preceptos contenidos en las instrucciones del naviero, quedando responsable de cuanto hiciere en contrario; — 12.ª Dar cuenta al naviero, desde el puerto donde arribe el buque, del motivo de su llegada, aprovechando la ocasión que le presten los semáforos, telégrafos, correos, etc., según los casos; poner en su noticia la carga que hubiere recibido, con especificación del nombre y domicilio de los cargadores, fletes que devenguen y cantidades que hubiere tomado á la gruesa; avisarle su salida y cuantas operaciones y datos puedan interesar á aquél; — 13.ª Observar las reglas sobre luces de situación y maniobras para evitar abordajes; — 14.ª Permanecer á bordo, en caso de peligro del buque, hasta perder la última esperanza de salvarlo, y antes de abandonarlo oir á los oficiales de la tripulación, estando á lo que decida la mayoría; y si tuviere que refugiarse en el bote, procurará ante todo llevar consigo los libros y papeles, y luego los objetos de más valor, debiendo justificar, en caso de pérdida de libros y papeles, que hizo cuanto pudo para salvarlos; — 15.ª En caso de naufragio, presentar protesta en forma, en el primer puerto de arribada, ante la autoridad competente ó cónsul español, antes de las veinticuatro horas, especificando en ella todos los accidentes del naufragio, conforme al caso 8.° de este artículo; — 16.ª Cumplir las obligaciones que impusieren las Leyes y los Reglamentos de navegación, aduanas, sanidad ú otros.

613. El capitán que navegare á flete común ó al tercio, no podrá hacer por su cuenta negocio alguno separado; y si lo hiciere, la utilidad que resulte pertenecerá á los demás interesados, y las pérdidas cederán en su perjuicio particular.

614. El capitán que, habiendo concertado un viaje, dejare de cumplir su empeño sin mediar accidente fortuito ó caso de fuerza mayor que se lo impida, indemnizará todos los daños que por esta causa irrogue, sin perjuicio de las sanciones penales á que hubiere lugar.

615. Sin consentimiento del naviero, el capitán no podrá hacerse sustituir por otra persona; y si lo hiciere, además de quedar responsable de todos los actos del sustituto, y obligado á las indemnizaciones expresadas en el artículo anterior, podrán ser uno y otro destituídos por el naviero.

616. Si se consumieran las provisiones y combustibles del buque antes de llegar al puerto de su destino, el capitán dispondrá, de acuerdo con los oficiales del mismo, arribar al más inmediato, para reponerse de uno y otro; pero si hubiera á bordo personas que tuviesen víveres de su cuenta, podrá obligarles á que los entreguen para el consumo común de cuantos se hallen á bordo, abonando su importe en el acto, ó á lo más en el primer puerto donde arribare[1]).

---

[1]) En el caso de que el capitán de un buque se haya creído obligado á exigir de los que tengan víveres por su cuenta particular, que los entreguen para el consumo común de todos los que se hallen á bordo, y los dueños de los mismos no se conformen con que haya existido aquella necesidad, ó con el precio á que el capitán quiera pagar los víveres, tanto el uno como los otros para hacer constar los hechos, podrán promover una información judicial en el primer puerto á donde arribaren. — Prestada la información, el Juez oirá á los interesados en una comparecencia; y si en ella no se avinieren respecto al precio á que el capitán haya de abonar los víveres, dará por terminado el acto, con reserva á sus dueños de la acción que les corresponda para que la ejerciten en juicio contencioso. — Si el interés que se litigare en esta cuestión no excediere de 250 pesetas, se sustanciará en juicio verbal; si excediere se sujetará su tramitación á la establecida para los incidentes (art. 2161, regla 10.ª, L. Enj. c.). — La tramitación del juicio verbal y la de los incidentes puede verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.

register and port of sailing of the vessel, of her cargo and reason for putting in; to which declaration the authority or consul shall place their *visé*, if after examination thereof they find it proper to be received, and they shall give him a fitting certificate to prove his arrival and the reasons which occasioned it. In default of the marine authority or consul, the declaration shall be made before the local authority; — 9. To take the necessary steps before the competent authority, for causing the obligations which he contracts in accordance with art. 583 to be stated on the certificate of the Mercantile Register of the vessel; — 10. To place all the papers and belongings of a member of the crew who may die on board in good keeping and custody, drawing up a detailed inventory in the presence of the passengers as witnesses, or in default thereof, in the presence of members of the crew; — 11. To guide his conduct by the rules and precepts contained in the instructions of the managing owner, being responsible in so far as he acts to the contrary; — 12. To give account to the managing owner from the port where the vessel arrives, of the reason for her arrival, taking advantage of opportunity afforded by semaphores, telegraphs, posts etc., as may be; to inform him of the cargo which he has received, specifying the names and addresses of the consignors, the freights which are being earned and the sums borrowed on bottomry bond; to advise him of his departure and all operations and facts which may be of interest to him; — 13. To observe the rules as to fixed lights and the manoeuvres to avoid collisions; — 14. To remain on board, in case of danger to the vessel, until the last hope of saving her has been lost, and before abandoning her, to hear the officers of the crew, and to abide by the decision of the majority; and if he has to take refuge in a boat, to endeavour above all things to take with him the books and papers, and then the objects of greatest value, being bound, in case of the loss of the books and papers, to prove that he did his best to salve them; — 15. In case of shipwreck, to present a protest in due form at the first port of arrival, before the competent authority or the Spanish consul, before the expiration of twenty four hours, specifying therein all the incidents of the shipwreck, according to case 8 of this article; — 16. To fulfil the obligations imposed by the Laws and Regulations of navigation, customs, health etc.

613. A master who sails at joint or third shares as his freight, may not do any private business on his own account; and if he does, the profit which results shall belong to the other interested persons, and the losses shall accrue to his individual damage.

614. A master who has agreed upon a voyage and fails to fulfil his undertaking, without any fortuitous accident or *vis major* preventing him, shall compensate for all the damage which he causes on this ground, without prejudice to any penal sanctions there may be.

615. A master cannot cause himself to be replaced by any other person without the consent of the managing owner; and if he does so, they may both be dismissed by the managing owner, besides the master being responsible for all the acts of the substitute and bound by the compensations stated in the preceding article.

616. If the provisions and fuel of the vessel are consumed before arriving at the port of her destination, the master, in agreement with the officers thereof, shall take measures to arrive at the nearest port, in order to replace them; but if he has persons on board who possess their own provisions, he may oblige them to deliver the latter for the general consumption of all on board, paying their value at once, or at the latest at the first port of arrival[1]).

---

[1]) If the master of a vessel thinks himself obliged to require those who have their private provisions to deliver them for the general consumption of all on board, and the owners thereof do not agree that such necessity exists, or with the price at which the master wishes to pay for the provisions, both the master and the owners may state the facts and lay an information before the judge at the first port where they arrive. — When this information has been laid, the judge shall hear the interested parties at one hearing; and if they do not then agree on the price at which the master is to pay for the provisions, the judge shall close the record, reserving to their owners the right of action in order that they may bring it on the contentious side. — If the amount in litigation in this matter does not exceed 250 pesetas, it shall be proved at a verbal hearing; if it exceeds, its procedure shall be subject to that enacted for interlocutory matters (art. 2161, rule 10, of the Law of Civil Procedure). — The procedure of the verbal hearing and that for interlocutory matters may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

617. El capitán no podrá tomar dinero á la gruesa sobre el cargamento; y si lo hiciere, será ineficaz el contrato.

Tampoco podrá tomarlo para sus propias negociaciones sobre el buque, sino por la parte de que fuere propietario, siempre que anteriormente no hubiere tomado gruesa alguna sobre la totalidad, ni exista otro género de empeño ú obligación á cargo del buque. Pudiendo tomarlo, deberá expresar necesariamente cuál sea su participación en el buque.

En caso de contravención á este artículo, serán de cargo privativo del capitán el capital, réditos y costas, y el naviero podrá además despedirlo.

618. El capitán será responsable civilmente para con el naviero, y éste para con los terceros que hubieren contratado con él: 1.° De todos los daños que sobrevinieren al buque y su cargamento por impericia ó descuido de su parte. Si hubiere mediado delito ó falta, lo será con arreglo al Código Penal; — 2.° De las sustracciones y latrocinios que se cometieren por la tripulación, salvo su derecho á repetir contra los culpables; — 3.° De las pérdidas, multas y confiscaciones que se impusieren por contravenir á las Leyes y Reglamentos de aduanas, policía, sanidad y navegación; — 4.° De los daños y perjuicios que se causaren por discordias que se susciten en el buque ó por faltas cometidas por la tripulación en el servicio y defensa del mismo, si no probare que usó oportunamente de toda la extensión de su autoridad para prevenirlas ó evitarlas; — 5.° De los que sobrevengan por el mal uso de las facultades y falta en el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme á los artículos 610 y 612; — 6.° De los que se originen por haber tomado derrota contraria á la que debía, ó haber variado de rumbo sin justa causa, á juicio de la junta de oficiales del buque, con asistencia de los cargadores ó sobrecargos que se hallaren á bordo. No le eximirá de esta responsabilidad excepción alguna; — 7.° De los que resulten por entrar voluntariamente en puerto distinto del de su destino, fuera de los casos ó sin las formalidades de que habla el art. 612; — 8.° De los que resulten por inobservancia de las prescripciones del Reglamento de situaciones de luces y maniobras para evitar abordajes.

619. El capitán responderá del cargamento desde que se hiciere entrega de él en el muelle ó al costado á flote en el puerto en donde se cargue, hasta que lo entregue en la orilla ó en el muelle del puerto de la descarga, á no haberse pactado expresamente otra cosa.

620. No será responsable el capitán de los daños que sobrevinieren al buque ó al cargamento por fuerza mayor; pero lo será siempre, sin que valga pacto en contrario, de los que se ocasionen por sus propias faltas.

Tampoco será personalmente responsable el capitán de las obligaciones que hubiere contraído para atender á la reparación, habilitación y avituallamiento del buque, las cuales recaerán sobre el naviero, á no ser que aquél hubiere comprometido terminantemente su propia responsabilidad ó suscrito letra ó pagaré á su nombre.

621. El capitán que tome dinero sobre el casco, máquina, aparejo ó pertrecho del buque, ó empeñe ó venda mercaderías ó provisiones fuera de los casos y sin las formalidades prevenidas en este Código, responderá del capital, réditos y costas, é indemnizará los perjuicios que ocasione.

El que cometa fraude en sus cuentas, reembolsará la cantidad defraudada y quedará sujeto á lo que disponga el Código Penal.

622. Si estando en viaje llegare á noticia del capitán que habían aparecido corsarios ó buques de guerra contra su pabellón, estará obligado á arribar al puerto neutral más inmediato, dar cuenta á su naviero ó cargadores, y esperar la ocasión de navegar en conserva, ó á que pase el peligro, ó á recibir órdenes terminantes del naviero ó de los cargadores.

623. Si se viere atacado por algún corsario, y después de haber procurado evitar el encuentro y de haber resistido la entrega de los efectos del buque ó su cargamento, le fueren tomados violentamente, ó se viere en la necesidad de entregarlos, formalizará de ello asiento en su libro de cargamento, y justificará el hecho ante la autoridad competente, en el primer puerto donde arribe.

Justificada la fuerza mayor, quedará exento de responsabilidad.

624. El capitán que hubiese corrido temporal ó considerase haber sufrido la carga daño ó avería, hará sobre ello protesta ante la autoridad competente, en el primer puerto donde arribe, dentro de las veinticuatro horas siguientes á su llegada, y la ratificará dentro del mismo término luego que llegue al punto de su

617. A master cannot borrow money on a bond secured on the cargo; and if he does so, the contract shall be void.

Nor may he borrow it on the vessel for his own private business, but only on the share of which he is owner, provided that he has not previously borrowed any sum on the whole of the vessel, and that there is no other kind of charge or obligation on the vessel. If he is able to borrow, he shall be bound to state what his share in the vessel is.

In case of infringement of this article, the principal, interest and costs shall be borne by the master himself, and the managing owner may also dismiss him.

618. A master shall be civilly liable to the managing owner, and the latter to third persons who have contracted with him: 1. For all damage suffered by the vessel and her carge from unskilfulness or carelessness on his part. In case of crime, he shall be liable under the Penal Code; — 2. For abstractions and robberies committed by the crew, saving his right to claim over against the guilty persons; — 3. For losses, fines and confiscations imposed for infringement of the Laws and Regulations of the customs, police, health and navigation; — 4. For damage and deterioration caused by strife arising on the vessel or by crimes committed by the crew in the service and defence thereof, if it is not proved that in good time he made use of the whole extent of his authority to prevent or avoid them; — 5. For those which occur through ill use of his powers and failure to fulfil his obligations according to articles 610 and 612; — 6. For those which arise from his having taken an improper route, or having deviated from the route without just cause, according to the judgment of the meeting of the officers of the vessel, in the presence of the consignors or supercargoes who are on board. No defence whatever shall exempt him from this liability; — 7. For those which happen from entering a port different from that of her destination, except in the cases and with the formalities stated in art. 612; — 8. For those which happen from non-observance of the Regulation on positions, lights and manoeuvres to avoid collisions.

619. The master shall be responsible for the cargo from the time of its being delivered to him on the wharf or afloat alongside in the port of loading, until he delivers it ashore or on the wharf of the port of discharge, if no other express bargain has been made.

620. The master shall not be responsible for damage suffered by the vessel or cargo by *vis major*; but he shall always be liable for that which is occasioned by his own faults, and any bargain to the contrary shall be void.

Nor shall the master be personally liable for obligations which he has contracted for repairing, fitting out and victualling the vessel, which shall fall on the managing owner, unless the former has explicitly involved his own liability or has signed a bill or promissory note in his own mane.

621. A master who borrows money on the hull, machinery, tackle or stores of the vessel, or pledges or sells merchandise or provisions except in the cases and with the formalities enacted by this Code, shall be liable for the principal, interest and costs, and shall compensate for the damage which he occasions.

A master who commits fraud in his accounts, shall repay the amount of his defrauding and shall be subject to the provisions of the Penal Code.

622. If it comes to the knowledge of the master, while he is on a voyage, that pirates or hostile ships of war have appeared, he shall be bound to put into the nearest neutral port, to report to his managing owner or consignors, and await an opportunity for sailing in convoy, or the passing of the danger, or the receipt of specific orders from the managing owner or the consignors.

623. If he finds himself attacked by a pirate, and after endeavouring to avoid a conflict and having resisted giving up the goods of the vessel or her cargo, they are taken by violence, or if he finds himself under the necessity of surrendering them, he shall draw up an entry thereof in his log, and shall prove the fact before the competent authority at the first port of arrival.

If the *vis major* is proved, he shall be free from liability.

624. A master who has encountered a tempest or considers that the cargo has suffered damage, shall make a protest thereon before the competent authority, at the first port of arrival, within twenty four hours following the same, and he shall ratify it within the same time as soon as he arrives at the place of his desti-

destino, procediendo en seguida á la justificación de los hechos, sin poder abrir las escotillas hasta haberla verificado[1]).

Del mismo modo habrá de proceder el capitán, si, habiendo naufragado su buque, se salvase solo ó con parte de su tripulación, en cuyo caso se presentará á la autoridad más inmediata, haciendo relación jurada de los hechos.

La autoridad, ó el cónsul en el extranjero, comprobará los hechos referidos, recibiendo declaración jurada á los individuos de la tripulación y pasajeros que se hubieren salvado; y tomando las demás disposiciones que conduzcan para averiguar el caso, pondrá testimonio de lo que resulte del expediente en el libro de navegación y en el del piloto, y entregará al capitán el expediente original sellado y foliado, con nota de los folios, que deberá rubricar, para que lo presente al juez ó tribunal del puerto de su destino.

La declaración del capitán hará fe si estuviere conforme con las de la tripulación y pasajeros; si discordare, se estará á lo que resulte de éstas, salvo siempre la prueba en contrario.

625. El capitán, bajo su responsabilidad personal, así que llegue al puerto de su destino, obtenga el permiso necesario de las oficinas de sanidad y aduanas, y cumpla las demás formalidades que los Reglamentos de la Administración exijan, hará entrega del cargamento, sin desfalco, á los consignatarios, y, en su caso, del buque, aparejos y fletes al naviero.

Si, por ausencia del consignatario, ó por no presentarse portador legítimo de los conocimientos, ignorase el capitán á quién debiera hacer legítimamente la entrega del cargamento, lo pondrá á disposición del juez ó tribunal ó autoridad á quien corresponda, á fin de que resuelva lo conveniente á su depósito, conservación y custodia[2]).

Sección tercera. De los oficiales y tripulación del buque.

626. Para ser piloto será necesario: 1.° Reunir las condiciones que exijan las Leyes ó Reglamentos de marina ó navegación[3]); — 2.° No estar inhabilitado con arreglo á ellos para el desempeño de su cargo.

627. El piloto, como segundo jefe del buque, y mientras el naviero no acuerde otra cosa, sustituirá al capitán en los casos de ausencia, enfermedad ó muerte, y entonces asumirá todas sus atribuciones, obligaciones y responsabilidades.

628. El piloto deberá ir provisto de las cartas de los mares en que va á navegar, de las tablas é instrumentos de reflexión que están en uso y son necesarios para el desempeño de su cargo, siendo responsable de los accidentes á que diere lugar por su omisión en esta parte.

629. El piloto llevará particularmente y por sí un libro foliado y sellado en todas sus hojas, denominado «Cuaderno de bitácora», con nota al principio, expresiva del número de las que contenga, firmado por la autoridad competente, y en él registrará diariamente las distancias, los rumbos navegados, la variación de la aguja, el abatimiento, la dirección y fuerza del viento, el estado de la atmósfera y del mar, el aparejo que se lleve largo, la latitud y longitud observada, el número de hornos encendidos, la presión del vapor, el número de revoluciones, y, bajo el nombre de «Acaecimientos», las maniobras que se ejecuten, los encuentros con otros buques, y todos los particulares y accidentes que ocurran durante la navegación.

630. Para variar de rumbo y tomar el más conveniente al buen viaje del buque, se pondrá de acuerdo el piloto con el capitán. Si éste se opusiere, el piloto le expondrá las observaciones convenientes en presencia de los demás oficiales de mar. Si todavía insistiere el capitán en su resolución negativa, el piloto hará la oportuna protesta, firmada por él y por otro de los oficiales en el libro de navegación, y obedecerá al capitán, quien será el único responsable de las consecuencias de su disposición.

631. El piloto responderá de todos los perjuicios que se causaren al buque y al cargamento por su descuido é impericia, sin perjuicio de la responsabilidad criminal á que hubiere lugar, si hubiere mediado delito ó falta.

---

[1]) Respecto al procedimiento judicial que habrá de seguirse para la justificación de los hechos véase la pág. 176, nota 1.

[2]) Respecto á la forma y manera de constituir este depósito y á las incidencias á que puede dar lugar el mismo véase la pág. 208, nota 2.

[3]) Véanse estas condiciones en la nota 3, pág. 171.

nation, proceeding forthwith to prove the facts, with no power to open the hatchways until he has so done[1]).

The master must proceed in the same way, if, having wrecked his ship, he alone or with part of the crew is saved, in which case he shall present himself to the nearest authority, and make a sworn report of the facts.

The authority or the consul abroad shall test the said facts, receiving the sworn declaration of the members of the crew and the passengers who have been saved; and taking other measures which conduce to elucidating the case, shall certify the result of the investigation in the log and in the book of the navigating-officer, and shall deliver the original file to the master stamped and paged, with a note of the folios which he must rubricate, for presentation to the judge or tribunal of the port of his destination.

The declaration of the master shall have probatory force if it agrees with those of the crew and passengers; if it disagrees, the result of the latter shall prevail, saving always evidence to the contrary.

625. The master, as soon as he arrives at the port of his destination, and has obtained the necessary permit from the offices of health and customs, and complied with the other formalities required by the Regulations of the Administration, shall be bound under his personal responsibility to make delivery of the cargo to the consignees, without fail, and of the vessel, tackle and freights, as the case may be, to the managing owner.

If, through the absence of the consignee or from the lawful holder of the bills of lading not presenting himself, the master does not know to whom he ought legally to make delivery of the cargo, he shall place it at the disposal of the judge or tribunal or of the proper authority, so that they may make the proper orders for its deposit, preservation and custody[2]).

Third Section. The officers and crew of the vessel.

626. In order to be a navigating officer it shall be necessary: 1. To fulfil the conditions required by the Laws or Regulations of Marine or navigation[3]); — 2. Not to be disqualified by them from discharging his duty.

627. As second chief of the vessel, and as long as the managing owner does not decide otherwise, the navigating officer shall take the place of the master in case of absence, illness or death, and he shall then assume all his powers, obligations and responsibilities.

628. The navigating officer must go provided with the charts of the seas of in which he is about to sail, and the tables and reflecting instruments which are customary and necessary for the discharge of his duty, being responsible for the accidents which arise from his omission in this respect.

629. The navigating officer shall keep separately and for himself a book which is paged and stamped on all its pages, called the "Binnacle book", with a note at the beginning stating the number of pages which it contains, signed by the competent authority, and he shall daily enter therein the distances and courses sailed, the variation of the compass, the lee way, the direction and force of the wind, the state of the atmosphere and sea, the spread of sail, the observations of latitude and longitude, the number of furnaces alight, the steam pressure, the number of revolutions, and under the name of "Incidents", the manoeuvres executed, the sighting of other vessels, and all the particulars and events which occur during the navigation.

630. The navigating officer shall arrange with the master for altering the course and taking that which is most suitable for the good voyage of the vessel. If the master objects, the navigating officer shall lay suitable observations before him in the presence of the other officers. If the master still insists in his negative decision, the navigating officer shall draw up a fitting protest, signed by himself and by another officer in the log, and shall obey the master, who shall alone be responsible for the consequences of his order.

631. The navigating officer shall be liable for all the damage which is occasioned to the vessel and cargo by his carelessness and unskilfulness, without prejudice to any criminal liability there may be, if any crime has been committed.

[1]) With regard to the judicial procedure which must be followed in order to prove the facts, see page 176, note 1.

[2]) With regard to the form and manner of constituting this deposit and the procedure which it may occasion, see page 208, note 2.

[3]) See these conditions in note 3, page 171.

632. Serán obligaciones del contramaestre[1]): 1.ª Vigilar la conservación del casco y aparejo del buque y encargarse de la de los enseres y pertrechos que forman su pliego de cargo, proponiendo al capitán las reparaciones necesarias y el reemplazo de los efectos y pertrechos que se inutilicen y excluyan; — 2.ª Cuidar del buen orden del cargamento, manteniendo el buque expedito para la maniobra; — 3.ª Conservar el orden, la disciplina y el buen servicio de la tripulación, pidiendo al capitán las órdenes é instrucciones convenientes, y dándole pronto aviso de cualquier ocurrencia en que fuere necesaria la intervención de su autoridad. — 4.ª Designar á cada marinero el trabajo que deba hacer á bordo, conforme á las instrucciones recibidas, y velar sobre su ejecución con puntualidad y exactitud; — 5.ª Encargarse por inventario del aparejo y todos los pertrechos del buque, — si se procediere á desarmarlo, á no ser que naviero hubiere dispuesto otra cosa.

Respecto de los maquinistas regirán las reglas siguientes: 1.ª Para poder ser embarcado como maquinista naval formando parte de la dotación de un buque mercante, será necesario reunir las condiciones que las Leyes y Reglamentos exijan[2]), y no estar inhabilitado con arreglo á ellas para el desempeño de su cargo.

[1]) Ningún buque mercante está obligado á llevar plaza alguna con denominación de contramaestre, siendo potestativo en los armadores ó capitanes el llevarlos ó nó según tengan por conveniente (art. 23 del Regl. Nav. Merc.).

[2]) Estas condiciones las determina el Regl. Nav. Merc. del modo siguiente: — Art. **26.** A ningún vapor español se permitirá la salida de los puertos españoles ni navegar dentro de ellos si no cuenta entre sus tripulantes los maquinistas navales que le correspondan con arreglo al artículo siguiente. — **27.** En los vapores que hagan travesías de más de 150 millas embarcarán por lo menos un primero y un segundo maquinista naval, si la fuerza de la máquina es de 100 ó más caballos, y dos segundos si la fuerza es menor. — En los que las travesías sean menores de 150 millas embarcarán, por lo menos: un primer maquinista, si la fuerza de la máquina es de 100 ó más caballos nominales, y un segundo si es menor. — Los vapores de menos de 10 caballos nominales de fuerza podrán navegar sin maquinista naval, substituyéndole por un fogonero práctico provisto de certificado de un maquinista que exprese tener aptitud para el destino á que se le aplica. — **28.** El caballo nominal se considera equivalente á 300 kilográmetros. — **29.** Para poder ser embarcado como maquinista naval se necesita tener nombramiento expedido por un capitán ó comandante general de departamento ó apostadero marítimo. — Podrán, sin embargo, embarcarse como maquinistas navales los que estén habilitados en circunstancias y casos particulares detallados en este Reglamento. — **30.** Para ser nombrado segundo maquinista naval se necesita reunir las condiciones siguientes: — 1.ª Ser español y haber cumplido veintiún años. — 2.ª Acreditar buena vida y costumbres. — 3.ª Haber navegado en un vapor formando parte del personal de máquinas, y haber trabajado como operario ajustador, herrero ó calderero, en un taller de construcción de máquinas de vapor, siempre que el tiempo de navegación, más el de operario, sea de cuatro años, y que de ellos cuente por lo menos con uno de navegación y uno de operario. — 4.ª Probar su suficiencia en un examen hecho con arreglo al adjunto programa. — **31.** Para ser nombrado primer maquinista naval se necesita reunir las condiciones siguientes: — 1.ª Haber navegado un año con nombramiento de segundo maquinista á satisfacción de los armadores y capitanes de los buques. — 2.ª Probar su suficiencia en un examen hecho con arreglo al adjunto programa. — **32.** Los que aspiren á ser nombrados maquinistas navales presentarán sus solicitudes á los capitanes ó comandantes generales de los departamentos ó apostaderos, acompañándolas con los documentos necesarios para acreditar las condiciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del art. 30 ó la 1.ª del 31 según que aspiren á segundo ó á primer maquinista, en la inteligencia de que los documentos en que prueben la navegación y la idoneidad en ella, deberán ser visados por los comandantes de Marina de la provincia correspondiente ó por los cónsules de S. M., en vista de lo que conste en los respectivos roles, y los certificados de operario estarán expedidos por los directores de los talleres de construcción de máquinas. — **33.** Los exámenes tendrán lugar en las capitales de los departamentos ó apostaderos en los días 1.° y siguientes de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, ante una Junta nombrada por el capitán ó comandante general de los mismos. — Los desaprobados en su examen no podrán repetirlo hasta que haya transcurrido un año. — **34.** A los maquinistas que á la publicación de este Reglamento se hallen desempeñando los destinos que según el mismo corresponden á primeros y segundos, hayan navegado seis años, y uno en su última plaza, les será expedido por las autoridades superiores de los departamentos y apostaderos un *certificado de habilitación* de esta última, siempre que además reúnan las condiciones 1.ª y 2.ª del art. 30. — **35.** Se considerarán como habilitados para desempeñar las plazas de primeros maquinistas navales los que tengan nombramiento de primer maquinista de la Armada, y también los segundos de la misma que hayan servido dos años en ella con este nombramiento. Las plazas de segundos maquinistas navales se podrán desempeñar por los que tengan nombramiento de segundos maquinistas de la Armada, y también por los terceros de la misma que hayan servido dos años en ella con este nombramiento. — **36.** Los maquinistas habilitados de primeros ó segundos se considerarán como habiendo llenado la condición 1.ª del art. 31, y

632. The following shall be the duties of the "chief officer"[1]): 1. To watch over the preservation of the hull and tackle of the vessel and to take charge of the fittings and stores which constitute his sphere of duty, proposing to the master the necessary repairs and the replacing of the effects and stores which become useless and are discharged; — 2. To take care of the good order of the cargo, keeping the vessel ready for manoeuvring; — 3. To preserve the order, discipline and good service of the crew, applying to the master for suitable orders and instructions, and giving him prompt notice of any occurrence in which it may be necessary to interpose his authority; — 4. To appoint to each seaman the work which he has to do on board, according to instructions received, and to watch over their execution with promptness and correctness; — 5. To take charge of the inventory of the tackle and all the stores of the vessel, if she is to be dismantled, unless the managing owner has given other orders.

The following rules shall govern the engineers: 1. In order to be able to embark as a marine engineer and form part of the complement of a merchant vessel, it shall be necessary to fulfil the conditions required by the Laws and Regulations[2]), and not to be disqualified thereby for the discharge of his duty. Engineers shall be con-

[1]) No merchant vessel is obliged to carry a "contramaestre", but it is in the power of managing owners or masters to carry them or not as they think fit (art. 23 of the Merchant Navigation Regulation).

[2]) The Regulation for Merchant Navigation determines these conditions in the following manner: Art. **26.** No Spanish vessel shall be permitted to leave Spanish ports or sail within them if she does not number among her crew the marine engineers which belong to her according to the following article. — **27.** In steamers which make passages of more than 150 miles, they shall embark at least one chief and one second marine engineer, if the engine is from 100 horse power upwards, and two second engineers, if the power is less. — In those in which the passages are less than 150 miles, they shall embark at least: one chief engineer, if the engine is from 100 horse power nominal upwards, and one second, if it is less. — Steamers of less than 10 horse power nominal may sail without a marine engineer, replacing him by a practical stoker provided with a certificate by an engineer, stating that he is qualified for the appointment for which he applies. — **28.** A nominal horse power shall be considered as equivalent to 300 kilogrametres. **29.** To be able to be embarked as a marine engineer, it is necessary to have a diploma issued by a Captain or Commander General of the maritime department or station. — Those, however, who are qualified in the particular circumstances and cases detailed in this Regulation may be embarked as marine engineers. — **30.** In order to receive a diploma as second marine engineer it is necessary to fulfil the following conditions: — 1. To be a Spaniard and to have completed twenty one years. — 2. To prove good life and habits. — 3. To have sailed in a steamer as one of the staff of the engine room, and to have worked as operative fitter, smith or blacksmith in a workshop for building steam engines, provided that the time of navigation added to that as operative is four years, and that of them at least one was passed in navigation and one as operative. — 4. To prove his sufficiency in an examination held according to the annexed syllabus. — **31.** To receive a diploma as chief marine engineer, it is necessary to fulfil the following conditions: — 1. To have sailed for one year with a diploma as second engineer to the satisfaction of the managing owners and masters of the vessels. — 2. To prove his sufficiency in an examination held according to the annexed syllabus. — **32.** Those who aspire to receive a diploma as marine engineers shall present their applications to the Captains or Commanders General of the departments or stations, accompanied by the documents necessary to prove conditions 1, 2 and 3 of art. 30 or 1 of art. 31, according as they aspire to be second or chief engineer, understanding that the documents which prove the navigation and fitness therein, must be *viséd* by the Naval Commanders of the respective province or by H. M. consuls on inspecting the respective muster-rolls, and certificates as operative shall be issued by the directors of the workshops for building engines. — **33.** The examinations shall take place in the capitals of the departments or stations on the 1st and following days of the months of January, April, July and October, before a Board appointed by the Captain or Commander General thereof. — Unsuccessful candidates may not be re-examined until after the expiration of one year. — **34.** To the engineers who at the time of the publication of this Regulation are discharging appointments which according thereto belong to them as chief or second engineers, and have sailed for six years, one of them in the last place, a certificate of qualification shall be issued by the superior authorities of the departments and stations, provided that they also fulfil the conditions of 1 and 2 of art. 30. — **35.** Those who hold a diploma as chief engineer of the Fleet, and also the second engineers thereof who have served two years therein with this diploma, shall be considered as qualified to discharge the office of chief marine engineers. The offices of second marine engineers may be discharged by those who have an appointment as second engineers of the Fleet, and also by the third engineers thereof who have served two years therein with this diploma. — **36.** Qualified chief and second engineers shall be considered as having fulfilled condition 1 of art. 31, and may be admitted to the examination for chief marine engineer. — **37.** Engineers, who at the time of the publication of this Regulation are discharging offices for which a diploma is required,

Los maquinistas serán considerados como oficiales de la nave; pero no ejercerán mando ni intervención sino en lo que se refiera al aparato motor; — 2.ª Cuando existan dos ó más maquinistas embarcados en un buque, hará uno de ellos de jefe, y estarán á sus órdenes los demás maquinistas y todo el personal de las máquinas: tendrá además á su cargo el aparato motor, las piezas de respeto, instrumentos y herramientas que al mismo conciernen, el combustible, las materias lubricadoras y cuanto, en fin, constituye á bordo el cargo del maquinista; — 3.ª Mantendrá las máquinas y calderas en buen estado de conservación y limpieza, y dispondrá lo conveniente á fin de que estén siempre dispuestas para funcionar con regularidad, siendo responsable de los accidentes ó averías que por su descuido ó impericia se causen al aparato motor, al buque y al cargamento, sin perjuicio de la responsabilidad criminal á que hubiere lugar si resultase probado haber mediado delito ó falta; — 4.ª No emprenderá ninguna modificación en el aparato ámotor, ni proceder á remediar las averías que hubiese notado en el mismo, ni alterará el régimen normal de su marcha, sin la autorización previa del capitán, al cual, si se opusiera á que se verificasen, le expondrá las observaciones convenientes en presencia de los demás maquinistas ú oficiales; y si, á pesar de esto, el capitán insistiese en su negativa, el maquinista jefe hará la oportuna protesta, consignándola en el cuaderno de máquinas, y obedecerá al capitán, que será el único responsable de las consecuencias de su disposición; — 5.ª Dará cuenta al capitán de cualquier avería que ocurra en el aparato motor, y le avisará cuando haya que parar las máquinas por algún tiempo, ú ocurra algún accidente en su departamento del que deba tener noticia inmediata el capitán, enterándole además con frecuencia acerca del consumo de combustible y materias lubricadoras; — 6.ª Llevará un libro ó registro titulado «Cuaderno de máquinas», en el cual se anotarán todos los datos referentes al trabajo de las máquinas; como son, por ejemplo, el número de hornos encendidos, las presiones del vapor en las calderas y cilindros, el vacío en el condensador, las temperaturas, el grado de saturación del agua en las calderas, el consumo del combustible y de materias lubricadoras, y, bajo el epígrafe de «Ocurrencias notables», las averías y descomposiciones que ocurran en máquinas y calderas, las causas que las produjeron y los medios empleados para repararlas; también se indicarán, tomando los datos del cuaderno de bitácora, la fuerza y dirección del viento, el aparejo largo y el andar del buque.

633. El contramaestre tomará el mando del buque en caso de imposibilidad ó inhabilitación del capitán y piloto, asumiendo entonces sus atribuciones y responsabilidad.

634. El capitán podrá componer la tripulación de su buque con el número de hombres que considere conveniente; y, á falta de marineros españoles, podrá embarcar extranjeros avecindados en el país, sin que su número pueda exceder de la

---

pueden ser admitidos á examen de primer maquinista naval. — **37.** Los maquinistas que á la publicación de este Reglamento se hallen desempeñando las plazas para que se exige nombramiento, y que no reúnan las condiciones necesarias para ser habilitados por los capitanes ó comandantes generales de los departamentos ó apostaderos, podrán serlo por el comandante de Marina respectivo, pero sólo para continuar en el buque en que se hallen, si los armadores lo solicitaren. — **38.** Las autoridades superiores de los departamentos y apostaderos podrán también habilitar de maquinistas navales á los extranjeros en los casos siguientes: — 1.° Si proceden de un país en que la profesión de maquinista está reglamentada, al presentar documentos legalizados en que se pruebe poseen el nombramiento de primero ó segundo maquinista en su país. — 2.° Si proceden de un país en que la profesión de maquinista no está reglamentada, sujetándose á las condiciones de los artículos 30 y 31, á excepción de la nacionalidad. — 3.° Si á la publicación de este Reglamento se hallan como maquinistas en los vapores españoles, sea cualquiera el país de que proceden, al llenar las mismas condiciones que para habilitar á los españoles se exigen en los artículos 9.° y 12, á excepción de la nacionalidad. — **39.** Los comandantes de Marina y los cónsules de España en el extranjero podrán habilitar provisionalmente de primeros, en casos extraordinarios, á los segundos maquinistas que les propongan los armadores ó capitanes, y de esta clase á los fogoneros aventajados, igualmente propuestos, cuando se haga constar de una manera fehaciente que no existen maquinistas en la localidad y se halle detenida por esta causa la salida del buque; pero en uno y otro caso se hará saber á los armadores ó consignatarios que dichas habilitaciones terminan al llegar el buque á una capital de departamento, apostadero ó provincia marítima, en cuyos puntos deberán embarcar el personal reglamentario, si lo hubiere, ó gestionar en otro caso nueva habilitación. — **40.** Las autoridades de Marina observarán y harán observar las prescripciones del presente reglamento.

sidered as officers of the ship; but they shall not exercise command or interfere except in what concerns the motive machinery; — 2. When there are two or more engineers shipped on a vessel, one of them shall act as chief engineer and the others and all the engine room personnel shall be under his orders; he shall also have in his charge the motive machinery, the spare pieces, instruments and tools which concern the same, the fuel, lubricating materials and in fact everything on board which constitutes the charge of an engineer; — 3. He shall maintain the engines and boilers in a good state of preservation and cleanliness, and take proper steps so that they shall always be ready to act with regularity, being responsible for accidents or damage occasioned to the motive machinery, the vessel and the cargo by his carelessness or unskilfulness, without prejudice to any criminal liability to which he may be subject, if it is proved that a crime has been committed; — 4. He shall not undertake any change in the motive machinery, nor proceed to remedy damage which he has noted therein, nor alter the normal course of its working, without the previous authorisation of the master, before whom, if he objects to their being done, he shall lay the suitable observations in the presence of the other engineers or officers; and if, in spite of this, the master insists in his refusal, the chief engineer shall draw up the proper protest in the machinery book, and shall obey the master, who shall alone be responsible for the consequences of his order; — 5. He shall report to the master any damage which occurs to the motive machinery, and shall advise him when it is necessary to stop the engines for a time, or when any accident happens in his department of which the master ought to have immediate notice, and he shall also frequently inform him of the consumption of the fuel and lubricating materials; — 6. He shall keep a book or register called "Machinery book", in which he shall note all the facts referring to the working of the engines; as, for example, the number of furnaces alight, the steam pressure on the boilers and cylinders, the vacuum in the condenser, the degrees of heat, the degree of saturation of the water in the boilers, the consumption of fuel and lubricating materials, and under the heading of "remarkable occurrences" the damage and deterioration which occur to the machinery and boilers, the causes which produce them and the means employed to repair them; the force and direction of the wind, the spread of sail and the speed of the vessel shall also be indicated, the facts being taken from the binnacle book.

633. The chief officer shall take command of the vessel in case the master and navigating officer become unfit or incapable, and shall then assume their powers and responsibilities.

634. The master may make up the vessel's company with the number of hands which he thinks suitable; and in default of Spanish seamen, may embark foreigners who have become denizens of the country, but their number may not exceed the

---

and who do not combine the conditions necessary for being qualified by the Captains and Commanders General of the departments and headquarters, may receive a diploma from the corresponding Commander of Marine, but only for continuing in the vessel in which they are, if the managing owners apply therefor. — **38.** The superior authorities of the departments and stations may likewise qualify foreigners as marine engineers in the following cases: — If they come from a country in which the profession of engineer is regulated, on presenting authenticated documents proving the possession of a diploma as chief or second engineer in their country. — 2. If they come from a country in which the profession of engineer is not regulated, and they subject themselves to the conditions of arts. 30 and 31, excepting that of nationality. — 3. If at the time of the publication of this Regulation they are on Spanish steamers as engineers, whatever be the country from which they come, on fulfilling the same conditions as are required for qualifying Spaniards by arts. 9 and 12, excepting that of nationality. — **39.** Naval Commanders and Spanish consuls abroad may provisionally qualify as chief engineers in extraordinary cases, the second engineers proposed by managing owners or masters, and as second engineers the supernumerary stokers, on the same proposal, when it is proved in a reliable manner that there are no engineers in the place and that the sailing of the vessel is delayed for this reason; but in both cases, the managing owners or consignors shall be informed that such qualifications terminate with the arrival of the vessel at a capital of a department, station or maritime province, in which places the regular personnel, if any, must be shipped, or otherwise a fresh qualification made. — **40.** The authorities of Marine shall observe and cause to be observed the provisions of the present Regulation.

quinta parte de la tripulación[1]). Cuando en puertos extranjeros no encuentre el capitán suficiente número de tripulantes nacionales, podrá completar la tripulación con extranjeros, con anuencia del cónsul ó autoridades de marina.

Las contratas que el capitán celebre con los individuos de la tripulación y demás que componen la dotación del buque, y á que se hace referencia en el art. 612, deberán constar por escrito en el libro de contabilidad, sin intervención de notario ó escribano, firmadas por los otorgantes y visadas por la autoridad de marina si se extienden en los dominios españoles, ó por los cónsules ó agentes consulares de España si se verifica en el extranjero, enumerando en ellas todas las obligaciones que cada uno contraiga y todos los derechos que adquiera; cuidando aquellas autoridades de que estas obligaciones y derechos se consignen de un modo claro y terminante que no dé lugar á dudas ni reclamaciones.

El capitán cuidará de leerles los artículos de este Código que les conciernen, haciendo expresión de la lectura en el mismo documento[1]).

Teniendo el libro los requisitos prevenidos en el art. 612 y no apareciendo indicio de alteración en sus partidas, hará fe en las cuestiones que ocurran entre el capitán y la tripulación sobre las contratas extendidas en él y las cantidades entregadas á cuenta de las mismas.

Cada individuo de la tripulación podrá exigir al capitán una copia, firmada por éste, de la contrata y de la liquidación de sus haberes, tales como resulten del libro.

635. El hombre de mar contratado para servir en un buque, no podrá rescindir su empeño ni dejar de cumplirlo sino por impedimento legítimo que le hubiere sobrevenido.

Tampoco podrá pasar del servicio de un buque al de otro sin obtener permiso escrito del capitán de aquel en que estuviere.

Si, no habiendo obtenido esta licencia, el hombre de mar contratado en un buque se contratare en otro, será nulo el segundo contrato, y el capitán podrá elegir entre obligarle á cumplir el servicio á que primeramente se hubiera obligado, ó buscar á expensas de aquél quien le sustituya.

Además perderá los salarios que hubiere devengado en su primer empeño, á beneficio del buque en que estaba contratado.

El capitán que, sabiendo que el hombre de mar está al servicio de otro buque, le hubiere nuevamente contratado sin exigirle el permiso de que tratan los párrafos anteriores, responderá subsidiariamente al del buque á que primero pertenecía el hombre de mar, por la parte que éste no pudiere satisfacer, de la indemnización de que trata el párrafo tercero de este artículo.

636. No constando el tiempo determinado por el cual se ajustó un hombre de mar, no podrá ser despedido hasta la terminación del viaje de ida y vuelta al puerto de su matrícula.

637. El capitán tampoco podrá despedir al hombre de mar durante el tiempo de su contrata sino por justa causa, reputándose tal cualquiera de las siguientes: 1.ª Perpetración de delito que perturbe el orden en el buque; — 2.ª Reincidencia en faltas de subordinación, disciplina ó cumplimiento del servicio; — 3.ª Ineptitud y negligencia reiteradas en el cumplimiento del servicio que deba prestar; — 4.ª Embriaguez habitual; — 5.ª Cualquier suceso que incapacite al hombre de mar para ejecutar el trabajo de que estuviere encargado, salvo lo dispuesto en el artículo 644; — 6.ª La deserción.

Podrá, no obstante, el capitán, antes de emprender el viaje, y sin expresar razón alguna, rehusar que vaya á bordo el hombre de mar que hubiese ajustado, y dejarlo en tierra, en cuyo caso habrá de pagarle su salario como si hiciese servicio.

[1]) Estos individuos podrán ó no estar inscritos con anterioridad en los registros de las comandancias de Marina, si bien deberán inscribirse desde el momento en que se dediquen á la navegación (art. 6, Regl. Nav. Merc.). Por excepción podrá permitirse el embarco de individuos no inscritos para el desempeño de plazas de mayordomo, camarero, cocinero, fogonero, ú operario de maestranza (art. 24, Regl. Nav. Merc.)

[1]) Las autoridades de Marina de los puertos deben asegurarse, antes de la salida de los buques mercantes, de que la marinería lleva formulados sus contratos en forma conveniente y está enterada y conforme con su contenido (art. 25, Regl. Nav. Merc.).

fifth part of the crew[1]). When the master does not find a sufficient number of Spanish seamen in foreign ports, he may complete the complement with foreigners, with the consent of the consul and of the marine authorities.

The contracts made by the master with the members of the crew and others who compose the ship's company, and to which art. 612 refers, must appear in writing in the account book, without the intervention of a notary or law clerk, signed by the parties and *viséd* by the marine authority, if they are drawn up within the Spanish dominions, or by the consuls or consular agents of Spain, if it takes place abroad, enumerating therein all the obligations which each contracts and all the rights which each acquires; and those authorities shall take care that these obligations and rights are stated clearly and specifically so as to leave no room for doubts or complaints.

The master shall be careful to read them the articles of this Code which concern them, and state the fact of the reading in the same document[2]).

If the book possesses the requirements provided by art. 612 and there is no apparent mark of alteration in its entries, it shall have probatory force in the disputes which arise between the master and the crew respecting the articles written out therein and the amounts paid on account thereof.

Each member of the crew may require the master to give him a copy, signed by him, of the contract and the settlement of what is due to him, as shown by the book.

635. A seaman who has contracted to serve on a vessel, cannot rescind his undertaking or fail to perform it, except through a lawful hindrance which has supervened.

Nor may he pass from the service of one vessel to that of another without obtaining the written permission of the master of the former vessel.

If, without having obtained this licence, a seaman who has contracted on one vessel contracts on another, the second contract shall be void, and the master may elect either to compel him to perform the service to which he originally bound himself, or sue for the expenses of his substitute.

He shall also lose the pay which was due to him in his first employment, for the benefit of the vessel on which he had signed.

A master who, knowing that a seaman is in the service of another vessel, has made a fresh contract with him without requiring from him the permit dealt with in the preceding paragraphs, shall be liable in the second place to the master of the vessel to which the seaman first belonged, for that part of the compensation treated of by the third paragraph of this article which the latter is unable to pay.

636. If the time for which a seaman has agreed does not appear fixed, he cannot be dismissed until the termination of the round voyage at the port of her register.

637. Nor may a master dismiss a seaman during the time of his articles, except for just cause, any of the following being considered as such: 1. Perpetration of a crime which disturbs the order of the vessel; — 2. Recurrence of failures in subordination, discipline or fulfilment of service; — 3. Repeated unfitness and negligence in fulfilling the service which he ought to render; — 4. Habitual drunkenness; — 5. Any event which incapacitates the seaman from doing the work with which he is entrusted, saving the provisions of article 644; — 6. Desertion.

Nevertheless before commencing the voyage, the master may, without giving any reason, refuse to allow a seaman with whom he has agreed to go on board, and may leave him on land, in which case he must pay him his wages as if he did service.

---

[1]) These persons may or may not be previously inscribed on the registers of the Marine Commander, although they should be inscribed from the moment when they devote themselves to navigation (art. 6 of the Regulation for Merchant Navigation). As an exceptional matter, uninscribed persons may be allowed to be embarked to discharge the duties of steward, waiter, cook, stoker, or as operative from the workshops (art. 24 of the Regulation for Merchant Navigation).

[2]) The Marine authorities of the ports must make sure, before the sailing of the merchant vessels, that the company have their contracts drawn up in due form and are informed of and agree to their contents (art. 25 of the Regulation for Merchant Navigation).

Esta indemnización saldrá de la masa de los fondos del buque, si el capitán hubiera obrado por motivos de prudencia y en interés de la seguridad y buen servicio de aquél. No siendo así, será de cargo particular del capitán.

Comenzada la navegación, durante ésta y hasta concluído el viaje, no podrá el capitán abandonar á hombre alguno de su tripulación en tierra ni en mar, á menos de que, como reo de algún delito, proceda su prisión y entrega á la autoridad competente en el primer puerto de arribada, caso para el capitán obligatorio.

638. Si, contratada la tripulación, se revocare el viaje por voluntad del naviero ó de los fletadores antes ó después de haberse hecho el buque á la mar, ó se diere al buque por igual causa distinto destino de aquel que estaba determinado en el ajuste de la tripulación, será ésta indemnizada por la rescisión del contrato, según los casos, á saber: 1.° Si la revocación del viaje se acordase antes de salir el buque del puerto, se dará á cada uno de los hombres de mar ajustados una mesada de sus respectivos salarios, además del que les corresponda recibir, á sus contratos, por el servicio prestado en el buque hasta la fecha de la revocación; — 2.° Si el ajuste hubiere sido por una cantidad alzada por todo el viaje, se graduará lo que corresponda á dicha mesada y dietas, prorrateándolas en los días que por aproximación debiera aquél durar, á juicio de peritos, en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil[1]); y si el viaje proyectado fuere de tan corta duración que se calculase aproximadamente de un mes, la indemnización se fijará en quince días, descontando en todos los casos las sumas anticipadas; — 3.° Si la revocación ocurriese habiendo salido el buque á la mar, los hombres ajustados en una cantidad alzada por el viaje, devengarán íntegro el salario que se les hubiere ofrecido, como si el viaje hubiese terminado; y los ajustados por meses percibirán el haber correspondiente al tiempo que estuvieren embarcados y al que necesiten para llegar al puerto, término del viaje; debiendo además el capitán proporcionar á unos y á otros pasaje para el mismo puerto, ó bien para el de la expedición del buque, según les conviniere; — 4.° Si el naviero ó los fletantes del buque dieren á éste destino diferente del que estaba determinado en el ajuste, y los individuos de la tripulación no prestaren su conformidad, se les abonará por indemnización la mitad de lo establecido en el caso 1.°, además de los que se les adeudare por la parte del haber mensual correspondiente á los días transcurridos desde sus ajustes.

Si aceptaren la alteración, y el viaje, por la mayor distancia ó por otras circunstancias, diere lugar á un aumento de retribución, se regulará ésta privadamente, ó por amigables componedores en caso de discordia[2]). Aunque el viaje se limite á punto más cercano, no podrá por ello hacerse baja alguna al salario convenido.

Si la revocación ó alteración del viaje procediere de los cargadores ó fletadores, el naviero tendrá derecho á reclamarles la indemnización que corresponda en justicia.

639. Si la revocación del viaje procediere de justa causa independiente de la voluntad del naviero y cargadores, y el buque no hubiere salido del puerto, los individuos de la tripulación no tendrán otro derecho que el de cobrar los salarios devengados hasta el día en que se hizo la revocación.

640. Serán causas justas para la revocación del viaje: 1.ª La declaración de guerra ó interdicción del comercio con la Potencia á cuyo territorio hubiera de dirigirse el buque; — 2.ª El estado de bloqueo del puerto de su destino, ó peste que sobreviniere después del ajuste; — 3.ª La prohibición de recibir en el mismo puerto los géneros que compongan el cargamento del buque; — 4.ª La detención ó embargo del mismo por orden del Gobierno, ó por otra causa independiente de la voluntad del naviero; — 5.ª La inhabilitación del buque para navegar.

641. Si, después de emprendido el viaje, ocurriere alguna de las tres primeras causas expresadas en el artículo anterior, serán pagados los hombres de mar en el puerto á donde el capitán creyere conveniente arribar en beneficio del buque y cargamento, según el tiempo que hayan servido en él; pero si el buque hubiere de

[1]) Véase en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.» lo referente á la prueba pericial.

[2]) Respecto á la forma y manera de intervenir los amigables componedores véase el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.».

If the master has acted from reasons of prudence and in the interest of the safety and good service of the vessel, this compensation shall be paid from the estate formed by the ship's funds.

After the commencement of the navigation, during the same and until the conclusion of the voyage, the master cannot abandon any member of his company on sea or land, unless, as accused of some crime, he is taken and delivered to the competent authority at the first port of arrival, a thing which shall be obligatory on the master. If it is not so, it shall be borne by the master.

638. If, after the crew have been engaged, the voyage is abandoned by the will of the managing owner or of the freighters before or after the vessel has put to sea, or from the same cause the vessel is given a destination different from that which was fixed in the agreement with the crew, the latter shall be compensated for the rescission of the articles, as the case may be, in the following way: 1. If the revocation of the voyage is decided on before the vessel leaves the port, there shall be given to each of the agreed seamen one month of their respective pay, besides what is due to them to receive on their articles, for the service rendered to the vessel up to the date of the revocation; — 2. If the agreement has been for a lump sum for the whole voyage, the corresponding month's pay and rations shall be graduated by approximately apportioning the days which the voyage, in the judgment of experts, ought to last, as enacted in the Law of Civil Procedure[1]); and if the projected voyage was of so short duration that it may be calculated approximately as of one month, the compensation shall be fixed at fifteen days, deducting in all cases the sums advanced; — 3. If the revocation occurs after the vessel has put to sea, the men who have agreed at a fixed sum for the voyage, shall earn the whole pay which was offered them, as if the voyage had terminated; and those who have agreed by the month shall receive an amount corresponding to the time that they were on board and to that which they need for arriving at the port which is the termination of the voyage; and the master must also give each his passage money to the same port, or to that of the departure of the vessel, as they think fit; — 4. If the managing owner or charterers of the vessel give it a destination different from that which was determined in the agreement, and the members of the crew do not agree thereto, one half of that enacted in case 1. shall be paid them as compensation, besides what is due to them as the part of the monthly pay, corresponding to the days which have elapsed since their agreements.

If they accept the alteration, and the voyage, by reason of the greater distance or from other circumstances, gives rise to an increase of pay, this shall be arranged privately, or by friendly arbitrators, in case of disagreement[2]). Although the voyage is confined to a nearer place, no abatement in the agreed pay can be made on that ground.

If the revocation or alteration of the voyage is occasioned by the consignors or freighters, the managing owner shall be entitled to claim over against them the compensation which is lawfully due by them.

639. If the revocation of the voyage proceeds from a just cause, independent of the will of the managing owner and consignors, and the vessel has not left the port, the members of the crew shall have no other right than that of recovering the pay earned to the day on which the revocation was made.

640. The following shall be just causes for the revocation of the voyage: 1. Declaration of war or interdiction of commerce with the Power to whose territory the vessel was bound; — 2. State of blockade of the port of her destination, or the breaking out of plague after the agreement; — 3. Prohibition of the reception in the same port of the goods which compose the cargo of the vessel; — 4. Detention or arrest of the vessel by order of the Government, or by another cause independent of the will of the managing owner; — 5. The vessel becoming unseaworthy.

641. If any one of the first three causes stated in the preceding article, happens after the commencement of the voyage, the seamen shall be paid at the port where the master thinks fit to put in for the benefit of the vessel and cargo, according to the time they have served therein; but if the vessel has to

[1]) See the study "Judicial procedure in mercantile civil matters" referring to the evidence of experts.

[2]) Respecting the form and manner of the intervention by the friendly arbitrators, see the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

continuar su viaje, podrán el capitán y la tripulación exigirse mutuamente el cumplimiento del contrato.

En el caso de ocurrir la causa cuarta, se continuará pagando á la tripulación la mitad de su haber, si el ajuste hubiera sido por meses; pero si la detención excediere de tres, quedará rescindido el empeño, abonando á los tripulantes la cantidad que les habría correspondido percibir, según su contrato, concluído el viaje. Y si el ajuste hubiere sido por un tanto el viaje, deberá cumplirse el contrato en los términos convenidos.

En el caso quinto, la tripulación no tendrá más derecho que el de cobrar los salarios devengados; mas si la inhabilitación del buque procediere de descuido ó impericia del capitán, del maquinista ó del piloto, indemnizarán á la tripulación de los perjuicios sufridos, salva siempre la responsabilidad criminal á que hubiere lugar.

642. Navegando la tripulación á la parte, no tendrá derecho, por causa de revocación, demora ó mayor extensión de viaje, más que á la parte proporcional que le corresponda en la indemnización que hagan al fondo común del buque las personas responsables de aquellas ocurrencias.

643. Si el buque y su carga se perdieren totalmente por apresamiento ó naufragio, quedará extinguido todo derecho, así por parte de la tripulación para reclamar salario alguno, como por la del naviero para el reembolso de las anticipaciones hechas.

Si se salvare alguna parte del buque ó del cargamento, ó de uno y otro, la tripulación ajustada á sueldo, incluso el capitán, conservará su derecho sobre el salvamento hasta donde alcancen, así los restos del buque como el importe de los fletes de la carga salvada; mas los marineros que naveguen á la parte del flete, no tendrán derecho alguno sobre el salvamento del casco, sino sobre la parte del flete salvado. Si hubieran trabajado para recoger los restos del buque náufrago, se les abonará sobre el valor de lo salvado una gratificación proporcionada á los esfuerzos hechos y á los riesgos arrostrados para conseguir el salvamento.

644. El hombre de mar que enfermare no perderá su derecho al salario durante la navegación, á no proceder la enfermedad de un acto suyo culpable. De todos modos, se suplirá del fondo común el gasto de la asistencia y curación, á calidad de reintegro.

Si la dolencia procediere de herida recibida en servicio ó defensa del buque, el hombre de mar será asistido y curado por cuenta del fondo común, deduciéndose ante todo de los productos del flete los gastos de asistencia y curación.

645. Si el hombre de mar muriese durante la navegación, se abonará á sus herederos lo ganado y no percibido de su haber, según su ajuste y la ocasión de su muerte, á saber: Si hubiere fallecido de muerte natural y estuviere ajustado á sueldo, se le abonará lo devengado hasta el día de su fallecimiento; — Si el ajuste hubiere sido á un tanto por viaje, le corresponderá la mitad de lo devengado, si el hombre de mar falleció en la travesía á la ida, y el todo si navegando á la vuelta; — Y si el ajuste hubiere sido á la parte y la muerte hubiere ocurrido después de emprendido el viaje, se abonará á los herederos toda la parte correspondiente al hombre de mar; pero habiendo éste fallecido antes de salir el buque del puerto, no tendrán los herederos derecho á reclamación alguna; — Si la muerte hubiere ocurrido en defensa del buque, el hombre de mar será considerado vivo, y se abonará sus herederos, concluído el viaje, la totalidad de los salarios ó la parte íntegra de utilidades que le correspondieren, como á los demás de su clase; — En igual forma se considerará presente al hombre de mar apresado defendiendo el buque, para gozar de los mismos beneficios que los demás; pero habiéndolo sido por descuido ú otro accidente sin relación con el servicio, sólo percibirá los salarios devengados hasta el día de su apresamiento.

646. El buque con sus máquinas, aparejo, pertrechos y fletes, estarán afectos á la responsabilidad de los salarios devengados por la tripulación ajustada á sueldo ó por viaje, debiéndose hacer la liquidación y pago en el intermedio de una expedición á otra.

Emprendida una nueva expedición, perderán la preferencia los créditos de aquella clase procedentes de la anterior.

647. Los oficiales y la tripulación del buque quedarán libres de todo compromiso, si lo estiman oportuno, en los casos siguientes: 1.° Si antes de comenzar

continue her voyage, the master and crew may mutually demand the performance of the contract.

In case of the fourth cause happening, the crew shall continue to be paid the half of their pay, if the agreement was by the month; but if the detention exceeds three, the undertaking shall be rescinded, by paying the crew the amount which they would have been due to receive, according to their articles, if the voyage had been concluded. And if the agreement was at so much for the voyage, the articles must be performed in the terms agreed.

In the fifth case, the crew shall have no further right than to recover the pay earned; but if the unseaworthiness of the vessel proceeds from the carelessness or unskilfulness of the master, the engineer or the navigating officer, he shall compensate the crew for the damage suffered, saving always any criminal liability there may be.

642. If the crew are sailing on part shares, they shall not be entitled, on the ground of revocation, delay or greater extent of the voyage, to more than the proportional share in the compensation paid to the common fund of the vessel by the persons responsible for those events.

643. If the vessel and her cargo are totally lost by capture or shipwreck, all right shall be extinguished, both on the part of the crew to claim any pay, and on the part of the managing owner for repayment of advances made.

If any part of the vessel or cargo or of both of them is salved, the crew, including the master, with an agreement as to pay, shall preserve their right on the salved part so far as it extends, and on both the remains of the vessel and the amount of the freights of the salved cargo; but seamen who sail on a share in the freight, shall have no right on the salved hull, but only on the share of the freight salved. If they have laboured to recover the remains of the wrecked vessel, they shall be paid out of the value of what is salved a remuneration proportioned to the efforts made and the risk faced in obtaining the salving.

644. A seaman who becomes ill shall not lose his right to the pay during the navigation, unless the illness proceeds from his own culpable act. At all events, the expense of his attendance and treatment shall be supplied from the common fund, as a repayment.

If the suffering proceeds from a wound received in the service or defence of the vessel, the seaman shall be attended and treated on account of the common fund, deducting the expenses of attendance and treatment as the first payment from the proceeds of the freight.

645. If a seaman dies during the navigation, the due and unpaid portion of his pay shall be paid to his heirs, according to his agreement and the occasion of his death; that is: If he has died a natural death and had an agreement as to pay, he shall be paid what was earned to the day of his death; — If the agreement was at so much a voyage, half of the sum agreed shall belong to him, if the seaman dies on the outward voyage, and the whole if sailing on the return voyage; — And if the agreement was at part shares and the death occurred after the commencement of the voyage, all the share belonging to the seaman shall be paid to the heirs; but if he has died before the vessel leaves the port, the heirs shall not be entitled to make any claim; — If the death occurred in defence of the vessel, the seaman shall be considered alive, and on the conclusion of the voyage his heirs shall be paid the whole of the pay or the whole share of the profits belonging to him as to the other members of his class; — In the same way a seaman who is taken prisoner in defence of the vessel shall be considered present, so as to enjoy the same benefits as the others; but if he has been taken prisoner through carelessness or other accident not related to the service, he shall only receive the pay earned to the day of his capture.

646. The vessel with her machinery, tackle, stores and freights shall be subjected to the liability for the pay earned by the crew whether agreed at wages or by the voyage, and the settlement and payment must be made in the interval between one voyage and another.

If a fresh voyage has been begun, the debts of that class proceeding from the previous voyage shall lose the preference.

647. The officers and crew of the vessel shall be free from all engagement in the following cases, if they think fit: 1. If before commencing the voyage, the master

el viaje intentare el capitán variarlo, ó si sobreviniere una guerra marítima con la Nación á donde el buque estaba destinado; — 2.° Si sobreviniere y se declarare oficialmente una enfermedad epidémica en el puerto de destino; — 3.° Si el buque cambiase de propietario ó de capitán.

648. Se entenderá por dotación de un buque el conjunto de todos los individuos embarcados, de capitán á paje, necesarios para su dirección, maniobras y servicio, y por lo tanto estarán comprendidos en la dotación la tripulación, los pilotos, maquinistas, fogoneros y demás cargos de á bordo no especificados; pero no lo estarán los pasajeros ni los individuos que el buque llevare de transporte.

Sección cuarta. De los sobrecargos.

649. Los sobrecargos desempeñarán á bordo las funciones administrativas que les hubieren conferido el naviero ó los cargadores; llevarán la cuenta y razón de sus operaciones en un libro que tendrá las mismas circunstancias y requisitos exigidos al de contabilidad del capitán, y respetarán á éste en sus atribuciones como jefe de la embarcación.

Las facultades y responsabilidad del capitán cesan con la presencia del sobrecargo, en cuanto á la parte de administración legítimamente conferida á éste, subsistiendo para todas las gestiones que son inseparables de su autoridad y empleo.

650. Serán aplicables á los sobrecargos todas las disposiciones contenidas en la sección segunda del título 3.°, libro 2.°, sobre capacidad, modo de contratar y responsabilidad de los factores.

651. Los sobrecargos no podrán hacer, sin autorización ó pacto expreso, negocio alguno por cuenta propia durante su viaje, fuera del de la pacotilla que, por costumbre del puerto donde se hubiere despachado el buque, les sea permitido.

Tampoco podrán invertir en el viaje de retorno más que el producto de la pacotilla, á no mediar autorización expresa de los comitentes.

Título III. De los contratos especiales del comercio marítimo.

Sección primera. Del contrato de fletamento.

§ 1.° *De las formas y efectos del contrato de fletamento.*

652. El contrato de fletamento deberá extenderse por duplicado en póliza firmada por los contratantes, y cuando alguno no sepa ó no pueda, por dos testigos á su ruego.

La póliza de fletamento contendrá, además de las condiciones libremente estipuladas, las circunstancias siguientes: 1.ª La clase, nombre y porte del buque; — 2.ª Su pabellón y puerto de matrícula; — 3.ª El nombre, apellido y domicilio del capitán; — 4.ª El nombre, apellido y domicilio del naviero, si éste contratare el fletamento; — 5.ª El nombre, apellido y domicilio del fletador; y si manifestare obrar por comisión, el de la persona por cuya cuenta hace el contrato; — 6.ª El puerto de carga y descarga; — 7.ª La cabida, número de toneladas ó cantidad de peso ó medida que se obliguen respectivamente á cargar y á conducir, ó si es total el fletamento; — 8.ª El flete que se haya de pagar, expresando si ha de ser una cantidad alzada por el viaje, ó un tanto al mes, ó por las cavidades que se hubieren de ocupar, ó por el peso ó la medida de los efectos en que consista el cargamento, ó de cualquiera otro modo que se hubiere convenido; — 9.ª El tanto de capa que se haya de pagar al capitán; — 10.ª Los días convenidos para la carga y descarga; — 11.ª Las estadías y sobreestadías que habrán de contarse, y lo que por cada una de ellas se hubiere de pagar[1]).

653. Si se recibiere el cargamento sin haber firmado la póliza, el contrato se entenderá celebrado con arreglo á lo que resulte del conocimiento[2]), único título, en orden á la carga, para fijar los derechos y obligaciones del naviero, del capitán y del fletador.

---

[1]) Además, con arreglo á lo prevenido en el artículo 176 de la L. del T. las que no se otorguen en escritura pública estarán sujetas al pago del timbre señalado en el artículo 15 para los documentos públicos. (Véase la escala gradual de la nota 1, pág. 106.) — En las copias ó traslados de las mismas se pondrá el timbre móvil de una peseta, clase 11.ª.

[2]) En este caso el conocimiento deberá llevar los timbres correspondientes como si se tratara de la póliza. (Véase la nota anterior.)

attempts to change it, or if a maritime war breaks out with the nation to which the vessel was destined; — 2. If any epidemic breaks out and is officially declared in the port of destination; — 3. If the vessel changes owner or master.

648. The complement of a vessel shall mean the combination of all the persons shipped, from master to cabin boy, who are necessary for her direction, manoeuvring and service, and so the following are included in the complement: — the crew, the navigating officers, engineers, stokers and other unspecified employments on board; but not the passengers or persons carried by the vessel as fares.

Fourth Section. Supercargoes.

649. Supercargoes shall discharge on board the administrative functions conferred on them by the managing owner or the consignors; they shall keep the account and entry of their operations in a book which shall have the same particulars and requisites as are required for the account keeping of the master, and they shall respect the latter in his powers as chief of the vessel.

The powers and responsibility of the master cease with the presence of the supercargo, as regards the part of the administration lawfully conferred on the latter, but they shall continue for all operations which are inseparable from his authority and employment.

650. All the provisions contained in the second section of Title 3, book 2, on capacity, mode of contracting and liability of managers shall apply to supercargoes.

651. Without authorisation or express bargain, supercargoes cannot do any business on their own account during the voyage, except in the trifling matters which are allowed them by the custom of the port whence the vessel was dispatched.

Nor may they invest in the return voyage more than the proceeds of these trifling matters, without express authorisation of the principals.

Title III. The special contracts of maritime commerce.

First Section. The contract of affreightment.

§ 1. *The forms and effects of the contract of affreightment.*

652. The contract of affreightment must be drawn up in duplicate in the charter party signed by the contractors, and when any one does not know how to write or cannot write, then by two witnesses at his request.

The contract of affreightment shall contain the following particulars in addition to the freely stipulated conditions: 1. The class, name and tonnage of the vessel; — 2. Her flag and port of register; — 3. The name, surname and address of the master; — 4. The name, surname and address of the managing owner, if he contracts the affreightment; — 5. The name, surname and address of the freighter; and if he shows that he is acting as agent, those of the person on whose account he is making the contract; — 6. The port of loading and discharge; — 7. The carrying capacity, number of tons or quantity by weight or measure which are to be respectively loaded and carried, or if it is a total affreightment; — 8. The freight to be paid, stating whether it is to be a lump sum for the voyage, or so much a month, or by the space which are to be occupied, or by the weight or measure of the goods forming the cargo, or by any other way which they have agreed; — 9. The amount of hat-money which is to be paid to the master; — 10. The agreed days for loading and discharge; — 11. The lay-days and extra lay-days which are to be reckoned, and what is to be paid for each of them[1]).

653. If the cargo is received without a charter-party being signed, the contract shall be understood to be made according to the terms of the bill of lading[2]), as the only title for fixing the rights and obligations of the managing owner, master and freighter with regard to the cargo.

---

[1]) Besides, according to the provisions of article 176 of the Stamp Act, those which are not executed in a notarial instrument, are subject to the payment of stamp duty, set out in art. 15 for notarial documents. (See the graduated scale in note 1, page 106.) On ordinary copies or copies delivered in an action, an adhesive stamp of one peseta, class 11 must be placed.

[2]) In this case the bill of lading must bear the same stamps as the corresponding charter-party (see the previous note).

654. Las pólizas del fletamento contratado con intervención del corredor que certifique la autenticidad de las firmas de los contratantes por haberse puesto en su presencia, harán prueba plena en juicio; y si resultare entre ellas discordancia, se estará á la que concuerde con la que el corredor deberá conservar en su registro, si éste estuviere con arreglo á derecho.

También harán fe las pólizas, aun cuando no haya intervenido corredor, siempre que los contratantes reconozcan como suyas las firmas puestas en ellas.

No habiendo intervenido corredor en el fletamento ni reconociéndose las firmas, se decidirán las dudas por lo que resulte del conocimiento, y, á falta de éste, por las pruebas que suministren las partes.

655. Los contratos de fletamento celebrados por el capitán en ausencia del naviero, serán válidos y eficaces aun cuando al celebrarlos hubiera obrado en contravención á las órdenes é instrucciones del naviero ó fletante; pero quedará á éste expedita la acción contra el capitán para el resarcimiento de perjuicios.

656. Si en la póliza del fletamento no constare el plazo en que hubieren de verificarse la carga y la descarga, se seguirá el uso del puerto donde se ejecuten estas operaciones. Pasado el plazo estipulado ó el de costumbre, y no constando en el contrato de fletamento cláusula expresa que fije la indemnización de la demora, tendrá derecho el capitán á exigir las estadías y sobreestadías que hayan transcurrido en cargar y descargar.

657. Si durante el viaje quedare el buque inservible, el capitán estará obligado á fletar á su costa otro en buenas condiciones, que reciba la carga y la portee á su destino, á cuyo efecto tendrá obligación de buscar buque, no sólo en el puerto de arribada, sino en los inmediatos hasta la distancia de 150 kilómetros.

Si el capitán no proporcionare, por indolencia ó malicia, buque que conduzca el cargamento á su destino, los cargadores, previo un requerimiento al capitán para que en término improrrogable procure flete, podrán contratar el fletamento acudiendo á la autoridad judicial en solicitud de que sumariamente apruebe el contrato que hubieren hecho.

La misma autoridad obligará por la vía de apremio al capitán á que, por su cuenta y bajo su responsabilidad, se lleve á efecto el fletamento hecho por los cargadores.

Si el capitán, á pesar de su diligencia, no encontrare buque para el flete, depositará la carga á disposición de los cargadores[1]), á quienes dará cuenta de lo ocurrido en la primera ocasión que se le presente, regulándose en estos casos el flete por la distancia recorrida por el buque, sin que haya lugar á indemnización alguna.

658. El flete se devengará según las condiciones estipuladas en el contrato, y si no estuvieren expresas, ó fueren dudosas, se observarán las reglas siguientes: 1.ª Fletado el buque por meses ó por días, empezará á correr el flete desde el día en que se ponga el buque á la carga; — 2.ª En los fletamentos hechos por un tiempo determinado, empezará á correr el flete desde el mismo día; — 3.ª Si los fletes se ajustaren por peso, se hará el pago por el peso bruto, incluyendo los envases, como barricas ó cualquier otro objeto en que vaya contenida la carga.

659. Devengarán flete las mercancías vendidas por el capitán para atender á la reparación indispensable del casco, maquinaria ó aparejo, ó para necesidades imprescindibles y urgentes.

El precio de estas mercaderías se fijará según el éxito de la expedición, á saber: 1.° Si el buque llegare á salvo al puerto del destino, el capitán las abonará al precio que obtengan las de la misma clase que en él se vendan; — 2.° Si el buque se perdiere, al que hubieran obtenido en venta las mercaderías.

La misma regla se observará en el abono del flete, que será entero si el buque llegare á su destino, y en proporción de la distancia recorrida, si se hubiere perdido antes.

---

[1]) El procedimiento para la constitución de este depósito y el de sus incidencias puede verse en la nota 1, pág. 124.

654. Charter-parties made with the intervention of a broker who certifies the authenticity of the signatures of the contractors as having been placed in his presence, shall have full probatory force in an action; and if there is a difference between them, that one shall prevail which agrees with that which the broker has to preserve in his register, if the latter is according to law.

Likewise, charter-parties shall have probatory force, even when no broker has taken part, provided that the contractors acknowledge the signatures placed thereon as theirs.

If no broker has intervened in the affreightment and the signatures are not acknowledged, the doubts shall be decided by the terms of the bill of lading, and in default thereof, by the evidence produced by the parties.

655. Contracts of affreightment made by the master in the absence of the managing owner, shall be valid and efficacious even when, in making them, he has acted in contravention of the orders and instructions of the managing owner or owner; but an action shall be available to the latter against the master for compensation for damages.

656. If the time in which the loading and discharge is to be effected does not appear in the charter party, the custom of the port where these operations are effected shall be followed. When the agreed or customary time has elapsed, and there is no express term in the contract of affreightment which fixes the compensation for delay, the master shall be entitled to demand the lay-days and extra lay-days which have elapsed in loading and unloading.

657. If the vessel becomes unserviceable during the voyage, the master shall be bound at her cost to charter another in good condition, to receive the cargo and carry it to its destination, for which purpose he shall be bound to seek a vessel, not only in the port of arrival, but in the near ports up to a distance of 150 kilometres.

If, through indolence or malice, the master does not provide a vessel to carry the cargo to its destination, the consignors, after previous demand on the master to procure a charter within a definite time, may make a contract of affreightment by resorting to the judicial authority, with an application for a summary approbation of the contract which they have made.

The same authority shall oblige the master by way of *apremio* (executive process) to carry into effect the affreightment made by the consignors, on his own account and under his responsibility.

If, in spite of his diligence, the master does not meet with a vessel to charter, he shall deposit the cargo at the disposal of the consignors[1]), to whom he shall give account of what has occurred on the first available opportunity, and in these cases the freight shall be regulated by the distance traversed by the vessel, and no right to compensation shall arise.

658. The freight shall be earned according to the terms stipulated in the contract, and if they are not stated or are doubtful, the following rules shall be observed: 1. If the vessel is chartered by months or by days, the freight shall commence to run from the day on which the vessel is ready to receive cargo; — 2. In affreightments made for a time certain, the freight shall begin to run from the same day; — 3. If the freights are agreed according to weight, payment shall be made by the gross weight, including the coverings, such as casks or any other object in which the cargo is contained.

659. Merchandise sold by the master in order to meet the indispensable repair of the hull, machinery or tackle, or for unavoidable and urgent necessities, shall pay freight.

The price of this merchandise shall be fixed according to the success of the voyage, as follows: 1. If the vessel arrives safely at the port of the destination, the master shall pay for it at the price obtained by goods of the same kind which are there sold; — 2. If the vessel is lost, at the price which the merchandise would have obtained at a sale.

The same rule shall be observed in paying the freight, which shall be entire if the vessel arrives at her destination, and in proportion to the distance traversed, if she is lost before.

---

[1]) The proceeding for the constitution of this deposit, and that of its interlocutory steps may be seen in note 1, page 124.

660. No devengarán flete las mercaderías arrojadas al mar por razón de salvamento común; pero su importe será considerado como avería gruesa, contándose aquél en proporción á la distancia recorrida cuando fueron arrojadas.

661. Tampoco devengarán flete las mercaderías que se hubieren perdido por naufragio ó varada, ni las que fueren presa de piratas ó enemigos.

Si se hubiere recibido el flete por adelantado, se devolverá, á no mediar pacto en contrario.

662. Rescatándose el buque ó las mercaderías, ó salvándose los efectos del naufragio, se pagará el flete que corresponda á la distancia recorrida por el buque porteando la carga; y si, reparado, la llevare hasta el puerto del destino, se abonará el flete por entero, sin perjuicio de lo que corresponda sobre la avería.

663. Las mercaderías que sufran deterioro ó disminución por vicio propio ó mala calidad y condición de los envases, ó por caso fortuito, devengarán el flete íntegro y tal como se hubiere estipulado en el contrato de fletamento.

664. El aumento natural que en peso ó medida tengan las mercaderías cargadas en el buque, cederá en beneficio del dueño y devengará el flete correspondiente fijado en el contrato para las mismas.

665. El cargamento estará especialmente afecto al pago de los fletes, de los gastos y derechos causados por el mismo, que deban reembolsar los cargadores, y de la parte que pueda corresponderle en avería gruesa; pero no será lícito al capitán dilatar la descarga por recelo de que deje de cumplirse esta obligación.

Si existiere motivo de desconfianza, el juez ó tribunal, á instancia del capitán, podrá acordar el depósito de las mercaderías hasta que sea completamente reintegrado[1]).

666. El capitán podrá solicitar la venta del cargamento en la proporción necesaria para el pago del flete, gastos y averías que le correspondan[2]), reservándose el derecho de reclamar el resto de lo que por estos conceptos le fuere debido, si lo realizado por la venta no bastase á cubrir su crédito.

667. Los efectos cargados estarán obligados preferentemente á la responsabilidad de sus fletes y gastos durante veinte días, á contar desde su entrega ó depósito. Durante este plazo, se podrá solicitar la venta de los mismos, aunque haya otros acreedores y ocurra el caso de quiebra del cargador ó del consignatario[3]).

Este derecho no podrá ejercitarse, sin embargo, sobre los efectos que después de la entrega hubiesen pasado á una tercera persona sin malicia de ésta y por título oneroso.

668. Si el consignatario no fuese hallado, ó se negare á recibir cargamento, deberá el juez ó tribunal, á instancia del capitán, decretar su depósito y disponer la venta de lo que fuere necesario para el pago de los fletes y demás gastos que pesaren sobre él[4]).

Asimismo tendrá lugar la venta cuando los efectos depositados ofrecieren riesgo de deterioro, ó, por sus condiciones ú otras circunstancias, los gastos de conservación y custodia fueren desproporcionados.

§ 2.° *De los derechos y obligaciones del fletante.*

669. El fletante ó el capitán se atendrá en los contratos de fletamento á la cabida que tenga el buque, ó á la expresamente designada en su matrícula, no tolerándose más diferencia que la de 2 por 100 entre la manifestada y la que tenga en realidad.

Si el fletante ó el capitán contrataren mayor carga que la que el buque puede conducir, atendido su arqueo, indemnizarán, á los cargadores á quienes dejen de cumplir su contrato, los perjuicios que por su falta de cumplimiento les hubiesen sobrevenido, según los casos, á saber: Si ajustado el fletamento de un buque por

---

[1]) Este depósito habrá de hacerse en la forma indicada en la nota 1, pág. 124.

[2]) Estaventa se practicará en igual forma que la á que se refiere la nota 2, pág. 126, teniendo en cuenta, sin embargo, que á tenor de la regla 11.ª del art. 2161 de la L. Enj. c. se ha de requerir previamente al consignatario para que pague en el acto lo que le adeddo por fletes y gastos y averías, y además que el informe pericial no será necesario cuando no se trate de géneros averiados.

[3]) Véase la nota anterior.

[4]) Este depósito y venta habrá de hacerse en la forma indicada en la nota 1, pág. 124.

660. Merchandise thrown into the sea by reason of general salving shall not pay freight; but the amount thereof shall be considered as general average, and reckoned in proportion to the distance traversed when it was jettisoned.

661. Nor shall merchandise which has been lost through shipwreck or stranding pay freight, nor that which is captured by pirates or enemies.

If the freight has been received in advance, it shall be returned, in the absence of an agreement to the contrary.

662. If the vessel or the merchandise is ransomed, or the goods are salved from the wreck, the freight shall be paid according to the distance traversed by the vessel carrying the cargo; and if, after being repaired, she carries it to the port of the destination, the whole freight shall be paid, without prejudice to what is due as the share of average.

663. Merchandise which suffers deterioration or diminution through its inherent defect or the bad quality and condition of the coverings, or by fortuitous event, shall pay the entire freight and as was stipulated in the contract of affreightment.

664. Natural increase in weight or measure experienced by merchandise loaded on the vessel, shall accrue to the benefit of the owner and shall pay the corresponding freight as fixed in the contract therefor.

665. The cargo shall be specially affected to the payment of the freights, of the expenses and dues caused thereby, which the consignors must repay, and of the corresponding share in the general average; but it shall not be lawful for the master to delay the discharge from a suspicion that it may fail to fulfil this obligation.

If there is reason for distrust, the judge or tribunal, at the instance of the master, may order the deposit of the merchandise until they are completely paid[1]).

666. The master may apply for the sale of the cargo in the proportion necessary for the payment of the freight, expenses and average which affect it[2]), reserving the right to claim the rest of what may be due on these grounds, if the proceeds of the sale are not sufficient to cover his credit.

667. Goods loaded shall be preferentially bound to the liability for their freights and expenses during twenty days, reckoned from their delivery or deposit. During this time, the sale thereof may be applied for, although there are other creditors and the consignor or the consignee becomes bankrupt[3]).

Nevertheless, this right cannot be exercised on goods which after their delivery have passed to a third person without the malice of the latter and for valuable consideration (onerous title).

668. If the consignee is not to be found, or refuses to receive the cargo, the judge or tribunal, at the instance of the master, must decree their deposit and order the sale of what is necessary to pay the freights and other expenses which affect them[4]).

Sale shall likewise take place when the goods deposited are in danger of deterioration, or, from their condition or other circumstances, the expenses of preservation and custody are disproportionate.

§ 2. *Rights and obligations of the shipowner.*

669. The owner or the master, in making contracts of affreightment, shall pay attention to the capacity of the vessel, or to that expressly stated in her register, and shall not allow a greater difference than that of 2 per cent between that shown and that which she has in reality.

If the owner or master contracts for a greater cargo than that which the vessel can carry, according to her measurement, he shall compensate the consignors whose contract he fails to perform, for the damage which has been occasioned them by his failure of performance, as follows: If the affreightment of the vessel has

---

[1]) This deposit must be made as indicated in note 1, page 124.

[2]) This sale must be effected in like form as that referred to in note 2, page 126, remembering, however, that according to rule 11 of art. 2161 of the Law of Civil Procedure, a demand must previously be made on the consignee to at once pay what is due for freights and expenses and average, and also that an expert report will not be necessary in the case of damaged goods.

[3]) See the previous note.

[4]) This deposit and sale must be made as indicated in note 1, page 124.

un solo cargador, resultare error ó engaño en la cabida de aquél, y no optare el fletador por la rescisión, cuando le corresponda este derecho, se reducirá el flete en proporción de la carga que el buque deje de recibir, debiendo además indemnizar el fletante al fletador de los perjuicios que le hubiere ocasionado; — Si, por el contrario, fueren varios los contratos de fletamento, y por falta de cabida no pudiere embarcarse toda la carga contratada, y ninguno de los fletadores optare por la rescisión, se dará la preferencia al que tenga ya introducida y colocada la carga en el buque, y los demás obtendrán el lugar que les corresponda según el orden de fechas de sus contratos; — No apareciendo esta prioridad, podrán cargar, si les conviniere, á prorrata de las cantidades de peso ó extensión que cada uno haya contratado, y quedará el fletante obligado al resarcimiento de daños y perjuicios[1]).

670. Si, recibida por el fletante una parte de carga, no encontrare la que falte para formar al menos las tres quintas partes de las que puede portear el buque, al precio que hubiere fijado, podrá sustituir para el transporte otro buque visitado y declarado á propósito para el mismo viaje, siendo de su cuenta los gastos de trasbordo y el aumento, si lo hubiere, en el precio de flete. Si no le fuere posible esta sustitución, emprenderá el viaje en el plazo convenido; y no habiéndolo, á los quince días de haber comenzado la carga, si no se ha estipulado otra cosa.

Si el dueño de la parte embarcada le procurase carga á los mismos precios y con iguales ó proporcionadas condiciones á las que aceptó en la recibida, no podrá el fletante ó capitán negarse á aceptar el resto del cargamento; y si lo resistiese, tendrá derecho el cargador á exigir que se haga á la mar el buque con la carga que tuviera á bordo[2]).

671. Cargadas las tres quintas partes del buque, el fletante no podrá, sin consentimiento de los fletadores ó cargadores, sustituir con otro el designado en el contrato, so pena de constituirse por ello responsable de todos los daños y perjuicios que sobrevengan durante el viaje al cargamento de los que no hubieren consentido la sustitución[3]).

672. Fletado un buque por entero, el capitán no podrá, sin consentimiento del fletador, recibir carga de otra persona; y si lo hiciere, podrá dicho fletador obligarle á desembarcarla y á que le indemnice los perjuicios que por ello se le sigan[4]).

673. Serán de cuenta del fletante todos los perjuicios que sobrevengan al fletador por retardo voluntario del capitán en emprender el viaje, según las reglas que van prescritas, siempre que fuera requerido notarial ó judicialmente á hacerse á la mar en tiempo oportuno.

674. Si el fletador llevase al buque más carga que la contratada, podrá admitírsele el exceso de flete con arreglo al precio estipulado en el contrato, pudiendo colocarse con buena estiva sin perjudicar á los demás cargadores; pero si para colocarla hubiere de faltarse á las buenas condiciones de estiva, deberá el capitán rechazarla, ó desembarcarla á costa del propietario.

Del mismo modo el capitán podrá, antes de salir del puerto, echar en tierra las mercaderías introducidas á bordo clandestinamente, ó portearlas, si pudiera hacerlo con buena estiva, exigiendo por razón de flete el precio más alto que hubiere pactado en aquel viaje[5]).

675. Fletado el buque para recibir la carga en otro puerto, se presentará el capitán al consignatario designado en su contrato; y si no le entregare la carga, la dará aviso al fletador, cuyas instrucciones esperará corriendo entre tanto las estadías convenidas, ó las que fueren de uso en el puerto, si no hubiere sobre ello pacto expreso en contrario.

No recibiendo el capitán contestación en el término necesario para ello, hará diligencias para encontrar flete; y si no lo hallare después de haber corrido las estadías y sobreestadías, formalizará protesta y regresará al puerto donde contrató el fletamento.

[1]) Todas las cuestiones que surgieren con motivo de la aplicación de este artículo habrán de resolverse por el juez, quien, previa información sumaria, adoptará la resolución que proceda mandando que se requiera para que la ejecuten, al capitán de la nave y demás personas que corresponde (art. 2168, L. Enj. c.).

[2]) Es de aplicación el artículo 2168 de la L. Enj. c. que puede verse en la nota anterior.

[3]) Véase la nota anterior. — [4]) Véase la pág. 187, nota 2. — [5]) Véase la pág. 187, nota 2.

been agreed by a single consignor, and there proves to be a mistake or deception in her capacity, and the freighter does not elect for rescission, when he has this right, the freight shall be reduced in proportion to the cargo which the vessel fails to receive, and the owner must likewise compensate the freighter for the damage which he has occasioned him; — If, on the contrary, there are several contracts of affreightment, and for want of capacity the whole of the contracted cargo cannot be shipped, and none of the freighters elect for rescission, preference shall be given to him who has already shipped and stowed the cargo in the vessel, and the others shall obtain the place which belongs to them according to the dates of their contracts; — If there is no such priority, they may load, if they think fit, a proportionate amount of weight and space which each has contracted, and the owner shall be obliged to compensate for the damages[1]).

670. If after the owner has received part of the cargo, he does not meet with enough to form at least three fifth parts of what the vessel can carry, at the price which he has fixed, he may substitute for the carriage another vessel which has been inspected and declared fit for the same voyage, but he must bear the expenses of transhipment and the increase in the price of the freight, if any. If this substitution is not possible, he shall begin the voyage within the agreed time; and, if none has been agreed, at fifteen days from the commencement of the loading, if no other stipulation has been made.

If the owner of the part shipped procures him cargo at the same prices and with the same or proportionate conditions to those which he accepted on receiving it, the owner or master cannot refuse to accept the rest of the cargo; and if he objects to it, the consignor shall be entitled to require that the vessel should put to sea with the cargo which she has on board[2]).

671. If three fifth parts of the vessel have been loaded, the owner cannot substitute for the cargo defined in the contract another, without the consent of the freighters or consignors, on pain of making himself liable thereby for all damage which may happen during the voyage to the cargo of those who have not consented to the substitution[3]).

672. When a vessel has been chartered as a whole, the master cannot, without the consent of the charterer, receive cargo of another person; and if he does so, the charterer may oblige him to discharge it and compensate him for the damage which he suffers thereby[4]).

673. The owner shall bear all damage which happens to the freighter by the voluntary delay of the master in commencing the voyage according to the rules already prescribed, provided that there has been a notarial or judicial demand to put to sea at a fitting time.

674. If the freighter brings to the vessel more than the contracted cargo, the excess may be admitted according to the price stipulated in the contract, if it can be well stowed without prejudicing the other consignors; but if, in order to stow it, good conditions of stowage must be wanting, the master must reject it, or discharge it at the cost of the owner.

In the same way, the master may, before leaving the port, land merchandise which has been introduced on board clandestinely, or may carry it, if he can do so with good stowage, and may demand as freight the highest price which has been agreed for that voyage[5]).

675. If the vessel has been chartered to receive cargo at another port, the master shall present himself to the consignee named in his charter-party; and if he does not deliver him the cargo, he shall advise the charterer, whose instructions he shall await, and the agreed lay-days shall run meanwhile, or those which are customary in the port, if there has been no express bargain to the contrary.

If the master does not receive an answer within the time necessary therefor, he shall take steps to find cargo; and if he does not find it at the expiration of the lay-days and extra lay-days, he shall draw up a protest and return to the port where the affreightment was contracted.

---

1) All questions which arise regarding the application of this article, must be decided by the judge, who, on a previous summary report, shall adopt the proper decision, and order what is required for its execution by the master of the ship and other persons concerned (art. 2168 of the Law of Civil Procedure).

2) Article 2168 of the Law of Civil Procedure applies, see the previous note.

3) See the previous note. — 4) See note 2. *supra*. — 5) See note 2, *supra*.

El fletador pagará el flete por entero, descontando el que haya devengado por las mercaderías que se hubiesen transportado á la ida y á la vuelta, si se hubieran cargado por cuenta de terceros.

Lo mismo se observará cuando el buque fletado de ida y vuelta no sea habilitado de carga para su retorno.

676. Perderá el capitán el flete é indemnizará á los cargadores siempre que éstos prueben, aun contra el acta de reconocimiento, si se hubiere practicado en el puerto de salida, que el buque no se hallaba en disposición para navegar, al recibir la carga.

677. Subsistirá el contrato de fletamento si, careciendo el capitán de instrucciones del fletador, sobreviniere durante la navegación declaración de guerra ó bloqueo. En tal caso el capitán deberá dirigirse al puerto neutral y seguro más cercano, pidiendo y aguardando órdenes del cargador, y los gastos y salarios devengados en la detención se pagarán como avería común.

Si por disposición del cargador se hiciere la descarga en el puerto de arribada, se devengará por entero el flete de ida.

678. Si, transcurrido el tiempo necesario, á juicio del juez ó tribunal, para recibir las órdenes del cargador, el capitán continuase careciendo de instrucciones, se depositará el cargamento[1]), el cual quedará afecto al pago del flete y gasto de su cargo en la demora, que se satisfarán con el producto de la parte que primero se venda.

§ 3.° *De las obligaciones del fletador.*

679. El fletador de un buque por entero podrá subrogar el flete en todo ó en parte á los plazos que más le convinieren, sin que el capitán pueda negarse á recibir á bordo la carga entregada por los segundos fletadores, siempre que no se alteren las condiciones del primer fletamento, y que se pague al fletante la totalidad del precio convenido, aun cuando no se embarque toda la carga, con la limitación que se establece en el artículo siguiente.

680. El fletador que no completare la totalidad de la carga que se obligó á embarcar, pagará el flete de la que deje de cargar, á menos que el capitán no hubiere tomado otra carga para completar el cargamento del buque, en cuyo caso abonará el primer fletador las diferencias si las hubiere.

681. Si el fletador embarcare efectos diferentes de los que manifestó al tiempo de contratar el fletamento, sin conocimiento del fletante ó capitán, y por ello sobrevinieren perjuicios, por confiscación, embargo, detención ú otras causas, al fletante ó á los cargadores, responderá el causante con el importe de su cargamento, y además con sus bienes, de la indemnización completa á todos los perjudicados por su culpa.

682. Si las mercaderías embarcadas lo fueren con un fin de ilícito comercio y hubiesen sido llevadas á bordo á sabiendas del fletante ó del capitán, éstos, mancomunadamente con el dueño de ellas, serán responsables de todos los perjuicios que se originen á los demás cargadores; y aunque se hubiere pactado, no podrán exigir del fletador indemnización alguna por el daño que resulte al buque.

683. En caso de arribada para reparar el casco del buque, maquinaria ó aparejos, los cargadores deberán esperar á que el buque se repare, pudiendo descargarlo á su costa si lo estimaren conveniente.

Si en beneficio del cargamento expuesto á deterioro dispusieren los cargadores, ó el tribunal, ó cónsul, ó la autoridad competente en país extranjero, hacer la descarga de las mercaderías, serán de cuenta de aquéllos los gastos de descarga y recarga.

684. Si el fletador, sin concurrir alguno de los casos de fuerza mayor expresados en el artículo precedente, quisiere descargar sus mercaderías antes de llegar al puerto de su destino, pagará el flete por entero, los gastos de la arribada que se hiciere á su instancia, y los daños y perjuicios que se causaren á los demás cargadores, si los hubiere.

685. En los fletamentos á carga general, cualquiera de los cargadores podrá descargar las mercaderías antes de emprender su viaje, pagando medio flete, el gasto de estivar y reestivar, y cualquier otro perjuicio que por esta causa se origine á los demás cargadores.

[1]) Este depósito se practicará en la forma indicada en la nota 1, pág. 124.

The charterer shall pay the entire freight, deducting what has been earned in respect of the merchandise which has been carried on the outward and inward voyages, if it has been loaded on account of third persons.

The same shall be observed when a vessel, which has been chartered for a round voyage, is not provided with cargo for her return voyage.

676. The master shall lose the freight and shall compensate the consignors, whenever the latter prove that the vessel was not in a fit state to navigate at the time of receiving the cargo, although this is against the minute of the survey, if this was made at the port of sailing.

677. The contract of affreightment shall still subsist if, the master being without instructions from the freighter, a declaration of war or blockade occurs during the voyage. In that case the master must sail for the nearest neutral and safe port, and must apply for and await the orders of the consignor, and the expenses and pay which become due during the detention shall be paid as general average.

If, by order of the consignor, discharge is effected at the port of arrival, the whole of the outward freight shall be earned.

678. If, after the time which in the opinion of the judge or tribunal is necessary for receiving the orders of the consignor, the master continues to be without instructions, the cargo shall be deposited[1]), and it shall be affected to the payment of the freight and the expenses of its charge during the delay, which shall be paid with the proceeds of the part which is first sold.

§ 3. *The obligations of the freighter.*

679. The charterer of a vessel as a whole, may sub-let the vessel in whole or in part for the times which are most suitable to him, and the master cannot refuse to receive on board the cargo delivered by the sub-freighters, provided that the conditions of the first affreightment are not altered, and that the whole of the agreed price is paid to the owner, even when the whole cargo is not shipped, but subject to the limitation enacted in the following article.

680. A freighter who does not complete the whole of the cargo which he was obliged to ship, shall pay the freight of that which he fails to load, unless the master has taken other cargo to complete the loading of the vessel, in which case the first freighter shall pay the difference, if any.

681. If the freighter ships goods different from those which he showed at the time of making the contract of affreightment, and without the knowledge of the owner or master, and damage is caused thereby through confiscation, arrest, detention or other causes, the freighter shall be responsible to the owner or the consignors with the value of his shipment, and likewise with his property, for the complete compensation of all persons who are prejudiced by his *culpa*.

682. If the merchandise was shipped with the object of illicit trade and has been so brought on board with the knowledge of the owner or master, the latter, equally with the owner thereof, shall be liable for all the damage which it occasions to the other consignors; and although it has been so agreed, they cannot demand any indemnity from the freighter for the damage suffered by the vessel.

683. When the vessel puts in to repair her hull, machinery but tackle, the consignors must wait until the vessel is repaired, but may unload her at their own expense, if they think fit.

If, for the benefit of cargo exposed to deterioration, the consignors, but the tribunal but consul, but the competent authority in a foreign country, order the discharge of the merchandise, the expenses of unloading and reloading shall be borne by the consignors.

684. If, without the happening of any of the cases of *vis major*, expressed in the preceding article, the freighter desires to unload his merchandise before arriving at the port of its destination, he shall pay the whole freight, the expenses of the call made at his request, and the damage caused to the other consignors, if any.

685. In affreightments of general cargo, any of the consignors may unload the merchandise before commencing its journey, on paying half the freight, the expense of stowing and restowing, and all other damage caused thereby to the other consignors.

---

[1]) This deposit must be effected as indicated in note 1, page 124.

686. Hecha la descarga y puesto el cargamento á disposición del consignatario, éste deberá pagar inmediatamente al capitán el flete devengado y los demás gastos de que fuere responsable dicho cargamento.

La capa deberá satisfacerse en la misma proporción y tiempo que los fletes, rigiendo en cuanto á ella todas las alteraciones y modificaciones á que éstos estuvieren sujetos.

687. Los fletadores y cargadores no podrán hacer, para el pago del flete y demás gastos, abandono de las mercaderías averiadas por vicio propio ó caso fortuito.

Procederá, sin embargo, el abandono si el cargamento consistiere en líquidos y se hubieren derramado, no quedando en los envases sino una cuarta parte de su contenido[1]).

§ 4.° *De la rescisión total ó parcial del contrato de fletamento.*

688. A petición del fletador podrá rescindirse el contrato de fletamento: 1.° Si antes de cargar el buque abandonare el fletamento, pagando la mitad del flete convenido; — 2.° Si la cabida del buque no se hallase conforme con la que figura en el certificado de arqueo, ó si hubiere error en la designación del pabellón con que navega; — 3.° Si no se pusiere ed buque á disposición del fletador en el plazo y forma convenidos; — 4.° Si, salido el buque á la mar, arribare al puerto de salida, por riesgo de piratas, enemigos ó tiempo contrario, y los cargadores convinieren en su descarga. En el 2.° y 3.er caso el fletante indemnizará al fletador de los perjuicios que se le irroguen. En el caso 4.° el fletante tendrá derecho al flete por entero del viaje de ida. Si el fletamento se hubiere ajustado por meses, pagarán los fletadores el importe libre de una mesada, siendo el viaje á un puerto del mismo mar, y dos, si fuere á mar distinto. De un puerto á otro de la Península é Islas adyacentes, no se pagará más que una mesada; — 5.° Si para reparaciones urgentes arribase el buque durante el viaje á un puerto, y prefirieren los fletadores disponer de las mercaderías.

Cuando la dilación no exceda de treinta días, pagarán los cargadores por entero el flete de ida.

Si la dilación excediere de treinta días, sólo pagarán el flete proporcional á la distancia recorrida por el buque.

689. Á petición del fletante podrá rescindirse el contrato de fletamento: 1.° Si el fletador, cumplido el término de las sobreestadías, no pusiere la carga al costado. En este caso el fletador deberá satisfacer la mitad del flete pactado, además de las estadías y sobreestadías devengadas; — 2.° Si el fletante vendiere el buque antes de que el fletador hubiere empezado á cargarlo, y el comprador lo cargare por su cuenta. En este caso el vendedor indemnizará al fletador de los perjuicios que se le irroguen.

Si el nuevo propietario del buque no lo cargare por su cuenta, se respetará el contrato de fletamento indemnizando el vendedor al comprador, si aquél no le instruyó del fletamento pendiente al tiempo de concertar la venta.

690. El contrato de fletamento se rescindirá, y se extinguirán todas las acciones que de él se originan, si, antes de hacerse á la mar el buque desde el puerto de salida, ocurriere alguno de los casos siguientes: 1.° La declaración de guerra ó interdicción del comercio con la Potencia á cuyos puertos debía el buque hacer su viaje; — 2.° El estado de bloqueo del puerto á donde iba aquél destinado, ó peste que sobreviniere después del ajuste; — 3.° La prohibición de recibir en el mismo punto las mercaderías del cargamento del buque; — 4.° La detención indefinida, por embargo del buque de orden del Gobierno, ó por otra causa independiente de la voluntad del naviero; — 5.° La inhabilitación del buque para navegar, sin culpa del capitán ó naviero. La descarga se hará por cuenta del fletador.

[1]) Si el fletante no estuviere conforme, los cargadores solicitarán del juez que se proceda con intervención de aquel al peso ó medición de las vasijas que contengan los líquidos que se trate de abandonar; y si del peso ó medición resultare que las vasijas *han perdido cuando menos las tres cuartas partes de su contenido* mandará que se entreguen al fletante (artículos 2156 y 2157 de la L. Enj. c.) — Aun cuando el texto del art. 2157 dice *han perdido más de la mitad de su contenido,* procede su rectificación en los términos indicados porque el artículo 687 del vigente Cód. de com. ha rectificado en esta parte la doctrina del art. 790 del antiguo que hablaba de la pérdida de más de la mitad del liquido.

686. When the discharge has been effected and the cargo placed at the disposal of the consignee, the latter must immediately pay the master the earned freight and the other expenses for which the cargo is liable.

The hat-money must be paid in the same proportion and at the same time as the freights, and all the alterations and modifications to which the latter are subject shall govern the former.

687. The freighters and consignors cannot abandon the merchandise which has been damaged by its own defect or by a fortuitous event, for payment of the freight and other expenses.

Nevertheless, abandonment shall take place if the cargo consists of liquids and they have been spilt, and no more than one fourth part of their contents is left in their receptacles[1]).

§ 4. *Total or partial rescission of the contract of affreightment.*

688. The contract of affreightment may be rescinded on the application of the freighter: 1. If he abandons the affreightment before the loading of the vessel, and pays half the agreed freight; — 2. If the capacity of the vessel does not agree with that which figures in the certificate of measurement, or there is a mistake in the designation of the flag under which she sails; — 3. If the vessel is not placed at the disposal of the freighter at the time and in the way agreed; — 4. If, after having put to sea, the vessel returns to her port of sailing, through risk of pirates, enemies or adverse weather, and the consignors agree to her discharge. In cases 2 and 3 the shipowner shall compensate the freighter for the damage caused him. In case 4, the shipowner shall be entitled to the whole freight for the outward voyage. If the affreightment has been agreed by months, the freighters shall pay the clear amount for one month, if the voyage is to a port in the same sea, and for two if it is to a different sea. Only one month shall be paid for if the voyage is from one port to another in the Peninsula and the adjacent Isles; — 5. If during the voyage the vessel arrives at a port for the purpose of urgent repairs, and the freighters prefer to dispose of the merchandise.

When the delay does not exceed thirty days, the consignors shall pay the whole outward freight.

If the delay exceeds thirty days, they shall only pay the freight in proportion to the distance traversed by the vessel.

689. The contract of affreightment may be rescinded on the application of the shipowner: 1. If at the expiration of the time of the extra lay-days, the freighter does not place the cargo alongside. In this case the freighter must pay half the agreed freight, besides half of the lay-days and extra lay-days expired; — 2. If the shipowner sells the vessel before the freighter has begun to load her, and the buyer loads her on his own account. In this case, the seller shall compensate the freighter for the damage caused him.

If the new owner of the vessel does not load her on his own account, the contract of affreightment shall be respected, and the seller shall compensate the buyer, if the former did not inform the latter of the pending affreightment at the time of arranging the sale.

690. The contract of affreightment shall be rescinded and all rights of action arising therefrom shall be extinguished, if any of the following events occur before the vessel puts to sea from her port of sailing: 1. Declaration of war or interdiction of commerce with the Power to whose ports the vessel has to sail; — 2. A state of blockade of the port to which she was destined, or the breaking out of plague after the agreement; — 3. Prohibition of receiving in the same place the merchandise shipped by the vessel; — 4. Indefinite detention, through arrest of the vessel by order of the Government through for another cause independent of the will of the managing owner; — 5. Unseaworthiness of the vessel, without the *culpa* of the master or managing owner. The discharge shall be borne by the freighter.

[1]) If the shipowner does not agree, the consignors shall apply to the judge that proceedings for weighing or measuring the receptacles which contain the liquids, intended to be abandoned, should take place with his intervention; and if it is proved by the weighing or measuring that the receptacles *have lost at least three fourth parts of their contents*, he shall order that they be delivered to the shipowner (arts. 2156 and 2157 of the Law of Civil Procedure). — Although the text of article 2157 says *have lost more than half their contents*, it must be corrected in the terms indicated, because art. 687 of the present Code of Commerce corrected the doctrine of art. 790 of the old Code, which spoke of the loss of more than half of the liquid.

691. Si el buque no pudiere hacerse á la mar por cerramiento del puerto de salida ú otra causa pasajera, el fletamento subsistirá, sin que ninguna de las partes tenga derecho á reclamar perjuicios.

Los alimentos y salarios de la tripulación serán considerados avería común.

Durante la interrupción, el fletador podrá por su cuenta descargar y cargar á su tiempo las mercaderías, pagando estadías si demorare la recarga después de haber cesado el motivo de la detención.

692. Quedará rescindido parcialmente el contrato de fletamento, salvo pacto en contrario, y no tendrá derecho el capitán más que al flete de ida, si, por ocurrir durante el viaje la declaración de guerra, cerramiento de puertos ó interdicción de relaciones comerciales, arribare el buque al puerto que se le hubiere designado para este caso en las instrucciones del fletador.

§ 5.° *De los pasajeros en los viajes por mar.*

693. No habiéndose convenido el precio del pasaje, el juez ó tribunal le fijará sumariamente, previa declaración de peritos[1]).

694. Si el pasajero no llegare á bordo á la hora prefijada, ó abandonare el buque sin permiso del capitán cuando éste estuviere pronto á salir del puerto, el capitán podrá emprender el viaje y exigir el precio por entero.

695. El derecho al pasaje, si fuese nominativo, no podrá transmitirse sin la aquiescencia del capitán ó consignatario.

696. Si antes de emprender el viaje el pasajero muriese, sus herederos no estarán obligados á satisfacer sino la mitad del pasaje convenido.

Si estuvieren comprendidos en el precio convenido los gastos de manutención, el juez ó tribunal, oyendo á los peritos si lo estimare conveniente, señalará la cantidad que ha de quedar en beneficio del buque[2]).

En el caso de recibirse otro pasajero en lugar del fallecido, no se deberá abono alguno por dichos herederos.

697. Si antes de emprender el viaje se suspendiese por culpa exclusiva del capitán ó naviero, los pasajeros tendrán derecho á la devolución del pasaje y al resarcimiento de daños y perjuicios; pero si la suspensión fuera debida á caso fortuito ó de fuerza mayor ó á cualquier otra causa independiente del capitán ó naviero, los pasajeros sólo tendrán derecho á la devolución del pasaje.

698. En caso de interrupción del viaje comenzado, los pasajeros sólo estarán obligados á pagar el pasaje en proporción á la distancia recorrida, y sin derecho á resarcimiento de daños y perjuicios si la interrupción fuere debida á caso fortuito ó de fuerza mayor, pero con derecho á indemnización si la interrupción consistiese exclusivamente en el capitán. Si la interrupción procediese de la inhabilitación del buque, y el pasajero se conformase con esperar la reparación, no podrá exigírsele ningún aumento de precio del pasaje, pero será de su cuenta la manutención durante la estadía.

En caso de retardo de la salida del buque, los pasajeros tienen derecho á permanecer á bordo y á la alimentación por cuenta del buque, á menos que el retardo sea debido á caso fortuito ó de fuerza mayor. Si el retardo excediera de diez días, tendrán derecho los pasajeros que lo soliciten á la devolución del pasaje; y si fuera debido exclusivamente á culpa del capitán ó naviero, podrán además reclamar resarcimiento de daños y perjuicios.

El buque exclusivamente destinado al transporte de pasajeros debe conducirlos directamente al puerto ó puertos de su destino, cualquiera que sea el número de pasajeros, haciendo todas las escalas que tenga marcadas en su itinerario.

699. Rescindido el contrato antes ó después de emprendido el viaje, el capitán tendrá derecho á reclamar lo que hubiere suministrado á los pasajeros[3]).

---

[1]) El nombramiento de los peritos habrá de hacerse en la forma que previene la L. de Enj. c. á tenor de lo preceptuado para los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio que puede verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.».

[2]) Aun cuando este caso no estaba previsto en la L. de Enj. c. porque el antiguo Cód. de com. no trataba del contrato de pasaje, es de aplicación al mismo la doctrina del artículo 2168 de dicha Ley que puede verse en la nota 1, pág. 187.

[3]) En todas las cuestiones que se susciten entre el capitán y los pasajeros tanto por lo provenido en este artículo como en los dos anteriores es de aplicación lo que hemos dicho respecto al 696 en la nota anterior.

691. If the vessel is unable to put to sea through the port of sailing being closed, or from another passing cause, the affreightment shall subsist, and none of the parties shall be entitled to claim damages.

The maintenance and pay of the crew shall be considered general average.

During the interruption, the freighter may on his own account unload and duly load the merchandise, paying the lay-days if he delays the reloading after the reason for the detention has ceased.

692. Saving an agreement to the contrary, a contract of affreightment shall be partially rescinded, and the master shall not be entitled to more than the outward freight, if, by a declaration of war, or closing of ports or interdiction of commercial relations happening during the voyage, the vessel arrives at the port which has been designated for this event in the instructions of the freighter.

§ 5. *Passengers in sea voyages.*

693. If the price of the passage has not been agreed, the judge or tribunal shall fix it summarily, on the previous verbal evidence of experts[1]).

694. If the passenger does not arrive on board at the prefixed hour, or leaves the vessel without the permission of the master, when the latter is ready to leave the port, the master may begin the voyage and demand the whole fare.

695. The right of passage, if it is nominal, cannot be transferred without the acquiescence of the master or consignee.

696. If a passenger dies before the commencement of the voyage, his heirs shall only be obliged to pay half the agreed passage money.

If the expenses of maintenance were included in the agreed price, the judge or tribunal shall decide the sum for the profit of the vessel, after hearing experts if he thinks fit[2]).

If another passenger is received in the stead of the deceased, no payment shall be due by the said heirs.

697. If the voyage is suspended before its commencement through the exclusive *culpa* of the master or managing owner, the passengers shall be entitled to the return of the passage money and compensation for damage; but if the suspension was due to a fortuitous event or *vis major* or any other cause independent of the master or managing owner, the passengers shall only be entitled to the return of the passage money.

698. In case of interruption of a commenced voyage, the passengers shall only be obliged to pay the passage money in proportion to the distance traversed, and without right to compensation for damage, if the interruption was due to fortuitous event or *vis major*, but with right to compensation if the interruption consisted exclusively in (the *culpa* of) the master. If the interruption arises from the unseaworthiness of the vessel, and the passenger agrees to await the repair, no increase in the price of the passage can be demanded of him, but his maintenance during the delay shall be borne by himself.

If the departure of the vessel is delayed, the passengers are entitled to remain on board and to food at the expense of the vessel, unless the delay is due to a fortuitous event or *vis major.* If the delay exceeds ten days, the passengers shall be entitled to apply for the return of the passage money; and if it is due exclusively to the *culpa* of the master or managing owner, they may also claim compensation for damage.

A vessel intended exclusively for the carriage of passengers, must carry them direct to the port or ports of her destination, whatever be the number of the passengers, and shall make all the calls which she has marked on her itinerary.

699. If the contract is rescinded before or after the commencement of the voyage, the master shall be entitled to claim for what he has supplied to the passengers[3]).

---

[1]) The appointment of the experts must be made as provided in the Law of Civil Procedure with respect to acts of voluntary jurisdiction in matters of commerce, which may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

[2]) Although this case was not within the provisions of the Law of Civil Procedure, because the old Code of Commerce did not treat of the contract of passage, the doctrine of art. 2168 of the said Law applies thereto, which is to be seen in note 1, page 187.

[3]) What we have said with respect to art. 696 in the previous note, applies to all questions which arise between the master and the passengers under the provisions both of this and the two preceding articles.

700. En todo lo relativo á la conservación del orden y policía á bordo, los pasajeros se someterán á las disposiciones del capitán, sin distinción alguna.

701. La conveniencia ó el interés de los viajeros no obligarán ni facultarán al capitán para recalar ni para entrar en puntos que separen al buque de su derrota, ni para detenerse, en los que deba ó tuviese precisión de tocar, más tiempo que el exigido por las atenciones de la navegación.

702. No habiendo pacto en contrario, se supondrá comprendida en el precio del pasaje la manutención de los pasajeros durante el viaje; pero si fuese de cuenta de éstos, el capitán tendrá obligación, en caso de necesidad, de suministrarles los víveres precisos para su sustento por un precio razonable.

703. El pasajero será reputado cargador en cuanto á los efectos que lleve á bordo, y el capitán no responderá de lo que aquél conserve bajo su inmediata y peculiar custodia, á no ser que el daño provenga de hecho del capitán ó de la tripulación.

704. El capitán, para cobrar el precio del pasaje y gastos de manutención, podrá retener los efectos pertenecientes al pasajero, y en caso de venta de los mismos[1]), gozará de preferencia sobre los demás acreedores, procediéndose en ello como si se tratase del cobro de los fletes.

705. En caso de muerte de un pasajero durante el viaje, el capitán estará autorizado para tomar respecto del cadáver las disposiciones que exijan las circunstancias, y guardará cuidadosamente los papeles y efectos que hallare á bordo pertenecientes al pasajero, observando cuanto dispone el caso 10 del art. 612 á propósito de los individuos de la tripulación[2]).

§ 6.° *Del conocimiento.*

706. El capitán y el cargador del buque tendrán obligación de extender el conocimiento, en el cual se expresará: 1.° El nombre, matrícula y porte del buque; — 2.° El del capitán, y su domicilio; — 3.° El puerto de carga y el de descarga; — 4.° El nombre del cargador; — 5.° El nombre del consignatario, si el conocimiento fuere nominativo; — 6.° La cantidad, calidad, número de los bultos y marcas de las mercaderías; — 7.° El flete y la capa contratados.

El conocimiento podrá ser al portador, á la orden ó á nombre de persona determinada, y habrá de firmarse dentro de las veinticuatro horas de recibida la carga á bordo, pudiendo el cargador pedir[3]) la descarga á costa del capitán, si éste no lo suscribiese, y, en todo caso, los daños y perjuicios que por ello le sobrevinieren.

707. Del conocimiento primordial se sacarán cuatro ejemplares de igual tenor, y los firmarán todos el capitán y el cargador. De éstos, el cargador conservará

---

[1]) La venta como consecuencia de la retención ha de hacerse judicialmente en los términos indicados en la nota 2, pág. 186.

[2]) El Regl. Nav. Merc. contiene respecto á los pasajeros las disposiciones siguientes: — Art. **17.** Todo buque mercante despachado para Ultramar debe llevar médico y capellán en los casos siguientes: — *A*) Cuando el número de tripulantes de capitán á paje exceda de 40. — *B*) Cuando sumados los tripulantes y pasajeros excedan de 70. — Los capitanes generales de los departamentos podrán autorizar á los comandantes de Marina para que dispensen á los buques dichos de llevar capellán cuando no los haya disponibles en la localidad, pero nunca de médico. — **41.** El número de pasajeros que pueden conducir los buques mercantes según su porte y puntos á que se dirijan, es el de uno por cada tonelada y media del espacio vacío de sus bodegas, si en la navegación han de doblar los cabos de Hornos ó de Buena Esperanza, y de uno por cada tonelada de iguales espacios en las demás navegaciones, entendiéndose que sólo podrán ir en cámaras, antecámaras ó camarotes tantos como literas fijas hubiere establecidas. — **42.** Todos los pasajeros deben ir provistos de sus cédulas personales; los funcionarios del Gobierno de sus pasaportes, y los que se dirijan á puntos no españoles de Ultramar, de un permiso legalizado de los padres, tutores ó maridos, siendo menores ó mujeres casadas, y de un certificado igual al inserto á continuación del art. 25 si se halla en las condiciones de edad que el mismo determina para los tripulantes. — Las autoridades de Marina de los puertos son los encargados de velar por el cumplimiento de este artículo y el anterior y remitir á los capitanes generales de los departamentos una relación de los pasajeros embarcados en cada buque para el extranjero ó Ultramar. — Todos los buques mercantes españoles están obligados á admitir el pasaje oficial que ordenaren los comandantes de Marina aun en el caso de no satisfacer en el acto el precio del pasaje.

[3]) Esta petición habrá de hacerse al juez en la forma prevenida en el artículo 2168 de la L. de Enj. c. que puede verse en la nota 1, pág. 187.

700. In all that relates to the preservation of order on board and to policing the vessel, the passengers shall submit themselves to the orders of the master without any distinction whatever.

701. The convenience or interest of the passengers shall not oblige or empower the master to call at or enter places which cause the vessel to deviate from her route, nor to be detained in those places where she ought or is compelled to touch for more time than that required for the affairs of the navigation.

702. If there is no agreement to the contrary, the maintenance of the passengers during the voyage shall be presumed to be included in the price of the passage; but if it is borne by the passengers, the master, in case of necessity, shall be bound to supply them with the provisions necessary for their sustenance at a reasonable price.

703. A passenger shall be considered a consignor as regards the effects which he brings on board, and the master shall not be liable for what the former keeps under his immediate and private custody, unless the damage arises from the act of the master or of the crew.

704. The master may retain the effects belonging to the passengers, for the purpose of recovering the price of the passage and the expenses of maintenance, and in case of sale thereof[1]), shall enjoy preference over the other creditors, and shall proceed in the matter as if it were a question of recovering freights.

705. In case of the death of a passenger during the voyage, the master shall be authorised to take steps with respect to the body, as required by the circumstances, and shall carefully guard the papers and effects which are on board and belong to the passenger, and shall observe the provisions of case 10 of article 612 regarding the members of the crew[2]).

§ 6. *The bill of lading.*

706. The master of the vessel and the consignor shall be obliged to write out a bill of lading, in which shall be stated: 1. The name, register and tonnage of the vessel; — 2. That of the master, and his address; — 3. The port of loading and that of discharge; — 4. The name of the consignor; — 5. The name of the consignee, if the bill of lading is nominal; — 6. The quantity, quality and number of the packages and marks on the merchandise; — 7. The contracted freight and hat-money.

The bill of lading may be to bearer or to the order or the name of a person certain, and must be signed within the twenty four hours of the reception of the cargo on board, the consignor having power to apply[3]) for the discharge at the cost of the master, if the latter does not sign it, and in every case, for the damage which has happened to him thereby.

707. Four copies of like tenor shall be made of the original bill of lading, and the master and the consignor shall sign them all. The consignor shall keep one of

---

[1]) The sale as a consequence of detention must be made by the court as indicated in note 2, page 186.

[2]) The Regulation of Merchant Navigation contains the following provisions with regard to passengers: — Art. **17.** Every merchant vessel dispatched oversea, must carry a doctor and chaplain in the following cases: — *A*) When the number of the crew from master to cabin boy exceeds 40. — *B*) When the combined crew and passengers exceed 70. — The Captains General of the Departments may authorise the Commandants of Marine to relieve the said vessels from carrying a chaplain, when there are none to be had in the locality, but never the doctor. — **41.** The number of passengers whom merchant vessels may carry according to their tonnage and the places to which they sail, is one for each ton and a half of vacant space in their holds, if they have to double Cape Horn or the Cape of Good Hope in the voyage, and one for each ton of the same space in other voyages, it being understood that only as many as there are fixed letters for can go in the cabins, steerage and berths. — **42.** All passengers must go provided with their personal *cédulas*; Government officials with their passports, and those who sail to oversea places which are not Spanish, with an authenticated permit of their parents, guardians or husbands, if they are minors or married women, and with a certificate, the same as that inserted in continuation of art. 25, if in the conditions as to age determined thereby with regard to the members of the crew. — The Marine authorities of the ports are charged to watch over the fulfilment of this and the preceding article, and to remit to the Captains General of the Departments a report of the passengers embarked on each vessel for abroad or oversea. — All Spanish merchant vessels are bound to allow official passages as ordered by the Commandants of Marine, even when the price of the passage is not paid at once.

[3]) This application must be made to the judge, as provided in art. 2168 of the Law of Civil Procedure, which may be seen in note 1, page 187.

uno y remitirá otro al consignatario; el capitán tomará dos, uno para sí y otro para el naviero.

Podrán extenderse además cuantos conocimientos estimen necesarios los interesados; pero cuando fueren á la orden ó al portador, se expresará en todos los ejemplares, ya sean de los cuatro primeros, ó de los ulteriores, el destino de cada uno, consignando si es para el naviero, para el capitán, para el cargador ó para el consignatario. Si el ejemplar destinado á este último se duplicare, habrá de expresarse en él esta circunstancia y la de no ser valedero sino en defecto del primero.

708. Los conocimientos al portador destinados al consignatorio serán transferibles por la entrega material del documento; y en virtud de endoso, los extendidos á la orden.

En ambos casos, aquel á quien se transfiera el conocimiento adquirirá sobre las mercaderías expresadas en él todos los derechos y acciones del cedente ó del endosante.

709. El conocimiento, formalizado con arreglo á las disposiciones de este título, hará fe entre todos los interesados en la carga y entre éstos y los aseguradores, quedando á salvo para los últimos la prueba en contrario.

710. Si no existiere conformidad entre los conocimientos, y en ninguno se advirtiere enmienda ó raspadura, harán fe contra el capitán ó el naviero y en favor del cargador ó el consignatario, los que éstos posean extendidos y firmados por aquél; y en contra del cargador ó consignatario y en favor del capitán ó naviero, los que éstos posean extendidos y firmados por el cargador.

711. El portador legítimo de un conocimiento, que deje de presentárselo al capitán del buque antes de la descarga, obligando á éste por tal omisión á que haga el desembarco y ponga la carga en depósito, responderá de los gastos de almacenaje y demás que por ello se originen.

712. El capitán no puede variar por sí el destino de las mercaderías. Al admitir esta variación á instancia del cargador, deberá recoger antes los conocimientos que hubiere expedido, so pena de responder del cargamento al portador legítimo de éstos.

713. Si antes de hacer la entrega del cargamento se exigiere al capitán nuevo conocimiento, alegando que la no presentación de los anteriores consiste en haberse extraviado ó en alguna otra causa justa, tendrá obligación de darlo, siempre se le afiance á su satisfacción el valor del cargamento; pero sin variar la consignación, y expresando en él las circunstancias prevenidas en el último párrafo del art. 707, cuando se trate de los conocimientos á que el mismo se refiere, bajo la pena, en otro caso, de responder de dicho cargamento si por su omisión fuese entregado indebidamente.

714. Si antes de hacerse el buque á la mar falleciere el capitán ó cesare en su oficio por cualquier accidente, los cargadores tendrán derecho á pedir al nuevo capitán la ratificación de los primeros conocimientos, y éste deberá darla, siempre que le sean presentados ó devueltos todos los ejemplares que se hubieran expedido anteriormente, y resulte, del reconocimiento de la carga, que se halla conforme con los mismos.

Los gastos que se originen del reconocimiento de la carga serán de cuenta del naviero, sin perjuicio de repetirlos éste contra el primer capitán, si dejó de serlo por culpa suya. No haciéndose tal reconocimiento, se entenderá que el nuevo capitán acepta la carga como resulte de los conocimientos expedidos.

715. Los conocimientos producirán acción sumarísima ó de apremio[1]), según los casos, para la entrega del cargamento y el pago de los fletes y gastos que hayan producido.

716. Si varias personas presentaren conocimientos al portador, ó á la orden, endosados á su favor, en reclamación de las mismas mercaderías, el capitán preferirá, para su entrega, á la que presente el ejemplar que hubiere expedido primeramente, salvo el caso de que el posterior lo hubiera sido por justificación del extravío de aquél y aparecieren ambos en manos diferentes.

En este caso, como en el de presentarse sólo segundos ó ulteriores ejemplares que se hubieran expedido sin esa justificación, el capitán acudirá al juez ó tribunal

[1]) Este procedimiento sumarísimo es el expuesto al hablar del procedimiento de apremio en negocios de comercio en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.»

these, and send another to the consignee; the master shall take two, one for himself and the other for the managing owner.

The interested parties may also write out as many bills of lading as they think necessary; but when they are to order or to bearer, it shall be stated on all the copies, whether the four first or the later copies, for whom each is intended, stating whether it is for the managing owner, for the master, for the consignor or for the consignee. If the copy intended for the last is in duplicate, this fact must be stated thereon and also that it is not valid except in default of the first.

708. Bills of lading to bearer intended for the consignee, shall be transferable by the manual delivery of the document; and those drawn to order, by virtue of indorsement.

In both cases, the transferee of the bill of lading shall acquire all the rights and rights of action of the assignor or of the indorser to the merchandise expressed therein.

709. A bill of lading drawn according to the provisions of this Title, shall have probatory force between all persons interested in the cargo and between them and the insurers, the latter being at liberty to give rebutting evidence.

710. If the bills of lading do not agree, and no alteration or erasure is noticed in any of them, those in the possession of the consignor or consignee, drawn and signed by the master or managing owner shall have probatory force against the latter and in favour of the former; and those in the possession of the master or managing owner, drawn and signed by the consignor, against the latter and the consignee and in favour of the former.

711. A lawful holder of a bill of lading, who fails to present it to the master of the vessel before the discharge, obliging him by such omission to unload the cargo and place it on deposit, shall be liable for the expenses of warehousing and the other expenses occasioned thereby.

712. A master cannot himself change the destination of the merchandise. On allowing this change at the instance of the consignor, he must previously collect all the bills of lading which he has issued, on pain of being liable for the cargo to the lawful holder of the bills.

713. If a fresh bill of lading is demanded of the master before making delivery of the cargo, on the allegation that the non-presentment of the previous bills was caused by their having strayed or by some other just cause, he shall be bound to give it, provided that the value of the cargo is guaranteed to his satisfaction; but without changing the consignment, and expressing therein the particulars set forth in the last paragraph of article 707, when dealing with bills of lading to which the same refers, on pain otherwise of being liable for the said cargo, if by his omission it should be wrongly delivered.

714. If the master dies before the vessel puts to sea or he ceases to command by any chance, the consignors shall be entitled to apply to the new master for the ratification of the first bills of lading, and he must give it, provided that all the copies which have been previously issued are presented to him or returned, and it appears from the examination of the cargo that it agrees therewith.

The expenses caused by the examination of the cargo shall be borne by the managing owner, without prejudice to his claiming them over against the first master, if he ceased to be so by his own *culpa*. If that examination is not made, it shall be understood that the new master accepts the cargo as shown by the issued bills of lading.

715. Bills of lading shall produce the most summary right of action or that of *apremio*[1]), as may be, for the delivery of the cargo, and the payment of the freights and expenses which they have occasioned.

716. If several persons present bills of lading to bearer, or to order, indorsed in their favour, and claim the same merchandise, the master, for the purpose of its delivery, shall prefer the one who presents the copy which was issued as the original, except when a later copy has been issued on proof of the loss of the former, and they appear in different hands.

In this case, as in the case when only second or later copies are presented, which have been issued without this proof, the master shall resort to the judge or tribunal

---

[1]) This very summary proceeding is explained in speaking of the proceeding of *apremio* in commercial matters in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

para que verifique el depósito de las mercaderías[1]) y se entreguen por su mediación á quien sea procedente.

717. La entrega del conocimiento producirá la cancelación de todos los recibos provisionales de fecha anterior, dados por el capitán ó sus subalternos en resguardo de las entregas parciales que les hubieren hecho del cargamento.

718. Entregado el cargamento, se devolverán al capitán los conocimientos que firmó, ó al menos el ejemplar bajo el cual se haga la entrega, con el recibo de las mercaderías en el mismo.

La morosidad del consignatario le hará responsable de los perjuicios que la dilación pueda ocasionar al capitán.

Sección segunda. Del contrato á la gruesa, ó préstamo á riesgo marítimo.

719. Se reputará préstamo á la gruesa ó á riesgo marítimo, aquel en que, bajo cualquiera condición, dependa el reembolso de la suma prestada y el premio por ella convenido, del feliz arribo á puerto de los efectos sobre que esté hecho, ó del valor que obtengan en caso de siniestro.

720. Los contratos á la gruesa podrán celebrarse: 1.° Por escritura pública; — 2.° Por medio de póliza firmada por las partes y el corredor que interviniere; — 3.° Por documento privado[2]).

De cualquiera de estas maneras que se celebre el contrato, se anotará en el certificado de inscripción del buque y se tomará de él razón en el Registro Mercantil, sin cuyos requisitos los créditos de este origen no tendrán respecto á los demás la preferencia que, según su naturaleza, les corresponda, aunque la obligación será eficaz entre los contratantes.

Los contratos celebrados durante el viaje, se regirán por lo dispuesto en los artículos 583 y 611, y surtirán efecto respecto de terceros desde su otorgamiento, si fueren inscritos en el Registro Mercantil del puerto de la matrícula del buque antes de transcurrir los ocho días siguientes á su arribo. Si transcurrieran los ocho días sin haberse hecho la inscripción en el Registro Mercantil, los contratos celebrados durante el viaje de un buque no surtirán efecto respecto de terceros, sino desde el día y fecha de la inscripción.

Para que las pólizas de los contratos celebrados con arreglo al número 2.°, tengan fuérza ejecutiva, deberán guardar conformidad con el registro del corredor que intervino en ellos. En los celebrados con arreglo al número 3.°, precederá el reconocimiento de la firma[3]).

Los contratos que no consten por escrito, no producirán acción en juicio.

721. En el contrato á la gruesa se deberá expresar: 1.° La clase, nombre y matrícula del buque; — 2.° El nombre, apellido y domicilio del capitán; — 3.° Los nombres, apellidos y domicilios del que da y del que toma el préstamo; — 4.° El capital del préstamo y el premio convenido; — 5.° El plazo del reembolso; — 6.° Los objetos pignorados á su reintegro; — 7.° El viaje por el cual se corra el riesgo.

722. Los contratos podrán extenderse á la orden, en cuyo caso serán transferibles por endoso, y adquirirá el cesionario todos los derechos y correrá todos los riesgos que correspondieran al endosante.

723. Podrán hacerse préstamos en efectos y mercaderías, fijándose su valor para determinar el capital del préstamo.

724. Los préstamos podrán constituirse conjunta ó separadamente: 1.° Sobre el casco del buque; — 2.° Sobre el aparejo; — 3.° Sobre los pertrechos, víveres y combustible; — 4.° Sobre la máquina, siendo el buque de vapor; — 5.° Sobre mercaderías cargadas.

Si se constituyesen sobre el casco del buque, se entenderán además afectos á la responsabilidad del préstamo el aparejo, pertrechos y demás efectos, víveres, combustible, máquinas de vapor y los fletes ganados en el viaje del préstamo.

[1]) Este depósito habrá de practicarse en la forma indicada en la nota 1, pág. 124.

[2]) En cualquiera de estas tres formas estará siempre sujeto al pago del impuesto proporcional del timbre correspondiente á su cuantia con sujeción á la escala del art. 15 de la L. del T. que puede verse en la nota 1, pág. 106 (art. 59 y 176 de la L. del T.).

[3]) La clase de documentos que producen acción ejecutiva puede verse al tratar del juicio ejecutivo en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc».

in order that he may effect the deposit of the merchandise[1]) and that it may be delivered to the proper person through this means.

717. The giving of a bill of lading shall cause the cancellation of all the provisional receipts of an earlier date which have been given by the master or his subordinates as receipts for the partial deliveries of the cargo which have taken place.

718. On delivery of the cargo, the bills of lading which he signed shall be returned to the master, or at least the copy on which the delivery is made, with the receipt for the merchandise thereon.

The delay of the consignee shall make him liable for the damage which the delay may occasion the master.

Second Section. The bottomry contract, or loan on maritime risk.

719. A loan shall be considered a bottomry loan or one on maritime risk, when, under whatever condition, it depends for the repayment of the sum lent and the premium agreed therefor, on safe arrival at the port of the effects on which it is made, or on the value which they fetch in case of casualty.

720. Bottomry contracts may be made: 1. By notarial instrument; — 2. By means of a contract signed by the parties and the broker who takes part therein; — 3. By a private document[2]).

In whichever of these modes the contract is made, it shall be noted on the certificate of registration of the vessel and shall be entered on the Mercantile Register, without which requisites the credits arising thereform shall not have the preference over the other credits which belongs to them by their nature, although the obligation shall be valid as between the contractors.

Contracts made during a voyage shall be governed by the provisions of articles 583 and 611, and shall take effect as regards third persons from their execution, if they are inscribed in the Mercantile Register of the port of the register of the vessel before the expiration of the eight days following her arrival. If the eight days expire without the inscription having been made in the Mercantile Register, the contracts made during the voyage of a vessel shall not take effect with respect to third persons, except from the day and date of the inscription.

In order that the written contracts made in accordance with No. 2, may have executive force, they must be in conformity with the register book of the broker who took part therein. In those made in accordance with No. 3, judicial verification of the signature shall precede[3]).

Contracts which do not appear in writing shall not give rise to an action at law.

721. In a bottomry contract must be stated: 1. The class, number and register of the vessel; — 2. The name, surname and address of the master; — 3. The names, surnames and addresses of the giver and the taker of the loan; — 4. The principal of the loan and the agreed premium; — 5. The time for repayment; — 6. The objects pledged to repayment; — 7. The voyage for which the risk is run.

722. The contracts may be drawn to order, in which case they shall be transferable by indorsement, and the assignee shall acquire all the rights and shall run all the risks which affect the indorser.

723. Loans may be made on effects and merchandise, and their value must be fixed in order to determine the principal of the loan.

724. Loans may be made jointly or separately: 1. On the hull of the vessel; — 2. On the tackle; — 3. On the stores, provisions and fuel; — 4. On the engines, if the vessel is a steamer; — 5. On the merchandise on board.

If it is constituted on the hull of the vessel, the tackle, stores and other effects, provisions, fuel, steam engines and the freights earned on the voyage of the loan, shall be understood as likewise affected to the liability for the loan.

---

[1]) This deposit must be effected as indicated in note 1, page 124.

[2]) In all these three ways, it will always be subject to payment of the proportional stamp duty, according to its amount with relation to the scale of art. 15 of the Stamp Act, which may be seen in note 1, page 106 (art. 59 and 176 of the Stamp Act).

[3]) The class of documents which give rise to an executive action may be seen in dealing with executive action in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

Si se hiciere sobre la carga, quedará afecto al reintegro todo cuanto la constituya; y si sobre un objeto particular del buque ó de la carga, sólo afectará la responsabilidad al que concreta y determinadamente se especifique.

725. No se podrá prestar á la gruesa sobre los salarios de la tripulación ni sobre las ganancias que se esperen.

726. Si el prestador probare que prestó mayor cantidad que la del valor del objeto sobre que recae el préstamo á la gruesa, por haber empleado el prestatario medios fraudulentos, el préstamo será válido sólo por la cantidad en que dicho objeto se tase pericialmente.

El capital sobrante se devolverá con el interés legal[1]) por todo el tiempo que durase el desembolso.

727. Si el importe total del préstamo para cargar el buque, no se empleare en la carga, el sobrante se devolverá antes de la expedición.

Se procederá de igual manera con los efectos tomados á préstamo, si no se hubieren podido cargar.

728. El préstamo que el capitán tomare en el punto de residencia de los propietarios del buque, sólo afectará á la parte de éste que pertenezca al capitán, si no hubieren dado su autorización expresa ó intervenido en la operación los demás propietarios ó sus apoderados.

Si alguno ó algunos de los propietarios fueren requeridos para que entreguen la cantidad necesaria á la reparación ó aprovisionamiento del buque, y no lo hicieren dentro de veinticuatro horas, la parte que los negligentes tengan en la propiedad quedará afecta, en la debida proporción, á la responsabilidad del préstamo.

Fuera de la residencia de los propietarios, el capitán podrá tomar préstamos conforme á lo dispuesto en los artículos 583 y 611.

729. No llegando á ponerse en riesgo los efectos sobre que se toma dinero, el contrato quedará reducido á un préstamo sencillo, con obligación en el prestatario de devolver capital é intereses al tipo legal[2]), si no fuere menor el convenido.

730. Los préstamos hechos durante el viaje, tendrán preferencia sobre los que se hicieron antes de la expedición del buque, y se graduarán por el orden inverso al de sus fechas.

Los préstamos para el último viaje, tendrán preferencia sobre los préstamos anteriores.

En concurrencia de varios préstamos hechos en el mismo puerto de arribada forzosa y con igual motivo, todos se pagarán á prorrata.

731. Las acciones correspondientes al prestador se extinguirán con la pérdida absoluta de los efectos sobre que se hizo el préstamo, si procedió de accidente de mar en el tiempo y durante el viaje designados en el contrato, y constando la existencia de la carga á bordo; pero no sucederá lo mismo si la pérdida provino de vicio propio de la cosa, ó sobrevino por culpa ó malicia del prestatario, ó por baratería del capitán, ó si fué causada por daños experimentados en el buque á consecuencia de emplearse en el contrabando, ó si procedió de cargar las mercaderías en buque diferente del que se designó en el contrato, salvo si este cambio se hubiera hecho por causa de fuerza mayor.

La prueba de la pérdida incumbe al que recibió el préstamo, así como también la de la existencia en el buque de los efectos declarados al prestador como objeto de préstamo.

732. Los prestadores á la gruesa soportarán á prorrata de su interés respectivo las averías comunes que ocurran en las cosas sobre que se hizo el préstamo.

En las averías simples, á falta de convenio expreso de los contratantes, contribuirá también por su interés respectivo el prestador á la gruesa, no perteneciendo á las especies de riesgos exceptuados en el artículo anterior.

733. No habiéndose fijado en el contrato el tiempo por el cual el mutuante correrá el riesgo, durará, en cuanto al buque, máquinas, aparejo y pertrechos, desde el momento de hacerse éste á la mar hasta el de fondear en el puerto de su destino, y, en cuanto á las mercaderías, desde que se carguen en la playa ó muelle del puerto de la expedición hasta descargarlas en el de consignación.

---

1) Este interés es el del 5%. (Véase la nota 5, pág. 131.)

2) Véase la nota anterior.

If it is made on the cargo, everything which constitutes the cargo shall be affected to the repayment; and if on a particular object of the vessel or cargo, the liability shall only affect what is concretely and definitively specified.

725. A bottomry loan cannot be made on the pay of the crew or on the profits which they expect.

726. If the lender proves that he lent a greater amount than that of the value of the object affected by the bottomry loan, through the borrower having made use of fraudulent means, the loan shall only be valid for the sum at which the said object is valued by experts.

The surplus principal shall be returned with legal interest[1]) for all the time that the disbursement lasted.

727. If the total amount of a loan for loading a vessel is not employed in the loading, the surplus shall be returned before the departure.

The same shall take place with regard to goods pledged to the loan, if it has not been possible to load them.

728. A loan effected by a master in the place of residence of the owners of the vessel, shall only affect that part thereof which belongs to the former, if the other owners or their attorneys have not given their express authorisation or taken part in the operation.

If any or some of the owners have been required to pay the amount necessary for the repairing or provisioning of the vessel, and have not done so within twenty four hours, the share of the ownership which belongs to those who so neglect shall be affected in due proportion to the liability for the loan.

Away from the residence of the owners, the master may effect loans according to the provisions of articles 583 and 611.

729. If the effects on which the money is borrowed do not become subject to risks, the contract shall be reduced to a simple loan, with an obligation on the borrower to return the principal and interest at the legal rate[2]), if the agreed rate is not less.

730. Loans made during a voyage shall have preference over those which are made before the departure of the vessel, and shall be classified in the inverse order of their dates.

Loans for the last voyage shall have preference over prior loans.

If there are several loans made at a port of refuge and for the same reason, they shall all be paid *pro rata*.

731. The rights of action possessed by the lender shall be extinguished by the absolute loss of the effects on which the loan was made, if it proceeded from a sea accident in the time and during the voyage defined in the contract and while the cargo remains on board; but the same shall not happen if the loss originated in the inherent defect of the thing, or happened through the *culpa* or malice of the borrower or by barratry of the master, or was caused by damage suffered by the vessel in consequence of her being employed in contraband, or if it proceeded from shipping the merchandise on a vessel different from that designated in the contract, unless this change has been made by reason of *vis major*.

The proof of the loss lies on the borrower, as well as the proof of the existence on board of the effects declared to the lender as the subject-matter of the loan.

732. Lenders of a bottomry loan shall bear the general average suffered by the things on which the loan was made, in proportion to their respective interests.

In particular average, in default of an express agreement by the contractors, the lender of a bottomry loan shall likewise contribute in proportion to his interest, if it does not belong to the species of risk excepted by the preceding article.

733. If the time for which the lender shall run the risk is not fixed in the contract, it shall last, as regards the vessel, engines, tackle and stores, from the moment of putting to sea to that of anchoring in the port of her destination, and as regards the goods, from their being placed on the shore or wharf of the port of departure until they are discharged in the port of consignment.

---

[1]) This interest is 5% (see note 5, page 131).

[2]) See the preceding note.

734. En caso de naufragio, la cantidad afecta á la devolución del préstamo se reducirá al producto de los efectos salvados, deducidos los gastos de salvamento.

Si el préstamo fuese sobre el buque ó alguna de sus partes, los fletes realizados en el viaje para que aquél se haya hecho, responderán también á su pago en cuanto alcancen para ello.

735. Si en un mismo buque ó carga concurrieren préstamo á la gruesa y seguro marítimo, el valor de lo que fuere salvado se dividirá, en caso de naufragio, entre el mutuante y el asegurador, en proporción del interés legítimo de cada uno, tomando en cuenta, para esto, únicamente el capital, por lo tocante al préstamo, y sin perjuicio del derecho preferente de otros acreedores, con arreglo al art. 580.

736. Si en el reintegro del préstamo hubiere demora por el capital y sus premios, sólo el primero devengará rédito legal[1]).

Sección tercera. De los seguros marítimos.[2])

§ 1.° *De la forma de este contrato.*

737. Para ser válido el contrato de seguro marítimo, habrá de constar por escrito en póliza firmada por los contratantes[3]).

Esta póliza se extenderá y firmará por duplicado reservándose un ejemplar cada una de las partes contratantes.

738. La póliza del contrato de seguro contendrá, además de las condiciones que libremente consignen los interesados, los requisitos siguientes: 1.° Fecha del contrato, con expresión de la hora en que queda convenido; — 2.° Nombres, apellidos y domicilios del asegurador y asegurado; — 3.° Concepto en que contrata el asegurado, expresando si obra por sí ó por cuenta de otro; En este caso, el nombre, apellidos y domicilio de la persona en cuyo nombre hace el seguro; — 4.° Nombre, puerto, pabellón y matrícula del buque asegurado ó del que conduzca los efectos asegurados; — 5.° Nombre, apellido y domicilio del capitán; — 6.° Puerto ó rada en que han sido ó deberán ser cargadas las mercaderías aseguradas; — 7.° Puerto de donde el buque ha partido ó debe partir; — 8.° Puertos ó radas en que el buque debe cargar, descargar ó hacer escalas por cualquier motivo; — 9.° Naturaleza y calidad de los objetos asegurados; — 10.° Número de los fardos ó bultos de cualquier clase, y sus marcas, si las tuvieren; — 11.° Época en que deberá comenzar y terminar el riesgo; — 12.° Cantidad asegurada; — 13.° Precio convenido por el seguro, y lugar, tiempo y forma de su pago; — 14.° Parte del premio que corresponda al viaje de ida y al de vuelta, si el seguro fuere á viaje redondo; — 15.° Obligación del asegurador de pagar el daño que sobrevenga á los efectos asegurados; — 16.° El lugar, plazo y forma en que habrá de realizarse el pago.

739. Los contratos y pólizas de seguro que autoricen los agentes consulares en el extranjero, siendo españoles los contratantes ó alguno de ellos, tendrán igual valor legal que si se hubieren verificado con intervención de corredor.

740. En un mismo contrato y en una misma póliza podrán comprenderse el seguro del buque y el de la carga, señalando el valor de cada cosa, y distinguiendo las cantidades aseguradas sobre cada uno de los objetos, sin cuya expresión será ineficaz el seguro.

Se podrá también en la póliza fijar premios diferentes á cada objeto asegurado. Varios aseguradores podrán suscribir una misma póliza.

---

1) Véase la nota 1, pág. 194.

2) Estas empresas de seguros pagarán, á tenor de lo mandado en la Ley de 27 de marzo de 1900 y con arreglo á la tarifa 3.ª de la misma, el 0,50% de las primas de seguros nuevos ó antiguos que efectuaren en España.

3) Estas pólizas no están sujetas al pago del impuesto del timbre porque este lo satisfacen las compañías ó empresas á razón de 20 céntimos de peseta por cada mil pesetas de capital asegurado contra los riesgos marítimos. En cuanto á los seguros marítimos por solo un viaje, satisfarán de una sola voz 10 céntimos por cada mil pesetas de capital asegurado. En los casos en que el importe del impuesto ó la fracción del mismo no llegue á 5 céntimos, se considerará como de esta cantidad. — Las obligaciones que con este motivo impone el artículo 177 de la L. del T. á las empresas aseguradoras pueden verse en la nota 1, pág. 146. — Las sociedades extranjeras quedan obligadas á satisfacer el timbre con sujeción al mismo tipo por los contratos que realicen en España (art. 178 de la L. del T.).

734. In case of shipwreck, the amount affected to the return of the loan shall be reduced to the proceeds of the salved effects, after deducting the expenses of salvage.

If the loan was on the vessel or any part thereof, the freights paid on the voyage for which the loan was made, shall likewise be liable for its payment so far as they extend.

735. If there is a bottomry loan and a maritime insurance on the same vessel or cargo, the value of what is salved shall be divided, in case of shipwreck, between the lender and the insurer, in proportion to the lawful interest of each, taking into account, for this purpose, only the principal so far as the loan is concerned and without prejudice to the preferential right of other creditors, in accordance with article 580.

736. If there is any delay in repaying the principal and interest of the loan, the principal only shall earn legal premiums[1]).

Third Section. Marine insurance.[2])

§ 1. *The form of this contract.*

737. In order to be valid, the contract of marine insurance must be stated in writing in a policy signed by the contractors[3]).

This policy shall be drawn and signed in duplicate, each of the contracting parties keeping a copy.

738. The policy of the contract of insurance shall contain the following requisites, besides the terms which the interested persons state as they wish: 1. The date of the contract, stating the hour at which it was agreed; — 2. Names, surnames and addresses of the insurer and insured; — 3. The sense in which the assured contracts, stating whether he acts for himself or on account of another; In the latter case, the name, surname and address of the person in whose name he makes the insurance; — 4. Name, surname, and address of the master; — 5. Name, port, flag and register of the insured vessel or of that which carries the insured effects; — 6. Port or roadstead in which the insured merchandise has been or is to be loaded; — 7. Port whence the vessel has sailed or is to sail; — 8. Ports or roadsteads where the vessel is to load, discharge or call for any reason; — 9. Nature and quality of the insured objects; — 10. Number of the parcels or packages of every kind, and their marks, if any; — 11. Time at which the risk is to begin and end; — 12. Amount insured; — 13. Price agreed for the insurance, and place, time and form of its payment; — 14. The part of the premium which belongs to the outward and inward voyages, if the insurance is for the round voyage; — 15. Obligation of the insurer to pay the damage which happens to the insured effects; — 16. The place, time and form in which the payment has to be effected.

739. Contracts and policies of insurance authenticated by consular agents abroad, when the contractors or one of them are Spaniards, shall have the same legal value as if they had been made with the intervention of a broker.

740. In the same contract and in the same policy the insurance of the vessel and that of the cargo may be included, by stating the value of each thing, and distinguishing the amounts insured on each of the objects, and in the absence of this statement the insurance shall be inoperative.

Different premiums for each object insured may likewise be fixed in the policy.

Several insurers may sign the same policy.

---

1) See note 1, page 194.

2) As enacted by the Law of 27 March 1900, these insurance undertakings must pay, under tariff 3 thereof, 0,50% of the premiums of new or old insurances which are effected in Spain.

3) Those policies are not subject to the payment of stamp duty, because this is paid by the companies or undertakings at the rate of 20 céntimos for each thousand pesetas of principal insured against maritime risks. As regards maritime insurances for one voyage only, they must once pay 10 céntimos for each thousand pesetas of insured principal. In cases in which the amount of the tax or the fraction thereof does not reach 5 céntimos, it will be considered as of this amount. — The obligations imposed for this reason by art. 177 of the Stamp Act on insurance undertakings, may be seen in note 1, page 146. — Foreign companies are obliged to pay the duty at the same rate on contracts which they make in Spain (art. 178 of the Stamp Act).

741. En los seguros de mercaderías podrá omitirse la designación específica de ellas y del buque que haya de transportarlas, cuando no consten estas circunstancias al asegurado.

Si el buque en estos casos sufriere accidente de mar, estará obligado el asegurado á probar, además de la pérdida del buque, su salida del puerto de carga, el embarque por su cuenta de los efectos perdidos, y su valor, para reclamar la indemnización.

742. Las pólizas del seguro podrán extenderse á la orden del asegurado, en cuyo caso serán endosables.

§ 2.° *De las cosas que pueden ser aseguradas, y de su evaluación.*

743. Podrán ser objeto del seguro marítimo: 1.° El casco del buque en lastre ó cargado, en puerto ó en viaje; — 2.° El aparejo; — 3.° La máquina, siendo el buque de vapor; — 4.° Todos los pertrechos y objetos que constituyen el armamento; — 5.° Víveres y combustible; — 6.° Las cantidades dadas á la gruesa; — 7.° El importe de los fletes y el beneficio probable; — 8.° Todos los objetos comerciales sujetos al riesgo de navegación, cuyo valor pueda fijarse en cantidad determinada.

744. Podrán asegurarse todos ó parte de los objetos expresados en el artículo anterior, junta ó separadamente, en tiempo de paz ó de guerra, por viaje ó á término, por viaje sencillo ó por viaje redondo, sobre buenas ó malas noticias.

745. Si se expresare genéricamente en la póliza que el seguro se hacía sobre el buque, se entenderán comprendidos en él las máquinas, aparejo, pertrechos, y cuanto esté adscrito al buque; pero no su cargamento, aunque pertenezca al mismo naviero.

En el seguro genérico de mercaderías no se reputarán comprendidos los metales amonedados ó en lingotes, las piedras preciosas ni las municiones de guerra.

746. El seguro sobre flete podrá hacerse por el cargador, por el fletante ó el capitán; pero éstos no podrán asegurar el anticipo que hubieren recibido á cuenta de su flete sino cuando hayan pactado expresamente que, en caso de no devengarse aquél por naufragio ó pérdida de la carga, devolverán la cantidad recibida.

747. En el seguro de flete se habrá de expresar la suma á que asciende, la cual no podrá exceder de lo que aparezca en el contrato de fletamento.

748. El seguro de beneficios se regirá por los pactos en que convengan los contratantes, pero habrá de consignarse en la póliza: 1.° La cantidad determinada en que fija el asegurado el beneficio, una vez llegado felizmente y vendido el cargamento en el puerto de destino; — 2.° La obligación de reducir el seguro, si, comparado el valor obtenido en la venta, descontados gastos y fletes, con el valor de compra, resultare menor que el valuado en el seguro.

749. Podrá el asegurador hacer reasegurar por otros los efectos por él asegurados, en todo ó en parte, con el mismo ó diferente premio; así como el asegurado podrá también asegurar el coste del seguro y el riesgo que pueda correr en la cobranza del primer asegurador.

750. Si el capitán contratare el seguro, ó el dueño de las cosas aseguradas fuere en el mismo buque que las porteare, se dejará siempre un 10 por 100 á su riesgo, no habiendo pacto expreso en contrario.

751. En el seguro del buque se entenderá que sólo cubre el seguro las cuatro quintas partes de su importe ó valor, y que el asegurado corre el riesgo por la quinta parte restante, á no hacerse constar expresamente en la póliza pacto en contrario.

En este caso, y en el del artículo anterior, habrá de descontarse del seguro el importe de los préstamos tomados á la gruesa.

752. La suscripción de la póliza creará una presunción legal de que los aseguradores admitieron como exacta la evaluación hecha en ella de los efectos asegurados, salvo los casos de fraude ó malicia.

Si apareciere exagerada la evaluación, se procederá según las circunstancias del caso, á saber: Si la exageración hubiere procedido de error y no de malicia imputable al asegurado, se reducirá el seguro á su verdadero valor, fijado por las partes de común acuerdo ó por juicio pericial. El asegurador devolverá el exceso de prima recibida, reteniendo, sin embargo, $^1/_2$ por 100 de este exceso; — Si la exageración fuere por fraude del asegurado, y el asegurador lo probare, el seguro

741. In insurances of merchandise, the specific definition thereof and of the vessel which is to carry it may be omitted, when these particulars are not known to the assured.

If the vessel, in these cases, suffers from a sea accident, the assured shall be obliged to prove, besides the loss of the vessel, her departure from the port of loading, the shipping on his account of the effects lost and their value, in order to claim the indemnity.

742. Policies of insurance may be drawn to the order of the assured, and in this case they shall be indorsable.

§ 2. *Things which may be insured, and their valuation.*

743. The following shall be the subject-matter of maritime insurance: — 1. The hull of the vessel, in ballast or loaded, in port or on a voyage; — 2. The tackle; — 3. The engines, if she is a steam vessel; — 4. All the stores and objects which constitute her outfit; — 5. Provisions and fuel; — 6. The sums lent on bottomry bond; — 7. The amount of the freights and the probable profit; — 8. All commercial objects which are subject to the risk of navigation, the value whereof can be fixed at a certain amount.

744. All or part of the objects stated in the preceding article may be insured, jointly or separately, in time of peace or of war, by voyage or for a time, for a single voyage or a round voyage, on good or bad news.

745. If it is stated generically in the policy that the insurance is made on the vessel, the machinery, tackle, stores and everything attached to the vessel shall be understood as comprised therein; but not her cargo, although it belongs to the same managing owner.

Metal, coined or in ingots, precious stones or munitions of war, shall not be considered as comprised in a generic insurance of merchandise.

746. Insurance of the freight may be made by the consignor, by the shipowner or the master; but the latter cannot insure an advance which they have received on account of their freight, unless it has been expressly agreed that the amount received shall be returned in case the freight is not earned through shipwreck or loss of the cargo.

747. In an insurance of freight the sum to which it amounts must be expressed, and this cannot exceed that which appears by the contract of affreightment.

748. An insurance of profits shall be governed by the agreements made by the contractors, but there must be stated in the policy: 1. The sum certain at which the assured fixes the profit, when once the cargo has arrived safely and has been sold at the port of destination; — 2. The obligation to reduce the insurance, if on comparing the price obtained at the sale, after deducting expenses and freights, with the price of purchase, it proves less than that valued in the insurance.

749. An insurer may reinsure with others the goods insured by himself, in whole or in part, at the same or a different premium; and the assured may likewise insure the cost of the insurance and the risk which he may run in recovering from the first insurer.

750. If the master contracts the insurance, or the owner of the things insured is on board the same vessel as that which carries them, 10 per centum shall always remain at his risk, when there is no express bargain to the contrary.

751. In an insurance of a vessel, it shall be understood that the insurance only covers four fifth parts of her value and that the assured runs the risk of the remaining fifth part, if a bargain to the contrary is not expressly stated in the policy.

In this case, and in that of the preceding article, the amount of the bottomry loans must be deducted from the insurance.

752. The signing of a policy shall create a presumption of law that the insurers admit the valuation of the insured effects made therein to be correct, except in cases of fraud or malice.

If the valuation appears exaggerated, they shall proceed as follows, according to the circumstances of the case: If the over-valuation has been caused by mistake and not from malice imputable to the assured, the insurance shall be reduced to its true value, as fixed by the parties by common accord or by the decision of experts. The insurer shall return the excess of the premium received, retaining, nevertheless, $^1/_2$ per centum of this excess; — If the over-valuation was through the fraud of the

será nulo para el asegurado, y el asegurador ganará la prima, sin perjuicio de la accion criminal que le corresponda.

753. La reducción del valor de la moneda nacional, cuando se hubiere fijado en extranjera, se hará al curso corriente en el lugar y en el día en que se firmó la póliza.

754. Si, al tiempo de realizarse el contrato, no se hubiere fijado con especificación el valor de las cosas aseguradas, se determinará éste: — 1.° Por las facturas de consignación; — 2.° Por declaración de corredores ó peritos, que procederán tomando por base de su juicio el precio de los efectos en el puerto de salida, con más los gastos de embarque, flete y aduanas.

Si el seguro recayere sobre mercaderías de retorno de un país en que el comercio se hiciere sólo por permuta, se arreglará el valor por el que tuvieren los efectos dermutados en el puerto de salida, con todos los gastos.

§ 3.° *Obligaciones entre el asegurador y el asegurado.*

755. Los aseguradores indemnizarán los daños y perjuicios que los objetos asegurados experimenten por alguna de las causas siguientes: 1.° Varada ó empeño del buque, con rotura ó sin ella; — 2.° Temporal; — 3.° Naufragio; — 4.° Abordaje fortuito; — 5.° Cambio de derrota durante el viaje, ó de buque; — 6.° Echazón; — 7.° Fuego ó explosión, si aconteciere en mercaderías, tanto á bordo como si estuviesen depositadas en tierra, siempre que se hayan alijado por orden de la autoridad competente, para reparar el buque ó beneficiar el cargamento; ó fuego por combustión espontánea en las carboneras de los buques de vapor; — 8.° Apresamiento; — 9.° Saqueo; — 10.° Declaración de guerra; — 11.° Embargo por orden del Gobierno; — 12.° Retención por orden de Potencia extranjera; — 13.° Represalias; — 14.° Cualesquiera otros accidentes ó riesgos de mar.

Los contratantes podrán estipular las excepciones que tengan por conveniente, mencionándolas en la póliza, sin cuyo requisito no surtirán efecto.

756. No responderán los aseguradores de los daños y perjuicios que sobrevengan á las cosas aseguradas por cualquiera de las causas siguientes, aunque no se hayan excluído en la póliza: 1.° Cambio voluntario de derrotero de viaje, ó de buque, sin expreso consentimiento de los aseguradores; — 2.° Separación espontánea de un convoy, habiéndose estipulado que iría en conserva con él; — 3.° Prolongación de viaje á un puerto más remoto que el designado en el seguro; — 4.° Disposiciones arbitrarias y contrarias á la póliza de fletamento ó al conocimiento, tomadas por orden del fletante, cargadores y fletadores; — 5.° Baratería de patrón, á no ser que fuera objeto del seguro; — 6.° Mermas, derramas y dispendios procedentes de la naturaleza de las cosas aseguradas; — 7.° Falta de los documentos prescritos en este Código, en las Ordenanzas y Reglamentos de marina ó de navegación, ú omisiones de otra clase del capitán, en contravención de las disposiciones administrativas, á no ser que se haya tomado á cargo del asegurador la baratería del patrón.

En cualquiera de estos casos los aseguradores harán suyo el premio, siempre que hubieren empezado á correr el riesgo.

757. En los seguros de carga contratados por viaje redondo, si el asegurado no encontrare cargamento para el retorno, ó solamente encontrare menos de las dos terceras partes, se rebajará el premio de vuelta proporcionalmente al cargamento que trajere, abonándose además al asegurador ½ por 100 de la parte que dejare de conducir.

No procederá, sin embargo, rebaja alguna en el caso de que el cargamento se hubiere perdido en la ida, salvo pacto especial que modifique la disposición de este artículo.

758. Si el cargamento fuere asegurado por varios aseguradores en distintas cantidades, pero sin designar señaladamente los objetos del seguro, se pagará la indemnización, en caso de pérdida ó avería, por todos los aseguradores, á prorrata de la cantidad asegurada por cada uno.

759. Si fueren designados diferentes buques para cargar las cosas aseguradas, pero sin expresar la cantidad que ha de embarcarse en cada buque, podrá el asegurado distribuir el cargamento como mejor le convenga, ó conducirlo á bordo de uno sólo, sin que por ello se anule la responsabilidad del asegurador. Mas si hubiere

assured, and the insurer proves it, the insurance shall be void as regards the assured, and the insurer shall gain the premium, without prejudice to the criminal proceedings which he may take.

753. When the value has been fixed abroad, the reduction thereof to the national money shall be made at the rate current in the place and on the day at which the policy was signed.

754. If the value of the things insured has not been specifically fixed at the time of making the contract, it shall be determined: 1. By the invoices of the consignment; — 2. By verbal evidence of brokers or experts, which shall be given by taking as the ground of their judgment the price of the goods at the port of departure, and adding the expenses of shipping, freight and customs.

If the insurance affects merchandise returned from a country where trade is done only by barter, the value shall be arranged by that which the bartered goods had at the port of departure, with all the expenses.

§ 3. *Obligations between insurer and assured.*

755. Insurers shall indemnify the damage suffered by the subject-matter insured by any of the following causes: 1. Stranding or grounding of the vessel, whether she breaks up or not; — 2. Tempest; — 3. Shipwreck; — 4. Accidental collision; — 5. Change of route or of vessel during the voyage; — 6. Jettison; — 7. Fire or explosion, if happening to the merchandise either on board or deposited on land, provided that it has been lightened by order of the competent authority, for the purpose of repairing the vessel or for the benefit of the cargo; or fire by spontaneous combustion in the coal bunkers of steamers; — 8. Capture; — 9. Looting; — 10. Declaration of war; — 11. Arrest by order of the Government; — 12. Retention by order of a foreign Power; — 13. Reprisals; — 14. Every other accident or risk of the sea.

Contractors may agree exceptions as they think fit by mentioning them in the policy, without which requisite they shall be void.

756. Insurers shall not be liable for damage which happens to the things assured through any of the following causes, although they are not excluded by the policy: 1. Voluntary change of the route of the voyage or of the vessel without the express consent of the insurers; — 2. Spontaneous separation from a convoy, when it has been stipulated that she should go in consort therewith; — 3. Extension of the voyage to a port more remote than that defined in the insurance; — 4. Arbitrary dispositions contrary to the charter-party or to the bill of lading, taken by order of the shipowner, consignors and freighters; — 5. Barratry of the master, unless it is one of the objects of the insurance; — 6. Wastage, spilling and loss proceeding from the nature of the things insured; — 7. Absence of the documents prescribed by this Code, by the Ordinances and Regulations of Marine or navigation, or omissions of another kind by the master in breach of administrative orders, unless the barratry of the master has been assumed by the insurer.

In all of these cases the insurers shall have the premium as their own, provided that they have begun to run the risk.

757. In insurances of cargo contracted for a round voyage, if the assured does not meet with a cargo for the return, or only meets with less than two third parts, the premium for the return voyage shall be lowered in proportion to the cargo which she carries, the insurer being also paid $^1/_2$ per centum of the part which she fails to carry.

Nevertheless there shall be no rebate when the cargo has been lost on the outward voyage, unless there is a special bargain to modify the provisions of this article.

758. If the cargo is insured by several insurers in different amounts, but without specifically defining the subject-matter of the insurance, the indemnity, in case of loss or damage, shall be paid by all the insurers in proportion to the amount insured by each.

759. If different vessels are named for loading the things insured, but without stating the quantity which is to be shipped in each vessel, the assured may distribute the cargo as suits him best, or may carry it on board a single vessel, without the liability of the insurer being avoided thereby. But if he has made express mention of the

hecho expresa mención de la cantidad asegurada sobre cada buque, y el cargamento se pusiere á bordo en cantidades diferentes de aquellas que se hubieren señalado para cada uno, el asegurador no tendrá más responsabilidad que la que hubiere contratado en cada buque. Sin embargo, cobrará ½ por 100 del exceso que se hubiere cargado en ellos sobre la cantidad contratada.

Si quedare algún buque sin cargamento, se entenderá anulado el seguro en cuanto á él, mediante el abono antes expresado de ½ por 100 sobre el excedente embarcado en los demás.

760. Si, por inhabilitación del buque antes de salir del puerto, la carga se trasbordase á otro, tendrán los aseguradores opción entre continuar ó no el contrato, abonando las averías que hubieren ocurrido; pero si la inhabilitación sobreviniere después de empezado el viaje, correrán los aseguradores el riesgo, aun cuando el buque fuere de diferente porte y pabellón que el designado en la póliza.

761. Si no se hubiere fijado en la póliza el tiempo durante el cual hayan de correr los riesgos por cuenta del asegurador, se observará lo prescrito en el art. 733 sobre los préstamos á la gruesa.

762. En los seguros á término fijo, la responsabilidad del asegurador cesará en la hora en que cumpla el plazo estipulado.

763. Si por conveniencia del asegurado las mercaderías se descargaren en un puerto más próximo que el designado para rendir el viaje, el asegurador hará suyo sin rebaja alguna el premio contratado.

764. Se entenderán comprendidas en el seguro, si expresamente no se hubieren excluído en la póliza, las escalas que por necesidad se hicieren para la conservación del buque ó de su cargamento.

765. El asegurado comunicará al asegurador por el primer correo siguiente al en que él las recibiere, y por telégrafo, si lo hubiere, las noticias referentes al curso de la navegación del buque asegurado, y los daños ó pérdidas que sufrieren las cosas aseguradas, y responderá de los daños y perjuicios que por su omisión se ocasionaren.

766. Si se perdieren mercaderías aseguradas por cuenta del capitán que mandare el buque en que estaban embarcadas, habrá aquél de justificar á los aseguradores la compra, por medio de las facturas de los vendedores; y el embarque y conducción en el buque, por certificación del cónsul español, ó autoridad competente, donde no lo hubiere, del puerto donde las cargó, y por los demás documentos de habilitación y expedición de la aduana.

La misma obligación tendrán todos los asegurados que naveguen con sus propias mercaderías, salvo pacto en contrario.

767. Si se hubiere estipulado en la póliza aumento de premio en caso de sobrevenir guerra, y no se hubiere fijado el tanto del aumento, se regulará éste, á falta de conformidad entre los mismos interesados, por peritos nombrados en la forma que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil[1]), teniendo en consideración las circunstancias del seguro y los riesgos corridos.

768. La restitución gratuita del buque ó su cargamento al capitán por los apresadores, cederá en beneficio de los propietarios respectivos, sin obligación, de parte de los aseguradores, de pagar las cantidades que aseguraron.

769. Toda reclamación procedente del contrato de seguro habrá de ir acompañada de los documentos que justifiquen: 1.° El viaje del buque, con la protesta del capitán ó copia certificada del libro de navegación; — 2.° El embarque de los objetos asegurados, con el conocimiento y documentos de expedición de aduanas; — 3.° El contrato del seguro, con la póliza; — 4.° La pérdida de las cosas aseguradas, con los mismos documentos del número 1.°, y declaración de la tripulación, si fuere preciso.

Además se fijará el descuento de los objetos asegurados, previo el reconocimiento de peritos.

Los aseguradores podrán contradecir la reclamación, y se les admitirá sobre ello prueba en juicio.

[1]) Con arreglo al artículo 2178 de la L. de Enj. c. los peritos se designarán por escrito uno por cada interesado al tiempo de acompañar al Juzgado la póliza del seguro. Y si no estuvieren conformes, sorteará el juez (dice el 2179) un tercero. — Por último, dice el 2180, que fijada la cantidad en que haya de consistir el aumento del seguro, el juez ordenará que se haga saber á quien corresponda.

quantity insured on each vessel, and the cargo is put on board in quantities different from those which have been named for each, the insurer shall have no more liability than that which he has contracted for each vessel. Nevertheless, he shall recover ½ per centum on the excess which has been loaded thereon above the quantity contracted for.

If any vessel is left without cargo, the insurance shall be considered annulled in respect thereof, on payment of the aforesaid ½ per centum on the excess shipped in the other vessels.

760. If the cargo is transhipped to another vessel through unseaworthiness of the vessel before leaving the port, the insurers shall have an election between continuing the contract or not, on paying the damage which has occurred; but if the unseaworthiness happens after the voyage has been commenced, the insurers shall run the risk, even when the vessel is of a different tonnage and flag from that named in the policy.

761. If the time during which the risks are to run on account of the insurer has not been fixed in the policy, the provisions in article 733 on bottomry loans shall be observed.

762. In insurances for a fixed time, the liability of the insurer shall cease at the hour which completes the stipulated time.

763. If for the convenience of the assured, the merchandise is unloaded at a port nearer than that named for making the voyage, the insurer shall have the contracted premium as his own without any rebate.

764. Calls which are made by necessity for the purpose of preserving the vessel or her cargo shall be understood as comprised in the insurance, if they have not been expressly excluded by the policy.

765. The assured shall communicate to the insurer by the first post following that by which he received it, and by telegraph, if there is any, the news relating to the course of the insured vessel, and the damage or loss suffered by the things insured, and shall be liable for the damage which is occasioned by his omission.

766. If merchandise which has been insured on account of the master who commands the vessel on which it is shipped, is lost, he must prove the purchase to the insurers, by means of invoices from the sellers; and the shipment and carriage in the vessel, by certificate of the Spanish consul, or where there is none, of the competent authority of the port where he loaded it, and by the other permits and vouchers of the customs.

All the assured who sail with their own merchandise shall have the same obligation, saving a bargain to the contrary.

767. If an increase of the premium has been stipulated in the policy in case of the outbreak of war, and the amount of the increase has not been fixed, this, in default of agreement between the persons interested, shall be regulated by experts appointed as enacted by the Law of Civil Procedure[1]), taking into consideration the particulars of the insurance and the risks run.

768. The gratuitous restitution of the vessel or her cargo by captors to the master, shall accrue to the benefit of the respective owners, with no obligation on the part of the insurers to pay the sums which they insured.

769. Every claim arising from a contract of insurance must be accompanied by documents which prove: 1. The voyage of the vessel, with the protest of the master or a certified copy of the log; — 2. The shipping of the subject-matter insured. with the bill of lading and custom-house permits; — 3. The contract of the insurance, with the policy; — 4. The loss of the things insured, with the same documents as in No. 1, and the declaration of the crew, if necessary.

The depreciation of the insured subject-matter shall also be fixed after examination by experts.

The insurers may answer the claim, and proof in an action shall be admitted on the matter.

[1]) In accordance with art. 2178 of the Law of Civil Procedure, the experts must be named in writing, one by each interested person, at the time of taking the policy of insurance to the Court. And if they are not in agreement, the judge must choose a third by lot (art. 2179). — Lastly (art. 2180), when the amount of the increase of the insurance has been fixed, the judge must order that it be communicated to the proper parties.

770. Presentados los documentos justificativos, el asegurador deberá, hallándolos conformes y justificada la pérdida, pagar la indemnización al asegurado dentro del plazo estipulado en la póliza, y en su defecto, á los diez días de la reclamación.

Mas si el asegurador la rechazare y contradijere judicialmente, podrá depositar la cantidad que resultare de los justificantes, ó entregarla al asegurado mediante fianza suficiente, decidiendo lo uno ó lo otro el juez ó tribunal, según los casos.

771. Si el buque asegurado sufriere daño por accidente de mar, el asegurador pagará únicamente las dos terceras partes de los gastos de reparación, hágase ó no. En el primer caso, el importe de los gastos se justificará por los medios reconocidos en el derecho; en el segundo, se apreciará por peritos[1]).

Sólo el naviero, ó el capitán autorizado para ello, podrán optar por la no reparación del buque.

772. Si por consecuencia de la reparación el valor del buque aumentare en más de una tercera parte del que se le hubiere dado en el seguro, el asegurador pagará los dos tercios del importe de la reparación, descontando el mayor valor que ésta hubiere dado al buque.

Mas si el asegurado probase que el mayor valor del buque no procedía de la reparación, sino de ser el buque nuevo y haber ocurrido la avería en el primer viaje, ó que lo eran las máquinas ó aparejo y pertrechos destrozados, no se hará la deducción del aumento de valor, y el asegurador pagará los dos tercios de la reparación, conforme á la regla 6.ª del art. 854.

773. Si las reparaciones excedieren de las tres cuartas partes del valor del buque, se entenderá que está inhabilitado para navegar, y procederá el abandono; y, no haciendo esta declaración, abonarán los aseguradores el importe del seguro, deducido el valor del buque averiado ó de sus restos.

774. Cuando se trate de indemnizaciones procedentes de avería gruesa, terminadas las operaciones de arreglo, liquidación y pago de la misma, el asegurado entregará al asegurador todas las cuentas y documentos justificativos en reclamación de la indemnización de las cantidades que le hubieren correspondido. E- asegurador examinará á su vez la liquidación, y hallándola conforme á las condiciones de la póliza, estará obligado á pagar al asegurado la cantidad corresponl diente, dentro del plazo convenido, ó, en su defecto, en el de ocho días.

Desde esta fecha comenzará á devengar interés[2]) la suma debida.

Si el asegurador no encontrare la liquidación conforme con lo convenido en la póliza, podrá reclamar ante el juez ó tribunal competente en el mismo plazo de ocho días, constituyendo en depósito la cantidad reclamada.

775. En ningún caso podrá exigirse al asegurador una suma mayor que la del importe total del seguro; sea que el buque salvado, después de una arribada forzosa para reparación de avería, se pierda; sea que la parte que haya de pagarse por la avería gruesa, importe más que el seguro, ó que el coste de diferentes averías y reparaciones en un mismo viaje ó dentro del plazo del seguro, excedan de la suma asegurada.

776. En los casos de avería simple respecto á las mercaderías aseguradas, se observarán las reglas siguientes: 1.ª Todo lo que hubiere desaparecido por robo, pérdida, venta en viaje, por causa de deterioro, ó por cualquiera de los accidentes marítimos comprendidos en el contrato del seguro, será justificado con arreglo al valor de factura, ó, en su defecto, por el que se le hubiere dado en el seguro, y el asegurador pagará su importe; — 2.ª En el caso de que, llegado el buque á buen puerto, resulten averiadas las mercaderías en todo ó en parte, los peritos[3]) harán constar el valor que tendrían si hubieren llegado en estado sano, y el que tengan en su estado de deterioro.

La diferencia entre ambos valores líquidos, hecho además el descuento de los derechos de aduanas, fletes y cualesquiera otros análogos, constituirá el valor ó importe de la avería, sumándole los gastos causados por los peritos, y otros, si los hubiere.

Habiendo recaído la avería sobre todo el cargamento asegurado, el asegurador pagará en su totalidad el demérito que resulte; mas si sólo alcanzare á una parte, el asegurado será reintegrado en la proporción correspondiente.

[1]) La designación de estos peritos se hará en la forma indicada en la nota anterior.
[2]) El 5%, ó sea el legal.
[3]) La designación de estos peritos se hará en la forma indicada en la nota 1, pág. 198.

770. On the presentation of the documents of proof, the insurer, if he finds them to agree and the loss proved, must pay the indemnity to the insured within the time stipulated in the policy, and in default thereof, within ten days from the claim.

But if the insurer rejects it and answers in a legal proceeding, he must deposit the sum shown by the documents of proof, or pay it to the assured on a sufficient guarantee being given, as the judge or tribunal may decide, according to the case.

771. If the vessel suffers damage by a sea accident, the insurer shall only pay two third parts of the cost of repairs, whether the vessel is repaired or not. In the first case the amount of the expenses shall be proved by the means known to the law; and in the second, they shall be appraised by experts[1]).

Only the shipowner, or the master authorised for that purpose, may elect not to repair the vessel.

772. If the value of the vessel increases in consequence of the repair by more than one third part of that which has been given in the insurance, the insurer shall pay the two thirds of the amount of the reparation, after deducting the greater value which this has given to the vessel.

But if the assured proves that the greater value of the vessel did not proceed from the reparation, but from the vessel being new and the damage having occurred on the first voyage, or that it was the engines or tackle and stores that were destroyed, no deduction of the increase in value shall be made, and the insurer shall pay the two thirds of the reparation, according to rules 6 of article 854.

773. If the repairs exceed three fourth parts of the value of the vessel, it shall be understood that she is unseaworthy and may be abandoned; and if this declaration is not made, the insurers shall pay the amount of the insurance, deducting the value of the damaged vessel or of her remains.

774. When it is a matter of contributions proceeding from general average, after the operations of settling, adjusting and paying the same, the assured shall deliver to the insurer all the accounts and documents of proof in the claim for the indemnity for the amounts which have fallen to him. The insurer, in his turn, shall examine the adjustment, and on finding it in agreement with the conditions of the policy, shall be obliged to pay the corresponding amount to the assured within the agreed time, or in default of agreement, within that of eight days.

The sum due shall commence to earn interest[2]) from this date.

If the insurer does not find the adjustment to conform with what is agreed in the policy, he may file a claim before the competent judge or tribunal within the same space of eight days, upon depositing the amount claimed.

775. In no case can a sum be demanded of the insurer greater than that of the whole amount of the insurance; whether the salved vessel is lost after arriving at a port of refuge for repairing the damage, or the part which has to be paid as general average is greater than that of the insurance, or the cost of different damages and repairs on the same voyage or within the time of the insurance, exceeds the sum insured.

776. In cases of particular average affecting insured merchandise, the following rules shall be observed: 1. Everything which has disappeared by robbery, loss, sale on the voyage, by reason of deterioration, or any of the maritime accidents comprised in the contract of insurance, shall be proved according to the value on the invoice, or in default thereof by that which has been stated in the insurance, and the insurer shall pay the amount thereof; — 2. When, on arrival of the vessel at a good port, the merchandise proves to be damaged in whole or in part, experts[3]) shall have to state the value which it would have if it had arrived in sound condition, and that which it has in its deteriorated condition.

The difference between the two net values, made after deducting the customs dues, freights and all other like payments, shall constitute the value or amount of the average, adding thereto the expenses caused by the experts, and others, if any.

If the damage has affected all the insured cargo, the insurer shall pay the whole of the resulting loss; but if it only amounts to a part, the assured shall be paid in corresponding proportion.

---

[1]) The appointment of these experts must be made as indicated in the preceding note.
[2]) 5%, that is the legal interest.
[3]) The appointment of these experts must be made as indicated in note 1, pag. 198.

Si hubiere sido objeto de un seguro especial el beneficio probable del cargador, se liquidará separadamente.

777. Fijada por los peritos la avería simple del buque, el asegurado justificará su derecho con arreglo á lo dispuesto en el final del núm. 9.° del art. 580, y el asegurador pagará en conformidad á lo dispuesto en los artículos 858 y 859.

778. El asegurador no podrá obligar al asegurado á que venda el objeto del seguro, para fijar su valor.

779. Si la valuación de las cosas aseguradas hubiere de hacerse en país extranjero, se observarán las leyes, usos y costumbres del lugar en que haya de realizarse, sin perjuicio de someterse á las prescripciones de este Código para la comprobación de los hechos.

780. Pagada por el asegurador la cantidad asegurada, se subrogará en el lugar del asegurado para todos los derechos y acciones que correspondan contra los que por malicia ó culpa causaron la pérdida de los efectos asegurados.

§ 4.° *De los casos en que se anula, rescinde ó modifica el contrato de seguro.*

781. Será nulo el contrato de seguro que recayere: 1.° Sobre los buques ó mercaderías afectos anteriormente á un préstamo á la gruesa por todo su valor. Si el préstamo á la gruesa no fuere por el valor entero del buque ó de las mercaderías, podrá subsistir el seguro en la parte que exceda al importe del préstamo; — 2.° Sobre la vida de tripulantes y pasajeros; — 3.° Sobre los sueldos de la tripulación; — 4.° Sobre géneros de ilícito comercio en el país del pabellón del buque; — 5.° Sobre buque dedicado habitualmente al contrabando, ocurriendo el daño ó pérdida por haberlo hecho, en cuyo caso se abonará al asegurador el ½ por 100 de la cantidad asegurada; — 6.° Sobre un buque que, sin mediar fuerza mayor que lo impida, no se hiciere á la mar en los seis meses siguientes á la fecha de la póliza; en cuyo caso, además de la anulación, procederá el abono de ½ por 100 al asegurador de la suma asegurada; — 7.° Sobre buque que deje de emprender el viaje contratado, ó se dirija á un punto distinto del estipulado; en cuyo caso procederá también el abono al asegurador del ½ por 100 de la cantidad asegurada; — 8.° Sobre cosas en cuya valoración se hubiere cometido falsedad á sabiendas.

782. Si se hubieren realizado sin fraude diferentes contratos de seguro sobre un mismo objeto, subsistirá únicamente el primero, con tal que cubra todo su valor.

Los aseguradores de fecha posterior quedarán libres de responsabilidad y percibirán un ½ por 100 de la cantidad asegurada.

No cubriendo el primer contrato el valor íntegro del objeto asegurado, recaerá la responsabilidad del exceso sobre los aseguradores que contrataron con posterioridad, siguiendo el orden de fechas.

783. El asegurado no se libertará de pagar los premios íntegros á los diferentes aseguradores, si no hiciere saber á los postergados la rescisión de sus contratos antes de haber llegado el objeto asegurado al puerto de destino.

784. El seguro hecho con posterioridad á la pérdida, avería ó feliz arribo del objeto asegurado al puerto de destino, será nulo siempre que pueda presumirse racionalmente que la noticia de lo uno ó de lo otro había llegado á conocimiento de alguno de los contratantes.

Existirá esta presunción cuando se hubiere publicado la noticia en una plaza, mediando el tiempo necesario para comunicarlo por el correo ó el telégrafo al lugar donde se contrató el seguro, sin perjuicio de las demás pruebas que puedan practicar las partes.

785. El contrato de seguro sobre buenas ó malas noticias no se anulará si no se prueba el conocimiento del suceso esperado ó temido por alguno de los contratantes al tiempo de verificarse el contrato.

En caso de probarlo, abonará el defraudador á su coobligado una quinta parte de la cantidad asegurada, sin perjuicio de la responsabilidad criminal á que hubiere lugar.

786. Si el que hiciere el seguro, sabiendo la pérdida total ó parcial de las cosas aseguradas, obrare por cuenta ajena, será personalmente responsable del hecho como si hubiera obrado por cuenta propia; y si, por el contrario, el comisionado estuviere inocente del fraude cometido por el propietario asegurado, recaerán sobre éste todas las responsabilidades, quedando siempre á su cargo pagar á los aseguradores el premio convenido.

If the probable profit of the consignor has been the subject-matter of a special insurance, it shall be settled separately.

777. When the particular average of a vessel has been fixed by experts, the assured shall prove his right in accordance with the provision at the end of No 9 of article 580, and the insurer shall pay in accordance with the provisions of articles 858 and 859.

778. The insurer cannot oblige the assured to sell the subject-matter of the insurance, in order to fix the value thereof.

779. If the valuation of the things insured has to be made in a foreign country the laws, usages and customs of the place where it has to be effected shall be observed, without prejudice to submission to the provisions of this Code in order to prove the facts.

780. When the amount has been paid by the insurer, he shall be substituted in the place of the assured for the purpose of all his rights and rights of action against those who by malice or *culpa* have caused the loss of the insured effects.

§ 4. *Cases in which the contract of insurance is annulled, rescinded or altered.*

781. A contract of insurance shall be void when it is made: 1. On vessels or merchandise already subject to payment of a bottomry loan for their full value; — If the bottomry loan is not for the full value of the vessel or of the merchandise, the insurance may subsist as regards the part which exceeds the amount of the loan; — 2. On the lives of the crew and passengers; — 3. On the pay of the crew; — 4. On goods of a trade which is illicit in the country of the flag of the vessel; — 5. On a vessel habitually devoted to contraband, when the damage or loss has occurred through having so acted, in which case the insurer shall be paid the 1/2 per centum of the sum insured; — 6. On a vessel which does not put to sea within the six months following the date of the policy, without any *vis major* to prevent it; in which case, besides the avoidance, payment of 1/2 per centum of the sum insured shall be made to the insurer; — 7. On a vessel which fails to commence the contracted voyage, or sails to a place different from that stipulated; in which case also payment of the 1/2 per centum of the amount insured shall be made to the insurer; — 8. On things in the valuation whereof falsity has knowingly been committed.

782. If different contracts of insurance have been made on the same subject matter without fraud, the first only shall subsist, provided that it covers all the value thereof.

The insurers of later date shall be free from liability and shall receive 1/2 per centum of the amount insured.

If the first contract does not cover the whole value of the subject-matter insured, the liability for the excess shall fall on the insurers who contracted subsequently, following the order of dates.

783. The assured shall not be freed from paying the entire premiums to the different insurers, if he has not given notice of the rescission of his contracts to the later insurers before the insured subject-matter has arrived at the port of destination.

784. An insurance made subsequently to the loss, damage or safe arrival of the insured subject-matter at the port of destination, shall be void, provided that it may reasonably be presumed that the news of the one or the other has come to the knowledge of one of the contractors.

This presumption shall exist when the news has been published in a place, and the time has elapsed which was necessary for communicating it by post or telegraph to the place where the insurance was made, without prejudice to other evidence which the parties may produce.

785. A contract of insurance on good or bad news shall not be avoided if it is not proved that the expected or feared event was known by one of the contractors at the time of the contract being made.

If it is proved, the fraudulent party shall pay one fifth part of the amount insured to the other party, without prejudice to any criminal liability which there may be.

786. If the person who made the insurance, knowing the total or partial loss of the insured subject-matter, acted on account of another, he shall be personally liable for the act, as if he had acted on his own account; and if on the contrary, the agent was innocent of the fraud committed by the assured owner, all the liabilities shall fall on the latter, he being always bound to pay the agreed premium to the insurers.

Igual disposición regirá respecto al asegurador cuando contratare el seguro por medio de comisionado y supiere el salvamento de las cosas aseguradas.

787. Si, pendiente el riesgo de las cosas aseguradas, fueren declarados en quiebra el asegurador ó el asegurado, tendrán ambos derecho á exigir fianza, éste para cubrir la responsabilidad del riesgo, y aquél para obtener el pago del premio; y si los representantes de la quiebra se negaren á prestarla dentro de los tres días siguientes al requerimiento, se rescindirá el contrato.

En caso de ocurrir el siniestro dentro de los dichos tres días sin haber prestado la fianza, no habrá derecho á la indemnización ni al premio del seguro.

788. Si, contratado un seguro fraudulentamente por varios aseguradores, alguno ó algunos hubieren procedido de buena fe, tendrán éstos derecho á obtener el premio íntegro de su seguro de los que hubieren procedido con malicia, quedando el asegurado libre de toda responsabilidad.

De igual manera se procederá respecto á los asegurados con los aseguradores, cuando fueren algunos de aquéllos los autores del seguro fraudulento.

§ 5.° *Del abandono de las cosas aseguradas.*

789. Podrá el asegurado abandonar por cuenta del asegurador las cosas aseguradas, exigiendo del asegurador el importe de la cantidad estipulada en la póliza: 1.° En el caso de naufragio; — 2.° En el de inhabilitación del buque para navegar, por varada, rotura ó cual quier otro accidente de mar; — 3.° En el de apresamiento, embargo ó detención por orden del Gobierno nacional ó extranjero; — 4.° En el de pérdida total de las cosas aseguradas, entendiéndose por tal que disminuya en tres cuartas partes el valor asegurado.

Los demás daños se reputarán averías y se soportarán por quien corresponda, según las condiciones del seguro y las disposiciones de este Código.

No procederá el abandono en ninguno de los dos primeros casos, si el buque náufrago, varado ó inhabilitado pudiera desencallarse, ponerse á flote y repararse para continuar el viaje al puerto de su destino, á no ser que el coste de la reparación excediese de las tres cuartas partes del valor en que estuviere el buque asegurado.

790. Verificándose la rehabilitación del buque, sólo responderán los aseguradores de los gastos ocasionados por la encalladura ú otro daño que el buque hubiere recibido.

791. En los casos de naufragio y apresamiento, el asegurado tendrá la obligación de hacer por sí las diligencias que aconsejen las circunstancias, para salvar ó recobrar los efectos perdidos, sin perjuicio del abandono que le competa hacer á su tiempo, y el asegurador habrá de reintegrarle de los gastos legítimos que para el salvamento hiciese, hasta la concurrencia del valor de los efectos salvados, sobre los cuales se harán efectivos en defecto de pago.

792. Si el buque quedare absolutamente inhabilitado para navegar, el asegurado tendrá obligación de dar de ello aviso al asegurador, telegráficamente siendo posible, y si no, por el primer correo siguiente al recibo de la noticia. Los interesados en la carga que se hallaren presentes, ó, en su ausencia, el capitán, practicarán todas las diligencias posibles para conducir el cargamento al puerto de su destino, con arreglo á lo dispuesto en este Código; en cuyo caso correrán por cuenta del asegurador los riesgos y gastos de descarga, almacenaje, reembarque ó trasbordo, excedente de flete, y todos los demás, hasta que se alijen los efectos asegurados en el punto designado en la póliza.

793. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el asegurador gozará del término de seis meses para conducir las mercaderías á su destino, si la inhabilitación hubiere ocurrido en los mares que circundan á Europa desde el estrecho del Sund hasta el Bósforo, y un año, si hubiere ocurrido en otro punto más lejano; cuyo plazo se comenzará á contar desde el día en que el asegurado le hubiere dado aviso del siniestro.

794. Si, á pesar de las diligencias practicadas por los interesados en la carga, capitán y aseguradores, para conducir las mercaderías al puerto de su destino, conforme á lo prevenido en los artículos anteriores, no se encontrare buque en que verificar el transporte, podrá el asegurado propietario hacer abandono de las mismas.

795. En caso de interrupción del viaje por embargo ó detención forzada del buque, tendrá el asegurado obligación de comunicarla á los aseguradores tan luego como llegue á su noticia, y no podrá usar de la acción de abandono hasta que hayan transcurrido los plazos fijados en el art. 793.

The like provision shall govern the insurer when he makes an insurance by means of an agent and knows of the salving of the insured subject-matter.

787. If, while the risk of the insured subject-matter is running, the insurer or the assured is declared bankrupt, the other shall be entitled to demand a security, the latter to cover the liability for the risk, and the former to obtain payment of the premium; and if the representatives of the bankruptcy refuse to give it within the three days following the demand, the contract shall be rescinded.

If a casualty happens within the said three days, without the security having been given, there shall be no right to the indemnity or to the insurance premium.

788. If, when an insurance has been fraudulently made by several insurers, one or some have acted in good faith, the latter shall be entitled to obtain the entire premium of his insurance from those who have acted with malice, and the assured shall be free from all liability.

The like shall happen with regard to the relationship of the assured with the insurers, when any of the former are the authors of a fraudulent insurance.

§ 5. *Abandonment of the insured subject-matter.*

789. The assured can abandon the insured subject-matter to the account of the insurer and demand from the insurer the amount stipulated in the policy: 1. In case of shipwreck; — 2. In case of unseaworthiness of the vessel, through stranding, breaking up or any other sea accident; — 3. In case of capture, arrest or detention by order of the Government, whether national or foreign; — 4. In the case of total loss of the subject-matter insured, it being understood thereby that the value insured is diminished by three fourth parts.

Other damage shall be considered average and shall be borne by the proper person according to the terms of the insurance and the provisions of this Code.

Abandonment shall not take place in either of the first two cases, if the vessel which has been wrecked, stranded or rendered unseaworthy can be got off, floated and repaired so as to continue the voyage to the port of her destination, unless the cost of the repairs exceeds three fourth parts of the value for which the vessel was insured.

790. When the vessel has become seaworthy, the insurers shall only be liable for the expenses occasioned by the stranding or other damage which the vessel has received.

791. In cases of shipwreck and capture, the assured shall be under the obligation of himself taking the steps which the circumstances suggest, for salving or recovering the lost effects, without prejudice to the abandonment which he may properly effect; and the insurer must repay him the lawful expenses which he has incurred in the salving, up to the equivalent of the value of the salved effects, which may be taken in execution in default of payment.

792. If the vessel is absolutely unseaworthy, the assured shall be obliged to give notice thereof to the insurer, by telegraph if possible, and if not, by the first post following the receipt of the news. The persons interested in the cargo who are present, or in their absence the master, shall adopt all possible measures to carry the cargo to the port of its destination, according to the provisions of this Code; and in this event the insurer shall incur the risks and expenses of unloading, warehousing, reshipping or transhipping, excess of freight, and all other expenses until the insured goods are discharged at the place named in the policy.

793. Without prejudice to the provisions of the preceding article, the insurer shall have the term of six months to carry the merchandise to its destination, if the unseaworthiness has occurred in the seas which surround Europe fron the Sound to the Bosphorus, and one year if it has occurred in a more distant place; which time shall begin to be reckoned from the day on which the assured has given him notice of the casualty.

794. If no vessel is found in which to effect the transport, in spite of the measures taken by the persons interested in the cargo, the master and the insurers, for carrying the merchandise to the port of its destination, in accordance with the provisions of the preceding articles, the assured owner may abandon the same.

795. In case of interruption of the voyage by arrest or forced detention of the vessel, the assured shall be obliged to communicate the fact to the insurers as soon as it comes to his notice, and cannot make use of his right of abandonment until the times fixed by article 793 have expired.

Estará obligado además á prestar á los aseguradores cuantos auxilios estén en su mano para conseguir el alzamiento del embargo, y deberá hacer por sí mismo las gestiones convenientes al propio fin, si, por hallarse los aseguradores en país remoto, no pudiere obrar de acuerdo con éstos.

796. Se entenderá comprendido en el abandono del buque el flete de las mercaderías que se salven, aun cuando se hubiere pagado anticipadamente, considerándose pertenencia de los aseguradores, á reserva de los derechos que competan á los demás acreedores, conforme á lo dispuesto en el art. 580.

797. Se tendrá por recibida la noticia para las prescripción de los plazos establecidos en el artículo 793, desde que se haga pública, bien por medio de los periódicos, bien por correr como cierta entre los comerciantes de la residencia del asegurado, ó bien porque pueda probarse á éste que recibió aviso del siniestro por carta ó telegrama del capitán, del consignatario ó de algún corresponsal.

798. Tendrá también el asegurado el derecho de hacer abandono después de haber transcurrido un año en los viajes ordinarios y dos en los largos, sin recibir noticia del buque.

En tal caso, podrá reclamar del asegurador la indemnización por el valor de la cantdiad asegurada, sin estar obligado á justificar la pérdida; pero deberá probar la falta de noticias con certificación del consul ó autoridad marítima del puerto de donde salió, y otra de los cónsules ó autoridades marítimas de los del destino del buque y de su matrícula, que acrediten no haber llegado á ellos durante el plazo fijado.

Para usar de esta acción, tendrá el mismo plazo señalado en el art. 804, reputándose viajes cortos los que se hicieren á la costa de Europa y á las de Asia y África por el Mediterráneo, y respecto de América los que se emprendan á puertos situados más acá de los ríos de La Plata y San Lorenzo, y á las islas intermedias entre las costas de España y los puntos designados en este artículo.

799. Si el seguro hubiere sido contratado á término limitado, existirá presunción legal de que la pérdida ocurrió dentro del plazo convenido, salvo la prueba que podrá hacer el asegurador, de que la pérdida sobrevino después de haber terminado su responsabilidad.

800. El asegurado, al tiempo de hacer el abandono, deberá declarar todos los seguros contratados sobre los efectos abandonados, así como los préstamos tomados á la gruesa sobre los mismos, y hasta que haya hecho esta declaración, no empezará á correr el plazo en que deberá ser reintegrado del valor de los efectos.

Si cometiere fraude en esta declaración, perderá todos los derechos que le competan por el seguro, sin dejar de responder por los préstamos que hubiere tomado sobre los efectos asegurados, no obstante su pérdida.

801. En caso de apresamiento de buque, y no teniendo tiempo el asegurado de proceder de acuerdo con el asegurador, ni de esperar instrucciones suyas, podrá por sí, ó el capitán en su defecto, proceder al rescate de las cosas aseguradas, poniéndolo en conocimiento del asegurador en la primera ocasión.

Éste podrá aceptar ó no el convenio celebrado por el asegurado ó el capitán, comunicando su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes á la notificación del convenio.

Si lo aceptase, entregará en el acto la cantidad concertada por el rescate, y quedarán de su cuenta los riesgos ulteriores del viaje, conforme á las condiciones de la póliza. Si no lo aceptase, pagará la cantidad asegurada, perdiendo todo derecho á los efectos rescatados; y si dentro del término prefijado no manifestare su resolución, se entenderá que rechaza el convenio.

802. Si, por haberse represado el buque, se reintegrara el asegurado en la posesión de sus efectos, se reputarán avería todos los gastos y perjuicios causados por la pérdida, siendo de cuenta del asegurador el reintegro; y si, por consecuencia de la represa, pasaren los efectos asegurados á la posesión de un tercero, el asegurado podrá usar del derecho de abandono.

803. Admitido el abandono, ó declarado admisible en juicio, la propiedad de las cosas abondonadas, con las mejoras ó desperfectos que en ellas sobrevengan desde el momento del abandono, se transmitirá al asegurador, sin que le exonere del pago la reparación del buque legalmente abandonado.

He shall also be obliged to render to the insurers whatever help is in his power to obtain the recall of the arrest, and must on his own initiative take suitable steps for the same purpose, if he cannot act in concert with the insurers, through being in a remote country.

796. The freight for the merchandise which is salved shall be understood as included in the abandonment of the vessel, even when it has been paid in advance, as it is considered the property of the insurers, reserving the rights of the other creditors in accordance with the provisions of article 580.

797. For the purpose of the prescription of the times enacted in article 793, the news shall be held to have been received from the publication thereof either by means of the newspapers, or by being current as a fact among the merchants of the residence of the assured, or because it can be proved that the latter received advice of the casualty by letter or telegram from the master, the consignee or some correspondent.

798. The assured shall likewise be entitled to abandon after a year has expired in ordinary voyages and two in long voyages, without receiving news of the vessel.

In that case, he can claim the indemnity from the insurer for the value of the amount insured, without being obliged to prove the loss; but he must prove the absence of news by the certificate of the consul or maritime authority of the port whence she sailed, and by another of the consuls or maritime authorities of the destination of the vessel and of her register, which prove that she has not arrived at those places during the time fixed.

For the purpose of making use of this action, he shall have the same time as that named by article 804, and those voyages shall be considered short which are made to the coast of Europe and the coasts of Asia and Africa by way of the Mediterranean, and as regards America, those made to the ports situated on the near side of the rivers of La Plata and Saint Lawrence and to the Islands lying between the coasts of Spain and the places named in this article.

799. If the insurance has been made for a limited time, there shall be a presumption of law that the loss occurred within the agreed time, saving the evidence which the insurer may produce that the loss happened after his liability had ended.

800. At the time of making the abandonment the assured must declare all the insurances effected on the abandoned effects, as well as the bottomry loans thereon, and until he has made this declaration, the time within which he is to be repaid the value of the effects, shall not commence to run.

If he commits fraud in this declaration, he shall lose all his rights under the insurance, without ceasing to be liable for the loans which he has borrowed on the insured effects notwithstanding their loss.

801. In case of the capture of the vessel, and the assured having no time to act in concert with the insurer, or to await his instructions, he on his own initiative, or the master in his default, must proceed to ransom the insured subject-matter, bringing it to the knowledge of the insurer on the first opportunity.

The latter may accept or not the agreement made by the assured or the master, and shall communicate his decision within the twenty four hours following the notification of the agreement.

If he accepts it, he shall at once pay the amount agreed for the ransom, and the subsequent risks of the voyage shall be borne by him, according to the terms of the policy. If he does not accept it, he shall pay the amount insured, and shall lose all right to the ransomed effects; and if he does not declare his decision within the time fixed above, it shall be understood that he rejects the agreement.

802. If the assured is reinstated in the possession of his effects through the vessel having been recaptured, all the expenses and damages caused by the loss shall be considered average, and the repayment shall be borne by the insurer; and if the insured effects pass to the possession of a third person in consequence of the recapture, the assured may make use of the right of abandonment.

803. If the abandonment is admitted, or declared admissible in an action, the ownership of the things which have been abandoned, with the ameliorations or deteriorations which happen to them from the moment of the abandonment, shall be transferred to the insurer, without his being exonerated from the payment by repairing the legally abandoned vessel.

804. No será admisible el abandono: 1.° Si las pérdidas hubieren ocurrido antes de empezar el viaje; — 2.° Si se hiciere de una manera parcial ó condicional, sin comprender en él todos los objetos asegurados; — 3.° Si no se pusiere en conocimiento de los aseguradores el propósito de hacerlo, dentro de los cuatro meses siguientes al día en que el asegurado haya recibido la noticia de la pérdida acaecida, y si no se formalizara el abandono dentro de diez, contados de igual manera, en cuanto á los siniestros ocurridos en los puertos de Europa, en los de Asia y África en el Mediterráneo, y en los de América desde ols ríos de La Plata á San Lorenzo, y dentro de diez y ocho respecto á los demás; — 4.° Si no se hiciere por el mismo propietario ó persona especialmente autorizada por él, ó por el comisionado para contratar el seguro.

805. En el caso de abandono, el asegurador deberá pagar el importe del seguro en el plazo fijado en la póliza, y no habiéndose expresado término en ella, á los sesenta días de admitido el abandono ó de haberse hecho la declaración del art. 803.

Título IV. De los riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo.

Sección primera. De las averías.

806. Para los efectos del Código, serán averías: 1.° Todo gasto extraordinario ó eventual que, para conservar el buque, el cargamento ó ambas cosas, ocurriere durante la navegación; — 2.° Todo daño ó desperfecto que sufriere el buque desde que se hiciere á la mar en el puerto de salida hasta dar fondo y anclar en el de su destino, y los que sufran las mercaderías desde que se cargaren en el puerto de expedición hasta descargarlas en el de su consignación.

807. Los gastos menudos y ordinarios propios de la navegación, como los de pilotaje de costas y puertos, los de lanchas y remolques, anclaje, visita, sanidad, cuarentenas, lazareto y demás llamados de puerto, los fletes de gabarras y descarga hasta poner las mercaderías en el muelle, y cualquier otro común á la navegación, se considerarán gastos ordinarios á cuenta del fletante, á no mediar pacto expreso en contrario.

808. Las averías serán: — 1.° Simples ó particulares; — 2.° Gruesas ó comunes.

809. Serán averías simples ó particulares, por regla general, todos los gastos y perjuicios causados en el buque ó en su cargamento que no hayan redundado en beneficio y utilidad común de todos los interesados en el buque y su carga, y especialmente las siguientes: 1.ª Los daños que sobrevinieren al cargamento desde su embarque hasta su descarga, así por vicio propio de la cosa, como por accidente de mar ó por fuerza mayor, y los gastos hechos para evitarlos y repararlos; — 2.ª Los daños y gastos que sobrevinieren al buque en su caso, aparejos, armas y pertrechos, por las mismas causas y motivos, desde que se hizo á la mar en el puerto de salida hasta que ancló y fondeó en el de su destino; — 3.ª Los daños sufridos por las mercaderías cargadas sobre cubierta, excepto en la navegación de cabotaje, si las ordenanzas marítimas lo permiten; — 4.ª Los sueldos y alimentos de la tripulación cuando el buque fuere detenido ó embargado por orden legítima ó fuerza mayor, si el fletamento estuviere contratado por un tanto el viaje; — 5.ª Los gastos necesarios de arribada á un puerto para repararse ó aprovisionarse; — 6.ª El menor valor de los géneros vendidos por el capitán en arribada forzosa, para pago de alimentos y salvar á la tripulación, ó para cubrir cualquiera otra necesidad del buque, á cuyo cargo vendrá el abono correspondiente; — 7.ª Los alimentos y salarios de la tripulación mientras estuviere el buque en cuarentena; — 8.ª El daño inferido al buque ó cargamento por el choque ó abordaje con otro, siendo fortuito é inevitable. Si el accidente ocurriere por culpa ó descuido del capitán, éste responderá de todo el daño causado; — 9.ª Cualquier daño que resultare al cargamento por faltas, descuido ó baraterías del capitán ó de la tripulación, sin perjuicio del derecho del propietario á la indemnización correspondiente contra el capitán, el buque y el flete.

810. El dueño de la cosa que dió lugar al gasto ó recibió el daño, soportará las averías simples ó particulares.

811. Serán averías gruesas ó comunes, por regla general, todos los daños y gastos que se causen deliberadamente para salvar el buque, su cargamento, ó ambas cosas á la vez, de un riesgo conocido y efectivo, y en particular las siguientes:

804. Abandonment shall not be admissible: 1. If the losses have occurred before the commencement of the voyage; — 2. If it is made partially or conditionally, without including all the insured objects therein; — 3. If the intention to make it is not brought to the knowledge of the insurers within the four months following the day on which the assured has received news of the happening of the loss, and if he does not formulate the abandonment within the ten months, reckoned in like manner, in the case of casualties which have occurred in the ports of Europe and in those of Asia and Africa in the Mediterranean, and in those of America between the rivers of La Plata and Saint Lawrence, and within eighteen months in the case of other casualties; — 4. If it is not effected by the owner himself or by a person specifically authorised thereto, or by the agent for contracting the insurance.

805. In case of abandonment, the insurer must pay the amount of the insurance in the time fixed by the policy, and if no time is stated therein, in sixty days from the abandonment being admitted or from the declaration in article 803 having been made.

Title IV. The risks, damages and accidents of maritime commerce.

First section. Average.

806. The following shall be average for the purpose of the Code: 1. Every extraordinary or fortuitous expense which occurs during the navigation, for the purpose of preserving the vessel, the cargo or both; — 2. Every damage or deterioration suffered by the vessel from her putting to sea at the port of departure until she casts anchor in that of her destination, and that suffered by the merchandise from its being shipped in the port of departure until it is discharged in that of its consignment.

807. The small and ordinary expenses proper to the navigation, such as those of pilotage of the coasts and ports, those of lighters and towage, anchoring, inspection, health, quarantine, lazareto and other so called port expenses, freights of lighters and discharge up to placing the merchandise on the wharf, and all others which are usual in navigation, shall be considered ordinary expenses to be borne by the shipowner, unless there is an express bargain to the contrary.

808. Average shall be: 1. Simple or particular; — 2. General or common.

809. As a general rule, simple or particular average shall be all the expenses and damages caused to a vessel or her cargo which have not redounded to the common benefit and profit of all persons interested in the vessel, in her hull and her cargo, and especially the following: 1. Damage suffered by the cargo from its shipment to its discharge, whether through inherent defect of the thing, or by accident of the sea or *vis major*, and the expenses incurred to avoid and repair it; — 2. Damage and expenses suffered by the vessel in her hull, tackle, arms and stores, through the same causes and reasons, from the time she put to sea at the port of departure to the time she cast anchor in that of her destination; — 3. Damage suffered by the merchandise loaded on deck, except in the coasting trade if the maritime Ordinances allow it; — 4. The pay and maintenance of the crew when the vessel is detained or arrested by lawful order or *vis major*, if the affreightment is contracted at a lump sum for the voyage; — 5. The necessary expenses of putting into a port for repairing or provisioning; — 6. The retail value of goods sold by the master at the port of refuge in order to pay for provisions and save the crew, or to meet any other necessity of the vessel, to the charge whereof the corresponding payment shall pertain; — 7. The maintenance and pay of the crew while the vessel is in quarantine; — 8. Damage inflicted on the vessel or cargo by collision with another, when it is fortuitous and unavoidable. If the accident occurs through the *culpa* or carelessness of the master, he shall be liable for all the damage caused; — 9. All damage happening to the cargo by the criminal negligence, carelessness or barratry of the master or of the crew, without prejudice to the right of the owner to the corresponding indemnity against the master, the vessel and the freight.

810. The owner of the thing which gave rise to the expense or received the damage shall bear simple or particular average.

811. By general rule, all the damages and expenses which are deliberately caused for the purpose of salving the vessel, her cargo, or both at once, from a known and actual risk, and particularly the following, shall be general or common average:

1.ª Los efectos ó metálico invertidos en el rescate del buque ó del cargamento apresado por enemigos, corsarios ó piratas, y los alimentos, salarios y gasto del buque detenido mientras se hiciere el arreglo ó rescate; — 2.ª Los efectos arrojados al mar para aligerar el buque, ya pertenezcan al cargamento, ya al buque ó á la tripulación, y el daño que por tal acto resulte á los efectos que se conserven á bordo; — 3.ª Los cables y palos que se corten ó inutilicen, las anclas y las cadenas que se abandonen, para salvar el cargamento, el buque ó ambas cosas; — 4.ª Los gastos de alijo ó trasbordo de una parte del cargamento para aligerar el buque y ponerlo en estado de tomar puerto ó rada, y el perjuicio que de ellos resulte á los efectos alijados ó trasbordados; — 5.ª El daño causado á los efectos del cargamento por la abertura hecha en el buque para desaguarlo é impedir que zozobre; — 6.ª Los gastos hechos para poner á flote un buque encallado de propósito con objeto de salvarlo; — 7.ª El daño causado en el buque que fuere necesario abrir, agujerear ó romper para salvar el cargamento; — 8.ª Los gastos de curación y limento de los tripulantes que hubieren sido heridos ó estropeados defendiendo ó salvando el buque; — 9.ª Los salarios de cualquier individuo de la tripulación detenido en rehenes por enemigos, corsarios ó piratas, y los gastos necesarios que cause en su prisión, hasta restituirse al buque, ó á su domicilio si lo prefiriere; — 10.ª El salario y alimentos de la tripulación del buque fletado por meses, durante el tiempo que estuviere embargado ó detenido por fuerza mayor ú orden del Gobierno, ó para reparar los daños causados en beneficio común; — 11.ª El menoscabo que resultare en el valor de los géneros vendidos en arribada forzosa para reparar el buque por causa de avería gruesa; — 12.ª Los gastos de la liquidación de la avería.

812. Á satisfacer el importe de las averías gruesas ó comunes contribuirán todos los interesados en el buque y cargamento existente en él al tiempo de ocurrir la avería.

813. Para hacer los gastos y causar los daños correspondientes á la avería gruesa, precederá resolución del capitán, tomada previa deliberación con el piloto y demás oficiales de la nave, y audiencia de los interesados en la carga que se hallaren presentes.

Si éstos se opusieren, y el capitán y oficiales, ó su mayoría, ó el capitán, separándose de la mayoría, estimaren necesarias ciertas medidas, podrán ejecutarse bajo su responsabilidad, sin perjuicio del derecho de los cargadores á ejercitar el suyo contra el capitán ante el juez ó tribunal competente, si pudieren probar que procedió con malicia, impericia ó descuido.

Si los interesados en la carga, estando en el buque, no fueren oídos, no contribuirán á la avería gruesa, imputable en esta parte al capitán, á no ser que la urgencia del caso fuere tal, que faltase el tiempo necesario para la previa deliberación[1]).

814. El acuerdo adoptado para causar los daños que constituyen avería común, habrá de extenderse necesariamente en el libro de navegación, expresando los motivos y razones en que se apoyó, los votos en contrario y el fundamento de la disidencia, si existiere, y las causas irresistibles y urgentes á que obedeció el capitán, si obró por sí.

En el primer caso, el acta se firmará por todos los presentes que supieren hacerlo, á ser posible, antes de proceder á la ejecución; y cuando no lo sea, en la primera oportunidad. En el segundo, por el capitán y los oficiales del buque.

En el acta, y después del acuerdo, se expresarán circunstanciadamente todos los objetos arrojados, y se hará mención de los desperfectos que se causen á los que se conserven en el buque. El capitán tendrá obligación de entregar una copia de esta acta á la autoridad judicial marítima del primer puerto donde arribe, dentro de las veinticuatro horas de su llegada, y de ratificarla luego con juramento[2]).

---

[1]) En los casos en que el capitán de una nave tenga que hacer constar las causas de las averías, arribada forzosa, naufragio, ó cualquier otro hecho por el cual pueda caberle responsabilidad, si no hubiere obrado con arreglo á lo que determina el Cód. de com., presentará al juez un escrito solicitando que se reciba declaración á los pasajeros y tripulantes acerca de los hechos que enumere. A dicho escrito acompañará el diario de navegación. — El juez, en su vista, recibirá la información ofrecida, y mandará testimoniar del libro de navegación la parte que se refiera al suceso y sus causas, entregando despues al capitán las actuaciones originales (art. 2173 y 2174, L. Enj. c.).

[2]) Véase la nota anterior.

1. Goods or cash spent in the ransom of the vessel or of the cargo captured by enemies, corsairs, or pirates, and the maintenance, pay and expense of the detained vessel while the arrangement or ransom is being effected; — 2. Effects thrown into the sea for lightening the vessel, whether they belong to the cargo, the vessel or the crew, and the damage caused by that act to the effects which are kept on board; — 3. Cables and spars which are cut away or rendered useless, anchors and chains which are abandoned, for the purpose of salving the cargo, the vessel or both; — 4. Expenses of lightening or transhipping one part of the cargo in order to lighten the vessel and place her in a condition to make a port or roadstead, and the damage resulting therefrom to the effects lightened or transhipped; — 5. Damage caused to the goods of the cargo by an opening made in the vessel in order to let out water and prevent her foundering; — 6. Expenses incurred in order to float a vessel which has been beached with the intention of salving her; — 7. Damage caused to a vessel which it is necessary to open, pierce or break up in order to salve the cargo; — 8. Expenses of treatment and maintenance of the members of the crew who have been wounded or maimed while defending or salving the vessel; — 9. The pay of any member of the crew who is detained hostage by enemies, corsairs or pirates, and the necessary expenses of his prison, until he is restored to the vessel, or, if he prefers it, to his home; — 10. The pay and maintenance of the crew of a vessel which is chartered by the month, during the time that she is arrested or detained by *vis major* or order of the Government, or in order to repair damage caused for the common benefit; — 11. Depreciation in the value of goods sold at a port of refuge in order to repair the vessel on account of a general average; — 12. Expenses of adjusting the average.

812. All persons interested in the vessel and cargo as existing therein at the time that the average occurred shall contribute to pay the amount of general or common average.

813. In order to incur the expenses and cause the corresponding injury to the accountof the general average, it shall be preceded by a decision of the master, after previous deliberation with the navigating officer and other officers of the ship, and after hearing those persons interested in the cargo who are present.

If the latter object, and the master and officers, or the majority thereof, or the master, apart from the majority, think certain measures necessary, they may be carried out under his responsibility, without prejudice to the right of the consignors to bring an action against the master before the competent judge or tribunal, if they can prove that he acted with malice, unskilfulness or carelessness.

If the persons interested in the cargo who are on the vessel are not heard, they shall not contribute to the general average, which as regards this share must be paid by the master, unless the urgency of the case was such that there was insufficient time for the previous deliberation[1]).

814. The decision adopted in order to cause the damage to constitute general average, must of necessity be written out in the log, stating the grounds and reasons on which it is based, the votes in opposition and the grounds of the dissent, if any, and the irresistible and urgent causes which the master obeyed, if he acted on his own initiative.

In the first case, the minute shall be signed by all the persons present who know how to do so, if possible before proceeding to carry it out; and when it is not, then on the first opportunity. In the second case, by the master and officers of the vessel.

In the minute and after the decision, there shall be stated in detail all the objects jettisoned, and mention shall be made of the damage which is caused to those which are kept on board the vessel. The master shall be bound to deliver a copy of this minute to the maritime judicial authority of the first port where he arrives, within twenty four hours of his arrival, and to ratify it promptly by oath[2]).

[1]) In cases in which the master of a ship has to prove the causes of the average, enforced call, shipwreck, or any other act for which he may be held liable if he has not acted according to the enactments of the Code of Commerce, he must present a written application to the judge to receive the declaration of the passengers and members of the crew concerning the acts which he enumerates. The log must accompany the said writing. The judge on inspection thereof must receive the proffered report, and must order a certified copy to be made of the part of the log which refers to the event and the causes thereof, and shall afterwards deliver the original records thereof to the master (art. 2173 and 2174 of the Law of Civil Procedure).

[2]) See the previous note.

815. El capitán dirigirá la echazón y mandará arrojar los efectos por el orden siguiente: 1.° Los que se hallaren sobre cubierta, empezando por los que embaracen la maniobra ó perjudiquen al buque, prefiriendo, si es posible, los más pesados y de menos utilidad y valor; — 2.° Los que estuvieren bajo la cubierta superior, comenzando siempre por los de más peso y menos valor, hasta la cantidad y número que fuese absolutamente indispensable.

816. Para que puedan imputarse en la averías gruesa y tengan derecho á indemnización los dueños de los efectos arrojados al mar, será preciso que, en cuanto á la carga, se acredite su existencia á bordo con el conocimiento; y, respecto á los pertenecientes al buque, con el inventario formado antes de la salida, conforme al párrafo primero del art. 612.

817. Si, aligerando el buque por causa de tempestad, para facilitar su entrada en el puerto ó rada, se trasbordase á lanchas ó barcas alguna parte del cargamento y se perdiere, el dueño de esta parte tendrá el derecho á la indemnización, como originada la pérdida de avería gruesa, distribuyéndose su importe entre la totalidad del buque y el cargamento de que proceda.

Si, por el contrario, las mercaderías trasbordadas se salvaren y el buque pereciere, ninguna responsabilidad podrá exigirse al salvamento.

818. Si, como medida necesaria para cortar un incendio en puerto, rada, ensenada ó bahía, se acordase echar á pique algún buque, esta pérdida será considerada avería gruesa, á que contribuirán los buques salvados.

Sección segunda. De las arribadas forzosas.[1]

819. Si el capitán, durante la navegación, creyere que el buque no puede continuar el viaje al puerto de su destino por falta de víveres, temor fundado de embargo, corsarios ó piratas, ó por cualquier accidente de mar que lo inhabilite para navegar, reunirá á los oficiales, citará á los interesados en la carga que se hallaren presentes y que pueden asistir á junta sin derecho á votar; y si, examinadas las circunstancias del caso, se considerase fundado el motivo, se acordará la arribada al puerto más próximo y conveniente, levantando y extendiendo en el libro de navegación la oportuna acta, que firmarán todos.

El capitán tendrá voto de calidad, y los interesados en la carga podrán hacer las reclamaciones y protestas que estimen oportunas, las cuales se insertarán en el acta para que las utilicen como vieren convenirles.

820. La arribada no se reputará legítima en los casos siguientes: 1.° Si la falta de víveres procediere de no haberse hecho el avituallamiento necesario para el viaje según uso y costumbre, ó si se hubieren inutilizado ó perdido por mala colocación ó descuido en su custodia; — 2.° Si el riesgo de enemigos, corsarios ó piratas no hubiere sido bien conocido, manifiesto y fundado en hechos positivos y justificables; — 3.° Si el desperfecto del buque proviniere de no haberlo reparado, pertrechado, equipado y dispuesto convenientemente para el viaje, ó de alguna disposición desacertada del capitán; — 4.° Siempre que hubiere en el hecho, causa de la avería, malicia, negligencia, imprevisión ó impericia del capitán.

821. Los gastos de la arribada forzosa serán siempre de cuenta del naviero ó fletante; pero éstos no serán responsables de los perjuicios que puedan seguirse á los cargadores por consecuencia de la arribada, siempre que ésta hubiere sido legítima.

En caso contrario, serán responsables mancomunadamente el naviero y el capitán.

822. Si para hacer reparaciones en el buque, ó porque hubiere peligro de que la carga sufriera avería, fuese necesario proceder á la descarga, el capitán deberá pedir al juez ó tribunal competente, autorización para el alijo[2]), y llevarlo á cabo con conocimiento del interesado, ó representante de la carga, si lo hubiere.

[1]) Véase la nota 1, pág. 204.

[2]) Para obtener esta autorización habrá de acudir al juez por escrito ó por comparecencia si fuese muy urgente el caso, pidiendo que el cargamento se reconozca por peritos; uno que desde luego designará el capitán y otro que nombrará el Ministerio fiscal en representación de los cargadores ausentes; sorteándose por el juez el tercero en caso de discordia. — Ordenará el juez que se practique el reconocimiento, el cual tendrá por objeto, según los casos, manifestar si la arribada para practicar reparaciones ha sido de absoluta necesidad, ó si la descarga es de precisión para evitar daño ó avería en el cargamento. — Si los peritos opinaren

815. The master shall direct the jettison and order the effects to be thrown in the following order: 1. Those which are on deck, beginning with those which embarass the working or damage the vessel, preferring, if possible, those which are heaviest and of least utility and value; — 2. Those which are under the upper deck, beginning always with those of greatest weight and least value, up to the absolutely indispensable quantity and number.

816. In order that they may be appropriated to general average and the owners of the effects thrown into the sea may be entitled to indemnity, it is necessary that, as regards the cargo, its existence on board should be proved by the bill of lading; and in respect of the appurtenances of the vessel, by the inventory drawn up before sailing, in accordance with the first paragraph of article 612.

817. If when lightening the vessel on account of tempest, in order to enable her to enter a port or roadstead, any part of the cargo is transhipped to lighters or boats and is lost, the owner of this part shall be entitled to the indemnity, as for a loss arising from general average, and the amount thereof shall be distributed between the whole of the vessel and the cargo from which it proceeds.

If, on the contrary, the transhipped merchandise is salved and the vessel perishes, no liability can be demanded of the salved merchandise.

818. If it is decided to sink any vessel as a necessary measure in order to cut short a fire in port, roadstead, creek or bay, this loss shall be considered general average, to which the salved vessels shall contribute.

Second Section. Calls at a port of refuge.[1])

819. If during the navigation, the master thinks that the vessel cannot continue the voyage to the port of her destination for want of provisions, a well founded fear of arrest, corsairs or pirates, or from any accident of the sea which makes her unseaworthy he shall assemble the officers, shall summon the persons interested in the cargo who are present and who may assist at the meeting without the right of voting, and if on examining the circumstances of the case, the reason is considered well founded, a call at the nearest and most convenient port shall be decided on, and the proper minute, signed by all, shall be drawn up and written out in the log.

The master shall have a casting vote, and the persons interested in the cargo may make the claims and protests which they think proper, which shall be inserted in the minute in order that they may make use of them as they may think fit.

820. The call shall not be considered lawful in the following cases: 1. If the want of provisions arises from the fact that the victualling for the voyage which is necessary according to usage and custom, has not been made, or if they have become useless or have been lost by bad storing or carelessness in their custody; — 2. If the risk of enemies, corsairs or pirates has not been well known, manifest and founded on positive and provable facts; — 3. If the damage to the vessel arises from not having properly repaired, furnished, equipped and arranged her for the voyage, or from any improper order of the master; — 4. Whenever the cause of the average is in fact the malice, negligence, want of foresight or of skill of the master.

821. The expenses of the forced call shall always be borne by the shipowner or managing owner; but they shall not be liable for damage which may be suffered by the consignors in consequence of the call, whenever this has been lawful.

In the contrary event the managing owner and the master shall be jointly liable.

822. If it is necessary to proceed to discharge, in order to make repairs to the vessel, or because there is danger of the cargo suffering damage, the master must apply to the competent judge or tribunal for authorisation to lighten[2]), and must accomplish it with the knowledge of the interested person, or of the representative of the cargo, if any.

---

[1]) See note 1, page 204.

[2]) In order to obtain this authorisation, he must apply to the judge by writing, or personally if the case is very urgent, asking that the cargo should be examined by experts; one whom the master must promptly name and another whom the Public Prosecutor shall appoint in representation of the absent consignors, and a third whom the judge shall appoint by lot, if there is a disagreement. — The judge must order that an examination take place, which shall have for its object, as the case may be, to show if the forced call to make repairs has been absolutely necessary, or if the discharge is necessary in order to avoid damage to the cargo. — If the experts

En puerto extranjero, corresponderá dar la autorizacion al cónsul español donde le haya.

En el primer caso, serán los gastos de cuenta del naviero, y en el segundo, correrán á cargo de los dueños de las mercaderías en cuyo beneficio se hizo la operación.

Si la descarga se verificara por ambas causas, los gastos se distribuirán proporcionalmente entre el valor del buque y el del cargamento.

823. La custodia y conservación del cargamento desembarcado estará á cargo del capitán, que responderá de él á no mediar fuerza mayor.

824. Si apareciere averiado todo el cargamento ó parte de él, ó hubiere peligro inminente de que se averiase, podrá el capitán pedir al juez ó tribunal competente, ó al cónsul, en su caso, la venta del todo ó parte de aquél, y el que de esto deba conocer, autorizarla, previo reconocimiento y declaración de peritos, anuncios y demás formalidades del caso, y anotación en el libro, conforme se previene en el art. 624[1]).

El capitán justificará en su caso la legalidad de su proceder, so pena de responder al cargador del precio que habrían alcanzado las mercaderías llegando en buen estado al puerto de su destino.

825. El capitán responderá de los perjuicios que cause su dilación, si, cesando el motivo que dió lugar á la arribada forzosa, no continuase el viaje.

Si el motivo de la arribada hubiere sido el temor de enemigos, corsarios ó piratas, precederán á la salida deliberación y acuerdo en junta de oficiales del buque é interesados en la carga que se hallaren presentes, en conformidad con lo dispuesto en el art. 819.

Sección tercera. De los abordajes.[2])

826. Si un buque abordase á otro, por culpa, negligencia ó impericia del capitán, piloto ú otro cualquiera individuo de la dotación, el naviero del buque abordador indemnizará los daños y perjuicios ocurridos, previa tasación pericial.

827. Si el abordaje fuese imputable á ambos buques, cada uno de ellos soportará su propio daño y ambos responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados en sus cargos.

828. La disposición del artículo anterior es aplicable al caso en que no pueda determinarse cuál de los dos buques ha sido causante del abordaje.

829. En los casos expresados, quedan á salvo la acción civil del naviero contra el causante del daño, y las responsabilidades criminales á que hubiere lugar.

830. Si un buque abordare á otro por causa fortuita ó de fuerza mayor, cada nave y su carga soportará sus propios daños.

831. Si un buque abordare á otro, obligado por un tercero, indemnizará los daños y perjuicios que ocurrieren el naviero de este tercer buque, quedando el capitán responsable civilmente para con dicho naviero.

832. Si, por efecto de un temporal ó de otra causa de fuerza mayor, un buque que se halla debidamente fondeado y amarrado, abordare á los inmediatos á él, causándoles averías, el daño ocurrido tendrá la consideración de avería simple del buque abordado.

833. Se presumirá perdido por causa de abordaje el buque que, habiéndolo sufrido, se fuera á pique en el acto. y también el que, obligado á ganar puerto para reparar las averías ocasionadas por el abordaje, se perdiese durante el viaje ó se viera obligado á embarrancar para salvarse.

834. Si los buques que se abordan tuvieren á bordo práctico ejerciendo sus funciones al tiempo del abordaje, no eximirá su presencia á los capitanes de las responsabilidades en que incurran; pero tendrán éstos derecho á ser indemnizados por los prácticos, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que éstos pudieran incurrir.

---

que debe procederse á la descarga, el juez la acordará, proveyendo lo necesario para la conservación del cargamento, y dará al capitán testimonio literal de todo lo actuado (art. 2147, 2148, 2149, 2153 y 2154 de la L. de Enj. c.).

[1]) El artículo 2155 de la L. de Enj. c. reproduce esta prescripción legal, diciendo además que la venta habrá de hacerse del modo que se indica en el Título siguiente. (Véase la pág. 126, nota 2.)

[2]) Véase la pág. 204, nota 1.

In a foreign port it shall be the duty of the Spanish consul, where there is one, to give the authorisation.

In the first case, the expenses shall be borne by the managing owner, and in the second, shall be at the charge of the owners of the merchandise for the benefit whereof the operation was effected.

If the discharge is made for both reasons, the expenses shall be distributed proportionately between the value of the vessel and that of the cargo.

823. The custody and preservation of the discharged cargo shall be in the charge of the master, who shall be responsible therefor in the absence of *vis major.*

824. If all the cargo appears to be damaged, or part thereof, or if there is imminent danger that it may become damaged, the master may apply to the competent judge or tribunal, or to the consul, as may be, for the sale of the whole or part thereof, and the person who should try this question, must authorise it, after previous examination and declaration by experts, advertisements and other formalities of the case, and entry in the log, according to the provisions of article 624[1]).

The master, on his side, shall prove the lawfulness of his action, on pain of being liable to the consignor for the price which the merchandise would have fetched if it arrived in good condition at the port of its destination.

825. The master shall be liable for the damage caused by his delay, if he does not continue the voyage when the reason which occasioned the forced call ceases to exist.

If the reason for the call has been the fear of enemies, corsairs or pirates, the sailing shall be preceded by the deliberation and decision in a meeting of the officers of the vessel and the persons interested in the cargo who are present, in accordance with the provisions of article 819.

Third Section. Collisions.[2])

826. If a vessel collides with another through the *culpa*, negligence or want of skill of the master, navigating officer or any other member of the ship's complement, the managing owner of the colliding vessel shall be liable for the damage which has occurred, after an appraisement by experts.

827. If the collision is attributable to both vessels, each shall bear her own damage and both shall be jointly and severally liable for the damage caused to their cargoes.

828. The provisions of the preceding article apply to the case in which it cannot be determined which of the two vessels has caused the collision.

829. In these cases, the civil action of the managing owner against the person who caused the damage and the criminal liabilities which may arise, shall be unaffected.

830. If a vessel collides with another through a fortuitous cause or *vis major*, each ship and her cargo shall bear their own damage.

831. If a vessel collides with another, but is forced so to do by a third vessel, the managing owner of this third vessel shall be liable for the damage which occurs, and the master shall be civilly liable to the said managing owner.

832. If a vessel which has been properly anchored and moored, collides with those next her and causes damage, by the effect of a tempest or other event of *vis major*, the damage which has occured shall be considered as particular average of the vessel collided with.

833. A vessel which promptly founders after being in collision shall be presumed lost on account of the collision, and so shall a vessel which, being obliged to make a port in order to repair damage caused by the collision, is lost during the voyage or is obliged to be beached in order to be salved.

834. If the colliding vessels have a pilot on board who is exercising his functions at the time of the collision, his presence shall not exempt the masters from the liabilities which they incur; but the latter shall be entitled to be indemnified by the pilots, without prejudice to the criminal liability which the latter may incur.

---

are of opinion that the discharge should proceed, the judge must order it, making the necessary provisions for the preservation of the cargo, and must give the master a literal certified copy of all the recorded proceedings (arts. 2147, 2148, 2149, 2153 and 2154 of the Law of Civil Procedure).

[1]) Art. 2155 of the Law of Civil Procedure reproduces this legal provision, saying also that the sale must be made in the manner shown in the following Title (see page 126, note 2).

[2]) See page 204, note 1.

835. La acción para el resarcimiento de daños y perjuicios que se deriven de los abordajes, no podrá admitirse si no se presenta dentro de las veinticuatro horas protesta ó declaración ante la autoridad del punto en que tuviere lugar el abordaje, ó la del primer puerto de arribada del buque, siendo en España, y ante el cónsul de España, si ocurriese en el extranjero.

836. Para los daños causados á las personas ó al cargamento, la falta de protesta no puede perjudiar á los interesados que no se hallaban en la nave ó no estaban en condiciones de manifestar su voluntad.

837. La responsabilidad civil que contraen los navieros en los casos prescritos en esta sección, se entiende limitada al valor de la nave con todas sus pertenencias y fletes devengados en el viaje.

838. Cuando el valor del buque y sus pertenencias no alcanzare á cubrir todas las responsabilidades, tendrá preferencia la indemnización debida por muerte ó lesiones de las personas.

839. Si el abordaje tuviere lugar entre buques españoles en aguas extranjeras, ó si, verificándose en aguas libres, los buques arribaren á puerto extranjero, el cónsul de España en aquel puerto instruirá la sumaria averiguación del suceso, remitiendo el expediente al capitán general del departamento más inmediato para su continuación y conclusión.

Sección cuarta. De los naufragios.[1])

840. Las pérdidas y desmejoras que sufran el buque y su cargamento á consecuencia de naufragio ó encalladura, serán individualmente de cuenta de los dueños, perteneciéndoles en la misma proporción los restos que se salven.

841. Si el naufragio ó encalladura procedieren de malicia, descuido ó impericia del capitán, ó porque el buque salió á la mar no hallándose suficientemente reparado y pertrechado, el naviero ó los cargadores podrán pedir al capitán la indemnización de los perjuicios causados al buque ó al cargamento por el siniestro, conforme á lo dispuesto en los artículos 610, 612, 614 y 621.

842. Los objetos salvados del naufragio quedarán especialmente afectos al pago de los gastos del respectivo salvamento, y su importe deberá ser satisfecho por los dueños de aquéllos antes de entregárselos, y con preferencia á otra cualquiera obligación si las mercaderías se vendiesen[2]).

843. Si, navegando varios buques en conserva, naufragare alguno de ellos, la carga salvada se repartirá entre los demás en proporción á lo que cada uno pueda recibir.

Si algún capitán se negase sin justa causa á recibir la que le corresponda, el capitán náufrago protestará contra él, ante dos oficiales de mar, los daños y perjuicios que de ello se sigan, ratificando la protesta dentro de las veinticuatro horas de la llegada al primer puerto, é incluyéndola en el expediente que debe instruir con arreglo á lo dispuesto en el art. 612.

Si no fuere posible trasladar á los demás buques todo el cargamento náufrago, se salvarán con preferencia los objetos de más valor y de menos volumen, haciéndose la designación por el capitán, con acuerdo de los oficiales de su buque.

844. El capitán que hubiere recogido los efectos salvados del naufragio continuará su rumbo al puerto de su destino, y, en llegando, los depositará, con intervención judicial[3]), á disposición de sus legítimos dueños.

En el caso de variar de rumbo, si pudiere descargar en el puerto á que iban consignados, el capitán podrá arribar á él si lo consintieren los cargadores ó sobrecargos presentes y los oficiales y pasajeros del buque; pero no lo podrá verificar, aun con este consentimiento, en tiempo de guerra ó cuando el puerto sea de acceso difícil y peligroso.

Todos los gastos de esta arribada serán de cuenta de los dueños de la carga así como el pago de los fletes que, atendidas las circunstancias del caso, se señalen por convenio ó por decisión judicial.

---

[1]) Véase la pág. 204, nota 1.

[2]) La venta de estos objetos habrá de decretarse por el juez en la forma indicada en la nota 2, pág. 126. Y su depósito previo, cuando fuere necesario, en la forma prevenida en la nota 1, pág. 124; todo ello á tenor de lo que dispone la regla 4.ª del art. 2161 de la L. de Enj. c.).

[3]) Para la constitución de este depósito véase la pág. 124, nota 1.

835. An action for compensation for damage arising from collision cannot be admitted unless a protest or declaration is presented within the twenty four hours to the authority of the place where the collision occurred, or to that of the first port of arrival of the vessel, if it is in Spain, and to the Consul of Spain, if it occurs abroad.

836. As regards damage caused to persons or the cargo, absence of the protest cannot prejudice the interested persons who are not in the ship or were not in a condition to manifest their wish.

837. The civil liability contracted by managing owners in the cases to which this section applies, shall be understood as limited to the value of the ship with all her appurtenances and the freights earned on the voyage.

838. When the value of the vessel and her appurtenances is not sufficient to cover all the liabilities, the compensation due for death or personal injury shall have preference.

839. If the collision took place beween Spanish vessels in foreign waters, or if, when it has occurred in extraterritorial waters, the vessels arrive at a foreign port, the Consul of Spain in that port shall draw up the summary of the investigation of the event, and send the file to the Captain General of the nearest Department for its continuation and conclusion.

Fourth Section. Shipwrecks.[1]

840. Losses and deteriorations suffered by the vessel and her cargo in consequence of shipwreck or stranding, shall be borne by the owners individually, and the remains which are salved shall belong to them in the same proportion.

841. If the shipwreck or stranding proceeds from the malice, want of care or of skill of the master, or because the vessel put to sea without having been sufficiently repaired and found, the managing owner or the consignors may sue the master for compensation for the damage caused to the vessel or the cargo by the casualty, according to the provisions of articles 610, 612, 614 and 621.

842. The articles salved from the wreck shall be specially affected to the payment of the expenses of the corresponding salving, and the amount thereof must be paid by the owners of those articles before they are delivered to them, and in preference to all other obligations, if the merchandise is sold[2]).

843. If, when several vessels are sailing in convoy, one of them is wrecked, the salved cargo shall be divided among the others in proportion to what each can receive.

If any master refuses to receive what falls to his share, without just cause, the shipwrecked master shall protest against him the damage which ensues therefrom, before two naval officers, and shall ratify the protest within twenty four hours of arriving at the first port, and shall include it in the file which he must draw up according to the provisions of article 612.

If it is not possible to tranship all the shipwrecked cargo to the other vessels, the objects of greatest value and least bulk shall be salved in preference, the choice lying with the master, in agreement with the officers of his vessel.

844. A master who has received the goods salved from the wreck shall continue his course to the port of his destination, and on arrival shall deposit them under the order of the court[3]), at the disposal of their lawful owners.

If by a deviation from the route it is possible to discharge at the port to which they were consigned, the master may call there, if the consignors or supercargoes who are present and the officers and passengers of the vessel consent thereto; but it cannot be done even with this consent, in time of war or when the port is of difficult and dangerous access.

All the expenses of this call shall be borne by the owners of the cargo, as well as the payment of the freights which, having regard to the circumstances of the case, are fixed by agreement or judicial decision.

---

1) See page 204, note 1.

2) The sale of these objects must be decreed by the judge as indicated in note 2, page 126; And their previous deposit, when necessary, as provided in note 1, page 124; and all with regard to the provisions of rule 4 of art. 2161 of the Law of Civil Procedure).

3) For the constitution of this deposit see p. 124 note 1.

845. Si en el buque no hubiere interesado en la carga que pueda satisfacer los gastos y los fletes correspondientes al salvamento, el juez ó tribunal competente podrá acordar la venta de la parte necesaria para satisfacerlos con su importe. Lo mismo se ejecutará cuando fuese peligrosa su conservación, ó cuando en el término de un año no se hubiese podido averiguar quiénes fueren sus legítimos dueños.

En ambos casos se procederá con la publicidad y formalidades determinadas en el art. 579, y el importe líquido de la venta se constituirá en depósito seguro[1]), á juicio del juez ó tribunal, para entregarlo á sus legítimos dueños.

Título V. De la justificación y liquidación de las averías.

Sección primera. Disposiciones comunes á toda clase de averías.

846. Los interesados en la justificación y liquidación de las averías podrán convenirse y obligarse mutuamente en cualquier tiempo acerca de la responsabilidad, liquidación y pago de ellas.

Á falta de convenios, se observarán las reglas siguientes: 1.ª La justificaciòn de la avería se verificará en el puerto donde se hagan las reparaciones, si fueren necesarias, ó en el de descarga[2]); — 2.ª La liquidación es hará en el puerto de descarga, si fuere español; — 3.ª Si la avería hubiere ocurrido fuera de las aguas jurisdiccionales de España, ó se hubiere vendido la carga en puerto extranjero por arribada forzosa, se hará la liquidación en el puerto de arribada; — 4.ª Si la avería hubiese ocurrido cerca del puerto de destino, de modo que se puedaa rribar á dicho puerto, en él se practicarán las operaciones de que tratan las reglas 1.ª y 2.ª

847. Tanto en el caso de hacerse la liquidación de las averías privadamente en virtud de lo convenido, como en el de intervenir la autoridad judicial á petición de cualquiera de los interesados no conformes, todos serán citados y oídos si no hubieren renunciado á ello.

Cuando no se hallaren presentes ó no tuvieren legítimo representante, se hará la liquidación por el cónsul en puerto extranjero, y donde no lo hubiere, por el juez ó tribunal competente, según las Leyes del país, y por cuenta de quien corresponda.

Cuando el representante sea persona conocida en el lugar donde se haga la liquidación, se admitirá y producirá efecto legal su intervención, aunque sólo esté autorizado por carta del naviero, del cargador ó del asegurador.

848. Las demandas sobre averías no serán admisibles si no excedieren del 5 por 100 del interés que el demandante tenga en el buque ó en el cargamento, siendo gruesas, y del 1 por 100 del efecto averiado, si fueren simples, deduciéndose en ambos casos los gastos de tasación, salvo pacto en contrario.

---

[1]) La venta y depósito á que se refiere este artículo se harán en la forma indicada en las nota 1, pág. 124 y nota 2, pág. 126.

[2]) Esta justificación se hará del modo siguiente: El capitán del buque dentro del plazo de 24 horas de haber llegado al puerto de descarga, marcado en el art. 624 del Cód. de com., presentará al juez el escrito de protesta, haciendo brevemente relación de todo lo ocurrido en el viaje con referencia al diario de navegación, y solicitará licencia para abrir las escotillas, designando al efecto el perito que por su parte haya de asistir al acto. A dicho escrito acompañará las diligencias de protesta que en otro puerto de arribada se hubieren instruído á su instancia. (Véase la pág. 205, nota 2.) — Presentado el escrito, el juez, dentro del mismo día, si fuere posible, con citación y audiencia de todos los interesados presentes, ó de sus consignatarios, recibirá declaración á los tripulantes y pasajeros en el número que estime conveniente, acerca de los hechos consignados por el capitán, y, practicada la información, dará licencia para abrir las escotillas. — La apertura de estas se hará á presencia del actuario de los peritos y del capitán de la nave, pudiendo asistir los cargadores y consignatarios; y reconocido que fuere el cargamento por los peritos, se extenderá la correspondiente acta que firmarán todos los concurrentes. Si los peritos no estuvieren conformes, el juez sorteará un tercero. — Abiertas las escotillas, y hecho constar el estado del cargamento, para que pueda procederse á la calificación, reconocimiento y liquidación de las averlas y su importe, el juez mandará requerir al capitán de la nave y á los interesados ó sus consignatarios, para que en el término de 24 horas nombren peritos, bajo apercibimiento de que si no lo hicieren serán nombrados de oficio. El capitán nombrará un perito por cada clase de géneros que haya de reconocerse, otro todos los interesados ó consignatarios, y el juez sorteará un tercero, caso de discordia (art. 2131, 2132, 2133 y 2171 de la L. de Enj. c.).

845. If there is no person interested in the cargo present on the vessel who can pay the expenses and the freights pertaining to the salving, the competent judge or tribunal may order a sale of the part necessary to pay them with its proceeds. The same shall be done when it is dangerous to keep it, or when it has not been possible to ascertain within the term of one year, who its lawful owners are.

Both cases shall proceed with the publication and formalities determined in article 579, and the net proceeds of the sale shall be safely deposited[1]) at the discretion of the judge or tribunal, for the purpose of delivering them to their lawful owners.

Title V. Proof and adjustment of average.

First Section. Provisions common to all classes of average.

846. The persons interested in the proof and settlement of the average may at any time agree and bind themselves mutually about the liabilities, adjustment and payment thereof.

In default of agreements, the following rules shall be observed: 1. The average shall be proved at the port where the repairs are executed, if they were necessary, or in that of discharge[2]); — 2. The adjustment shall take place at the port of discharge, if it is Spanish; — 3. If the average has occurred outside the territorial waters of Spain, or the cargo has been sold in a foreign port of forced refuge, the adjustment shall take place in the port of refuge; — 4. If the average has occurred near the port of destination, so that she can arrive at the said port, the operations treated of by rules 1 and 2 shall be effected therein.

847. Both in the case when the average is adjusted privately by virtue of an agreement, and when the judicial authority has intervened therein on the application of any of the persons interested who do not agree, all shall be summoned and heard, if they do not renounce their right.

When they are not present or have no lawful representative, the adjustment shall be made by the consul in a foreign port, and where there is none, by the judge or tribunal competent according to the laws of the country, and on behalf of the persons respectively concerned.

When the representative is a person known in the place where the adjustment is made, his intervention shall be allowed and shall take legal effect, although he is only authorised by letter of the managing owner, consignor or insurer.

848. Claims for average shall not be admitted if they do not exceed 5 per centum of the interest of the claimant in the vessel or cargo, in the case of general average, and 1 per centum of the article damaged, in the case of particular average, after deducting the expenses of valuation, saving a bargain to the contrary.

---

[1]) The sale and deposit to which this article refers must be made as indicated in note 1, page 124 and note 2, page 126.

[2]) This proof must be given in the following way: Within the space of twenty four hours after arriving at the port of discharge, pointed out by art. 624 of the Code of Commerce, the master must present the written protest to the judge, making a brief report of all that has occurred on the voyage and referring to the log, and must apply for leave to open the hatchways, naming for that purpose the expert who is to be present on his side at the operation. This writing must be accompanied by the measures of the protest, which have been drawn up at his instance in the other port of arrival (see page 205, note 2). — On the presentation of this document, and after summoning and hearing all the interested persons who are present or their consignees, the judge, on the same day if possible, shall take the evidence of the crew and passengers to the number he thinks suitable, about the facts stated therein by the master, and after the investigation has been ended, must give leave to open the hatchways. — The opening of the hatchways shall be effected in the presence of the clerk of the experts and of the master of the vessel, and the consignors and consignees may also be present; and after the cargo has been examined by the experts, the proper minute must be drawn up and signed by all the persons present. If the experts do not agree, the judge must appoint a third by lot. — After the hatchways have been opened and the condition of the cargo has been ascertained, the judge, for the purpose of making the classification, inspection and adjustment of the average and the amount thereof, must require the master of the vessel and the persons interested or their consignees, to appoint experts within the term of twenty four hours, warning them that if they fail to do so an appointment will be made by the Court. The master must appoint an expert for each class of goods to be examined, and all the persons interested or the consignees must appoint another, and in case of disagreement, the judge must appoint a third by lot (arts. 2131, 2132, 2133 and 2171 of the Law of Civil Procedure).

849. Los daños, averías, préstamos á la gruesa y sus premios, y cualesquiera otras pérdidas, no devengarán interés de demora sino pasado el plazo de tres días, á contar desde el en que la liquidación haya sido terminada y comunicada á los interesados en el buque, en la carga ó en ambas cosas á la vez.

850. Si, por consecuencia de uno ó varios accidentes de mar, ocurrieren en un mismo viaje averías simples y gruesas del buque, del cargamento ó de ambos, se determinarán con separación los gastos y daños pertenecientes á cada avería, en el puerto donde se hagan las reparaciones, ó se descarguen, vendan ó beneficien las mercaderías.

Al efecto, los capitanes estarán obligados á exigir de los peritos tasadores y de los maestros que ejecuten las reparaciones, así como de los que tasen ó intervengan en la descarga, saneamiento, venta ó beneficio de las mercaderías, que en sus tasaciones ó presupuestos y cuentas pongan con toda exactitud y separación los daños y gastos pertenecientes á cada avería, y en los de cada avería los correspondientes al buque y al cargamento, expresando también con separación si hay ó no daños que procedan de vicio propio de la cosa y no de accidente de mar; y en el caso de que hubiere gastos comunes á las diferentes averías y al buque y su carga, se deberá calcular lo que corresponda por cada concepto y expresarlo distintamente.

Sección segunda. De la liquidación de las averías gruesas.

851. Á instancia del capitán se procederá privadamente, mediante el acuerdo de todos los interesados, al arreglo, liquidación y distribución de las averías gruesas.

Á este efecto, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á la llegada del buque al puerto, el capitán convocará á todos los interesados para que resuelvan si el arreglo ó liquidación de las averías gruesas habrá de hacerse por peritos y liquidadores nombrados por ellos mismos, en cuyo caso se hará así, habiendo conformidad entre los interesados.

No siendo la avenencia posible, el capitán acudirá al juez ó tribunal competente, que lo será el del puerto donde hayan de practicarse aquellas diligencias, conforme á las disposiciones de este Código, ó al cónsul de España, si lo hubiese, y si no, á la autoridad local, cuando hayan de verificarse en puerto extranjero.

852. Si el capitán no cumpliere con lo dispuesto en el artículo anterior, el naviero ó los cargadores reclamarán la liquidación, sin perjuicio de la acción que les corresponda para pedirle indemnización.

853. Nombrados los peritos por los interesados ó por el juez ó tribunal, procederán, previa la aceptación, al reconocimiento del buque y de las reparaciones que necesite y á la tasación de su importe, distinguiendo estas pérdidas y daños de los que provengan de vicio propio de las cosas.

También declararán los peritos si pueden ejecutarse las reparaciones desde luego, ó si es necesario descargar el buque para reconocerlo y repararlo.

Respecto á las mercaderías, si la avería fuere perceptible á la simple vista, deberá verificarse su reconocimiento antes de entregarlas. No apareciendo á la vista al tiempo de la descarga, podrá hacerse después de su entrega, siempre que se verifique dentro de las cuarenta y ocho horas de la descarga, y sin perjuicio de las demás pruebas que estimen convenientes los peritos[1]).

[1]) Cuando los interesados no se hayan previamente convenido ó no estén de acuerdo para hacer esta regulación de las averías y sea preciso por tanto la intervención judicial, nombrados que sean los peritos á que se refiere la nota anterior en su última parte, el juez les señalará un término breve para presentar su informe, en el que harán la calificación de las averías, enumerando con la precisión posible: 1.° Las simples ó particulares. 2.° Las gruesas ó comunes. — Este informe se pondrá de manifiesto en la escribanía por término de 3 días, dentro del que los interesados podrán consignar, por medio de comparecencia ante el actuario, la razón que tengan para no prestarle su conformidad. — Si alguno no estuviere conforme con el dictamen de los peritos, el juez, al siguiente día de transcurrido el indicado término, convocará á los interesados para una comparecencia en el inmediato, en la que expondrán estos las justificaciones que creyeren necesarias, extendiéndose de todo ello el acta correspondiente. Y hecho esto, el juez dentro de segundo día dictará auto acordando la resolución que proceda. Este auto será apelable en un solo efecto. (Véase el vocabulario que figura en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.» la palabra *Apelación*. — Cuando todos los interesados hubieren prestado su conformidad al informe pericial sobre la liquidación de la avería, ó se hubiere dictado el auto á que se refiere el párrafo anterior, el juez ordenará que los

849. Damages, average, bottomry loans and their premiums, and all other losses shall not earn interest for delay, except after the expiration of three days, reckoned from the day on which the adjustment has been terminated and communicated to the persons interested in the vessel, in the cargo or in both at once.

850. If particular and general average happen to the vessel, the cargo or both, on the same voyage, as a consequence of one or more accidents at sea, the expenses and damage belonging to each average shall be determined separately at the port where the repairs are made, or the merchandise is discharged, sold or benefited.

For this purpose, masters shall be bound to require the expert valuers and the contractors who carry out the repairs, as well as those who value or take part in the discharge, reparation, sale or benefit of the merchandise, that in their valuations, estimates and accounts they separately and with perfect correctness enter the damage and expenses belonging to each average, and in those of each average, those belonging to the vessel and the cargo, and also separately stating whether there is any damage which arises from the inherent defect of the thing and not from a sea accident; and in case there are expenses common to different averages both to the vessel and her cargo, that which belongs on each ground must be calculated and stated distinctly.

Second Section. Adjustment of general average.

851. The settlement, adjustment, and distribution of general average shall take place privately at the instance of the master and by concert with all the interested persons.

For this purpose, within forty eight hours following the arrival of the vessel at the port, the master shall summon all the interested persons in order that they may decide if the settlement or adjustment of the general average is to be made by experts, and adjusters appointed by themselves, in which case it shall be so effected, if there is agreement to that effect among the persons interested.

If no agreement is possible, the master shall apply to the competent judge or tribunal, which shall be that of the port where those steps have to be taken according to the provisions of this Code, or to the consul of Spain, if any, and if not, to the local authority, when they have to be effected in a foreign port.

852. If the master does not comply with the provisions of the preceding article, the managing owner or the consignors shall claim the adjustment, without prejudice to their right of action to sue him for compensation.

853. When the experts have been appointed by the interested persons or the judge or tribunal, they shall, after accepting the appointment, proceed to the examination of the vessel and of the repairs which she requires and to the valuation of their amount, distinguishing these losses and damages from those which arise from the inherent defect of the things.

The experts shall also declare if the repairs can be carried out at once, or if it is necessary to unload the vessel in order to examine and repair her.

With regard to the merchandise, if the average is perceptible on a mere view, its examination must be made before the delivery thereof. If it is not apparent at sight at the time of its discharge, it may be effected after the delivery thereof, provided that it takes place within forty eight hours of the discharge and without prejudice to other evidence which the experts may think suitable[1]).

[1]) When the interested persons have not previously agreed or are not of accord for making this adjustment of the average, and judicial intervention is therefore necessary, and the experts to whom the last part of the preceding note refers have been appointed, the judge shall appoint them a short term for presenting their report, wherein they must make the classification of the average and enumerate with all possible precision: 1. The simple or particular average. — 2. The general or common average. — This report shall be exhibited in the secretary's office for the term of 3 days, within which the persons interested may appear before the master of the Court and may point out their reasons for not agreeing thereto. If any of them does not agree with the decision of the experts, the judge, on the day following the expiration of the said term, shall summon the persons interested immediately to appear before him, and they shall then set forth the evidence which they consider necessary, and the whole shall be written out in the corresponding record. And, when this has been done, the judge shall pronounce a decree within the second day and give the suitable decision. This decree shall be appealable without stay of execution. (See the vocabulary in the study "Judicial proceedings in mercantile civil matters", unter the word *Apelación.*) — When all the interested persons have expressed their agreement with the expert report on the adjustment of the average, or the decree to which the previous

854. La evaluación de los objetos que hayan de contribuir á la avería gruesa, y la de los que constituyen la avería, se sujetará á las reglas siguientes: 1.ª Las mercaderías salvadas que hayan de contribuir al pago de la avería gruesa, se valuarán al precio corriente en el puerto de descarga, deducidos fletes, derechos de aduanas y gastos de desembarque, según lo que aparezca de la inspección material de las mismas, prescindiendo de lo que resulte de los conocimientos, salvo pacto en contrario; — 2.ª Si hubiere de hacerse la liquidación en el puerto de salida, el valor de las mercaderías cargadas se fijará por el precio de compra con los gastos hasta ponerlas á bordo, excluído el premio del seguro; — 3.ª Si las mercaderías estuvieren averiadas, se apreciarán por su valor real; — 4.ª Si el viaje se hubiere interrumpido, las mercaderías se hubieren vendido en el extranjero, y la avería no pudiere regularse, se tomará por capital contribuyente el valor de las mercaderías en el puerto de arribada, ó el producto líquido obtenido en su venta; — 5.ª Las mercaderías perdidas que constituyeren la avería gruesa se apreciarán por el valor que tengan las de su clase en el puerto de descarga, con tal que consten en los conocimientos sus especies y calidades; y no constando, se estará á lo que resulte de las facturas de compra expedidas en el puerto de embarque, aumentando á su importe los gastos y fletes causados posteriormente; — 6.ª Los palos cortados, las velas, cables y demás aparejos del buque inutilizados con el objeto de salvarlo, se apreciarán según el valor corriente, des contando una tercera arte por diferencia de nuevo á viejo. Esta rebaja no se hará en las anclas y cadenas; — 7.ª El buque se tasará por su valor real en el estado en que se encuentre; — 8.ª Los fletes representarán el 50 por 100 como capital contribuyente.

855. Las mercaderías cargadas en el combés del buque contribuirán á la avería gruesa si se salvaren; pero no darán derecho á indemnización si se perdieren habiendo sido arrojadas al mar por salvamento común, salvo cuando en la navegación de cabotaje permitieren las Ordenanzas marítimas su carga en esa forma.

Lo mismo sucederá con las que existan á bordo y no consten comprendidas en los conocimientos ó inventarios, según los casos.

En todo caso, el fletante y el capitán responderán á los cargadores de los perjuicios de la echazón, si la colocación en el combés se hubiere hecho sin consentimiento de éstos.

856. No contribuirán á la avería gruesa las municiones de boca y guerra que lleve el buque, ni las ropas ni vestidos de uso de su capitán, oficiales y tripulación.

También quedarán exceptuados las ropas y vestidos de uso de los cargadores, sobrecargos y pasajeros que al tiempo de la echazón se encuentren á bordo.

Los efectos arrojados tampoco contribuirán al pago de las averías gruesas que ocurran á las mercaderías salvadas en riesgo diferente y posterior.

857. Terminada por los peritos la valuación de los efectos salvados, y de los perdidos que constituyan la avería gruesa, hechas las reparaciones del buque, si hubiere lugar á ello, y aprobadas en este caso las cuentas de las mismas por los interesados ó por el juez ó tribunal, pasará el expediente íntegro al liquidador nombrado para que proceda á la distribución de la avería[1]).

---

mismos peritos hagan, dentro del término que les fije, la cuenta y liquidación de las averías gruesas ó comunes. — Para hacer esta cuenta los peritos formarán 4 estados: el primero de los daños y gastos que consideren averías comunes, ó masa de averías; el segundo, de las cosas sujetas á la contribución de las averías comunes, ó masa imponible; el tercero, del repartimiento de la masa de averías entre las cosas sujetas á contribución; y el cuarto, de contribuciones efectivas y reembolsos efectivos. — Si los peritos no cumplieren su cometido dentro del término que se les haya fijado, el juez deberá apremiarles de oficio para que lo cumplan. — Presentados por los peritos los cuatro estados que han de formar, se pondrán de manifiesto en la escribania por término de 6 dias para que los interesados por comparecencia ante el actuario expongan la razón que tuvieren para no prestar su conformidad. — Si todos los interesados estuvieren conformes, el juez aprobará el repartimiento. Y si por no estarlo, hubiese el juez ordenado la comparecencia de los que no prestaren su conformidad, dentro de tres días dictará auto aprobando el repartimiento en la forma en que lo hayan presentado los peritos ó con las modificaciones que estime justas. Este auto será apelable en ambos efectos (art. 2134 al 2143 inclusive de la L. de Enj. c.).

[1]) Respecto á la distribución y liquidación véase la nota anterior.

854. The valuation of the objects which have to contribute to general average and that of those which constitute the average, shall be subject to the following rules: 1. The salved merchandise which has to contribute to general average shall be valued at the price current in the port of discharge, deducting the freights, customs duties and expenses of unloading, according to the appearance as shown by material inspection thereof, apart from the statements in the bills of lading, saving a bargain to the contrary; — 2. If the adjustment has to be made in the port of departure, the value of the shipped merchandise shall be fixed by the purchase price with the expenses up to placing it on board, excluding the insurance premium; — 3. If the merchandise is damaged, it shall be valued at its actual value; — 4. If the voyage has been interrupted, and the merchandise has to be sold abroad, and the average cannot be adjusted, the value of the merchandise at the port of arrival or the net proceeds obtained by its sale shall be taken as the contributing capital; — 5. Lost merchandise which constitutes the general average shall be appraised at the value of merchandise of its class in the port of discharge, provided that its species and qualities appear in the bills of lading; and if it does not appear, it shall abide by the result of the purchase invoices issued at the port of loading, increasing their amount by the expenses and freights incurred subsequently; — 6. Spars which have been cut away, sails, cables and other tackle of the vessel which have been rendered useless with the object of salving it, shall be appraised at their current value, deducting a third part as the difference between new and old. This reduction shall not be made in the case of anchors and chains; — 7. The vessel shall be appraised at her actual value in her then state; — 8. The freights shall stand at 50 per centum as contributing value.

855. Merchandise loaded in the waist of a vessel shall contribute to general average if it is salved; but shall not give a right to compensation if is it lost through having been jettisoned for the common safety, except when the Maritime Ordinances allow it to be loaded in this way on coasting voyages.

The same shall happen with regard to merchandise on board which does not appear to be included in bills of lading or inventories, as may be.

In every case, the shipowner and the master shall be liable to the consignors for damages for the jettison, if the placing in the waist was done with their consent.

856. Munitions for fire-arms and war carried by the vessel, garments and clothes for the use of the master, officers and crew, shall not contribute to general average.

Likewise the garments and clothes for the use of the consignors, supercargoes and passengers who are on board at the time of the jettison shall be excepted.

Nor shall jettisoned effects contribute to the payment of general average which occurs to the salved merchandise by a different and later risk.

857. When the valuation of the salved effects by the experts has been finished, and that of the lost effects which constitute the general average, when the repairs to the vessel have been carried out, if there is occasion therefor, and when in this case, the accounts thereof have been approved by the interested persons or by the judge or tribunal, the whole file shall go to the adjuster appointed to proceed with the apportionment of the average[1]).

---

article refers has been pronounced, the judge shall order that the same experts shall make the account and adjustment of the general average within the term which he fixes for them. — In order to form this account, the experts shall form 4 headings: the first of the damage and expenses which they consider general average, or the mass of average; the second, of the things subject to contribution to general average, or the subject mass; the third, the division of the mass of average between the things subject to contribution; and the fourth, of actual contributions and actual payments. — If the experts do not fulfil their duty within the time which has been fixed, the judge must of his own accord compel them to fulfil it. — When the four headings which they have to form have been presented by the experts, they shall be exhibited in the secretary's office for the term of six days in order that the persons interested may appear before the master of the Court and explain their reasons for not expressing their conformity. — If all the persons interested are in agreement, the judge shall approve the division. And if, because of the absence of agreement, the judge has ordered the appearance of those who have not expressed their conformity, he shall pronounce his decree within three days, approving the division in the form in which the experts have presented it or with the alterations which he thinks just. This decree shall be appealable with stay of execution (arts. 2134 to 2143 inclusive, of the Law of Civil Procedure).

[1]) As to apportionment and adjustment see the previous note.

858. Para verificar la liquidación, examinará el liquidador la protesta del capitán, comprobándola, si fuere necesario, con el libro de navegación, y todos los contratos que hubieren mediado entre los interesados en la avería, las tasaciones, reconocimientos periciales y cuentas de reparaciones hechas. Si, por resultado de este examen, hallare en el procedimiento algún defecto que pueda lastimar los derechos de los interesados ó afectar la responsabilidad del capitán, llamará sobre ello la atención para que se subsane, siendo posible, y, en otro caso, lo consignará en los preliminares de la liquidación.

En seguida procederá á la distribución del importe de la avería, para lo cual fijará: 1.° El capital contribuyente, que determinará por el importe del valor del cargamento, conforme á las reglas establecidas en el artículo 854; — 2.° El del buque en el estado que tenga, según la declaración de peritos; — 3.° El 50 por 100 del importe del flete, rebajando el 50 por 100 restante por salarios y alimentos de la tripulación.

Determinada la suma de la avería gruesa conforme á lo dispuesto en este Código, se distribuirá á prorrata entre los valores llamados á costearla.

859. Los aseguradores del buque, del flete y de la carga estarán obligados á pagar por la indemnización de la avería gruesa tanto cuanto se exija á cada uno de estos objetos respectivamente.

860. Si, no obstante la echazón de mercaderías, rompimiento de palos, cuerdas y aparejos, se perdiere el buque corriendo el mismo riesgo, no habrá lugar á contribución alguna por avería gruesa.

Los dueños de los efectos salvados no serán responsables á la indemnización de los arrojados al mar, perdidos ó deteriorados.

861. Si, después de haberse salvado el buque del riesgo que dió lugar á la echazón, se perdiere por otro accidente ocurrido durante el viaje, los efectos salvados y subsistentes del primer riesgo continuarán afectos á la contribución de la avería gruesa, según su valor en el estado en que se encuentren, deduciendo los gastos hechos para su salvamento.

862. Si, á pesar de haberse salvado el buque y la carga por consecuencia del corte de palos ó de otro daño inferido al buque deliberadamente con aquel objeto, luego se perdieren ó fueren robadas las mercaderías, el capitán no podrá exigir de los cargadores ó consignatarios que contribuyan á la indemnización de la avería, excepto si la pérdida ocurriere por hecho del mismo dueño ó consignatario.

863. Si el dueño de las mercaderías arrojadas al mar las recobrase después de haber recibido la indemnización de avería gruesa, estará obligado á devolver al capitán y á los demás interesados en el cargamento la cantidad que hubiere percibido, deduciendo el importe del perjuicio causado por la echazón y de los gastos hechos para recobrarlas.

En este caso, la cantidad devuelta se distribuirá entre el buque y los interesados en la carga, en la misma proporción con que hubieren contribuído al pago de la avería.

864. Si el propietario de los efectos arrojados los recobrare sin haber reclamado indemnización, no estará obligado á contribuir al pago de las averías gruesas que hubieren ocurrido al resto del cargamento después de la echazón.

865. El repartimiento de la avería gruesa no tendrá fuerza ejecutiva hasta que haya recaído la conformidad, ó, en su defecto, la aprobación del juez ó tribunal, previo examen de la liquidación y audiencia instructiva de los interesados presentes ó de sus representantes.

866. Aprobada la liquidación, corresponderá al capitán hacer efectivo el importe del repartimiento, y será responsable á los dueños de las cosas averiadas de los perjuicios que por su morosidad ó negligencia se les sigan[1]).

867. Si los contribuyentes dejaren de hacer efectivo el importe del repartimiento en el término de tercer día después de haber sido á ello requeridos, se proce-

[1]) Y si el capitán del buque no cumpliese con esta obligación, los dueños de las cosas averiadas podrán acudir al juez para que le obligue á ello. En este caso, el juez mandará requerir al capitán para que en el breve término que al efecto se le señale haga efectivo el repartimiento, apercibiéndole de que será responsable de su morosidad ó negligencia (art. 2144 y 2145 de la L. de Enj. c.).

858. For the purpose of effecting the adjustment, the adjuster shall examine the protest of the master, comparing it, if necessary, with the log, and all the contracts which have taken place between the persons interested in the average, the valuations, the expert examinations and the accounts of repairs done. If, from the result of this examination, he finds any defect in the proceeding which may injure the rights of the persons interested or affect the liability of the master, he shall call attention thereto, in order that it may be remedied, if possible, and if otherwise, he shall state the fact in the preliminaries of the adjustment.

He shall forthwith proceed to the adjustment of the amount of the average, for which purpose he shall fix: 1. The contributing value, which he shall determine by the amount of the value of the cargo, according to the rules enacted by article 854; — 2. That of the vessel in her then state, according to the declaration of experts; — 3. The 50 per centum of the amount of the freight, reducing the remaining 50 per centum by the pay and maintenance of the crew.

When the sum of the general average has been determined according to the provisions of this Code, it shall be apportioned *pro rata* between the values which have to bear it.

859. The insurers of the vessel, the freight and the cargo shall be obliged to pay as much as is required for each of these objects repectively, by way of indemnity for general average.

860. If the vessel is lost through running the same risk, nothwithstanding the jettison of merchandise, cutting away of spars, ropes, and tackle, no contribution by way of general average shall arise.

The owners of the salved effects shall not be liable to contribute for those thrown into the sea, lost or damaged.

861. If, after the vessel has been salved from the risk which occasioned the jettison, she is lost through another accident occurring during the voyage, the salved effects which survive the first risk shall continue liable to contribute to the general average, according to their value in their then condition after deducting the expenses incurred for their salving.

862. If, in spite of the vessel and cargo having been salved in consequence of the cutting away of spars or other damage deliberately inflicted on the vessel with that object, the merchandise is forthwith lost or stolen, the master cannot require the consignors or consignees to contribute to the average, unless the loss occurs by the act of the owner or consignee thereof.

863. If the owner of the merchandise thrown into the sea recovers it after having received the compensation for general average, he shall be bound to return the amount which he has received to the master and the other persons interested in the cargo, after deducting the amount of the damage caused by the jettison and the expenses incurred in recovering it.

In this case, the amount returned shall be apportioned between the vessel and the persons interested in the cargo in the same proportion as they have contributed to the payment of the average.

864. If the owner of the jettisoned effects recovers them without having claimed compensation, he shall not be obliged to contribute to the payment of the general average which has occurred to the rest of the cargo after the jettison.

865. The apportionment of the general average shall not have executive effect until it has been agreed, or, in default thereof, it has been approved by the judge or tribunal, after previous examination of the adjustment and explanatory hearing of the persons interested who are present or their representatives.

866. When the adjustment has been approved, it shall be the duty of the master to realise the amount of the apportionment, and he shall be liable to the owners of the things damaged for the damage occasioned them by his delay or negligence[1]).

867. If the contributors fail to deliver the amount of the apportionment within the term of the third day after having been thereto required, proceedings shall be

---

[1]) And if the master of the vessel fails to fulfil this obligation, the owners of the damaged things may apply to the judge to compel him thereto. In this case the judge shall order that the master be required to make the apportionment effective within a short time which he appoints him for that purpose, warning him that he will be responsible for his delay or negligence (arts. 2144 and 2145 of the Law of Civil Procedure).

derá, á solicitud del capitán, contra los efectos salvados, hasta verificar el pago con su producto[1]).

868. Si el interesado en recibir los efectos salvados no diere fianza suficiente para responder de la parte correspondiente á la avería gruesa, el capitán podrá diferir la entrega de aquéllos hasta que se haya verificado el pago.

Sección tercera. De la liquidación de las averías simples.

869. Los peritos que el juez ó tribunal ó los interesados nombren, según los casos, procederán al reconocimiento y valuación de las averías en la forma prevenida en el art. 853 y en el 854, reglas 2.ª á la 7.ª, en cuanto les sean aplicables.

Libro cuarto. De la suspensión de pagos, de las quiebras y de las prescriptiones.

Título primero. De la suspensión de pagos y de la quiebra en general.

Sección primera. De la suspensión de pagos, y de sus efectos.[2])

870.[3]) El comerciante que poseyendo bienes suficientes para cubrir todas sus deudas prevea la imposibilidad de efectuarlo á las fechas de sus respectivos vencimientos, podrá constituirse en estado de suspensión de pagos, que declarará el Juez de primera instancia de su domicilio en vista de su manifestación.

871. También podrá el comerciante que posea bienes suficientes para cubrir todo su pasivo, presentarse en estado de suspensión de pagos dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento de una obligación que no haya satisfecho.

872. El comerciante que pretenda se le declare en estado de suspensión de pagos, deberá acompañar á su instancia el balance de su activo y pasivo, y la proposición de la espera que solicite de sus acreedores, que no podrá exceder de tres años. Si bajo cualquiera forma se pretendiese quita ó rebaja de los créditos, se negará el Juez á tramitar la solicitud de suspensión de pagos.

873. El expediente de suspensión de pagos se acomodará á los trámites marcados en la ley especial[4]).

Si la espera fuese desestimada por la Junta, quedará terminado el expediente.»

Lo dispuesto en los art. 870 al 873 será aplicable á las suspensiones de pagos de las Sociedades y Empresas no comprendidas en el art. 930.

Para que dichas Sociedades no comprendidas en el art. 930 puedan constituirse en estado de suspensión de pagos, será indispensable el acuerdo de los socios, adoptado en junta general, precisamente convocada al efecto, dentro del término señalado en el art. 871. Para la reunión de la junta se fijarán los plazos más breves que consientan los estatutos ó escritura social.

Sección segunda. Disposiciones generales sobre las quiebras.[5])

874. Se considera en estado de quiebra al comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones.

[1]) A este efecto el capitán solicitará del juez el depósito y venta en pública subasta de los efectos salvados que fueren necesarios para cobrar las cuotas no satisfechas. — Este depósito y venta se harán en la forma indicada en la nota 1, pag. 124 (art. 2146 de la L. de Enj. c.).

[2]) La suspensión de pagos, implantada por el Cód. de comercio vigente, no tiene en la L. de Enj. c., que es de 1881 ni en ninguna otra, precepto ninguno de carácter procesal que le sea aplicable, fuera de lo relativo al convenio con los acreedores de la quiebra, apesar de que una y otra vez han prometido los Gobiernos suplir esta deficiencia. Así es que hoy se rige por lo que jueces y magistrados estatuyen en cada caso, con arreglo á su leal saber y entender.

[3]) Los articulos 870, 871, 872 y 873 han sido modificados y redactados de nuevo en esta forma por la ley de 10 de junio de 1897.

[4]) Que no se ha dictado todavía, como hemos dicho en la nota anterior, á pesar de que el Cód. de com. está en vigor desde 1885, es decir, desde hace 26 años.

[5]) El procedimiento de quiebras puede verse en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.».

taken on the application of the master against the effects salved, to an amount sufficient to meet the payment with their proceeds[1]).

868. If on receiving the salved effects, the interested person does not give security sufficient to answer for the corresponding part of the general average, the master may postpone the delivery thereof until payment is made.

Third Section. Adjustment of particular average.

869. The experts appointed by the judge or tribunal or interested persons, as may be, shall proceed to the examination and valuation of the average as provided in article 853 and in article 854, rules 2 to 7, so far as they apply.

Fourth Book. Suspension of payment, bankruptcies and prescription.

Title I. Suspension of payment and bankruptcy in general.

First Section. Suspension of payment, and its effects.[2])

870.[3]) A merchant who is in the possession of sufficient assets to meet all his debts but foresees the impossibility of doing so on their respective due dates, may place himself in a state of suspension of payment, which shall be declared by the judge of first instance of his address on inspection of his statement.

871. Likewise a merchant who possesses sufficient assets to meet all his liabilities, may place himself in a state of suspension of payment within twenty four hours following the maturity of an obligation which he has not met.

872. A merchant who proposes that he should be declared in a state of suspension of payment, must accompany his application with the balance sheet of his assets and liabilities, and his proposal for the delay which he asks from his creditors, which must not exceed three years. If in any way he claims a partial release or abatement of the debts, the judge shall refuse to allow the application for suspension of payment to proceed.

873. The file for the suspension of payment shall follow the procedure laid down in the special law[4]).

If the delay is rejected by the meeting of creditors, the file shall be closed.

The provisions of articles 870 to 873 shall apply to the suspension of payment of societies and undertakings which are not included in article 930.

In order that the said societies, which are not included in article 930, may be placed in a state of suspension of payment, a resolution of the members, passed in a general meeting specially summoned for that purpose within the time named in article 871, shall be indispensable. The shortest times shall be fixed for the assembling of the meeting consistent with the constitution or social instrument.

Second Section. General bankruptcy provisions.[5])

874. A merchant who fails to effect the current payment of his obligations is considered in a state of bankruptcy.

[1]) For this purpose, the master must apply to the judge for the deposit and sale by public auction of the salved effects so far as necessary to meet the unsatisfied contributions. — This deposit and sale shall be made as indicated in note 1, page 124 (art. 2146 of the Law of Civil Procedure).

[2]) Suspension of payment, introduced by the present Code of Commerce, has no precept in the nature of procedure which applies thereto either in the Law of Civil Procedure of 1881 or in any other law, except what relates to the arrangement with the creditors of the bankruptcy, in spite of the fact that the Governments have from time to time promised to supply this deficiency. Thus it is that the procedure is governed by what the judges and appeal judges determine in each case, in accordance with their loyal knowledge and understanding.

[3]) Arts. 870, 871, 872 and 873 were amended and drafted anew in this form by the law of 10 June 1897.

[4]) As we have said in the previous note, this has not yet been passed, in spite of the fact that the Code of Commerce has been in force since 1885, that is to say, for 26 years.

[5]) The bankruptcy procedure may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

875. Procederá la declaración de quiebra: 1.° Cuando la pida el mismo quebrado; — 2.° Á solicitud fundada de acreedor legítimo.

876. Para la declaración de quiebra á instancia de acreedor, será necesario que la solicitud se funde en título por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución ó apremio, y que del embargo no resulten bienes libres bastantes para el pago[1]).

También procederá la declaración de quiebra á instancia de acreedores que, aunque no hubieren obtenido mandamiento de embargo, justifiquen sus títulos de crédito y que el comerciante ha sobreseído de una manera general en el pago corriente de sus obligaciones, ó que no ha presentado su proposición de convenio, en el caso de suspensión de pagos, dentro del plazo señalado en el art. 872.

877. En el caso de fuga ú ocultacion de un comerciante, acompañada del cerramiento de sus escritorios, almacenes ó dependencias, sin haber dejado persona que en su representación los dirija y cumpla sus obligaciones, bastará, para la declaración de quiebra á instancia de acreedor, que éste justifique su título y pruebe aquellos hechos por información que ofrezca al juez ó tribunal.

Los jueces procederán de oficio, además, en casos de fuga notoria ó de que tuvieren noticia exacta, á la ocupación de los establecimientos del fugado, y prescribirán las medidas que exija su conservación, entre tanto que los acreedores usan de su derecho sobre la declaración de quiebra.

878. Declarada la quiebra, el quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus bienes.

Todos sus actos de dominio y administración posteriores á la época á que se retrotraigan los efectos de la quiebra, serán nulos.

879. Las cantidades que el quebrado hubiere satisfecho en dinero, efectos ó valores de crédito, en los quince días precedentes á la declaración de quiebra, por deudas y obligaciones directas cuyo vencimiento fuere posterior á ésta, se devolverán á la masa por quienes las percibieron.

El descuento de sus propios efectos, hecho por el comerciante dentro del mismo plazo, se considerará como pago anticipado.

880. Se reputarán fraudulentos y serán ineficaces respecto á los acreedores del quebrado los contratos celebrados por éste en los treinta días precedentes á su quibra, si pertenecen á alguna de las clases siguientes: 1.ª Transmisiones de bieness inmuebles hechas á título gratuito; — 2.ª Constituciones dotales hechas de bienes privativos suyos á sus hijas; 3.ª Concesiones y traspasos de bienes inmuebles en pago de deudas no vencidas al tiempo de declararse la quiebra; — 4.ª Hipotecas convencionales sobre obligaciones de fecha anterior que no tuvieren esta calidad, ó por préstamos de dinero ó mercaderías cuya entrega no se verificase de presente al tiempo de otorgarse la obligación ante el notario y testigos que intervinieran en ella; — 5.ª Las donaciones entre vivos, que no tengan conocidamente el carácter de remuneratorias, otorgadas después del balance anterior á la quiebra, si de éste resultare un pasivo superior al activo del quebrado.

881. Podrán anularse á instancia de los acreedores, mediante la prueba de haber el quebrado procedido con ánimo de defraudarlos en sus derechos: 1.° Las enajenaciones á título oneroso de bienes raíces, hechas en el mes precedente á la declaración de la quiebra; — 2.° Las constituciones dotales, hechas en igual tiempo, de bienes de la sociedad conyugal[2]) en favor de las hijas, ó cualquiera otra transmisión de los mismos bienes á título gratuito; — 3.° Las constituciones dotales ó reconocimientos de capitales, hechos por un cónyuge comerciante á favor del otro cónyuge en los seis meses precedentes á la quiebra, siempre que no sean bienes inmuebles del abolengo de éste, ó adquiridos ó poseídos de antemano por el

---

[1]) Véase el juicio ejecutivo y el procedimiento de apremio en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.»

[2]) Pertenecen á la sociedad conyugal los bienes que no son propiedad particular del marido ó de la mujer sino que pertenecen á los dos en común y sirven en primer término para el levantamiento de las cargas del matrimonio. Tal sucede con los bienes gananciales en el régimen que lleva este nombre en el Cód. c. (Cap. V, del Lib. IV); y á estos es á los que especialmente se refiere este artículo del Cód. de com.; pues aun cuando también puede decirse que son bienes de la sociedad conyugal todos los que existan en el matrimonio en un régimen de comunidad de bienes, las constituciones dotales que con tales bienes se hicieron estarán comprendidas en las á que se refiere el artículo 880 del Cód. de com.

875. Declaration of bankruptcy shall take place: 1. When the bankrupt himself applies for it; — 2. On the well founded application of a lawful creditor.

876. For the declaration of bankruptcy at the instance of a creditor, it shall be necessary that the application should be founded on a title on which an order for execution or *apremio* has been issued, and that there is not sufficient free property resulting from the arrest to make the payment[1]).

Declaration of bankruptcy shall likewise take place at the instance of creditors who, although they have not obtained an order for arrest, prove the titles of their debts and that the merchant has failed generally to effect the current payment of his obligations, or in the case of suspension of payment, that he has not presented his proposal for the arrangement within the time named in article 872.

877. In case a merchant absconds or conceals himself, accompanied by the closing of his offices, warehouses and branches, without leaving any person representing him to direct them and fulfil his obligations, it shall be sufficient for a declaration of bankruptcy at the instance of a creditor, that he should prove his title and those facts in the information which he lays before the judge or tribunal.

In case of notorious absconding or one of which they have exact news, the judges shall likewise proceed of their own motion to take possession of the establishments of the fugitive, and they shall order the steps required for their preservation while the creditors are making use of their right in the declaration of the bankruptcy.

878. On the declaration of the bankruptcy, the bankrupt shall become disqualified to administer his property.

All his acts of *dominium* and administration, subsequent to the time to which the effects of the bankruptcy date back, shall be void.

879. The amounts which the bankrupt has paid in money, effects or securities of credit within the fifteen days preceding the declaration of bankruptcy, for direct debts and obligations the maturity whereof was subsequent thereto, shall be returned to the estate by the persons who have received them.

Discount of his own securities, made by a merchant within the same time, shall be considered as payment in advance.

880. Transactions by the bankrupt within the thirty days preceding his bankruptcy shall be considered fraudulent and shall be void as against his creditors, if they belong to any of the following classes: 1. Transfers of immoveable property made without valuable consideration; — 2. Dowries given to his daughters out of his private property; — 3. Grants and transfers of immoveable property in payment of debts which are not due at the time of the declaration of bankruptcy; — 4. Mortgages granted for obligations of an earlier date which had not this character, or for loans of money or merchandise the delivery whereof is not effected at the time the obligation is executed before the notary and the witnesses who take part therein; — 5. Gifts *inter vivos* which confessedly have not a remunerative character, granted after the balance sheet prior to the bankruptcy, if it shows liabilities greater than the assets of the bankrupt.

881. The following may be declared void at the instance of the creditors, on proof that the bankrupt acted with the intention of defrauding them in their rights: 1. Alienations of real property for valuable consideration, made in the month preceding the declaration of bankruptcy; — 2. Dowries granted in favour of his daughters within the same time, from property of the conjugal partnership[2]), or any other transfer of the same property without valuable consideration; — 3. Marriage settlements or acknowledgments of capital, made by a merchant spouse in favour of the other spouse within the six months preceding the bankruptcy, provided that they are not inherited immoveables of the latter, or acquired or possessed beforehand

---

[1]) The executive action and the proceeding by *apremio* may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

[2]) Property which is not the private ownership of the husband or wife but belongs to both in common and serves in the first place for bearing the expenses of the married life, belongs to the conjugal partnership. The same happens with the profits in the regimen which bears this name (bienes gananciales) in the Civil Code (chapter V, Book IV); and these are what this article of the Code of Commerce specially refers to; since, although it may also be said that all the property which exists in the married state in a regimen of community of property may likewise be said to be property of the conjugal partnership, the marriage settlements which are formed with such property will be included in those which are referred to by art. 880 of the Code of Commerce.

cónyuge en cuyo favor se hubiere hecho el reconocimiento de dote ó capital; — 4.° Toda confesión de recibo de dinero ó de efectos á título de préstamo, que, hecha seis meses antes de la quiebra en escritura pública, no se acreditare por la fe de entrega de notario, ó si, habiéndose hecho en documento privado, no constare uniformemente de los libros de los contratantes; — 5.° Todos los contratos, obligaciones y operaciones mercantiles del quebrado que no sean anteriores en diez días, á lo menos, á la declaración de quibra.

882. Podrá revocarse á instancia de los acreedores toda donación ó contrato celebrado en los dos años anteriores á la quiebra, si llegare á probarse cualquiera especie de suposición ó simulación hecha en fraude de aquéllos.

883. En virtud de la declaración de quiebra, se tendrán por vencidas á la fecha de la misma las deudas pendientes del quebrado.

Si el pago se verificase antes del tiempo prefijado en la obligación, se hará con el descuento correspondiente.

884. Desde la fecha de la declaración de quiebra dejarán de devengar interés todas las deudas del quebrado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios hasta donde alcance la respectiva garantía.

885. El comerciante que obtuviere la revocación de la declaración de quiebra solicitada por sus acreedores, podrá ejercitar contra éstos la acción de daños y perjuicios[1]), si hubieren procedido con malicia, falsedad ó injusticia manifiesta.

Sección tercera. De las clases de quiebras y de los cómplices en las mismas.

886. Para los efectos legales se distinguirán tres clases de quiebras, á saber: 1.ª Insolvencia fortuita; — 2.ª Insolvencia culpable; — 3.ª Insolvencia fraudulenta[2]).

887. Se entenderá quiebra fortuita la del comerciante á quien sobrevinieren infortunios que, debiendo estimarse casuales en el orden regular y prudente de una buena administración mercantil, reduzcan su capital al extremo de no poder satisfacer en todo ó en parte sus deudas.

888. Se considerará quiebra culpable la de los comerciantes que se hallaren en alguno de los casos siguientes: 1.° Si los gastos domésticos y personales del quebrado hubieren sido excesivos y desproporcionados en relación á su haber líquido, atendidas las circunstancias de su rango y familia; — 2.° Si hubiere sufrido pérdidas en cualquier especie de juego, que excedan de lo que por vía de recreo suele aventurar en esta clase de entretenimientos un cuidadoso padre de familia; — 3.° Si las pérdidas hubieren sobrevenido á consecuencia de apuestas imprudentes y cuantiosas, ó de compras y ventas ú otras operaciones que tuvieren por objeto dilatar la quiebra; — 4.° Si en los seis meses precedentes á la declaración de la quiebra hubiere vendido á pérdida ó por menos precio del corriente efectos comprados al fiado y que todavía estuviere debiendo; — 5.° Si constare que en el período transcurrido desde el último inventario hasta la declaración de la quiebra hubo tiempo en que el quebrado debía, por obligaciones directas, doble cantidad del haber líquido que le resultaba en el inventario.

889. Serán también reputados en juicio quebrados culpables, salvas las excepciones que propongan y prueben para demostrar la inculpabilidad de la quiebra: 1.° Los que no hubieren llevado los libros de contabilidad en la forma y con todos los requisitos esenciales é indispensables que se prescriben en el título 3.° del libro primero, y los que, aun llevándolos con todas estas circunstancias, hayan incurrido dentro de ellos en falta que hubiere causado perjuicio á tercero; — 2.° Los que no hubieren hecho su manifestación de quiebra en el término y forma que se prescribe en el art. 871; — 3.° Los que, habiéndose ausentado al tiempo de la declaración de la quiebra ó durante el progreso del juicio, dejaren de presen-

---

1) Véase la nota 3, pag. 125.

2) El legislador no ha tenido en cuenta que el que pudiendo solicitar la suspensión de pagos no lo hizo en tiempo oportuno, ó que habiéndolo hecho no consiguió de sus acreedores un convenio, y tiene que ir á la quiebra, es un quebrado no clasificado en este artículo, por cuanto es solvente; es decir, tiene bienes suficientes para pagar todas sus deudas.

by the spouse in whose favour the acknowledgment of dowry or capital has been made; — 4. Every admission of having received money or effects as a loan, which, having been made six months before the bankruptcy by notarial instrument, is not proved by the notary's statement of the payment or delivery, or if, having been made by private document, it does not appear to agree with the books of the contractors; — 5. All the mercantile contracts, obligations and transactions of the bankrupt which do not precede the declaration of bankruptcy by at least ten days.

882. Every gift or contract made within the two years which precede the bankruptcy may be set aside at the instance of the creditors, if they manage to prove any kind of suggestion or pretence made in fraud of them.

883. The pending debts of the bankrupt shall by virtue of the declaration of bankruptcy be held to be due at the date thereof.

If the payment is made before the time fixed in the obligation, it shall be done at the corresponding discount.

884. All the debts of the bankrupt shall cease to bear interest from the date of the declaration of bankruptcy, except debts secured by a mortgage or pledge to the extent embraced by the respective security.

885. A merchant who obtains the revocation of the declaration of bankruptcy applied for by his creditors, may bring an action for damages against them[1]), if they have acted with malice, falsity or manifest injustice.

Third Section. The kinds of bankruptcy and the accomplices therein.

886. For the purpose of their legal effects, the following three kinds of bankruptcy shall be distinguished, that is to say: 1. Fortuitous insolvency; — 2. Culpable insolvency; — 3. Fraudulent insolvency[2]).

887. Fortuitous bankruptcy shall be understood as that of a merchant to whom misfortunes happen which ought to be considered as accidental in the regular and prudent order of a good mercantile administration, and which reduce his capital to the point of not being able in whole or in part to pay his debts.

888. Culpable bankruptcy shall be understood as that of merchants who find themselves in any of the following cases: 1. If the domestic and personal expenses of the bankrupt have been excessive and out of proportion to his net property, taking the circumstances of his rank and family into consideration; — 2. If he has suffered losses at any kind of gaming, exceeding those which a careful paterfamilias is accustomed to venture by way of recreation in this kind of entertainment; — 3. If the losses have happened in consequence of imprudent and extensive wagers, or purchases and sales or other operations intended to defer the bankruptcy; — 4. If within the six months preceding the declaration of bankruptcy, he has sold goods at a loss or bought on credit, and for which he is still indebted, for less than the current price; — 5. If it appears that in the period elapsed from the last inventory to the declaration of bankruptcy, there was a time when the bankrupt owed for direct obligations, double the amount of the net property shown by the inventory.

889. The following shall likewise be considered as culpable bankrupts in law, saving the defences which they may put forward and prove to show that the bankruptcy was not culpable: 1. Those who have not kept the account books in the form and with all the essential and indispensable requisites prescribed by Title 3 of the first book, and those who, although keeping them with all these particulars, have, within the same books, made a mistake which has caused damage to a third person; — 2. Those who have not made their statement of bankruptcy in the time and way prescribed by article 871; — 3. Those who have absented themselves at the time of the declaration of bankruptcy or during the progress of the proceedings, and have

---

[1]) See note 3, page 125.

[2]) The legislator has not taken into account the fact that a person who is in a position to apply for suspension of payment and does not do so in proper time, or who, having done so, does not obtain an arrangement with his creditors, and has to go into bankruptcy, is a bankrupt who is not classified in this article, in that he is solvent; that is to say, he has sufficient assets to pay all his debts.

tarse personalmente en los casos en que la Ley impone esta obligación, no mediando legítimo impedimento[1]).

890. Se reputará quiebra fraudulenta la de los comerciantes en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: — 1.ª Alzarse con todos ó parte de sus bienes; — 2.ª Incluir en el balance, memorias, libros ú otros documentos relativos á su giro ó negociaciones bienes, créditos, deudas, pérdidas ó gastos supuestos; — 3.ª No haber llevado libros, ó, llevándolos, incluir en ellos, con daño de tercero, partidas no sentadas en lugar y tiempo oportunos; — 4.ª Rasgar, borrar ó alterar de otro modo cualquiera el contenido de los libros, en perjuicio de tercero; — 5.ª No resultar de su contabilidad la salida ó existencia del activo de su último inventario, y del dinero, valores, muebles y efectos, de cualquiera especie que sean, que constare ó se justificare haber entrado posteriormente en poder del quebrado; — 6.ª Ocultar en el balance alguna cantidad de dinero, créditos, géneros ú otra especie de bienes ó derechos; — 7.ª Haber consumido y aplicado para sus negocios propios, fondos ó efectos ajenos que le estuvieren encomendados en depósito, administración ó comisión; — 8.ª Negociar, sin autorización del propietario, letras de cuenta ajena que obraren en su poder para su cobranza, remisión ú otro uso distinto del de la negociación, si no hubiere hecho á aquél remesa de su producto; — 9.ª Si, hallándose comisionado para la venta de algunos géneros ó para negociar créditos ó valores de comercio, hubiere ocultado la operación al propietario por cualquier espacio de tiempo; — 10.ª Simular enajenaciones, de cualquiera clase que éstas fueren; — 11.ª Otorgar, firmar, consentir ó reconocer deudas supuestas, presumiéndose tales, salvo la prueba en contrario, todas las que no tengan causa de deber ó valor determinado; — 12.ª Comprar bienes inmuebles, efectos ó créditos, poniéndolos á nombre de tercera persona, en perjuicio de sus acreedores; — 13.ª Haber anticipado pagos en perjuicio de los acreedores; — 14.ª Negociar, después del último balance, letras de su propio giro á cargo de persona en cuyo poder no tuviere fondos ni crédito abierto sobre ella, ó autorización para hacerlo; — 15.ª Si, hecha la declaración de quiebra, hubiere percibido y aplicado á usos personales dinero, efectos ó créditos de la masa, ó distraído de ésta alguna de sus pertenencias.

891. La quiebra del comerciante, cuya verdadera situación no pueda deducirse de sus libros, se presumirá fraudulenta, salvo prueba en contrario.

892. La quiebra de los agentes mediadores del comercio se reputará fraudulenta cuando se justifique que hicieren por su cuenta, en nombre propio ó ajeno, alguna operación de tráfico ó giro, aun cuando el motivo de la quiebra no proceda de estos hechos.

Si sobreviniere la quiebra por haberse constituído el agente garante de las operaciones en que intervino, se presumirá la quiebra fraudulenta, salvo prueba en contrario[2]).

---

[1]) Respecto á los casos en que la ley impone al quebrado la obligación de presentarse personalmente al juez véase el proc. de quiebra en el estudio «Del proc. jud. en las cuest. civ.-merc.». — En cuanto á la penalidad en que incurre el quebrado que fuere declarado culpable es, según determina el Cód. pen., la de prisión correccional en sus grados medio y mínimo; aplicándose la pena de arresto mayor en su grado máximo, si la pérdida ocasionada á los acreedores no llegare al 10% de sus respectivos créditos, y la de prisión correccional en el máximum de su grado mínimo y medio, cuando excediere del 50%. — El arresto mayor en su grado máximo se sufrirá en la casa pública destinada á este efecto en las cabezas de partido, y su duración varía entre 4 meses y un día como mínimum y 6 meses como máximum. La prisión correccional ha de cumplirse en el establecimiento penitenciario destinado á ello dentro del territorio de la Audiencia que hubiere impuesto la pena. La duración de la prisión correccional en sus grados mínimo y medio varía entre un mínimum de 6 meses y un día á 4 años y 2 meses.

[2]) La pena correspondiente á los quebrados fraudulentos es la de presidio correccional en su grado máximo, á presidio mayor en su grado medio; debiendo tener presente también que si la pérdida ocasionada á los acreedores no llegare al 10% de sus respectivos créditos, se aplicará á los quebrados fraudulentos la pena de presidio correccional en su grado medio, y que si excediere del 50% se le impondrá el máximum correspondiente á la pena de presidio mayor. Estas penas habrán de cumplirse en los establecimientos destinados á ello dentro de la Península pudiendo la de prisión mayor cumplirse en los de las Baleares y las Canarias. — La duración de estas penas es: la de presidio correccional en su grado máximo á presidio mayor en su grado medio de 4 años 2 meses y un día á 10 años; y la de presidio correccional en su grado medio, de 2 años 4 meses y un día á 4 años y 2 meses.

failed to present themselves personally in the cases in which the law imposes this obligation, if there is no lawful impediment[1]).

890. The bankruptcy of merchants to whom any of the following circumstances applies shall be considered fraudulent: 1. Making away with all or part of their assets; — 2. Including in the balance sheet, reports, books or other documents relating to their business or transactions, fictitious property, credits, debts, losses or profits; — 3. Not having kept books, or, having kept them, including therein to the detriment of a third person, items which are not entered at the proper place and time; — 4. Scratching through, erasing or in any way altering the contents of the books, to the detriment of a third person; — 5. When his account books do not prove the outgoing or existence of the assets of his last inventory, and of the money, securities, moveables and effects of every kind which appear or are proved to have entered subsequently into the control of the bankrupt; — 6. Concealing in the balance sheet any quantity of money, credits, goods or other kind of assets or rights; — 7. Having spent and applied to his own business, funds or effects belonging to others, which were entrusted to him on deposit, administration or commission; — 8. Negotiating without the authorisation of the owner, bills on account of another, which were in his control for collection, remission or other purpose, distinct from negotiation, if he has not remitted their proceeds to the latter; — 9. If, being commissioned to sell goods or to negotiate commercial credits or valuables, he has concealed the transaction from the owner for any space of time; — 10. Feigning alienations of any kind; — 11. Executing, signing, consenting to or acknowledging fictitious debts, and saving proof to the contrary, all debts which have no *causa* or certain value shall be presumed such; — 12. Buying immoveables, effects or credits, and placing them in the name of a third person to the damage of his creditors; — 13. Having made payments in advance to the damage of his creditors; — 14. Negotiating, after the last balance sheet, bills drawn by himself on a person in whose control he has no funds or open credit therefor or authorisation so do to; — 15. If, after the declaration of bankruptcy has been made, he has received and applied to his personal use, money, effects or credits of the estate, or has withdrawn any of his property therefrom.

891. The bankruptcy of a merchant whose true position cannot be gathered from his books, shall be considered fraudulent, saving proof to the contrary.

892. The bankruptcy of commercial agents shall be considered fraudulent, when it is proved that they, in their own name or another's, effected any trade or business operation on their own account, even when the cause of the bankruptcy does not arise from these acts.

If the bankruptcy occurs through the agent having constituted himself guarantor of the operations in which he took part, the bankruptcy shall be presumed fraudulent, saving proof to the contrary[2]).

[1]) With regard to the cases in which the law imposes on the bankrupt the obligation of personally presenting himself to the judge, see the bankruptcy procedure in the study "Judicial drocedure in mercantile civil matters". — As regards the punishment incurred by a bankrupt who has been declared culpable, it is, as determined by the Penal Code, that of correctional imprisonment in its medium and minimum grades. The penalty of greater arrest in its maximum grade is applied, if the loss caused to the creditors does not amount to 10% of their respective debts, and that of correctional imprisonment in the maximum of its minimum and medium grades, when it exceeds 50%. — Greater arrest in its maximum grade must be undergone in the public establishment appointed for this purpose in the headquarters of the "partido", and its duration varies between four months and one day as minimum to six months as maximum. Correctional imprisonment has to be performed in tho penitential establishment appointed for that purpose within the territory of the Audiencia which has inflicted the punishment. The duration of correctional imprisonment in its minimum and medium grades varies between a minimum of six months and one day to four years and two months.

[2]) The punishment proper to fraudulent bankrupts is from correctional imprisonment in its maximum grade to the greater imprisonment in its medium grade; and it must also be remembered that if the loss occasioned to the creditors does not amount to 10% of their respective credits, the punishment of correctional imprisonment in its medium grade will apply to fraudulent bankrupts, and that if it exceeds 50%, the maximum term of greater imprisonment will be imposed. These punishments must be suffered in the establishments appointed for that purpose in the Peninsula, and that of the greater imprisonment may be performed in those of the Balearic and Canary Islands. — The duration of these punishments is: that of correctional imprisonment in its maximum grade to greater imprisonment in its medium grade, from 4 years and one day to 10 years; and that of correctional imprisonment in its medium grade, from 2 years 4 months and one day to 4 years and 2 months.

893. Serán considerados cómplices de las quiebras fraudulentas: 1.° Los que auxilien el alzamiento de bienes del quebrado; — 2.° Los que, habiéndose confabulado con el quebrado para suponer créditos contra él, ó aumentar el valor de los que efectivamente tengan contra sus valores ó bienes, sostengan esta suposición en el juicio de examen y calificación de los créditos ó en cualquiera junta de acreedores de la quiebra; — 3.° Los que para anteponerse en la graduación en perjuicio de otros acreedores, y de acuerdo con el quebrado, alteraren la naturaleza ó fecha del crédito, aun cuando esto se verifique antes de hacerse la declaración de quiebra; — 4.° Los que deliberadamente, y después que el quebrado cesó en sus pagos, le auxiliaren para ocultar ó sustraer alguna parte de sus bienes ó créditos; — 5.° Los que, siendo tenedores de alguna pertenencia del quebrado al tiempo de hacerse notoria la declaración de quiebra por el juez ó tribunal que de ello conozca, la entregaren á aquél, y no á los administradores legítimos de la masa, á menos que, siendo de Nación ó provincia diferente de la del domicilio del quebrado, prueben que en el pueblo de su residencia no se tenía noticia de la quiebra; — 6.° Los que negaren á los administradores de la quiebra los efectos que de la pertenencia del quebrado existieren en su poder; — 7.° Los que, después de publicada la declaración de la quiebra, admitieren endosos del quebrado; — 8.° Los acreedores legítimos que, en perjuicio y fraude de la masa, hicieren con el quebrado convenios particulares y secretos; — 9.° Los agentes mediadores que intervengan en operación de tráfico ó giro que hiciere el comerciante declarado en quiebra.

894. Los cómplices de los quebrados serán condenados, sin perjuicio de las penas en que incurran con arreglo á las Leyes criminales: 1.° Á perder cualquier derecho que tengan á la masa de la quiebra en que sean declarados cómplices; — 2.° Á reintegrar á la misma masa los bienes, derechos y acciones sobre cuya sustracción hubiere recaído la declaración de su complicidad, con intereses é indemnización de daños y perjuicios[1]).

895. La calificación de la quiebra, para exigir al deudor la responsabilidad criminal, se hará siempre en ramo separado, que se sustanciará con audiencia del ministerio fiscal, de los síndicos y del mismo quebrado.

Los acreedores tendrán derecho á personarse en el expediente y perseguir al fallido; pero lo harán á sus expensas, sin acción á ser reintegrados por la masa de los gastos del juicio ni de las costas, cualquiera que sea el resultado de sus gestiones.

896. En ningún caso, ni á instancia de parte ni de oficio, se procederá, por los delitos de quiebra culpable ó fraudulenta, sin que antes el juez ó tribunal haya hecho la declaración de quiebra y la de haber méritos para proceder criminalmente.

897. La calificación de quiebra fortuita por sentencia firme no será obstáculo para el procedimiento criminal, cuando de los juicios pendientes sobre convenio, reconocimiento de créditos ó cualquiera otra incidencia resultaren indicios de hechos declarados punibles en el Código Penal, los que se someterán al conocimiento del juez ó tribunal competente. En estos casos, deberá ser oído previamente el ministerio público.

Sección cuarta. Del convenio de los quebrados con sus acreedores.

898. En cualquier estado del juicio, terminado el reconocimiento de créditos y hecha la calificación de la quiebra, el quebrado y sus acreedores podrán hacer los convenios que estimen oportunos.

---

[1]) A los cómplices de los delitos de quiebra culpable ó fraudulenta les corresponde la pena inmediatamente inferior á la impuesta al quebrado. — Inmediatamente inferior á la de prisión correccional en su grado medio y mínimo es la de arresto mayor en su grado máximo, cuya duración queda ya indicada en la nota 1, pág. 215. — Inmediatamente inferior á la de arresto mayor en su grado máximo es la de arresto mayor en su grado medio, cuya duración es la de 2 meses y un día á 4 meses. — Inmediatamente inferior á la de presidio correccional en su grado máximo á prisión mayor en su grado medio es la de presidio correccional en su grado medio, cuya duración ya quedó indicada en la nota 2, pág. 215. Y la inmediatamente inferior á esta es la de presidio correccional en su grado mínimo, cuya duración es de 6 meses y un día á 2 años y 4 meses.

893. The following shall be considered accomplices in fraudulent bankruptcies: 1. Those who help in exaggerating the assets of the bankrupt; — 2. Those who have plotted with the bankrupt to invent debts against him, or increase the amount of those which they in fact have against his securities or assets, and maintain this invention in the proceeding for examining and classifying the debts or in any meeting of the creditors of the bankruptcy; — 3. Those who in order to prefer themselves in the classification to the prejudice of the other creditors, and in concert with the bankrupt, alter the nature or date of the debt, even when this takes place before the declaration of bankruptcy is made; — 4. Those who deliberately and after the bankrupt has suspended payment, aid him to conceal or remove any part of his assets or credits; — 5. Those who are holders of any property of the bankrupt at the time that the judge or tribunal which has congnisance thereof gives notice of the declaration of bankruptcy, and deliver it to the former and not the lawful administrators of the estate, unless they are of a nation or province different from that of the address of the bankrupt, and they prove that there was no notice of the bankruptcy in the place of their residence; — 6. Those who refuse the administrators of the bankruptcy the effects which belong to the bankrupt and are under their control; — 7. Those who allow indorsements of the bankrupt after the publication of the declaration of bankruptcy; — 8. Lawful creditors who make private and secret agreements with the bankrupt in prejudice and fraud of the estate; — 9. Agents who take part in a trade or business operation effected by a merchant who has been declared bankrupt.

894. Accomplices of bankrupts shall be condemned, without prejudice to the penalties which they incur in accordance with the criminal laws: 1. To lose all right which they may have to the estate of the bankruptcy in which they are declared accomplices; — 2. To refund to the same estate the assets, rights and rights of action, with respect to the removal of which the declaration of their complicity was made, with interest and compensation for damages[1]).

895. The characterization of the bankruptcy for the purpose of subjecting the debtor to criminal liability, shall always be made in a separate proceeding, which shall be substantiated by hearing the Public Prosecutor, the assignees and the bankrupt himself.

The creditors shall be entitled to appear on the file and to prosecute the bankrupt: but they shall do so at their own expense, with no right of action to be repaid the expenses of the action or the costs, whatever the result of their efforts may be.

896. In no case, either at the instance of a party or of the Court, shall proceedings be taken for the crimes of culpable or fraudulent bankruptcy, unless the judge or tribunal has previously made a declaration of bankruptcy and of there being grounds for proceeding criminally.

897. The characterization of the bankruptcy as fortuitous by a final judgment shall not be an obstacle to the criminal proceeding, when from the pending proceedings about an arrangement, admission of debts or any other measure, there appear to be indications of acts declared punishable by the Penal Code, which shall be submitted to the investigation of the competent judge or tribunal. In these cases the Public Prosecutor must previously be heard.

Fourth Section. Composition[2]) of bankrupts with their creditors.

898. After the verification of the debts has been concluded and the characterization of the bankruptcy has been made, the bankrupt and his creditors may make the agreements which they think fit, at any stage of the proceedings.

---

[1]) Accomplices in the crimes of culpable or fraudulent bankruptcy are subject to punishments immediately next below those inflicted on the bankrupt. — Immediately below that of correctional imprisonment in its medium and minimum grade is that of greater arrest in its maximum grade, the duration whereof has already been indicated in note 1, page 215. — Immediately below that of greater arrest in its maximum grade is that of greater arrest in its medium grade, the duration whereof is from 2 months and one day to 4 months. — Immediately below that of correctional imprisonment in its maximum grade to greater imprisonment in its medium grade is that of correctional imprisonment in its medium grado, the duration whereof has already been indicated in note 2, page 215. And immediately below this is that of correctional imprisonment in its minimum grade, the duration whereof is from 6 months and one day to 2 years and 4 months.

[2]) Literally, agreement or arrangement (Translator).

No gozarán de este derecho los quebrados fraudulentos, ni los que se fugaren durante el juicio de quiebra.

899. Los convenios entre los acreedores y el quebrado han de ser hechos en Junta de acreedores debidamente constituída.

Los pactos particulares entre el quebrado y cualquiera de sus acreedores serán nulos: el acreedor que los hiciere perderá sus derechos en la quiebra, y el quebrado, por este solo hecho, será calificado de culpable, cuando no mereciese ser considerado como quebrado fraudulento.

900. Los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios podrán abstenerse de tomar parte en la resolución de la Junta sobre el convenio; y absteniéndose, éste no les parará perjuicio en sus respectivos derechos.

Si, por el contrario, prefiriesen tener voz y voto en el convenio propuesto, serán comprendidos en las esperas ó quitas que la Junta acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al título de su crédito.

901. La proposición de convenio se discutirá y pondrá á votación, formando resolución el voto de un número de acreedores que compongan la mitad y uno más de los concurrentes, siempre que su interés en la quiebra cubra las tres quintas partes del total pasivo, deducido el importe de los créditos de los acreedores comprendidos en el párrafo primero del artículo anterior que hubieren usado del derecho consignado en dicho párrafo.

902. Dentro de los ocho días siguientes á la celebración de la Junta en que se hubiere acordado el convenio, los acreedores disidentes y los que no hubieren concurrido á la Junta podrán oponerse á la aprobación del mismo.

903. Las únicas causas en que podrá fundarse la oposición al convenio serán: 1.ª Defectos en las formas prescritas para la convocación y deliberación de la Junta; — 2.ª Falta de personalidad ó representación en alguno de los votantes, siempre que su voto decida la mayoría en número ó cantidad; — 3.ª Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno ó más acreedores, ó de los acreedores entre sí para votar á favor del convenio; — 4.ª Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de cantidad; — 5.ª Inexactitud fraudulenta en el balance general de los negocios del fallido, ó en los informes de los síndicos, para facilitar la admisión de las proposiciones del deudor.

904. Aprobado el convenio, y salvo lo dispuesto en el art. 900, será obligatorio para el fallido y para todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior á la declaración de quiebra, si hubieren sido citados en forma legal, ó si, habiéndoseles notificado la aprobación del convenio, no hubieren reclamado contra éste en los términos prevenidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil[1]), aun cuando no estén comprendidos en el balance ni hayan sido parte en el procedimiento.

905. En virtud del convenio, no mediando pacto expreso en contrario, los créditos quedarán extinguidos en la parte de que se hubiere hecho remisión al quebrado, aun cuando le quedare algún sobrante de los bienes de la quiebra, ó posteriormente llegare á mejor fortuna.

906. Si el deudor convenido faltare al cumplimiento de lo estipulado, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la rescisión del convenio y la continuación de la quiebra ante el juez ó tribunal que hubiere conocido de la misma.

907. En el caso de no haber mediado el pacto expreso de que habla el art. 905, los acreedores que no sean satisfechos íntegramente con lo que perciban del haber de la quiebra hasta el término de la liquidación de ésta, conservarán acción, por lo que se les reste en deber, sobre los bienes que ulteriormente adquiera ó pueda adquirir el quebrado.

Sección quinta. De los derechos de los acreedores en caso de quiebra, y de su respectiva graduación.

908. Las mercaderías, efectos y cualquiera otra especie de bienes que existan en la masa de la quiebra, cuya propiedad no se hubiere transferido al quebrado por un título legal é irrevocable[2]), se considerarán de dominio ajeno y se pondrán

[1]) Véase el capítulo del estudio «Del Proc. jud. en las cuest. civ. merc».

[2]) Como, en depósito, prenda, comodato, comisión, administración, alquiler, ó arrendamiento, usufructo, uso ó habitación.

Fraudulent bankrupts and those who abscond during the bankruptcy proceedings shall not possess this right.

899. Compositions between the creditors and the bankrupt have to be made in a duly constituted meeting of creditors.

Private bargains between the bankrupt and any of his creditors shall be void, the creditor who makes them shall lose his rights in the bankruptcy, and the bankrupt, by this act alone, shall be characterized as culpable, even when he does not deserve to be considered a fraudulent bankrupt.

900. Creditors who are specially privileged, privileged and mortgage creditors may abstain from taking part in the decision of the meeting about the composition; and if they abstain, this shall not prejudice them in their respective rights.

If on the contrary they prefer to have a voice and a vote in the proposed composition, they shall be included in the extensions of time or partial releases agreed by the meeting, without prejudice to the place and grade belonging to the nature of their debts.

901. The proposal for the composition shall be discussed and put to the vote, and the vote of a half and one more of the creditors who are present shall pass the resolution, provided that their interest in the bankruptcy covers three fifth parts of the total liability, after deducting the amount of the debts of the creditors comprised in the first paragraph of the preceding article who have exercised the right set forth in the said paragraph.

902. The dissentient creditors and those who have not attended the meeting may oppose the approbation of the composition within the eight days following the holding of the meeting at which it was agreed.

903. The only reasons on which the opposition to the composition may be based shall be: 1. Defects of the forms prescribed for summoning and deliberating at the meeting; — 2. Want of legal or representative capacity in any of the voters, provided that his vote decides the majority in number or amount; — 3. Fraudulent understandings between the debtor and one or more of the creditors, or of the creditors *inter se* for the purpose of voting in favour of the composition; — 4. Fraudulent increase of credits in order to procure a majority in amount; — 5. Fraudulent incorrectness in the general balance sheet of the business of the bankrupt, or in the reports of the assignees, in order to facilitate the passing of the proposals of the debtor.

904. Saving the provision in article 900, a composition which has been approved shall be binding on the bankrupt and on all the creditors whose debts date from a time previous to the declaration of the bankruptcy, if they have been summoned in legal form, or if, when the approbation of the composition has been notified to them, they have not entered a claim against it within the times provided by the Law of Civil Procedure[1]), although they are not included in the balance sheet and have not been parties to the proceeding.

905. When there is no express bargain to the contrary, the debts shall be extinguished by virtue of the composition as regards the part from which the bankrupt has been released, although some surplus of the assets of the bankruptcy remains, or he subsequently meets with greater fortune.

906. If a debtor, who has made a composition, fails to fulfil the stipulations, any of his creditors may apply for rescission of the agreement and the continuation of the bankruptcy before the judge or tribunal which had cognisance thereof.

907. When there is no express bargain as mentioned in article 905, the creditors who are not wholly paid with what they receive from the assets of the bankruptcy, up to the end of the liquidation thereof, shall preserve their rights of action for what remains due to them against the assets which the bankrupt subsequently acquires or is able to acquire.

Fifth Section. The rights of the creditors in case of bankruptcy, and their classification.

908. Merchandise, securities and all other species of property which form the estate of the bankruptcy, the property wherein has not been transferred to the bankrupt by a legal and irrevocable title[2]), shall be considered under the *dominium* of

[1]) See the chapter in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters".

[2]) For instance, on deposit, pledge, specific loan, commission, administration, lease, usufruct, use or habitation.

á disposición de sus legítimos dueños, previo el reconocimiento de su derecho en Junta de acreedores ó en sentencia firme; reteniendo la masa los derechos que en dichos bienes pudieren corresponder al quebrado, en cuyo lugar quedará sustituída aquélla, siempre que cumpliere las obligaciones anejas á los mismos.

909. Se considerarán comprendidos en el precepto del artículo anterior para los efectos señalados en él: 1.° Los bienes dotales inestimados y los estimados que se conservaren en poder del marido, si constare su recibo por escritura pública inscrita con arreglo á los artículos 21 y 27 de este Código; — 2.° Los bienes parafernales que la mujer hubiere adquirido por título de herencia, legado ó donación, bien se hayan conservado en la forma que los recibió, bien se hayan subrogado ó invertido en otros, con tal que la inversión ó subrogación se haya inscrito en el Registro Mercantil conforme á lo dispuesto en los artículos citados en el número anterior; — 3.° Los bienes y efectos que el quebrado tuviere ne dedósito, administración, arrendamiento, alquiler ó usufructo; — 4.° Las mercaderías que el quebrado tuviere en su poder por comisión de compra, venta, tránsito ó entrega; — 5.° Las letras de cambio ó pagarés que, sin endoso ó expresión que transmitiere su propiedad, se hubieren remitido para su cobranza al quebrado, y las que hubiere adquirido por cuenta de otro, libradas ó endosadas directamente en favor del comitente; — 6.° Los caudales remitidos fuera de cuenta corriente al quebrado, y que éste tuviere en su poder, para entregar á persona determinada en nombre y por cuenta del comitente, ó para satisfacer obligaciones que hubieren de cumplirse en el domicilio de aquél; — 7.° Las cantidades que estuvieren debiendo al quebrado por ventas hechas de cuenta ajena, y las letras ó pagarés de igual procedencia que obraren en su poder, aunque no estuvieren extendidas en favor del dueño de las mercaderias vendidas, siempre que se pruebe que la obligación procede de ellas y que existían en poder del quebrado por cuenta del propietario para hacerlas efectivas y remitirle los fondos á su tiempo, lo cual se presumirá de derecho si la partida no estuviere pasada en cuenta corriente entre ambos; — 8.° Los géneros vendidos al quebrado á pagar al contado y no satisfechos en todo ó en parte, ínterin subsistan embalados en los almacenes del quebrado, ó en los términos en que se hizo la entrega, y en estado de distinguirse específicamente por las marcas ó números de los fardos ó bultos; — 9.° Las mercaderías que el quebrado hubiere comprado al fiado, mientras no se le hubiere hecho la entrega material de ellas en sus almacenes ó en paraje convenido para hacerla, y aquellas cuyos conocimientos ó cartas de porte se le hubieren remitido, después de cargadas, de orden y por cuenta y riesgo del comprador. En los casos de este número y del 8.°, los síndicos podrán detener los géneros comprados ó reclamarlos para la masa, pagando su precio al vendedor[1]).

910. Igualmente se considerará comprendido en el precepto del art. 908, para los efectos determinados en el mismo, el importe de los billetes en circulación de los Bancos de emisión, en las quiebras de estos establecimientos.

911. Con el producto de los bienes de la quiebra, hechas las deducciones que prescriben los artículos anteriores, se pagará á los acreedores con arreglo á lo establecido en los artículos siguientes.

912. La graduación de créditos se hará dividiéndolos en dos secciones: la primera comprenderá los créditos que hayan de ser satisfechos con el producto de los bienes muebles de la quiebra, y la segunda los que hayan de pagarse con el producto de los inmuebles.

913. La prelación de los acreedores de la primera sección se establecerá por el orden siguiente: 1.° Los acreedores singularmente privilegiados, por este orden: a) Los acreedores por gastos de entierro, funeral y testamentaría; — b) Los acreedores alimenticios, ó sean los que hubieren suministrado alimentos al quebrado ó

---

[1]) Los casos comprendidos en los números 8° y 9° de este artículo constituyen excepciones al principio general formulado en el Cód. c. (art. 1450), de que la compra-venta se perfecciona por el mero consentimiento; excepciones establecidas en favor del vendedor, á quien por un sentimiento de equidad se le deja fuera de la quiebra, ya que es posible en las citadas condiciones evitar que haya un perjudicado más. También se tiene en cuenta por este mismo sentimiento de equidad el interés de la masa de los acreedores por cuanto á estos les deja la ley en libertad de devolver los géneros ó de adquirirlos para la masa, pagando su precio.

another and shall be placed at the disposal of their lawful owners, after acknowledgment of their right in a meeting of creditors or by a final judgment; but the estate shall retain the rights in the said property which may belong to the bankrupt, in the stead of whom it shall be substituted, provided that it performs the obligations which are attached thereto.

909. The following shall be considered to be included in the precept of the preceding article for the effects therein stated: 1. Dowry which has not been valued and that which has been valued but is kept in the control of the husband, if his receipt is shown by a notarial instrument, inscribed according to articles 21 and 27 of this Code; — 2. Paraphernalia which his wife has acquired by inheritance, legacy or gift, whether they are kept in the form in which she received them, or have been replaced or invested in others, provided that the investment or replacement has been inscribed in the Mercantile Register according to the articles cited in the previous number; — 3. The property and effects which the bankrupt has on deposit, administration, lease, or usufruct; — 4. Merchandise which the bankrupt has in his control under a commission to purchase, sell, transport or deliver; — 5. Bills of exchange or promissory notes which have been remitted to the bankrupt for collection, without indorsement or expression which transfers their ownership, and those which he has received on account of another, drawn or indorsed directly in favour of the principal; — 6. Funds remitted to the bankrupt which do not form part of a current account, and which he has in his control for delivery to a certain person in the name and on account of the principal, or to meet obligations which have to be perfomed at the address of the former; — 7. Sums which are owing to the bankrupt for sales effected on account of another, and bills and promissory notes of like origin which are in his control, although they are not drawn in favour of the owner of the sold goods, provided that it is proved that the obligation arises therefrom and that they were in the control of the bankrupt for realisation and to remit the funds in due time, which shall be presumed *de jure* if the item has not passed to an account current between them; — 8. Goods sold to the bankrupt for cash payment and not paid for in whole or in part, while they remain in bales in the warehouses of the bankrupt, or in the places where delivery was made, and in a state to be specifically distinguished by the marks or numbers of the parcels or packages; — 9. Merchandise which the bankrupt has bought on credit, as long as actual delivery thereof has not been made at his warehouses or in the place agreed for effecting it, and merchandise the bills of lading whereof have been remitted to him after it has been shipped, by order and on account and at risk of the buyer. In the case of this number and of number 8, the assignees may retain the bought goods or claim them for the estate, on paying their price to the seller[1]).

910. The amount of the bank notes of the issue Bank in circulation in the bankruptcies of these establishments shall likewise be considered as included in the precept of article 908 for the purposes therein determined.

911. The creditors shall be paid with the proceeds of the assets of the bankruptcy, as enacted in the following articles, after making the deductions prescribed in the preceding articles.

912. The classification of the debts shall be made by dividing them into two sections: the first shall comprise the debts which have to be paid with the proceeds of the moveable assets of the bankruptcy, and the second, those which have to be paid with the proceeds of the immoveables.

913. The preference of the creditors in the first section shall be fixed in the following order: 1. The specially privileged creditors, in this order: a) Creditors for burial, funeral and testamentary expenses; — b) Creditors for maintenance, whether supplied to the bankrupt or his family; — c) Creditors for personal work, including the

---

[1]) The cases comprised in numbers 8 and 9 of this article constitute exceptions to the general principle formulated in the Civil Code (art. 1450), that purchase and sale are completed by mere consent; exceptions which are enacted in favour of the vendor, who from a sentiment of equity is left outside the bankruptcy, since it is possible in the said conditions to avoid having one injured person more. This same sentiment of equity likewise takes account of the interest of the creditors' estate, in that the law leaves them the liberty of returning the goods or of acquiring them for the estate on paying their price.

su familia; — e) Los acreedores por trabajo personal, comprendiendo á los dependientes de comercio por los seis últimos meses anteriores á la quiebra; — 2.° Los privilegiados que tuvieren consignado un derecho preferente en este Código[1]); — 3.° Los privilegiados por derecho común[2]), y los hipotecarios legales en los casos en que, con arreglo al mismo derecho, le tuvieren de prelación sobre los bienes muebles[3]); — 4.° Los acreedores escriturarios conjuntamente con los que lo fueren por títulos ó contratos mercantiles en que hubiere intervenido agente ó corredor; — 5.° Los acreedores comunes por operaciones mercantiles; — 6.° Los acreedores comunes por derecho civil.

914. La prelación en el pago á los acreedores de la segunda sección se sujetará al orden siguiente: 1.° Los acreedores con derecho real, en los términos y

---

[1]) A estos créditos privilegiados se refieren los siguientes artículos del Cód. de com.: 27, sobre créditos dotales; 98, sobre fianza de los agentes mediadores; 196, sobre resguardos de almacenes generales de depósito; 208, sobre cédulas hipotecarias y obligaciones especiales; 276, sobre efectos remitidos en consignación; 320 y 321, sobre valores públicos pignorados; 340, sobre géneros vendidos; 372, sobre carruajes y otros medios de transporte; 375 y 376, sobre efectos porteados; 403, sobre bienes asegurados y buques; 573, 580 y 581, sobre ventas judiciales de buques; 667, sobre efectos cargados en los buques; 704, sobre precio del pasaje y gastos de manutención durante la travesía por mar; 730, sobre préstamos á la gruesa; y 926 y 927, sobre socios acreedores y acreedores de los socios en las quiebras de las compañías.

[2]) Los créditos privilegiados por derecho común son, según el artículo 1922 del Cód. c.: 1.° Los créditos por construcción, reparación, conservación ó precio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor hasta donde alcance el valor de los mismos. — 2.° Los garantizados con prenda que se halle en poder del acreedor sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor. — 3.° Los garantizados con fianza de efectos ó valores, constituída en establecimiento público ó mercantil, sobre la fianza y por el valor de los efectos de la misma. — 4.° Los créditos por transporte, sobre los efectos transportados, por el precio del mismo, gastos y derechos de conducción y conservación, hasta la entrega y durante 30 días despues de esta. — 5.° Los de hospedaje sobre los muebles del deudor existentes en la posada. — 6.° Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección anticipados al deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron. — 7.° Los créditos por alquileres y rentas de un año, sobre los bienes muebles del arrendatario existentes en la finca arrendada y sobre los frutos de la misma. — Si los bienes muebles sobre que recae la preferencia hubieren sido sustraídos, el acreedor podrá reclamarlos de quien los tuviese, dentro del término de 30 días contados desde que ocurrió la sustracción.

[3]) Los acreedores hipotecarios legales, á tenor del artículo 168 de la Ley Hipotecaria son: 1.° Las mujeres casadas sobre los bienes de sus maridos: — Por las dotes que les hayan sido entregadas solemnemente bajo fe de notario. — Por las arras ó donaciones que los mismos maridos les hayan ofrecido dentro de los límites de la ley. — Por los parafernales que con la solemnidad anteriormente dicha hayan entregado á sus maridos. — Por cualesquiera otros bienes que las mujeres hayan aportado al matrimonio y entregado á sus maridos con la misma solemnidad. — 2.° Los hijos sobre los bienes de sus padres, por los que estos deban reservarles, según las leyes, y por los de su peculio. — 3.° Los hijos del primer matrimonio, sobre los bienes de su padrastro, por los que la madre haya administrado ó administre, ó por los que deba reservarles. — 4.° Los menores ó incapacitados sobre los bienes de sus tutores ó curadores, por los que estos hayan recibido de ellos, y por la responsabilidad en que incurrieren. — 5.° El Estado, las provincias y los pueblos, sobre los bienes de los que contraten con ellos ó administren sus intereses, por las responsabilidades que contrajeren con arreglo á derecho; sobre los bienes de los contribuyentes por el importe de una anualidad vencida y no pagada de los impuestos que graviten sobre ellos. — 6.° Los aseguradores, sobre los bienes de los asegurados, por los premios del seguro de dos años y si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubieren hecho. — Hay que tener en cuenta que para que estas hipotecas legales puedan producir sus naturales efectos es preciso que estén debidamente constituídas, mediante la consiguiente inscripción en el Registro de la propiedad de los bienes sobre los que se constituyan (art. 159 de la L. Hip.); á excepción de las del Estado, las provincias ó los pueblos sobre los bienes de los contribuyentes por el importe de una anualidad de los impuestos que graven los inmuebles, y de las de los aseguradores de bienes inmuebles por las primas de los dos últimos años, ó por los dos últimos dividendos que no necesitan inscripción alguna (art. 218, 220 de la L. Hip.). — Por último, hay que advertir que aun cuando del precepto legal parece deducirse que hay casos en los que el derecho común establece preferencia ó prelación de los acreedores hipotecarios legales sobre los bienes muebles, esto no es cierto, á no ser que se considere como tal el derecho que resulta á tenor del artículo 334 del Cód. c. por virtud del que se consideran como formando parte de los inmuebles los muebles adheridos ó fijos de tal suerte á ellos que no puedan separarse de los mismos sin quebrantamiento de la materia ó deterioro del objeto, y las estatuas, relieves, pinturas y demás objetos de ornamentación en tal forma dispuestos que revelen el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo y demás casos que se enumeran en dicho artículo.

commercial subordinates for the six months previous to the bankruptcy; — 2. Privileged creditors who have a preferential right granted by this Code[1]); — 3. Those privileged by the common law[2]), and the legal (tacit) mortgagees in those cases in which they have preference on chattels, according to the same law[3]); — 4. Creditors under a notarial instrument, jointly with those by mercantile titles or contracts wherein an agent or broker has taken part; — 5. Ordinary creditors for mercantile transactions; — 6. Ordinary creditors by the civil law.

914. Priority in payment of the creditors in the second section shall be subject to the following order: 1. Creditors with real right, in the terms and order enacted

[1]) The following articles of the Code of Commerce refer to these privileged debts: 27, debts in respect of dowry; 98, guarantees by agents; 196, receipts of general deposit warehouses; 208, mortgage cédulas and special bonds; 276, goods remitted to factors; 320 and 321, pledged public securities; 340, sold goods; 372, carriages and other means of transport; 375 and 376, goods transported; 403, insured property and vessels; 573, 580 and 581, judicial sales of vessels; 667, goods shipped on the vessels; 704, passage money and expenses of maintenance during a sea passage; 730, bottomry loans; and 926 and 927, members who are creditors and creditors of members in the bankruptcy of companies.

[2]) Debts which are privileged by the common law are, according to article 1922 of the Civil Code: 1. Debts for making, repairing, preserving, or the sale price, of moveables which are in the control of the debtor, up to the amount of their value. 2. Those guaranteed by a pledge which is in the control of the creditor, on the thing pledged and up to the amount of its value. 3. Those secured by guarantee of effects and securities, constituted in a public or mercantile establishment, on the security and for the value of the effects thereof. 4. Debts for transport, on the goods carried and for the charge therefor, expenses and dues for carriage and preservation until delivery and during 30 days afterwards. 5. Those for entertainment, on the moveables of the debtor in the inn. 6. Debts for seed, cultivation and ingathering, advanced to the debtor on the produce of the harvest for which they served. 7. Debts for hiring and rents for one year, on the moveable property of the lessee in the leased property and on the produce thereof. If the moveable property affected by the preference has been taken away, the creditor may claim it from the possessor thereof, within the term of thirty days reckoned from the occurrence of the removal.

[3]) The legal (tacit) mortgage creditors, according to art. 168 of the Mortgage Law are: 1. Married women over the property of their husbands: — For the dowry which has been formally delivered to them with the intervention of a notary. — For the maintenance or gifts which the husbands have offered them within the limits of the law. — For the paraphernalia which have been delivered to their husbands with the aforesaid formality. — 2. Sons over the property of their parents, for what the latter ought to reserve them according to the law, and for their own *peculium*. — 3. Sons of the first marriage, over the property of their stepfather, for the property which their mother has administered or administers, or for what she ought to reserve to them. — 4. Minors and those legally incapable, over the property of their guardians or curators, for the property which the latter have received from them, and for the liability incurred by them. — 5. The State, provinces and localities, over the property of those who contract with them or who administer their interests, for the liabilities which they contract according to law; over the property of tax payers, for the amount of one annual payment, due and not paid, of the taxes imposed on them. — 6. Insurer over the property of the insured, for the premiums of insurance for two years, and in mutual insurances, for the two last contributions which have been made. — It must be remembered that, in order that those mortgages by law may produce their natural effects, it is necessary that they should be duly constituted, by means of the consequent inscription in the Register of Ownership of the property over which they are constituted (art. 159 of the Mortgage Law]; except those of the State, provinces or localities over the property of the tax payers for the amount of one annual payment of the taxes which affect immoveables, and except those of insurers of immoveable property for the premiums of the last two years, or for the two last contributions, which do not require any inscription (art. 218 and 220 of the Mortgage Law). — Lastly, it must be noticed that, although it appears to be a deduction from the legal precept that there are cases in which the common law enacts preference or priority for the legal mortgage creditors over moveable property, this is not certain, unless the right which follows from the tenor of art. 334 of the Civil Code is so considered, by virtue whereof moveables are considered as forming part of the immoveables, when they adhere or are fixed thereto in such a manner that they cannot be separated therefrom without breaking the material or damaging the object, and the statues, reliefs, paintings and other objects of ornament, arranged in such a way that they reveal the intention of uniting them permanently to the immoveable, and the other cases enumerated in the said article.

por el orden establecido en la Ley Hipotecaria[1]); — 2.° Los acreedores singularmente privilegiados y demás enumerados en el artículo anterior, por el orden establecido en el mismo.

915. Las sumas que los acreedores hipotecarios legales percibiesen de los bienes muebles, realizados que sean, serán abonadas en cuenta de lo que hubieren de percibir por la venta de inmuebles; y si hubiesen percibido el total de su crédito, se tendrá por saldado y se pasará á pagar al que siga por orden de fechas.

916. Los acreedores percibirán sus créditos sin distinción de fechas, á prorrata dentro de cada clase y con sujeción al orden señalado en los artículos 913 y 914.

Exceptúanse: 1.° Los acreedores hipotecarios, que cobrarán por el orden de fechas de la inscripción de sus títulos; — 2.° Los acreedores escriturarios y por títulos mercantiles intervenidos por agentes ó corredores, que cobrarán también por el orden de fechas de sus títulos.

Quedan á salvo, no obstante las disposiciones anteriores, los privilegios establecidos en este Código sobre cosa determinada, en cuyo caso, si concurrieren varios acreedores de la misma clase, se observará la regla general.

917. No se pasará á distribuir el producto de la venta entre los acreedores de un grado, letra ó número de los fijados en los artículos 913 y 914, sin que queden completamente saldados los créditos del grado, letra ó número de los artículos referidos, según su orden de prelación.

918. Los acreedores con prenda constituída por escritura pública ó en póliza intervenida por agente ó corredor, no tendrán obligación de traer á la masa los valores ú objetos que recibieron en prenda, á menos que la representación de la quiebra los quisiere recobrar satisfaciendo íntegramente el crédito á que estuvieren afectos.

Si la masa no hiciere uso de este derecho, los acreedores con prenda cotizable en Bolsa podrán venderla al vencimiento de la deuda, con arreglo á lo dispuesto en el art. 323 de este Código; y si las prendas fuesen de otra clase, podrán enajenarlas con intervención de corredor ó agente colegiado, si los hubiere, ó, en otro caso, en almoneda pública ante notario.

El sobrante que resultare después de extinguido el crédito, será entregado á la masa.

Si, por el contrario, aun resultase un saldo contra el quebrado, el acreedor será considerado como escriturario, en el lugar que le corresponda según la fecha del contrato.

919. Los acreedores hipotecarios, ya voluntarios, ya legales[2]), cuyos créditos no quedasen cubiertos con la venta de los inmuebles que les estuviesen hipotecados, serán considerados, en cuanto al resto, como acreedores escriturarios, concurriendo con los demás de este grado, según la fecha de sus títulos.

Sección sexta. De la rehabilitación del quebrado.

920. Los quebrados fraudulentos no podrán ser rehabilitados.

921. Los quebrados no comprendidos en el artículo anterior podrán obtener su rehabilitación justificando el cumplimiento íntegro del convenio aprobado que hubiesen hecho con sus acreedores.

Si no hubiere mediado convenio, estarán obligados á probar que, con el haber de la quiebra, ó mediante entregas posteriores, quedaron satisfechas todas las obligaciones reconocidas en el procedimiento de la quiebra.

922. Con la habilitación del quebrado cesarán todas las interdicciones legales que produce la declaración de quiebra.

Sección séptima. Disposiciones generales relativas á la quiebra de las sociedades mercantiles en general.

923. La quiebra de una sociedad en nombre colectivo ó en comandita lleva consigo la de los socios que tengan en ella responsabilidad solidaria, conforme á los artículos 127 y 148 de este Código, y producirá, respecto de todos los dichos

---

[1]) Los términos consisten en que sobre cada bien inmueble ha de pesar la hipoteca por la cantidad determinada que conste en la inscripción, y el orden, el de la fecha de la inscripción; teniendo en cuenta la excepción de ciertas hipotecas legales de que se habla en la nota anterior.

[2]) Véase la nota 3, pág. 219.

in the Mortgage Law[1]); — 2. Creditors who are specially privileged and the others enumerated in the preceding article, in the order therein enacted.

915. The sums which the tacit mortgage creditors receive from the moveables, when they are realised, shall be paid on account of what they have to receive by the sale of immoveables; and if they have received the whole of their debt, it shall be held to be balanced and shall pass to pay him who follows in order of date.

916. Creditors shall receive their debts without distinction of date, and *pro rata* within each class, and subject to the order stated in articles 913 and 914.

The following are excepted: 1. Mortgage creditors, who recover by the order of the dates of the inscriptions of their titles; — 2. Creditors by notarial instrument and by mercantile titles in which agents or brokers have taken part, who likewise shall recover in the order of the dates of their titles.

Notwithstanding the foregoing provisions, the privileges enacted in this Code over a specific thing are unaffected, in which case the general rule shall be observed if there are several creditors of the same class.

917. The proceeds of the sale shall not be distributed among the creditors of a grade, letter or number, as determined by articles 913 and 914, unless the debts of the previous grade, letter or number of the said articles are completely balanced, according to their order of priority.

918. Creditors with a pledge constituted by notarial instrument or by a contract in which an agent or broker has taken part, shall not be bound to bring the securities or objects which they received in pledge into the estate, unless the representation of the bankruptcy desires to recover them on paying in full the debt to which they are subject.

If the estate does not avail itself of this right, creditors with a pledge which is quotable on the Exchange may sell it at the maturity of the debt, according to the provisions of article 323 of this Code; and if the pledges are of another class, they may sell them with the intervention of a broker or collegiate agent, if any, or otherwise by public auction in the presence of a notary.

The resulting surplus after extinguishing the debt shall be paid to the estate.

If, on the other hand, there results a balance against the bankrupt, the creditor shall be considered as a creditor by notarial instrument, in the order which belongs to him according to the date of the contract.

919. Mortgage creditors, whether voluntary or legal[2]), whose debts are not covered by the sale of the immoveables which were mortgaged to them, shall, as regards the balance, be considered as creditors by notarial instrument on a level with the others of this grade, according to the dates of their titles.

Sixth Section. Discharge of the bankrupt.

920. Fraudulent bankrupts cannot be discharged.

921. Bankrupts who are not included in the preceding article may obtain their discharge on proving the entire performance of the approved arrangement which they made with their creditors.

If there has been no arrangement, they shall be obliged to prove that all their obligations which were admitted in the bankruptcy proceedings have been paid with the assets of the bankruptcy or by means of subsequent payments.

922. All the legal interdictions produced by the declaration of bankruptcy shall cease the with the discharge of the bankrupt.

Seventh Section. General provisions relating to the bankruptcy of mercantile societies in general.

923. The bankruptcy of an unlimited or limited partnership carries with it that of the partners who are jointly and severally liable therein, according to articles 127 and 148 of this Code, and with respect to all the said partners shall produce the

[1]) The terms consist in the mortgage having to burden each immoveable for the fixed amount which appears in the inscription, and the order is that of the date of the inscription; remembering the exception of certain legal mortgages spoken of in the preceding note.

[2]) See note 3, page 219.

socios, los efectos inherentes á la declaración de la quiebra, pero manteniéndose siempre separadas las liquidaciones respectivas.

924. La quiebra de uno ó más socios no produce por sí sola la de la sociedad.

925. Si los socios comanditarios ó de compañías anónimas no hubieren entregado al tiempo de la declaración de la quiebra el total de las cantidades que se obligaron á poner en la sociedad, el administrador ó administradores de la quiebra tendrán derecho para reclamarles los dividendos pasivos que sean necesarios dentro del límite de su respectiva responsabilidad.

926. Los socios comanditarios, los de sociedades anónimas y los de cuentas en participación que á la vez sean acreedores de la quiebra, no figurarán en el pasivo de la misma más que por la diferencia que resulte á su favor después de cubiertas las cantidades que estuvieren obligados á poner en el concepto de tales socios.

927. En las sociedades colectivas, los acreedores particulares de los socios cuyos créditos fueren anteriores á la constitución de la sociedad, concurrirán con los acreedores de ésta, colocándose en el lugar y grado que les corresponda, según la naturaleza de sus respectivos créditos, conforme á lo dispuesto en los artículos 913, 914 y 915 de este Código.

Los acreedores posteriores sólo tendrán derecho á cobrar sus créditos del remanente, si lo hubiere, después de satisfechas las deudas sociales, salva siempre la preferencia otorgada por las Leyes á los créditos privilegiados y á los hipotecarios.

928. El convenio, en la quiebra de sociedades anónimas que no se hallan en liquidación, podrá tener por objeto la continuación ó el traspaso de la empresa con las condiciones que se fijen en el mismo convenio.

929. Las compañías estarán representadas durante la quiebra según hubieren previsto para este caso los estatutos, y en su defecto, por el Consejo de administración; y podrán en cualquier estado de la misma presentar á los acreedores las proposiciones de convenio que estimen oportunas, las cuales deberán resolverse con arreglo á lo que se dispone en la sección siguiente.

Sección octava. De la suspensión de pagos y de las quiebras de las compañías y empresas de ferrocarriles y demás obras públicas.

930. Las compañías y empresas de ferrocarriles y demás obras de servicio público general, provincial ó municipal, que se hallaren en la imposibilidad de saldar sus obligaciones, podrán presentarse al juez ó tribunal en estado de suspensión de pagos.

También podrá hacerse la declaración de suspensión de pagos á instancia de uno ó más acreedores legítimos, entendiéndose por tales, para los efectos de este artículo, los comprendidos en el 876.

931. Por ninguna acción judicial ni administrativa podrá interrumpirse el servicio de explotación de los ferrocarriles ni de ninguna otra obra pública.

932. La compañía ó empresa que se presentare en estado de suspensión de pagos, solicitando convenio con sus acreedores, deberá acompañar á su solicitud el balance de su activo y pasivo.

Para los efectos relativos al covenio, se dividirán los acreedores en tres grupos: el primero comprenderá los créditos de trabajo personal y los procedentes de expropiaciones, obras y material; el segundo, los de las obligaciones hipotecarias emitidas por el capital que las mismas representen, y por los cupones y amortización vencidos y no pagados, computándose los cupones y amortización por su valor total, y las obligaciones según el tipo de emisión, dividiéndose este grupo en tantas secciones cuantas hubieren sido las emisiones de obligaciones hipotecarias; y el tercero, todos los demás créditos, cualquiera que sea su naturaleza y orden de prelación entre sí y con relación á los grupos anteriores.

933. Si la compañía ó empresa no presentare el balance en la forma determinada en el artículo anterior, ó la declaración de suspensión de pagos hubiese sido solicitada por acreedores que justifiquen las condiciones exigidas en el párrafo segundo del art. 930, el juez ó tribunal mandará que se forme el balance en el término de quince días, pasados los cuales sin presentarlo, se hará de oficio en igual término y á costa de la compañía ó empresa deudora.

effects inherent in a declaration of bankruptcy, but the respective liquidations shall always be kept separate.

924. The bankruptcy of one or more partners does not by itself produce the bankruptcy of the partnership.

925. If the limited partners or the members of limited companies have not paid the whole of the amounts which they were obliged to bring into the society at the time of the declaration of bankruptcy, the administrator or administrators of the bankruptcy shall be entitled to make calls upon them so far as necessary within the limit of their respective liability.

926. Limited partners, members of limited companies and those of accidental partnerships, who are at the same time creditors of the bankruptcy, shall not figure in the liabilities thereof for more than the difference which results in their favour after meeting the amounts which they are bound to pay in as such members.

927. In unlimited partnerships, the separate creditors of the partners whose credits were previous to the formation of the partnership shall rank with the creditors thereof, and be placed in the grade which belongs to them, according to the nature of their respective credits, as provided by articles 913, 914 and 915 of this Code.

Subsequent creditors shall only be entitled to recover their credits from the residue, if any, after the social debts have been paid, saving always the preference granted by the Laws to privileged and mortgage credits.

928. In the bankruptcy of limited companies which are not in liquidation, the arrangement may have for its object the continuation or transfer of the undertaking in the terms fixed by the same arrangement.

929. Companies shall be represented during the bankruptcy according to the provisions for this purpose in their constitutions, and in default thereof, by the Board of Directors; and in any state of the bankruptcy they may present to the creditors the proposals for the arrangement which they deem expedient, which must be decided according to the provisions of the following section.

Eighth Section. Suspension of payment and bankruptcies of companies and undertakings for railroads and other public works.

930. Companies and undertakings for railroads and other works of general public, provincial or municipal service, which find themselves unable to meet their obligations, may present themselves to the judge or tribunal in a state of suspension of payment.

The declaration of suspension of payment may likewise be made at the instance of one or more lawful creditors, meaning thereby, for the purposes of this article, those who are included in article 876.

931. The service of working the railroads or any other public work may not be interrupted by any judicial or administrative action.

932. A company or undertaking which presents itself in a state of suspension of payment, and applies for an arrangement with its creditors, must accompany its application with the balance sheet of its assets and liabilities.

For the purposes which relate to the arrangement, the creditors shall be divided into three groups: the first shall comprise the credits for personal labour and those proceeding from expropriations, works and material; the second, those from mortgage bonds, issued for the principal represented thereby, and for the coupons and redemption due and not paid, reckoning the coupons and redemption at their total amount, and the bonds according to the rate of issue, this group being divided into as many sections as there have been issues of mortgage bonds; and the third, all the other credits, of whatever nature and order of priority *inter se* and with relation to the preceding groups.

933. If the company or undertaking does not present the balance sheet as determined by the preceding article, or if the declaration of suspension of payment has been applied for by creditors who prove the conditions required by the second paragraph of article 930, the judge or tribunal shall order that the balance sheet be drawn up within the term of fifteen days, and when these have expired without its being presented, it shall be drawn up by order within a like term and at the expense of the debtor company or undertaking.

934. La declaración de suspensión de pagos hecha por el juez ó tribunal producirá los efectos siguientes: 1.° Suspenderá los procedimientos ejecutivos y de apremio; — 2.° Obligará á las compañías y empresas á consignar en la Caja de Depósitos ó en los Bancos autorizados al efecto los sobrantes, cubiertos que sean los gastos de administración, explotación y construcción; — 3.° Impondrá á las compañías y empresas el deber de presentar al juez ó tribunal, dentro del término de cuatro meses, una proposición de convenio para el pago de los acreedores, aprobada previamente en junta ordinaria ó extraordinaria por los accionistas, si la compañía ó empresa deudora estuviere constituída por acciones.

935. El convenio quedará aprobado por los acreedores si le aceptan los que representen tres quintas partes de cada uno de los grupos ó secciones señalados en el art. 932.

Se entenderá igualmente aprobado por los acreedores, si, no habiendo concurrido, dentro del primer plazo señalado al efecto, número bastante para formar la mayoría de que antes se trata, lo aceptaren en una segunda convocatoria acreedores que representaren los dos quintos del total de cada uno de los dos primeros grupos y de sus secciones, siempre que no hubiese oposición que exceda de otros dos quintos de cualquiera de dichos grupos ó secciones, ó del total pasivo.

936. Dentro de los quince días siguientes á la publicación del cómputo de los votos, si éste hubiere sido favorable al convenio, los acreedores disidentes y los que no hubieren concurrido podrán hacer oposición al convenio por defectos en la convocación de los acreedores y en las adhesiones de éstos, ó por cualquiera de las causas determinadas en los números 2.° al 5.° del art. 903.

937. Aprobado el convenio sin oposición, ó desestimada ésta por sentencia firme, será obligatorio para la compañía ó empresa deudora y para todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior á la suspensión de pagos, si hubieren sido citados en forma legal, ó si, habiéndoseles notificado el convenio, no hubieren reclamado contra él en los términos prevenidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

938. Procederá la declaración de quiebra de las compañías ó empresas, cuando ellas lo solicitaren, ó á instancia de acreedor legítimo, siempre que en este caso se justificare alguna de las condiciones siguientes: 1.ª Si transcurrieren cuatro meses desde la declaración de suspensión de pagos sin presentar al juez ó tribunal la proposición de convenio; — 2.ª Si el convenio fuere desaprobado por sentencia firme, ó no se reuniesen suficientes adhesiones para su aprobación en los dos plazos á que se refiere el art. 935; — 3.ª Si, aprobado el convenio, no se cumpliere por la compañía ó empresa deudora, siempre que en este caso lo soliciten acreedores que representen al menos la vigésima parte del pasivo.

939. Hecha la declaración de quiebra, si subsistiere la concesión, se pondrá en conocimiento del Gobierno ó de la corporación que la hubiere otorgado, y se constituirá un Consejo de incautación, compuesto de un presidente nombrado por dicha autoridad; dos vocales designados por la compañía ó empresa; uno por cada grupo ó sección de acreedores, y tres á pluralidad de todos éstos.

940. El Consejo de incautación organizará provisionalmente el servicio de la obra pública; la administrará y explotará, estando además obligado: 1.° Á consignar con carácter de depósito necesario los productos en la Caja general de Depósitos, después de deducidos y pagados los gastos de administración y explotación; — 2.° Á entregar en la misma Caja, y en el concepto también de depósito necesario, las existencias en metálico ó valores que tuviera la compañía ó empresa al tiempo de la incautación; — 3.° Á exhibir los libros y papeles pertenecientes á la compañía ó empresa, cuando proceda y lo decrete el juez ó tribunal.

941. En la graduación y pago de los acreedores, se observará lo dispuesto en la sección quinta de este título.

Título II. De las prescripciones.

942. Los términos fijados en este Código para el ejercicio de las acciones procedentes de los contratos mercantiles, serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución.

934. The declaration of suspension of payment made by a judge or tribunal shall produce the following effects: 1. Executive and *apremio* proceedings shall be suspended; — 2. The companies and undertakings shall be obliged to pay the surpluses, after meeting the expenses of administration, working and construction, into the Caja de Depósitos or the Banks which are authorised for that purpose; — 3. It shall impose on the companies and undertakings the duty of presenting to the judge or tribunal, within the term of four months, a proposition for an arrangement for the payment of their creditors, which has been previously approved by the shareholders in an ordinary or extraordinary meeting, if the debtor company or undertaking is formed with share capital.

935. The arrangement shall be approved by the creditors, if it is accepted by those who represent three fifth parts of each of the groups or sections named in article 932.

It shall likewise be understood as approved by the creditors, if a number sufficient to form the aforesaid majority has not met together within the first space of time appointed for that purpose, and it is accepted in a second meeting by creditors who represent two fifths of the total of each of the two first groups and their sections, provided that there has been no opposition which exceeds other two fifths of any of the said groups or sections, or of the total liabilities.

936. Within the fifteen days following the publication of the counting of the votes, if this has been favourable to the arrangement, the dissentient creditors and those who have not attended may oppose this arrangement for defects in summoning the creditors and in the voting of the latter, or on any of the grounds determined by numbers 2 to 5 of article 903.

937. If the arrangement has been passed without opposition, or if this has been rejected by final judgment, it shall be binding on the debtor company or undertaking and on all the creditors whose credits date from the time previous to the suspension of payment, if they have been summoned in legal form, or if, having been notified of the arrangement, they have not entered a claim against it within the times prescribed by the Law of Civil Procedure.

938. Declaration of bankruptcy of the companies or undertakings shall take place when they apply therefor, or at the instance of a lawful creditor, provided in the latter case that one of the following conditions is proved: 1. If four months have elapsed since the declaration of suspension of payment without presenting the proposal for arrangement to the judge or tribunal; — 2. If the arrangement has been disapproved by a final judgment, or sufficient creditors in favour of its approval have not met together within the times to which article 935 refers; — 3. If, after the approval of the arrangement, it is not carried out by the debtor company or undertaking, provided that in this case creditors representing at least the twentieth part of the liabilities apply therefor.

939. If the concession subsists after the declaration of bankruptcy, this shall be brought to the knowledge of the Government or corporation which granted it, and a Board of Inspection shall be formed, composed of a president appointed by the said authority, two members nominated by the company or undertaking, one by each group or section of creditors, and three more by all the creditors.

940. The Board of Inspection shall provisionally organize the service of the public work; shall administer it and exploit it, and shall also be obliged: 1. To pay the proceeds into the Caja general de Depósitos as a necessary deposit after deducting and paying the expenses of administration and working; — 2. To pay into the same Caja, likewise as a necessary deposit, the existing cash or securities which the company or undertaking had at the time of the inspection; — 3. To produce the books and papers belonging to the company or undertaking at proper times and as ordered by the judge or tribunal.

941. The provisions of the fifth section of this Title shall be observed in the classification and payment of the creditors.

Title II. Limitation of actions.

942. The terms fixed in this Code for bringing actions which arise from mercantile contracts shall be conclusive, and no *restitutio* is given in opposition to them.

943. Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio, se regirán por las disposiciones del derecho común[1]).

944. La prescripción se interrumpirá por la demanda ú otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, ó por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, ó caducara la instancia, ó fuese desestimada su demanda.

Empezará á contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de su renovación, desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.

945. La responsabilidad de los agentes de Bolsa, corredores de comercio ó intérpretes de buques, en las obligaciones que intervengan por razón de su oficio, prescribirá á los tres años.

946. La acción real contra la fianza de los agentes mediadores sólo durará seis meses, contados desde la fecha del recibo de los efectos públicos, valores de comercio ó fondos que se les hubieren entregado para las negociaciones, salvo los casos de interrupción ó suspensión expresados en el art. 944.

947. Las acciones que asisten al socio contra la sociedad, ó viceversa, prescribirán por tres años, contados, según los casos, desde la separación del socio, su exclusion ó disolución de la sociedad.

Será necesario, para que este plazo corra, inscribir en el Registro Mercantil la separación del socio, su exclusión, ó la disolución de la sociedad.

Prescribirá asimismo por cinco años, contados desde el día señalado para comenzar su cobro, el derecho á percibir los dividendos ó pagos que se acuerden por razón de utilidades ó capital sobre la parte ó acciones que á cada socio corresponda en el haber social.

948. La prescripción en provecho de un asociado que se separó de la sociedad ó que fué excluído de ella, constando en la forma determinada en el artículo anterior, no se interrumpirá por los procedimientos judiciales seguidos contra la sociedad ó contra otro socio.

La prescripción en provecho del socio que formaba parte de la sociedad en el momento de su disolución, no se interrumpirá por los procedimientos judiciales seguidos contra otro socio, pero sí por los seguidos contra los liquidadores.

949. La acción contra los socios gerentes y administradores de las compañías ó sociedades terminará á los cuatro años, á contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración.

950. Las acciones procedentes de letras de cambio se extinguirán á los tres años de su vencimiento, háyanse ó no protestado.

Igual regla se aplicará á las libranzas y pagarés de comercio, cheques, talones y demás documentos de giro ó cambio, y á los dividendos, cupones é importe de amortización de obligaciones emitidas conforme á este Código.

951. Las acciones relativas al cobro de portes, fletes, gastos á ellos inherentes y de la contribución de averías comunes, prescribirán á los seis meses de entregar los efectos que los adeudaron.

El derecho al cobro del pasaje prescribirá en igual término, á contar desde el día en que el viajero llegó á su destino, ó del en que debía pagarlo.

[1]) Estas acciones procedentes de contratos mercantiles, que son las á que se refiere este artículo, pueden ser hipotecarias, reales sobre cosas muebles, ó personales. Las hipotecarias prescriben á los 20 años; las reales sobre cosas muebles á los 6 años de perdida la posesión, salvo que el poseedor haya ganado el dominio por menor tiempo y excepto los casos de extravío y venta pública y los de hurto y robo que se rigen por lo especialmente provenido en el artículo 1955 del Cód. c.; y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción, á los 15 años (arts. 1962 y 1964 del Cód. c.).

943. Actions which have no time fixed by this Code for being brought into Court, shall be governed by the provisions of the common law[1]).

944. Prescription shall be interrupted by Claim and every other kind of judicial interpellation made on the debtor, by acknowledgment of the obligations, or by the renewal of the document on which the right of the creditor is based.

Prescription shall not be considered as interrupted by a judicial interpellation, if the plaintiff abandons it or the proceedings lapse or his Claim is rejected.

The term for prescription in the case of acknowledgment of obligations shall begin to be reckoned afresh from the day on which it is made; in the case of its renewal, from the date of the new title; and if the time for the fulfilment of the obligation has been postponed therein, from the time when the time has expired.

945. The liability of agents on the Exchange, commercial brokers or interpreting ship-brokers in the obligations in which they take part officially, shall be prescribed in three years.

946. The real action against the security of agents shall only last six months, reckoned from the date of the receipt of the public securities, commercial valuables or funds which have been delivered to them for negotiation, saving the cases of interruption or suspension set forth in article 944.

947. Actions which aid a member against a society, or vice versa, shall be prescribed by three years, reckoned from the resignation or expulsion of the member or the dissolution of the society, as the case may be.

In order that this time may run, it shall be necessary to inscribe the resignation or expulsion of the member or the dissolution of the society on the Mercantile Register.

The right to receive the income or payments which are agreed as profit or capital on the part or share which belongs to each member in the social property shall also be prescribed by five years, reckoned from the day named for commencing to receive them.

948. Prescription for the advantage of a member who has resigned from a society or was expelled therefrom, and which appears as determined in the preceding article, shall not be interrupted by judicial proceedings taken against the society or against another member.

Prescription for the advantage of a member who formed part of the society at the moment of its dissolution, shall not be interrupted by judicial proceedings taken against another member, but it shall be interrupted by those taken against the liquidators.

949. Actions against managing partners and administrators of companies or partnerships shall terminate at four years, reckoned from their ceasing for any reason to act in the administration.

950. Actions arising from bills of exchange shall be extinguished in three years from their maturity, whether they have been protested or not.

The same rule shall be applied to commercial drafts and promissory notes, cheques, counterfoiled and other documents of circulation or exchange, and to the dividends, coupons and amount of amortisation of bonds issued in accordance with this Code.

951. Actions with relation to the recovery of fares, freights, of expenses of and concerning the same and of contribution to general average, shall be prescribed in six months from delivering the goods which owed them.

The right to recover passage money shall be prescribed in the like time, reckoned from the day on which the traveller arrived at his destination, or from that on which he ought to pay it.

---

[1]) These actions, arising from mercantile contracts, which are those referred to by this article, may be mortgage actions, real actions affecting moveables, or personal actions. Mortgage actions are prescribed in 20 years; real actions affecting moveables, in 6 years from loss of possession, unless the possessor has obtained the dominium in less time and excepting cases of loss and public sale and those of theft and robbery which are governed by the special provisions of art. 1955 of the Civil Code; and personal actions which have no stated time of prescription, in 15 years (arts. 1962 and 1964 of the Civil Code). (By a Law of 1 July 1911, arts. 26, 27, unclaimed interest on State debts is prescribed in 5 years and the capital in 30 years. Claims for property judicially deposited are prescribed in 30 years by a Law of 7 July 1911. [Translator.])

952. Prescribirán al año: 1.° Las acciones nacidas de servicios, obras, provisiones y suministros de efectos ó dinero para construir, reparar, pertrechar ó avituallar los buques ó mantener la tripulación, á contar desde la entrega de los efectos y dinero ó de los plazos estipulados para su pago, y desde la prestación de los servicios ó trabajos, si éstos no estuvieren contratados por tiempo ó viaje determinados. Si lo estuviesen, el tiempo de la prescripción comenzará á contarse desde el término del viaje ó del contrato que les fuere referente; y si hubiere interrupción en éstos, desde la cesación definitiva del servicio; — 2.° Las acciones sobre entrega del cargamento en los transportes terrestres ó marítimos, ó sobre indemnización por sus retrasos y daños sufridos en los objetos transportados, contado el plazo de la prescripción desde el día de la entrega del cargamento en el lugar de su destino, ó del en que debía verificarse según las condiciones de su transporte. Las acciones por daños ó faltas no podrán ser ejercitadas si al tiempo de la entrega de las respectivas expediciones, ó dentro de las veinticuatro horas siguientes, cuando se trate de daños que no apareciesen al exterior de los bultos recibidos, no se hubiesen formalizado las correspondientes protestas ó reservas; — 3.° Las acciones por gastos de la venta judicial de los buques, cargamentos ó efectos transportados por mar ó tierra, así como las de su custodia, depósito y conservación, y los derechos de navegación y de puerto, pilotaje, socorros, auxilios y salvamentos, contándose el plazo desde que los gastos se hubieren hecho y prestado los auxilios, ó desde la terminación del expediente, si se hubiere formalizado sobre el caso.

953. Las acciones para reclamar indemnización por los abordajes prescribirán á los dos años del siniestro.

Estas acciones no serán admisibles si no se hubiere hecho la correspondiente protesta por el capitán del buque perjudicado, ó quien le sustituyere en sus funciones, en el primer puerto donde arribaron, conforme á los casos 8.° y 15 del art. 612, cuando éstos ocurrieren.

954. Prescribirán por tres años, contados desde el término de los respectivos contratos ó desde el fecha del siniestro que diere lugar á ellas, las acciones nacidas de los préstamos á la gruesa ó de los seguros marítimos.

Título III. Disposición general.

955. En los casos de guerra, epidemia oficialmente declarada ó revolución, el Gobierno podrá, acordándolo en Consejo de Ministros y dando cuenta á las Cortes, suspender la acción de los plazos señalados por este Código para los efectos de las operaciones mercantiles, determinando los puntos ó plazas donde estime conveniente la suspensión, cuando ésta no haya de ser general en todo el Reino.

Prescripciones Complementarias del Código Civil.[1]

Libro cuarto. De las obligaciones y contratos.[2]

Título primero. De las obligaciones.

Capítulo primero. Disposiciones generales.

Art. 1088. Toda obligación consiste en dar, hacer ó no hacer alguna cosa.

1089. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos ó en que intervenga cualquier género de culpa ó negligencia.

[1]) Por la Ley de bases de 11 de mayo de 1888 se autorizó al Gobierno para publicar un Código civil, con arreglo á las en dicha Ley establecidas; y el Gobierno por Real Decreto de 6 de octubre del mismo año lo publicó para empezar á regir en 1° de enero de 1889. Y habiéndose advertido despues algunos errores y contradicciones en su texto, por virtud de la Ley de 26 de mayo de 1889, se autorizó al Gobierno para su corrección y enmienda; publicándose á consecuencia de esto, una nueva edición corregida y enmendada por Real Decreto de 24 de junio del mismo año, cuyo texto es el que está en vigor desde entonces, sin otra alteración que la variante introducida en los artículos 688 y 732 roferente al testamento ológrafo.

[2]) Esta parte general de las obligaciones y contratos que comprende los dos primeros Títulos del Libro cuarto del Código Civil y el Capítulo II del Título XVI del propio Libro pueden conceptuarse como leyes mercantiles ya que su aplicación á las cuestiones de esta índole está reconocida en el art. 50 del Código de Comercio.

952. The following shall be prescribed in one year: 1. Actions arising from services, work, provisions or supplies of effects or money to build, repair, supply or victual vessels or to maintain the crew, reckoned from the delivery of the effects and money or the times stipulated for their payment and from the rendering of the services and labour, if the latter were not contracted by fixed time or voyage. If they were, the time for prescription shall commence to run from the end of the voyage or of the contract relating thereto; and if they were interrupted, from the final cessation of the service; — 2. Actions about delivery of the cargo in carriage by land or sea, or about compensation for their delay or damage suffered by the objects carried, reckoning the time of the prescription from the day of the delivery of the cargo at the place of its destination or from the day on which it ought to have been delivered according to the conditions of its carriage. Actions for damage or negligence cannot be brought if the proper protests or reservations were not drawn up at the time of the delivery of the respective consignments, or within the following twenty four hours, when it is a question of damage which was not apparent on the exterior of the packages received; — 3. Actions for expenses of the judicial sale of vessels, cargoes or effects carried by sea or land, as well as for their custody, deposit and preservation, and the navigation and harbour dues, pilotage, succour, aids and salvage, reckoning the time from when the expenses were incurred and the help given, or from the closing of the file, if any was drawn up in relation to the case.

953. Actions to claim compensation for collisions shall be prescribed in two years from the casualty.

These actions shall not be admissible if the proper protest has not been made by the master of the injured vessel, or by the person who replaces him in his functions, at the first port where they arrived, according to cases 8 and 15 of article 612, when these occur.

954. Actions arising from bottomry loans or from marine insurance shall be prescribed by three years, reckoned from the end of the respective contracts or from the date of the casualty which gave rise to the actions.

Title III. General provisions.

955. In case of war officially declared, epidemic or revolution, the Government, on the resolution of the Cabinet Council and on reporting the same to the Houses of Parliament, may suspend the effect of the times named in this Code for the purposes of mercantile transactions, and may fix the places and times wherein they deem suspension expedient, when this is not to be general in the whole Realm.

Supplementary provisions of the Civil Code.[1]

Fourth Book. Obligations and contracts.[2]

First Title. Obligations.

First Chapter. General provisions.

Art. 1088. Every obligation consists in giving, doing or not doing something.

1089. Obligations arise from the law, from contracts and *quasi* contracts, and from unlawful acts and omissions or from those in which any sort of *culpa* or negligence forms a part.

[1]) By the Law of Bases, 11 May 1888, the Government was authorised to publish a Civil Code, according to the bases enacted by the said law; and by Royal Decree of 6 October of the same year, the Government published it, to come into force on 1 January 1889. And as some mistakes and contradictions were noticed in its text, the Government was authorised to correct and amend it by Law of 26 May 1889; and in consequence thereof a new edition, as corrected and amended, was published by Royal Decree of 24 June of the same year, the text whereof has since been in force, without any alteration except a change introduced in arts. 688 and 732 referring to holograph wills.

[2]) This general part of Obligations and Contracts, which includes the two first titles of the fourth book of the Civil Code and Chapter II of Title XVI of the same Book, may be considered mercantile laws, since their application to questons of this nature is recognised by art. 50 of the Code of Commerce.

1090. Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código ó en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere previsto, por las disposiciones del presente libro.

1091. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.

1092. Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos ó faltas se regirán por las disposiciones del Código penal.

1093. Las que se deriven de actos ú omisiones en que intervenga culpa ó negligencia no penadas por la ley, quedarán sometidas á las disposiciones del capítulo 2.° del título 16 de este libro[1]).

Capítulo II. De la naturaleza y efecto de las obligaciones.

1094. El obligado á dar alguna cosa lo está también á conservarla con la diligencia propia de un buen padre de familia.

1095. El acreedor tiene derecho á los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla. Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada.

1096. Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le otorga el art. 1101, puede compeler al deudor á que realice la entrega.

Si la cosa fuere indeterminada ó genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación á expensas del deudor.

Si el obligado se constituye en mora, ó se halla comprometido á entregar una misma cosa á dos ó más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega.

1097. La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados.

1098. Si el obligado á hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar á su costa.

Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho.

1099. Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior se observará también cuando la obligación consista en no hacer y el deudor ejecutare lo que le había sido prohibido.

1100. Incurren en mora los obligados á entregar ó á hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial ó extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.

No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista: 1.° Cuando la obligación ó la ley lo declaren así expresamente; — 2.° Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa ó hacerse el servicio, fué motivo determinante para establecer la obligación.

En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple ó no se allana á cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro.

1101. Quedan sujetos á la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia ó morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.

1102. La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula.

1103. La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos.

1104. La culpa ó negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda á las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería á un buen padre de familia.

[1]) Este capítulo se inserta á continuación del Título segundo de este Libro.

1090. Obligations which arise from the law are not presumed. Only those are enforceable which are expressly determined by this Code or by special laws, and they shall be governed by the precepts of the law which enacted them, and by the provisions of the present book, so far as the latter has not provided.

1091. Obligations which arise from contracts have the force of law as between the contracting parties, and must be performed according to the tenor thereof.

1092. The civil obligations which arise from crimes shall be governed by the provisions of the Penal Code.

1093. Those which are derived from acts or omissions in which *culpa* or negligence, not punishable by law, forms a part, shall be subject to the provisions of Chapter 2 of Title 16 of this book[1]).

Chapter II. The nature and effect of obligations.

1094. A person who is bound to give something is likewise bound to keep it with the diligence proper to a good paterfamilias.

1095. A creditor is entitled to the produce of the thing from the time that the obligation to deliver it arises. Nevertheless, he shall not acquire a real right over it until it has been delivered to him.

1096. When that which must be delivered is a thing certain, the creditor may compel the debtor to effect delivery, independently of the right conceded to him by article 1101.

If the thing is undetermined or generic, he may apply that the obligation be performed at the expense of the debtor.

If the obligor is guilty of delay, or has promised to deliver the same thing to two or more different persons, fortuitous events shall be at his risk until delivery is effected.

1097. An obligation to give a thing certain includes that of delivering all its accessories, although they have not been mentioned.

1098. If a person who is bound to do a thing, fails to do it, he shall be ordered to effect it at his own expense.

The same shall be observed if he does it, but contravenes the tenor of the obligation. He may in addition be ordered to undo what he has done ill.

1099. The provision in the second paragraph of the preceding article shall likewise be observed when the obligation consists in not doing and the debtor does what he has been forbidden to do.

1100. Persons who are bound to deliver or do anything are guilty of delay from the time that the creditor demands the performance of their obligation, either judicially or out of Court.

Nevertheless, for the existence of delay an intimation from the creditor shall not be necessary: 1. When the obligation or the law expressly so declares; — 2. When it appears from its nature and circumstances that the appointment of the time at which the thing had to be delivered or the service rendered was the determining reason for constituting the obligation.

In mutual obligations, none of the obligors is guilty of delay if the other does not perform or does not prepare to duly perform what is incumbent on him. Delay begins on the part of one obligor from the time that the other performs his obligation.

1101. Those who are guilty of fraud, negligence or delay in the performance of their obligations and those who in any way contravene the tenor thereof are liable to compensate for the damage caused.

1102. The liability arising from fraud may be demanded in all obligations. Renunciation of the right of action for enforcing it is void.

1103. The liability arising from negligence in the performance of every kind of obligation, may likewise be demanded; but it may be tempered by the Tribunals according to the case.

1104. *Culpa* or negligence of a debtor consists in the omission of that diligence which is required by the nature of the obligation and is proper to the circumstances of the persons, time and place.

When the obligation does not state the diligence which has to be expended in its performance, that which is the duty of a good paterfamilias shall be required.

---

[1]) This chapter is inserted after the second Title of this Book.

1105. Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, ó que, previstos, fueran inevitables.

1106. La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.

1107. Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos ó que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.

En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.

1108. Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y á falta de convenio, en el interés legal.

Mientras que no se fije otro por el Gobierno, se considerará como legal el interés de 6 por 100 al año[1]).

1109. Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto.

En los negocios comerciales se estará á lo que dispone el Código de Comercio.

Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros se regirán por sus reglamentos especiales.

1110. El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna respecto á los intereses, extingue la obligación del deudor en cuanto á éstos.

El recibo del último plazo de un débito, cuando el acreedor tampoco hiciere reservas, extinguirá la obligación en cuanto á los plazos anteriores.

1111. Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes á su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.

1112. Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción á las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario.

Capítulo III. De las diversas especies de obligaciones.

Sección primera. De las obligaciones puras y de las condicionales.

1113. Será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro ó incierto, ó de un suceso pasado, que los interesados ignoren.

También será exigible toda obligación que contenga condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución.

1114. En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución ó pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición.

1115. Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte ó de la voluntad de un tercero, la obligación surtirá sus efectos con arreglo á las disposiciones de este Código.

1116. Las condiciones imposibles, las contrarias á las buenas costumbres y las prohibidas por la ley anularán la obligación que de ellas dependa.

La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.

1117. La condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la obligación desde que pasare el tiempo ó fuere ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar.

1118. La condición de que no acontezca algún suceso en tiempo determinado hace eficaz la obligación desde que pasó el tiempo señalado ó sea ya evidente que el acontecimiento no puede ocurrir.

[1]) A partir de la Ley de 2 de agosto de 1899 el interés legal, mientras no se acuerde otra cosa, es el de 5% al año.

1105. Apart from the cases expressly mentioned in the law, and those in which the obligation so declares, no one shall be liable for those events which he has not been able to foresee, or which, though foreseen, were unavoidable.

1106. Compensation for damage includes not only the amount of the loss which the creditor has suffered, but also that of the profit which he has failed to realise, saving the provisions contained in the following articles.

1107. The damages for which a debtor of good faith is liable are those which were foreseen or which could have been foreseen at the time of the obligation being constituted and which are the necessary consequence of his failing to perform it.

In case of fraud, the debtor shall be liable for all those which are confessedly derived from the failure to perform the obligation.

1108. If the obligation consists in the payment of a sum of money, and the debtor is guilty of delay, the compensation for damage, if there is no bargain to the contrary, shall consist in the payment of the agreed interest, and in default of agreement, of legal interest.

Six per centum per annum shall be considered legal interest as long as another rate is not fixed by the Government[1]).

1109. Due interest shall earn legal interest from the time that it is judicially claimed, although the obligation is silent on this point.

In commercial business the provisions of the Code of Commerce shall govern.

Pawn-shops and Savings Banks shall be governed by their special regulations.

1110. A receipt for the principal sum given by the creditor, without any reservation with respect to the interest, shall extinguish the obligation of the debtor so far as the latter is concerned.

When a creditor makes no reservations, the receipt for the last instalment of a debt shall extinguish the obligation as far as the previous instalments are concerned.

1111. After having followed the property, of which the debtor is in possession, for the purpose of realising what is due to them, the creditors may exercise all the rights and rights of action of the former, with the same end, excepting those which pertain to his person; they may also impugn the acts which the debtor has performed in fraud of their rights.

1112. All rights acquired by virtue of an obligation are transferable, subject to the law, if no bargain has been made to the contrary.

Chapter III. Different kinds of obligations.

First Section. Simple and conditional obligations.

1113. Every obligation the performance whereof does not depend on a future or uncertain event, or a passed event of which the persons interested are not aware, shall be demandable forthwith.

Likewise every obligation which contains a condition subsequent shall be demandable, but without prejudice to the effects of the condition.

1114. In conditional obligations, the acquisition of rights, and the dissolution or loss of those already acquired, shall depend on the event which constitutes the condition.

1115. When the performance of the condition depends exclusively on the will of the debtor, the conditional obligation is void. If it depends on a chance or the will of a third person, the obligation shall take effect according to the provisions of this Code.

1116. Impossible conditions, those contrary to good customs and those forbidden by law, shall annul the obligation on which they are dependent.

A condition not to do an impossible thing is held as not having been made.

1117. A condition that some event should happen at a fixed time shall extinguish the obligation from the passing of the time or when it is already certain that the event will not take place.

1118. A condition that some event should not happen at a fixed time makes the obligation effective from the passing of the appointed time or when it is already evident that the event cannot happen.

[1]) From the Law of 2 August 1899 the legal interest is 5% per annum, so long as another rate is not agreed.

Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida en el que verosímilmente se hubiese querido señalar, atendida la naturaleza de la obligación.

1119. Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento.

1120. Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez cumplida la condición, se retrotraen al día de la constitución de aquella. Esto no obstante. cuando la obligación imponga recíprocas prestaciones á los interesados, se entenderán compensados unos con otros los frutos é intereses del tiempo en que hubiese estado pendiente la condición. Si la obligación fuere unilateral, el deudor hará suyos los frutos é intereses percibidos, á menos que por la naturaleza y circunstancias de aquélla deba inferirse que fué otra la voluntad del que la constituyó.

En las obligaciones de hacer y de no hacer los Tribunales determinarán, en cada caso, el efecto retroactivo de la condición cumplida.

1121. El acreedor puede, antes del cumplimiento de las condiciones, ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho.

El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiese pagado.

1122. Cuando las condiciones fueren puestas con el intento de suspender la eficacia de la obligación de dar, se observarán las reglas siguientes, en el caso de que la cosa mejore ó se pierda ó deteriore pendiente la condición: 1.ª Si la cosa se perdió sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación; — 2.ª Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios; — Entiéndese que la cosa se pierde cuando perece, queda fuera del comercio ó desaparece de modo que se ignora su existencia, ó no se puede recobrar; — 3.ª Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el menoscabo es de cuenta del acreedor; — 4.ª Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación y su cumplimiento, con la indemnización de perjuicios en ambos casos; — 5.ª Si la cosa se mejora por su naturaleza, ó por el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor; — 6.ª Si se mejora á expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el concedido al usufructuario.

1123. Cuando las condiciones tengan por objeto resolver la obligación de dar, los interesados, cumplidas aquéllas, deberán restituirse lo que hubiesen percibido.

En el caso de pérdida, deterioro ó mejora de la cosa, se aplicarán al que deba hacer la restitución las disposiciones que respecto al deudor contiene el artículo precedente.

En cuanto á las obligaciones de hacer y no hacer, se observará, respecto á los efectos de la resolución, lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 1120.

1124. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento ó la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

El Tribunal decretará la resolución que se reclame, á no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.

Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo á los artículos 1295 y 1298 y á las disposiciones de la Ley Hipotecaria[1]).

Sección segunda. De las obligaciones á plazo.

1125. Las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue.

Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo.

Si la incertidumbre consiste en si ha de llegar ó no el día, la obligación es condicional, y se regirá por las reglas de la sección precedente.

[1]) Las disposiciones de la Ley Hipotecaria á que se refiere este artículo son las contenidas en el Título II que lleva por epígrafe «De la forma y efectos de la inscripción»; principalmente desde el art. 23 al 41 inclusivo.

If there is no time fixed, the condition must be considered performed at the time which it would probably have been wished to appoint, with due regard to the nature of the obligation.

1119. A condition shall be held to be fulfilled when the obligor wilfully prevents its fulfilment.

1120. The effect of a conditional obligation to give, when once the condition is fulfilled, dates back to the day of the creation thereof. Nevertheless, when the obligation imposes mutual considerations on the persons interested, the produce and interest of the time during which the condition is in a state of suspense shall be understood as set-off the one against the other. If the obligation is unilateral, the debtor shall have the received produce and interest as his own, unless it must be inferred from the nature and circumstances thereof that the intention of him who constituted the obligation was otherwise.

In obligations to do or not to do, the Tribunals shall in each case determine the retroactive effect of the fulfilled condition.

1121. Before the fulfilment of the condition, the creditor may bring the actions which are available for the preservation of his right.

The debtor may claim what he has paid during the same time.

1122. When conditions are made with the intention of suspending the validity of an obligation to give, the following rules shall be observed, when the thing ameliorates or is lost or deteriorates during the pendency of the condition: 1. If the thing is lost without *culpa* of the debtor, the obligation shall be extinguished; — 2. If the thing is lost throught the *culpa* of the debtor, the latter is bound to compensate for the damage; — It is understood that a thing is lost when it perishes, is not an object of commerce, or disappears in such a way that its existence is unknown, or it cannot be recovered; — 3. When the thing deteriorates without the *culpa* of the debtor, the depreciation is borne by the creditor; — 4. When it deteriorates through the *culpa* of the debtor, the creditor may elect between rescinding the obligation and its performance, with compensation for damage in either case; — 5. If the thing ameliorates by its nature, or by time, the improvements accrue to the advantage of the creditor; — 6. If it is improved at the expense of the debtor, the latter shall have no further right than that granted to a limited owner (usufructuary).

1123. When the conditions are intended to rescind an obligation to give, the persons interested must, on the fulfilment thereof, restore what they have received.

In the case of loss, deterioration or amelioration of the thing, the provisions with regard to the debtor which are contained in the preceding article shall apply to the person who must make the restoration.

As regards obligations to do or not to do, the provision in the second paragraph of article 1120 shall be observed with regard to the effects of the rescission.

1124. The power of rescinding obligations is understood to be implied in those which are mutual, when one of the obligors does not perform the part which is incumbent on him.

The prejudiced person may choose between requiring performance or the rescission of the obligation, with compensation for damage and payment of interest in both cases. He may likewise apply for rescission, when, after he has elected for performance, this proves to be impossible.

The Tribunal shall order the rescission which is claimed, if there are no proved reasons which warrant it in fixing a time.

This is understood so as not to prejudice the rights of third persons who are purchasers in accordance with articles 1295 and 1298 and the provisions of the Mortgage Law [1]).

Second Section. Deferred obligations.

1125. Obligations for the fulfilment whereof a day certain has been appointed, shall only be enforceable when the day arrives.

A day certain means a day which has of necessity to come, although it is not known when.

If the uncertainty consists in whether the day has to arrive or not, the obligation is conditional, and shall be governed by the rules of the preceding section.

[1]) The provisions of the Mortgage Law to which this article refers are those contained in Title II which bears the heading "The form and effects of inscription"; chiefly from art. 23 to 41 inclusive.

1126. Lo que anticipadamente se hubiese pagado en las obligaciones á plazo, no se podrá repetir.

Si el que pagó ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá derecho á reclamar del acreedor los intereses ó los frutos que éste hubiese percibido de la cosa.

1127. Siempre que en las obligaciones se designa un término, se presume establecido en beneficio de acreedor y deudor, á no ser que del tenor de aquellas ó de otras circunstancias resultara haberse puesto en favor del uno ó del otro.

1128. Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquél.

También fijarán los Tribunales la duración del plazo cuando éste haya quedado á voluntad del deudor.

1129. Perderá el deudor todo derecho á utilizar el plazo: 1.° Cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda; — 2.° Cuando no otorgue al acreedor las garantías á que estuviese comprometido; — 3.° Cuando por actos propios hubiese disminuído aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran, á menos que sean inmediatamente sustituídas por otras nuevas é igualmente seguras.

1130. Si el plazo de la obligación está señalado por días á contar desde uno determinado, quedará éste excluído del cómputo, que deberá empezar en el día siguiente.

Sección tercera. De las obligaciones alternativas.

1131. El obligado alternativamente á diversas prestaciones debe cumplir por completo una de éstas.

El acreedor no puede ser compelido á recibir parte de una y parte de otra.

1132. La elección corresponde al deudor, á menos que expresamente se hubiese concedido al acreedor.

El deudor no tendrá derecho á elegir las prestaciones imposibles, ilícitas ó que no hubieran podido ser objeto de la obligación.

1133. La elección no producirá efecto sino desde que fuere notificada.

1134. El deudor perderá el derecho de elección cuando de las prestaciones á que alternativamente estuviese obligado, sólo una fuere realizable.

1135. El acreedor tendrá derecho á la indemnización de daños y perjuicios cuando por culpa del deudor hubiesen desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto de la obligación, ó se hubiera hecho imposible el cumplimiento de ésta.

La indemnización se fijará tomando por base el valor de la última cosa que hubiese desaparecido, ó el del servicio que últimamente se hubiera hecho imposible.

1136. Cuando la elección hubiere sido expresamente atribuída al acreedor, la obligación cesará de ser alternativa desde el día en que aquélla hubiese sido notificada al deudor.

Hasta entonces las responsabilidades del deudor se regirán por las siguientes reglas: 1.ª Si alguna de las cosas se hubiese perdido por caso fortuito, cumplirá entregando la que el acreedor elija entre las restantes, ó la que haya quedado, si una sola subsistiera; — 2.ª Si la pérdida de alguna de las cosas hubiese sobrevenido por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar cualquiera de las que subsistan, ó el precio de la que, por culpa de aquél, hubiera desaparecido; — 3.ª Si todas las cosas se hubiesen perdido por culpa del deudor, la elección del acreedor recaerá sobre su precio.

Las mismas reglas se aplicarán á las obligaciones de hacer ó de no hacer, en el caso de que algunas ó todas las prestaciones resultaren imposibles.

Sección cuarta. De las obligaciones mancomunadas y de las solidarias.

1137. La concurrencia de dos ó más acreedores ó de dos ó más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho á pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar á esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.

1138. Si del texto de las obligaciones á que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito ó la deuda se presumirán divididos en tantas partes

1126. In deferred obligations, a payment made in advance cannot be reclaimed.

If the payer was not aware of the existence of the postponed time, at the time of the payment, he shall be entitled to claim from the creditor the interest or produce of the thing which has been received by the latter.

1127. Whenever a time is named in obligations, it is presumed to have been done for the benefit of both creditor and debtor, unless it appears from the spirit thereof or from other circumstances that it has been inserted in favour of the one or the other.

1128. If the obligation does not appoint a time, but it is gathered from the nature and circumstances thereof that it was intended to be granted to the debtor, the Tribunals shall fix the duration thereof.

The Tribunals shall also fix the duration of the time when it is left to the will of the debtor.

1129. The debtor shall lose all right to avail himself of the time: 1. When he becomes insolvent after the obligation has been contracted, unless the debt is secured; — 2. When he does not grant to the creditor the guarantees which he promised; — 3. When by his own acts he has diminished those guarantees after they have been given, and when they disappear by fortuitous event, unless they are immediately replaced by fresh and equally safe guarantees.

1130. If the time of an obligation is fixed by days reckoned from a day certain, the latter shall be excluded from the counting, which must begin on the following day.

Third Section. Alternative obligations.

1131. An obligor who is bound to render different things in the alternative, must perform one of them entirely.

A creditor cannot be compelled to accept part of one and part of another.

1132. The election belongs to the debtor, unless it has been expressly granted to the creditor.

The debtor shall not be entitled to elect impossible or unlawful alternatives, nor those which could not have been the object of the obligation.

1133. The election shall not take effect except from the time that it is notified.

1134. The debtor shall lose the right of election when only one of the alternatives to which he is bound is realisable.

1135. The creditor shall be entitled to compensation for damages when through the *culpa* of the debtor all the things which formed the alternative objects of the obligation have disappeared, or the performance thereof has been rendered impossible.

The compensation shall be fixed by taking as the basis the value of the last thing which has disappeared, or that of the service which has last been made impossible.

1136. When the election has been expressly allotted to the creditor, the obligation shall cease to be alternative from the day on which the election has been notified to the debtor.

Until that time the liabilities of the debtor shall be governed by the following rules: 1. If any one of the things has been lost by a fortuitous event, he shall perform by delivering that which the creditor elects among the remaining alternatives, or the one which remains, if only one subsists; — 2. If the loss of any one of the things has occurred through the *culpa* of the debtor, the creditor may claim any of those which subsist, or the value of that which has disappeared through the *culpa* of the former; — 3. If all the things have been lost through the *culpa* of the debtor, the election of the creditor shall be exercised on their price.

The same rules shall apply to obligations to do or not to do, when some or all of the alternatives prove to be impossible,

Fourth Section. Joint and joint and several obligations.

1137. The combination of two or more creditors or two or more debtors in a single obligation does not imply that each of the former is entitled to sue for, nor that each of the latter must render the entirety of, the things which form the object thereof. This shall only take place when the obligation expressly so determines, and is constituted with a joint and several character.

1138. If nothing else appears from the terms of the obligations to which the preceding article refers, the credit or the debt shall be presumed to be divided into

iguales como acreedores ó deudores haya, reputándose créditos ó deudas distintos unos de otros.

1139. Si la división fuere imposible, sólo perjudicarán al derecho de los acreedores los actos colectivos de éstos, y sólo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de éstos resultare insolvente, no estarán los demás obligados á suplir su falta.

1140. La solidaridad podrá existir aunque los acreedores y deudores no estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones.

1141. Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil á los demás, pero no lo que les sea perjudicial.

Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán á todos éstos.

1142. El deudor puede pagar la deuda á cualquiera de los acreedores solidarios; pero, si hubiere sido judicialmente demandado por alguno, á éste deberá hacer el pago.

1143. La novación, compensación, confusión ó remisión de la deuda, hechas por cualquiera de los acreedores solidarios ó con cualquiera de los deudores de la misma clase, extinguen la obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1146.

El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos, así como el que cobre la deuda, responderá á los demás de la parte que les corresponde en la obligación.

1144. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios ó contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.

1145. El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación.

El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que á cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.

La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores, á prorrata de la deuda de cada uno.

1146. La quita ó remisión hecha por el acreedor de la parte que afecte á uno de los deudores solidarios, no libra á éste de su responsabilidad para con los codeudores, en el caso de que la deuda haya sido totalmente pagada por cualquiera de ellos.

1147. Si la cosa hubiese perecido ó la prestación se hubiese hecho imposible sin culpa de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida.

Si hubiese mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos serán responsables, para con el acreedor, del precio y de la indemnización de daños y abono de intereses, sin perjuicio de su acción contra el culpable ó negligente.

1148. El deudor solidario podrá utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales. De las que personalmente correspondan á los demás, sólo podrá servirse en la parte de deuda de que éstos fueron responsables.

Sección quinta. De las obligaciones divisibles y de las indivisibles.

1149. La divisibilidad ó indivisibilidad de las cosas objeto de las obligaciones en que hay un solo deudor y un solo acreedor no altera ni modifica los preceptos del capítulo 2.° de este título.

1150. La obligación indivisible mancomunada se resuelve en indemnizar daños y perjuicios desde que cualquiera de los deudores falta á su compromiso. Los deudores que hubiesen estado dispuestos á cumplir los suyos, no contribuirán á la indemnización con más cantidad que la porción correspondiente del precio de la cosa ó del servicio en que consistiere la obligación.

1151. Para los efectos de los artículos que preceden, se reputarán indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas aquellas que no sean susceptibles de cumplimiento parcial.

Las obligaciones de hacer serán divisibles cuando tengan por objeto la prestación de un número de días de trabajo, la ejecución de obras por unidades métricas, ú otras cosas análogas que por su naturaleza sean susceptibles de cumplimiento parcial.

En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad ó indivisibilidad se decidirá por el carácter de la prestación en cada caso particular.

as many equal parts as there are creditors or debtors, and the credits or debts shall be considered distinct from each other.

1139. If the division is impossible, the collective acts of the creditors shall alone prejudice their right, and the debt can only be realised by proceeding against all the debtors. If any of them prove to be insolvent, the rest shall not be bound to supply the deficiency.

1140. Solidarity may exist although the creditors and debtors are not connected in the same way and by the same times and conditions.

1141. Each of the joint and several creditors may act to the advantage of the others, but not to their disavantage.

Actions brought against any of the joint and several debtors shall prejudice all of them.

1142. A debtor may pay the debt to any of the joint and several creditors, but if it has been judicially demanded by any one, payment must be made to him.

1143. Novation, set-off, merger (confusio) or release of the debt by any of the joint and several creditors or with relation to any of the debtors of the same kind, extinguishes the obligation, without prejudice to the provisions of article 1146.

A creditor who has done any of these acts, and the one who receives the debt, shall be liable to the others for their share in the obligation.

1144. A creditor may sue any of the joint and several debtors or all of them at the same time. Claims made against one shall not be a bar to those which are subsequently made against the others, as long as the debt is not wholly recovered.

1145. Payment made by one of the joint and several debtors extinguishes the obligation.

The one who has made the payment can only claim against his co-debtors the share which pertains to each, with interest on the advance.

The want of performance of the obligation through the insolvency of a joint and several debtor shall be supplied by his co-debtors, in proportion to the debt of each.

1146. Partial or entire release made by a creditor of the part which affects one of the joint and several debtors, does not free the latter from his liability to his co-debtors, in case the debt has been wholly paid by any of them.

1147. If the thing has perished or the consideration has become impossible without the *culpa* of the joint and several debtors, the obligation shall be extinguished.

If there has been *culpa* on the part of any of them, all shall be liable to the creditor for the price and compensation for damage and payment of interest, without prejudice to his right of action against the culpable or negligent person.

1148. A debtor who is jointly and severally liable may avail himself of all defences against the claims of the creditor which are derived from the nature of the obligation and those which are personal to himself. He may only avail himself of those which belong personally to the others, as regards the part of the debt for which they are liable.

Fifth Section. Divisible and indivisible obligations.

1149. The divisibility or indivisibility of the things which are the subject-matter of obligations, in which there is a single debtor or a single creditor, does not alter or modify the precepts of Chapter 2 of this Title.

1150. A joint indivisible obligation becomes an obligation to pay damages, from the time that any of the debtors fails to fulfil his promise. The debtors who have intended to perform their promise shall not contribute to the compensation in a greater amount than the corresponding part of the price of the thing or of the service of which the obligation consisted.

1151. For the purpose of the effects of the preceding articles, obligations to give certain things which are complete in themselves and all those which are not susceptible of partial performance, shall be considered indivisible.

Obligations to do a thing shall be divisible when they have for their subject-matter the rendering of a number of days' work, the execution of works by metric units, or other analogous things, which are by their nature susceptible of partial performance.

In obligations not to do a thing, divisibility or indivisibility shall be decided by the character of the consideration in each particular case.

Sección sexta. De las obligaciones con cláusula penal.

1152. En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá á la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado.

Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuere exigible conforme á las disposiciones del presente Código.

1153. El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiese sido reservado este derecho. Tampoco el acreedor podrá exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena, sin que esta facultad le haya sido claramente otorgada.

1154. El Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte ó irregularmente cumplida por el deudor.

1155. La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación principal.

La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de la cláusula penal.

Capítulo IV. De la extinción de las obligaciones.

Disposiciones generales.

1156. Las obligaciones se extinguen: Por el pago ó cumplimiento; — Por la pérdida de la cosa debida; — Por la condonación de la deuda; — Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor; — Por la compensación; — Por la novación.

Sección primera. Del pago.

1157. No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa ó hecho la prestación en que la obligación consistía.

1158. Puede hacer el pago cualquiera persona, tenga ó no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ó ya lo ignore el deudor.

El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, á no haberlo hecho contra su expresa voluntad.

En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago.

1159. El que pague en nombre del deudor, ignorándolo éste, no podrá compeler al acreedor á subrogarle en sus derechos.

1160. En las obligaciónes de dar no será válido el pago hecho por quien no tenga la libre disposición de la cosa debida y capacidad para enajenarla. Sin embargo, si el pago hubiere consistido en una cantidad de dinero ó cosa fungible, no habrá repetición contra el acreedor que la hubiese gastado ó consumido de buena fe.

1161. En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido á recibir la prestación ó el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación.

1162. El pago deberá hacerse á la persona en cuyo favor estuviese constituída la obligación, ó á otra autorizada para recibirla en su nombre.

1163. El pago hecho á una persona incapacitada para administrar sus bienes será válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad[1]).

También será válido el pago hecho á un tercero en cuanto se hubiere convertido en utilidad del acreedor.

1164. El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito, liberará al deudor.

1165. No será válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda.

1166. El deudor de una cosa no puede obligar á su acreedor á que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual ó mayor valor que la debida.

---

[1]) Son incapaces para administrar sus bienes: los menores de 23 años no emancipados ó no habilitados de edad; los mayores de 23 que estuvieren declarados legalmente locos, imbéciles, sordomudos que no sepan leer y escribir, pródigos ó ausentes en ignorado paradero, los sujetos á la pena de interdicción civil y la mujer casada respecto de sus bienes propios que legalmente administre su marido.

Sixth Section. Obligations with a penal condition.

1152. In obligations with a penal condition, the penalty shall take the place of the compensation for damages and the payment of interest in case of failure of performance, if no other bargain has been made.

The penalty can only be enforced when it can be demanded in accordance with the provisions of this Code.

1153. A debtor cannot free himself from performing the obligation by paying the penalty, except when this right has been expressly reserved. Nor can a creditor demand the performance of the obligation jointly with the payment of the penalty, unless this power has been clearly granted to him.

1154. The judge shall equitably moderate the penalty, when the principal obligation has been partly or irregularly performed by the debtor.

1155. The nullity of the penal condition does not carry with it the nullity of the principal obligation.

The nullity of the principal obligation carries with it the nullity of the penal condition.

Chapter IV. Extinction of obligations.

General provisions.

1156. Obligations are extinguished: By payment or performance; — By loss of the thing owed; — By release of the debt; — By *confusio* (merger) of the rights of the creditor and debtor; — By set-off; — By novation.

First Section. Payment or performance.

1157. A debt shall not be understood to be paid unless the thing has been completely delivered or the consideration rendered, of which the obligation consisted.

1158. Any person whatsoever may make the payment, whether or not he has an interest in the performance of the obligation, and whether the debtor is aware and approves of it, or is ignorant thereof.

A person who pays on account of another may claim what he has paid from the debtor, unless he has done it contrary to his expressed wish.

In this case he can only sue the debtor in so far as the payment has been useful to him.

1159. A person who pays in the name of the debtor who is ignorant thereof cannot compel the creditor to subrogate him in respect of his rights.

1160. In obligations to give a thing payment shall not be valid when made by a person who has not the free disposal of the thing due and the legal capacity to alienate it. Nevertheless, if the payment has consisted in a sum of money or a fungible thing, there shall be no right to reclaim it from the creditor if he has spent or consumed it in good faith.

1161. In obligations to do a thing the creditor cannot be compelled to receive the performance or service of a third person, when the character and circumstances of the individuality of the debtor have been taken into account in the formation of the obligation.

1162. Payment must be made to the person in favour of whom the obligation was constituted, or to another person who is authorised to receive it in his name.

1163. Payment made to a person who is legally incapacitated from managing his property, shall be valid so far as it has been spent to his advantage[1]).

Payment made to a third person shall likewise be valid so far as it has been spent to the advantage of the creditor.

1164. Payment made in good faith to the person in possesion of the credit shall free the debtor.

1165. Payment made to the creditor by the debtor, after he has been ordered by the Court to retain the debt, shall not be valid.

1166. A person who owes a particular thing cannot oblige his creditor to receive a different thing, even when it is of equal or greater value as compared with that due.

---

[1]) The following are legally incapable of managing their property: those under 23 years who are not emancipated or qualified as to age: those above 23 years who have been declared lunatics, imbeciles, deaf mutes who do not know how to read and write, prodigals and persons absent with dwelling place unknown, those subject to the punishment of civil interdiction and the married woman in respect of her own property which her husband lawfully administers.

Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituído un hecho por otro contra la voluntad del acreedor.

1167. Cuando la obligación consista en entregar una cosa indeterminada ó genérica, cuya calidad y circunstancias no se hubiesen expresado, el acreedor no podrá exigirla de la calidad superior, ni el deudor entregarla de la inferior.

1168. Los gastos extrajudiciales que ocasione el pago serán de cuenta del deudor. Respecto de los judiciales, decidirá el Tribunal con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento civil.

1169. A menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor á recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación.

Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar á que se liquide la segunda.

1170. El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada, y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata ú oro que tenga curso legal en España.

La entrega de pagarés á la orden, ó letras de cambio ú otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, ó cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.

Entretanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso.

1171. El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación.

No habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existía en el momento de constituirse la obligación.

En cualquier otro caso, el lugar del pago será el domicilio del deudor.

De la imputación de pagos.

1172. El que tuviere varias deudas de una misma especie en favor de un solo acreedor, podrá declarar, al tiempo de hacer el pago, á cuál de ellas debe aplicarse.

Si aceptare del acreedor un recibo en que se hiciese la aplicación del pago, no podrá reclamar contra ésta, á menos que hubiera mediado causa que invalide el contrato.

1173. Si la deuda produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intereses.

1174. Cuando no pueda imputarse el pago según las reglas anteriores, se estimará satisfecha la deuda más onerosa al deudor entre las que estén vencidas.

Si éstas fueren de igual naturaleza y gravamen, el pago se imputará á todas á prorrata.

Del pago por cesión de bienes.

1175. El deudor puede ceder sus bienes á los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera á aquél de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores se ajustarán á las disposiciones del título 17 de este libro, y á lo que establece la Ley del Enjuiciamiento civil[1]).

Del ofrecimiento del pago y de la consignación.

1176. Si el acreedor á quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón á admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida.

La consignación por sí sola producirá el mismo efecto cuando se haga estando el acreedor ausente ó cuando esté incapacitado para recibir el pago en el momento en que deba hacerse, y cuando varias personas pretendan tener derecho á cobrar, ó se haya extraviado el título de la obligación.

---

[1]) La Ley de Enjuiciamento civil en la sección 8ª del Título XII del Libro segundo establece las reglas á que ha de ajustarse el convenio entre los acreedores y el concursado; y en la sección 6ª del Título XIII del mismo Libro las á que ha de sujetarse el convenio entre los acreedores y el quebrado. Estas últimas pueden verse en el número VII del Capítulo undécimo «Del procedimiento judicial en las cuestiones civiles mercantiles» que precede á los textos legales; página 81.

Nor in *obligationes faciendi* may one act be substituted for another, against the wish of the creditor.

1167. When the obligation consists in delivering an uncertain or generic thing, the quality and particulars whereof have not been stated, the creditor cannot demand one of superior quality, nor can the debtor deliver one of inferior quality.

1168. Extra-judicial expenses occasioned by the payment shall be borne by the debtor. The Tribunal shall decide with respect to the judicial expenses in accordance with the Law of Civil Procedure.

1169. Unless the contract expressly authorises it, the creditor cannot be compelled to accept partial performances of that of which the obligation consists.

Nevertheless, when the debt has one part liquid and the other not, the creditor may demand and the debtor may make payment of the former without waiting for the liquidation of the latter.

1170. Payment of money-debts must be made in the species agreed, and if it is not possible to deliver the species, then in silver or gold coin which is legally current in Spain.

Delivery of promissory notes to order or bills of exchange or other mercantile documents, shall only produce the effects of payment when they have been realised, or when they have been prejudiced by the *culpa* of the creditor.

Meanwhile the right of action derived from the original obligation shall be suspended.

1171. Payment must be made in the place which was defined in the obligation. If it has not been expressed and it is a question of delivering a thing certain, payment must be made where this exists at the moment when the obligation is constituted.

In all other cases, the place of payment shall be the address of the debtor.

Appropriation of payments.

1172. A person who has several debts of the same species in favour of a single creditor, may, at the time of making the payment, declare to which of them it is to be applied.

If he accepts a receipt from the creditor in which an appropriation of the payment is made, he cannot make a claim against this appropriation unless there has been a reason which invalidates the contract.

1173. If the debt bears interest, a payment cannot be considered as made on account of principal as long as the interest is not met.

1174. When payment cannot be appropriated according to the preceding rules, the debt most onerous to the debtor among those that are due shall be considered paid.

If the debts are of equal nature and burden the payment shall be appropriated to all *pro rata*.

Payment by cessio bonorum.

1175. A debtor may assign his property to the creditors in payment of his debts. Saving a bargain to the contrary, this assignment only frees him from liability for the net amount of the assigned property. Agreements made between the debtor and his creditors on the effect of the assignment shall conform to the provisions of Title XVII of this Book, and to the enactments in the Law of Civil Procedure[1]).

Offer of payment and payment into Court.

1176. If a creditor to whom an offer of payment is made, unreasonably refuses to allow it, the debtor shall be free from liability on paying the thing owed into Court.

The simple fact of payment into Court shall produce the same effect when it is made during the absence of the creditor or when he is legally incapable of receiving payment at the moment when it ought to be made, and when several persons claim the right to recover it or the title of the obligation is mislaid.

---

[1]) In the 8th section of Title XII of the second Book, the Law of Civil Procedure enacts the rules to which an agreement between the creditors and the insolvent have to conform; and in the 6th section of Title XIII of the same Book those to which an agreement between the creditors and the bankrupt have to be subject. These latter may be seen in number VII of the eleventh Chapter of "Judicial procedure in mercantile civil matters" which precedes the text of the laws; page 81.

1177. Para que la consignación de la cosa debida libere al obligado, deberá ser previamente anunciada á las personas interesadas en el cumplimiento de la obligación.

La consignación será ineficaz si no se ajusta estrictamente á las disposiciones que regulan el pago.

1178. La consignación se hará depositando las cosas debidas á disposición de la Autoridad judicial[1]), ante quien se acreditará el ofrecimiento en su caso, y el anuncio de la consignación en los demás.

Hecha la consignación, deberá notificarse también á los interesados.

1179. Los gastos de la consignación, cuando fuere procedente, serán de cuenta del acreedor.

1180. Hecha debidamente la consignación, podrá el deudor pedir al Juez que mande cancelar la obligación.

Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación, ó no hubiere recaído la declaración judicial de que está bien hecha, podrá el deudor retirar la cosa ó cantidad consignada, dejando subsistente la obligación.

1181. Si, hecha la consignación, el acreedor autorizase al deudor para retirarla, perderá toda preferencia que tuviere sobre la cosa. Los codeudores y fiadores quedarán libres.

Sección segunda. De la pérdida de la cosa debida.

1182. Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando ésta se perdiere ó destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituído en mora.

1183. Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1096.

1184. También quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal ó físicamente imposible.

1185. Cuando la deuda de cosa cierta y determinada procediere de delito ó falta, no se eximirá el deudor del pago de su precio, cualquiera que hubiese sido el motivo de la pérdida, á ménos que, ofrecida por él la cosa al que la debía recibir, éste se hubiese sin razón negado á aceptarla.

1186. Extinguida la obligación por la pérdida de la cosa, corresponderán al acreedor todas las acciones que el deudor tuviere contra terceros por razón de ésta.

---

[1]) Si la cantidad que ha de consignarse no excede de 500 pesetas; la Autoridad judicial será el juez municipal, y si excede de dicha suma será el juez de primera instancia. Para la constitución de estos depósitos hay que tener en cuenta lo que dispone el Real Decreto de 24 de diciembre de 1906, cuyos artículos 1.°, 2.°, 5.°, 6.° y 7.° transcribimos á continuación, por ser los que afectan á la disposición del art. 1178 del Cód.: — Art. **1.** Los depósitos y consignaciones de cantidades, por virtud de mandato judicial dictado en autos civiles ó criminales, no se harán en caso alguno en que la ley expresamente no lo ordene en los Juzgados ó Tribunales, sino mediante la presentación del resguardo correspondiente, expedido por el establecimiento ó persona designada para el caso, á disposición de la Autoridad judicial que le haya exigido ó acordado. Del resguardo se testimoniará lo suficiente en los autos respectivos. — **2.** Los jueces ó Tribunales que en procedimientos civiles ó criminales recojan cantidades, las harán depositar del mismo modo en el término de veinticuatro horas y unirán al expediente certificación del resguardo. — **5.** Los depósitos se constituirán en las dependencias centrales y provinciales de la Caja general de Depósitos, y, en su defecto, en poder de los representantes de la Compañía Arrendataria de Tabacos. — **6.** Cuando excedan de 20.000 pesetas las cantidades depositadas en poder de los representantes de la Compañía Arrendataria de Tabacos, ordonará el Juez, bajo su responsabilidad, transferir el depósito á la dependencia de la Caja general de Depósitos más próxima, reclamando de ésta tantos resguardos como la diversidad de depósitos exija. — **7.** Los gastos de traslación y de custodia serán á cargo del depósito cuando, en el caso del art. 6.°, no se haya constituído en la Caja general de Depósitos, sin perjuicio de que los abone después quien á ellos sea condenado. No serán autorizados otros gastos de traslación que los que se acrediten indispensables y más económicos en el día en que tenga lugar.

1177. In order that the payment into Court of a thing owed may free the obligor, notice thereof must be previously given to the persons interested in the performance of the obligation.

Payment into Court shall have no effect if it is not in strict conformity with the provisions which regulate the payment.

1178. Payment into Court shall be made by depositing the things owed at the disposal of the Judicial Authority [1]), before whom the offer, in the one case, shall be proved, and in the others, the notice of the payment into Court.

When payment into Court has been effected, it must be notified also to the persons interested.

1179. The expenses of the payment into Court, when there are any, shall be borne by the creditor.

1180. When the payment into Court has been duly made, the debtor may apply to the Judge to order the obligation to be cancelled.

As long as the creditor has not accepted the payment into Court, or the declaration of the judge that it has been well made has not been delivered, the debtor may withdraw the thing or sum paid in, and leave the obligation subsisting.

1181. If, after the payment into Court has been made, the creditor authorises the debtor to withdraw it, he shall lose all preference which he had over the thing. Joint-debtors and guarantors shall be free.

Second Section. Loss of the thing owed.

1182. An obligation which consists in delivering a certain thing shall be extinguished when the latter is lost or destroyed without the *culpa* of the debtor and before he has been guilty of delay.

1183. Whenever the thing has been lost while in the control of the debtor, the loss shall be presumed to have occurred through his *culpa* and not by fortuitous event, saving evidence to the contrary and without prejudice to the provisions of article 1096.

1184. Likewise the debtor shall be freed in *obligationes faciendi* when performance proves to be legally or physically impossible.

1185. When a debt of a certain and determined thing proceeds from a crime, the debtor shall not be exempt from the payment of its price, whatever the reason of the loss may have been, unless he has offered the thing to him who ought to receive it and the latter has without good reason refused to accept it.

1186. When the obligation is extinguished by the loss of the thing, the creditor shall have all the rights of action which the debtor had against third persons by reason thereof.

---

[1]) If the amount which has to be paid into Court does not exceed 500 pesetas, the Judicial authority will be the Municipal Judge, and if it exceeds the said sum, the Judge of first instance. For the purpose of constituting these deposits we must remember the provisions of the Royal Decree of 24 December 1906; arts. 1, 2, 5, 6 and 7 whereof we proceed to transcribe, as they are those which affect the provisions of art. 1178 of the Civil Code: — Art. **1.** Deposits and payments into Court of sums by virtue of a judicial order pronounced on civil or criminal records, shall not be made in the Courts or Tribunals in any case in which the law has not expressly ordered it, except by means of the production of the corresponding receipt, issued by the establishment or person appointed for that purpose, at the disposal of the Judicial Authority which has required or ordered it. Enough of the receipt shall be copied in the respective record. — **2.** Judges or Tribunals which collect sums in civil or criminal proceedings, shall cause them to be deposited in the same way within the term of twenty-four hours and shall attach the certificate of receipt to the file. — **5.** Deposits shall be constituted in the Central and Provincial branches of the Caja general de Depósitos, and in default thereof, under the control of the Compañia Arrendataria de Tabacos (Tobacco Monopoly Company). — **6.** When the sums deposited in the control of the representatives of the Compañia Arrendataria de Tabacos exceed 20,000 pesetas, the Judge shall, under his responsibility, order that the deposit be transferred to the nearest branch of the Caja general de Depósitos, claiming from the latter as many receipts as the different deposits require. — **7.** The expenses of transfer and custody shall be borne by the deposit when, in the case of art. 6, it is not constituted in the Caja general de Depósitos, without prejudice to their subsequent payment by the person condemned to pay them. No expenses of a transfer shall be authorised other than those which are proved to be indispensable and the most economical on the day when it takes place.

Sección tercera. De la condonación de la deuda.

1187. La condonación podrá hacerse expresa ó tácitamente.

Una y otra estarán sometidas á los preceptos que rigen las donaciones inoficiosas[1]).

La condonación expresa deberá, además, ajustarse á las formas de la donación[2]).

1188. La entrega del documento privado justificativo de un crédito, hecha voluntariamente por el acreedor al deudor, implica la renuncia de la acción que el primero tenía contra el segundo.

Si para invalidar esta renuncia se pretendiere que es inoficiosa, el deudor y sus herederos podrán sostenerla probando que la entrega del documento se hizo en virtud del pago de la deuda.

1189. Siempre que el documento privado de donde resulte la deuda se hallare en poder del deudor, se presumirá que el acreedor lo entregó voluntariamente, á no ser que se pruebe lo contrario.

1190. La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias; pero la de éstas dejará subsistente la primera.

1191. Se presumirá remitida la obligación accesoria de prenda, cuando la cosa pignorada, después de entregada al acreedor, se hallare en poder del deudor.

Sección cuarta. De la confusión de derechos.

1192. Quedará extinguida la obligación desde que se reunan en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor.

Se exceptúa el caso en que esta confusión tenga lugar en virtud de título de herencia, si ésta hubiese sido aceptada á beneficio de inventario.

1193. La confusión que recae en la persona del deudor ó del acreedor principal, aprovecha á los fiadores. La que se realiza en cualquiera de éstos no extingue la obligación.

1194. La confusión no extingue la deuda mancomunada sino en la porción correspondiente al acreedor ó deudor en quien concurran los dos conceptos.

Sección quinta. De la compensación.

1195. Tendrá lugar la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra.

1196. Para que proceda la compensación, es preciso: 1.° Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea á la vez acreedor principal del otro; — 2.° Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, ó, siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado; — 3.° Que las dos deudas estén vencidas; — 4.° Que sean líquidas y exigibles; — 5.° Que sobre ninguna de ellas haya retención ó contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor.

1197. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el fiador podrá oponer la compensación respecto de lo que el acreedor debiere á su deudor principal.

---

[1]) Las donaciones son inoficiosas cuando exceden de los límites señalados en los artículos 634, 635 y 636 del Código Civil. Por el primero la donación puede comprender todos los bienes presentes del donante ó parte de ellos, con tal que este se reserve, en plena propiedad, ó en usufructo, lo necesario para vivir en un estado correspondiente á sus circunstancias. Por el segundo, se prohibe la donación de los bienes futuros; entendiendo por bienes futuros aquellos de que el donante no puede disponer al tiempo de la donación. Y, por el tercero, se dispone que ninguno puede dar ni recibir por vía de donación más de lo que pueda dar ó recibir por testamento.

[2]) Concretamente no disponen nuestras leyes civiles nada respecto á las formas á que han de ajustarse las donaciones. Unicamente, los artículos 620 y 621 del Código Civil declaran: el primero; que las que hayan de producir sus efectos por muerte del donante, participan de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad, y se regirán por las reglas establecidas para la sucesión testamentaria; y el segundo; que las que hayan de producir sus efectos entre vivos se regirán por las disposiciones generales de los contratos y obligaciones en lo que expresamente no se halle prescrito al tratar de las donaciones. Todo lo cual quiere decir que si la condonación se hiciere para producir efecto después de la muerte del que le hace, ha de constar forzosamente en testamento; y si se hiciere para producir efectos entre vivos, ha de ajustarse á lo que previenen los artículos 1278 y 1280 que pueden verse en el texto aquí transcrito del Código Civil.

Third Section. Release of the debt.

1187. A release may be express or implied.

Both are subject to the precepts which govern *donationes inofficiosae* [1]).

Express release must also be adapted to the forms of a gift [2]).

1188. Delivery of a private document which proves a debt, when voluntarily made by a creditor to a debtor, implies the renunciation of the right of action of the former against the latter.

If for the purpose of invalidating this renunciation, it is claimed that it is "inofficious", the debtor and his heirs may support it by proving that the delivery of the document was made by way of payment of the debt.

1189. Whenever the private document by which the debt appears is found in the control of the debtor, it shall be presumed that the creditor delivered it to him voluntarily, unless the contrary is proved.

1190. Release of the principal debt shall extinguish the accessory obligations; but the release of the latter shall leave the former subsisting.

1191. An obligation accessory to a pledge shall be presumed to be released, when the thing pledged is found in the control of the debtor, after having been delivered to the creditor.

Fourth Section. Confusio (merger).

1192. An obligation shall be extinguished from the time that the relationship of creditor and debtor combine in the same person.

From this provision is excepted the case of this merger taking place by virtue of a title by inheritance, if this has been accepted subject to the benefit of the inventory.

1193. *Confusio* which affects the person of the principal debtor or creditor accrues to the advantage of the guarantors. *Confusio* which affects any of the latter does not extinguish the obligation.

1194. *Confusio* does not extinguish a joint debt, except as regards the portion which pertains to the creditor or debtor in which both relationships combine.

Fifth Section. Set-off.

1195. Set-off shall take place when two persons are mutually creditors and debtors the one of the other in their own right.

1196. In order that there may be a set-off, it is necessary: 1. That each of the obligors is bound as principal. and at the same time is a creditor of the other, as principal; — 2. That both debts consist of a sum of money, or if the things owed are fungibles, that they are of the same species and likewise of the same quality, if this has been defined; — 3. That the two debts are due; — 4. That they are liquidated and payable; — 5. That neither of them is affected by detention or an action at the instance of third persons and notified in proper time to the debtor.

1197. Notwithstanding the provisions of the preceding article, a guarantor may object to the set-off in respect of what the creditor owes to his principal debtor.

[1]) Gifts are "inofficious" when they exceed the limits laid down in arts. 634, 635 and 636 of the Civil Code. First, the donation may comprise all or part of the present property of the debtor, provided that he reserves to himself in full ownership or in usufruct, what is necessary for living in a state corresponding to his circumstances. Secondly, donation of future property is forbidden; and by future property is meant that which the donor cannot dispose of at the time of the donation. And thirdly, it is provided that no one may give or receive by way of gift more than he can give or receive by will.

[2]) Our civil laws do not make any specific provision as to the forms to which gifts have to conform. Arts. 620 and 621 of the Civil Code only declare: in the first, that those gifts which are to take effect on the death of the donor (mortis causa) partake of the nature of dispositions under a person's last wishes, and are governed by the rules enacted for testamentary succession; and by the second; that gifts which are to take effect *inter vivos* shall be governed by the general provisions affecting contracts and obligations so far as the express provisions respecting donations do not apply. Which all means to say that if a release is made to take effect after the death of the person who makes it, it must be made by will; and if it is made to take effect *inter vivos*, it must conform to the provisions of arts. 1278 and 1280, which may be seen in the text of the Civil Code which is here transcribed.

1198. El deudor que hubiere consentido en la cesión de derechos hecha por un acreedor á favor de un tercero, no podrá oponer al cesionario la compensación que le correspondería contra el cedente.

Si el acreedor le hizo saber la cesión y el deudor no la consintió, puede oponer la compensación de las deudas anteriores á ella, pero no la de las posteriores.

Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores á ella y de los posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento de la cesión.

1199. Las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compensarse mediante indemnización de los gastos de transporte ó cambio al lugar del pago.

1200. La compensación no procederá cuando alguna de las deudas proviniere de depósito ó de las obligaciones del depositario ó comodatario.

Tampoco podrá oponerse al acreedor por alimentos debidos por título gratuito.

1201. Si una persona tuviere contra sí varias deudas compensables, se observará en el orden de la compensación lo dispuesto respecto á la imputación de pagos.

1202. El efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores.

Sección sexta. De la novación.

1203. Las obligaciones pueden modificarse: 1.° Variando su objeto ó sus condiciones principales; — 2.° Sustituyendo la persona del deudor; — 3.° Subrogando á un tercero en los derechos del acreedor.

1204. Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, ó que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.

1205. La novación, que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin el conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor.

1206. La insolvencia del nuevo deudor, que hubiese sido aceptado por el acreedor, no hará revivir la acción de éste contra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia hubiese sido anterior y pública ó conocida del deudor al delegar su deuda.

1207. Cuando la obligación principal se extinga por efecto de la novación, sólo podrán subsistir las obligaciones accesorias en cuanto aprovechen á terceros que no hubiesen prestado su consentimiento.

1208. La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad sólo pueda ser invocada por el deudor, ó que la ratificación convalide los actos nulos en su origen.

1209. La subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse fuera de los casos expresamente mencionados en este Código.

En los demás será preciso establecerla con claridad para que produzca efecto.

1210. Se presumirá que hay subrogación: 1.° Cuando un acreedor pague á otro acreedor preferente; — 2.° Cuando un tercero, no interesado en la obligación, pague con aprobación expresa ó tácita del deudor; — 3.° Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvos los efectos de la confusión en cuanto á la porción que le corresponda.

1211. El deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor, cuando para pagar la deuda haya tomado prestado el dinero por escritura pública haciendo constar su propósito en ella, y expresando en la carta de pago la procedencia de la cantidad pagada.

1212. La subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos á él anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores ó poseedores de las hipotecas.

1213. El acreedor á quien se hubiere hecho un pago parcial, puede ejercitar su derecho por el resto con preferencia al que se hubiere subrogado en su lugar á virtud del pago parcial del mismo crédito.

1198. A debtor who has consented to an assignment of rights made by a creditor in favour of a third person, cannot as against the assignee avail himself of the set-off which he had against the assignor.

If the creditor has informed him of the assignment and the debtor has not consented to it, he may object to the set-off of debts previous thereto, but not to the set-off of subsequent debts.

If the assignment is made without the knowledge of the debtor, the latter may object to the set-off of credits previous thereto, and to the subsequent credits of to the time when he had notice of the assignment.

1199. Debts payable in different places may be set-off with compensation for the expenses of carriage or change of the place of payment.

1200. There shall be no set-off when one of the debts arises from deposit or from the obligations of depositary or gratuitous borrower of a specific thing. Nor may there be set-off against a creditor for maintenance due on a gratuitous title (without consideration).

1201. If one person has several debts which may be set-off as against another person, the provisions with respect to appropriation of payments shall be observed as to the order of the set-off.

1202. The effect of set-off is to extinguish both debts to the concurrent amount, although the creditors and debtors have no knowledge thereof.

Sixth Section. Novation.

1203. Obligations may be altered: 1. By varying their object or principal conditions; — 2. By changing the person of the debtor; — 3. By substituting a third person in the rights of the creditor.

1204. In order that an obligation may be extinguished by another which takes its place, it is necessary that it should be definitely so stated, or that the old and the new should be entirely incompatible.

1205. The novation which consists in substituting a new debtor in place of the original, may be made without the knowledge of the latter, but not without the consent of the creditor.

1206. The insolvency of a new debtor who has been accepted by the creditor, shall not revive the right of action of the latter against the original debtor, unless the said insolvency has been previous and public and known to the debtor at the time of assigning his debt.

1207. When the principal obligation is extinguished by the novation, the accessory obligations can only subsist so far as they benefit third persons who have not given their consent.

1208. Novation is void if the original obligation is likewise void, except that the cause of nullity can only be relied on by the debtor, and unless ratification validates acts which in their origin are void.

1209. Substitution of a third person in the rights of the creditor cannot be presumed in cases other than those expressly mentioned in this Code.

In other cases it shall be necessary clearly to establish the fact in order that it may take effect.

1210. Substitution shall be presumed: 1. When a creditor pays a preference creditor; — 2. When a third person, who is not interested in the obligation, pays with the express or implied approbation of the debtor; — 3. When the person who pays has an interest in the performance of the obligation, saving the effects of *confusio* so far as his interest extends.

1211. A debtor may make the substitution without the consent of the creditor, when for the purpose of paying the debt he has borrowed the money by notarial instrument and stated his intention therein, and has expressed the origin of the paid amount in the receipt.

1212. Substitution transfers the credit to the person substituted with the rights pertaining thereto, whether against the debtor or against third persons, whether guarantors or possessors of mortgaged property.

1213. A creditor to whom partial payment has been made may make use of his right as to the remainder in preference to the person who has been substituted in his place by virtue of the partial payment of the same credit.

Capítulo V. De la prueba de las obligaciones.

Disposiciones generales.

1214. Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone.

1215. Las pruebas pueden hacerse: por instrumentos, por confesión, por inspección personal del Juez, por peritos, por testigos y por presunciones.

Sección primera. De los documentos públicos.

1216. Son documentos públicos los autorizados por un Notario ó empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.

1217. Los documentos en que intervenga Notario público se regirán por la legislación Notarial[1]).

1218. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste.

También harán prueba contra los contratantes y sus causa habientes, en cuanto á las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.

1219. Las escrituras hechas para desvirtuar otra escritura anterior entre los mismos interesados, sólo producirán efecto contra terceros cuando el contenido de aquéllas hubiese sido anotado en el registro público competente ó al margen de la escritura matriz y del traslado ó copia en cuya virtud hubiera procedido el tercero.

1220. Las copias de los documentos públicos de que exista matriz ó protocolo, impugnadas por aquellos á quienes perjudiquen, sólo tendrán fuerza probatoria cuando hayan sido debidamente cotejadas.

Si resultare alguna variante entre la matriz y la copia, se estará al contenido de la primera.

1221. Cuando hayan desaparecido la escritura matriz, el protocolo, ó los expedientes originales, harán prueba: 1.° Las primeras copias, sacadas por el funcionario público que las autorizara; — 2.° Las copias ulteriores, libradas por mandato judicial, con citación de los interesados; — 3.° Las que, sin mandato judicial, se hubiesen sacado en presencia de los interesados y con su conformidad.

A falta de las copias mencionadas, harán prueba cualesquiera otras que tengan la antigüedad de treinta ó más años, siempre que hubiesen sido tomadas del original por el funcionario que lo autorizó ú otro encargado de su custodia.

Las copias de menor antigüedad, ó que estuviesen autorizadas por funcionario público en quien no concurren las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, sólo servirán como un principio de prueba por escrito.

La fuerza probatoria de las copias de copia será apreciada por los Tribunales según las circunstancias.

1222. La inscripción, en cualquier registro público, de un documento que haya desaparecido, será apreciada según las reglas de los dos últimos párrafos del artículo precedente.

1223. La escritura defectuosa, por incompetencia del Notario ó por otra falta en la forma, tendrá el concepto de documento privado, si estuviese firmada por los otorgantes.

1224. Las escrituras de reconocimiento de un acto ó contrato nada prueban contra el documento en que éstos hubiesen sido consignados, si por exceso ú omision se apartaren de él, á menos que conste expresamente la novación del primero.

De los documentos privados.

1225. El documento privado, reconocido legalmente, tendrá el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen suscrito y sus causa habientes.

1226. Aquel á quien se oponga en juicio una obligación por escrito que aparezca firmada por él, está obligado á declarar si la firma es ó no suya.

Los herederos ó causa habientes del obligado podrán limitarse á declarar si saben que es ó no de su causante la firma de la obligación.

[1]) Esta legislación notarial, aparte de algunas disposiciones de carácter secundario, está constituída por la Ley de 28 de mayo de 1862 y el Reglamento para la aplicación de esta de 9 de noviembre de 1874, la Instrucción de la misma fecha, y el Real Decreto de 7 de noviembre de 1876.

Chapter V. Proof of obligations.

General provisions.

1214. Proof of obligations is the duty of the person who claims their fulfilment, and that of their extinction falls upon his opponent.

1215. Proofs may be given: by instruments, by admission, by personal inspection of the judge, by experts, by witnesses and by presumptions.

First Section. Public documents.

1216. Public documents are those which are authenticated by a Notary or competent public servant, with the formalities required by law.

1217. The documents in which a Notary public takes part are governed by the Notarial legislation [1]).

1218. Public documents prove the fact which occasions their execution and the date thereof, even as against a third person.

They are likewise evidence against the contractors and their successors in right, as regards declarations made therein by the former.

1219. Instruments made to cancel a previous instrument between the same interested persons, shall only take effect as against third persons when the contents thereof have been entered on the proper public register or in the margin of the original instrument and in the copy under which the third person has acted.

1220. Copies of public documents of which the original or archive is in existence, shall only have probatory force when they have been duly compared, if they are impugned by persons whom they prejudice.

If there appears to be any discrepancy between the original and the copy, the contents of the former shall be decisive.

1221. When the original instrument, the archive, or the original files have disappeared: 1. The first copies, made by the public official who authenticates them; — 2. Subsequent copies, made by order of the judge on citation of the interested persons; — 3. Those which have been made, without the order of the judge, in the presence of the interested persons and with their concurrence, shall be evidence.

In the absence of the said copies, any other copies thirty years old or more, shall be evidence, provided that they have been taken from the original by the official who authenticated it or by one entrusted with its custody.

Copies of less antiquity, or which were authenticated by a public official who did not combine the particulars mentioned in the preceding paragraph, shall only serve as a foundation of proof by writing.

The probatory force of copies of a copy shall be appreciated by the Tribunals according to circumstances.

1222. The inscription in a public register of a document which has disappeared, shall be weighed according to the rules of the two last paragraphs of the preceding article.

1223. An instrument which is defective through the want of competence of the Notary or through any other formal defect shall be considered a private document, if it is signed by the parties thereto.

1224. Instruments which acknowledge an act or contract are not evidence against the document in which the latter has been set out, if they depart therefrom by commission or omission, unless the novation of the former is expressly stated.

Private documents.

1225. A private document, legally acknowledged, shall have the same value as a notarial instrument as between those who have signed it and their successors in right.

1226. A person against whom an obligation in writing which appears to be signed by him is produced in an action, is bound to declare if the signature is his or not.

The heirs and successors in right of the obligor may be conjured to declare if they know that the signature of the obligation is that of their antecedent in right or not.

---

[1]) Apart from some provisions of a secondary character, this notarial legislation consists of the Law of 28 May 1862 and the Regulation for applying the same of 9 November 1874, the Instruction of the same date, and the Royal Decree of 7 November 1876.

La resistencia, sin justa causa, á prestar la declaración mencionada en los párrafos anteriores, podrá ser estimada por los Tribunales como una confesión de la autenticidad del documento.

1227. La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado ó inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que le firmaron, ó desde el día en que se entregase á un funcionario público por razón de su oficio.

1228. Los asientos, registros y papeles privados únicamente hacen prueba contra el que los ha escrito en todo aquello que conste con claridad; pero el que quiera aprovecharse de ellos habrá de aceptarlos en la parte que le perjudiquen.

1229. La nota escrita ó firmada por el acreedor á continuación, al margen ó al dorso de una escritura que obre en su poder, hace prueba en todo lo que sea favorable al deudor.

Lo mismo se entenderá de la nota escrita ó firmada por el acreedor al dorso, al margen ó á continuación del duplicado de un documento ó recibo que se halle en poder del deudor.

En ambos casos, el deudor que quiera aprovecharse de lo que le favorezca, tendrá que pasar por lo que le perjudique.

1230. Los documentos privados hechos para alterar lo pactado en escritura pública, no producen efecto contra tercero.

Sección segunda. De la confesión.

1231. La confesión puede hacerse judicial ó extrajudicialmente.

En uno y otro caso, será condición indispensable para la validez de la confesión, que recaiga sobre hechos personales del confesante, y que éste tenga capacidad legal para hacerla.

1232. La confesión hace prueba contra su autor.

Se exceptúa el caso en que por ella pueda eludirse el cumplimiento de las leyes.

1233. La confesión no puede dividirse contra el que la hace, salvo cuando se refiera á hechos diferentes, ó cuando una parte de la confesión esté probada por otros medios, ó cuando en algún extremo sea contraria á la naturaleza ó á las leyes.

1234. La confesión sólo pierde su eficacia probando que al hacerla se incurrió en error de hecho.

1235. La confesión judicial debe hacerse ante Juez competente, bajo juramento y hallándose personado en autos aquél á quien ha de aprovechar.

1236. Cuando se solicite la confesión judicial bajo juramento decisorio, la parte á quien se pida podrá referir el juramento á la contraria, y si ésta se negare á prestarlo, se la tendrá por confesa.

1237. No puede pedirse juramento decisorio sobre hechos punibles ni sobre cuestiones acerca de las cuales las partes no puedan transigir.

1238. La confesión prestada bajo juramento decisorio, ya sea deferido ó referido, sólo constituye prueba á favor ó en contra de las partes que á él se sometieron y de sus herederos ó causa-habientes.

No se admitirá prueba sobre la falsedad de dicho juramento.

1239. La confesión extrajudicial se considera como un hecho sujeto á la apreciación de los Tribunales según las reglas establecidas sobre la prueba.

Sección tercera. De la inspección personal del Juez.

1240. La prueba de inspección personal del Juez sólo será eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal apreciar, por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trate de averiguar.

1241. La inspección practicada por un Juez podrá ser apreciada en la sentencia que otro dicte, siempre que el primero hubiera consignado con perfecta claridad en la diligencia los detalles y circunstancias de la cosa inspeccionada.

Sección cuarta. De la prueba de peritos.

1242. Sólo se podrá utilizar este medio de prueba cuando para apreciar los hechos sean necesarios ó convenientes conocimientos científicos, artísticos ó prácticos.

An objection, made without just cause, to making the declaration mentioned in the preceding paragraphs, may be held by the Tribunals as an admission of the authenticity of the document.

1227. The date of a private document shall not be reckoned, with respect to third persons, before the day on which it has been embodied or inscribed in a public register, from the death of any of those who signed it, or from the day on which it was delivered to a public official by reason of his office.

1228. Private entries, books and papers, are evidence against the person who has written them in all things which are clearly stated; but if a person wishes to take advantage of them he must accept them in the part which prejudices him.

1229. A note written or signed by a creditor in continuation, in the margin or on the back of a document which is in his control, is evidence as to everything favourable to the debtor.

The same shall be understood of a note written or signed by a creditor on the back, margin or in continuation of the duplicate of a document or receipt which is in the control of a debtor.

In both cases, a debtor who wishes to take advantage of what favours him, must submit to that which prejudices him.

1230. Private documents made to alter a bargain in a notarial imstrument, do not take effect as against a third person.

Second Section. Admission.

1231. An admission may be made in Court or out of Court.

In both cases, it shall be an indispensable condition for the validity of an admission that it should relate to personal acts of the maker of the admission, and that the latter should have legal capacity to make it.

1232. An admission is evidence against its author.

An exception is made of the case in which compliance with the law can be eluded thereby.

1233. An admission cannot be divided as against its author, except when it refers to different acts, or when one part of the admission is proved by other means, or when in any particular it is contrary to nature or the law.

1234. An admission only loses its power by proof that in making it he was under a mistake of fact.

1235. A judicial admission must be made on oath before a competent Judge, and when the person whom it is to benefit has appeared on the record.

1236. When an application is made for an admission in Court on a decisive oath, the party of whom it is asked may tender the oath to the opposite party, and if the latter refuses to take it he shall be held to have made an admission.

1237. A decisive oath cannot be applied for in respect of punishable acts or matters concerning which the parties cannot compromise.

1238. An admission made on a decisive oath, whether tendered or referred, is only evidence in favour of or against the parties who have submitted to it and their heirs or successors in right.

Evidence as to the falsity of the said oath shall not be admitted.

1239. An admission out of Court is considered an act to be appreciated by the Tribunals according to the enacted laws of evidence.

Third Section. Personal inspection (view) of the judge.

1240. The evidence of personal inspection of the Judge shall only take effect so far as it clearly allows the Tribunal to appreciate the point which it is proposed to investigate by the external parts of the thing inspected.

1241. An inspection made by a Judge may be appreciated in a judgment pronounced by another, provided that the former has stated the details and particulars of the thing inspected with perfect clearness in the record thereof.

Fourth Section. Evidence by experts.

1242. This means of evidence can only be used when scientific, artistic or practical knowledge is necessary or convenient in order to appreciate the points in dispute.

1243. El valor de esta prueba y la forma en que haya de practicarse, son objeto de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento civil[1]).

Sección quinta. De la prueba de testigos.

1244. La prueba de testigos será admisible en todos los casos en que no se halle expresamente prohibida.

1245. Podrán ser testigos todas las personas de uno y otro sexo que no fueren inhábiles por incapacidad ó disposición de la ley.

1246. Son inhábiles por incapacidad natural: 1.° Los locos ó dementes; — 2.° Los ciegos y sordos, en las cosas cuyo conocimiento depende de la vista y el oído; — 3.° Los menores de catorce años.

1247. Son inhábiles por disposición de la ley: 1.° Los que tienen interés directo en el pleito; — 2.° Los ascendientes en los pleitos de los descendientes, y éstos en los de aquéllos; — 3.° El suegro ó suegra en los pleitos del yerno ó nuera y viceversa; — 4.° El marido en los pleitos de la mujer y la mujer en los del marido; — 5.° Los que están obligados á guardar secreto, por su estado ó profesión, en los asuntos relativos á su profesión ó estado; — 6.° Los especialmente inhabilitados para ser testigos en ciertos actos.

Lo dispuesto en los números 2.°, 3.° y 4.° no es aplicable á los pleitos en que se trate de probar el nacimiento ó defunción de los hijos ó cualquiera hecho íntimo de familia que no sea posible justificar por otros medios.

1248. La fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos será apreciada por los Tribunales conforme á lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento civil[2]), cuidando de evitar que por la simple coincidencia de algunos testimonios, á menos que su veracidad sea evidente, queden definitivamente resueltos los negocios en que de ordinario suelen intervenir escrituras, documentos privados ó algún principio de prueba por escrito.

Sección sexta. De las presunciones.

1249. Las presunciones no son admisibles sino cuando el hecho de que han de deducirse esté completamente acreditado.

1250. Las presunciones que la ley establece dispensan de toda prueba á los favorecidos por ellas.

1251. Las presunciones establecidas por la ley pueden destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que aquélla expresamente lo prohiba.

Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión.

1252. Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que, entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

En las cuestiones relativas al estado civil de las personas y en las de validez ó nulidad de las disposiciones testamentarias, la presunción de cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque no hubiesen litigado.

Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causa-habientes de los que contendieron en el pleito anterior, ó estén unidos á ellos por vínculos de solidaridad ó por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho á exigirlas ú obligación de satisfacerlas.

[1]) Estas disposiciones están contenidas en los artículos 610 á 632, ambos inclusive, cuyos preceptos en su parte más esencial pueden verse en la letra D, § 2°, número V del Capítulo segundo *«Del procedimiento judicial en las cuestiones civiles mercantiles»* que precede al texto del Código de Comercio, página 42.

[2]) El artículo 650 de dicha Ley declara que «los jueces y tribunal apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme á las reglas de la sana crítica, teniendo en consideración la razón de ciencia que hubieren dado y las circunstancias que en ellos concurran. Sin embargo, cuando la ley determina el número ó la calidad de los testigos, como solemnidad ó circunstancia especial del acto á que se refiere, se observará lo dispuesto para aquel caso.» Lo cual quiere decir, que fuera de esos casos especiales á que hace referencia la última parte del artículo, el juez dará el valor que quiera á la prueba testifical con arreglo tan solo al convencimiento que en él se haya producido por este medio. Véase también lo dicho respecto á la prueba testifical en la página 51 *«Del procedimiento judicial en las cuestiones civiles mercantiles.»*

1243. The value of this evidence and the way in which it is to be taken, are provided for by the law of Civil Procedure[1]).

Fifth Section. Evidence of witnesses.

1244. The evidence of witnesses shall be admissible in all cases in which it is not expressly prohibited.

1245. All persons of either sex who are not disqualified by legal incapacity or legal provisions may be witnesses.

1246. The following are disqualified for natural incapacity: 1. Idiots and madmen; — 2. The blind and deaf, in the cases the knowledge whereof depends on sight and hearing; — 3. Minors under fourteen years of age.

1247. The following are disqualified by provisions of the law: 1. Those who have a direct interest in the action; — 2. Ascendants in actions by descendants, and the latter in those by the former; — 3. A father-in-law, and mother-in-law in actions by a son-in-law or daughter-in-law, and vice-versâ; — 4. A husband in actions by his wife, and a wife in those by her husband; — 5. Those who by their status or profession are bound to keep secret in the affairs relating to their profession or status; — 6. Those who are specifically disqualified for being witnesses to certain acts.

The provisions of Nos. 2, 3, and 4 do not apply to actions in which it is proposed to prove the birth or death of children or any intimate family fact which it is not possible to prove by other means.

1248. The probatory force of the declarations of witnesses shall be weighed by the Tribunals according to the enactments in the Law of Civil Procedure[2]), taking care to avoid that affairs should be finally decided by a mere coincidence of certain evidence when notarial instruments, private documents or any foundation of written evidence generally form part thereof, unless their veracity is clear.

Sixth Section. Presumptions.

1249. Presumptions are not admissible except when the fact from which they are to be deduced is fully proved.

1250. Presumptions which are enacted by law relieve those who are favoured thereby from all evidence.

1251. Presumptions enacted by law may be destroyed by contrary evidence, except in the cases in which the law expressly prohibits this.

A judgment obtained in a proceeding for rehearing shall alone have effect against the presumption that a *res judicata* is the truth.

1252. In order that the presumption of *res judicata* may take effect in another proceeding, it is necessary that, between the case decided by the judgment and that in which this is invoked, there is the most perfect identity between the things, the causes and the persons of the litigants and the character in which they were litigants.

In matters relating to the civil status of persons and in those on the validity or nullity of testamentary dispositions, the presumption of *res judicata* takes effect against third persons, although they have not been parties.

There is understood to be identity of persons whenever the litigants in the second action are successors in right to those who were opponents in the previous action, or are united to them as being jointly and severally interested or by chains which establish the indivisibility of considerations between those who are entitled to demand them or the obligation to satisfy them.

---

[1]) These provisions are contained in arts. 610 to 632 inclusive and the most essential part of their precepts may be seen in the letter D, § 2, number V of the second Chapter of "Judicial procedure in mercantile civil matters" which precedes the text of the Code of Commerce, page 42.

[2]) Art. 650 of the said Law declares that "the judges and tribunals shall weigh the probatory force of the declarations of witnesses according to the rules of sound criticism, taking into consideration the reason for knowledge which they have given and the particulars in which they agree. Nevertheless, when the law fixes the number or the character of the witnesses, as a specific solemnity or circumstance of the act to which it refers, the provision for that case shall be observed." Which means to say that, apart from those special cases to which the last part of the article refers, the judge shall give what weight he wishes to the evidence of witnesses according to the conviction produced in him by this means. See also what is said respecting the evidence of witnesses on page 51 of "Judicial procedure in mercantile civil matters".

1253. Para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

Título II. De los contratos.

Capítulo primero. Disposiciones generales.

1254. El contrato existe desde que una ó varias personas consienten en obligarse, respecto de otra ú otras, á dar alguno cosa ó prestar algún servicio.

1255. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios á las leyes, á la moral, ni al orden público.

1256. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

1257. Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto á éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, ó por su naturaleza, ó por pacto, ó por disposición de la ley.

Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada.

1258. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también á todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes á la buena fe, al uso y á la ley.

1259. Ninguno puede contratar á nombre de otro sin estar por éste autorizado ó sin que tenga por la ley su representación legal.

El contrato celebrado á nombre de otro por quien no tenga su autorización ó representación legal será nulo, á no ser que lo ratifique la persona á cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.

1260. No se admitirá juramento en los contratos. Si se hiciere, se tendrá por no puesto.

Capítulo II. De los requisitos esenciales para la validez de los contratos.

Disposición general.

1261. No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1.° Consentimiento de los contratantes; — 2.° Objeto cierto que sea materia del contrato; — 3.° Causa de la obligación que se establezca.

Sección primera. Del consentimiento.

1262. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.

La aceptación hecha por carta no obliga al que hizo la oferta sino desde que llegó á su conocimiento. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta[1]).

1263. No pueden prestar consentimiento: 1.° Los menores no emancipados; — 2.° Los locos ó dementes y los sordomudos que no sepan escribir; — 3.° Las mujeres casadas, en los casos expresados por la ley.

1264. La incapacidad declarada en el artículo anterior está sujeta á las modificaciones que la ley determina, y se entiende sin perjuicio de las incapacidades especiales que la misma establece.

1265. Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación ó dolo.

1266. Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, ó sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo á celebrarlo.

[1]) Esta segunda parte de este artículo no tiene aplicación en lo mercantil por ser contrario á lo expresamente determinado en el 54 del Código de comercio.

1253. In order that presumptions which are not enacted by law may have weight as a means of proof, it is indispensable that there should be a precise and direct connection, according to the rules of human judgment, between the demonstrated fact and that which it is proposed to deduce.

Title II. Contracts.

First Chapter. General provisions.

1254. A contract exists from the time when one or several persons consent to bind themselves to another person or other persons to give something or render some service.

1255. The contractors may make the bargains, terms and conditions which they think expedient, provided that they are not contrary to law, morality or public order.

1256. The validity and performance of contracts cannot be left to the will of one of the contractors.

1257. Contracts only take effect between the parties who make them and their heirs; except, as regards the latter, the case in which the rights and obligations which proceed from the contract are not transferable, either by their nature, or by bargain, or by provision of the law.

If the contract contains any stipulation in favour of a third person, the latter may demand its performance, provided that he has made known his acceptance to the obligor before the stipulation has been revoked.

1258. Contracts are completed by mere consent, and are binding from thenceforth, not only as regards the performance of what has been expressly agreed, but also all the consequences which by their nature are in conformity with good faith, usage and the law.

1259. No person may contract in the name of another without being authorised by him or without possessing his legal representation by law.

A contract made in the name of another without his authority or legal representation, shall be void, unless it is ratified by the person in whose name it is made before it is revoked by the other contracting party.

1260. No oath shall be allowed in contracts. If one is taken, it shall be held as not tendered.

Chapter II. Requisites which are essential for the validity of contracts.

General provision.

1261. There is no contract except with the concurrence of the following requisites: 1. Consent of the contractors; — 2. A certain object which is the subject-matter of the contract; — 3. *Causa* of the obligation which it occasions.

First Section. Consent.

1262. Consent is shown by the agreement of the offer and the acceptance respecting the thing and the *causa* which are to constitute the contract.

Acceptance made by letter only binds him who made the offer from the time when it came to his knowledge. In that case the contract is presumed to be made in the place where the offer was made[1]).

1263. The following cannot give consent: 1. Unemancipated minors; — 2. Idiots or mad persons and deaf mutes who know not how to write; — 3. Married women, in the cases stated in the law.

1264. The incapacity declared by the preceding article is subject to the modifications determined by the law, and is interpreted without prejudice to the special incapacities enacted thereby.

1265. Consent given through mistake, violence, intimidation or fraud shall be void.

1266. For mistake to invalidate consent, it must affect the substance of the thing which is the subject-matter of the contract, or those conditions thereof which have been the chief reasons for making it.

---

[1]) This second part of this article does not apply to mercantile contracts, as the contrary is expressly determined by art. 54 of the Code of Commerce.

El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración á ella hubiere sido la causa principal del mismo.

El simple error de cuenta sólo dará lugar á su corrección.

1267. Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible.

Hay intimidación cuando se inspira á uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona ó bienes, ó en la persona ó bienes de su cónyuge, descendientes ó ascendientes.

Para calificar la intimidación debe atenderse á la edad, al sexo y á la condición de la persona.

El temor de desagradar á las personas á quienes se debe sumisión y respeto no anulará el contrato.

1268. La violencia ó intimidación anularán la obligación, aunque se hayan empleado por un tercero que no intervenga en el contrato.

1269. Hay dolo cuando, con palabras ó maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro á celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.

1270. Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes.

El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó á indemnizar daños y perjuicios.

Sección segunda. Del objeto de los contratos.

1271. Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras.

Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal conforme al art. 1056.

Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios á las leyes ó á las buenas costumbres.

1272. No podrán ser objeto de contrato las cosas ó servicios imposibles.

1273. El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto á su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes.

Sección tercera. De la causa de los contratos.

1274. En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación ó promesa de una cosa ó servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio ó beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor.

1275. Los contratos sin causa, ó con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone á las leyes ó á la moral.

1276. La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar á la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.

1277. Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario.

Capítulo III. De la eficacia de los contratos.

1278. Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.

1279. Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura ú otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente á llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez.

1280. Deberán constar en documento público: 1.° Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación ó extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles; — 2.° Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis ó más años, siempre que deban perjudicar á tercero; — 3.° Las capitulaciones matrimoniales y la constitución y aumento de la dote, siempre que se intente hacerlos valer contra terceras personas; — 4.° La cesión, repudiación y

A mistake as to a person shall only invalidate the contract when the personal consideration has been the principal *causa* thereof.

A mere mistake in reckoning shall only occasion its correction.

1267. Violence is present when irresistible force is used to obtain the consent.

Intimidation exists when a rational and well founded fear of suffering an imminent and serious ill in his person or property, in the person or property of his spouse, descendants or ascendants, inspires one of the contractors.

To judge of the intimidation, attention must be paid to the age, sex and condition of the person.

Fear of displeasing persons to whom submission or respect is due, shall not annul the contract,

1268. Violence or intimidation shall not annul the obligation, when they have been employed by a third person who does not intervene in the contract.

1269. Fraud exists when, by crafty words or contrivances on the part of one of the contractors, the other is induced to make a contract which he would not have made in their absence.

1270. For fraud to avoid the contracts, it must be gross and not have been employed by both the contracting parties.

Incidental fraud only obliges him who made use of it, to compensate for the damage.

Second Section. Subject-matter of Contracts.

1271. All things, even those not yet in existence, may be the subject-matter of contract, if they are not outside the commerce of mankind.

Nevertheless, no contracts can be made respecting a future inheritance other than those the object whereof is to effect the division of an estate *inter vivos* according to art. 1056.

All services which are not contrary to law or good customs may likewise be the subject-matter of contract.

1272. Impossible things or services cannot be the subject-matter of contract.

1273. The subject-matter of every contract must be a thing which is certain as regards its species. Uncertainty in the amount shall not prevent the existence of the contract, provided that it is possible to ascertain it without the necessity of a new agreement between the contractors.

Third Section. The causa of contracts.

1274. In onerous contracts, *causa* means the rendering or promise of a thing or service by one contracting party to the other; in remunerative contracts, service or profit which is rewarded; and in those of pure beneficence, the simple liberality of the well doer.

1275. Contracts without a *causa* or with an unlawful *causa* are void. A *causa* is unlawful when it is opposed to the law or morality.

1276. If a false *causa* is stated in contracts it shall render them void, in the absence of proof that they were founded on another *causa* which is true and lawful.

1277. Although the *causa* is not stated in the contract, it is presumed that it exists and that it is lawful, so long as the debtor does not prove the contrary.

Chapter III. The efficacy of contracts.

1278. Contracts shall be binding, whatever be the form in which they are made, provided that they combine the conditions which are essential for their validity.

1279. If the law requires the execution of a written instrument or some special form in order to make the obligations proper to a contract effective, the contractors may be reciprocally compelled to fulfil that form, provided that consent and the other requisites which are necessary for their validity form part thereof.

1280. The following must be stated in a notarial instrument: 1. Acts and contracts which have for their subject-matter the creation, transfer, alteration or extinction of real rights over immoveable property; — 2. The leasing of the same property for six or more years, whenever it must prejudice a third person; — 3. Marriage settlements and the constitution and increase of dowry, whenever it is attempted to make them valid as against third persons; — 4. The assignment, repudiation and

renuncia de los derechos hereditarios ó de los de la sociedad conyugal; — 5.° El poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio; el poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado ó que deba redactarse en escritura pública, ó haya de perjudicar á tercero; — 6.° La cesión de acciones ó derechos procedentes de un acto consignado en escritura pública.

También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno ó de los dos contratantes exceda de 1,500 pesetas.

Capítulo IV. De la interpretación de los contratos.

1281. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren contrarias á la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

1282. Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente á los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato.

1283. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.

1284. Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto.

1285. Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo á las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.

1286. Las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme á la naturaleza y objeto del contrato.

1287. El uso ó la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse.

1288. La interpretación de las cláusulas obscuras de un contrato no deberá favorecer á la parte que hubiese ocasionado la obscuridad.

1289. Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos é intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses.

Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fué la intención ó voluntad de los contratantes, el contrato será nulo.

Capítulo V. De la rescisión de los contratos.

1290. Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley.

1291. Son rescindibles: 1.° Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización del consejo de familia, siempre que las personas á quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquéllos; — 2.° Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión á que se refiere el número anterior; — 3.° Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba; — 4.° Los contratos que se refieran á cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes ó de la Autoridad judicial competente; — 5.° Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la ley.

1292. Son también rescindibles los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones á cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos.

1293. Ningún contrato se rescindirá por lesión, fuera de los casos mencionados en los números 1.° y 2.° del art. 1291.

resigning of hereditary rights, or of those of a conjugal partnership (community); — 5. The power to contract marriage, the general power for litigation and the special powers which must be produced in Court; the power to administer property, and every other power which has for its subject-matter an act which has been drawn up or which must be drawn up in a notarial instrument, or which must prejudice a third person; — 6. The assignment of rights of action or rights arising from an act set out in a notarial instrument.

Other contracts in which the amount of the consideration rendered by one or both of the contractors exceeds 1500 pesetas must also be stated in a written document which need not be notarial.

Chapter IV. The interpretation of contracts.

1281. If the terms of a contract are clear and leave no doubt about the intention of the contractors, the literal meaning of its terms shall prevail.

If the words appear contrary to the evident intention of the contractors, the latter shall prevail over the former.

1282. In order to judge of the intention of the contractors, attention must chiefly be paid to their acts contemporaneous with and subsequent to the contract.

1283. However general the terms of a contract may be, things and cases different from those respecting which the persons interested proposed to contract must not be understood as included therein.

1284. If any term of the contract admits of diverse meanings, the one most proper for producing effect must be understood.

1285. The terms of contracts must be interpreted by each other, by attributing to the doubtful terms the meaning which is the result of the combination of all.

1286. Words which may have different acceptations shall be understood in that which is most agreeable to the nature and object of the contract.

1287. The use and custom of a country shall be taken into account in order to interpret ambiguities in contracts, supplying the omission therein of terms which are generally wont to be stated.

1288. The interpretation of the obscure terms of a contract must not favour the party who has occasioned the obscurity.

1289. When it is absolutely impossible to solve the doubts by the rules enacted in the preceding articles, if they affect particulars of the contract which are accidental, and the contract is gratuitous, they shall be decided in favour of the less transfer of rights and interest. If the contract is onerous, the doubt shall be decided in favour of the greater mutuality of interest.

If the doubts, the solution whereof is treated of in this article, affect the principal subject-matter of the contract, in such a manner that it cannot be ascertained what was the intention or wish of the contractors, the contract shall be void.

Chapter V. Rescission of contracts.

1290. Contracts which are validly made, may be rescinded in the events enacted by law.

1291. The following may be rescinded: 1. Contracts which may be made by guardians without the authorisation of the family council, provided that the persons whom they represent have suffered injury to the extent of more than the fourth part of the value of the things which have been the subject-matter thereof; — 2. Those made in representation of absent persons, provided that they have suffered the injury to which the preceding number refers; — 3. Those made in fraud of creditors, when the latter cannot recover what is due to them in any other way; — 4. Contracts which refer to things in litigation, when they have been made by the defendant without the knowledge and approbation of the parties to the action or of the competent judicial authority; — 5. All other contracts when the law specifically so determines.

1292. Payments made in a state of insolvency on account of obligations which the debtor cannot be compelled to perform at the time of making the payments may also be rescinded.

1293. No contract shall be rescinded for *laesio* except in the cases mentioned in Nos. 1 and 2 of art. 1291.

1294. La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.

1295. La rescisión obliga á la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos, y del precio con sus intereses; en consecuencia, sólo podrá llevarse á efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello á que por su parte estuviese obligado.

Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas objeto del contrato se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe.

En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.

1296. La rescisión de que trata el número 2.° del artículo 1291 no tendrá lugar respecto de los contratos celebrados con autorización judicial.

1297. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes á título gratuito.

También se presumen fraudulentas las enajenaciones á título oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia ó expedido mandamiento de embargo de bienes.

1298. El que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar á éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuere imposible devolverlas.

1299. La acción para pedir la rescisión dura cuatro años.

Para las personas sujetas á tutela y para los ausentes, los cuatro años no empezarán hasta que haya cesado la incapacidad de los primeros, ó sea conocido el domicilio de los segundos.

Capítulo VI. De la nulidad de los contratos.

1300. Los contratos en que concurran los requisitos que expresa el art. 1261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo á la ley.

1301. La acción de nulidad sólo durará cuatro años.

Este tiempo empezará á correr: En los casos de intimidación ó violencia, desde el día en que éstas hubiesen cesado; — En los de error, ó dolo, ó falsedad de la causa, desde la consumación del contrato; — Cuando la acción se dirija á invalidar contratos hechos por mujer casada, sin licencia ó autorización competente, desde el día de la disolución del matrimonio; — Y cuando se refiera á los contratos celebrados por los menores ó incapacitados, desde que salieren de tutela.

1302. Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal ó subsidiariamente en virtud de ellos. Las personas capaces no podrán, sin embargo, alegar la incapacidad de aquellos con quienes contrataron; ni los que causaron la intimidación ó violencia, ó emplearon el dolo ó produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del contrato.

1303. Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.

1304. Cuando la nulidad proceda de la incapacidad de uno de los contratantes, no está obligado el incapaz á restituir sino en cuanto se enriqueció con la cosa ó precio que recibiera.

1305. Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa ú objeto del contrato, si el hecho constituye un delito ó falta común á ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra ellos, dándose, además, á las cosas ó precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicación prevenida en el Código penal respecto á los efectos ó instrumentos del delito ó falta[1]).

[1]) El artículo 63 del Código penal dispone: que toda pena que se impusiere por un delito ó falta llevará consigo la pérdida de los efectos que de él proviniesen, y de los instrumentos con que se hubiere ejecutado. — Los unos y los otros serán decomisados, á no ser que pertenecieren á un tercero no responsable del delito. — Los que se decomisaren se venderán si son de lícito comercio, aplicándose su producto á cubrir las responsabilidades del penado, ó se inutilizarán si son ilícitos.

1294. The action for rescission is subsidiary. It cannot be brought except when the person prejudiced has no other legal means of obtaining relief from the injury.

1295. Rescission compels the return of the things which were the subject-matter of the contract with the fruits thereof, and of the price with interest thereon; consequently, it can only be carried into effect when he who has claimed it can return that which on his part he is obliged to return.

Nor shall rescission take place when the things which are the subject-matter of the contract are lawfully in the control of third persons who have not acted in bad faith.

In this case compensation for damage may be claimed from the person who caused the injury.

1296. The rescission treated of by No. 2 of article 1291 shall not take place with respect to contracts made with judicial authorisation.

1297. All those contracts by virtue whereof a debtor alienates property by a gratuitous title are presumed to be made in fraud of creditors.

Likewise alienations for valuable consideration are presumed fraudulent when they are made by those persons against whom a previous condemnatory judgment has been pronounced in any Court or when an order for arrest of property has been issued.

1298. A person who has in bad faith acquired things alienated in fraud of creditors, must compensate the latter for the damage which the alienation has occasioned them, whenever it is impossible for any reason to return them.

1299. The right of action for applying for rescission lasts for four years.

In the case of persons subject to guardianship or of absent persons, the four years shall not begin until the legal incapacity of the former has ceased, or the address of the latter is known.

Chapter VI. Nullity of contracts.

1300. Contracts which combine the requisites stated in article 1261 may be annulled, although no injury has been caused to the contractors, whenever they suffer from any of the defects which invalidate them according to law.

1301. The right of action for nullity shall last four years.

This time shall begin to run: In cases of intimidation or violence, from the day on which they ceased; — In those of mistake or fraud or falsification of the *causa*, from the completion of the contract; — When the action is brought to invalidate contracts made by a married woman without competent leave or authorisation, from the day of the dissolution of the marriage tie; — And when it refers to contracts made by minors or persons legally incapable, from the end of the guardianship.

1302. An action for avoiding contracts may be brought by those who are principally or secondarily bound thereby. Persons who are legally capable cannot, however, plead the legal incapacity of those with whom they contracted, nor can those who caused the intimidation or violence, or made use of fraud or occasioned the mistake, base their action on these contractual defects.

1303. When an obligation has been declared void, the contractors must mutually restore the things which have been the subject-matter of the contract, with their fruits, and the price with the interest, except as provided in the following articles.

1304. When the nullity arises from the legal incapacity of one of the contractors, the one who is legally incapable is not bound to restore more than the amount by which he profited with the thing or price which he received.

1305. When the nullity arises from the *causa* or subject-matter of the contract being unlawful, if the act constitutes a crime common to both contractors, they shall have no right of action *inter se*, and the provisions of the Penal Code with reference to the effects or instruments of crime shall apply to the things or price which have been the subject-matter of the contract[1]).

---

[1]) Art. 63 of the Penal Code provides: that every punishment which is imposed for a crime shall carry with it the loss of the effects proceeding therefrom, and of the instruments by which it was carried out. — Both shall be forfeited, unless they belong to a third person who is not responsible for the crime. — Those which are forfeited shall be sold if they are the subject of lawful trade, and their proceeds applied to meet the liabilities of the defendant, or if they are unlawful they shall be rendered useless.

Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito ó falta de parte de uno de los contratantes; pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado á cumplir lo que hubiera prometido.

1306. Si el hecho en que consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta, se observarán las reglas siguientes: 1.ª Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado á virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido; — 2.ª Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado á virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño á la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido.

1307. Siempre que el obligado por la declaración de nulidad á la devolución de la cosa, no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha.

1308. Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello á que en virtud de la declaración de nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido á cumplir por su parte lo que le incumba.

1309. La acción de nulidad queda extinguida desde el momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente.

1310. Sólo son confirmables los contratos que reunan los requisitos expresados en el art. 1261.

1311. La confirmación puede hacerse expresa ó tácitamente. Se entenderá que hay confirmación tácita cuando, con conocimiento de la causa de nulidad y habiendo ésta cesado, el que tuviese derecho á invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo.

1312. La confirmación no necesita el concurso de aquel de los contratantes á quien no correspondiese ejercitar la acción de unlidad.

1313. La confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración.

1314. También se extinguirá la acción de nulidad de los contratos cuando la cosa, objeto de éstos, se hubiese perdido por dolo ó culpa del que pudiera ejercitar aquélla.

Si la causa de la acción fuere la incapacidad de alguno de los contratantes, la pérdida de la cosa no será obstáculo para que la acción prevalezca, á menos que hubiese ocurrido por dolo ó culpa del reclamante después de haber adquirido la capacidad.

Título XVI. De las obligaciones que se contraen sin convenio.

Capítulo II. De las obligaciones que nacen de culpa ó negligencia.

1902. El que por acción ú omisión causa daño á otro, interviniendo culpa ó negligencia, está obligado á reparar el daño causado.

1903. La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos ú omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

El padre y, por muerte ó incapacidad de éste, la madre, son responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía.

Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores ó incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía.

Lo son igualmente los dueños ó directores de un establecimiento ó empresa, respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, ó con ocasión de sus funciones.

El Estado es responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario á quien propiamente corresponda la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.

Son, por último, responsables los maestros ó directores de artes y oficios respecto á los perjuicios causados por sus alumnos ó aprendices, mientras permanezcan bajo su custodia.

La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

This provision applies to the case in which there has been a crime on the part of one only of the contractors; but the party who is not guilty may reclaim what he has given, and shall not be obliged to perform what he has promised.

1306. If the act in which the *turpis causa* consists does not constitute a crime, the following rules shall be observed: 1. When the *culpa* is common to both the contractors, neither of them can sue for what he has given under the contract, nor claim the performance of what the other has offered; — 2. When it is on the part of a single contractor, he cannot sue for what he has given under the contract; nor for the performance of what has been offered him. The other, who was a stranger to the *turpis causa*, may reclaim what he has given, but shall not be obliged to perform what he has offered.

1307. Whenever the person bound by the declaration of nullity to return the thing, cannot return it on account of its being lost, he must restore the fruits received and the value of the thing at the time when it was lost, with interest from the same date.

1308. So long as one of the contractors fails to return that which he is bound to return by virtue of the declaration of nullity, the other cannot on his part be compelled to perform what is incumbent on him.

1309. The right of action for nullity is extinguished from the moment when the contract has been validly ratified.

1310. Only contracts which combine the requisites of article 1261 can be ratified.

1311. Ratification may be express or implied. There shall be held to be an implied ratification when, with knowledge of the ground of nullity and of its having ceased, the one who was entitled to rely upon it performs an act which necessarily implies the wish to renounce it.

1312. Ratification does not necessitate the concurrence of a contractor who is not entitled to bring an action for nullity.

1313. Ratification cleanses the contract from the defects from which it suffered, as from the time when it was made.

1314. The right of action for nullity of contracts shall likewise be extinguished when the subject-matter thereof has been lost by the fraud or *culpa* of the person who was able to bring the action.

If the cause of action is the legal incapacity of any of the contractors, the loss of the thing shall not prevent the success of the action, unless it has occurred through the fraud or *culpa* of the plaintiff after having acquired legal capacity.

Title XVI. Obligations which are contracted without agreement.

Chapter II. Obligations arising from culpa or negligence.

1902. A person who causes damage to another through *culpa* or negligence is bound to repair the damage caused.

1903. The obligation imposed by the preceding article may be enforced not only for his own acts or omissions, but for those of the persons for whom he is responsible.

A father, and on his death or legal incapacity, the mother are responsible for injury caused by minor children who live with them.

Guardians are liable for injury caused by the minors or those legally incapable who are under their authority and live with them.

So are the owners or directors of an establishment or undertaking, in respect of injury caused by their subordinates in the service of those branches in which they are employed, or in the exercise of their functions.

In this way the State is liable when it acts by means of a special agent; but not when the damage has been caused by the official to whom the operation which has been effected properly pertains, in which case the provisions of the preceding article shall apply.

Lastly, masters and directors of arts and crafts are liable for injury caused by their pupils or apprentices, as long as they remain under their care.

The liability dealt with in this article shall cease when the persons therein mentioned prove that they used all the diligence of a good paterfamilias to prevent the damage.

1904. El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho.

1905. El poseedor de un animal, ó el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape ó extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor ó de culpa del que lo hubiese sufrido.

1906. El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación ó cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla.

1907. El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo ó parte de él, si ésta sobreviniere por falta de las reparaciones necesarias.

1908. Igualmente responderán los propietarios de los daños causados: 1.° Por la explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia, y la inflamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado; — 2.° Por los humos excesivos, que sean nocivos á las personas ó á las propiedades; — 3.° Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor; — 4.° Por las emanaciones de cloacas ó depósitos de materias infectantes, construídos sin las precauciones adecuadas al lugar en que estuviesen.

1909. Si el daño de que tratan los dos artículos anteriores resultare por defecto de construcción, el tercero que lo sufra sólo podrá repetir contra el arquitecto, ó, en su caso, contra el constructor, dentro del tiempo legal.

1910. El cabeza de familia que habita una casa ó parte de ella, es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren ó cayeren de la misma.

Leyes Complementarias.

Reglamento interino para la organización y régimen del Registro mercantil, aprobado por Real decreto de 21 de Diciembre de 1885.

Capítulo primero. De los Registros mercantiles y funcionarios encargados de llevarlos.

Art. **1.** Desde 1.° de Enero de 1886 quedará establecido en cada una de las capitales de provincia de la Península, islas Baleares y Canarias, el Registro mercantil mandado abrir por el art. 16 del Código de comercio en sus dos libros de comerciantes y sociedades.

El tercer libro, destinado á la inscripción de buques, se establecerá en Sevilla, en las capitales de las provincias del litoral que sean á la vez puertos de mar, y en la capital de la provincia marítima respectiva cuando aquéllas no reunan dicha circunstancia[1]).

[1]) Por Real orden de 27 de Diciembre de 1885 se dispuso lo siguiente: — 1.° Se abrirá el libro destinado á la inscripción de buques en los Registros mercantiles de Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Almería, Málaga, Cádiz, Huelva, Coruña, Santander, Bilbao, San Sebastián, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, que son á la vez capitales de provincia y puertos de mar, además del que debe abrirse en el Registro mercantil de Sevilla, según el citado reglamento; — 2.° Se establecerá también el libro ó registro de buques en Gijón, Ribadeo, Vigo, Motril, Cartagena y Palamós, capitales de provincias marítimas, correspondientes á las civiles de Oviedo, Lugo, Pontevedra, Granada, Murcia y Gerona; — 3.° En virtud de lo dispuesto en el art. 2.° del reglamento llevarán, interinamente los expresados libros los registradores de la propiedad de las citadas poblaciones, á excepción del que ha de establecerse en Palamós, que estará á cargo del fiscal del Juzgado municipal.

1904. A person who pays the damage caused by his subordinates may sue the latter for what he has paid.

1905. The possessor of an animal, or the person who makes use of it, is liable for the injury which it causes, although it has escaped or strayed. This liability shall only cease when the damage arises from *vis major* or the *culpa* of the person who suffered it.

1906. The owner of a sporting estate shall be liable for the damage caused by game in the neighbouring estates, when he has not done what is necessary to prevent its multiplication or when he has placed difficulties in the way of the action of the owners of the said estates in order to keep it down.

1907. The owner of a building is responsible for the damage which results from the ruin of the whole or a part thereof, if this happens through want of necessary repairs.

1908. The owners are likewise liable for the damage caused: 1. By the explosion of engines which have not been cared for with due diligence, and for the inflammation of explosive substances which are not stored in a safe and suitable place; — 2. By excessive smoke, which is noxious to persons or properties; — 3. By the fall of trees placed in thoroughfares, when it is not caused by *vis major*; — 4. By the emanations from sewers or deposits of infectious matter, constructed without precautions adequate to the place where they are situated.

1909. If the damage, of which the two preceding articles treat, arises from defects in construction, the third person who suffers the damage may only sue the architect or the builder, as may be, within the lawful time.

1910. The head of the family who inhabits a house or part thereof is liable for the damage caused by things which are thrown or which fall therefrom.

Supplementary Laws.

Provisional Regulation
for the organization and government of the Mercantile Register, approved by Royal Decree of 21 December 1885.

First Chapter. Mercantile Registers and officials in charge thereof.

Art. **1.** From 1 January 1886, the Mercantile Register which was ordered to be opened by art. 16 of the Code of Commerce, shall be established in each of the provincial capitals of the Peninsula, the Balearic and Canary Isles, with its two books for merchants and societies.

The third book, intended for the registration of vessels, shall be established in Sevilla, in the provincial capitals of the litoral, which are at the same time sea ports, and in the capital of the respective maritime province, when the former do not combine the said particular [1]).

[1]) The following was provided by the Royal Order of 27 December 1885: 1. The book intended for the inscription of vessels shall be opened in the Mercantile Registers of Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Almeria, Málaga, Cádiz, Huelva, Coruña, Santander, Bilbao, San Sebastián, Palma de Mallorca and Santa Cruz de Tenerife, which are both provincial capitals and sea ports, besides that which has to be opened in the Mercantile Register of Sevilla, according to the said Regulation; — 2. The book or register of vessels shall also be established at Gijón, Ribadeo, Vigo, Motril, Cartagena and Palamós, capitals of maritime provinces, belonging to the civil provinces of Oviedo, Lugo, Pontevedra, Granada, Murcia and Gerona; — 3. By virtue of the provisions of art. 2 of the Regulation, the Registrars of Ownership of the said localities shall provisionally keep the said books, except that which has to be established at Palamós, which shall be in the charge of the public prosecutor of the municipal Court.

2. Hasta tanto que se provean los Registros mercantiles en la forma prevenida en el art. 32 del mismo Código, se encargarán interinamente de estas oficinas los registradores de la propiedad, y en su defecto, el fiscal del Juzgado municipal, los cuales dependerán inmediatamente para este servicio de la Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado.

3. Si hubiere dos ó más Registros de la propiedad en alguna capital de provincia, desempeñará el cargo de registrador mercantil el que la Dirección designe.

4. Serán de cuenta de los registradores mercantiles todos los gastos necesarios para llevar los Registros, incluso los libros, índices y sellos, sin perjuicio de que éstos queden de propiedad del Estado.

Capítulo II. Del modo de llevar los Registros.

5. El Registro mercantil estará abierto todos los días no feriados durante seis horas, de las que se dará conocimiento al público por medio de anuncio en el *Boletín Oficial* de la respectiva provincia, además de hacerlo constar á la puerta de la oficina.

6. Los tres libros del Registro se llevarán en tomos ó cuadernos, compuestos de papel de mano, de hilo, de segunda clase, marca española, cosidos con cinta y tramilla y encuadernados con lomera de becerrillo, puntas de pergamino, tapas con cartones y tela negra.

Las dos primeras hojas y la última estarán completamente en blanco. Las restantes estarán señaladas en toda su extensión con rayas horizontales.

En el lado izquierdo de cado hoja se dejará entre dos rayas perpendiculares un espacio de dos centímetros, destinado á expresar el número de cada inscripción.

Todas las hojas rayadas se foliarán correlativamente en guarismos.

7. Los tomos del libro de comerciantes se compondrán de 100 folios útiles, los del de sociedades de 200 y los del Registro de buques de 300.

Las tapas para el primero de dichos libros serán de cartones de á dos, y para los otros de cartones de á tres.

El tejuelo expresará en dorado el número del tomo y la sección á que se destina.

8. La primera y última hoja de cada tomo, que servirán de guardas, quedarán en blanco. En la segunda escribirá el registrador de su puño y letra la portada de la manera siguiente:

«Registro mercantil de la propiedad de ...

Libro de (comerciantes particulares, sociedades ó buques). Tomo ...»

El registrador llevará el tomo al Juzgado municipal del distrito en que esté situada la oficina, á fin de que sea reconocido por el juez. Si no advirtiese falta alguna, se pondrá el sello del Juzgado municipal en cada uno de los folios, y el juez extenderá de su puño y letra una certificación en los términos siguientes:

«Don ..., juez municipal de ..., certifico: que reconocido el presente tomo, que es el (el número con que figure en la portada) del libro de ..., del Registro mercantil de esta provincia, se compone de ... folios útiles, incluso el presente, estando ajustada la encuadernación á los preceptos legales, y siendo las hojas iguales al modelo oficial.»

Fecha ...

Firma del juez.

Firma del secretario.

Si el juez advirtiese faltas en el tomo, lo devolverá al registrador para que lo substituya por otro que no las tenga.

9. Por cada comerciante, sociedad ó buque que haya de inscribirse en el Registro, se destinará en el respectivo libro una hoja, á cuyo frente figurará en guarismo el número correspondiente por orden cronológico de presentación de solicitudes ó documentos.

10. Cada hoja destinada á un comerciante, sociedad ó buque, se compondrá del número de folios que el registrador juzgue á propósito para evitar que sea frecuente el pase á otros tomos.

En el caso de llenarse todos los folios de una hoja, se indicará al final del último el folio del tomo corriente donde hayan de continuar las inscripciones, y en éste se hará otra indicación del folio y tomo de donde procede.

2. Until the Mercantile Registers are established as provided in art. 32 of the same Code, the registrars of Ownership shall be in charge of these offices, and in their default, the public prosecutor of the municipal Court, who, for the purpose of this service, shall be immediately under the general Direction of the Civil and Ownership Registers and the notariate.

3. If there are two or more Registers of Ownership in any provincial capital, the registrar appointed by the Direction shall discharge the office of mercantile Registrar.

4. All the necessary expenses for keeping the Registers, including the books, indices and stamps, shall be borne by the mercantile registrars, without prejudice to the latter remaining the property of the State.

Chapter II. The mode of keeping the registers.

5. The mercantile Register shall be open every day which is not a public holiday, for six hours, notice of which shall be given to the public by means of advertisement in the *Boletin Oficial* of the respective province, besides announcing it on the door of the office.

6. The three Registry books shall be kept in volumes made of hand-made flax paper, of the second class, Spanish trade-mark, sewn with tape and twine and bound in calf skin, with vellum edges, covers of cardboard and black cloth.

The first two leaves and the last shall be completely blank. The rest shall be ruled throughout with horizontal lines.

On the left side of each page a space of two centimetres shall be left between two perpendicular lines, intended for stating the number of each inscription.

All the ruled leaves shall be paged in figures.

7. The volumes of the merchants book shall be composed of 100 business folios, those of the societies, of 200 and those of the Shipping Register, of 300.

The covers for the first of the said books shall be of double, and for the others, of triple cardboard.

The number of the volume and the section for which it is intended, shall be expressed on the back in gilt.

8. The first and last leaf of each volume, which shall be fly-leaves, shall be in blank. On the second, the registrar shall write the title in his own hand-writing, in the following manner: "Registro mercantil de la propriedad de . . . . . . Libro de (Commerciantes particulares, sociedades ó buques). Tomo . . . .".

The Registrar shall take the volume to the municipal Court of the district in which the office is situated, so that it may be authenticated by the judge. If he does not notice any fault, he shall place the stamp of the municipal Court on each of the folios, and the judge shall write out a certificate in the following terms in his own hand-writing: "I Don . . . . . Municipal judge of . . . . . certify: that the present volume is authenticated, that it is the (the number given in the frontispiece) of the book of . . . . , of the mercantile Register of this province, and is composed of . . . . . business folios including the present, the binding being in conformity with the legal requirements, and the leaves being according to the official model"

Date . . . . . .

Signature of the Judge . . . . . .

9. A section in the respective book shall be appropriated for each merchant, society or vessel to be inscribed in the Register, and at the head thereof the corresponding number in figures shall appear in the chronological order of the presentation of the applications or documents.

10. Each section appropriated to a merchant, society or vessel shall be composed of the number of folios which the registrar thinks advisable for avoiding frequent carrying forward to other books.

When all the folios of a section are full, the folio of the current volume where the inscriptions are to be continued shall be noted at the end of the last folio, and on the former, another note shall be made of the preceding folio and volume.

Se conservará el número de la hoja, añadiendo la palabra duplicado, triplicado, etc., etc.

11. Los registradores mercantiles procurarán ajustarse en la redacción de inscripciones, notas y certificaciones, á lo que dispone este reglamento.

12. Los registradores llevarán en cuadernos ó tomos separados un índice para cada uno de los libros con las siguientes casillas: 1.ª Apellido y nombre del comerciante, título de la sociedad ó nombre del buque, según el libro á que el índice se destine; — 2.ª Población en que estén domiciliados el comerciante ó la sociedad ó matriculado el buque; — 3.ª Número de la hoja destinada á cada comerciante, sociedad ó buque y el folio ó tomo en que se encuentren; — 4.ª Observaciones.

Para cada letra del alfabeto destinará el registrador el número de folios que crea convenientes, y para hacer el asiento en la que corresponda se atendrá á la inicial del primer apellido del comerciante, á la del título de la sociedad, ó á la del nombre del buque.

Aunque por consumirse los folios de la hoja destinada al comerciante, sociedad ó buque, haya de pasarse á otro tomo, no será preciso incluir en la tercera casilla el número del folio y el del tomo donde pase.

En la cuarta casilla anotará el registrador el número y tomo á donde pase la hoja de inscripción, cuyos folios se hayan llenado, sin perjuicio de hacer las indicaciones que, según los casos, crea necesarias ó útiles para facilitar la busca y evitar equivocaciones.

13. Además de los libros de registro, tendrán los registradores otro, que será talonario, de recibos de las solicitudes y documentos que se presenten para inscripción.

En dichos recibos, y en el momento de la presentación, se hará constar el día y hora en que se verifique, el nombre y apellido del presentante, la clase y fecha del documento presentado, objeto de la presentación, y el nombre y apellido de la persona, autoridad ó funcionario que lo suscriba.

Los mismos datos se consignarán en el talón correspondiente, en el cual firmará el presentante.

La devolución de documentos y solicitudes se hará mediante entregar del recibo talonario al registrador.

En caso de extravío de éste, sólo se devolverán aquéllos al interesado ó á su legítimo representante, dejando otro recibo que servirá de resguardo al registrador.

Los registradores conservarán archivados los recibos talonarios, siendo responsables de la entrega de los documentos cuyo recibo hubiere sufrido extravío.

14. En todos los Registros mercantiles se formará la estadística con arreglo á las instrucciones de la Dirección general.

15. A fin de que los libros é índices sean uniformes en todos los Registros, la Dirección circulará anticipadamente modelos, á los cuales en su tamaño, clase de papel y rayado, habrán de atenerse los registradores para su adquisición.

16. Los registradores mercantiles conservarán en legajos independientes formados por orden de presentación: 1.° Las copias de las solicitudes y las de todas clases de documentos inscritos que no tengan matriz en protocolo notarial ó en archivo público; — 2.° Los ejemplares de las actas de la cotización de valores públicos que diariamente han de recibir de la Junta sindical, según lo dispuesto en el art. 80 del Código de comercio en los puntos en que haya Bolsa; — 3.° Las copias de escrituras de venta de buques autorizadas por nuestros Cónsules; — 4.° Las comunicaciones oficiales; — 5.° Los recibos talonarios de que trata el art. 13.

Además conservarán, bajo su custodia y responsabilidad, los libros que les fueren entregados en cumplimiento del art. 99 del Código de comercio, y sólo los devolverán cuando así se ordene por quien corresponda.

17. Los legajos se formarán por períodos fijos á juicio del respectivo registrador, y se guardarán en carpetas de cartón, que tendrán su correspondiente rótulo.

18. En cada Registro mercantil habrá un inventario de todos los libros, índices y legajos que constituyan su archivo. Todos los años se harán en él las correspondientes adiciones.

The number of the section shall be kept, adding the word duplicado, triplicado, etc., etc.

11. The mercantile registrars shall manage to adjust the drawing up of the inscriptions, notes and certificates, to the provisions of this regulation.

12. The registrars shall keep in separate volumes an index for each of the books, with the following columns: 1. Surname, and name of the merchant, name of the society or vessel, according to the book for which the index is intended; — 2. Locality in which the merchant or society has the address or the vessel is registered; — 3. Number of the section appointed for each merchant, society or vessel and the folio or volume in which they are; — 4. Observations.

The registrar shall appoint the number of folios which he thinks suitable for each letter of the alphabet, and for making the entry, attention shall be paid to the initial of the first surname of the merchant or society, or of the name of the vessel.

Although it is necessary to carry forward to another volume, from the folios of the section appointed for the merchant, society or vessel being full, it shall not be necessary to include the number of the folio and that of the fresh volume, in the third column.

The registrar shall note in the fourth column, the number and volume to which the inscribed section is carried forward the folios whereof are full, without prejudice to making marks as he thinks necessary or useful in each case, for facilitating search and avoiding mistakes.

13. Besides the register books, the registrars shall have another, with counterfoils for receipts, for the applications and documents presented for inscription.

On the said receipts, and at the moment of the presentation shall be stated the day and hour on which it is made, the name and surname of the person presenting the same, the class and date of the presented document, object of the presentation, and the name and surname of the person, authority or official who signs it.

The same particulars shall be entered on the corresponding counterfoil, which shall be signed by the presenting person.

Return of the documents and applications shall be effected on delivery of the receipt to the registrar.

If the latter has been mislaid, the former shall only be returned to the interested person or his lawful representative, on his leaving another receipt, which shall act as such in favour of the registrar.

The registrars shall keep the counterfoiled receipts on a file, and they shall be responsible for the delivery of the documents the receipt whereof has been mislaid.

14. Statistics shall be drawn up in all the mercantile Registries in accordance with the instructions of the general Direction.

15. In order that the books and indices may be uniform in all the Registries, the Direction shall circulate advance models, to which the registrars in acquiring them must attend as to size, kind of paper and ruling.

16. The mercantile registrars shall keep in separate bundles, formed in order of presentation: 1. The copies of the applications and those of every kind of inscribed document which has no original in a notarial or public archive; — 2. The copies of the documents quoting the public securities, which they are to receive daily from the Governing Board, in places where there is an Exchange, as provided by art. 80 of the Code of Commerce; — 3. The copies of the instruments of sale of vessels, authenticated by our Consuls; — 4. Official communications; — 5. The counterfoiled receipts, with which art. 13 deals.

Under their custody and responsibility, they shall likewise keep the books which are delivered them in pursuance of art. 99 of the Code of Commerce, and they shall only return them when the proper official so orders.

17. The bundles shall be formed by fixed periods at the discretion of the respective registrar, and they shall be kept in portfolios of cardboard, which shall have their corresponding label.

18. In each mercantile Registry there shall be an inventory of all the books, indices and bundles which constitute its archives. Corresponding additions shall be made thereto every year.

19. Los registradores tendrán un sello en tinta con la siguiente inscripción: «Registro mercantil (ó de buques) de ...»

El sello se estampará en todos los recibos y en los documentos que hayan surtido efecto en el Registro.

Capítulo III. De las inscripciones en el Registro mercantil y sus efectos.

§ 1.° *Disposiciones generales.*

20. Tienen derecho á pedir la inscripción en el Registro mercantil los comerciantes particulares, entendiéndose que lo son con arreglo á lo que declaran los artículos 1.°, 2.° y 3.° del Código de comercio, los que sin constituir sociedad, y teniendo la capacidad legal necesaria, se dedican habitualmente ó anuncian su propósito de dedicarse á los actos de comercio comprendidos en el mismo Código ó á cualesquiera otros de naturaleza análoga.

21. Es obligatoria la inscripción para las sociedades existentes que acuerden regirse por el nuevo Código de comercio para las que se constituyan con arreglo al mismo ó á las leyes especiales y para los dueños de buques.

22. La inscripción se practicará en el mismo día en que fuere solicitada, á no existir algún obstáculo legal que lo impida.

Hecha la inscripción, se pondrá al pie de la solicitud ó documento que se hayan tenido á la vista una nota en los siguientes términos:

«Inscrito (el precedente documento ó la precedente solicitud) en la hoja número..., folio ..., tomo ... del libro de ... del Registro mercantil ó de buques de ...

Fecha y firma entera.»

Igual nota se pondrá en la copia de la solicitud, si la hubiese, y se conservará en el archivo del Registro, devolviéndose al interesado la original ó los documentos que se hubieren inscrito.

En el talón respectivo del libro de recibos se hará constar el número de la hoja, y el folio y el tomo en que hubiere extendido la inscripción.

23. Todas las inscripciones relativas á cada comerciante, sociedad ó buque, se harán en la hoja respectiva, á continuación unas de otras, sin dejar claros entre ellas, y tendrán su numeración correlativa y especial.

Los registradores cuidarán de que en las inscripciones no queden espacios en blanco, ni se hagan enmiendas ni raspaduras, ni se escriba entre líneas.

Todas las cantidades y fechas se expresarán siempre en letra.

24. Las equivocaciones que se adviertan antes de firmar una inscripción, podrán rectificarse bajo la siguiente fórmula:

«Equivocada la línea ... de esta inscripción, se advierte que debe leerse así (aquí se redactará toda la línea tal como deba quedar).»

25. Al pie de todas las inscripciones se pondrá la fecha en que se extiendan y la firma entera del registrador ó del substituto.

26. En las inscripciones que se practiquen sólo en virtud de solicitudes, se expresará su fecha y el día y hora de su presentación en el Registro, y se indicará el legajo en que la solicitud se conserve. En las que se extiendan en virtud de escritura pública se hará constar el día y hora de la presentación, los nombres y apellidos de los otorgantes, la fecha y lugar del otorgamiento, y el nombre y apellido del notario autorizante.

En las que se hagan en virtud de títulos expedidos por el Gobierno ó sus agentes, se expresará también el día y hora de su presentación, su fecha y lugar en que estén extendidos, y el nombre, apellido y cargo oficial de la autoridad ó funcionario que los suscriba.

En todas las inscripciones se referirá el registrador á las solicitudes ó documentos en cuya virtud se extiendan, indicando el día y hora de su presentación en el Registro.

27. Los jueces que declaren en quiebra á algún comerciante, sociedad ó dueño de buque, expedirán de oficio mandamiento al registrador, para que, por medio de una nota, lo haga constar en la respectiva hoja al final de la última inscripción.

§ 2.° *Reglas especiales para la inscripción en el libro de comerciantes.*

28. El comerciante que desee ser inscrito en el Registro mercantil presentará por sí ó por medio de mandatario verbal al registrador de la capital de la provincia en que haya de dedicarse ó esté dedicado al comercio, una solicitud en papel

19. The registrars shall have an ink-stamp, with the following inscription: "Registro mercantil (or de buques) (of vessels) of . . . . . ".

The stamp shall be applied to all the receipts and on the documents which have taken effect on the Register.

Chapter III. Inscriptions on the mercantile register and their effects.

§ 1. *General provisions.*

20. Individual merchants are entitled to apply for inscription in the mercantile Register, it being understood that those are such, according to articles 1, 2 and 3 of the Code of Commerce, who, without forming a partnership, and having the necessary legal capacity, devote themselves habitually or announce their intention to devote themselves to the acts of commerce included in the same Code or to any others of like nature.

21. Inscription is obligatory for the existing societies which agree to be governed by the new Code of Commerce, for those which are constituted in accordance therewith or with the special laws and for the owners of vessels.

22. Inscription shall be effected on the same day as that on which it is applied for, if there is no legal obstacle to prevent it.

When the inscription has been effected, a note in the following terms shall be placed at the foot of the application or document which they have had before them: "Inscrito (el precedente documento ó la precedente solicitud) en la hoja numero . . . . . folio . . . tomo . . . . del libro de . . . . . del Registro mercantil ó de buques de . . . .
Date and full signature".

A like note shall be placed on the copy of the application, if any, and shall be preserved in the archives of the Registry, the original or the documents which have been inscribed being returned to the person interested.

In the corresponding counterfoil of the book of receipts the number of the page and folio and volume on which the inscription was written out, shall be stated.

23. All the inscriptions relating to each merchant, society or vessel, shall be made on the corresponding page, one after the other, without leaving blanks between them, and they shall have their correlative and special enumeration.

The registrars shall take care that there are no blank spaces in the inscriptions, and that no corrections or erasures or interlineations are made.

All amounts and dates shall always be stated in letters.

24. Mistakes which are noticed before signing an inscription, may be corrected under the following formula: "Line . . . . . of this inscription, having a mistake, notice is given that it must be read thus (here the whole line, as it ought to be, shall be drafted)."

25. The date on which it is drafted and the full signature of the registrar or his substitute, shall be placed at the foot of all the inscriptions.

26. In the inscriptions which are effected only by virtue of applications, their date and the day and hour of their presentation at the Registry shall be expressed, and the bundle in which the application is preserved shall be stated. In those which are drawn up by virtue of a notarial instrument, shall be stated the day and hour of the presentation, the names and surnames of the parties, the date and place of the execution, and the name and surname of the authenticating notary.

In those which are effected by virtue of titles issued by the Government or their agents, shall likewise be stated the day and hour of their presentation, their date and place at which they are written out, and the name, surname and official duty of the authority or officer who signs them.

In all the inscriptions, the registrar shall refer to the applications or documents by virtue whereof they are drawn up, indicating the day and hour of their presentation at the Registry.

27. The judge who declares any merchant, society or ship-owner to be bankrupt, shall officially issue an order to the registrar, in order that he may state the fact by means of a note on the corresponding page at the end of the last inscription.

§ 2. *Special rules for inscription in the book of Merchants.*

28. A merchant who desires to be inscribed in the Mercantile Register shall in person or by an orally appointed agent present to the registrar of the capital of the province in which he is to devote himself or has devoted himself to commerce, an

del timbre de la clase 2ª, expresando, además de lo que tenga por conveniente, las circunstancias que á continuación se expresan: 1.ª Nombre y apellidos del comerciante; — 2.ª Su edad; — 3.ª Su estado; — 4.ª La clase de comercio á que esté dedicado ó haya de dedicarse; — 5.ª El título ó nombre que en su caso tenga ó haya de ponerse al establecimiento; — 6.ª El domicilio del mismo y el de las sucursales, si las tuviese, ya sea dentro ó fuera de la provincia; — 7.ª La fecha en que hubiese empezado ó haya de empezar á ejercer el comercio; — 8.ª Afirmación, bajo su responsabilidad, de que no se halla sujeto á la patria potestad; que tiene la libre disposición de sus bienes, y que no está comprendido en ninguna de las incapacidades expresadas en los artículos 13 y 14 del Código de comercio.

Con la solicitud se presentará una copia en papel común, firmada por el interesado, y la certificación del Ayuntamiento respectivo en que conste su matrícula para los efectos del pago de subsidio ó recibo de haber satisfecho el último trimestre.

Cotejada la copia con el original, y estando conformes, devolverá el registrador la certificación ó el recibo.

29. Si la inscripción se solicitase por mujer casada, acompañará además la escritura pública en que conste la autorización de su marido, y en su defecto, el documento que acredite, en su caso, que con conocimiento de su marido ejerce el comercio; que lo ejercía antes de contraer matrimonio; que se halla separada legalmente de él; que está sujeta á curaduría; que se halla ausente ignorándose su paradero, ó que está sufriendo la pena de interdicción civil.

La mujer comerciante que contraiga matrimonio deberá hacer constar en el Registro la variación de su estado.

30. La inscripción de los comerciantes particulares contendrá todas las circunstancias enumeradas en el art. 28, y además las que exprese la solicitud y sea útil ó conveniente consignarlas á juicio del registrador.

31. Las inscripciones de poderes y de revocaciones de los mismos, y de las licencias á mujeres casadas para comerciar, sólo se practicarán en vista de las respectivas escrituras, y en aquéllas se copiará la cláusula en que se contengan las facultades conferidas ó su revocación ó la de la licencia.

32. Para la inscripción de las emisiones que los comerciantes particulares pueden hacer según lo dispuesto en el art. 21 del Código de comercio, para la de su cancelación parcial ó total, y para la de los títulos que expresan el número 12 del art. 21 del mismo, se observará lo dispuesto en los artículos 40 al 45 de este reglamento.

33. Con arreglo á lo dispuesto en el art. 28 del Código de comercio la inscripción de las escrituras á que se refiere el número 9.° del art. 21 del mismo deberá pedirse por el comerciante ó por su mujer, ó por los padres, hermanos ó tíos carnales de ésta, así como por los que hayan sido sus tutores ó curadores ó por los que hubieren constituído ó constituyan la dote á su favor.

34. Para que la inscripción se lleve á efecto será preciso presentar las respectivas escrituras con la nota de haber sido antes inscritas en el Registro de la propiedad, si entre los bienes dotales ó parafernales hay inmuebles ó derechos reales.

En la inscripción referente á bienes parafernales se expresará necesariamente su importe, si resulta del título.

En la de bienes dotales se indicará además la clase de dote y el nombre y apellido de la persona que la constituyó, y si ha sido entregada ó prometida.

35. Si el comerciante no estuviese inscrito en el Registro mercantil y se presentase para ser inscrita alguna escritura de dote, de capítulos matrimoniales ó de bienes parafernales de mujer casada con aquél, se hará la previa inscripción del comerciante, en virtud de solicitud, comprensiva de las circunstancias necesarias y firmada por la misma persona que pretende la inscripción á favor de la mujer.

§ 3.° *Reglas especiales para la inscripción en el libro de sociedades.*

36. Los directores, presidentes, gerentes ó representantes de las diversas clases de Compañías mercantiles que se mencionan en el art. 123 del Código de comercio, tienen obligación, con arreglo al artículo 17 del mismo, de solicitar la inscripción en el Registro mercantil de la provincia en que estuvieren domiciliadas, de las escrituras de constitución de las mismas, así como de las adicionales que de cualquiera manera alteren ó modifiquen aquéllas antes de dar principio á las respectivas operaciones.

application on stamped paper of the 2nd class, stating the particulars which are hereafter expressed in addition to what he deems expedient: 1. Name and surname of the merchant; — 2. His age; — 3. His status; — 4. The kind of commerce to which he is to devote or has devoted himself; — 5. The title or name which he has given or is to give to the establishment; — 6. The address thereof and that of the branches, if any, whether within or without the province; — 7. The date on which he has begun or is to begin to practise commerce; — 8. Affirmation, on his responsibility, that he is not subject to *patria potestas*; that he can freely dispose of his property, and that he is not included in any of the legal incapacities stated in articles 13 and 14 of the Code of Commerce.

With the application shall be presented a copy on ordinary paper, signed by the interested person, and the certificate of the proper Municipality giving his register for the purpose of paying taxes or the receipt for having paid the last three months.

When the copy has been compared with the original and found to agree, the registrar shall return the certificate or the receipt.

29. If the inscription is applied for by a married woman, it shall be accompanied also by a notarial instrument in which appears the authorisation of her husband, and in default thereof, a document which proves, as the case may be, that she is practising commerce with the knowledge of her husband; that he practised it before contracting matrimony; that she is legally separated from him; that he is subject to curatorship; that he is absent and his dwelling place is unknown; or that he is suffering the punishment of civil interdiction.

A female merchant who contracts matrimony must cause the change in her status to appear on the Register.

30. The inscription of individual merchants shall contain all the particulars enumerated in art. 28 and likewise those stated in the application and which in the judgment of the registrar are useful or convenient to express.

31. Inscriptions of powers and of the revocations thereof, and of the licences to married women to trade, shall only be effected on inspection of the respective instruments, and there shall be copied therein the clause in which the conferred faculties or their revocations or that of the licence are contained.

32. The provisions of articles 40 to 45 of this Regulation shall be observed, for the inscription of the issues which may be made by individual merchants according to the provisions of art. 21 of the Code of Commerce, for that of their total or partial cancellation, and for that of the securities which are stated in No. 12 of art. 21 thereof.

33. In accordance with the provisions of art. 28 of the Code of Commerce, the inscription of the instruments referred to by No. 9 of art. 21 thereof, shall be applied for by the merchant or by his wife, or by the parent, brothers or uncles of the latter, as well as by those who have been her guardians or curators or by those who have constituted or may constitute a dowry in her favour.

34. In order that the inscription may take effect, it shall be necessary to present the respective instruments with a note of their having previously been inscribed in the Register of Ownership, if there are immoveables or real rights among the dowry or paraphernalia.

In the inscription which refers to paraphernalia, it is necessary to state their amount, if it appears from the title.

In that of dowry, the kind of dowry and the name and surname of the person who constituted it shall be stated, and whether it has been delivered or promised.

35. If the merchant is not inscribed in the Mercantile Register and any instrument of dowry, marriage articles or of paraphernalia of his wife is presented, the merchant shall previously be inscribed by virtue of an application which comprises the necessary particulars and is signed by the same person as claims inscription in favour of the wife.

§ 3. *Special rules for inscription in the book of societies.*

36. The directors, presidents, managers or representatives of mercantile associations which are mentioned in art. 123 of the Code of Commerce are bound, in accordance with art. 17 thereof, to apply for the inscription of the constitutive instruments thereof in the mercantile Register of the province in which they are domiciled, as well as of the additional instruments which in any way alter or modify them, before beginning their respective operations.

37. Para que puedan ser inscritas las escrituras de constitución de sociedad, deberán expresar por lo menos las circunstancias que exigen los artículos 125, 145 y 151 del Código de comercio, el domicilio de la sociedad y las operaciones á que han de dedicarse.

También se deberá expresar en la misma escritura, ó en otro cualquier documento fehaciente, la fecha en que han de dar principio á sus operaciones.

Dichas circunstancias se harán constar en la inscripción con la debida claridad.

38. Además de la inscripción de las escrituras á que se refiere el artículo 36 de este reglamento, es obligatorio para las sociedades inscribir: 1.° Todos los actos, acuerdos, contratos y circunstancias que puedan influir sobre la libre disposición del capital, ó sobre el crédito, así como los que alteren y modifiquen las condiciones de los documentos inscritos; — 2.° Los poderes, tanto generales como especiales para determinadas operaciones, así como la modificación, constitución y revocación de los mismos. Para la inscripción de estos actos los registradores se atendrán á lo dispuesto en el artículo 31 de este reglamento; — 3.° Las emisiones de acciones, cédulas, obligaciones de todas clases y billetes de Banco y la cancelación de las respectivas inscripciones; — 4.° Los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica en la forma y modo que establezcan las leyes; — 5.° La prolongación de la sociedad; — 6.° Su rescisión parcial y disolución total, excepto cuando ésta tenga lugar por la terminación del plazo por el cual se constituyó, siendo en este caso voluntaria la inscripcion.

39. Para inscribir cualquiera emisión de acciones, cédulas ú obligaciones á cuyo pago se declaren afectos bienes inmuebles ó derechos reales, será indispensable que se presente la correspondiente escritura pública ya inscrita en el Registro de la propiedad.

La inscripción expresará la serie y número de títulos de la emisión que se haya de inscribir, su interés, rédito, amortización y primas, si tuvieren una ú otras, la cantidad total de la emisión, y los bienes, intereses, obras, derechos ó hipotecas que afecten al pago de la emisión, y cualesquiera otros datos que el registrador estime de alguna utilidad.

40. La inscripción de las emisiones de billetes, obligaciones ó documentos nominativos y al portador, á cuyo pago no queden afectos bienes inmuebles ó derechos reales, se hará en vista de la respectiva escritura, si se otorgare, ó del certificado del acta en que conste el acuerdo para hacer la emisión, y las condiciones, requisitos y garantías de las mismas.

El certificado deberá estar expedido en forma de testimonio por un notario á requerimiento de parte.

La inscripción expresará todo lo necesario para dar á conocer con exactitud la emisión, sus condiciones y garantías.

41. Para que se cancelen total ó parcialmente las inscripciones de emisión á que se refiere el artículo 39, bastará con que se presente la escritura ó documento de cancelación total ó parcial con nota de su inscripción en el Registro de la propiedad, ó certificado, con referencia á éste, de haberse cancelado total ó parcialmente la inscripción practicada en el mismo.

42. Para cancelar total ó parcialmente las inscripciones comprendidas en el artículo 40, bastará con que se presente en el Registro mercantil testimonio de notario en que, con referencia á los libros y documentos del comerciante ó sociedad que hubiera hecho la respectiva emisión, se haga constar la amortización de los títulos, acciones, obligaciones ó billetes, y el completo pago de la cantidad que representen, expresando si se pretende la cancelación parcial, la serie y número de los amortizados, debiendo el mismo notario dar fe de haber visto recogidos é inutilizados los títulos, obligaciones ó billetes amortizados.

43. La inscripción de cancelación expresará claramente el número de la que se cancele, y si es total ó parcial. En este caso se indicarán los títulos, obligaciones, acciones ó billetes, cuyos valores hayan sido satisfechos.

44. Los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, se inscribirán previa la presentación de los respectivos documentos que acrediten su concesión en forma legal.

La inscripción expresará las circunstancias esenciales comprendidas en el documento.

37. In order that the constitutive instruments of a society may be inscribed, they must at least state the particulars required by arts. 125, 145 and 151 of the Code of Commerce, the address of the society and the operations to which it is to be devoted.

The date also on which they are to begin their operations must be stated in the same instrument, or in some other authoritative document.

The said particulars shall be made to appear in the inscription with due clearness.

38. Besides the inscription of the instruments to which art. 36 of this Regulation refers, societies are bound to inscribe: 1. All the acts, resolutions, contracts and particulars which may influence the free disposition of the capital, or the credit, as well as those which alter or modify the conditions of the inscribed documents; — 2. Both general powers and those which are special for certain transactions, as well as the alteration, constitution and revocation thereof. For the purpose of inscribing these acts, the registrars shall attend to the provisions of art. 31 of this Regulation; — 3. Issues of shares, cedulas, bonds of all kinds and bank notes and the cancellation of the corresponding inscriptions; — 4. Titles of industrial ownership, patents of invention, and trade-marks in the form and manner enacted by law; — 5. The prolongation of the society; — 6. Its partial rescission and total dissolution, except when the latter takes place by the termination of the time for which it was formed, inscription in this case being voluntary.

39. For inscribing any issue of shares, cedulas or bonds to the payment whereof immoveable property or real rights are declared affected, it shall be indispensable that the corresponding notarial instrument should be produced already inscribed in the Register of Ownership.

The inscription shall express the series and number of securities of the issue which has to be inscribed, their interest, income, amortisation and premiums, if any there are, the total amount of the issue, and the property, interest, works, rights or mortgages affected to the payment of the issue, and any other facts which the registrar thinks of utility.

40. The inscription of the issues of bank notes, bonds or documents either nominal or to bearer, to the payment whereof immoveable property or real rights are not affected, shall be made on inspection of the corresponding instrument, if it is executed, or of the certificate of the minute in which the resolution to make the issue appears, and the conditions, requisites and guarantees thereof.

The certificate must be issued in the form of a certified copy by a notary on the request of a party.

The inscription shall state all that is necessary to correctly give notice of the issue, its conditions and guarantees.

41. For the total or partial cancellation of the inscriptions of an issue to which art. 39 refers, it shall be sufficient that there should be produced the instrument or document of total or partial cancellation with note of its inscription on the Register of Ownership, or a certificate referring thereto of the inscription made therein having been wholly or partially cancelled.

42. For the total or partial cancellation of the inscriptions comprised in art. 40, it shall be sufficient that a certified copy by a notary should be produced at the mercantile Register in which, by making reference to the books or documents of the merchant or society which has made the corresponding issue, the amortisation of the securities, shares, bonds or notes, and the complete payment of the amount which they represent is made to appear, stating if partial cancellation is intended, the series and number of those which are amortised, and the same notary must certify that he has seen the amortised securities, bonds or notes collected and cancelled.

43. The inscription of the cancellation shall clearly state the number of what is cancelled, and if it is total or partial. In this case, the securities, bonds, shares or bank notes, the values whereof have been paid, shall be indicated.

44. Titles of industrial ownership, patents of invention and trade marks, shall be inscribed after the production of the corresponding documents which prove their grant in legal form.

The inscription shall state the essential particulars comprised in the document.

§ 4.° *Reglas especiales para la inscripción en el libro ó Registro de buques.*

45. Los dueños de buques mercantes de matrícula y bandera de España solicitarán su inscripción en el Registro mercantil de la provincia en que estuvieren matriculados antes de emprender el primer viaje ó de dedicarse á las operaciones á que se destinen.

Se considerarán buques para los efectos del Código y de este reglamento, no sólo las embarcaciones destinadas á la navegación de cabotaje ó altura, sino también los diques flotantes, pontones, dragas, gánguiles y cualquiera otro aparato flotante destinado á servicios de la industria ó del comercio marítimo.

46. La primera inscripción de cada buque será la de propiedad del mismo, y expresará las circunstancias indicadas en el número 1.° del artículo 22 del Código de comercio, y además la matrícula del buque y su valor.

47. Para que se verifique la inscripción del buque se presentará en el Registro mercantil una copia certificada de la matrícula ó asiento del buque expedida por el comandante de marina de la provincia en que esté matriculado.

48. Cuando un buque cambie de matrícula dentro de la misma provincia, se hará constar así á continuación del último asiento que se hubiere extendido relativo al mismo buque, previa presentación del certificado de la nueva matrícula.

Si el cambio se hubiere hecho á otra provincia, se presentará al registrador de la capital de ésta certificación literal de la hoja del buque, á fin de que se trasladen todas las inscripciones á la hoja que se le destine en dicho Registro, bajo la siguiente fórmula: «Certifico que en la hoja número ..., folio ..., tomo ..., del Registro de buques de ..., aparecen las inscripciones siguientes (aquí se copiarán literalmente); así resulta de la certificación expedida con fecha ... por D ..., registrador mercantil de ..., que, para poder hacer la inscripción siguiente, ha sido presentado en este Registro á las ...

Fecha y firma entera.»

A continuación se inscribirá el cambio de matrícula, y el registrador participará de oficio al encargado del Registro en que antes estuvo inscrito el buque, haber practicado la inscripción del cambio, indicando el número de la hoja, folio y tomo en que conste.

El último de los citados registradores cerrará la hoja del buque, poniendo á continuación de la última inscripción una nota en los siguientes términos: «Queda cerrada esta hoja por haberse inscrito el buque de su referencia en el Registro de ..., hoja ..., número ..., folio y tomo.

Fecha y firma.»

49. Cuando en el caso previsto en el artículo 578 del Código de comercio se remita al registrador copia de la escritura de venta de un buque, acusará recibo al cónsul, y pondrá á continuación de la última inscripción hecha en la hoja del buque una nota en los siguientes términos:

«Nota. Por escritura otorgada con fecha ... ante el cónsul de ..., ha sido vendido el buque de esta hoja á ...

Fecha y firma.»

La copia se conservará en el archivo en un legajo especial, y la inscripción no se verificará hasta que los interesados ó cualquiera de ellos presenten la escritura; pero mientras no se inscriba ésta, no se extenderán otras inscripciones de transmisión ó gravamen del mismo buque.

50. Los capitanes de los buques se proveerán necesariamente de la certificación de la hoja del Registro, sin cuyo documento no podrán emprender el viaje.

Esta certificación, que habrá de ser literal y deberá estar legalizada por el capitán del puerto de salida, se considerará como título bastante para la justificación del dominio y para su transmisión ó imposición de gravámenes por manifestación escrita y firmada por los contratantes al pie de aquélla, con intervención de notario en España ó cónsul en el extranjero que afirmen la verdad del hecho y la legitimidad de las firmas.

Los contratos así celebrados surtirán todos sus efectos desde que sean inscritos en el Registro mercantil.

La inscripción se verificará presentando, ó la misma hoja de registro del buque, ó un certificado literal del contrato autorizado por el naviero, y en su defecto por el capitán del buque y por el mismo notario ó cónsul que haya intervenido.

§ 4. *Special rules for inscription in the book or Registry of Vessels.*

45. The owners of merchant vessels of Spanish register and flag shall apply for their inscription on the Mercantile Register of the province in which they were registered before beginning their first voyage or devoting themselves to the operations for which they are intended.

For the purposes of the Code and this Regulation, not only shall ships intended for coastal and ocean navigation be considered vessels, but likewise floating docks, pontoons, dredges, barges and every other floating apparatus intended for the service of industry or maritime commerce.

46. The first inscription of each vessel shall be that of the ownership thereof, and shall state the particulars indicated in No. 1 of article 22 of the Code of Commerce, and also the register of the vessel and her value.

47. In order that inscription of the vessel may be effected, there shall be produced at the mercantile Register a certified copy of the register or entry of the vessel issued by the commandant of marine of the province where she is registered.

48. When a vessel changes her register within the same province, it must be so stated in continuation of the last entry which has been drawn up relating to the same vessel, on previous production of the certificate of the new register.

If the change is made to another province, a literal certificate of the section of the vessel shall be produced to the registrar of the capital thereof, so that all the inscriptions of the section which is set apart in the said Register may be transferred, under the following formula: "I certify that on the section no. . . . folio . . . volume . . . of the Register of vessels of . . . . . . appear the following entries (here they shall be literally copied); thus it appears from the certificate dated . . . . issued by D . . . . . . mercantile registrar of . . . . . . which, in order to make the following entry has been produced at this registry on . . . . . .

(Date and signature in full)".

The change of register shall be inscribed in continuation, and the registrar shall officially inform the person in charge of the Register in which the vessel was formerly incribed, that the inscription of the change has been effected, indicating the number of the section, folio and volume in which it appears.

The last of the said registrars shall close the section of the vessel, by placing in continuation of the last entry a note in the following terms: "This section is closed by the vessel therein referred to having been inscribed in the Register of . . . section . . . number . . . . folio . . . . and volume . . . .

(Date and signature)."

49. When in the case provided for by article 578 of the Code of Commerce, a copy of the instrument of sale of a vessel is sent to the Registrar, he shall acknowledge the receipt to the consul and in continuation of the last entry made on the section of the vessel, shall place a note in the following terms: "Note. By an instrument dated . . . . executed before the Consul of . . . . . the vessel of this section was sold to . .

(Date and signature)."

The copy shall be preserved in a special bundle in the archives and the inscription shall not be effected until the interested persons or one of them produces the instrument, but until the latter is inscribed, other entries of transfer or charge of the same vessel shall not be drawn up.

50. The masters of vessels are bound to provide themselves with the certificate of the section of the Register, without which document, they may not begin the voyage.

This certificate, which must be literal and be legalised by the harbour master of the port of departure, shall be considered a sufficient title to prove the ownership and for her transfer or charge by means of evidence written and signed by the contracting parties at the foot thereof, with the intervention of a notary in Spain or of a consul abroad to affirm the truth of the act and the lawfulness of the signatures.

Contracts thus made shall have their full effect from their being inscribed in the Mercantile Register.

The inscription shall be effected on producing, either the actual section of the register of the vessel, or a literal certificate of the contract authorised by the shipwoner, and in default thereof, by the master of the vessel and by the actual notary or consul who intervened.

No será necesaria nueva hoja para cada viaje. Bastará con que á continuación de la primera que se hubiese expedido se certifique de todos los asientos que aparezcan practicados con posterioridad en la respectiva hoja del buque.

51. La certificación de la hoja de un buque á que se refiere el artículo anterior, en concordancia con el 612 del Código de comercio, deberá ser legalizada por el capitán del puerto de salida que firme la patente de navegación y los demás documentos del buque.

52. De los gravámenes que con arreglo á los artículos 580, 583 y 611 del Código de comercio se impongan al buque durante su viaje, y que, según el artículo 50 de este reglamento, deben hacerse con intervención de notario en España ó del cónsul en el extranjero, se extenderá un acta que conservarán en sus protocolos ó archivos estos funcionarios.

Aunque los contratos en que se impongan dichos gravámenes surten efecto durante el viaje desde el momento de su anotación en la hoja del buque para los efectos del art. 580 del Código, deberán inscribirse, una vez terminado el viaje, en el Registro correspondiente.

53. Los propietarios de buques vendidos á un extranjero deberán presentar copia de la escritura de venta en el Registro, á fin de que se cierre la hoja correspondiente al mismo. Los notarios y los cónsules que hubieren autorizado cualquier acto de enajenación de un buque español á favor de un extranjero darán parte dentro de tercero día al encargado del Registro en que estuviere inscrito, el cual extenderá la oportuna nota en la hoja abierta al buque enajenado.

54. La extinción de los créditos inscritos se hará constar por regla general presentando previamente escritura pública ó documento fehaciente en que conste el consentimiento de la persona á cuyo favor se hizo la inscripción, ó de quien acredite en debida forma ser su causahabiente ó representante legítimo.

En defecto de tales documentos deberá presentarse ejecutoria ordenando la cancelación.

Si la extinción del crédito tiene lugar forzosamente, por ministerio de la ley en virtud de un hecho independiente de la voluntad de los interesados, bastará acreditar con documento fehaciente la existencia del hecho que motiva la cancelación.

De conformidad con lo prevenido en el art. 582 del Código de Comercio, se reputarán extinguidas de derecho todas las inscripciones á la de la escritura de venta judicial de un buque.

55. Las inscripciones de cancelación expresarán claramente si ésta es total ó parcial, y en este caso la parte de crédito que se haya satisfecho y la que quede por satisfacer.

56. Hecha constar en la matrícula de un buque su desaparición, destrucción ó enajenación á un extranjero, el comandante de marina de la provincia lo participará de oficio al registrador mercantil de la misma, á fin de que éste extienda al final de la última inscripción una nota en los siguientes términos:

«Según oficio de ..., fecha ..., el buque á que esta hoja se refiere (aquí lo ocurrido al buque).

Fecha y firma.»

Extendida esta nota, no se podrá hacer inscripción alguna relativa al buque.

Capítulo IV. De la publicidad del Registro mercantil.

57. Las personas que deseen adquirir noticias respecto de lo que en el Registro mercantil resulte con relación á un comerciante, sociedad ó buque, pueden conseguirlas utilizando alguno de los medios siguientes: 1.° Manifestación del Registro; — 2.° Certificación con referencia á los libros.

58. El registrador, á petición verbal de cualquiera persona, pondrá de manifiesto la hoja relativa al comerciante, sociedad ó buque que se le indique, para que pueda ser examinada y tomar las notas que tenga por conveniente.

59. La certificación podrá obtenerse pidiéndola por medio de solicitud escrita en papel del timbre de la clase 12.ª.

En la solicitud se expresará claramente el nombre del comerciante, sociedad ó buque, y la inscripción ó inscripciones de que se ha de certificar.

60. La certificación podrá ser literal ó en relación, según se pida, y se extenderá á continuación de la solicitud, aumentando los pliegos de papel de la misma

A new section shall not be required for each voyage. It shall be sufficient if in continuation of the first certificate which has been issued, there is a certificate of all the entries which appear as effected later, on the corresponding section of the vessel.

51. The certificate of the section of a vessel to which the preceding article refers, in agreement whith art. 612 of the Code of Commerce, must be legalised by the harbour-master of the port of departure who signs the licence to navigate and the other ship's papers.

52. A minute shall be drawn up of the charges which are imposed on the vessel during her voyage in accordance with articles 580, 583 and 611 of the Code of Commerce, and which, according to art. 50 of this Regulation, have to be made with the intervention of a notary in Spain or of a Consul abroad, and it shall be preserved by these officials in their protocols or archives.

Although the contracts, by which the said charges are imposed, take effect during the voyage from the moment of their annotation in the section of the vessel for the purposes of art. 580 of the Code, they must be inscribed in the corresponding Register, when once the voyage ends.

53. The owners of vessels sold to a foreigner must produce a copy of the instrument of sale at the Registry, so that the section corresponding to the same may be closed. The notaries and consuls who have authenticated any act of sale of a Spanish vessel to a foreigner shall within the third day acquaint the person in charge of the Register in which she was inscribed, who shall write out the proper note on the section opened for the sold vessel.

54. The extinction of the inscribed debts shall as a general rule be made to appear by previously producing the notarial instrument or probatory document in which appears the consent of the person in whose favour the inscription was effected, or whose successor in right or lawful representative he duly proves himself to be.

In default of such documents a final judgment ordering the cancellation must be produced.

If the extinction of the debt takes place compulsorily, by operation of law in virtue of an act which is independent of the will of the interested persons, it shall be sufficient to prove the existence of the fact which occasions the cancellation by a probatory document.

In accordance with the provisions of art. 582 of the Code of Commerce, all the inscriptions up to that of the instrument of the judicial sale of a vessel, shall be considered as extinguished by law.

55. The inscription of cancellation shall clearly state if this is total or partial, and in the latter case, the part of the debt which has been paid and that which remains to be paid.

56. When her disappearance, destruction or sale to a foreigner has been caused to appear in the register of a vessel, the commandant of marine of the province shall officially inform the mercantile registrar thereof, so that he may draw up a note in the following terms at the end of the last inscription: "According to an official note of . . . . dated . . . . , the vessel to which this section refers (here insert what has happened to the vessel).

(Date and signature)."

When this note has been written out, no inscription relating to the vessel can be effected.

Chapter IV. The publicity of the mercantile register.

57. Persons who desire to obtain information respecting what the Register shows with relation to a merchant, society or vessel, may do so by making use of any of the following means: 1. Inspection of the Register; — 2. Certificate referring to the books.

58. On the verbal request of any person, the registrar shall show the section which relates to the merchant, society or vessel which is indicated to him, in order that it may be examined and that he may take notes as he thinks fit.

59. The certificate may be obtained by asking for it by means of an application written on stamped paper, class 12.

The name of the merchant, association or vessel, and the inscription or inscriptions which are to be certified, shall be clearly expressed in the application.

60. The certificate may be literal or summarised, as may be requested, and shall be written out in continuation of the application, supplementing the sheets

clase que sean precisos. Unas y otras expresarán necesariamente si además de la inscripción ó inscripciones que comprende, existen ó no otras relativas al mismo comerciante, sociedad ó buque.

Si se pidiere certificado de alguna inscripción que esté cancelada, lo hará constar el registrador aunque no se le exija.

Cuando no resulten inscripciones de la clase que se pida, se dará certificación negativa.

61. Los registradores mercantiles pondrán de manifiesto á cualquiera persona que lo desee los ejemplares del acta de la cotización oficial.

También expedirán copia certificada de los mismos, mediante solicitud escrita en papel del timbre de la clase 12.ª.

62. Las certificaciones se extenderán en el más breve plazo posible, sin que pueda exceder de dos días.

Los registradores facilitarán por escrito á los jueces, Tribunales y autoridades, cuantos datos les sean pedidos de oficio y consten en el Registro mercantil, sin devengar derechos cuando no medie instancia de parte.

Capítulo V. De los derechos y de la responsabilidad de los registradores.

64. Los registradores mercantiles percibirán los derechos que les correspondan con estricta sujeción al Arancel que se acompaña á este Reglamento.

Por las operaciones que practiquen y no tengan señalados derechos no podrán percibirlos.

65. Al pie de las respectivas inscripciones, notas y certificaciones, consignarán los registradores los derechos que devenguen, citando el número del Arancel que apliquen, sin perjuicio de dar recibo especial si los interesados lo exigen.

66. En cada registro mercantil se llevará un libro de ingresos, en el que por orden de presentación de los respectivos documentos se consignarán todos los derechos que se devenguen, aunque no se hayan percibido. 1.ª á 4.ª (Carecen de interés). — 5.ª Los registradores interinos elevarán semestralmente á la misma Dirección una memoria sobre los inconvenientes que en la práctica hubieren advertido, á fin de que se tengan presentes para las reformas que en su día deban hacerse en esta parte de la legislación mercantil.

Arancel de derechos de los registradores mercantiles.

	Pesetas
Número 1. Por cada inscripción hecha en el libro de comerciantes que no esté comprendida en los números siguientes	2
Número 2. Por la inscripción de variación de alguna circunstancia relativa al comerciante particular	1
Número 3. Por las de poderes, su modificación, substitución ó revocación y por las de títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica en cualquiera de los libros	3
Número 4. Por las de dote, capítulos matrimoniales ó bienes parafernales	4
Número 5. Por la primera inscripción de cualquiera sociedad, y por las de emisión de todas clases se devengarán los derechos que señala la siguiente escala:	
Si el capital social ó el importe de la emisión no excede de 250 000 pesetas	5
Si excede de esta cantidad y no pasa de 500 000	10
Si pasa de 500 000 y no de 1 000 000	15
Si pasa de 1 000 000 y no de 2 000 000	20
Excediendo de 2 000 000	25
Número 6. Por la inscripción de cualquier buque ó de variar alguna de sus circunstancias	2
Número 7. Por las inscripciones de contratos en virtud de los cuales queden afectos los buques al pago del cumplimiento de una obligación, se devengarán:	
Si el importe de la obligación asegurada no excede de 250 000	5
Si pasa de esta cantidad y no de 500 000	10
Desde 500 001 á 1 000 000	15
Pasando de 1 000 000	20

of paper of the same class as may be necessary. Both must state if there exist or not other inscriptions which relate to the same merchant, society or vessel, besides the inscription or inscriptions which it includes.

If request is made for a certificate of any inscription which is cancelled, the registrar shall cause it to be so stated although it is not required of him.

When there prove to be no inscriptions of the class which is requested, a negative certificate shall be given.

61. The mercantile registrars shall show the copies of the document of the official quotation to any person who desires it. They shall likewise issue a certified copy thereof, on an application written on stamped paper, class 12.

62. The certificates shall be drafted in the shortest possible time, which may not exceed two days.

The registrars shall provide in writing for the judges, Tribunals and authorities, all facts which are officially applied for and which appear in the mercantile Register, without charging fees when there is no party applying.

Chapter V. Fees and responsibility of the registrars.

64. The mercantile registrars shall receive the respective fees strictly subject to the Scale which accompanies this Regulation.

They may not receive fees in respect of operations performed by them which have no fees stated.

65. The registrars shall state the fees which are due at the foot of the respective inscriptions, notes and certificates, citing the number of the scale which they apply, without prejudice to giving a special receipt if the interested persons desire it.

66. In each mercantile registry a book of receipts shall be kept, in which all the fees which are due shall be stated in the order of the presentation of the respective documents, although they have not been received (1 to 4 are immaterial); — 5. The interim registrars shall send a six-monthly report to the Direction on the inconveniences which they have noticed in the practice, in order that they may be at hand for the reforms which must be made in this part of the mercantile legislation in due time.

Scale of fees of the mercantile registrars.

	Pesetas
No. 1. For each entry made in the book of merchants, not comprised in the following numbers	2
No. 2. For entering a change in any particular relating to an individual merchant	1
No. 3. For entering powers, their alteration, substitution or revocation and for entering securities of industrial ownership, patents of invention and trade-marks in any of the books	3
No. 4. For entering dowry, marriage settlements or paraphernalia	4
No. 5. For the first entry of any society, and for those of an issue of every kind, the fees set out in the following scale shall be due:	
If the social capital or amount of the issue does not exceed 250 000 pesetas	5
If it exceeds this amount and does not exceed 500 000	10
If it exceeds 500 000 and not 1 000 000	15
If it exceeds 1 000 000 and not 2 000 000	20
Exceeding 2 000 000	25
No. 6. For entering any vessel or varying any of her particulars	2
No. 7. For entering contracts by virtue of which vessels are affected to the payment in fulfilment of an obligation, shall be due:	
If the amount of the insured obligation does not exceed 250 000	5
If it exceeds this sum and not 500 000	10
From 500 001 to 1 000 000	15
Exceeding 1 000 000	20

	Pesetas
Número 8. Por las inscripciones que se practiquen en el libro de sociedades y en el de buques no comprendidas en los números anteriores	5
Número 9. Por cada nota que deba ponerse en los libros de Registro, según lo dispuesto en el Reglamento	1
Número 10. Por la traslación de cada inscripción de un Registro moderno á otro	1
Número 11. Por la manifestación de una hoja de cualquiera de los libros	1
Número 12. Por la certificación literal de cada inscripción, la cuarta parte de lo que se hubiere devengado por ésta	
Número 13. Por la certificación en relación de cada inscripción, la octava parte de lo que por ésta se hubiere devengado.	
Número 14. Por la manifestación de cada acta de la cotización oficial de Bolsa	1
Número 15. Por la certificación de cada acta de cotización	1
Número 16. Por cualquiera certificación negativa	1
Número 17. Por la custodia de libros, en el caso del art. 99 del Código de comercio, por cada libro	5

Banco de España.[1]

Real Decreto de 19 de Marzo de 1874.

Art. 1. Se establece por medio de un Banco Nacional la circulación fiduciaria única, en sustitución á la que hoy existe en varias provincias por medio de Bancos de emisión, á cuyo fin el de España, creado por la ley de 28 de Enero de 1856, se reorganizará con el capital de 100 millones de pesetas, representado por 200.000 acciones transferibles de á 500 pesetas cada una, sin perjuicio de elevar aquél hasta 150 millones de pesetas cuando las necesidades del comercio ú otras lo reclamen, previa la autorización del Gobierno[2].

Su duración será de treinta años[3].

2. El Banco funcionará en la Península é Islas adyacentes como único de emisión debidamente autorizado y con el carácter de Nacional. Tendrá la facultad de emitir billetes al portador por el quíntuplo de su capital efectivo, debiendo conservar en sus Cajas, en metálico, barras de oro ó plata, la cuarta parte, cuando menos, del importe de los billetes en circulación[4].

3. Los billetes al portador á que se refiere el artículo precedente estarán divididos en series de las cantidades que el Banco considere oportunas para facilitar las transacciones; pero la mayor de dichas cantidades no podrá exceder de 1.000 pesetas[5].

---

1) El actual Banco de España, único de emisión que existe en esta nación, es heredero natural del de San Carlos, fundado por Real Cédula de 2 de Junio de 1782 y liquidado en 9 de Julio de 1829 por Real Cédula de dicha fecha, que creó, bajo la base de los 40 millones de reales que importaban todos los créditos contra el Estado, el nuevo Banco Español de San Fernando, en el que se refundió en 29 de Febrero de 1847 el Banco de Isabel II, creado por Real Decreto de 29 de Enero de 1844. La Ley de 4 de Mayo de 1849 le concedió por primera vez el privilegio de la emisión de billetes; y por la de 28 de Enero de 1856 se cambió su denominación por la de Banco de España que lleva actualmente. Por el Real Decreto de 19 de Marzo de 1874 se convirtió en Banco único. Se rige esta poderosa institución: por el citado Real Decreto (elevado á la categoría de Ley por la de 17 de Julio de 1876); por la Ley de 14 de Julio de 1891, que prorrogó su duración y amplió el límite de la emisión de sus billetes; por la de 13 de Mayo de 1902, que redujo ésta (ampliada por la de 9 de Agosto de 1898 á 2.500 millones de pesetas) á 1.200 millones de pesetas; y por sus Estatutos y Reglamentos, aprobados los primeros por el Real Decreto de 10 de Diciembre de 1900, y el segundo por otro de 5 de Enero de 1901.

2) Por acuerdo de la Junta general de accionistas de 17 de Diciembre de 1882, aprobado por Real orden de 23 del mismo Diciembre, se aumentó el capital del Banco hasta los 150 millones de pesetas que fija este artículo.

3) Por el art. 3.° de la ley de 14 de Julio de 1891, que más adelante se inserta, se prorrogó la duración del Banco hasta el 31 de Diciembre de 1921.

4) El segundo párrafo de este artículo fué modificado por el art. 1.° de la citada ley de 14 de Julio de 1891.

5) El art. 2.° de la mencionada ley de 14 de Julio de 1891 señala el límite inferior de la cantidad representada por un billete.

	Pesetas
No. 8. For entries made in the book of societies and in that of vessels, which are not comprised in the preceding numbers	5
No. 9. For each note which must be put in the books of the Registry, according to the provisions of the Regulation	1
No. 10. For transferring each entry from one modern Register to another	1
No. 11. For showing a section of any of the books	1
No. 12. For a literal certificate of each entry, the fourth part of what would be due for an entry.	
No. 13. For a summarised certificate of each entry, the eigth part of what would be due for an entry.	
No. 14. For showing each document of the official quotation on Exchange	1
No. 15. For the certificate of each document of quotation	1
No. 16. For every negative certificate	1
No. 17. For the custody of books, as in art. 99 of the Code of Commerce, for each book	5

The Bank of Spain.[1]

Royal Decree of 19 March 1874.

Art. 1. The only fiduciary circulation is established by means of a National Bank, in substitution for that at present existing in various provinces by means of Banks of issue, for which purpose the Bank of Spain, founded by the law of 28 January 1856, shall be reorganized with a capital of 100 millions of pesetas, represented by 200 000 transferable shares of 500 pesetas each, without prejudice to increasing it to 150 millions of pesetas when the commercial or other necessities call for it, but on the previous authorisation of the Government[2]).

The duration thereof shall be thirty years[3]).

2. The Bank shall operate in the Peninsula and adjacent Islands as the only bank of issue which is duly authorised and of a National character. It shall have the power of issuing notes to bearer for five times its paid up capital, but must keep in its coffers in cash, bars of gold or silver, the fourth part at least of the amount of the notes in circulation[4]).

3. The notes to bearer, to which the preceding article refers, shall be divided into series of such amounts as the Bank considers expedient for facilitating business; but the largest of the said amounts may not exceed 1000 pesetas[5]).

---

1) The present Banco de España, the only bank of issue which exists in this nation, is the natural heir to the Banco de San Carlos, founded by Letters Patent of 2 June 1782 and liquidated on 9 July 1829 by Letters Patent of tho same date, which founded the new Banco Español de San Fernando on the basis of the 40 millions of reals which was the amount of all the State debts, and with this was merged, on 29 February 1847, the Banco de Isabel II, founded by Royal Decree of 29 January 1844. The Law of 4 May 1849 granted it for the first time the privilege of issuing bank notes; and by the Law of 28 January 1856 its name was changed to that of the Banco de España, which it now bears. By the Royal Decree of 19 March 1874 it was made the only Bank. This powerful institution is governed: by the said Royal Decree (raised to the rank of Law by that of 17 July 1876); by the Law of 14 July 1891, which extended its duration and enlarged the limit of its note issue; by that of 13 May 1902, which reduced this to 1200 millions of pesetas (it having been enlarged by the Law of 9 August 1898, to 2500 millions of pesetas); and by its Constitution and Bye-laws, the former approved by Royal Decree of 10 December 1900 and the latter by another of 5 January 1901.

2) By resolution of the general meeting of shareholders on 17 December 1882, approved by Royal Order of 23 December 1882, the capital of the Bank was increased to the 150 millions of pesetas fixed by this article.

3) By art. 3 of the law of 14 July 1891, which is inserted later, the duration of the Bank was extended to 31 December 1921.

4) The second paragraph of this article was altered by art. 1 of the said law of 14 July 1891.

5) Art. 2 of the said law of 14 July 1891 fixes the lower limit of the amount represented by a bank note.

La falsificación de los billetes será perseguida de oficio con toda actividad y energía como delito público, y castigada con el rigor que las leyes establecen hoy, ó en lo sucesivo puedan establecer.

4. Se declaran desde luego en liquidación todos los Bancos de emisión y descuento que hoy existen en la Península é Islas adyacentes.

En el término de treinta días, á contar desde la publicación de este decreto, optarán los Bancos que en la actualidad existen en provincias por su anexión al de España, pudiendo aportar al mismo el todo ó parte de sus capitales efectivos y fondos de reserva en metálico, en equivalencia de los cuales recibirán acciones del Banco de España á la par, como compensación de la caducidad de sus respectivos privilegios.

5. A los tres meses de la fecha del presente decreto quedarán sin curso legal los billetes de los Bancos de provincia, debiendo las Comisiones liquidadoras de los mismos recoger los billetes que después de este plazo queden en circulación.

A los cuatro meses pasarán al Gobierno las referidas Comisiones estados de liquidación, para proceder en su vista á lo que corresponda.

6. El Banco de España establecerá Sucursales en las plazas más importantes de la Nación, para atender á las necesidades del comercio y á la circulación de los billetes que han de emitirse.

7. Atendiendo á que en la situación por que actualmente atraviesa el país no es posible verificar las traslaciones materiales de fondos con la celeridad que podrá exigir el reembolso de los billetes del Banco de España á su presentación en las Sucursales, se domiciliará, por ahora, en cada una de ellas, la cantidad de billetes que exija la importancia de sus operaciones, los cuales se distinguirán por un sello que indique la Sucursal á que pertenecen.

8. Los billetes no domiciliados podrán ser canjeados en las Sucursales donde se presenten por billetes de las mismas, y éstos por aquéllos, si existieran en ellas de unos y otros el número necesario para atender á la demanda, ó bien serán reembolsados en efectivo con la limitación prudente que exija la situación de fondos de la Sucursal, ínterin la Caja central del Banco pueda proveerla del numerario que sea indispensable para el cambio.

Los billetes domiciliados en las Sucursales serán canjeados en la Caja central por los que no tengan esta circunstancia, ó reembolsados en efectivo.

9. Los billetes del Banco de España serán admitidos en pago de contribuciones, bienes nacionales, derechos de aduanas y demás ingresos establecidos y que en lo sucesivo se establezcan.

10. El Banco de España se ocupará en descontar, girar, prestar, llevar cuentas corrientes, ejecutar cobros, recibir depósitos voluntarios, necesarios y judiciales, cuando así se disponga[1]), así como en contratar con el Gobierno y sus dependencias debidamente autorizadas, sin que quede nunca en descubierto con arreglo á sus Estatutos.

El premio, condiciones y garantías de dichas operaciones serán los que determina el Reglamento por que en la actualidad se rige el Banco de España.

11. No podrá el Banco hacer préstamos sobre sus propias acciones, ni anticipar al Tesoro sin garantías sólidas y de fácil realización. Tampoco podrá negociar en efectos públicos.

12. El Banco Nacional tendrá un fondo de reserva equivalente al 10 por 100 de su capital efectivo, formado de los beneficios líquidos que produzcan sus operaciones, con deducción del interés anual del capital, que en ningún caso podrá exceder del 6 por 100.

13. Los beneficios que resulten después de satisfechos los gastos é intereses se aplicarán por mitad á los accionistas y al fondo de reserva, hasta que éste se complete, en cuyo caso se repartirán aquéllos íntegros á los mismos.

[1]) Autorizada la admisión por la siguiente orden del Poder Ejecutivo de la República: «Ministerio de Hacienda. — En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 del decreto de 19 del actual, el Poder Ejecutivo de la República ha acordado autorizar al Banco de España para que, en su carácter de Banco Nacional, pueda recibir depósitos voluntarios, necesarios y judiciales. — Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de Marzo de 1874. — *Echegaray.* — Sr. Gobernador del Banco de España.»

The forgery of bank notes shall be officially prosecuted with all activity and energy as a public crime, and punished with the rigour which the laws now enact or may subsequently enact.

4. All issue and discount Banks which now exist in the Peninsula and the adjacent Islands are declared to be forthwith liquidated.

Within the term of thirty days, reckoned from the publication of this decree, the Banks which are at present in existence in the provinces which shall elect for their annexation to that of Spain, and bring thereto the whole or part of their paid up capitals and cash reserves, shall receive the equivalent thereof in shares of the Bank of Spain at par, as compensation for the lapse of their respective privileges.

5. At three months from the date of the present decree the notes of the provincial Banks shall no longer be current and the liquidating committees thereof must collect the notes which thereafter remain in circulation.

At four months the said committees shall hand to the Government the statements of the liquidation, in order that on inspecting the same it may take the corresponding measures.

6. The Bank of Spain shall establish Branches in the most important places of the Nation, to answer the necessities of commerce and the circulation of the notes which they have to issue.

7. Considering that the situation through which the country is now passing make it not possible to effect the material transfer of funds with the quickness required for the payment of the notes of the Bank of Spain on their presentment at the Branches, henceforth the amount of bank notes which the importance of its operations demands shall be domiciled in each of them, and they shall be distinguished by a stamp indicating the Branch to which they belong.

8. Undomiciled notes may be changed at the Branches where they are presented for the notes thereof, and the latter for the former, if the number of each of them necessary to answer the demand is present therein, or they shall be cashed within such limits of prudence as is required by the position of the funds in the Branch, until the head-quarters of the Bank can provide it with the indispensable cash for the exchange.

The notes which are domiciled in the Branches shall be changed at the Headquarters of the Bank for those which are not so domiciled, or shall be cashed.

9. Notes of the Bank of Spain shall be allowed in payment for taxes, state property, customs dues and other income now established or which may be established in future.

10. The Bank of Spain shall be engaged in discounting, negotiating bills, lending, keeping current accounts, collecting, receiving voluntary, obligatory and judicial deposits, when it is so ordered [1]), as well as contracting with the Government and its duly authorised departments, without ever being overdrawn in accordance with its Constitution.

The price, conditions and guarantees of the said operations shall be those determined in the Regulation by which the Bank of Spain is at present governed.

11. The Bank cannot make loans on its own shares, nor make advances to the Treasury without guarantees which are both substantial and easily realisable. Nor can it trade in public securities.

12. The National Bank shall have a reserve fund equal to 10 per cent of its paid up capital, formed of the net profits produced by its operations after deducting the annual interest on the capital, which in no case may exceed 6 per cent.

13. Half the resulting profits after paying the expenses and interest shall be applied to the shareholders and the reserve fund, until the latter is completed, in which case they shall be wholly divided between the shareholders.

---

[1]) Admission was authorised by the following order of the Executive Power of the Republic: "Chancellor of the Exchequer. — In fulfilment of the provisions of art. 10 of the decree of the 19 instant, the Executive Power of the Republic has authorised the Bank of Spain, to receive, as the National Bank, voluntary, obligatory and judicial deposits". — I state this to your Excellency for your information and the effects which follow. God preserve your Excellency for many years. Madrid 24 March 1874. — Echegaray. — To the Governor of the Bank of Spain."

14. Podrá el Banco, si lo juzga conveniente, constituir desde luego la reserva á que se refiere el artículo anterior, á cuyo fin, tomando por base la que en el día tiene, completará la que corresponda al aumento del capital, cediendo las nuevas acciones que emita, ya con destino á sus accionistas, ya á los de los Bancos que se fusionen, por las cantidades que aporten al fusionarse, con un recargo de 10 por 100 sobre su valor representativo, á fin de poner dichas acciones en condiciones iguales á las que hoy existen en circulación.

15. En los casos de robo ó malversación de los fondos del Banco, serán éstos considerados para todos sus efectos como caudales públicos.

16. Continúan vigentes, en la parte que hace relación al Banco, los arts. 11, 12, 13 y 18 al 23 inclusive de la referida ley de 28 de Enero, así como los Estatutos y Reglamento del Banco de España en cuanto no se opongan á lo preceptuado en este decreto.

17. Como compensación de las facultades concedidas al Banco de España por aumento de capital y de emisión, prolongación de su privilegio y fusión de los Bancos de provincia, anticipará el mismo al Tesoro 125 millones de pesetas.

Los plazos en que haya de ser entregado este anticipo, así como los en que habrá de reintegrarse, interés que devengará y la clase de garantía que han de quedar afectos al mismo, serán objeto de un convenio especial entre el Ministerio de Hacienda y el Banco.

18. Quedan derogadas las leyes y disposiciones que se opongan á este decreto.

Dado en Somorrostro á diez y nueve de Marzo de mil ochocientos setenta y cuatro. — *Francisco Serrano.* — El Ministro de Hacienda, *José Echegaray.*

Ley de 14 de Julio de 1891.

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España, y en su nombre, y durante su menor edad, la Reina Regente del Reino; á todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Art. 1. El Banco de España podrá emitir billetes al portador hasta la suma de mil quinientos millones de pesetas, siempre que conserve en sus Cajas, en metálico, barras de oro ó plata, la tercera parte, cuando menos, del importe de los billetes en circulación, y la mitad de esa tercera parte precisamente en oro.

2. El límite inferior de la cantidad representada por un billete será de veinticinco pesetas.

3. Se prorroga la duración del Banco Nacional de España, que establece el decreto-ley de 19 de Marzo de 1874, hasta el 31 de Diciembre de 1921.

4. En compensación de estas concesiones, el Banco de España anticipará al Tesoro público ciento cincuenta millones de pesetas, por los que no cobrará interés ni tendrá derecho al reintegro hasta el 31 de Diciembre de 1921, en cuyo día serán reembolsados.

El Ministro de Hacienda dispondrá de este anticipo, con arreglo á las leyes y á las necesidades del Tesoro, en los siguientes plazos: De cincuenta millones de pesetas, desde 1.° de Julio de 1891; — De otros cincuenta, desde 1.° de Julio de 1892: — De los cincuenta restantes, desde igual día de 1893.

5. El importe de los billetes en circulación, unido á la suma representada por los depósitos en efectivo y las cuentas corrientes, no podrá exceder en ningún caso del importe de las existencias en metálico, barras de oro ó plata, pólizas de préstamos y créditos con garantía, con arreglo á los Estatutos, y efectos descontados realizables en el plazo máximo de noventa días. Seguirán considerándose como hasta aquí, entre los valores enumerados en el párrafo anterior, los títulos de la Deuda pública del Estado del 4 por 100 amortizable, así como las acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos y los pagarés del Tesoro endosados por la misma, que tuvieron origen en la ley de 22 de Abril de 1887; y las letras y pagarés del Tesoro, representativos de la Deuda flotante, emitidos en cumplimiento de la ley de 13 de Junio de 1888.

6. El Banco, de acuerdo con el Gobierno, creará Sucursales ó Cajas subalternas en los puntos en que lo requieran las necesidades del comercio y de la industria.

14. If it thinks fit, the Bank may forthwith form the reserve referred to in the previous article, for which purpose, taking as a basis that which it has on the day, it shall complete that which corresponds to the increase of capital, allotting the new shares to be issued, whether to its own shareholders, or to those of the Banks which are amalgamated, for the amounts which they bring in on the amalgamation, with a tax of 10 per cent on the nominal value, with the object of putting the said shares on equal terms with those which are already issued.

15. In the event of robbery or malversation of the funds of the Bank, they shall be considered for all purposes as public funds.

16. Articles 11, 12, 13 and 18 to 23 (inclusive) of the said Law of 28 January continue in force so far as they relate to the Bank, as also the Constitution and Regulation of the Bank of Spain so far as they are not inconsistent with the provisions of this decree.

17. In consideration of the powers granted to the Bank of Spain for increasing its capital and issue, for extension of its privileges and amalgamation of the provincial Banks, it shall advance the Treasury 125 millions of pesetas.

The instalments by which this advance is to be paid, and those for its repayment, the interest and the kind of security which is to be affected thereto, shall be the subject of a special agreement between the Chancellor of the Exchequer and the Bank.

18. The laws and provisions which are inconsistent with this decree are repealed.

Given at Somorrostro 19 March 1874. — *Francisco Serrano.* — Chancellor of the Exchequer, *José Echegaray.*

Law of 14 July 1891.

Don Alfonso XIII king of Spain, by the Grace of God and the Constitution, and the Queen Regent of the Realm in his name and during his minority; to all those who see and understand these presents, know ye: that the Cortes have decreed and we have sanctioned, as follows:

Art. **1.** The Bank of Spain may issue notes to bearer to the sum of one thousand five hundred millions of pesetas, provided that it keeps in its coffers, in cash, bars of gold or silver, at least the third part of the amount of the notes in circulation, and half of that third part must be in gold.

2. The smallest limit of the amount represented by a bank note shall be twenty five pesetas.

3. The duration of the National Bank of Spain, established by the Decree Law of 19 March 1874, is extended to 31 December 1921.

4. In consideration of these concessions, the Bank of Spain shall advance one hundred and fifty millions of pesetas to the Public Treasury, on which it shall not recover interest nor be entitled to repayment until 31 December 1921, on which day it shall be repaid.

The Chancellor of the Exchequer shall expend this advance according to the laws and the necessities of the Treasury, in the following times: Fifty millions of pesetas, from 1 July 1891; — A further fifty, from 1 July 1892; — The remaining fifty, from the same day in 1893.

5. The amount of the notes in circulation, combined with the sums represented by cash deposits and current accounts, may not in any case exceed the amount of the existing cash, bars of gold or silver, contracts of loan and credits guaranteed, according to the statutes, and discounted paper realisable in the maximum time of ninety days. The following shall continue to be considered, as up to now, among the securities enumerated in the preceding paragraph: the securities of the public amortisable 4% State Debt, as well as the shares of the Tobacco Monopoly Company and the Treasury notes endorsed by the same company, which originated in the law of 22 April 1887; and Treasury bills and notes, representing the floating Debt, issued in pursuance of the law of 13 June 1888.

6. The Bank, with the consent of the Government, shall create Branches or subordinate *Cajas* where the necessities of commerce and industry require it.

7. El Banco podrá prestar sobre cédulas hipotecarias, obligaciones de ferrocarriles y otros valores industriales ó comerciales, con las formalidades y condiciones que prevengan sus Estatutos.

8. Quedan modificados, en los términos prescritos por los anteriores artículos, el párrafo segundo del art. 1.°, el segundo del art. 2.° y el párrafo primero del art. 3.° del decreto-ley de 19 de Marzo de 1874.

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á catorce de Julio de mil ochocientos noventa y uno. — Yo La Reina Regente. — El Ministro de Hacienda, *Fernando Cos-Gayón.*

Ley de 13 de Mayo de 1902.

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed; que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Art. 1. El Tesoro público reintegrará al Banco de España, en el plazo máximo de diez años, que, empezando á contarse desde la publicación de esta ley, no podrá exceder del 31 de Diciembre de 1911, el importe de los créditos de dicho establecimiento, procedentes de la Deuda flotante de Ultramar, representados en su Cartera por pagarés del Tesoro.

Se destinan á realizar dicho reembolso: 1.° El valor efectivo de la Deuda pública á emitir, según el art. 4 de la ley de 2 de Agosto de 1899, después de convertir las obligaciones del Tesoro ya emitidas; — 2.° Los recursos especiales ó emisiones de Deuda que autoricen las Cortes; — 3.° Los excedentes líquidos y disponibles que ofrezcan los presupuestos del Estado, salvo lo que determina el art. 5 de la ley de 29 de Mayo de 1882.

2. El Tesoro público no podrá tomar del Banco de España otros préstamos ó anticipos que los previstos y autorizados en el convenio-ley de Tesorería del Estado de 31 de Diciembre de 1901 ó en otra ley especial.

3. El importe máximo de emisión de billetes del Banco de España, garantizado por una reserva metálica de la tercera parte, y de esta suma la mitad en oro, autorizado por el art. 1 de la ley de 14 de Julio de 1891, se reduce á 1.200 millones de pesetas.

El exceso de circulación de billetes sobre dicha cantidad hasta el límite de 2.000 millones fijado en la ley y en el convenio de 2 de Agosto de 1899, habrá de estar garantizado en la forma siguiente:

Desde 1.200 á 1.500 millones, el 40 por 100 por lo menos del exceso, en oro; y el resto, hasta completar el 60 por 100, en plata.

De 1.500 á 2.000 millones, el 50 por 100 por lo menos del exceso, en oro; y el resto, hasta el 70 por 100, en plata.

4. El importe de los billetes en circulación del Banco de España, unido á la cantidad representada por depósitos en efectivo y cuentas corrientes, no podrá exceder en ningún caso del valor de las existencias en metálico, pólizas de préstamos, créditos con garantía estatutaria y efectos descontados realizables en el plazo máximo de noventa días.

Hasta que el Banco quede reintegrado de los créditos á que se refiere el art. 1, se computarán los pendientes de reembolso en su cartera para los efectos del párrafo anterior. Igualmente seguirá computándose con el mismo objeto el valor efectivo de los títulos de la Deuda perpetua interior al 4 por 100; pero desde 1.° de Enero de 1903 se reducirá cada año para aquel cómputo una décima parte.

5. El Banco de España entregará al Tesoro público el importe de los billetes al portador emitidos con posterioridad al decreto-ley de 19 de Marzo de 1874, correspondientes á series retiradas ó que se retiren de la circulación y no hayan sido presentados ó no se presenten al cobro dentro de los diez años siguientes al acuerdo de su retirada de la circulación. El importe de dichos billetes dejará de figurar en el pasivo del Banco; pero éste abonará por cuenta del Tesoro los que ulteriormente se presenten al cobro.

7. The Bank may lend on mortgage cedulas, railroad bonds and other industrial or commercial securities, with the formalities and conditions prescribed by its Constitution.

8. The second paragraph of art. 1, the second of art. 2 and the first paragraph of art. 3 of the Decree Law of 19 March 1874 are amended in the terms provided by the preceding articles.

Therefore we command all Tribunals, Justices, Chiefs, Governors and other authorities, civilian, military and ecclesiastic, of every kind and dignity, to keep and cause to be kept, to perform and carry out this present law in all its parts.

Given at the Palace, 14 July 1891. — I The Queen Regent. — Chancellor of the Exchequer, *Fernando Cos-Gayón.*

Law of 13 May 1902.

Don Alphonso XIII, King of Spain by the Grace of God and the Constitution, and the Queen Regent of the Realm in his name and during his minority; to all who shall see and understand these presents, know ye; that the Cortes have decreed and we have sanctioned, as follows:

Art. 1. The Public Treasury shall repay to the Bank of Spain, within the maximum term of ten years, which, reckoning from the publication of this law may not extend beyond 31 December 1911, the amount of the credits of the said establishment arising from the Oversea floating Debt, represented in its Portfolio by Treasury notes.

The following funds are appointed to meet the said repayment: 1. The actual value of the Public Debt to be issued according to art. 4 of the law of 2 August 1899, after the conversion of the Treasury bonds which are already issued; — 2. The special resources or issues of Debt, authorised by the Cortes; — 3. The net and disposable surpluses shown by the State budgets, except as determined by Art. 5 of the law of 29 May 1882.

2. The Public Treasury may not borrow from the Bank of Spain any other loans or advances than those provided and authorised by the convention-law of the State Treasury of 31 December 1901 or other special law.

3. The maximum amount of issue of notes of the Bank of Spain, guaranteed by a metallic reserve of one third part, and of this sum, one half in gold, is reduced to 1200 millions of pesetas.

The excess circulation of notes over the said amount up to the limit of 2000 millions of pesetas fixed by the law and in the convention of 2 August 1899, must be guaranteed in the following way: From 1200 to 1500, at least 40 per cent. of the excess in gold; and the remaining 60 per cent. in silver. — From 1500 to 2000 millions, at least 50 per cent. of the excess in gold; and up to 70 per cent of the remainder in silver.

4. The amount of notes of the Bank of Spain in circulation, combined with the amount represented by cash deposits and current accounts, may in no case exceed the value of the existing cash, contracts of loan, credits with Statutory guarantee and discounted paper realisable within the maximum time of ninety days.

Until the Bank is repaid the credits referred to in art. 1, the unpaid credits in its portfolio shall be reckoned for the purposes of the preceding paragraph. The actual value of the securities of the Perpetual Internal 4% Debt shall likewise continue to be reckoned for the same purpose; but from 1 January 1903 it shall be reduced each year by a tenth part for the purpose of that computation.

5. The Bank of Spain shall pay to the Public Treasury the amount of the bearer notes issued after the decree-law of 19 March 1874, belonging to series which have been retired or which are being retired from circulation and have not been presented or may not be presented within the ten years following the agreement for their retirement from circulation. The amount of the said notes shall cease to figure among the liabilities of the Bank; but the latter shall pay those which are afterwards presented for collection on account of the Treasury.

6. El Gobierno concertará con el Banco de España: 1.° La reducción del interés de los pagarés á noventa días, cuya forma de reintegro se establece en el art. 1 de esta ley; — 2.° El plazo y forma en que el Banco debe constituir las reservas metálicas exigidas por el art. 3; — 3.° Los medios más eficaces y prácticos para auxiliar al comercio, á la industria y á la agricultura, y difundir el crédito industrial y agrícola, obteniendo del Banco de España que, en las mismas condiciones que hoy descuenta los efectos del comercio, descuente también las letras, pólizas y otros efectos suscritos por las Asociaciones sindicales, agrícolas é industriales, Instituciones de crédito agrícola y Cajas rurales de reconocida solvencia; — 4.° El establecimiento ó creación de cuentas corrientes en oro, dando á los interesados valores que puedan ser entregados en pago de los impuestos que deban satisfacerse en dicho metal; — 5.° La ampliación del número de Sucursales y establecimiento de Cajas subalternas; — 6.° El procedimiento por virtud del cual se fijará por el Consejo de gobierno del Banco, con aprobación del Ministro de Hacienda, el interés de los préstamos sobre efectos públicos.

7. El Gobierno concertará igualmente con el Banco de España la enajenación por éste de los títulos de la Deuda pública al 4 por 100 y de los valores de la Compañía Arrendataria de Tabacos que obran en su cartera, y de cualquiera otro de esta misma clase, á fin de que aquéllos se compongan exclusivamente de los efectos que representan los préstamos y descuentos hechos á particulares al plazo de noventa días.

La enajenación á que se refiere el párrafo anterior no podrá exigirse hasta que el Banco quede reintegrado de los créditos que se expresan en el art. 1.

8. El Banco de España podrá encargarse, mediante convenios especiales con el Ministro de Hacienda, de la negociación, por cuenta del Tesoro, de valores del mismo ó del Estado, y del pago de los intereses y amortización; pero no podrá interesarse en aquellas operaciones ni negociar en efectos públicos.

9. La plata que exista como reserva en garantía de la circulación de billetes, será en moneda de curso legal en España: El oro podrá ser: en moneda española, por su valor nominal; en moneda extranjera de oro, por su valor á la par monetaria; y en barras, á razón de 3.444 pesetas 44 céntimos por kilogramo de oro fino. Los billetes que se entreguen á la circulación serán siempre nuevos, inutilizándose para este efecto, inmediata y sucesivamente, cuantos no lo sean.

10. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de la presente ley, salvo las contenidas en la ley de 28 de Noviembre de 1901.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á trece de Mayo de mil novecientos dos. — *Yo La Reina Regente.* — El Ministro de Hacienda, *Tirso Rodrigáñez.*

Banco Hipotecario de España.

Ley de 2 de Diciembre de 1872.

Don Amadeo I, por la gracia de Dios y la voluntad nacional Rey de España: A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Art. **1.** Durante cinco años consecutivos, que comprenden diez semestres, y empezarán á contarse desde el que vence en 31 de Diciembre corriente, se abonarán á los portadores de las varias clases de Deuda que especifica el artículo siguiente dos tercios de su interés en metálico y el otro tercio en papel de la Deuda consolidada exterior ó interior al tipo de 50 por 100. Sólo se pagará en Deuda exterior el tercio de interés correspondiente á la Deuda de esta misma clase. El tercio de interés de las otras Deudas se pagará en Deuda interior.

6. The Government shall arrange with the Bank of Spain: 1. The reduction of interest on the promissory notes at ninety days, the form of repayment whereof is settled by art. 1 of this law; — 2. The time and mode in which the Bank must constitute the metallic reserves required by art. 3; — 3. The most efficacious and practical means for aiding commerce, industry and agriculture, and extending industrial and agricultural credit, obtaining from the Bank of Spain that in the same conditions as they now discount commercial paper, they should likewise discount the bills, drafts and other paper signed by syndical, agricultural and industrial associations, agricultural credit institutions and country *Cajas*[1]) of known solvency; — 4. The establishment or creation of current accounts in gold, giving securities to the persons interested, which may be delivered in payment of taxes which have to be paid in that metal; — 5. The extension of the number of Branches and the establishment of subordinate *Cajas*; — 6. The proceeding by virtue of which the interest on the loans on public securities shall be fixed by the governing Board of the Bank with the approbation of the Chancellor of the Exchequer.

7. The Government shall likewise arrange with the Bank of Spain for the sale by the latter of the securities of the 4% Public Debt and those of the Tobacco Monopoly Company in their portfolio, and of any others of the same kind, in order that the former may be composed exclusively of securities which represent loans and discounts made to private persons for the term of ninety days.

The sale to which the previous paragraph refers cannot be required until the Bank has been repaid the credits stated in art. 1.

8. By special agreements with the Chancellor of the Exchequer, the Bank of Spain may take charge of the negotiation, on account of the Treasury, of the securities thereof or of the State, and of the payment of the interest and of the amortisation; but may not have an interest in those operations or trade in public securities.

9. The metal existing as a reserve to guarantee the note circulation, shall be in money of legal currency in Spain: The gold may be: in Spanish coin at its nominal value; in foreign gold coin, at its monetary par value; and in bars, at the rate of 3444 pesetas 44 centimos per kilogram of fine gold. The notes which are put into circulation shall always be new, and those which are not new shall be immediately and successively mutilated with this object.

10. All provisions opposed to the fulfilment of the present law are repealed, saving those contained in the law of 28 November 1901.

Therefore: We command all Tribunals, Justices, Chiefs, Governors and other Authorities, civil, military and ecclesiastic, of every kind and dignity, that they keep and cause to be kept, perform and carry out this law in all its parts.

Given at the Palace, 13 May 1902. — *I The Queen Regent.* — The Chancellor of the Exchequer, *Tirso Rodrigañez.*

Banco Hipotecario de España (Mortgage Bank of Spain).

Law of 2 December 1872.

Don Amadeo I, King of Spain, by the grace of God and the National Will: to all who see and understand these presents, know ye: that the Cortes have decreed and We have sanctioned as follows:

Art. 1. During five consecutive years, comprising ten periods of six months and reckoned from that which expires on the 31st December instant, there shall be paid to the holders of the various classes of Debt specified in the following articles two thirds of their interest in cash and the other third in paper of the consolidated external or internal debt at the rate of 50 per centum. In the external Debt there shall be paid only one third of the interest on the Debt of the same class. The third of the interest on the other Debts shall be paid in internal Debt.

[1]) These are mutual co-operative associations, long established in Spain, and working somewhat on the Raffeisen system (Translator).

2. Están sometidas á las prescripciones de esta ley las clases de Deuda que á continuación se expresan: 1.° La Deuda consolidada al 3 por 100 interior y exterior; — 2.° Las inscripciones intransferibles, cualquiera que sea su aplicación, destino y procedencia; — 3.° Las acciones de carreteras; — 4.° Las acciones de obras públicas emitidas y las que se emitan; — 5.° Las obligaciones del Estado por subvenciones á ferrocarriles; — 6.° La Deuda del material del Tesoro.

3. Los dos tercios que se han de satisfacer en metálico se pagarán en dos mitades iguales al fin de los semestres respectivos. El impuesto del 5 por 100 se exigirá sobre el importe en efectivo que se satisfaga en cada semestre, con sujeción á lo dispuesto en esta ley, exceptuando la Deuda exterior.

4. La entrega de valores en pago del tercio se verificará en cada semestre. Cuando la cantidad á que ascienda el tercio no complete título, se entregará un residuo negociable en Bolsa. Los dueños de estos residuos podrán acumularlos para componer cantidades canjeables por títulos.

5. El pago en metálico de los dos tercios del interés de la Deuda será garantido con el ingreso de los pagarés de compradores de bienes nacionales y con los bienes que restan por vender, deducida la parte necesaria para saldar el descubierto actual del Tesoro. En representación de estos bienes se depositarán en el Banco Hipotecario de España, creado por esta ley, una suma de 150 millones de pesetas en billetes hipotecarios de los que se emitan con arreglo á lo dispuesto en el art. 10, que constituirá la garantía del pago en metálico de los dos tercios de los intereses de la Deuda.

Cada cupón pagado, á contar desde el 31 de Diciembre corriente, libera la décima parte de esta garantía.

6. Pasados los cinco años que fija el art. 1, las Deudas volverán á gozar el interés íntegro.

7. Las Deudas que se han emitido por consecuencia de tratados con potencias extranjeras quedan exceptuadas de este arreglo mientras los títulos que las representan permanezcan en poder de los respectivos Gobiernos, pero quedarán sometidas á él si los dichos títulos han sido ó fueren enajenados.

8. Se autoriza al Gobierno para emitir títulos de la Deuda consolidada exterior é interior en cantidad suficiente para producir 250 millones de pesetas, ó sean 1.000 millones de reales efectivos. La negociación de estos valores se hará en suscripción pública, al tipo fijado previamente por el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros. El producto de esta negociación se destina á saldar la Deuda flotante del Tesoro. Son aceptables en pago de esta emisión, así como de la que se establece en el art. 17, los valores de la Deuda flotante que se trata de consolidar.

9. Los intereses de la Deuda consolidada emitida en virtud de la autorización concedida por el artículo anterior serán pagados, dos tercios en metálico y un tercio en papel, durante el período de cinco años, como toda la Deuda de España.

10. Además de la emisión que dispone el art. 8, el Gobierno creará en cantidad de 300 millones de pesetas billetes hipotecarios al portador de 500 pesetas cada uno, con interés anual de 6 por 100, satisfecho por semestres vencidos en 31 de Diciembre y 30 de Junio de cada año, á contar desde 1.° de Enero de 1873.

11. Los bienes nacionales pendientes de venta y los pagarés de compradores de estos mismos bienes, deducidos los que están afectos al pago de Deudas especiales, servirán de garantía para el pago en metálico de las dos terceras partes de intereses de la Deuda exterior é interior, y para la emisión de billetes hipotecarios en la parte que se destina á saldar los descubiertos del Tesoro.

12. Los intereses de los billetes hipotecarios se comprenderán en los presupuestos generales del Estado, y serán satisfechos con cargo al mismo. La amortización se verificará con el ingreso de los pagarés disponibles en el día y con el producto de los bienes nacionales que se enajenen.

13. Se crea en Madrid un Banco de crédito territorial con el título de Banco Hipotecario de España; su capital será de 50 millones de pesetas dividido en 100.000 acciones de 500 pesetas cada una, que se emitirán con desembolso de 40 por 100. El Banco podrá aumentar su capital á 150 millones de pesetas.

La duración de la Sociedad será de 99 años.

14. Se autoriza al Gobierno para conceder al Banco de París y de los Países Bajos la facultad de crear el Banco Hipotecario de España á que se refiere el artí-

2. The following classes of Debt are subjected to the provisions of this law: 1. The Consolidated 3 per centum internal and external Debt; — 2. Non-transferable inscribed Debt, whatever be their application, destination and issue; — 3. Shares of the Cartroads; — 4. Shares of public works, issued or which may be issued; — 5. State bonds for subventions to Railways; — Debt for the material supplied to the Treasury.

3. The two thirds which are to be paid in cash shall be paid in two equal halves at the end of the respective six months. The tax of 5 per centum shall be demanded on the amount which is paid in cash each six months, as provided by this law, excepting the external Debt.

4. The delivery of securities in payment of the one third shall take place each six months. When the amount of the third does not complete a security, there shall be delivered a fraction negotiable on Exchange. The owners of these fractions may accumulate them in order to form amounts exchangeable for securities.

5. The payment in cash of the two thirds of the interest of the debt shall be guaranteed by the receipt of the promissory notes of the purchasers of national property and by the property remaining to be sold, after deducting the part necessary to liquidate the present overdraft of the Treasury. As representing this property, there shall be deposited in the Banco Hipotecario de España, created by this law, a sum of 150 Millions of pesetas in mortgage notes of those issued in accordance with the provisions of art. 10, which shall form the guarantee for the payment in cash of the two thirds of the interest of the Debt.

Each paid coupon, reckoned from the 31st of December instant, frees the tenth part of this guarantee.

6. At the end of the five years fixed by art. 1, the Debts shall again earn the entire interest.

7. Debts which have been issued in consequence of treaties with foreign powers are excepted from this arrangement, so long as the securities which represent them remain in the control of the respective Governments, but shall be subjected thereto, if the said securities have been or shall be alienated.

8. The Government is authorised to issue securities of the consolidated external and internal debt to an amount sufficient to produce 250 millions of pesetas, that is to say 1 000 millions of reals cash. The issue of these securities shall be made on public subscription, at a price previously fixed by the Chancellor of the Exchequer in agreement with the Cabinet. The proceeds of the issue are destined to pay the floating Debt af the Treasury. Securities of the floating Debt which it is proposed to consolidate are receivable in payment of this issue as well as of that enacted in art. 17.

9. The interest on the consolidated Debt, issued under the authorisation granted by the preceding article shall be paid, as to two thirds in cash and as to one third in paper, during the period of five years, like the whole Debt of Spain.

10. Besides the issue provided for by art. 8 the Government shall create mortgage notes to bearer of 500 pesetas each to the amount of 300 millions of pesetas with annual interest at the rate of 6 per cent, payable at the end of the six months terminating on the 31st December and the 30th June in each year, reckoned from 1 January 1873.

11. The national property awaiting sale and the promissory notes of the purchasers thereof, after deducting those which are subject to the payment of special Debts, shall form a security for the payment in cash of the two third parts of the interest on the external and internal Debt, and for the issue of mortgage notes appropriated to pay the overdraft of the Treasury.

12. The interest on the mortgage notes shall be included in the general budgets of the State, and shall be paid at the charge thereof. Redemption shall be effected with the income of the promissory notes in the portfolio on the day and with the produce of the national property which may be sold.

13. A bank of territorial credit, with the title of Banco Hipotecario de España, is hereby founded in Madrid; its capital shall be 50 millions of pesetas divided into 100 000 shares of 500 pesetas each, which shall be issued on a payment of 40 per cent. The Bank may increase its capital to 150 millions of pesetas.

The duration of the company shall be 99 years.

14. The Government is authorised to grant to the Bank of Paris and of the Netherlands the power to found the Banco Hipotecario de España to which the

culo anterior, y su constitución definitiva habrá de realizarse dentro de los tres meses siguientes á la fecha de la concesión. Para constituirse habrá de tener en Caja el importe efectivo del 25 por 100 del capital social[1]).

15. El Gobierno entregará al Banco Hipotecario:

Los pagarés de bienes nacionales, deducidos los que estén afectos al pago de Deudas especiales.

Inventario de los bienes que deben enajenarse con arreglo á las leyes. Quedan exceptuadas las minas de Ríotinto y Almadén y las salinas de Torrevieja.

Los plazos al contado serán cobrados por el Banco, y también los pagarés de los vencimientos sucesivos, á cuyo efecto le serán entregados á medida que se verifiquen las ventas.

Los ingresos que produzcan los pagarés y la venta de bienes se destinan exclusivamente á la amortización de los billetes hipotecarios creados por esta ley.

El Banco Hipotecario cobrará los pagarés á su vencimiento y los plazos al contado, mediante una comisión de 1¼ por 100 por los cobrables y 1 por 100 por los incobrables, conforme lo verifica el Banco de España por los billetes hipotecarios de la primera serie.

Las sumas ingresadas de este modo se destinarán en 31 de Diciembre de cada año á la amortización por sorteo de los billetes hipotecarios.

El Banco hará el abono de los intereses al respecto de un 6 por 100 correspondientes á las sumas que por importe de los bienes nacionales haya cobrado y conservado en su poder hasta que se inviertan en la amortización de los billetes hipotecarios.

16. El Estado se reserva el derecho de venta. El Banco podrá ejercer la investigación con los mismos derechos señalados á los investigadores; podrá pedir la venta en subasta pública de cualquier finca.

17. Los 150 millones de pesetas en billetes hipotecarios que se aplican á saldar los descubiertos del Tesoro se negociarán en suscripción pública, al tipo previamente fijado por el Gobierno, abierta por el Banco Hipotecario en Madrid y en el extranjero, si el Gobierno lo acordare, mediante una comisión de 1¼ por 100 sobre el efectivo.

El Banco podrá quedarse con la mitad de la emisión al tipo que el Gobierno fije.

El Banco hará las emisiones sucesivas con las mismas condiciones.

18. La suscripción que el Gobierno recibiere directamente en sus dependencias de España no devengará premio alguno por comisión.

19. El Banco Hipotecario, y en su representación el de París y los Países Bajos, anticiparán al Gobierno con garantía de los productos de esta negociación y por el plazo de tres meses una suma de 100 millones de pesetas, con el interés anual de 10 por 100 en el caso de que se haya reintegrado de sus préstamos al Tesoro español; en otro caso los préstamos no reembolsados se entenderán á cuenta de este anticipo.

20. En el caso de que los pagarés disponibles entregados al Banco no sean suficientes para cubrir la emisión de 300 millones de pesetas en billetes hipotecarios, el Gobierno entregará los bonos del Tesoro existentes en cartera para cubrir el resto, y serán retirados á medida que se complete la garantía en pagarés.

21. El Banco Hipotecario será dirigido por un Gobernador libremente elegido por el Gobierno;

Tres Subgobernadores nombrados por el Gobierno á propuesta del Consejo de administración;

Un Consejo de administración elegido por los accionistas, compuesto de 12 Consejeros (mínimum) y 24 (máximum).

El Gobernador y dos Subgobernadores serán precisamente españoles. Las dos terceras partes de los Consejeros serán españoles también.

Estos cargos de Gobernador, Subgobernador y Consejero, como cualquiera otro de sus sucursales de provincias, no podrán ser desempeñados por individuos que formen parte del actual Congreso ó Senado.

El primer Consejo de administración durará tres años, y será designado por los fundadores. Se renovará saliendo tres Consejeros cada año, designados por la suerte, hasta la completa renovación, y por antigüedad después, eligiendo su reemplazo la Junta general de accionistas.

Los Consejeros salientes son reelegibles.

[1]) Vease, á continuación de la Ley, lo dispuesto por el Real Decreto de 31 de Enero de 1873.

preceding article refers, and its final formation must take place within the three months following the date of the grant. In order to form it, the amount of 25 per cent of the social capital must be in its coffers in cash[1]).

15. The Government shall deliver to the Banco Hipotecario: The promissory notes for national property, deducting those subject to the payment of special Debts.

The inventory of the property which is to be sold according to the laws. The mines of Rio Tinto and Almadén and the salt-pits of Torrevieja are excepted.

The cash instalments shall be received by the Bank, and likewise the promissory notes at their successive maturities, for which purpose they shall be delivered according as the sales take place.

The income produced by the promissory notes and the sale of property is appropriated exclusively to the redemption of the mortgage notes created by this law.

The Banco Hipotecario shall collect the promissory notes at their maturity and the cash instalments, for a commission of 1¼ per cent. for the recoverable and 1 per cent. for the irrecoverable, as is done by the Banco de España for the mortgage notes of the first series.

The sums paid in in this way shall be appropriated on 31 December of each year to the redemption of the mortgage notes by lot.

The Bank shall pay interest at the rate of six per cent. on the sums which it has collected and retained in its control as the amount of the national property, until they are applied to the redemption of the mortgage notes.

16. The State reserves the right of sale. The Bank may carry out the inspection with the same rights as are set out for the inspectors; and may apply for the sale by public auction of any estate.

17. The 150 millions of pesetas in mortgage notes which are applied to meet the overdraft of the Treasury shall be disposed of by public subscription, at the price previously fixed by the Government, opened by the Banco Hipotecario in Madrid and abroad, if the Government so decides, at a commission of 1¼ per cent. on the cash.

The Bank may retain half of the issue at the price fixed by the Government.

The Bank shall make the successive issues with the same conditions.

18. No commission shall be due for any subscription which the Government may directly receive in its Spanish dependencies.

19. The Banco Hipotecario, and as representative thereof, the Bank of Paris and the Netherlands, shall advance the Government on the security of the produce of this transaction and for the term of three months the sum of 100 millions of pesetas, with annual interest of ten per cent. in case it is repaid its loans to the Spanish Treasury; otherwise the unpaid loans shall be understood as on account of this payment in advance.

20. In case the promissory notes in the portfolio delivered to the Bank, are not sufficient to cover the issue of 300 million pesetas in mortgage notes, the Government shall deliver existing Treasury bonds to cover the rest, and they shall be withdrawn as the guarantee in promissory notes is completed.

21. The Banco Hipotecario shall be directed by a Governor chosen by the Government: Three sub-governors appointed by the Government on the nomination of the Council of Administration. — A Council of administration chosen by the shareholders, and composed of from 12 to 24 Councillors.

The Governor and two sub-governors must be Spaniards. Two thirds of the Councillors shall also be Spaniards.

These offices of Governor, Sub-governor and Councillor, and the like as regards the Provincial branches, may not be discharged by persons who form part of the Congress or Senate at the time.

The first Council of Administration shall last three years, and shall be appointed by the founders. It shall be renewed by three Councillors, chosen by lot, retiring in each year, until the renewal is complete, and afterwards by seniority, and persons to replace them shall be chosen by the general meeting of Shareholders.

Retiring Councillors shall be re-eligible.

---

[1]) See, in continuation of the Law, the provisions of the Royal Decree of 31 January 1873.

22. El Banco tendrá su domicilio social en Madrid, con la facultad de crear sucursales en las provincias y representaciones en el extranjero.

El Banco podrá usar como sello y escudo las armas de España con el lema Banco Hipotecario de España.

23. Las operaciones del Banco Hipotecario serán: 1.° Prestar con primera hipoteca de bienes inmuebles, cuya propiedad esté inscrita en el Registro de la propiedad, suma equivalente á la mitad á lo más de su valor en tasación, reembolsable á largo plazo por anualidades ó semestres, ó á corto plazo con amortización ó sin ella. Se considerará también como primera hipoteca la que garantice un préstamo por cuyo medio queden reembolsados y extinguidos los créditos anteriores inscritos que graven la finca hipotecada; — 2.° Adquirir créditos asegurados con hipoteca ya existente, que tengan las condiciones expresadas en el número anterior; — 3.° Prestar á las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, legalmente autorizados para contraer empréstitos, las sumas que permita su respectiva autorización, aunque sea sin hipoteca, siempre que esté asegurado su reembolso y el pago de los intereses con un recargo ó impuesto especial ó recurso permanente que figure en el respectivo presupuesto; — 4.° Adquirir ó descontar créditos contra provincias ó pueblos, siempre que reunan todas las condiciones expresadas en el número anterior; — 5.° Hacer préstamos al Tesoro; — 6.° Emitir, en virtud de las operaciones ya enumeradas y hasta el importe de las cantidades prestadas, cédulas hipotecarias ú otras obligaciones reembolsables en épocas fijas ó por vía de sorteo. Podrán concederse á estos títulos primas ó premios, pagaderos en el momento del reembolso; — 7.° Negociar las mencionadas cédulas hipotecarias ú obligaciones, y prestar sobre estos títulos.

El capital social se destinará preferentemente á las operaciones ya indicadas.

24. El Banco queda igualmente autorizado: 1.° A recibir en depósito toda clase de valores en papel y metálico, y llevar cuentas corrientes por el importe total de aquéllos, consignados en libretas talonarias destinadas á este uso; — 2.° A emplear los fondos que se consignen en cuenta corriente, en préstamos, bien sobre sus propias cédulas hipotecarias ú obligaciones, ó bien sobre títulos del Estado, y en el descuento de letras de cambio; — 3.° A encargarse por cuenta del Estado de la recaudación de las contribuciones directas y del movimiento de fondos que reclame este servicio; — 4.° A tomar en arrendamiento ó administración propiedades ó establecimientos pertenecientes al Estado, provincias, pueblos, corporaciones ó particulares.

25. El Banco podrá, finalmente, hacer todas las operaciones comerciales que tengan por objeto el fomento de la agricultura ó de la industria minera, ó la construcción de edificios, abriendo para ello créditos á las Sociedades, autorizadas por el Gobierno para cualquiera de estos objetos, ó á las corporaciones ó sindicatos legalmente autorizados, pero siempre sobre hipoteca, prendas pretorias ó cualquier otra garantía de segura realización.

La forma y condiciones de la intervención del Banco en estas operaciones se determinarán ulteriormente por el Consejo de administración.

26. La suma total de cédulas hipotecarias en circulación no excederá del importe de los préstamos hipotecarios; el de las obligaciones especiales no excederá tampoco del de aquellos préstamos por cuya razón se emitan.

27. El Banco Hipotecario percibirá anualmente de sus deudores: 1.° Por intereses un tanto por 100 igual al que abone por los de las obligaciones ó cédulas que emita en razón de cada préstamo; — 2.° Por comisión y gastos, una cantidad que no exceda de 60 céntimos por 100 al año. El Gobierno podrá aumentar esta cantidad á petición del Banco y oyendo al Consejo de Estado cuando hubiere justa causa; — 3.° Por amortización, la cantidad que corresponda según el número de años en que haya de verificarse.

28. Los deudores al Banco Hipotecario podrán reembolsar en cualquier tiempo el capital que deban, ó alguna parte de él, siempre que la suma que reembolsen sea un múltiplo exacto de 250 pesetas y con las demás condiciones que establezcan los Estatutos.

Estos reembolsos se harán entregando su importe en metálico ó en obligaciones ó cédulas hipotecarias contadas por todo su valor nominal y que pertenezcan á la misma serie y año que las admitidas por razón del préstamo reembolsado. Los deudores pagarán además en este caso la indemnización que fije el Consejo de ad-

22. The Bank shall have its domicile at Madrid, with power to create branches in the Provinces, and representative houses abroad.

The Bank may use the arms of Spain with the title "Banco Hipotecario de España" as its seal and coat of arms.

23. The operations of the Banco Hipotecario shall be: 1. To lend on first mortgage of real estate (immoveables), the ownership of which is inscribed on the Register of Ownership, a sum equal at the most to one half of its valuation, repayable over a long period by yearly or half yearly payments, or in a short time with or without amortisation. A mortgage which secures a loan by means of which previous registered debts on the mortgaged estate are repaid and extinguished, is considered a first mortgage; — 2. To purchase debts secured by an already existing mortgage, and which have the conditions expressed in the preceding paragraph; — 3. To lend the Provincial Deputations and Municipalities, legally authorised to contract loans, the sums allowed by their respective authorisation, although it be without a mortgage, provided that repayment and the payment of the interest are secured by an extra or special tax or permanent means which figures in the proper budget; — 4. To buy or discount Debts of Provinces or localities, provided that they combine all the conditions expressed in the preceding paragraph; — 5. To lend to the Treasury; — 6. To issue, by virtue of the operations already enumerated and up to the value of the loans, mortgage cedulas or other bonds repayable at fixed times or by way of lot. Premiums may be granted on these securities, payable at the time of repayment; — 7. To negotiate the said mortgage cedulas or bonds, and to lend on these securities.

The social capital shall in the first place be devoted to the operations already indicated.

24. The Bank is likewise authorised: 1. To receive on deposit every kind of valuable in paper or cash, and to keep current accounts for the total amount thereof, entered in counterfoiled books kept for that purpose; — 2. To employ the funds paid in for current account, on loans, either on their own mortgage cedulas or bonds, or on Government securities, and in discounting bills of exchange; — 3. To undertake on behalf of the State, the collection of the direct taxes and of the movement of funds claimed by this service; — 4. To take on lease or as managers, properties or establishments belonging to the State, Provinces, localities, corporations or individuals.

25. Finally, the Bank may perform all commercial transactions which are intended for the encouragement of agriculture or the mining industry, or the construction of buildings, opening credits for that purpose for the companies authorised by the Government for any of these objects, or legally authorised corporations or syndicates, but always on mortgage of property capable of being pledged or some other guarantee for securing realisation.

The mode and conditions of the intervention of the Bank in these transactions shall be finally determined by the council of Administration.

26. The total amount of the mortgage cedulas in circulation shall not exceed the amount of the mortgage loans; that of the special bonds shall not exceed that of those loans in respect of which they are issued.

27. The Banco Hipotecario shall receive yearly from its debtors: 1. So much per cent for interest, equal to that paid on the bonds or cedulas issued in respect of each loan; — 2. For commission and expenses, an amount which does not exceed 60 centimos per cent. per annum. The Government may increase this amount on the application of the Bank and after hearing the Council of State where there is good reason to do so; — 3. The amount for redemption which is proportionate to the number of years in which it has to be effected.

28. The debtors of the Banco Hipotecario may at any time repay the principal sum which they owe, or any part thereof, provided that the sum which they repay is an exact multiple of 250 pesetas and subject to the other conditions fixed by the Constitution of the Bank.

These repayments shall be effectuated by delivering the amount thereof in cash or in mortgage bonds or cedulas, reckoned at their nominal value and belonging to the same series and year as those admitted in respect of the loan repaid. In this case the debtors shall also pay the compensation fixed by the Council

ministración, la cual no podrá exceder nunca del 3 por 100 del capital que por anticipación se reembolse.

29. El Banco Hipotecario empleará todos los años en amortizar sus obligaciones y cédulas hipotecarias las sumas que reciba de sus deudores por amortización de los capitales que adeuden.

30. El capital, los intereses, y en su caso las primas ó premios de las cédulas hipotecarias, tienen por hipoteca especial, sin necesidad de inscripción, todas las que en cualquier tiempo se constituyan á favor del Banco sobre bienes inmuebles.

El capital, los intereses, y en su caso las primas ó premios de las obligaciones, tienen por hipoteca las que resulten á favor del Banco sobre los derechos cedidos á cambio de estas obligaciones.

31. Las obligaciones y cédulas hipotecarias, ya sean nominativas ó ya al portador, tendrán fuerza de escritura pública, sobre la cual haya recaído sentencia firme de remate, para el efecto de reclamar del Banco por la vía de apremio el pago del capital y de los intereses después de su vencimiento.

32. El Banco Hipotecario, si tuviera en su poder efectos públicos ó valores mercantiles como garantía de alguna deuda no pagada á su vencimiento, podrá hacerlos vender en la forma que determinen las leyes.

33. Vencido y no pagado un préstamo hipotecario ó cualquiera fracción de él ó sus intereses, requerirá el Banco por escrito al deudor para que satisfaga su débito.

Si el deudor no pagare en los dos días siguientes al del requerimiento, el Banco podrá pedir al Juez de primera instancia competente el secuestro y la posesión interina de la finca. Cerciorado el Juez con la presentación del título de la legitimidad del crédito y de la falta de pago, dictará providencia accediendo á la demanda, y ordenando la entrega interina de la finca al Banco si no se verificarse el pago dentro de quince días contados desde la presentación de la misma demanda. De esta providencia se tomará anotacion preventiva en el Registro de la propiedad en el mismo día de su notificación.

El Banco percibirá las rentas vencidas y no satisfechas del inmueble, aplicándolas al pago de su crédito, y recogerá asimismo los frutos y rentas posteriores, cubriendo con ellos primero los gastos de conservación y explotación que la misma finca exija, y después su propio crédito.

Podrá asimismo el Banco, de acuerdo con el deudor, continuar cobrando su crédito con el producto del inmueble secuestrado ó promover en cualquier tiempo, aunque sea sin dicho acuerdo, su enajenación y la rescisión del préstamo, en la forma establecida en el artículo siguiente.

Cuando el Banco tenga en su poder valores ó efectos del deudor, podrá aplicarlos al pago de sus créditos y entablar su reclamación por la diferencia.

34. Si la marcha regular de las operaciones del Banco exigiere el reintegro inmediato del préstamo, á juicio de su Consejo de administración, vencido que sea el plazo en que cualquier deudor hipotecario deba abonar capital ó intereses sin verificarlo, el Banco podrá, previo el requerimiento que dispone el art. 33, pedir desde luego al Juez competente la venta en subasta pública de la finca hipotecada y la rescisión del préstamo. En este caso, cerciorado el Juez con la presentación del título de la legitimidad del crédito, mandará anunciar la subasta en la *Gaceta*, *Boletín Oficial* y en alguno de los periódicos de la provincia por término de quince días y verificarla, con citación del deudor, ante uno de los escribanos del Juzgado ó del pueblo cabeza del partido en que radique la finca, en la forma en que se celebran las subastas voluntarias; pero con sujeción á lo que disponen las leyes respecto á la subasta judicial en cuanto al precio en que podrá verificarse la enajenación. A voluntad de las partes se tomará por tipo para la subasta la tasación hecha al tiempo de constituirse el préstamo, ó la que verifiquen de nuevo peritos nombrados la efecto.

Si el deudor verificase el pago antes de la celebración del remate, se suspenderán los procedimientos; si no se verificase en dicho término, el Juez dictará providencia aprobando la subasta y declarando rescindido el préstamo.

Con el precio del remate se pagarán en primer lugar el capital y los réditos devengados por el Banco hasta el día del pago, los gastos de la subasta y enajenación y un 3 por 100 del capital que con anticipación recibe el mismo Banco á consecuencia de la rescisión del préstamo.

of Administration, which may never exceed 3 per cent. of the principal repaid in advance.

29. In redeeming its mortgage bonds and cedulas the Banco Hipotecario shall employ every year the sums received from its debtors for paying off the principal sums which they owe.

30. The principal, interest, and premiums (if any) of the mortgage cedulas, have all the charges at any time constituted in favour of the Bank on immoveable property, as special security, without the necessity of registration.

The principal, interest, and premiums (if any) of the bonds have as security, those in favour of the Bank on the rights assigned in exchange for these bonds.

31. The mortgage bonds and cedulas, whether nominal or to bearer, shall have the effect of a notarial instrument in respect of which final judgment for sale has been given, for the purpose of claiming from the Bank by way of *apremio*, the payment of the principal and interest after their maturity.

32. If the Banco Hipotecario has public securities or mercantile securities in its control as guarantee for any debt which is not paid at its maturity, it may cause them to be sold as the laws determine.

33. If a mortgage loan or any fraction or interest thereof is due and unpaid, the Bank shall in writing require the debtor to pay his debt.

If the debtor does not pay within the two days following the demand, the Bank may apply to the competent Judge of first instance for sequestration and interim possession of the estate. If the judge is satisfied by the production of the title, of the lawfulness of the debt and failure of payment, he shall make an order acceding to the demand, and shall order interim delivery of the estate to the Bank if payment is not made within fifteen days following the presentation thereof. A preventive entry of this order shall be made in the Register of Ownership on the same day that notice thereof is received.

The Bank shall receive the rents of the estate which are due and unpaid, and apply them to the payment of its debt; and shall in like manner collect the subsequent produce and rents, therewith first paying the expenses of preservation and working required by the said estate, and afterwards its own debt.

The Bank may likewise by agreement with the debtor, continue to meet its credit with the produce of the sequestrated estate or at any time and even without such agreement, may move for its sale and the rescission of the loan, as enacted in the following article.

When the Bank has securities or effects of the debtor under its control, it may apply them to the payment of its debts and commence an action for the difference.

34. If the regular course of the operations of the Bank requires the immediate repayment of the loan, in the opinion of its Council of Administration, and the time has arrived when any mortgage debtor ought to pay principal or interest and omits to do so, the Bank after the previous demand provided by art. 33 may apply at once to the competent Judge for the sale by public auction of the mortgaged estate and for rescission of the loan. In this case, if the Judge is satisfied of the lawfulness of the debt by the production of the title, he shall order the auction to be advertised in the *Gaceta*, *Boletin Oficial* and in one of the newspapers of the Province, for the term of fifteen days and that it should take place, after summoning the debtor, in the presence of one of the notaries of the Court or of the locality which is the head-quarters of the "partido" in which the estate is situate, in the way in which voluntary auctions are held; but subject to the provisions of the laws on judicial sales as to the price at which the sale may take place. The valuation made at the time of the loan or that made anew by experts appointed for that purpose shall be taken as the reserve for the auction, at the wish of the parties.

If the debtor effects payment before the auction, the proceedings shall be suspended; but if not, the judge shall issue an order approving the sale and declaring the loan rescinded.

With the auction-price shall be paid in the first place the principal and interest due to the Bank up to the day of payment, the expenses of the auction and sale and 3 per cent. on the principal which the Bank receives in advance in consequence of the rescission of the loan.

35. El secuestro, y en su caso la enajenación de las fincas hipotecadas, según lo dispuesto en los dos artículos anteriores, no se suspenderá por demanda que no se funde en algún título anteriormente inscrito, ni por la muerte del deudor, ni por la declaración en quiebra ó concurso del mismo ó del dueño de la finca hipotecada.

Vendida la finca, el comprador pagará al Banco, dentro de ocho días, todo lo que se deba por razón de su préstamo, y el sobrante que resulte del precio quedará á disposición de los Tribunales, para que lo distribuyan con arreglo á derecho. Este pago al Banco se entenderá sin perjuicio de la acción que pueda corresponder al deudor ó al tercero perjudicado, si lo hubiere, la cual podrá ejercitarse en el juicio correspondiente.

36. Cuando la finca hipotecada cambie de dueño, quedará de derecho subrogado el adquirente en todas las obligaciones que por razón de ella hubiere contraído su causante con el Banco. El adquirente dará conocimiento al Banco de su adquisición dentro de los quince días al en que se consume, y si no lo hiciere, le perjudicarán los procedimientos que aquél dirija contra su causante para el cobro de sus créditos.

37. El Gobierno, oyendo el dictamen del Consejo de Estado en pleno, aprobará los Estatutos del Banco Hipotecario y resolverá cuantas dudas y cuestiones puedan suscitarse para el planteamiento de esta ley.

Artículo adicional.

Son aplicables las disposiciones de carácter general que contiene la presente ley á cualesquiera otros establecimientos de crédito territorial que se formen[1]).

Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á dos de Diciembre de mil ochocientos setenta y dos. — Amadeo. — El Ministro de Hacienda, Servando Ruiz Gómez.

Reales Decretos de 31 de enero de 1873, 24 de Julio de 1879 y 12 de Octubre de 1879.

Real Decreto de 31 de Enero de 1873.

En cumplimiento del artículo 14 de la Ley de creación del Banco Hipotecario de España, se dictó este Real Decreto, publicado en la Colección Legislativa, tomo 110, página 267, por el que se concedío al Banco de Paris y de los Paises Bajos la facultad de crear dicho Banco Hipotecario con sujeción á la citada Ley. Al propio tiempo se aprobaban los Estatutos del mismo, que fué preciso modificar y reformar por virtud de lo dispuesto en él.

Real Decreto de 24 de Julio de 1879.

Por esta soberana disposición, publicada en la Gaceta de 28 de julio del mismo año, se convirtío en privilegiado y único el Banco Hipotecario de España, quedando por virtud de esto sin efecto alguno el Artículo adicional de la Ley de 1872. En ella se facultó tambien al Banco para poder comprar y vender sus propias cédulas y obligaciones hipotecarias y disponer de los fondos sociales no solo para las operaciones á que se refiere el art. 23 de la Ley, sino para las á que se refieren los artículos 24 y 29. Se redujo á dos el número de Subgobernadores y se dispuso igualmente que estos habian de ser españoles y ser nombrados por el Gobierno de S. M. á propuesta del Consejo de Administración del Banco.

Real Decreto de 12 de Octubre de 1879.

De conformidad con la importantísima reforma introducida por el Real Decreto anterior fué preciso redactar unos nuevos Estatutos para el régimen y funcionamiento del Banco los cuales fueron aprobados en esta fecha y publicados en la Gaceta de 20 del mismo mes y año.

[1]) Vease, á continuación de la Ley, lo dispuesto en el Real Decreto de 24 de Julio de 1879.

35. The sequestration, and, when it takes place, the sale of the mortgaged estates according to the provisions of the two preceding articles, shall not be suspended by an action which is not based on some title, previously inscribed, nor by the death, declaration of bankruptcy or the meeting of creditors, of the debtor or of the owner of the mortgaged estate.

On sale of the estate, the purchaser shall pay the Bank within eight days, everything which is due on account of its loan, and the surplus of the price shall be at the disposal of the Tribunals, for distribution according to law. This payment to the Bank shall be understood to be without prejudice to the right of action by the debtor or a third person who is damnified, if any, which may be brought in the proper proceedings.

36. When the mortgaged estate changes owners, the purchaser shall be substituted as regards all the obligations which his predecessor has contracted with the Bank by reason thereof. The purchaser shall give the Bank notice of his acquisition within the fifteen days of its being completed, and if he does not do so, the proceedings which the Bank takes against his predecessor for the recovery of its debts shall prejudice him.

37. The Government on hearing the full opinion of the Council of State shall approve the Constitution of the Banco Hipotecario and shall decide any doubts and questions which may arise for bringing this law into force.

Additional article.

The provisions of a general character which are contained in this law apply to all other establishments of territorial credit which may be formed[1]).

Therefore: We command all the Tribunals, Justices, Chiefs, Governors and other Authorities, civil, military and ecclesiatic, of every kind and dignity, that they keep and cause to be kept, perform and execute this law in all its parts.

Given at the Palace on the 2nd December 1872. — *Amadeo.* — Chancellor of the Exchequer, *Servando Ruiz Gomez.*

Royal Decrees of 31 January 1873, 24 Juli 1879 and 18 October 1879.

Royal Decree of 31 January 1873.

In pursuance of article 14 of the Law creating the Banco Hipotecario de España, this Royal Decree is issued and published in the Colección Legislativa, volume 110, page 267, whereby the power to found the said Banco Hipotecario under the said Law was granted unto the Bank of Paris and the Netherlands. At the same time the Constitution thereof was approved, which it was necessary to alter and amend by virtue of the provisions thereof.

Royal Decree of 24 July 1879.

By this sovereign decree, published in the *Gaceta* of 28 July of the same year, the Banco Hipotecario de España was converted into the only privileged bank, and by virtue thereof the additional article of the Law of 1872 was repealed. Therein power was given to the Bank to buy and sell its own mortgage cedulas and bonds, and to dispose of its funds not only for the transations referred to in art. 23 of the Law, but for those referred to in article 24 and 29. The number of sub-governors was reduced to two and it was likewise provided that these have to be Spaniards and appointed by H. M. Government on the proposal of the Council of Administration of the Bank.

Royal Decree of 12 October 1879.

According to the most important reform introduced by the preceding Royal Decree, it was necessary to draw up a new Constitution for the government and working of the Bank, and these were approved on this date and published in the *Gaceta* of the same month and year.

[1]) See, in continuation of the Law, the provisions of the Royal Decree of 24 July 1879.

Dichos Estatutos tienen 137 artículos y están divididos en 8 títulos que tratan de los siguientes materias: Título I. Denominación de la sociedad, su objeto, su duración y su domicilio. — Título II. Capital social, acciones y dividendos. — Título III. Dirección y administración de la sociedad. — Título IV. De los préstamos hipotecarios. — Título V. De las cédulas hipotecarias. — Título VI. Derechos legales de la sociedad. — Título VII. Del balance, reparto de dividendos y fondo de reserva. — Título VIII. De la disolución y liquidación del Banco.

El objeto principal del Banco es el hacer préstamos hipotecarios amortizables gradualmente dentro del plazo, para lo cual podrá emitir cédulas hipotecarias por el valor del préstamo, cobrando los intereses, la comisión y la amortización de los deudores hipotecarios. Estas cédulas, que no pueden ser menores de 100 pesetas, están aseguradas con la garantía especial del préstamo y con el capital de la sociedad.

Cuando los préstamos del Banco se hagan al Estado, las Diputaciones, los Ayuntamientos ú otras corporaciones debidamente autorizadas para ello, con garantias especiales, entonces podrá éste emitir por el valor de dichos préstamos Obligaciones especiales, de condiciones análogas á las de las cédulas. Tambien podrá dedicar su capital á préstamos hipotecarios á corto plazo, con devolución de su importe á la terminación del mismo, siempre que estén suficientemente garantidas las operaciones. A este efecto, asi como para los préstamos de amortización gradual, las fincas habrán de estar aseguradas convenientemente, y la anualidad con que queden gravadas por causa del préstamo no podrá exceder nunca de la renta líquída que produzcan.

La duración del privilegio del Banco es de 99 años á contar desde el dia que se publicó el Decreto de su autorización, ó sea desde el 31 de Enero de 1873.

Cámaras de comercio, industria y navegación.

Se crearon estas Cámaras en España por el Real Decreto de 9 de Abril de 1886, debido á la fecunda iniciativa del sabio catedrático de la Universidad de Valencia Dn. Eduardo Perez Pujol. Sufrió el tal Decreto importantes modificaciones, y para regularizar la existencia de dichas Cámaras se dictó el de 21 de Junio de 1901, que es el que está en vigor, sin otras modificaciones que las introducidas por los de 13 de Diciembre de 1901, 30 de Agosto de 1902 y 24 de Febrero de 1908.

He aquí ahora el texto del Real Decreto de 21 de Junio de 1901, con las modificaciones introducidas en el mismo por los de 1901, 1902 y 1908 ya citados.

Art. 1. Las Asociaciones de carácter permanente que, usando de su libertad constitucional, funden los comerciantes, industriales, navieros y capitanes de la marina mercante de altura, se considerarán como Cámaras oficiales del Comercio, de la Industria y de la Navegación, para los efectos de este decreto, si en su constitución y régimen se acomodan á los preceptos que en el mismo se establecen.

Estas Cámaras tendrán cerca de los Poderes públicos la representación de los intereses comerciales é industriales de la región en que se hallen legalmente establecidas, y gozarán de la condición de establecimientos públicos.

2. El Gobierno, á propuesta del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras públicas, declarará por Real decreto constituídas las Cámaras que lo soliciten, y señalará el territorio dentro del cual han de ejercer aquéllas sus funciones.

3.[2]) Para pertenecer á una Cámara de Comercio, Industria y Navegación, se requiere: primero, ser español; segundo, ser comerciante, industrial ó naviero, por cuenta propia, con un año de ejercicio en estas profesiones; y tercero, contribuir á la Cámara con la cuota que por su reglamento se determine.

A la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Melilla podrán pertenecer, además de las personas que reúnan las condiciones expresadas en el párrafo anterior, todas las que, sin poseerlas, tengan otras que, á juicio de la Cámara, las capacite para esta distinción.

Podrán también pertenecer á las Cámaras: 1.° Los gerentes de sociedades ó empresas mercantiles, industriales ó de navegación, y los pilotos que sean ó hubieran sido capitanes de la marina mercante de altura; — 2.° Los profesores

[2]) Este artículo 3.° sufrió la primera modificación de su texto primitivo por el Real Decreto de 13 de Diciembre de 1901, y ha sido modificado de nuevo por el de 24 de Febrero de 1908, quedando en la forma que se inserta.

The said Constitution has 137 articles and is divided into 8 titles dealing with the following matters: Title I. Name of the company, its object, duration and address. — Title II. Social capital, shares and dividends. — Title III. Direction and administration of the company. — Title IV. Mortgage loans. — Title V. Mortgage cedulas. — Title VI. Legal rights of the company. — Title VII. Balance sheet, distribution of dividends and reserve fund. — Title VIII. Dissolution and liquidation of the Bank.

The principal object of the Bank is make mortgage loans, to be gradually paid off within a fixed time, for which it may issue mortgage cedulas for the amount of the loan, receiving interest, commission and the amortisation from the mortgage debtors. These cedulas, which cannot be less than 100 pesetas, are secured by the special guarantee of the loan and by the capital of the company.

When Bank loans are made to the State, the Provincial Councils, the Municipalities or other corporations duly authorised thereto, on special securities, then the Bank may issue special bonds to the amount of the said loans, on conditions analogous to those of the cedulas. It may likewise devote its capital to short-time mortgage loans with return of their amount at the end thereof, provided that the transactions are sufficiently secured. For this purpose, as well as for loans which are gradually paid off, the estates must be properly insured, and the annuity with which they are burdened on account of the loan may never exceed the net rent which they produce.

The duration of the privilege of the Bank is 99 years reckoned from the day on which the authorising Decree was published, i. e. from 31 January 1873.

Chambers of Commerce, Industry and Navigation.

These Chambers were created in Spain by Royal Decree of 9 April 1886, due to the fertile initiative of the learned Professor of the University of Valencia, Don Eduardo Perez Pujol. The said Decree underwent considerable amendments and to regulate the existence of the said Chambers the Decree of 21 June 1901 was pronounced, which is the one still in force, with no further amendments than those introduced by the Decrees of 13 December 1901, 30 August 1902 and 24 February 1908.

There now follows the text of the Royal Decree of 21 June 1901, with the amendments introduced therein by those of 1901, 1902 and 1908 already mentioned.

Art. 1. The Associations of a permanent character, founded by merchants, industrial[1]) persons, shipowners and masters of the ocean merchant service in pursuance of their constitutional liberty, shall be considered as official Chambers of Commerce, Industry and Navigation, for the purpose of this decree, if in their constitution and government, the rules herein enacted are observed.

With respect to the Public Powers, these Chambers shall represent the commercial and industrial interests of the district in which they are lawfully established, and shall have the status of public foundations.

2. On the proposal of the Ministry of Agriculture, Industry and Commerce and Public Works, the Government shall by Royal Decree declare the Chambers which apply therefor to be founded, and shall define the territory within which they are to exercise their functions.

3.[2]) For belonging to a Chamber of Commerce, Industry and Navigation, it is required: first, to be a Spaniard; second, to be a merchant, industrial person or ship-owner on his own account with a year's practice in these businesses, and third, to pay to the Chamber the amount fixed by its rules.

Besides the persons who combine the conditions stated in the preceding paragraph, all persons who do not possess them but who have others which in the judgment of the Chamber, fits them for this distinction, may belong to the Chamber of Commerce, Industry and Navigation of Melilla.

The following may also belong to the Chambers: 1. The managers of mercantile, industrial or navigating companies or undertakings, and navigating officers who are or have been masters of the merchant service on the high seas; — 2. Mercantile

---

[1]) 'Industriales' means persons engaged in industries (Translator).

[2]) This art. 3 underwent the first alteration of its original text by Royal Decree of 13 December 1901, and was again amended by that of 24 February 1908, and in now in the above form.

y peritos mercantiles, los ingenieros industriales, los fieles contrastes y los capitanes de puerto; — 3.° Los agentes comerciales, de cambio y Bolsa, de Aduanas y transportes y los corredores de comercio y corredores intérpretes de buques. Los comprendidos en los tres números anteriores necesitarán además la antigüedad de dos años en el ejercicio de sus respectivos cargos. Los comerciantes, industriales, navieros y capitanes de la marina mercante de altura que no estén domiciliados en la población donde exista Cámara oficial, podrán agregarse á la más próxima; y 4.° Los comerciantes é industriales extranjeros, siempre que lleven diez años de residencia en España pagando contribución, y sin que su número exceda nunca de la décima parte de la totalidad de los asociados de cada una de esta clase de corporaciones.

4. Todos los miembros de la Cámara formarán su asamblea general.

La Cámara se dividirá en tres secciones denominadas de comercio, de industria y de navegación.

5. Toda Cámara oficial tendrá una Junta directiva, compuesta de un presidente, uno ó dos vicepresidentes, un tesorero, un contador, un archivero bibliotecario, un secretario general y á lo menos seis vocales.

En la Junta directiva tendrán necesariamente representación todas las entidades que compongan la Cámara.

6.[1]) Serán elegibles para los cargos de la Junta directiva de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, los miembros de éstas que figuren en sus listas con un año de anterioridad al dia de la elección, clasificados en los tres conceptos referidos. Los elegidos lo serán por tres años, renovándose en cada uno de ellos la Junta por terceras partes. Las secciones en que se divida la Junta elegirán su Presidente y Secretario.

7. La Junta directiva de cada Cámara, las de sus respectivas secciones, así como la Cámara misma y las secciones, se reunirán cuantas veces lo disponga su reglamento, y además cuando el Gobierno lo considere conveniente.

Podrán también reunirse diversas Cámaras ó sus Juntas directivas cuando el Gobierno así lo disponga, ó en los casos previstos en los reglamentos, para deliberar sobre intereses comunes á todas ellas.

La celebración de Congresos de las Cámaras de Comercio, de Industria y de Navegación, se acordará por el Gobierno á propuesta de aquéllas.

8. Cada Cámara formará el reglamento para su régimen interior con entera libertad, si bien respetando en él las disposiciones de este decreto. En el reglamento se fijará la cuota con que ha de contribuir cada miembro á los gastos comunes de la Cámara.

9.[2]) Las Cámaras corresponderán directamente con los ministros.

10. Corresponderá á las Cámaras oficiales de Comercio, de Industria y de Navegación: 1.° Pedir al Poder Legislativo cuanto consideren conveniente para el desarrollo y mejora del comercio, de la industria y de la navegación; — 2.° Proponer al Gobierno, á instancia de éste ó por iniciativa propia, las reformas que en beneficio de aquellos intereses entienda que deben hacerse en las leyes y disposiciones vigentes que á ellos se refieran; — 3.° Proponer asimismo la ejecución de las obras y el establecimiento ó reforma de los servicios públicos en lo que pueda ser conveniente para el comercio, la industria ó la navegación. A esto fin estudiarán las Cámaras las vías de comunicación terrestres y marítimas y formarán itinerarios mercantiles; propondrán la construcción de caminos que faciliten el tráfico y cuantas medidas crean convenientes para la más fácil exportación de todo género de mercancías, y también para conducir los productos importados desde los puertos á los puntos de consumo á donde vayan dirigidos; — 4.° Promover y dirigir Exposiciones comerciales y de industrias terrestres y marítimas. Establecer, por iniciativa propia ó previo acuerdo con el Gobierno, y conforme á las bases que se señalen por éste, Museos comerciales ó industriales y oficios nacionales del comercio exterior; — 5.° Establecer y sostener relaciones con las demás Corporaciones mercantiles é industriales, así nacionales como extranjeras; — 6.° Nombrar y separar libremente á sus empleados, asignándoles la

---

[1]) Este artículo 6° quedó así redactado por el Real Decreto de 13 de Diciembre de 1901.

[2]) La redacción primitiva del art. 9° se modificó por el citado Real Decreto de 13 de Diciembre de 1901, pero por virtud de lo dispuesto en el de 30 de Agosto de 1902 se suprimió.

professors and experts, industrial engineers, inspectors, valuers and captains of the port; — 3. Commercial agents, bill brokers and agents on Exchange, Customs and transport, agents commercial brokers and interpreting ship-brokers; — The persons comprised in the three preceding numbers require also to have performed their respective duties for the space of two years. The merchants, industrial persons, shipowners and masters of the merchant service on the high seas who are not resident in a place where there is an official Chamber, may join the nearest one; and 4. Foreign merchants and industrial persons, provided that they have resided and paid taxes for ten years in Spain, and so that their number never exceeds the tenth part of the whole membership of each one of this kind of corporation.

4. The general meeting of the Chamber shall be composed of all the members.

The Chamber shall be divided into three sections, called the Commercial, Industrial and Navigation.

5. Every official Chamber shall have a Governing Board composed of a President, one or two Vice-Presidents, Treasurer, Accountant, a keeper of the records and books, a general secretary and at least six voting members.

All persons composing the Chamber shall be represented on the Governing Board.

6.[1]) The members of the Chamber of Commerce, Industry and Navigation, shall be eligible for the duties of the Governing Board if they have been in the lists of members for one year previous to the day of election, classified in the three said ways. Members shall serve for three years, the Board being renewed by one third in each year. The sections into which the Board is divided shall elect their President and Secretary.

7. The Governing Board of each Chamber, the Boards of their respective sections, as well as the Chamber itself and the sections, shall meet as often as their rules require, and likewise when the Government thinks fit.

The different Chambers and their Governing Boards may meet whenever the Government so orders, or in the cases provided by the rules, to deliberate on the interests common to them all.

The meeting of Congresses of the Chambers of Commerce, Industry and Navigation, shall take place as decided by the Government on the proposition of the Chambers.

8. Each Chamber shall draw up rules for its internal government with complete freedom, albeit respecting therein the provisions of this Decree. The amount which each member has to contribute to the ordinary expenses of the Chamber shall be fixed by the rules.

9.[2]) The Chambers shall correspond direct with the Ministers.

10. It shall be the province of the Official Chamber of Commerce, Industry and Navigation: 1. To petition the Legislative Power when it thinks fit for the development amd improvement of commerce, industry and navigation; — 2. To propose to the Government at its instance or its own, the reforms which it thinks ought to be made for the benefit of those interests, in the laws and provisions in force relating thereto; — 3. Likewise to propose the carrying out of public works and the establishment or reform of public services so far as may be expedient for commerce, industry or navigation. For this purpose the Chamber shall study the means of land and sea communication and shall draw up mercantile routes; shall propose the construction of roads to facilitate traffic and the means it thinks suitable for the easiest exportation of every kind of merchandise, and also for carrying imported produce from the ports to the places of consumption to which they are consigned; — 4. To promote and direct commercial Exhibitions and those of land and sea industries. To establish on its own initiative, or by previous agreement with the Government, and in conformity with the grounds indicated thereby, commercial or industrial museums and national offices for foreign commerce; — 5. To establish and maintain relations with other mercantile and industrial corporations, both national and foreign; — 6. To freely appoint and dismiss employés, assigning them the remuneration which they are to receive and the duties which they must

---

[1]) This art. 4 was thus expressed in the Royal Decree of 13 December 1901.

[2]) The original wording of art. 9 was amended by the said Royal Decree of 13 Decembre 1901, but was suppressed by virtue of the provisions in that of 30 August 1902.

retribución que han de percibir y las funciones que deben desempeñar, elegir los delegados que han de representar á la Cámara cuando se reunan varias, y no hayan de concurrir á la reunión todos los miembros de cada una, y nombrar los corresponsales que estimen necesarios; — 7.° Promover entre los comerciantes, industriales y navieros el juicio de amigables componedores, como el más conveniente para la resolución de las cuestiones que entre ellos surjan, decidiendo, además, como Jurados, y con arreglo á las condiciones que voluntariamente establezcan las partes interesadas, las cuestiones que éstas les sometan; — 8.° Resolver las cuestiones que se susciten entre fabricantes y operarios cuando unos y otros se convengan en someterlas á la Cámara; — 9.° Ejercitar ante los Tribunales las acciones criminales para la persecución de los delitos cometidos en perjuicio de los intereses comunes del comercio, de la industria y de la navegación; — 10.° Nombrar veedores que, por cuenta de la Cámara, cuiden de la policía industrial y mercantil, para poner en conocimiento de las autoridades á quienes corresponda, los abusos y fraudes que se cometan en perjuicio del comercio de buena fe y en el de los fabricantes y operarios; — 11°. Fomentar directa ó indirectamente la enseñanza comercial, industrial y marítima, celebrando al efecto conferencias públicas, publicando Memorias, concediendo premios en concurso ó fuera de él á los autores de obras que versen sobre algún ramo del comercio, de la industria ó de la navegación, pensionando en el extranjero á los que merezcan este premio extraordinario, y fundando con sus propios recursos establecimientos de enseñanza de esos ramos; — 12.° Formar al principio de cada año una lista de peritos, que se remitirá al Juzgado correspondiente, para que emitan dictamen en toda clase de contiendas judiciales de carácter mercantil.

11. Las Cámaras habrán de ser necesariamente consultadas: 1.° Sobre los proyectos de tratados y arreglos comerciales y de navegación, reforma de Aranceles y de las Ordenanzas de Aduanas, de las tarifas de transportes y de los impuestos de toda clase que afecten directamente al comercio, á la industria y á la navegación, y en especial cuando se trate de establecer monopolios; — 2.° Sobre los usos y prácticas mercantiles, cuya uniformidad habrán de procurar; — 3.° Sobre la creación en el territorio de su jurisdicción de nuevas Cámaras, de Bolsas de Comercio, de agentes y corredores de esta clase, de Cambio y Bolsa, de sucursales de los Bancos y Bancos locales, de almacenes generales y salas de ventas públicas; — 4.° Sobre el precio de los transportes que haya de pagar el Estado, y el de la mano de obra para el trabajo en las prisiones; — 5.° Sobre los proyectos de obras públicas relacionados con la vida industrial y comercial, dentro del territorio de su circunscripción; — 6.° Sobre reforma del Código de Comercio y procedimiento mercantil.

12. Las Cámaras serán autorizadas, siempre que lo soliciten, para fundar establecimientos de carácter comercial, tales como almacenes generales, depósitos, salas de ventas públicas y bancos de pruebas para las armas.

También lo serán para administrar estos establecimientos, así como los Museos comerciales, Exposiciones mercantiles y oficios nacionales del comercio exterior que hayan sido establecidos por el Estado, las provincias ó los Municipios; cuando su fundación sea privada, podrá también conferírsele la administración, mediante los convenios que al efecto se celebren. Asimismo podrá confiárseles la administración de las Bolsas y Casas-lonjas que existan dentro de su territorio.

13. Las Cámaras pueden adquirir ó construir los edificios necesarios para su instalación ó la de los establecimientos que funden para uso del comercio, de la industria y de la navegación.

14. Las Cámaras, con arreglo á las leyes, podrán ser declaradas concesionarias de las obras públicas que radiquen dentro del territorio de su circunscripción respectiva, y especialmente de las que interesen á los puertos marítimos y á las vías de comunicación.

Siempre y en todo caso gozarán del derecho de vigilar esta clase de servicios.

15. Las Cámaras, bien aisladamente, ó bien concertándose entre sí algunas de ellas, pero siempre autorizadas por Real decreto, podrán contratar empréstitos para atender á los gastos de construcción de Bolsas de comercio, casas consulares, líneas telefónicas, fundación de establecimientos para uso del comercio, de la industria y de la navegación, y trabajos públicos relativos á los puertos marítimos, vías navegables y otras de comunicación, que sean legalmente autorizadas. Cuando

discharge, to choose delegates to represent the Chamber when several Chambers meet, and all the members of each are not to attend the meeting, and to appoint correspondents as considered necessary; — 7. To promote the action of friendly arbitrators among merchants, industrial persons and ship-owners, as being the most suitable for the decision of the questions which arise among them, and deciding, as they do, the questions submitted to them like jurymen, and in accordance with the conditions voluntarily imposed by the parties interested; — 8. To decide questions arising between manufacturers and operatives when both parties agree to submit them to the Chamber; — 9. To bring criminal actions before the Tribunals for the prosecution of crimes committed against the common interest of commerce, industry and navigation; — 10. To appoint overseers, on behalf of the Chamber, over the industrial and mercantile police, to bring to the notice of the authorities whom it may concern, the abuses and frauds committed to the prejudice of honest trade and to that of manufacturers and operatives; — 11. To encourage directly and indirectly commercial, industrial and maritime education, holding for that purpose public conferences, publishing reports, granting prizes, with or without competition, to the authors of works on any branch of commerce, industry and navigation, boarding those who deserve this extraordinary prize in foreign countries, and with its own resources founding establishments for teaching those branches; — 12. To draw up at the beginning of each year a list of experts, which shall be sent to the proper judge, for giving opinion on all classes of judicial disputes of a mercantile character.

11. The Chambers must necessarily be consulted: 1. On proposed treaties and conventions of commerce and navigation, the reform of the Custons tariff and Ordinances, of the tariff for carriage and taxes of every kind which directly affect commerce, industry and navigation, and especially when there is a question of establishing monopolies; — 2. On mercantile customs and practices, the uniformity of which they are charged to procure; — 3. On the creation, within the territory of their jurisdiction, of new Chambers, Commercial Exchanges, agents and brokers of this kind, bill-brokers, Exchange brokers, of branches of Banks and local Banks, of general warehouses and halls for public sales; — 4. On the price of carriage to be paid by the State, and that of the manual labour for work in the prisons; — 5. On proposals for public works in relation to industrial and commercial life within the territory of their area; — 6. On the reform of the Code of Commerce and mercantile procedure.

12. The Chambers shall be authorised, whenever they apply for it, to found establishments of a commercial character, such as general warehouses, depositories, halls for public sales and establishments for testing arms.

They shall also be authorised to administer these establishments, as well as commercial Museums, mercantile Exhibitions and National offices for foreign trade which may have been established by the State, Provinces or Municipalities; also when their foundation is private, the administration may be conferred on them by agreements made for that purpose. The administration of the Exchanges and Marts existing within their territory may also be entrusted to them.

13. The Chambers may acquire or construct the buildings necessary for their installation or that of the establishments which they found for the use of commerce, industry or navigation.

14. The Chambers formed in accordance with the laws, may be declared concessionaires of public works situated within the territory of their respective areas, and in particular of those which concern maritime ports and ways of communication.

Always and in every case they shall be entitled to superintend this kind of service.

15. The Chambers, whether separately or by concerted action amongst some of them, but always with the authorisation of a Royal Decree, may contract loans to meet the expense of constructing commercial Exchanges, consular houses, telephone lines, the foundation of establishments for the use of commerce, industry and navigation, and public works relating to maritime ports, water-ways and other ways of communication which may be lawfully authorised. When several Chambers propose

varias Cámaras intenten concentrarse para alguno de los fines indicados en el párrafo anterior, nombrará cada una de ellas una Comisión que la represente, y estas Comisiones reunidas discutirán y acordarán lo que convenga á sus intereses comunes, dentro del objeto especial de la convocatoria, y sin que en ningún caso puedan tratar de otros asuntos que de los que hayan motivado la reunión.

Los acuerdos que adopten no serán ejecutivos sino después de haber sido ratificados por todas las Cámaras interesadas y por el ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas.

16. Siempre que alguna Cámara lo solicite, se le podrá confiar el contraste de pesas y medidas.

17. Independientemente del presupuesto ordinario, las Cámaras establecerán presupuestos especiales para los servicios que administren.

18. Mediante las reformas necesarias en las leyes vigentes, se confiará á las Cámaras la expedición de los certificados de origen, el Registro mercantil y la legalización de los libros que los comerciantes están obligados á llevar con arreglo al Código de Comercio.

19. Cuando una Cámara, previo acuerdo adoptado en reunión general extraordinaria y con audiencia de las Asociaciones sindicales ó gremiales á quienes estime conveniente consultar, pida la imposición de un recargo sobre el subsidio industrial y las patentes para aumentar sus recursos, el Gobierno someterá á la aprobación de las Cortes el oportuno proyecto de ley, por si éstas juzgasen conveniente hacer obligatoria la imposición dentro del territorio de la Cámara de que se trate.

20. El Gobierno concederá á las Cámaras las subvenciones que estime procedentes, determinando de una manera especial los fines á que deban ser destinadas.

21. Todos los años redactará cada una de las Cámaras la Memoria de los trabajos que haya realizado, la cual, en unión de los balances y cuentas correspondientes, será remitida al Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas para su publicación en la *Gaceta*.

22. Las Cámaras, por medio de *Boletines*, hojas impresas ó en la forma que juzguen más adecuada, proporcionarán á los miembros de su demarcación extractos de las sesiones celebradas y acuerdos tomados, así como cuantas noticias relativas al objeto de su institución puedan interesarles.

Con objeto de facilitar á las Cámaras el cumplimiento de su cometido y el estudio de los problemas económicos, se remitirán á las mismas, por los departamentos correspondientes, todas las publicaciones oficiales de carácter económico, sin omitir las Memorias consulares y cuantos documentos publique el Centro de informaciones comerciales del Ministerio de Estado[1]).

23. En ningún caso podrán deliberar las Cámaras sobre asuntos ajenos á los fines de su fundación[2]).

Real Decreto de 30 de Agosto de 1902

sobre Cámaras de Comercio españolas en el extranjero.

Art. **1.** Se deja sin efecto el art. 9 del Real decreto de 21 de Junio de 1901 sobre reorganización de las Cámaras de Comercio, así como también las resoluciones posteriores dictadas por este Ministerio acerca de las Cámaras de Comercio españolas en el extranjero.

2. Las Cámaras de Comercio españolas en el extranjero dependerán directamente del Ministerio de Estado y se regirán por las disposiciones que dictó este departamento en 2 y 7 de Octubre de 1886 y cuantas dictare en lo sucesivo.

A continuación se insertan las disposiciones citadas la primera en forma de nota, y la segunda íntegra.

[1]) Este segundo párrafo del art. 22 fué agregado por el Real Decreto de 13 de Diciembre de 1901.

[2]) Por el mismo citado Real Decreto de 13 de Diciembre de 1901 se añadió un art. 24 referente á las Cámaras españolas en el extranjero que no insertamos porque se suprimió por el Real Decreto que figura á continuación de fecha 30 de Agosto de 1902. — También el texto primitivo del Real Decreto de 21 de Junio de 1901 contenía unas disposiciones transitorias que suprimimos porque hoy carecen por completo de interés.

to combine for one of the purposes indicated in the preceding praagraph, each of them shall appoint a committee to represent it, and these united Committees shall discuss and decide what best agrees with their common interests, within the special object of the summons, but without power, in any case, of dealing with other matters than those which occasioned the combination.

The resolutions which they adopt shall not be capable of being carried into effect except after ratification by all the Chambers interested and by the minister of Agriculture, Industry, Commerce and Public Works.

16. Whenever any Chamber applies for it, the testing of weights and measures may be entrusted to it.

17. Independently of the ordinary estimate, the Chambers shall form special estimates for the services which they administer.

18. By means of the necessary amendments in the laws now in force, the issue of certificates of origin, the mercantile Register and the legislation on the books which merchants are bound to keep according to the Code of Commerce, shall be entrusted to the Chambers.

19. When, after a resolution adopted in an extraordinary general meeting on hearing the Syndical Associations or trade unions whom it considers it convenient to consult, a Chamber applies for the imposition of an additional tax on the industrial subsidy and patents in order to augment its resources, the Government shall submit the relevant bill to the approbation of the Cortes in case they should think proper to make the tax obligatory within the territory of the Chamber in question.

20. The Government shall grant to the Chambers such subventions as it thinks proper, and shall specifically determine the objects to which they are to be applied.

21. Every year each of the Chambers shall draw up a Report of the labours which it has performed, which shall be sent, together with the corresponding balance sheets and accounts, to the Ministry of Agriculture, Industry, Commerce and Public Works for publication in the *Gaceta*.

22. By means of pamphlets, printed leaflets or as they consider most suitable, the Chambers shall supply the members of their district with extracts of their meetings and resolutions, as well as any news relating to the object of their foundation which may concern them.

With the object of helping the Chambers to carry out their commission and the study of economic problems, all the official publications of an economic character shall be sent them by the corresponding departments, not omitting the Consular Reports and the documents published by the Centre of commercial information of the Ministry of State[1]).

23. In no case may the Chambers deliberate about matters foreign to the objects of their foundation[2]).

Royal Decree of 30 August 1902

on Spanish Chambers of Commerce abroad.

Art. **1.** Art. 9 of the Royal Decree of 21 January 1901 on the reorganisation of the Chambers of Commerce is repealed, together with the subsequent decisions issued by this Ministry concerning Spanish Chambers of Commerce abroad.

2. Spanish Chambers of Commerce abroad shall be directly dependent on the Ministry of State and shall be governed by the provisions issued by this department on the 2nd and 7th October 1886 and by such as may be issued in the future.

The following are the said provisions: the first in the form of a note and the second entire.

---

[1]) This second paragraph of art. 22 was added by the Royal Decree of 13 December 1901.

[2]) By the same Royal Decree of 13 December 1901, art. 24 was added, which refers to Spanish Chambers abroad, which we do not insert because it was repealed by the following Royal Decree, dated 30 August 1902. — The original text of the Royal Decree of 21 June 1901 likewise contained transitory provisions which we suppress as having now no interest.

Ministerio de Estado.

Circular.

Real orden á los Ministros de España en el extranjero de 2 de Octubre de 1886, acompañando el adjunto Memorandum «que ha de considerarse como pauta y traza general de lo que han de ser las Cámaras, y de modo alguno como molde definitivo y rígido, cosa incompatible con la índole de una institución que por su naturaleza ha de reflejar el peculiar carácter del país en que funcione y la rica variedad de la iniciativa local.»

Memorandum.

Para la instalación de las Cámaras de Comercio en el extranjero se tendrán presentes las siguientes observaciones:

I. Bases para la organización de las Cámaras de Comercio.

Art. **1.** Las Cámaras de Comercio son instituciones de carácter privado, libremente formadas por los comerciantes é industriales españoles que residan en países extranjeros, bajo la tutela de las Autoridades diplomáticas y consulares.

2. Las Cámaras de Comercio en el exterior solo deberán establecerse en aquellos puntos en los cuales el tráfico con la Península tenga suficiente importancia y exista una colonia española bastante para el sostenimiento y desarrollo de la institución. Donde existan intereses comerciales, pero falte población española, podrá organizarse una agencia dependiente de la Cámara de Comercio más próxima.

3. Las Cámaras de Comercio en el exterior deberán provocar la creación inmediata de agencias ó sucursales.

4. Los presupuestos de las Cámaras de Comercio merecen especial atención, siendo preferible aplazar la formación de la Cámara á crearla sin suficientes recursos. El presupuesto de gastos debe ser todo lo reducido posible, limitándose al alquiler del local, al pago de un Secretario que lleve la correspondencia, actas y demás documentos de la Cámara, al gasto del correo y al de las publicaciones que se estimaren oportunas.

El presupuesto de ingresos de las Cámaras de Comercio podrá formarse: *A*. Con la cuota fija de los asociados y con los donativos de las suscriciones de aquellos que, aun no estándolo, deseen concurrir á su creación y mantenimiento. A este objeto deberá invitarse á todos aquellos españoles que, aun no residiendo en el punto en que haya de constituirse la Cámara, vivan, sin embargo, en el país, y tengan por tanto, interés en ayudar á su instalación. — *B*. Con los auxilios ó subvenciones que el Gobierno les conceda. — *C*. Con los auxilios que las Cámaras de Comercio del interior puedan proporcionarles. — *D*. Con aquellas retribuciones que en ocasiones dadas, y para los mismos fines de desarrollo y prosperidad del comercio, puedan establecerse.

5. El personal de las Cámaras de Comercio debe componerse de los españoles más respetables y entendidos en las materias económicas, cuidando además de que la Comisión ejecutiva se forme con personas activas y dispuestas al trabajo y gestiones que necesariamente ha de confiárseles.

II. Objeto de las Cámaras de Comercio.

El nombre adoptado para estas instituciones no significa que sus atribuciones estén reducidas á los asuntos puramente comerciales, sino que deben comprender también los industriales y los artísticos. Varias Cámaras de Comercio italianas en el exterior han adoptado para su título las palabras comercio y arte; y este ejemplo, y sobre todo este propósito merece ser imitado, cuando en España las Bellas Artes, y especialmente la pintura, tienen gran importancia.

Esto sentado, los objetos principales de las Cámaras de Comercio en el extrandero son: 1. La organización de todos los comerciantes é industriales que vivan en país extranjero, en un centro común, desde el cual además de desarrollar sus propios intereses, los pongan en contacto directo con la Metrópoli; — 2.° El auxilio y desenvolvimiento de la acción diplomática y consular del Gobierno y de la iniciativa individual del comercio de la metrópoli, á cuyo efecto, además de

Ministry of State.
Circular.

Royal order to the Ministers of Spain abroad, dated the 2nd October 1886, accompanied by the attached Memorandum "which is to be regarded as a general model and outline of what the Chambers are to be, and by no means as a definite and rigid pattern, which would be incompatible with the nature of an institution which has to reflect the peculiar characteristics of the country in which it operates, and the abundant variety of local initiative".

Memorandum.

The following observations must be borne in mind when proposing to found Chambers of Commerce abroad:

I. Bases of the organization of Chambers of Commerce.

Art. 1. Chambers of Commerce are institutions of a private character, which Spanish merchants and industrial persons residing in foreign countries are at liberty to form, under the guardianship of the Diplomatic and Consular authorities.

2. Chambers of Commerce abroad should only be established in those places in which the trade with the Peninsula is of sufficient importance and there is a Spanish colony sufficient to maintain and develope the institution. Where there are commercial interests, but there is a want of the Spanish population, an agency of the nearest Chamber of Commerce may be organized.

3. Chambers of Commerce abroad may promote the immediate formation of agencies or branches.

4. The estimates of Chambers of Commerce deserve special attention, as it is preferable to postpone the formation of the Chamber to creating it without sufficient resources. The estimate of expenses should be as low as possible, and confined to the rent of the place, payment of a Secretary to keep the correspondence, minutes and other documents of the Chamber, postal expenses and the costs of publications which are thought suitable.

The estimate of income of the Chambers of Commerce may consist of: *A.* The fixed subscription of the members and the donations of those who, although they are not members, desire to help in their formation and support. For this purpose all those Spaniards should be asked who, although they do not reside at the place where the Chamber is to be formed, nevertheless live in the country and have therefore an interest in aiding its formation. — *B.* Aids or subventions granted by the Government. — *C.* Aids which the home Chambers of Commerce may afford them. — *D.* Those contributions which may be started on certain occasions and for the same purposes of the development and prosperity of commerce.

5. The personnel of the Chambers of Commerce must be composed of the most respected Spaniards and of those most learned in economic matters, and care must be taken that the Executive Committee be formed of active persons who are inclined for the work and operations which must necessarily be entrusted to them.

II. Objects of Chambers of Commerce.

The name adopted for these institutions does not signify that their attributes are confined to purely commercial matters, without comprising likewise persons engaged in industries and arts. Several Italian Chambers of Commerce abroad have adopted the words "Commerce and Art" for their title; and this example, and above all, this proposal, deserves to be imitated, as the Arts and especially painting have great importance in Spain.

This being settled, the principal objects of Chambers of Commerce abroad are: 1. The organization of all merchants and industrial persons in a foreign Country in a common centre, whence, besides developing their own interests, they may put them in direct contact with the Metropolis; — 2. The aiding and developing of the diplomatic and consular action of the Government and of the individual initiative of commerce with the Metropolis, for which purpose, besides relations with the central

las relaciones con el Gobierno central y sus agentes, deberán crearlas íntimas y sistemáticas con las Cámaras de Comercio españolas; — 3.° La formación anual de una Memoria dirigida al Ministerio de Estado, sobre la situación, progreso ó retroceso del comercio, de la industria y de la emigración española en el país; — 4.° La publicación en los plazos que se juzguen convenientes, y á ser posible todos los meses, de un Boletín comercial, industrial, marítimo y financiero que pueda ser cambiado con los de otros países y con las publicaciones españolas del mismo género, y esté encaminado á aumentar la ilustración general en materias económicas; — 5.° El envío, tanto al Ministerio de Estado como al de Fomento, de cuantas noticias é informes les fuesen pedidos ó ellos juzgaran oportuno hacer llegar á dichos centros; — 6.° El arbitraje en las cuestiones mercantiles, ya entre los españoles mismos, ya entre estos y los naturales del país, á fin de evitar litigios y perturbaciones y castigar rápidamente la mala fe mercantil; — 7.° La organización de locales comerciales de muestrarios de artículos españoles, á fin de transmitir á la metrópoli las observaciones que al examinarlos hagan los consumidores en cuanto se refiera á las calidades, precios, envases, coloridos, etc. de los productos nacionales. Estos muestrarios han de ser lo más completos posible, y organizados bajo el punto de vista del consumo y del gusto de los habitantes del país respectivo; — 8.° El envío á España de iguales muestrarios de los productos del país que puedan ser objeto de consumo y tráfico en España, facilitando con este motivo á las Cámaras de Comercio españolas y al Gobierno la constitución de un Museo industrial y comercial de productos extranjeros, tan necesario para la industria; — 9.° La preparación de reuniones ó congresos de carácter económico, mercantil ó de navegación que tiendan á desarrollar y promover los intereses económicos de España.

III. Modelo de bases para el Reglamento de una Cámara de Comercio.

Título primero. Nombre, atribuciones, objetos.

Art. **1.** Se constituye una Cámara de Comercio española para el desarrollo de las artes, la industria y el comercio en ....

2. El objeto primordial de esta institución es promover el desarrollo del comercio, centralizar los informes que le puedan ser útiles, proponer al Gobierno las reformas necesarias para su desarrollo, y crear todos aquellos elementos de comercio y navegación que ayuden al desenvolvimiento de las relaciones con España.

3. Las facultades de la Cámara de Comercio serán: *A*. Llevar un registro en el cual se inscriban cuantos comerciantes, industriales y artesanos residan en ... (aquí se podrá comprender todo el país, una parte de él ó un distrito consular). — *B*. Proponer el arbitraje en cuantas cuestiones comerciales ocurran entre españoles y extranjeros ó entre españoles entre sí; pero siempre á condición de que el laudo sea inapelable, á lo cual se comprometerán por escrito las partes litigantes. — *C*. Corresponder, ya con el Ministerio, ya con el Gobierno central, ya conlos Cámaras de comercio españolas, sobre todos los asuntos que se refieran al comercio, á la industria y al arte, y especialmente sobre los Aranceles de Aduana, derechos de navegación y faros, líneas de navegación, factorías y exposiciones. — *D*. Participar al Agente consular cuantas cuestiones puedan referirse al Gobierno del país, é interesen al comercio, al arte ó á la industria. — *E*. Iniciar los estudios necesarios para abrir nuevas vías de comercio ó fomentar las existentes. — *F*. Abrir un registro en el cual todos los comerciantes, industriales y artesanos puedan hacer constar las observaciones que estimen oportuno, y que la Cámara transmitirá al Gobierno si lo juzga necesario. — *G*. Recibir las muestras de los productos españoles, facilitar las casas de comercio ó comisiones que se encarguen de su venta y suministrar los datos sobre precios, fletes, transportes, tarifas de Aduanas, etc., que pidan los comerciantes españoles. — *H*. Publicar una vez al menos cada año la estadística del comercio con la metrópoli, acompañada de cuantas observaciones se encaminaren á su mejora y desarrollo.

4. La Cámara de comercio legalmente constituída representará el comercio español del país, distrito ó localidad donde esté constituída.

Government and its agents, they should create intimate and systematic relations with the Spanish Chambers of Commerce; — 3. Drawing up an annual Report addressed to the Ministry of State, on the position, progress or retrogression of Spanish commerce, industry and emigration in the country; — 4. The publication at intervals, as they deem expedient, and if possible every month, of a commercial, industrial, maritime and financial Bulletin, which may be exchanged with those of other countries and with the Spanish publications of the same kind, and which is started to increase the general information in commercial matters; — 5. Sending to the Ministry of Foreign Affairs and to that of Public Works[1]), all news and reports which are asked for or which they deem suitable for the said centres; — 6. Arbitration on mercantile matters, either between Spaniards, or between them and natives of the country, with the object of avoiding litigation and disturbances and quickly punishing mercantile bad faith; — 7. The organization of commercial places for exhibiting samples of Spanish articles, with the object of sending to the Metropolis the criticisms made by the consumers on examining them in regard to the quality, price, packing, colouring, etc. of the national products. These sampling places must be as complete as possible and organized from the point of view of the consumption and taste of the inhabitants of the country; — 8. Sending to Spain like samples of the products of the country which may be the subject of consumption and traffic in Spain, and with this object, aiding the Spanish Chambers of Commerce and the Government in founding an industrial and commercial Museum of foreign products, an enterprise so necessary to industry; — 9. Arranging meetings or congresses of an economic, mercantile or shipping character which may tend to develope and promote the economic interests of Spain.

III. Model of a constitution of a Chamber of Commerce.

First Title. Name, powers, objects.

Art. **1.** A Spanish Chamber of Commerce is founded for the development of the arts, industry and commerce in . . . . . .

2. The principal object of this institution is to promote the development of commerce, to centralise reports which may prove useful, propose to the Government the reforms necessary for its development, and to form all those elements of commerce and navigation which may help in developing relations with Spain.

3. The following shall be the powers of the Chamber of Commerce: *A.* To keep a register in which to enter all merchants, industrial persons and artisans residing in . . . . . . (this may comprise the whole country, or part thereof or a consular district). — *B.* To propose arbitration in all commercial questions occurring between Spaniards and foreigners or between Spaniards; but always with the condition that the award should be without appeal, which the parties litigating shall undertake in writing. — *C.* To correspond both with the Ministry, the central Government and the Spanish Chambers of Commerce, on all matters relating to commerce, industry and art, and especially on the Customs tariff, dues for navigation and light-houses, lines of navigation, trading-houses and exhibitions. — *D.* To inform the Consular Agent of all questions which may relate to the Government of the country, and which concern commerce, art or industry. — *E.* To initiate the necessary studies for opening new ways of trade or encourage those already existing. — *F.* To open a register in which all merchants, industrial persons and artisans may make the remarks which they deem expedient, and which the Chamber shall transmit to the Government, if it thinks it necessary. — *G.* To receive samples of Spanish products, aid the commercial houses or factors entrusted with their sale and supply facts about prices, freights, carriage, customs tariffs, etc. to Spanish merchants applying for them. — *H.* To publish at least once in each year statistics of commerce with the Metropolis, together with whatever observations may tend to its improvement and development.

4. The Chamber of Commerce, when legally constituted, shall represent the Spanish commerce of the country, district or locality where it is formed.

[1]) The Ministro de Fomento is Minister, not only of Public works, but of Trade and Agriculture (Translator).

Título II. Composición de la Cámara y número de sus individuos.

5. La Cámara de Comercio se compondrá de ... miembros que serán elegidos entre la lista de todos los inscritos.

Toda elección se hará por mayoría de votos.

6. Los miembros elegidos para formar la Cámara de Comercio nombrarán después por mayoría la Junta de gobierno.

Estos nombramientos se harán por escrutinio secreto.

7. El cargo de miembro de la Cámara de Comercio durará ... años, siendo sus individuos reelegibles. Las renovaciones se harán por terceras partes, designándose por medio de sorteo los que han de salir por vez primera.

8. El cargo de miembro de la Cámara es gratuito.

9. Toda resolución de la Cámara se tomará por mayoría de votos.

Para que las deliberaciones sean válidas será preciso que se hallen presentes la mitad más uno de los miembros que la componen; en caso de empate, decidirá el voto del Presidente.

10. La Cámara de Comercio formará su propio reglamento interior. En él se designará la manera de renovar los cargos de la Junta.

11. Todo miembro dimisionario será reemplazado en la primera reunión de la Cámara; pero este nombramiento se extenderá con carácter temporal hasta la reunión de una Asamblea general.

La falta de asistencia durante ... meses á las sesiones de la Cámara se considerará como dimisión del cargo, procediéndose á su reemplazo.

12. Los individuos que pertenezcan á una misma sociedad ó razón social, no podrán formar parte simultaneamente de la Cámara de Comercio. Si fuesen nombrados varios se entenderá que el que haya obtenido mayor número de votos es el único elegido.

13. El Cónsul de España en la localidad, y en su caso el Ministro de España, será Presidente honorario de la Cámara.

Título III. Asambleas electorales, elecciones y juntas generales.

14. Tienen derecho á ser electores y elegibles todos los que ejerzan el comercio, la industria, las artes, los oficios constituídos en cierta categoría, los banqueros, los directores de las casas de comercio, de los establecimientos industriales y de las sociedades anónimas, los Agentes de Cambio y los Presidentes de los gremios que reunan las condiciones siguientes: *A*. Ser español, estar inscrito en el registro oficial del Consulado y hallarse en el pleno uso de los derechos civiles y políticos. — *B*. Ser mayor de 25 años. — *C*. No haber sido declarado en quiebra ó haber sido rehabilitado. — *D*. Residir y ejercer su profesión públicamente en ... — *E*. Inscribirse en el registro especial de la Cámara de Comercio. La inscripción en este registro supone la aceptación de los Estatutos de la Cámara.

15. Todo español que reuna las condiciones anteriores tiene derecho á reclamar su inscripción en el registro de la Cámara de Comercio.

16. Todos los inscritos en dicho registro serán electores. A este efecto, el registro se considerará abierto hasta 10 días antes de la Asamblea general.

17. La Asamblea general se celebrará todos los años en aquellos días y época que estén más conforme con las costumbres del país.

18. La Junta directiva fija la orden del día por sí misma.

19. La Asamblea general será presidida por el Cónsul, y en caso necesario por el Ministro de España en la localidad. Será anunciada con la debida anticipación, publicándose la orden del día.

20. Las decisiones se tomarán siempre por mayoría de los votos presentes.

21. Para discutir un asunto que no esté en la orden del día será preciso una proposición firmada por un número suficiente de electores. Esta proposición deberá presentarse al Presidente de la Cámara de Comercio, al menos con dos días de anticipación á aquel en que haya de celebrarse la Junta general.

Título IV. Recursos y gastos.

22. Los ingresos de la Cámara de Comercio se compondrán: 1.° De la contribución anual que deba pagar cada elector; — 2.° De las subvenciones que facilite el Gobierno central; — 3.° De las subvenciones que faciliten las Cámaras de Comercio de la Península; — 4.° De los donativos, legados, ingresos eventuales, etc.

Title II. Composition of the Chamber and number of its members.

5. The Chamber of Commerce shall be composed of . . . . members who shall be elected from the list of all the registered persons.

Every election shall be made by majority of votes.

6. The members elected to form the Chamber of Commerce shall afterwards appoint the Governing Board by majority of votes.

The appointments shall be made by ballot.

7. The office of member of the Chamber of Commerce shall last . . . . years. The members shall be re-eligible, Renewals shall be made by third parts, those who have to go out on the first occasion being designated by lot.

8. The office of member of the Chamber is gratuitous.

9. Every resolution of the Chamber shall be passed by majority of votes. In order that the resolutions should be valid it is necessary that a bare majority only of the members composing the Chamber should be present; in the case of even voting, the vote of the President shall decide.

10. The Chamber of Commerce shall draw up its own domestic regulations. The mode of renewing the duties of the Board shall be set out therein.

11. Every member who resigns shall be replaced at the first meeting of the Chamber; but this appointment shall last with a temporary character only until the next general meeting.

Failure to attend the meetings of the Chamber during . . . . . months shall be considered as resignation of the office, and the Chamber shall proceed to fill the vacancy.

12. Persons who belong to the same partnership cannot form part of the Chamber of Commerce at the same time. If more than one are appointed, it is understood that the one who has obtained the greatest number of votes is the only one elected.

13. The Spanish Consul in the locality, and the Spanish Minister (if any) shall be honorary President of the Chamber.

Title III. Electoral meetings, elections and general meetings.

14. All who practice commerce, industry, the arts and certain crafts, the bankers, directors of commercial houses, of industrial establishments and of limited companies, Exchange brokers and the Presidents of the trade-unions are entitled to be electors and eligible, if they combine the following conditions: *A*. Of being a Spaniard, inscribed on the official register of the Consulate, and in full use of civil and political rights. — *B*. Of being more than 25 years of age. — *C*. Of not having been declared bankrupt or of having been discharged. — *D*. Of residing and publicly practising his profession in . . . . . . — *E*. Of being inscribed in the special register of the Chamber of Commerce. Inscription in this book presumes acceptance of the Constitution of the Chamber.

15. Every Spaniard who combines the preceding conditions is entitled to claim his inscription in the register of the Chamber of Commerce.

16. All persons inscribed in the said register shall be electors. For this purpose, the register shall be considered open up to ten days before the general meeting.

17. The general meeting shall be held every year on such days and at such times as are most agreeable to the customs of the country.

18. The Governing Board itself arranges the agenda.

19. The general meeting shall be presided over by the Consul, and, if necessary, by the Spanish Minister of the locality. Due notice thereof shall be given, and the agenda published.

20. The resolutions shall always be passed by a majority of the votes present.

21. In order to discuss a matter which is not on the agenda, a motion signed by a sufficient number of the electors shall be necessary. This motion must be presented to the President of the Chamber of Commerce, at least two days before that on which the general meeting is to be held.

Title IV. Income and expenditure.

22. The income of the Chamber of Commerce shall be composed of: 1. The annual subscription to be paid by each elector; — 2. The subvention granted by the central Government; — 3. The subventions granted by the Chambers of Commerce in the Peninsula; — 4. Donations, legacies and casual income, etc.

23. La contribución anual que debe pagar cada miembro inscrito en el registro se fija en ...

24. La interrupción en el pago de la contribución señalada durante 6 meses priva del derecho de pertenecer á la Cámara de Comercio. Para ser reintegrado en él deberán pagarse los atrasos.

Título V. Disposiciones transitorias.

Una vez reunido el suficiente número de adhesiones para constituir la Cámara de Comercio, se nombrará un Comité de organización, que será presidido por el Cónsul de España en la localidad, cuyo Comité redactará el Reglamento, organizará la oficina, buscará el local y convocará en el más breve plazo posible una Junta general de todos los asociados, la cual aprobará el Reglamento, organizará la oficina, buscará el local y convocará en el más breve plazo posible una Junta general de todos los asociados, la cual aprobará el Reglamento y organizará la Cámara en términos suficientes para que pueda entrar en funciones.

Las Cámaras de Comercio se organizarán desde luego en los siguientes puntos: Londres, París, Méjico, Lima, Valparaiso, Buenos Aires, Nueva York, Tánger.

Para organizarlas en cualquier otro punto distinto de los mencionados se consultará necesariamente al Ministerio de Estado.

Madrid 7 de Octubre de 1886. (Gaceta de 8 de Octubre de 1886.)

Ley sobre Hipoteca naval.

Art. 1. Pueden ser objeto de hipoteca los buques mercantes con arreglo á las disposiciones de esta ley.

Para este sólo efecto se considerarán tales buques como bienes inmuebles, entendiéndose modificado en este sentido el art. 585 del vigente Código de Comercio.

2. La hipoteca naval podrá constituirse á favor de determinada persona, ó á su orden, rigiéndose en cada uno de estos casos la transmisión del crédito hipotecario por los preceptos generales de los derechos que respectivamente le conciernen; pero todo endoso de crédito hipotecario naval habrá de inscribirse en el Registro, para que quien lo recibe por este medio pueda exigir su pago mediante el procedimiento que se establece en esta ley.

3. El contrato en que se constituya hipoteca, solamente podrá otorgarse: Por escritura pública. — Por póliza de Agente de Cambio y Bolsa, Corredor de Comercio ó Corredor Intérprete de buque, que firmen también las partes ó sus apoderados. — Por documento privado que firmen los interesados ó sus apoderados, y que presenten ambas partes, ó cuando menos la que consienta la hipoteca, al funcionario encargado de verificar la inscripción, identificando ante él su personalidad.

4. Sólo podrán constituir hipoteca los que tengan la libre disposición de sus bienes[1]), ó en caso de no tenerla, se hallen autorizados para ello con arreglo á la ley.

Los que con arreglo al párrafo anterior tienen la facultad de constituir hipoteca voluntaria, podrán hacerlo por sí ó por medio de apoderado con poder especial para contraer este género de obligaciones, otorgado ante Notario público ó Agente mediador del comercio colegiado.

5. Cuando la propiedad de la nave pertenezca á dos ó más personas, será necesario que preceda acuerdo de todos los partícipes ó de la mayoría de ellos, computada ésta conforme á la regla establecida en el art. 589 del Código de Comercio.

El Director ó naviero nombrado con arreglo á lo dispuesto en el art. 594 del Código, podrá constituir hipoteca cuando estuviera especialmente facultado para ello por los copartícipes, en la forma prevenida en el citado art. 589.

La hipoteca sobre buques en construcción se constituirá por el propietario.

Podrá también constituirla el naviero, si en el contrato de construcción se le hubiese concedido especialmente esta facultad.

6. En todo contrato en que se constituya hipoteca naval se hará constar: 1.° Los nombres, apellidos, estado civil, profesión y domicilio del acreedor y del

---

[1]) Con arreglo á las leyes civiles sólo tienen la libre disposición de sus bienes los mayores de edad que no estuvieren incapacitados por algún otro motivo.

23. The annual subscription to be paid by each member inscribed on the register is fixed at . . . . .

24. Failure to pay the fixed subscription for the period of six months takes away the right of belonging to the Chamber of Commerce. In order to be restored, the subscriptions in arrear must be paid.

Title V. Transitory provisions.

When once a sufficient number of adherents to constitute the Chamber of Commerce has met together, an organizing Committee shall be appointed under the presidency of the Spanish Consul of the locality, and this Committee shall draft the Regulations, organize the office, look for quarters and in the shortest possible time shall convene a general meeting of all the associates, which shall pass the Regulations and organize the Chamber sufficiently for entering upon its functions.

Chambers of Commerce shall forthwith be organized in the following places: London, Paris, Mexico, Lima, Valparaiso, Buenos Aires, New York and Tangiers.

In order to organize them in any other place except those mentioned, the Ministry of State must be consulted.

Madrid, 7 Octobre 1886. (*Gaceta*, of 8 October 1886.)

The Law of Maritime Mortgage.

Art. **1.** Merchant vessels may be mortgaged in accordance with the provisions of this law.

For this purpose only, such vessels shall be considered as immoveable property, and art. 585 of the present Code of Commerce shall be considered to be altered in this sense.

2. A maritime mortgage may be constituted in favour of a certain person, or to his order, and the transfer of the mortgage debt in each of these cases shall be governed by the general precepts of the laws concerning it; but every indorsement of a maritime mortgage debt must be inscribed in the Register, in order that the transferee may demand payment thereof by means of the procedure enacted in this law.

3. The contract constituting a mortgage may only be granted: By notarial instrument; — By contract of a bill broker, an agent on the Exchange, commercial broker or an interpreting ship broker, signed likewise by the parties or their attorneys; — By private document signed by the interested parties or their attorneys, which both parties present, or at least the party who consents to the mortgage presents, to the official entrusted with authenticating the inscription, and proves his identity in his presence.

4. Only those who have the free disposal of their property[1]), or in default, are authorised thereto according to the law, may make a mortgage.

Those who have the power of making a voluntary mortgage in accordance with the preceding paragraph, may do so in person or by means of an attorney with a special power to contract this kind of obligation, executed before a Notary Public or Collegiate commercial agent.

5. When the ownership of the vessel is in two or more persons, the previous agreement of all the co-owners or of the majority of them is necessary, reckoning the majority in conformity with the rule enacted in art. 589 of the Code of Commerce.

A manager or managing owner appointed in accordance with the provisions of art. 594 of the Code, may make a mortgage when he is specifically empowered therefor by the co-owners, as provided in the said art. 589.

A mortgage over vessels in course of construction shall be made by the owner.

The same may be done by the managing owner, if this power is specifically granted him in the building contract.

6. In every contract by which a maritime mortgage is made, there shall appear: 1. The names, surnames, civil status, profession and address of the creditor and debtor;

---

[1]) Only persons of full age who are not subject to any legal incapacity for any reason have the full disposal of their property, according to the Civil Laws.

deudor; — 2.° El importe, en cantidad líquida y determinada, del crédito garantido con hipoteca y de las sumas á que en su caso se haga extensivo el gravamen por costas y por los intereses devengados que excedan de dos años y la anualidad corriente; — 3.° Fecha del vencimiento del capital y del pago de los intereses, y todas las demás estipulaciones que establezcan los contratantes sobre intereses, seguros, exclusión de la hipoteca de diversos accesorios del buque, etc.; — 4.° Expresión de si el crédito hipotecario se constituye á la orden ó simplemente á nombre de persona determinada; — 5.° Nombre, señas distintivas del buque, su descripción completa, número y fecha de su inscripción para navegar y su matrícula. Si el buque hipotecado estuviese en construcción, las condiciones que para su inscripción establece el art. 16; — 6.° El valor ó aprecio que se hace de la nave al tiempo de hipotecarse, si conforme á lo que ordena el art. 46 el acreedor y el deudor establecen en el contrato que este aprecio se tome como tipo para a subasta; — 7.° Cantidad de que responde cada nave, en el caso de que se hipotequen dos ó más en garantía de un solo crédito.

7. Se entenderán hipotecados juntamente con el casco del buque, y responderán de los compromisos anejos á la hipoteca, salvo pacto expreso en contrario, el aparejo, respetos, pertrechos y máquinas, si fuere de vapor, que se hallen á la sazón en el dominio del dueño ó dueños de la nave hipotecada; los fletes devengados y no percibidos por el viaje que estuviera haciendo, ó el último que hubiere rendido al hacerse efectivo el crédito hipotecario; las indemnizaciones que al buque correspondan por abordaje ú otros accidentes que den lugar á aquéllas y por la del seguro caso de siniestro.

8. Si se hubiese pactado que la indemnización por seguro esté comprendida en la hipoteca, ó si, con arreglo á lo dispuesto en el art. 7, nada se hubiera pactado, el dador del préstamo con hipoteca naval podrá en cualquier momento notificar su contrato de préstamo á la Compañía ó Compañías aseguradoras por medio de Notario, Agente de Bolsa y Cambio, Corredor ó Intérprete de buque.

La Compañía á quien se haya hecho la notificación no podrá pagar cantidad alguna á los dueños ó naviero sino de acuerdo y con consentimiento expreso del prestamista.

9. Si la indemnización por el seguro, caso de siniestro, se hubiere excluído expresamente de la hipoteca, el deudor quedará en libertad de asegurar la propiedad de la nave, con arreglo á lo que ordena el Código de Comercio, y el acreedor su crédito hipotecario, pero sin que el seguro en su totalidad, y por ambos conceptos, pueda exceder nunca del valor del buque asegurado, que se computará para este efecto como determina el Código de Comercio.

Si excediese, y por esta causa fuere necesario proceder á reducir el seguro, la reducción se hará primeramente en el del dueño y después en el del acreedor hipotecario.

10. La hipoteca naval constituída en favor de un préstamo que devenga interés, no asegurará en perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.

11. Cuando se hipotequen varias naves á la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad de gravamen de que cada una debe responder.

12. Fijada en la inscripción la parte de crédito de que deba responder cada nave, con arreglo á lo ordenado en el artículo anterior, no se podrá repetir contra ellas en perjuicio de tercero que tenga inscrito su derecho en el Registro, sino por la cantidad á que respectivamente estén afectas y la que á la misma corresponda por razón de intereses.

13. Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin perjuicio de que, si la hipoteca no alcanzara á cubrir la totalidad del crédito, pueda el acreedor repetir por la diferencia sobre las naves que conserve el deudor en su poder, pero simplemente por acción personal y sin otra prelación que la establecida por los principios generales consignados en el Código de Comercio.

14. Para que surta la hipoteca naval los efectos que esta ley le atribuye, ha de estar inscrita en el Registro mercantil de la provincia en que esté matriculado el buque objeto de ella, ó en el correspondiente al lugar de la construcción, cuando se trate de buques no matriculados.

También ha de constar anotada por el Registrador en la certificación del Registro que acredite la propiedad del buque, y que el Capitán de él ha de tener á bordo, con arreglo á lo dispuesto en el art. 612 del Código de Comercio, siendo motivo

— 2. The net and certain amount of the debt secured by mortgage, and the amount of the sums, if any, for costs and interest due beyond that of two years and the current interest, to which the charge extends; — 3. The due date of the capital and that for payment of the interest, and all other stipulations agreed by the contracting parties about interest, insurances, exclusion of divers accessories of the vessel from the mortgage, etc; — 4. Statement of whether the mortgage debt is made payable to "order" or simply to the name of a certain person; — 5. Name and distinctive marks of the vessel, her complete description, number and date of her inscription for navigating and her register. If the mortgaged vessel is in course of construction, the conditions enacted by art. 16 for her inscription; — 6. The value or valuation of the vessel made at the time of the mortgage, if in accordance with art. 46, the creditor and debtor arrange in the contract that this valuation should be taken as the reserve for the auction; — 7. The amount for which each vessel is liable, when two or more are mortgaged to secure a single debt.

7. The following shall be understood to be mortgaged jointly with the hull of the vessel, and shall be liable for the undertakings in the mortgage, saving an express agreement to the contrary: the tackle, spare parts, stores and engines (if she is a steamer) which are at the time in the ownership of the owner or owners of the mortgaged vessel; the freights earned and not received for the voyage which she is making, or the last which she had finished at the time of incurring the mortgage debt; the compensation due to the vessel for collision or other accidents which give rise to it, and what is due as insurance in case of casualty.

8. If it has been agreed that the indemnity by insurance is comprised in the mortgage, or if, in accordance with the provisions of art. 7, nothing has been agreed, the lender of the maritime mortgage loan may at any moment give notice of his contract of loan to the insurance company or companies through a Notary, agent on Exchange, bill broker, broker, or ships interpreter.

The company to which the notice has been given may not pay any sum to the owners or managing owner except by agreement or with the express consent of the lender.

9. If the indemnity by the insurance in case of casualty has been expressly excluded from the mortgage, the debtor shall be at liberty to insure the ownership of the vessel, in accordance with the directions in the Code of Commerce, and the creditor his mortgage debt, but the insurance as a whole, and in both aspects, may never exceed the value of the insured vessel, which shall be reckoned for this purpose as determined by the Code of Commerce.

If it is excessive, and for this reason it is necessary to proceed to reduce the insurance, the reduction shall first be made in the owner's insurance, and afterwards in that of the mortgage creditor.

10. A maritime mortgage in favour of a loan at interest, shall not as against a third person, insure more than the principal and the interest of the two last expired years and the due portion of the current interest.

11. When several vessels are mortgaged at the same time for a single debt, the amount of the charge for which each vessel is to be liable shall be fixed.

12. When the part of the debt for which each vessel is to be liable is fixed on the register, in accordance with the direction in the preceding article, they cannot, as against a third person, who has his right inscribed on the Register, be sued for more than the amount to which they are respectively liable and the interest pertaining thereto.

13. The provisions of the preceding article shall be construed without prejudice to the power of the creditor, if the mortgage does not extend to cover the whole of the debt, to demand the difference against the vessels kept by the debtor in his control, but merely by a personal action and with no other preference than that enacted by the general principles stated in the Code of Commerce.

14. In order that a maritime mortgage may have the effects given by this law, it must be inscribed in the mercantile Register of the province in which the mortgaged vessel is registered, or in that of the place where she was built, in the case of unregistered vessels.

It must likewise be noted by the Registrar on the certificate of the Register which proves the ownership of the vessel, and which the master thereof must have on board, in accordance with provisions of art. 612 of the Code of Commerce, the

suficiente para denegar la inscripción la falta de presentación de este documento. Solamente en el caso de manifestar el dueño del buque hallarse éste en viaje, podrá omitirse la anotación indicada, que deberá hacerse inmediatamente que la nave regrese del viaje para que estaba destinada.

En la inscripción que en el Registro mercantil se verifique de la hipoteca, se hará constar expresamente si la anotación á que se refiere el párrafo anterior de este artículo se hizo, ó si, por el contrario, se omitió, y por qué causa.

15. La primera inscripción de cada buque será la de propiedad del mismo, y expresará la circunstancia que enumera el art. 22 del Código de Comercio. La falta de dicha inscripción será motivo suficiente para denegar cualquiera otra mientras se subsana la falta á instancia de quien tenga interés legítimo.

La inscripción de la propiedad del buque se efectuará en el Registro mercantil, presentando copia certificada de su matrícula ó asiento, expedida por el Comandante de Marina de la provincia en que esté matriculado.

Cuando el buque se matricule para navegar en punto perteneciente á Registro distinto del lugar de su construcción, los Registradores exigirán certificación correspondiente del Registro del lugar en que se efectúa la construcción. Lo mismo harán en los casos de traslación de la matrícula ó inscripción de un buque, cuando éste se hallase ya inscrito ó habilitado para navegar.

16. Para que pueda constituirse hipoteca sobre un buque en construcción, es indispensable que esté invertida en ella la tercera parte de la cantidad en que se haya presupuesto el valor total del casco.

Antes de constituirse la hipoteca, será condición indispensable que en el Registro de naves de la provincia en que el buque se construya se haga la inscripción de la propiedad de la que va á ser objeto de la hipoteca.

A este efecto, el dueño ó armador presentará en el Registro una solicitud, acompañada de certificación expedida por un constructor naval, en que conste el estado de construcción del buque, longitud de su quilla y demás dimensiones de la nave, tonelaje y desplazamientos probables, calidad del buque, si ha de ser de vela ó de vapor, lugar de su construcción y expresión de los materiales que en él hayan de emplearse, coste del casco y plano del mismo buque.

Cuando la construcción se verifique por contrato, deberá inscribirse éste, presentando una copia del mismo, firmada por el dueño ó naviero.

Para que tenga efecto lo dispuesto en los párrafos anteriores, se abrirá en el Registro de naves una sección especial para inscribir los actos y contratos relativos á los buques en construcción.

La inscripción de la propiedad de una nave en construcción tendrá carácter de provisional hasta que, terminada ésta, pueda ser matriculada en el Registro de la Comandancia de Marina.

Cumplido este requisito, se convertirá en definitiva dicha inscripción, en la forma que determinarán los reglamentos.

17. Si el contrato de hipoteca naval se otorgase en país extranjero, para que surta los efectos que esta ley le atribuye, deberá celebrarse necesariamente ante el Cónsul español del puerto en que tenga lugar, y además inscribirse en el registro del Consulado, y se anotará en la certificación de propiedad que debe llevar el Capitán, con arreglo al art. 612 del Código de Comercio.

El Cónsul español transmitirá inmediatamente copia auténtica del contrato al Registro mercantil en que la nave se halle matriculada. El Registrador, luego que reciba la copia, deberá efectuar la inscripción en su Registro.

Con las mismas formalidades deberán otorgarse los demás contratos que se celebren en el extranjero y que hayan de tener prelación ó preferencia sobre el préstamo hipotecario naval en virtud de su inscripción en el Registro mercantil.

18. Para que el precio aplazado en caso de venta de la nave, y los créditos refaccionarios puedan perjudicar á la hipoteca naval, es necesario que consten en el Registro mercantil.

19. Para que pueda inscribirse en el Registro mercantil, surtiendo los efectos que determina el artículo anterior, el crédito por el precio de venta de la nave que no se paga al contado, es indispensable que así se exprese en el contrato, fijándose en cantidad líquida y determinada el precio que se aplaza, fecha en que ha de satisfacerse, interés que devenga, si lo hubiere, y las demás condiciones con que se consiente el aplazamiento.

non-production of this document being sufficient reason for refusing registration. Only when it is shown that the owner of the vessel is on a voyage, may the said annotation be omitted, but it must be made immediately that the vessel returns from the intended voyage.

In the inscription of the mortgage made in the mercantile Register, it shall expressly appear whether the annotation, to which the previous paragraph of this article refers, was made, or if, on the other hand, it was omitted, and for what reason.

15. The first inscription of each vessel shall be that of the ownership thereof, and shall express the particulars enumerated in art. 22 of the Code of Commerce. The absence of the said inscription shall be sufficient reason for refusing any other, until the want is remedied at the instance of a person having a lawful interest.

The inscription of the ownership of the vessel on the mercantile Register shall be effectuated by producing a copy of the certificate of her register or entry, issued by the Commandant of Marine of the province in which she is registered.

When a vessel is registered for navigation at a place which belongs to a Register different from the place where she was built, the Registrars shall require the corresponding certificate of the Register of the place where she was built. They shall do the same in the case of transfer of the register or inscription of a vessel, when she is already inscribed or qualified for navigation.

16. In order that a vessel should be mortgaged while building, it is indispensable that the third part of the amount of the whole estimated value of the hull should have been invested in her.

It shall be an indispensable condition that the ownership of the vessel to be mortgaged should be inserted on the Register of vessels of the province in which she is being built, before making the mortgage.

For this purpose, the owner or managing owner shall present an application at the Registry, accompanied by a certificate issued by a ship-builder, which shows the vessel's state of building, length of her keel and other dimensions of the vessel, probable tonnage and displacements, kind of vessel, whether sailing or steam, place of her building and statement of the materials employed thereon, cost of the hull and plan of the vessel.

When the building is being done by contract, this must be inscribed on production of a copy thereof, signed by the owner or managing owner.

For effectuating the provisions of the previous paragraphs, a special section shall be opened in the Register of vessels for entering the acts and contracts relating to vessels in building.

The inscription of the ownership of a vessel in building shall be provisional until, on the termination of the building, she may be entered in the Register of the Commandant of Marine.

On the completion of this requirement, the said inscription shall be converted into a definitive entry, as the regulations shall determine.

17. If the contract of maritime mortgage is executed in a foreign country, it must, in order that it may have the effects which this law attributes to it, necessarily be made before the Spanish Consul of the port in which it takes places, and also be inscribed in the Register of the Consulate, and it shall be noted in the certificate of ownership which the master must have, in accordance with art. 612 of the Code of Commerce.

The Spanish Consul shall immediately transmit an authenticated copy of the contract to the mercantile Register in which the vessel is registered. The Registrar, must make the inscription in his Register as soon as he receives the copy.

Other contracts made abroad, which are to have precedence or preference over the maritime mortgage loan in virtue of their inscription in the mercantile Register, must be executed with the same formalities.

18. In order that a deferred payment on the sale of the vessel, and debts for repairs, may prejudice the maritime mortgage, they must appear in the mercantile Register.

19. In order that the debt for the purchase money of the vessel which is not paid at the time may be inscribed in the mercantile Register and have the effects determined by the preceding article, it is indispensable that it should be thus expressed in the contract, and the deferred price fixed as a certain net amount, the date on which it is to be paid, the interest thereon if any, and the other conditions of the postponement.

20. Para que pueda anotarse en el Registro el crédito refaccionario, surtiendo los efectos que determina el art. 18, es necesario que el acreedor presente en el Registro de buques el contrato por escrito que en cualquier forma haya celebrado con el deudor para anticiparle de una vez ó sucesivamente cantidades para la construcción ó reparación de la nave objeto de la refacción.

Esta anotación surtirá todos los efectos de la hipoteca.

21. No será necesario que los títulos en cuya virtud se pida la anotación de créditos refaccionarios determinen fijamente la cantidad de dinero ó efectos en que consistan los mismos créditos, bastando que contenga los datos suficientes para liquidarlos al terminar las obras contratadas.

22. Si la nave que haya de ser objeto de la refacción estuviere afecta á hipoteca naval inscrita, no se hará la anotación sino en virtud de convenio unánime, consignado en escritura pública, ó por póliza de Agente de Cambio y Bolsa, ó de Corredor de Comercio ó de Corredor intérprete de buque entre el propietario de aquélla y la persona ó personas á cuyo favor estuviere constituída la hipoteca sobre el objeto de la refacción misma y el valor de la nave antes de empezar las obras, ó bien, á falta de convenio, en virtud de providencia judicial, dictada en expediente instruído para hacer constar dicho valor, con citación y audiencia previa y sumaria de los acreedores hipotecarios anteriores.

El valor que en cualquiera de dichas dos formas se diere antes de empezar las obras á la nave que ha de ser refaccionada, se hará constar en la anotación del crédito refaccionario.

23. El acreedor con hipoteca naval sobre la nave refaccionada cuyo valor se haga constar en la forma prescrita en los artículos precedentes, conservará su derecho de preferencia respecto al acreedor refaccionario, pero solamente por un valor igual al que se hubiere declarado á la misma nave.

24. Cualquiera anotación ó inscripción que se haga en el Registro mercantil contendrá necesariamente la fecha y hora de presentación de los documentos en virtud de los cuales haya de hacerse y la fecha y hora en que se efectuó; la manifestación de hallarse las anotaciones ó inscripciones conformes con los antecedentes de su razón, indicando el legajo correspondiente del Registro en que se hallan archivados; la manifestación de haberse anotado en la certificación de propiedad que debe llevar á bordo el Capitán, ó de no haberse hecho, y su causa.

25. La inscripción de hipoteca naval contendrá todas las condiciones marcadas en el art. 6 de esta ley en sus respectivos casos.

La inscripción del precio aplazado por razón de venta contendrá:

El lugar, día, mes y año en que se otorga el contrato; nombres, apellidos, domicilio y estado civil del comprador y del vendedor.

Precio del buque, cantidad que se paga al contado y que se aplaza en cantidad líquida y determinada, fecha en que ha de satisfacerse, interés que devenga, si lo hubiere, y demás estipulaciones del contrato.

26. La anotación del crédito refaccionario contendrá: Lugar, día, mes y año en que se otorga el contrato, y si el documento en que éste se halle consignado es público ó privado; — Nombres, apellidos, domicilio y estado civil de los contratantes; — Valor dado á la nave antes de empezar las obras con que ha de ser refaccionada, si constare; — Cantidades que se entreguen ó hayan de entregarse para la refacción, ó los datos que hayan de servir para liquidarlas al terminar las obras; fechas en que se hayan hecho ó deban hacerse las entregas; — Las demás estipulaciones referentes á la refacción; — Expresión de los documentos en que consten las cantidades entregadas.

27. Para que pueda efectuarse la inscripción de hipoteca por razón de préstamo ó precio aplazado ó anotación de crédito refaccionario, deberá presentarse en el Registro el documento ó documentos que contengan todas las condiciones necesarias para que pueda efectuarse la inscripción ó anotación. Si alguna de aquéllas faltase, podrá subsanarse la falta mediante relación duplicada, que firmarán las partes. Del documento que haya servido para hacer la inscripción quedará en el Registro una copia simple, en la que el Registrador pondrá nota de ser conforme con el original. Si las condiciones que faltan se adicionan por relación de las partes, un duplicado quedará en el Registro.

28. La hipoteca naval sujeta directa é inmediatamente las naves sobre que se impone al cumplimiento de las obligaciones para cuya seguridad se constituye, cualquiera que sea su poseedor.

20. In order to enter the debt for repairing in the Registry, with the effects determined by art. 18, it is necessary for the creditor to produce the written contract which he has made with the debtor in any form whatever for advancing him moneys once or on successive occasions for building or repairing the vessel which is to be repaired.

This entry shall have all the effects of a mortgage.

21. It shall not be necessary that the title, in virtue of which the entry of repairing debts is sought, should fix the amount of money or goods of which the said debts consist, it being sufficient that it should contain sufficient facts for the purpose of settling them at the termination of the contracted works.

22. If the vessel to be repaired is subject to an inscribed maritime mortgage the entry shall not be made except by virtue of a unanimous agreement, set out in a notarial instrument, or by a contract of a bill broker or an agent on the Exchange, or a commercial broker or an interpreting ship-broker, made between the owner thereof and the person or persons in whose favour the mortgage was made over the object to be repaired and the value of the vessel, made before beginning the work, or in the absence of agreement, by virtue of an order of the judge, pronounced, on a file being formed, so as to show the said value, after citing the prior mortgage creditors and hearing them in a previous verbal process.

The value shown by either of the said methods before beginning the works on the vessel which is to be repaired, shall appear in the entry of the repairing debt.

23. A creditor with a maritime mortgage on a repaired vessel, the value of which appears as provided in the preceding articles, shall keep his priority over the creditor for the repairs, but only for an amount equal to the declared value of the vessel.

24. Every entry or inscription on the mercantile Register shall necessarily contain the date and hour when the documents were presented in virtue of which it has to be effected and the date and hour on which it was done; a statement that the entries or inscriptions agree with the originals thereof, indicating the corresponding file of the Registry in which they are deposited; and a statement that it is noted on the certificate of ownership, which the master has to keep on board, or that it is not noted, and the reason thereof.

25. The inscription of a maritime mortgage shall contain all the conditions set out in art. 6 of this law which are applicable to the respective cases.

The inscription of the deferred purchase price shall contain: The place, day, month and year of the execution of the contract, names, surnames, addresses and civil status of the purchaser and seller.

The price of the vessel, the amount paid down, and the deferred certain and net amount, the date on which it is to be paid, the interest, if any, and the other terms of the contract.

26. The entry of the debt for repairs shall contain: The place, day, month and year of the execution of the contract, and whether the contractual document is public or private; — The names, surnames, addresses and civil status of the contracting parties; — The value given to the vessel before beginning the repairing works, if any; — The amounts paid or to be paid for the repair, or the facts which are to serve for settling them at the termination of the works; — The dates on which the payments are made or should be made; — The other terms referring to the repairing; — Statement of the documents in which the payment of the sums appears.

27. In order to be able to effect inscription of a mortgage for a loan or price payable in the future or an entry of a debt for repairs, the document or documents containing all the terms necessary for that purpose must be presented at the Registry. If any of them are wanting, the want may be made good by means of a memorandum in duplicate, signed by the parties. A simple copy of the document on which the inscription is based shall remain in the Registry, and the Registrar shall note thereon to the effect that it agrees with the original. If the missing terms are added by the memorandum of the parties, a duplicate shall remain in the Registry.

28. A maritime mortgage directly and immediately subjects the mortgaged vessels to the fulfilment of the obligations for the security of which it is made, whoever be the possessor thereof.

29. La hipoteca naval subsistirá íntegra mientras no se cancele respecto de cada buque sobre la totalidad de éste, aunque se reduzca la obligación garantizada, y sobre cualquiera parte del mismo que se conserve, aun cuando la restante haya desaparecido.

30. Ninguna inscripción se hará en el Registro de naves sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos ó que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto ó contrato que se pretende inscribir.

No obstante lo prevenido en el párrafo anterior, podrá extenderse el asiento de presentación antes que se verifique el pago del impuesto; mas en tal caso se suspenderá la inscripción y se devolverá el título al que lo haya presentado, á fin de que en su vista se liquide y satisfaga dicho impuesto. Pagado éste, volverá el interesado á presentar el título en el Registro, y se extenderá la inscripción.

31. Tendrán preferencia sobre la hipoteca naval, y sin necesidad de que consten inscritos ni anotados en el Registro mercantil: 1.° Los impuestos ó contribuciones á favor del Estado, de la Provincia ó del Municipio que haya devengado el buque en su último viaje ó durante el año inmediatamente anterior; — 2.° Los derechos de pilotaje, tonelaje y los demás y otros de puertos, y los sueldos debidos al Capitán y tripulación, devengados aquellos derechos y estos sueldos en el último viaje del buque; — 3.° El importe de los premios de seguro de la nave de los dos últimos años, y si el seguro fuese mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido; — 4.° Los créditos á que se refieren los números 7 y 10 del art. 580 del Código de Comercio.

32. También tendrán preferencia sobre la hipoteca naval siempre que se llenen las condiciones que se establecen en los artículos siguientes: 1.° Las cantidades tomadas á préstamo á la gruesa por el Capitán del buque durante el último viaje; — 2.° El importe de la avería gruesa que corresponda satisfacer al buque en el último viaje; — 3.° Los créditos refaccionarios contraídos por el Capitán también durante el último viaje; — 4.° Los derechos ó créditos litigiosos que antes de la inscripción hipotecaria hubiesen sido anotados preventivamente en el Registro, en virtud de mandamiento judicial cuando queden reconocidos en sentencia ejecutoria, ó en transacción otorgada ó aprobada por todos los interesados.

33. Para que el préstamo á la gruesa á que se refiere el artículo anterior tenga la preferencia que en el mismo se consigna, se necesita que el préstamo se haya tomado en el caso que establece expresamente el art. 611 del Código de Comercio, y observando todas las formalidades consignadas en el art. 583 del propio Código.

La anotación provisional que, con arreglo al último de los artículos citados, ha de hacer el Juez ó Tribunal, el Cónsul ó Autoridad local, en la certificación de la hoja de inscripción que el Capitán ha de llevar á bordo con arreglo al art. 612, surtirá todos sus efectos respecto á la preferencia, mientras el buque no regrese al puerto de salida.

Tan pronto como esto suceda, el dueño del buque, ó Capitán, deberá presentar la hoja de inscripción para que el préstamo se inscriba en el Registro mercantil dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas en que el buque sea admitido á libre plática.

Si el puerto de regreso no pertenece al Registro mercantil en que el buque está inscrito, se presentará dentro del indicado plazo de cuarenta y ocho horas al Juez ó Autoridad local ó de Marina, el cual hará constar la presentación del documento y mandará librar exhorto al punto de inscripción del buque.

Hecha la presentación dentro de ese plazo, la inscripción surtirá el efecto de conservar la preferencia que establece el artículo anterior; para todos los demás que la ley atribuye á la inscripción, se considerará como fecha la del día en que se anotó provisionalmente la certificación de inscripción de propiedad del buque. Si se presentase después del indicado plazo, surtirá su efecto, pero sólo desde la fecha de la inscripción del Registro mercantil.

Sin perjuicio de las obligaciones que este artículo impone al dueño y al Capitán, los prestamistas ó las personas á quienes ellos lo encomendaren, podrán gestionar la inscripción del préstamo en el Registro.

34. Para que el importe de la avería gruesa que corresponda satisfacer al buque en el último viaje tenga la preferencia que se establece en el art. 32, será necesario: 1.° Que se haya procedido en la forma que establece el Código de

29. The maritime mortgage shall last until it is cancelled as regards the whole of each vessel, although the guaranteed obligation is reduced, and as regards any part thereof which is preserved, although the remainder has disappeared.

30. No inscription shall be made in the Shipping Register unless the enacted taxes or those which may be enacted by the laws, are proved to have been previously paid, if they apply to the act or contract which it is proposed to register.

Notwithstanding the provision of the preceding paragraph, the entry of the presentation may be written out before payment of the tax is made; but in that case inscription shall be stayed and the title returned to the person who presented it, so that the said tax may be paid on inspection thereof. After this has been paid, the interested person shall again present the title at the Registry, and the inscription shall be written out.

31. The following shall have preference over a maritime mortgage, without the necessity of their being inscribed or entered in the mercantile Register: 1. The duties or taxes in favour of the State, Province, or Municipality which are due by the vessel on her last voyage or during the year immediately preceding; — 2. Pilot dues, tonnage and other port dues, and the pay due to the master and crew, when those dues and pay are owing on the last voyage of the vessel; — 3. The amount of the insurance premiums of the vessel for the two last years, and, if the insurance is mutual, the amount of the two last calls which have been apportioned; — 4. The debts referred to by art. 580, Nos. 7 and 10 of the Code of Commerce.

32. The following shall likewise have preference over the maritime mortgage, provided that the conditions enacted in the following articles are fulfilled: 1. The sums borrowed by the master on bottomry bond during the last voyage; — 2. The amount of the general average which falls to the vessel to pay on the last voyage; — 3. The debts for repairs contracted by the master, also during the last voyage; — 4. The rights and debts in litigation, which have been entered, as a caution, on the Register before the inscription of the maritime mortgage, under an order of a judge, when they have been acknowledged in an executive action, or in a compromise executed or approved by all the persons interested.

33. In order that the bottomry loan, referred to in the preceding article, may have the preference indicated therein, it is necessary that the loan should have been borrowed when and as expressly enacted by art. 611 of the Code of Commerce, on observing all the formalities set out in art. 583 of the same Code.

The provisional entry which, according to the last of the said articles, has to be made by the Judge or Tribunal, Consul or Local Authority, in the certificate of the registration which the master has to keep on board, in accordance with art. 612, shall have all its effects as regards preference, until the vessel returns to the port of departure.

As soon as this happens, the owner of the vessel or the master must produce the certificate of registration in order that the loan may be inscribed in the mercantile Register within the space of forty eight hours after the vessel has been admitted to free pratique.

If the port of return does not belong to the mercantile Register in which the vessel is inscribed, the document shall be presented within the said space of 48 hours to the Judge or Local or Naval Authority, which shall enter the fact of its presentation and order a letter of request to issue to the place of the vessel's register.

When presentation has been effected within this time, the inscription shall have the effect of preserving the preference enacted by the preceding article; for all other effects attributed to inscription by the law, the date of the day on which the certificate of inscription of the vessel's ownership was provisionally entered shall be considered the date of the inscription.

Without prejudice to the obligations imposed by this article on the owner and master, the lenders or the persons whom they empower, may apply for inscription of the loan in the Register.

34. In order that the amount of general average which falls to the vessel to pay on the last voyage may have the preference enacted by art. 32, it shall be necessary: 1. That it has originated as enacted by arts. 813 and 814 of the Code of Com-

Comercio en sus arts. 813 y 814; — 2.° Que los gastos que se hayan hecho y los daños que se hayan causado sean correspondientes á la avería gruesa; — 3.° Que la justificación de la avería se haya efectuado siempre con intervención de la Autoridad judicial española, si fuere español el puerto de arribada ó el de descarga; y si fuere extranjero, con intervención de la Autoridad consular, y si no existiese, ante la Autoridad local. El resultado se anotará en la certificación de inscripción de propiedad que debe llevar el Capitán; — 4.° Que la liquidación de la avería se haya efectuado con arreglo á las disposiciones del Código de Comercio, y consignado su resultado en la misma certificación.

Si la liquidación se verifica en puerto español del domicilio del dador del préstamo, éste será citado para intervenir en la liquidación de la avería; pero su derecho quedará limitado en este caso á consignar su protesta cuando, á su juicio, no se hubiere procedido con arreglo á derecho. Si no consigna protesta alguna, se entiende que consiente la liquidación de la avería, y perderá todo derecho para impugnarla.

La anotación provisional de la justificación de la avería, lo mismo que la anotación provisional de su liquidación, surtirá todos sus efectos respecto á la preferencia mientras el buque no regrese al puerto de salida, siendo aplicables todas las disposiciones que contiene el artículo anterior en sus párrafos tercero y cuarto.

35. Para que el importe de los créditos refaccionarios contraídos por el Capitán durante el último viaje tenga la preferencia que se establece en el art. 32, será necesario: 1.° Que la reparación del buque se haya hecho en los casos previstos en la regla 6.ª del art. 610 del Código de Comercio, y con el acuerdo que en la misma regla se establece; — 2.° Que para hacer las reparaciones y contraer los créditos refaccionarios se haya procedido en la forma que establece el art. 583 del propio Código; — 3.° Que se haya practicado la anotación provisional que ordena el citado art. 583.

La anotación provisional surtirá todos los efectos respecto á la preferencia mientras el buque no regrese al puerto de salida, siendo aplicables todas las disposiciones que contiene el art. 33 en sus párrafos tercero y cuarto.

Los créditos refaccionarios no comprendidos en este artículo se regirán por las reglas establecidas en los artículos 20, 21, 22, 23 y 36 de esta ley.

36. Ningún crédito, hecha excepción de los enumerados en el art. 31, tendrá preferencia sobre la hipoteca naval, si no está inscrito en el Registro mercantil correspondiente.

La mujer casada, aunque consten inscritas sus aportaciones ó derechos en el libro de comerciantes del Registro mercantil, no tendrá prelación respecto á los créditos ó derechos de tercero inscritos ó anotados sobre la nave, cuando no aparezca á su favor hipoteca expresa sobre la misma nave, ó la obtenga conforme al derecho común, la cual hipoteca surtirá sus efectos desde que fuere inscrita en el Registro de buques en la forma prevenida en la presente ley.

Los actos y contratos relativos á una nave que, según las disposiciones del Código de Comercio y de esta ley, son inscribibles en el Registro mercantil, no surtirán efecto en cuanto á tercero, sino desde la fecha de su inscripción, salvo lo dispuesto en el art. 32.

37. Se considerará como fecha de la inscripción, para todos los efectos que ésta deba producir, la fecha del asiento de presentación, que deberá constar en la inscripción misma.

38. Para determinar la preferencia entre dos ó más inscripciones de una misma fecha relativas á una misma nave, se atenderá á la hora de presentación en el Registro de los títulos respectivos.

39. El acreedor con hipoteca naval podrá ejercitar su derecho contra la nave ó naves afectas á él en los casos siguientes: 1.° Al vencimiento del plazo estipulado para la devolución del capital; — 2.° Al vencimiento del plazo estipulado para el pago de los intereses; — 3.° Cuando el deudor fuese declarado en quiebra ó concurso; — 4.° Cuando cualquiera de los buques hipotecados sufriese deterioro que le inutilice para navegar; — 5.° Cuando el buque se enajenase á un extranjero; — 6.° Cuando se cumplan las condiciones pactadas como resolutorias del contrato de préstamo, y todas las que produzcan el efecto de hacer exigible el capital ó los intereses; — 7.° Cuando ocurriese la pérdida de cualesquiera de los buques hipotecados, salvo pacto en contrario.

merce; — 2. That the expenses incurred and the damages caused should be part of general average; — 3. That the proof of the damage should always be taken with the intervention of the Spanish judicial authority, if the port of refuge or of unloading is Spanish; and if foreign, with the intervention of the Consular authority and if there is none, before the local authority. The result shall be noted in the certificate of inscription of ownership which the master has to keep; — 4. That the adjustment of the average should be made according to the provisions of the Code of Commerce, and the result noted on the same certificate.

If the adjustment is made in a Spanish port of the address of the lender, he shall be summoned to take part in the adjustment of the loss; but in this case, his right shall be limited to making his protest, when, in his judgment, it has not proceeded according to law. If he makes no protest, it is understood that he consents to the adjustment of the average and shall lose his right to impugn it.

The provisional note of the proof of the average, as well as the provisional note of its adjustment, shall have all its effects with regard to preference so long as the vessel does not return to the port of departure, and all the provisions contained in the preceding article, paragraphs 3 and 4 shall apply.

35. In order that the debts for repairing contracted by the Master during the last voyage may have the preference enacted in art. 32, it shall be necessary: 1. That the repair of the vessel has been made in the cases provided for by rule 6 of art. 610 of the Code of Commerce, and as enacted in the said rule; — 2. That for the purpose of making the repairs and contracting the necessary debts the form enacted in art. 583 of the same Code has been followed; — 3. That the provisional note, as ordered by the said art. 583 has been made.

The provisional note shall have all the effects regarding the preference as long as the vessel does not return to the port of departure, and all the provisions contained in art. 33, paragraphs 3 and 4 shall apply.

The debts for repairing not comprised in this article shall be governed by the rules enacted in arts 20, 21, 22, 23, and 36 of this law.

36. With the exception of those enumerated in art. 31, no debt shall have preference over the maritime mortgage, if it is not inscribed in the proper mercantile Register.

A married woman, although her property or rights brought by her into the conjugal partnership are inscribed in the merchant's book in the mercantile Register, shall have no preference over the inscribed or noted credits or rights of a third person over the vessel when there is no express mortgage in her favour over the same vessel, or she obtains it according to the common law, which mortgage shall take effect from the time of its inscription in the Register of vessels in the form provided in the present law.

The acts and contracts relating to a vessel which, according to the provisions of the Code of Commerce and this law, are capable of registration in the mercantile Register, have no effect as regards third parties, except from the date of their inscription, saving the provisions of art. 32.

37. The date of the entry of the presentation, which must appear in the inscription itself, shall be considered as the date of the inscription for all the effects which the latter should produce.

38. For determining priority (preference) between two or more inscriptions of the same date and relating to the same vessel, attention shall be paid to the hour when the respective titles were presented in the Registry.

39. A creditor having a maritime mortgage may enforce his right against the vessel or vessels subject thereto in the following cases. 1. At the arrival of the agreed time for the return of the principal; — 2. At the arrival of the agreed time for the payment of the interest; — 3. When the debtor has been declared bankrupt or insolvent; — 4. When any of the mortgaged vessels are so deteriorated as to be useless for navigation; — 5. When the vessel is sold to a foreigner; — 6. When conditions agreed as subsequent (resolutive) to the contract of loan are not fulfilled, and all those which have the effect of making principal or interest payable are fulfilled; — 7. When any of the mortgaged vessels are lost, saving an agreement to the contrary.

En los casos 4.° y 7.° sólo será exigible la cantidad asegurada con el buque inutilizado ó perdido, salvo pacto en contrario.

40. Los buques gravados con hipoteca no podrán enajenarse á un extranjero sin consentimiento del acreedor hipotecario ó sin que previamente el vendedor consigne el importe del crédito asegurado con la hipoteca, en la forma prevenida en los artículos 1.177 á 1.180 del Código civil[1]).

La venta otorgada con infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior será nula, y el vendedor incurrirá en la pena señalada en el art. 547 del Código penal[2]).

41. Vencido y no pagado el préstamo hipotecario, ó cualquiera fracción de él ó sus intereses, el acreedor requerirá al deudor para que satisfaga su crédito, ya judicialmente ó por Notario, Agente de Bolsa ó Cambio, Corredor ó Intérprete de buque, en el lugar del domicilio señalado ó elegido para este efecto al contratar el préstamo. Si el deudor hubiese cambiado de domicilio, el requerimento se hará en el lugar que hubiese señalado, si lo hubiera puesto en conocimiento del acreedor.

Si hubiere cambiado de domicilio y no se hallase en el último designado, el requerimiento se hará en éste, entendiéndose con los dependientes, si los tuviere; en defecto de éstos, con su mujer, hijos ó criados, y en su defecto, con un vecino con casa abierta, á quienes entregará copia del requerimiento.

42. Requerido el deudor en cualquiera de las formas marcadas en el artículo anterior, si no satisficiera íntegramente su deuda en el término de tercer día, el acreedor podrá reclamar del Juez competente el pago de las cantidades adeudadas y el embargo de la nave ó naves hipotecadas.

43. Cerciorado el Juez de la legalidad de la deuda por la presentación del documento en que se contrajo el préstamo, siempre que apareciese inscrito en el Registro, y de la falta de pago por la presentación del acta de requerimiento, acordará el embargo y mandará se proceda á la venta del buque ó buques hipotecados, por los trámites establecidos por la ley de Enjuiciamiento civil para la vía de apremio respecto á bienes inmuebles, si la causa que motiva la petición del acreedor fuese la primera ó la segunda del art. 39 de esta ley.

Si se fundase en la tercera, para declarar el embargo y la venta será necesario que se presente testimonio de la ejecutoria en que conste la declaración de la quiebra ó concurso.

Si fuere la cuarta, certificación expedida por la Autoridad competente, en virtud del reconocimiento que establece el art. 578 del Código de Comercio, de que el buque está inutilizado para navegar.

Si fuere la quinta, testimonio auténtico de la escritura de venta de la nave ó naves á súbdito extranjero, inscrita en el Registro de la propiedad correspondiente.

44. Cuando la causa que motiva la petición del acreedor sea la sexta ó séptima del art. 39, ó cuando sean la tercera, cuarta y quinta del propio artículo, y no acompañe los documentos que en sus respectivos casos marca el artículo anterior, se procederá con arreglo á los trámites establecidos por la ley de Enjuiciamiento civil para los incidentes; pero la sentencia se ejecutará por los que ordena la misma ley para el procedimiento de apremio respecto á bienes inmuebles[3]).

---

[1]) Véanse estos artículos en la parte del Código civil publicada á continuación del Código de comercio.

[2]) El art. 547 del Código penal dice así: El que defraudare á otro en la sustancia, cantidad ó calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio será castigado: — 1.° Con la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio si la defraudación no excediere de 100 pesetas. — Con la de arresto mayor en su grado medio ó presidio correccional en su grado mínimo, excediendo de 100 pesetas y no pasando de 2.500. — Con la de presidio correccional en sus grados mínimo y medio, excediendo de 2.500 pesetas. — He aquí ahora la duración de las citadas penas: — *La de arresto mayor*, en su grado mínino, de un mes y un día á dos meses. — En su grado medio, de dos meses y un día á cuatro meses. — En su grado máximo de cuatro meses y un día á seis meses. — *La de prisión correccional:* en su grado mínimo, de seis meses y un día á dos años y cuatro meses. — En su grado medio: de dos años, cuatro meses y un día, á cuatro años y dos meses.

[3]) Este procedimiento está contenido en los artículos 1481 á 1531 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y su contenido puede verse resumido en las páginas 68 á 70 «*Del procedimiento judicial en las cuestiones civiles mercantiles*» que precede al texto del Código de comercio.

In cases 4 and 7 only the amount secured on the vessel which has become useless or lost shall be payable, saving an agreement to the contrary.

40. Mortgaged vessels cannot be sold to a foreigner without the consent of the mortgagee or unless the vendor previously pays the debt secured by the mortgage into Court, as provided by articles 1177 to 1180 of the Civil Code[1]).

A sale carried out in breach of the provisions of the preceding paragraph shall be void, and the vendor shall incur the penalty set forth in article 547 of the Penal Code[2])

41. When the mortgage debt is due and is not paid, or some portion or the interest thereof is not paid, the creditor shall require the debtor to pay his debt, either judicially or by a Notary, Exchange agent, bill broker or ships interpreter, at the place of the address stated or chosen for that purpose on contracting the loan. If the debtor has changed his address, the demand shall be made in the place which he has stated, if he has brought it to the notice of the creditor.

If he has changed his address and is not found in the one last stated, the demand shall be made there addressed to his subordinates, if any, and in default thereof to his wife, children or servants, and in default thereof to a neighbour in residence, to whom a copy of the demand shall be delivered.

42. If the debtor, after being required in any of the ways set out in the preceding article, does not pay his debt in full within the term of the third day, the creditor may apply to the competent Judge for payment of the sums due and arrest of the mortgaged vessel or vessels.

43. The Judge on being satisfied of the lawfulness of the debt, by production of the instrument by which he contracted the loan, whenever it is inscribed in the Register, and of the failure to pay, by production of the record of the demand, shall order the arrest and the sale of the mortgaged vessel or vessels by the procedure enacted by the law of Civil Procedure for the procedure of *apremio* on immoveable property, if the reason which prompts the application of the creditor is the first or second of art. 39 of this law.

If it is based on the third, in order to declare the arrest and sale, it shall be necessary to present a certified copy of the final judgment in which the declaration of bankruptcy or insolvency appears.

If it is the fourth, a certificate issued by the competent authority by virtue of the survey enacted by art. 578 of the Code of Commerce, that the vessel is unfitted for navigation.

If it is the fifth, an authentic certified copy of the instrument of sale of the vessel or vessels to a foreign subject, inscribed in the corresponding Register of Ownership.

44. When the reason which causes the application of the creditor is the sixth or seventh of art. 39, or when it is the third, fourth or fifth of the same article, but unaccompanied by the documents respectively defined by the previous article, the proceeding shall follow the enactment of the Law of Civil Procedure for interlocutory proceedings, but the judgment shall be carried into execution as enacted by the same law for the proceeding of *apremio* with regard to immoveable property[3]).

[1]) See these articles in the part of the Civil Code published at the end of the Code of Commerce.

[2]) Art. 547 of the Penal Code says as follows: Whoever defrauds another in the substance, quantity or quality of the things which he delivers him in virtue of an obligatory title shall be punished: — 1. With the penalty of greater arrest in its minimum and medium degrees, if the fraud did not exceed 100 pesetas. — With that of greater arrest in its medium degree or correctional imprisonment in its minimum degree, when it exceeds 100 pesetas but not 2500 pesetas. — With that of correctional imprisonment in its minimum and medium degrees, when it exceeds 2500 pesetas. — The following is the duration of the said punishments: — That of greater arrest in its minimum degree, from one month and one day to two months. — In its medium degree, from two months and one day to four months. — In its maximum degree, from four months and one day to 6 months. — That of correctional imprisonment: in its minimum degree, from 6 months and one day to two years and four months. — In its medium degree: from two years, four months and one day, to four years and two months.

[3]) This procedure is contained in arts. 1481 to 1531 of the Law of Civil Procedure, and their contents may be seen summarised in pages 68 to 70 "Judicial Procedure in mercantile civil matters" which precedes the text of the Code of Commerce.

45. No obstante lo dispuesto en el art. 42 de esta ley, no se llevará á efecto el embargo del buque cuando al tiempo de efectuarse se hallare cargado y dispuesto para hacerse á la mar, si cualquiera interesado en la expedición diere fianza que el Juez estime suficiente de que regresará dentro del plazo fijado en la patente, y obligándose, caso contrario, aunque fuese fortuito, á satisfacer la deuda. Pero siempre se requerirá al Capitán ó dueño del barco ó su representante á que, concluído el viaje para que fué despachado, regresará al puerto, llevándose entonces á efecto el embargo.

Tanto el embargo como el requerimiento se anotarán en el Registro mercantil y en la certificación de propiedad que debe llevar á bordo el Capitán.

46. Cuando en el contrato de préstamo se haya así pactado, se tomará como tipo para la primera subasta el que se hubiere dado á la nave, si lo pidiere el acreedor. Si no lo solicitase, el precio se fijará por peritos en la forma que establece la ley de Enjuiciamiento civil[1]).

47. Si se trata de un buque en construcción, después del trámite de embargo, podrá, á voluntad del acreedor hipotecario, ó procederse á la venta en pública subasta de lo construído, ó bien admitirlo en pago de su crédito por el precio que fijen peritos nombrados con arreglo á lo que dispone la ley de Enjuiciamiento civil en la vía de apremio[2]).

Si el valor de lo construído resultase inferior al crédito, en lo que falte se considerará como meramente personal. Si el precio de la nave fuese superior, el acreedor tendrá que consignar el exceso dentro del tercer día, á contar desde que se hizo la adjudicación.

48. Será Juez competente para conocer de la demanda en que se ejerciten acciones derivadas del derecho de hipoteca naval, á elección del actor, salvo el caso de sumisión expresa ó tácita: 1.° El del lugar en que se hubiere celebrado el acto ó contrato en que se constituyó la hipoteca; — 2.° El del puerto en que haya entrado el buque hipotecado; — 3.° El del domicilio del demandado; — 4.° El del lugar en que radique el Registro en que fué inscrita la hipoteca.

49. La acción hipotecaria naval prescribe á los diez años, contados desde que pueda ejercitarse, conforme á las disposiciones de esta ley.

50. Las inscripciones de hipoteca naval sólo pueden ser canceladas: 1.° Por consentimiento del acreedor hipotecario ó de sus causa-habientes, hecho constar por escritura pública ó acta notarial, póliza de Agente de Bolsa, Corredor, Corredor Intérprete de buques, ó por comparecencia personal del acreedor ó de su apoderado ante el Registrador, dando éste fe de conocimiento del interesado; — 2.° Por auto ó sentencia firme.

Las anotaciones preventivas de derecho litigioso serán canceladas cuando por resolución firme queden desestimadas ó sin curso las demandas que las hubieren ocasionado. Declarado ejecutoriamente el derecho, la anotación será convertida en inscripción, y ésta surtirá sus efectos desde la fecha de aquélla. Toda anotación preventiva, toda inscripción en que sea convertida y toda cancelación que se efectúe en el Registro, se harán constar tan pronto como sea posible en el certificado de inscripción de propiedad que debe llevar á bordo el Capitán.

En el asiento de cancelación constará necesariamente la hora, día, mes y año en que se ha efectuado, y el acto ó contrato en virtud del que se ha hecho.

51. En el caso de ser declarado en concurso el propietario de un buque, se considerarán comprendidos en el art. 1.923 del Código civil los créditos asegurados con hipoteca del mismo buque y los demás que tengan prelación sobre ellos, conforme á las disposiciones de esta ley[3]).

---

[1]) Vease lo quo acerca del *Dictamen* poricial se dice on las pag. 49 y 50. *Del procedimiento judical en las cuestiones civiles mercantiles.*

[2]) Véase la nota penúltima.

[3]) El art. 1923 del Código civil determina el derecho de preferencia que tienen los respectivos créditos sobre los bienes inmuebles del concursado por el orden siguiente: — 1.° Los créditos á favor del Estado, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de la última anualidad, vencida y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos; — 2.° Los créditos de los aseguradores sobre los bienes asegurados, por los premios del seguro de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido; — 3.° Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados ó inscritos en el Registro de la propiedad, sobre los bienes hipotecados

45. Notwithstanding the provisions of art. 42 of this Law, the arrest of a vessel shall not be carried into effect when the vessel is loaded and ready to sail at the time of the arrest attaching, if any person interested in the voyage gives security to the satisfaction of the Judge that she will return within the time fixed in the charter-party and binds himself to pay the debt in case of her non-return, even if it is caused by accident. But the master or owner of the vessel or his representative shall always be required, on the conclusion of the voyage for which she was despatched, to return to the port, upon which the arrest shall become effective.

Both the arrest and the requisition shall be noted in the mercantile Register and in the certificate of ownership, which the master has to keep on board.

46. When it has been thus agreed in the contract of loan, the price attributed to the vessel shall be taken as the reserve price at the first auction, if the creditor applies for it. If he does not so apply, the price shall be fixed as enacted by the Law of Civil Procedure[1]).

47. If it concerns a vessel in building, after the proceeding for arrest, either a sale by public auction of what has been built may take place, or at the election of the mortgage creditor it may be allowed in payment of his debt at the price fixed by experts, appointed as provided by the Law of Civil Procedure for the proceeding by *apremio*[2]).

If the value of what has been built proves less than the debt, the deficiency shall be held to be only a personal debt. If the price of the vessel is greater, the creditor must pay the excess into Court within the third day, reckoned from the adjudication.

48. The following shall be the competent judge to try the Claim in actions derived from the law of maritime mortgage, at the election of the plaintiff, except in the case of express or implied submission: 1. The Judge of the place of making the act or contract constituting the mortgage; — 2. Of the port which the mortgaged vessel has entered; — 3. Of the address (domicil) of the defendant; — 4. Of the place of the Register in which the mortgage was inscribed.

49. The action based on a maritime mortgage is prescribed by the expiration of ten years, reckoned from the time when it could have been brought according to the provisions of this law.

50. The inscriptions of a maritime mortgage may only be cancelled: 1. By consent of the mortgagee or of his successors in right, shown by a notarial document, contract of an Exchange agent, broker, interpreting ship-broker or by the personal appearance of the creditor or his attorney before the Registrar, the latter vouching for the knowledge of the interested party; — 2. By final decree or judgment. Cautionary entries referring to the right in litigation shall be cancelled when the claims which have occasioned the entries are dismissed or stayed by a final decision. If the right is declared in a final judgment, the annotation shall be converted into inscription, and shall take effect from the date of the annotation. Every preventive annotation, every inscription into which it may be converted and every cancellation effected in the Register, must be stated as promptly as possible in the certificate of registration of ownership which the master must keep on board.

It is necessary that the hour, day, month and year on which it was effected should appear in the entry of cancellation, and the act or contract in virtue of which it is made.

51. If the owner of a vessel is declared insolvent, the debts secured by mortgage of the vessel and the others which have preference over them in accordance with the provisions of this law shall be considered to be included in art. 1923 of the Civil Code[3]).

---

1) See what is said about *Dictamen pericial* on pages 49 and 50. "Judicial proceedings in mercantile civil matters."

2) See the last note but one.

3) Art. 1923 of the Civil Code determines the preferential rights of the respective debts on the immoveable property of the insolvent in the following order: 1. Debts to the State on the property of the tax-payers, for the amount of the last annual payment due and not paid, of the taxes which burden them; — 2. Debts of the insurers, on the property insured, for two years' premiums of insurance; and, if the insurance is mutual, for the two last calls which have been apportioned; — 3. Mortgage debts and debts for repairing, noted and inscribed in the Register of Ownership, on the property which has been mortgaged or which has been

Si fuese declarado en quiebra, se considerarán comprendidos dichos créditos en el art. 914 del Código de Comercio.

52. Entretanto que el Gobierno dicta los reglamentos necesarios para la ejecución de la presente ley, los Registradores se atendrán, en cuanto á la manera de llevar los registros, publicidad de los mismos y tarifa de sus operaciones, á lo establecido en esta ley, y á la vez á lo dispuesto en el reglamento interino de 21 de Diciembre de 1885, en cuanto no se oponga á los preceptos de la misma. Serán aplicables los derechos del núm. 7.° de las tarifas autorizadas por dicho reglamento á las inscripciones de constitución y cancelación de las hipotecas, y la de los núm. 9.° y 10.° á las transcripciones de una inscripción anterior y notas que se pongan respectivamente en los libros de Registro y en los certificados de los buques.

Los Registradores consignarán siempre al pie de su firma el importe de sus derechos, y el artículo ó artículos del Arancel que los determinen.

53. Quedan derogadas todas las leyes y demás disposiciones anteriores que sean contrarias á la presente ley.

Artículos adicionales.

Art. 1. Las Compañías de crédito que se establezcan después de la promulgación de la presente ley que se propongan, sea con objeto especial y exclusivo, sea como una de sus operaciones, la de prestar con garantía de naves, podrán emitir cédulas ú obligaciones de crédito naval.

Las Compañías de crédito existentes al tiempo de empezar á regir esta ley que tengan señalada entre las operaciones á que puedan dedicarse la de prestar sobre buques, conforme á lo ordenado en el art. 175 del Código de Comercio, no podrán efectuar emisión alguna de obligaciones ó cédulas de crédito naval sin modificar al efecto sus estatutos, previos los procedimientos y requisitos establecidos en los mismos y en la escritura de constitución de la Sociedad y sin que preceda la inscripción del nuevo pacto en el Registro mercantil, con arreglo á lo que ordena el Código de Comercio en su art. 25.

2. Las obligaciones ó cédulas de crédito naval que emitan las Compañías autorizadas para ello, serán nominativas ó al portador, con amortización ó sin ella, y con lotes reembolsables en épocas fijas ó por vía de sorteo, con ó sin premio.

El capital nominal de estas obligaciones y el importe de los premios, si los hubiere, que estén en circulación, no excederá del importe del capital de los préstamos contratados.

Cuando en virtud de la amortización, ó por cualquier otra causa, los acreedores hipotecarios reembolsasen todo ó parte de sus préstamos, se amortizará una suma igual de obligaciones que estén en circulación, á no ser que en el intermedio se hubieran celebrado otros contratos de préstamo por una suma igual ó mayor.

La Ley de 19 de setiembre de 1896 fué una Ley cuyo principal objeto era el de un proyectado empréstito de 1.000 millones de pesetas que habían de entregar las Compañías de ferrocarriles á cambio de una prórroga de sus concesiones. Los artículos 3 y 4 de esta se referían al modo y manera como las citadas Compañías podían llegar á celebrar convenios con sus acreedores sin necesidad de tener que ir á la suspensión de pagos ni á la quiebra.

El empréstito fracasó, y parecía por tanto que los citados artículos 3 y 4 no podían tener aplicación, pero intentó utilizarlos la Compañía de los ferrocarriles Andaluces, se opusieron á ello algunos acreedores, la cuestión llegó al Tribunal Supremo, y este en sentencia de 28 de Enero de 1899 declaró que no estando derogada la Ley podían llevarse á cabo tales convenios.

Posteriormente, no creyendo el legislador que esto debía ser un privilegio exclusivo de las Compañías de ferrocarriles sino que debían hacerse extensivos tales convenios á todas las Compañías concesionarias de Obras Públicas se dictó la Ley de 9 de Abril de 1904 que es la vigente en la materia y la que publicamos á continuación.

ó que hubiesen sido objeto de la refacción; — 4.° Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros ó ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto á créditos posteriores; — 5.° Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles á que la refacción se refiera, y sólo respecto á otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números anteriores.

If he is declared bankrupt, the said debts shall be considered to be included in art. 914 of the Code of Commerce.

52. Until the Government issues the necessary regulations for carrying out the present law, the Registrars shall, both as to the manner of keeping the registers, the publicity thereof and the scale of fees for their operations, regard the enactments in this law, and at the same time the provisions of the interim regulation of 21 December 1885, so far as it is not opposed to the precepts thereof. The fees of No. 7 of the scales authorised by the said regulation shall apply to the inscriptions of the constitution and cancellation of mortgage, and that of Nos. 9 and 10, to the transcriptions of a previous inscription and the notes which are placed in the books of the Register and the certificates of vessels respectively.

The Registrars shall always state the amount of their fees at the foot of their signature, and the article or articles of the scale which determine them.

53. All previous laws and provisions which are contrary to the present law are repealed.

Additional Articles.

Art. 1. Credit companies which are established after the promulgation of the present law and which propose, either as a special and exclusive object, or as one of their operations, to lend on the security of vessels, may issue cedulas or bonds of maritime credit.

Credit companies in existence when this law comes into force and among whose operations to which they may devote themselves that of lending on vessels is set forth, as ordained by art. 175 of the Code of Commerce, cannot issue any bonds or cedulas of maritime credit without altering their constitution for that purpose, after the previous proceedings and requisites enacted therein and in the instrument constituting the company, nor without inscribing the new agreement in the Mercantile Register, in accordance with the enactment in art. 25 of the Commercial Code.

2. The bonds and cedulas of maritime credit, issued by companies authorised thereto, shall be nominal or to bearer, with or without redemption, and with instalments repayable at fixed times or by lot, and with a premium or without.

The nominal principal of these bonds and the amount of the premiums, if any, which may be in circulation, shall not exceed the amount of principal of the loans contracted.

When, by virtue of redemption, or for any other reason, the mortgagee-creditors repay all or part of their loans, an equal amount of bonds in circulation shall be redeemed, unless other contracts of loan have been made in the meantime for a sum which is equal or greater.

The Law of 19 September 1896 was a Law, the principal subject-matter of which was a projected loan of 1000 millions of pesetas, which the Railroad companies had to pay for an extension of their concessions. Arts. 3 and 4 thereof referred to the mode and manner in which the said companies could come to make arrangements with their creditors without the necessity of suspending payment or of becoming bankrupt.

The loan broke down and it appeared therefore that the said arts. 3 and 4 could not apply, but the Company of the Andalusian Railroads attempted to make use thereof and certain creditors opposed it, and the question came before the Supreme Tribunal, which by its judgment of 28 January 1899 declared that the Law not having been repealed such arrangement could be proceeded with.

Later on, the legislature, not thinking that this ought to be an exclusive privilege of Railroad companies, but that such arrangement should be extended to all companies which are concessionaires of Public Works, the Law of 9 April 1904 was passed which is now in force and which we proceed to publish.

---

the subject of repair; — 4. Debts noted on the Register of Ownership as a preventive measure, by virtue of an order of a judge, for arrests, sequestrations or execution of judgments, on the property noted, and only as regards subsequent debts; — 5. Repairing debts, neither noted nor inscribed, on immoveables to which the repair relates, and only as regards other debts which are different from those expressed in the four preceding numbers.

Ley de 9 de Abril de 1904
sobre convenios preventivos de las Compañías concesionarias de Obras Públicas con sus acreedores.

Art. 1. Para aprobar los convenios que las Sociedades ó Empresas de Canales, Ferrocarriles y demás concesionarias de Obras públicas propusieren á sus acreedores, no será necesario el depósito de las obligaciones ó títulos de los créditos. La adhesión se acreditará por medio de estampilla, que se fijará en el título ú obligación, cuyo número, serie, calidad y fecha del convenio se harán constar por medio de certificado, que expedirá el Agente consular, Notario ó funcionario público del punto en que el estampillado hubiese tenido lugar, legalizándose en forma estas certificaciones. El voto contrario al convenio en su caso y lugar, se acreditará en la forma dispuesta para las adhesiones.

La propuesta y tramitación de los convenios ofrecidos por dichas Sociedades ó Empresas no les obligará á suspender los pagos ni á depositar el excedente de sus ingresos, bajo expresa condición de mantener igualdad de trato entre los acreedores invitados á adherirse al convenio, y si las Compañías hubiesen obtenido anteriormente adhesiones al proyecto de convenio que presenten, acompañarán á éste los justificantes de las mismas.

El procedimiento para tramitar estos expedientes y el modo de computar los votos, serán los establecidos por la Ley de 12 de Noviembre de 1869[1]), en relación con los artículos 932 al 937 de Código de Comercio, en cuanto sean compatibles con los preceptos que contiene esta Ley. El último párrafo del art. 3° y el art. 4° de la Ley de 19 de setiembre de 1896 serán aplicables á los convenios de que trata esta Ley[2]).

2. La quiebra y la suspensión de pagos de las Empresas concesionarias de Obras públicas continuarán sometidas á los preceptos vigentes, sustituyéndose el depósito de las obligaciones y títulos de los créditos por la estampilla, tanto para las adhesiones como para los votos contrarios al convenio, según lo prevenido en el párrafo 1, art. 1 de esta Ley.

3. El Ministro de Gracia y Justicia queda autorizado para dictar las disposiciones que reclame el cumplimiento de la presente Ley.

Cámaras de Compensación.
Real Decreto de 30 de Marzo de 1905.

Art. 1. Se autoriza al Gobierno de Su Majestad para establecer en Madrid y Barcelona, de acuerdo con los Bancos y Sociedades de crédito domiciliados en dichas ciudades, Cámaras de compensación, que funcionarán en los edificios que designen los respectivos Consejos de administración, al constituirse.

2. El objeto exclusivo de las Cámaras de compensación es permitir á los Bancos, Sociedades de crédito y comerciantes que las formen, liquidar diariamente, por vía de compensación, todos los efectos comerciales que representen movimiento de fondos y tengan en su cartera el día de la liquidación.

3. La dirección de los nuevos organismos mercantiles será encomendada á Consejos de administración compuestos de cinco miembros, de los cuales, uno, que asumirá las funciones de presidente, será nombrado por el Gobierno; debiendo recaer tal nombramiento necesariamente en directores gerentes ó consejeros de las Sociedades de crédito asociadas para constituir la Cámara de compensación. De los cuatro miembros restantes, dos serán designados por los establecimientos de crédito asociados, y los otros dos serán elegidos por mayoría absoluta en junta general de socios.

[1]) Este procedimiento puede verse en el estudio «Del procedimiento judicial en las cuestiones civiles mercantiles» pág. 81.

[2]) El último párrafo del art. 3° y el 4° de la citada Ley dicen así: A los títulos, valores, cédulas ó efectos de cualquiera clase, sujetos á ser timbrados ó á satisfacer el impuesto de derechos reales que las Compañías emitan en Sustitución ó por conversión de los que tengan emitidos con pago de esos tributos, les servirá de abono la cantidad que por la emisión de los antiguos se haya satisfecho en ambos conceptos, y se pagará únicamente la diferencia en más que corresponde por la mayor cantidad que puedan representar los títulos nuevos, en relación con la que re-

Law of 9 April 1904
on preventive arrangements made with their creditors by companies who are concessionaires of public works.

Art. 1. The deposit of the bonds or titles of the debts shall not be necessary for approving arrangements proposed with their creditors by societies or companies for Canals, Railroads and by other concessionaires of Public Works. Concurrence shall be proved by means of an impression on the title or bond, whose number, series, character and the date of the arrangement shall be shown by a certificate, issued by the Consular Agent, Notary or public functionary of the place where the impression has taken place, such certificates being authenticated in due form. A vote against the arrangement, if any is given, shall be proved in the way provided for concurrence.

The proposal and process of arrangements offered by the said societies or companies shall not oblige them to suspend payment or to deposit the excess of their income, on the express condition of maintaining an equality of treatment among the creditors who are invited to concur in the arrangement, and if the companies have previously obtained concurrences to the proposed arrangement, the evidence thereof shall accompany it.

The procedure for these steps and the mode of counting the votes shall be those enacted by the Law of 12 November 1869[1]), taken with articles 932 to 937 of the Code of Commerce, so far as they are compatible with the precepts of this Law. The last paragraph of art. 3 and art. 4 of the Law of 19 September 1896 shall apply to the arrangements dealt with by this Law[2]).

2. The bankruptcy and suspension of payment of companies which are concessionaires of Public Works shall continue to be subject to the current legal provisions, but substituting the deposit of the bonds and titles of debts by the stamped impression, both as regards concurrence and for votes contrary to the arrangement, as provided in paragraph 1, art. 1 of this Law.

3. The Minister of Grace and Justice is authorised to make the rules which the carrying out of the present Law requires.

Clearing Houses.
Royal Decree of 30 March 1905.

Art. 1. The Government of His Majesty is authorised to establish in Madrid and Barcelona, in agreement with the Banks and Credit Societies, domiciled in the said cities, Clearing Houses which shall operate in the buildings appointed by their respective Boards on founding them.

2. The exclusive object of the Clearing Houses is to permit the Banks, Credit Societies and merchants which form them, to settle daily, by way of set-off, all commercial securities which represent the movement of funds and which they have in their portfolio on the day of the settlement.

3. The direction of the new mercantile organisms shall be entrusted to Boards composed of five members, one of whom shall be appointed by the Government and assume the office of President; and such appointment must necessarily be from among the managing directors or directors of the Credit Societies who are associated for founding the Clearing Houses. Of the four remaining members, two shall be appointed by the associated credit establishments, and the other two shall be chosen by absolute majority at a general meeting of members.

---

1) This proceeding may be seen in the study "Judicial procedure in mercantile civil matters" page 81.

2) The last paragraph of art. 3 and art. 4 of the said Law is as follows: As regards the titles, securities, cedulas and effects of all kinds, which are liable to be stamped, either to pay the tax on real rights issued by the companies in substitution or for conversion of those which they have issued after paying those taxes, the amount which has been paid on both grounds by the issue of the former securities shall serve as payment for the new, and there shall only be paid the difference corresponding to the greater amount of the new securities, compared

4. Habrá, por lo menos cada año, una junta general de socios. Sin embargo, el Consejo de administración puede convocar las extraordinarias que juzgue conveniente, ó cuando lo solicite la mayoría de los socios.

5. El Consejo de administración elegirá entre los empleados de los Bancos asociados un funcionario para presenciar las operaciones diarias de las Cámaras. Obligación ineludible de tal funcionario es dar cuenta al Consejo de todo lo que ocurra durante las sesiones. Podrá ser sustituído ó ayudado por uno ó varios empleados, cuando lo acuerde el Consejo.

6. El Consejo de administración dictará un reglamento, que determine: 1.° Las condiciones precisas para ser admitido como socio en las Cámaras; — 2.° Casos en que procede la exclusión del socio; — 3.° Reglas de procedimiento que deben seguirse para la admisión y exclusión de los socios; — 4.° Garantía que deben prestar los socios para asegurar el pago de las diferencias en las liquidaciones; — 5.° Cuotas que deben abonarse mensualmente para contribuir á los gastos que se originen por el sostenimiento de las Cámaras; y 6.° El régimen de las operaciones que efectuará la Cámara de compensación.

El reglamento, antes de ser aplicado, será sometido á la aprobación del Gobierno.

7. La autorización de que trata el artículo primero de este decreto se hace extensiva á aquellas plazas mercantiles en que el número y cuantía de las transacciones comerciales hagan presumir eficaz resultado al establecer la Cámara de compensación.

Real Decreto de 27 de Agosto de 1900

sobre sociedades de seguros dedicadas á prevenir los riesgos por accidentes del trabajo.[1)]

Art. 1. Las sociedades de seguros que deseen sustituir al patrono en las obligaciones determinadas por la ley de accidentes del trabajo, deben dirigirse al Ministro de la Gobernación solicitando ser inscritas en el registro de las Asociaciones aceptadas al efecto, mediante el cumplimiento de estas disposiciones y demás vigentes.

2. Con la oportuna instancia se acompañará copia auténtica de la escritura o acta de fundación con sus modificaciones, y de los poderes de su representación en España, si la compañía fuese extranjera. Estos documentos serán devueltos á los interesados después de relacionarlos en el expediente, al que se unirá original la instancia presentada.

---

presenten los que se modifiquen ó sustituyan; entendiéndose vigente, tanto para la emisión como para la amortización de unos y de otros, el art. 11 de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, con estricta sujeción al que se ultimarán todas las liquidaciones que ahora se hallen pendientes en cualquiera estado, ó que deban practicarse en lo futuro. — Las Compañías de ferrocarriles, para el cumplimiento del convenio á que esta ley se refiere, quedan exceptuadas del pago de los derechos reales y demás impuestos que por la legislación actual pudieran devengar.

[1)] Por el art. 12 de la Ley sobre accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900 se autorizó á los patronos para hacerse sustituir en todas ó en algunas de las obligaciones que dicha Ley les impone por sociedades de seguros que hayan sido aceptadas por el Ministerio de la Gobernación, pero siempre á condición de que la suma que el obrero reciba de la sociedad no sea inferior á la que le corresponda con arreglo á esta Ley. — Y en el art. 71 del Reglamento de 28 de Julio de 1900 para la aplicación de la citada Ley se establecieron las bases de este Real Decreto de 27 de Agosto 1900, determinando que las sociedades de seguros, mutuas ó por acciones, que pretendiesen ser aceptadas por el Ministerio de la Gobernación para sustituir á los patronos, habían de reunir las condiciones siguientes: — 1.ª Separación de las operaciones de seguros de accidentes personales de cualesquiera otras que realicen; — 2.ª Fianza especial; — 3.ª Aceptación de los preceptos legales vigentes en materia de accidentes del trabajo, principalmente respecto á los casos de siniestros, forma y cuantía de la indemnización y beneficiarios del seguro; — 4.ª Comunicación al Ministerio de la Gobernación de los Estatutos, balances, y empleo del capital, condiciones de las pólizas, tarifas de premios, cálculo de reservas de seguros y rentas vitalicias y estadísticas de contratos estipulados, sus novaciones y cumplimiento ó terminación. — Aun cuando el art. 72 de este Reglamento no se refiere al Decreto de 27 de Agosto, es, sin embargo, muy importante y por eso lo transcribimos á continuación. — La indemnización por fallecimiento á cargo de las compañías de seguros gozará de la exención por reclamaciones de acreedores reconocida por el art. 428 del Código de comercio.

4. There shall be a general meeting of members at least once in each year. Nevertheless, the Board may summon extraordinary meetings as it deems fit, or when the majority of the members apply therefor.

5. The Board shall elect an officer from among the employés of the associated Banks, to be present at the daily operations of the Clearing Houses. The indispensable duty of that officer is to give account to the Board of what occurs during the business hours. He may be replaced or assisted by one or more employés, when the Board so decides.

6. The Board shall issue a Regulation to determine: 1. The precise conditions for being admitted a member of the Clearing House; — 2. The cases in which a member may be expelled; — 3. Rules of procedure to be followed for the admission and expulsion of members; — 4. The security to be given by the members to insure the payment of differences in the settlements; — 5. The calls to be paid monthly for contributing to the expenses caused by the maintenance of the Clearing House; and 6. For controlling the operations which the Clearing House shall effect.

The Regulation shall be submitted to the approbation of the Government, before being applied.

7. The authorisation mentioned in the first article of this decree extends to those mercantile places in which the number and amount of the commercial transactions cause a presumption that the establishment of a Clearing House will prove efficacious.

Royal Decree of 27 August 1900

on companies for insuring against risks of accidents to workmen.[1])

Art. 1. Insurance societies which desire to replace the employer in the obligations fixed by the law of workmen's accidents, must address themselves to the Secretary of State for the Home Department applying to be inscribed in the register of associations accepted for that purpose, and complying with these provisions and others in force.

2. The proper application shall be accompanied by an authenticated copy of the instrument or document of foundation with its alterations, and by the powers of its representative in Spain, if it is a foreign company. These documents shall be returned to the interested persons after being narrated in the file, to which the original application shall be attached.

---

with that represented by those which are converted or substituted; and both for the purposes of issue or redemption, art. 11 of the Revenue Act of 29 June 1887 shall be deemed to be in force, to which all pending liquidations in whatever condition they be, and all liquidations which have to take place in the future shall be strictly subject. — For the purpose of fulfilling the arrangement referred to by this law, Railroad Companies are excepted from the payment of the real rights and other taxes which may become due under the present legislation.

[1]) By art. 12 of the Law of 30 January 1900 on accidents to workmen, employers were authorised to cause themselves to be substituted, as to all or some of the obligations imposed by the said Law, by insurance companies which have been accepted by the Home Office, but provided that the sum which the workman receives from the company is not less than that to which he is entitled according to this Law. — And by art. 71 of the Regulation of 28 July 1900, for applying the said Law, the bases of this Royal Decree of 27 August 1900 were established, by determining that the insurance companies, whether mutual or with capital divided into shares, which propose to be accepted by the Home Office as in substitution for employers, must possess the following conditions: — 1. Separation of insurance operations for personal accidents from all other operations carried on by them; — 2. Special security; — 3. Acceptance of the legal provisions in force with regard to workmen's accidents, principally with regard to casualties, form and amount of compensation and benefits of the insurance; — 4. Communication to the Home Office of the Constitution, balance sheets, employment of capital, conditions of the policies, scales of premiums, calculation of the reserves for the insurances and annuities and statistics of the concluded contracts, their novation, performance and termination. — Even when art. 72 of this Regulation does not refer to the Decree of 27 August 1900, it is still very important and we therefore proceed to reproduce it. — Compensation in the case of death for which insurance companies are liable, shall be exempt from claim by creditors as recognised by art. 428 of the Code of Commerce.

3. En la instancia se expresará el domicilio social en España de la sociedad, el capital desembolsado de la misma hasta la fecha, y el nombre de su director ó gerente.

4. Ninguna sociedad de seguros podrá ser registrada entre las aceptadas por el Ministro de la Gobernación sin tener constituída una fianza inicial á este efecto de 225.000 pesetas, y de 5.000 si se trata de una asociación mutua de seguros establecida por industriales ú operarios de una misma clase ó de un grupo de trabajos análogos. Deberá reponerse la fianza cuando el valor de cotización de los valores sea inferior en un 20% al admitido.

5. Cuando la fianza exigible por el Ministerio de Hacienda sea de 250.000 pesetas con arreglo á la proporcionalidad establecida con relación á los premios percibidos por el seguro de accidentes personales, se completará hasta 350.000 pesetas la fianza especial de 225.000 pesetas á favor del Ministerio de la Gobernación, y hasta 50.000 pesetas la de 5.000 determinada por el art. 4[1]).

Este suplemento de fianza podrá constituirse siguiendo el proeedimiento gradual hoy vigente para la Hacienda y en la forma aceptada por el artículo siguiente y demás relacionados con el mismo.

6. La fianza especial que previene este Real Decreto podrá constituirse por su estimación efectiva en valores del Estado ó en cédulas hipotecarias de Bancos ó Compañías de caminos de hierro ó de empresas industriales de cualesquiera otra clase que se cotizen en Bolsa, ó en propiedad urbana, ó bien en hipotecas sobre la misma, siempre que sean concernientes dichos valores ó derechos á la Península é Islas adyacentes.

7. Constituyéndose la fianza en valores, deberán estos depositarse en la Caja general de Depósitos ó en el Banco de España, y si se utilizaren al efecto derechos reales, se observarán, solo por lo que se refiere al procedimiento y en cuanto no sea opuesto á estas disposiciones, las reglas vigentes en materia de fianza de las compañías de seguros para los efectos fiscales.

También se observarán las reglas citadas por lo que respecta á la devolución de la fianza.

8. No podrá ser aceptada para los efectos que regulan estas disposiciones, ninguna sociedad que no declare previa y validamente que se somete á la jurisdicción de los Tribunales españoles competentes para conocer de los contratos de seguro celebrados, á fin de sustituir á los patronos domiciliados en el Reino en las obligaciones derivadas de la ley de accidentes del trabajo.

9. Si la sociedad verifica otras operaciones, sean ó no de seguros, además de las relativas al seguro de accidentes personales, deberá tener establecida la separación de esta rama en la forma necesaria para que las reservas de dicho seguro resulten por completo independientes de las demás establecidas.

10. Las sociedades de seguros á que se refiere este Real Decreto deberán comunicar por duplicado: 1.° Estatutos ó reglamento; — 2.° Tarifa detallada de premios ordinarios y especiales para los seguros de accidentes personales (caso de muerte y de invalidez) y de rentas ó pensiones vitalicias que practiquen, ó bien bases para el reparto en las sociedades indicadas en el art. 4; — 3.° Reglas adoptadas para la formación de reservas; — 4.° Tabla de mortalidad, tipo de interés y cálculo de reservas admitidas respecto á las rentas vitalicias; — 5.° Modelos de pólizas de las diversas clases que se emitan.

11. Además presentarán cada año, á partir del de 1901, el balance del anterior, si ya hubieren operado durante el mismo, expresando especialmente las reservas afectas al seguro de accidentes, y una Memoria adicional, que comprenderá los siguientes antecedentes, ó completará los que ya contenga el balance: 1.° Relación del empleo del activo, especificando los valores; — 2.° Ingresos producidos por el seguro de accidentes personales, distinguiendo el individual del colectivo, el seguro directo y el reaseguro; — 3.° Abono de primas por reaseguro de operaciones; — 4.° Número de pólizas emitidas, rescindidas, caducadas y terminadas

---

[1]) Por el art. 43 de la Ley de Presupuestos de 1895 al cual hace referencia el 5 de este Real Decreto se exigió á las compañías de seguros tanto españolas como extranjeras una garantía por los seguros que realizaren en España consistente en el 20% de las primas realizadas durante el año anterior, por lo que respecta á las de seguros de vida, incendios y daños en la propiedad mueble ó inmueble, y en el 20% de las realizadas durante el trimestre anterior por las compañías de seguro marítimo y de valores; cuya garantía en ningún caso podría exceder, tratándose de las primeras, de 1.000.000 de pesetas, y tratándose de las segundas de 250.000 pesetas.

3. The social address of the society in Spain, the capital thereof which has been paid up to date, and the name of its director or manager shall be stated in the application.

4. No insurance society may be registered among those accepted by the Secretary of State for the Home Department without having given a first security for this purpose of 225 000 pesetas, and of 5000 if it is a case of a mutual insurance association established by industrial persons or workmen of one kind or of a group of similar labour. When the quoted value of the securities is less by 20 % than that at which they were admitted, the security must be replaced.

5. When the security which the Chancellor of the Exchequer may demand is 250 000 pesetas, according to the proportion enacted with relation to the premiums received for the insurance of personal accidents, the special security in favour of the Home Office shall be raised to 350 000 pesetas, and that of 5000 fixed by art. 4[1]) to 50 000 pesetas.

This supplemental security may be formed by following the graduated process now ruling for the Exchequer and in the mode accepted by the following article and others related thereto.

6. The special guarantee ordered by this Royal Decree may be formed by its actual value in State securities or in mortgage cedulas of Banks or Railroad Companies or industrial companies of any other kind quoted on Exchange, or in town property or in mortgages thereon, provided that the said securities or rights affect the Peninsula and the adjacent Islands.

7. When the guarantee is formed of securities, they must be deposited in the Caja general de Depósitos or in the Bank of Spain, and if real rights are made use of for the purpose, the rules in force for the guarantee of insurance companies for fiscal purposes shall be observed but only for procedure and so far as there is nothing contrary to these provisions.

Likewise the said rules so far as they govern the return of the guarantee shall be observed.

8. No society may be accepted for the purposes regulated by these provisions, unless it previously and validly declares that it submits to the jurisdiction of the Spanish Tribunals competent to try insurance contracts made for the purpose of replacing employers domiciled in the Realm with regard to the obligations derived from the law of accidents to workmen.

9. If the society performs other operations, whether insurance or not, besides those relating to the insurance of personal accidents, they must keep this branch separate in the form necessary for the reserve funds of the said insurance to be completely independent of the other reserves.

10. Insurance societies to which this Royal Decree refers, must communicate in duplicate: 1. Their constitution or regulations; — 2. Detailed scale of ordinary and special premiums for insurances of personal accidents (in case of death or disablement) and of the annuities or life pensions, as well as the bases for apportionment in the societies mentioned in art. 4; — 3. Rules adopted for the formation of reserve funds; — 4. Table of mortality, rate of interest and calculation of reserve funds for life pensions; — 5. Model policies of the different kinds which they issue.

11. They shall also present each year, beginning with 1901, the balance sheet of the preceding year, if they have been in operation during the same, stating especially the reserves affected to insurance of accidents, and an additional Report which shall include the following particulars, or shall complete those which the balance sheet already contains: 1. Report on the investment of the assets, specifying the securities; — 2. Income produced by the insurance of personal accidents, distinguishing the sole insurances from the collective, the direct insurance from re-insurance; — 3. Payment of premiums for re-insurance of operations; — 4. Number of policies

[1]) By art. 43 of the Revenue Act of 1895, to which art. 5 of the Royal Decree refers, both Spanish and foreign insurance companies were required to give as security for insurances issued in Spain 20% of the premiums received during the previous year, as regards life and fire insurances and damage to moveable and immoveable property, and 20% of the premiums received during the previous three months by companies for marine insurance and for insuring valuables; which security could in no case exceed 1000000 pesetas in the first cases and 250000 pesetas in the second.

por fin del contrato ó por siniestro, y total de capitales, salarios y rentas y pensiones aseguradas con separación de los seguros individuales y colectivos, de los riesgos asumidos y de los reasegurados; — 5.° Estado de siniestros reclamados, discutidos judicialmente y satisfechos, y su importe, diferenciando los motivados por fallecimiento, por incapacidad absoluta (permanente y temporal) y relativa (permanente y temporal). De dicho estado se formarán y comunicarán avances trimestrales; — 6.° Observaciones que se estime conveniente exponer sobre reformas en el servicio de seguro de accidentes del trabajo.

12. Estos antecedentes se utilizarán y resumirán para publicar cada año una «Información del seguro de accidentes del trabajo», de que se hará una edición económica de gran tirada.

13. Así que sea posible y se considere oportuno, se practicará una evaluación técnica de las responsabilidades admitidas por cada sociedad de seguro de accidentes del trabajo que se repetirá cada quinquenio.

14. El Ministerio de la Gobernación podrá, si lo cree justificado, comprobar anualmente los informes comunicados, con las facultades análogas á las reconocidas al de Hacienda.

15. Los contratos de seguro celebrados para sustituir al patrono en las obligaciones derivadas de la ley de accidentes del trabajo, habrán de adaptarse á los preceptos vigentes en esta materia, especialmente por lo que respecta á los casos de siniestro, forma y cuantía de la indemnización y beneficiarios del seguro.

16. Mientras no se reforme la tarifa de premios, no podrá concertarse por las sociedades contratos de seguros bajo la base de un tipo inferior al establecido al efecto por la misma. Si el Ministerio creyere que las sociedades reducían sus tarifas, por estímulo comercial, más de lo que consiente una apreciación prudente de las reglas actuariales y de la práctica del seguro de accidentes en otras naciones, podrá publicar para los efectos legales una tarifa mínima de premios.

17. Para informar y auxiliar al Ministro de la Gobernación en estos servicios de registro, comprobación, reglamentación y publicidad, relativos al seguro de accidentes del trabajo y otros análogos, se nombrará un Asesor general de seguros, que percibirá derechos de registro de los que anualmente satisfagan al efecto las sociedades de seguros aceptadas y se fijen de Real orden.

18. El Asesor general de seguros será de libre elección del Ministro.

El nombramiento se hará siempre por Real Decreto.

A continuación del nombramiento, se publicará en la Gaceta una relación de los méritos y servicios del designado, especialmente en materia de seguros, así en la esfera oficial como en la particular y en la Administración pública.

El Asesor formará parte, como vocal nato, de la Comisión de reformas sociales, y su cargo será incompatible con cualquier otro de una compañía de seguros.

19. El Asesor general de seguros propondrá al Ministro en el término máximo de un mes, á contar de la fecha de su nombramiento, las instrucciones y acuerdos de servicio general é interior necesarias para funcionar la oficina á su cargo.

20. No se registrará ni se librará certificación de inscripción de ninguna sociedad sin que esta acredite haber atendido debidamente las obligaciones impuestas por los artículos 4 y 17 de este Real Decreto.

21. Se publicarán en la *Gaceta de Madrid*, por lo menos cada trimestre, las resoluciones adoptadas durante el mismo por el Ministro de la Gobernación respecto á aceptación de sociedades para los efectos de la ley de accidentes del trabajo, pero nunca aislademente, sino reproduciendo la lista general con las adiciones ó supresiones procedentes.

Las exclusiones y no inclusiones serán fundadas, y se publicarán íntegras en la *Gaceta* si así lo solicitare oficialmente la sociedad interesada[1]).

---

[1]) Las precedentes disposiciones han sido completadas por la Real orden de 16 de Octubre de 1900 relativa á las condiciones que han de llenar las sociedades de seguros para conseguir la aceptación del Ministerio para sustituir á los patronos y por la de 10 de Noviembre del mismo año referente á las asociaciones mutuas de obreros y patronos para el seguro de accidentes del trabajo, publicadas respectivamente en las Gacetas de 18 de Octubre y 16 de Noviembre del mismo año. — Los derechos de registro que han de satisfacer tanto las sociedades de seguros como las asociaciones mutuas se fijan todos los años por Real orden, y hasta ahora han sido siempre el 4 por 1.000 del importe de la fianza que han de constituir.

issued, rescinded, lapsed and terminated by the termination of the contract or by casualty, and the total principal sums, salaries, annuities and pensions assured, separating sole insurances from the collective, and the risks insured from those re-insured; — 5. Condition of casualties on which claims have been made, disputed at law and paid, and their amount, distinguishingthose arising from death, from absolute disablement (permanent and temporary) and partial (permanent and temporary). Three monthly estimates of the said condition shall be formed and communicated; — 6. Observations which it is thought fit to express on reforms in the working of insurance of workmens' accidents.

12. These particulars shall be utilised and summarised for the purpose of publishing yearly "Report on insurance of workmens' accidents", of which a cheap and large edition shall be made.

13. An expert valuation of the liabilities undertaken by each society for insuring workmens' accidents shall be made as soon as is possible and is considered opportune, and this shall be repeated every five years.

14. The Home Office, if it is thought justified, may annually test the communicated reports, with powers analogous to those granted to the Exchequer.

15. The contracts of insurance made to replace the employer in the obligations derived from the law on workmen's accidents, must be adapted to the precepts in force on this matter, especially as regards casualties, form and amount of compensation and the beneficiaries of the insurance.

16. As long as the tariff of premiums is not amended, insurance contracts cannot be made by the societies on the basis of a rate lower than that established thereby for that purpose. If the Home Office thinks that the societies reduce their tariffs by commercial competition, more than is consistent with a prudent regard for actuarial rules, and the practice in insuring accidents in other nations, it may publish a minimum tariff of premiums which shall entail legal effects.

17. A general insurance Assessor shall be appointed to report to and aid the Secretary of State for the Home Department in these offices of registering, testing, regulating and publishing with relation to insurance of workmens' accidents and others of like nature, who shall receive the registration fees which are annually paid for that purpose by the accepted insurance societies and are determined by Royal Order.

18. The general Assessor of insurances shall be freely chosen by the Minister.

The appointment shall always be by Royal Decree.

Immediately after the appointment, a report on the merits and services of the person appointed, especially directed to insurances, both in the official and private spheres and in the public Administration, shall be published in the *Gaceta*.

The Assessor shall form part of the Commission for Social Reforms as a voting member, and his office shall be incompatible with any office in an insurance company.

19. The general Assessor of insurances, at the latest one month from the date of his appointment, shall put before the Minister the instructions and resolutions for general and internal service which are necessary for working the office in his charge.

20. No society shall be registered and no certificate of inscription shall be issued to it, unless it is proved to have duly observed the obligations imposed by articles 4 and 17 of this Royal Decree.

21. At least every three months, the decisions adopted during that time by the Secretary of State for the Home Department with regard to the acceptance of societies for the purposes of the law of workmens' accidents shall be published in the *Gaceta de Madrid*, but never separately, but by reproducing the general list with additions or exclusions which have taken place.

The exclusions and non-inclusions shall be reasoned, and shall be published entire in the *Gaceta*, if the interested society officially applies for it [1]).

[1]) The preceding provisions were completed by a Royal Order of 16 October 1900 relating to the conditions which insurance societies have to fulfil in order to obtain acceptance by the Ministry for the purpose of replacing employers, and by that of 10 November of the same year referring to mutual associations of workmen and employers for insurance of workmen's accidents, published in the *Gacetas* of 18 October and 16 November of the same year respectively. The registration fees which have to be paid both by insurance companies and mutual associations are fixed every year by Royal Order, and up to the present day they have always been 4 per 1000 of the amount of the security which they have to provide.

Ley acera de las Empresas de Seguros.

Don Alfonso XIII. por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España: A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Título primero. Disposiciones generales.

Art. 1. Las Compañías, Sociedades, Asociaciones, y en general todas las entidades nacionales ó extranjeras que tengan por fin realizar operaciones de seguro sobre la vida humana, sobre la propiedad mueble ó inmueble y sobre toda otra eventualidad, cualesquiera que sea su objeto, forma y denominación, están obligadas, siempre que de un modo expreso no las exceptúe la ley, á solicitar del Ministerio de Fomento la inscripción en el Registro que al efecto se establece.

Para los efectos de ella, serán considerados como nacionales las Sociedades ó entidades cuyo domicilio social se halle en España y no sean filiales ó sucursales de ninguna extranjera.

2. Con la solicitud de inscripción acompañarán redactados en castellano ó traducidos al mismo idioma: 1.° Copia auténtica de la escritura, acta ó documento público de constitución; — 2.° Tres ejemplares de los estatutos ó reglamentos por que hayan de regirse ó sólo dos cuando ellos figurasen en la escritura; — 3.° Modelo de las pólizas ó contratos que hayan de usar en sus operaciones; — 4.° Justificación documental que acredite, si se trata de una Sociedad por acciones, el capital suscrito y que se ha desembolsado el 25 por 100 del mismo, salvo lo prevenido en la disposición transitoria 5ª; — 5.° Las entidades que tengan por objeto garantizar daños ó perjuicios á las personas, un ejemplar de las tarifas adoptadas para sus operaciones y de las bases que han servido para su cálculo. Las que garanticen daños y perjuicios en las cosas, nota de las tarifas que apliquen ó al menos de la máxima y de la mínima, y de las razones que determinaron la aceptación de tales bases y su aplicación gradual; — 6.° Las entidades aseguradoras que operan en el ramo de seguros de vida, tarifa completa de las diversas categorías de primas, tablas de mortalidad y sobrevivencia en que fundan sus cálculos y demás bases para la formación de las reservas matemáticas; — 7.° Todas las entidades aseguradoras á que el art. 1 se refiere, resguardo en la Caja general de Depósitos, ó del Banco de España que acredite haber efectuado en metálico ó valores públicos, industriales ó comerciales, españoles ó extranjeros, que una vez aceptados por el Ministro de Fomento se incluirán en una lista cuya publicación y subsiguiente modificación señalará el reglamento, un depósito necesario, que será: a) De 200.000 pesetas para las entidades aseguradoras nacionales ó extranjeras que operen en el ramo de seguros sobre la vida humana, siempre que las extranjeras procedan de países que concedan á los españoles el mismo trato que á las suyas. Cuando las Sociedades análogas de España sean tratadas por una Nación extranjera en su legislación de distinto modo que las nacionales, las procedentes de este país elevarán el depósito á 500.000 pesetas; — b) El 5 por 100 del capital desembolsado, no pudiendo el depósito ser menor de 5.000 pesetas ni exigirse que exceda de 100.000 para las entidades aseguradoras nacionales ó extranjeras que se consagren á otra clase de seguros distintos á los de vida. Esta disposición no será aplicable á las Sociedades de Seguros contra accidentes de trabajo, que continuarán sujetas á lo dispuesto en el art. 4 del Real decreto de 27 de Agosto de 1900[1]); — c) De 50.000 pesetas á las Sociedades administradoras de las Asociaciones á que se refiere el art. 11[2]) y de 25.000 pesetas más por cada una de las Asociaciones que esas Sociedades administren cuando pasen de dos; — d) De 5.000 pesetas para las Asociaciones propiamente mutuas, sin prima fija ó cuota, que aseguren á las personas del servicio militar; y, en general, de toda eventualidad no incluída en los seguros de vida. Las que aseguren contra accidentes del trabajo estarán á lo dispuesto en el mencionado art. 4 del citado Real decreto; — e) Las entidades que se dediquen á varias ramas de seguros constituirán un solo depósito previo correspondiente al mayor tipo. Cuando el depósito se efectuare en fondos públicos, se admitirán éstos por el tipo medio de cotización del mes anterior al de la entrega en caja. Sin embargo, si los valores se cotizasen por encima de la par, se admitirá

[1]) V. el citado artículo en la pág. 280.
[2]) V. el citado artículo en la pág. 280, 281.

Law on insurance companies.

Don Alfonso XIII, by the Grace of God and the Constitution, King of Spain. To all who may see and understand these presents, know ye: that the Parliament has decreed and we have sanctioned the following:

First Title. General provision.

Art. 1. All Companies, Societies, Associations, and generally all national and foreign corporations which have for their object the realisation of insurance operations on human lives, on moveable or immoveable property and on all other eventualities, whatever be their subject matter, form and denomination, are bound to apply to the Ministry of Public Works (Fomento) for inscription in the Register hereby established for that purpose, provided that the law does not expressly exempt them.

For that purpose societies or corporations whose social domicil is in Spain and which are not affiliated to or branches of any foreign society or corporation shall be considered national.

2. The application for inscription shall be accompanied by the following documents drafted in Spanish or translated into the same language: 1. An authenticated copy of the instrument, act or notarial document of their constitution; — 2. Three copies of the constitution or regulations by which they are to be governed or only two when they appear in the constitutive document; — 3. Model policy or contract to be used in their operations; — 4. Documentary evidence proving, in the case of a society with shares, the subscribed capital and that 25 per 100 thereof has been paid up, saving the transitory provision No. 5[1]); — 5. The corporations which have for their object to insure against personal damage, a copy of the tariffs adopted for their operations and of the bases of the calculation thereof. Those which insure against damage to things, a note of the tariffs applied or at least the maximum and minimum tariffs, and the reason which determined the adoption of such bases and their graduated application; — 6. Insurance corporations which operate in the branch of life insurance, a complete tariff of the different classes of premiums, tables of mortality and of expectation of life on which their calculations are based and the other bases for the formation of the mathematical reserves; — 7. All the insurance corporations to which art. 1 refers, receipt of the Caja general de Depósitos, or of the Bank of Spain, which proves a compulsory deposit in cash or public, industrial or commercial securities, whether Spanish or foreign, which having been once accepted by the Minister of Public Works shall be included in a list, the publication and subsequent modification whereof shall be fixed by the regulation, and which deposit shall consist: a) Of 200 000 pesetas for the Spanish or foreign insurance corporations which operate in the branch of insurances on human lives, provided that the foreign corporations come from countries which grant to Spaniards the same treatment as to their own. When analogous societies of Spain are treated by a foreign nation in its legislation in a manner different from their national societies those coming from the said country shall increase the deposit to 500 000 pesetas; — b) Of the 5 per cent of paid up capital, which deposit shall not be less than 5000 pesetas nor more than 100 000 for Spanish or foreign insurance corporations devoted to another class of insurance than those on lives. This provision shall not apply to societies for insurances against workmens' accidents, which shall continue subject to the provisions of art. 4 of the Royal Decree of 27 August 1900[1]); — c) Of 50 000 pesetas for societies who manage the associations referred to by art. 11[2]) and of 25 000 pesetas more for each of the associations beyond two managed by those societies; — d) Of 5000 pesetas for mutual associations, without fixed premium or contribution, which insure persons against military service; and, in general, against every eventuality not included in life insurance. Those which insure against workmens' accidents shall be subject to the provisions of the said art. 4 of the said Royal Decree; — e) Corporations which devote themselves to various branches of insurance shall form a single previous deposit at the highest rate. When the deposit is formed of public funds, they shall be admitted at the average price quoted during the month previous to the payment in. Nevertheless, if the securities are quoted above par, they shall be admitted at par. Unincumbered urban immoveables, registered in Spain, and first mortgages

[1]) See the said article on page 280.
[2]) See the said article on page 280, 281.

á la par. También se admitirán como garantía inmuebles urbanos liberados y registrados en España y primeras hipotecas sobre los mismos, apreciando para este objeto unos y otros en el 75 por 100 de su valor.

3. Se exceptúan de los preceptos de esta ley, previo depósito en la Inspección general de Seguros, de un ejemplar autorizado de sus estatutos y un modelo de sus pólizas y con la obligación de remitir á la misma copia de sus balances anuales: 1.° Los Montepíos, Sociedades de socorros mutuos y, en general, las constituídas con fines exclusivamente benéficos, siempre que sus fondos se destinen únicamente á realizar dichos fines, salvo los gastos de administración; — 2.° Las Asociaciones mutuas sin prima fija ó cuota, de carácter local, municipal ó provincial, que no tengan por fin el lucro y sí exclusivamente la indemnización de los daños ó riesgos que los asociados puedan sufrir en sus bienes; — 3.° Las entidades aseguradoras que se dediquen al seguro con el contrato de transporte, así terrestre como marítimo, las cuales, cumpliendo los requisitos que dispongan las leyes, podrán realizar libremente sus operaciones sin más limitación que la de hacer autorizar sus contratos en la forma que determine el Código de Comercio[1]).

4. Además de los documentos enumerados en el art. 2, las entidades aseguradoras extranjeras sometidas á esta ley justificarán: a) Hallarse constituídas y funcionando con arreglo á las leyes del país de origen; — b) La existencia de un solo delegado en España con plenos poderes para dirigir las operaciones y representarlas judicial y extrajudicialmente; — c) La indicación de un domicilio en el cual se concentren todas las operaciones que realicen en España.

5. En el plazo de tres meses quedará acordada ó desestimada la solicitud de inscripción y se notificará la Real orden al solicitante, publicándose además en el primer caso en la *Gaceta de Madrid.*

La negativa de inscripción en el Registro llevará siempre consigo la prohibición de funcionar la entidad aseguradora en operaciones que tengan por base el seguro de cualquier clase que sea.

La entidad solicitante podrá recurrir en vía contenciosa contra el acuerdo que deniegue su pretensión.

6. Será negada la inscripción en el Registro, y, por tanto, la autorización para funcionar: 1.° A toda entidad aseguradora que deje de unir á la solicitud alguno de los documentos y justificantes enumerados en el art. 2, y advertida de la falta no la subsane en el término de quince días; — 2.° Cuando no aparezca de una manera clara y concreta de los estatutos y reglamentos por que haya de regirse la colectividad, los derechos y deberes de los asociados y el fin que se proponen; — 3.° Cuando del examen de las condiciones de pólizas ó contratos resulte que éstos contienen condiciones ilegales, ambiguas ó lesivas para los asegurados; — 4.° Cuando del examen de las tarifas, tablas de mortalidad y demás bases de cálculo de primas y reservas resulte evidente la imposibilidad de cumplir los beneficios ó provechos que se ofrezcan en la cuantía y en el tiempo que se señalen ó éstos se funden en loterías ó en azares que no haya medio de determinar con base racional de cálculo; — 5.° Cuando no se consigne en los estatutos ó en acuerdos incorporados á ellos la forma y modo de inversión de las cantidades que la Asociación recaude.

7. Si la inscripción fuese denegada con carácter definitivo, en la misma disposición que lo acuerde se ordenará la devolución del depósito ó cancelación de la garantía, comunicándolo así á la Caja general de Depósitos ó al Banco de España para la inmediata entrega al solicitante de los valores depositados y dictándose las disposiciones que liberen á los inmuebles de la responsabilidad á que estaban sujetos.

Si la inscripción fuese otorgada, se computará el depósito de inscripción para la formación de las reservas matemáticas ó de garantía que esta ley exige.

8. Queda prohibido asegurar para caso de muerte á los niños menores de catorce años.

Exceptúanse los contraseguros que tengan por objeto asegurar, para caso de muerte del niño, el reembolso de las primas pagadas por un seguro de supervivencia basado sobre el mismo sujeto.

9. Corresponderá en lo sucesivo al Ministerio de Fomento ó á sus delegados la inspección y vigilancia de las Asociaciones ó entidades que tengan por objeto el

[1]) V. los arts. 382 y 737 del Cód. de com. en las pág. 145, 195.

thereon shall also be allowed as security, both classes being appraised for this purpose at 75 per cent. of their value.

3. After previous deposit in the office of the general Inspection of Insurances, of an authenticated copy of their constitutions and a model of their policies and under obligation to send a copy of their annual balance sheets thereto, the following are excepted from the precepts of this law: 1. Friendly societies, societies of mutual help and, in general, those formed with exclusively beneficent objects, provided that their funds are only applied to realise the said objects, less the expenses of administration; — 2. Mutual associations without fixed premium or contribution, of a local, municipal or provincial character, which are not intended for making profits, but only for compensating for damages or risks which their members may suffer in their property; — 3. Insurance corporations which devote themselves to insuring the contract of carriage, both by land and sea, which, on complying with the requirements of the law, may freely realise their operations without other restriction than that of having their contracts authenticated as determined by the Commercial Code[1]).

4. Besides the documents enumerated in art. 2, foreign insurance corporations subject to this law shall prove: a) That they are constituted and working in accordance with the laws of their country of origin; — b) That there is a single delegate in Spain with full powers to direct the operations and represent them both judicially and extrajudicially; — c) Statement of the address where all the operations realised in Spain are centred.

5. The application for inscription shall be granted or rejected and the Royal Order shall be notified to the applicant within the space of three months, and in the former case, published also in the *Gaceta de Madrid*.

Refusal of inscription in the Register shall always carry with it the prohibition of the insurance corporation carrying on operations which are based on insurance of any kind.

The corporation which is applying may appeal against the decision which refuses its claim, by way of an administrative contentious proceeding.

6. Inscription in the Register, and therefore, authorisation to carry on business shall be refused: 1. To every insurance corporation which fails to attach to the application any of the documents and evidence enumerated in art. 2, and which on being advised of the omission, fails to make good the defect within the term of fifteen days; — 2. When the rights and duties of the members and the object which they propose do not appear clearly and concisely from the constitution and regulations by which the corporate body is to be governed; — 3. When it appears from an examination of the conditions of the policies or contracts that they contain conditions unlawful, ambiguous or prejudicial to the assured; — 4. When from the examination of the tariffs, tables of mortality and other bases for calculating premiums and reserves, the impossibility of fulfilling the benefits and advantages offered to the amount and time stated, is evident, or when the latter are founded on loteries or hazards which there are no means of determining on a rational basis of calculation; — 5. When the form and manner of investing the amounts which the association may collect is not stated in the constitution or in the resolutions incorporated therein.

7. If inscription is definitely refused the return of the deposit or cancellation of the security shall be ordered in the same decision as the refusal, and this shall be communicated to the Caja general de Depositos or to the Bank of Spain for immediate delivery to the applicant of the deposited securities and orders shall be issued to free the immoveables from the liability to which they were subject.

If inscription is granted, the deposit for inscription shall be reckoned towards the formation of the mathematical reserves or the security required by this law.

8. Insurance on deaths of children under fourteen years of age is prohibited.

Counter insurances are excepted, which are intended to insure the return on the death of the child of premiums paid for a deferred insurance based on the same life.

9. Inspection and supervision of associations and corporations which have insurance for their object in any of its branches or forms shall henceforth pertain to

---

[1]) See arts. 382 and 737 of the Commercial Code on pages 145, 195.

seguro en cualquiera de sus ramas ó formas, sin perjuicio de la acción fiscal en lo que la concierne y de lo dispuesto en el artículo siguiente.

10. Las Sociedades de Seguros de accidentes del trabajo estarán sujetas á las disposiciones de esta ley, además de las especiales vigentes ó que fije el Ministerio de la Gobernación, de quien singularmente dependen.

Título II. De la publicidad y de las garantías.

11. Las Asociaciones vulgarmente llamadas tontinas y chartelusianas, consignarán en el Banco de España, á disposición del Consejo directivo ó de administración, las sumas que recauden de los asociados españoles en tanto no se inviertan en fondos públicos y se depositen en la forma y modo que se determina en el artículo siguiente. No podrá deducirse de estas cantidades más que el tanto por ciento que señalen expresamente los estatutos para atender á los gastos de administración, ni podrá retirarse el depósito de las 25.000 pesetas para cada Asociación á que se refiere el apartado *c* del art. 2 hasta que se liquide dicha Asociación.

12. Las Asociaciones á que se refiere el artículo anterior presentarán trimestralmente en la Inspección de Seguros una nota expresiva de las cantidades recaudadas, factura ó nota del agente de cambio y bolsa que detalle la inversión de esa suma, deducido el tanto por ciento estatutario, precisamente en los valores que se determinan con arreglo á esta ley y á su reglamento, y el resguardo de depósito de los mismos en el Banco del España en concepto de intransferible y sólo negociable al término del período de acumulación.

La inspección de Seguros ordenará el reintegro de las sumas recaudadas que no hubiesen sido invertidas debiendo serlo con arreglo al párrafo anterior, y la Sociedad administradora de la Asociación las reintegrará en el plazo de un año con los intereses de demora á que hubiere lugar. Si transcurrido el plazo no se hubiere reintegrado, será borrada del Registro la Asociación de que se trate y se procederá á su liquidación.

13. Todas las entidades aseguradoras insertarán en sus pólizas y contratos y en cuantos documentos, anuncios y prospectos figure la cifra del capital social, que no podrá ser nunca la del nominal, sino la del suscrito, otra en caracteres de no menor tamaño expresiva de la cantidad desembolsada en metálico por los asociados ó accionistas.

Ninguna de estas entidades aseguradoras podrá publicar carteles, anuncios, prospectos ni hojas de propaganda que no hayan sido previamente autorizados por la Inspección de Seguros, la cual los examinará para ver si contienen datos ó informaciones falsos ó que puedan inducir á error al público, así respecto al objeto de la entidad como á las ventajas que ofrece. La autorización para la publicación del anuncio se hará dentro del plazo de ocho días desde el de su presentación, y la resolución se comunicará al presidente ó gerente de la Sociedad solicitante. El reglamento que para la ejecución de esta ley ha de dictarse determinará la manera de dar cumplimiento á este precepto.

Los periódicos ó agencias de publicidad que la den á cualesquiera anuncios de Compañías de Seguros no autorizados por la Inspección en la forma que prescribe el reglamento, serán subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios á cuya indemnización resulten condenadas las Compañías anunciantes por efecto de esos anuncios, sin perjuicio de las responsabilidades penales á que haya lugar con arreglo á las leyes y disposiciones vigentes.

14. Las entidades aseguradoras están obligadas á publicar anualmente en idioma castellano una Memoria comprensiva de la situación de la Sociedad y operaciones realizadas en España al terminar el ejercicio económico, la que, acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, será presentada á la Inspección de Seguros dentro de los seis meses siguientes al en que se cierre el ejercicio á que se contraigan. De dichas Memorias imprimirán un número de ejemplares suficientes para poderlos vender á todo asegurado, que lo hubiere solicitado con anterioridad, al precio no mayor de 1 peseta, y doce más para ponerlos gratuitamente, durante todo el año, á disposición de los accionistas en el domicilio social.

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias serán publicados en la *Gaceta de Madrid*, dentro del mismo plazo, por cuenta de las entidades á que se refieran.

Las Compañías aseguradoras existentes que por sus estatutos no estén obligadas á formar balances anuales, no tendrán obligación de presentar anualmente la Memoria

the Ministry of Public Works or to its representatives, without prejudice to the action of the Public Prosecutor concerning it and to the provisions of the following article.

10. Societies for insuring workmens' accidents shall be subject to the provisions of this law, besides the special provisions in force or which may be determined by the Home Office, on which they more particularly depend.

Title II. Publicity and Guarantees.

11. The associations, commonly called tontine and Chartelusian, shall pay into the Bank of Spain, at the disposal of the Board of Directors or Administrators, the amounts collected from the Spanish members so far as they are not invested in public funds, and are deposited as determined by the following article. There shall not be deducted from these amounts more than so much per cent, as expressly stated in the constitution, for meeting the expenses of administration, nor may the deposit of the 25 000 pesetas for each association, to which subsection c of art. 2 refers, be withdrawn, until the said association is liquidated.

12. The associations referred to in the preceding article shall present every three months to the Inspección de Seguros a note stating the amounts collected, the invoice or bought note of the bill broker or broker on the Exchange showing the investment of that amount, after deducting the statutory percentage, necessarily in the securities fixed in accordance with this law and its Regulation, and the receipt for the deposit thereof in the Bank of Spain as non-transferable and only negotiable at the end of the time for accumulation.

The Inspección de Seguros shall order the repayment of the sums received which have not been invested, but ought to be so according to the preceding paragraph, and the society managing the association shall pay back the said moneys within the space of one year with interest until payment thereof. If it has not been paid by the end of that time, the association in question shall be erased from the Register and shall be liquidated forthwith.

13. All insurance corporations shall insert in their policies and contracts and in all documents, advertisements and prospectuses in which the amount of the social capital appears (which may never be that of the nominal, but that of the subscribed capital), another figure of no less size expressing the amount paid in cash by the members or shareholders.

None of these insurance corporations may publish placards, advertisements, prospectuses or leaflets to spread the society which have not been previously authorised by the Inspección de Seguros, which shall examine them to see if they contain false facts or information or such as to mislead the public, either with regard to the object of the corporation or the advantages which it offers.

The authorisation for the publication of the advertisement shall be given within the space of eight days from that of its presentation, and the decision shall be communicated to the President or manager of the applicant society. The regulations which have to be issued for the carrying out of this law shall determine the mode of fulfilling this precept.

Newspapers or advertisement agencies which publish any advertisements of insurances companies which are not authorised by the Inspección as provided by the Regulation, shall be in the second degree liable for the damages to which the companies making the advertisements are condemned on the ground of these advertisements, but without prejudice to any penal liabilities which there may be under the laws and provisions in force.

14. Insurance corporations are bound to publish yearly in the Spanish language a comprehensive Report on the position of the society and the transactions carried out in Spain as at the end of the financial year's works, which, together with the balance-sheet and the profit and loss account, shall be presented to the Inspección de Seguros within the six months following that in which the year's work closed. A number of copies of the said Reports shall be printed, sufficient to be able to sell them to every assured person who has previously applied therefor, at a price not greater than 1 peseta, and twelve more for gratuitously placing them during the year at the disposal of the shareholders at the social address.

The balance sheet and the profit and loss account shall be published in the *Gaceta de Madrid* within the same time, at the expense of the corporations to which they refer.

Existing insurance companies which are not bound by their constitution to draw up annual balance sheets, shall not be obliged to present the Report and balance

y el balance, ni de publicar éste cada año en la *Gaceta de Madrid*; pero sí publicarán anualmente en ésta un resumen suficientemente claro de las operaciones realizadas en el año, de las pérdidas y ganancias y movimiento de reservas que se hayan originado, y publicarán y presentarán la Memoria y balance general en los plazos en que, según los respectivos estatutos, deban formarlos.

Tanto por las entidades nacionales como para las extranjeras, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, en el primer caso, y el de sus filiales ó sucursales en España, en el segundo, habrán de ajustarse á modelos determinados por el Ministro de Fomento, oída la Junta consultiva.

15. Quedan obligadas dichas entidades aseguradoras á facilitar á la inspección de Seguros, previa orden del comisario general, en la forma y plazo que se determinen, los documentos, noticias y certificaciones que sean necesarios para conocer la marcha de las mismas.

16. Las entidades aseguradoras, así nacionales como extranjeras, que se dediquen al seguro de vida y no estén sometidas á lo dispuesto en el art. 11, establecerán, además de la reserva estatutaria, una reserva matemática.

17. Esta reserva estará constituída por la cifra que represente el exceso del valor actual de los compromisos que hubiere de cumplir la Compañía sobre el valor actual de las primas netas que han de satisfacer los asegurados, fundado precisamente en las bases de cálculo de la Empresa, presentados con arreglo al núm. 6 del art. 2 de esta ley, y aceptados por el Ministerio de Fomento.

La suma á que ascienda esta reserva estará representada por metálico, valores públicos, industriales y comerciales, españoles ó extranjeros de los incluídos en una lista, cuya redacción, aprobación y publicación determinará el reglamento; cantidades prestadas por las Compañías sobre sus propias pólizas ó sobre dichos valores; inmuebles urbanos situados en España, y primeras hipotecas sobre los mismos, apreciados unos y otras en el 75 por 100 de su valor real.

El 50 por 100 cuando menos de la suma á que ascienda la reserva, se ingresará en la Caja de Depósitos ó en el Banco de España, y no podrá ser retirado total ni parcialmente sino para cumplir las obligaciones contraídas y aquéllas á que resulten condenadas las Compañías, en virtud de sentencia firme de los Tribunales españoles, á favor de asegurados españoles. La parte de reserva que se deposite habrá de invertirse necesariamente en metálico ó valores de los incluídos en la lista de referencia, y la mitad por lo menos de ese 50 por 100, ó sea un 25 por 100 de la reserva matemática total, se constituirá en valores españoles.

Las Compañías podrán canjear los valores depositados por otros incluídos en la lista, previa notificación á la Junta consultiva, y tendrán la obligación de sustituir el importe de la parte de reserva constituída en un valor determinado cuando éste sea excluído de la lista, en la forma que prescriba el reglamento. Cuando el otro 50 por 100 de la reserva esté total ó parcialmente invertido en metálico ó valores, las Compañías podrán también ingresarlos en la Caja de Depósitos ó en el Banco de España y retirarlos cuando lo deseen. En todo caso, deberán tener en España, á disposición de la Junta consultiva, el documento que acredite la existencia de los valores en que esté total y parcialmente invertido ese 50 por 100 con las garantías que determine el reglamento.

Los inmuebles ó hipotecas que según el primer párrafo de este artículo estén sujetos á la reserva matemática, en la mitad de ella no depositada, no podrán exceder en ningún caso del 25 por 100 del importe total de esa reserva.

Toda la reserva matemática deberá estar afecta á responder del cumplimiento de los contratos entre el asegurador y los asegurados, cuando ellos se celebraren en España, ó cuando, celebrados en el extranjero, el asegurado fuera español y hubiese estipulado expresamente que se cumpla en España el contrato.

Los elementos que constituyen la reserva matemática estarán exentos de toda contribución que no sea la general que corresponde á cada uno de los bienes que pueden integrar la mencionada reserva.

Los derechos de los tenedores de pólizas españolas sobre tal reserva, se entienden sin perjuicio de los que se deriven de sus respectivos contratos.

18. Las entidades de seguros que no se dediquen al de la vida, cualquiera que sea su nacionalidad establecerán, además de la reserva estatutaria, una reserva de riesgos en curso.

sheet yearly, or to publish the latter each year in the *Gaceta de Madrid*, but they shall annually publish therein a sufficiently clear summary of the transactions carried out during the year, of the profit and loss and the change of the reserves which they have formed, and they shall publish and present the Report and general balance sheet within the times in which they are bound to draw them up according to their respective constitutions.

Both as regards national and foreign corporations, the balance sheet and the profit and loss account of the former, and those of their affiliated societies or branches in Spain of the latter corporations, must conform to the models determined by the Minister of Public Works, after hearing the advisory Board.

15. The said insurance corporations are bound to produce to the Inspección de Seguros, on the previous order of the Commissioner General, as and when may be fixed, the documents, information and certificates which are necessary for ascertaining the progress thereof.

16. Both national and foreign insurance corporations which devote themselves to life insurance and are not subject to the provisions of art. 11, shall form a mathematical reserve in addition to the statutory reserve.

17. This reserve shall be formed of the amount representing the excess of the actual value of commitments which the company has to meet over the actual value of the net premiums which the assured have to pay, as exactly founded on the bases of calculation of the company, presented in accordance with No. 6 of art. 2 of this law, and accepted by the Ministry of Public Works.

The sum to which this reserve amounts shall be represented by cash, public, industrial and commercial securities either Spanish or foreign as included in a list, the formation, approbation and publication whereof shall be determined by the Regulation; by amounts lent by the companies on their own policies or on the said securities; by urban immoveables situated in Spain, and first mortgages thereon, appraised in both cases at 75 per cent. of their true value.

At least 50 per cent. of the amount of the said reserve shall be paid into the Caja de Depósitos or into the Bank of Spain, and may not be withdrawn either wholly or partially except for fulfilling contracted obligations and those to which the companies may be condemned by virtue of a final judgment of the Spanish Tribunals in favour of insured Spaniards. The part of the reserve so deposited must of necessity be invested in cash or securities included in the list referred to, and at least half of that 50 per cent, that is, 25 per cent. of the whole mathematical reserve shall consist of Spanish securities.

The companies may change the deposited securities for others included in the list, on previous notice to the advisory Board, and shall be bound to substitute the amount of the part of the reserve which consists of a certain security when this is excluded from the list, as prescribed by the Regulation. When the other 50 per cent. of the reserve is wholly or partially invested in cash or securities, the companies may likewise pay them into the Caja de Depósitos or into the Bank of Spain and withdraw them when they desire. In all cases, they must keep in Spain, at the disposal of the Board, the document which proves the existence of the securities in which that 50 per cent is wholly or partially invested, with the guarantees determined by the Regulation.

The immoveables or mortgages which, according to the first paragraph of this article, are subject to the undeposited half of the mathematical reserve, may not in any case exceed the 25 per cent of the total amount of that reserve.

The whole of the mathematical reserve must be affected to answer for the performance of the contracts between the insurer and assured, when they are made in Spain, or when, if made abroad, the assured was a Spaniard and had expressly stipulated that the contract should be performed in Spain.

The items which constitute the mathematical reserve shall be exempt from all but the general taxation affecting each of the properties which may form the said reserve.

The rights of the holders of Spanish policies over that reserve are understood as independent of those which are derived from their corresponding contracts.

18. Insurance corporations of all nationalities which are not devoted to life insurance, shall establish a reserve against the current risks, in addition to the statutory reserve.

Esta reserva se hallará constituída por la parte de primas destinadas al cumplimiento de futuras obligaciones no extinguidas en el ejercicio corriente.

Para calcularla se clasificarán las pólizas según las fechas de su estipulación y el número de meses que ha de correr el riesgo asegurado durante el año siguiente hasta el vencimiento de las primas anuales respectivas. La reserva importará tantas dozavas partes del premio cobrado cuantos sean los meses del ejercicio siguiente, durante los cuales correrá el riesgo hasta el vencimiento de la nueva prima.

19. Son aplicables al importe de la reserva de riesgos en curso las mismas disposiciones previstas en el art. 17 para las reservas matemáticas de las Compañías de seguros de vida; pero la parte de ella que constituya el depósito obligatorio será sólo del 40 por 100 de su importe total. Las Compañías que simultáneamente se dediquen al seguro de vida y á los de otra clase constituirán, separadamente, y en la forma expresada, las correspondientes reservas matemáticas y de riesgos en curso y los depósitos á ellas inherentes.

20. Cuando las entidades aseguradoras sean extranjeras, la reserva matemática y la de riesgos en curso se referirán, no sólo á los contratos que se celebren por las sucursales ó filiales españolas, sino á todos los que deban domiciliarse en ellas. Dichas reservas estarán situadas en España en la forma prevenida en los art. 17 y 18 y afectas en primer término á responder de esos contratos, sin perjuicio de los demás derechos que de los mismos se deriven para los asegurados.

A los efectos del párrafo anterior, quedarán sometidos al régimen de la ley los contratos que se refieran á personas que tengan su domicilio en España ó á bienes muebles ó inmuebles que radiquen en este país, aunque aparezcan suscritos en el extranjero, siempre que en este último caso se estipulase expresamente que el contrato debe cumplirse en España.

No se admitirá deducción alguna, para el cómputo de las reservas matemáticas ó de riesgos en curso, por razón de reaseguro, en el extranjero, de los contratos domiciliados en España ó que en ella hayan de cumplirse.

21. Cuando una entidad aseguradora cese en sus operaciones y acredite haber cumplido todos los compromisos que tenga contraídos, el Ministerio de Fomento ordenará, oída la Junta consultiva de Seguros, la devolución del saldo de las reservas que resultare á su favor.

22. Las entidades extranjeras establecidas ó que se establezcan en España por medio de representación ó sucursal, estarán obligadas á llevar, en idioma castellano, una contabilidad especial para las operaciones que celebren en España ó hayan de cumplir en ella. Los contratos que estas sucursales hagan estarán también redactados en castellano, y sus estatutos y documentos se presentarán en el propio idioma, y ese texto será el único que tenga valor legal.

23. Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse con motivo de los contratos de seguros sujetos á esta ley, serán sometidos á la jurisdicción española, sin que sea válido ningún pacto en contrario.

Título III. De la Junta Consultiva y de la Inspección de seguros.

24. Se crea en el Ministerio de Fomento un organismo denominado Junta consultiva de Seguros, que tendrá por principal objeto asesorar al Ministro de Fomento en esta clase de asuntos, y se compondrá de un presidente y 16 miembros, á saber:

Dos Senadores; dos Diputados; dos individuos elegidos entre los que reúnan las condiciones siguientes: académicos de Ciencias exactas, catedráticos de esta Facultad de la Universidad de Madrid, ó personas de reconocida competencia en materia de seguros; un catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid; un vocal del Instituto de Reformas sociales; un representante del Ministerio de Hacienda, propuesto por el Ministro; un director gerente de Sociedades de seguros de vida; dos directores gerentes de Compañías anónimas de seguros distintos de los de vida; dos directores gerentes de Compañías tontinas ó mutuas de seguros distintos de los de la vida, y dos asegurados españoles, todos nombrados por el Ministro de Fomento.

Los directores de Compañías de seguros serán designados por el Ministerio de Fomento de entre los que las respectivas Compañías de cada grupo le propongan, pero el nombramiento recaerá en tres directores de Compañías nacionales y en dos de extranjeras.

This reserve shall consist of the part of the premiums intended for the fulfilment of future obligations which are not extinguished with the current financial year.

For the purpose of calculating it, the policies shall be classified according to the dates of their making and the number of months which the insured risk has to run during the following year until the due date of the respective annual premiums. The reserve shall consist of so many twelfth parts of the premium received as there are months of the following year during which the risk will run until the due date of the new premium.

19. The same provisions set forth in art. 17 for the mathematical reserves of life insurance companies apply to the amount of the reserve for current risk; but the part thereof which constitutes the compulsory deposit shall only be 40 per cent. of its whole amount. Companies which devote themselves to life insurance and to those of another branch at the same time, shall separately and in the form set forth, constitute the corresponding mathematical reserve and that against current risks and the deposits pertaining thereto.

20. In the case of foreign insurance corporations, the mathematical reserve and that against current risks shall refer, not only to the contracts made by the Spanish branches or affiliated societies, but to all those which ought to be domiciled therein. The said reserves shall be kept in Spain as provided in arts. 17 and 18 and affected in the first place to meet those contracts, but without prejudice to the other rights which are derived therefrom in favour of the assured.

For the purposes of the preceding paragraph, the contracts which refer to persons who have their address in Spain or to moveable or immoveable property situated in this country shall be subject to the government of the law, although they appear to be signed abroad, provided, in the latter case, that it was expressly stipulated that the contract should be performed in Spain.

No deduction shall be allowed for the purpose of computing the mathematical reserve or that against current risks, by reason of re-insurance abroad of contracts domiciled in Spain or which have to be performed therein.

21. When an insurance corporation ceases its operations and proves that it has performed all the commitments which it has contracted, the Minister of Public Works, after hearing the Advisory Insurance Board, shall order the return of the balance of the reserves which prove to be in its favour.

22. Foreign corporations which are or may be established in Spain by means of a representative or a branch, shall be obliged to keep in the Spanish language, a special account of the transactions effected in Spain or which have to be performed therein. The contracts made by these branches shall likewise be drafted in Spanish, and their constitution and documents shall be presented in the same language, and that shall be the only text which has legal value.

33. Legal disputes which may arise from contracts of insurance subject to this law, shall be submitted to the Spanish jurisdiction, and any agreement to the contrary shall be void.

Title III. Advisory Board and Inspection of Insurances.

24. A department called The *Junta consultiva de Seguros* is hereby formed in the Ministry of Public Works, which for its principal object shall have to assist the Minister of Public Works in this class of business and shall be composed of a President and 16 members, that is to say: Two Senators; two Deputies; two persons from those who possess the following qualifications: members of Academies of Pure Science, professors of this Faculty in the University of Madrid, or persons of recognized competence in insurance matters, one professor of the Faculty of Law in the University of Madrid; one member of the Institute of Social Reforms; one representative of the Exchequer, nominated by the Chancellor; one managing director of a Life Insurance Society; two managing directors of limited Insurance Companies, other than of Life; two managing directors of tontine Companies or of Mutual Insurance Companies, other than of Life, and two assured Spaniards, all appointed by the Minister of Public Works.

The managing directors of insurance companies shall be appointed by the Ministry of Public Works from those nominated by the representative companies of each group, but the appointment shall fall on three directors of national companies and on two of foreign companies.

El comisario general de seguros será presidente nato de la Junta consultiva.

El reglamento determinará la forma de nombramiento, elección y renovación de los miembros de esta Junta; el Ministro de Fomento designará el vicepresidente y el secretario.

La Junta habrá de ser oída en lo relativo á las peticiones de inscripción en el Registro de Sociedades de Seguros y en todos los casos previstos por esta ley y por el reglamento. Podrá, además, el Ministro de Fomento solicitar su informe en todas las cuestiones relativas á la ejecución de los mismos.

Para que sean válidos los acuerdos de la Junta es necesario que concurran á la deliberación ó votación once, cuando menos, de sus miembros. En caso de empate, decidirá el voto del presidente.

El reglamento determinará las causas que pueden motivar la ausencia justificada y el número de faltas de asistencia injustificadas que pueden bastar para que se entienda renunciado el cargo y se proceda á elección ó designación de nuevo vocal.

25. Se crea también en el Ministerio de Fomento un Centro denominado Inspección de Seguros, bajo la dirección de un comisario general; los gastos de personal y material del servicio serán incluídos en el presupuesto general del Estado.

El comisario será de libre designación del Ministro entre quienes tengan, cuando menos, la categoría de jefe superior de Administración.

El nombramiento del personal de este organismo se hará sin sujeción á lo que prescribe la ley de 21 de Julio de 1876[1]) y disposiciones posteriores. Será nombrado y separado por el Ministro, á propuesta del comisario general, y oída la Junta consultiva, debiendo recaer el nombramiento en aquellos que tengan acreditados en el ramo conocimientos especiales.

El reglamento determinará la fianza que habrán de prestar.

26. Quedan sometidas las entidades dedicadas al seguro en cualquiera de sus formas, á la vigilancia de los visitadores que formen parte como tales del personal técnico de la Inspección de Seguros, quienes podrán comprobar, en el domicilio social de dicha entidad, las operaciones que realicen, examinando sus libros de contabilidad y cuantos documentos y justificantes consideren conveniente compulsar, para formar juicio acerca del régimen legal y situación económica de la entidad.

Estas visitas se harán, previa orden escrita para cada caso, del comisario general de seguros, la cual deberá exhibirse siempre que lo requiera un representante de la entidad objeto de la visita.

Los visitadores propondrán al comisario general que se impongan á las Compañías las correcciones y multas á que hubiere lugar.

El personal de la Inspección, antes de ejercer sus funciones, prestará juramento de no divulgar los datos y secretos de que en virtud de ella lleguen á tener conocimiento.

Unicamente el comisario general en persona podrá exigir la exhibición de los libros de pólizas ó inquirir los nombres de los beneficiarios y de los poseedores de las pólizas.

27. El funcionario debidamente autorizado para practicar una visita, redactará un acta después de terminado su cometido, insertándola en el libro especial que para este efecto habrá de tener cada Compañía, y consignará en el acta el resultado de la visita, emitiendo su opinión acerca de la conducta de la Sociedad en el cumplimiento de sus obligaciones, las deficiencias que observe y las medidas y correcciones que estime deben aplicarse.

En la visita podrá ser requerida la presencia de un notario por la Sociedad intervenida.

Una copia de dicha acta se elevará al comisario general.

Las Compañías podrán hacer uso de lo que en el acta conste, si lo estimasen conveniente.

28. Las entidades sometidas al régimen de esta ley satisfarán anualmente un impuesto, que no podrá exceder del 1 por 1.000 de las sumas recibidas como primas ó cuotas para compensar á la Hacienda los gastos que ocasione el servicio.

---

[1]) La citada Ley es la de Presupuestos de dicho año que reguló la entrada y ascenso de los funcionarios públicos en la Administración del Estado.

The Commissioner General of insurances shall be ex officio President of the Advisory Board.

The Regulation shall determine the form of appointment, election and renewal of the members of this Board; the Minister of Public Works shall appoint the Vice-President and secretary.

The Board mut be heard on the applications for inscription on the Register of Insurance Societies and in all cases contemplated by this law and by the Regulations. The Minister of Public Works may also apply for its report in all questions relating to the carrying out thereof.

In order that the resolutions of the Board may be valid, it is necessary that at least eleven of its members be present at the decision or voting. In case of equality, the vote of the President shall decide.

The regulations shall determine the reasons which may justify absence, and the number of unjustified absences which may be sufficient for the office to be considered as resigned, and the election or appointment of a new member to take place.

25. There is likewise hereby created in the Ministry of Public Works, a Centre called the Inspection of Insurances (Inspección de Seguros) under the direction of a Commissioner General; the expenses of the staff and material of the service shall be included in the general State Budget.

The Commissioner shall be freely appointed by the Minister from among those persons who have at least the rank of "Jefe Superior" of Administration.

The appointment of the staff of this department shall not be bound by the provisions of the law of 21 July 1876[1]) and subsequent provisions. They shall be appointed and dismissed by the Minister, on the proposal of the Commissioner General, and after hearing the Advisory Board. The appointment must be of those persons who have been proved to have special knowledge of insurance.

The Regulation shall fix the security to be given by them.

26. The corporations which are devoted to insurance in any of its forms are subject to the inspection of the visitors who, as such, form part of the technical staff of the Inspection of insurances, who may examine the transactions carried out, at the social address of the said corporations, and examine their books of account and all documents and vouchers which they consider fit to inspect, so as to form a judgment on the lawful regimen and economic position of the entity.

These visits shall take place on the previous written order of the Commissioner General of Insurances in each case, which must be produced whenever a representative of the visited corporation requires it.

The visitors shall propose to the Commissioner General that the proper penalties and fines should be inflicted on the companies.

The staff of the Inspection, before exercising their functions, shall take oath not to divulge the facts and secrets of which they become acquainted in virtue thereof.

Only the Commissioner General in person may require production of the books of policies or inquire the names of the beneficiaries and holders of policies.

27. The official who is duly authorised to make an inspection shall draw up a report of the termination of his commission, and insert it in a special book which each company must keep for this purpose, and shall state the result of the visit in the minute, giving his opinion on the conduct of the society in fulfilling its obligations, the observed deficiencies and the measures and penalties which he thinks should be applied.

The inspected society may require the presence of a notary at the inspection.

A copy of the said minute shall be forwarded to the Commissioner General. The companies may make use of the statements in the report if they think fit.

28. The corporations subject to the governance of this law shall pay a yearly tax, not exceeding 1 per 1000 of the sums received as premiums or contributions in order to compensate the Exchequer for the expenses occasioned by the service.

---

[1]) The said Law is the Revenue Act of each year, which regulates the admission and promotion of the public officials in the Administration of the State.

29. Por el Ministro de Fomento se podrá crear, previo estudio y propuesta de la Junta consultiva, un Cuerpo de corredores jurados de seguros, á cuyo efecto en un Real decreto y en reglamento especial se determinará: a) Las condiciones personales que habrá de reunir el aspirante al cargo y los medios oficiales de acreditarlas: — b) La forma en que deberán practicarse las oposiciones ó los exámenes para que quienes hayan de actuar como corredores en el ramo de seguros á que se dediquen acrediten poseer los conocimientos necesarios; — c) La fianza que han de prestar los nombrados, antes de ejercer el cargo; — d) Los derechos y corretaje que podrán percibir y que han de pesar siempre sobre los productores de seguros; — e) Las responsabilidades que les incumban y la penalidad especial aplicable á las infracciones que puedan cometer.

Una vez creado el Cuerpo de corredores jurados de Seguros, no será válido contrato alguno que se celebre sin su intervención, salvo lo dispuesto en el número 3 del art. 3 de esta ley y las excepciones que se establezcan en el reglamento especial.

30. En el reglamento para la ejecución de esta ley se precisarán claramente los plazos en que la Junta consultiva, la Inspección general y el Cuerpo de corredores de Seguros habrán de cumplir las funciones que para con el público les incumban, y se señalarán de igual manera las penalidades aplicables á los funcionarios responsables de delitos ó faltas en el ejercicio de sus cargos respectivos, sin perjuicio del derecho que á las Sociedades y á los particulares asiste de ejercitar contra ellos la ley de 29 de Marzo de 1904 sobre responsabilidad civil de los funcionarios públicos.

31. Por la Inspección general de Seguros se publicará, á lo menos quincenalmente, un *Boletín oficial de Seguros* con cuantos datos, noticias y avisos interesantes para los asegurados adquiera aquel organismo.

Asimismo incumbirá á la Inspección general de Seguros entender en las consultas y reclamaciones que hagan los asegurados acerca de la interpretación y cumplimiento de la presente ley.

Título IV. De las responsabilidades.

32. Las entidades ó Sociedades dedicadas á operaciones de seguros que las realicen sin haber sido inscritas en el Registro, incurrirán en una multa de 100 pesetas por cada una de las pólizas que hubieren suscrito. Estas multas serán satisfechas por el gerente de la Sociedad de su peculio personal y sólo subsidiariamente por el fondo común de la Compañía, sin perjuicio de la responsabilidad que á ésta ó á sus agentes incumban por el ejercicio clandestino de la industria del seguro ó por manifiesta desobediencia á lo estatuído sobre la materia.

33. Las entidades que infrinjan lo preceptuado en el art. 8 incurrirán cada vez en la multa de 2.000 pesetas, aplicándose á su cobro las disposiciones señaladas en el artículo anterior, sin perjuicio también de la responsabilidad especial que, con arreglo á las leyes, pudiera caberles por razón del contrato ó de los contratos ilegales que celebren.

Los que en el plazo fijado en el art. 14 no hubieren cumplido los deberes que en él se señalan, incurrirán en la multa de 20 á 100 pesetas por cada día de retraso.

La concesión que se deriva del hecho de la inscripción en el Registro quedará en suspenso desde el momento en que por el Ministro de Fomento, oída la Junta consultiva de Seguros, se declare que la entidad no funciona con arreglo á los estatutos ó documentos presentados, ó no se ajusta á los preceptos legales y reglamentos. La decisión ministerial que se dicte dispondrá además que si en el plazo de treinta días, á partir de su notificación, no fueren rectificadas las infracciones, se intervendrán los libros y cajas sociales, procediéndose de oficio y á costa de la Sociedad á esa rectificación, y en caso de no ser posible se declarará su disolución.

Contra esta última resolución podrá recurrirse en vía contenciosa.

34. El comisario general podrá corregir con multas de 10 á 100 pesetas diarias las faltas cometidas por las entidades dedicadas á operaciones de seguros en cualquier forma ó ramo, aplicándose á su cobro las disposiciones señaladas en el artículo anterior.

De la resolución del comisario general podrán los interesados alzarse ante el Ministro, de cuya resolución no podrá recurrirse.

35. Si por los visitadores ó de cualquier otro modo se descubriese que una entidad aseguradora infringe las disposiciones legales ó estatutarias relativas al

29. After previous study and on the proposal of the Advisory Board, the Minister of Public Works may create a corps of sworn insurance brokers, for which purpose the following shall be determined by a Royal Decree and by special Regulation: a) The personal qualification which the aspirant for the office must possess and the official means of proving them; — b) The way in which the examinations competitive and otherwise must be held in order that those who are to act as brokers in the insurance branch to which they devote themselves may prove that they possess the necessary knowledge; — c) The security to be given by the persons who are appointed before exercising their office; — d) The fees and brokerage which they may charge, which are always to be borne by the insurers; — e) The liabilities incumbent on them and the special penalty applicable to breaches which they may commit.

When once the corps of sworn insurance brokers is created, no contract which is made without their intervention shall be valid, saving the provisions of No. 3 of art. 3 of this law and the exceptions enacted in the special Regulation.

30. In the Regulation for carrying out this law, the times shall be clearly stated within which the advisory Board, the general Inspection and the corps of insurance brokers must fulfil the functions which fall upon them with regard to the public, and in like manner shall be set forth the penalties applicable to officials who are liable for crimes or criminal negligence in carrying out their respective duties, without prejudice to the right of societies and individuals to put in force against them the law of 29 March 1904 on the civil liability of public officials.

31. An official Insurance Bulletin (Boletin oficial de Seguros) shall be published at least once a fortnight by the general Inspection of Insurances, with all the facts, informations and notices which concern the assured, which that body may acquire.

It shall likewise be the duty of the general Inspection of Insurances to attend to the questions and complaints made by the assured about the interpretation and fulfilment of this law.

Title IV. Liabilities.

32. Corporations or societies devoted to insurance transactions, who effect them without having been inscribed in the Register, shall incur a fine of 100 pesetas for each of the policies which they write. These fines shall be paid by the manager of the society from his private property and only secondarily by the common funds of the company, without prejudice to the liability incurred by the latter or its agents arising from the clandestine exercise of insurance business or from manifest disobedience to the enactments on this subject.

33. Corporations which infringe the provisions of art. 8 shall be liable to a fine of 2 000 pesetas for each offence, and the provisions set forth in the preceding article shall apply to the recovery thereof, without prejudice to the special liability which may affect them by law by reason of the illegal contract or contracts made by them.

Those who have not fulfilled the duties set forth in art. 14 within the time fixed therein, shall be liable to a fine of 20 to 100 pesetas for each day's default.

The concession derived from the fact of inscription in the Register shall be suspended from the moment that the Minister of Public Works, after hearing the Advisory Insurance Board, declares that the corporation does not act in accordance with the constitution or documents presented, or does not conform to the legal precepts and regulations. The ministerial decision shall also provide that if the breaches are not rectified within the space of thirty days from their notification, the books and coffers of the society shall be seized and the rectifications officially effected at the expense of the society, and if this is impossible its dissolution shall be declared.

An appeal may be brought against this latter decision by way of the contentious administrative proceeding.

34. The Commissioner General may punish faults committed by corporations devoted to insurance transactions in any form or branch, by fines of 10 to 100 pesetas a day, and apply the provisions set out in the preceding article to the recovery thereof.

Persons interested may appeal to the Minister from the decision of the Commissioner General, but from the decision of the former there can be no appeal.

35. If through the visitors or in any other way, it is discovered that an insurance corporation is infringing the legal or statutory provisions relating to the calculation

cálculo de las reservas, falsea los balances, la cuenta de pérdidas y ganancias ó cualquier otro documento de los que deben publicarse ó elevarse al Ministerio de Fomento ó comete cualquier otra infracción que tienda á ocultar la verdadera situación de la Empresa, el Ministro de Fomento impondrá á ésta una multa de 1.000 á 10.000 pesetas, una vez oída sobre el caso la Junta consultiva de Seguros, y sin perjuicio de la responsabilidad penal de la Sociedad, aplicándose al cobro de la multa las disposiciones señaladas en el artículo anterior.

Contra la disposición en que la multa se imponga podrán recurrir los interesados en vía contenciosa.

36. Se entenderá aplicable el art. 548, número 5, del Código penal[1]), cuando la entidad aseguradora se apropie ó distraiga cualquiera clase de bienes afectos á las reservas matemáticas ó de riesgos en curso ó simulare precio en ellos que hiciera ineficaces esas garantías.

Será aplicable el núm. 7 del mismo artículo[2]) cuando con engaño, respecto á las garantías legales de las Empresas aseguradoras por parte de éstas ó respecto de sus propias declaraciones por parte del asegurado, se suscribiere contrato de seguro en el cual apareciese demostrada la existencia de una defraudación.

37. Para las Sociedades anónimas será obligatoria la disolución cuando las pérdidas hayan mermado en una mitad el capital social suscrito.

38. El comisario general por sí ó previa denuncia de una entidad aseguradora cualquiera ó de un asociado ó interesado en alguna de las Asociaciones exceptuadas en el art. 3, podrá decretar una visita de inspección para comprobar si la Sociedad exceptuada ejecuta operaciones por las cuales deba dejar de serlo, sometiéndose á los preceptos de esta ley. Si la sospecha ó la denuncia que motivó la visita resultase fundada, incurrirá la entidad culpable en la penalidad establecida en el art. 32.

Igualmente procederá la Inspección por sí ó ante denuncia regular de un particular ó de una Sociedad contra cuantas entidades empleen indebidamente en sus anuncios, títulos ó prospectos de negocios las palabras «seguro», «contraseguro», «coaseguro» ó «reaseguro».

Cuando la denuncia hecha por un particular ó entidad contra una Compañía de Seguros resultare falsa, sin perjuicio de las responsabilidades penales á que ello diere lugar, se insertará, á cargo y coste del falso denunciante en la *Gaceta de Madrid* y en dos de los periódicos de mayor circulación de la localidad donde tuviere su domicilio la entidad denunciada, el acta de comprobación de la falsedad de la imputación, una vez autorizada su inserción por el comisario general de Seguros, oída la Junta consultiva.

39. Los contratantes que otorguen ó cumplimenten contratos infringiendo lo dispuesto en el art. 20, párrafo 2, no podrán invocar ante los Tribunales españoles las cláusulas de los mismos ni la ejecutoria ganada en los Tribunales extranjeros.

Incurrirán además solidariamente la entidad aseguradora, su agente y el tenedor de la póliza, en las responsabilidades pecuniarias determinadas en los artículos 32, 33 y 34 de esta ley y en las definidas en las leyes de Hacienda.

Disposiciones transitorias.

1. Esta ley empezará á regir á los seis meses de su promulgación, á cuyo efecto tres meses antes estará publicado por el Ministerio de Fomento el reglamento provisional para su aplicación.

2. El reglamento definitivo redactado por la Junta consultiva y aprobado por el Ministerio de Fomento, oído el Consejo de Estado, comenzará á regir á los doce meses de la promulgación de esta ley.

---

[1]) Dice así el n.° 5° de este art. combinado con el anterior: Incurrirán en la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio si la defraudación no excediere de 100 pesetas; en la de arresto mayor en su grado medio ó presidio correccional si excede de 100 y no pasa de 2.500 pesetas, y en la de presidio correccional en sus grados mínimo y medio excediendo de dicha cantidad, los que en perjuicio de otro se apropiaren ó distrajeren dinero, efectos ó cualquier otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión ó administración ó por otro título que produzca obligación de entregarla ó devolverla ó negaren haberla recibido. — Las penas se impondrán en el grado máximo en el caso de depósito miserable ó necesario.

[2]) 7° Los que defraudaren haciendo suscribir á otro con engaño algun documento. (La pena aplicable á estos es la misma que queda indicada en la nota anterior.)

of the reserves, is falsifying the balance sheets, the profit and loss account or any other of the documents which have to be published or forwarded to the Ministry of Public Works or is committing any other breach which tends to conceal the true position of the undertaking, the Minister of Public Works shall inflict on it a fine of 1000 to 10 000 pesetas, after once hearing the Advisory Insurance Board on the matter, and without prejudice to the criminal liability of the society, and shall apply the provisions set out in the preceding article to the recovery of the fine.

The persons interested may appeal against the order inflicting the fine by way of the contentious administrative proceeding.

36. When an insurance corporation appropriates or withdraws any kind of property appropriated to the mathematical reserve or that of current risks or feigns a price for them which renders those securities insufficient, art. 548, number 5 of the Penal Code[1]) shall be understood to apply.

When an insurance contract is signed though deceit of the insuring companies in respect of the legal security or by the assured with respect to his own declarations, in which the existence of fraud appears to be shown, number 7 of the same article[2]) shall apply.

37. Dissolution shall be compulsory on limited societies, when their losses have wasted one half the subscribed social capital.

38. The Commissioner General, on his own motion or on previous information against any insurance corporation either by a member or a person interested in any of the associations excepted by Art. 3, may order a visit of inspection to ascertain if an exempted society is carrying on operations by which it ought to cease to be exempted and to submit to the provisions of this law. If the suspicion or information which caused the inspection proves to be well founded, the offending corporation shall be liable to the penalties enacted in art. 32.

The Inspection shall likewise take steps on its own motion or on the regular information of an individual or society against any corporations who improperly employ the words "insurance" "counter-insurance" "co-insurance" or "re-insurance" in their advertisements, titles or business prospectuses.

When the information made by an individual or corporation against an insurance company proves to be false, then without prejudice to the criminal liabilities available, the report proving the falsity of the charge shall be inserted at the charge and cost of the false informer, in the *Gaceta de Madrid* and in two of the newspapers of the greatest circulation in the locality where the denounced corporation has its address, but only after its insertion has been authorised by the Commissioner General of Insurances on hearing the consultation Board.

39. Contracting parties who execute or perform contracts which infringe the provisions of art. 20, paragraph 2, cannot rely upon the terms thereof before the Spanish Tribunals nor on a final judgment obtained in Foreign Tribunals.

Likewise the insurance corporation, its agent and policy holder, shall jointly and severally incur the pecuniary liabilities determined by arts. 32, 33 and 34 of this law and those defined in the laws of the Exchequer.

Transitory Provisions.

1. This law shall come into force six months after its promulgation, for which purpose the provisional Regulation for its application shall be published three months before by the Ministry of Public Works.

2. The final Regulation drawn up by the Advisory Board and approved by the Ministry of Public Works, after hearing the Counsel for the State, shall come into force twelve months from the promulgation of this law.

---

[1]) No. 5 of this article in combination with the preceding, says: Those who to the prejudice of another appropriate or embezzle money, effects or any other moveable which they have received on deposit, commission or management or by any other title which obligos them to deliver or return it, or who deny that they have received it, shall incur the punishment of greater arrest in its minimum and medium grades if the defrauding does not exceed 100 pesetas; of greater arrest in its medium grade or correctional imprisonment, if it exceeds 100 pesetas and does not exceed 2500, and of correctional imprisonment in its minimum and medium grades if it exceeds the said amount. — Punishments of the maximum grade shall be inflicted in the case of deposit owing to a calamity or compulsory deposit.

[2]) Those who defraud by causing another to sign any document through deceit. (The punishment applicable to these is the samo as is indicated in the previous note.)

3. Las Sociedades aseguradoras en funcionamiento al promulgarse esta ley que no pertenezcan al número de las exceptuadas en el art. 3, presentarán en el plazo de cuatro meses, á contar desde esta fecha, los documentos exigidos en el art. 2 en sus diferentes números, con la solicitud de inscripción.

Las exceptuadas presentarán los documentos que previene el art. 3.

Las entidades que transcurrido el plazo de cuatro meses no hubieren solicitado la inscripción, se entenderá que optan por no someterse á las prescripciones de la presente ley y prefieren proceder á su liquidación.

A este efecto establecerán en los tres meses siguientes á la expiración del plazo de opción una oficina liquidadora encargada de facilitar á sus asegurados los informes que necesiten relativos á sus pólizas; del cobro y transmisión de las primas y del pago de siniestros, rescates de contratos de seguros sobre la vida, préstamos y rentas vitalicias, de seguir los litigios por cuenta de la Compañía; presentar los documentos que la Inspección les exija, y de cumplir las disposiciones fiscales, y tendrán además la obligación de constituir las reservas matemáticas y de riesgos en curso, según previenen los artículos 17 y 18 respecto de todos los contratos de seguros que tengan pendientes.

Serán nulos todos los contratos de seguros que estas entidades celebren con posterioridad á la fecha de la promulgación de la presente ley.

Las Compañías ó entidades de seguros que se creen desde la fecha de la promulgación de la ley, se someterán desde luego á todas las disposiciones de la ley, considerándose á este efecto como en funcionamiento, en la fecha de empezar á regir sus preceptos.

Toda infracción de las precedentes disposiciones llevará consigo la multa de 25.000 pesetas, que se hará inmediatamente efectiva, sin perjuicio de los procedimientos legales á que hubiere lugar.

Esta disposición transitoria será aplicable á las entidades cuya inscripción fuere definitivamente denegada.

4. Las entidades aseguradoras que soliciten su inscripción en el Registro, estarán sometidas á lo dispuesto en esta ley y en el reglamento que para su aplicación se dicte, y tomarán las medidas necesarias para que transcurridos seis meses desde la fecha de la promulgación de esta ley sean aplicados sus preceptos á todos los contratos entonces en curso y á los que se celebren en lo sucesivo.

A la solicitud de inscripción acompañarán los documentos exigidos en el art. 2 con las excepciones siguientes: a) Las entidades que no deban su existencia á una escritura social podrán presentar en vez de ella testimonio ó copia fehaciente de la disposición del Poder público que les haya dado vida. — b) El depósito de garantía exigido por el art. 43 de la ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1895, y en su caso el exigido por el Real decreto del Ministro de la Gobernación de 27 de Agosto de 1900, podrá quedar afecto al cumplimiento del precepto 7 del art. 2, y el exceso, si lo hubiere, se computará para los depósitos exigidos por esta ley por razón de reservas.

5. Las Compañías ó entidades que no tengan desembolsado el 25 por 100 del capital social que se exige por el apartado 4 del art. 2, serán dispensadas de hacerlo si la reserva estatutaria que hubieren acumulado, sumada al desembolso efectivo realizado por los accionistas, alcanzare una cifra igual á dicho 25 por 100.

6. Se concede á las Compañías aseguradoras inscritas un plazo de cinco años para que en la proporción mínima anual de una quinta parte sustituyan los valores de su cartera afectos á las reservas que no pertenezcan á los incluídos en la lista, cuya redacción, publicación y rectificación determinará el reglamento con arreglo al art. 17 de esta ley.

Asimismo se concede á las Compañías ó entidades aseguradoras un plazo igual para que, en la proporción indicada, puedan completar el desembolso del 25 por 100 del capital social.

El reglamento determinará también la forma de publicación y rectificación de la lista de valores en que habrán de invertirse las cantidades recaudadas por las Asociaciones á que se refiere el art. 12.

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así Civiles como Militares y Eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á catorce de Mayo de 1908. — Yo el Rey. — El Ministro de Fomento, Augusto González Besada.

3. The insurance societies doing business at the promulgation of this law, which are not among those exempted by art. 3, shall present the documents required by the several numbers of art. 2, with an application for inscription, within the space of four months from this date.

The exempted societies shall present the documents required by art. 3.

The corporations which have not applied for inscription within the space of four months, shall be understood to choose not to submit to the provisions of the present law and to prefer to proceed to their liquidation.

For this purpose within the three months following the term of option, they shall open an office for liquidation, bound to afford the assured the information which they need with regard to their policies; for the recovery and remittance of the premiums and payment for casualties, surrender of policies of life insurance, loans and life annuities, for prosecuting actions on behalf of the company; to produce the documents which the Inspection requires of them, and to comply with the fiscal requirements; and they shall likewise have the duty of forming the mathematical reserves and those for current risks, as provided by arts. 17 and 18, in respect of all pending contracts.

All insurance contracts made by these corporations after the date of the promulgation of this law shall be void.

Insurance companies or corporations which are created after the date of the promulgation of the law, shall be at once subject to all the provisions of the law, and for this purpose they shall be considered as doing business at the date of its precepts coming into force.

Every breach of the preceding provisions shall entail a fine of 25 000 pesetas, which shall be at once enforced without prejudice to any legal proceedings which may be available.

This transitory provision shall apply to the corporations whose inscription has been definitely refused.

4. Insurance corporations which apply for their inscription on the Register shall be subject to the provisions of this law and the Regulation which shall be passed for applying it, and shall take the measures necessary for applying their rules, after the expiration of six months from the date of the promulgation of this law, to all the contracts then current and those which shall thereafter be made.

The application for inscription shall be accompanied by the documents required by art. 2, with the following exceptions: a) Corporations which do not owe their existence to a social instrument may in place thereof present a certified or authoritative copy of the charter or the public Power which gave them existence. — b) The deposit of the security required by art. 43 of the Revenue Act of 30 June 1895, and that required by the Royal Decree of the Secretary of State for the Home Department of 27 August 1900, if applicable, may be applied to the fulfilment of precept 7 of art. 2, and the surplus, if any, shall be reckoned towards the deposits required by this law for the purpose of the reserves.

5. Companies or corporations which have not 25 per cent. of the social capital paid up, as required by paragraph 4 of art. 2, shall be exempted therefrom, if the reserve which they have accumulated, required by their constitution, added to the actual payment made by the shareholders, reaches a figure equal to the said 25 per cent.

6. Registered insurance companies are granted a term of five years in order that to the extent of at least one fifth part they may each year replace the securities in their portfolio which are applied to the reserves but do not belong to those included in the list, the drafting, publication and correction whereof shall be determined by the Regulation in accordance with art. 17 of this law.

The insurance companies or corporations are likewise granted a like term in order that they may complete the payment of the 25 per cent. of the social capital, in the proportion indicated.

The Regulation shall likewise determine the form of publication and correction of the list of securities in which the sums collected by the associations referred to in art. 12 have to be invested.

We therefore command all the Tribunals, Justices, Chiefs, Governors and other Authorities, both Civil and Military and Ecclesiastic, of every kind and dignity, that they keep and cause to be kept, fulfilled and executed this present law in all its parts.

Given at the Palace on 14 May 1908. — I the King. — The Minister de Fomento *Augusto González Besada.*

Reglamento provisional para la aplicación de la Ley de 14 de mayo de 1908 acerca del registro é inspección de las Empresas de seguros.

Por Real Decreto de 26 de julio de 1908, publicado en la Gaceta de 12 de agosto del mismo año, se aprobó este Reglamento que contiene 122 artículos y 19 disposiciones transitorias.

Está dividido el Reglamento en 7 capítulos cuyos epígrafes y subdivisiones son como siguen:

Capítulo I. Disposiciones generales. — Capítulo II. De la inscripción. a) De la solicitud y documentos anexos. b) De la presentación de las bases técnicas. c) Del depósito necesario. d) Requisitos especiales para las Empresas extranjeras. e) De las entidades exceptuadas. f) De la resolución de la solicitud. — Capítulo III. De la publicidad y de las garantías. I. De la constitución y administración de las Asociaciones en forma tontina. — II. De la administración de las Empresas de seguros. a) De los documentos, libros y registros. b) De las cuentas de cada ejercicio. c) Contabilidad especial para España de las Compañías extrangeras. d) De las aclaraciones pedidas por la inspección de seguros. — III. De la gestión técnica. a) Reserva matemática de primas del seguro sobre la vida. b) De la reserva de riesgos en curso. c) De la inversión de las reservas. d) De la forma de acreditar la inversión de las reservas. e) Del depósito relativo á las reservas. — Capítulo IV. De la Junta consultiva de seguros. a) De la constitución. b) Del Comisario general. c) Atribuciones de la Junta consultiva. d) Funcionamiento. — Capítulo V. Objeto y organización de la Inspección de seguros. a) Del personal y su nombramiento. b) De la fianza y juramento. c) Del ejercicio de la acción investigadora. d) Del Boletin oficial de Seguros. e) Del impuesto especial. — Capítulo VI. De la aplicación de las penalidades. — Capítulo VII. Disposiciones transitorias.

Este Reglamento ha de aplicarse á toda persona ó entidad individual ó colectiva, nacional ó extranjera que se dedique en España á las operaciones de seguros ó reaseguros, sea cualquiera su forma ó denominación. Para poder dedicarse á ello es forzosa la previa inscripción en el Registro establecido al efecto, no pudiendo dedicar sus fondos ni su actividad á otra cosa que la que constituya el objeto de la empresa ó sociedad. La inscripción ha de solicitarse por escrito y la solicitud ha de contener los pormenores todos que previene el Reglamento y ha de ir tambien acompañada de los documentos que en él se previenen. Quedan exceptuadas de la constitución del depósito legal las sociedades de seguros contra accidentes del trabajo que acrediten de un modo fehaciente que tienen á disposición del Gobierno la fianza inicial de 225.000 pesetas. Las asociaciones mutuas de esta clase bastará que acrediten una fianza de 5.000. Las Empresas ó Sociedades extranjeras habrán de acreditar: que se hallan constituidas legalmente en su pais, que tienen un Delegado general nombrado para España, un domicilio legal en la misma y que se someten á la jurisdicción de los Tribunales españoles en todo lo que á sus operaciones en España se refiere. Quedan exceptuados del cumplimiento de lo prevenido en este Reglamento los seguros de transportes terrestres y marítimos y los Montepios, Sociedades de socorros mutuos y demás Asociaciones de beneficencia de mutuo auxilio, las que habrán de comunicar sin embargo, sus Estatutos á la Inspección general. Las inscripciones de Empresas ó Sociedades que se acuerden se harán publicar en la Gaceta de Madrid y las denegaciones de inscripción que habrán de ser fundadas, podrán impugnarse por la via contenciosa. Los acuerdos favorables á la inscripción caducan al año de la fecha de su publicación en la Gaceta.

Las demás prescripciones del Reglamento son de tal manera minuciosas que su extracto haría interminable esta nota.

Tratados de comercio y otras concesiones comerciales vigentes.

Alemania. — 12 de Febrero de 1899. — Canje de notas. Simple claúsula de la nación más favorecida, excepto las concesiones hechas á Portugal. Contratado por 5 años. Denunciable, pasado dicho plazo, con un año de anticipación. Hoy prorrogado *sine die.* No se publicó en la Gaceta, pero para su ejecución se dictó la Real orden del Ministerio de Hacienda de 26 de Junio del mismo año, publicada en la Gaceta del 30.

Provisional Regulation
for the application of the Law of 14 May 1908 relating to the registration and inspection of insurance undertakings.

By Royal Decree of 26 July 1908, published in the *Gaceta* of 12 August of the same year, this Regulation, containing 122 articles and 19 transitory provisions was approved.

The Regulation is divided into 7 chapters, the headings and sub-divisions whereof are as follows: Chapter I. General Provisions. — Chapter II. Inscription. a) The application and annexed documents. b) Presentation of the technical bases. c) The compulsory deposit. d) Special requirements for foreign companies. e) Exempted corporations. f) Decision on the application. — Chapter III. Publicity and guarantees. I. Constitution and administration of Tontine Associations. II. Administration of Insurance Companies. a) Documents, books and registers. b) The amounts of each year's operations. c) Special account-keeping by foreign Companies for Spain. d) Explanations applied for by the Insurance Inspection. III. Technical management a) Mathematical reserve of premiums on life insurances. b) Reserve for current risks. c) Investment of the reserves. d) Form of proving the investment of the reserves. e) Deposit relating to the reserves. — Chapter IV. Advisory Insurance Board. a) Constitution. b) Commissioner General. c) Powers of the Advisory Board. d) Its working. — Chapter V. Object and Organization of the Insurance Inspection. a) The staff and their appointment. b) The security and oath. c) Working of the inspections d) Official Insurance Bulletin. e) Special tax. — Chapter VI. Application of the penalties. — Chapter VII. Transitory provisions.

This Regulation is to apply to every individual or collective person or corporation, whether national or foreign, which devotes itself to insurance or re-insurance transactions in Spain, whatever be its form or denomination. In order to be able to be engaged therein, previous inscription in the Register established for that purpose, is compulsory, nor can its funds or activity be applied to anything else than that which is the object of the undertaking or society. Inscription must be applied for in writing and the application must contain all the details provided by the Regulation and has likewise to be accompanied by the documents as provided therein. Insurance societies against workmen's accidents, which sufficiently prove that they hold the initial security of 225 000 pesetas at the disposal of the Government are excepted from making the legal deposit. It is sufficient that mutual associations of this class prove a security of 5000. Foreign undertakings or societies must prove that they are legally constituted in their own country, that they have a general representative appointed for Spain, a legal address therein, and that they submit to the jurisdiction of the Spanish Tribunals in everything that refers to their transactions in Spain. Insurances of land and sea carriage, Friendly Societies, Mutual Aid Societies and other beneficent Associations for mutual help, are exempted from fulfilling the provisions of this Regulation, but they must, nevertheless, communicate their constitution to the Inspection General. The inscriptions of the undertakings or societies which are granted must be published in the *Gaceta de Madrid* and the refusals of inscriptions which have to be reasoned, may be impugned in a contentious administrative proceeding. Decisions in favour of inscription lapse one year from the date of their publication in the *Gaceta*.

The other provisions of the Regulation are so detailed that to quote them would make this note interminable.

Commercial treaties and other commercial concessions in force.

Germany. — 12 February 1899. — Change of notes. Single most favoured nation clause, excepting the concessions granted to Portugal. Agreed for 5 years. May be denounced after that time, on one year's notice. It is now extended *sine die*. It was not published in the *Gaceta*, but the Royal Order of the Chancellor of the Exchequer of 26 June of the same year, published in the *Gaceta* on the 30th, was issued for carrying it out.

Annam. — 29 de Junio de 1892. — Concesión unilateral del trato de la nación más favorecida excepto las concesiones especiales hechas á Portugal. Esta concesión se hizo por Real orden, publicada en la Gaceta de 1.° de Julio del mismo año.

Andorra. — 17 de Agosto de 1867. — Cambio de notas concediendo franquicia de Aduanas. Publicado en la Colección Legislativa, tomo 98, página 77.

Argentina. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Austria-Hungria. — 15/22 de Enero de 1895. — Canje de notas. Sin especial periodo de denuncia. Simple claúsula de la nación más favorecida, excepción de las concesiones especiales hechas á Portugal. No publicado en la Gaceta.

Bélgica. — 14/22 de Diciembre de 1894. — Igual que el anterior.

Bolivia. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Colombia. — 23 de Junio de 1906. — Concesión unilateral de la 2.ª columna del Arancel de Aduanas de España, sin las modificaciones introducidas en la misma por los tratados. El Real Decreto de aprobación del texto definitivo de los Aranceles se publicó en la Gaceta de 28 del mismo mes y año.

Costa-Rica. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Cuba. — 10 de Diciembre de 1898. — Tratado de Paris con los Estados Unidos. Asimilación recíproca á los nacionales de los buques de la otra parte contratante, salvo los privilegios especiales otorgados á los buques nacionales en comercio de cabotaje. Franquicia arancelaria de las obras científicas, literarias y artísticas en las Aduanas de la Isla. Publicado en la Gaceta de 3 de Mayo de 1899.

Chile. — 29 de Junio de 1892.— Lo mismo que Annam.

China. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Dinamarca. — 4 de Julio de 1893. — Convenio. Claúsula de la nación más favorecida, limitado á un cuadro determinado de mercancias. Publicado en la Gaceta de 25 de Agosto de 1894.

Egipto. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

El Ecuador. — 23 de Junio de 1906. — Lo mismo que Columbia.

Estados-Unidos de Norte América. — 1.° Agosto de 1906. — Convenio. Claúsula de la nación más favorecida (sección 3ª de la tarifa americana, 2.ª columna del Arancel español y régimen contractual por parte de España) salvo los beneficios concedidos por los Estados-Unidos á Cuba y por España á Portugal. Plazo de duración un año. Denunciable en cualquier tiempo con plazo de un año, salvo si alguna de las partes contratantes negase la aplicación de alguna ventaja arancelaria á la otra, en cuyo caso esta queda desde el mismo momento libre de todas sus obligaciones. Publicados en la Gaceta de 30 de Agosto del mismo año.

Filipinas. — 10 de Diciembre de 1898. — Tratado de Paris celebrado con los Estados-Unidos. Concedido el mismo trato á los buques y mercancias españolas que á los de los Estados-Unidos. Duración 10 años á contar del 11 de Abril de 1899. Publicado en la Gaceta de 3 de Mayo de 1899.

Francia y Argelia. — 29 de Setiembre de 1906. — Canje de notas. Claúsula simple de la nación más favorecida, excepto las concesiones hechas á Portugal. Duración *sine die*, denunciable con 3 meses de anticipación. Publicado en la Gaceta de 1.° de Diciembre del mismo año.

Gran Bretaña y sus Colonias. — 20/29 de Junio de 1894. — Canje de notas. Claúsula simple de la nación más favorecida, excepto las concesiones especiales hechas á Portugal. Cada una de las Colonias británicas puede en cualquier tiempo separarse de lo convenido. Prorrogado por tiempo indefinido, con periodo de denuncia de 6 meses por el canje de notas de 28/29 de Diciembre del mismo año. No se publicó en la Gaceta; pero por la Ley de 10 de Julio del mismo año. (Gaceta del 28) se confirmó este convenio.

Grecia. — 23 de Setiembre de 1903. — Tratado de comercio y navegación. Claúsula simple de la nación más favorecida, excepto las concesiones especiales hechas á Portugal. Denunciable en todo tiempo con un año de plazo. Publicado en la Gaceta de 25 de Noviembre de 1904.

Guatemala. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Havay. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Japón. — 15 de Mayo de 1911. — Tratado de comercio y navegación.

Luxemburgo. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Marruecos. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

México. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Annam. — 29 June 1892. — Unilateral concession of the most favoured nation treatment, except the special concessions granted to Portugal. This concession was made by Royal Order, published in the *Gaceta* of 1st July of the same year.

Andorra. — 17 August 1867. — Change of notes granting freedom from customs. Published in the Colección Legislativa, vol. 98, page 77.

Argentina. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Austria-Hungary. — 15/22 January 1895. — Change of notes. No special time for denouncing. Single most favoured nation clause, excepting the special concessions granted to Portugal. Not published in the *Gaceta*.

Belgium. — 14/22 December 1894. — The same as the preceding.

Bolivia. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Colombia. — 23 June 1906. — Unilateral concessions of the 2nd column of the Customs Tariff of Spain, without the modifications introduced therein by treaties. The Royal Decree approving the final text of the Tariffs was published in the *Gaceta*, the 28th of the same year and month.

Costa Rica. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Cuba. — 10 December 1898. — Treaty of Paris with the United States. Reciprocal assimilation to the national vessels, of those of the other contracting party, saving the special privileges granted to national vessels in the coasting trade. Freedom from customs for scientific, literary and artistic works in the Cuban Customs. Published in the *Gaceta*, 3 May 1899.

Chile. — 29 June 1892. — The same as Annam.

China. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Denmark. — 4 June 1893. — Convention. Most favoured nation clause, limited to a fixed table of merchandise. Published in the *Gaceta*, 25 August 1894.

Egypt. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Ecuador. — 23 June 1906. — The same as Colombia.

United States of North America. — 1st August 1906. — Convention. Most favoured nation clause (section 3 of the American tariff, 2nd column of the Spanish Tariff and contractual regimen on the part of Spain) except the benefits granted by the United States to Cuba and by Spain to Portugal. One year's duration. May be denounced at any time by a year's notice, unless either of the contracting parties refuses to apply any tariff advantage to the other, in which case the latter is free from all her obligations from the same moment. Published in the *Gaceta*, 30th August of the same year.

Philippines. — 10 December 1898. — Treaty of Paris made with the United States. The same treatment granted to the Spanish vessels and merchandise as to those of the United States. Ten years' duration reckoned from 11 April 1899. Published in the *Gaceta*, 3 May 1899.

France and Algiers. — 29 September 1906. — Change of notes. Single most favoured nation clause, except the special concessions granted to Portugal, Duration *sine die*, may be denounced on 3 months' notice. Published in the *Gaceta*, 1 December of the same year.

Great Britain and her Colonies. — 20/29 June 1894. — Change of notes. Single most favoured nation clause, except the special concessions granted to Portugal. Each of the British Colonies may at any time secede from the Convention. Extended for an indefinite time, with 6 months notice for denouncing, by change of notes, 28/29 December of the same year. It was not published in the *Gaceta*; but by the Law of 10 July of the same year (*Gaceta* of the 28th), this convention was confirmed.

Greece. — 23 September 1903. — Treaty of commerce and navigation. Single most favoured nation clause, except the special concessions granted to Portugal. May be denounced at any time, with one year's notice. Published in the *Gaceta*, 25 November 1904.

Guatemala. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Java. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Japan. — 15 May 1911. — Treaty of commerce and navigation.

Luxemburg. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Morocco. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Mexico. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Nicaragua. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Noruega. — 27 de Junio de 1892. — Tratado de comercio y navegación. Tarifa contractual y claúsula de la nación más favorecida para un cuadro determinado de mercancias, á excepción de las concesiones hechas á Portugal. Denunciable desde 5 de Febrero de 1905. Modificado en 7 de Octubre de 1895, 30 de Junio de 1897, 25 de Agosto de 1903 y 5 de Febrero de 1904. Se publicó en la Gaceta de 1° de Noviembre de 1893 y las modificaciones, en las de 31 de Diciembre de 1895, 7 de Julio de 1897, 19 de Febrero y rectificación de 21 del mismo de 1904.

Paises-Bajos. — 12 de Julio de 1892. — Declaración. Para España, claúsula de la nación más favorecida. Para los Paises-Bajos, tarifa contractual y claúsula de la nación más favorecida para determinado cuadro de mercancias. Modificado por otra declaración de 13 de Noviembre de 1899. Denunciable con un año de anticipación. Se publicó en la Gaceta de 14 de Diciembre de 1893.

Paraguay. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Persia. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Peru. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Portugal. — 27 de Marzo de 1893. — Tratado de comercio y navegación. Tarifa contractual con amplias concesiones en baja. Claúsula de la nación más favorecida general. Duración 10 años, prorrogado de 5 en 5, caso de no haber sido denunciado antes de comenzar el quinquenio siguiente. Convenio para su ejecución de 29 de Junio de 1894. Publicados en las Gacetas de 29 de Setiembre de 1893 y 4 de Julio de 1894.

Rusia. — 2/6 de Enero de 1899. — Canje de notas. Claúsula simple de la nación más favorecida, excepto las concesiones especiales hechas á Portugal. No publicado en la Gaceta.

Salvador. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Siam. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Suecia. — 27 de Junio de 1892. — Tratado de comercio y navegación como el de Dinamarca. Publicado en la Gaceta de 1.° de Noviembre de 1893.

Suiza. — 1.° Setiembre de 1906. — Tratado de comercio. Tarifa contractual. Claúsula general de la nación más favorecida, excepto las concesiones especiales hechas á Portugal. Duración hasta 31 de Diciembre de 1917. Denunciable con 12 meses de anticipación. Prorrogable de año en año. Publicado en la Gaceta de 20 de Noviembre del mismo año.

Tunez. — 12 de Enero de 1897. — Declaración entre España y Francia comprendiendo en el régimen francés las relaciones comerciales con dicho pais. Publicado en la Gaceta de 23 de Febrero del mismo año, el Real Decreto confirmatorio de esta declaración de fecha 22 del mismo.

Turquía. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Uruguay. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Venezuela. — 29 de Junio de 1892. — Lo mismo que Annam.

Nota. Que afecten especialmente al derecho mercantil no tiene España ningun tratado ni convención particular por cuanto los extrangeros en España pueden lo mismo que los españoles ejercer el comercio sin traba ni cortapisa especial alguna por virtud de lo prescrito en el artículo 15 de Código de Comercio vigente. Por lo demás España se ha adherido á los Convenios Universales sobre correos, telégrafos y protección de marcas de fábrica, de comercio y privilegios de invención.

Nicaragua. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Norway. — 27 June 1892. — Treaty of commerce and navigation. Contractual tariff and most favoured nation clause for a certain table of merchandise, except the concessions granted to Portugal. May be denounced after 5 February 1905. Altered on 7 October 1895, 30 June 1897, 25 August 1903, and 5 February 1904. It was published in the *Gaceta* of 1 November 1893 and the alterations in those of 31 December 1895, 7 July 1897, 19 February, and correction thereof on 21 February 1904.

Holland. — 12 July 1892. — A declaration. For Spain, most favoured nation clause. For Holland, contractual tariff, and most favoured nation clause for a certain table of merchandise. Altered by another declaration of 13 November 1899. May be denounced on one year's notice. It was published in the *Gaceta* of 14 December 1893.

Paraguay. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Persia. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Peru. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Portugal. — 27 March 1893. — Treaty of commerce and navigation. Contractual tariff with broad concessions of lower dues. General most favoured nation clause. Ten years' duration, extended from 5 to 5, if not denounced before commencing the following quinquennium. Convention for its carrying out, 29 June 1894. Published in the *Gaceta*, 29 September 1893 and 4 July 1894.

Russia. — 2/6 January 1899. — Change of notes. Single most favoured nation clause, except the special concessions granted to Portugal. Not published in the *Gaceta*.

Salvador. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Siam. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Sweden. — 27 June 1892. — Treaty of commerce and navigation, like that with Denmark. Published in the *Gaceta*, 1 November 1893.

Switzerland. — 1 September 1906. — Treaty of commerce. Contractual tariff. General most favoured nation clause, except the special concessions granted to Portugal. Duration till 31 December 1917. May be denounced on 12 months' notice. May be prolonged from year to year. Published in the *Gaceta*, 20 November of the same year.

Tunis. — 12 January 1897. — Declaration between Spain and France including the commercial relations with the said country in the French regime. Published in the *Gaceta* of 23 February of the same year, Royal Decree confirming this declaration, 22 February of the same year.

Turkey. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Uruguay. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Venezuela. — 29 June 1892. — The same as Annam.

Note. Spain has no separate treaty or convention which specially affects the mercantile law, for as much as foreigners in Spain may practise commerce like the Spaniards, without any special fetter or condition, by virtue of the provisions of art. 15 of the present Commercial Code. Besides this, Spain has given her adherence to the Universal Conventions on Posts, Telegraphs and the Protection of Trade Marks and Patents.

Index.

G

Q

R

S

U

V

W

PRINTED BY SPAMERSCHE BUCHDRUCKEREI, LEIPZIG

THE COMMERCIAL LAWS OF THE WORLD

In their original languages, accompanied by an English translation.
In 35 large volumes, handsomely bound in leather.
Price for the set **£1.15s**, net a volume. Separate volumes **£2.2s**, net each.

THE ceaseless expansion of the world's trade has made it a necessity for merchants and lawyers to study the commercial, exchange, bankruptcy and maritime laws of the countries with which they, or their clients have dealings. The man of business who has to deal with foreign countries soon finds himself in difficulties unless he is "au courant" with the laws of such countries. The lawyer who advises, the judge who gives decisions, are often at a loss when they come into contact with the laws of other countries. Consequently the time has come when it is necessary to collect the Commercial Laws of the World in an accessible form, to interpret them, and to place them in a reliable and exhaustive work ready to hand. Lawyers, commercial men, export merchants and trading corporations will find in this work convenient and trustworthy information as to the legal obligations arising from operations abroad. In commercial life it will remove that feeling of uncertainty in regard to points of law which has often checked the prosperous development of important international trade relations. From its pages lawyers will be in a position to obtain exhaustive information on points of law on behalf of their clients engaged in commerce with foreign countries. Governments, Consulates and Judges may feel confident of being in a position to refer in this work to a concensus of authoritative opinion on commercial law. In recognition of its significance for the trade and commerce of the world, governments of all nations have placed official material at its disposal.

THE WORK DOES NOT PRESENT A MERE REPRINT OF THE CODES OR STATUTES, BUT IN ITS NOTES AND COMMENTARIES SUMMARISES EVERYTHING NECESSARY TO A THOROUGH GRASP OF THE PRINCIPLES OF COMMERCIAL LAW.

THE COMMERCIAL LAWS OF THE WORLD

The following list of volumes will show how the laws of the different nations are distributed throughout the work:

SOUTH AMERICA.

Volume
1. Argentine Republic and Uruguay
2. Colombia
3. Venezuela, Ecuador
4. Brazil
5. Peru, Bolivia
6. Chile, Paraguay

NORTH AND CENTRAL AMERICA.

Volume
7 and 8. United States of America
9. Mexico, Guatemala, Cuba
10. San Salvador, Dominica, Nicaragua
11. Costa Rica, Honduras, Haiti, Panama.

AFRICA AND ASIA.

Volume
12. Egypt, Morocco, Liberia, Persia, China, Japan, Siam.

NORTH AND NORTH-WEST EUROPE.

Volume
13 and 14. Great Britain and Ireland
15. British Dominions and Protectorates in Europe and Africa
16. " " " " in Asia
17. " " " " in America
18. " " " " in Australasia

See below for details of these volumes. (15–18)

19. Sweden, Norway
20. Denmark, Scandinavia.

CENTRAL EUROPE.

Volume
21. France, Monaco
22. Belgium, Luxemburg.
23. Netherlands and Dutch East Indies
24, 25 and 26. German Empire
27 and 28. Austria, Hungary, Bosnia, Herzegovina, Croatia and Slavonia
29. Switzerland.

EAST EUROPE.

Volume
30. Russia, Poland
31. Finland, Servia, Montenegro.

SOUTH EUROPE.

Volume
32. Spain
33. Portugal, Greece
34. Bulgaria, Turkey
35. Rumania, Italy, San Marino.

WHAT THE WORK CONTAINS.

The volumes cover the whole ground of Commercial Law, including, inter alia,

Contracts
Trade Usages and Customs
Agency
Companies
Partnerships
Bills of Exchange
Promissory Notes
Cheques
Negotiable Instruments.

Sale of Goods
Banking
Stock Exchanges
Guarantees
Maritime Law, including
- Affreightment
- Bills of Lading
- Charter-Parties
- Bottomry
- Demurrage
- Average
- Lien
- Salvage
- Towage
- Collision

Marine Insurance
Carriage by Land
Bankruptcy and Insolvency.

CLASSIFICATION OF THE MATERIALS.

a) **THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE COMMERCIAL LAWS OF ALL COUNTRIES.**

A treatise on the historic development and scope of commercial legislation, together with, where requisite, an account of the economic progress of the country in question.

b) **THE EXISTING LITERATURE OF THE COMMERCIAL, EXCHANGE, BANKRUPTCY AND MARITIME LAWS OF ALL COUNTRIES.**

c) **CONSTITUTION OF THE COURTS AND LEGAL PRACTICE.**

d) **LEGISLATION, CASE LAW AND TRADE USAGES AND CUSTOMS, including the Legal Provisions concerning the following:**

Commercial Dealings in General: Trading Associations (Joint Stock Companies and Partnerships)—Brokers—Commission Agencies.

Sale of Goods—Exchanges.

Bills of Exchange: (Forms of Bills of Exchange, Duties of Drawers, Indorsement, Presentation, Acceptance, Maturity, Payment, Surety, Protest, &c.). Cheques: Promissory Notes.

Bankruptcy Proceedings: (Liquidation and Compulsory Bankruptcy), Liens, Rights of Married Persons.

Maritime Law: (Ocean Trade, Maritime Enactments, Marine Insurance; Navigation and Friendly Treaties concluded between different States).

Carriage by Land.

DISTRIBUTION OF THE COUNTRIES IN THE BRITISH EMPIRE.

Volume 15. Part I. EUROPE:

Isle of Man, Channel Islands, Gibraltar, Malta, Cyprus.

Part II. AFRICA:

South Africa, Rhodesia, Sierra Leone, Gold Coast, Somaliland, Anglo-Egyptian Sudan, British Central Africa, British East Africa, Northern Nigeria, Southern Nigeria, Zanzibar, Uganda, Mauritius (incl. Rodriguez), Seychelles (incl. Amirantes), St. Helena, Ascension.

Volume 16. ASIA:

Empire of India, Ceylon, Hongkong, Weihaiwei, Johore, North Borneo, Sarawak, Brunei, Straits Settlements including Penang (Prince of Wales Island), Wellesley, Malacca, Singapore, Cocos Islands, Christmas Island, Labuan, Laccadives, Andaman Islands, Nicobar Islands, Federated Malay States, including Perak, Selangor, Negri Sembilan (including Sungei Ujong), Pahang, Kedah, Kelantan, Trengganu.

Volume 17. AMERICA:

Canada, Newfoundland, West Indies, British Honduras, British Guiana, Falkland Islands.

Volume 18. AUSTRALIA AND PACIFIC ISLANDS:

Australia, New Zealand, Fiji, Western Pacific (including Tonga, Ellice, Gilbert, Ocean, Southern Solomon, Santa Cruz, New Hebrides, Union Islands, Pitcairn Island; Miscellaneous Islands: Humphrey, Bahrein, Rierson, Christmas (No. 2), Penrhyn, Suwarrow, Phenix, Jarvis, Fanning, &c.).

NAMES OF CONTRIBUTORS TO VOLUMES 13 AND 14

GREAT BRITAIN AND IRELAND.

Sir Frederick Pollock, Bart., D.C.L., LL.D., of Lincoln's Inn, late Corpus Professor of Jurisprudence in the University of Oxford. **(Introduction.)**
Thomas Baty, D.C.L., LL.D., of the Inner Temple. **(Constitution of the Courts and Procedure.)**
Evans Austin, LL.D., M.A., of the Middle Temple; also of the Irish Bar. **(Commercial Laws of Ireland.)**
J. W. Brodie-Innes, B.A., LL.M., of Lincoln's Inn; also of the Scots Bar. **(Commercial Laws of Scotland.)**
Aubrey J. Spencer, M.A., of Lincoln's Inn. **(Partnership.)**
Wyndham A. Bewes, LL.B., of Lincoln's Inn. **(Banking, Stock Exchange and Guaranties.)**
H. W. Disney, B.A., of Lincoln's Inn. **(Carriage by Land.)**
J. Gerald Pease, B.A., of the Inner Temple. **(Contracts.)**
F. G. Underhay, of the Inner Temple. **(Trade Marks and Trade Names.)**
Arthur B. Langridge, B.A., of the Middle Temple. **(Maritime Law.)**
N. W. Sibley, B.A., LL.M., of Lincoln's Inn. **(Bankruptcy and Insolvency.)**
The General Editor. (Agency.)
Walter J. B. Byles, of the Inner Temple. **(Bills, Notes, Cheques, and other Negotiable Instruments.)**
F. D. Mackinnon, M.A., of the Inner Temple. **(Marine Insurance.)**
J. Bromley Eames, B.C.L., of the Middle Temple. **(Sale of Goods.)**
A. F. Topham, LL.M., of Lincoln's Inn. **(Companies.)**

Barristers-at-Law.

C. E. A. Bedwell, Librarian to the Honourable Society of the Middle Temple. (Bibliography.)

TRADE MARKS.

A Companion volume, dealing with the Laws of all civilised countries relating to Trade Marks, is in preparation, and will appear immediately after the final volume of the Commercial Laws of the World. The price will probably be less than £2 2s.

THE AUTHORS AND EDITORS.

As will be seen from the following list, the work has been compiled by some of the most eminent jurists of the countries concerned, and its accuracy may be relied upon. The work has been greatly promoted by the active assistance given by many foreign governments which have thus recognized the important service it renders to the world's trade

CONSULTING EDITOR: **The Hon. Sir THOMAS EDWARD SCRUTTON**, Judge of the King's Bench Division of the High Court of Justice.

GENERAL EDITOR: **WILLIAM BOWSTEAD** Of the Middle Temple, Barrister-at-Law.

AMERICA, UNITED STATES OF. Charles Henry Huberich, J. U. D. (Heidelberg), D. C. L. (Yale), LL. D. (Melbourne), Counsellor at Law, Berlin and Paris, Professor of Law in the Law School of the Leland Stanford Junior University, **Frank E. Chipman**, Attorney at Law, Boston; **Joseph Richardson Baker**, A. B., of the Solicitor's Office of the Department of State, Washington. **H. W. Ballantine**, of the San Francisco Bar, Professor of Law in the University of Montana; **Robert Thomas Devlin**, United States Attorney, Northern District of California; **Charles Andrews Huston**, Professor of Law, Stanford University, California; **Donald J. Kiser**, Counsellor at Law, Chicago; **James B. Lichtenberger**, Fellow-in-Law, University of Pennsylvania; Philadelphia; **J. W. Magrath**, Counsellor at Law, New York; **William Underhill Moore**, A. M., LL. B., Professor of Law in the University of Wisconsin (Madison); **Orrin Kip McMurray**, Professor of Law, University of California, Berkeley; **W. R. Vance**, Professor of Law, Yale University, New Haven.
ARGENTINE REPUBLIC. Professor Dr. Ernesto Quesada. Buenos-Aires.
AUSTRIA. Dr. Gertscher, President of the High Court, Trieste.
BELGIUM. Léon Hennebicq, Avocat à la Cour d'Appel, Brussels.
BOLIVIA. Artur Fernandez Pradel, Advocate La Paz.
BOSNIA-HERZEGOVINA. Dr. Gertscher, President of the High Court, Trieste.
BRAZIL. Dr. Rodrigo Octavio Langgaard de Menezes, Advocate, Rio de Janeiro.
BULGARIA. Dr. M. St. Schischmanow, first Secretary of Legation to the Agence Diplomatique de Bulgarie; **Dr. Subow**, State Counsellor, High Court of Appeal, Sofia.
CHILE. Fernandez Pradel, Dr. Julio Philippi, Advocates, Santiago.
CHINA. Dr. Chung-Hui-Wang, Shanghai; **Prof. Dr. Forke**, Berlin.
COLOMBIA. Antonio José Uribe. Advocat, Bogotá.
COSTA RICA. Dr. Ramon Zelaya, Advocate, San José de Costa Rica.
CROATIA AND SLAVONIA. Prof. Dr. Cupovic, Prof. Vrbanic, Agram.
CUBA. Professor Dr. del Cueto, Dean of the Legal Faculty, Havana.
DENMARK. Dr. Tybjerg, Counsellor and Assessor of the Criminal Court, Copenhagen.
DOMINICA. Dr. R. Kuck, Advocate, Secretary of Legation, Hamburg.
DUTCH INDIES. Dr. F. C. Hekmeyer, Judge-President, s'Gravenhage.
ECUADOR. Francisco José Urrutia, Advocate, Quito.
EGYPT. Dr. Friedrick v. Dumreicher, Advocate of the Mixed Court of Appeal and Legal Adviser to the Austro-Hungarian Consulate, Cairo.
FINLAND. Hermann Klibanski, Advocate, Berlin.
FRANCE. Dr. G. Horn, Avocat à la Cour, Paris.
GERMAN EMPIRE, THE. Karl Lehmann, Professor of Jurisprudence, Goettingen.
GREAT BRITAIN AND IRELAND. *See List above.*
BRITISH DOMINIONS AND PROTECTORATES. Joseph Baptista, Barrister-at-Law, Professor of Jurisprudence in the Local Government Law School, Bombay; **Charles Henry Huberich**, J. U. D. (Heidelberg), D.C.L. (Yale), LL.D. (Melbourne), Counsellor at Law, Berlin and Paris, Professor of Law in the Law School of the Leland Stanford Junior University (California); R. W. Lee, Professor of Roman-Dutch Law, London; **M. A. Refalo**, LL. D., Assistant Crown Advocate, Professor of Commercial Law, University of Malta, Valletta; **W. P. B. Shepheard**, Barrister-at-Law, London; **W. H. Stuart**, Barrister-at-Law, Cape Colony.
GREECE. Dr. von Streit, Advocate, Athens; **Dr. G. Diobouniotis**, Advocate, Athens.
GUATEMALA. José Aspuru, Advocate and Notary, Guatemala.
HAITI. Alexandre Poujol, Judge of the Civil Tribunal, Haiti.
HONDURAS. Pedro F. Bustillo, Advoc., Tegucigalpa.
HUNGARY. Prof. Dr. Béla-Levy, Advoc., Budapest.
ITALY. Dr. Alavo Angelo Sraffa, Professor Parma University; **Count Sommati de Mombello**, Dr. jur., Berlin.
JAPAN. Dr. Lönholm, Prof. at the University of Tokio.
LIBERIA. Prof. F. Mc. Cants Stewart, Monrovia.
LUXEMBURG. Emile Reuter, Advocate, Luxemburg.
MEXICO. Sanchez P. Suarez, Advocate, Mexico.
MONACO. Baron de Rolland, President of the Supreme Court.
MONTENEGRO. Mitar Djurowitsch, Advoc., Cettinje.
MOROCCO. Dr. Steinführer, Dragoman, Tangiers.
NETHERLANDS, THE. M. van Regteren Altena, Advocate, Member of the Association for Trade and Commerce, Amsterdam.
NICARAGUA. Dr. jur. Ramón Zelaya, Advocate and Consul-General of Costa Rica, Genoa.
NORWAY. E. Hambro, K. C., Christiania.
PANAMA. Heinrich Huss, Bogota.
PARAGUAY. A. Schuler, Advocate, Ascuncion.
PERSIA. James Greenfield, Dr. rer. pol., Tabriz.
PERU. Miguel de la Lama, Judge of the Supreme Military Court, Lima (Peru).
POLAND. Heinrich Klibanski, Advocate, Berlin.
PORTUGAL. Ed. Alves de Sà, Advocate, Lisbon.
RUMANIA. Dr. Flaislen, Judge of the Court of Appeal, Bucharest.
RUSSIA. Dr. Zavadskij, Lecturer at Kasan; **Dr. Pergament**, Advocate, President of the Chamber of Advocates, Odessa; **Mr. Klibanski**, Advocate, Berlin.
SAN MARINO. Professor Gianniol, Rome.
SAN SALVADOR. Professor Dr. Reyes Arrieta Rossi, Advocate, San Salvador.
SCANDINAVIA. Dr. Tybjerg, of the Criminal Court, Copenhagen; **E. Hambro, K. C.**, Christiania; **Dr. A. Aström**, Lund.
SERVIA. Andreas Georgewitsch, K. C., formerly Professor of Jurisprudence, Belgrade; **Dr. Stanoje Michajlowitsch**, Attaché to the Servian Embassy, Berlin.
SIAM. L'Evesque, Secretary of the Codification Committee of the Ministry of Justice, Bangkok.
SPAIN. Dr. Lorenzo Benito, Barcelona.
SWEDEN. Adolph Aström, Dr. jur., Lund.
SWITZERLAND. Dr. Ludwig Rudolf von Salis, Hon. Prof. at Zurich University; **Dr. Mamelock**, Advocate, Zurich.
TURKEY. M. Padel, Consul of the German Empire in Beirut.
URUGUAY. Dr. Daniel Garcia Acevedo, Montevideo
VENEZUELA. Dr. Angel Cesar Rivas, Advocate Caracas.

TRANSLATORS:

W. R. Bisschop, LL.D., Barrister-at-Law.
Dr. Ernö Picker, Advocate of Budapest.
Philip A. Ashworth, LL. D., Barrister-at-Law.
F. J. Collinson, Barrister-at-Law.
Wyndham A. Bewes, LL.B., Barrister-at-Law.
Edw. S. Cox-Sinclair, Barrister-at-Law.
N. W. Sibley, B.A., LL.M., Barrister-at-Law.
Thomas Hynes, LL.B., Barrister-at-Law.
Montague R. Emanuel, M.A., B.C.L., Barrister-at-Law.
G. Stuart Robertson, M.A., Barrister-at-Law.
J. W. Scobell Armstrong, Barrister-at-Law.
W. Butler Lloyd M. A., Barrister-at-Law.
Horace B. Samuel, M.A., Barrister-at-Law.
John Norris Marsden, English Solicitor, Lisbon.
Sidney Leader, English Solicitor, London and Berlin.

Sweet & Maxwell, Ltd., London, 3, Chancery Lane

KC HS



